

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 17 de octubre de 2018, se reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Teófilo Manuel García Corpus; Diputado Santiago González Soto y Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del Partido Acción Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (así como el representante suplente, Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez); Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano y Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes, señoras Consejeras, Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy. _____

Por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha,

hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para su realización. _____

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 16 de octubre del presente, suscrito por la Diputada María Sara Rocha Medina, Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, se acredita al Diputado Teófilo Manuel García Corpus, como Consejero propietario del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. _____

Es el caso que estando presente procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señor Diputado Teófilo Manuel García Corpus, Consejero propietario del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. _____

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? _____

El C. Consejero Teófilo Manuel García Corpus: ¡Sí, protesto! _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío que en el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación del Sistema Democrático del país. _____

Sea usted bienvenido. _____

Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. ____

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor. _____

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Continúe con la sesión, por favor. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto se refiere al orden del día. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, está a su consideración el orden del día. _____

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que en votación económica consulte si se aprueba el orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. _____

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto del orden del día aprobado)_____

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL_____

CONSEJO GENERAL_____

SESIÓN EXTRAORDINARIA_____

ORDEN DEL DÍA_____

17 DE OCTUBRE DE 2018_____

13:00 HORAS_____

1.- Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018._____

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. (Junta General Ejecutiva)_____

3.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)_____

3.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara infundado el procedimiento ordinario sancionador instaurado por Claudia Carrillo Gasca, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, de los Consejeros Electorales del propio Instituto, Juan Manuel Pérez Alpuche, Thalía Hernández Robledo; así como de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad

Técnica de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión; Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización y Víctor Manuel Interián López, Director de Administración, todos del Instituto Electoral referido, así como de Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza; Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional y Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral local, toda vez que del análisis de los hechos denunciados no se advierte que existan elementos que permitan a esta autoridad concluir que los actos u omisiones atribuidas a los sujetos denunciados constituyan, acoso laboral o violencia política por razones de género en contra de la quejosa._____

3.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, iniciado con motivo de las quejas presentadas por Maribel Hernández Cruz y los Partidos, Acción Nacional y del Trabajo, en contra de Juan Manuel Zepeda Hernández; Elvert Pineda Bucio; ISA Corporativo, S.A. de C.V.; El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. y Adrián Gutiérrez Pérez, con motivo de las presuntas infracciones generadas por la difusión de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativa del primero de los denunciados, en su calidad de Diputado Local de la LIX Legislatura del Estado de México con número de expediente UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016._____

3.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/16/2018 instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional denominada “Ciudadanos en Transformación”, antes “Frente Humanista en Movimiento”, derivado de la omisión de presentar dentro del plazo reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus documentos básicos, en contravención a la normativa electoral._____

3.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018, iniciado con motivo de las quejas presentadas por Jassiel Esparza Tapia, Rogelio Quiroz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdez Meléndez, Victoria Chávez Vázquez y Shulamis González Maldonado, por supuestas violaciones a la normativa electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la presunta afiliación indebida de los mencionados ciudadanos al partido político en cita, sin que hubiere mediado consentimiento alguno.

3.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra de MORENA, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018 iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral,

consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de cuatro ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la indebida utilización de sus datos personales._____

3.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra de MORENA, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Freddy Ali Sinta Quino, a través de la cual hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistentes en su presunta indebida afiliación al partido Político Acción Nacional y uso, sin consentimiento, de sus datos personales._____

3.12.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por Aldahir Bautista Valderrama y Ada Nelli Roblero García, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

3.13.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018, iniciado con motivo de senda denuncia en contra del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistente en libre afiliación al citado instituto político del ciudadano Jesús Alberto Robledo Valero y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.14.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por diversas ciudadanas y ciudadanos en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida afiliación al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

3.15.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Trinidad García Rivera, en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

3.16.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018, instaurado con motivo de la queja presentada por Tirso Alejandro Romero en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la supuesta afiliación indebida y la utilización de datos personales presuntamente sin su consentimiento._____

3.17.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018, integrado con motivo de la denuncia presentada por Junior Geovanni Medel Martínez, por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la presunta violación a su derecho de libre afiliación, y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

3.18.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018, instaurado con motivo de la queja presentada por Oscar Armando Castillo Sánchez en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la supuesta afiliación indebida y la utilización de datos personales presuntamente sin su consentimiento._____

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios, derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 en los Municipios de Solosuchiapa, el Porvenir, Santiago el Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero en el estado de Chiapas, y en los Municipios de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)____

5.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de Trabajo de las Comisiones de Consejo General. _____

5.1.- Comisión de Organización Electoral _____

5.2.- Comisión Temporal para el seguimiento de los Proceso Electorales Locales 2018-2019. _____

6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-118/2018. _____

7.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en los estados de Oaxaca y Tabasco, por hechos que pudieran constituir su remoción en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Secretaría Ejecutiva)_____

7.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales identificados con los números de expediente UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018 y UT/SCG/PRCE/PAN/JL/OAX/29/2018 acumulados, integrados con motivo de las denuncias presentadas por los Partidos del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, en contra de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales._____

7.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales identificados con los expedientes UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018, UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018, UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018 y UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018 acumulados, integrados con motivo de las denuncias presentadas por los Partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra de Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Juan Correa López y Víctor Humberto Mejía Naranjo, Consejera y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales._____

8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)_____

8.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora Coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y a su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XI el C. Ismael Figueroa Flores, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/702/2018/CDMX._____

8.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su entonces candidato a la Alcaldía en Xochimilco el C. José Carlos Acosta Ruíz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX._____

9.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza al Secretario Ejecutivo otorgar poder notarial en nombre del Instituto Nacional Electoral, para ser representado, en actos de dominio por el C. Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Dé cuenta del primer punto del orden del día, por favor. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, es el relativo al Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe señalado. _____

Si no hay intervenciones sobre este punto, damos por recibido este Informe. _____

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo señalado. Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo, para presentar el punto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, el Proyecto de Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral que está a su consideración, establece el procedimiento y las normas específicas que regularán las convocatorias del Concurso Público 2018-2019, para reclutar y/o seleccionar a quienes ocuparán los cargos y puestos exclusivos del Servicio Profesional Electoral Nacional que se encuentren vacantes en los órganos desconcentrados, direcciones ejecutivas y unidades técnicas de esta institución. _____

Los Lineamientos toman como base y punto de partida las disposiciones del Concurso Público anterior y recuperan las mejores prácticas que se han consolidado en la operación de las diversas convocatorias que ha realizado el Instituto. _____

Con estos Lineamientos se busca, entre otros, los siguientes objetivos: Refrendar al Concurso Público como la vía primordial de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y ocupación de sus vacantes; mantener la imparcialidad y transparencia del proceso garantizando una amplia difusión de sus convocatorias y resultados; seguir impulsando la política institucional de igualdad de género y no discriminación. _____

Los Lineamientos incorporan propuestas de innovación entre las que destacan: La conformación de un examen integral que agrupa los conocimientos generales, conocimientos político-electorales y conocimientos técnicos con los que se evaluará a los aspirantes. _____

El incremento del número de exámenes de 15 a 36, considerando, por lo tanto, las diferentes especialidades que están sujetas a concurso, opción de concursar por 2 plazas y la obligatoriedad de permanecer al menos un año en la plaza que se obtenga antes de concursar nuevamente por otra. _____

Como se ha diseñado en ocasiones anteriores, el Concurso Público atenderá por segmentos la ocupación de las plazas por la vía de la publicación de convocatorias específicas. _____

En este sentido, primero se concursará en los cargos de mayor nivel de responsabilidad y, posteriormente, a otras plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

Se trata de un concurso, en el cual se emitirán las convocatorias respectivas que, en su momento, deberá aprobar la Junta General Ejecutiva. _____

Se aplicarán los exámenes de conocimientos que serán diseñados, aplicados y calificados por una institución especializada, como es el caso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior con quien hemos tenido una trayectoria importante de trabajo, tanto en este tema como en los que tienen que ver con el reclutamiento de los Consejeros y las Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales. _____

En suma, con la emisión de estos Lineamientos quedarán establecidas las reglas de operación a través de las cuales se desahogarán las fases y etapas del Concurso Público, entre las que se destacan la difusión y publicación de las convocatorias. _____

El registro de inscripción de los aspirantes, la aplicación de los exámenes, el cotejo y verificación de requisitos de los aspirantes, la evaluación psicométrica, las entrevistas, la aplicación de criterios de desempate y la designación de ganadores. _____

Uno de los aspectos relevantes que se prevé en estos Lineamientos, es la participación de los integrantes de este Consejo General quienes podrán, como los anteriores procesos, presenciar las etapas del Concurso y formular las observaciones que estimen pertinentes a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

No quiero dejar de señalar que el profesionalismo que a lo largo de más de 20 años ha demostrado el Servicio de Carrera Electoral, mediante un riguroso proceso de ingreso

y evaluación de su desempeño ha sido clave para la generación de elecciones confiables y contribuye hoy por hoy a garantizar la imparcialidad que rige la labor de esta institución._____

Con la aprobación de los Lineamientos se visualiza parte del trabajo que el Instituto ya emprendió de cara al Proceso Electoral 2020-2021._____

Señoras y señores Consejeros y representantes, antes de concluir mi intervención, quisiera reconocer y agradecer el invaluable apoyo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral presidida, en su momento, por la Consejera Electoral Dania Ravel, ahora por el Consejero Electoral Ciro Murayama, que nos dieron importantes sugerencias, sobre todo, la sistematización de la experiencia que se ve reflejada en estos Lineamientos y, por cierto, la Consejera Electoral Dania Ravel nos dejó una serie de notas que tomaremos en cuenta para lo que continua en el trabajo de actualización de nuestros Lineamientos involucrados en todo lo que tienen que ver con el Servicio Profesional Electoral Nacional._____

Agradezco también a los integrantes de la Junta General Ejecutiva y por supuesto, el trabajo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral._____

Por último, nada más señalar que se está circulando una fe de erratas con algunas correcciones de forma que detectamos en el Proyecto de Acuerdo que se circuló con la Convocatoria a esta sesión, están a su consideración los Lineamientos_____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente._____

Muy buenas tardes a todos los presentes y aprovecho para en esta intervención dar la bienvenida a los Legisladores que se están incorporando a los trabajos de este Consejo General, compañeros ya de este órgano colegiado: sean ustedes bienvenidos, cuenten

con toda nuestra disposición de colaboración, intercambio para facilitar el trabajo institucional. _____

Quisiera referir, que estos Lineamientos fueron procesados en la Comisión del Servicio Profesional Electoral bajo la Presidencia de la Consejera Electoral Maestra Dania Ravel. De hecho, fue aún bajo su conducción cuando fueron votados y después de ello, me tocó a mí ya como nuevo Presidente de la Comisión, estar al tanto de la coordinación de los trabajos y de ahí que quisiera hacerles una propuesta, porque, precisamente, gracias al intercambio con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), que es esta institución tan reconocida, que desde 2008 trabaja con el antes Instituto Federal Electoral y ahora con el Instituto Nacional Electoral, para hacer los exámenes de los concursos públicos. _____

Hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista, y me parece que hay un paso hacia adelante, ya se decía que se están retomando las mejores prácticas en el diseño de los instrumentos de evaluación y uno concretamente tiene que ver con el examen de conocimientos. _____

Ahora, el examen de conocimientos tiene contemplado ser uno solo y como señalaba el Secretario Ejecutivo abarca conocimientos generales, conocimientos político-electorales y los conocimientos técnicos, son 3 módulos, 3 campos distintos que se van a evaluar. _____

Quiero decir que también los propios Lineamientos ya contemplan que el peso de cada uno de estos módulos sea el mismo, con independencia de las plazas que se concursen, y lo que irá variando y modificándose, por supuesto, son los conocimientos técnicos, es decir, no será lo mismo un concurso para un Vocal Ejecutivo Local que para uno Distrital; no será lo mismo para un cargo adscrito al Registro Federal de Electores, que a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, o a la Unidad Técnica de Fiscalización. _____

El peso específico del conocimiento técnico pesará proporcionalmente, porcentualmente lo mismo, pero la complejidad y la especificidad de lo que se va a evaluar, obviamente irá modificándose. _____

Por otra parte, lo que se llama conocimientos generales, básicamente consistente en la evaluación de competencias básicas, más que aspectos memorísticos, que en algún momento estuvieron presentes en la evaluación, aspectos de geografía, recordar algunos ríos, capitales de países remotos, quizá eso no sea significativo para evaluar la entrada al Servicio Profesional, pero sí las competencias básicas en materia de comunicación, finalmente se trata de trabajo en equipo, y de razonamiento lógico poder identificar cuando se está hablando de promedios, porcentajes, en fin, de habilidades, competencias que son propias de todo egresado del nivel medio superior.

Ése es el nivel de referencia que estamos teniendo, a partir también del intercambio con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. _____

Después, hay un segundo módulo que es el conocimiento del Sistema Político Electoral, que también va a ser común de todos los exámenes. _____

Finalmente, hay un tercer módulo que es el de los conocimientos inherentes a la función a desempeñar, que tiene un peso mayor. _____

Lo que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior nos ha sugerido es que la forma de evaluar sea a través de un método conjuntivo, es decir, que en dado módulo se deba de aprobar el mínimo para seguir adelante, claro que el peso mayor lo tiene el conocimiento técnico inherente al puesto, eso es el 60 por ciento de la evaluación, pero es importante también tener una calificación mínima en competencias básicas, y también en conocimiento del Sistema Político Electoral. Si vino a trabajar a una institución administrativa como es ésta, no le corresponden funciones jurisdiccionales, o de procuración de justicia, etcétera, etcétera. _____

De tal manera que, la propuesta para que esta sugerencia del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior quede reflejada, es que en el artículo 43 donde se dice que las personas aspirantes pasarán a la siguiente etapa del Concurso Público, siempre y cuando obtengan en el examen de conocimientos una calificación igual o mayor mínima de 7 en escala de cero a 10, y así que se ubiquen, que introduzcamos lo siguiente, una calificación igual o mayor, mínima de 7 en escala de cero a 10 en cada uno de los 3 módulos de dicho instrumento de evaluación. _____

Porque si no podrías sin tener un solo acierto en competencias básicas avanzar, porque puede ser que ya seas parte del Servicio Profesional y conozcas muy bien la dinámica; pero no es el perfil que está buscando esta evaluación. _____

Es simplemente hacer esa puntualización para que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior tenga toda la claridad de que se va a aplicar la evaluación tal como lo acabo de explicar. _____

Por lo demás, creo que enhorabuena que se sigue perfeccionando el Concurso Público como la vía exclusiva de entrada al Servicio Profesional Electoral, ésta es una institución pública que se nutre de los mejores funcionarios, de los mejores perfiles de mujeres y hombres que concursan contra otros muchos miles para llegar a desempeñarse, así como servidores públicos, ojalá estas prácticas se contagien a otras instituciones del Estado Mexicano. _____

Celebro que estemos perfeccionando estos instrumentos, reconozco el trabajo que coordinó la Consejera Electoral Dania Ravel, así como lo que ha hecho la propia Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todos y a todas. _____

Aprovecho también para dar la bienvenida a quienes se han integrado a esta mesa, enhorabuena. _____

Quiero decir, antes de iniciar con lo que les quiero comentar, que acompaño lo que ha dicho el Consejero Electoral Ciro Murayama, me parece totalmente prudente la modificación que está solicitando al Lineamiento y totalmente atendible a partir de la experiencia del órgano técnico que se dedica justamente a hacer exámenes. _____

Como un reconocimiento mínimo al trabajo que desempeñó el área técnica, asesores y asesoras, Consejeros y Consejeras Electorales, quisiera hacer un recuento muy breve de las actividades que llevamos a cabo para poder presentar el día de hoy esta propuesta de modificación a los Lineamientos. _____

Primero, pasado el Proceso Electoral, pasada la Jornada Electoral el área presentó una propuesta de modificación a diversos Lineamientos, entre los cuales encontramos justamente estos Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. _____

Para sustentar esta propuesta se presentó un diagnóstico basado en los análisis técnicos y metodológicos que le permitió detectar áreas de oportunidad, pero también darnos propuestas de solución; después de esto se llevaron diversas reuniones de trabajo con las oficinas de las y los Consejeros Electorales y, desde luego, también con la del Secretario Ejecutivo se recabaron las observaciones, se plasmaron, se presentaron a la Comisión, a la Junta General Ejecutiva, y así se presentan al día de hoy después de todas estas revisiones. _____

Lo primero que quiero señalar, es que había manifestado en la Comisión del Servicio Profesional que estaba en desacuerdo con los artículos 8 y 9 de los Lineamientos, específicamente con los requisitos que se establecen en el artículo 8 y en la fracción I del artículo 9. _____

Desde mi punto de vista, me parecía que era un requisito adicional que no se estaba previendo en los Estatutos para el ingreso de Servicio Profesional Electoral Nacional, pero que además puede interpretarse como una sanción extra, una persona que hubiera sido destituida o que hubiera sido suspendida. _____

No obstante, sí estaba de acuerdo con la fracción II del artículo 9 que habla de un promedio mínimo para poder acceder. _____

Entonces, creo que en esa lógica y justamente haciendo una segunda reflexión de este tema, me parece que sí podríamos dejar esos requisitos, estaría de acuerdo con que permanezcan, porque sí es un tema de calidad y de exigencia para las personas que queremos que ingresen al Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

Por lo tanto, quería nada más explicar que a diferencia de lo que dije en la Comisión, voy a acompañar estos 2 artículos y de requisitos que se están estableciendo en los mismos. _____

Lo que no comparto y lo había comentado también desde la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, es la restricción que se establece en el artículo 32 para que una persona ocupe otro cargo o puestos, siempre y cuando haya transcurrido ya un año en la plaza que está ocupando en ese momento. _____

Ese requisito, me parece que es inadecuado porque limita la posibilidad de que una persona pueda aspirar a un mejor cargo. _____

Como Servicio Profesional Electoral Nacional, creo que nos conviene tener a los mejores perfiles en los puestos más altos. _____

Entonces, esta medida creo que puede operar en nuestra contra. Incluso, si una persona concursara para 2 lugares al mismo tiempo y quedara en la lista de reserva en esos 2 lugares, lo que podría ocurrir, es que la persona nunca va a aceptar el cargo inferior, porque va a estar esperando que se le pueda ofrecer el cargo superior. _____

Le daría miedo aceptar el cargo inferior, porque si a lo mejor se desocupa el superior al que también podía aspirar, entonces no se podría mover porque no cumpliría a lo mejor un año en ese lugar. _____

Por lo tanto, únicamente me distanciaría de ese artículo 32 de los Lineamientos, por lo cual pediría una votación diferenciada. _____

Tengo una observación que en principio puede ser de forma, pero que me parece que, si no se modifica, sí podía trascender en el fondo. _____

Tiene que ver con el anexo de los Lineamientos, en donde se establece que la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional va determinar a los Consejeros Electorales que van a llevar a cabo las entrevistas. _____

Ordinariamente lo que ocurre es que las y los Consejeros Electorales decidimos si queremos intervenir en las entrevistas, cuáles nos interesan, en cuáles nuestra agenda no lo permite. Con base en esto, se hacen las entrevistas. _____

Me parecería riesgoso que fuera la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional o dejar la interpretación a que se diga que tiene que determinarlo la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

Creo que, bastaría con decir cuántas entrevistas tienen que realizar los Consejeros Electorales por cada cargo, eliminando esta expresión de que la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional lo va a determinar y con eso no tendría ningún problema al respecto. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Bienvenidos, señores Consejeros del Poder Legislativo. _____

Como lo señaló el Consejero Electoral Ciro Murayama, con la mejor disposición de que colaboremos juntos en las actividades de esta institución. _____

Este es un Acuerdo que en mi opinión que implica una transformación de fondo en las prácticas que ha tenido el Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral en el Concurso Público de oposición que, efectivamente, es la vía primordial de acceso al Servicio Profesional Electoral, tenemos en el Estatuto, 2 vías más, que es la incorporación por la vía temporal y los famosos cursos y prácticas que están reservados a la rama del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto Nacional Electoral, pero esta es la vía principal, ciertamente es la que, de manera casi única utilizamos para poder incorporar personal al Servicio Profesional Electoral Nacional. Por tanto, el Concurso Público ha sido una vía que la institución ha cuidado de manera muy importante. _____

Quiero enfatizar algunos aspectos que me parecen de la mayor relevancia en lo que son los ajustes a este Modelo del Concurso Público. _____

Primero, me parece que es absolutamente correcto que se establezca que una vez que se ha hecho una designación, esto me parece bien en el artículo 7 de los Lineamientos, la persona deba permanecer al menos un año en la plaza para la cual se le designa, porque la interpreto como una extensión, lo voy a decir con mucho afecto a una norma al Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, que cuando él fue designado, es un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional exitoso, que ahora es Director Ejecutivo, pero cuando él ingresó como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva le tocó un Distrito lejano y complicado del estado de Oaxaca, y solicitó el mismo día que tomó posesión ser readscrito._____

Entonces, esta norma la metimos en Lineamientos de Junta General Ejecutiva, pero ahora me parece que esté correctamente normado, por eso digo, con mucho afecto al Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, que es un gran funcionario de la institución.____
Entonces, esa parte me parece correcta, lo cual en mi opinión al establecerse de esa manera hace nugatoria la posibilidad de que alguien se vaya a una plaza superior aún y cuando haya concursado por 2. Si en el momento que esa persona gana 2 plazas, nos ha ocurrido esa situación de personas que ganan._____

No sé, al Maestro Miguel Ángel Patiño que también anda por aquí, ganó en su momento 2 plazas, decidió venir a la Dirección de Operación Regional cuanto también había ganado para ser Vocal Ejecutivo Local. Creo que no tomó la mejor decisión, pero ahora es titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.____
Entonces, acompaño esa medida, me parece correcto, pero, insisto, hace nugatoria la posibilidad de moverte. Si ya te asignaron aún y cuando a una plaza de nivel superior por la que hayas concursado y donde quedaste en lista de reserva se desocupe, ya no podrías ir porque la vigencia de los exámenes está por un año. Entonces, habría que ver esa situación._____

Creo que, lo del 32 podría replantearse, hay una propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ahora la analizaré con mucho cuidado._____

Dice también en los Lineamientos que se hace ahora la inclusión de un requisito que me parece importante, que es verificar que no exista militancia en algún partido político.

Este requisito está para algunas figuras como los Capacitadores Electorales y nosotros por la vía de los hechos la hemos hecho extensiva a concursos de selección. Por ejemplo, de los Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales. _____

Me parece que es correcta y ya en algún momento la Sala Superior había establecido que los requisitos para el ingreso al Servicio Profesional son limitativos, es decir, que sólo se pueden aplicar los que están referidos en la Ley o en el Estatuto. En este caso, los 3 años de no haber ocupado cargos de elección popular o haber sido postulado a ellos y no haber estado en cargos de dirigencia de un partido político, pero me parece que es congruente la norma. Eso les da todavía un matiz de mayor independencia frente a los partidos políticos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo cual también acompañaré esa propuesta. _____

Creo también importante que esta idea que en su momento trabajamos el Consejero Electoral Benito Nacif y un servidor, sobre el tema de las cuotas de género para estrechar la distancia entre hombres que forman parte del Servicio, y mujeres que forman parte del Servicio, se retoma también de manera correcta en los Lineamientos, por lo cual, me parece que mantener una cuota específica es correcto. _____

Hay un detalle que también es de fundamental importancia, que es la de cada persona identificada a través de un folio y le podremos dar seguimiento a la participación de esta persona durante el concurso. Ese dato me parece también de manera muy significativa importante en su inclusión a estos Lineamientos. _____

Por supuesto que apoyo la propuesta que ha expresado el Consejero Electoral Ciro Murayama, hace unos minutos comentábamos algunos detalles técnicos sobre esa forma de incorporar la norma, porque evidentemente una norma de esas características tiene que tener como correlato una composición adecuada del número de preguntas, por cada una de las áreas de conocimiento y evitar que, por ejemplo, en una de las áreas de conocimiento vaya a haber, como ocurrió en el pasado, en algún ejemplo práctico que tuvimos aquí, 5 preguntas de una sola área de conocimientos, había que aprobar todas, como había solo 5 preguntas, la gran mayoría reprobó, más bien todas y nadie pasó. _____

Aquí hay 2 funcionarios de muy alto nivel de esta institución que presentaron ese examen y no lo pudieron pasar, pero no porque no hayan sacado un promedio adecuado, sino porque esa área de conocimiento solo tenía 5 preguntas, reprueban 3 y estaban en automático reprobados en todas las secciones. _____

Entonces, creo que la norma que propone el Consejero Electoral Ciro Murayama es correcta, y creo que también debe de ser apoyada. _____

Hay un tema que ha sido una discusión añeja en esta institución, que tiene que ver con la conformación de 2 exámenes distintos que son el de conocimientos generales, casi de cultura general, con el examen de conocimientos específicos. Ahora, la propuesta de los Lineamientos es formular un solo examen y, por consecuencia, incluir un examen cuidadosamente elaborado que mida ambas circunstancias. Eso me parece que es correcto, celebro que esta propuesta que en su momento trabajaron bajo la Presidencia de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y ahora del Consejero Electoral Ciro Murayama, esté sobre la mesa. _____

Me parece que es uno de los avances más significativos. _____

Reconocerle, por supuesto, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, comandada por el Doctor José Rafael Martínez Puón, el trabajo que tenemos aquí. ____

Aprovecho para expresar que en mi opinión, y lo hemos venido discutiendo ya con el Consejero Electoral Ciro Murayama, tenemos que hacer un examen para ver cómo está, más que un examen, una evaluación para ver cómo está funcionando el Sistema Nacional del Servicio Profesional Electoral Nacional, particularmente en la parte que tiene que ver con los órganos electorales de los estados, y obviamente, revisar los elementos técnicos que componen el Servicio Profesional Electoral Nacional en esa materia, bajo el objetivo de tener un aparato sólido de funcionarios en los órganos electorales de los estados, y reducir las brechas todavía de cierta discrecionalidad que se mantienen en los órganos electorales de los estados, para hacer designaciones u ocupaciones de las plazas. _____

Esa parte la hemos propuesto ya en la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, y entiendo que estaremos en esa ruta. En algún momento presentaremos un

Informe sobre eso y, por supuesto, propuestas específicas a este órgano superior de dirección. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

Efectivamente, es un gusto la incorporación de más integrantes del Consejo General, de Consejeros del Poder Legislativo, y esperemos que en un futuro próximo tengamos designados a la totalidad de los integrantes por parte de los distintos grupos parlamentarios, a fin de poder realizar el trabajo colectivo conjuntamente que corresponde a esta institución. _____

Bienvenidos todos. _____

En torno a los Lineamientos que están a discusión en este momento en general, por supuesto, que estoy de acuerdo con el sentido de los Lineamientos, hace unos momentos previos a la sesión me comentaba el Consejero Electoral Ciro Murayama la propuesta que tenía, y que advierto que es una propuesta que lo que busca es fortalecer el ejercicio del examen de conocimientos, el examen que se aplica a los distintos aspirantes al Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

En ese sentido acompaño la propuesta, creo que hay un conjunto de modificaciones que se están incorporando en estos Lineamientos que habremos de identificar a partir de su aplicación si no se lograra el objetivo que buscábamos o si vale la pena fortalecer en otro sentido. _____

Pero, me parece que tomar medidas para buscar mejorar aún más la calidad de quienes van ingresando al Servicio Profesional Electoral Nacional es una obligación que tenemos en este órgano de dirección y, por tanto, acompañaré esa propuesta, el planteamiento que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en torno al anexo de si es la Comisión quien designa a quiénes entrevistas o no, creo que es un tema que

efectivamente como ella lo señala es un tema de forma que solamente vale la pena precisar y ajustar para que no genere una confusión. Eso también lo acompañaría. ____
Ahora me voy a referir a un tercer apartado que fue parte de la discusión que tuvimos en la Comisión del Servicio cuando se analizaron estos Lineamientos, que una parte tiene que ver con el planteamiento que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. Tampoco acompaño el planteamiento que viene en los Lineamientos en relación con el artículo 32 que habla de que para que puedas acceder a una nueva plaza vía concurso se requiere la permanencia durante un año en el cargo que se ocupó, en la plaza que se está ocupando. _____

Lo voy a relacionar un poco con lo que decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sin duda puedo entender una regla de orden al interior del Servicio Profesional Electoral Nacional y compartirla, de no hacer un cambio de adscripción en este primer año precisamente para fortalecer la permanencia de los miembros del Servicio y las actividades que realizan en una determinada área de adscripción; pero no comparto que no puedan ocupar otra plaza que hayan ganado vía concurso. _____

No sé si estará de acuerdo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, pero me parece que el artículo 32 no se debe de mirar en aislado, sino que tiene un vínculo con el artículo 75 de los propios Lineamientos, que es el que establece que si se ocupa, si se concursa por 2 plazas y se ocupa una de las plazas se dejará de formar parte de la lista de reserva de la segunda, esto incluso llevaría a lo que planteaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, solamente se va a poder ocupar una plaza por concurso, porque la vigencia de la lista de reserva es de un año, pero además aunque la vigencia de la lista de reserva fuera más larga, en el momento que se le excluya de cualquier otra lista de reserva en la que se encontrara, no podrá ingresar a ese cargo. _____

Me parece que esta restricción, es una restricción que no debe de incorporarse, por un lado, limita las posibilidades de los propios miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de concursar para 2 plazas y poder acceder a 2 plazas distintas, incluso de niveles jerárquicos diferenciados. _____

En segundo lugar, porque nos genera un efecto dominó, es decir, si hay un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional que concursa para una plaza A y una plaza

B; siendo la B una de mejor cargo, de mayor cargo. Si en la plaza ocupó el segundo lugar o no ocupó el lugar de lista de reserva, directo ocupa el cargo y está en el segundo lugar de la lista de reserva de la plaza B o en el primer lugar de la lista de reserva estamos hablando de que es un muy buen funcionario es el mejor que tenemos para el cargo más alto, el mejor de todos los que están esperando y vamos a perder al mejor y nos vamos a ir por el segundo mejor. Porque éste ocupó un cargo inferior, que lo pudo obtener en un primer momento. _____

Esto más allá del derecho que puede tener el miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional que me parece que es algo que se tendría que valorar, también nos lleva a que eliminemos a una mejor opción, que las siguientes que están en lista respecto del cargo superior y creo que esto iría en detrimento de tener a las mejores y a los mejores en el Servicio Profesional Electoral Nacional. Por lo que me separaría de lo propuesto en el artículo 32 y el correlativo artículo 75, porque, por supuesto, que uno va de la mano del otro en un sentido o en un sentido diverso. _____

Por otra parte, también me separaría de un punto específico o algo que no se incluye en el artículo 55 de los Lineamientos. En el que se señalan los elementos con los que contará quien realice las entrevistas de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. _____

La discusión que se dio en la Comisión fue si en las entrevistas que se realizaran se debían o no tener los resultados del examen, en los términos que se terminó votando en la Comisión del Servicio, el entrevistador contará con los resultados de la evaluación sicométrica del aspirante o de la aspirante, pero no contará con los resultados del examen. _____

Me parece que el que pueda contar un entrevistador con los mayores elementos, puede fortalecer la calidad de la propia evaluación, y la razón que se ponía sobre la mesa para no incluir los resultados del examen, es que esto puede generar un sesgo en el entrevistador. Pero, hay una parte que no podemos obviar, ese sesgo existe en el Servicio Profesional Electoral Nacional desde el hecho de que conocemos a quienes estamos entrevistando: todos los miembros que participen internamente a un concurso, todos los que sean del propio Instituto muy probablemente quien los entreviste, los

conoce o en muchos de los casos quien les entreviste les conoce. Entonces tendrá elementos que podrían afectar la objetividad de la entrevista. _____

Esto con el examen de tener los resultados de conocimientos, incluso, generar un impacto menor al impacto que puede tener, el sesgo que se puede generar por el propio conocimiento, pero sí da elementos adicionales, respecto de muchas veces a quienes conocemos. Conozco a un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional que hace muy bien su trabajo, pero tuvo una evaluación de examen muy baja, me parece que, poder saber por medio de la entrevista para tomar en cuenta por qué esa evaluación fue baja, también nos da elementos para ver cómo se puede desempeñar. Entonces me apartaría de esto, respecto del artículo 55. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenas tardes a todas y a todos. _____

Para manifestar mi postura sobre temas que ya han surgido, particularmente el tema del anexo, sí solicitaría que como en muchas otras ocasiones seamos todos los Consejeros y Consejeras Electorales que queramos entrevistar quienes podamos hacerlo. _____

En relación al artículo 32, tampoco lo acompaño y también solicitaría una votación diferenciada por lo que hace a los artículos 8 y 9 en la temática de restringir el derecho, así lo veo, de los participantes, porque hayan sido ya sancionados. _____

Creo que, ahí hay una atención en sede de Derechos Humanos, porque sí sostengo, creo, que si ya se cumplió con una sanción ahí debe de quedar agotado ese tema, es decir, ya la propia Corte Interamericana ha emitido Resoluciones, en el sentido que una vez que se concluye con una sanción ya no debe de haber consecuencias también el tipo de restricción de derechos para el gobernado. _____

Entonces, sí llamaría a la reflexión de este tipo de normas y, finalmente, sobre el artículo 55, creo que es importante que los Consejeros y Consejeras Electorales que entrevistemos contemos con toda la información, es decir, ya hay hasta jurisprudencia que no aplica para los Consejeros Electorales, la información reservada a confidencial, obviamente, estamos obligados a hacer un correcto uso de la misma, pero sí, me parece que sólo contar los resultados del examen sicométrico sería, tener incompleta la información pertinente, necesaria para las entrevistas. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene la palabra el Licenciado Juan Miguel Castró Rendón, representante de Movimiento Ciudadano. _____

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

Les doy la bienvenida a los representantes del Poder Legislativo que ahora nos acompañan como Consejeros de cada una de sus fracciones. _____

En este asunto comparto lo que han planteado las Consejeras Electorales Dania Ravel y Pamela San Martín y el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, considero que este artículo 32 puede contradecir el artículo 1 Constitucional en relación con el artículo 123, en cuanto es un derecho humano y se debe dar la facilidad para el fortalecimiento de esta cuestión. _____

La segunda es una reflexión que ya se ha discutido aquí en esta mesa, que es bajo el punto de que en el Lineamiento, en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, en el artículo 142, fracción III y esto lo quiero señalar, sobre todo, para los representantes del Poder Legislativo, se establece la imposibilidad de ser militante de algún partido político para poder ingresar al Servicio Profesional Electoral, cuestión que considero inconstitucional. Si nos vamos a la fracción III del artículo 35 de la Constitución Política, que señala que asociarse individual y libremente para formar parte pacíficamente de los asuntos políticos del país. _____

Esto en una ocasión ya lo conoció el Tribunal Electoral, pero creo que es necesario reflexionarlo, porque vemos que es una limitante, es una contradicción, el ciudadano tiene el derecho de afiliarse libremente a cualquier Instituto político, y en el Estatuto se le prohíbe expresamente estar afiliado como tal. _____

Esto en la práctica ha llevado a que personas que quieren participar en el Servicio Profesional piden darse de baja de los partidos, y por estas cuestiones. _____

Creo que, estamos en época de transformaciones y sería bueno reflexionar sobre estos 2 puntos. _____

Es cuanto Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que corresponde. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente. _____

Siguiendo la deliberación de las Consejeras y los Consejeros Electorales, les propongo a ustedes una votación en lo general, en donde se toma en consideración la fe de erratas circulada previamente, los comentarios del Consejero Electoral Ciro Murayama. Entiendo que el comentario de la Consejera Electoral Dania Ravel, sobre la eliminación de la consideración de la Comisión, se podría incluir en lo general, no escuché ninguna objeción al respecto. _____

Y 2 votaciones en lo particular, una por lo que hace al artículo 32, entiendo que la Consejera Electoral Dania Ravel también acompañaría la moción de la Consejera Electoral Pamela San Martín, por parte de lo que hace al artículo 75; y otra en lo particular, a solicitud del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, por lo que hace a los artículos 8 y 9, en los términos por él propuestos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín, para una moción. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Otra votación en lo particular por lo que hace al artículo 55. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ciertamente, tiene usted razón. _____

Entonces, habría 3 votaciones en lo particular. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 2, tomando en esta votación en lo general, en consideración, la fe de erratas circulada previamente, los comentarios del Consejero Electoral Ciro Murayama en su intervención, al igual que el comentario de la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de eliminar la consideración sobre la comisión en los términos por ella propuesto. _____

Quiénes estén a favor, de aprobarlo en general en estos términos, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora, por el orden en que fueron presentados, someto a su consideración el artículo 32 de los Lineamientos, con el efecto correspondiente en el 75, primero como viene en el Proyecto de Acuerdo que es esta restricción de un año a la cual se ha hecho referencia. _____

Quiénes estén a favor, de aprobarlo en el sentido del Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo por favor. _____

7 votos. _____

¿En contra? 4 votos. _____

Aprobado el artículo 32 y el 75 por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor

Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

Ahora, someto a su consideración los artículos 8 y 9, como vienen en el Proyecto. ____
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, como viene en el Proyecto de Acuerdo.
9 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobados por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente. _____

Finalmente, el artículo 55, como viene en el Proyecto. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo como viene en el Proyecto sírvanse manifestarlo. .
9 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobado también el artículo 55 por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1342/2018) Pto. 2 _____

INE/CG1342/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL CONCURSO PÚBLICO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANTECEDENTE

El 24 de octubre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG757/2016 el Consejo General aprobó los Lineamientos del Concurso Público 2016 – 2017 de Ingreso para ocupar Plazas en Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, en Acatamiento a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-459/2016.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.

Este Consejo General es competente para conocer el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los *Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral*, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 34, numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 36, numeral 1; 40, numeral 1; 42, numeral 2; 43, numerales 1 y 2; 44, numeral 1, incisos a), b) y gg); 48, numeral 1, inciso a); 57, numeral 1 incisos b) y d); 201; 202, numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales (LGIPE); artículo 8, fracción VII; del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); artículos 4, numeral 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, numeral 1, inciso w); del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y artículo 4, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.

1. En materia de Protección de Derechos Humanos y no Discriminación, son aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1, 2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y 134 del Estatuto.
2. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema del Instituto Nacional Electoral (INE), resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la CPEUM; en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 20, fracción I; 21; 22; 29, fracciones I y II; 122; del Estatuto.
3. Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen los artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 147; 157 del Estatuto.
4. Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, fracciones I, II, V y IX; 139; 141; 150; 151 del Estatuto.

5. En materia del Concurso Público -como vía de ingreso al SPEN-, son aplicables los artículos 132; 133, fracción I; 135; 140; 142; 143; 144; 148; 149, fracción I; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 161; 162; 163; y 164, del Estatuto.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.

- I. Que conforme a las disposiciones establecidas en la Ley, el Estatuto y diversas aplicables, luego de haber llevado a cabo la publicación y desarrollo de tres Convocatorias sucesivas derivadas del denominado Concurso Público 2016 – 2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del SPEN del INE, la DESPEN a partir de la experiencia e información recabada, analizó aspectos presupuestales, operativos, técnicos y metodológicos sobre las distintas fases y etapas de éste, concluyendo en la elaboración de un documento titulado *“Diagnóstico del Concurso Público 2016-2017”*.
- II. Que en las áreas en las que se requiera una formación académica específica, el perfil de la o el aspirante al cargo o puesto concursado, deberá alinearse al Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN actualizado.
- III. Que debido a que se observó que en los cargos y puestos ganados mediante Concurso se dio una alta movilidad, ya que se ocupaban las plazas por un breve periodo en un Sistema, para luego incorporarse a otro cargo o puesto u otro Sistema, se propone establecer como requisito para concursar, que las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, hayan permanecido en su plaza actual, por al menos un año.
- IV. Que con el propósito de valorar con mayor precisión los conocimientos técnicos de las personas aspirantes, se propone transitar de dos exámenes a un examen de conocimientos único que concentre tanto los conocimientos generales como los técnico-electorales, el cual será aplicado en una sola sesión.

El diseño, ajuste y/o fortalecimiento de los instrumentos de evaluación, la construcción de los bancos de reactivos, el ensamble del examen de conocimientos, así como la aplicación y calificación del mismo estarán a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval).

- V.** Que derivado de haber identificado un alto nivel de ausentismo al momento de la presentación de los exámenes, en comparación al número de las personas inscritas, se propone que el Sistema destinado para el registro de aspirantes establezca el momento en que se pueda obtener el folio de inscripción, el cual servirá para identificar el estatus del aspirante en las distintas fases y etapas del Concurso.
- VI.** Que debido a que se observó que existieron algunas fallas operativas por parte de los Enlaces en las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales que coadyuvan con la DESPEN en la revisión de la documentación de las personas aspirantes al momento de identificar a las personas que cumplen con los requisitos exigidos, se propone determinar obligatorio que realicen la actividad de manera exhaustiva, lo cual eficientará la realización del trabajo y en evitará rehacer la actividad.
- VII.** Que como fue un hecho público y notorio, en el año 2017 durante el desarrollo de entrevistas del Concurso Público 2016-2017, tuvieron verificativo dos sismos en el territorio nacional, a fin de prever casos fortuitos o de fuerza mayor, se propone implementar entrevistas por medio de video-conferencia.
- VIII.** Que derivado a que existe la obligación de cumplir con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 142, fracción III, del Estatuto, que se refiere a la imposibilidad de ser militante de algún partido político para ingresar al Servicio, se propone solicitar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la verificación sobre la probable militancia partidista de las personas ganadoras -incluyendo aquellas designadas mediante lista de reserva-.

- IX.** Que en función a que el Instituto Nacional Electoral está obligado a garantizar la aplicación de la acción afirmativa para acortar la brecha de género, se propone que esta medida de alternancia por sexo, se mantenga en la utilización de las listas de reserva hasta obtener la aceptación de una persona del mismo sexo en el cargo que corresponda.
- X.** Que derivado a que en los últimos concursos hubo casos donde las áreas receptoras de personas aspirantes designadas, solicitaron a la DESPEN que las designaciones iniciaran después de la Jornada Electoral para no modificar la dinámica de trabajo, con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades derivadas de dicho Proceso, se propone que, en su caso, se posponga el uso de la lista de reserva a una fecha posterior a la Jornada Electoral.
- XI.** Que derivado de todas y cada una de las modificaciones a los Lineamientos expuestas y que se implementarán a partir del siguiente Concurso Público, es que el Instituto tiene la pretensión de contar: con instrumentos de evaluación especializados con un enfoque y mayor ponderación a conocimientos técnico electorales; garantizar que las personas que ingresan al SPEN, sean aquellas que cuentan con los requisitos, perfil, experiencia y los conocimientos técnicos específicos al cargo o puesto por el que concursan; optimizar el empleo de recursos institucionales y tecnológicos para el proceso de selección de personal, y, continuar acortando la brecha de género en el proceso de asignación de plazas.
- XII.** Que en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2018, la Comisión del Servicio conoció el contenido y efectos del presente Acuerdo y habiendo hecho observaciones, autorizó presentarlo a la Junta General Ejecutiva.
- XIII.** Que el 10 de octubre de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE163/2018, aprobó someter a consideración del Consejo General la propuesta de Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 34, numeral 1; 35, numeral 1; 36, numeral 1; 40, numeral 1; 42, numeral 2; 43, numerales 1 y 2; 44, numeral 1, incisos a), b) y gg); 48, numeral 1, inciso a); 57, numeral 1, incisos b) y d); 201; 202, numerales 1, 2 y 6, y 203, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, fracciones I y II; 8, fracciones I y VII; 18; 20, fracción I; 21; 22; 34; 40; 132; 133, fracción I; 134; 135; 136; 139; 142; 144; 148; 150; 153 y 156 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y el Acuerdo INE/JGE163/2018, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se abrogan los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.

Segundo. Se aprueban los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, mismos que, como anexo único, forman parte del presente Acuerdo.

Tercero. Se faculta a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional para desarrollar las Convocatorias y las distintas fases y etapas, establecidas en los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

Cuarto. Cualquier caso no previsto en los Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, será resuelto por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Quinto. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

LINEAMIENTOS DEL CONCURSO PÚBLICO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento y las reglas del Concurso Público en la modalidad de oposición, para reclutar y seleccionar a quienes ocuparán cargos y puestos exclusivos del Servicio Profesional Electoral Nacional que se encuentren vacantes en los órganos desconcentrados y en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral.

Con base en la política de igualdad de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral, en el Concurso Público se promoverá la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan al Servicio Profesional Electoral Nacional; así mismo, se prevén y eliminan todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo siempre la igualdad de oportunidades y de trato.

En todas las fases y etapas del Concurso Público, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional implementará mecanismos de confidencialidad, control y registro de las personas que participen en dichas actividades.

Artículo 2. Las personas responsables de las áreas del Instituto, así como quienes sean aspirantes del Concurso Público, deberán sujetarse a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en las Convocatorias respectivas y en los presentes Lineamientos.

Artículo 3. Para los efectos de estos Lineamientos, sin menoscabo de lo previsto en los artículos 4 y 5 del Estatuto, se entenderá por:

Acción afirmativa: Conjunto de medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material que compensan o remedian una situación de injusticia, desventaja o discriminación; que tiene como fin alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.

Adscripción: Ubicación geográfica y administrativa de una persona para realizar las funciones inherentes a un cargo o puesto específico.

Catálogo del Servicio: Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Concurso Público: Es la vía primordial de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, consiste en un conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la selección de las mejores personas aspirantes para ocupar plazas de cargos o puestos del Servicio.

Convocatoria: Instrumento a través del cual se hace del conocimiento de las personas interesadas, el Concurso Público.

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos: Es el procedimiento que se emplea para determinar si una persona aspirante cumple con los requisitos estatutarios, académicos y de experiencia profesional necesarios para ser candidata a ocupar un cargo o puesto dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional; consiste en confrontar o comparar que el documento que presenta es copia fiel del original que se ha tenido a la vista, y que corresponde con los documentos solicitados para participar en el Concurso Público.

Declaratoria de Vacantes: Acto mediante el cual la Junta General Ejecutiva, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, determina las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral que se someterán a Concurso Público.

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Entrevista: Técnica de recolección de información cualitativa que se caracteriza por el establecimiento de una conversación formal entre dos personas (persona entrevistadora o panel de entrevistadores y persona

aspirante) para determinar en qué medida la persona aspirante cumple con los requisitos para ocupar las plazas vacantes.

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

Evaluación psicométrica: Herramienta que tiene por objeto medir el grado de compatibilidad entre el perfil de la persona aspirante y las competencias que correspondan al cargo o puesto por el que concursa.

Examen de conocimientos: Instrumento estandarizado de respuesta estructurada cuyo propósito es medir el grado de conocimientos generales y técnico-electorales de las personas aspirantes a ocupar un cargo o puesto en el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Folio: Clave numérica única que se asigna a cada persona aspirante, con el propósito de identificarla en cada una de las fases y etapas de la convocatoria correspondiente, a efecto de proteger su identidad.

Instituto: Instituto Nacional Electoral.

Instrumento de evaluación: Herramienta de recolección de información que sirve para determinar el mérito del objeto de la evaluación. Puede tener distintos formatos, atendiendo a la naturaleza del objeto, que para el caso de los presentes Lineamientos lo constituyen el examen de conocimientos, la prueba psicométrica y la cédula de calificación de la entrevista.

Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Lineamientos: Lineamientos del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

Lista de reserva: Relación de los nombres de las personas aspirantes del Concurso Público, en orden de prelación, que no obtuvieron un cargo o puesto en la etapa de designación de personas ganadoras pero que aprobaron cada una de las fases y etapas, por lo que están en espera de ocupar alguna plaza vacante que se genere, durante su vigencia.

Miembro del Servicio: Es la persona que haya obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo

o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en los términos que señala el Estatuto.

Módulo del SIISPEN: Es el sistema informático que podrá ser utilizado para la inscripción, administración y control de los datos e información de los diversos procesos del Concurso Público y que forma parte del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Perfil del cargo o puesto: Es la descripción de los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que deben cumplir las personas que aspiran a ellos.

Persona aspirante: Personal del Instituto, prestadoras o prestadores de servicios o la ciudadanía que se postule para ocupar un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Plaza: Es la posición que respalda un cargo o puesto en la estructura ocupacional o plantilla que puede ser ocupada solo por una persona y que tiene una adscripción determinada.

Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

Vacante: Cargo o puesto que ha sido incluido en la Declaratoria de Vacantes para concursarse a través de una Convocatoria.

Artículo 4. La DESPEN es el área del Instituto encargada de llevar a cabo la operación del Concurso Público; podrá apoyarse en los órganos ejecutivos y técnicos, en los órganos desconcentrados del Instituto, así como en otras instituciones y entes externos para realizar actividades específicas referidas en estos Lineamientos.

Cualquier caso no previsto, será resuelto por la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.

Artículo 5. La DESPEN deberá garantizar que existan las condiciones necesarias para que el desarrollo del Concurso Público se apegue a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Asimismo, deberá preservar la transparencia, igualdad de oportunidades, la valoración del mérito, la igualdad de género, la no discriminación, la cultura democrática y el respeto a los derechos humanos.

Artículo 6. En el Concurso Público queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 7. La persona aspirante inscrita en el Concurso Público deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- II. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
- III. No ser militante de algún partido político;
- IV. No haber sido registrada por un partido político en una candidatura a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;
- V. No ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
- VI. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local o municipal;
- VII. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo;
- VIII. Acreditar el nivel de educación media superior, para quienes deseen pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica;
- IX. Para quienes deseen pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva, acreditar que cuentan con título o cédula profesional,
- X. Contar con conocimientos y experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus funciones;
- XI. Cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, y
- XII. Aprobar las evaluaciones o procedimientos que el Instituto determine.

El perfil y la experiencia profesional de las personas aspirantes, deberá corresponder a lo señalado en el Catálogo del Servicio respecto al cargo o puesto por el que concursa.

Artículo 8. Para las personas aspirantes que no pertenezcan al Servicio, será requisito:

- I. Que no hayan sido sancionados con destitución en calidad de servidoras o servidores públicos en los tres años inmediatos anteriores.
- II. Que, siendo Personal de la rama administrativa del Instituto, no hayan sido objeto de una sanción de suspensión en el año inmediato anterior a la fecha de registro.

Artículo 9. Para las personas aspirantes que sean miembros del Servicio, será requisito para participar en el Concurso Público:

- I. Que no hayan sido objeto de una sanción de suspensión en el año inmediato anterior a la fecha del registro.
- II. Que hayan obtenido una calificación mínima de 7.0 en la última evaluación del desempeño.

En caso de que las personas aspirantes no cuenten con la calificación de la evaluación del desempeño por haberse inconformado ante la autoridad competente del Instituto, la DESPEN tomará en cuenta las calificaciones obtenidas en la evaluación inmediata anterior.

Artículo 10. El personal o cualquier persona prestadora de servicios del Instituto que tenga conocimiento de la participación como aspirante de alguna persona con parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado o de carácter civil, se deberá excusar para intervenir en la operación del Concurso Público, mediante escrito dirigido a la o el titular de la DESPEN.

Artículo 11. Las personas aspirantes concursarán por la plaza de un cargo o puesto determinado y no por una adscripción específica.

Artículo 12. Los datos personales que registren las personas aspirantes estarán debidamente protegidos. Sólo sus titulares podrán tener acceso a esta información y solicitar, en su caso, la rectificación, cancelación u oponerse al uso de los mismos.

La base de datos que contenga los datos personales será considerada un Sistema de Datos Personales en términos de la legislación de la materia.

Artículo 13. El contenido de los instrumentos de evaluación del Concurso Público es considerado como información reservada.

Artículo 14. Durante el desarrollo del Concurso Público y hasta su designación, las personas aspirantes deberán mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto, estos Lineamientos y las Convocatorias que al respecto se emitan. En los casos en que no sea así, los resultados obtenidos por dichas personas aspirantes serán nulos y serán descalificados.

Artículo 15. Cada Convocatoria del Concurso Público se desarrollará en tres fases, que se compondrán de las siguientes etapas:

- I. Primera fase:
 - a) Publicación y difusión de la Convocatoria.
 - b) Registro e inscripción de personas aspirantes que cumplan el perfil que requiere el cargo o puesto al que aspira.
 - c) Revisión curricular.
- II. Segunda fase:
 - a) Aplicación del examen de conocimientos.
 - b) Cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos.
 - c) Aplicación de la evaluación psicométrica.
 - d) Aplicación de entrevistas.
- III. Tercera fase:
 - a) Calificación final y criterios de desempate.
 - b) Designación de personas ganadoras.
 - c) En su caso, utilización de la Lista de reserva.

Artículo 16. Las y los Consejeros Electorales del Instituto, así como las y los integrantes de la Junta podrán presenciar las fases del Concurso Público y emitir por escrito las observaciones que estimen pertinentes. Asimismo, podrán designar representantes para participar en calidad de observadores, debiendo identificarse y presentar el oficio de designación, previo al inicio de cada actividad.

Capítulo Segundo
De la primera fase
Publicación y difusión de las Convocatorias

Artículo 17. El Concurso Público iniciará con la publicación de la Convocatoria respectiva. Las Convocatorias serán emitidas y difundidas por la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio y aprobación de la Junta.

Artículo 18. Las Convocatorias establecerán, como mínimo, lo siguiente:

- I. La descripción de las vacantes a concursar, el nombre del cargo o puesto, así como el número de vacantes, el nivel tabular, las percepciones correspondientes y la adscripción de cada plaza.
- II. Los requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes y el perfil que se requiere de acuerdo con lo establecido en el Estatuto, los Lineamientos y en el Catálogo del Servicio.
- III. Los documentos que deberán presentar las personas aspirantes para acreditar los requisitos establecidos.
- IV. Los plazos, fechas y/o términos para el registro e inscripción de aspirantes, la aplicación de los instrumentos de evaluación, la presentación de documentos y verificación de requisitos, la aplicación de entrevistas y la difusión de resultados.
- V. Los criterios de desempate.
- VI. La descripción de cada una de las fases y etapas, así como la dirección electrónica del Instituto donde se podrán consultar las guías de estudio del examen de conocimientos.
- VII. Las reglas de valoración de los instrumentos de evaluación.
- VIII. Las acciones afirmativas que se implementarán.

Artículo 19. Si durante el desahogo de la Convocatoria se generan, de manera adicional, vacantes de cargos y puestos incluidos en la Declaratoria de Vacantes, éstas podrán ser consideradas para la designación de las personas ganadoras, con conocimiento de la Comisión del Servicio.

En caso de actualizarse este supuesto, dicha información deberá hacerse pública en el portal de internet del Instituto.

Artículo 20. Las Convocatorias estarán dirigidas a las personas interesadas en ingresar al Servicio y a las y los miembros del Servicio que pretendan ocupar un cargo o puesto de nivel superior y que cumplan con los requisitos establecidos por el Estatuto, los presentes Lineamientos y la propia Convocatoria.

Artículo 21. La DESPEN deberá promover una amplia difusión a través de distintos medios de comunicación, para propiciar una mayor participación de la población. Para ello, la difusión podrá realizarse en los Organismos Públicos Locales, Tribunales Electorales, instituciones educativas de las 32 entidades federativas; así como en organizaciones de la sociedad civil y en redes sociales.

Artículo 22. La difusión de cada una de las Convocatorias se realizará durante diez días naturales previos al inicio del plazo para el registro e inscripción de las personas aspirantes.

Artículo 23. Una vez publicada cada Convocatoria, quienes funjan como titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Vocalías Ejecutivas de Junta Local Ejecutiva, en coordinación con la DESPEN, deberán difundirla entre el personal del Instituto adscrito a sus áreas, así como a la ciudadanía en general, a través de los medios que estimen pertinentes y que propicien una mayor participación.

Artículo 24. Las condiciones y requisitos establecidos en las Convocatorias por ningún motivo podrán modificarse durante el desarrollo de las respectivas fases y etapas previstas en el artículo 15 de estos Lineamientos. Por lo cual, quienes participen en la misma, aceptan su contenido, así como la normativa aplicable.

Artículo 25. Desde el momento de la publicación de cada Convocatoria, las personas aspirantes podrán consultar las guías de estudio del examen de conocimientos en la página de internet del Instituto. Estas guías incluirán los temas y la bibliografía que se podrán consultar para su preparación.

Capítulo Tercero

Del registro e inscripción de aspirantes

Artículo 26. Las personas interesadas en participar, deberán registrarse en el módulo del SIISPEN y deberán proporcionar la información que les sea requerida, dentro del plazo de diez días naturales, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria respectiva.

Artículo 27. El SIISPEN indicará la fecha en la cual la persona aspirante podrá obtener su comprobante de registro con el número de folio, que deberá presentar para sustentar el examen de conocimientos y que, a su vez, le servirá para identificar su estatus en las distintas fases y etapas de la Convocatoria respectiva.

Las personas aspirantes que participen en más de una Convocatoria, deberán registrarse en cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

Artículo 28. Es responsabilidad de las personas aspirantes registrar con veracidad y autenticidad sus datos personales, así como el perfil curricular que declaren.

Artículo 29. Una vez que las personas aspirantes registren su información y se postulen por una vacante, no podrán modificar sus datos.

Artículo 30. Las personas aspirantes podrán concursar hasta por dos cargos o puestos, en los términos establecidos por cada Convocatoria.

Artículo 31. Las y los miembros del Servicio no podrán concursar por un cargo o puesto del mismo nivel administrativo al que ocupan al momento del registro e inscripción al Concurso Público. La DESPEN cancelará la inscripción de cualquier persona aspirante que se ubique en este supuesto.

Artículo 32. La persona aspirante que resulte ganadora de una plaza del Servicio, podrá ocupar otro cargo o puesto mediante Concurso Público, siempre y cuando haya permanecido, al menos un año en dicha plaza.

Artículo 33. El personal del Instituto que tenga acceso a la información contenida en el Módulo SIISPEN y a los registros que, en su caso, se habiliten, deberá observar en todo momento las disposiciones en materia de protección de datos personales que sean aplicables.

Capítulo Cuarto

De la revisión curricular

Artículo 34. Una vez que la persona aspirante se postule para concursar por un cargo o puesto del Servicio a través del Módulo del SIISPEN, éste, de forma automática, llevará a cabo la revisión curricular e informará, en su caso, su aceptación o descarte, con base en los requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente.

Artículo 35. La revisión curricular se llevará a cabo sin perjuicio del cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en la Convocatoria, que las personas aspirantes deberán realizar, en el momento y ante el personal que determine la DESPEN.

La DESPEN podrá investigar o allegarse de la información documental necesaria que le permita corroborar el cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes.

Artículo 36. La DESPEN publicará en la página de internet del Instituto, la lista que contendrá el número de folio de las personas aspirantes que sustentarán el examen de conocimientos para cada cargo o puesto; así como la fecha, hora y lugar de su aplicación.

Capítulo Quinto **De la segunda fase** **De la aplicación del examen de conocimientos**

Artículo 37. La DESPEN coordinará la elaboración y aplicación del examen de conocimientos, el cual tendrá un valor de ponderación entre el 55 y el 65 por ciento de la calificación final, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria respectiva. Para su diseño y elaboración, la DESPEN podrá contar con el apoyo de instituciones externas.

Artículo 38. Para las personas con discapacidad se implementarán medidas de accesibilidad; y para las mujeres embarazadas o en puerperio que acrediten, antes de la fecha de su examen y mediante dictamen médico, estar en condiciones delicadas de salud, se podrán habilitar sedes especiales.

Artículo 39. Las personas aspirantes presentarán el examen de conocimientos en las sedes, turnos y horarios que la DESPEN determine, atendiendo al número de aspirantes, los equipos y espacios disponibles para tal efecto. La aplicación del examen de conocimientos podrá llevarse a cabo en las 32 entidades federativas de acuerdo con lo que establezca y publique previamente la DESPEN. Los lugares destinados para tal fin, serán preferentemente instituciones académicas y/o instalaciones del Instituto.

Artículo 40. Las Convocatorias determinarán el tipo de examen para cada uno de los cargos y puestos que estarán sujetos a Concurso Público.

Artículo 41. Para tener derecho a presentar el examen de conocimientos, las personas aspirantes deberán asistir puntualmente en el lugar, fecha y hora previamente establecidos por la DESPEN, exhibiendo su comprobante de inscripción con el número de folio que le haya generado el SIISPEN, conforme a lo dispuesto en la Convocatoria respectiva. Asimismo, deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de alguno de los siguientes documentos: credencial para votar con fotografía, cédula profesional o, en su caso, pasaporte vigente.

No habrá prórroga para realizar el examen en fecha posterior, ni se aceptarán justificantes de inasistencia de ninguna índole.

Artículo 42. Si durante la aplicación del examen de conocimientos se presenta un caso fortuito o de fuerza mayor, la DESPEN podrá determinar las medidas necesarias para el restablecimiento de la aplicación, tan pronto sea posible, de acuerdo con las condiciones existentes.

Artículo 43. Las personas aspirantes pasarán a la siguiente etapa del Concurso Público, siempre y cuando obtengan en el examen de conocimientos, una calificación mínima de 7.00, en una escala de cero a diez, en cada uno de los módulos que componen el instrumento de evaluación, y se ubiquen dentro del 33 por ciento de aspirantes que hayan obtenido las calificaciones más altas, agrupados según el cargo o puesto en concurso; este porcentaje se incrementará en caso de que no se logre contar con cinco personas aspirantes por plaza vacante en concurso, a efecto de ser sujetos de entrevista, siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima referida; este porcentaje, también se incrementará en términos de las acciones afirmativas que establezcan las Convocatorias, para procurar la igualdad sustantiva en aspirantes que pasen a la siguiente etapa.

La DESPEN podrá incrementar el número de aspirantes a diez, cuando solamente exista una vacante publicada en la Convocatoria.

Artículo 44. Una vez aplicado el examen de conocimientos, la DESPEN generará una lista por cargo o puesto concursado con los folios de las personas aspirantes, ordenada de mayor a menor calificación.

De dicha lista, la DESPEN seleccionará en orden de prelación cinco aspirantes (cuando se hayan publicado más de una vacante) o diez aspirantes (cuando se publique sólo una plaza), en términos de lo señalado en el artículo 43, por plaza

vacante para que cotejen sus documentos y se verifique el cumplimiento de requisitos.

La DESPEN difundirá en la página de internet del Instituto, la lista con los folios de las personas aspirantes a las que se les realizará el cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos.

Capítulo Sexto

Del cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos

Artículo 45. La DESPEN realizará el cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos que presenten las personas aspirantes convocadas por plazas vacantes en los términos establecidos en los presentes Lineamientos, seleccionadas en orden de prelación conforme a los resultados del examen de conocimientos y verificará el cumplimiento de los requisitos para ocupar los cargos y puestos del Servicio.

La DESPEN coordinará el trabajo de cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos, apoyándose, en su caso, en el personal de las Juntas Locales Ejecutivas, y publicará en la página de internet del Instituto la lista señalada en el artículo 43, indicando la fecha, lugar y hora para presentarse. Su actuación y apoyo, se llevará a cabo conforme al Manual que al efecto elabore la DESPEN y dentro de los plazos fijados para tal fin.

Artículo 46. Los documentos que deberán presentar las personas aspirantes, serán los siguientes:

- I. Una fotografía reciente tamaño infantil, la fotografía deberá contener nombre y apellidos al reverso;
- II. Original y copia de identificación oficial con fotografía. Únicamente se aceptarán los siguientes documentos: Credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente o, en su caso, cédula profesional;
- III. Original o copia certificada y copia simple de acta de nacimiento;
- IV. Currículum vitae actualizado, con firma autógrafa de la o el aspirante;
- V. Original y copia del título o cédula profesional, para quienes deseen pertenecer al Cuerpo de la Función Ejecutiva u;
- VI. Original y copia del certificado que acredite haber concluido el nivel de educación media superior para quienes deseen pertenecer al Cuerpo de la Función Técnica;

- VII.** Original y copia de comprobantes laborales que acrediten el cumplimiento de los requisitos para cada cargo o puesto, que establezca la Convocatoria respectiva;
- VIII.** Carta firmada bajo protesta de decir verdad, en donde se señale que la información proporcionada y los documentos presentados son auténticos;
- IX.** Carta firmada de aceptación de los términos y condiciones del Concurso, establecidos en el Estatuto, Lineamientos y Convocatoria, y
- X.** Los demás que se establezcan en la Convocatoria correspondiente.

Los originales de los documentos serán devueltos a las o los aspirantes después de realizar el cotejo correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de los documentos que deberá presentar aquella persona aspirante que resulte ganadora de una plaza vacante ante la Dirección Ejecutiva de Administración.

Artículo 47. La DESPEN descartará a las personas aspirantes que no cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en el Estatuto y en la Convocatoria respectiva.

Artículo 48. En caso de que alguna persona aspirante sea descartada debido a que no cumple los requisitos, se sustituirá en la lista de resultados por la siguiente persona aspirante del mismo sexo a la persona descartada, que cumpla con los mismos.

Artículo 49. La DESPEN difundirá en la página de internet del Instituto la lista con los folios de las personas aspirantes que accederán a la aplicación de la evaluación psicométrica y señalará la fecha, hora y lugar de aplicación.

Capítulo Séptimo

De la aplicación de la evaluación psicométrica

Artículo 50. La DESPEN llevará a cabo la aplicación de la evaluación psicométrica, a cinco o diez aspirantes por plaza vacante, en términos de lo señalado en el artículo 43, seleccionadas en orden de prelación conforme a los resultados aprobatorios del examen de conocimientos y que hayan cubierto la etapa de cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos para ocupar los cargos y puestos del Servicio.

Se aplicará el tipo de evaluación psicométrica en función de los cargos y puestos que se establezcan en la Convocatoria respectiva.

Artículo 51. El resultado de esta evaluación se calificará en una escala de cero a diez, con dos posiciones decimales. La calificación obtenida en esta prueba tendrá una ponderación del 5 al 15 por ciento en la calificación final, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria respectiva.

Artículo 52. La DESPEN podrá apoyarse en una empresa especializada para llevar a cabo el diseño, elaboración, aplicación y calificación de la evaluación psicométrica.

Artículo 53. Una vez aplicada la evaluación psicométrica, la DESPEN generará la lista con los folios de las personas aspirantes que se presentarán a la etapa de entrevistas. La lista se difundirá en la página de internet del Instituto, la cual se ordenará de mayor a menor calificación en estricto orden de prelación.

Capítulo Octavo

De la aplicación de entrevistas

Artículo 54. La DESPEN publicará, en la página de internet del Instituto, los calendarios de entrevistas que señalarán el folio, la fecha, hora y lugar de su aplicación conforme a la agenda proporcionada por quienes serán responsables de entrevistar. Dichos calendarios podrán ser actualizados de manera permanente de acuerdo con las modificaciones que requieran las personas entrevistadoras.

Artículo 55. La DESPEN integrará los expedientes de las personas aspirantes y los remitirá a quienes funjan como entrevistadoras y entrevistadores, cuando menos dos días hábiles previos al inicio de la aplicación de las entrevistas respectivas. Los expedientes contendrán:

- I. Currículum vitae;
- II. Guía de entrevista elaborada por la DESPEN para cada cargo o puesto, con perspectiva de igualdad y no discriminación, y
- III. Los resultados de la Evaluación psicométrica

Si en la integración del expediente que se remite por cada aspirante, se identifica que alguna persona no cumple con el perfil y los requisitos establecidos en el Estatuto y en la Convocatoria respectiva, el aspirante será descartado.

Artículo 56. Las personas aspirantes deberán presentarse puntualmente a las entrevistas en la fecha, hora y lugar que se hayan definido para tal efecto y deberán acreditar su identidad mediante alguno de los documentos referidos en el artículo

41 de estos Lineamientos, en caso contrario, perderán su derecho a que se le apliquen las entrevistas correspondientes.

A las personas que se encuentren en situaciones de riesgo grave de salud o a las mujeres embarazadas o en puerperio, se les podrá reprogramar la entrevista dentro de los siguientes cinco días hábiles, previa presentación del certificado médico de instituciones públicas y privadas, en los términos que determine la DESPEN en la Convocatoria respectiva.

Las entrevistas se realizarán dentro de las instalaciones del Instituto, por videoconferencias o de manera presencial.

Artículo 57. Las entrevistas podrán aplicarse de manera individual o colectiva. Las y los entrevistadores podrán utilizar la Guía de entrevista que elabore la DESPEN para tal fin. Para el correcto empleo de la misma, la DESPEN capacitará a las y los entrevistadores a través de los medios electrónicos que ésta determine.

Artículo 58. En ningún caso podrán fungir como entrevistadores o entrevistadoras las y los funcionarios del Instituto que estén concursando en la Convocatoria respectiva. De presentarse ese supuesto, la DESPEN designará, previo conocimiento de las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas o Vocalías Ejecutivas Locales, según sea el caso, a la o el funcionario del Instituto que deberá realizar la entrevista.

Artículo 59. Cada persona aspirante, según el cargo o puesto por el que se concursa, deberá ser entrevistada por las y los funcionarios del Instituto, conforme al **Anexo 1** de los presentes Lineamientos. Las entrevistas que delegue el Secretario Ejecutivo, las deberá realizar una o un funcionario que ocupe un cargo superior al que la persona aspire.

Artículo 60. Las entrevistas que no se realicen por causas atribuibles a las personas aspirantes, no se podrán efectuar con posterioridad y se calificarán con cero, exceptuando los casos previstos en el artículo 56 de los presentes Lineamientos.

Artículo 61. La persona que funja como entrevistadora asentará en el medio que se establezca en la Convocatoria correspondiente, las calificaciones otorgadas a cada una de las personas aspirantes, en una escala de cero a diez, más dos decimales.

La calificación obtenida en esta etapa tendrá una ponderación del 25 al 35 por ciento en la calificación final, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria respectiva. El formato de calificación se llenará a través de los medios electrónicos que la DESPEN determine.

En todo momento, las personas entrevistadoras, así como el personal de la DESPEN deberán mantener en secrecía las calificaciones otorgadas a cada aspirante.

Artículo 62. En el caso de que las personas aspirantes que sean entrevistadas por más de cinco entrevistadoras o entrevistadores, la DESPEN eliminará la calificación más baja y la calificación más alta que haya obtenido en las entrevistas y promediará las calificaciones restantes.

Capítulo Noveno **De la tercera fase** **De la calificación final**

Artículo 63. Para calcular la calificación final se sumarán los resultados obtenidos por las personas aspirantes en cada una de las etapas correspondientes al examen de conocimientos, evaluación psicométrica y las entrevistas, atendiendo a las ponderaciones que se determinen en la Convocatoria correspondiente.

La calificación final se expresará con un número entero y dos posiciones decimales. La lista de resultados finales incluirá el folio de las personas aspirantes que obtuvieron una calificación igual o mayor a 7.00. Las calificaciones menores se consideran no aprobatorias.

Artículo 64. La DESPEN, con conocimiento de la Comisión del Servicio, remitirá a la Secretaría Ejecutiva una lista por cargo o puesto con los resultados finales que contendrá los folios de inscripción, el nombre completo y las calificaciones desglosadas de las personas aspirantes que aprobaron cada una de las fases y etapas del Concurso Público.

Esta lista se ordenará de mayor a menor calificación, a partir de la calificación final, es decir, el primer lugar de la lista lo ocupará la persona aspirante que haya obtenido el puntaje más alto y a esta persona se le considerará como la primer persona candidata a ser ganadora y, así sucesivamente en función de las plazas de cargos y/o puestos sujetos a concurso.

Artículo 65. La DESPEN, después de aplicar en su caso, los criterios de desempate previstos en estos Lineamientos, publicará en la página de internet del Instituto el listado de los resultados finales con el nombre completo de las personas aspirantes, así como la calificación que obtuvieron en cada una de las fases y etapas de la Convocatoria respectiva.

Capítulo Décimo

De los criterios de desempate

Artículo 66. Para los casos de empate referidos en el artículo anterior, se atenderá a los siguientes criterios:

- I. Cuando se trate de aspirantes Miembros del Servicio empatados con personas que no pertenezcan al mismo; los primeros ocuparán los lugares superiores en la lista.
- II. Cuando se trate de empate entre aspirantes Miembros del Servicio se atenderá el orden de prelación siguiente:
 - a) Mayor calificación en el examen de conocimientos.
 - b) Mayor calificación en la entrevista.
 - c) Mayor calificación en la evaluación psicométrica.
 - d) Mayor calificación en las últimas tres evaluaciones del desempeño.
 - e) Mayores méritos extraordinarios, entendiéndose como tales la titularidad y el rango.
 - f) Mejor promedio en las calificaciones en el Programa de Formación o actividades de Capacitación.
 - g) Mayor antigüedad como personal de carrera;
- III. Cuando se trate de empate entre personas aspirantes que no son Miembros del Servicio, los lugares superiores en la lista los ocuparán aquellas que satisfagan el orden de prelación siguiente:
 - a) Mayor calificación en el examen de conocimientos.
 - b) Mayor calificación en la entrevista.
 - c) Mayor calificación en la evaluación psicométrica.
 - d) Mayor experiencia en materia electoral.
 - e) Mayor grado académico.

Artículo 67. La Secretaría Ejecutiva informará a las y los integrantes del Consejo General y de la Junta los casos en que la DESPEN haya detectado empates, así como el criterio de desempate adoptado.

Capítulo Décimo Primero
De la designación de ganadores, ocupación de vacantes y
expedición de nombramientos y oficios de adscripción

Artículo 68. De conformidad con la lista referida en el artículo 65 de estos Lineamientos, la DESPEN ofrecerá por escrito, en los medios que se establezcan en la Convocatoria, una adscripción específica a cada persona aspirante ganadora de una plaza vacante sujeta a concurso.

Artículo 69. Las personas aspirantes deberán expresar por escrito, a través de los medios que establezca la DESPEN, su aceptación o declinación al ofrecimiento, en un plazo que no deberá exceder dos días hábiles a partir de que se les haya comunicado la adscripción que les correspondería. En caso de estar en periodo de Proceso Electoral Federal, este plazo no podrá exceder de 48 horas.

De no recibirse respuesta por escrito de la persona aspirante en el plazo establecido, se tendrá como declinación tácita; por lo que, deberá convocarse a la siguiente persona de la lista. Las personas aspirantes que hayan declinado de manera expresa o tácita, formarán parte de la lista de reserva para que tengan la posibilidad de recibir una nueva propuesta de adscripción conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos.

Artículo 70. La DESPEN presentará para aprobación del Consejo General, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, la propuesta para designar como ganadora a la persona aspirante para ocupar vacantes en el cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local o Distrital.

Artículo 71. La DESPEN presentará para aprobación de la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, la propuesta para designar como ganadora a la persona aspirante para ocupar vacantes en cargos y puestos distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva.

Artículo 72. El Consejo General o la Junta, según corresponda, a través de la DESPEN, solicitará a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verifique que las personas ganadoras no se encuentren en el Padrón de Militantes de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente.

Artículo 73. La Secretaría Ejecutiva, a través DESPEN, deberá notificar a las personas ganadoras su designación, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Artículo 74. La Secretaría Ejecutiva expedirá los nombramientos y oficios de adscripción correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Estatuto.

Capítulo Décimo Segundo

De la integración y utilización de listas de reserva

Artículo 75. Posterior a la designación de personas ganadoras, la DESPEN integrará y publicará, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en la página de Internet del Instituto, una lista de reserva que incluirá a las personas que declinaron ocupar una plaza vacante en el primer ofrecimiento, así como a las personas no ganadoras que hayan aprobado todas las fases y etapas del Concurso y que su calificación final sea 7.00 o superior. Esta lista estará ordenada de mayor a menor calificación y tendrá una vigencia de hasta un año a partir de su publicación.

En el caso de que una persona aspirante se hubiera postulado por más de un cargo o puesto, y aceptará la plaza de un cargo o puesto específico, dejará de formar parte de las listas de reserva vigentes en las que se encuentre, tanto en el Concurso Público del Sistema del Instituto como del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Cuando la Convocatoria establezca una acción afirmativa, para procurar la igualdad de género, la misma deberá hacerse extensiva a la integración de la lista de reserva, en el entendido de que cuando una plaza vacante se ofrezca a una persona y esta decline, será ofrecida a la siguiente persona del mismo sexo hasta conseguir la aceptación correspondiente.

La lista será encabezada, en su caso, por la mujer que tenga mayor calificación y será sucedida por hombres y mujeres de manera intercalada, en orden de mayor a menor calificación determinada individualmente por sexo.

Artículo 76. La DESPEN, podrá determinar que la fecha de ingreso de las personas ganadoras mediante el uso de la lista de reserva, sea un mes previo a la Jornada Electoral y una vez concluidos los cómputos de la elección, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.

Artículo 77. La DESPEN ofrecerá hasta por dos ocasiones a los integrantes de la lista de reserva la ocupación de una plaza vacante, en términos del artículo 69 de estos Lineamientos.

Artículo 78. El uso de la lista de reserva deberá sujetarse a las siguientes reglas:

I. Para el cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local:

- a) La DESPEN identificará que haya lista de reserva vigente.
- b) Por cada vacante que se genere, se entrevistará a las cinco personas aspirantes con la mejor calificación global, en estricto orden de prelación.
- c) Las entrevistas deberán realizarse por las y los funcionarios a que hace referencia el **Anexo 1** de estos Lineamientos, atendiendo a los principios de igualdad de género y no discriminación.
- d) La persona ganadora para ocupar el cargo vacante será quien obtenga la mayor calificación en la aplicación de entrevistas, para ello, se eliminará la calificación más baja y la calificación más alta y se promediarán las calificaciones restantes.

II. Para cargos distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local:

- a) La DESPEN identificará que haya lista de reserva vigente para el cargo o puesto respectivo.
- b) La DESPEN ofrecerá el cargo o puesto a las personas que integran la lista de reserva, en estricto orden de prelación, aplicando las acciones afirmativas antes señaladas, es decir, se deberá comenzar con las aspirantes mujeres.
- c) Las personas aspirantes deberán expresar por escrito, a través del formato que les proporcione la DESPEN, su aceptación o declinación al ofrecimiento, en el plazo establecido en el artículo 69 de los presentes Lineamientos.
- d) De no recibir respuesta por escrito de la persona aspirante en el plazo referido en el inciso anterior, se tendrá como declinación tácita; por lo que se convocará a la siguiente persona aspirante de la lista de reserva que cuente con los mejores resultados, quedando fuera del concurso.

Artículo 79. La DESPEN presentará para aprobación del Consejo General, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, la propuesta para designar como ganadora a la persona aspirante de la Lista de Reserva para ocupar vacantes en el cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local o Distrital.

Artículo 80. La DESPEN presentará para aprobación de la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, la propuesta para designar como ganadora a la persona aspirante de la Lista de Reserva para ocupar vacantes en cargos y puestos distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva.

Capítulo Décimo Tercero

De otras previsiones del Concurso Público

Artículo 81. El concurso de una plaza se declarará desierto por la DESPEN, con conocimiento de la Comisión del Servicio, en alguno de los siguientes supuestos:

- I. Cuando ninguna persona aspirante se registre al mismo, o habiéndose registrado, no se presente a cualquiera de las fases y etapas posteriores;
- II. Cuando ninguna persona aspirante cumpla con los requisitos previstos en la Convocatoria respectiva y;
- III. Cuando ninguna persona aspirante obtenga en el examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria establecida en el artículo 43 de estos Lineamientos.

Artículo 82. El Consejo General podrá suspender el desarrollo del Concurso Público por causa extraordinaria y justificada, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.

Capítulo Décimo Cuarto

De la aclaración y de las impugnaciones

Artículo 83. Las personas aspirantes que hayan presentado el examen de conocimientos podrán solicitar a la DESPEN, dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de la calificación, la aclaración de dudas que tengan respecto a la misma.

La solicitud deberá ser presentada por escrito con firma autógrafa, indicando el nombre de la persona aspirante, domicilio, teléfono de localización; así como su manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos y razones que dan motivo a su solicitud.

Artículo 84. La DESPEN, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud, deberá allegarse de los elementos que estime necesarios para realizar la aclaración correspondiente.

Una vez recabados dichos elementos, integrará la respuesta de la solicitud de aclaración, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, y la comunicará por escrito en el domicilio señalado por la persona aspirante que la haya solicitado, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Dicha aclaración no tendrá efectos vinculatorios.

Artículo 85. Las personas aspirantes que hayan pasado a la etapa de entrevistas y no hayan resultado ganadoras, podrán interponer ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, un recurso en contra de los resultados referidos en el artículo 63 de estos Lineamientos, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se le notifique la respuesta a su solicitud de aclaración.

Artículo 86. La impugnación se tramitará de conformidad con lo siguiente:

- I. La persona aspirante interpondrá ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el recurso por escrito, señalando domicilio para recibir notificaciones, expresando el acto específico que impugna, los agravios que fueron causados y las pruebas que considere pertinentes.
- II. Podrán ofrecerse como prueba, las documentales públicas y privadas, técnicas, pericial, presuncional e instrumental de actuaciones; las cuales deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos.
- III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas, si no se acompañan al escrito en el que se interponga el recurso, a menos que se trate de documentales que obren exclusivamente en poder del Instituto.
- IV. La Secretaría Ejecutiva del Instituto tendrá un plazo de tres días hábiles a partir de recibida la impugnación, para solicitar a la DESPEN que rinda informe sobre el acto recurrido y remita los elementos que tengan relación, dentro de los cinco días hábiles, posteriores a la interposición del recurso.
- V. A partir de que reciba el informe de la DESPEN, la Secretaría Ejecutiva tendrá tres días hábiles para dar vista a las y los terceros interesados con el recurso interpuesto, para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezcan pruebas.
- VI. La Secretaría Ejecutiva del Instituto podrá allegarse de cualquier otro elemento de prueba que tenga relación con la materia del recurso.

- VII.** La Secretaría Ejecutiva del Instituto acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que se hubieren ofrecido, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días hábiles y, emitirá los Acuerdos de admisión, desahogo de pruebas y cierre de instrucción, o cualquier otro que sea necesario en la substanciación de la impugnación.
- VIII.** Una vez cerrada la instrucción, la Secretaría Ejecutiva elaborará el Proyecto de Resolución, que someterá a la Junta en la siguiente sesión ordinaria.
- IX.** La Junta dictará la Resolución, y
- X.** Las Resoluciones de las impugnaciones, se notificarán a las partes interesadas en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que la Dirección Jurídica del Instituto reciba la Resolución firmada.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos del Concurso Público 2016 – 2017 de Ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.

Tercero. En lo relativo a la utilización de las Listas de Reserva de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, estas seguirán rigiéndose con las reglas previstas en los Lineamientos enunciados en el transitorio anterior, hasta en tanto concluya su vigencia.

**LINEAMIENTOS DEL CONCURSO PÚBLICO DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.**

ANEXO 1

**Tablas que contienen el número de entrevistas que aplicarán las personas
aspirantes y los cargos de las autoridades y de las y los funcionarios
encargados de realizarlas**

a) Para cargos y puestos en Juntas Locales Ejecutivas

Cargos y puestos	Número de entrevistas programadas	Autoridades y/o funcionarios (as) que realizan las entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal Ejecutivo / Vocal Ejecutiva 	Al menos cinco entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consejero Presidente del Consejo General o por el miembro de la Junta con derecho a voto que él designe; ▪ Consejeros Electorales, y ▪ Secretario Ejecutivo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal Secretario / Vocal Secretaria 	Tres entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un Consejero Electoral; ▪ Secretario Ejecutivo o por quien él designe, y ▪ Un Vocal Ejecutivo Local.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica ▪ Vocal de Organización Electoral ▪ Vocal del Registro Federal de Electores 	Tres entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante; ▪ Un Director de Área de la Dirección Ejecutiva que corresponda al área de la vacante, y ▪ Un Vocal Ejecutivo Local.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinador (a) Operativo (a) 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un Vocal Ejecutivo Local, y ▪ Un Vocal Secretario Local.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe / Jefa de Monitoreo a Módulos ▪ Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o quien él designe, y ▪ Un Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local.

Cargos y puestos	Número de entrevistas programadas	Autoridades y/o funcionarios (as) que realizan las entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 		

b) Para cargos y puestos en Juntas Distritales Ejecutivas

Cargos y puestos	Número de entrevistas programadas	Autoridades y/o funcionarios (as) que realizan las entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal Ejecutivo / Vocal Ejecutiva 	Al menos cuatro entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consejeros Electorales; ▪ Secretario Ejecutivo, o por quien él designe, y ▪ Un Vocal Ejecutivo Local.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal Secretario / Vocal Secretaria 	Tres entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un representante del Secretario Ejecutivo; ▪ Un Vocal Ejecutivo Local y ▪ Un Vocal Ejecutivo Distrital.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica ▪ Vocal de Organización Electoral ▪ Vocal del Registro Federal de Electores 	Tres entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un representante de la Dirección Ejecutiva que corresponda al área de la vacante; ▪ Un Vocal Ejecutivo Local, y ▪ Un Vocal Ejecutivo Distrital.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o por quien él designe, y ▪ Un Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local.

c) Para cargos y puestos en Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas

Cargos y puestos	Número de entrevistas programadas	Autoridades y/o funcionarios (as) que realizan las entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> Coordinaciones de Área adscritas en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electores. 	Al menos cinco entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> Consejero Presidente del Consejo General o por el miembro de la Junta con derecho a voto que él designe; Consejeros Electorales; Secretario Ejecutivo, y El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores.
<ul style="list-style-type: none"> Direcciones de Área 	Al menos cuatro entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> Consejeros Electorales; Secretario Ejecutivo, y El Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante
<ul style="list-style-type: none"> Coordinaciones de Auditoría adscritas en la Unidad Técnica de Fiscalización 	Al menos cuatro entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> Consejeros Electorales; Secretario Ejecutivo; El Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, y El Director de Área de la vacante
<ul style="list-style-type: none"> Subdirecciones de Área. 	Tres entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> Secretario Ejecutivo o por quien él designe; El Director Ejecutivo que corresponda al área de la vacante, y El Director de Área de la vacante.
<ul style="list-style-type: none"> Jefaturas de Departamento, Enlaces de Fiscalización. 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> El Director de Área de la vacante, y El Subdirector de Área, dichos funcionarios deberán ser del área correspondientes a la vacante.
<ul style="list-style-type: none"> Auditor (a) Senior en Junta Local Ejecutiva y, Auditor (a) Senior en la Unidad Técnica de Fiscalización. 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> Un Coordinador de Auditoría de la vacante o en su defecto el funcionario de nivel Director de Área que designe el Titular de la Unidad. El Subdirector de Área o en su defecto el funcionario de nivel Subdirector de Área que designe el Titular de la Unidad.

Cargos y puestos	Número de entrevistas programadas	Autoridades y/o funcionarios (as) que realizan las entrevistas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abogado (a) Resolutor (a) Senior y ▪ Abogado(a) Resolutor (a) Junior 	Dos entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Director de Área de la vacante o en su defecto el funcionario de nivel Director de Área que designe el Titular de la Unidad; ▪ El Subdirector de Área o en su defecto el funcionario de nivel Subdirector de Área que designe el Titular de la Unidad.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día también. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 18 apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden del día o bien, en su caso, si así lo desean, abrir una ronda de discusión en lo general. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidenta. _____

Muy buenas tardes a todos y a todas. _____

Quisiera pedir una ronda primero en lo general y posteriormente hacer la reserva de algunos apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Me indica de una vez cuáles, si no tiene inconveniente. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: El primer asunto es el apartado 3.1. _____

Para intervenir porque es un criterio que ya es manejado en los asuntos donde haya una sanción diferenciada de afiliación pedir que se vote aparte la reducción de la sanción. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Reservaría para discusión en lo particular los apartados 3.2, 3.5 y 3.15, pero en los términos que hemos hecho en otras ocasiones pediría que hubiera votaciones en lo particular. _____

Por lo que hace a la reiteración en los apartados 3.4, 3.6, 3.10 y 3.14, ya los tiene el Secretario del Consejo, para mayor facilidad. _____

Por lo que hace a reiteración y sanción disminuida, que implica 2 votaciones en lo particular por lo que hace al apartado 3.7 y al 3.8. _____

Por lo que hace solo a sanción disminuida el apartado 3.13, creo que con esto se atiende la preocupación que señalaba la Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Solo haría una aclaración, el apartado 3.15 lo estoy reservando porque en los criterios que hemos discutido en muchas ocasiones implica votarlo completo en contra, porque solamente se refiere un caso que está en uno de estos supuestos. _____

Si pudiéramos separar la votación respecto de los que no traen reserva, no tengo ningún problema en que solo los separáramos para que ese lo pueda votar en contra completamente porque es una discusión que hemos tenido en distintos casos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Con relación al tema de la reiteración he acompañado la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín, sin embargo, no así por lo que hace a la sanción disminuida. _____

Entonces en los apartados 3.7 y 3.8 donde se combinan ambas cosas, quisiera pedir nada más que la votación sea diferenciada para que pueda votar a favor de que, mejor dicho, con ella para la reiteración y a favor de la disminución de la sanción. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Secretario del Consejo, consulte atendiendo la petición de la Consejera Electoral Claudia Zavala si es de aprobarse la realización de una ronda de discusión en lo general. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general. _____

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. _____

Aprobada por unanimidad la ronda en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Les doy la bienvenida a quienes se integran a esta mesa del Consejo General, de parte del Poder Legislativo. _____

Consejero Presidente, quisiera aprovechar este momento para dar una explicación muy concreta de los asuntos que se van a proceder a votar como Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. _____

Son 18 Proyectos de Resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores, iniciados por la probable existencia de diversas faltas administrativas en materia electoral. _____

En el primero de ellos, en el 54 de 2016, este inició con motivo de una denuncia presentada por la Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo en contra de diversas personas, como serían Consejeros Electorales, Directores y representantes de partidos políticos, todos de ese Instituto Electoral por la supuesta realización de diversos actos y omisiones que podrían constituir violencia política por razón de género, acoso laboral y/o vulneración a los principios rectores de la materia electoral en agravio de la denunciante. _____

En el procedimiento, se propone declarar infundado porque según la propuesta del Proyecto, las conductas que se atribuyen a los denunciados, no actualizan las faltas antes mencionadas, del análisis de las pruebas aportadas en el procedimiento, se llega a la conclusión que resultan insuficientes para tener por acreditadas esas irregularidades. _____

Por otra parte, en el siguiente asunto, en el 53 de 2016, éste es promovido en contra de Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces Diputado Local en el Estado de México. En este, se propone declarar fundado el asunto en relación con la publicidad y su informe de actividades como Legislador, difundida en 3 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, METRO, ubicadas en la Ciudad de México, al haberse acreditado su exhibición en dicha Entidad. _____

Siendo que el ámbito geográfico de responsabilidad del funcionario público denunciado, correspondía exclusivamente al Estado de México. _____

Por lo que se propone sancionar a las personas morales que intervinieron, así como los sujetos encargados de la colocación de la misma. Toda vez que quedó demostrada la existencia de contratos e indicaciones directas por parte de Juan Manuel Zepeda Hernández, en el sentido de que la publicidad denunciada únicamente tenía que ser difundida en el territorio del Estado de México. _____

Asimismo, en relación con las demás infracciones esto es por la difusión de publicidad en anuncios espectaculares, bardas, una publicidad impresa y un daño en la versión electrónica del periódico El Universal, se propone declarar infundado el procedimiento, toda vez que del análisis de los elementos temporal, objetivo y personal a la luz de recientes sentencias emitidas por la Sala Superior, no quedó acreditada la promoción personalizada del mencionado Legislador, ya que la propaganda se difundió sin hacer referencia a algún Proceso Electoral, en tanto que su contenido sí se relacionaba con sus actividades realizadas como Diputado Local. _____

Por lo que hace a la publicidad difundida en medios electrónicos, se razona que también el procedimiento resulta infundado, debido a que tal como lo ha considerado el propio Tribunal Electoral, el Internet es un medio de comunicación que no puede ser restringido en su territorio atendido, destacándose que de la información proporcionada por el Congreso Local, lo manifestado por los proveedores y lo expresado por el denunciado, no se acreditó el uso de recursos públicos para la difusión de la publicidad denunciada. Por lo que hace al procedimiento 16 de 2018, de este asunto se deriva de la vista ordenada a este Consejo General por la probable omisión de la agrupación política denominada “Ciudadanos en Transformación”, de informar a esta autoridad electoral dentro del plazo de 10 días hábiles la modificación a sus documentos básicos. _____

Al respecto, el procedimiento se considera fundado y se propone imponer una amonestación pública, ya que a partir de la investigación se acreditó que esa Agrupación Política informó hasta el 31 de agosto de 2017 la modificación a la declaración de principios y a su Estatuto aprobado el 22 de julio de 2017, esto es 8 días posteriores a la fecha límite. _____

Los siguientes, 15 Proyectos restantes que se someten a consideración de este Consejo General, fueron iniciados en contra de diversos partidos políticos por la indebida afiliación o desafiliación de diversas personas a los mencionados institutos políticos. _____

En cada uno de estos asuntos en términos generales, se analizan los elementos de prueba portados por las partes en el entendido que, conforme a lo resuelto por la Sala Superior corresponde a los partidos políticos acreditar la correcta afiliación o desafiliación de los militantes. Por lo que en los casos, en que esos partidos políticos no aporten pruebas que justifiquen el vínculo en cada una de las y los ciudadanos denunciantes, se propone declarar fundando el procedimiento e imponer la sanción correspondiente. Mientras que en aquellos asuntos en lo que los partidos políticos aportan elementos de convicción que acrediten fehacientemente la afiliación partidista o bien que genere duda respecto de su culpabilidad o responsabilidad se declara infundado el procedimiento. _____

Es importante Consejero Presidente, desde mi perspectiva dar este contexto en los Procedimientos Sancionadores, sobre todo porque en la lista solo anunciamos el propio título. _____

Sería cuanto Consejero Presidente. _____

Muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente. _____

Solamente para señalar como lo pedí que nada más se votara por separado el 3.15, no lo acompañaría porque el denunciante desconoce la firma del partido político que

presenta, esto lo hemos discutido en muchas ocasiones, y la posición mayoritaria ha sido de dar como válido el documento del partido político. _____

No lo acompaño, lo votaré en contra, pero solo quería poner el elemento sobre la mesa.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Si no hay más intervenciones, si no tienen inconveniente procedamos a votar aquellos asuntos que no han sido objeto de reserva para su discusión y/o votación en lo particular y les pido que me corrijan si alguno de estos que mencionaré alguien pretende discutirlos o que sean votados específicamente. _____

El Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con los números de apartados: 3.3, 3.9, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, y 3.18. _____

Si no hay inconveniente, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respecto de estos Proyectos que he mencionado. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los apartados, 3.3, 3.9, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 y 3.18. _____

Quienes estén a favor de aprobarlos, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1343/2018, INE/CG1344/2018, INE/CG1345/2018, INE/CG1346/2018, INE/CG1347/2018, INE/CG1348/2018 e INE/CG1349/2018) Ptos. 3.3, 3.9, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 y 3.18 _____

INE/CG1343/2018

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO**

VISTA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DE ESTE INSTITUTO.

DENUNCIADO: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “CIUDADANOS EN TRANSFORMACIÓN”, ANTES “FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA FUNDADO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/16/2018 INSTAURADO EN CONTRA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “CIUDADANOS EN TRANSFORMACIÓN”, ANTES “FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”, DERIVADO DE LA OMISIÓN DE PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTARIO, ANTE ESTA AUTORIDAD, LA MODIFICACIÓN A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS, EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Agrupación Política:</i>	Agrupación Política Nacional “Ciudadanos en Transformación”, antes “Frente Humanista en Movimiento”.
<i>Comisión de Quejas y Denuncias</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

Consejo:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
INE:	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LGPP:	Ley General de Partidos Políticos
Ley de medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Reglamento sobre modificaciones:	Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE.
--------------	--

ANTECEDENTES

I. RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General, aprobó la Resolución INE/CG589/2017, mediante la cual ordenó dar vista a la Secretaría del Consejo General para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda, en relación con el Considerando SÉPTIMO.

Para mayor referencia, se transcribe en contenido del Punto Resolutivo TERCERO, en el que se ordena la vista referida:

“Tercero.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.”

II. VISTA. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la *UTCE*, el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0232/2018¹, firmado por el Director Ejecutivo de la *DEPPP*, mediante el cual, dio vista y remitió copia simple de la resolución INE/CG589/2017 y de sus anexos..

III. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO². El veinticinco de enero del año en curso, el Titular de la *UTCE* registró la queja con la clave de expediente UT/SCG/Q/CG/16/2018, reservándose acordar lo conducente respecto

¹ Visible a fojas 01 a 40 del expediente.

² Visible en las páginas 41 a 47 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

a la admisión y emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de investigación preliminar.

Por otra parte, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió diversos acuerdos en los que ordenó la práctica de diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO		
DILIGENCIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN Y OFICIO DE RESPUESTA	RESPUESTA
<p>Se le solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, remitiera la siguiente documentación:</p> <p>Copia certificada de la resolución INE/CG589/2017 y anexos que la conforman, así como de las constancias que integran el expediente sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la declaración de principios y Estatutos de la <i>Agrupación Política</i>, en cumplimiento a la</p>	<p style="text-align: center;">26-01-2018 INE/DEPPP/DE/DPPF/0429/2018³</p>	<p>Copias certificadas que integran el expediente generado con motivo de la Resolución del Consejo General, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de la <i>Agrupación Política</i>.⁴</p> <p>Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3935/2017, correspondiente a la notificación de la resolución INE/CG589/2017, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.⁵</p>

³ Visible en las páginas 58 a 59 del expediente

⁴ Visible en las páginas 60 a 314 del expediente

⁵ Visible en la página 100 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO		
DILIGENCIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN Y OFICIO DE RESPUESTA	RESPUESTA
<p>Resolución INE/CG111/2017.</p> <p>Si la resolución INE/CG589/2017, fue notificada a la <i>Agrupación Política</i>.</p> <p>De ser el caso, remitir copia certificada de las constancias de notificación correspondientes.</p>		
<p>Se solicitó a la DIRECTORA DE INSTRUCCIÓN RECURSAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL., a fin de que, en breve plazo, informara si la resolución INE/CG589/2017, aprobada por el Consejo General de este Instituto, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, fue materia de impugnación por parte de la <i>Agrupación Política</i>, particularmente en lo relacionado con la</p>	<p style="text-align: center;">26-01-2018 INE/DJ/DIR/SS/2059/2018⁶</p>	<p>De la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Medios de Impugnación, así como de los archivos que obran en esa Dirección, a la fecha no se tiene registro de algún medio de impugnación interpuesto por parte de la <i>Agrupación Política</i> en contra de la Resolución INE/CG589/2017.</p> <p>Remite copia simple del acuse de notificación del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3935/2017, mediante el cual se notificó la referida resolución a la <i>Agrupación Política</i>.</p>

⁶ Visible en la página 56 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO		
DILIGENCIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN Y OFICIO DE RESPUESTA	RESPUESTA
entrega extemporánea de las modificaciones a sus documentos básicos.		

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO⁷. Mediante acuerdo de uno de febrero de la presente anualidad, se ordenó admitir por la vía ordinaria el procedimiento sancionador citado al rubro, y emplazar a la *Agrupación Política*.

Así también, se ordenaron las siguientes diligencias:

ACUERDO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO		
DILIGENCIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN Y OFICIO DE RESPUESTA	RESPUESTA
<p>Se solicitó a la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE INSTITUTO, informara:</p> <p>Si la <i>Agrupación Política</i> reportó algún ingreso y/o egreso como parte de sus actividades para la consecución de ese fin. En cuyo caso, se solicitó proporcionara copia de las constancias que estimara pertinentes para dar soporte a su respuesta.</p>	<p>02-02-2018 INE/UTF/DA/14551/18⁸</p>	<p>Mediante acuerdo INE/CG111/2017, de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de mayo siguiente, se le otorgó el registro a la <i>Agrupación Política</i>, al ser de nueva creación, a la fecha del requerimiento se encuentra imposibilitada materialmente para proporcionar la información requerida, toda vez que en términos de lo previsto en el artículo 22, numerales 7 y 8 de la Ley General de Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Nacionales con registro deben presentar al Instituto un informe anual del ejercicio 2017 sobre el origen y destino de los recursos</p>

⁷ Visible en las páginas 315 a 320 del expediente

⁸ Visible en las páginas 340-341 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

ACUERDO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO		
DILIGENCIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN Y OFICIO DE RESPUESTA	RESPUESTA
		que reciban por cualquier modalidad, y este informe deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. <u>Por lo que al siete de febrero del año en curso, aún no contaba con dicha información, en el entendido que las Agrupaciones Políticas Nacionales, no habían presentado su informe anual de ingresos y gastos para el ejercicio 2017.</u>
Se solicitó a la Agrupación Política , proporcionara copia del acuse del informe anual sobre el origen y destino de los recurso que recibió por cualquier modalidad, a que se refiere el numeral 22, párrafo 7 de la Ley General de Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio anterior, o en su caso, cualquier información de la que se pueda obtener su capacidad económica.	12 -02-2018 Escrito⁹	Señalan que a la fecha en que son requeridos de la información, aún se encuentran en tiempo para rendir su Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibió durante el ejercicio 2017.

V. ALEGATOS.¹⁰ El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la denunciada, a efecto de que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera.

⁹ Visible en la página 343-346 del expediente

¹⁰ Visible en las páginas 373-376 del expediente

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución correspondiente.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas y Denuncias*, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, y del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE.

En el caso, la irregularidad objeto del presente procedimiento sancionador consiste en el presunto incumplimiento de la *Agrupación Política*, a lo previsto en el artículo 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, en virtud de la omisión de presentar en tiempo a la *DEPPP* la documentación relativa a la modificación a sus documentos básicos conforme al texto aprobado en Asamblea Nacional, celebrada el veintidós de julio de dos mil diecisiete.

Lo anterior, toda vez que, el plazo de diez días hábiles¹¹, establecido en el artículo 8 del Reglamento de referencia, corrió del siete al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y la entrega de la información correspondiente a la modificación de los

¹¹ En términos de la fecha de notificación de la resolución INE/CG589/2017 visible a foja 100 del expediente y de lo establecido en el Considerando 7 de dicha determinación, visible a foja 4 del expediente.

principios y Estatutos de la *Agrupación Política*, presuntamente se realizó de forma extemporánea.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Planteamiento del caso.

En términos de lo resuelto por este Consejo General mediante Resolución INE/CG589/2017, la materia del presente procedimiento sancionador consiste en la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en relación con lo previsto en el diverso 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, derivado de que supuestamente la *Agrupación Política* presentó fuera del plazo de diez días hábiles previsto en el referido precepto normativo, diversa documentación relacionada con la modificación a sus documentos básicos.

2. Excepciones y Defensas

En la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, la parte denunciada en el presente procedimiento, refirió en síntesis lo siguiente:

- En todo momento ha entregado y cumplido con la información requerida, lo que se corrobora con el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2387/2017, en el que si bien, se hizo referencia al escrito de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, lo cierto es que, en ese momento no se señaló que la documentación se hubiere entregado de forma extemporánea.
- Mediante oficio FHM/APN/003/2017, remitió las constancias atinentes, el cual fue remitido en tiempo y forma, acorde con la reorganización del cómputo de plazos que operó con motivo de los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México, derivado del fenómeno sísmológico del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
- Señala que, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2688/2017 en términos de lo dispuesto en el numeral 12 del *Reglamento sobre modificaciones*,

solicitó nueva documentación para continuar con el análisis respectivo, al cual dio cumplimiento mediante el similar FHM/APN/004/2017.

- La autoridad electoral, es la que les requirió la modificación del nombre de la *Agrupación Política*, lo cual llevaron a cabo al contestar el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2387/2017.
- Se determine la falta de responsabilidad de la *Agrupación Política* en los hechos denunciados, la cual, en ningún momento fue dolosa, ni jamás tuvo intención de dañar el orden público, se le dispense de la falta cometida, al no actuar de mala fe.

3. Fijación de la Litis.

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la *Agrupación Política* presentó la documentación en la cual se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos básicos dentro del plazo de diez días hábiles conforme a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y b), de la *LGPE*, en relación con lo previsto en el diverso 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, así como si, en su caso, existe alguna justificación razonable para que dicha agrupación política haya incumplido con el plazo reglamentario antes referido.

4. Marco normativo

En el artículo 20, primer párrafo, de la *LGPP* se establece que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

Por su parte en el artículo 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, se establece lo siguiente:

*“1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del presente Reglamento, para la modificación de documentos básicos, la comunicación **deberá presentarse** con todos sus anexos al Consejo General, a través del Secretario*

Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el Partido Político o Agrupación Política.

2. La Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección Ejecutiva el escrito y sus anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas.”

El anterior precepto se relaciona con el artículo 5 del mismo Reglamento, en el que se indica lo siguiente:

1. Toda comunicación emitida en cumplimiento a lo dispuesto en el Código, así como en el artículo anterior, deberá presentarse por escrito y estar acompañada de los documentos originales o certificados por notario público o por el órgano partidario facultado estatutariamente que permitan a la autoridad electoral verificar que se hayan cumplido las disposiciones previstas en los Estatutos del Partido Político o Agrupación Política Nacional de que se trate.

2. La comunicación que sea presentada ante instancia distinta a las indicadas en el presente Reglamento, deberá ser remitida de inmediato a la instancia competente y a partir de la recepción en ésta última, comenzarán a computarse los plazos respectivos.

Asimismo, en el artículo 35 de la *LGPP* se establece que son documentos básicos de los partidos políticos: la declaración de principios; el programa de acción, y los Estatutos, lo cual es también aplicable a las agrupaciones políticas, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 1, inciso j) del mismo ordenamiento, en éste se regula también el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.

Por tanto, al no existir disposición expresa respecto a lo que debe entenderse por los documentos básicos de las agrupaciones políticas resulta aplicable el referido artículo 35 de dicha Ley.

En consecuencia, tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas se encuentran obligadas a presentar a este Consejo General las modificaciones a su declaración de principios y de sus Estatutos, en un plazo que no podrá exceder de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente.

5. Acreditación de los hechos.

A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia de la vista, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el expediente.

A) Se tiene por acreditado que el **dieciocho de abril de dos mil diecisiete**, mediante Resolución INE/CG111/2017, este *Consejo General*, otorgó a la asociación denominada “*Ciudadanos en Transformación*”, antes “*Frente Humanista en Movimiento*”, el registró como Agrupación Política Nacional, asimismo se ordenó que **llevara a cabo las reformas a su declaración de principios y a sus Estatutos**, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, lo anterior de conformidad a lo siguiente:

“RESOLUCIÓN

PRIMERO. *Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política Nacional, a la asociación denominada "Frente Humanista en Movimiento", bajo la denominación "Frente Humanista en Movimiento" la cual se encuentra condicionada a la modificación que deberá realizar en los términos del considerando 29 de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) primera parte de la LGPP.*

SEGUNDO. *Comuníquese a la Agrupación Política Nacional "Frente Humanista en Movimiento", que deberá realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de "EL INSTRUCTIVO" en términos de lo señalado en los considerandos 27 y 29 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a Documentos*

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.

TERCERO. *Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Frente Humanista en Movimiento", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.*

CUARTO. *La Agrupación Política Nacional deberá notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y artidos Políticos las integraciones definitivas de sus órganos directivos nacional y, en su caso, estatales, su domicilio social y número telefónico a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido por el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Nacional Electoral.*

Énfasis añadido

B) Se tiene por acreditado que el **dieciséis de agosto del dos mil diecisiete**, la *Agrupación Política*, celebró su Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas reformas a su declaración de principios y Estatutos, en cumplimiento a lo ordenado, por el *Consejo General*, en la Resolución INE/CG111/2017.

C) Se tiene por acreditado que el **treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete**, Javier Víctor López Celis, en su carácter de Secretario General de la *Agrupación Política*, **presentó escrito mediante el cual informó al INE sobre la modificación a los Estatutos de dicha Agrupación Política.**

Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba:

- ❖ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0429/2018, firmado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, mediante el cual, remite entre otros documentos:

a) **Copia certificada de la CONVOCATORIA A LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL “FRENTE HUMANISTA EN MOVIMIENTO”¹²**, firmada por los integrantes del Pleno de Dirigentes de ese ente político.

b) **Copia certificada del ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL** de la Agrupación Política Nacional “*Ciudadanos en Transformación*”, antes “*Frente Humanista en Movimiento*”¹³, de veintidós de julio de dos mil diecisiete, en la que se aprobaron, entre otras propuestas, el cambio de denominación y las reformas a los Estatutos de dicha Agrupación Política Nacional, en cumplimiento a la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG111/2017.

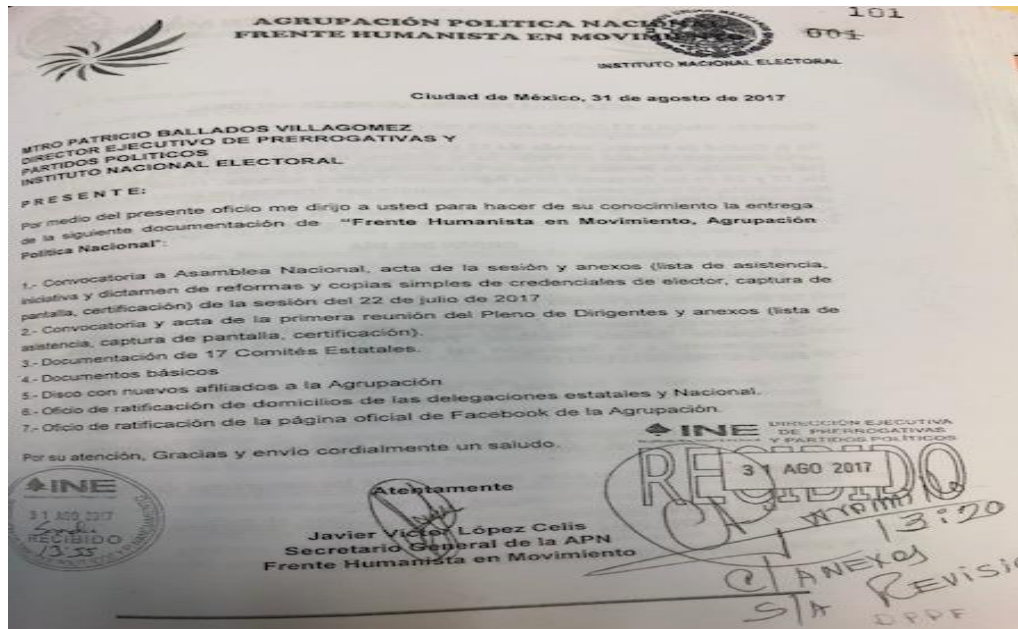
c) **Copia certificada del escrito firmado por Javier Víctor López Celis, en su carácter de Secretario General de la Agrupación Política¹⁴**, mediante el cual, hizo del conocimiento de esta autoridad la modificación a su declaración de principios y a los Estatutos, encontrándose plasmado el sello de recepción por parte de la *DEPPP*, mismo que corresponde a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

d) **Imagen del sello de recepción por parte de la DEPPP, de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.**

¹² Visible a fojas 153-159 del expediente

¹³ Visible en las páginas 101-109 del expediente

¹⁴ Visible en las páginas 101 del expediente



Cabe señalar que los documentos referidos tienen el carácter de documentales públicas, al estar certificados por una autoridad competente y no haber sido cuestionados respecto a su autenticidad y precisión, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del *Reglamento de Quejas*.

6. Análisis del caso concreto

Este Consejo General considera **FUNDADO** el presente procedimiento administrativo sancionador, toda vez que la *Agrupación Política* fue omisa en presentar dentro del plazo reglamentario los escritos sobre la modificación de sus Estatutos al *INE*, sin que exista una razón que justifique la entrega tardía de dicha documentación, tal como se demuestra a continuación.

En términos de lo previsto en el artículo 8, en relación con el 5 del *Reglamento sobre modificaciones*, tanto los partidos políticos, como las agrupaciones políticas, tienen la obligación de presentar a este *Consejo General*, mediante el Secretario Ejecutivo, las modificaciones a sus documentos básicos dentro del plazo de **diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente**.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 35 de la *LGPP* son documentos básicos la declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos.

Por tanto, al constituir la declaración de principios y los Estatutos, documentos básicos, y ser obligación de las agrupaciones políticas informar al Instituto sobre sus modificaciones, en la especie se actualiza el incumplimiento a lo ordenado en el artículo 8 del reglamento antes precisado.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la *Agrupación Política* celebró su “*Primera Asamblea Nacional de la Agrupación Política*” el **veintidós de julio de dos mil diecisiete** y que en ella aprobó la modificación a su declaración de principios y a los Estatutos, por lo que de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, debió informar a este Instituto de dichas modificaciones entre el **siete y el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete**, con el objeto de cumplir con el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones, sin embargo, como quedó acreditado, fue hasta el treinta y uno de agosto del año de referencia, informó a este Instituto; es decir, ocho días posteriores a la fecha límite.

Lo anterior, como se puede observar en el siguiente esquema:

Agosto 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1	2	2	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/16/2018

Sesión	Plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Días hábiles 04/08/2018	07 Ago	08 Ago	09 Ago	10 Ago	11 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago	18 Ago

Al respecto, es preciso aclarar que si bien, en principio, el plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto sobre la modificación de los mismos, se advierte que debía correr del veinticuatro de julio al cuatro de agosto de dos mil diecisiete, de conformidad con lo previsto en el “*Aviso relativo al primer periodo vacacional del personal del Instituto Electoral para el año 2017*”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de mayo de dos mil diecisiete, **los días hábiles comprendidos entre el veinticuatro de julio y el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, no fueron tomados en cuenta para el cómputo del plazo.**

Así, como ha sido expresado gráficamente, el plazo para que la *Agrupación Política* que nos ocupa presentara las adecuaciones a sus documentos básicos comprendió los días siete al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.

Entonces, es posible deducir que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, y en congruencia con los elementos probatorios que obran en el expediente, se advierte que la conducta objeto de estudio queda evidenciada, por lo que, en consecuencia, debe sancionarse a la *Agrupación Política*.

No debe perderse de vista que las consideraciones que aquí se exponen coinciden con lo establecido en la Resolución INE/CG589/2017, en la cual se destaca que la *Agrupación Política* presentó la documentación relacionada con la modificación a la declaración de principios y a los Estatutos, fuera del plazo de diez días hábiles, incumpliendo con lo previsto en el artículo 8, del reglamento antes citado.

Adicionalmente, es menester precisar que, si bien el Presidente de la *Agrupación Política* refiere a esta autoridad, que cumplió con las obligaciones impuestas en la normatividad de la materia y entregó al Instituto Nacional Electoral la información

requerida mediante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2387/2017, en el que se aludió al escrito de treinta y uno de agosto de esa anualidad, en ningún momento se hizo referencia a que hubieren realizado la entrega extemporánea de documentación alguna; aunado a que, este Instituto, fue quién les requirió la modificación de sus documentos básicos, mediante la Resolución INE/CG/111/2017, mismas que fueron aprobadas el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Motivo por el cual, solicita la dispensa de la falta cometida y se determine la falta de responsabilidad de la *Agrupación Política* en los hechos denunciados, dado que, en ningún momento han actuado de mala fe y en los requerimientos subsecuentes a la presentación de su escrito de treinta y uno de agosto del año en curso, no les fue informado de extemporaneidad alguna en la presentación de la documentación correspondiente.

Sin embargo, tales circunstancias, no son razón suficiente que justifique el incumplimiento de comunicar a esta autoridad, las modificaciones de documentos básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente, situación que dejó de observar la *Agrupación Política* denunciada.

Finalmente, cabe referir que dicha agrupación, no impugnó la Resolución INE/CG589/2017.

En consecuencia, queda acreditada la conducta imputada a la *Agrupación Política* al haberse ubicado en el supuesto establecido en el artículo 444, numeral 1, incisos a) y b) de la *LG/PE*, en relación con lo previsto en el artículo 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, en los términos que han sido expuestos, por tanto, se declara **FUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario iniciado en su contra.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por la Agrupación Política, es necesario determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración para ello, en primer lugar, los criterios establecidos en el artículo 444, párrafo 1, inciso b), de la *LG/PE*; y en segundo, el catálogo de sanciones que

se pueden imponer a las agrupaciones políticas infractoras, con arreglo a lo dispuesto en el diverso 456, párrafo 1, inciso b), del mismo cuerpo normativo.

En relación con ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta.

I.- Así, para **calificar** debidamente la falta, se debe valorar:

- Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídica infringidas
- Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas)
- Singularidad y pluralidad de la falta
- Circunstancias de tiempo, modo y lugar
- Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)
- Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas
- Condiciones externas y los medios de ejecución

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

A. Tipo de infracción

TIPO DE INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA	DISPOSICIONES JURÍDICAS INFRINGIDAS
La falta acreditada es de omisión, cometida por la denunciada al no presentar dentro del plazo concedido por la ley, las modificaciones a sus documentos básicos.	Omisión de entregar dentro del plazo reglamentario la modificación a sus documentos básicos.	Artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registros de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales, así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

El bien jurídico tutelado en las normas transgredidas consiste en garantizar la certeza y legalidad en la rendición de cuentas, principios con los que deben conducirse las agrupaciones políticas nacionales, lo que se cumple a través de la entrega en tiempo y forma de las modificaciones a los documentos básicos acordadas a través de sus respectivos órganos competentes.

C. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso se acreditó la comisión de una sola infracción, consistente en la vulneración a lo establecido en el artículo 8 del *Reglamento sobre modificaciones*, en virtud de que la *Agrupación Política* entregó fuera del plazo reglamentario la modificación de sus Estatutos.

D. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- **Modo.** La irregularidad atribuible a la *Agrupación Política*, consiste en no haber entregado a este Instituto en el plazo previsto en la norma la documentación relacionada con la modificación a sus documentos básicos.
- **Tiempo.** De conformidad con las constancias que obran en autos, se tiene por acreditado que el incumplimiento de los artículos señalados, ocurrió entre el siete y el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, plazo de diez días hábiles que tenía el hoy denunciado para la entrega de la modificación a los documentos básicos de la *Agrupación Política*, dado que fue hasta el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que se hicieron del conocimiento de esta autoridad dichas modificaciones.

- **Lugar.** La irregularidad atribuible a la *Agrupación Política*, se presentó en la Ciudad de México, toda vez que el domicilio de ésta se encuentra en dicha entidad federativa, por lo que la documentación debió presentarse en las instalaciones del *INE*.

E. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)

Toda vez que la *Agrupación Política* informó a la autoridad sobre la modificación a sus documentos básicos, aun fuera del plazo reglamentario, existió intención de cumplir, por tanto, se considera que no existió dolo.

F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y sistemática, por parte de la denunciada, toda vez que, ésta se presentó en un solo momento.

G. Condiciones externas

La conducta infractora desplegada por la *Agrupación Política*, tuvo verificativo el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, con motivo de la omisión de presentar dentro del plazo reglamentario, las modificaciones a sus Estatutos, sin que ello tuviera impacto en un Proceso Electoral en curso.

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y **a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

- Calificación de la gravedad de la infracción
- Reincidencia
- El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción
- Sanción a imponer e impacto en las actividades del infractor

A. La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la omisión que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración que la *Agrupación Política*:

- ❖ El día veintidós de julio de dos mil diecisiete, celebró sesión de su *PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL*, en la cual, acordó modificar sus documentos básicos.
- ❖ El treinta y uno de agosto de ese mismo año, presentó ante la *DEPPP* la información correspondiente a esa asamblea en la que se acordaron y aprobaron modificaciones a sus documentos básicos y por tanto, se situó en la hipótesis de incumplimiento al plazo establecido para ello en el *Reglamento sobre modificaciones*.
- ❖ Infringió una disposición específica de nivel reglamentario.
- ❖ La infracción no es reiterada ni sistemática.

Por lo anterior y ante la conjunción de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVÍSIMA**.

B. Reincidencia

En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por cuanto hace a la denunciada, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se le haya sancionado por faltas como la que ha quedado debidamente acreditada.

C. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron elementos que permitan establecer que la denunciada, obtuviera beneficios derivados de la omisión de presentar, dentro del plazo establecido para ello, las modificaciones realizadas a sus documentos básicos.

D. Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la *LGIPE* confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice una falta similar.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, se encuentran especificadas en el artículo 456, numeral 1, inciso b), de la *LGIPE*.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente,

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso b) la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a los ciudadanos, se encuentran las siguientes:

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

(...)

b) Respecto de las agrupaciones políticas:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta, y

III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses.

En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como **LEVÍSIMA**, con base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es que a juicio de este órgano electoral **se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la LGIPE**, consistente en una **amonestación pública**, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, pues las sanciones previstas en las fracción II y III de dicho numeral, consistentes en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el otrora Distrito Federal o la suspensión no menor a seis meses o cancelación de su registro, resultarían excesivas y desproporcionadas con la falta acreditada.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En el caso, en razón de que la sanción que se impone consiste en una **amonestación pública**, no resulta necesario el análisis de las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en las actividades del mismo.

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las determinaciones INE/CG166/2017 e INE/CG167/2017, de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves UT/SCG/Q/CG/8/2017 y UT/SCG/Q/CG/9/2017, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se sanciona.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución¹⁵, se precisa que

¹⁵ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **"TUTELA**

la presente determinación es impugnabile mediante el recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **FUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario iniciado en contra de la *Agrupación Política*, en términos del Considerando SEGUNDO de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se impone una **AMONESTACIÓN PÚBLICA** a la **Agrupación Política Nacional denominada “Ciudadanos en Transformación”**, en los términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 42 de la *Ley de Medios*.

CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a la **Agrupación Política Nacional denominada “Ciudadanos en Transformación”**, una vez que la misma haya causado estado.

Notifíquese. Personalmente a la Agrupación Política Nacional “Ciudadanos en Transformación”, antes “Frente Humanista en Movimiento”; y por **estrados** a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la *LGPE*; 28, 29 y 30 del *Reglamento de Quejas*.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”

INE/CG1344/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018
DENUNCIANTES: JOSÉ EFRÉN JIMÉNEZ
SÁMANO Y OTRA
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR JOSÉ EFRÉN JIMÉNEZ SÁMANO Y GLORIA BADILLO LARA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

GLOSARIO	
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>PT</i>	Partido del Trabajo
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIAS. El veintiséis de marzo del año en curso, José Efrén Jiménez Sámano¹ y Gloria Badillo Lara², presentaron denuncia en contra del *PT*, por la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin.

II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.³ Mediante acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, la UTCE determinó integrar el expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018.

¹ Visible a fojas 2 a 6 del expediente.

² Visible a fojas 9 a 12 del expediente.

³ Visible a fojas 13 a 20 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

En dicho acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la realización de los siguientes requerimientos:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/4563/2018 16-04-2018 ⁴	18/04/2018 ⁵
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4564/2018 16-04-2018 ⁶	19/04/2018 Correo institucional ⁷

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de nueve mayo del año en curso⁸, se requirió al PT, a fin de integrar correctamente el expediente al rubro indicado:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/6756/2018 9-05-2018 ⁹	14/05/2018 ¹⁰

IV. EMPLAZAMIENTO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho,¹¹ la *UTCE* ordenó emplazar al *PT*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del presente asunto, proveído que fue notificado conforme a lo siguiente:

⁴ Visible a foja 29 del expediente.

⁵ Visible a fojas 33 a 41 del expediente.

⁶ Visible a foja 32 del expediente.

⁷ Visible a fojas 44 a 45 del expediente.

⁸ Visible a fojas 60 a 63 del expediente.

⁹ Visible a foja 67 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 71 A 80 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 82 a 87 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PT INE-UT/8306/2018 ¹² 30/05/2018	Citatorio: ¹³ 30 de mayo de 2018. Cédula: ¹⁴ 31 de mayo de 2018. Plazo: 01 al 07 de junio de 2018.	07/junio/2018 ¹⁵

V. VISTA PARA ALEGATOS.¹⁶ Por acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera; vista que fue desahogada conforme al cuadro siguiente:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PT INE-UT/9947/2018 22-06-2018 ¹⁷	Citatorio: 21 de junio de 2018 ¹⁸ . Cédula: 22 de junio de 2018 ¹⁹ . Plazo: 25 al 29 de junio de 2018.	29 de junio de 2018 ²⁰

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	José Efrén Jiménez Sámano INE/JDE/03/VS/567/18 ²¹	Cédula: 25 de junio de 2018 ²² Plazo: 26 de junio al 2 de julio de 2018.	Sin respuesta
2	Gloria Badillo Lara INE/GTO/JDE01-VS/1516/18 ²³	Cédula: 22 de junio de 2018 ²⁴ Plazo: 25 al 29 de junio de 2018	Sin respuesta

¹² Visible a foja 93 del expediente.

¹³ Visible a fojas 94 a 100 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 101 a 104 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 114 a 120 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 121 a 124 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 131 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 134 a 138 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 132 a 133 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 149 a 155 del expediente.

²¹ Visible a foja 145 del expediente.

²² Visible a fojas 134 y 135 del expediente.

²³ Visible a foja 160 del expediente.

²⁴ Visible a fojas 161 a 164 del expediente.

IV. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión de Quejas.

V. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT* en perjuicio de José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PT*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁵ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

²⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) y n); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de José Efrén Jiménez Sámano se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que el registro o afiliación del quejoso al PT se realizó el nueve de julio de dos mil ocho, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,²⁶ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del procedimiento que nos ocupa respecto de José Efrén Jiménez Sámano, al margen que las faltas pudieran haber sido advertida por el quejoso y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales adjetivas.

²⁶ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

No obstante, para el caso de Gloria Badillo Lara, la normatividad aplicable será la LGIPE, toda vez que su afiliación se realizó el siete de abril de dos mil quince, es decir durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

La controversia en el presente procedimiento, se constriñe a determinar si el Partido denunciado violó el derecho de libertad de afiliación de José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos y agrupaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de

²⁷ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho de asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

²⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los

partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del Partido del Trabajo.

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente cometida por el PT, consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las condiciones en que fueron incorporados los ciudadanos denunciante a su padrón de afiliados.

Estatutos del PT²⁹

Artículo 14. *Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.*

Artículo 17. *Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y; colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus derechos son:*
(...)

Artículo 22. *Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son:*

- a) *Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano.*
- b) *Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus Documentos Básicos.*
- c) *No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del Trabajo.*
- d) *Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.*
- e) *Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, **Demarcación territorial**, Estatal, de la **Ciudad de México** y Nacional en su caso.*
- f) *Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.*
- g) *En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.*

²⁹ Consultables en <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pt.docx>

Artículo 134.

(...)

Toda persona, militante, afiliado y simpatizante tiene derecho a acceder a la información partidaria siempre y cuando no se encuentre clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con las normas legales aplicables.

(...).

Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos del partido, la correspondiente a las estrategias políticas, el contenido de todo tipo de encuestas ordenadas por el partido, así como la referente a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, afiliados, simpatizantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la materia.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución Política* de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos. En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir

libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Podrán ser afiliados del PT quienes presenten una solicitud de afiliación de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, ante la instancia partidaria correspondiente.
- La información personal, privada o familiar de sus militantes, afiliados, simpatizantes del PT será considerada reservada.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como

militante o afiliado del *PT*, por regla general debe suscribir el documento formal de afiliación.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacios para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos les corresponde demostrar que las personas que lo integran fue derivado de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁰ donde estableció que la presunción de inocencia

³⁰ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³² y como estándar probatorio.³³

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su

³¹. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³² Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³³ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la LGSMIME, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la

carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por José Efrén Jimenez Sámano y Gloria Badillo Lara, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al haber sido incorporados al *PT*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por parte de dicho partido político para sustentar la indebida afiliación

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciantes, información derivada de la investigación preliminar implementada, así como de las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PT
José Efrén Jiménez Sámano	26 de marzo de 2018 ³⁵	Afiliado ³⁶ 09/07/2008 en Morelos	<p>Oficio REP-PT-INE-PVG-083/2018³⁷</p> <p>Informó que José Efrén Jiménez Sámano causó baja del Padrón de Afiliados del Partido del Trabajo y remite copia certificada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, de la solicitud de desafiliación, que refiere fue suscrita por el ciudadano, de dieciocho de abril del año en curso.</p> <p>Oficio REP-PT-INE-PVG-131/2018³⁸</p> <p>Informó que después de una búsqueda exhaustiva en el Padrón de Afiliados del Partido del Trabajo no fue posible encontrar la documentación soporte de la afiliación de José Efrén Jiménez Sámano.</p> <p>Se remite copia certificada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo de: 1) Solicitud de desafiliación del quejoso, de dieciocho de abril del año en curso, 2) Solicitud interna de baja del ciudadano del padrón de afiliados, 3) escrito de catorce de mayo de dos mil dieciocho en el que se informa que fue procesada la solicitud de baja, y 4) escrito de catorce de mayo del año en curso, dirigido al denunciante, mediante el cual se le informa que fue dado de baja.</p> <p>Oficios REP-PT-INE-PVG-173/2018 y REP-PT-INE-PVG-173/2018³⁹ los cuales son de contenido similar y en los que se señala lo siguiente:</p> <p>Que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el denunciante solicitó su baja del padrón de Afiliados del Partido del Trabajo,</p>

³⁵ Visible a fojas 2 y 3 del expediente.

³⁶ Visible a foja 45 del expediente.

³⁷ Visible a fojas 33 y 34 del expediente.

³⁸ Visible a fojas 71 y 72 del expediente.

³⁹ Visible a fojas 114 a 120 y 149 a 155 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PT
			<p>reconociendo en dicho escrito su voluntad, de manera libre, sin coacción ni violencia a afiliarse al PT desde 2008 y sin que obre en autos alguna referencia desvirtuando dicha documental.</p> <p>Señala que no se actualiza la vulneración a la normativa electoral toda vez que el ciudadano reconoció su afiliación al Partido del Trabajo desde el nueve de julio de dos mil ocho y su respectiva solicitud de baja el dieciocho de abril de dos mil dieciocho en pleno uso de sus derechos consagrados en el artículo 41 de la Constitución, 40 de la Ley General de Partidos Políticos y 15 de los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <p>1.- No existe controversia respecto de que el denunciante fue incluido en el padrón de afiliados del PT, pues la DEPPP informó que el ciudadano se encuentra afiliado desde el 09/07/2008 y de la documentación aportada por el PT se advierte que el denunciante fue afiliado en dicho año.</p> <p>2.- El ciudadano negó haberse afiliado a ese partido político y presentó escrito de queja el 26 de marzo del año en curso.</p> <p>3.- El PT aportó copia certificada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo de escrito signado por José Efrén Jiménez Sámano, dirigido tanto al PT en el estado de Morelos como al <i>INE</i>, en el que esencialmente señala lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p><i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en el año 2008, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p> <p><i>Por convenir a mis intereses personales, renuncio a la militancia y/o afiliación del Partido del Trabajo, solicitando darme de baja del padrón de afiliados del PT.</i></p> <p>(...)</p> <p>4.- Con las constancias aportadas por el partido denunciado, se dio vista al quejoso para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que las documentales aportadas por el partido hubieran sido objetadas o controvertidas por el quejoso al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes.</p>			

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PT
<p>De lo anterior, debe concluirse que, si bien el quejoso presentó escrito de queja por afiliación indebida, también presentó escrito dirigido al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, por lo que debe prevalecer este último.</p> <p>Lo anterior, es así pues en caso de que el ciudadano hubiera tenido inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, y por el contrario, con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción. Documento que, en ningún momento fue objetado o controvertido por el quejoso.</p> <p>Por tanto, se arriba a la conclusión de que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PT
Gloria Badillo Lara	26 de marzo de 2018 ⁴⁰	Afiliada ⁴¹ 07/04/2015 en Guanajuato	Oficio REP-PT-INE-PVG-083/2018⁴² Informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos del Sistema Nacional de Afiliación del partido del Trabajo, no se pudo encontrar documentación soporte de su afiliación.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que,</p> <p>1.- No existe controversia respecto de que la denunciante fue incluida en el padrón de afiliados del PT, pues la DEPPP informó que se encuentra afiliada desde el 07/04/2015 y el partido no controvertió tal situación.</p> <p>2.- Dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político</p> <p>3.- El PT no aportó elementos para acreditar que la afiliación de dicha ciudadana fue voluntaria.</p> <p>Por tanto, se arriba a la conclusión de que se trata de una afiliación indebida cometida en agravio de Gloria Badillo Lara y que para su comisión, se hizo un uso no autorizado de sus datos personales.</p>			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del citado

⁴⁰ Visible a fojas 9 y 10 del expediente.

⁴¹ Visible a foja 45 del expediente.

⁴² Visible a fojas 33 y 34 del expediente.

Reglamento, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO.

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, lo que significa que una situación antijurídica electoral, debe estar objetivamente demostrada por medio de pruebas.

Posteriormente, es menester verificar que tal situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico, —partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral— es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales; por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputabilidad o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, estará en aptitud de imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte conducente de las disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionadas con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no están condicionadas al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con

elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Como se precisó con anterioridad, en principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del COFIPE, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la LGIPE.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del partido político denunciado.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde al PT, en tanto que el dicho de los quejosos consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser militantes, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de lo precisado en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos denunciados se encontraron, en algún momento, como afiliados del PT.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

Así, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadana que fue afiliada indebidamente al PT.

Respecto de Gloria Badillo Lara, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó que dicha ciudadana fue afiliada al PT el siete de abril de dos mil quince, situación que no fue controvertida por el partido denunciado.

Ahora bien, como quedó precisado con anterioridad la carga de la prueba corresponde al PT y por ende es quien tuvo que aportar las pruebas suficientes para demostrar que Gloria Badillo Lara fue afiliada voluntariamente al PT.

No obstante, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte documento alguno que demuestre, siquiera de forma indiciaria que la afiliación de la citada ciudadana al PT fue resultado de su voluntad libre e individual, en la cual *muto propio* expresara su consentimiento y, por ende, proporcionara sus datos personales a fin de ser afiliada a dicho instituto político.

Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el propio partido denunciado mediante oficio REP-PT-INE-PVG-083/2018, en el que el representante propietario del Partido del Trabajo, señaló lo siguiente:

En el caso de la C. Gloria Badillo Lara, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos del Sistema Nacional de Afiliación del Partido del Trabajo, no se pudo encontrar documentación soporte de su afiliación a nuestro instituto político nacional.

En mérito de lo anterior y al no haber aportado documento alguno que permita acreditar el acto volitivo de Gloria Badillo Lara para agremiarse a dicho instituto

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

político se considera que la afiliación de dicha ciudadana, fue producto de una acción ilegal por parte del PT.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Gloria Badillo Lara, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de la misma para permanecer agremiada a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁴³

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁴⁴

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PT*, ente político que se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo,

⁴³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁴⁴ De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

*documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁴⁵ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, en el caso de Gloria Badillo Lara, el *PT* no demostró que la afiliación se hubiera realizado a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento en el que se hiciera constar que dicha ciudadana hubiese dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hubiese entregado datos personales para tal fin, los cuales se estiman necesarios para procesar su afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales establecidos para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como afiliada al *PT* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre y voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa, lo cual ya quedó

⁴⁵ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁴⁶ y SUP-RAP-137/2018,⁴⁷ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco y era un elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de la sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de la quejosa, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a ese partido político, por lo que se debe ordenar al PT para que, en el supuesto de que la quejosa continúe en su padrón de afiliados **sin mayor trámite**, cancele su registro como militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde consideró necesario comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el

⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Apartado B. Ciudadano afiliado debidamente al PT.

De las constancias que integran el procedimiento, se advierte que mediante oficio REP-PR-INE-PVG-083/2018, el representante propietario del PT remitió, copia certificada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional de dicho instituto político, del escrito signado por José Efrén Jiménez Sámano, mediante el cual en esencia señala lo siguiente:

(...)

Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en el año 2008, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.

Por convenir a mis intereses personales, renuncio a la militancia y/o afiliación del Partido del Trabajo, solicitando darme de baja del padrón de afiliados del PT.

(...)

Mediante proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad electoral ordenó dar vista a dicho ciudadano con las constancias aportadas por el PT, para que en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera.

Al respecto, es necesario precisar que la notificación del proveído de referencia se llevó a cabo de manera personal con el propio denunciante, tal y como se advierte de las constancias relativas a la ejecución de dicha diligencia, visibles a fojas 145 a 148 de autos.

No obstante, lo anterior, de la documentación que obra en el sumario que se resuelve, no existe documento alguno que demuestre que José Efrén Jiménez Sámano se haya opuesto de forma alguna al documento exhibido por el PT, del cual es posible advertir la voluntad del ciudadano para afiliarse al partido denunciado.

Por tanto, al no haberse acreditado plenamente la responsabilidad el PT, este órgano colegiado considera pertinente declarar **infundado** el presente procedimiento respecto de José Efrén Jiménez Sámano.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG1255/2018, al resolver el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017.

Ahora bien, más allá de lo infundado del procedimiento, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a ese partido político, por lo que se debe ordenar al PT para que, en el supuesto de que el quejoso continúe en su padrón de afiliados **sin mayor trámite**, cancele su registro como militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde consideró necesario comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del PT, en el caso detallado en el considerando que antecede, de conformidad con lo previsto tanto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, como en el diverso 458, párrafo 5, de la LGIPE, lo procedente es determinar la sanción

que corresponda a las faltas acreditadas, para lo cual se han de considerar las circunstancias en que se actualizó la contravención a la norma administrativa, como es lo relativo a la gravedad de la falta, la responsabilidad del partido político denunciado en la vulneración al bien jurídico tutelado por las normas incumplidas, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que, para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PT	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la violación a la libre afiliación y el uso no autorizado de los datos personales de Gloria Badillo Lara, por parte del PT.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u)) y e) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el PT incluyó en su padrón de afiliados a Gloria Badillo Lara, sin demostrar que para incorporarla medio su voluntad de inscribirse a dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, consiste en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados y permanecer como tales.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación se usaron los datos personales de la promovente sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la actora al padrón del PT, sin que para ello mediara la voluntad de la hoy denunciante, de ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PT transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tenía obligación de observar y que tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de una ciudadana, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación, en el caso que el PT incluyó en su padrón de militantes a la hoy quejosa, sin demostrar su consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PT, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la **Constitución**; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del **COFIPE** y 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la **LGIPE** en relación con los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la **LGPP**, vinculados a su vez con lo previsto en los numerales 113, 114 y 116, de la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**; 110, 111, 113 y 117, de la **LFTAIP**, al incluir en su padrón de afiliados a la ciudadana denunciante, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de esta de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontró incluida, habiendo hecho uso sin consentimiento de Gloria Badillo Lara de sus datos e información personal para llevar a cabo su afiliación.

Así pues, se tiene que el **número de afiliaciones indebidas** en el presente caso es de **una**.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, la afiliación denunciada se dió en la temporalidad que se plasma en el cuadro siguiente:

No.	Nombre	Afiliación	Fecha de afiliación
1	Gloria Badillo Lara	SÍ	07/04/2015

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que las faltas atribuidas al PT se cometieron en el estado de Guanajuato, que es el lugar de residencia de la quejosa.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del PT, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) del *COFIPE*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- *El PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- *El PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el

artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el 25, párrafo primero, inciso a) de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de la voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el 25, párrafo primero, incisos a) y e) de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa aduce que no solicitó su registro o incorporación como militante del PT.
- 2) Quedo acreditado que la quejosa aparece en el padrón de militantes del PT.
- 3) El PT no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) El partido denunciado no demostró, ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aún indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PT, se cometió al afiliar indebidamente a Gloria Badillo Lara, sin demostrar el acto volitivo de esta para ingresar a su padrón de militantes o de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁴⁸

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace *al PT*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por los hechos materia de la presente denuncia.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

⁴⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación, pues se comprobó que el PT afilió a **UNA** ciudadana, sin demostrar que contaba con la documentación soporte correspondiente, de que medió la voluntad de la misma para pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de la denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar parte del padrón de afiliados del PT.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.

- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del PT.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el PT como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁴⁹

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por

⁴⁹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el PT se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realice una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al PT, es decir, **UNA CIUDADANA**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PT, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de la ciudadana al PT, debe considerar las condiciones socioeconómicas del denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración que la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁵⁰ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, como se precisó con anterioridad se impone al PT una multa equivalente a **seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la CDMX al momento de la comisión de la conducta**, por la afiliación indebida de Gloria Badillo Lara, así como el uso indebido de sus datos personales.

En virtud de que la ciudadana denunciante fue afiliada en 2015, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de la afiliación y, una vez obtenido el monto deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismo que al ser relacionado con la fecha de afiliación, de la ciudadana indebidamente afiliada arroja lo siguiente:

⁵⁰ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Salario Mínimo	Sanción a imponer
1	Gloria Badillo Lara	07/04/2015	\$70.10 ⁵¹	\$45,004.2
TOTAL				\$45,004.2 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. - De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2015), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

⁵¹http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377576&fecha=29/12/2014

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

En el presenta caso, la ciudadana fue afiliada en 2015, por lo que se debe dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2015, multiplicado por \$70.10) equivalente a **\$45,004.2 (Cuarenta y cinco mil cuatro 2/100 M.N)** entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). De lo anterior se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a **558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a **45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres 8/100 M.N)**

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al PT constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del PT, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *el PT* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del 2018
<i>PT</i>	\$ 19,737,029.00

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE OCTUBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PT</i>	\$19,737,029.00	\$9,868,514.00	\$9,868,515.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PT*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, representa el siguiente porcentaje:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual ⁵²
2015	\$45, 003.81	1	%0.45

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *el PT* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

⁵² Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁵³, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al PT, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, se cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁵⁴ de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

⁵³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁵⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,^[1] se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la *LGSMIME*, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de la denunciante.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del Partido del Trabajo, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de José Efrén Jiménez Sámano, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO, Numeral 5, Apartado B de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del Partido del Trabajo, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de Gloria Badillo Lara, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO, Numeral 5, Apartado A, de la presente Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al Partido del Trabajo, **una multa por la indebida afiliación de Gloria Badillo Lara**, conforme al monto que se indica a continuación:

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JEJS/JL/MOR/84/2018

No.	Quejoso	Sanción a imponer
1	Gloria Badillo Lara.	558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres 8/100 M.N) [Ciudadana afiliada en 2015]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido del Trabajo, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se vincula al PT para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la *LGSMIME*, así como a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de la denunciante.

Notifíquese personalmente a José Efrén Jiménez Sámano y Gloria Badillo Lara.

Así como al Partido del Trabajo por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

INE/CG1345/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: **FREDDY ALI SINTA QUINO**
DENUNCIADO: **PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FREDDY ALI SINTA QUINO, A TRAVÉS DE LA CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL Y USO, SIN CONSENTIMIENTO, DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Comisión</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

<i>IFE</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PAN o denunciado,</i>	Partido de Acción Nacional
<i>Quejoso o denunciante</i>	Freddy Ali Sinta Quino
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
<i>UMA</i>	Unidad de Medida y Actualización

R E S U L T A N D O

I. DENUNCIA.¹ El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, Freddy Ali Sinta Quino interpuso escrito de queja en contra del *PAN*, por presuntamente haber sido afiliado sin su consentimiento a dicho partido político, haciendo uso indebido de sus datos personales para tal fin, ocurso que se recibió en la *UTCE* el veintidós de marzo del mismo año.

II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo² de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la *UTCE* determinó, entre otras cuestiones, registrar la queja de mérito bajo el número de expediente citado al rubro; admitirla a trámite en la vía ordinaria;

¹ Visible a fojas 01 a 13 del expediente

² Visible a fojas 14 a 21 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

reservar el emplazamiento hasta en tanto se contara con mayores elementos para proveer al respecto; y requerir a la *DEPPP* y al *PAN* a efecto de que informaran si el quejoso fue afiliado a dicho Instituto político y, en su caso, señalara la fecha de afiliación.

III. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. Mediante correo electrónico³ de diecinueve de abril del año en curso, el Titular de la *DEPPP*, dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que el hoy quejoso se **encuentra afiliado al partido político denunciado, desde el veintisiete de agosto de dos mil doce.**

IV. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el *PAN*⁴, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General, manifestó que el quejoso fue afiliado de manera voluntaria a dicho Instituto político, el veintisiete de agosto de dos mil doce, así mismo señaló que el primero de septiembre de dos mil diecisiete realizó un trámite de actualización de datos, refrendando con ello su consentimiento para seguir afiliado a dicho Instituto Político.

V. EMPLAZAMIENTO.⁵ Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndose traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos

Oficio	Fecha de notificación	Contestación al emplazamiento	Sentido de la respuesta del denunciado
INE-UT/7236/2018 ⁶	21/05/ 2018. ⁷ Notificación por estrados	Oficio RPAN2-0328/2018 ⁸	En lo medular, el denunciado adujo que Freddy Ali Sinta Quino se encuentra registrado como militante del Partido

³ Visible a fojas 32 a 33 del expediente

⁴ Visible a fojas 36 a 40 del expediente

⁵ Visible a fojas 50 a 57 del expediente.

⁶ Visible a foja 65 del expediente

⁷ Visible a foja 66 a 79 del expediente.

⁸ Visible a foja 82 a 88 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Oficio	Fecha de notificación	Contestación al emplazamiento	Sentido de la respuesta del denunciado
	Se entendió con personal de la representación		<p>Acción Nacional desde el veintisiete de agosto de dos mil doce, refrendado su militancia de manera voluntaria en el trámite de actualización de datos el primero de septiembre de dos mil diecisiete, precisando que no cuenta con la constancia de afiliación de inicio de militancia, debido a que mediante Acuerdo de nueve de agosto de dos mil trece la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Medios determinó la destrucción del archivo muerto de la Dirección del Registro Nacional de Miembros.</p> <p>Respecto al trámite de actualización de datos agregó copia certificada del formato correspondiente, mediante el cual, adujo que Freddy Ali Sinta Quino, con su firma, manifestó libremente su voluntad de continuar afiliado al <i>PAN</i>, precisando que el procedimiento de afiliación a dicho Instituto Político consta de varias etapas que garantizan los derechos del ciudadano para afiliarse libremente, así como procedimientos para reafirmar la voluntad de seguir afiliado, proporcionando sus datos actualizados y registrando sus huellas digitales, entre otros.</p>

VI. ALEGATOS⁹. Mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, la *UTCE*, puso los autos a la vista de las partes, para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que se diligenció en los siguientes términos:

⁹ Visible a fojas 89 a la 92 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Oficio	Sujeto notificado	Fecha de notificación	Fecha de contestación	Alegaciones
INE-UT/8660/2018 ¹⁰	PAN	08/06/2018. ¹¹ Notificación por estrados Se entendió con la secretaria de la representación.	13/06/2018 ¹²	El denunciado reprodujo lo manifestado en la contestación del emplazamiento.
INE/JD19-ver/0942/2018 ¹³	Freddy Ali Sinta Quino	08/06/2018 ¹⁴	08/06/2018 ¹⁵	Manifestó, esencialmente, que ratifica el escrito inicial de queja en contra del PAN, debido a que jamás expreso su consentimiento para ello, desconociendo la forma en que el partido denunciado obtuvo su firma, ya que en ningún momento acudió ante dicho partido para solicitar su afiliación.

VII. A CUERDO DE VISTA. En acatamiento al principio de contradicción y mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, la *UTCE* dio vista al quejoso para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicho auto, manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la cédula de afiliación aportadas por el denunciado.

VIII. ALEGATOS Y DESAHOGO DE VISTA. Mediante escrito de ocho de junio del año en curso el quejoso, Freddy Ali Sinta Quino, formulo alegatos, en los que manifestó, esencialmente, que ratifica el escrito inicial de queja en contra del *PAN*, debido a que jamás expreso su consentimiento para ello, desconociendo la forma en que el partido denunciado obtuvo su firma, ya que en ningún momento acudió ante dicho partido para solicitar su afiliación.

¹⁰ Visible a foja 97 del expediente

¹¹ Visible a fojas 98 a 107 del expediente

¹² Visible a fojas 108 a 110 del expediente

¹³ Visible a foja 124 del expediente

¹⁴ Visible a fojas 122 a 127 del expediente

¹⁵ Visible a foja 128 del expediente

IX. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de Freddy Ali Sinta Quino.

Ahora bien, conforme al artículo 38, párrafo 1, incisos a), del *COFIPE* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

INE vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley, asimismo en términos del inciso e), del mismo ordenamiento los Partidos Políticos deben cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus Estatutos para la postulación de candidatos;

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u), del mismo ordenamiento jurídico, cuyo contenido es congruente con los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, cuya infracción es sancionable por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PAN*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de la quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*, y los diversos 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta falta (indebida afiliación, haciendo uso indebido de los datos personales), atribuidas al *PAN*, se cometieron el veintisiete de agosto de dos mil doce, es decir, de manera previa a la entrada en vigor de la *LGIPE* y la *Ley de Partidos*; consecuentemente, el caso que nos ocupa debe ser resuelto a la luz del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales del catorce de enero de dos mil ocho.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de la queja presentada por Freddy Ali Sinta Quino en contra del *PAN*, debido, en esencia, a que según su dicho el partido político lo afilió sin que éste prestara su consentimiento para ello, haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales.

I. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

En lo medular, el denunciado adujo que Freddy Ali Sinta Quino se encuentra registrado como militante del Partido Acción Nacional desde el veintisiete de agosto de dos mil doce, refrendado su militancia de manera voluntaria en el trámite de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

actualización de datos, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, precisando que no cuenta con la constancia de afiliación de inicio de militancia debido a que mediante Acuerdo de nueve de agosto de dos mil trece la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Medios determinó la destrucción del archivo muerto de la Dirección del Registro Nacional de Miembros.

En este sentido, respecto al trámite de actualización de datos agregó copia certificada del formato correspondiente mediante el cual, con su firma, Freddy Ali Sinta Quino manifestó libremente su voluntad de continuar afiliado al *PAN*, precisando que el procedimiento de afiliación a dicho Instituto Político consta de varias etapas a saber: i) requisitado de la solicitud de afiliación; ii) la realización de un curso-capacitación; y iii) la entrega de formatos de manera personal en las oficinas del partido, con lo cual se garantizan los derechos del ciudadano para afiliarse libremente; asimismo, el *PAN* cuenta con mecanismos adicionales al procedimiento de afiliación, consistente en aplicación de programas específicos de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas dactilares, con el propósito de que los militantes manifiesten su derecho de seguir afiliados al Partido Acción Nacional, reafirmen su voluntad de seguir afiliados, proporcionando sus datos actualizados y registrando sus huellas digitales, entre otros, lo que en el caso ocurrió con el hoy quejoso.

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto.

II. LITIS

Para fijar con precisión la Litis, resulta necesario establecer los planteamientos contradictorios asumidos por las partes.

Así, por un lado, el quejoso sostuvo que fue afiliado de manera indebida al partido denunciado, haciendo para ello uso indebido de sus datos e información personal, desconociendo la forma en como obtuvieron su firma para afiliarlo, mientras que el *PAN* adujo, esencialmente, que no infringió la normatividad electoral en modo

alguno, ya que la afiliación del hoy quejoso a dicho instituto político, estuvo precedida de su manifestación de voluntad libre y personal, refrendando, inclusive, su voluntad para continuar como militante.

Bajo este esquema, la controversia en el presente procedimiento, se constriñe a determinar si el partido denunciado afilió o no sin su consentimiento a Freddy Ali Sinta Quino, haciendo uso indebido de sus datos y documentos personales, hechos que, de quedar acreditados, serían infractores de lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u), 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*, cuyo contenido retoman los diversos 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e), y u); y 29, de la *Ley de Partidos*.

En este sentido, esta autoridad electoral estima que para resolver adecuadamente la cuestión que antecede, en un orden lógico, se debe establecer primero la existencia del hecho denunciado, ya que este constituye la base objetiva de la responsabilidad administrativa que se discute; y enseguida, una vez constado el hecho infractor, establecer si este debe ser atribuido o no al denunciado, pues sólo de ese modo se le podrá responsabilizar por la comisión de la falta e imponer la sanción que en su caso corresponda.

De esta manera, previo a la decisión del caso, resulta pertinente puntualizar algunas consideraciones en torno al marco normativo y teórico que habrá de sustentar la resolución que nos ocupa.

III. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

En torno al derecho de asociación en materia político-electoral, la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental, o ante la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo 2, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En ese tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

mexicanos para asociarse libre e individualmente **a los partidos y agrupaciones políticas**; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a ellos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que preveía desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

seis de abril del citado año— como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y el de afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos político electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce a las personas, hace más de siete décadas, el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

- 1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*
 - a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, **y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación,** y*
 - b. El **nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado** o huella digital en caso de no saber escribir.*

Énfasis añadido

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba, en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir **sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.**

Asimismo, del *COFIPE* de catorce de enero de dos mil ocho, en lo que interesa, se desprende lo siguiente:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:

a) **Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;**

[...]

e) **Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus**

Estatutos para la postulación de candidatos;

[...]

u) **Las demás que establezca este Código.**

Artículo 341

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código:

a) Los partidos políticos;

Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

[...]

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión

parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Esta tendencia ha sido continuada por la normatividad electoral vigente, esto es, la LGIPE y la Ley de Partidos, mismas que en lo atinente al caso, son del tenor siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

[...]

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Ley General de Partidos Políticos

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

[...]

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y

Artículo 3.

[...]

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

[...]

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

- a) **Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando** la libre participación política de los demás partidos políticos y **los derechos de los ciudadanos;**

[...]

- e) **Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus Estatutos para la postulación de candidatos;**

[...]

- u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 29.

1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus Estatutos la forma de **garantizar la protección de los datos personales** de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y **oposición** de éstos.

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 2.

Del Glosario

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

[...]

XVII. Datos personales: **la información concerniente a una persona física, identificada o identificable**, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, **domicilio**, número telefónico, patrimonio, ideología y **opiniones políticas**, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;

Artículo 12.

De la información confidencial

1. Como información confidencial se considerará:

[...]

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en términos de las disposiciones legales aplicables, y

Artículo 70.

De las obligaciones

1. Los partidos políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias nacionales, estatales, municipales y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales, estarán obligados a:

[...]

III. Asegurar el buen manejo de la información que se encuentre bajo su resguardo, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Énfasis añadido

Por otro lado, conviene puntualizar que la *LGIFE*, en su artículo 25, párrafo 1, inciso c), establece que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, el Consejo General del entonces *IFE*, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley **para la conservación de su registro**, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, constituyen el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas **en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales**, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, **pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos, que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.**

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de éstos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, de instrumentos internacionales, del COFIPE, de la *LEGIPE* y de la *Ley de Partidos*, cuyas disposiciones son de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

No obstante, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, **previo a la incorporación del individuo a sus filas**, acató las disposiciones

de la Constitución y la Ley, exhibiendo los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante, para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado, desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

A efecto de tener claridad acerca del procedimiento que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la normativa interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PAN*

TÍTULO SEGUNDO ***DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO ACCIÓN*** ***NACIONAL***

CAPÍTULO PRIMERO ***DE LOS MILITANTES***

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, individual, libre, pacífica y voluntaria, manifiesten su deseo de afiliarse, asuman como propios los

principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.
(...)

Artículo 9

*1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. **La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.***

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
(...)

*d) **Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral;** en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular. En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido;*
(...)

*3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. **En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.***
(...)

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

IV. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, **suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación**, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, ordinariamente, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAN*), **tienen la carga de conservar y resguardar**, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en todo caso, probar que sus afiliados cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c) del *COFIPE*, en relación con el 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder, y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realizó de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar cuidadosamente los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de registro partidario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas para ese fin, y que los titulares de los datos personales, le proporcionaron los mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**, el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como *regla probatoria* y como *estándar probatorio*.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— conduce a delimitar quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refirió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró, en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene, en principio, la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera **idónea** demuestra que una persona fue afiliada voluntariamente a un partido político, **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en el procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido político, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que **si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante**, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales **que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo**; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que **de manera insuperable** el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, o se haya destruido, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio, sin que sea óbice para ello, como acontece en el concreto, que la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Medios del *PAN* determinó la destrucción del archivo muerto de la Dirección del Registro Nacional de Miembros.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas, compatibles con la inocencia del acusado.

V. HECHOS ACREDITADOS.

Como antes quedo dicho, la declaración de la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico de diecinueve de abril del año en curso recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Titular de la *DEPPP*, mediante

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

el cual se informó a la *UTCE* que el hoy quejoso se encuentra afiliado al *PAN*, así como la fecha en que ello aconteció.

- b) Documental privada**, consistente en copia simple de la certificación del formato de actualización de militantes 2017, a nombre de Freddy Ali Sinta Quino, expedida por el Secretario General del Comité Nacional de dicho instituto, de la cual se advierte que el primero de septiembre de dos mil diecisiete, el hoy quejoso refrendó su voluntad de mantenerse afiliado al *PAN*.
- c) Documentales privadas**, consistentes en las copia simple del acuerdo CVRNM/2013/033, mediante el cual se autorizó al Director del Registro Nacional de Miembros del *PAN* para que proceda a la destrucción de su archivo muerto, así como diversas impresiones de imágenes en las que aparentemente se materializo dicha destrucción.
- d) Documental privada**, consistente en el escrito mediante el cual Freddy Ali Sinta Quino formulo alegatos, manifestando, medularmente que ratifica su escrito inicial de queja en contra del *PAN*, debido a que jamás expresó su consentimiento para tal efecto, además que desconoce la forma en como el partido denunciado obtuvo su firma, ya que en ningún momento acudió ante dicho Partido Político a solicitar su afiliación.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, mientras que las documentales privadas referidas en los incisos b) y d) sólo harán prueba plena cuando, al ser valoradas por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Asimismo, por cuanto hace al medio de prueba identificado como inciso c), esta autoridad estima que resulta impertinente por no relacionarse con la litis planteada, ya que, en todo caso, los hechos que se pretenden acreditar con dicha probanza no relevan al denunciado su obligación de preservar la documentación probatoria para justificar las afiliaciones de sus militantes.

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente:

Freddy Ali Sinta Quino,		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Presentó inconformidad con la afiliación al <i>PAN</i></p> <p>Asimismo, formulo alegatos, manifestando, medularmente que ratifica su escrito inicial de queja en contra del <i>PAN</i>, debido a que jamás expreso su consentimiento para tal efecto, además que desconoce la forma en como el partido denunciado obtuvo su firma, ya que en ningún momento acudió a dicho Partido Político a solicitar su afiliación</p>	<p>Informó que el denunciante se encuentra afiliado al <i>PAN</i>, con fecha de alta de veintisiete de agosto de dos mil doce</p>	<p>En lo medular, adujo que Freddy Ali Sinta Quino se encuentra registrado como militante del Partido Acción Nacional desde el veintisiete de agosto de dos mil doce, refrendado su militancia de manera voluntaria en el trámite de actualización de datos el primero de septiembre de dos mil diecisiete.</p> <p>Que no cuenta con la constancia de afiliación de inicio de militancia debido a que mediante Acuerdo de nueve de agosto de dos mil trece la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Medios determinó la destrucción del archivo muerto de la Dirección del Registro Nacional de Miembros.</p> <p>Respecto al trámite de actualización de datos, el partido denunciado, agregó copia simple de la certificación certificada del formato correspondiente, mediante el cual Freddy Ali Sinta Quino manifestó,</p>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Freddy Ali Sinta Quino,		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		con su firma, libremente su voluntad de continuar afiliado al <i>PAN</i> , precisando que el procedimiento de afiliación a dicho Instituto Político consta de varias etapas que garantizan los derechos del ciudadano para afiliarse libremente, así como procedimientos para reafirmar la voluntad de seguir afiliado proporcionando sus datos actualizados y registrando sus huellas digitales, entre otros.
Observaciones		
<p>Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el veintisiete de agosto de dos mil doce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues aun cuando el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que, si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Freddy Alí Sinta Quino de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita uno de septiembre de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la afiliación del quejoso, realizada el veintisiete de agosto de dos mil doce sucedió de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación del quejoso en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil doce —que fue desconocida por el quejoso en su escrito inicial— haya sido voluntaria.</p>		
Conclusión		
<p>A partir de los razonamientos previos, en el sentido de que de las documentales aportadas por el partido político no puede desprenderse elemento alguno de que la afiliación controvertida por Freddy Alí Sinta Quino en su escrito inicial de queja, haya cumplido con la formalidad de obtener el consentimiento del denunciante, por lo que debe concluirse que la afiliación que se denuncia se realizó en contravención a la norma electoral.</p>		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP* y lo reconocido por el *PAN*, el hoy quejoso fue afiliado al citado partido político el veintisiete de agosto de dos mil doce.
- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados del hoy quejoso es un hecho reconocido por las partes, y constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye **la legalidad o ilegalidad de la afiliación** —sucedida en el año dos mil doce—, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de su titular o de la ausencia de este.

En relación con ello, cabe destacar que, si bien dicho partido aportó un documento en el que supuestamente aparece la manifestación de Freddy Alí Sinta Quino, de mantenerse afiliado a ese instituto, lo cierto es que esa constancia resulta insuficiente, por sí misma, para acreditar una militancia voluntaria desde el veintisiete de agosto de dos mil doce, hecho que constituye la base de la controversia a resolver.

En otras palabras, la afiliación indebida que, respecto de Freddy Alí Sinta Quino se atribuye al *PAN*, corresponde al año dos mil doce, por lo que, el documento en el que se asienta que el quejoso actualiza sus datos como militante de ese partido, y que corresponde al año dos mil diecisiete, en modo alguno desvirtúa la imputación.

Por otra parte, esta autoridad no desconoce que el partido político denunciado manifestó que sus órganos internos acordaron la destrucción del “archivo muerto” en el año 2013, pero ello tampoco puede constituir una excluyente de responsabilidad para el *PAN*.

En efecto, como antes se sostuvo, el partido político tiene la obligación de resguardar constancias atinentes para demostrar que los afiliados a ese ente político se incorporaron a sus filas, previa manifestación libre de voluntad.

En el caso, el partido político denunciado no exhibe constancia alguna de la que se pueda corroborar, de manera fehaciente, que dentro del “archivo muerto”, cuya destrucción se ordenó por ese instituto político en 2013, se hayan incluido, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa.

En síntesis, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el PAN vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto del ciudadano Freddy Alí Sinta Quino, afiliándolo de manera indebida el quince de junio de dos mil quince.

VI. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por la parte quejosa, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LG/PE*, se pueden advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de concluir la responsabilidad del denunciado y, en consecuencia, imponer alguna sanción.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo); y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), como condición *sine qua non* para dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Sólo a partir de la demostración de estos dos elementos, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de dichas constancias corresponde a la quejosa, pues de otra forma, deberá prevalecer la presunción de inocencia que asiste al partido político.

En este sentido, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo reconocido por el *PAN* y de la constancia de afiliación aportada por el denunciado, que el quejoso fue afiliado al partido político denunciado el veintisiete de agosto de dos mil doce, por lo que a continuación se debe dilucidar si dicha afiliación fue o no voluntaria, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, será procedente imponer una sanción, entre las que establece el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*.

En efecto, la carga de la prueba para demostrar que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del hoy quejoso, corresponde al *PAN*, y no al quejoso acreditar que no dio su consentimiento para ser afiliado a dicho partido, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba. Lo anterior, visto que la defensa establecida por el Partido Político estriba

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación.

De este modo, al haberse demostrado la existencia de la afiliación del quejoso al partido denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dicha afiliación fue consentida por el denunciante y por ende resulta legalmente válida, o si, por el contrario, tal afiliación adolece de manifestación de la voluntad libre, individual, pacífica y personal de Freddy Ali Sinta Quino, y en consecuencia debe reputarse ilícita.

Así, para sostener la legalidad de la afiliación cuestionada, el *PAN* ofreció como medio de prueba copia simple de la certificación del formato de actualización de militantes 2017, a nombre del hoy quejoso, medio de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlo tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, **estima insuficiente para acreditar la licitud de la afiliación controvertida**, ya que, aun en el caso más favorable al partido político, con ella se genera un leve indicio respecto a que el quejoso consintió en permanecer afiliado al *PAN*, pero en modo alguno prueba fehacientemente las excepciones opuestas por el denunciado, es decir, no demuestra que la afiliación de Freddy Ali Sinta Quino, el veintisiete de agosto de dos mil doce sucedió voluntariamente.

De esta forma, aun cuando el denunciado manifestó que no contaba con documentales para justificar que la afiliación del quejoso fue lícita desde el dos mil doce, debido a la destrucción autorizada de su archivo muerto, tal circunstancia en modo alguno puede relevarlo de la carga de acreditar sus afirmaciones, máxime cuando la destrucción de las constancias idóneas y suficientes para demostrar el alegato en el que estriba su defensa —que la afiliación debatida fue voluntaria— fue realizada de manera deliberada por el denunciado, de modo que no puede valerse de dicho error en el presente procedimiento.

En efecto, conforme al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*, si el *PAN* alegó que la afiliación de Freddy Ali Sinta Quino —realizada el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

veintisiete de agosto de dos mil doce— fue voluntaria, **tenía la carga procesal de acreditarlo con medios de prueba idóneos y suficientes, lo cual no sucedió.**

De este modo, si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, es incuestionable la obligación de los partidos políticos de preservar dicha libertad, y en su caso, contar con los elementos necesarios para demostrar el consentimiento del ciudadano para ser afiliado al instituto político que corresponda, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no cuenta con la documentación que justifique su dicho, especialmente si dicha imposibilidad es atribuible al propio partido político.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no conservara la constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación, especialmente cuando de manera deliberada la desechó, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

En el mismo tenor, es de recalcar el deber del Partido Político de conservar y resguardar, diligentemente, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, criterio que ha sido sostenido por este Consejo General —resolución INE/CG444/2018— y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia SUP-RAP-138/2018 y su acumulado SUP-RAP-144/2018, emitida, el trece de junio del año en curso.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que el denunciante manifestó no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que se amerite.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es declarar **FUNDADO** el presente procedimiento y, en consecuencia, establecer la sanción correspondiente.

Lo anterior es congruente con el criterio asumido por este órgano superior de dirección, en la Resolución identificada con la clave INE/CG444/2018, misma que fue confirmada por la Sala Superior mediante sentencia recaída al expediente SUP-RAP-138/2018 y su acumulado SUP-RAP-144/2018.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del *PAN*, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de un ciudadano.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; y 5, 38, incisos a), e) y u), 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a) del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
disposiciones de la <i>Constitución</i> y de la <i>LGIPE</i> .		<i>COFIPE</i> , disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos 442, párrafo 1, inciso a) 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; y 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la Ley de Partidos.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales del promovente sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual constituye un elemento accesorio e insoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales y la normativa interna del

partido político, esta situación no conlleva pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de militantes al hoy quejoso, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, la irregularidad cometida por el *PAN* consistió en incorporar a Freddy Alf Sinta Quino como su militante, sin haber obtenido de manera previa su consentimiento para tal efecto, así como para el uso de sus datos personales.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, la afiliación indebida aconteció el veintisiete de agosto de dos mil doce.
- c) Lugar.** Los hechos sucedieron en el estado de Veracruz.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El *PAN*, como cualquier otro partido político, está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 de la *Ley de Partidos*.
- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia político-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución* y 2, párrafo 1, incisos a y b, y 25, incisos a y e, de la *Ley de Partidos*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) El *quejoso* aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que el *quejoso* apareció en el padrón de militantes del PAN.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación del *quejoso* se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria del denunciante.

- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación del quejoso fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliarse indebidamente al quejoso, sin demostrar al acto volitivo de éste tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia**, un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución firme, vuelve a cometer una falta de similar naturaleza, de manera que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra constancia de alguna resolución en que se haya sancionado al *PAN* por la indebida afiliación de un ciudadano, **antes del veintisiete de agosto de dos mil doce**.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta, tales como el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado, la singularidad o pluralidad de la falta, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, entre otras.

En este sentido, para la graduación de la falta, este *Consejo General* toma en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Freddy Alí Sinta Quino, pues se comprobó que el *PAN* lo afilió sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió su voluntad de pertenecer o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación del *quejoso*, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

En atención a los elementos objetivos precisados, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el partido político como **grave ordinaria**.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía¹⁶.

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

¹⁶ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE* no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político denunciado, se justifica la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/109/2018, resuelto por este órgano máximo de dirección el veintitrés de agosto del año en curso, en los que se sancionó a distintos partidos políticos con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que se juzga.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar, caso por caso, la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,¹⁷ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

¹⁷ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 456 de la *LGIFE*, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para la Ciudad de México, correspondiente al año dos mil doce, que corresponde a la anualidad en que fue cometida la infracción; lo anterior, en virtud de que el denunciante fue afiliado el veintisiete de agosto de la referida anualidad.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que, al ser relacionado con la fecha de afiliación, para obtener la sanción que corresponde, arroja lo siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Salario Mínimo	Sanción a imponer
1	Freddy Alí Sinta Quino	27 de agosto de 2012	\$62.33	\$40,015.86

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar a UMA's el monto referido en el cuadro anterior, para lo cual es necesario dividirlo entre el valor actual de la UMA, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Esto es, el monto en pesos \$40,015.86 (cuarenta mil quince pesos 86/100 M.N.), se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), de lo cual se obtiene que la sanción a

imponer es una multa equivalente a **496.47 (cuatrocientas noventa y seis punto cuarenta y siete)** UMA's, calculado al segundo decimal.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que las mismas resultan eficaces y proporcionales.

D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN

Se estima que, respecto de la infracción cometida por el *PAN*, aun cuando causó un perjuicio al bien jurídico que el legislador buscó proteger, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PAN*, no es gravosa, en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, el siguiente porcentaje:

<i>Partido político</i>	<i>Año</i>	<i>Monto de la sanción¹⁸</i>	<i>% de la ministración mensual</i>
<i>PAN</i>	<i>2015</i>	<i>\$40,015.86</i>	<i>0.06%</i>

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año, periodo en el que, conforme con la información proporcionada por la *DEPPP*, a través del oficio *INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018*, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho para el *PAN* —una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones—, es de \$68'076,540 (sesenta y ocho millones, setenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

De esta forma, la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dado el financiamiento que el *PAN* recibió del *INE* para sostener sus actividades ordinarias en el mes de octubre de dos mil dieciocho, la cantidad que se impone como sanción al partido citado resulta mínima y, por tanto, es de concluir que en modo alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar

¹⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009¹⁹, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE.

Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto de que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución con efectos**, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *Unidad Técnica*, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.

Como se señaló previamente, toda vez que ha quedado acreditado que el quejoso fue afiliado al *PAN* sin su consentimiento, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político sancionado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, cancele el registro del quejoso como su militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, para que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a eliminar del registro de afiliados respectivo al Freddy Alfí Sinta Quino.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

²⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/FASQ/JL/VER/90/2018

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PAN*, por la indebida afiliación y utilización de datos personales de **Freddy Alí Sinta Quino** en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa consistente en 496.47 (cuatrocientas noventa y seis punto cuarenta y siete) UMA's**, calculado al segundo decimal, equivalente a **\$40,015.86 (cuarenta mil quince pesos 86/100 M.N.)**.

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta al ***PAN***, será deducido de la siguiente ministración mensual del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **CUARTO**.

CUARTO. Se ordena al ***PAN***, que, de ser el caso que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, cancele el registro correspondiente y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOTIFÍQUESE: Personalmente a Freddy Ali Sinta Quino y al *PAN*, a través de su representante propietario ante el Consejo General; **por oficio** al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Político; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

INE/CG1346/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018
DENUNCIANTES: ALDAHIR BAUTISTA
VALDERRAMA Y OTRO
DENUNCIADO: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ALDAHIR BAUTISTA VALDERRAMA Y ADA NELLI ROBLERO GARCÍA, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. Denuncias. En las fechas que se a continuación se citan, se recibieron dos escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida al *PVEM* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin.

No.	Ciudadano	Fecha de presentación
1	Aldahir Bautista Valderrama	16/marzo/2018 ¹
2	Ada Nelli Roblero García	10/abril/2018 ²

¹ Visible a páginas 03 a 04 del expediente

² Visible a página 13 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

2. Registro, admisión y reserva del emplazamiento.³ Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las denuncias planteadas, quedando registradas como un solo **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018**.

Asimismo, se admitió a trámite, y se reservó el emplazamiento de las partes, hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinó la pertinencia de requerimiento de información, tanto al titular de la *DEPPP* así como del *PVEM*, para conocer el estatus de afiliación de los ciudadanos quejosos.

3. Diligencias de investigación. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, los días veinticuatro y treinta de abril, siete y diecinueve de junio, todos de dos mil dieciocho, se emitieron acuerdo en los se requirió a la *DEPPP* y a *PVEM*, proporcionar información relacionada con la presunta afiliación de los dos denunciados, los cuales fueron desahogados como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
24/04/2018 ⁴	<i>DEPPP</i>	INE-UT/4890/2018 ⁵	25/04/2018 Correo institucional ⁶
	<i>PVEM</i>	INE-UT/4891/2018 ⁷	26/04/2018 Oficio PVEM-INE-257/2018 ⁸
30/04/2018 ⁹	<i>PVEM</i>	INE-UT/6032/2018 ¹⁰	08/05/2018 Oficio PVEM-INE-273/2018 ¹¹

³ Visibles a páginas 15 a 23 del expediente

⁴ Visible a páginas 15 a 23 del expediente.

⁵ Visibles a página 24 del expediente.

⁶ Visible a páginas 30 a 31 del expediente.

⁷ Visible a página 25 del expediente.

⁸ Visible a página 32 del expediente

⁹ Visible a páginas 34 a 37 del expediente.

¹⁰ Visible a página 42 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 46 a 57 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
07/06/2018 ¹²	PVEM	INE-UT/8779/2018 ¹³	12/06/2018 Oficio PVEM-INE-356/2018¹⁴
19/06/2018 ¹⁵	PVEM	INE-UT/9821/2018 ¹⁶	22/06/2018 Oficio PVEM-INE-403/2018¹⁷

4. Emplazamiento.¹⁸ El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar al *PVEM*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PVEM</i>	INE-UT/11882/2018 ¹⁹	Citatorio: 25/julio/2018 Cédula: 26/julio/2018 Plazo: 27 de julio al 2 de agosto de 2018	01/agosto/2018 ²⁰ Escrito

5. Alegatos.²¹ El seis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Este acuerdo fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

¹² Visible a páginas 82 a 85 del expediente.

¹³ Visible a página 86 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 94 a 95 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 96 a 99 del expediente.

¹⁶ Visible a página 103 del expediente.

¹⁷ Visible a página 107 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 109 a 114 del expediente.

¹⁹ Visible a página 119 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 132 a 192 del expediente

²¹ Visible a páginas 193 a 197 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Denunciado

Sujeto	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
PVEM	INE-UT/12435/2018 ²²	Cédula: 07 de agosto de 2018 Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018	13/agosto/2018 ²³ Escrito

Denunciantes

Sujeto	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Aldahir Bautista Valderrama	INE/JD02-VER/3005/2018 ²⁴	Cédula: 09 de agosto de 2018 Plazo: 10 al 16 de agosto de 2018	Sin respuesta
Ada Nelli Roblero García	INE/JDE13/VS/360/2018 ²⁵	Cédula: 09 de agosto de 2018 Plazo: 10 al 16 de agosto de 2018	Sin respuesta

6. Elaboración del Proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera sometido a la consideración de la Comisión de Quejas.

7. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, presentes en la sesión.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo

²² Visible a página 204 del expediente

²³ Visible a páginas 211 a 222 del expediente

²⁴ Visible a página 228 del expediente

²⁵ Visible a página 236 del expediente.

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *PVEM*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicha Ley, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25 del dispositivo legal, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PVEM*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁶ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

²⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

La legislación comicial sustantiva y procedimental que será aplicable en el presente asunto, será la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en virtud de que las presuntas infracciones fueron cometidas en el año dos mil dieciséis, fecha posterior a la entrada en vigor de la mencionada ley; y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* conculcó el derecho de libre afiliación en su vertiente positiva de los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito,

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial

²⁷ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene

²⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

*“**Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón

de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro **(CG617/2012)**.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la

Constitución, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PVEM*

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PVEM*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:²⁹

Estatuto del Partido Verde Ecologista de México

CAPÍTULO II

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al Instituto Político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- *Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;*

II.- *Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y*

III.- *Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos

²⁹ Consultable en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.*

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- *Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;*

II.- *Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;*

III.- *Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.*

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- *Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.

...

Artículo 69.- *Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:*

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

I.- *Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;*

II.- *Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;*

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- *El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.*

Artículo 88.- *El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.*

Artículo 89.- *La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.*

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- *El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Artículo 91.- *De la afiliación de los Militantes; Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.*

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- *Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:*

I.- Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;

II.- Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y

III.- Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.

Artículo 93.- *El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.*

Artículo 94.- *El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.*

Artículo 95.- *El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:*

I.- El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.

Artículo 96.- *El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 103.- *Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104.- *El registro de los simpatizantes se realizará en las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, comprendiendo por estos a los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

Artículo 105.- *De conformidad con lo previsto por el artículo 7, base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.*

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia **21/2013**, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³² y como estándar probatorio.³³

³⁰ http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

³² Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³³ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

³⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de afiliación política, al ser incorporados al padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los ciudadanos denunciante, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁵	Manifestaciones del Partido Político ³⁶
1	Aldahir Bautista Valderrama	16/marzo/2018 ³⁷	Afiliado 01/10/2016 Registro cancelado 24/04/2018	Afiliado Informó que el ciudadano estuvo afiliado, pero se dio de baja, exhibió el original del acuerdo CEEVER-04/2018, de 30 de abril de 2018, emitido por el Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz, por el que se tuvo la baja a la afiliación del <i>PVEM</i> del denunciante. Asimismo, exhibió original del formato de afiliación, copia simple de la credencial para

³⁵ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a páginas 30 a 31 del expediente

³⁶ Oficios PVEM-INE-273/2018 y PVEM-INE-356/2018 del *PVEM*, visibles a páginas 46 a 57 y de 94 a 95 del expediente

³⁷ Visible a páginas 03 y 04 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁵	Manifestaciones del Partido Político ³⁶
				votar de esta persona y el original de escrito presentado por el quejoso, mediante el cual desconoce su afiliación.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliada al PVEM.</p> <p>Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el <i>PVEM</i> aportó el formato original de afiliación de dicho ciudadano, especificando que es miembro de dicho instituto político desde el 01 de octubre de 2016, asimismo, se advierte que, en el apartado de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, aparece en blanco la fecha de afiliación del denunciante, sin embargo, se estima que no se contrapone con lo informado por la DEPPP.</p> <p>Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y /o Partido Político.</i></p> <p>De acuerdo a la información proporcionada por la <i>DEPPP</i> y el <i>PVEM</i>, no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del referido instituto político, información que en momento alguno fue objetada por el quejoso, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante, de haber sido notificado debidamente</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁸	Manifestaciones del Partido Político ³⁹
2	Ada Nelli Roblero García	10/abril/2018 ⁴⁰	<p>Afiliada 10/10/2016</p> <p>Registro cancelado 24/04/2018</p>	<p>Afiliada</p> <p>Informó que la ciudadana estuvo afiliada, pero se dio de baja.</p> <p>No cuenta con la documentación que acredite la debida afiliación, en razón de que, la bodega donde se resguardaba el archivo del único Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México a Nivel Nacional, sufrió una inundación,</p>

³⁸ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a páginas 24 a 25 del expediente

³⁹ Oficios PVEM-INE-356/2018 y escrito del *PVEM*, visibles a páginas 94 a 95 y de 132 a 192 del expediente

⁴⁰ Visible a página 13 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁸	Manifestaciones del Partido Político ³⁹
				dejándolo inutilizable y en estado de deterioro que dificultaba su consulta, así como que dicho padrón se convirtió en un foco de infección, por lo que fueron destruidos, como consta en las actas circunstanciadas INE/DS/OE/CIRC/100/2017 de 21 de abril de 2017 e INE/DS/OE/CIRC/655/2017 de 16 de noviembre de 2017.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliada al PVEM, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible

advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho; esto es, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo

cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho “el que afirma está obligado a probar”, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIFE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PVEM.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, que los denunciantes se encontraron, en ese momento, como afiliada al *PVEM*.

Por otra parte, el *PVEM* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la ciudadana, en el cual, ella misma, *motu proprio*, expresara su consentimiento y, por ende, proporcionara sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político, con excepción del caso que se mencionará más adelante.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PVEM*, en tanto que el dicho del actor consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación tienen el deber de probar esa situación.

En tanto que el *PVEM*, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

A mayor abundamiento, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de un ciudadano, y que el *PVEM*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadano que fue afiliado debidamente al *PVEM*

Respecto a **Aldahir Bautista Valderrama** el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PVEM*, por las razones y consideraciones siguientes:

El *PVEM* reconoció la afiliación del ciudadano de mérito, para lo cual **aportó el original del respectivo formato de afiliación**, documental que no fue objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con la constancia atinente, sobre la cual no se pronunció.

Así, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.

Es por ello que, al no acreditarse una acción ilegal por parte del *PVEM*, por lo que hace al ciudadano Aldahir Bautista Valderrama, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO**.

Apartado B. Ciudadana que fue afiliada indebidamente al *PVEM*

El *PVEM* reconoció la afiliación de Ada Nelli Roblero García; no obstante, el *PVEM* no aportó la cédula de afiliación correspondiente, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de la misma aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de la ciudadana es el formato de afiliación o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PVEM* en materia de afiliación, en la que constara el deseo de la ciudadana a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en el párrafo precedente.

Dicho denunciado manifestó que no contaba con la documentación que acreditara la debida afiliación de la ciudadana en comento, toda vez que, por causas ajenas a su voluntad, la misma sufrió un deterioro ocasionado con las lluvias severas que afectaron la zona donde se resguardaba ésta, circunstancia que, pretendió acreditar a través de las actas circunstanciadas INE/DS/OE/CIRC/100/2017 e INE/DS/OE/CIRC/655/2017 de veintiuno de abril y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, expedidas por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Al respecto, se debe señalar lo siguiente:

- Si bien, a dicho del denunciado, los documentos de afiliación de diversos ciudadanos sufrieron un deterioro con motivo del suceso natural antes descrito, lo cierto es que, al comparecer al presente procedimiento no precisó que en ese sitio estaban las constancias relativas a la ahora quejosa.
- De lo asentado por el personal de la Oficialía Electoral, en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/100/2017, se advierte lo siguiente *se observa diversa documentación apilada en cajas y paquetes color café y blanco algunas rotas y al parecer estuvieron mojadas, cuentan con la leyenda “caja para archivo tamaño oficio”, “Oaxaca” “Edo. de Mex”*.
- De lo anterior, puede sostenerse que, de las constancias aportadas por el partido político en cita, no se desprende, de manera fehaciente, que dentro de la documentación que *sufrió el deterioro*, se haya encontrado o estuviesen involucradas, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa de la ciudadana Ada Nelli Roblero García.

Es decir, no obstante que el hecho de que el partido político denunciado haya aportado constancias de las que resulta viable concluir que diversa documentación se deterioró por factores climatológicos, ello no puede constituir una excluyente de responsabilidad para el *PVEM*.

Es decir, el hecho de que el espacio donde presuntamente se encontraban la documentación que acreditaba la afiliación de diversos ciudadanos, haya sufrido un siniestro, dicho suceso no le exime de la obligación permanente que tiene de constituirse como garante de la plena e irrestricta observancia de la *Constitución*, así como de las leyes que de ella emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones que entrañen la protección a los derechos fundamentales en favor de todo gobernado, como lo es, en el caso, la de salvaguarda la garantía de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 constitucional, y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos Políticos.

Asimismo, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el *PVEM* haya implementado alguna medida para reponer las constancias de afiliación, con el objeto de cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho de libre afiliación de la ciudadana cuyo caso aquí se analiza, toda vez que, por regla general, el *PVEM* tiene la carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las documentales que acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido.

Por todo lo anterior, toda vez que el *PVEM* no aportó evidencias respecto a que la quejosa haya decidido libremente pertenecer a ese instituto político, como lo sería la propia cédula de afiliación debidamente firmada, o algún otro elemento que resultara idóneo para ello, como lo prevé su normativa interna, es que se transgredió el derecho de libre afiliación de la ciudadana, además se demostró el uso indebido de sus datos personales, al haberse utilizado para afiliarla sin su consentimiento, toda vez que era responsabilidad de este partido político demostrar que la inscripción a su padrón de militantes, fue consecuencia de la voluntad libre e individual de la ciudadana afectada.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PVEM* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, de la **ciudadana** antes referida, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de ésta para ser agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante que apareció afiliada al *PVEM*, manifestó que en ningún momento otorgó su consentimiento para ello y,

siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PVEM*, en el caso analizado, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha ciudadana haya dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al *PVEM* o de seguir perteneciendo al mismo, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como afiliada al *PVEM* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PVEM* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora quejosa.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa sobre lo que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de la ciudadana inconforme para mantener, solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por ésta al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara **fundado** el presente procedimiento en contra del *PVEM*, por la indebida afiliación de la ciudadana analizada en este apartado.

Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,⁴¹ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente.

⁴¹ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del *PVEM*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PVEM</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de la ciudadana Ada Nelli	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
	de la <i>Constitución</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	Roblero García, por parte del <i>PVEM</i> .	párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a la ciudadana Ada Nelli Roblero García, sin demostrar que para incorporarla medió la voluntad de ésta de inscribirse a dicho padrón, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la promovente sin

que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁴² en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la actora al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PVEM*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de

⁴² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

los derechos de la ciudadana Ada Nelli Roblero García, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a la hoy quejosa, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PVEM*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a la ciudadana Ada Nelli Roblero García, sin tener la documentación soporte que acreditara fehacientemente la voluntad de ésta de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontró incluida.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, a la afiliación sin el consentimiento previo de la ciudadana, aconteció el diez de octubre de dos mil dieciséis.
- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al *PVEM* se cometió en el estado de Chiapas.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo;

443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PVEM* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PVEM* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 párrafo 1 inciso a) *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento**.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa aduce, en el caso a que se refiere el Apartado B, numeral 5, del Considerando SEGUNDO de esta Resolución, que no solicitó

voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PVEM*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.

- 2) Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes del *PVEM* como afiliada el diez de octubre de dos mil dieciséis.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM*, se cometió al afiliar indebidamente a la ciudadana Ada Nelli Roblero García, sin demostrar el acto volitivo de ésta tanto de ingresar, como de permanecer inscritos en sus padrones de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de la ciudadana mexicana, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la ciudadana quejosa de militar en el partido político denunciado, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PVEM*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁴³

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

⁴³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PVEM*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de la ciudadana Ada Nelli Roblero García al partido político denunciado, pues se comprobó que el *PVEM* la afilió, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su agremiada de pertenecer o seguir inscrita a dicho instituto político.

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de la denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PVEM*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PVEM*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de la hoy quejosa, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la ciudadana Ada Nelli Roblero García, reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁴⁴

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PVEM* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIFE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible

⁴⁴ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PVEM*, justifican la imposición de la sanción prevista en dispositivo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelve.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de la ciudadana quejosa al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴⁵ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”*

En virtud de que la ciudadana denunciante fue afiliada en un momento diferente, aun cuando se trata de una infracción de tracto sucesivo, es decir que se prolonga en el tiempo desde el momento en que la ciudadana es incorporada sin su consentimiento al padrón de afiliados de un partido político, hasta que deja de ser parte del mismo, a fin de adoptar la postura más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el Estado en los procedimiento de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa

⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

correspondiente, se debe tomar en cuenta que dicha ciudadana fue afiliada en en dos mil dieciséis, y de quien se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en ese año, corresponde a lo siguiente:

Ciudadana quejosa	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
Ada Nelli Roblero García	10/10/2016	642	\$73.04	\$46,891.68

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PVEM*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PVEM* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PVEM*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PVEM* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ABV/JD02/VER/102/2018

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento mensual de Actividades Ordinarias de octubre de 2018
PVEM	\$30'708,417

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dichos institutos políticos nacionales, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PVEM	\$30'708,417	\$8'382,004	\$22'326,413

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PVEM*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción	Ciudadana	% de la ministración mensual por ciudadano⁴⁶
2016	\$46,891.68	Ada Nelli Roblero García	0.15%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PVEM* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y

⁴⁶ Cantidad expresada hasta el segundo decimal

subjetivos de la infracción cometida por el *PVEM* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de agosto de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁴⁷, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PVEM*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017⁴⁸, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la

⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

DEPPP, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Verde Ecologista de México**, por cuanto hace a **Aldahir Bautista Valderrama**, en términos de lo establecido en el numeral 5, Apartado A del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Verde Ecologista de México**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de Ada Nelli Roblero García, en términos de lo establecido en el numeral 5, Apartado B del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **Partido Verde Ecologista de México**, una **multa** por la indebida

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

afiliación de la ciudadana de referencia, consistente en **642** (seiscientos cuarenta y dos) **Unidades de Medida y Actualización**, equivalente a **\$46,891.68** (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 68/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2016].

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **Partido Verde Ecologista de México**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se vincula al **Partido Verde Ecologista de México** para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia** y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Notifíquese personalmente a **Aldahir Bautista Valderrama y Ada Nelli Roblero García**; así como al **Partido Verde Ecologista de México**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1347/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

DENUNCIANTE: TIRSO ALEJANDRO ROMERO

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018, INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR TIRSO ALEJANDRO ROMERO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA AFILIACIÓN INDEBIDA Y LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Comisión:</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del INE
<i>COFIPE o Código:</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PVEM:</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Quejoso o denunciante:</i>	Tirso Alejandro Romero.
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

R E S U L T A N D O

I. QUEJA.¹ Mediante oficio remitido por la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Tabasco, se hizo llegar escrito presentado por Tirso Alejandro Romero, en el que manifestó que supuestamente fue afiliado de manera indebida al padrón de militantes del *PVEM*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron ilegalmente sus datos personales.

II. REGISTRO. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó² la integración del expediente de cuenta, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite la queja presentada por Tirso Alejandro Romero y se ordenaron diligencias de investigación, consistentes en solicitar a la *DEPPP* informara si el quejoso se encontraba dentro del padrón de afiliados del *PVEM* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político precisara si el referido ciudadano aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera original o copia certificada de la constancia en la que constara el consentimiento del denunciante respecto de la afiliación materia de controversia.

Respuesta de la *DEPPP*:³

Respuesta
Afiliado al <i>PVEM</i> con fecha 30/10/2016
Baja del referido partido político el 23/05/2018

¹ Folio 02. En todos los casos, se hace referencia al expediente en que se actúa.

² Páginas 6 a 12.

³ Fojas 19 y 20

Respuesta del PVEM:⁴

Respuesta
Afiliado al PVEM con fecha 30/10/2016 Baja del referido partido político el 23/05/2018 Aportó, entre otros documentos, formato de afiliación en original.

III. VISTA AL CIUDADANO. Toda vez que el *PVEM* aportó constancia original del formato de afiliación del *quejoso*, mediante Acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho,⁵ se ordenó poner a la Vista de tal ciudadano la referida documental, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Cabe precisar que el *quejoso* no formuló manifestación alguna.

IV. EMPLAZAMIENTO. El tres de agosto del año en curso,⁶ se ordenó el emplazamiento al *PVEM*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/12223/2018 ⁷	PVEM	Seis de agosto de dos mil dieciocho	Trece de agosto de dos mil dieciocho ⁸	La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. Reiteró el ofrecimiento de original de formato de afiliación de Tirso Alejandro Romero, presentado en respuesta a requerimiento previo.

⁴ Páginas 22 y 23; anexos 24 a 31

⁵ Folios 33 a 36

⁶ Acuerdo visible a fojas 59 a 65 del expediente.

⁷ Foja 67.

⁸ Páginas 81 a 96

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

V. ALEGATOS. El catorce de agosto de dos mil dieciocho,⁹ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/12600/2018 ¹⁰	PVEM	16 de agosto de 2018	23 de agosto de 2018 ¹¹	Reitera que aportó previamente formato de afiliación original
INE/JDE02TAB/4639/2018 ¹²	Tirso Alejandro Romero	17 de agosto de 2018	No contestó	No aplica

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Quinta sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión resolvió el presente Proyecto de Resolución por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

⁹ Folios 97 a 100.

¹⁰ Página 102.

¹¹ Respuesta visible de folios 123 a 131

¹² Página 116.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de Tirso Alejandro Romero.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado *Código*, correspondiendo al otrora *IFE* —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *Ley de Partidos*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del *INE* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, derivada esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

La legislación comicial sustantiva y procedimental que será aplicable en el presente asunto, serán la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*; ello, en virtud de que la presunta infracción fue cometida en el año dos mil dieciséis, fecha posterior a la entrada en vigor de la mencionada ley.

¹³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* afilió indebidamente o no a Tirso Alejandro Romero, quien alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a

una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

¹⁴ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley. Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PVEM*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PVEM*:¹⁵

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;

II.- Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y

III.- Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político

¹⁵ Consultados en el enlace electrónico <https://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/historico-documentos/PVEM13022004EST.pdf> el veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

Nacional, en el cual sus afiliados; militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro instituto político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente;

II.- Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;

III.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.

...

Artículo 4.- Son adherentes del Partido los mexicanos que hayan solicitado personal, libre e individualmente al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial su adhesión al padrón Estatal de adherentes en los términos de los presentes Estatutos y que se comprometan a contribuir a la realización de los objetivos del Partido, mediante aportaciones intelectuales o con su apoyo de opinión y de propaganda.

El Consejo Político Nacional se reunirá, por lo menos una vez cada tres meses o cuando las necesidades así lo indiquen, con el objeto de pronunciarse sobre la

admisión o no de ciudadanos que durante ese lapso hayan solicitado su cambio de calidad de afiliado, de adherente a militante y, en su caso, expedir el nombramiento y la credencial correspondiente del solicitante o, en su defecto, emitir el Acuerdo que niegue tal calidad, en el que se establecerán la razones y fundamentos que motivan la negativa de registro.

Para conservar el carácter de adherente se requerirá cumplir los presentes Estatutos, las normas que de éste emanen y difundir los Documentos Básicos del Partido.

...

CAPÍTULO III

De los Militantes y Adherentes

Artículo 7.- Son derechos y obligaciones de los militantes del Partido Verde Ecologista de México, los consignados en las siguientes bases:

...

Segunda.- Serán obligaciones y deberes de los militantes:

...

III.- Conservar y mantener vigente su constancia de militante del Partido Verde Ecologista de México;

...

IX.- Cubrir sus cuotas puntualmente al Partido Verde Ecologista de México conforme al Capítulo de Afiliación de los presentes Estatutos;

...

XIII.- De conformidad con lo previsto por la fracción III, que antecede, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto podrá convocar en todo el país el Consejo Político Nacional previo a la celebración de procedimientos internos, debiendo recibir una nueva credencial que acredite su calidad de militante.

...

Artículo 8.- Son derechos y obligaciones de los adherentes del Partido Verde Ecologista de México, los consignados en las siguientes bases:

Primera.- Serán derechos y prerrogativas de los adherentes:

...

VIII.- Solicitar ante la instancia estatutaria correspondiente el cambio de calidad de adherente por el de militante conforme a lo señalado por los presentes Estatutos; y

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

Segunda.- Serán obligaciones y deberes de los adherentes:

...

III.- Conservar y mantener vigente su constancia de adherente del Partido Verde Ecologista de México;

...

El Consejo Político Nacional custodiará, administrará y actualizará una vez al año todo lo relacionado con el Padrón Nacional de Adherentes.

Artículo 9.- Causará baja como militante o adherente del Partido, cuando:

...

V.- Sea postulado por otro Partido político a cualquier cargo de elección popular;

VI.- Cuando no ratifique su militancia en el proceso estatutario que para tal efecto convoque el Consejo Político Nacional;

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Los mexicanos que así lo decidan, pueden afiliarse al *PVEM* de conformidad con las siguientes modalidades: militante, adherente, y simpatizante.
- La afiliación al *PVEM* es individual, personal, intransferible, libre y pacífica.
- Para ser militante se requiere estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados. Para cambiar de calidad, se debe solicitar por escrito el cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación.
- Son adherentes del *PVEM*, los mexicanos que hayan solicitado personal, libre e individualmente al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, su adhesión al padrón estatal de adherentes.
- El Consejo Político Nacional, en caso de aprobación de cambio de calidad de afiliado, expedirá nombramiento y credencial del solicitante.

- Son obligaciones de los militantes, entre otras, cubrir sus cuotas al partido y ratificar su militancia en el proceso correspondiente, debiendo recibir una nueva credencial que acredite su calidad de militante.
- Es obligación de los adherentes, entre otras, conservar y mantener vigente su constancia de adherente al partido.
- Es causal de baja como militante o adherente, no ratificar la militancia en el proceso estatutario correspondiente.

Aunado a lo anterior, en el escrito con que el PVEM dio respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad mediante Acuerdo de dos de marzo del año en curso, dicho partido manifestó que el procedimiento para afiliar a ciudadanos es el siguiente:

- Acudir a cualquier oficina del *PVEM* más cercana.
- Presentar escrito en donde se exprese el deseo de afiliarse al *PVEM*, acompañando a dicho escrito fotocopia de credencial para votar.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁶ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁷ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

¹⁶ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁸ y como estándar probatorio¹⁹.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁰ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciados sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

¹⁸ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁹ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091²².

²⁰ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, si no conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a

demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por el *quejoso*, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporado al padrón del *PVEM*, sin haber otorgado su consentimiento para ello, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

Tirso Alejandro Romero		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP²¹	Manifestaciones del Partido Político
Señaló que se encontró afiliado al partido político denunciado y que se trata de una afiliación sin su consentimiento.	Confirmó que el denunciante fue afiliado al partido político denunciado con fecha de alta <u>30 de octubre de 2016</u> .	Reconoció que el quejoso fue su militante, con fecha de alta 30 de octubre de 2016; presentó formato original de afiliación, ²² aparentemente firmado por el denunciante. En sus escritos de contestación al emplazamiento y de desahogo de la vista de alegatos, el representante del partido político señaló que no existió afiliación indebida, ya que, a su decir, la afiliación materia de controversia se llevó a cabo conforme con sus Estatutos.

²¹ Fojas 19 y 20.

²² Folio 26

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TAR/JD04/TAB/183/2018

Tirso Alejandro Romero		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ²¹	Manifestaciones del Partido Político
	Y que fue dado de baja el 23 de mayo del 2018.	Asimismo, manifestó que no existe uso indebido de los datos personales del quejoso, ya que éste se afilió de manera libre a dicho partido, por lo que no existe una indebida afiliación.
Observaciones		
Con copia simple del formato original de afiliación aportado por el partido político se dio vista al denunciante, sin que éste realizara manifestación alguna.		
Conclusiones		
<p>El quejoso señaló que fue afiliado sin su consentimiento.</p> <p>No existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del partido político.</p> <p>El PVEM remitió a esta autoridad electoral formato original de afiliación del ciudadano, sin que dicha constancia fuera objetada por el denunciante; esta autoridad emitirá pronunciamiento en el siguiente apartado.</p>		

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento del ciudadano para afiliarlo a su partido político, y no al quejoso que, en el caso, negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PVEM.

Ahora bien, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, el PVEM aportó una constancia de la que se desprende que **Tirso Alejandro Romero** sí otorgó su consentimiento para ser afiliado al partido político denunciado.

Lo anterior se afirma así, pues de una valoración realizada conforme las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, en términos de lo previsto por el artículo 462 de la *LGIPE*, el formato de afiliación aportado por el PVEM, reúne los siguientes elementos de convicción:

1. Clave de elector idéntica a la que aparece en la credencial para votar.
2. Firma que presuntamente corresponde al denunciante.
3. Fecha, que resulta coincidente con la que señaló la *DEPPP* como de la afiliación de Tirso Alejandro Romero al PVEM.

Así, a partir de tales razonamientos, esta autoridad considera que el formato de afiliación de Tirso Alejandro Romero al PVEM resulta válido y suficiente para tener por acreditada la inclusión del denunciante en el padrón de afiliados del partido político denunciado, máxime si se toma en cuenta que, el quejoso no compareció a formular objeción a dicho medio de prueba.

En conclusión, obra en autos una constancia aportada por el *PVEM*, de la que se puede desprender que el *quejoso* sí otorgó su consentimiento para ser afiliado —ya que, como se sostuvo, en el documento en análisis aparece una firma de la que, en principio, esta autoridad no cuenta con elemento alguno que le reste autenticidad— y, por tanto, lo conducente es determinar que no se configura la indebida afiliación que se denuncia.

En tal sentido, la sola manifestación del denunciante, en el sentido de que el *PVEM* le afilió sin *su* consentimiento, no puede prevalecer sobre la constancia de la que se ha dado cuenta, pues, como se razonó, la documental aportada por el partido político denunciado cuenta con elementos que permiten considerarla válida, aunado a que, el *denunciante* no controvirtió en modo alguno su veracidad.

En cuanto a esto último, debe destacarse que, si bien la tramitación de los procedimientos sancionadores no requiere de ratificación o de actuaciones posteriores, por parte del denunciante, a la presentación de la queja, lo cierto es que, en el caso, se dio una vista específica al *quejoso* con la constancia ya referida, y en el acuerdo correspondiente se le apercibió que, de no formular manifestaciones, el presente procedimiento se resolvería *con las constancias que obran en autos*.

En tal sentido, para esta autoridad, la conducta omisiva de Tirso Alejandro Romero, quien, se insiste, no compareció al procedimiento en ninguna de las dos etapas procesales a las que fue llamado —aun cuando fue debidamente notificado, tal y como se desprende de las constancias del expediente—, denota una actitud pasiva respecto de su intención inicial de que se sancione al partido político denunciado, ya que, la lógica indica que si una persona tiene forma de demostrar y acreditar los extremos de su acción, los ejercita a través de los medios procesales que tiene a su alcance, tal como sería formular objeción a los elementos de prueba aportados por su contraparte, en este caso, el partido político denunciado.

Por tanto, se concluye que el denunciante fue omiso en aportar elementos que desvirtuaran la constancia aportada por el *PVEM* y, por tanto, este órgano colegiado, a partir de los elementos que obran en expediente, considera que la constancia resulta válida y suficiente para acreditar que sí medió voluntad en respecto de la afiliación materia de denuncia, y, en consecuencia, el presente procedimiento debe determinarse **infundado**.

Finalmente, en razón de que se tiene constancia de que el denunciante ha sido dado de baja del padrón de afiliados del *PVEM*, se considera innecesario girar instrucción alguna en ese sentido.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la Constitución Federal,²³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PVEM*, por la indebida afiliación y utilización de datos personales de **Tirso Alejandro Romero**, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a Tirso Alejandro Romero; así como al *PVEM*, por conducto de su representante ante este *Consejo General*; y por estrados a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

²³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

INE/CG1348/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

DENUNCIANTES: JUNIOR GEOVANNI MEDEL
MARTÍNEZ

DENUNCIADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018, INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR JUNIOR GEOVANNI MEDEL MARTÍNEZ, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Comisión</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>MC</i>	Movimiento Ciudadano
<i>RQyD</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

R E S U L T A N D O

I. Presentación de la queja. ¹ El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la *UTCE*, el oficio INE/JDE08/VE/0404/2018, signado por la Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Guerrero, mediante el cual, remitió el escrito de queja firmado por Junior Geovanni Medel Martínez, con el que denunció su presunta afiliación de manera indebida al padrón de militantes de *MC* y, el aparente uso de sus datos personales para tal fin, dado que no otorgó su consentimiento para ello.

II. Registro, admisión y reserva de emplazamiento. ² El seis de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual le fue asignada la clave **UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018**, con motivo de la presunta afiliación indebida y uso de datos personales sin consentimiento del quejoso, por parte de *MC*.

¹ Visible a fojas 03 a 05.

² Visible a páginas 06-14 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación que se detallan a continuación:

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
MC	INE-UT/11336/2018³ 09 de julio de 2018	MC-INE-523/2018 ⁴ 12 de julio de 2018
DEPPP	INE-UT/11337/2018⁵ 09 de julio de 2018	Atención al turno DEPPP-2018-9094 Correo electrónico de 10 de julio de 2018 ⁶

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *MC*, así como al ciudadano denunciante.

III. Emplazamiento.⁷ Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, la *UTCE* ordenó emplazar al *MC*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>MC</i> INE-UT/12581/2018 ⁸ 15/08/2018	Citatorio: ⁹ 14 de agosto de 2018. Cédula: ¹⁰ 15 de agosto de 2018. Plazo: 16 al 22 de agosto de 2018.	20/agosto/2018 ¹¹

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias del expediente de mérito.

³ Visible a página 25-27 del expediente.
⁴ Visible a página 30-32 del expediente.
⁵ Visible a página 24 del expediente.
⁶ Visible a páginas 28-29 del expediente.
⁷ Visible a fojas 34 a 40 del expediente.
⁸ Visible a foja 46 del expediente.
⁹ Visible a fojas 47 a 49 del expediente.
¹⁰ Visible a foja 50 a 51 del expediente.
¹¹ Visible a fojas 60 a 73 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

IV. Alegatos.¹² El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
MC INE-UT/12756/2018 ¹³ 28/08/2018	Citatorio: 27 de agosto de 2018. ¹⁴ Cédula: 28 de agosto de 2018. ¹⁵ Plazo: 29 de agosto al 04 de septiembre de 2018.	MC-INE-793/2018 ¹⁶ 29 de agosto de 2018

Denunciante

Quejoso-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Junior Geovanni Medel Martínez INE/JDE08/VE/0645/2018 ¹⁷	Cédula: 28 de agosto de 2018 ¹⁸ Plazo: 29 de agosto al 04 de septiembre de 2018.	Sin respuesta

V. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión* aprobó el presente proyecto, para su correspondiente discusión en el Consejo General, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes en la sesión.

¹² Visible a páginas 75-78 del expediente.

¹³ Visible a página 85 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 86-88 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 89-90 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 95-97 del expediente.

¹⁷ Visible a página 99 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 100-101 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *MC*, en perjuicio de Junior Geovanni Medel Martínez. Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *MC*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

No pasa inadvertido que *MC* al responder al emplazamiento que le fue formulado, señaló, a manera de excepción, que no es una atribución del *INE* conocer sobre el tema relacionado con el uso de datos personales y, por tanto, se debería remitir el expediente al órgano competente para ello.

Contrario a lo manifestado por el denunciado, esta autoridad estima que sí cuenta con competencia para conocer de asuntos relacionados con la afiliación indebida y, en consecuencia, el uso de datos personales, habida cuenta que ambas conductas se encuentran indefectiblemente relacionadas una con otra.

En efecto, si un ciudadano desea afiliarse a un ente político, en pleno ejercicio de su derecho de libre asociación política consagrado en los artículos 35 y 41 Constitucionales, es necesario que para ello proporcione sus datos personales para ese fin. *A contrario sensu*, si un ciudadano refiere haber sido afiliado indebidamente a un partido, es válido concluir que también se encuentra comprometido el uso de datos personales por parte del partido para llevar a cabo su registro como militante.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que las anteriores conclusiones han sido avaladas por el Consejo General de este Instituto al emitir las Resoluciones INE/CG444/2018 e INE/CG446/2018, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 e UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017.

Incluso, se debe precisar que la resolución INE/CG446/2018, fue impugnada y confirmada por la *Sala Superior* al resolver expediente SUP-RAP-141/2018 y, por ende, la sanción impuesta.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta falta (indebida afiliación) se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que, en el presente caso, el registro o afiliación del quejoso a *MC* se realizó antes del treinta y uno de mayo de dos mil catorce, esto es, el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los *Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces IFE mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente en el registro realizado en ese periodo se advierte la aparición del quejoso en el partido político *MC*.

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el COFIPE,²⁰ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Sin perjuicio que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas procesales contenidas en la *LGIPE*,²¹ y en el *reglamento*.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES.**²²

²⁰ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

²¹ Al respecto, resultan aplicables las **jurisprudencias** del Poder Judicial de la Federación de rubros: **RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL.**, Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 30; **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, materia Civil, tesis I.8°.C. J/1, Página 178 y **DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY**, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172.

²² Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

En respuesta a la imputación de la que es objeto *MC*, a través de su Representante ante el *Consejo General*, en síntesis, hizo valer en su defensa lo siguiente:²³

- *Su actuar es de buena fe y confían en los datos que asientan los ciudadanos en las cédulas de afiliación, máxime que los proporcionan bajo protesta de decir verdad.*
- *Los datos que ostentan en su base de datos los militantes son los mismos que los que se obtuvieron del registro libre y voluntario de cada uno de los ciudadanos que en su momento desearon formar parte de su partido político.*
- *Respeto la libre voluntad de los ciudadanos de afiliarse y acceder a sus derechos ARCO, siempre y cuando el titular o su representante legal acrediten su identidad o representación, según sea el caso.*
- *Los ciudadanos quejosos, deben acudir a las instancias competentes, en este caso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuando sea vulnerado un derecho ARCO, como lo es en el presente caso, no así ante el Instituto Nacional Electoral.*
- *Debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, toda vez que de los elementos aportados por la parte acusadora no resultan suficientes para acreditar la afiliación indebida y mal uso de datos personales del denunciante.*

2. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si *MC* afilió indebidamente o no, a Junior Geovanni Medel Martínez, transgrediendo con ello lo dispuesto en los artículos 6,

²³ Visible a fojas 170 a 189 y 210 a 212 del expediente

apartado A, fracción II, 16 párrafo segundo, 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 171 párrafo 3, 192, párrafo 2 y 342 párrafo, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos preceptos 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2 y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

²⁴ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

²⁵ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos

Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MC

Como se ha mencionado, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia en párrafos que anteceden, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna de MC, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:²⁶

“Estatutos de MC”

ARTÍCULO 3

De la Afiliación y la Adhesión

1. Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea su afiliación como militante del MC, o su adhesión al mismo como simpatizante.

2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia del MC más próxima al domicilio del interesado.

...

4. Para afiliarse al MC se deberán suscribir los siguientes compromisos:

...

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.

5. La credencial de militante del partido expedida por la Comisión Operativa Nacional testimonia la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes del MC.

²⁶ Consultable en la dirección electrónica <https://movimientociudadano.mx/estatutos>.

Con relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente:

- Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales **se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.**
- Pueden solicitar su afiliación o adhesión a *MC*, los jóvenes mayores de dieciocho años.
- Mayores de 14 años pueden solicitar su adhesión como simpatizantes del movimiento.
- La afiliación se debe solicitar en la instancia más cercana al domicilio del interesado

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución* se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de *MC*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *MC*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que los ciudadanos en cuestión acudieron a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las

²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁹ y como estándar probatorio.³⁰

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

²⁹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁰ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

La denuncia presentada por Junior Geovanni Medel Martínez, versa sobre la presunta vulneración a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporado al padrón de *MC*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, la información y conclusiones derivadas de la investigación preliminar implementada se resumirá en el cuadro siguiente:

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Junior Geovanni Medel Martínez	Recibido en la 08 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Guerrero 17 de mayo de 2018 ³²	Correo electrónico de 10 de julio de 2018 ³³ Afiliado 24/02/2014	Oficio MC-INE-523/2018 ³⁴ , firmado por el representante propietario de <i>MC</i> ante el Consejo General del INE, mediante cual informó que el quejoso está afiliado de manera libre, voluntaria, individual y personal,

³² Visible a páginas 03-05 del expediente.

³³ Visible a páginas 28-29 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 30-31 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			<p>con fecha de alta el <u>veinticuatro de febrero de dos mil catorce</u>.</p> <p>Para demostrarlo, anexó copia certificada por la Secretaría General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de la Comisión Permanente y de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC, de la cédula de afiliación.³⁵</p>
Observaciones			
<p>El partido político denunciado aportó copia certificada de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los que aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.</p> <p>En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del quejoso (24 de febrero de 2014); lo cual, se estima, no se contrapone con lo informado por la DEPPP, en el sentido que el quejoso fue militante del partido político denunciado, ya que dicho instituto político acepta que el ciudadano de mérito formaba parte de sus filas.</p> <p>Es importante destacar que previo al asentamiento de la firma que aparece en la cédula de afiliación se lee la leyenda: <i>Por mi libre voluntad, solicito a ustedes mi ingreso a Movimiento Ciudadano, en virtud de estar de acuerdo con sus Documentos Básico...</i></p>			
Conclusiones			
<p>Del análisis a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Junior Geovanni Medel Martínez, fue registrado como militante del MC; 2. La afiliación mencionada tuvo lugar el veinticuatro de febrero de dos mil catorce; 3. MC aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables. 			
<p>De acuerdo a la información proporcionada por la DEPPP y MC, no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del referido instituto político.</p> <p>Por tanto, a partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MC y que el partido político aportó copia certificada de la <i>constancia de afiliación</i> como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria y, que el quejoso no objetó la autenticidad del documento base del denunciado, así como tampoco su alcance y valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, se debe concluir que, la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p> <p>De ahí que, NO se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.</p>			

³⁵ Visible a página 32 del expediente.

6. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribución de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad deberá analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del *COFIPE*, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de MC.

Como se observó en el apartado denominado *acreditación de hechos*, quedó demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo manifestado por el propio instituto político denunciado, que el ciudadano quejoso se encontró como afiliado en el padrón de militantes de *MC*.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto que el dicho del actor consiste en que no otorgó su consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En lo tocante a la voluntad del quejoso, como elemento indispensable para acreditar el libre ejercicio de su derecho de afiliación partidista, éste niega haber tenido o manifestado el propósito de afiliarse a *MC*, aduciendo que tuvo conocimiento de la existencia de su vínculo con el mencionado partido político, derivado de la verificación al portal de este Instituto Nacional Electoral, particularmente al sitio denominado "*Afiliados por Partidos Políticos Nacionales*", acción que llevó a cabo toda vez que, al pretender participar en el pasado Proceso Electoral como representante del Partido Revolucionario Institucional, fue informado por la dirigencia de ese instituto político (del que manifiesta ser miembro activo) de su afiliación a *MC*.

En ese sentido, a fin de tener plena certeza respecto de la afiliación de dicho ciudadano al partido político denunciado, esta autoridad formuló diversos requerimientos y remitió la clave de elector de Junior Geovanni Medel Martínez tanto

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

al propio partido, como a la *DEPPP* para que compulsara dicha información, con las constancias existentes en la base de datos y archivos correspondientes a *MC*, a fin de estar en posibilidad de localizar a dicho ciudadano en el respectivo padrón de afiliados.

Como se adelantó en apartados previos, de la respuesta al requerimiento formulado a la *DEPPP*, se advierte que en sus archivos se detectó que el ahora quejoso sí se encuentra afiliado a *MC*.

Asimismo, la referida Dirección Ejecutiva informó que no cuenta en sus archivos con la constancia de afiliación, en razón de que el proceso de verificación no incluye como requisito que los partidos políticos adjunten documentación que acredite el carácter de afiliados, salvo el caso de doble afiliación, por tanto, no existen en esa instancia originales o copias certificadas legibles de las mismas.

En efecto, en el punto Décimo de los “*Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la Conservación de su Registro*”, se establece que la revisión del número mínimo de afiliados para que una organización partidista preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar los datos inscritos en el respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal con corte al treinta y uno de marzo del año previo a la Jornada Electoral federal; a partir de tal operación, denominada “primera compulsa”, al total de registros reportados por el partido político atinente, se descontarán los registros duplicados en el propio padrón partidista, de manera que el número de registros restantes serán denominados “registros únicos”.

Asimismo, en términos del mismo punto de los Lineamientos invocados, los “registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción, suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares.

Por consiguiente, Junior Geovanni Medel Martínez, cuyo registro se detectó por la *DEPPP* en el padrón de militantes de *MC*, en principio fue considerado válido, por no encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo en entredicho durante la última verificación del mencionado padrón partidista.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGMM/JD08/GRO/199/2018

Ahora bien, *MC*, con la finalidad de acreditar sus afirmaciones exhibió en el presente procedimiento copia certificada por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de la Comisión Permanente y de la Coordinadora Ciudadana Nacional de *MC*, de la manifestación formal de afiliación del ciudadano quejoso.

Al respecto, es de señalar que dicho medio de convicción, revisten el carácter de **documentales privadas**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a), 359 párrafos 1 y 2 del *COFIPE*, cuyos artículos coinciden con los diversos 461, párrafo 3, inciso a) y 462 párrafos 1 y 2 de la *LGIPE*, en relación con el 22 párrafo 1, fracción I del Reglamento de Quejas.

En tal sentido, esa manifestación formal de afiliación, es un indicio de que Junior Geovanni Medel Martínez fue afiliado a *MC* por voluntad propia.

En ese orden de ideas, en proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la *UTCE*, se dio vista a Junior Geovanni Medel Martínez para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las manifestaciones realizadas por *MC*, se pusieron a su disposición las constancias del expediente y, particularmente la documentación que amparaba su afiliación a dicho instituto político.

Sin embargo, no obstante ser debidamente notificado de dicho acuerdo y de tener conocimiento de la existencia de un documento que da cuenta de su afiliación a *MC*, no se recibió respuesta alguna de dicho ciudadano para, en su caso, controvertir tal circunstancia.

Por esta razón, este Órgano Colegiado considera que la citada copia certificada de “*Cédula de afiliación*” resulta suficiente para generar la presunción de que existió el consentimiento del quejoso para afiliarse libremente a *MC*, toda vez que de su contenido presumiblemente se aprecia su firma autógrafa, de lo que se infiere que su solicitud para ser parte de *MC*, fue genuina.

Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de Junior Geovanni Medel Martínez, haya sido producto de una acción ilegal por parte de *MC*, concluyendo que dicho ente político, cumplió su carga probatoria para demostrar la afiliación voluntaria del ciudadano en cuestión y, ante ello, se considera que no es posible atribuir responsabilidad y la imposición de la consecuente sanción, pues existe la presunción a partir de la existencia de la cédula de afiliación respectiva, de

que en su momento hubo una afiliación voluntaria, presunción que como se dijo, no fue controvertida u objetada de manera frontal y directa, ni por la vía idónea, por parte del ciudadano quejoso, no obstante, como ya fue señalado, que en su momento estuvo en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho; de ahí que resulte **infundado** el presente procedimiento.

CUARTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE DE MC.

Al constituir una de las principales intenciones del quejoso, dejar de formar parte del padrón de militantes de *MC*, esto es, no continuar como afiliado al partido político denunciado, con independencia de que, en el fondo se ha declarado **infundado** el procedimiento, se ordena a *MC* para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro del mismo como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Lo anterior, dado que, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1º de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

Cabe precisar que, dicha determinación es congruente además, con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*^[1], se precisa

[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA**

que la presente determinación es impugnabile mediante el **recurso de apelación**, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de *MC*, por la afiliación indebida Junior Geovanni Medel Martínez, de conformidad con lo asentado en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se vincula al partido político **MC** para que, de ser el caso, en el supuesto de que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile mediante el recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a Junior Geovanni Medel Martínez; así como a **MC**, por medio de su representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

INE/CG1349/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018
DENUNCIANTE: OSCAR ARMANDO CASTILLO
SÁNCHEZ
DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018, INSTAURADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR OSCAR ARMANDO CASTILLO SÁNCHEZ EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA SUPUESTA AFILIACIÓN INDEBIDA Y LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PRI:</i>	Partido Revolucionario Institucional
<i>Quejoso o denunciante:</i>	Oscar Armando Castillo Sánchez.
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

R E S U L T A N D O

I. QUEJA.¹ Mediante oficio remitido por la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, se hizo llegar escrito presentado por Óscar Armando Castillo Sánchez, en el que manifestó que supuestamente fue afiliado de manera indebida al padrón de militantes del *PRI*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron ilegalmente sus datos personales.

II. REGISTRO.² El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente de cuenta, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite la queja presentada por Oscar Armando Castillo Sánchez y se ordenaron diligencias de investigación, consistentes en solicitar a la *DEPPP* informara si el quejoso se encontraba dentro del padrón de afiliados del *PRI* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político precisara si el referido ciudadano aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera original o copia certificada de la constancia en la que constara el consentimiento del denunciante respecto de la afiliación materia de controversia.

Respuesta de la *DEPPP*:³

Informó que el denunciante aparece en el padrón de afiliados del *PRI*.

Precisó que la fecha de afiliación no fue registrada por el partido político, en razón de que la autoridad electoral no lo requirió para los registros capturados antes del 13 de septiembre de 2012.

¹ Folio 3 y 4 y anexos de 5 a 13. En todos los casos, se hace referencia al expediente en que se actúa.

² Páginas 14 a 21.

³ Páginas 30 y 31.

Respuesta del *PRI*.⁴

Manifestó estar recabando información relacionada con el denunciante, a efecto de atender el requerimiento.

III. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.⁵ Toda vez que el *PRI* no aportó documentos relacionados con la afiliación del quejoso, mediante Acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó requerir nuevamente a dicho partido político.

Respuesta del *PRI*.⁶

Respuesta
Reiteró estar recabando información relacionada con el denunciante, a efecto de poder precisar el estatus del mismo.

IV. EMPLAZAMIENTO.⁷ El diez de agosto del año en curso, se ordenó emplazar al *PRI*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA ⁸ CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO ⁹	PRUEBAS OFRECIDAS
INE- UT/12544/2018	PRI	catorce de agosto de dos mil dieciocho	veintiuno de agosto de dos mil dieciocho	El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones, las cuales serán valoradas en el apartado

⁴ Folios 32 y 33 y anexo en 34 a 35.

⁵ Páginas 44 a 48.

⁶ Foja 55 y anexo en 56 y 57.

⁷ Acuerdo en folios 58 a 65.

⁸ Página 68.

⁹ Folio 82 y anexos de 83 a 84.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA ⁸ CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO ⁹	PRUEBAS OFRECIDAS
				correspondiente del presente Proyecto de Resolución. Las pruebas ofrecidas por el partido político denunciado fueron la instrumental de actuaciones, y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

V. ALEGATOS. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho,¹⁰ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/12815/2018 ¹¹	PRI	29 de agosto de 2018	05 de septiembre de 2018 ¹²	Señaló que, en razón del poco tiempo que se le otorgó para realizar la búsqueda, no pudo concluir la búsqueda de constancias del denunciante; además, refiere que el quejoso no aporta pruebas de la afiliación indebida.
INE/JD10-VER/2801/2018 ¹³	Oscar Armando Castillo Sánchez	29 de agosto de 2018	03 de septiembre de 2018 ¹⁴	Solicitó que, en razón de que, a su parecer el partido político denunciado ha evadido dar respuesta respecto de los hechos denunciados, se le tenga por aceptando la conducta imputada.

¹⁰ Visible a fojas 85 a 88.

¹¹ Visible a foja 90.

¹² Folio 111 y 112 y anexos de 113 a 114

¹³ Página 105

¹⁴ Folio 109

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En Octogésima Quinta sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión resolvió el presente Proyecto de Resolución por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de Oscar Armando Castillo Sánchez.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado *Código*, correspondiendo al otrora *IFE* —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *Ley de Partidos*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del *INE* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al *PRI*, derivada, esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁵ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

15 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad concluye que la legislación comicial aplicable para la resolución del fondo del asunto será el ***COFIPE***.

Lo anterior, en razón de que, la *DEPPP* señaló que el registro de Oscar Armando Castillo Sánchez al *PRI* se realizó **antes del trece de septiembre de dos mil doce**, por lo que, no existe duda en el sentido de que, la conducta denunciada aconteció durante la vigencia de la ya señalada norma electoral.¹⁶

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por el quejoso y cuestionada mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PRI* afilió indebidamente o no a Oscar Armando Castillo Sánchez, quien alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en

¹⁶ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

¹⁷ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el

que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar

de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta

la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PRI*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace

necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PRI*¹⁸

...

Capítulo IV

De la Integración del Partido

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

- I. Miembros, a las **personas** ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;*
- II. Militantes, a **las y** los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;*
- III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:*
 - a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*
 - b) Hayan sido **candidatas o** candidatos del Partido, **propietarias o** propietarios y suplentes, a cargos de elección popular.*
 - c) Sean o hayan **asumido la representación** del Partido o de sus **candidatas o** candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, **de la entidad federativa**, distritales, municipales o **de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.***
 - d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.*
 - e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.*

¹⁸ Consultados en el enlace electrónico <http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2017.pdf>, el cinco de junio de dos mil dieciocho

- f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de **las candidatas y** los candidatos postulados por el Partido.*
- g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; **o***
- h) **Las y** los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y*

IV. Dirigentes, a los integrantes:

- a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo **66**;*
- b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo **66**;*
- c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X del artículo **66**; y*
- d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo **66** y el párrafo segundo del artículo **55**.*

*El Partido registrará ante las autoridades competentes a **las y** los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos.*

*El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes **Estatutos y el Código de Ética Partidaria**.*

*Las relaciones de **las personas** afiliadas entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, **así como por los principios de la ética partidaria**.*

Capítulo V

De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y **las mujeres con ciudadanía mexicana**, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La **persona que desee afiliarse** al Partido **podrá hacerlo** ante el **Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la** demarcación **territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá***

hacerlo ante el Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

*Una vez **cumplido lo anterior**, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su **afiliación**.*

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 58. La persona que se afilie al Partido adopta su vínculo activo, ideológico y programático con el Partido, protestando cumplir con los Documentos Básicos y el Código de Ética Partidaria.

Una vez afiliada en lo individual, podrá solicitar su adhesión al sector u organización que satisfaga sus intereses y necesidades.

*Las actividades de dirección política que presten **las y** los militantes al Partido no serán consideradas relaciones laborales.*

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El *PR* está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del partido.
- Podrán afiliarse al *PR* los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, expresen su voluntad de

integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.

- El Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PRI*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²¹ y como estándar probatorio²².

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

¹⁹ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²¹ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²² Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091²².

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica,

²³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, si no conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por el *quejoso*, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporado al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

Oscar Armando Castillo Sánchez		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP²⁴	Manifestaciones del Partido Político
Señaló que se encontró afiliado al partido político denunciado y que se trata de una afiliación sin su consentimiento.	Informó que Oscar Armando Castillo Sánchez si apareció en el padrón de afiliados del PRI, precisando que no contaba con fecha de afiliación en razón de que, en la temporalidad que se incorporó el registro no existía obligación de que ese dato se señalara.	<p>En sus escritos de contestación al emplazamiento, el Partido político realizó diversas manifestaciones</p> <p>En el desahogo de la vista de alegatos, el representante del partido político señaló que no fue posible concluir con la digitalización del archivo, por lo que resulta inviable y contradictorio proporcionar un estatus de afiliación.</p> <p>Asimismo, manifestó que conforme a la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional es derecho de los ciudadanos renunciar a la militancia a dicho partido, previa solicitud hecha por escrito y su ratificación dentro de los plazos señalados.</p>
Observaciones		
<p>La <i>DEPPP</i> señaló que no cuenta con fecha de afiliación, toda vez que ese dato no fue capturado por el partido político, ya que, conforme con lo establecido en el artículo Tercero Transitorio el Acuerdo INE/CG172/2016, la autoridad electoral no requería esa información para los registros que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, es decir antes del 13 de septiembre de 2012.</p> <p>Por tanto, si la autoridad competente precisó que el registro se realizó antes del trece de septiembre de dos mil doce, la temporalidad de la afiliación de Oscar Armando Castillo Sánchez, al padrón de afiliados del <i>PRI</i>, para efectos del presente procedimiento, será el doce de septiembre de dos mil doce, destacándose que se trata de un hecho no controvertido por el partido político denunciado.</p>		

²⁴ Fojas 30 y 31.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

Conclusiones
1.- El quejoso refiere haber sido afiliado al PRI sin haber otorgado su consentimiento.
2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció como afiliado del PRI.
3.- El PRI no aportó elemento alguno para acreditar que la afiliación haya sido de forma voluntaria; las manifestaciones que formuló serán analizadas en párrafos posteriores.

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PRI.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a *PRI*, en tanto que el dicho del quejoso consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Así, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que el ciudadano denunciante fue incorporado en el Padrón de Afiliados del *PRI*.

Por otra parte, el *PRI* no demostró que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de **Óscar Armando Castillo Sánchez**, debiendo reiterar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto político, pues la manifestación del quejoso, de que no dio su consentimiento para ser afiliado, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara que la afiliación que aquí se analiza se llevó a cabo libremente por el quejoso, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar error propio en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que el denunciante manifestó, en reiteradas ocasiones, no haber otorgado su consentimiento para ser incorporado como militante del partido político denunciado, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PRI* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción respectiva.

En síntesis, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral nacional requirió al *PRI* para que informara si el quejoso estaba afiliado a dicho instituto político, y en su caso, proporcionara la constancia correspondiente que permitiera acreditar que la afiliación de Óscar Armando Castillo Sánchez se realizó libremente; además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio del quejoso ni ofreció o aportó pruebas de descargo que resultaran idóneas o suficientes para eximirlo de responsabilidad.

Por el contrario, es menester mencionar que el *PRI* al contestar el emplazamiento y la vista de alegatos, realizó manifestaciones genéricas acerca de que el quejoso no aportó elemento de prueba para acreditar que su afiliación fue indebida, pero ello,

como se ha razonado a lo largo del presente estudio, no es exigible al denunciante en casos como el que se analiza, en razón de que se trata de un hecho negativo, y sí lo es respecto del partido político denunciado, conforme con los argumentos plasmados tanto en este apartado como en el que lleva por título CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

Por tanto, se advierte que el *PRI* no demostró que la afiliación de Óscar Armando Castillo Sánchez, se hubiera realizado a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento que permita constatar que dicho ciudadano hubiera dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, pues no comprobó de manera objetiva que dicha afiliación se realizó al amparo de la ley.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PRI* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar al ahora quejoso.

Por otra parte, es dable afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación del quejoso, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

Lo anterior encuentra sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Cabe destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que, **conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.**

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declara **fundado** el presente procedimiento, pues de las constancias que obran en el expediente se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Óscar Armando Castillo Sánchez quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de éste para permanecer agremiado a ese partido político.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1º de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, en el supuesto que Oscar

Armando Castillo Sánchez continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,²⁵ de cinco de enero del año en curso, sentencia en la que se concluyó la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PRI* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Oscar Armando Castillo Sánchez.

En consecuencia, al determinarse que el *PRI* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PRI*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los

²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> y <i>LEGIPE</i> en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales el ciudadano Oscar Armando Castillo Sánchez.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LEGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PR*I incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, al ciudadano respecto del que se determinó previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político no demostró que para incorporarlo medió la voluntad de éste de inscribirse como su militante, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de la ciudadanía mexicana, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales del promovente sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e insoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PR*I transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una

pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al *PRI*, el cual incluyó en su padrón de militantes al quejoso respecto del que se acreditó la conducta analizada, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, al incluir en su padrón de afiliados al *quejoso*, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éste de pertenecer a las filas de dicho instituto político.
- b) **Tiempo.** En el caso concreto, la temporalidad establecida para la afiliación indebida analizada en el presente asunto, como se razonó previamente, corresponde al **12 de septiembre de 2012**.
- c) **Lugar.** Con base en la razón plasmada en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al partido político se cometió en el estado de **Tabasco**.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRI* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRI*, como cualquier otro partido está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE* y artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE y *artículo 25*, párrafo 1, inciso a) y e) de la Ley General de Partidos Políticos.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) El quejoso aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del *PRI*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria del denunciante.
- 4) El *PRI* no demostró ni probó que la afiliación del **quejoso respecto de los que se determinó como fundada la infracción**, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI*, se cometió al afiliar indebidamente al quejoso, sin demostrar al acto volitivo de éste tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.²⁶

²⁶ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PRI*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se haya dictado con anterioridad a que se llevaran a cabo los hechos materia de la presente denuncia, es decir, antes de **septiembre de dos mil doce**.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares del caso en concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación del ciudadano a los partidos políticos, pues se comprobó que el *PRI* afilió al *quejoso*, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de tal ciudadano de pertenecer o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación del denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PRI*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PRI*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PRI*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación del hoy quejoso, lo que constituye violación a un derecho fundamental de la ciudadanía, reconocido en la Constitución.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía.²⁷

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PRI en el caso concreto*, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta

²⁷ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar. Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, y artículo 456, fracción II, párrafo 1, inciso a) de la **LEGIPE** consistente en una **MULTA unitaria respecto del ciudadano sobre quien se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en

reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración que la graduación de la sanción, es eminentemente casuística y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,²⁸ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al **PRI**.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del **COFIPE**, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la **LGIPE**, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con el año en que el *denunciante* fue afiliado, arroja lo siguiente:

PRI		
Quejoso	Salario mínimo	Monto en pesos
2012		
Oscar Armando Castillo Sánchez	62.33	40,015.86
TOTAL		\$40,015.86 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

²⁸ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por el salario mínimo vigente en el año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Así, el monto en pesos \$ 40,015.86 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$62.33 —sesenta y dos pesos 33/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 496.47 **(Cuatrocientas noventa y seis punto cuarenta y siete)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$40,015.48 (cuarenta mil quince pesos 48/100 M.N.).**

D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN

Se estima que, respecto de la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información proporcionada por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho para el *PRI* —una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de **\$62,339,025.80 (Sesenta y dos millones trescientos treinta y nueve mil veinticinco pesos 80/100 m.n.)**.

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, representa el siguiente porcentaje:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ²⁹	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
<i>PRI</i>	2012	\$ 40,015.48	1	0.06%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

²⁹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009³⁰, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE. En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, en el supuesto que Oscar Armando Castillo Sánchez continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

³⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,³¹ de cinco de enero del año en curso, sentencia en la que se concluyó la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,³² se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PRI*, por lo que respecta al ciudadano Oscar Armando Castillo Sánchez, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PRI*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, por cuanto hace al ciudadano ya precisado, del que se acreditó la falta ya señalada:**

³¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

³² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/OACS/JL/VER/208/2018

No	Ciudadano	Importe de la Multa
1	Oscar Armando Castillo Sánchez	496.47 (Cuatrocientas noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; cuyo valor neto en pesos es de \$40,015.48 (cuarenta mil quince pesos 48/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2012]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PRI**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al **PRI** para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la **UTCE**, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

QUINTO. Se da vista al **PRI** a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a un ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando TERCERO, **parte final**.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Notifíquese personalmente a Oscar Armando Castillo Sánchez; así como al **PRI**, por conducto de su representante ante este Consejo General; **por oficio**, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 3.1, mismo que fue reservado por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a quien le cedo el uso de la palabra.

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Este asunto quisiera señalar, tal como lo hice en la Comisión de Quejas, que no acompañaré la propuesta que se formula en el Proyecto de Resolución, lo anterior debido a que considero que existen elementos indiciarios que hacen pruebas indiciarias, que concatenadas entre sí, hacen prueba plena respecto de que, en el caso, y estamos en presencia de elementos que configuran violencia, si bien no política por razón de género, sí violencia que inciden en la función electoral de la Consejera Electoral que es renunciante en el presente caso. _____

Me explico: la Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, acusó haber sufrido de violencia política por razón de género, o bien, también por acoso laboral, discriminación, aislamiento o afectación de su propia función electoral, a diversos servidores públicos del Estado, entre quienes se encuentran Consejeros Electorales, Consejera Electoral, Directores o titulares del propio Instituto Electoral, representantes de partidos políticos y Magistrados del Tribunal Electoral Superior de Justicia, y del Tribunal Electoral. _____

¿Qué conductas se llevaban a cabo o cuáles son las que consideró infractoras? Es una serie y una lista completa de más de 20 conductas, sin embargo, para efectos de mi intervención, solo me referiré a una serie de conductas que tienen que ver con reuniones y participaciones de estas personas, servidoras y servidores públicos, en la que se menciona que se ejercieron cierta presión, amenazas sobre la Consejera Electoral y, a su vez, sobre otros Consejeros Electorales, a efecto de afectar las garantías de imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función como Consejera Electoral. _____

Así refiere la actora, que tuvo una reunión el 6 de noviembre del año 2015, fueron invitados a una reunión con personal del Tribunal Electoral, Magistrados del Tribunal Electoral, y que asistió a esta reunión, el Magistrado del Tribunal Electoral Superior de Justicia, entonces Presidente. _____

En esa reunión, señala la denunciante, que existieron manifestaciones de que se debía trabajar en equipo y en apoyo para favorecer a algunos de los del Gobierno en el poder. En este aspecto, en el Proyecto de Resolución se nos está presentando que no se tiene por acreditado una cosa muy importante que es, el objeto de esa reunión y las supuestas amenazas o represalias por parte del Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, hacia la denunciante, debido a que las declaraciones rendidas por los Consejeros Electorales quienes fueron llamados a procedimiento son diferentes. _____

Sin embargo, en el expediente considero que existen elementos de los cuales pruebas indirectas se pueden desprender, que si bien no está demostrado precisamente que haya una reunión específica en esa fecha, sí hay elementos en un audio en el que se advierte que los Magistrados implicados pueden estar relacionados con aptitudes que atentan contra la propia función de imparcialidad e independencia de la Consejera Electoral y los Consejeros Electorales. _____

En el Proyecto de Resolución se está partiendo de la base de un estándar probatorio que se utiliza en este tipo de procedimientos que tienen que ver que la prueba tiene mayor flexibilidad porque se está frente a casos en donde existen posibles víctimas. _____

Sin embargo, se aplica un razonamiento completamente diferente al señalar que no están acreditadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero deja de lado que en un audio que ya fue sometido a una pericial en la cual se identificó que es la voz del Magistrado implicado en una de las declaraciones, está corroborada como su voz. _____

Esta parte es muy importante porque en ese propio audio se encuentran frases en las cuales ella ha mencionado a través de su denuncia como partes del sometimiento que se le ha querido formular respecto de la forma como debe ejercer su función. _____

Si bien es cierto que son pruebas indiciarias en el estándar probatorio de este tipo de procedimientos, tiene que ser muy minucioso para la concatenación de indicios como pruebas directas. En el caso existen en este audio frases que se corresponden con la

propia forma que presenta la Consejera Electoral como parte de las amenazas que ha incurrido por parte de quienes quieren que forme un equipo y que ella se ha resistido. _ También es relevante tener en cuenta como parte de la prueba que fue un Consejero Electoral el que presentó ese audio que obra en el expediente, y que ese propio Consejero Electoral también en ciertas dinámicas y en ciertos momentos, incluso, procedió a denunciar a los propios Consejeros Electorales y formuló denuncias formales. _____

Esto es en un primer momento, el 26 de octubre del 2016, presentó su testimonio en el propio Proyecto de Resolución y después, él mismo presentó una denuncia el 22 de marzo de 2017 para hacer valer las manifestaciones y las resistencias que se tenían. _ Desde mi punto de vista existen indicios que corroboran y que deben ser investigados una parte de la invasión a la independencia e imparcialidad. Estos indicios se fortalecen con las propias acciones legales implementadas por el propio Consejero Electoral. Al estar demostrado que es coincidente la voz del audio con uno de los Magistrados, y en ese audio se hace referencia al otro Magistrado quien tiene a su cargo hacerse cargo del actuar de la Consejera Electoral denunciante, me parece que son cuestiones que no se pueden soslayar y que en un principio en el caso concreto llegan a acreditar la concatenación de indicios llegan a acreditar la afectación a la función electoral de la denunciante. _____

Además, considero que en el caso debe adminicularse con las conversaciones en la cual se señala que el Consejero Presidente del Tribunal Electoral Superior de Justicia tenía a su cargo el control de la Consejera Electoral que ahora denuncia y otros hechos que se encuentran vinculados como la falta de pago de una compensación que se dio a otros Consejeros Electorales de la cual se excluyó a la propia Consejera Electoral. _ Por tanto, propondría declarar “fundado” respecto a la Consejera Electoral denunciante y que se abriera un procedimiento para seguir investigando respecto de la función electoral y sus garantías de los demás Consejeros Electorales excepto la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

En relación con este apartado, he de señalar que no lo reservé, precisamente, porque ya lo había reservado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, sin embargo, comparto los términos del planteamiento que ha formulado._____

Me parece que hay varias cuestiones que es importante analizar en relación con este expediente._____

Sin duda, creo que no se puede soslayar que se rezaga un conjunto amplio de diligencias de investigación en los términos de la litis que se planteó y lo que el propio Tribunal Electoral nos ordenó que teníamos que investigar, es decir, generando una línea hacia identificar si estábamos o no ante un caso de violencia política en razón de género y en esa parte coincido que, no hay elementos en el expediente que nos lleven a que la violencia política que, en su caso, pudo haber existido fuese en razón de género._____

Sin embargo, sí existen un conjunto de constancias en el expediente que generen indicios que, coincido en que deben de ser investigados, el audio al que hace referencia la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, es un audio de una conversación entre el entonces Magistrado Presidente y uno de los Consejeros Electorales que denota una intención de incidir, de afectar el ejercicio de la función electoral y, efectivamente, existe un peritaje a través del cual se reconoce la voz que obra en ese audio, y me parece que estos son elementos que no podemos dejar de mirar a luz de esta posible afectación y aquí manejando una línea muy clara._____

La posición no supone un prejuzgamiento sobre el alcance que tendría o el resultado que tendría la investigación sino la necesidad de investigar cuando se tienen elementos como los que tenemos presentes en el expediente y mirar los elementos que, al menos indiciariamente sí están acreditados en el expediente, que el propio Proyecto de Resolución señala que no acreditan violencia política en razón de género, pero que

pueden dar, pueden llevar a una interpretación distinta si se miran a la luz de estos otros elementos, es decir, de la búsqueda de la afectación a la esfera de la función electoral y el desempeño de las propias Consejeras y Consejeros Electorales a partir de esos actos o esa posible actitud que enfrentaron. _____

Me parece que esto, como lo señala la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, hay elementos que vistos a la luz de la lógica que se está planteando, nos pueden llevar a conclusiones distintas y, ¿a qué me refiero?, de pronto en el Proyecto de Resolución se concluye que, si bien en relación con tal información que pidió la Consejera Electoral, no se le entregó de inmediato, pero sí se le entregó con una dilación mínima, o una dilación que no fue tan relevante. _____

Ciertamente, hay información, documentación, cuestiones que la Consejera Electoral denuncia que pidió y que no recibió respuesta con la oportunidad que sería debida, que en sí mismas tal vez no pueden tener una explicación, el problema es cuando se empiezan a identificar todas en su conjunto, cuando se advierte, por ejemplo, el caso que sí está implicando una vista que tiene que ver con la falta de la compensación, que no recibieron ni la Consejera Electoral ni otro Consejero Electoral. _____

Es decir, solamente 2 Consejeros Electorales no recibieron la compensación, pero me parece que de pronto se puede señalar, no hay una violencia en razón de género porque no solamente fue la Consejera Electoral, también fue un Consejero Electoral, incluso un Consejero Electoral hombre. _____

Nada más que, creo que lo que no podemos obviar es que, no nada más no recibieron la compensación, no recibieron la compensación durante 2 años, es decir, si bien podría haber habido un error administrativo que cualquiera de nosotros podría comprender, cuando un error administrativo tarda 2 años en corregirse, y cuando dentro de estos 2 años ya hubo una denuncia, ya hubo una queja presentada ante la institución, ya hubo requerimientos de la propia Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y aun así se tardan 2 años en pagar una compensación, me parece que lo que se advierte también son indicios de una intencionalidad en ese actuar. _____

Hay elementos para decir que esto no fue algo circunstancial, y la propia investigación que señala la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, me parece que tendría que tomar ése actuar, al igual que los demás elementos. _____

Creo que es importante que cuando se plantea en el Proyecto de Resolución, pareciera que la responsabilidad de no haber dado esa compensación, se reduce a las áreas administrativas. Perdón, pero hay una Consejera Electoral Presidenta que es la encargada de llevar la administración del propio Organismo Público Local. _____

Si las áreas administrativas tardan 2 años en cumplir con una compensación que ya recibieron el resto de los Consejeros Electorales, que casualmente son el resto de los Consejeros que, según esta conversación, habría participado de forma inadecuada, y los 2 que no lo recibieron son los que no se habrían querido someter a esa condición, indiciariamente, con los elementos que hay. _____

Pero, creo que estos son elementos que no pueden obviarse, una responsabilidad también de quien está encargada de la administración del Instituto, y que no puede dejarse la responsabilidad en quienes ejercen las funciones ejecutivas dentro del Organismo Público Local Electoral, por lo que no acompañaré el Proyecto y acompañaré a la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala en este caso. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA. _____

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

Creo que, soy el único que está en esta mesa que ha sido 3 veces representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a mí me ha tocado mucho tiempo estar en Chetumal, los conozco, lo que tienen es lo que pasa allá porque se sienten dueños del poder y también son las herencias de los estertores borgistas. ____

Así es como se maneja la política en Quintana Roo, bajo la coacción, bajo no te doy lo que a tus derechos tienes, a mí me ponchaban llantas, me bajaban la luz, me iban a notificar a las 03:00 horas, cuando no había problema podían notificar a las 07:00 horas. Ese es el estilo Chetumal, ese es el estilo que se lleva allá en la política y en estas formas de coacción. _____

No lo permitan, y también Consejeras y Consejeros Electorales, no crean todo lo que el status quo va y narra de normalidad allá, a mí me tocó estar un día en el registro de partidos políticos y llegaban nos quitaban el medidor de la luz para dejarnos sin energía eléctrica para no poder registrar. Así se las gastan allá, esas son las formas, a 3 cuadras de la casa de Gobierno. _____

Esas son las formas en Quintana Roo de coaccionar. _____

Luego cuando vienen y les denuncian, hay quien se molesta, incluso, dice que lo que se cuenta no es cierto. Entonces tienen que venir pruebas de este calibre, grabaciones, elementos de convicción para que se tome en cuenta. _____

Nos vamos a tardar un tiempo en Quintana Roo en desenquistar este tipo de herencia del autoritarismo, parece que en Quintana Roo el tiempo se detuvo y además era la forma de construir el Estado, un Estado muy rico. _____

Nosotros estamos preocupados por el sentido en el que viene el Proyecto de Resolución, creo que las Consejera Electoral tienen mucha razón en señalarlo, llamaría a otros Consejeros Electorales a no ser tan solícitos y no acudir a la razón de estado electoral de esta razón de, “es que son órganos que nosotros nombramos y nosotros tenemos que más o menos guiarlos y tutelarlos”. No, ellos no honran ese tipo de deferencias que ustedes les tienen. _____

Si esto queda impune, solo es otra marca más de que se puede continuar de manera progresiva. _____

Nosotros no vamos a acompañar el Proyecto de Resolución como está, no sé cómo vaya a quedar la votación, pero sí los invitamos a reflexionar sobre esas circunstancias, que he estado allá, creo que soy el único de la mesa que he estado allá suficiente tiempo. Se los digo, esto no es ni una décima parte de lo que allá pasa y las formas en las que se gastan las cosas. _____

Quizá sea el aislamiento, el creer que no hay control, es el único Estado de la unión que tiene un Consejero Presidente destituido por no tener un modo honesto de vivir y no poderlo reelegir, JRC1 y JRC5/2009, porque desacató la instrucción de la Sala Superior de redistribuir, y lo protegieron y le regalaron una notaría. Esas son las formas. Invitaría a reflexionar seriamente sobre esto. _____

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Tiendo a coincidir con lo manifestado por las Consejeras Electorales que me han antecedido en el uso de la voz. _____

Primero, quiero hacer una consideración meramente procedimental con relación a este asunto. _____

Estoy convencida que un Procedimiento Ordinario Sancionador, no es la vía idónea para conocer de quejas en contra de Consejeros o Consejeras Electorales de un Instituto Electoral Local. _____

Tenemos un procedimiento específico para esos efectos que es el procedimiento de remoción de Consejeros Electorales. _____

Ahora, no me queda del todo claro que en este caso específico haya sido una determinación de la Sala Superior lo que nos haya orillado a conocer este asunto por la vía ordinaria sancionadora. _____

Lo que ocurrió es que se formó un cuaderno de antecedentes y en éste se determinó que no había elementos suficientes para iniciar un procedimiento. _____

La quejosa acude al Tribunal Electoral y éste nos ordena iniciar un Procedimiento Sancionador, no especifica. _____

Aquí se inicia un Procedimiento Ordinario Sancionador contra algunas de las personas denunciadas por ella. _____

Ella de nueva cuenta acude al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral nos ordena que emplacemos al Procedimiento Ordinario Sancionador a todas las personas que ella había denunciado. _____

La vía nunca fue materia de impugnación, por lo tanto, no se pronunció la Sala Superior con relación a este tema. _____

Entonces, creo que nosotros elegimos la vía y reitero, desde mi punto de vista, esa no es la vía idónea para poder iniciar ese tipo de procedimientos. _____

El otro tema que me preocupa con este asunto, tiene que ver con la vista. _____

Estamos ordenando una vista al Órgano Interno de Control. No se especifica en contra de quien es la vista. Sin embargo, sí queda claro cuál es el motivo de esta vista. Es no haberle dado una compensación que sí se le entregó a casi todos los demás Consejeros y Consejeras Electorales y no haberle dado esta compensación en un periodo de 2 años, aún y cuando ya se había iniciado este procedimiento, por ejemplo, la Consejera Presidenta estaba plenamente consciente de que ella no había recibido esta compensación, no se le daba todavía. Entonces, se está dando esta vista por ese motivo. _____

Sin embargo, cuando se correlaciona con el Considerando 6, es el Resolutivo donde se da la vista y al ver el Considerando 6, lo que se advierte es que se está excluyendo prácticamente de responsabilidad a la Consejera Presidenta. _____

¿Qué quiero decir? Que aunque no estaba diciendo contra quién se tendría que iniciar el procedimiento de responsabilidades, sí hay una especie de prejuizgamiento, es decir, que la Consejera Presidenta no tuvo ninguna intención de no darle esta compensación. Incluso dice de manera expresa en la página 367: “No es posible afirmar que la Presidenta ordenó intencionalmente la exclusión de la entrega de la compensación en su perjuicio”. _____

En pocas palabras, aún y cuando analizara la conducta de la Consejera Presidenta el Órgano Interno de Control, ya desde aquí estamos diciendo que no hubo dolo. No podría acompañar esa parte. _____

Otra cuestión que tiene que ver un poco más con lo que comentaba la Consejera Electoral Claudia Zavala en cuanto a la adminiculación de todas las pruebas que obran

en el expediente y que me lleva a una reflexión, cuál es el estándar probatorio que se requiere para poder acreditar un hostigamiento, acoso sexual o laboral. _____

Desde mi punto de vista, la única prueba contundente que podría presentarse, sería una grabación en donde a lo mejor la víctima propicie la actuación del victimario. _____

Si nosotros ponemos ese estándar de prueba que sería el único indiscutible, ésta sería una prueba violatoria de derechos humanos, porque le estaríamos exigiendo a la víctima que se coloque en una situación que puede poner en riesgo por lo menos su integridad psicológica, pero incluso su integridad física. Eso no lo podemos permitir. _____

Así es que el propio Proyecto de Resolución lo que dice es que en casos como éste no se pueden exigir pruebas directas. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta los dichos de la víctima frente al contexto, haciendo una administración con todos los elementos probatorios, a mayor abundamiento la Sala Superior nos dijo que teníamos que hacer un análisis de los hechos en un contexto integral. _____

En este asunto no advierto que estemos haciendo ese análisis, sí veo un análisis muy puntual de cada una de las pruebas pero, al final de cuentas es un análisis aislado que no se puede permitir en casos como estos en los que se está denunciando violencia política contra las mujeres, por razón de género, acoso laboral, discriminación y aislamiento; y desde el punto de vista de la promovente este aislamiento la lleva a una afectación en la función electoral. _____

La denunciante, dice que algunos Magistrados Electorales Locales ejercieron presión sobre ella y otros Consejeros Electorales, con la finalidad de mermar su independencia, autonomía y objetividad, al respecto la Consejera Electoral, por ejemplo, alude una reunión que tuvo con uno de los Magistrados que dice que ejerció presión sobre ella, y a la que también fueron otros Consejeros Electorales. _____

Desde luego, se puede acreditar que ocurrió esa reunión, se puede acreditar que se le acercó el entonces Magistrado Presidente del Tribunal, pero obviamente nadie puede decir, qué fue exactamente lo que le dijo cuando se le acercó. _____

Ella dice que después de esa reunión, recibió una llamada telefónica de otro Magistrado amenazándola y diciéndole que tenía que obedecer, desde luego, hay testigos que

vieron que sí recibió efectivamente una llamada, pero nadie puede constar qué fue lo que se le dijo en esa llamada. _____

Estos elementos no se pueden ver de manera aislada, se tienen que ver, por ejemplo, a la luz de una grabación de la conversación entre un Consejero Electoral y el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Local, que dicho sea de paso, fue revisado por una pericial y ya se determinó que efectivamente es la voz del entonces Magistrado Presidente y del Consejero Electoral. _____

En esta grabación y lo que tiene que ver con este caso es, se dijo que se tenía que aislar a la Consejera Electoral, se le dice al Consejero Electoral con el que está hablando literal, que Claudia como Consejera no vale, con palabras altisonantes, no vale nada, que Claudia se quede sola, Claudia es infantil, que empiece a cacaraquear sola. _____

El problema de esto es que cuando lo vemos con el conjunto de cosas que ella denuncia, tiene veracidad estas declaraciones, esto sumado a que pasaron como lo comentaba más de 2 años para que a ella se le diera una compensación que se le dio prácticamente al resto de los Consejeros Electores. _____

Cómo no pensar en un contexto de acoso y violencia, cuando ella denuncia violencia política por parte de un funcionario del Instituto Electoral Local, y cuando comparece ante la Procuraduría del Estado, ve que quien está defendiendo a ese funcionario son personas que trabajan en el propio Instituto. _____

Cómo no pensar en un contexto de acoso y violencia, cuando recibía mensajes de texto anónimos, en donde le advertían que estaban promoviendo en contra de ella muchas quejas en la Contraloría motivadas por Consejeros Electorales. _____

En lo que sí coincido con el Proyecto de Resolución es que no se logra acreditar la violencia política por razón de género, no se advierte que el hecho de que sea mujer, sea lo que esté propiciando esta violencia. Sin embargo, sí veo un contexto de acoso laboral. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, porque creo que tenemos que ser muy claros de qué fue lo que se denunció y cómo se aportó la prueba que se ha estado mencionado en esta sesión. _____

Efectivamente, la Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral de Quintana Roo denuncia, un supuesto acoso laboral y de violencia política por razón de género y alega de que un Magistrado que en ese momento era el Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo fue una de las personas que originó esta circunstancia y ella refiere de manera concreta una situación, habla de una reunión que tuvo verificativo el 6 de noviembre del año 2015 con los demás integrantes del Organismo Público Local Electoral y esta persona que en ese momento era Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. _____

En relación con esto, creo que sí puede estar acreditada, que sí se llevó a cabo esa reunión del 5 de noviembre del año 2015, que la persona platicó con los Consejeros Electorales, pero no algún tipo de presión o de acoso en relación con la denunciada. ____

Después nosotros en el expediente lo que hacemos es, precisamente, investigar sobre todos los hechos denunciados y se requiere a varios de los Consejeros Electorales que asistieron a esa reunión de noviembre del año 2015 para saber qué había sucedido en esa reunión y esto lo resalto, porque en este momento, precisamente, se requiere el día 20 de octubre de 2016 a esta persona que aporta la grabación que se llama Sergio y él solamente narra lo que él vio que aconteció ese día en la reunión del 6 de noviembre del año 2015, pero nunca aporta ningún tipo de grabación ni alega lo que después supuestamente ocurrió a solas con el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo en relación con Sergio y el propio, entonces, Presidente que supuestamente sucedió en diciembre del año 2015 y eso hay que dejarlo claro, porque se supone que si ya había ocurrido esa circunstancia, esa conversación que esta persona grabó, lo natural era que cuando se le requiere en octubre de 2016 sobre algún aspecto que tenga que ver con algún tipo de acoso o violencia en contra de la denunciante, lo natural

era que en ese momento esta persona aportara la grabación, pero no lo hace, ni siquiera menciona alguna circunstancia en relación con la conversación que posteriormente Sergio tuvo con el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. _____

Entonces, creo que hay que tener muy claro esto porque no se le puede dar de ninguna manera un valor probatorio pleno a esa prueba y también tenemos que leer con mucho detenimiento lo que dice la pericial del audio. _____

La pericial del audio dice: Efectivamente, sí corresponden a las voces de Sergio y del entonces Presidente del Tribunal Electoral del Quintana Roo, pero aquí dice y lo leo, para la gente que lo quiera consultar, dice: “No corresponde a la especialidad de análisis de voz determinar si el material analizado es íntegro o se encuentra editado”. _____

Entonces, creo que nosotros ni quiera podríamos tener la seguridad de que este audio no fue editado. _____

Ahora, me preguntaría, si tengo una experiencia que ocurrió en diciembre del año 2015, y luego el Instituto Nacional Electoral me está requiriendo sobre información en octubre de 2016, ¿por qué no aportó esta grabación?, y sobre todo también porque esta persona, que supuestamente también fue presionado por este Magistrado, se tarda más de un año y meses en hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando esa circunstancia ya había pasado y también ya, inclusive, estaba la propia denuncia de la quejosa y que es el asunto que hoy nos ocupa. _____

Entonces, creo que nosotros no podemos darle un valor probatorio, salvo de un simple indicio, que se desvirtúa, o sea, que más bien no tiene la suficiente fuerza con otros elementos para llegar a acreditar lo que se dijo en esa grabación de diciembre del año 2015, de la cual ni siquiera la denunciante tenía conocimiento, ni la hace valer en su denuncia ni en ninguna otra circunstancia para tratar de adminicular los hechos. _____

Entonces, creo que esta prueba hay que darla con mucho cuidado como se está viendo en el Proyecto, no hay una inmediatez en la presentación, a pesar de que supuestamente esta persona ya tenía la grabación. También, a mí me causa mucha duda que no haya denunciado de manera oportuna, la supuesta ahora sí que presión

que estaba recibiendo del entonces Presidente del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo. _____

Por eso, coincido con el Proyecto de Resolución, y nada más tener muy claro qué es lo que está sucediendo, y vuelvo a repetir, la pericial sí dice que son las voces de las personas, pero dice que no puede acreditar ni afirmar que esa grabación no se encuentra editada. _____

Ahí también viene la otra pregunta, ¿por qué no se hacen los...? o sea, ¿por qué no se hizo ante la FEPADE?, por qué se hizo una pericial que se llevó a cabo ante la FEPADE, por qué no hacen..., o sea, ¿por qué no estuvieron exigiendo el estudio completo también, de esa grabación? _____

También creo que no porque algunas personas en alguna conversación estén diciendo circunstancias, eso necesariamente quiere decir que sea verdad lo que ellos están afirmando. Creo que, nosotros como Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, somos objeto a veces de algún tipo de crítica, de comentario, en relación con lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente quiere decir que esto sea cierto, necesitamos tener pruebas que sean contundentes para estar llegando a una conclusión. _____

Pero, además, tampoco digo que no tenga ninguna importancia la grabación, claro que la tiene, pero no puede acreditar que es cierto lo que se está diciendo, precisamente en esa grabación, y creo que también está salvada esa parte porque se está dando una vista al Tribunal Administrativo en Quintana Roo para que haga las investigaciones correspondientes, si es que hubiese algún tipo de irregularidad. _____

Sería cuanto Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Quisiera también reiterar la bienvenida a esta mesa del Consejo General, a quienes se incorporan como representantes del Poder Legislativo. _____

Este Proyecto de Resolución del Consejo General, fue materia de mucho análisis y discusión en el seno de la Comisión de Quejas y Denuncias. Esencialmente lo que se denuncia es una conspiración, es decir, el involucramiento de muchos actores con el fin de excluir, aislar a una Consejera Electoral. _____

Se denuncia una relación bastante larga de hechos que en opinión de la quejosa comprueba, o demuestran a una variedad de actores relacionados con el Instituto, se pusieron de acuerdo, conspiraron para impedirle el ejercicio pleno de sus funciones como Consejera Electoral. _____

Se hicieron un número importante de diligencias, finalmente se hizo una pericial para determinar si una de las pruebas aportadas correspondía efectivamente a la voz del Magistrado Presidente. _____

Creo que lo que hace el Proyecto es tratar de sacar en limpio lo que se puede sacar en limpio a partir de las pruebas existentes y también a partir de la competencia del Instituto Nacional Electoral y de lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en sus sentencias. _____

Esencialmente que está comprobado que el pago de la compensación económica por el Proceso Electoral no se realizó y, por lo tanto, lo que propone la Comisión de Quejas y Denuncias de este Consejo General es que le demos vista a la autoridad correspondiente, que es el Órgano Interno de Control del propio Instituto por los hechos, sin excluirle de responsabilidad ni atribuirle responsabilidad a nadie, ni a la Consejera Presidenta ni a nadie más, le estamos dando vista para que investigue y haga el deslinde de responsabilidades, este Proyecto no prejuzga las responsabilidades individuales de quienes pudieran haber incurrido en alguna falta por los hechos que sí están demostrados y por los cuales estamos dando vista. _____

Respecto a la conversación que efectivamente el peritaje que ordena la Unidad de lo Contencioso Electoral, muestra que es la voz del Magistrado Presidente, pero con la aclaración de que no se puede saber si esa pericial fue editada, fue modificada de alguna forma en su contenido, ¿por qué? Porque se requieren elementos adicionales a la simple comprobación de que es la voz del Magistrado para inferir de forma válida que lo que se dice en esa conversación prueba algo. _____

Lo que se narra en la conversación, no necesariamente es cierto. Se narran cosas en la conversación que son improbables y no sirve para validar la acusación que presenta la quejosa de que fue objeto de violencia política de género; y por esa razón el Proyecto de Resolución concluye declarando infundada la queja. _____

Dando la vista correspondiente al Tribunal Electoral Administrativo, por lo que concierne al Magistrado, para que el Tribunal Electoral Administrativo, siendo la autoridad competente para resolver sobre un funcionario del Tribunal Electoral Local, haga las investigaciones adicionales que tienen que hacerse y tome las medidas que de acuerdo con la Ley correspondan. _____

Me parece que el Instituto hizo la investigación más amplia posible, trató de corroborar los indicios presentados por la quejosa, pero la conclusión es ésta y por eso no estoy de acuerdo, lo estuve en la Comisión de Quejas y Denuncias, lo estoy, lo sigo estando de declarar infundada la queja, dar las vistas correspondientes a las autoridades que pueden ya sea sancionar o continuar con la investigación, por lo que corresponde a lo que sí se pudo demostrar como resultado del trabajo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Consejero Electoral Benito Nacif, el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro, con mucho gusto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA. _____

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Nada más no me quedó claro una cuestión cuando mencionó la palabra improbables. _

Se refería a que eran improbables por cuanto a que no podían probar o eran improbables por cuanto a que no podían suceder las cosas que se consignaban, tanto en las grabaciones como en los hechos que se denunciaban. _____

Por su respuesta, muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Las 2 cosas. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Secretario del Consejo, ya que no hay más intervenciones le pido que tome la votación que corresponde. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 3.1. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

7 votos. _____

¿En contra? 4 votos. _____

Aprobado el Proyecto de Resolución por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1350/2018) Pto. 3.1 _____

INE/CG1350/2018

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO**

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

QUEJOSO: CLAUDIA CARRILLO GASCA,
CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO

DENUNCIADOS: MAYRA SAN ROMÁN
CARRILLO MEDINA, JUAN MANUEL PÉREZ
ALPUCHE, CONSEJEROS ELECTORALES
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR INSTAURADO POR CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN CONTRA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL PROPIO INSTITUTO, JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE, THALÍA HERNÁNDEZ ROBLEDO; ASÍ COMO DE ALFREDO FIGUEROA OREA, TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL; JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NOLASCO, DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN; LUIS ALBERTO ALCOCER ANGUIANO, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y VÍCTOR MANUEL INTERIÁN LÓPEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL INSTITUTO ELECTORAL REFERIDO, ASÍ COMO DE ARMANDO MIGUEL PALOMO GÓMEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MAURICIO MORALES BEIZA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, TODOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL MISMO INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, TODA VEZ QUE DEL ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS NO SE ADVIERTE QUE EXISTAN ELEMENTOS QUE PERMITAN A ESTA AUTORIDAD CONCLUIR QUE LOS ACTOS U OMISIONES ATRIBUIDAS A LOS SUJETOS DENUNCIADOS CONSTITUYAN, ACOSO

LABORAL O VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO EN CONTRA DE LA QUEJOSA

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Constitución General	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IEQROO	Instituto Electoral de Quintana Roo
INE	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
PNA	Partido Nueva Alianza
Protocolo	Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
TEQROO	Tribunal Electoral de Quintana Roo
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
-------------	---

A N T E C E D E N T E S

I. INICIO DEL PROCEDIMIENTO¹. El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la *UTCE*, escrito original de la queja firmado por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, quien hace del conocimiento de esta autoridad hechos que, en su concepto, podrían constituir violencia política contra las mujeres, lo que se traduce en violaciones a la normativa electoral.

II. ACUERDO DE RADICACIÓN Y APERTURA DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES.² El seis de septiembre del dos mil dieciséis, el Titular de la *UTCE* registró la queja que nos ocupa, acordó la radicación y la apertura de un cuaderno de antecedentes.

Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo , para que proporcionara la siguiente información: a) Si la Procuraduría General de Justicia de referencia, inició algún procedimiento de investigación en contra de Claudia Carrillo Gasca. b) En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento que antecede, indique el número de averiguación previa y señale de forma clara los hechos que motivaron dicho procedimiento de investigación en contra de Claudia Carrillo Gasca.	El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta del Vice Fiscal de la zona Sur de la Fiscalía General del Estado, a través del oficio FGE/DFG/01004/2016 ³

¹ Visible a fojas 5 a 52, del anexo 1.

² Visible a fojas 302 a 336, del anexo 1, del expediente.

³ Visible en la foja 414, del anexo 1, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
c) Indique cual fue la determinación, fallo o veredicto final en el procedimiento sustanciado en contra de Claudia Carrillo Gasca.	
SOLICITUD DE LA FUNCIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL Se solicita que se constituya en el domicilio señalado por la quejosa y certifique, de los mensajes texto aludidos en su escrito de queja, lo siguiente: fecha y hora de su recepción, contenido, número de teléfono del destinatario y del remitente, así como cualquier otra circunstancia que considere relevante, como fotografía de perfil, etcétera.	El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta del Director del Secretariado de este Instituto, a través del oficio INE/OE/DS/OC/0/082/2016 ⁴
Se requirió a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Si ejerció el derecho de réplica ante los medios de comunicación impresos y digitales que señala en su escrito de queja. b) De ser afirmativa al cuestionamiento que antecede, indique si fue publicada su réplica en los medios de comunicación de referencia.	El doce de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Claudia Carrillo Gasca, a través del oficio CE/CCG/060/16 ⁵

III. ACUERDO DE CIERRE DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES.⁶ El diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, se acordó no iniciar procedimiento administrativo sancionador respecto de las conductas referidas en la queja, ya que no se acreditó alguna conducta que pudiera vulnerar la normatividad electoral respecto a la presunta violencia política por razón de género.

IV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN SUP-JE-102/2016:⁷ El diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, la Sala Superior del *TEPJF*, emitió sentencia en la que determinó revocar el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para los siguientes efectos:

(...)

6. Efectos de la presente ejecutoria.

Como consecuencia de lo razonado en esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá:

I. Pronunciarse de inmediato sobre las medidas pertinentes en relación con los hechos y con apoyo en el Protocolo Para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, lo cual deberá hacer del conocimiento de esta Sala Superior por la vía más expedita.

⁴ Visible en la foja 360, del anexo 1, del expediente.

⁵ Visible en la foja 381, anexo 1, del expediente.

⁶ Visible a fojas 546 a 558, anexo 2, del expediente.

⁷ Visible a foja 633 a 669, anexo 2, del expediente.

II. A la brevedad posible, hacer un examen integral y contextual de todo lo planteado en la denuncia primigenia, en función de la hipótesis que se sostiene en la acusación, desde una perspectiva de género, considerando, incluso, la necesidad de ordenar otras diligencias previas, relacionadas con todos los sujetos denunciados, a efecto de que esté en aptitud de tomar una decisión informada respecto a si debe o no iniciar un procedimiento administrativo sancionador y dictar el nuevo acuerdo que corresponda, hecho lo cual, deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de lo ordenado.

Cabe precisar, que lo decidido en esta ejecutoria no prejuzga respecto de la competencia que pueda o no corresponder a la autoridad responsable, para conocer respecto de los actos atribuidos a un Magistrado del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, lo cual deberá ser determinado por dicha autoridad, a partir del examen integral y contextual que aquí se ordena y de las diligencias que, en su caso, decida practicar.

(...)

V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y MEDIDAS PRECAUTORIAS⁸. El veinte de octubre del dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida por la Sala Superior del *TEPJF*, dentro expediente SUP-JE-102/2016 y de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del *Reglamento de Quejas*, se ordenó continuar la investigación preliminar de los hechos denunciados, para en su caso, iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Asimismo, se dictaron medidas precautorias como tutela preventiva, con el propósito de evitar mayores daños a la víctima y evitar que éstos sean irreparables.

Las diligencias de investigación preliminar ordenadas consistieron en lo siguiente:

ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS ⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Precise si el 6 de noviembre de 2015, asistió junto a los Consejeros Electorales integrantes del IEQROO al Tribunal Electoral de la entidad federativa de referencia. b) De ser afirmativo, indique la razón y/o motivo por el cual asistió al TEQROO, e invitó a los Consejeros Electorales.	El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del

⁸ Visible a fojas 670 a 683, del anexo 2, del expediente.

⁹ Visible en la foja 695, del anexo 2, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>c) Señale cuál fue el objetivo de la reunión o evento y con quién se realizó dicha reunión o evento.</p> <p>d) Indique si dentro de dicha reunión Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del <i>TEQROO</i>, les dijo “que su puesto se lo debían a él, al magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal y al gobernador del estado”.</p> <p>e) Finalmente precise si dicho funcionario público sugirió que se hicieran lineamientos contrarios al Instituto Nacional Electoral o a la Ley Electoral.</p> <p>f) Informe si en sesión pública del treinta de junio del presente año, intentó convencer a Claudia Carrillo Gasca de desistir de ser miembro del Comité de Transparencia, y, de ser el caso, indique las razones que motivaron dicho acto.</p> <p>g) Indique si excluyó a Claudia Carrillo Gasca de diversas actividades llevadas a cabo los días seis, siete y ocho de mayo del presente año en Cancún, Quintana Roo, o bien, de alguna otra actividad a realizarse durante el proceso electoral pasado.</p> <p>h) Informe si se ha realizado algún curso de capacitación al personal adscrito al Organismo Público Local Electoral que preside, respecto del Protocolo para Atender la Violencia Política en contra de las Mujeres.</p> <p>i) Indique bajo qué metodología decide cuál Consejero asiste a que evento, y cómo se comunica a los demás Consejeros la Agenda de eventos nacionales e internacionales.</p> <p>j) Informe qué medidas ha implementado el <i>IEQROO</i> para prevenir, sancionar o erradicar la violencia política contra las mujeres, el acoso sexual y laboral al interior de dicho instituto.</p>	<p><i>IEQROO</i>, a través del oficio PRE/815/2016¹⁰</p>
<p>Se requirió a Jorge Armando Poot Pech, Thalía Hernández Robledo, y Sergio Avilés Demeneghi, Consejeros Electorales del <i>IEQROO</i>, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Precise si el 6 de noviembre de 2015, asistió junto a otros Consejeros Electorales integrantes del <i>IEQROO</i> al Tribunal Electoral de la entidad federativa de referencia.</p> <p>b) De ser afirmativo, indique la razón y/o motivo por el cual asistió al <i>TEQROO</i>.</p> <p>c) Señale cuál fue el objetivo de la reunión y con quién se realizó la misma.</p> <p>d) Indique si dentro de dicha reunión Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del <i>TEQROO</i>, les dijo “que su puesto se lo debían a él, al magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal y al gobernador del estado”.</p> <p>e) Finalmente precise si dicho funcionario público sugirió que se hicieran lineamientos contrarios al Instituto Nacional Electoral o a la Ley Electoral.</p> <p>f) Indiquen si participaron en las actividades realizadas los días 6, 7 y 8 de mayo en Cancún, Quintana Roo.</p> <p>g) Informen, si tienen una agenda nacional e internacional de eventos, y cómo se decide quién asiste a cada evento.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Jorge Armando Poot Pech¹¹ y de Thalía Hernández Robledo.¹² Consejeros Electorales del <i>IEQROO</i></p> <p>El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Sergio Avilés Demeneghi Consejero Electoral del <i>IEQROO</i>, a través del oficio CE/SAD/081/16¹³</p>
<p>Se requirió a Juan Manuel Perez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, Consejeros Electorales del <i>IEQROO</i>, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Informe si conoce al Licenciado Carlos Alejandro Lima Carbajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</p> <p>b) Indique si entre sus contactos cuenta con el teléfono del Lic. Lima Carbajal.</p> <p>c) Precise si le consta que el 6 de noviembre de 2015, el Licenciado Carlos Alejandro Lima Carbajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado, le hizo una llamada telefónica a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i>.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Juan Manuel Perez Alpuche, a través del oficio CE/JMPA/029/2016.¹⁴</p>

¹⁰ Visible en la foja 1777, del anexo 4, del expediente.

¹¹ Visible en la foja 1371, del anexo 3, del expediente.

¹² Visible en la foja 1894, del anexo 4, del expediente.

¹³ Visible en la foja 1561, del anexo 4, del expediente.

¹⁴ Visible en la foja 1898, del anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>d) De ser afirmativo, y de ser el caso, señale el contenido la conversación que presuntamente sostuvieron Carlos Alejandro Lima Carvajal y Claudia Carrillo Gasca.</p> <p>e) Indique si es de su conocimiento que Claudia Carrillo Gasca ha sido amenazada y, de ser el caso, por quién y bajo qué contexto.</p>	<p>El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Sergio Avilés Demeneghi Consejero Electoral del IEQROO, a través del oficio CE/SAD/081/16¹⁵</p>
<p>Se requirió a Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Precise si su número telefónico corresponde a 9988454946.</p> <p>b) Señale si conoce a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, de ser afirmativo indique la relación que tiene con ella.</p> <p>c) Indique si el 6 de noviembre de 2015 sostuvo una llamada telefónica con Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, de ser afirmativa la respuesta, indique el motivo de la misma. Indique si ha intercambiado mensajes de texto con Claudia Carrillo Gasca y de ser el caso, el motivo de los mismos.</p>	
<p>Se requirió a Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del TEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique si el 6 de noviembre de 2015 se reunió con los Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina, Claudia Carrillo Gasca, Thalía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.</p> <p>b) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, informe el motivo o razón de dicha reunión.</p> <p>c) Diga si sostiene regularmente reuniones con los consejeros y consejeras del Organismo Público Local y con qué finalidad las lleva a cabo.</p> <p>d) Informe si existe algún mecanismo de colaboración entre el Organismo Público Electoral Local y el Tribunal que preside, para la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores.</p> <p>e) De ser afirmativa la respuesta, indique de qué se trata dicho mecanismo y si el mismo está formalizado por algún instrumento jurídico de colaboración.</p> <p>f) Informe si ha declarado públicamente ser "el Octavo Consejero Electoral", y de ser caso, bajo qué contexto lo ha hecho.</p> <p>g) Si José Carlos Cortés Mugartegui y José Alberto Muñoz Escalante, laboran en el Tribunal Electoral que preside, y de ser el caso, indique su puesto y funciones.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente el TEQROO, a través del oficio TEQROO/MP/215/2016¹⁶</p>
<p>Se requirió a Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Si declaró a la prensa que existen pruebas y evidencias en contra de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO por abuso de autoridad.</p> <p>b) En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento que antecede, informe si tiene en su poder dichas pruebas y, en su caso, cómo las obtuvo.</p> <p>c) Si el dos de junio de dos mil dieciséis, en la sesión pública del Consejo General del IEQROO refirió lo siguiente: "... en algún momento de alguna sesión lo señalé, que me parecía escuchar algunos integrantes de este consejo general, ser representantes de partidos políticos y no representantes ciudadanos..." y de ser el caso, indique a qué integrante de ese Consejo General se refirió.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IEQROO.¹⁷</p>

¹⁵ Visible en la foja 1561, del anexo 4, del expediente.

¹⁶ Visible en la foja 1259, del anexo 3, del expediente.

¹⁷ Visible en la foja 1042, del anexo 3, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>d) Informe si de manera regular, cuestiona el voto en contra de los Consejeros Electorales del IEQROO.</p> <p>e) Informe si en algún momento dijo o insinuó a la Consejera Claudia Carrillo Gasca “<i>que seguro le da las nalgas al candidato del PRD-PAN</i>” o comentario ofensivo similar. De ser el caso, indique bajo qué contexto lo hizo.</p>	
<p>Se requirió a Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del PNA ante el Consejo General del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique si en alguna sesión del Consejo General se manifestó en contra de las personas que provienen de otros lugares de la República Mexicana. De ser el caso, indique a qué consejeros se refería al señalar dicho argumento, y el contexto de dicha manifestación.</p>	<p>El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del IEQROO.¹⁸</p>
<p>Se requirió al Secretario General del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique cuál es el procedimiento para tramitar los Procedimientos Especiales Sancionadores en el IEQROO.</p> <p>b) Informe si existe algún mecanismo de coordinación dentro de la etapa de instrucción del Procedimiento Especial Sancionador con el Tribunal Electoral de Quintana Roo.</p> <p>c) Si dicho mecanismo de coordinación está plasmado en algún instrumento jurídico.</p> <p>d) De ser el caso, remita copia certificada del mismo.</p> <p>e) Remita copia certificada de las versiones estenográficas de las últimas cinco sesiones del Consejo General del IEQROO y las Ordenes del día de las mismas.</p> <p>f) Remita copia certificada del acuerdo por el que se designan a los Presidentes e integrantes de las Comisiones del Instituto Electoral de Quintana Roo, y la metodología por la que fueron designados, así como el nombre y cargo de la persona que funge como Secretario Técnico de cada una de ellas.</p> <p>g) Remita copia certificada de la plantilla de asesores y asistentes adscritos a cada uno de los Consejeros Electorales del IEQROO.</p> <p>h) Informe si existe algún método para asignar, contratar o adscribir personal a la oficina de cada Consejero Electoral.</p> <p>i) Remita plano de distribución de las oficinas de los Consejeros Electorales y la metodología usada para asignar cada espacio.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta Juan Enrique Serrano Peraza, a través del oficio SG/949/2016¹⁹</p>
<p>Se requirió a Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Informe cuáles son sus funciones como Titular de dicha Unidad Técnica.</p> <p>b) Indique, si dichas funciones las realiza exclusivamente para la Consejera Presidenta del IEQROO, o bien, indistintamente para todos los integrantes del Consejo General del mencionado instituto.</p> <p>c) Indique si Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, solicitó que por su conducto se le concediera el derecho de réplica en distintos medios de comunicación.</p> <p>d) De ser el caso, precise cuál fue su respuesta y si se llevaron a cabo las diligencias para atender la solicitud planteada. En caso de haber negado dicha solicitud, informe las razones de dicha negativa.</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO.²⁰</p>
<p>Se requirió a José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p>	<p>El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió</p>

¹⁸ Visible en la foja 1520, del anexo 4, del expediente.

¹⁹ Visible en la foja 1043, del anexo 3, del expediente.

²⁰ Visible en la foja 1794, del anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>a) Indique si su teléfono corresponde al número 9988421509.</p> <p>b) Informe cuáles son sus funciones como Director de Partidos Políticos y Radiodifusión.</p> <p>c) Indique si Usted y la Dirección a su cargo participó en la captura de la información de la lista de electores de todo el estado el pasado 17 de agosto de dos mil dieciséis.</p> <p>d) De ser el caso, informe el motivo o razón por la que se llevó a cabo dicha captura, y si fue realizada por instrucción expresa de alguien.</p> <p>e) Indique cuál es su relación con los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, es decir, si se reúne regularmente con alguno de ellos, o con todos, de igual suerte, indique qué tipo de relación tiene con la Consejera Claudia Carrillo Gasca.</p> <p>f) Indique si el pasado 18 de agosto de dos mil dieciséis, o en alguna otra fecha, se refirió a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente sentido: <i>"que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el gobernador Roberto Borge ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia"</i> y de ser el caso, indique el contexto en el que manifestó lo anterior.</p>	<p>respuesta de José Luis González Nolasco Director de Partidos Políticos, a través del oficio DPP/741/16²¹</p>
<p>Se requirió al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Si en los archivos de esa Procuraduría General de Justicia hay evidencia de la presentación de una denuncia en contra de Claudia Carrillo Gasca, desde el seis de noviembre de dos mil quince a la fecha.</p> <p>b) De ser el caso, sírvase a remitir copia certificada de la misma.</p> <p>c) Indique si el No Ejercicio de la Acción Penal decretado en la Averiguación Previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/209/2014 en contra de Claudia Carrillo Gasca, ha quedado firme.</p>	<p>El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta del Vice Fiscal de la zona Sur de la Fiscalía General del Estado, a través del oficio FGE/DFG/1795/2016²²</p>

VI. VISTAS A DIVERSAS AUTORIDADES Y CIERRE DE CUADERNO DE ANTECEDENTES.²³ El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se acordó dar vista a diversas autoridades para que en el ámbito de sus respectivas competencias determinaran lo que en derecho correspondiera, respecto de diversas conductas que no son competencia de *INE*. Asimismo, como resultado de la investigación realizada por esta autoridad electoral, se ordenó la conclusión del cuaderno de antecedentes y la apertura de un procedimiento sancionador ordinario.

VII. INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO, ADMISIÓN Y RESERVA Y DE EMPLAZAMIENTO.²⁴ Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó admitir por la vía ordinaria el procedimiento sancionador

²¹ Visible en la foja 1030, del anexo 3, del expediente.

²² Visible en la foja 1902, del anexo 4, del expediente.

²³ Visible a fojas 783 a 851, del anexo 2, del expediente.

²⁴ Visible a fojas 331 a 340, del legajo 1, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

citado al rubro, y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento a las partes involucradas.

Asimismo, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió al Secretario General del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a. Remita copia certificada del Informe presentado por el Consejo General en Octubre del presente año, de las actividades realizadas por todas las Comisiones del IEQROO. b. Remita copia certificada del Acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por el que se creó la Comisión Transitoria de Igualdad entre mujeres y hombres de ese Instituto. c. Indique los motivos por los que la Consejera Claudia Carrillo Gasca, es la única Consejera Electoral con oficinas en la planta baja del edificio. d. Indique si existe algún mecanismo establecido para convocar a las sesiones de las Comisiones de ese Instituto, así como de la Junta General Ejecutiva, y si en su caso, dichas convocatorias son publicadas en su sitio web oficial, o por algún otro medio. e. Informe si las sesiones de las Comisiones de ese Instituto son transmitidas en vivo por algún medio de comunicación social. De ser el caso, indique el mecanismo para acceder a dichas transmisiones. f. Remita copia certificada de las versiones estenográficas de las sesiones del Consejo General de ese Instituto, celebradas durante el mes de octubre del presente año. g. Informe el mecanismo por el que se incluyen en el Orden del Día de las Sesiones del Consejo, los acuerdos tomados por las diferentes Comisiones de ese Instituto, especificando, en su caso, si requieren autorización por parte de la Presidencia de ese organismo público local electoral.	El cuatro y siete de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta del Secretario General del IEQROO, a través de los oficinas SG/964/2016 Y SG/969/2016 ²⁵
Se requirió a Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a. Remita copia certificada del informe rendido en sesión del Consejo General del veintinueve de septiembre del año en curso, respecto de los impactos o apariciones de cada uno de los Consejeros Electorales en los medios de comunicación. b. Informe todos los funcionarios que reciben la síntesis informativa y/o el monitoreo de medios, la forma en la que se hace de su conocimiento y la periodicidad con la que se envía. c. Informe en qué consisten los convenios que se celebran con distintos medios de comunicación, principalmente periódicos, y remita copia certificada de dichos instrumentos jurídicos.	El ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO. ²⁶
Se requirió a la Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina , para que proporcionara la siguiente información: a. Informe si ya se hizo pública la agenda de los Consejeros Electorales, de acuerdo a lo planteado en sesión del Consejo General de ese Instituto el pasado veintinueve de septiembre del presente año. b. De ser el caso, informe la dirección electrónica para consultarla y desde qué fecha está disponible. c. Informe la razón por la que no le ha dado respuesta a los oficios CCG/029/16 Y CCG/059/16, suscritos por la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre mujeres y hombres, respecto de la solicitud de incluir el tema de violencia política por razones de género en los programas de capacitación, así como en los promocionales y spots del Instituto Electoral de Quintana Roo.	El ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta de Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, a

²⁵ Visible en las fojas 373, y 400 del legajo 1, del expediente.

²⁶ Visible en la foja 432 (legajo 1) del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>d. Remita copia certificada del informe rendido en sesión del Consejo General del veintinueve de septiembre del año en curso, respecto de los impactos o apariciones de cada uno de los Consejeros Electorales en los medios de comunicación.</p> <p>e. Indique los motivos por los que la Consejera Claudia Carrillo Gasca es la única Consejera Electoral con oficinas en la planta baja del edificio.</p> <p>f. Informe si los Presidentes de las Comisiones requieren autorización suya para realizar las actividades propias de dichas comisiones.</p>	<p>través del oficio PRE/825/2016²⁷</p>

VIII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR²⁸. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió acuerdo en el cual ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a. Cuáles son las funciones que desarrolla la Unidad a su cargo, en específico, respecto al tema de igualdad entre mujeres y hombres dentro del <i>IEQROO</i>, en el marco de las atribuciones otorgadas a esa Unidad a través del Acuerdo por el que se crea la Comisión Transitoria de Igualdad entre mujeres y hombres.</p> <p>b. Si la Unidad Técnica a su cargo diseñó la estrategia anual de trabajo en el rubro de igualdad entre mujeres y hombres y, de ser el caso, sírvase remitir copia certificada de la estrategia de referencia.</p> <p>c. Precise si dicha Unidad diseñó y/o instrumentó alguna campaña de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres para el <i>IEQROO</i>.</p> <p>d. Indique si entregó a la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, algún estudio o análisis electoral que sirva como punto de partida para las acciones que desarrolla dicha Comisión.</p> <p>e. Señale si tiene asignada alguna partida presupuestal para las actividades de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en caso de ser afirmativo, precise si dicho presupuesto ya fue devengado y bajo qué conceptos.</p> <p>De igual suerte, en su carácter de Secretaria Técnica de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, sírvase indicar lo siguiente:</p> <p>a. Precise las ocasiones en que ha sesionado la Comisión de referencia.</p> <p>b. En relación al inciso que antecede, remita copia certificada de los acuerdos emitidos en las sesiones celebradas dentro de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.</p>	<p>El quince de noviembre de dos mil dieciséis se recibió respuesta de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del <i>IEQROO</i>, a través del oficio CIE/189/16²⁹</p>

²⁷ Visible en la foja 585 (legajo 1) del expediente.

²⁸ Visible a fojas 749 a 753, del legajo 1, del expediente.

²⁹ Visible en la foja 761, del legajo 1, del expediente.

IX. ESCRITO PRESENTADO POR LA QUEJOSA. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la Consejera Claudia Carrillo Gasca, presentó escrito mediante el cual hizo del conocimiento de la autoridad sustanciadora diversos hechos y omisiones atribuidos a los sujetos denunciados que, en su concepto, constituyen violencia política por razón de género.

X. EMPLAZAMIENTO.³⁰ El diez de enero de dos mil diecisiete, el Titular del *UTCE* ordenó el emplazamiento de los denunciados, para que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se les imputa y aportaran las pruebas que consideren pertinentes.

XI. MEDIO DE IMPUGNACIÓN SUP-JE-107/2016: El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Sala Superior del *TEPJF*, emitió sentencia en la que determinó modificar el acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, para los siguientes efectos:

4. Efectos de la presente ejecutoria. Como consecuencia de lo razonado, lo procedente es modificar el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el cuaderno de antecedentes *UT/SCG/CA/CCG/CG/84/2016*, para efecto de que la autoridad Responsable:

a) Emplace a un procedimiento ordinario sancionador electoral, adicionalmente a los tres consejeros electorales del Instituto Electoral local a quienes ya emplazó, a los consejeros representantes de los partidos políticos mencionados en esta ejecutoria; al Director de Organización; al Director de Partidos Políticos y Radiodifusión y al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral local señalados en la denuncia presentada por Claudia Carrillo Gasca ante el Instituto Nacional Electoral,

b) Dicte las determinaciones que conforme a sus facultades legales corresponda, como consecuencia de la falta de respuesta al requerimiento que le formuló al magistrado del tribunal superior de justicia local;

c) Realice un análisis de los hechos en su contexto integral, conforme con el resultado de la investigación que haga dentro del procedimiento que inicie, y

d) Determine las vistas o las solicitudes de colaboración de otras autoridades que estime procedentes sobre la base del resultado de la investigación que haga dentro del procedimiento iniciado.

³⁰ Visible a fojas 1671 a 1678, del legajo 2, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

III. RESOLUTIVO

PRIMERO. Se modifica el acuerdo impugnado dictado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en el cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/CCG/CG/84/2016, para los efectos precisados en la parte considerativa de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se confirma el oficio INE-UT/11514/2016 emitido el siete de noviembre de dos mil dieciséis por la misma Autoridad Responsable.

XII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.³¹ El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida por la Sala Superior del *TEPJF*, dentro expediente SUP-JE-107/2016, se vinculó al presente procedimiento como partes a los sujetos señalados en dicha sentencia y, de esta manera, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la práctica de nuevas diligencias de investigación, mismas que se detallan en seguida.

ACUERDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado De Quintana Roo para que proporcionara la siguiente información: a) Precise las acciones implementadas derivado de la vista ordenada por este Instituto a través del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el cual se adjunta al presente para mayor referencia. b) De ser el caso, indique qué tipo de procedimiento instrumentó y el estado procesal que guarda el mismo. c) En relación con los incisos que anteceden, sírvase remitir copia certificada de la documentación que acredite las acciones realizadas.	El ocho de febrero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado De Quintana Roo a través del oficio 14/2017. ³²
Se requirió a la Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que proporcionara la siguiente información: a) Precise las acciones implementadas derivado de la vista ordenada por este Instituto a través del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el cual se adjunta al presente para mayor referencia. b) De ser el caso, indique qué tipo de procedimiento instrumentó y el estado procesal guarda el mismo. c) En relación con los incisos que anteceden, sírvase remitir copia certificada de la documentación que acredite las acciones realizadas.	El ocho de febrero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General del Estado en su carácter de Presidente del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, a través del oficio FGE/DFG/1701/2017. ³³

³¹Visible a fojas 3133 a 3170, del legajo 5, del expediente.

³² Visible en la foja 3241, del legajo 5, del expediente.

³³ Visible en la foja 3246, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió a los Comités Directivos Estatales de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y del Trabajo para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Precise las acciones implementadas derivado de la vista ordenada por este Instituto a través del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el cual se adjunta al presente para mayor referencia.</p> <p>b) De ser el caso, indique qué tipo de procedimiento instrumentó y el estado procesal guarda el mismo.</p> <p>c) En relación con los incisos que anteceden, sírvase remitir copia certificada de la documentación que acredite las acciones realizadas.</p>	<p>El ocho de febrero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta del, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo.³⁴</p> <p>El diez de febrero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta del, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en Quintana Roo.³⁵</p>
<p>Se requirió a Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Precise si su número telefónico celular corresponde al 9988454946, o bien, si conoce a su propietario o usuario.</p> <p>b) Señale si conoce a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, de ser afirmativo indique la relación que tiene con ella.</p> <p>c) Indique si el 6 de noviembre de 2015 sostuvo una llamada telefónica con Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO; de ser afirmativa la respuesta, indique el motivo de la misma.</p> <p>d) Indique si ha intercambiado mensajes de texto con Claudia Carrillo Gasca y de ser el caso, el motivo de los mismos, del número telefónico indicado o de algún otro.</p>	<p>El diez de febrero de dos mil diecisiete, se recibió escrito de Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado.³⁶</p>

XIII. ESCRITO PRESENTADO POR LA QUEJOSA. El veintiuno de febrero y el primero de marzo de dos mil diecisiete, la quejosa presentó sendos escritos mediante los cuales hizo del conocimiento de la autoridad sustanciadora hechos y omisiones atribuidos a los sujetos denunciados mismos que, en su concepto, constituyen violencia política por razón de género.

XIV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió diversos acuerdos en los cuales se ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

³⁴ Visible en la foja 3133, del legajo 5, del expediente.

³⁵ Visible en la foja 3209, del legajo 5, del expediente.

³⁶ Visible en la foja 3276, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Señale si cuenta con personal a su cargo como Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo;</p> <p>b) De ser afirmativo lo anterior, indique el nombre y cargo de sus colaboradoras y colaboradores;</p> <p>c) Indique si existen personas a quienes les consten los hechos narrados en su denuncia, en donde refiere que, previo a las sesiones del Consejo General, Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se ha referido de forma grosera hacia su persona en los pasillos del Instituto mediante la frase "seguro le doy las nalgas al candidato del PRD-PAN";</p> <p>d) En caso de ser afirmativo lo anterior, mencione los nombres y, en su caso, cargos de las personas que les constan tales hechos, así como datos que permitan su eventual localización;</p> <p>e) Precise si existen personas a quienes les consten los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, respecto de que Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, le dijo en su oficina "que no tenía que darme ninguna explicación, que yo no soy nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local." Lo anterior en el contexto de que usted se percató de que tanto personal del Instituto, como personas externas se encontraba capturando información de las listas nominales de electores;</p> <p>f) En caso de ser afirmativo lo anterior, mencione los nombres y, en su caso, cargos de las personas que les constan tales hechos, así como datos que permitan su eventual localización;</p> <p>g) Mencione si existen personas a quienes les consten los hechos ocurridos el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, donde recibió en su oficina la visita de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del Instituto Electoral de Quintana Roo, quien le dijo "que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el Gobernador Roberto Borge Angulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia";</p> <p>h) En caso de ser afirmativo lo anterior, mencione los nombres y, en su caso, cargos de las personas que les constan tales hechos, así como datos que permitan su eventual localización;</p> <p>i) Señale si existen personas que pudieran dar constancia de que, previo a la sesión ordinaria del Consejo General del referido Instituto Electoral, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la mayoría de los representantes de los partidos políticos y consejeros recibieron una llamada telefónica por parte de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, por medio de la cual se planeó un ataque en su contra y la hicieron responsable ante los medios de comunicación sobre el manejo de las listas nominales de electores;</p> <p>j) En caso de ser afirmativo lo anterior, mencione los nombres y, en su caso, cargos de las personas que les constan tales hechos, así como datos que permitan su eventual localización;</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, a través del oficio CE/CCG/040/17³⁸</p>
<p>Se requirió a Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejera Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Precise si el seis de noviembre de dos mil quince, asistió junto con otros Consejeros Electorales integrantes del IEQROO al Tribunal Electoral de la entidad federativa de referencia;</p> <p>b) De ser afirmativo, indique la razón y/o motivo por el cual asistió al Tribunal Electoral de Quintana Roo.</p> <p>c) Señale cuál fue el objetivo de la reunión y con quién se realizó la misma.</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del IEQROO, a través del oficio</p>

³⁷ Visible a fojas 3395 a 3421, del legajo 5, del expediente.

³⁸ Visible en la foja 3460, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>d) Indique si dentro de dicha reunión Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, les manifestó “que su puesto se lo debían a él, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal y al Gobernador del Estado”.</p> <p>e) Finalmente precise si dicho funcionario público sugirió que el referido Instituto aprobara lineamientos contrarios a los expedidos por el Instituto Nacional Electoral o a la Ley Electoral.</p> <p>f) Indique si participó en las actividades del Instituto realizadas los días seis, siete y ocho de mayo en Cancún, Quintana Roo.</p> <p>g) Informe, si tiene como Consejero Electoral una agenda nacional e internacional de eventos, y cómo se decide quién asiste a cada evento.</p> <p>h) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.</p> <p>i) Indique si recibió algún estímulo económico como Consejero Electoral por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, señale por qué monto fue dicho estímulo y cuándo se entregó.</p> <p>j) Informe si, como integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, le son notificadas las convocatorias a las reuniones y mesas de trabajo que se desarrollan fuera del Instituto relacionadas con dicha temática.</p>	<p>INE/QROO/JLE/VE/0928/2017³⁹</p>
<p>Se requirió a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del Partido Nueva Alianza y/o Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del IEQROO, se han referido a usted de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituya hacia su persona un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género.</p> <p>b) De resultar afirmativo el cuestionamiento anterior, indique en qué contexto se presentó la situación o situaciones aludidas.</p> <p>c) Indique si le consta que los representantes antes señalados se han conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del IEQROO de forma denostativa o irrespetuosa mediante amenazas, insultos, humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiera constituir violencia de género.</p> <p>d) Señale si fue entregado a las Consejeras y/o Consejeros algún tipo de estímulo económico por concepto de compensación por proceso electoral.</p> <p>e) De ser afirmativo, precise por qué monto fue dicho estímulo económico y cuando fue entregado a los Consejeros y/o Consejeras</p> <p>f) Por último, precise si dicho estímulo fue entregado a todas las Consejeras y Consejeros Electorales y, en su caso, bajo qué criterio se determinó quienes habrían de recibirlo.</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Mayra San Román Carrillo, Consejera Electoral del IEQROO, a través del oficio PRE/0063/2017⁴⁰</p>
<p>Se requirió a Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de a Jorge</p>

³⁹ Visible en la foja 3707, del legajo 5, del expediente.

⁴⁰ Visible en la foja 3458, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>a) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.</p> <p>b) Señale si funge como Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, en su caso, desde cuándo ocupa tal cargo.</p> <p>c) Señale si el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis se llevó a cabo una reunión con diversos organismos electorales sobre las reuniones o grupos de trabajo que se realizan relacionadas con dicha temática fuera de la propia Comisión, en su caso, de qué forma se les notifica.</p> <p>d) Informe si el veinte de enero del presente año asistió a algún evento o reunión en la Ciudad de México convocado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto Nacional Electoral.</p> <p>e) De ser afirmativo lo previo, señale qué Consejeras y/o Consejeros asistieron y bajo qué criterios se determinó dicha participación.</p> <p>f) Señale si se notifica a las Consejeras y/o Consejeros integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre las reuniones o grupos de trabajo que se realizan relacionadas con dicha temática fuera de la propia Comisión, en su caso, de qué forma se les notifica.</p> <p>g) Indique si recibió algún estímulo económico como Consejero Electoral por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, señale por qué monto fue dicho estímulo y cuándo se entregó.</p>	<p>Armando Poot Pech, Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/JAPP/015/17⁴¹</p>
<p>Se requirió a Sergio Avilés Demeneghi, Consejera Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.</p> <p>b) Indique si recibió algún estímulo económico como Consejero Electoral por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, señale por qué monto fue dicho estímulo y cuándo se entregó.</p> <p>c) Señale si tuvo conocimiento de que dicha compensación económica fue entregada a todas y/o todos los Consejeros Electorales.</p> <p>d) Informe si, como integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, le son notificadas las convocatorias a las reuniones y mesas de trabajo que se desarrollan fuera del Instituto relacionadas con dicha temática.</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Sergio Avilés Demeneghi, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/SAD/014/17⁴²</p>
<p>Se requirió a Thalia Hernández Robledo, Consejera Electoral del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) Indique si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del Partido Nueva Alianza y/o Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se han referido a usted de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituya hacia su persona un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas,</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Thalia Hernández Robledo, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del</p>

⁴¹ Visible en la foja 3619, del legajo 5, del expediente.

⁴² Visible en la foja 3661, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>insultos, humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género.</p> <p>b) De resultar afirmativo el cuestionamiento anterior, indique en qué contexto se presentó la situación o situaciones aludidas.</p> <p>c) Indique si le consta que los representantes antes señalados se han conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del <i>IEQROO</i> de forma denostativa o irrespetuosa mediante amenazas, insultos, humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiera constituir violencia de género.</p> <p>d) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.</p> <p>e) Indique si recibió algún estímulo económico como Consejero Electoral por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, señale por qué monto fue dicho estímulo y cuándo se entregó.</p> <p>f) Informe si, como integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, le son notificadas las convocatorias a las reuniones y mesas de trabajo que se desarrollan fuera del Instituto relacionadas con dicha temática.</p>	<p>oficio INE/QROO/JLE/VE/0923/20 17⁴³</p>
<p>Se requirió a Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, a Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza, así como a Mauricio Morales Beiza, Representante del Partido del Trabajo todos ante el Consejo General del <i>IEQROO</i>, para que proporcionaran la siguiente información:</p> <p>a) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.</p>	<p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral De Quintana Roo⁴⁴</p> <p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo⁴⁵</p> <p>El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Mauricio Morales Beiza,</p>

⁴³ Visible en la foja 3506, del legajo 5, del expediente.

⁴⁴ Visible en la foja 3705, del legajo 5, del expediente.

⁴⁵ Visible en la foja 3504, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
	Representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral De Quintana Roo ⁴⁶
Se requirió a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del ante el Consejo General del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Informe cuáles son sus funciones como Director de Organización. b) Indique cuál es su relación con los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, es decir, si se reúne regularmente con alguno de ellos, o con todos, de igual suerte, indique qué tipo de relación tiene con la Consejera Claudia Carrillo Gasca. c) Indique si en la misma fecha o en cualquier otra, se ha referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente o similar sentido: "que no tenía que darle ninguna explicación, que ella no era nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local." d) De ser el caso, informe el motivo o razón por la que se llevó a cabo dicha captura, y si fue realizada por instrucción expresa de alguien. e) Precise si en dicha fecha, la Consejera Claudia Carrillo Gasca le cuestionó sobre las circunstancias bajo las cuales se estaba realizando la captura de información de las listas nominales de electores que fueron utilizadas en la jornada electoral celebrada el cinco de junio de dos mil dieciséis. f) Informe si en la misma fecha o en cualquier otra, se ha referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente o similar sentido: "que no tenía que darle ninguna explicación, que ella no era nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local."	El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo. ⁴⁷
Se requirió a Luis Carlos Santander Botello, Consejera Electoral del ante el Consejo General del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Precise si tiene conocimiento o le consta que Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ha visitado el IEQROO y ha sostenido diversas reuniones privadas; b) De ser afirmativo, indique cuántas reuniones privadas se han realizado, la razón y/o motivo de éstas y quién o quiénes han acudido a las mismas. c) Asimismo, indique si tiene conocimiento de que se le ha excluido deliberadamente de dichas reuniones a alguna Consejera o Consejero electoral, e informe el nombre de dichos funcionarios. d) Indique si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibió una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores. e) Indique si recibió algún estímulo económico como Consejero Electoral por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, señale por qué monto fue dicho estímulo y cuándo se entregó.	El siete de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Luis Carlos Santander Botello, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/LCSB/006/17 ⁴⁸
Se requirió al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo , para que proporcionara la siguiente información: a) Con qué fecha se inició la Averiguación Previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/209/2014 en contra de Claudia Carrillo Gasca; b) De ser el caso, sírvase remitir copia certificada de la misma.	El ocho de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de José Antonio Nieto Bastida, Vice-Fiscal de la Zona Sur de la Fiscalía

⁴⁶ Visible en la foja 3710, del legajo 5, del expediente.

⁴⁷ Visible en la foja 3510, del legajo 5, del expediente.

⁴⁸ Visible en la foja 3475, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE³⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
c) Indique si el No Ejercicio de la Acción Penal decretado en la Averiguación Previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/209/2014 en contra de Claudia Carrillo Gasca, ha quedado firme.	General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través del oficio FGE/DFG/1364/2017 ⁴⁹
Se requirió al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político del Trabajo , para que proporcionara la siguiente información: a) Precise las acciones implementadas derivado de la vista ordenada por este Instituto a través del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. b) De ser el caso, indique qué tipo de procedimiento instrumentó y el estado procesal guarda el mismo. c) En relación con los incisos que anteceden, sírvase remitir copia certificada de la documentación que acredite las acciones realizadas.	
Se requirió al Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo , para que proporcionara la siguiente información: a) Informe cuáles son sus funciones como Director de Administración y Planeación; b) Indique si la Dirección a su cargo contrata, regula las altas, bajas, readscripción del personal y nómina del Instituto; c) De ser afirmativo lo anterior, señale cuáles son los criterios de selección del personal; d) Precise si la Dirección a su cargo se encarga de contratar al personal que labora directamente en las oficinas de las Consejeras y Consejeros; e) De ser afirmativo lo anterior, señale cuáles son los criterios de selección del personal adscrito a las Consejeras y Consejeros; f) De ser negativo lo anterior, indique qué área del Instituto se encarga de contratar al personal que labora en las oficinas de las Consejeras y Consejeros; g) Señale el número de personas adscritas a las oficinas de cada una de las Consejeras y los Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sus respectivos nombres, cargos y funciones, incluido el personal adscrito a la oficina de la Consejera Presidenta. h) Informe si las consejeras y consejeros cuentan con personal adicional durante el desarrollo de procesos electorales y, de ser el caso, con qué personal contó cada uno de los consejeros en el último proceso electoral desarrollado en el Estado de Quintana Roo. f) Informe si se otorgó a las Consejeras y Consejeros Electorales algún estímulo económico por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, si éste fue entregado a todos las Consejeras y Consejeros Electorales y bajo qué criterio se determinó quienes habrían de recibirlo.	El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo. ⁵⁰

ACUERDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE⁵¹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo , para que proporcionara la siguiente información: a) De conformidad con lo informado en el oficio PRE/0063/2017 emitido por dicha Consejera en respuesta al requerimiento de tres de marzo del presente año, formulado por esta Unidad Técnica, respecto a que durante el mes de diciembre de dos mil dieciséis se otorgó un estímulo anual correspondiente al ejercicio 2016 por la cantidad de treinta y tres mil pesos, precise a qué Consejeros	El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO, a través del oficio PRE/074/2017. ⁵²

⁴⁹ Visible en la foja 3479, del legajo 5, del expediente.

⁵⁰ Visible en la foja 3632, del legajo 5, del expediente.

⁵¹ Visible a fojas 3713 a 3719, del legajo 5, del expediente.

⁵² Visible en la foja 3730, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE⁵¹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Electorales se otorgó dicho estímulo económico, en su caso, indique bajo qué criterio se determinó quién habría de recibirlo y quien no, así como quién o quiénes definieron dicho criterio.</p> <p>b) El Director de Administración y Planeación del IEQROO informó a esta autoridad, en respuesta al requerimiento que le fue formulado el tres de marzo del presente año, lo siguiente:</p> <p>“El 16 de marzo de 2016, se otorgó una compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario 2016, a los Consejeros Electorales que a continuación se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina; -Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo; -Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi; -Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Petch; y -Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche. <p>A los Consejeros a los cuales no se les otorgó el estímulo en referencia, fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca; y -Consejero Electoral, Luis Carlos Santander Botello. <p>Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. Se adjuntan las documentales que acreditan lo señalado.”</p> <p>Con base en lo anterior informe bajo qué criterio se determinó excluir a la Consejera Carrillo Gasca y al Consejero Santander Botello de recibir la referida compensación, así como quién definió dicho criterio.</p>	
<p>Se requirió al Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo, para que proporcionara la siguiente información:</p> <p>a) En respuesta al requerimiento de tres de marzo del presente año dictado por esta Unidad Técnica de lo Contencioso electoral, Usted informó que se otorgó un estímulo económico por concepto de compensación por el proceso electoral local ordinario 2016, a las Consejeras y Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina; Thalía Hernández Robledo; Sergio Avilés Demeneghi; Jorge Armando Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche, así como que a Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello no les fue otorgado dicho estímulo económico, en este sentido indique cuáles fueron los criterios para determinar qué Consejeros habrían de recibir dicho estímulo económico y quienes no, así como quién o quiénes definieron dicho criterio.</p> <p>b) Mediante oficio PRE/0063/2017, Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, dio respuesta al requerimiento de tres de marzo del presente año hecho por esta Unidad Técnica de lo Contencioso electoral, e informó que, además de la compensación económica otorgada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, durante el mes de diciembre del mismo año del proceso electoral, se otorgó un Estímulo Anual correspondiente al Ejercicio 2016, por la cantidad de \$33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.), en este sentido indique a qué Consejeras y/o Consejeros se les otorgó dicho estímulo económico, y en su caso, bajo qué criterio se determinó quién o quiénes habrían de recibirlo, así como quién o quiénes determinaron dichos criterios.</p>	<p>El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta del Director de Administración y Planeación del IEQROO.⁵³</p>

XV. ESCRITO PRESENTADO POR LA QUEJOSA. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la quejosa presentó escrito mediante el cual hizo del conocimiento de la autoridad sustanciadora hechos y omisiones atribuidos a los sujetos denunciados mismos que, en su concepto, constituyen violencia política por razón de género.

⁵³ Visible en la foja 3741, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

XVI. ESCRITO PRESENTADO EL CONSEJERO ELECTORAL SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. Mediante escrito de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el referido Consejero Electoral presentó, ante la autoridad sustanciadora, escrito en el cual hizo de su conocimiento hechos relacionados con la queja promovida por la Consejera Claudia Carrillo Gasca.

XVII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió diversos acuerdos en los cuales se ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE⁵⁴	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Indique qué área y qué funcionario revisa o define el contenido que se publica en las redes sociales oficiales, así como del boletín oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo; b) Informe bajo qué criterios se define el contenido que se publica en dichos medios de comunicación. c) Indique cuál es el trámite que se da a las solicitudes que realizan las Consejeras y Consejeros Electorales para que se difunda información de sus actividades en los medios de comunicación oficiales del IEQROO.	El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO, a través del oficio PRE/084/2017. ⁵⁵
Se requirió al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Señale qué es el boletín oficial del IEQROO; b) Informe a través de qué medios y con qué periodicidad se difunde el boletín oficial del IEQROO; c) Indique, además del boletín oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de qué medios de comunicación impresos o por internet se difunde información del referido Instituto Electoral local. d) Refiera qué área y qué funcionario revisa o define el contenido que se publica en las redes sociales oficiales, en el boletín oficial del IEQROO, así como en cualquier otro medio de comunicación impreso o por internet del referido Instituto electoral local; e) Informe a través de qué medios de comunicación se difunden las actividades de las Consejeras y Consejeros del IEQROO; f) Precise si el trece de febrero del presente año, Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Estado de Quintana Roo, le solicitó que se difundiera en la página oficial del IEQROO algún boletín oficial sobre la actualización del micrositio denominado "Igualdad entre Hombres y Mujeres", y en su caso, informe qué trámite se le dio a dicha solicitud; g) Señale si se elaboró algún boletín oficial el trece, catorce o quince de febrero del presente año y cuál fue el contenido difundido y, en su caso, remita los boletines publicados. h) Informe si el dos de marzo del presente año, recibió el oficio CE/CCG/037/17 o al día siguiente el oficio CE/CCG/0040/17, mediante el cual, Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, le solicitó se difundieran las actividades que estaría realizando en el mes de marzo en la zona	El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de José Alfredo Figueroa Orea, Titular De La Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, a través del oficio UTCS/035/17. ⁵⁶

⁵⁴ Visible a fojas 3900 a 3919, del legajo 6, del expediente.

⁵⁵ Visible en la foja 3943, del legajo 6, del expediente.

⁵⁶ Visible en la foja 3946, del legajo 6, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE⁵⁴	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
norte del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres del <i>IEQROO</i> y, en su caso, indique qué trámite se le dio a dicha solicitud. i) Indique cuál es el trámite que se da a las solicitudes de las Consejeras o Consejeros para que se difunda información de sus actividades en los medios de comunicación oficiales del <i>IEQROO</i> , es decir, especifique si la información que se envía para tales efectos se revisa, aprueba o modifica y, si esto es así, informe bajo qué criterios.	
Se requirió al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del <i>IEQROO</i> , para que proporcionara la siguiente información: a) Informe cuáles son sus funciones como Director del Centro de Información Electoral; b) Informe qué medios de comunicación social de internet difunden información del Instituto Electoral de Quintana Roo; con qué periodicidad se difunde y cómo se difunde; c) Indique qué área y qué funcionario revisa o define el contenido que se publica en las redes sociales oficiales y del boletín oficial del <i>IEQROO</i> ; d) Informe si el dos de marzo del presente año, recibió el oficio CE/CCG/038/17 y/o al día siguiente el oficio CE/CCG/0041/17, mediante los cuales Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, le solicitó se difundieran las actividades que estaría realizando en el mes de marzo en la zona norte del estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres del <i>IEQROO</i> y, en su caso, indique qué trámite se le dio a dicha solicitud; e) Indique cuál es el trámite que se da a las solicitudes de las Consejeras o Consejeros para que se difunda información sobre sus actividades en los medios de comunicación oficiales del <i>IEQROO</i> , es decir, especifique si la información que se envía para tales efectos se revisa, aprueba o modifica y, si esto es así, informe bajo qué criterios.	El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del <i>IEQROO</i> , a través del oficio CIE/109/17. ⁵⁷
Se requirió al Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del <i>TEQROO</i> , para que proporcionara la siguiente información: a) Informe si durante el mes de diciembre de dos mil quince, sostuvo alguna reunión en su oficina en las instalaciones que ocupa el <i>TEQROO</i> , con Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> ; b) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, informe el motivo o razón de dicha reunión.	El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del <i>TEQROO</i> , a través del oficio TEQROO/MP/0065/2017. ⁵⁸
Se requirió al Thalía Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca, Jorge Armando Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi, Luis Carlos Santander Botello, Juan Manuel Pérez Alpuche, todos Consejeros Electorales del <i>IEQROO</i> , para que proporcionara la siguiente información: a) Indique cuál es el trámite o procedimiento que se da a las solicitudes que formula como Consejera o Consejero para que se difunda información de sus actividades en los medios de comunicación oficiales del Instituto Electoral de Quintana Roo, los plazos ordinarios para que dichas solicitudes sean atendidas y si han existido razones fundadas para que su información no sea atendida en los términos solicitados por Usted.	El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Thalía Hernández Robledo, Consejera del <i>IEQROO</i> , a través del oficio INE/QROO/JLE/VE/1251/2017. ⁵⁹ El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Claudia Carrillo Gasca, Consejera del

⁵⁷ Visible en la foja 4062, del legajo 6, del expediente.

⁵⁸ Visible en la foja 3923, del legajo 6, del expediente.

⁵⁹ Visible en la foja 4057, del legajo 6, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE ⁵⁴	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
	<p>IEQROO, a través del oficio CE/CCG/045/17.⁶⁰</p> <p>El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Jorge Armando Poot Pech, Consejero del IEQROO, a través del oficio CE/JAPP/018/2017.⁶¹</p> <p>El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Sergio Avilés Demeneghi, Consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/SAD/034/17.⁶²</p> <p>El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Luis Carlos Santander Botello, Consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/LCSB/012/17.⁶³</p> <p>El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del oficio INE/QROO/JLE/VE/1256/2017.⁶⁴</p>

XVIII. ESCRITO PRESENTADO POR LA QUEJOSA. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la quejosa presentó otro escrito mediante el cual hizo del conocimiento de la autoridad sustanciadora hechos atribuidos a los sujetos denunciados mismos que, en su concepto, constituyen violencia política por razón de género.

⁶⁰ Visible en la foja 4018, del legajo 6, del expediente.

⁶¹ Visible en la foja 4055, del legajo 6, del expediente.

⁶² Visible en la foja 4021, del legajo 6, del expediente.

⁶³ Visible en la foja 4068, del legajo 6, del expediente.

⁶⁴ Visible en la foja 4061, del legajo 6, del expediente.

XIX. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió diversos acuerdos en los cuales se ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE⁶⁵	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO , para que proporcionara la siguiente información: a) Indique si compareció ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en carácter de presunto responsable en el procedimiento identificado como número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016 o carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016. b) De ser afirmativo lo anterior, informe si a dicha comparecencia fue acompañado de algún (os) abogado (s) y, en su caso, precise el nombre (s) y si estos prestan o prestaron sus servicios en el Instituto Electoral de Quintana Roo.	El veinte de abril de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de a José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del Instituto Electoral de Quintana Roo. ⁶⁶
Se requirió al Armando Quintero Santos , quien compareció ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como abogado de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información: a) Informe qué cargo ostenta en el Instituto Electoral de Quintana Roo; b) Precise cuáles son sus funciones en el Instituto Electoral de Quintana Roo; c) Informe si ha actuado como abogado de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO en algún procedimiento ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; d) De ser afirmativo lo previo, indique en qué casos o procedimientos.	El veinte de abril de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Armando Quintero Santos. ⁶⁷
Se requirió al Julio Asrael González Carrillo , quien compareció ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como abogado de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, para que proporcionara la siguiente información: a) Informe qué cargo ostenta en el Instituto Electoral de Quintana Roo; b) Precise cuáles son sus funciones en el Instituto Electoral de Quintana Roo; c) Informe si ha actuado como abogado de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO en algún procedimiento ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; d) De ser afirmativo lo previo, indique en qué casos o procedimientos.	El veinte de abril de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Julio Asrael González Carrillo. ⁶⁸

XX. EMPLAZAMIENTO. El doce de junio⁶⁹ y cuatro de julio⁷⁰ del dos mil diecisiete, el Titular del *UTCE* ordenó el emplazamiento de los denunciados, para que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto de las conductas que se les imputan y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes.

⁶⁵ Visible a fojas 4269 a 4304, del legajo 6, del expediente.

⁶⁶ Visible en la foja 4337, del legajo 6, del expediente.

⁶⁷ Visible en la foja 4333, del legajo 6, del expediente.

⁶⁸ Visible en la foja 4326, del legajo 6, del expediente.

⁶⁹ Visible a fojas 4368 a 4409, del legajo 6, del expediente.

⁷⁰ Visible a fojas 5123 a 5130, del legajo 7, del expediente.

En el mismo sentido, se ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que se detallan a continuación:

ACUERDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Quintana Roo , para que proporcionara la siguiente información: “...toda vez que mediante escrito de veintidós de marzo del presente año, el Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi, presentó ante esta autoridad una prueba que directamente lo relaciona, se requiere al citado servidor público a efecto de que en un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la misma, y presente ante esta autoridad las pruebas que estime pertinentes, para lo cual se anexa copia de la referida probanza. Apercebido de que en caso de no hacerlo se hará la valoración correspondiente con las constancias que obran en el expediente en que se actúa. (...)”	El doce de julio de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Quintana Roo. ⁷¹

XXI. ALEGATOS⁷². El diecisiete de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, después de realizar diversas diligencias para la localización de uno de los sujetos denunciados, y al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó dar vista a las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

XXII. RESPUESTA A LA SOLICITUD EFECTUADA POR CLAUDIA CARRILLO GASCA, CONSEJERA ELECTORAL DEL IEQROO⁷³. El doce de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo, escrito firmado por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, a través del cual solicitaba a la *UTCE*, informara cuál era el estado procesal que guardaba el procedimiento sancionador ordinario en que se actúa.

Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE*, emitió acuerdo informándole a la citada Consejera, que el procedimiento señalado se encontraba en la etapa de alegatos.

⁷¹ Visible en la foja 5320 a 5325, del legajo 8, del expediente.

⁷² Visible a fojas 5185 a 5189 y 5443 a 5448, del legajo 8, del expediente.

⁷³ Visible a fojas 5476 a 5479, del legajo 8, del expediente.

XXIII. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES⁷⁴.

Mediante acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecisiete, una vez vencida la vista para alegatos, se determinó requerir al Titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de este Instituto, la siguiente información:

ACUERDO DE UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió al Titular de la FEPADE, la siguiente información: Señalara si con motivo del escrito presentado por Sergio Avilés Demeneghi, ante la FEPADE, se ordenó o se elaboró algún dictamen pericial respecto del audio ofrecido, a fin de corroborar su veracidad, y en caso afirmativo remitiera copia certificada del mismo, el cual incluyera las conclusiones respectivas.	El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Danahe Paola Castañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la Federación de la FEPADE. ⁷⁵

XXIV. RESPUESTA A LA SOLICITUD EFECTUADA POR CLAUDIA CARRILLO GASCA, CONSEJERA ELECTORAL DEL IEQROO⁷⁶. El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del *INE* en Quintana Roo, escrito firmado por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, a través del cual solicitaba a la *UTCE*, informara cuál era el estado procesal que guardaba el procedimiento sancionador ordinario en que se actúa.

Mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE*, emitió acuerdo informándole a la citada Consejera que, con motivo de la elaboración del proyecto de resolución, surgió la necesidad de efectuar mayores diligencias de investigación, como en el caso fue el requerimiento de información efectuado al Titular de la FEPADE, el cual, se encontraba en proceso de desahogo.

XXV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADICIONALES. En diversas fechas, se ordenó realizar las siguientes diligencias de investigación, en los términos que a continuación se sintetizan.

⁷⁴ Visible en la foja 5499 a 5502, del legajo 8, del expediente.

⁷⁵ Visible en la foja 5510 a 5511, del legajo 8, del expediente.

⁷⁶ Visible a fojas 5505 a 5509, del legajo 8, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

ACUERDO DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE⁷⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió a Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del IEQROO, la siguiente información: Precisara si contaba con algún peritaje oficial en el cual se corroborara la veracidad del audio de la conversación que sostuvo con el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, misma que consta en el expediente integrado en la FEPADE con el número de atención NA/CDMX/FEPADE/0000258/2017 y que fue exhibido ante esta autoridad mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, y en su caso, remitiera copia certificada de la información atinente.	El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del IEQROO. ⁷⁸
Asimismo, se ordenó la elaboración de acta circunstanciada por parte del personal adscrito a la UTCE, con el objeto de certificar el contenido del disco compacto remitido por el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete.	

ACUERDO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO⁷⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió al Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, la siguiente información: Copia certificada de la versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Administración del IEQROO, celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.	El veinte de enero de dos mil dieciocho, se recibió respuesta de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecutivo del IEQROO. ⁸⁰

ACUERDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO⁸¹	
Se ordenó la elaboración de acta circunstanciada por parte del personal adscrito a la UTCE, con el objeto de certificar la videograbación proporcionada por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, correspondiente a la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, la cual obraba en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCCLS/10/69/2016.	

XXVI. VISTA A LAS PARTES CON LA NUEVA INFORMACIÓN RECABADA. Con motivo de la información obtenida de los requerimientos realizados por la UTCE, a partir del vencimiento de la vista para formular alegatos, se ordenó poner a la disposición de las partes involucradas dicha documentación, para que manifestaran por escrito lo que a su derecho correspondía, como a continuación se describe.

⁷⁷ Visible en la foja 5512 a 5516, del legajo 8, del expediente.

⁷⁸ Visible en la foja 5538 a 5542, del legajo 8, del expediente.

⁷⁹ Visible en la foja 5544 a 5547, del legajo 8, del expediente.

⁸⁰ Visible en la foja 5559 a 5573, del legajo 8, del expediente.

⁸¹ Visible en la foja 5580 a 5582, del legajo 8, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

SUJETO AL CUAL SE LE DIO VISTA	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA A LA VISTA
Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO	INE/QROO/JLE/VE/1373/2018	07/Marzo/2018	08/Marzo/2018	15/Marzo/2018 ⁸²
Mayra San Román Carrillo Medina, Consejero Electoral del IEQROO	INE/QROO/JLE/VE/1374/2018	08/Marzo/2018	09/Marzo/2018	14/Marzo/2018 ⁸³
Thalía Hernández Robledo, Consejero Electoral del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1375/2018	07/Marzo/2018	08/Marzo/2018	13/marzo/2018 ⁸⁴
Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1376/2018	07/Marzo/2018	08/Marzo/2018	No dio contestación
José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1377/2018	No fue necesario	07/Marzo/2018	13/Marzo/2018 ⁸⁵
Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1379/2018	No fue necesario	07/Marzo/2018	14/Marzo/2018 ⁸⁶
Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1380/2018	07/Marzo/2018	08/Marzo/2018	No dio contestación
Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1381/2018	No fue necesario	07/Marzo/2018	14/Marzo/2018 ⁸⁷
Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1382/2018	No fue necesario	07/Marzo/2018	13/Marzo/2018 ⁸⁸
Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1383/2018	07/Marzo/2018	08/Marzo/2018	No dio contestación
José Luis Gonzales Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radio fusión del IEQROO.	INE/QROO/JLE/VE/1378/2018	Por estrados	07/Marzo/2018	14/Marzo/2018 ⁸⁹

⁸² Visible en la foja 5955 a 5961, del legajo 8, del expediente.

⁸³ Visible en la foja 5928 a 5929, del legajo 8, del expediente.

⁸⁴ Visible en la foja 5925 a 5926, del legajo 8, del expediente.

⁸⁵ Visible en la foja 5915 a 5918, del legajo 8, del expediente.

⁸⁶ Visible en la foja 5935 a 5938, del legajo 8, del expediente.

⁸⁷ Visible en la foja 5931 a 5934, del legajo 8, del expediente.

⁸⁸ Visible en la foja 5919 a 5924, del legajo 8, del expediente.

⁸⁹ Visible en la foja 5939 a 5941, del legajo 8, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

XXVII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADICIONALES. En diversas fechas, se ordenó realizar las siguientes diligencias de investigación, en los términos que a continuación se sintetizan.

ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO⁹⁰	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió a Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del <i>IEQROO</i>, la siguiente información:</p> <p>a) Señale si la compensación por proceso electoral local ordinario 2016, equivalente a la cantidad de diez mil pesos (\$10,000.00 M.N.), ya fue pagada tanto a Claudia Carrillo Gasca como a Luis Carlos Santander Botello, Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, proporcionando, en su caso, copia certificada donde obren dichas circunstancias.</p> <p>b) En caso de que el cuestionamiento al inciso que antecede sea negativo, indique la razón por la cual no se ha pagado a los funcionarios en comento dicha compensación.</p>	<p>El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta de Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del <i>IEQROO</i>.⁹¹</p> <p>El primero de julio de dos mil dieciocho se recibió oficio INE/UTVEPL/5954/2018, suscrito por el Director de Vinculación Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual envía el oficio DA/305/2018 y anexos signado por Víctor Manuel Interián López, Director de Administración del <i>IEQROO</i>, por el que remite copia certificada de los comprobantes de pago de la compensación por proceso electoral a favor de Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello.⁹²</p>
<p>Se requirió a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i>, la siguiente información:</p> <p>a) Proporcione el número de teléfono celular que ostenta u ostentaba al momento en que sucedieron los hechos denunciados, en el cual, recibió la llamada y los mensajes de texto por parte de Carlos Lima Carvajal.</p> <p>b) Indique la compañía telefónica a la cual pertenece o pertenecía el citado número telefónico.</p>	<p>El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i>.⁹³</p>

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO⁹⁴	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA

⁹⁰ Visible en la foja 5777 a 5783, del legajo 9, del expediente.

⁹¹ Visible en la foja 6051, del legajo 9, del expediente.

⁹² Visible en la foja 6075 a 6085, del legajo 9, del expediente.

⁹³ Visible en la foja 6039 a 6049, del legajo 9, del expediente.

⁹⁴ Visible en la foja 5799 a 5804, del legajo 9, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

<p>Se requirió a AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., a través de sus representantes legales la siguiente información:</p> <p>a) Señale si el número telefónico 9988454946, corresponde a la compañía de telefonía celular que usted representa.</p> <p>b) En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique a nombre de quién fue expedida la mencionada línea telefónica.</p> <p>c) De ser el caso, proporcione el registro de llamadas salientes y el tiempo de duración de cada una de ellas, así como de los mensajes de texto salientes y su contenido, entre el referido número telefónico y los números 9982142445 y 9831314112, durante el periodo comprendido del seis de septiembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis.</p>	<p>El seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió respuesta de Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.⁹⁵</p>
---	---

ACUERDO DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO⁹⁶	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió a RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., (EN LO SUCESIVO “TELCEL”), a través de sus representantes legales la siguiente información:</p> <p>a) Señale si el número telefónico 9988454946, corresponde a la compañía de telefonía celular que usted representa.</p> <p>b) En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique a nombre de quién fue expedida la mencionada línea telefónica.</p> <p>c) De ser el caso, proporcione el registro de llamadas salientes y el tiempo de duración de cada una de ellas, así como de los mensajes de texto salientes y su contenido, entre el referido número telefónico y los números 9982142445 y 9831314112, durante el periodo comprendido del seis de septiembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis.</p> <p>d) Señale si los números telefónicos 9982142445 y 9831314112, corresponden a la compañía de telefonía celular que usted representa.</p> <p>e) En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique a nombre de quién fue expedida las mencionadas líneas telefónicas.</p> <p>f) De ser el caso, proporcione el registro de llamadas entrantes y el tiempo de duración de cada una de ellas, así como de los mensajes de texto entrantes y su contenido, entre los referidos números telefónicos y el número 9988454946, durante el periodo comprendido del seis de septiembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis.</p>	<p>El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió la respuesta de RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., (TELCEL).⁹⁷</p>
<p>Se requirió a PEGASO PCS, S.A. DE C.V., (EN ADELANTE “MOVISTAR”), a través de sus representantes legales la siguiente información:</p> <p>a) Señale si el número telefónico 9988454946, corresponde a la compañía de telefonía celular que usted representa.</p> <p>b) En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique a nombre de quién fue expedida la mencionada línea telefónica.</p> <p>c) De ser el caso, proporcione el registro de llamadas salientes y el tiempo de duración de cada una de ellas, así como de los mensajes de texto salientes y su contenido, entre el referido número telefónico y los números 9982142445 y 9831314112, durante el periodo comprendido del seis de septiembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis.</p>	<p>El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió la respuesta de PEGASO PCS, S.A. DE C.V., (MOVISTAR).⁹⁸</p>

⁹⁵ Visible en la foja 6052, del legajo 9, del expediente.

⁹⁶ Visible en la foja 5809 a 5813, del legajo 9, del expediente.

⁹⁷ Visible en la foja 6008 a 6010, del legajo 9, del expediente.

⁹⁸ Visible en la foja 6006, del legajo 9, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

XXVIII. NUEVAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En diversas fechas, se ordenó realizar las siguientes diligencias de investigación, en los términos que a continuación se sintetizan.

ACUERDO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO⁹⁹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Se requirió al Titular de la FEPADE, lo siguiente:</p> <p>Copia certificada de la documentación soporte de la información otorgada por Claudia Carrillo Gasca, contenido en el dictamen del perito en informática, identificado con el número de folio 2547, de seis de abril de dos mil diecisiete, el dictamen del perito con especialidad en audio y video, identificado con el número de folio 23548, de veinte de abril de dos mil diecisiete, y el dictamen de perito con especialidad en análisis de voz, identificado con el número de folio 37481, emitidos dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-QR70001395/2016.</p> <p>Informe si el audio contenido en el dispositivo USB... presentado por el Consejero Electoral del IEQROO, Sergio Avilés Demenegui, como anexo al escrito de ocho de marzo de dos mil diecisiete, el cual fue objeto de análisis por esa autoridad, es coincidente con el audio presentado en disco compacto ante esa autoridad, en el cual consta el acta circunstanciada levantada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, misma que se anexa en copia simple en sobre cerrado.</p> <p>Informe el estado procesal que guarda la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-QR/0001395/2016 y si existe alguna otra investigación relacionada con presuntos hechos que constituyan violencia política por razón de género en contra de la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca.</p>	<p>El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta suscrita por Danahe Paola Castañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante el cual negó la información solicitada por considerar que se trata de información confidencial.¹⁰⁰</p>

ACUERDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO¹⁰¹	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
<p>Solicitud a la Dirección Jurídica de este Instituto, a efecto de que por su conducto, se solicite a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, la designación de peritos especialistas en análisis de voz y de audio y video, para estar en aptitud de corroborar si alguna</p>	<p>Oficio INE/DJ/DSL7SAP714339/2018, de quince de junio del año en curso, mediante el cual se solicita copia fiel del disco compacto original que contiene el audio a dictaminar, así</p>

⁹⁹ Visible en la foja 6055 a 6064, del legajo 9, del expediente.

¹⁰⁰ Visible en la foja 6072 a 6074, del legajo 9, del expediente.

¹⁰¹ Visible en la foja 6082 a 6085, del legajo 9, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

de las voces que se aprecian en el audio aportado al expediente por el Consejero Avilés Demeneghi, corresponde a la del Magistrado del TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas, y si dicho material es íntegro o se encuentra editado.	como el medio óptico que contenga la muestra de voz de la persona con la que se desea realizar el comparativo solicitado. ¹⁰²
--	--

ACUERDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO¹⁰³	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se requirió al Consejero del IEQROO, Sergio Avilés Demeneghi remitiera el audio original o una copia directa del audio original de la grabación ofrecida como prueba en el procedimiento en que se actúa.	Oficio CE/SAD/42/18, suscrito por el Consejero Avilés Demeneghi por medio del cual remite la información que le fue solicitada.
Se requirió al Secretario General de Acuerdos del TEQROO que remitiera el audio original o copia del audio original, de la grabación de tres sesiones públicas del referido tribunal en las que conste de forma clara la voz del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas.	Oficio TEQROO/SGA/460/18, de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el Secretario General de Acuerdos del TEQROO remitió la información que le fue solicitada. ¹⁰⁴

ACUERDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO¹⁰⁵	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Solicitud a la Dirección Jurídica de este Instituto, a efecto de que por su conducto, se solicite a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, la designación de peritos especialistas en análisis de voz y de audio y video, para estar en aptitud de corroborar si alguna de las voces que se aprecian en el audio aportado al expediente por el Consejero Avilés Demeneghi, corresponde a la del Magistrado del TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas, y si dicho material es íntegro o se encuentra editado.	Oficio INE/DJ/DSL7SAP714339/2018, de quince de junio del año en curso, mediante el cual se solicita copia fiel del disco compacto original que contiene el audio a dictaminar, así como el medio óptico que contenga la muestra de voz de la persona con la que se desea realizar el comparativo solicitado. ¹⁰⁶

ACUERDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO¹⁰⁷	
REQUERIMIENTO	OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA
Se remitió la documentación solicitada a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.	Oficio INE/DJ/DSL/SAP/17396/2018, de trece de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral,

¹⁰² Visible en la foja 6090 a 6085, del legajo 9, del expediente

¹⁰³ Visible en la foja 6095 a 6099, del legajo 9, del expediente.

¹⁰⁴ Visible en la foja 6105 a 6108 del legajo 9, del expediente.

¹⁰⁵ Visible en la foja 6124 a 6127, del legajo 9, del expediente.

¹⁰⁶ Visible en la foja 6090 a 6085, del legajo 9, del expediente

¹⁰⁷ Visible en la foja 6095 a 6099, del legajo 9, del expediente.

	mediante el cual remite el dictamen pericial solicitado. ¹⁰⁸
--	---

XXIX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

XXX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias analizó el proyecto, resolviendo por mayoría de dos votos a favor de la Consejera Presidenta de la Comisión, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández; con el voto en contra de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE.

Lo anterior por la presunta transgresión a la normatividad electoral derivado de la supuesta realización de acciones y omisiones por un grupo de funcionarios estatales, integrantes del Instituto Electoral local y representantes de partidos políticos, dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de la quejosa, o de las prerrogativas inherentes al cargo público, que ostenta como Consejera Electoral del *IEQROO*; conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razón de género.

¹⁰⁸ Visible en la foja 6138 a 6156 del legajo 9, del expediente.

Sobre lo antes precisado, la denunciante narró en su escrito de queja y escritos presentados con posterioridad una serie de hechos atribuidos a diversos funcionarios locales y representantes de partidos políticos, los cuales se precisan en el punto de acuerdo siguiente.

Además, se surte la competencia de este Consejo General en el presente asunto, toda vez que en los juicios electorales SUP-JE-102/2016 y SUP-JE-107/2016, la Sala Superior del *TEPJF* determinó, entre otras cuestiones, que esta autoridad debía hacer un examen integral y contextual de todo lo planteado en la denuncia primigenia, en función de la hipótesis sostenida en la acusación, desde una perspectiva de género, considerando, incluso, la necesidad de ordenar otras diligencias previas, relacionadas con todos los sujetos denunciados, asimismo determinó que se debía emplazar al procedimiento sancionador ordinario, además de los consejeros previamente emplazados, a los representantes de los partidos políticos y Directivos del Instituto precisados por la propia autoridad jurisdiccional.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. Excepciones y defensas. Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, **los denunciados** hicieron valer lo que a su derecho convino, lo cual se encuentra precisado en el anexo 1 de la presente resolución.

2. Fijación de la Litis. La *Litis* en el presente asunto se centra en determinar si con las acciones y omisiones denunciadas por la quejosa, atribuidos a diversos consejeros del *IEQROO*, funcionarios y representantes de partidos políticos del referido instituto local, se actualiza en su contra violencia política por razón de género, acoso laboral, discriminación, aislamiento o afectación a la función electoral.

3. Hechos denunciados. De los escritos de queja presentados por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, se advierte que los motivos materia del presente procedimiento consisten en:

- La presunta transgresión a la normatividad electoral por parte de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del *IEQROO*, Juan Manuel

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Pérez Alpuche y Thalía Hernández Robledo, Consejeros Electorales del mismo Instituto electoral local, Juan Alberto Manzanilla Lagos, Armando Miguel Palomo Gómez y Mauricio Morales Baiza, representantes ante el Consejo General del referido Instituto de los partidos *PRI*, *PNA* y *PT*, respectivamente, Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización, José Luis González Nolasco, entonces Director de Partidos Políticos y Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social todos del *IEQROO* y de quien resulte responsable, derivado de la supuesta realización de acciones dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Claudia Carrillo Gasca, o de las prerrogativas inherentes al cargo público que ostenta como Consejera Electoral del *IEQROO*; conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razón de género.

Lo anterior, derivado de los siguientes hechos enunciados en los escritos de queja:

- El seis de noviembre de dos mil quince, por invitación de Mayra San Román, Consejera Presidenta del *IEQROO*, asistió a una reunión en el Tribunal Electoral de la referida entidad federativa junto con otros Consejeros Electorales del citado Instituto Electoral, donde el Magistrado Presidente, Víctor Venamir Vivas Vivas, refirió que su designación como Consejeros era gracias a él, al magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y a Roberto Borge Angulo, entonces Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa, por lo que solicitaba su apoyo para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional y a la coalición integrada por el partido Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, siendo que la quejosa y el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, se negaron a otorgar dicho apoyo por lo que fue amenazada por parte de Víctor Venamir Vivas Vivas, diciéndole *“que no dijera nada, que las cosas van a hacerse como deben hacerse, y que tenía que cooperar en beneficio de su partido, y que si no aceptaba le iría mal”*.
- De igual suerte, la quejosa refiere que al salir de dicha reunión, iba camino a comer con los consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, y en ese momento recibió una llamada del Magistrado Carlos

Alejandro Lima Carvajal, quien le dijo que *ya sabía lo que había pasado en dicha reunión, infiriéndole diversas groserías, desvalorizándola por el hecho de ser mujer y exigiéndole obediencia a él, al magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y a Roberto Borge Angulo, entonces Gobernador Constitucional de Quintana Roo, amenazándola a ella y a su familia.*

- Posteriormente, en enero de dos mil dieciséis, tras un recorrido para verificar y elegir las sedes distritales en el Estado, la quejosa refiere que propuso que se buscaran mejores opciones, lo anterior al darse cuenta del precio elevado que se pagaba por concepto de rentas; derivado de ello, recibió varios mensajes de texto por parte del magistrado Carlos Lima Carvajal, quien la instó a que *“no se meta en temas de dinero”,* que luego no *“chille”* y que *“esperara las consecuencias”.*
- A partir de lo anterior y a consecuencia de ello, la quejosa denuncia que ha sufrido amenazas, acoso, ocultamiento de información, exclusión de actividades de trabajo por parte de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina y otros Consejeros Electorales, bajo las instrucciones de Víctor Venamir Vivas Vivas y de Carlos Lima Carvajal.
- El veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, se votó el acuerdo por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, en dicho asunto la quejosa votó en contra del proyecto por considerarlo ilegal y contrario a lo establecido en la norma local.

La quejosa aduce que, en dicha sesión, en el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, fue sometida a cuestionamientos respecto al sentido de su voto por parte del representante propietario del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos, conducta presuntamente contraria al artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del *IEQROO*, poniendo en duda su debida designación como Consejera, así como sus conocimientos en la materia.

- El ocho de marzo de dos mil dieciséis, fecha en la que se festeja el día internacional de la mujer, el periódico Novedades Quintana Roo, publicó una nota con el siguiente encabezado “*Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo: Claudia Carrillo Gasca ‘carga’ con una decena de expedientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado*”¹⁰⁹.

Al respecto, la quejosa refiere que dicha nota es totalmente falsa, y que hasta ese momento, ella desconocía que tenía abiertas averiguaciones previas en su contra y que presentó su renuncia en dicha dependencia el treinta y uno de octubre de dos mil quince.

- El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el mismo periódico, publicó otra nota con el siguiente encabezado: “*Quieren que se investigue a todos los consejeros del IEQROO: Esto ocurre luego de que la consejera electoral Claudia Carrillo fue acusada de mentir para ocupar el cargo.*”¹¹⁰ En dicha nota periodística el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos, dijo “*desconocer la información, aunque precisó que si existen pruebas y evidencias que demuestran las acusaciones, se tiene que hacer una investigación más a fondo por parte de la autoridad federal para aclarar el tema*”, lo que, a juicio de la quejosa, deja claro el dolo con el que se manifiestan para tratar de intimidarla.

De igual forma refiere que, en el caso de que Manzanilla Lagos tuviera en su poder pruebas e información respecto de la averiguación previa 209/2014, se podría estar cometiendo el delito de infidelidad de la custodia de documentos, tipificado en el artículo 245, del Código Penal del estado de Quintana Roo.

También refiere la quejosa, que las calumnias en su contra fueron iniciadas por Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del *PR*I ante el Consejo General del *IEQROO*, y que se publicaron en diversos portales de noticias

¹⁰⁹ Dicha nota periodística puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica <http://sipse.com/novedades/consejera-electoral-ine-procuraduria-general-de-justicia-ministerio-publico-elecciones-2016-consejera-electoral-claudia-carrillo-gasca-194965.html>

¹¹⁰ Dicha nota periodística puede ser consultada en: <http://sipse.com/novedades/consejeros-electorales-claudia-carrillo-ieqroo-195138.html>

como Impulso Quintana Roo, Del Campo Noticias y Periodistas Quintana Roo.

Lo anterior, a juicio de la quejosa, representa un acto de represión para intimidarla por no votar a favor de todos los proyectos y en beneficio del *PRI*, como la instruyó el Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, y el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal.

- Derivado de la publicación de dichas notas, la quejosa solicitó al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, Alfredo Figueroa Orea, hiciera una aclaración y solicitara su derecho de réplica. Al respecto, de acuerdo con lo narrado por la quejosa, dicho funcionario le negó el apoyo solicitado, y le refirió que él solo dependía de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
- El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la quejosa refiere que fue informada por los agentes judiciales, ex compañeros de la Policía Judicial del Estado, que personal de la Dirección Jurídica de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, pretendían que firmaran declaraciones testimoniales en su contra por abuso de autoridad, a lo que se negaron por lo que fueron amenazados de represalias laborales. En concepto de la quejosa, dicha situación, coincide con lo publicado por el periódico *Novedades*, el ocho y nueve de marzo de dos mil dieciséis.
- El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la quejosa refiere que recibió mensajes por la red social *Facebook*, de una persona de nombre “Carlos Lara”, quien le escribió:

“Lic que tal, oye ayer 26 de abril fue YOHE AL PUCHERO y SAAVEDRA RIVERA a comparecencia al jurídico en Cancún, es por un expediente penal que levantaron en tu contra cuando eras MP acá en Playa, de un bicho que ordenaste poner a disposición, uno que quería levantar una denuncia algo así. El caso es que en jurídico un lic de allí quería que SAAVEDRA firmara la declaración que ya la tenían lista en tu contra y SAAVEDRA la leyó y no firmó,

y le dijeron que lo causarían (sic) con su director, este YOHE agarró ni la leyó y la firmó y se fue, allí es esa declaración (sic) se refiere que eran las 9 am y que ordenaste nomas por los tuyo poner a disposición al bicho, SAAVEDRA se negó pq (sic) ello sería contradictorio en la puesta que el hizo. Te comento pa (sic) que cheques con el jefe por allá en tu nueva comisión o pide hablar con el gober (sic) y le comentas la situación que está implicando jurídico, quiero pensar que el procurador no sebe (sic) que quieren cocinarte un expediente, y como estás allá en el INE no creo que quieran echarse encima las elecciones al afectarte y tu afectes a ese partido si no te” (sic).

- Al respecto, la quejosa manifiesta que por conducto de su abogado Alejandro Buenfil Aguirre, trataron de tener conocimiento del expediente y solicitar una fecha de comparecencia para rendir su declaración como presunta responsable y presentar sus testigos de descargo, pero el entonces Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Norte, Ludwing Alejandro Vivas Arjona, quien, a dicho de la quejosa, es primo del magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, le negó su derecho a defenderse, hasta que no lo consultara con el Fiscal General de Justicia del Estado, siendo que fue hasta después del cinco de junio de dos mil dieciséis que pudo tener acceso al expediente PGJE/DP/SGJ/DA/JN/AP/209/2014, el cual, según su opinión, es un hecho que pudo haber sido un acta administrativa y lo convirtieron en una averiguación previa después de dos años de sucedidos los hechos, siendo que tal conducta, a dicho de la quejosa, se encontraba prescrita.

Por lo anterior, la quejosa dice que tiene preocupación de que dolosamente afecten su persona, libertad personal o su trabajo, por ser una Consejera imparcial que da atención por igual a todos los partidos políticos.

- El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la quejosa dice haber recibido una llama telefónica del Magistrado Carlos Lima Carvajal, donde de forma sarcástica, le informó que eso es para que se “*aplaque*” y tenga con qué entretenerse si sigue de “*rebelde*”.
- La quejosa refiere que existe una intervención directa por parte del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente del TEQROO, quien se

ha autonombrado “El Octavo Consejero”, tanto en las sesiones previas del Consejo General, como en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores.

- De igual suerte, la quejosa refiere que en las reuniones a las que asistió el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas junto con algunos Consejeros Electorales del Instituto local, no fueron convocados ni ella ni los Consejeros Electorales Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.

En dichas reuniones, se estableció que el enlace entre ambas instituciones sería el ex magistrado José Carlos Cortés Mugartegui, quien, según el dicho de la quejosa, tiene lazos consanguíneos con la Secretaria Particular de la Presidenta del Instituto, lo que, a su parecer, presume una total subordinación.

Al respecto, la quejosa solicitó a la Consejera Presidenta del *IEQROO* la razón por la que el *TEQROO* intervenía en la integración de los expedientes, a lo que le contestó que existía un convenio de colaboración entre ambas instituciones para tal efecto, situación que, según el dicho de la quejosa, era falsa en ese momento, ya que dicho convenio fue aprobado posteriormente.

- El treinta de abril de dos mil dieciséis, en sesión del Consejo General del Instituto local, se aprobó el convenio de colaboración entre el *IEQROO* y el *TEQROO* en materia de Procedimiento Especial Sancionador; al respecto la quejosa manifestó que dicho instrumento jurídico carecía de análisis, por lo que sugirió mecanismos más seguros de información que abonarían a la máxima publicidad, además de que con dicho convenio se justificaría la intervención de personal del *TEQROO* en las funciones del *IEQROO*.

Según la quejosa, en dicha sesión, el representante del Partido Nueva Alianza, Armando Miguel Palomo Gómez, realizó una serie de comentarios ofensivos en su contra por ser originaria de Cozumel, Quintana Roo.

La quejosa considera que dichas manifestaciones fueron consentidas por la Consejera Presidenta, pues no llamó al orden, ni aplicó las medidas de

apremio establecidas en la normativa, siendo que el Secretario General del Instituto fue quien invocó el artículo 38 del Reglamento de Sesiones para recordar a todos los integrantes que se deben abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajena a los asuntos que se están desahogando en el orden del día.

- Posterior a dicha sesión del Consejo General, la quejosa refiere que ella y los consejeros electorales Luis Carlos Santander Botello y Sergio Avilés Demeneghi, han sido excluidos de las actividades propias del Instituto Electoral local, por lo que el seis de mayo de dos mil dieciséis, presentó un escrito dirigido a la Consejera Presidenta, solicitando ser incluida en las actividades del seis, siete y ocho de mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Al respecto, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, pasados los eventos, la Consejera Presidenta contestó dicho escrito refiriendo que se había determinado, en una reunión informal a la que la quejosa refiere no fue invitada, que fuera la Comisión de Administración, integrada por los Consejeros Electorales Jorge Armando Poot Pech, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, la encargada de realizar los eventos del seis, siete y ocho de mayo pasados.

- El nueve de mayo de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó por escrito a la Consejera Presidenta que, en el marco de la promoción del voto, se incluyera en los promocionales, spots, itinerarios y como temática de capacitación y educación cívica, la prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, de acuerdo al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, así como establecer lazos a través de convenios para realizar foros con instituciones como la Secretaría de Educación Pública, con aquellas instituciones dedicadas a la protección de la mujer en el Estado e, incluso, con la Legislatura del Estado, a efecto de coadyuvar conjuntamente en la prevención, orientación y apoyo de dicho mal.

Sobre el particular, la quejosa refiere que no ha recibido respuesta alguna por parte de la Consejera Presidenta, violando con ello su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional.

- El dos de junio de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto local, se discutió el proyecto de acuerdo respecto a la solicitud de los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA, sobre el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio de reproducción de imágenes, al interior de las casillas.

Al respecto, la quejosa manifestó que se considerara como una invitación dirigida al electorado de no usar dispositivos para tomar imágenes al momento de votar dentro de las mamparas, sin que dicho hecho se pudiera considerar como una incidencia ni causal de impugnación, sino como mera prevención de un delito. Y que, para tal efecto, se usaran los medios de comunicación, como radio, periódicos y redes sociales, y no solamente los estrados y la página oficial del Instituto, haciendo énfasis en que el voto es libre y secreto.

Con posterioridad a dicha intervención, el representante del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos dijo: *“que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos,”* siendo que dicha manifestación no puede ser considerada pacífica y respetuosa, sin que la Consejera Presidenta llamara a mantener el orden durante la sesión.

De igual suerte, la quejosa denuncia que Juan Alberto Manzanilla Lagos, se ha conducido hacia ella de manera grosera, denostativa y agresiva, y que, previo a las sesiones, le ha dicho en los pasillos que *“seguro le da las nalgas al candidato del PRD-PAN”*. Dichas agresiones, considera, se realizan en su contra por no ser partícipe de las instrucciones partidistas de los magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y Carlos Alejandro Lima Carvajal.

- Que, desde su nombramiento como Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el diecinueve de noviembre de

dos mil quince, se le ha negado el espacio por parte de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina para exponer sus propuestas ya que, según su dicho, la Presidenta manifestó que el tema de igualdad entre mujeres y hombres no cuadra con la organización previa de las elecciones.

- En virtud del hecho anterior, dice haber sido aprovechada por el representante propietario del *PRI* ante el Instituto local, Juan Alberto Manzanilla Lagos, para agredirla en sesión del Consejo General del treinta de junio de dos mil dieciséis, tal y como se advierte de la versión estenográfica de la sesión de referencia.

La quejosa refiere que, en la misma sesión del Consejo General de treinta de junio de dos mil dieciséis, solicitó ser incluida en el Comité de Transparencia de esa autoridad electoral local y que la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina y el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche trataron de disuadirla, negándose rotundamente a incluir Consejeros en dicho Comité, sin justificar dicha negativa.

- El veintidós de julio de dos mil dieciséis, el *TEQROO*, en sentencia recaída dentro del expediente JDC/025/2016 y sus acumulados, determinó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en los siguientes términos:

SÉPTIMO. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.

*De lo antes expuesto, se advierte que los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, incurrieron en responsabilidad al tener una **notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones**, al inobservar las disposiciones constitucionales y legales en materia de asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional y violentar con ello los principios de legalidad, certeza y objetividad que por mandato en los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna; 49, fracción I, de la Constitución Local; y 6 de la Ley Orgánica del Instituto, están obligados a observar y cumplir en el desempeño de sus funciones.*

Lo anterior, toda vez que la citada autoridad administrativa electoral únicamente tiene dentro de sus atribuciones el efectuar el cómputo y la asignación de

Diputados por el Principio de R.P., Declarar la validez de la elección de Diputados por el mismo principio, determinar la elegibilidad o ineligibilidad de la fórmula de candidatos electos y consecuentemente, la entrega de la constancia de asignación a los ciudadanos ganadores. Por lo que al haber realizado de manera arbitraria y en contravención a los ordenamientos constitucionales y legales la modificación de la segunda fórmula de la lista de candidatas a Diputadas por el Principio de R.P., postuladas por el PAN, incurrieron los Consejeros Electorales en responsabilidad.

En consecuencia, en términos de los artículos 102, numeral 2, inciso b); y 103, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral de la presente resolución para los efectos legales a que haya lugar.

Al respecto, la quejosa interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, mismo que fue radicado con el número de expediente SX-JDC-479/2016, rencauzado como juicio electoral, formándose el diverso SX-JE-28/2016¹¹¹, donde la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que *fue indebido el actuar del Tribunal Local al afirmar que los Consejeros Electorales “incurrieron en responsabilidad al tener una notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones ...”*¹¹², lo anterior, pues la autoridad jurisdiccional local, solo tiene facultades para confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, siendo que no le corresponde, para efectos de lo previsto en los artículos 102 y 103, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinar si ello se trata de una responsabilidad y mucho menos calificarla de notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones.

Cabe precisar que por acuerdo dictado dentro del expediente UT/SCG/CA/TEQR/79/2016, de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la UTCE determinó no iniciar procedimiento de remoción en contra de los Consejeros Electorales del IEQROO.

¹¹¹ Dicha resolución puede ser consultada en: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0461-2016.pdf>

¹¹² Dicho argumento es visible en la página 46 de la resolución citada.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Derivado de lo anterior, la quejosa refiere que el actuar del *TEQROO*, presidido por el magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, tiene como objetivo mantener el control interno de los Consejeros, a través de intimidaciones y con la finalidad de desacreditarla, tal como le advirtió desde el inicio de su encargo.

- La quejosa refiere que, el diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, ser tomada en cuenta para asistir a las actividades del vigésimo aniversario del *TEPJF*, que se llevarían a cabo el veintidós y veintitrés de agosto, sin que se le diera respuesta.
- La quejosa señala que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se percató que personal del Instituto electoral local, así como personal externo se encontraban capturando la información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizados en la Jornada Electoral del cinco de junio anterior.

Sobre el particular, la quejosa dice haber solicitado a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización de Instituto local, le explicara bajo qué circunstancias se estaba realizando dicho trabajo, a lo que le contestó que *no tenía por qué darle ninguna explicación y que si la necesitaba se la pidiera a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina*.

Por lo anterior, la quejosa presentó escrito dirigido a la Consejera Presidenta, donde le informó de los hechos y le formuló diversos cuestionamientos respecto de la captura de dicha información. De igual suerte, la quejosa le informó de lo acontecido a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad federativa.

- El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa refiere haber recibido la visita del Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco, quien la amenazó al decirle lo siguiente: *“que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se*

vaya el Gobernador Roberto Borge Ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia”.

Posteriormente, recibió una llamada de dicho funcionario público a su celular para reiterarle que *no denunciara los hechos ocurridos el día anterior, pues su vida no valía nada*. Lo anterior fue hecho del conocimiento de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina vía mensaje de texto, sin que recibiera respuesta alguna.

- Ese mismo día, la quejosa refiere que presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, con la que se abrió el expediente FED/QROO/CHET/0000/400/2016.
- La quejosa dice haber recibido respuesta por parte de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en el siguiente sentido:
 - a) *¿Cuál es la finalidad de la captura de dicha información de la Lista de Electores de todo el Estado?*

Integrar estadísticas relacionadas con los comicios electorales locales, así como recopilar datos de los propios órganos de esta autoridad comicial, para la elaboración de la numeralia y las citadas estadísticas, con fines académicos y de investigación.
 - b) *¿El motivo por el cual se está haciendo durante el proceso electoral sin esperar hasta la conclusión del mismo y de las impugnaciones por resolver?*

Es una atribución prevista legalmente para las áreas técnicas de este Instituto – Dirección de Organización y la Unidad Técnica de Informática y Estadística-, por lo que se tomaron las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la misma.
 - c) *¿Cuántos días lleva el personal del Instituto haciendo dicha labor?*

5 días.
 - d) *El motivo por el cual se autoriza la intervención de gente ajena al Instituto para la captura de información de la Lista de Electores.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

En ese punto, cabe señalar que para dicha actividad únicamente se contó con el apoyo y colaboración de personal adscrito a las distintas áreas que conforman el Instituto.

- e) *¿Cuáles son las casillas que previo a la conclusión del proceso electoral se está tomando información?*

Para la generación de las estadísticas y la numeralia se toman en consideración únicamente la información relacionada con las casillas de los Consejos Distritales y Municipales, cuyos resultados se encuentran firmes y definitivos al no haber sido impugnados.

- f) *Si se trata de una situación estadística, ¿por qué motivo se está capturando el OSR (sic) y la clave de elector de cada ciudadano que votó?*

Para dicha actividad se están obteniendo de la clave de elector de cada ciudadano, algunos datos como lo son la fecha de nacimiento, entidad de origen y sexo.

Por cuanto al ORC, es de señalarse que dicho dato únicamente se encuentra en la Credencia de Elector, por lo que no forma parte de la Lista Nominal.

- g) *¿Qué medidas se están adoptando para evitar la destrucción, sustitución, comercialización, alteración o uso indebido de dichas listas de electores?*

Al respecto, hago de su conocimiento que la información utilizada para la generación de las estadísticas se encuentra en resguardo de la Dirección de Organización, por lo que dicha área estableció las medidas necesarias y pertinentes a fin de evitar la destrucción, sustitución, comercialización, alteración o uso indebido de las listas nominales de electores.

- h) *El motivo por el cual no informó a los demás miembros del Consejo General y partidos políticos.*

Dicha actividad se encuentra prevista dentro de las facultades de la Dirección de Organización y la Unidad Técnica de Informática y Estadística, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, fracciones III y VI, así como 57, fracción XI; respectivamente, ambos de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

- i) *El motivo por el cual dichas listas de electores en todo caso no se enviaron con inmediatez al Instituto Nacional Electoral.*

Como ha quedado señalado, dichas listas son el único insumo con el que se cuenta para cumplir con la obligación legal impuesta a las áreas técnicas de este Instituto señaladas anteriormente, relativas a la generación de la pluritada estadística.

De igual forma, es importante referir que dichas listas nominales han sido requeridas por el TEQROO derivado de las impugnaciones interpuestas contra los resultados de las elecciones respectivas, siendo que a la presente fecha existen impugnaciones pendientes de resolver en las salas correspondientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inclusive.

- La quejosa refiere que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, durante la Sesión Ordinaria del Consejo General, fue objeto de violencia por diversos representantes de partidos políticos y los Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche. Lo anterior derivado de que, a juicio de la quejosa, en el contexto de la discusión que se llevó a cabo durante un punto de Asuntos Generales de la citada sesión, respecto de la denuncia presentada por un posible uso indebido del listado nominal, así como la filtración de dicho asunto a medios de comunicación, se podía establecer una coalición de representantes de partidos y consejeros a efecto de atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

De igual suerte, la quejosa refiere que ha recibido una serie de mensajes anónimos, que ella piensa provienen de servidores públicos del Instituto local, donde le informan que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de la autoridad electoral local, están trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

- Derivado de lo anterior, la quejosa dice que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se publicó una nota de Facebook del *link*¹¹³ SCR noticias en donde señalan lo siguiente:

Se detracta consejera electoral en acusaciones por utilización de listas nominales.

STAFF SOLQR.- Se detracta la consejera del IEQROO(legroo) Claudia Carrillo de sus acusaciones contra la presidenta del órgano electoral Mayra San Román Carrillo Medina, pues después de haber escuchado el informe que rindió esta

¹¹³ Dicha nota es consultable en http://www.solqr.com.mx/periodico/index.php/deportes/deporte-local/index.php?option=com_content&view=article&id=36696:2016-08-24-15-03-42&catid=43:locales&Itemid=565

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

última con motivo de la elaboración de la estadística con material electoral de las pasadas elecciones del 5 de Junio.

Durante su intervención en la sesión del consejo general del leqroo, Carrillo Gasca admitió que fue ella quien tomó fotografías sin consentimiento del personal que se encontraba realizando actividades estadísticas electorales, así como de las listas nominales y equipo de cómputo.

Cabe señalar que durante la sesión extraordinaria la consejera presidenta del organismo Mayra Carrillo Medina advirtió que se realizará una investigación al respecto contra quien resulte responsable de la filtración de imágenes que se tomaron sin consentimiento por parte de la consejera Carrillo Gasca.

Lo anterior fue parte de los trabajos de la sesión que se realizó en el leqroo, donde los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, descalificaron los supuestos emitidos por la consejera Carrillo Gasca de mal manejo del material electoral y de su actuar que provocó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Al final de esta sesión la consejera Carrillo Gasca negó que haya mencionado el tema de la violación de paquetes electorales, cuando en días pasados mostró la información en medios de información locales donde consignaba que se trataba de una violación grave por parte del leqroo al "violar los paquetes electorales", lo cual nunca sucedió.

Además, se mencionó en dicha sesión que podrían interponer procedimientos legales los trabajadores del leqroo que fueron captados en las imágenes de Carrillo Gasca que filtró de diferentes medios de comunicación por las supuestas irregularidades en el manejo de material electoral que tenía como única finalidad estudios estadísticos.

Cabe mencionar que fue la misma Consejera Carrillo Gasca, así como los integrantes de dicho consejo electoral que aprobaron en meses anteriores que se realicen como parte natural del actuar del leqroo trabajos de recabación de información posterior a las elecciones 2016 y que no afectaría los resultados que ya son inamovibles.

- Respecto de dicha nota, la quejosa refiere haber solicitado a Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto local, por escrito CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la versión estenográfica del audio de las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación al término de la sesión del Consejo General del pasado veintitrés de agosto, con la finalidad de solicitar su derecho de réplica.

De acuerdo a lo manifestado por la quejosa, fue hasta el treinta de agosto siguiente que el Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE, le informó que dichos audios fueron enviados a su correo electrónico institucional, situación que, a dicho de la quejosa, no pasó.

- El veinticuatro de agosto, acudió a la Procuraduría General de la República, con representación en Chetumal, Quintana Roo, para ampliar su denuncia, por el manejo del Listado Nominal.
- El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa refiere que se realizó una actividad con el Partido Nueva Alianza; que en el boletín de prensa respectivo, titularon “Promueve IEQROO el liderazgo de la mujer a través de los partidos políticos”, al cual no fue invitada siendo que ella preside la Comisión Transitoria para la igualdad de mujeres y hombres, y que la Consejera Presidenta sólo invitó a la Consejera Thalía Hernández Robledo.
- De igual suerte, la quejosa refiere que se le ha negado en todo momento tener un asesor de forma permanente para auxiliarla en el desahogo de sus actividades, ya que únicamente, por un periodo de tres meses, le fue asignada una persona sin experiencia en materia electoral, recién egresado, sin que cuente por el momento con ningún tipo de apoyo directo ni de ninguna área técnica, ya que, según su dicho, así lo instruyó la Presidenta del Instituto.
- Además, refiere que el treinta de agosto de dos mil dieciséis presentó escrito dirigido a la Consejera Presidenta, por el que le solicitó instruyera al Director de Organización para que le diera respuesta a las preguntas que formuló durante la sesión del Consejo General del pasado veintitrés de agosto.

La quejosa refiere que todo lo acontecido, parece ser una consecuencia de no actuar en beneficio de la coalición de partidos como le pidió el magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y Carlos Alejandro Lima Carvajal.

Asimismo, Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, presentó diversos escritos posteriores al escrito de queja, en los cuales señaló nuevos

hechos, que en su concepto constituyen violencia política por razón de género, los cuales consisten en lo siguiente:

- Mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, señaló que la Consejera Presidenta fue omisa en contestar el oficio CCG/029/16, a través del cual solicitó dar a conocer el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres; así como el oficio CE/CCG/088/16, mediante el cual solicitó diversos datos de reuniones con el Instituto Nacional de las Mujeres; además de la negativa para autorizarle viáticos para asistir al Congreso Nacional de Estudios Electorales en Guanajuato, lo cual se solicitó mediante el oficio CE/CCG/090/16.
- Por otra parte, dentro del mismo escrito, la quejosa señala que el Titular de Comunicación Social del *IEQROO*, no atendió su solicitud de difundir sus actividades y campañas para la prevención y erradicación de la violencia política contra la mujer; así como la falta de contestación al oficio CE/CCG/094/16, dirigido al Director Administrativo del citado Instituto, sobre la cantidad de viáticos para los Consejeros que asistieron al Congreso Nacional Electoral en Guanajuato; además del ocultamiento de información y la falta de contestación al oficio CE/CCG/085/16, dirigido al Director de Organización del *IEQROO*, sobre la actividad de entrega de material electoral en el municipio de Othón Pompeyo Blanco en el municipio de Chetumal, Quintana Roo.
- A través del escrito de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la quejosa señala que fue excluida de diversas reuniones con las autoridades nacionales del Servicio Profesional Electoral, organizadas por el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*.
- Asimismo, mediante el escrito de primero de marzo de dos mil diecisiete, señaló que fue excluida por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del *IEQROO*, en la entrega de una compensación por proceso electoral por la cantidad de diez mil pesos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- De igual manera, a través del escrito de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, señaló un supuesto trato diferencial y discriminatorio de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, ya que no publicó la información que le había solicitado la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca y sí la de otros Consejeros Electorales.
- Finalmente, mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, señaló que José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del *IEQROO*, compareció ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en carácter de presunto responsable en el procedimiento identificado como número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016 o carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, auxiliándose de Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, quienes actuaron como abogados en dicho procedimiento siendo funcionarios del referido Instituto, lo cual le causa le causa extrañeza, temor y zozobra.

4. Elementos probatorios. La relación del material probatorio que consta en el expediente en que se actúa se precisa en el anexo 2 de la presente resolución.

Las pruebas identificadas con los números; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 238, 246, 248, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 284, 290, 292, 297, 298, 303, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374 y 386, del anexo 2 de la presente resolución poseen valor probatorio pleno, al tratarse de **documentales públicas** por consistir en **documentos certificados u originales** emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo previsto

en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*.

Mientras que las identificadas con los números; 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 44, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 81, 88, 89, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 170, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 267, 271, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, carecen de pleno valor probatorio, ya que no tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que su eficacia probatoria para demostrar el hecho dependerá de la relación que encuentren entre sí, acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c); 462, párrafo 3, de la *LGPE* y 22, párrafo 1, fracciones II y III, y 27, párrafos 1 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

4.1. Acreditación de los hechos. A efecto de determinar si los hechos denunciados constituyen o no violencia política por cuestión de género, discriminación o afectación de la función electoral en contra de la quejosa, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el expediente, de conformidad con lo siguiente:

1. Reunión celebrada el seis de noviembre de dos mil quince en el *TEQROO*

La quejosa refiere que el seis de noviembre de dos mil quince, por invitación de Mayra San Román, Consejera Presidenta del *IEQROO*, bajo engaños, asistió a una reunión en el Tribunal Electoral de la referida entidad federativa junto con otros Consejeros Electorales del citado Instituto Electoral, donde el Magistrado Presidente, Víctor Venamir Vivas Vivas, refirió que su designación como Consejeros era gracias a él, al magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y a Roberto Borge Angulo, entonces Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa, por lo que solicitaba su apoyo para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional y a la

coalición integrada por el partido Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, siendo que la quejosa y el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, se negaron a otorgar dicho apoyo por lo que fue amenazada por parte de Víctor Venamir Vivas Vivas, diciéndole *“que no dijera nada, que las cosas van a hacerse como deben hacerse, y que tenía que cooperar en beneficio de su partido, y que si no aceptaba le iría mal”*.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que el seis de noviembre de dos mil quince, acudieron a las instalaciones del *TEQROO* las y los Consejeros Electorales del *IEQROO* Thalía Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca, Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche, Sergio Avilés Demeneghi y la Consejera Presidenta de dicho Instituto local, Mayra San Román Carrillo Medina.
- b) **Se tiene por acreditado** que los referidos consejeros electorales acudieron a las instalaciones del *TEQROO* por invitación de la Consejera presidenta del *IEQROO*, Mayra San Román Carrillo Medina.
- c) **No se tiene por acreditado** que la Consejera Presidenta hubiera llevado bajo engaños a los consejeros electorales a la reunión en cuestión, sino que la Presidenta invitó a los referidos consejeros bajo el argumento de provocar un acercamiento con el referido Tribunal local para efectos de colaboración institucional.
- d) **Se tiene por acreditado** que los referidos consejeros electorales se reunieron en la referida fecha con el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas.
- e) **No se tiene plenamente acreditado** que el objeto de dicha reunión hubiera sido de felicitación por la designación de los consejeros electorales, quienes habían sido nombrados días previos, así como de buscar colaboración entre ambas instituciones electorales locales, al no existir elementos probatorios con valor pleno para arribar a dicha

conclusión, toda vez que las versiones sobre los hechos acontecidos por quienes acudieron a la reunión en cuestión no son coincidentes, por lo que al tratarse de un indicio será analizado en concatenación con otros medios de prueba en el contexto del resto de los hechos narrados en la denuncia.

- f) **No se tiene plenamente acreditado** que en la referida reunión el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, haya referido que los consejeros electorales presentes le *debieran el cargo a él, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y al Gobernador del Estado*, al no existir elementos probatorios con valor pleno, para arribar a dicha conclusión toda vez que las versiones sobre los hechos acontecidos por quienes acudieron a la reunión en cuestión no son coincidentes.

No obstante, existe un indicio de una posible presión del referido Magistrado sobre los consejeros electorales, ello derivado de una conversación de éste con el Consejero Avilés Demenegui que obra en el expediente, por lo que al tratarse de un indicio tal circunstancia será analizada en concatenación con otros medios de prueba en el contexto del resto de los hechos narrados en la denuncia.

- g) **No se tiene por acreditado** que en la referida reunión el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas hubiera sugerido que el Instituto electoral local emitiera lineamientos contrarios al *INE* o a la ley electoral, igualmente al no haber elementos probatorios con valor pleno y no existir versiones coincidentes de los asistentes a la reunión.
- h) **No se tiene por acreditado** que en la referida reunión el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas hubiera reprimido o amenazado a la quejosa en los términos precisados en su denuncia, por lo que al existir una presunción por el dicho de la quejosa, este hecho será analizado en concatenación con otros medios de prueba en el contexto del resto de los hechos narrados en la denuncia.

Al respecto, debe precisarse que tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados consistentes, por ejemplo en amenazas, suelen presentarse en espacios privados por lo que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.¹¹⁴

Por tanto, por el simple dicho de la quejosa, se analizarán las supuestas amenazas mediante la adminiculación del resto de los medios de prueba que constan en el expediente, así como del contexto de los hechos narrados por la Consejera.

- i) **Se tiene por acreditado** que a la referida reunión no acudió el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello, sin que consten los motivos de su ausencia en dicha reunión.

Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas:

- Respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora mediante acuerdos de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete, a la Consejera Presidenta del *IEQROO* Mayra San Román, a las y los consejeros electorales del propio Instituto, Thalía Hernández Robledo, Jorge Armando Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche, así como al Magistrado del *TEQROO* Victor Venamir Vivas Vivas, mediante los cuales refirieron que estuvieron presentes en la reunión en cuestión y relataron lo que ahí aconteció.

¹¹⁴ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

Si bien el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, señala que acudió a la referida reunión y en cierta forma respalda las afirmaciones realizadas por la quejosa, ello no es suficiente para tenerlo por cierto al no existir otros medios de prueba mediante los cuales se pueda verificar. Además, de todos los asistentes a dicha reunión, es el único que sostiene, en parte, lo argumentado por la quejosa.

Las respuestas a los requerimientos de información antes precisados se presentaron en los siguientes términos:

○ **Consejera Presidenta Mayra San Román¹¹⁵**

“Como es del conocimiento público, la suscrita, junto con mis compañeras y compañeros consejeros electorales que integramos el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, fuimos designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 30 de octubre de 2015, y en consecuencia el día tres de noviembre de ese año, tomamos la protesta de Ley respectiva.

Derivado de ello, consideré oportuno reunirnos con el Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, atendiendo a que las autoridades que ambos encabezamos debemos trabajar de manera coordinada por mandato legal, tanto en el trámite de los medios de impugnación, como en la sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador que por primera vez se implementaría en el Estado, y asimismo como una oportunidad para presentar a mis compañeros con dicha autoridad jurisdiccional local, siendo que dicha reunión fue en los primeros días posteriores a nuestra designación.

Como ya indiqué, con la única y exclusiva finalidad de la colaboración institucional que debe existir entre las autoridades comiciales tanto locales como nacionales, como en este caso el IEQROO y el TEQROO, es que la suscrita consideré viable tener un acercamiento con el Presidente del referido Tribunal Electoral, siendo que la pluricitada reunión, mis compañeros y yo fuimos felicitados por el referido Magistrado en razón de la designación de la que fuimos objeto y en la que, de manera genérica se refirieron a temas relacionados con el trabajo conjunto entre ambas autoridades y conforme a la normativa aplicable, para llevar a buen puerto la elección del 5 de junio de 2016.”

...el único objetivo de la reunión fue para felicitar a la suscrita y mis compañeras y compañeros consejeros electorales por la designación de que fuimos objeto, así como para hablar de manera general sobre la colaboración institucional que por ley tienen nuestras instituciones.

A dicha reunión asistimos la suscrita, así como mis compañeras Thalía Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca, y mis compañeros Jorge Armando Poot Pech, Juan

¹¹⁵ Visible a fojas 1777 a 1792 anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, debiendo señalar que el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello no acudió.

Al concluir la reunión, la suscrita y el Magistrado del Tribunal, de manera privada tocamos algunos puntos para el trabajo conjunto que se llevaría a cabo con posterioridad, siendo uno de los primeros trabajos que se realizaron conjuntamente el relativo a la conmemoración de los trece años de surgimiento de ambas instituciones, mismo que se llevó a cabo en el mes de febrero de dos mil dieciséis, adjunto como referencia las notas periodísticas de dicho evento (Anexo 1). Por lo que la única relación que la suscrita ha tenido con el citado Magistrado ha sido de coordinación institucional.”

Se niega que en esa reunión el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas haya realizado tales manifestaciones, por lo que desconozco dichas afirmaciones por parte de la quejosa, toda vez que como ya he señalado, el citado Magistrado únicamente refirió palabras de congratulación por la designación de la que fuimos objeto, siendo que igualmente se habló de manera generalizada, sobre la colaboración institucional entre ambas autoridades electorales locales.

Se niega que el funcionario electoral en cuestión haya realizado tal sugerencia. (Sugerir que se hicieran lineamientos contrarios al Instituto Nacional Electoral o a la Ley Electoral.)

Respecto del presente cuestionamiento me permito referir que este Instituto Electoral en todo momento y, desde nuestra designación por parte del Instituto Nacional Electoral, hemos actuado en total apego a los principios rectores de la materia electoral, así como en observancia a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que nos rigen, atendiendo desde luego todos y cada uno de los lineamientos y directrices emitidas por el Instituto Nacional Electoral, tan es así que la elección del pasado 5 de junio de 2016 quedó confirmada en todos sus aspectos por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, sin que se acreditara irregularidad alguna por parte de este órgano local.”

○ **Consejera Thalía Hernández Robledo¹¹⁶**

“Efectivamente al inicio de mi encargo como Consejera Electoral de este Organismo Público Local Electoral asistí a una reunión al Tribunal Electoral de Quintana Roo, sin recordar con certeza si se celebró el día 6 de noviembre de 2015, o bien pudo ser uno o dos días antes o uno o unos días después de la fecha indicada.

La razón por la que asistí a dicha reunión es porque la Consejera Presidenta de este órgano electoral, Mayra San Román Carrillo Medina, me comentó, al igual que a mis otros compañeros Consejeros Electorales, que nos extendía una invitación para acudir a dicho órgano jurisdiccional a efecto de sostener una plática con el magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas.

¹¹⁶ Visible a fojas 1894 a 1896 anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

La reunión se llevó a cabo con el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, y el objetivo de la misma fue básicamente el de sostener una conversación de carácter informal en la que en esencia y de lo que puedo recordar, nos felicitó personalmente por nuestra designación como Consejeros Electorales, hablamos de los nuevos retos que teníamos por delante como instituciones electorales, en el caso de algunos Consejeros fue básicamente el presentarse, situación que no aconteció con algunos otros, como es el caso de la suscrita, en razón a que previo a nuestra designación como Consejeros y Consejeras, habíamos tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito electoral. Asimismo recuerdo también que nos comentó sobre trabajar en diversas actividades conjuntas, refiriéndose particularmente a actividades de carácter académico de difusión del derecho electoral.

Niego que el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local se haya referido a los Consejeros Electorales que acudimos a dicha reunión, en tales términos

En ningún momento el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local sugirió tal afirmación.”

○ **Consejero Jorge Armando Poot Petch¹¹⁷**

“Como es del conocimiento público, el pasado 3 de noviembre de 2015 tomé posesión como Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, y días después sin saber con exactitud si fue el día 6 u otro día, por invitación de la Consejera Presidenta de este Organismo Público Local, junto con otros Consejeros acudimos a las instalaciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Es preciso señalar que todas las veces que hemos acudido al citado Tribunal ha sido por invitación expresa de la Consejera Presidenta o del Magistrado Presidente, siempre informándonos el motivo de la invitación, como por ejemplo la citada reunión, sesiones públicas, cursos impartidos por dicho tribunal, o cualquier otro evento de índole académico o judicial, el cual en compañía de mis demás compañeros hemos acudido, sin que al efecto exista engaño, dolo, presión o cualquier otro tipo de conducta que viciara el ánimo de acudir, ni mucho menos alguna obligación de asistir en contra de nuestra voluntad.

En la citada reunión recuerdo que, en primer lugar, la Consejera Presidenta nos presentó a los consejeros electorales al Magistrado Presidente, en algunos casos, como la del suscrito, ya conocíamos al Magistrado, pero en el caso de algunos otros compañeros era la primera vez que se presentaban.

Hecho lo anterior, recuerdo que el Magistrado Presidente nos felicitó a todos por nuestro nombramiento reciente e hizo el señalamiento que como autoridades locales en nuestro Estado era fundamental la colaboración entre ambos organismos para sacar adelante el proceso electoral 2016 que se avecinaba; así también todos y cada uno de los Consejeros que acudimos a dicha reunión, expresamos la importancia que revestía la coordinación entre los organismos electorales, y el compromiso que habíamos adquirido al ser nombrados como Consejeros Electorales del INE de poner todo nuestro

¹¹⁷ Visible a fojas 1371 a 1378, del anexo 3 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

empeño, experiencia y conocimientos a fin de que nuestras decisiones en el órgano máximo de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo sea para abonar a la democracia.

Algunos consejeros expresaron la experiencia que tenían en el ámbito electoral y otros, la experiencia que tenían en otros ramos del derecho, los cuales podía servir para abonar a la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones.

Ya por último, lo que recuerdo es que tanto el Magistrado Presidente como la Consejera Presidente externaron algunas actividades que se podrían llevar a cabo de manera conjunta entre el Instituto y el Tribunal Electoral.

En términos generales fue la incentivar un trabajo coordinado entre ambas instituciones, derivado de nuestros nombramientos recientes, puesto que ninguno de los siete consejeros actuales, habíamos tenido la oportunidad anteriormente de ser parte del órgano máximo de dirección de este organismo; de ahí, que este primer acercamiento con el Tribunal Electoral, a través de su Presidencia, fue abrir la brecha para llevar a cabo tareas conjuntas y coordinadas, cada quien en el ámbito de su competencia, a fin de tener los mejores resultados en el proceso electoral local que se tenían en puerta, situación que al final se logró.

En dicha reunión además del suscrito y de la Consejera Presidenta, recuerdo estuvieron presentes mis compañeras consejeras Claudia Carrillo, Thalía Hernández, así como los Consejeros Juan Pérez y Sergio Avilés.

Ni en la citada reunión ni en ninguna otra en las que el suscrito haya participado conjuntamente con mis demás compañeros Consejeros ya sea con el Presidente del Tribunal o con cualquier otro integrante del mismo, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas ha referido o señalado que nuestro cargo se lo debemos a Él, o al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal o al Gobernador del Estado.

Tal afirmación a la que se alude en la queja presentada, la niego categóricamente.

Aceptar lo contrario, sería tanto como poner en tela de juicio en primer lugar el procedimiento de designación llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral, y el nombramiento realizado por los Consejeros Electorales que integran el mismo; asimismo, la capacidad del suscrito para desempeñar dicho cargo, la cual está sostenida con más de 15 años de experiencia en la materia electoral; por ende, insisto, niego categóricamente haber recibido señalamiento alguno, respecto a que mi cargo ha sido gracias a persona alguna.

Es totalmente falso que el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, haya sugerido la realización de lineamientos contrarios al Instituto Nacional Electoral o a la Ley Electoral; como es del conocimiento del propio Instituto Nacional Electoral todos los lineamientos, criterios, acuerdos o resoluciones que ha aprobado el Instituto Electoral de Quintana Roo han sido de conformidad con lo que establece la Ley Local, las disposiciones federales en la materia así como en los Lineamientos que al efecto ha dictado el propio INE.

La aplicación de tales Lineamientos, criterios o disposiciones que en el seno del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, ha sido aprobados, en su caso, han sido declarados legales, tanto por el Tribunal Electoral de Quintana Roo como por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; tal es el caso del procedimiento para la designación de consejeros y vocales de los distritos electorales y municipales en el proceso electoral 2016, cuya decisión fue impugnada ante el tribunal federal, pero el mismo, fue confirmado en todos sus términos.

Otros acuerdos que fueron aprobados por el órgano superior del instituto local electoral de Quintana Roo fue el cuadernillo de votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales, municipales y de entidad federativa; el procedimiento para la integración para del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el procedimiento para la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares; el Manual de capacitación de funcionarios de casilla; el procedimiento para el traslado de paquetes electorales a los Consejos Distritales; los diseños de la documentación y material electoral, como las boletas y actas de la jornada electoral; el procedimiento para el conteo, sellado, agrupamiento de boletas electorales y distribución de documentación y materiales electorales a Presidentes de mesas directivas de casillas; Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales, municipales y de entidad federativa; todos estos procedimientos fueron aprobados en total consonancia con lo instaurado por el propio INE en sus diversos lineamientos, decisiones que si bien se impugnaron por diversos partidos políticos, en su oportunidad fueron confirmados en todos sus términos tanto por el Tribunal local como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedando en evidencia que ninguna decisión tomada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo fueron contrarias a los Lineamientos emitidos por el INE o a la Ley Electoral.

Lo anterior, se evidencia con los resultados obtenidos en la jornada electoral, en donde, todas las decisiones fueron confirmadas por las Salas del citado Tribunal Electoral Federal.

○ **Consejero Sergio Avilés Demeneghi**¹¹⁸

“En fecha 6 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las QUINCE horas, asistí junto con MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, THALÍA HERNÁNDEZ ROBLEDO, CLAUDIA CARRILLO GASCA, JORGE ARMANDO POOT PECH Y JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE a una reunión con el Magistrado Presidente VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS del Tribunal Electoral de Quintan Roo, misma que se llevó a cabo en el inmueble del Tribunal ubicado en la Avenida Francisco I. Madero No. 283-A de esta Ciudad de Chetumal, específicamente en la oficina de este último, ubicada en la segunda planta.

Dicha reunión fue comunicada al suscrito por conducto de la Consejera Presidenta de este Instituto, MAYRA SAN ROMA CARRILLO MEDINA, de manera informal, ésta, me

¹¹⁸ Visible a fojas 1561 a 1573, del anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

manifestó que quería que la acompañara a una reunión al Tribunal Electoral de Quintana Roo, sin dar mayor justificación del motivo, en ese sentido, me apersoné junto con las personas precisadas en el inciso que antecede, al inmueble antes referido. Es importante precisar, que estando ya en las instalaciones del Tribunal me enteré que el Consejero LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO no había sido requerido, en atención que el Magistrado Presidente de viva voz mencionó que a él no se le había invitado, porque no sabían hasta el momento, como había llegado a integrar el OPLE.

La reunión de mérito fue llevada a cabo únicamente con el MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a puerta cerrada, misma que tuvo verificativo en el despacho del anteriormente mencionado, siendo que el objeto de esta fue “hacer equipo”, en primer término nos ofreció el apoyo jurídico para interponer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un escrito con el carácter de tercero interesado; lo anterior, puesto que tenía conocidos en la Sala Superior que le habían informado que todas las consejeras y consejeros, estábamos impugnados sin embargo, nos advirtió que únicamente se apoyaría a los que estábamos presentes, y por esa razón no había sido convocado el Consejero LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO, ya que desconocía a qué grupo pertenecía o quien lo había apoyado para llegar a ser consejero, la anterior exclusión en ese momento, puede ser verificada mediante una inspección ocular en la sentencia pública de fecha dos de diciembre de dos mil quince, en los autos del SUP-RAP-755/2015 Y ACUMULADOS, consultable en el siguiente link de internet <http://portal-te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00755-2015.htm> (sentencia que ofrezco como medio de convicción y que este momento solicito se realice la inspección ocular a la citada página de internet, a efecto de perfeccionarla), específicamente en su considerando CUARTO de la sentencia en comento que a la letra establece: se transcribe

De lo anterior, se puede establecer que desde el primer momento aconteció exclusión hacia un consejero electoral, generadas por presiones y advertencias del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo cual para mayor precisión pudiera requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, copia certificada del escrito de terceros interesados que suscribimos la mayoría de los consejeros electorales, mismo que fue redactado y auspiciado por el equipo jurídico del Magistrado VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.

La justificación en ese momento de no incluir a un consejero electoral se debió a la manifestación realizada por el Magistrado Presidente y que los que estábamos presentes en ese momento habíamos sido considerados, con anuencia del Gobernador del Estado, a efecto de que fuéramos designados, y por tal motivo, el mencionado Magistrado había asistido a la Ciudad de México junto con el Licenciado Carlos Alejandro Lima Carbajal a cabildear con varios Consejeros Nacionales a efecto de que así fuera, y por lo tanto, en su momento seríamos llamados por el Gobernador del Estado para que nos “leyera la cartilla”, cuestión que no aconteció.

En este sentido y a efecto de comprobar el nexo que existe entre el Magistrado Presidente del TEQROO VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS, el Magistrado del Poder Judicial del Estado CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL, y el entonces gobernador del Estado ROBERTO BORGE ANGULO, exhibo el “dictamen que contiene las ternas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

de candidatos a ocupar los cargos de dos magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”; consultable en el siguiente link de internet http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/D1420160624417.pdf (dictamen que ofrezco como medio de convicción y que en éste momento solicito se realice la inspección ocular a la citada página de internet, a efecto de perfeccionar la probanza), mediante el cual se puede observar que entre los documentos que ofrece el Lic. Carlos Lima, se encuentra una carta de recomendación expedida por el Mtro. Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.

De igual forma, ofrezco la iniciativa de Decreto que presenta el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo “por el que se designa a dos magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo”, consultable en el siguiente link de internet: http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decreto//3anios/3PE/dec417/11420160614417.pdf.

Asimismo en segundo término precisó el Magistrado Presidente que el proceso electoral que estaba en puerta era muy importante para el futuro próximo de nosotros, en atención que la importancia de llevar el proceso de manera conjunta, era el parteaguas de un futuro privilegiado cuando termináramos, el encargo, por lo tanto era importante que los acuerdos que se pusieran a consideración del Consejo General eran necesarios que él y el Gobernador a través del licenciado Carlos Alejandro Lima Carbajal, le dieran el visto bueno antes; y que no nos preocupáramos por el Instituto Nacional Electoral o por la Sala Regional o Superior, ya que estaban controlados o que en su momento tendríamos que “apechugar”, pero que ellos nos defenderían y no pasaría a más. Cabe destacar que en ningún momento el suscrito estuvo de acuerdo con lo manifestado por el magistrado presidente.

En ese momento, Víctor le llamo la atención a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ya que consideraba que por tener los brazos cruzados (mientras lo escuchaba) lo estaba “bloqueando”, y que esas actitudes eran las que no quería el Gobernador y que por lo tanto, ellas más que nadie sabía que como agente del ministerio público jamás hubiera llegado ahí sin la ayuda e inversión realizada a su persona diciéndole ¿Qué a poco crees que bajaran a una y te subieran a ti a lo último, es una casualidad?, por lo tanto, la invito a pensarlo bien, si quería tener un futuro profesional en el Gobierno del Estado, Esta afirmación puede ser derivada y confirmada por los demás consejeros electorales que asistimos ese día a la mencionada reunión.

Entre los puntos planteados por Víctor Vivas, efectivamente manifestó que nuestra posición como consejeros electorales se lo debemos a él, así como al entonces Gobernador, mencionando que de igual forma al recientemente nombrado magistrado del Poder Judicial del Estado: Carlos Lima, por lo cual adujo no deberíamos tener temor en nuestras actuaciones avalada y confirmada por los demás consejeros electorales que asistimos ese día a la mencionada reunión.

Entre los puntos planteados por Víctor Vivas, efectivamente manifestó que nuestra posición como consejeros electorales se lo debemos a él, así como al entonces Gobernador, mencionando de igual forma al recientemente nombrado magistrado del Poder Judicial del Estado: Carlos Lima, por lo cual adujo no deberíamos tener temor en nuestras actuaciones, que tendrían su visto bueno, y por tanto, verían la forma de protegernos.

Como manifesté en el inciso que antecede, quedó implícitamente asentado que nuestro conducir debería ser parcial, para poder tener un futuro privilegiado y que no nos preocupáramos por el Instituto Nacional Electoral y por Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, dando por entendido que cualquier asunto se tendría que aprobar de una manera, aunque fuera incorrecto el tratamiento que se le otorgue; sin embargo, ellos nos protegerían por los contactos y la inversión que se había realizado en nuestra designación como consejeros electorales.

○ **Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche**¹¹⁹

Sí asistí.

La razón por la que asistí al Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue porque la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta de este órgano electoral local, me invitó al igual que a mis compañeras y compañeros consejeros electorales para acudir al mencionado órgano jurisdiccional a efecto de sostener una plática con Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

La reunión como lo mencioné en el inciso inmediato anterior fue con el Maestro Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y el objetivo de la misma fue el de sostener un plática informal y en lo que puedo recordar, nos transmitió sus felicitaciones por nuestra designación como Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, nos comentó sobre trabajar en actividades conjuntas, principalmente en actividades académicas para la difusión y promoción de temas de carácter electoral, en lo que respecta a mi persona me presenté ya que no había interactuado con el Magistrado en anteriores ocasiones.

No, nunca lo manifesté.

No, nunca lo sugirió.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas**¹²⁰, mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, en lo que interesa manifestó lo siguiente:

¹¹⁹ Visible a fojas 3707 a 3709 del legajo 5, del expediente.

¹²⁰ Visible en el Anexo 3, Foja 1259

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

“No recuerdo la fecha exacta, pero fue posterior a la designación de las y los Consejeros Electorales referido por parte del INE, y de su toma de protesta como Consejo General en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que a petición de la Consejera Presidenta realizada vía telefónica, siendo aproximada las 15:00 horas, se apersonaron en las instalaciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), las y los Consejeros Electorales antes referidos, con excepción del Consejero Luis Carlos Santander Botello, quien al parecer había viajado a la Isla de Cozumel, Quintana Roo, a recoger sus pertenencias y a ver a su familia, ya que antes de su designación residía en dicho lugar, pero sin poder afirmarlo ni tampoco recuerdo quien realizó dicho cometido.

El motivo de la reunión solicitada por la Consejera Presidenta a un servidor, fue una visita de cortesía para saludar y conocer a los integrantes del Consejo General, especialmente a la Consejera Claudia Carrillo Gasca y al Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, ya que los Consejeros Sergio Avilés Demeneghi, Mayra San Román Carrillo Medina y Jorge Armando Poot Pech, hasta un día antes al de su designación como Consejeros Electorales, laboraban en el TEQROO como Secretario General de Acuerdos y Secretarios de Estudio y Cuenta, respectivamente, y la Consejera Thalía Hernández Robledo, hasta el día de su designación como Consejera se desempeñaba como Directora Jurídica del IEQROO, por lo cual ya los conocía; pero la Consejera Claudia Carrillo Gasca y el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche no eran antes de su designación miembros de la Familia Electoral, por lo que fue un honor para mí que acudieran al TEQROO a dicha reunión de cortesía. El contexto de la reunión en todo momento de felicitaciones y augurios de éxito de mi parte por su designación y la seguridad de que el TEQROO coadyuvaría con el IEQROO para velar por la legalidad del proceso electoral que se avecinaba.

La Consejera Claudia Carrillo Gasca me comentó que ya me conocía aunque tal vez yo no me acordaba de ella, ya que yo antes de ser Magistrado Electoral fui Subprocurador de Justicia y que ella antes de ser Consejera Electoral fue Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cancún, Quintana Roo. Mi respuesta a su comentario fue de disculpa y que posiblemente no la recordaba porque la zona de mi adscripción cuando me desempeñé como Subprocurador, fue la Zona Sur del Estado, y las agencias de Cancún pertenecen a la Zona Norte, por lo que no conocía a gran parte del personal de dicha zona porque solo acudía a esas agencias cuando teníamos eventos de capacitación, etc.

El Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche me platicó que él era Visitador del Comisión Estatal de Derechos Humanos, adscrito a la Visitaduría de Playa del Carmen, Quintana Roo, y por eso tampoco nos conocíamos. Dicho Consejero, aprovechando la cordialidad con la que se suscitaba la reunión, me pidió una opinión jurídica personal, ya que su designación como Consejero había sido impugnada, al parecer porque el aparecí en la lista de militantes del PRI.

La Consejera Thalía Hernández Robledo también me comentó que su designación había sido impugnada, al parecer por algún acuerdo que ella realizó en su carácter de Directora Jurídica de la anterior conformación de Consejo General. A ambos les

ofrecí mi punto de vista, e incluso los demás Consejeros también comentaron su opinión jurídica.

La reunión se desarrolló en todo momento en un ambiente cordial, y aproximadamente 30 minutos después los Consejeros Electorales se despidieron ya que por la tarde debían regresar al Instituto Electoral, con excepción de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, quien me pidió platicar unos minutos en privado. Todos los Consejeros, exceptuando la Presidenta se retiraron de mi oficina, quedándose únicamente nosotros dos.

El motivo de esta reunión privada fue para coordinarnos en la realización de los eventos académicos por el XIII aniversario de la creación tanto del Tribunal como del Instituto, ya que en el aniversario anterior de forma conjunta realizamos diversas actividades académicas y deportivas. Asimismo la Consejera Presidente me refrendó la total disposición del IEQROO para la realización de eventos de difusión y capacitación electoral previos al Proceso Electoral 2016, a lo que yo le respondí que el TEQROO con gusto seguiría coadyuvando, como lo ha hecho siempre, en la realización conjunta de dichos eventos de divulgación y capacitación electoral, y le auguré el mejor de los éxitos en la organización de las elecciones. Dicho lo anterior la acompañé hasta la puerta del Tribunal donde la esperaba su vehículo, ya sus compañeros Consejeros ya se habían retirado porque tenían trabajo pendiente en el Instituto....”

- **Copia simple**, de la denuncia NA/CDMX/FEPADE/0000258/2017, presentada por Sergio Avilés Demeneghi ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la que adjunta un disco compacto que contiene un audio de una supuesta conversación sostenida con el Magistrado Presidente del TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas, la cual refiere tuvo verificativo en la oficina de éste último en diciembre de dos mil dieciséis.¹²¹

Al respecto, cabe precisar que el disco compacto en el que consta la conversación referida no constituye una prueba ilícita en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido aportada de forma voluntaria por uno de los participantes en la misma. Sin embargo, al tratarse de una prueba técnica, debe ser concatenada con otros elementos probatorios a efecto de constatar su autenticidad, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 462, párrafos 1 y 3 de la *LGIFE*, así como 22, fracción III y 27 párrafos 1, 3 y 5, del *Reglamento de Quejas*.

¹²¹ Visible en el legajo 5, fojas 3746-3763, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

En atención a lo anterior, la autoridad sustanciadora realizó diversas diligencias a efecto de estar en posibilidad de acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la grabación en cuestión y contar con elementos suficientes para tener certeza de las personas que efectivamente participaron en la misma, así como el día y lugar en que supuestamente aconteció.

Así, la *UTCE* requirió, por acuerdo de primero de noviembre de dos mil diecisiete, al Titular de la *FEPADE* a efecto de que informara si había ordenado o elaborado algún dictamen pericial respecto del audio ofrecido por el Consejero Sergio Avilés Demeneghi a fin de corroborar su veracidad y, en su caso, remitiera copia certificada del mismo. En atención a dicho requerimiento, la referida dependencia informó que existe un impedimento legal por tratarse de información reservada por lo cual negó la información solicitada. En consecuencia, por acuerdo de dieciséis de noviembre del mismo año, se requirió al referido Consejero a efecto de que informara si contaba con un peritaje oficial en el cual se corroborara la veracidad de la grabación en cuestión y, en su caso, remitiera copia certificada del mismo. A dicho requerimiento, el Consejero informó que lo había solicitado a la *FEPADE* sin que en ese momento se lo hubieran proporcionado. Asimismo, mediante escrito de dieciséis de marzo del presente año, el referido Consejero informó al Titular de la *UTCE* que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la *FEPADE*, le comunicó que no resultó procedente su petición de copia del dictamen pericial en cuestión en razón de que, a criterio de dicha autoridad, no contaba con el carácter de titular del bien jurídico lesionado tutelado en términos del numeral 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, por escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual la quejosa dio respuesta a la vista otorgada por la autoridad sustanciadora, ésta manifestó que le causa agravio el advertir que no obra en el expediente el peritaje oficial señalado con antelación, pues en su concepto, constituye una prueba más para acreditar la violencia política por razón de género de la cual, afirma, ha sido víctima. Por ello, informó a esta autoridad en dicho escrito que solicitó a la *FEPADE* la información respecto del dictamen efectuado al dispositivo consistente en la memoria USB marca ADATA modelo C906, presentado ante dicha fiscalía por Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del *IEQROO*, y que en respuesta a

dicha solicitud se le informó mediante oficio FEPADE-C-058/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la *FEPADE*, que el ocho de marzo de dos mil diecisiete se recibió escrito de denuncia del referido Consejero, acompañado de un dispositivo USB, marca ADATA, mismo que fue objeto de análisis.

Sin embargo, en concepto de esta autoridad, de la prueba aportada por la quejosa, tampoco es posible acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la grabación en cuestión ni es posible contar con elementos suficientes para tener certeza de las personas que participaron en esa conversación, toda vez que de ésta no se desprenden elementos que en forma clara y contundente permitan a esta autoridad concluir con precisión los nombres de las personas que participaron en la misma, toda vez que no se tiene certeza respecto a que el audio analizado corresponda al que obra en las constancias del expediente en que se actúa.

En consecuencia, con el objeto de allegarse de más elementos la *UTECE* requirió a la Dirección Jurídica de este Instituto a efecto de que, por su conducto, se solicitara a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República la designación de un perito para que se dictaminara el audio en cuestión, a efecto de que se corroborara si alguna de las voces que se escuchan en el audio corresponde al Magistrado Electoral Víctor Venamir Vivas Vivas, en ese sentido se solicitaron los peritajes de análisis de voz y de audio y video.

Mediante oficio de trece de agosto del presente año, la referida Dirección Jurídica remitió el peritaje solicitado en el cuál se concluyó lo siguiente:

“6. CONCLUSIONES.

- 6.1. De acuerdo a los estudios realizados, la voz de interés “L1”, obtenida del archivo de audio almacenado en el CD-R marca Verbatim con leyendas: “Audio PES.54/2016; S.2”; **es coincidente** con la voz de interés “LVVVV” obtenida de los archivos de audio almacenados en el CD-R marca Verbatim con leyendas: “Audio de confronta”.*
- 6.2. no corresponde a la especialidad de Análisis de Voz determinar si el material analizado es íntegro o se encuentra editado.”*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

De lo anterior, se desprende que las personas que participaron en la conversación contenida en el audio aportado al expediente en que se actúa, son el Magistrado del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas y el Consejero electoral del *IEQROO*, Sergio Avilés Demeneghi.

Sin embargo, no es posible acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo verificativo la conversación en cuestión, pues la conclusión del perito en análisis de voz se limita a verificar la coincidencia de la voz del Magistrado electoral aludido. No obstante, existe la presunción respecto a que la conversación ocurrió en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, de acuerdo con lo afirmado con el Consejero Avilés quien aportó la prueba al expediente en que se actúa.

En ese sentido, dicha probanza constituye un indicio cuyo contenido no es concluyente para tener por acreditados los alcances pretendidos por la quejosa, pues de ésta únicamente es posible advertir que existió una conversación entre el Magistrado Vivas y el Consejero Demeneghi, en la que se habla de un supuesto compromiso de algunos de los consejeros del *IEQROO* con el Magistrado referido y con el “*Gober*”, así como de una supuesta presión sobre la quejosa por parte de “*Carlos Lima*”, sin que sea posible determinar con precisión cuándo ocurrió dicha conversación, en dónde y por qué motivo.

Asimismo, en concepto de esta autoridad, del contenido del audio en cuestión no es posible determinar que existe violencia política por razón de género en contra de la quejosa por parte de los sujetos denunciados en el presente procedimiento sancionador ordinario, sino que, en su caso, la conducta presuntamente infractora correspondería al Magistrado Electoral Víctor Venamir Vivas Vivas, respecto del cual esta autoridad carece de competencia para conocer de una presunta violación cometida por este, ello en términos de lo resuelto por la Sala Superior del *TEPJF* en la resolución correspondiente al SUP-JE-107/2016.

En efecto, del contenido de la grabación ofrecida por el Consejero Avilés se desprende, en apariencia, que la conversación versó en torno a un supuesto compromiso de las personas que participan en la conversación, se hace referencia a un supuesto control de “*Lima*” sobre “*Claudia*” y que “*se le sale de guacal*”, que ella no es problema del Magistrado o del Consejero que participan de la

conversación, sino de “*Lima*”, además de diversas referencias al “*Gober*”. Sin embargo, en ningún momento se hace referencia, de forma directa o indirecta, de una orquestación en contra de la quejosa, tendente a generar, motivar o propiciar acciones por las cuales se ejerciera discriminación, acoso o violencia política por razón de género en su contra, o bien que se planeara utilizar al Instituto local o a otras instituciones del Estado con el objeto de presionarla, esto es, de su contenido no existe un vínculo directo con los hechos señalados por la quejosa en sus escritos de denuncia, ni con los sujetos denunciados en el presente procedimiento.

Lo anterior, aun cuando se adminicule y concatene el medio de prueba ofrecido por el consejero Demeneghi con los medios de prueba que obran en el expediente en que se actúa y que se enuncian a continuación, como son el requerimiento al Magistrado Vivas, en el que se le cuestionó sobre la reunión con el referido Consejero en diciembre de dos mil dieciséis, lo cual fue negado por el propio Magistrado electoral, el acta circunstanciada mediante la cual se dejó constancia de diversos medios de comunicación electrónicos que dieron cuenta de dicha comunicación y la renuncia de Víctor Vivas a la Presidencia del *TEQROO*, el acta circunstanciada en la que se dejó constancia del contenido del audio aportado por el Consejero referido, así como del dictamen pericial del que se ha dado cuenta, de ahí que la fuerza probatoria del audio aportado por el Consejero Electoral Avilés Demeneghi sea indiciaria.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al Magistrado del *TEQROO* **Víctor Venamir Vivas Vivas**, mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, a través de la cual negó haberse reunido en sus oficinas con el Consejero Avilés Demeneghi, en diciembre de dos mil dieciséis.¹²²
- **Acta Circunstanciada** que instrumentada con el objeto de dejar constancia del contenido de los enlaces electrónicos y notas periodísticas relativos a la renuncia y diversos hechos relacionados con

¹²² Visible en el legajo 6, fojas 3923-3924, del expediente

Víctor Venamir Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en cumplimiento al cuatro de julio de dos mil diecisiete.¹²³

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al Magistrado del *TEQROO* **Víctor V. Vivas Vivas**, mediante acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete,¹²⁴ a través de la cual manifestó lo siguiente:

“Resulta relevante solicitar a la Unidad a su cargo, tenga a bien desestimar en su totalidad la prueba aportada por el mencionado ciudadano Avilés Demeneghi, toda vez que de la simple lectura de la transcripción aportada, se desprende que no existe relación alguna con los hechos manifestados por la denunciante, por tanto, lo vertido no puede ser considerado un elemento de convicción para los efectos del procedimiento del que se desprende el acuerdo que se contesta por esta vía.

Ahora bien, por cuanto al audio aportado por el ciudadano Sergio Avilés Demeneghi, niego en su totalidad el contenido, toda vez que en ningún momento he pronunciado calificativo denostativo alguno en alusión a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ni a personas distintas a ella, en virtud de que el suscrito no me conduzco de esa manera, tanto en lo personal como en lo profesional, puesto que mi conducta hacia mis semejantes y compañeros de trabajo es cordial y respetuosa.

Asimismo, es dable señalar una evidente animadversión del señor Sergio Avilés Demeneghi hacia el suscrito, lo que ha quedado evidenciado a través de distintos procedimientos, demandas y juicios promovidos por éste en mi contra y en contra de mis compañeros integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tal y como fuera la demanda de Juicio Político presentada por Sergio Avilés Demeneghi, en su calidad de Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo ante el Congreso del Estado de Quintana Roo y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimara a través de la sentencia dictada en los autos del expediente SUP-JDC-259/2017 y sus acumulados, la cual por este conducto solicito a esa Unidad a su cargo, tenga a bien requerir en copia certificada de dicha resolución e integrar en los autos del presente expediente a fin de que obre como prueba de mi parte, de que lo aportado por el señor Avilés Demeneghi, carece de objetividad para ser tomado como prueba, aunado a la ilegalidad de la misma, en virtud de su ilegal obtención y edición con la finalidad de causarme un perjuicio.

Para tal efecto, también me permito adjuntar a usted, como elemento de convicción que acredita la mencionada animadversión y los constantes intentos de causarme daño en mi función electoral por parte del Consejero del OPLE Sergio Avilés Demeneghi, diversas notas periodísticas en las que dicho

¹²³ Visible en el legajo 7, fojas 5131-5158, del expediente

¹²⁴ Visible en el legajo 8, fojas 5320-5325, del expediente

funcionario, intenta denostar mi labor y fungir como instrumento político para mi destitución y de mis compañeros Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Al respecto, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada, de sus familias, sus domicilios, o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros, o de la autoridad pública. La Convención Americana protege la confidencialidad e inviolabilidad de las comunicaciones frente a cualquier injerencia arbitraria o abusiva por parte del Estado o de particulares, razón por la cual, tanto la vigilancia como la intervención, la grabación y la divulgación de esas comunicaciones quedan prohibidas.

Por consiguiente, la ilegal intervención, grabación y la divulgación de dicha comunicación privada será denunciada por el suscrito ante las autoridades competentes, puesto que resulta un atropello e invasión a la vida particular del suscrito, máxime que en el presente caso, la realizó una autoridad electoral, como es el caso del Consejero del OPLE Quintana Roo; por lo que desde este momento me reservo el derecho para presentar la Queja que en derecho corresponda ante esta Autoridad Electoral administrativa y/o las denuncias o querellas ante las autoridades jurisdiccionales en materia penal y civil.

Sin más por el momento, téngaseme cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento efectuado y por efectuadas las manifestaciones que en derecho corresponden.”

- **Acta Circunstanciada** instrumentada con el objeto de dejar constancia del contenido del disco compacto remitido por el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, mediante escrito presentado el veintidós de marzo.¹²⁵
- **Dictamen en la especialidad de análisis de voz** suscrito por la Ingeniero Ana Cecilia Flores González.¹²⁶

2. Llamada telefónica con el Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal

¹²⁵ Visible en el legajo 7, fojas 5521-5531, del expediente

¹²⁶ Visible en el legajo 9, fojas 6138-6156, del expediente

La quejosa refiere que al salir la reunión precisada en el numeral anterior, iba camino a comer con los consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, y que en ese momento recibió una llamada del Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, quien le dijo que *“ya sabía lo que había pasado en dicha reunión, infiriéndole diversas groserías, desvalorizándola por el hecho de ser mujer y exigiéndole obediencia a él, al magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y a Roberto Borge Angulo, entonces Gobernador Constitucional de Quintana Roo, amenazándola a ella y a su familia”*.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que al salir de la reunión precisada en el numeral anterior, la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca recibió una llamada telefónica, durante un trayecto a bordo de un vehículo en compañía de los consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Sergio Avilés Demeneghi.
- b) **No se tiene plenamente acreditado** que la llamada telefónica en cuestión hubiera sido con el Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, toda vez que no existen elementos de prueba idóneos para acreditar dicha circunstancia, por lo que al tratarse de un indicio será analizado en concatenación con otros medios de prueba.
- c) **No se tiene acreditado** el contenido de la llamada telefónica al tratarse de una comunicación privada.
- d) **Se tiene por acreditado** que al concluir la llamada telefónica en cuestión la quejosa refirió a los consejeros presentes que ésta fue con una persona de nombre *Carlos Lima* sin que pueda acreditarse que se trata del Magistrado referido.
- e) **No se tiene por acreditado** que en dicha llamada telefónica la quejosa haya sido amenazada por el referido funcionario público o que le hubieran inferido groserías o se le hubiera desvalorizado por el hecho de ser mujer; sin

embargo, al contarse con el dicho de la quejosa, tal circunstancia será analizada mediante la adminiculación de otros medios de prueba, así como dentro del contexto del resto de los hechos narrados por la quejosa.

- f) **No se tiene por acreditado** que la llamada en cuestión hubiera sido del número de teléfono que la quejosa refiere en su demanda, el cual **se encuentra acreditado** corresponde al número de teléfono celular del Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal.

Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas:

- Respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a los consejeros electorales **Sergio Avilés Demeneghi¹²⁷** y **Juan Manuel Pérez Alpuche¹²⁸** quienes refirieron que estando a bordo de un vehículo con la quejosa, ésta recibió una llamada telefónica en su teléfono celular, que ella refirió que era de una persona a la que se refirió como Carlos Lima, sin precisar que les constara que se tratara del Magistrado señalado por la quejosa, ni el contenido de la comunicación por tratarse de una llamada privada.
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al Magistrado de Poder Judicial del Estado, **Carlos Alejandro Lima Carvajal¹²⁹** quien reconoció que el número indicado por la quejosa corresponde a su teléfono celular y negó haber sostenido una llamada telefónica con la quejosa en la fecha por ella indicada en su escrito de queja.
- Respuestas al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintiocho de marzo del presente año, a las empresas **TELCEL, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., MOVISTAR PEGASO PCS, S.A. DE C.V. y AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.**, por medio del cual se les solicitó que proporcionaran información relacionada

¹²⁷ Visible a fojas 1561 a 1573, del anexo, 4 del expediente.

¹²⁸ Visible a fojas 1898 a 1899, del anexo, 4 del expediente.

¹²⁹ Visible a fojas 3276 a 3278, del legajo 5, del expediente.

con las líneas telefónicas de la quejosa y del Magistrado Lima Carvajal. Al respecto dichas empresas informaron sobre la imposibilidad legal de proporcionar dicha información.¹³⁰

3. Mensajes de texto enviados por el Magistrado Lima Carvajal a la quejosa.

La quejosa refiere que en enero de dos mil dieciséis, tras un recorrido para verificar y elegir las sedes distritales en el Estado, propuso que se buscaran mejores opciones, lo anterior al darse cuenta del precio elevado que se pagaba por concepto de rentas. Derivado de lo anterior, la quejosa afirma que recibió varios mensajes de texto por parte del magistrado Carlos Lima Carvajal, quien la instó a que “*no se meta en temas de dinero*”, que luego no “*chille*” y que “*esperara las consecuencias*”.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera recibido los mensajes de texto a los que alude en su escrito de queja, al no existir medio de prueba por el cual se pueda acreditar.

Al respecto, cabe precisar que la autoridad sustanciadora ordenó, por acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, que por conducto de la Oficialía Electoral del *INE*, se levantara un acta de certificación de hechos en la que se realizaran las siguientes diligencias: constituirse en el domicilio señalado por la quejosa y certificar, de los mensajes texto aludidos en su escrito de queja, lo siguiente: fecha y hora de su recepción, contenido, número de teléfono del destinatario y del remitente, así como cualquier otra circunstancia que se considere relevante, como fotografía de perfil, etcétera.

Sin embargo, según consta en el acta levantada al efecto el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, la quejosa extravió el teléfono celular en el que asegura recibió los mensajes de texto aludidos, por lo que no existe

¹³⁰ Visible a fojas 6006, 6008 a 6010 y 6052 del legajo 8 del expediente.

medio de prueba por el cual esta autoridad pueda tener certeza de la existencia de dichos mensajes de texto.

No obsta a lo anterior que en la diligencia practicada por la Oficialía Electoral conste que la quejosa manifestara que resguardó los mensajes de texto en cuestión en una cuenta personal de correo electrónico, toda vez que al tratarse de una prueba técnica, por sí misma no genera convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados al no poder ser concatenado con ningún otro elemento probatorio, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 462, párrafos 1 y 3 de la *LGIPE*, así como 22, fracción III y 27 párrafos 1, 3 y 5, del *Reglamento de Quejas*.

Asimismo, debe precisarse que tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.¹³¹

Por tanto, por el simple dicho de la quejosa, se analizarán las supuestas amenazas mediante la adminiculación del resto de los medios de prueba que constan en el expediente, así como del contexto de los hechos narrados por la Consejera.

Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas:

- **Acta de certificación de hechos** levantada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por la asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva del *INE* en Quintana Roo, por escrito delegatorio de funciones de Oficialía

¹³¹ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

Electoral del Secretario Ejecutivo del INE, número INE/SE/0153/2015¹³², en la que consta, en lo que interesa, lo siguiente:

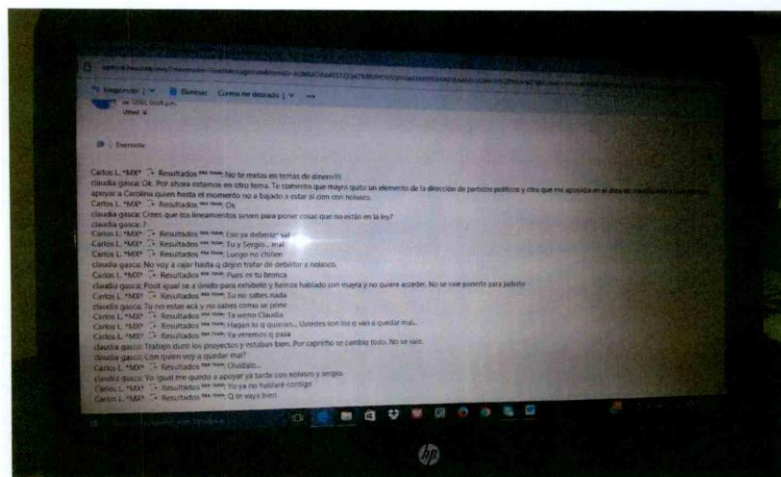
[...]

III. En este acto le solicito a la licenciada Claudia Carrillo Gasca se sirva exhibirme el teléfono celular en el que recibió los mensajes de texto, el cual manifiesta en el capítulo de hechos, específicamente en los numerales cuatro (4); veinticuatro (24) y veintiséis (26) de su escrito de queja; ante la solicitud de la licenciada Claudia Carrillo Gasca manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

a) *El dispositivo móvil en el que recibió los mensajes de texto manifestados en el capítulo de hechos específicamente en el numeral cuatro (4) de su escrito de queja, lo perdió a finales del mes de febrero del año en curso sin embargo desea agregar que antes resguardó dichos mensajes en su cuenta electrónica personal de Hotmail. En este mismo acto le solicito su anuencia para acceder a dicha cuenta electrónica para verificar el resguardo que refiere; aceptando por lo que procede a ingresar en su computadora personal marca HP, color negro, y abre la página de Hotmail, digitando el nombre de usuario carriclau@hotmail.com y su contraseña, arrojando el portal la imagen siguiente a la que se identifica como número 1:*

...

Teniendo a la vista la imagen que precede, señala la licenciada Claudia Carrillo Gasca que los mensajes de texto señalados por ella en su escrito de queja bajo el número cuatro (4) son los que se encuentran identificados en la bandeja de entrada con el nombre de C Carrillo G en el apartado de asuntos se advierte Chatear con Carlos L. Acto seguido, le solicito a la licenciada Claudia Carrillo Gasca, se sirva acceder al contenido de ese mensaje electrónico, asintiendo, y al hacerlo se reproduce la imagen siguiente, a la que se identifica como número 2:



¹³² Visible a fojas 360 a 375 del anexo 1 del expediente.

*En el mismo acto, la entrevistada, ofrece una impresión del buzón de entrada y del mensaje fedatado, activado en mi presencia los comandos de impresión directa (Control+P) seguido de enter, por lo que la impresión obtenida de igual forma se glosa a la presente certificación de hechos como parte constante de la misma bajo los **Anexos I y II.***

[...]

V. Acto seguido, le solicité a la entrevistada que se sirviera señalar la fecha y hora en que recibió los mensajes de texto referidos en el capítulo de hechos específicamente en los numerales cuatro (4); veinticuatro (24) y veintiséis (26) de su escrito de queja, al respecto refirió:

a) Que por cuanto a los mensajes señalados en el numeral (4) de su escrito de queja, no recuerda la hora ni la fecha exacta en que los recibió dado el transcurso del tiempo y por haber perdido el teléfono en que los recibió;

[...]

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, al **Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal**, quien negó haber intercambiado mensaje de texto alguno con Claudia Carrillo Gasca.¹³³
- Respuestas al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintiocho de marzo del presente año, a las empresas **TELCEL, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., MOVISTAR PEGASO PCS, S.A. DE C.V. y AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.**, por medio del cual se les solicitó que proporcionaran información relacionada con las líneas telefónicas de la quejosa y del Magistrado Lima Carvajal. Al respecto dichas empresas informaron sobre la imposibilidad legal de proporcionar dicha información.¹³⁴

4. Integración de una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de la quejosa

La quejosa refiere que el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, fue informada por agentes judiciales, ex compañeros de la Policía Judicial del Estado, que personal de la Dirección Jurídica de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado

¹³³ Visible a fojas 3276 a 3278 del legajo 5 del expediente.

¹³⁴ Visible a fojas 6006, 6008 a 6010 y 6052 del legajo 9 del expediente.

pretendían que firmaran declaraciones testimoniales en su contra por abuso de autoridad, a lo que se negaron por lo que fueron amenazados de represalias laborales.

Por lo anterior, la quejosa manifiesta que por conducto de su abogado Alejandro Buenfil Aguirre, trataron de tener conocimiento del expediente y solicitar una fecha de comparecencia para rendir su declaración como presunta responsable y presentar sus testigos de descargo, pero el entonces Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Norte, Ludwing Alejandro Vivas Arjona, quien, a dicho de la quejosa, es primo del magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, le negó su derecho a defenderse, hasta que no lo consultara con el Fiscal General de Justicia del Estado, siendo que fue hasta después del cinco de junio de dos mil dieciséis que pudo tener acceso al expediente PGJE/DP/SGJ/DA/JN/AP/209/2014, el cual, según su opinión, es un hecho que pudo haber sido un acta administrativa y lo convirtieron en una averiguación previa después de dos años de sucedidos los hechos, siendo que tal conducta, a dicho de la quejosa, se encontraba prescrita.

Por lo anterior, la quejosa dice que tiene preocupación de que dolosamente afecten su persona, libertad personal o su trabajo, por ser una Consejera imparcial que da atención por igual a todos los partidos políticos.

Asimismo, la quejosa refiere que el veintiocho de abril de dos mil dieciséis recibió una llamada telefónica del Magistrado Carlos Lima Carvajal, donde de forma sarcástica, le informó que eso es para que se “*aplaque*” y tenga con qué entretenerse si sigue de “*rebelde*”.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que, el tres de septiembre de dos mil catorce, se dio inicio en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a la Averiguación Previa número PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, en contra de Claudia Carrillo Gasca, por el delito de abuso de autoridad.

- b) Se tiene por acreditado** que, el cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria precisada en el inciso anterior, y el nueve de enero de dos mil diecisiete, dicha determinación fue confirmada por el Fiscal General del Estado.
- c) Se tiene por acreditado** que no existe denuncia y/o querrela desde el seis de noviembre del dos mil quince, al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis en contra de Claudia Carrillo Gasca.
- d) No se tiene por acreditado** que se hubieran iniciado investigaciones o averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de la quejosa como medio de coacción por los hechos que refiere en su escrito de queja.
- e) No se tiene por acreditado** que la averiguación previa iniciada en contra de la quejosa se haya promovido como consecuencia de algún hecho suscitado con posterioridad a su nombramiento como consejera electoral, ya que la averiguación previa en cuestión se inició el tres de septiembre de dos mil catorce y su nombramiento como consejera electoral se aprobó el treinta de octubre de dos mil quince, esto es, con más de un año de anticipación.
- f) Se tiene por acreditado** que los agentes de la Policía Judicial del Estado que comparecieron como testigos en la averiguación previa precisada, declararon a favor de la quejosa al señalar que fueron llamados por esta para apoyarla toda vez que estaba una persona de sexo masculino siendo violento, gritando y ofendiendo a la quejosa, quien en ese momento se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el Estado.
- g) No se tiene por acreditado** que a partir del nombramiento de la quejosa como consejera electoral del *IEQROO* se hayan iniciado investigaciones, indagaciones o averiguaciones previas en su contra como medida de coacción.

- h) No se tiene por acreditado** que la quejosa recibiera una llamada telefónica del Magistrado Carlos Lima Carvajal, al no existir medios de prueba idóneos para tener por cierto lo anterior.

Si bien, tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.¹³⁵

Sin embargo, en el caso no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, para que esta autoridad pudiera realizar la adminiculación con otros elementos probatorios y estar en posibilidad de verificar la existencia del hecho denunciado, además de que el contexto del dicho de la quejosa, en relación con el resto de los hechos denunciados, no lleva a esta autoridad electoral a concluir la veracidad de la afirmación de la quejosa

Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas.

- Respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, el seis de septiembre¹³⁶ y el veintiuno de octubre¹³⁷ de dos mil dieciséis, así como el tres de marzo de dos mil diecisiete¹³⁸, en los que, en lo que interesa, informó lo siguiente:
 - *“Los hechos por los cuales se inició la averiguación previa PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, son con motivo de la denuncia presentada por la C. Margarita Domínguez Sagrero y el C. Jesús Meza Tadeo, quienes manifestaron que*

¹³⁵ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

¹³⁶ Visible a fojas 414, del anexo 1, del expediente.

¹³⁷ Visible a foja 1902, del anexo 4, del expediente.

¹³⁸ Visible a foja 3479, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

la C. Claudia Carrillo Gasca, Agente de Ministerio Público del Fuero Común, lo trato de manera arrogante, déspota, y autoritaria, le dijo que no le iba a tomar su declaración a su esposa y que regrese otro día porque no traía abogado y que no le iba hacer el examen médico, porque no había médico legista de guardia, al insistirle con el examen médico, la licenciada dijo que regresara al otro día, motivo por el denunciante dijo que otro día iba acudir con la Coordinadora de Ministerios Públicos para decirle lo que había pasado, a lo que el Ministerio Público se alteró y llamo a la Judicial y lo detuvieron, estando detenido aproximadamente 36 horas y tuvo que pagar caución para salir.”

- *“...no existe denuncia y/o querrela desde el día seis de noviembre del dos mil quince, hasta la presente fecha en contra de la ciudadana CLAUDIA CARRILLO GASCA.”*
- *“...el día 04 de julio del año 2016, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, emitió la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal en la Indagatoria PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, y con fecha 09 de enero del año 2017, el Mtro. Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General del Estado, emitió resolución en la cual se ha confirmado la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal de la referida indagatoria.”*

- **Copia certificada del acuerdo de inicio de averiguación previa** de tres de septiembre de dos mil catorce, en el que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Licenciado Julio Cesar Díaz Borbolla, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, determinó dar inicio a la averiguación previa identificada con el número PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte, cometido en agravio de Jesús Meza Tadeo, en contra de la Licenciada Claudia Carrillo Gasca y/o quien o quienes resulten responsables.¹³⁹
- **Copia certificada de la determinación** de cuatro de julio de dos mil dieciséis, emitida en la averiguación previa PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, por la Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la que se decretó el NO EJERCICIO de la acción penal a favor de la Ciudadana Claudia Carrillo Gasca, Agente del Ministerio Público, por el delito de abuso de autoridad.¹⁴⁰
- **Copia Certificada de la resolución** de nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida en el expediente de la averiguación previa identificada con el número

¹³⁹ Visible a foja 3481 a 3482, del legajo 5, del expediente.

¹⁴⁰ Visible a foja 3488 a 3499, del legajo 5, del expediente.

PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, emitida por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se confirmó la determinación del No ejercicio de la acción penal de cuatro de julio de dos mil dieciséis¹⁴¹.

- **Copia simple del nombramiento** como Consejera Electoral del *IEQROO* de Claudia Carrillo Gasca, de tres de noviembre de dos mil quince.¹⁴²

5. Publicación de notas periodísticas en las que supuestamente se calumnia a la quejosa

El ocho de marzo de dos mil dieciséis, el periódico *Novedades Quintana Roo*, publicó una nota con el siguiente encabezado “*Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo: Claudia Carrillo Gasca ‘carga’ con una decena de expedientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado*”.¹⁴³

La quejosa refiere que dicha nota es totalmente falsa, y que hasta ese momento, ella desconocía que tenía abiertas averiguaciones previas en su contra y que presentó su renuncia en dicha dependencia el treinta y uno de octubre de dos mil quince.

El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el mismo periódico, publicó otra nota con el siguiente encabezado: “*Quieren que se investigue a todos los consejeros del IEQROO: Esto ocurre luego de que la consejera electoral Claudia Carrillo fue acusada de mentir para ocupar el cargo*.”¹⁴⁴

Al respecto, la quejosa refiere que en la referida nota periodística se advierte que el representante propietario del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos dijo “*desconocer la información, aunque precisó que si existen pruebas y evidencias que demuestran*

¹⁴¹ Visible a foja 3500 a 3503, del legajo 5 del expediente.

¹⁴² Visible a foja 82, del legajo 1, del expediente.

¹⁴³ Dicha nota periodística puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica <http://sipse.com/novedades/consejera-electoral-ine-procuraduria-general-de-justicia-ministerio-publico-elecciones-2016-consejera-electoral-claudia-carrillo-gasca-194965.html>

¹⁴⁴ Dicha nota periodística puede ser consultada en: <http://sipse.com/novedades/consejeros-electorales-claudia-carrillo-ieqroo-195138.html>

las acusaciones, se tiene que hacer una investigación más a fondo por parte de la autoridad federal para aclarar el tema”, lo que, a juicio de la quejosa, deja claro el dolo con el que se manifiestan para tratar de intimidarla.

De igual forma refiere que, en el caso de que Manzanilla Lagos tuviera en su poder pruebas e información respecto de la averiguación previa 209/2014, se podría estar cometiendo el delito de infidelidad de la custodia de documentos, tipificado en el artículo 245, del Código Penal del estado de Quintana Roo.

También refiere la quejosa, que las calumnias en su contra fueron iniciadas por Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, y que se publicaron en diversos portales de noticias como Impulso Quintana Roo, Del Campo Noticias y Periodistas Quintana Roo.

Lo anterior, a juicio de la quejosa, representa un acto de represión para intimidarla por no votar a favor de todos los proyectos y en beneficio del *PRI*, como la instruyó el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Víctor Venamir Vivas Vivas, y el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que el ocho de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal electrónico del medio noticioso *“Novedades Quintana Roo”* una nota periodística intitulada *“Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo”* cuyo contenido alude a que la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca “falseó información” para obtener el cargo que ostenta, en la nota se señala que existen una investigación y una averiguación previa por abuso de autoridad en proceso de integración, los cuales, supuestamente, anteceden a su nombramiento como consejera, información que, según se afirma en la nota periodística, fue ocultada a los consejeros del *INE* que realizaron la entrevista a la quejosa para acceder al cargo.
- b) **Se tiene por acreditado** que el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal electrónico del medio noticioso *“Novedades Quintana*

Roo” una nota periodística intitulada “*Quieren que se investigue a todos los consejeros del Ieqroo*”, en cuyo contenido se aduce que la quejosa mintió para ocupar su cargo. En la nota se hace referencia a que el representante del *PRD* propuso que se abriera una investigación en contra de todos los consejeros electorales, incluyendo al Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco. En la misma nota se hace alusión a que la Consejera Claudia Carrillo negó tener antecedentes penales y afirmó que su último día en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue el treinta y uno de octubre de dos mil quince, fecha en la que renunció. De igual forma en la nota se menciona que la quejosa aclaró que para concursar como consejera presentó una carta de antecedentes no penales, la cual fue expedida por la referida Procuraduría. Por otra parte, en la misma nota se hace alusión a que la redacción de *Novedades de Chetumal* posee una relación de expedientes abiertos en la Procuraduría del Estado en contra de la quejosa.

- c) **Se tiene por acreditado** que en el portal “*Del Campo Noticias*”, sin que conste la fecha, se publicó una nota periodística intitulada “*Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo*”, en la cual también se hace alusión a una supuesta serie de quejas y denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las cuales, según la nota, revelan que la Consejera Claudia Carrillo falseó información para obtener el cargo que ostenta.
- d) **Se tiene por acreditado** que en el portal de noticias “*Periodistas Quintana Roo*”, sin que conste fecha, se publicó una nota periodística intitulada “*Mentiras de una Consejera*” en la que se afirma que la imagen del *IEQROO* sufrió un severo daño por el escándalo que involucra a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, quien, se afirma, ocultó información de procesos legales en su contra arrastrados desde su etapa en la Procuraduría de Justicia del Estado.
- e) **Se tiene por acreditado** que el diez de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal de noticias “*Desde el Balcón*” una nota periodística intitulada “*Quieren que se investigue a todos los consejeros electorales de Q. Roo*”, en cuyo contenido se aduce que el representante del *PRD* propuso que se

abriera una investigación en contra de todos los consejeros electorales, incluyendo al Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco. En la misma nota se hace alusión a que la Consejera Claudia Carrillo negó tener antecedentes penales y afirmó que su último día en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue el treinta y uno de octubre de dos mil quince, fecha en la que renunció. De igual forma en la nota se menciona que la quejosa aclaró que para concursar como consejera presentó una carta de antecedentes no penales expedida por la referida Procuraduría. Por otra parte, en la misma nota se hace alusión a que la redacción de *Novedades de Chetumal* posee una relación de expedientes abiertos en la Procuraduría del Estado en contra de la quejosa.

- f) **No se tiene por acreditado** que la publicación de las notas periodísticas aducidas por la quejosa en su escrito de queja y que constan en el expediente, represente un acto de represión para intimidar a la quejosa por no votar a favor de todos los proyectos y en beneficio del *PRI* como, según afirma, fue instruida por el Magistrado, entonces Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Víctor Venamir Vivas Vivas, y el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal.
- g) **No se tiene por acreditado** que la publicación de las notas periodísticas antes precisadas hubiera sido instruida o iniciada por el Magistrado del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, por el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Lima Carvajal o por el representante del *PRI*, ante el Consejo General del *IEQROO*.
- h) **No se tiene por acreditado** que el representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO* tuviera pruebas o información respecto de la averiguación previa indicada por la quejosa, ni que hubiera dado información a los medios de comunicación. De las notas periodísticas solo se advierte que el referido representante afirmó *desconocer la información*, y refirió que *si existen pruebas y evidencias que demuestran las acusaciones, se tiene que hacer una investigación más a fondo*, esto es, el referido representante, únicamente declaró que de existir pruebas en contra de la quejosa debía

investigarse, sin que ello signifique un medio de coacción o intimidación en su contra, o bien que a través de dicha declaración se calumnie a la quejosa.

- i) **Se tiene por acreditado** que la quejosa presentó renuncia al cargo de Agente del Ministerio Público, mediante escrito de treinta y uno de octubre de dos mil quince, dirigido a Procurador General de Justicia del Estado.
- j) **Se tiene por acreditado** que el cuatro de noviembre de dos mil quince, le fue expedido a la quejosa un certificado de no antecedentes penales por la Dirección de Servicios Periciales y el Departamento de Identificación Humana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.
- k) **Se tiene por acreditado** que el tres de septiembre de dos mil catorce se dio inicio en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Zona Norte, la Averiguación Previa número PGJE/DP/SGJ/DAJ/ZN/209/2014, en contra de Claudia Carrillo Gasca por el delito de abuso de autoridad.
- l) **Se tiene por acreditado** que no existe denuncia y/o querrella desde el seis de noviembre del dos mil quince, al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis en contra de Claudia Carrillo Gasca.

Lo anterior, tomando como soporte las siguientes pruebas:

- **Acta circunstanciada** instrumentada el seis de abril de dos mil diecisiete, con objeto de dejar constancia del contenido de los enlaces electrónicos de las notas periodísticas señaladas en los escritos presentados por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*.¹⁴⁵
- Desahogo al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a **Juan Alberto Manzanilla Lagos**, representante propietario del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis,

¹⁴⁵ Visible a fojas 4276 a 4304, del legajo 6, del expediente.

mediante el cual informó que no declaró a la prensa sobre la existencia de pruebas o evidencias en contra de la quejosa.¹⁴⁶

- **Copia simple** del escrito de renuncia de Claudia Carrillo Gasca al cargo de Agente del Ministerio Público de treinta y uno de octubre de dos mil quince dirigida al Procurador General de Justicia del Estado.¹⁴⁷
- **Copia certificada del certificado de no antecedentes penales**, expedido el cuatro de noviembre de dos mil quince, con folio 131/2015, emitido por la Dirección de Servicios Periciales y el Departamento de Identificación Humana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en el cual consta que no le fueron encontrados antecedentes penales a la C. Claudia Carrillo Gasca.¹⁴⁸
- **Copia certificada del acuerdo de inicio de averiguación previa** de tres de septiembre de dos mil catorce, en el que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Licenciado Julio Cesar Díaz Borbolla, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, determinó dar inicio a la averiguación previa identificada con el número PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte, cometido en agravio de Jesús Meza Tadeo, en contra de la Licenciada Claudia Carrillo Gasca y/o quien o quienes resulten responsables.¹⁴⁹

6. Negativa de apoyo a la quejosa para ejercer su derecho de réplica

Derivado de la publicación de las notas periodísticas precisadas en el numeral anterior, la quejosa refiere que solicitó al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral local, Alfredo Figueroa Orea, que hiciera una aclaración y solicitara su derecho de réplica. De acuerdo con lo narrado por la

¹⁴⁶ Visible a foja 1042, del anexo 3, del expediente.

¹⁴⁷ Visible foja 119, del legajo 1, del expediente.

¹⁴⁸ Visible foja 122, del legajo 1, del expediente.

¹⁴⁹ Visible a foja 3481 a 3482, del legajo 5, del expediente.

quejosa, dicho funcionario le negó el apoyo solicitado, y le refirió que el sólo dependía de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera solicitado formalmente al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* su apoyo para ejercer su derecho de réplica.
- b) **Se tiene por acreditado** que la quejosa no ejerció su derecho de réplica ni acción legal o administrativa alguna en contra de los medios noticiosos indicados en su escrito de queja.
- c) **No se tiene por acreditado** que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral local hubiera negado su apoyo a la quejosa para ejercer su derecho de réplica, ni que le hubiera referido que el sólo dependía de la Consejera Presidenta, pues si bien la denunciante sostiene que así ocurrió, de la investigación realizada por la autoridad sustanciadora no se encontraron elementos para sostener que ello así aconteció, ni la quejosa presentó medios de prueba para acreditar lo anterior.
- d) **Se tiene por acreditado** que las únicas comunicaciones formales con el funcionario referido relacionadas con la intención de la quejosa para ejercer su derecho de réplica, las cuales fueron atendidas, son los oficios CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; UTCS/306/16, de la misma fecha y UTCS/310/16, de dos de septiembre del mismo año, en los cuales consta que la quejosa solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social copia del audio de una entrevista que le fue realizada posterior a la sesión del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como el oficio CE/CCG/086/16, mediante el cual la quejosa solicitó al referido funcionario su apoyo para ejercer su derecho de réplica, el cual fue atendido mediante oficio UTCS/369/2016, los cuales no tienen relación con las notas periodísticas señaladas por la quejosa en el presente apartado.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- Desahogo al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Claudia Carrillo Gasca** el seis de septiembre de dos mil dieciséis,¹⁵⁰ en el que la quejosa manifestó que derivado de las notas periodísticas difundidas el ocho de marzo de dos mil dieciséis solicitó de “viva voz” a José Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, que de conformidad con el artículo 6 constitucional, realizara un boletín oficial mediante el cual se llevara a cabo la respectiva aclaración en relación a lo manifestado por el periódico *Novedades*, que el referido funcionario negó el apoyo solicitado y le señaló que, de conformidad con la Ley Orgánica del *IEQROO*, dependía directamente de la Consejera Presidenta. Lo que, según afirmó la quejosa, ocurrió el nueve de marzo de dos mil dieciséis.
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis a **José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO**,¹⁵¹ en la que manifestó que no obra en los archivos de la referida Unidad Técnica solicitud formal por parte de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca para el apoyo del área para el ejercicio de su derecho de réplica.

Asimismo, el referido funcionario señaló que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, la referida Consejera solicitó, de manera económica, la realización de una carta de aclaración o réplica respecto de una nota publicada en una página de la red social *Facebook* “*SCR Noticias*”, y que se dirigiera a un reportero conocido como Caamal Rivera, quien se negó a recibir el escrito aclaratorio argumentando que la única forma en que lo recibiría, sería de manos de la propia consejera. El funcionario en cuestión refiere haberle informado la situación a la Consejera quien le manifestó por mensaje de texto que desistiera respecto de la solicitud de réplica, puesto que iba a proceder legalmente.

¹⁵⁰ Visible a fojas 381 a 392 del anexo 1 del expediente.

¹⁵¹ Visible a fojas 1794 a 1893 del anexo 4 del expediente.

- **Copia Simple** del oficio CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual la Consejera Claudia Carrillo Gasca solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, el audio y versión estenográfica de la entrevista del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.¹⁵²
 - **Copia certificado** de los UTCS/306/16, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis y UTCS/310/16, de dos de septiembre del mismo año, por medio de los cuales el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, remitió a la quejosa el audio y versión estenográfica de la entrevista del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.¹⁵³
 - **Copia certificada** del oficio UTCS/369/2016, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, dirigido a la quejosa, mediante el cual le informó de acciones tomadas para el ejercicio de su derecho de réplica, en atención a una solicitud formulada por ésta mediante diverso oficio CE/CCG/086/16, así como oficios dirigidos a distintos medios de comunicación, la cual no está relacionado con las notas periodísticas en cuestión.¹⁵⁴
 - **Acta Circunstanciada**, en la cual se certificó el disco compacto remitido por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, José Alfredo Figueroa Orea, mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en cumplimiento al acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho.
- 7. Intervención del Magistrado Vivas Vivas en las sesiones privadas del Consejo General y en la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores.**

¹⁵² Visibles a fojas 309, del legajo 1, del expediente.

¹⁵³ Visibles a fojas 308, del legajo 1, y 1890, del anexo 4, así como 4675 a 4686, del legajo 7, del expediente.

¹⁵⁴ Visible a fojas 4656 a 4674, del legajo 7, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

La quejosa refiere que existe una intervención directa por parte del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente del *TEQROO*, quien se ha autonombrado “El Octavo Consejero”, tanto en las sesiones previas del Consejo General, como en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores.

De igual suerte, la quejosa refiere que en diversas ocasiones asistió el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas a las instalaciones del *IEQROO*, que ha sido excluida de las reuniones que ha sostenido con algunos Consejeros Electorales del Instituto local al igual que al consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, y que fue por el consejero Luis Carlos Santander Botello como se enteraron de una reunión para hacer reflexionar a los consejeros del lazo institucional que jurídicamente parecía estar bien pero, en su concepto, en la práctica denota subordinación e inseguridad al pretender compartir información a través de una cuenta de correo de *Gmail*.

La quejosa refiere que en dicha reunión, se estableció que el enlace entre ambas instituciones sería el ex magistrado José Carlos Cortés Mugartegui, quien, según el dicho de la quejosa, tiene lazos consanguíneos con la Secretaria Particular de la Presidenta del Instituto, lo que, a su parecer, presume una total subordinación.

Al respecto, la quejosa solicitó a la Consejera Presidenta del Instituto local la razón por la que el Tribunal Electoral del Estado intervenía en la integración de los expedientes, a lo que le contestó que existía un convenio de colaboración entre ambas instituciones para tal efecto, situación que, según el dicho de la quejosa, era falsa en ese momento, ya que dicho convenio fue aprobado posteriormente.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que el entonces Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas sostuvo al menos tres reuniones con los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*.
- b) **Se tiene por acreditado** que existió una reunión días antes de la aprobación del denominado Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el *IEQROO* y el *TEQROO* en materia de procedimiento especial sancionador, a la que asistió el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*

acompañado de dos personas, sin que se pueda precisar quiénes eran, así como la Consejera Presidenta del *IEQROO*, Mayra San Román, los consejeros electorales Thalía Hernández Robledo, Jorge Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche y Luis Carlos Santander Botello.

- c) Se tiene por acreditado** que a la reunión precisada en el inciso anterior no asistió la Consejera Claudia Carrillo Gasca y que el Consejero Sergio Avilés Demeneghi entró por unos minutos a la sala de juntas en donde se encontraban reunidos y se retiró.
- d) Se tiene por acreditado** que el objetivo de dicha reunión fue exponer a los consejeros los detalles y objetivos del convenio de colaboración institucional entre el *IEQROO* y el *TEQROO* por parte del personal del Tribunal.
- e) Se encuentra acreditado** que no existió una convocatoria formal para la reunión antes precisada, sin embargo, no se acreditó que no se haya convocado a la quejosa, ni que se le haya excluido deliberadamente.
- f) No se tiene por acreditado** que la Consejera Presidenta del Instituto local hubiera justificado a la quejosa la intervención del Tribunal Electoral del Estado en la integración de los expedientes de los procedimientos especiales sancionadores, bajo el argumento de la existencia de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, cuando, según la quejosa, dicho convenio no se había firmado aun, toda vez que no existen elementos probatorios para acreditar que tal conversación haya efectivamente acontecido, que, en su caso, hubiera ocurrido antes de que dicho convenio se suscribiera, ni de establecer circunstancias de tiempo, modo ni lugar en que ello aconteció.
- g) Se tiene por acreditado** que en sesión extraordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el de treinta de abril de dos mil dieciséis, se aprobó por mayoría de cuatro votos, el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, con los votos en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca y los Consejeros Electorales Luis Carlos Santander Botello y Sergio Avilés Demeneghi.

- h) **Se tiene por acreditado** que el acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior del *TEPJF*, y confirmado mediante sentencia emitida el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en el expediente SUP-JRC-198/2016 y acumulado.
- i) **Se tiene por acreditado** que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis se firmó el CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO POR LA MAESTRA MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, EN SU CALIDAD DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, Y POR OTRA EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO POR EL MAESTRO VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS, EN SU CALIDAD DE MAGISTRADO PRESIDENTE.
- j) **No se tiene por acreditado** que hubiera existido una intervención directa por parte del entonces Magistrado Presidente, Víctor Venamir Vivas Vivas, en las sesiones privadas del Consejo General del *IEQROO*, ni en la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores, ni que éste se hubiera autonombrado “el octavo consejero”.
- k) **No se tiene por acreditado** que el ex magistrado José Carlos Cortés Mugartegui actúe o haya actuado como enlace entre el *IEQROO* y el *TEQROO*.
- l) **Se tiene por acreditado que** el ex magistrado José Carlos Cortés Mugartegui, fue nombrado por el Pleno del *TEQROO* como Jefe de Unidad de Capacitación e Investigación de dicho órgano jurisdiccional, en la sesión de Pleno, celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis.

Lo anterior tomando como soporte los siguientes medios de prueba:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis al Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, entonces Magistrado Presidente del TEQROO,¹⁵⁵ quien, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:

- *Que no ha tenido reuniones regulares o frecuentes con los integrantes del Consejo General del IEQROO.*
- *Que desde la designación de los consejeros electorales sólo recuerda haber sostenido tres reuniones con el Consejo General del IEQROO.*
- *Una de las reuniones que refiere fue a petición suya, en la cual él y los Magistrados Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, así como el Secretario General de Acuerdos José Alberto Muñoz Escalante, fueron recibidos en la Sala de Juntas del IEQROO.*
- *El motivo de dicha reunión fue a raíz de una solicitud de los magistrados integrantes de la Sala Regional Especializada para que los tribunales locales buscaran un acercamiento con los OPLES de sus respectivos Estados, a efecto de homologar el Convenio de Colaboración que suscribieron el TEPJF y el INE, para el acompañamiento en tiempo real desde la preparación de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) y el desahogo de cada una de las diligencias del mismo, con la finalidad de que los tribunales tengan conocimiento previo a la consignación del asunto, esto debido al tiempo tan corto que se tiene para resolver.*
- *El proyecto de convenio fue aprobado por el pleno del TEQROO. Tres semanas después de presentado el proyecto no había sido aprobado por el Consejo General del IEQROO, motivo por el cual se comunicó vía telefónica con la Consejera Presidenta para preguntar si había observaciones del mismo.*
- *La Consejera Presidenta le refirió que existía “mucha reticencia” de la Consejera Claudia Carrillo Gasca y de los Consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello, por lo que le solicitó una reunión de trabajo.*
- *En dicha reunión estuvieron presentes los Consejeros Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo, Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche y Luis Carlos Santander Botello; el Consejero Sergio Avilés Demeneghi entró por cuestión de un minuto y se retiró del lugar, la Consejera Claudia Carrillo Gasca no se encontraba presente, y a decir de la Consejera Presidenta, su ausencia se debía a que no estaba de acuerdo en la firma del Convenio, pero sí estuvo invitada a la reunión.*
- *El proyecto de Convenio fue sometido a aprobación del Consejo General, resultando aprobado por mayoría de 4 votos, con el voto en contra de los tres consejeros antes referidos, y con esto la Consejera Presidente fue autorizada para firmarlo, sin embargo dicho Acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior el TEPJF, mismo que por unanimidad de votos fue confirmado en el expediente SUP-JRC-198/2016 y acumulados.*

¹⁵⁵ Visible a fojas 1259 a 1370, del anexo 3, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- *El 27 de mayo, posterior a la Conferencia Magistral del Doctor Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado integrante de la Sala Especializa del TEPJF, en la Universidad de Quintana Roo, finalmente se formó dicho Convenio de Colaboración.*
 - *“Jamás me he jactado ni he declarado, ya sea en forma pública o privada, ser el “Octavo Consejero” del Instituto Electoral de Quintana Roo.”*
 - *En efecto El Maestro José Carlos Cortés Mugártgui y José Alberto Muñoz Escalante laboran en el TEQROO*
 - *El Maestro José Carlos Cortés Mugártgui, fue Magistrado integrante de la Tercera Conformación del Pleno, durante el periodo 2012-2015. Desde el mes de diciembre del año 2015 en que el Senado de la república designó a los magistrados que integramos la Cuarta Conformación del Pleno, el Maestro José Carlos Cortés Mugártgui, con el voto unánime de los magistrados del Pleno, funge como Jefe de la Unidad del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo.*
- **Respuesta al requerimiento de información formulado al Consejero Electoral del IEQROO Luis Carlos Santander Botello**, por la autoridad sustanciadora, el tres de marzo de dos mil diecisiete,¹⁵⁶ quien, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:
 - *A partir del nombramiento de los Consejeros Electorales designados por el INE en octubre de 2015, han sido varias las ocasiones en que me consta que el Magistrado Víctor Vivas Vivas, Presidente del TEQROO ha asistido a las instalaciones del IEQROO. En algunas ocasiones, que no puedo precisar en número ni fecha, su presencia ha sido para asistir a sesiones, principalmente especiales o solemnes, del Consejo General y en otras oportunidades, que tampoco puedo establecer el número y la fecha, lo he visto en el área de oficinas de Consejeros, circulando en dirección hacia la oficina de la Consejera Presidenta o en sentido contrario rumbo a la salida.*
 - *Desconozco el motivo y naturaleza de las visitas no coincidentes con sesiones del Consejo General o a quien o quienes era (n) la persona o personas con que se pudiera haber entrevistado.*
 - *El treinta de abril de dos mil dieciséis el Consejo General del IEQROO aprobó por mayoría con cuatro votos a favor y tres en contra, incluido el del suscrito, el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el IEQROO y el TEQROO en materia del Procedimiento Especial Sancionador. En reuniones formales e informales previas a la fecha de aprobación del Convenio referido tres Consejeros y otros integrantes del Consejo General manifestamos nuestra oposición al mismo. Posteriormente, algunos días antes de la sesión donde se aprobó el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el IEQROO y el TEQROO en materia del Procedimiento Especial Sancionador, sin recordar la hora, la Consejera Presidente me solicitó ir en ese momento a la Sala de Juntas anexa a su oficina y al ingresar a la misma me percaté de la presencia del Magistrado Presidente del TEQROO acompañado de al menos una o dos personas más. Siendo uno de ellos el Licenciado José Carlos*

156 Visible a fojas 3475 a 3478 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Cortes Mugartegui quien previo a la actual conformación del TEQROO era Magistrado del mismo y presuntamente fungiría como enlace entre TEQROO e IEQROO. Por parte del IEQROO estaban la Consejera Presidenta Mayra Carrillo Medina, la Consejera Thalía Hernández Robledo y los Consejeros Jorge Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche. Durante el desarrollo de la reunión ingreso a la Sala de Juntas el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, retirándose unos pocos minutos después. No recuerdo si tuve conocimiento o no del porqué la Consejera Claudia Carrillo Gasea no estuvo presente. El objetivo de la reunión de acuerdo con lo manifestado y expuesto por la Consejera Presidente del IEQROO y el Magistrado Presidente del TEQROO fue presentar a los Consejeros los detalles características y objetivos del Convenio que finalmente fue aprobado el treinta de abril de dos mil dieciséis.

- *Fui convocado a la Sala de Juntas verbalmente, sin previo aviso ni información sobre el objetivo de mi presencia. Cuando ingrese a la Sala de Juntas ya se encontraban todos los que participaron en la misma a excepción del Consejero Avilés Demeneghi que ingresó más tarde y se retiró unos minutos después.*
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Secretario General** del Organismo Público Local Electoral de Quintana Roo, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis,¹⁵⁷ quien, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:
 - *En la presente fecha se encuentra vigente el denominado “Convenio de colaboración interinstitucional que celebran por una parte el Instituto Electoral de Quintana Roo, representado en este acto por la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, en su calidad de consejera Presidenta del Consejo General, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL IEQROO”, y por la otra el Tribunal Electoral de Quintana Roo, representado en este acto por el Maestro Víctor Venamir Vivas Vivas, en su calidad de Magistrado Presidente, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL TEQROO”, de fecha de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a efecto del “desarrollo de actividades conjuntas de colaboración y cooperación interinstitucional encaminadas a la implementación de un mecanismo de comunicación para el trámite, sustanciación de un mecanismo de los procedimientos especiales sancionadores.” (Resultado que se produce como se desprende a la letra de la declaración de las partes marcada como II en el aludido instrumento jurídico).*
 - *Cabe hacer mención que dicho convenio fue aprobado por el Consejo General de este Instituto, de conformidad con lo establecido en la fracción X del artículo 14 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha treinta de abril del año dos mil dieciséis.*

¹⁵⁷ Visible a foja 1043 a 1517 del anexo 3 del expediente.

- **Copia Certificada** del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de treinta de abril de dos mil dieciséis, en la que, entre otras cuestiones, se aprobó por mayoría de cuatro votos el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.¹⁵⁸
- **Copia certificada** de la convocatoria de sesión de pleno del *TEQROO* de seis de abril de dos mil dieciséis, en la que, entre otras cuestiones se analizó la propuesta de celebración del convenio de colaboración interinstitucional que permita el desarrollo de actividades para el intercambio de información relacionada con el procedimiento especial sancionador, que se pretende signar entre el *IEQROO* y el propio tribunal.¹⁵⁹
- **Copia certificada** del acta de sesión del pleno del *TEQROO* de siete de abril de dos mil dieciséis, en la que, entre otras cuestiones se analizó la propuesta de celebración del convenio de colaboración interinstitucional que permita el desarrollo de actividades para el intercambio de información relacionada con el procedimiento especial sancionador, que se pretende signar entre el *IEQROO* y el propio tribunal.¹⁶⁰
- **Copia certificada** del CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO POR LA MAESTRA MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, EN SU CALIDAD DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL *IEQROO*, Y POR OTRA EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO,

¹⁵⁸ Visible a fojas 5085 a 5122, del Legajo 7, del expediente.

¹⁵⁹ Visible a foja 1282, del anexo 3, del expediente.

¹⁶⁰ Visible a foja 1283 a 1285, del anexo 3, del expediente.

REPRESENTADO POR EL MAESTRO VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS,
EN SU CALIDAD DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL *TEQROO*.¹⁶¹

- **Copia Certificada** de la sentencia de la Sala Superior del *TEPJF* emitida el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente SUP-JRC-198/2016 y acumulado.¹⁶²
 - **Copia certificada** del Acta de la Sesión de Pleno Celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis en la que fue designado José Carlos Cortés Mugartegui como Jefe de Unidad de Capacitación e Investigación del *TEQROO*.¹⁶³
- 8. Violencia política por razón de género en contra de la quejosa durante la sesión del Consejo General del *IEQROO* celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis.**

La quejosa refiere que el treinta de abril de dos mil dieciséis, en sesión del Consejo General del Instituto local, se aprobó el convenio de colaboración entre el *IEQROO* y el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa en materia de Procedimiento Especial Sancionador; al respecto la quejosa manifestó que dicho instrumento jurídico carecía de análisis, por lo que sugirió mecanismos más seguros de información que abonarían a la máxima publicidad, además de que, en su concepto, con dicho convenio se justificaría la intervención de personal del Tribunal Electoral del Estado en las funciones del Instituto Electoral local.

Según la quejosa, en dicha sesión, el representante del *PNA*, Armando Miguel Palomo Gómez, realizó una serie de comentarios ofensivos en su contra por ser originaria de Cozumel, Quintana Roo.

La quejosa considera que dichas manifestaciones fueron consentidas por la Consejera Presidenta, pues no llamó al orden, ni aplicó las medidas de apremio establecidas en la normativa, siendo que el Secretario General del Instituto fue quien invocó el artículo 38 del Reglamento de Sesiones para recordar a todos los

¹⁶¹ Visible a fojas 1352 a 1359, del anexo 3, del expediente.

¹⁶² Visible a fojas 1295 a 1351, del anexo 3, del expediente.

¹⁶³ Visible a fojas 1360 a 1364, del anexo 3, del expediente.

integrantes que se deben abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajena a los asuntos que se están desahogando en el orden del día.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que en la sesión extraordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis, se discutió, entre otros asuntos el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
- b) **Se tiene por acreditado** que votaron en contra de dicho acuerdo la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, así como los consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.
- c) **Se tiene por acreditado** que, durante su intervención en la discusión de dicho asunto, el representante del *PNA* ante el Consejo General del *IEQROO*, Armando Miguel Palomo Gómez realizó aseveraciones relacionadas con gente de otras regiones a quienes les pidió respeto, así como referencias a la ciudad de Chetumal.
- d) **Se tiene por acreditado** que, durante una de sus intervenciones en la discusión del asunto antes referido, el representante de *MORENA* ante el Consejo General del *IEQROO* se refirió a la ciudad de Trujillo, confundiéndola con la ciudad de Chetumal.
- e) **Se tiene por acreditado** que la referencia realizada por el representante del *PNA* fue hacia otro u otros representantes de partidos políticos al referir lo siguiente: *“yo si invitaría ya a mis compañeros representantes de los partidos políticos, a que fuéramos respetuosos, a que acá en nuestro estado nosotros*

queremos lo mejor, se entiende que todo estamos representando un partido político y pues nuestros candidatos de acá y la verdad todos buenos; entonces no tiene caso, que una persona de fuera venga a tratar de subir incluso la imagen de los candidatos a este tema de estar exigiendo y aporreando...”

- f) No se tiene por acreditado** que en su intervención el representante partidista se hubiera referido a la quejosa o realizado alguna alusión personal, ni tampoco que su intervención estuviera encaminada a menospreciar a la quejosa por el hecho de ser mujer, por lo que no puede entenderse como violencia política por razón de género en su contra.
- g) Se tiene por acreditado** que al concluir las rondas de intervenciones en la discusión del acuerdo en cuestión, y antes de tomar la votación respectiva, el Secretario General invocó el artículo treinta y ocho del Reglamento de Sesiones, con la finalidad de recordar a todos los integrantes del Consejo General, de que durante las deliberaciones todos los integrantes se deben de abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como de realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajenas a los asuntos que se están desahogando en el orden del día, sin que se hiciera referencia a alguno de los integrantes de dicho Consejo.
- h) Se tiene por acreditado que,** durante la discusión del proyecto de acuerdo en cuestión, la Consejera Presidenta en ningún momento llamó al orden en la sesión.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- Copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del IEQROO celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis¹⁶⁴. (Punto 3, referente al Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en materia del Procedimiento Especial Sancionador.) Que en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

¹⁶⁴ Visible a fojas 123 a 160, del legajo 1 del expediente.

“(…)

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero; tiene el uso de la voz la Consejera Claudia Carrillo Gasca.

Consejera Claudia Carrillo Gasca: Estimados miembros del Consejo, compañeros del Instituto Electoral del Estado, público en general, buenos días; es de aludirse que la Ley Electoral únicamente le confiere la atribución de instruir e integrar el expediente producto de una queja o denuncia a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral del Estado; si bien es cierto que el Tribunal Electoral del Estado tiene injerencia sobre este procedimiento especial sancionador; es únicamente sobre la resolución del mismo, una vez que se le haya turnado el expediente debidamente completo, a fin de que presente el proyecto de Resolución que corresponda, en un plazo que no debe de exceder de cinco días, considerando que es el tiempo suficiente para realizar dicho trabajo, incluso puedo tomar como ejemplo, la eficiencia con la que nuestras áreas técnicas han laborado día y noche, para sacar adelante los proyectos de Acuerdo, incluso en el menor tiempo con el que cuenta el Tribunal Electoral para resolver; aunado a que los plazos con que el personal cuenta no está condicionado o nada, es una obligación de su cargo; por lo que con Acuerdo o sin él, tienen y deben de cumplir con los plazos establecidos por la Ley para la tramitación y resolución del procedimiento especial sancionador; y esta obligación no está condicionado a nada, menos a algún convenio con la institución que como Consejera formo parte; por lo que se considera inoportuno e irracional que dicha autoridad jurisdiccional quiera tener acceso a los expedientes que se integren desde un inicio por parte de la Dirección Jurídica del Instituto; así como a la información que solicita se le haga llegar durante la instrucción de dicho procedimiento sancionador, ya que sería abrirles las puertas a intervenir sin conocimiento de las partes involucradas, incluso de los propios miembros del Consejo General, por no tener además aclarado en dicho convenio, las formas o medios de comunicación aperturados a las partes y las que se pretenden establecer en dicho convenio, no inspiran confianza ni son seguros; por lo que se estaría incumpliendo además con el principio de autonomía e independencia de este Instituto, lo que violentaría de igual forma, el principio de certeza del organismo público electoral al cual representamos; de hecho, es competencia única del *IEQROO* realizar el debido trámite y sin tener inmiscuido con una excusa vaga que evidencia al *TEQROO* en su capacidad pronta de resolver en los tiempos que la ley le confiere, pues los mismos cuentan con un término no mayor de cinco días para turnar de inmediato a la ponencia que corresponda, para que se presente al pleno el proyecto de resolución correspondiente; en relación con los puntos de dicho convenio señalo los siguientes para lo cual a mi parecer, no son claros; en cuanto al punto tercero de las cláusulas el *TEQROO* no necesita ordenar ni mucho menos solicitar, ni hacer nada por el estilo al *IEQROO* que actuaciones y diligencias generar para su debida sustanciación; pues significaría subordinación hacia el Tribunal; en comparación con el Acuerdo el *INE* con la Sala y tratándose de dicho punto, se aprueba notificar requerimiento que se formula a la autoridad administrativa electoral de la documentación que se necesita para la debida sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores; y no como pretende aprobarse en esta sesión, donde

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

específicamente refiere que el *TEQROO* solicita a este órgano comicial de que genere actuaciones, diligencias y requerimientos de la documentación que estime para su debida sustanciación; lo cual es una cuestión imperativa de obedecer al *TEQROO*, lo que se asemeja a una relación laboral de subordinación donde no debería de haberla; respecto a esto, la inconformidad que se plantea es que basándose otra vez en los principios de autonomía e independencia que son atribuidos al *IEQROO* no deben pasarse por encima de ellos, porque en primer término el mecanismo electrónico que se pretende implementar no resulta viable, ya que la Ley Electoral contempla la forma y que cada una de las instituciones intervendrá en el procedimiento especial sancionador; y en este caso, lo pretenden hacer a través de cuentas Gmail; en cuanto al punto de envío de material de documentación estoy en total desacuerdo que sea el Instituto Electoral quien envíe al *TEQROO* como si esto se tratara de una obligación, cuando el interesado en conocer es el Tribunal, lo cual significa otra acción de subordinación; hubiera sido mejor acotarlo solo o ponerlo a su disposición para su conocimiento al *TEQROO* en estas oficinas, pues es dicha institución la interesada en conocer los procedimientos, y no nosotros dárselos a conocer; en cuanto al punto de excepción en materia de colaboración, me parece totalmente contradictorio con el punto tercero, en donde refiere que el Tribunal podrá solicitar al *IEQROO* que genere actuaciones y diligencias, mientras en el apartado quinto refiere una autonomía que contradice la subordinación del punto tercero de las cláusulas y que de aprobarse este convenio lo estaríamos perdiendo; dicho lo anterior, se tiene de acuerdo a la Ley, que cada una de las dos instituciones intervendrá en un momento procesal diferente, por lo que no se considera necesario compartir información ni implementar mecanismos de comunicación, que en este caso no están seguros ni son regulados para conocer conjuntamente sobre el procedimiento especial sancionador y mucho menos que el *IEQROO* mantenga informado de toda su actuación al Tribunal, ya que al final del día, esta autoridad jurisdiccional va a conocer de todo lo actuado cuando se le haga llegar el expediente completo; cabe mencionar, que en caso de que se llegara contemplar la posibilidad de compartir la información sin restricciones, e implementar dichos mecanismos electrónicos se estaría violentando por segunda ocasión, los principios de autonomía e independencia e incluso de certeza y de legalidad de este organismo local; por otra parte en la cláusula octava debió contemplarse la posibilidad de que sean los propios partidos políticos quienes se nieguen o acepten el intercambio de información del *IEQROO* con el Tribunal que pretende el citado convenio; asimismo, y por la información manejada debe ser el Tribunal quien nombre desde antes de someter a aprobación el presente convenio, a la persona que hará de revisor especializado con la que se intercambiará dicha información; pues el *IEQROO* es responsable recíprocamente de la misma, en este caso, la titular de la Dirección Jurídica; asimismo, debe el Tribunal informar al Consejo General del cambio de dicha persona responsable, no debemos arriesgar la información, porque es nuestra responsabilidad; y en ese momento, en caso de aprobarse dicho convenio se está poniendo la información del Instituto en manos de una persona que se desconoce su nombre, y que previamente el pleno debió nombrar antes de someter a consideración este convenio; asimismo, no se señala en el presente Acuerdo el lugar y la instancia en que deba resolverse

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

controversias en caso que así se acuerde, y que los problemas suscitados no se resuelvan de común acuerdo; ése es un punto específico en todo convenio; IEQROO no debe ser una filial del Tribunal Electoral; cabe mencionar además que tomando como referencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estimados compañeros, una de las causales de la remoción de consejeros es realizar conductas que atenten con la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto a terceros, entre otras circunstancias, y la aprobación del presente convenio, incluso podría ser un motivo para nuestra remoción; ya que se atenta contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, incluso genera o implica subordinación respecto de terceros, en este caso el Tribunal Electoral que pretende meterse hasta nuestra casa; en reunión previa me hubiera gustado sean analizados estos puntos; para un mejor y adecuado convenio institucional de colaboración, a efecto de salvaguardar a la institución y no ponerla en riesgo; sin embargo, tras bambalinas se hicieron reuniones entre algunos Consejeros y los Magistrados del Tribunal Electoral en las cuales no fui convocada; es cuánto.

Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejera; tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.
(...)

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo: Muchas gracias, buenas tardes a todos; creo que han sido muchos los comentarios vertidos, he intentado tomar nota de algunos de ellos, pero creo que es imposible, son demasiadas las acotaciones o precisiones que han manifestado; sin embargo, primero que nada quiero yo expresar que estoy conforme con el convenio que se somete a consideración; y primero que nada quiero comentarles que si bien, ahorita decía el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, no estaba implementando como tal el procedimiento especial sancionador, como lo tenemos ahora, evidentemente viene de la reforma electoral de dos mil catorce; sí se conocen en este Instituto los procedimientos sancionadores, vamos a llamarle, sí se implementaban con su carácter especial, aunque no estuvieran propiamente en la ley, y esto en base a qué, precisamente en criterios que establecía el propio Tribunal; yo también les quisiera hacer una pregunta, más allá de estar cuestionando el de los Consejeros que estemos en un momento dado a favor de este proyecto; ¿Cuál creen que es nuestra finalidad? ¿nosotros mismos vamos a establecer acciones que vengan en contra de la institución?; yo no, yo soy una persona institucional y conozco precisamente lo complicado que son este tipo de procedimientos; yo no equipararía por ejemplo la instrucción de un Ministerio Público, porque los tiempos son distintos, aquí los tiempos nos apremian, esa es una característica esencial que tiene la materia electoral y precisamente en esa institucionalidad creo que este convenio abona, y ahora no a nosotros, el IEQROO, no al TEQROO, le abona primero que nada, a ustedes los partidos políticos que son los que vienen precisamente a manifestar alguna queja o denuncia, y abona a la ciudadanía, porque entonces se va a poder cumplir con algo que los propios partidos políticos en el Congreso de la Unión determinaron y en el Congreso del Estado determinaron que debía de resolver de forma

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

expedita; y entonces aquí cuando estamos estableciendo este convenio se dice que es en forma expedita, pero bien, o sea, no en forma expedita, pero con resoluciones, porque también la experiencia dicta que la expedites cuando se implementaron esos procedimientos ocasionó que hubiera resoluciones que no fueran, voy a decirlo así, que estuvieran hechas con tanta celeridad que no cumplieran con todos los requerimientos ¿Qué pasaba? se impugnaban, iban al Tribunal y la mayoría de ellas eran revocadas, la intención de ese convenio no es otro, sino el beneficiar a un procedimiento que ya está previsto legalmente, es establecer que en un momento dado, cuando se habla por ejemplo de que el Tribunal puede sugerir porque yo es esos términos, hizo la precisión el Secretario, es que lo aprobaría, que fuera una sugerencia; de todos modos el Tribunal cuando se esté integrando aquí puede sugerir y podríamos complementar para hacer una mejor integración del expediente; no hay nada escondido, no va a ver nada oculto, no va haber sospechosismo, porque el expediente va a estar a la vista de todos, como ha sido hasta ahorita; entonces ¿Qué va a pasar? si no se hace, si no se aprueba y si nos quedamos únicamente en meras suposiciones de que va haber una interferencia de otro tipo y no dejamos que pudiera en un momento dado, sugerimos alguna mejor diligencia; entonces va llegar el Tribunal después de todo el procedimiento, y de todos modos el Tribunal va a regresar el expediente, porque a su consideración y en todo uso de sus facultades, no va estar debidamente integrado; entonces, en ese sentido, yo también les invito a esa reflexión ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? lo va a regresar y se va demorar todavía más en resolverlo; y si bien, cinco días, a lo mejor pueden ser suficientes; a lo mejor no; no es sencillo tener un bagaje de conocimientos para poder resolver de la mejor manera esos procedimientos especiales; ese es el sentido, lo único que sí quiero aclarar también, es que aquí no hay reuniones ocultas y en ese tema, no ha habido reuniones tras bambalinas; tengo en mi teléfono celular en el chat de Consejeros, donde la Consejera Presidenta nos invita y nos refiere la reunión que se tuvo con los Magistrados Electorales para tratar precisamente este asunto; y quiero comentarles que la postura que en todo momento hemos tenido incluso en esa reunión es precisamente de acotamiento, de que no se va a permitir en todo caso, más que una sugerencia, más que una relación meramente institucional, y también, por último nada más si me queda tiempo, es comentarles que si seríamos sancionados, yo creo que nos vamos a ir sancionados varios Consejeros de muchos Institutos, inclusive los del propio Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto Nacional Electoral celebra este convenio prácticamente en los mismos términos, inclusive en su cláusula tercera, ellos ni siquiera hablan de sugerencia, hablan de requerimientos para que se integre debidamente el expediente; se los digo de verdad, esto no es para beneficio de nosotros, aunque nos implica más trabajo, no es para beneficio del TEQROO, aunque pudieran en algún momento dado verse así, pero al final de cuentas el beneficio es para ustedes, los que van a interponer quejas y para la ciudadanía y para la certeza de las elecciones; muchísimas gracias.

(...)

Representante propietario de MORENA, C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama: Gracias Consejera Presidenta; efectivamente felicito la preocupación, efectivamente, qué bueno que ustedes han manifestado que están preocupados

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

por los partidos políticos, pues ya nos oyeron a la mayoría, ya oyeron nuestras intervenciones, también yo lo invito a usted señor Consejero a que reflexione, si realmente el debido proceso que es un derecho humano, se está ventilando en estas premisas, usted es un experto, sabe más que yo; a los magistrados hay que recordarles que ellos son peritos en derecho; eso los hace diferentes a los justiciables, yo me podría equivocar, ellos no se pueden equivocar; son peritos, por eso la exigencia de que cumplan con lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente lo que se denomina como Pacto de San José, en el artículo ocho, queremos debido proceso; sí ya sé señor representante que ahorita me antecedió que me dijo que yo me tengo que, sí estoy consciente, yo ya fui notificado, agradezco que lo haya hecho público, porque también es notorio verdad; y seguiremos, seguiremos remando en esta tesitura, aquí en ciudad Trujillo, perdón me equivoque, en la ciudad de Chetumal, para poder estar en condiciones de poder seguir debatiendo y haciendo difícil las cuestiones que hemos señalado en nuestro recursos,; sabemos y estamos conscientes de que no va hacer fácil el proceso Consejera; y sabemos también que tenemos el derecho de exteriorizar la forma que pensamos, hemos hecho las observaciones jurídicas, señalé que hice un posicionamiento político, pedí una moción que me fue denegada, la he acatado; el hecho de que no coincidamos ahora con algunos Consejeros no me hace menor; ni me hace ser excluido del Consejo; agradezco a usted y a los Consejeros por escucharme, a los representantes por tolerar mi participación, pero es un derecho como representante de MORENA y que puedo exteriorizar en el Consejo General, me gustaría Consejera me respondiera las preguntas que ya había hecho con anterioridad manifestando, para ver si usted estaría en condiciones de contestarla, antes de pasar a otra ronda, porque también tengo derecho a preguntar; gracias.

(...)

Representante propietario de Nueva Alianza, C. Armando Miguel Palomo Gómez; Muy buenas tardes; primero que nada disfrutar el debate del día de hoy; un debate que a final de cuentas con mucho respeto para todos los Consejeros que han participado, muy amplio, muy leído y analizado por cada uno de ellos; lo que sí me da mucha pena y nuevamente va el comentario anterior; sencillo, cuando nos llega gente de otros lados que ni conocen la ciudad, pues el lógico, el respeto para los que le enseñaron que su origen o del estado de donde viene, al final de cuentas, es lógico que venga a tratar de empeñar o estar aporreando y moviendo la mano y todo acá, tenemos muchos años, yo tengo el gusto de convivir con varios representantes y a todos se les ha escuchado, todos se han comportado como nos enseñaron acá en el estado de Quintana Roo; un estado tranquilo donde no hay violencia como en otros lados, un estado en el cual nosotros, nuestra ciudad capital se llama Chetumal; el ocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro se creó el Estado; y la verdad yo no sé a raíz de qué algunas personas, no se les quede el nombre todavía el nombre de Chetumal; tan pequeña, una ciudad tranquila, bonita, acá no escuchamos atentados ni nada de eso que hay en otros estados; entonces sí le pediría de manera muy especial a las personas que intenten venir a que algunos representantes, algunos Consejeros caigamos en el juego de ellos de estar manoteando, de estar faltando al respeto, y que quiero esto y que quiero lo otro,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

no, honestamente yo si les invitaría a que se adapten a las buenas costumbres que hay acá; todos los representantes de partidos políticos, incluso algunas personas que han venido de otros estados han hecho excelente papel, ¿por qué?, porque hemos sido respetuosos, a final de cuentas, hoy como representantes de partidos políticos, incluso nosotros estamos aprovechando el debate que tuvieron los consejeros el día de hoy, pero en ningún momento estamos exigiendo oiga que quiero esto, que quiero lo otro y contéstame, no; yo si invitaría ya a mis compañeros representantes de los partidos políticos, a que fuéramos respetuosos, a que acá en nuestro estado nosotros queremos lo mejor, se entiende que todo estamos representando un partido político y pues nuestros candidatos de acá y la verdad todos buenos; entonces no tiene caso, que una persona de fuera venga de a tratar de subir incluso la imagen de los candidatos a este tema de estar exigiendo y aporreando; sería cuanto y muchas gracias, y un último favor Consejera, creo que si vale la pena que nos den, me incluyo un cursito por allá en la cuestión del Reglamento de Sesiones, no estoy de acuerdo en que está participando un Consejero, una Consejera, o un representante de partido político y estemos con el tema de moción, moción realmente yo no deduzco, no soy abogado, pero espero que los que sepan, es cuando empiezan cuando menos a señalar los nombres o hacer alusión hacia alguna persona o hubiera un tema muy importante es momento suspender la participación de la persona que está hablando; entonces si pediría eso por favor, que nos hagan llegar, que hagan ahora sí un pequeño cursito, para que le vayamos agarrando muchos cual es el Reglamento de Sesiones; sería cuanto y mil disculpas si ofendi a alguien o si señale a alguien en particular.
(...)

Consejera Presidenta: Muchas gracias; nada más para concluir con esta última ronda de sesiones; en relación a los cuestionamientos que se han hecho, nada más quisiera responder en este sentido, que este Instituto Electoral de Quintana Roo, los Consejeros Electorales mantenemos una relación interinstitucional con el Tribunal Electoral de Quintana Roo y con todas las instituciones, de respeto, total independencia y de imparcialidad, que nuestro actuar siempre se ha regido en estos principios que establece la Constitución y que así seguirá; en relación a las reuniones que nosotros celebramos con los ámbitos de colaboración y de coordinación no sólo las sostenemos con el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la sostenemos con el Instituto Nacional Electoral, y las sostenemos con todas aquellas instituciones que así sean necesarias, a efecto del desarrollo de nuestras funciones, por todo lo demás le comento que sería mi respuesta a sus planteamientos, agradezco, como siempre, la intervención de todos los representantes de los partidos políticos y siempre nos hemos conducido coreo que con todo respeto y así estoy segura que seguirá siendo; el debate es lo que distingue a los órganos colegiados y esa es precisamente su naturaleza; reitero que por parte de este Instituto y por parte de esta Presidencia siempre se ha actuado con legalidad, con certeza, con independencia y con imparcialidad, muchísimas gracias, habiéndose agotado todas las rondas de intervención, Secretario General, le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Secretario General: Si me lo permite Consejera Presidenta; invoco al artículo treinta y ocho del Reglamento de Sesiones, con la finalidad de recordar a todos los integrantes de este Consejo General, de que durante las deliberaciones de este Consejo, todos los integrantes se deben de abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como de realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajenas a los asuntos que se están desahogando en el orden del día.

Consejera Presidenta: Si señor Secretario; Secretario General le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto de Acuerdo antes referido, con las modificaciones que usted ha propuesto a este Consejo General.

(...)

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del *PNA* ante el Consejo General del *IEQROO*, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, por cuanto hace al hecho que se le imputa manifestó lo siguiente:
 - *Nunca me he referido en contra de ningún consejero o consejera, ni representante de partido político ni persona alguna, con argumentos de descalificación o irrespetuosos relacionados con su entidad de origen o cualquier otra característica particular o personal que en su caso tenga, siendo que siempre me he conducido de manera respetuosa hacia todos y todas.*
 - *El contexto de la única intervención que el suscrito tuvo durante la sesión del 30 de abril de este año, en la que mis manifestaciones únicamente se relacionan con comentarios realizados por el compañero representante del partido MORENA, quien en una de sus participaciones dijo: (se transcribe)*
 - *Dicha intervención resulta visible en la foja 24 del Acta de dicha Sesión, misma que adjunto al presente en copia debidamente certificada, como sustento de mi dicho.*
 - *De ahí que el suscrito cuando pedí el uso de la voz y solo por la cuestión de la no identificación de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, es que manifesté: (se transcribe)*
 - *Como resulta evidente, el contexto de mis manifestaciones fueron, siempre en el ámbito de respeto, y en relación con el comentario del representante de MORENA que según él dijo, confundió el nombre de la Ciudad de Chetumal con el de "Ciudad Trujillo", por lo que, solamente hice uso de mi derecho a expresar opiniones en la mesa del Consejo General en mi calidad de representante de partido, por lo que, de*

tomarse mis manifestaciones como un agravio en contra de persona alguna, se estaría incurriendo en una inhibición a ese derecho de expresión que como representante partidista tengo.

- *Asimismo, en la propia sesión al término de mi intervención, me disculpé sin con dichas manifestaciones habría ofendido o señalado a alguien en particular, ya que no fue en ese sentido mi comentario.*

9. Supuesta exclusión de las actividades del IEQROO

La quejosa refiere que ella y los consejeros electorales Luis Carlos Santander Botello y Sergio Avilés Demeneghi, han sido excluidos de las actividades propias del Instituto Electoral local, por lo que el seis de mayo de dos mil dieciséis, presentó un escrito dirigido a la Consejera Presidenta, solicitando ser incluida en las actividades del seis, siete y ocho de mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, pasados los eventos, la Consejera Presidenta contestó dicho escrito refiriendo que se había determinado, en una reunión informal a la que la quejosa refiere no fue invitada, que fuera la Comisión de Administración, integrada por los Consejeros Electorales Jorge Armando Poot Pech, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, la encargada de realizar los eventos del seis, siete y ocho de mayo pasados.

Asimismo, la quejosa refiere que la Consejera Presidenta fue omisa en autorizarle viáticos para asistir al Congreso Nacional de Estudios Electorales en Guanajuato, lo cual se solicitó mediante el oficio CE/CCG/090/16.

De igual forma, la quejosa refiere que no fue informada ni invitada a una actividad llevada a cabo en las instalaciones del Instituto el treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, en donde se hizo entrega de material electoral, en Apoyo a la Dirección de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones del municipio Othón Pompeyo Blanco de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la cual, en su concepto, fue llevada a cabo de manera anticipada, sin que se hubiera materializado la firma del convenio de colaboración que se firmó el tres de noviembre siguiente, relativo al apoyo del IEQROO al referido municipio, en las elecciones para la renovación de Subdelegados, Delegado y Alcaldías del multicitado Municipio.

En igual sentido, la quejosa refiere que, el diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, ser tomada en cuenta para asistir a las actividades del vigésimo aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevarían a cabo el veintidós y veintitrés de agosto, sin que se le diera respuesta.

De las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

- a) **No se tiene por acreditado** que la quejosa haya sido excluida deliberadamente de alguna de las actividades del *IEQROO*.
- b) **Se tiene por acreditado** que la quejosa ha sido partícipe de diversas actividades del *IEQROO* relacionadas con diferentes temáticas relativas a las atribuciones del propio Instituto.
- c) **Se tiene por acreditado** que no todos los consejeros acuden a todos los eventos y actividades del *IEQROO* y que la Presidenta informa a los Consejeros sobre las actividades a las cuales se les invita en reuniones de trabajo.
- d) **Se tiene por acreditado** que la asistencia de los consejeros a los distintos eventos y actividades relacionados con las funciones del *IEQROO* atiende a diversas circunstancias, como son el tipo de actividad, las comisiones de las que forman parte, la disponibilidad presupuestal para viáticos, otras actividades a las que hayan asistido, entre otros.
- e) **Se tiene por acreditado** que las actividades del seis, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, consistieron en recorridos por los órganos desconcentrados del Instituto a efecto establecer mecanismos de vigilancia y coordinación sobre el manejo y operación de los recursos materiales, financieros y humanos que les son otorgados.
- f) **Se tiene por acreditado** que a las actividades referidas por la actora, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo acudieron los consejeros integrantes de la Comisión de Administración, esto es, el Consejero Presidente de dicha Comisión, Jorge Armando Poot Petch, la Consejera Thalía Hernández Robledo, el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, el Representante del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

PNA, del Representante del PVEM, del Representante del PT, así como el Titular de la Dirección de Administración y Planeación como Secretario Técnico de la citada Comisión.

- g) **No se tiene por acreditado** que se haya excluido a la quejosa de dichas actividades, pues no consta que hayan acudido otros consejeros además de los integrantes de la Comisión de Administración.
- h) **Se tiene por acreditado** que la Consejera Carrillo Gasca, solicitó al Director de Administración del IEQROO viáticos para asistir a la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, los días catorce al dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales “Jornadas en Guanajuato Capital”.
- i) **Se tiene por acreditado** que al XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales “Jornadas en Guanajuato Capital” no asistió la quejosa.
- j) **Se tiene por acreditado** que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la entrega de material electoral en apoyo a la Dirección de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones del municipio de Othón Pompeyo Blanco de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- k) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera sido excluida deliberadamente de la actividad referida en el inciso anterior, al no existir constancia de que se tratara de un evento en el que existiera un protocolo para la entrega del material, ni invitaciones formales a los Consejeros para asistir a la entrega del material electoral.
- l) **Se tiene por acreditado** que la quejosa acudió a los siguientes eventos:

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/091-89/2017 de fecha 24/02/17 ¹⁶⁵	Evento de conmemoración del día internacional de la mujer	México D.F.	2 días	7 de marzo de 2017, al 8 de marzo de 2017	\$3,200.00

¹⁶⁵ Legajo 7, foja 5013, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
CCG/001/16 de fecha 05/01/16 ¹⁶⁶	Asistir a las Instalaciones del Consejo Municipal de Puerto Morelos	Puerto de Morelos	1 día	6 de enero de 2016 al 6 de enero de 2016	\$1,600.00
CCG/002/16 de fecha 29/01/16 ¹⁶⁷	Recordatorio para determinar las sedes de los consejos distritales y municipales	Zona norte	3 días	1 de febrero de 2016 al 3 de febrero de 2016	\$4,800.00
CCG/11/16 de fecha 07/03/16 ¹⁶⁸	Asistir a reuniones de trabajo con la Coparmex y los medios de comunicación	Cancún	2 días	8 de marzo de 2016 al 9 de marzo de 2016	\$3,200.00
CCG/13/16 de fecha 15/03/16 ¹⁶⁹	Realización de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de consejeros y vocales de los consejeros distritales y municipales del IEQR., del proceso electoral local ordinario 2016	Bacalar	1 día	16 de marzo de 2016 al 16 de marzo de 2016	\$800.00
CCG/13/16 de fecha 15/03/16 ¹⁷⁰	Asistir al recorrido por el Estado para realizar las entrevistas a los aspirantes a Presidentes, Consejeros y vocales de los Consejeros Distritales y Municipales del Instituto		6 días	16 de marzo de 2016 al 21 de marzo de 2016	
Sin numero de fecha 30/03/16 ¹⁷¹	Acudir a las instalaciones de los consejos distritales de Instituto	Bacalar, playa del Carmen, kantunilkin. Isla mujeres y Cancún	2 días	31 de marzo de 2016 al 1 de abril de 2016	\$3,200.00
CCG/30/16 de fecha 09/05/16 ¹⁷²	Asistir a la entrega del papel tortilla para la promoción del voto, para las elecciones ordinarias 2016	Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos	1 día	10 de mayo al 10 de mayo	\$800.00
Sin numero de fecha 19/05/16 ¹⁷³	Asistir a la unidad Intercultural maya, para entregar material de difusión de la promoción al voto	José María Morelos	0.5 día	20 de mayo de 2016 al 20 de mayo de 2016	\$400.00

¹⁶⁶ Legajo 4, foja 2462/2465, del expediente

¹⁶⁷ Legajo 4, foja 2466/2469 del expediente.

¹⁶⁸ Legajo 4, Foja 2472/2475

¹⁶⁹ Legajo 4, Foja 2476/2479

¹⁷⁰ Anexo 4, foja 2296

¹⁷¹ Legajo 4, Foja 2480/2483

¹⁷² Legajo 4, Foja 2486/2489

¹⁷³ Legajo 4, Foja 2490/2493

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
Sin numero de fecha 20/05/16 ¹⁷⁴	Asistir al Instituto Tecnológico, para entregar material de difusión de la promoción al voto	Felipe Carrillo Puerto	0.5 día	23 de mayo de 2016 al 23 de mayo de 2016	\$400.00
CCG/10/16 de fecha 23/02/16 ¹⁷⁵	Asistencia a la primera reunión de Coordinación con los Organismo Públicos Locales de las 13 Entidades Federativas que celebran elecciones locales durante en 2016	CDMX	4 días	28 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2016	\$3,200
CCG/22/16 de fecha 19/04/16 ¹⁷⁶	Visitas de verificación a las empresas encargadas de la impresión y producción de la documentación y material electoral para el proceso electoral local ordinario 2016	CDMX	4 días	20 de abril de 2016 al 23 de abril de 2016	\$4,800.00
SIN OFICIO ¹⁷⁷	Realizar la verificación y visto nuevo de la documentación definitiva para gobernador y ayuntamientos en las empresas que ganaron la licitación	CDMX	3 días	20 de abril de 2016 al 22 de abril de 2016	\$4,800.00
CE/CCG/033/16 de fecha 28/05/16 ¹⁷⁸	Recorrido de la entrega de paquetes electorales a los Consejos Distritales y Municipales del Estado de Quintana Roo. Y entrega de papel tortilla en pro de la promoción del voto para el proceso electoral ordinario 2016.	Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	3 días	29 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016	\$4,800.00
CE/CCG/054/16 de fecha 29/08/16 ¹⁷⁹	Asistencia al evento que organiza la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación	Ciudad de Veracruz	3 días	31 de agosto de 2016 al 02 de septiembre de 2016	\$4,800.00

¹⁷⁴ Legajo 4, Foja 2494/2497

¹⁷⁵ Legajo 4, Foja 2470/2471

¹⁷⁶ Visible en el legajo 4, foja 2484/2485, del expediente.

¹⁷⁷ Visible en el anexo 4, foja 2306, del expediente.

¹⁷⁸ Visible en el legajo 4, foja 2498/2499, del expediente.

¹⁷⁹ Visible en el legajo 4, foja 2500 a 2501, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
CE/CCG/033/17 de fecha 02/03/17 ¹⁸⁰	Asistencia a evento organizado por el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de la Mujer, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer	Ciudad de México	2 días	7 y 8 de marzo de 2017	\$3,200.00
Total					\$44,000.00

m) Se tiene por acreditado que de noviembre de dos mil quince a junio de dos mil diecisiete, los consejeros electorales del *IEQROO* erogaron las siguientes cantidades por concepto de viáticos.

Consejero	Importe de Viáticos			Importe de pasajes		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Claudia Carrillo Gasca	4,800.00	41,600.00	28,800.00	5,357.00	23,867.85	12,380.57
Jorge Armando Poot Pech	0.00	50,400.00	7,200.00	5,357.00	25,658.79	3,720.00
Juan Manuel Pérez Alpuche	4,800.00	56,400.00	5,600.00	5,357.00	39,779.38	7,653.27
Luis Carlos Santander Botello	4,800.00	46,400.00	16,800.00	5,357.00	30,118.16	14,620.24
Mayra San Román Carrillo Medina	9,600.00	60,800.00	21,600.00	5,357.00	43,764.34	15,487.83
Sergio Avilés Demeneghi	0.00	43,000.00	8,800.00	0.00	14,894.87	17,663.51
Thalia Hernández Robledo	4,800.00	68,000.00	5,600.00	5,357.00	47,010.91	7,653.27

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia simple** del oficio PRE/027/2016, de siete de noviembre de dos mil dieciséis, ofrecido en el presente procedimiento por la quejosa, suscrito por La Consejera Presidenta del *IEQROO*, Mayra San Román Carrillo Medina, dirigido a los Consejeros electorales del mismo Instituto, por medio del cual los convoca a una reunión de trabajo, en la que les informaría, entre otras cuestiones, sobre diversas invitaciones que habían llegado al Instituto.¹⁸¹
- **Copia simple** del oficio CCG/028/16, de seis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, a través del cual le solicitó

¹⁸⁰ Visible en el legajo 7, fojas 5011a 5013, del expediente

¹⁸¹ Visible a foja 956, del legajo 2, del expediente.

a la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Median, que se le tomara en consideración para acudir a las actividades en Cancún, Quintana Roo.¹⁸²

- **Copia simple** del oficio PRE/511/2016, de once de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, media el cual le informó a la quejosa que las actividades del seis, siete y ocho de mayo serían atendidas por los consejeros integrantes de la Comisión de Administración.¹⁸³
- Respuesta al requerimiento de información realizado por la autoridad sustanciadora, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a la **Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San Román**¹⁸⁴, en el que precisó, en lo que interesa, lo siguiente:
 - *No se ha excluido a dicha Consejera de la actividad que ella refiere y de ninguna otra relacionada con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones como consejera electoral.*
 - *Respecto de la actividad realizada los días seis, siete y ocho de mayo del presente año, me permito puntualizar lo siguiente: dicha actividad fue la relativa a un recorrido por todos los órganos desconcentrados del instituto a efecto de verificar el acondicionamiento de los mismos. En este punto es de señalarse que por cuanto a los consejos distritales, se llevan a cabo diversas actividades como son el procedimiento de localización de las sedes y los recorridos para verificar su acondicionamiento, siendo que el caso particular de la actividad realizada los días señalados, de manera consensuada con todos los consejeros electorales se determinó que dicha actividad, en virtud de que implicaba un gasto considerable para este instituto porque asisten consejeros electorales y representantes de partidos políticos, se determinó que asistirían los consejeros electorales que integran la Comisión de Administración del propio instituto por ser esta la que cuenta con la atribución de supervisar lo relacionado con el manejo y operación de los recursos financieros y humanos otorgados a los órganos desconcentrados del instituto, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo en relación con el artículo 17 fracción I del Reglamento Interno del propio instituto, debiendo precisar que la Consejera Claudia Carrillo Gasca no forma parte de dicha comisión*

¹⁸² Visible a foja 306, del legajo 1, del expediente.

¹⁸³ Visible a foja 307, del legajo 1, del expediente.

¹⁸⁴ Visible a fojas 1777 del anexo 4 a 3012 del anexo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- *No obstante lo anterior, he de referir que la Consejera Claudia Carrillo Gasca, tuvo oportunidad –al igual que mis demás compañeros consejeros electorales- de participar en distintas actividades relacionadas con la integración de los órganos desconcentrados de este Instituto para el proceso electoral 2016, que inició con el procedimiento de localización de las sedes de los consejos distritales y municipales, como se puede corroborar con la copia certificada del informe rendido al efecto por la Dirección de Organización de este instituto mismo que a su vez es sustentado con las actas circunstanciales de las visitas realizadas a las sedes de dichos consejos distritales y municipales, y en las que obra la firma de la Consejera Claudia Carrillo Gasca.*
- *Cabe referir que participó de manera igualitaria en el procedimiento para la designación de los consejeros distritales y municipales, acudiendo a la aplicación de los exámenes correspondientes, y formando parte de los grupos de trabajo para llevar a cabo las entrevistas a los participantes, asimismo acudió a las sesiones de instalación de dichos órganos desconcentrados, a efecto de corroborar lo anterior se adjunta disco compacto que contiene imágenes donde se puede apreciar la participación de la Consejera en alusión en dichas actividades y otras propias del proceso electoral local 2016.*
- *La anterior información igualmente puede ser corroborada en el apartado de boletines de la página oficial de internet de este instituto <http://www.ieqroo.org.mx/index/.php/boletines/boletines-2016>*
- *Por otro lado y respecto el cuestionamiento relacionado con la supuesta exclusión de la Consejera en alusión de alguna otra actividad institucional realizada durante el proceso electoral pasado, se reitera que en ningún momento ha existido dicha exclusión en virtud de lo siguiente:*
- *En efecto, una de las actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones y atribuciones legales del Consejo General de este Instituto y de quienes lo integramos, es la relativa al material y documentación electoral que se utilizó durante el proceso electoral 2016, siendo que dicha Consejera igualmente fue debidamente convocada y asistió a esas actividades como se acredita de la copia certificada del Acta Circunstanciada de fecha 22 de abril de 2016, en la que igualmente obra la firma de la Consejera en alusión, en dicha acta se hizo constar la visita a la empresa LITHO FORMAS S.A. de C.V., con domicilio en el Estado de México, que fue la que elaboró la documentación oficial.*
- *Asimismo, la Consejera en alusión estuvo presente en las actividades relativas a la recepción en fabricante del líquido indeleble, la recepción en planta del material electoral, recepción en planta de la documentación correspondiente a boletas, actas y formatos varios; lo que se acredita con las actas circunstanciadas de fecha dieciséis de mayo de este año.*
- *Del mismo modo, es importante recalcar que tan no se le ha excluido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca de ninguna actividad institucional que, durante el desarrollo del proceso electoral local 2016, dicha Consejera al igual que mis demás*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

compañeros, asistió a varios eventos y actividades relacionadas con la promoción del voto, impartió conferencias en instituciones educativas, entre otros, lo que se acredita con los boletines emitidos por la propia Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, en los que consta la inclusión de dicha consejera, como de mis demás compañeros, en todas y cada una de las actividades institucionales, atendiendo en su caso, las cargas de trabajo así como a las comisiones a las que pertenecen o presiden, inclusive, que se adjuntan como (Anexo 9). A manera de ejemplo me permito referir las siguientes actividades e imágenes que prueban la participación de dicha consejera:

- *Reunión de Coordinación del INE con los OPLES en la Ciudad de México, celebrada el 29 de febrero y 1 de marzo de 2016 (es la primera persona de izquierda a derecha):*
- *Reuniones de colaboración entre este Instituto y el Instituto Nacional como se acredita, entre otros, con el boletín emitido por esta autoridad y que es consultable en la liga <http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines2016/2010-febrero-2016/600-tercera-reunion-de-vinculacion-y-coordinacion-entre-el-ieqroo-y-el-ine>.*
- *Primera semana de derecho que se realizó en este Instituto, cuya información se puede corroborar en la liga <http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines2016/205-enero-2016> y como se aprecia en la imagen inserta (es la segunda persona de izquierda a derecha).*
- *De igual forma fue invitada al Curso sobre Procedimiento Especial Sancionador, como se observa es la primera persona de derecha a izquierda, en la que de igual forma se encuentran los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo y como se corrobora en el boletín consultable <http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines2016/205-enero-2016> mismo evento que igualmente fue difundido en la página <http://contrapuntonoticias.com/2016701/25/personal-del-ieqroo-y-teqroo-en-actualizacion-permanente/> entre otros.*
- *Actividades de promoción del voto, como la denominada “Democrafitti 2016” en la que igualmente la Consejera en alusión, junto con mis demás compañeros consejeros electorales formaron parte de la misma, como se observa en la imagen que a continuación se agrega:*
- *Firma del Convenio entre el IEQROO y COPARMEX para la promoción del voto como se aprecia en la imagen siguiente:*
- *Las imágenes que se han insertado en el presente documento, son referencias que han sido tomadas de la página oficial de este Instituto, específicamente del apartado de boletines, en el que puede corroborarse la participación y cobertura que ha tenido la consejera electoral en alusión, y mis demás compañeros, y de los que se desprende que no ha sido excluida o relegada de actividad alguna. El referido apartado de boletines puede ser consultado en la liga <http://www.ieqroo.org.mx/index/.php/boletines/boletines-2016>*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Asimismo se agrega copia certificada de impresiones de pantalla de publicaciones en las redes sociales institucionales, donde consta la cobertura que se le ha dado a las actividades del instituto y en las que se advierte la participación de la multicitada Consejera, consultables en https://twitter.com/IEQROO_oficial y https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?pnref=story.unseen-section como se puede apreciar en las imágenes insertas en su escrito, en las que se aprecia que la Consejera en alusión acudió a impartir pláticas y conferencias en diversas universidades como la Universidad Intercultural de José María Morelos y la Universidad Interamericana para la el Desarrollo, plantel Chetumal.
 - Del mismo modo, se agrega copia certificada de la evidencia fotográfica de la participación de dicha consejera en las diversas actividades relacionadas con la organización de elección del cinco de junio de 2016, donde claramente se puede observar su asistencia.
 - En este punto también agrego copia certificada de los viáticos que le han sido transferidos para el cumplimiento de sus comisiones y actividades institucionales, como constancia de las facilidades brindadas a la Consejera Claudia Carrillo Gasca
 - De igual manera se anexan correos electrónicos, con los que a través de la Secretaría Particular de la Presidencia se circulan acuerdos, invitaciones, convocatorias, entre otros, hacia mis compañeras y compañeros consejeros electorales sin discrecionalidad alguna, en dichos correos se advierte el correo institucional de la Consejera Claudia Carrillo Gasca.
- Adicionalmente se informa que en todo momento y con las formalidades correspondientes, la suscrita emite, sin discrecionalidad alguna, a todos mis compañeros consejeros electorales, las convocatorias a las reuniones de trabajo o actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones legales que tenemos conferidas. Para acreditarlo adjunto los acuses de todas y cada una de las convocatorias e invitaciones a Sesiones del Consejo General, reuniones previas a dichas sesiones, que la suscrita he efectuado desde mi designación como Consejera Presidenta de este Instituto a la presente fecha; asimismo remito copia de las circulares con las que he convocado a mis compañeras y compañeros consejeros a reuniones informativas de trabajo, siendo que estas últimas, en más de una ocasión la Consejera quejosa no acudió.
 - De igual forma dicha consejera ha sido considerada en las demás actividades institucionales que se lleva a cabo en las Comisiones del Consejo General, para lo cual adjunto copia certificada de los oficios de convocatoria a reuniones y sesiones de dichos órganos de este Instituto, con lo que se acredita dicha situación.
 - Como resulta evidente con lo hasta aquí reseñado en el punto particular que se contesta, no existen elementos objetivos que permitan afirmar que la Consejera Claudia Carrillo Gasca hay sido excluida de las actividades relacionadas con el proceso electoral local 2016, ni de ninguna otra relacionada con el desempeño de sus funciones y obligaciones legales que como consejera electoral de un OPLE tiene.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- *De igual forma, es pertinente señalar, que no la totalidad de los Consejeros Electorales asistimos a todas las actividades, ya sea por diversas actividades o por así decidirlo de manera personal, no obstante se circulan las invitaciones correspondientes.*
- Anexos al escrito por el cual la Consejera Presidenta del *IEQROO* dio respuesta al requerimiento formulado y que ha sido precisado, los cuales fueron exhibidos en copia certificada:

Documento	Ubicación en el expediente
Informe de la Dirección de Organización sobre el Procedimiento de Localización de las Sedes de los Consejos Distritales y Municipales del IEQROO, para el proceso electoral local 2016.	Anexo 4, Foja 1972
Inmuebles seleccionados y aprobados por la Comisión de Organización y los demás integrantes del Consejo General, que funcionará como sede de los Consejos Distritales y Municipales y Actas Circunstanciadas.	Anexo 4, Foja 1976
Fechas y Sedes de las entrevistas a aspirantes a consejeros y vocales de los Consejos Distritales y Municipales.	Anexo 4, Foja 2121
Lista de entrega de diversas Actas Circunstanciadas	Anexo 4, Foja 2154
Diversas copias certificadas de boletines oficiales	Anexo 4, Fojas 2158-2238
Diversas copias certificadas de imágenes de Twitter	Anexo 4, Fojas 2241-2283
Copia certificada del oficio CCG/001/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interián López, por medio del cual solicita viáticos.	Anexo 4, Foja 2285
Diversas transferencias bancarias hechas a Claudia Carrillo Gasca, por concepto de viáticos.	Anexo 4, Fojas 2286-2290
Copia certificada del oficio CCG/10/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interián López, a través del cual solicita viáticos para asistir a la primera Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2291-2292
Copia certificada del oficio CCG/11/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interián López, a través del cual solicita viáticos para asistir a la Reunión de trabajo con la COPARMEX y los medios de comunicación y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2294-2295
Copia certificada del oficio CCG/13/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interián López, a través del cual solicita viáticos para asistir al Recorrido por el Estado para realizar las entrevistas a los aspirantes a Presidentes, Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto y transferencias bancarias.	Anexo 4, Fojas 2296-2300
Copia certificada del escrito firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interián López, a través del cual solicita viáticos para asistir a la instalación de los Consejos en los Municipios de Bacalar y otros y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2301-2303

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Documento	Ubicación en el expediente
Copia certificada del oficio CCG/22/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interian López, a través del cual solicita viáticos para la visita a las empresas encargadas de la impresión y producción de la documentación y material electoral y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2304-2306
Copia certificada del oficio CE/CCG/033/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interian López, a través del cual solicita viáticos para viajar a la zona Norte del Estado de Quintana Roo y transferencia bancaria.	Anexo 4, Foja 2307-2309
Copia certificada del oficio CE/CCG/054/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interian López, a través del cual solicita viáticos para asistir al evento que organiza la Sala Xalapa del TEPJF.	Anexo 4, Foja 2310
Copia certificada de diversas impresiones de correo electrónico donde se incluye a Claudia Carrillo Gasca, identificado como Anexo 13.	Anexo 4, Fojas 2311-2344
Copia certificada de escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a las sesiones de 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 29 de abril; 5, 9 y 13, 18, 23, 25, 26, 27, 30 de mayo; 01, 03, 10, 13, 23, 29 de junio; 13, 23, 27; 09, 22, 29 de agosto; 13, 20, 28 de septiembre de dos mil dieciséis y 30 de octubre; 18, 19 de noviembre; 01, 07, 14, 21 de diciembre de dos mil quince; 18, 28 de enero; 05, 11, 12, 11, 15, 16, 23, 26 de febrero de dos mil dieciséis.	Anexo 4, Fojas 2346-2434 y Anexo 5, Fojas 2435-2680
Copia certificada de los oficios SG/097/2016, enviados por Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a los Consejeros Electorales, a través de los cuales informa la inclusión en el orden del día la inclusión del proyecto de acuerdo sobre la determinaciones del procedimiento de designación de los consejeros y vocales de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo.	Anexo 5, Fojas 2681-2686
Copia certificada de los escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a las sesiones de carácter urgente de 02, 06, 09, 11, 14, 16, 21, 24, 29, 31 de marzo; 06, 08, 12 de abril de dos mil dieciséis.	Anexo 5, Fojas 2687-2783
Copia certificada de los escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a las reuniones formales de trabajo de 30 de noviembre; 07, 14, 21 y 28 de diciembre de dos mil quince; 18 y 28 de enero; 05, 23 y 26 de febrero; 02, 06, 09, 11, 14, 21 y 28 de marzo; 06 y 29 de abril; 09, 18, 24 y 25 de mayo; 29 de junio; 13 de julio de dos mil dieciséis.	Anexo 5, Fojas 2785-2928
Copia certificada del oficio PRE/674/2016, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a la reunión de trabajo de 28 de junio de dos mil dieciséis.	Anexo 5, Fojas 2930-2937
Copia certificada del oficio PRE/018/2016 de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2938

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Documento	Ubicación en el expediente
Copia certificada oficio PRE/019/2016 de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se convoca a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2939
Copia certificada del oficio PRE/008/2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión para presentar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva.	Anexo 5, Foja 2940
Copia certificada del oficio PRE/009/2016 de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2941
Copia certificada del oficio PRE/010/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2942
Copia certificada del oficio PRE/015/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2943
Copia certificada del oficio PRE/017/2016 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2944
Copia certificada del oficio PRE/021/2016 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2947
Copia certificada del oficio PRE/023/2016 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2948
Copia certificada del oficio PRE/024/2016 de veinte de octubre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2949
Copia certificada del oficio PRE/026/2016 de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, firmado por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2950
Copia certificada del oficio DO/183/2016, de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, firmado por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa la entrega de paquetes electorales y cajas contenedoras de material electoral.	Anexo 5, Foja 2952

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Documento	Ubicación en el expediente
Copia certificada del oficio DO/130/2016, de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, firmado por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa sobre la verificación de materiales electorales y verificación de la documentación sin emblemas y visto bueno de la documentación definitiva de Gobernador y Ayuntamiento.	Anexo 5, Foja 2953
Copia certificada del oficio DO/072/2016, de once de marzo de dos mil dieciséis, firmado por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa sobre la aplicación de los exámenes escritos a los candidatos a Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.	Anexo 5, Foja 2954
Copia certificada del oficio DO/071/2016, de once de marzo de dos mil dieciséis, firmado por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual se le invita al desarrollo de la cuarta etapa del procedimiento de designación de los Consejeros y Vocales.	Anexo 5, Foja 2955
Copia certificada de oficios firmado por Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, dirigido a los Consejeros Electorales, a través del cual les convoca a reunión formal de trabajo de la Comisión de Organización, Informática y Estadística.	Anexo 5, Fojas 2956-2982
Copia certificada del oficio UT/E/01/16, firmado por Adrián Almicar Sauri Manzanilla, Jefe de la Unidad Técnica de Información y Estadística, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual se le informa se asistencia la reunión para dar fe pública de la base de datos del sistema PREP.	Anexo 5, Foja 2983
Copia certificada del oficio COTAPREP/004/2015, firmado por Adrián Almicar Sauri Manzanilla, Jefe de la Unidad Técnica de Información y Estadística, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual se le convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2986
Copia certificada de los oficios firmados por Jorge Armando Poot Pech, Presidente de la Comisión Jurídica, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 2988-2994
Copia certificada de los oficios firmados por Sergio Avilés Demeneghi, Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, dirigidos a los Consejeros Electorales, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 2995-3003
Copia certificada de los oficios firmados por Juan Manuel Pérez Alpuche, Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 3004-3007

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Documento	Ubicación en el expediente
Copia certificada de los oficios firmados por Luis Carlos Santander Botello, Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 3008-3012

- Respuesta a los requerimientos de información realizados por la *UTCE* a los consejeros electorales Jorge Armando Poot Pech, Thalía Hernández Robledo y Sergio Avilés Demeneghi, por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, y a Juan Manuel Pérez Alpuche, por acuerdo de tres de marzo del dos mil diecisiete, mediante el cual se les solicitó que indicaran, entre otras cuestiones, si participaron en las actividades realizadas los días seis, siete y ocho de mayo en Cancún Quintana Roo, así como si tienen una agenda nacional e internacional, y cómo se decide quien asiste a cada evento.
- **Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech¹⁸⁵**
 - *El pasado 19 de noviembre de 2015 por Acuerdo del Consejo General del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo identificado con la clave IEQROO/CG/A-132-15 se aprobó por unanimidad de votos de los siete consejeros electorales que integramos este órgano máximo de dirección, la integración de las Comisiones tanto permanentes como temporales del Instituto.*
 - *En dicho Acuerdo, se determinó entre otras, la Comisión de Administración y Planeación, quedando conformada la misma por el suscrito como Presidente, de la Consejera Thalía Hernández Robledo, del Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, del Representante del Partido Nueva Alianza, del Representante del Partido Verde Ecologista de México, del Representante del Partido del Trabajo, así como el Titular de la Dirección de Administración y Planeación como Secretario Técnico de la citada Comisión.*
 - *En este tenor, el día 29 de marzo de 2016, por unanimidad de votos de los siete consejeros electorales se aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-087-16 mediante el cual se designan a los Consejeros Electorales y Vocales de las Juntas Ejecutivas Distritales y Municipales, de los quince Consejos Distritales y tres Consejos Municipales, a instalarse en todo el Estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2016.*
 - *De tal suerte, que en cumplimiento a lo que establece nuestra norma local, los días 6, 7, 8, 9 y 10 los Consejeros Electorales que formamos parte de la multicitada*

¹⁸⁵ Visible a foja 1371 del anexo 3, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Comisión visitamos los dieciocho Consejos Electorales instalados en el Estado de Quintana Roo, a fin de establecer un mecanismo de vigilancia sobre el manejo y operación de los recursos materiales, financieros y humanos otorgados a cada uno de los citados Consejos.

- *Para tal efecto, el día 6 de mayo, se acudió a los Consejos instalados en los Municipios de Solidaridad y Puerto Morelos; el día 7 siguiente, estuvimos en los siete Consejos Distritales ubicados en la Ciudad de Cancún; el día 8 acudimos a los Consejos instalados en los municipios de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Cozumel; y el día 9, estuvimos en los Consejos con sede en los Municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; finalmente, el día 10 estuvimos en el Consejo Electoral instalado en el Municipio de Bacalar y los dos con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.*
- *Como es de apreciarse, la actividad realizada por los Consejeros Electorales que conformamos la Comisión de Administración, se basó en visitar no solamente los distritos electorales instalados en la ciudad de Cancún, o en alguna otra actividad que se llevara únicamente en dicha ciudad; sino que la instrumentación del mecanismo de vigilancia y control fue para todos los órganos desconcentrados de este Instituto instalados en el Estado de Quintana Roo; de tal suerte, que únicamente el día 7 de mayo del presente año, estuve en la Ciudad de Cancún, realizando actividades propias de la Comisión que presido con mis demás compañeros Consejeros, en tanto que los demás días, como ya indiqué, hicimos lo propio en los demás Consejos Distritales o Municipales de este Instituto Electoral.*
- *El suscrito no cuenta con una agenda nacional ni mucho menos internacional de eventos a los cuales acudo; los eventos a los que he asistido es a los que organiza directamente el Instituto Nacional Electoral, y a cuya asistencia de los Consejos Electorales Locales se solicita; o en su caso, aquellos que de manera directa, organiza el propio INE de las actividades relacionadas con las Comisiones que cada uno de los Consejeros presiden.*
- *En el caso concreto, asistí a la primera reunión de coordinación entre el INE y los OPLE's que tuvieron proceso electoral en el 2016, junto con mis compañeros Consejeros Electorales Mayra Carrillo Medina, Claudia Carrillo Gasca, y Luis Carlos Santander Botello, celebrada en la Ciudad de México, los días 29 de febrero y 1 de marzo, del año en curso.*
- *Durante el desarrollo del Proceso Electoral, también acudimos a un viaje a la Ciudad de México, a efecto de visitar a las empresas a las que se les había adjudicado la licitación para la elaboración tanto de la documentación electoral así como aquella que llevaría el proceso de fabricación del material electoral; mencionar que durante el proceso electoral, todos los consejeros en diversos viajes tuvimos la oportunidad de asistir a una determinada actividad relacionada con la documentación o material electoral. En el caso particular, asistí junto con mis compañeros consejeros Thalía Hernández Robledo y Sergio Avilés Demeneghi, a las empresas Litho Formas y Seriplast.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Finalmente, por cuanto a los eventos que organizan otras autoridades u organismos en el interior de la República, por lo regular llegan directamente de Presidencia, y ésta en reunión de consejeros electorales nos informan de las invitaciones que llega al Instituto, ya sea para la asistencia directamente de la Presidenta o para que la misma se haga extensiva a los demás Consejeros; es de señalar que por cuestiones presupuestarias o por actividades propias de los Consejeros, es difícil acudir a todos los eventos que nos invitan; de ahí que en reunión de Consejeros se nos ha señalado desde el mes de septiembre que podemos acudir a un evento de nuestra preferencia por lo que resta del año. En lo particular, desde esa fecha hasta el día de hoy, no he acudido a ningún evento fuera de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- Haciendo hincapié de que a los eventos que organiza el INE y cuya asistencia de Consejeros se solicite, se deberá acudir; así como aquellos cursos, talleres o reuniones donde se solicite expresamente la presencia del Presidente de la Comisión cuya actividad realice el propio INE.

A dicho escrito se anexó la siguiente documentación en copia certificada:

Documentación	Ubicación dentro del expediente
Oficio CE/JAPP/021/16, firmado por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interián López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1381
Oficio CE/JAPP/028/16, firmado por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interián López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1382
Oficio CE/JAPP/009/16, firmado por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interián López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1384
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, sobre la designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales de las juntas ejecutivas distritales y municipales.	Anexo 3, Foja 1386
Dictamen de la Junta General de IEQROO que propone al Consejo General los cargos de los consejeros presidentes y consejeros electorales de las juntas ejecutivas distritales y municipales.	Anexo 3, Foja 1413
Acuerdo del Consejo General del IQROO, por medio del cual se modifica la integración de las comisiones permanentes, así como la comisión transitoria de igualdad entre hombres y mujeres.	Anexo 3, Foja 1509

• **Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo¹⁸⁶:**

- Efectivamente, como consta en el oficio número CE/THR/039/2016, de fecha cinco de mayo del año que transcurre, el cual se adjunta al presente en copia certificada por el Secretario General de este órgano comicial, mediante el cual la suscrita solicitó viáticos y combustible, acudí, conjuntamente con mis compañeros Consejeros Electorales Jorge Armando Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche, a los quince Consejos Distritales y tres Consejos Municipales de la entidad.
- El objetivo de dicha comisión atendió a dos razones esenciales, la primera en mi carácter de integrante de la Comisión de Administración, que precisamente la

¹⁸⁶ Visible en el anexo 4, Foja 1894 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

conformamos una servidora y mis compañeros consejeros electorales antes aludidos, fungiendo como Presidente de la misma el Consejero Jorge Armando Poot Pech, a efecto de recabar esencialmente requerimientos administrativos que tuvieran dichos órganos desconcentrados y que fueran necesarios atender con la debida oportunidad para el buen desarrollo de sus funciones, máxime que los integrantes de tales órganos desconcentrados habían manifestado en diversas ocasiones, tanto a la Consejera Presidenta como a algunos otros Consejeros Electorales, así como a integrantes de la Junta General de este Instituto, inquietudes diversas en estos temas.

- *En segundo término, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, en dicha ocasión también me correspondió hacer entrega de los listados nominales definitivos correspondientes a los candidatos independientes a los Ayuntamientos de los municipios de Puerto Morelos y Benito Juárez.*
- *No se cuenta con una agenda nacional e internacional de eventos, sin embargo, periódicamente, por lo general cada semana, la Consejera Presidenta nos convoca a reuniones exclusivas de Consejeros Electorales, en las que, entre otros puntos, nos hace referencia a invitaciones recibidas para asistir a diversas clases de eventos, reuniones, talleres, conferencias, seminarios, entre otras, que se celebrarán en el propio Estado o en alguna otra entidad, ello con independencia de que dichas invitaciones son circuladas previamente mediante correo electrónico.*
- *En el mes de agosto del año en curso, en reunión precisamente convocada por la Consejera Presidenta y celebrada en forma exclusiva entre los Consejeros Electorales, se acordó que, atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Instituto, la participación en tales eventos para lo que resta del año que transcurre conforme a lo siguiente:*
- *La Consejera Presidenta de este Instituto se comprometió a que cada uno de los Consejeros podríamos acudir a por lo menos un evento, el que fuera de nuestra elección (entendiéndose que este límite obedecía a aquellos eventos que implicaran recurso para viáticos y transporte), ello con independencia de los que fuera obligatorio participar con motivo de nuestras propias atribuciones ejemplificándose para este segundo supuesto, la ocasión en que fueron invitados la Consejera Presidenta de este Instituto, Maestra Mayra San Román Carrillo Medina y el Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social de este órgano comicial, Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello, al Encuentro Nacional de Educación Cívica, convocado por el propio Instituto Nacional Electoral, celebrado en la ciudad de México en el mes de septiembre de este año, siendo que con dicho evento no se eximio al Consejero en mención de que pudiera acudir o hubiera acudido, de ser el caso, a algún otro evento de su elección fuera del Estado.*

- **Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi¹⁸⁷:**

- *El suscrito no participó dentro de las actividades llevadas a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en los días que se señalan, ya que fui excluido, puesto que MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, argumentó que sólo irían los Consejeros que integraban la Comisión de Administración. Es importante resaltar que la vigilancia de los procesos electorales les compete a todos y cada uno de los consejeros electorales, y la justificación fue desproporcional y excesiva, ya que en otras actividades desarrolladas por cualquier comisión, la asistencia de cualquier otro consejero electoral en ningún momento había sido negada y/o condicionada.*
- *Cada uno de los consejeros electorales preside una o más comisiones, en ese sentido, las leyes y reglamentos en la materia, establecen en la mayoría de los casos, las fechas y/o los plazos en los que se llevarán a cabo diversas acciones, para ello materialmente deberán de realizarse diversos eventos.*
- *Por otra parte, e independientemente de lo señalado en el párrafo que antecede, la Consejera Presidenta generalmente es la que decide acerca de las personas que participarán en cada uno de los eventos y el grado de intervención que tendrán, esto lo realiza sin dar aviso previo, enterándonos en la mayoría de los casos de último momento o extraordinariamente, ya que en ocasiones no se ha extendido invitación ni mucho menos oficio alguno de conocimiento.*
- *Lo anterior, así lo manifesté en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el 15 de septiembre de la presente anualidad, durante mi intervención en el punto de asuntos generales, (foja 8 y 24), así como de manera posterior lo hice notar durante la Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre (foja 94, 98).*

A dicho escrito, el referido Consejero anexó copia certificada de las actas de las sesiones ordinarias del Consejo General del IEQROO de quince y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.¹⁸⁸

- **Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche¹⁸⁹**

- *Sí, participé como integrante de la Comisión de Administración, de manera conjunta con la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, quien además funge como Presidente de la misma.*
- *Es importante destacar que las actividades se desarrollaron en los quince Consejo Distritales y tres Consejos Municipales que conforman la geografía electoral del Estado de Quintana Roo y esencialmente versaron en recabar y atender con la debida prontitud las diversas inquietudes que los integrantes de los órganos*

¹⁸⁷ Visible en el Anexo 4, Foja 1561 del expediente.

¹⁸⁸ Visibles en el anexo 4, fojas 1615 y siguientes, así como 1643 y siguientes, del expediente.

¹⁸⁹ Visible a fojas 3707 a 3709, del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

desconcentrados del propio Instituto electoral local, para contribuir al buen desarrollo de sus funciones.

- **Copia simple** del oficio CE/CCG/090/16, de once de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por la quejosa, dirigido al Lic. Víctor Manuel Interián López, Director de Administración del *IEQROO*, por medio del cual hizo de su conocimiento que se encontraría en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, los días catorce al dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, con la finalidad de asistir al XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales “Jornadas en Guanajuato Capital” por lo que le solicitó que le fueran proporcionados los viáticos correspondientes.¹⁹⁰
- **Copia simple** del oficio DAP/519/2016, de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido a la Consejera Claudia Carrillo, suscrito por el Lic. Víctor Manuel Interián López, Director de Administración del *IEQROO*, por medio del cual en respuesta al oficio CE/CCG/094/2016 envió la información relacionada con la cantidad erogada por concepto de viáticos por cada uno de los consejeros electorales desde el tres de noviembre a la fecha.¹⁹¹
- **Copia certificada** del oficio DAP/270/2017, de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dirigido a la Consejera Presidenta, suscrito por el Lic. Víctor Manuel Interián López, Director de Administración del *IEQROO*, por medio del cual en respuesta al oficio PRE/149/2017, envió la información relacionada con la cantidad erogada por concepto de viáticos por cada uno de los consejeros electorales desde el tres de noviembre a la fecha.¹⁹²
- **Copia certificada** del oficio CE/CGC/085/16, de siete de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por la quejosa, dirigido al Lic. Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO* mediante el cual solicita diversa información relacionada con el evento de treinta y uno de octubre del mismo año, en el cual se realizó la entrega de material electoral al Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Quintana Roo.¹⁹³

¹⁹⁰ Visible en el legajo 2, foja 959, del expediente.

¹⁹¹ Visible en el legajo 2, fojas 1068 y 1069, del expediente.

¹⁹² Visible en el legajo 7, fojas 5005 y 5006, del expediente.

¹⁹³ Visible en el Legajo 7, Foja 4868-4869, del expediente.

- **Copia certificada** del oficio DO/289/2016, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO*, mediante el cual, en respuesta al oficio CE/CGC/085/16, refiere las circunstancias en las cuales se llevó a cabo el evento en el que se entregó material electoral al Municipio de Othón Pompeyo Blanco.¹⁹⁴
- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/043/16, de fecha 10 de agosto de 2016, mediante el cual la quejosa solicitó apoyo administrativo para acudir al evento relacionado con el Vigésimo Aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.¹⁹⁵

10. Violencia política por razón de género durante la sesión del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis.

El veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, se votó el acuerdo por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, en dicho asunto la quejosa refiere que votó en contra del proyecto por considerarlo ilegal y contrario a lo establecido en la norma local.

La quejosa aduce que en dicha sesión, en el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, fue sometida a cuestionamientos respecto al sentido de su voto por parte del representante propietario del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos, conducta presuntamente contraria al artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del *IEQROO*, poniendo en duda su debida designación como Consejera, así como sus conocimientos en la materia.

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- a) Se tiene por acreditado** que, en la sesión del Consejo General indicada por la quejosa, en el punto doce relativo a asuntos generales, el representante propietario del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos y el representante del

¹⁹⁴ Visible en el Legajo 7, Foja 4864-4865, del expediente.

¹⁹⁵ Visible a foja 2976 del legajo 4, del expediente.

PRD Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo, solicitaron que la Consejera Claudia Carrillo Gasca fundara y motivara el sentido de su voto en contra de un acuerdo que había sido sometido a su consideración, sobre lo cual, el primero de ellos, insistió en dos ocasiones.

- b) Se tiene por acreditado** que la quejosa adujo que respecto al sentido de su voto, se allanaba a lo expresado por sus compañeros consejeros y exhortó al representante del *PRD* a que leyera el reglamento de sesiones, sin precisar algún precepto en particular.
- c) Se tiene por acreditado** que el representante del *PRD* argumentó en su segunda intervención que la Consejera Claudia Carrillo es experta en la materia al haber concursado por un cargo para el cual se requería conocer la materia electoral y le exhortó a que le indicara el artículo reglamentario al que había hecho alusión en su intervención.
- d) No se tiene por acreditado** que en las intervenciones de los representantes de los partidos políticos existan expresiones por las cuales se denosté a la quejosa o se le agreda o insulte por su calidad de mujer, o que pueda traducirse en violencia política por razón de género.

Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba:

- Copia Certificada del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, de veintisiete de febrero de dos mil dieciséis,¹⁹⁶ la cual, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

“Punto 12. Asuntos Generales
(...)”

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Téc. Juan Alberto Manzanilla Lagos: Gracias señora Presidenta sería una pregunta; dado que quienes votan a favor de un Acuerdo, dan por sentado la motivación y fundamentación de dicho Acuerdo; solicitarle a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, su razonamiento de su voto en contra, dado que en el mismo

¹⁹⁶ Visible a fojas 84 a 118 del legajo 1 del expediente del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

punto que se sometió a aprobación, los consejeros votaron en contra fundaron y motivaron su voto; sería cuánto.

Consejera Presidenta: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática para el asunto que agendó respecto las cartas de residencial y vecindad.

(...)

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Téc.

Juan Alberto Manzanilla Lagos: Consejera Presidenta, buenas noches; como lo comenté, uno de los principios de este órgano es la máxima publicidad, y también los consejeros cuando tomaron protesta protestaron cumplir y hacer cumplir la Ley; dentro la ley establece que al fundar y motivar si estás en contra del Acuerdo deberás razonar tu voto, la Consejera Claudia Carrillo Gasca votó en contra de un Acuerdo, donde dos consejeros votaron también en contra pero fundaron y motivaron su voto; quisiera yo preguntarle cuál es el razonamiento que sustenta ella para poder votar en contra del acuerdo.

Consejera Presidenta: Muchas gracias; tiene el uso de la voz la Consejera Claudia Carrillo Gasca.

Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca: En el sentido de mi voto me allano a lo expresado por mis compañeros consejeros, estoy consciente que el candidato ciudadano para tener posibilidad de aspirar necesita contar con equidad de contienda, tomando en cuenta que no está representado a ningún partido político, sino es un candidato ciudadano; estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Juan Manuel Pérez Alpuche, de que existe esa laguna legal; asimismo, compañero representante le exhorto a que lea su Reglamento de Sesiones; es cuánto.

Consejera Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática.

Representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias, en este punto, o sea, agradeciendo la intervención de la Consejera, porque simplemente ella pudo negarse a exponer sus motivos, pero nosotros lo dijimos en la sesión de trabajo y lo señalamos, es obligación constitucional de toda autoridad independientemente del ámbito de su competencia, motivar y fundamentar sus resoluciones; y fundamentar y motivar no simplemente es decir no, por esto; es decir el por qué y fundamentarlo así como se planteó con el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche y el Consejero Luis Carlos Santander Botello; me sorprendió demasiado de que en la sesión de trabajo, en ningún momento han intervenido la Consejera Claudia Carrillo Gasca, y que aquí cuando se sometió a votación, simplemente haya votado en contra; nos hubiéramos ido en esta situación, de no haber sido porque se pide que exprese su motivación, no sabemos por ejemplo, cuál era la motivación para esta situación; y como lo comentamos nosotros cuando se instaló este Consejo, nos ha tocado ver muchos consejeros apáticos, muchos consejeros indiferentes y si se analiza la votación de cuatro a tres; en una situación ese voto, que no sabemos ni por qué

pudo haber cambiado el sentido de esta decisión, por eso, y también en un momento dado, que a mí me interesaría también conocer concretamente, qué artículo del Reglamento le está señalando al compañero, porque es la misma duda que yo tengo, para poderlo leer y en su momento poder argumentar, e insisto, y exhortar en un momento dado, si nos acepta esta situación, de que en lo sucesivo pues se pudiera estar fundamentando y argumentando lo votos, muchas gracias.

Consejera Presidenta: Muchas gracias, señor representante; tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Téc. Juan Alberto Manzanilla Lagos: Gracias Consejera Presidenta y con todo respeto a la Consejera, creo que debemos separar las cosas ¿no?, me parece que la experta porque ella fue la que concursó por un cargo, del que fue designada, y uno de los requisitos es conocer la materia electoral o argumentar ciertas leyes o reglamentos que de ella emanen; yo sí le pediría, y como me hizo el exhorto y lo tomo a bien, pero que me demuestren en que artículo del Reglamento de Sesiones me dice ella que ese exhorto puede ser tomado en consideración como ella lo plantea, y en seguida reitero, la función pública está también inmersa en ello, de fundar y motivar el sentido de su voto, no es una cuestión personal, también le digo con mucho respeto; pero sí, como ya lo señalé el representante del Partido de la Revolución Democrática; en un estricto sentido de discusión, la votación quedó cuatro a tres; no quisiéramos pensar que sin fundar y motivar un voto, este acto se impugne, qué alcances tendría jurídicamente posterior a ello; entonces yo no estoy pidiendo más que se constriña a lo que establece la Ley, que es fundar y motivar, sin una cuestión personal y no nada más por estilo, sino que ellos están obligados, reitero, a hacer cumplir y cumplir lo que establece la Ley; sería cuánto.

Consejera Presidenta: Muchas gracias; Secretario General, sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Secretario General: Consejera Presidenta; le informo que el siguiente punto en el orden del día es la clausura de la presente sesión ordinaria.

[...]

11. Sesión del Consejo General del IEQROO, del dos de junio de dos mil dieciséis, en la que el representante del PRI supuestamente realizó señalamientos irrespetuosos en contra de la quejosa.

El dos de junio de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto local, se discutió el proyecto de acuerdo respecto a la solicitud de los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA, sobre el uso de

teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio de reproducción de imágenes, al interior de las casillas.

La quejosa refiere que, con posterioridad a su intervención en dicha discusión, el representante del *PRI*, Juan Alberto Manzanilla Lagos, dijo: *“que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos”*, siendo que dicha manifestación no puede ser considerada pacífica y respetuosa, sin que la Consejera Presidenta llamara a mantener el orden durante la sesión.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se encuentra acreditado** que en la sesión extraordinaria, con el carácter de urgente del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, se discutió el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL *IEQROO*, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO A LA SOLICITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA RELACIONADA CON EL USO AL INTERIOR DE LAS CASILLAS ELECTORALES DE TELÉFONOS CELULARES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS O VIDEO ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES, CON LA FINALIDAD DE GRABAR O TOMAR FOTOGRAFÍAS DENTRO DE DICHAS CASILLAS ELECTORALES.
- b) **Se encuentra acreditado** que el referido proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes.
- c) **Se encuentra acreditado** que previamente al uso de la voz por parte de la quejosa, intervinieron en la discusión el representante propietario del *PRD*, el representante suplente del *PAN* y el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello.
- d) **Se encuentra acreditado** que la quejosa, en uso de la voz, manifestó que, en su concepto, el proyecto sometido a su consideración no era exhaustivo, realizó algunas sugerencias en torno a su contenido, argumentó que no veía

inconveniente en que previo a unos días de llevarse a cabo la jornada electoral, no se pudiera llevar a cabo dicha medida como una invitación dirigida al elector a no usar dispositivos para tomar imágenes al momento de votar dentro de la mampara, en que eso sea considerado como una incidencia ni causal de imputación, sino como una mera prevención de un delito.

- e) **Se encuentra acreditado** que con posterioridad a la intervención de la quejosa, el representante propietario del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, solicitó el uso de la voz y manifestó, entre otras cuestiones, lo siguiente: “...he escuchado con atención las intervenciones de quienes me han antecedido en la palabra, en algún momento de alguna sesión lo señalé, que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos, ...”
- f) **Se encuentra acreditado** que durante la discusión del referido punto de acuerdo, la Consejera Presidenta del Consejo General del *IEQROO* en ningún momento llamó al orden en la sesión.
- g) **No se encuentra acreditado** que el representante propietario del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO* hubiera hecho alguna alusión personal respecto de alguno de los consejeros en particular, sino que manifestó que en su concepto algunos integrantes de ese Consejo eran representantes de partidos y no de ciudadanos, lo que en forma alguna implica un señalamiento directo en contra de la quejosa que suponga violencia política por razón de género.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia certificada** del acta de la sesión extraordinaria con el carácter de urgente celebrada por el Consejo General del *IEQROO*, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis,¹⁹⁷ que en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

¹⁹⁷ Visible a fojas 161 a 194 del legajo 1 del expediente.

“(...)

Directora Jurídica: Con gusto Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día, es la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto a la solicitud de los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA relacionada con el uso al interior de las casillas electorales de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio de producción de imágenes, con la finalidad de grabar tomar fotografías dentro de dichas casillas electorales.

Consejera Presidenta: Consejera y Consejeros Electorales, así como representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de Acuerdo antes mencionado; ¿alguien desea hacer uso de la voz?; tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática.

(...)

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero; tiene el uso de la voz la Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca.

Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca: Buenas tardes estimados miembros del Consejo General, compañeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, público; respecto al proyecto considero no es exhaustivo, por lo que considero que antes de someterlo a votación se tomen en cuenta los siguientes puntos de vista; la negativa de uso de celulares, de cámaras de video o medios de reproducción al acudir a votar con la finalidad de grabar o tomar fotografías de dicho voto personalísimo, no es una regla obligada por la ley, sin embargo no debe dejarse pasar por desapercibido que tampoco es violatorio el hecho de que se prohíba o invite a la ciudadanía a fin de evitar el uso de dichos aparatos en el interior de las mamparas con la finalidad de evitar de que su aparición sea obligada, coaccionada, incluso extorsionada por determinado candidato o partido político; estoy consciente que la medida de retirar los aparatos electrónicos antes de ingresar a la casilla es un acto de molestia; y se estaría violentando el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero de antecedentes de Acuerdos tomados por este órgano colegiado, considero viable hacer una atenta invitación o exhorto ciudadano, como otros tantos que este Consejo ha analizado, como la civilidad con los medios de comunicación y la no violencia en el proceso electoral; por lo cual no le veo inconveniente alguno que previo a unos días de llevarse a cabo la jornada electoral, no se pueda llevar a cabo dicha medida, como una invitación dirigida al elector; a no usar dispositivos para tomar imágenes al momento de votar dentro de una mampara, sin que esto sea considerado como una incidencia ni causal de impugnación, sino como una mera prevención de un delito; es una forma de fortalecer el voto libre y secreto, pues nadie puede exigir una imagen de la boleta; lo que traigo consigo una jornada electoral transparente, e incluso con una imagen mayor de evitar delitos electorales, sugiriendo que para la realización de dicha medida se usen los medios de comunicación, radio y periódico, redes sociales y no solamente en estrados de la página de internet oficial que pocos visitan y conocen, y que dicha invitación se haga énfasis a que el voto es libre y secreto, aclarando que no se

trata de una prohibición de nada, sino de la mera invitación; lo que evitará la posible consumación de un delito, lo cual como órgano colegiado podemos contribuir a su prevención; cabe mencionar que los funcionarios de las mesas directivas de casilla no podrán prohibir el uso de los dispositivos a los votantes que insistan en ello, pues es solo una invitación, a no hacer, sin que su incumplimiento cause alguna afectación; este órgano debería considerar estos puntos de vista, pronunciar a favor de lo solicitado en el sentido de que sea solamente una invitación al elector, en razón de que no existen antecedentes y experiencias, no solo en el Estado, sino en otros estados en que la gente es presionada o convencida para emitir su voto a favor de ciertos partidos y demostrarlo con dichas fotografías; de lo anterior, solicito que en el caso de que sea pertinente mi solicitud también se dé atento aviso, vista a la Junta Local Ejecutiva del INE para que tome o considere las medidas que en su derecho sean pertinentes; es cuánto.

(...)

- **Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, C. Juan Alberto Manzanilla Lagos:** Gracias Consejera Presidenta, buenas noches a todos; he escuchado con atención las intervenciones de quienes me han antecedido en la palabra, en algún momento de la sesión lo señalé, que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos, creo que hay una clara muestra y no he escuchado por ningún lado en todas las intervenciones un sustento jurídico que demuestre lo contrario a como se está planteando el punto de Acuerdo; grave me parece también que se señalan conductas que si quienes les consta y tienen pruebas de lo que están asegurando y afirmando han sido omisos, porque no han recurrido a la instancia competente para demandar dichas acciones, que según ellos, les consta, reitero; aquí lo han señalado más de una ocasión; al menos una cuestión de ocurrencia gratuita se me hace una, querer sorprender a esta autoridad, porque por un lado tenemos de manifiesto los derechos humanos, pero por otro lado, queremos cohibir la participación ciudadana; señores, invitar, exhortar, hacer un llamado, a dos, estamos a días dos, a tres días de la jornada electoral; va a ser esto; cohibir la participación ciudadana; creo que este Instituto, dentro de otras obligaciones constitucionales tiene promover la participación, no inhibirla; yo recalco mucho que quienes han señalado conductas que tal vez pueden ser en otros estados del sureste o de la región del sur sureste, es cuestión de cada estado como conduce sus elecciones, cada estado tiene su propia ley y tiene que ser respetada; los Consejeros aquí, también lo han señalado, protestaron cumplir, hacer valer la ley y respetar la ley; yo reitero, no encuentro un sustento jurídico aparte de la Ley Orgánica y otros argumentos endebles para poder echar atrás este punto de Acuerdo que es altamente discutido si, reitero estamos a escasos días de la jornada electoral; lo señalé Presidenta en una reunión de trabajo, es obligación de todos los actores políticos integrantes de este Consejo General cuidar la elección; esto no abona a cuidar la elección; esto suena a querer sorprender al órgano electoral para propiciar desencanto en el electorado y propiciar lo que muchas veces se ha comentado, abatir el abstencionismo con ese tipo de acciones no abonamos a eso, al contrario, abonemos a eso, al contrario, abonamos a que la gente no salga a votar, queriéndole negar (...)"

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a **Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO¹⁹⁸**, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que en el tema que ocupa el presente punto manifestó lo siguiente: *“Al respecto me permito señalar que el artículo 38 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo establece que “...los integrantes de dicho consejo se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del consejo, así como realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones...”, por lo tanto, en la sesión precisada en el requerimiento, o alguna otra, me he abstenido de realizar señalamiento o alusiones, en lo personal o en lo particular, de algún integrante del Consejo General.”*

12. Manifestaciones agresivas, groseras y denostativas hacia la quejosa por parte del representante del PRI ante el Consejo General del IEQROO

La quejosa denuncia que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO, se ha conducido hacia ella de manera grosera, denostativa y agresiva, y que, previo a las sesiones, le ha dicho en los pasillos que *“seguro le doy las nalgas al candidato del PRD-PAN”*. Dichas agresiones, considera, se realizan en su contra por no ser partícipe de las instrucciones partidistas de los magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y Carlos Alejandro Lima Carvajal.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) **No se acreditó** que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del PRI ante el Consejo General del IEQROO, se haya conducido de manera grosera, denostativa o agresiva hacia la quejosa, ya que no se encuentran acreditadas circunstancias de tiempo, modo ni lugar por las cuales pudiera inferirse, ni

¹⁹⁸ Visible en el anexo 3, foja 1042, del expediente.

siquiera de forma indiciaria, que el referido representante se hubiera conducido de la forma como lo denuncia la quejosa, ni mucho menos que le hubiera manifestado lo aducido por ésta “previo a las sesiones” “en los pasillos”.

No obstante a lo anterior, los actos de violencia basados en el género, tales como la emisión verbal de agresiones o amenazas, tienen lugar en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.¹⁹⁹

En ese sentido, frente al dicho de la quejosa, el hecho denunciado será analizado mediante la adminiculación de todo el acervo probatorio que consta en el expediente en relación con el contexto de los hechos narrados por esta en sus distintos escritos de queja.

- b) **No se tiene por acreditado** que el representante partidista señalado se haya referido de forma verbal o de cualquier otra, mediante un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género, hacia el resto de las consejeras que integran el Consejo General del *IEQROO*, ni hacia ninguna persona del género femenino que labore en el referido Instituto.
- c) **No se tiene por acreditado** que el referido representante partidista se conduzca de forma grosera, amenazante, humillante, donstativa, irrespetuosa hacia la quejosa, durante las distintas actividades del Instituto,

¹⁹⁹ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

en las que ambos participan, como son las sesiones del Consejo General o de la Comisión de Administración.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, al **representante del PRI ante el Consejo General del IEQROO²⁰⁰**, en el que, entre otras cuestiones, se le preguntó sobre el incidente referido por la quejosa en su escrito de queja, a lo que contestó lo siguiente: *“En ningún momento realicé o insinué a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, el comentario descrito en el requerimiento, ni algún otro comentario respectivo, toda vez que no tuve ningún tipo de interlocución con la citada consejera.”*
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, a la **Consejera Claudia Carrillo Gasca²⁰¹**, a quien, entre otras cuestiones, se le preguntó si existían personas a quienes les constara el hecho narrado en su denuncia, a lo que contestó lo siguiente: *“No existen personas que le consten los hechos por tratarse de una acción personal y directa entre el C. Juan Antonio Manzanilla Lagos y la suscrita. Máxime que en los casos de denostación y agresión verbal como éstas por lo regular son de realización oculta; es decir, en ausencia de testigos que puedan presenciar y por tanto testificar a cerca de la conducta del C. JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS, quien realizaba dichas aseveraciones como una forma de justificar los motivos por los cuales la suscrita ejercía y ejerce su derecho de uso de voz y voto como consejera electoral (aparentemente por creer que tengo inclinaciones por un partido diverso al que representa) y que en apariencia no beneficiaban a su partido político el cual representa.”*
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, a la **Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina²⁰²**, a quien, entre otras cuestiones, se le preguntó si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del *PRI*, se ha referido hacia ella de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituya un trato denostativo o irrespetuoso,

²⁰⁰ Visible en el anexo 3, foja 1042, del expediente.

²⁰¹ Visible en el legajo 5, foja 3460, del expediente.

²⁰² Visible en el legajo 5, foja 3458, del expediente.

mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género, así como si le consta que el representante antes señalado se ha conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del Instituto de tal forma.

A tal cuestionamiento la Consejera Presidenta respondió lo siguiente: “... en ningún momento se ha suscitado por parte de los representantes partidistas aludidos en dicho requerimiento, alguna referencia hacia mi persona en el sentido que se señala en el mismo. ... a la suscrita no le consta que los representantes partidistas aludidos se hayan conducido de esa manera hacia alguna persona de sexo femenino dentro de este instituto.”

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, a la **Consejera Thalía Hernández Robledo**²⁰³, a quien, entre otras cuestiones, se le preguntó si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI, se ha referido hacia ella de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituya un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género, así como si le consta que el representante antes señalado se ha conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del Instituto de tal forma.

A tal cuestionamiento la Consejera aludida respondió lo siguiente: “En ningún caso los representantes partidistas se han referido a mi persona en los términos señalados o en cualquier otro con los que pudiera considerarme violentada por mi condición de mujer. ... No me consta en forma alguna que los representantes partidistas en alusión se conduzcan o hayan conducido en esos términos o en cualquier otro que pudiera constituir violencia de género hacia alguna persona del sexo femenino fuera o dentro del Instituto Electoral de Quintana Roo.”

- **Copias certificadas** de las actas de las sesiones del Consejo General del IEQROO celebradas el catorce de mayo²⁰⁴, treinta y uno de agosto²⁰⁵,

²⁰³ Visible en el legajo 5, foja 3505, del expediente.

²⁰⁴ Visible en el legajo 1, foja 194, del expediente.

²⁰⁵ Visible en el anexo 3, foja 1060, del expediente.

quince²⁰⁶, veintidós²⁰⁷ y veintinueve²⁰⁸ de septiembre (sesión ordinaria y extraordinaria), así como veintiocho de octubre²⁰⁹ de dos mil dieciséis (sesión extraordinaria).

- **Disco compacto** que contiene un audio de la reunión de trabajo de la comisión de administración del mismo Instituto, de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.²¹⁰

13. Omisión de la Consejera Presidenta de atender las propuestas de la quejosa relacionadas con violencia política por razón de género.

La quejosa refiere que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, solicitó por escrito a la Consejera Presidenta que, en el marco de la promoción del voto, se incluyera en los promocionales, spots, itinerarios y como temática de capacitación y educación cívica, la prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, de acuerdo al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, así como establecer lazos a través de convenios para realizar foros con instituciones como la Secretaría de Educación Pública, con aquellas instituciones dedicadas a la protección de la mujer en el Estado e, incluso, con la Legislatura del Estado, a efecto de coadyuvar conjuntamente en la prevención, orientación y apoyo de dicho mal.

Sobre el particular, la quejosa refiere que no ha recibido respuesta alguna por parte de la Consejera Presidenta, violando con ello su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional.

De las constancias del expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) Se tiene por acreditado** que la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca fue nombrada por el Consejo General del IEQROO Presidenta de la Comisión

²⁰⁶ Visible en el anexo 3, foja 1078, del expediente.

²⁰⁷ Visible en el anexo 3, foja 1105, del expediente.

²⁰⁸ Visible en el anexo 3, foja 1118, del expediente.

²⁰⁹ Visible en el legajo 1, foja 380, del expediente.

²¹⁰ Visible a foja 1027, del anexo 3, del expediente.

de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por acuerdo aprobado en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince.

- b) Se tiene por acreditado** que la quejosa, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, solicitó a la Consejera Presidenta del *IEQROO*, mediante oficio CCG/029/16, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, que se incluyera en los promocionales, spots, en los itinerarios y como temática, la capacitación y educación cívica sobre prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres el cual señala el Protocolo para Atender La Violencia Política Contra Las Mujeres.
- c) Se tienen por acreditado** que el dos de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio UTCS/284/16, firmado por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, se le informó a la quejosa sobre las actividades y campañas de difusión realizadas por el Instituto, relacionadas con el proceso electoral que se encontraba en curso.
- d) Se tiene por acreditado que por** oficio CE/CCG/059/16, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, entre otras cuestiones, la quejosa le recordó a la Consejera Presidenta del *IEQROO* que no había dado contestación al oficio CCG/029/16.
- e) Se tiene por acreditado** que la Consejera Presidenta dio contestación a los oficios de la quejosa, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio PRE/822/2016.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia certificada** del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL *IEQROO*, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES, ASÍ COMO LA COMISIÓN TRANSITORIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.²¹¹

²¹¹ Visible a fojas 1241 a 1249, del anexo tres del expediente.

- **Copia certificada** del oficio CCG/029/16, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la quejosa en su carácter de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres del *IEQROO*.²¹²
- **Copia certificada** del oficio UTCS/284/16, de dos de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social informó a la quejosa sobre las acciones y campañas de difusión realizadas por el Instituto, relacionadas con el proceso electoral que se encontraba en curso.²¹³
- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/059/16, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por la quejosa, dirigido a la Consejera Presidenta del *IEQROO*, por medio del cual le recuerda a la referida funcionaria que no ha dado contestación al oficio CCG/029/16.²¹⁴
- **Copia certificada** del oficio PRE/822/2016, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Presidenta del *IEQROO*, Mayra San Román Carrillo Medina, por medio del cual dio contestación a los oficios suscritos por la quejosa.²¹⁵
- Respuesta al requerimiento formulado a **la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Mediana**, por la autoridad sustanciadora, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis en el que,²¹⁶ entre otras cuestiones, informó lo siguiente:
 - *Primeramente es importante destacar que la petición de la Consejera a través de su oficio CCG/029/2016 y su posterior recordatorio con el diverso CCG/059/16, la realizó primigeniamente el día nueve de mayo del 2016, fecha cercana al día de la elección que se llevó a cabo en la entidad el día 5 de junio de este año, en ese*

²¹² Visible a fojas 301 y 302 del Legajo 1, así como fojas 2946-2947, del legajo 4, del expediente.

²¹³ Visible a foja 698 del Legajo 1, del expediente

²¹⁴ Visible a foja 727 del Legajo 1, a fojas 937-938 del legajo 2, y fojas 2969 del legajo 4, del expediente.

²¹⁵ Visible a foja 733 del Legajo 1, fojas 939 a 941, del legajo 2, fojas 2948 a 2950 del legajo 4, del expediente.

²¹⁶ Visible a fojas 585 y 302, del Legajo 1, B del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

momento nos encontrábamos inmersos en una dinámica propia del proceso electoral local recién concluido, que por naturaleza es más compleja, ya que se deben priorizar las acciones que garanticen el buen desarrollo del proceso para arribar debidamente al día de la elección, privilegiando y garantizando en todo momento el objetivo principal de esta Institución durante los procesos electorales, que es la emisión seguro del voto por parte de los ciudadanos y la correspondiente participación ciudadana.

- *No obstante dicha dinámica, el nueve de junio del presente año, mediante el oficio número UTCS/284/16, signado por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, a la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, se le informó sobre diversas actividades y campañas de difusión realizadas por este Instituto, relacionadas con el proceso electoral local 2016.*
- *En relación con lo anterior, se destaca que este Organismo Electoral local, antes, durante y después del desarrollo del proceso electoral local 2016, llevó a cabo diversas actividades relacionadas con la política de igualdad de género entre hombres y mujeres y no solo en ese rubro, sino también en materia de defensa del voto y prevención de la comisión de delitos electorales, para lo cual se suscribió un Programa de Trabajo con la Procuraduría General de la República, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de abril de 2016, el cual se adjunta en copia certificada al presente para pronta referencia (Anexo 3), acción que se realizó incluso antes del oficio de mérito de la Consejera en alusión.*
- *Al respecto debo referirle que en dicho oficio –el CCG/029/16-, la Consejera Electoral en comento, realiza sugerencias para que en los actos de difusión de este Instituto, así como en la temática, se incluya la capacitación y educación cívica sobre prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, señalando el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, refiriendo que sería positivo e innovador, la firma de convenios con otras instituciones para coadyuvar en la prevención, orientación y apoyo en el tema de la violencia política contra las mujeres. Cabe señalar que en su oficio de marras solo realiza sugerencias genéricas sin señalar una pretensión, ni tampoco adjuntó alguna propuesta de programa de acción, en su caso.*
- *Sobre el particular informo que el Protocolo referido fue debidamente circulado por la suscrita entre las y los consejeros que integramos el Consejo General de este Instituto, para lo cual adjunto al presente se remiten lo acuses correspondientes de fecha 22 de agosto del actual.*
- *Ahora bien, es de resaltarse que este Organismo Electoral Local en cumplimiento de sus atribuciones, así como también tomando en consideración lo sugerido por la Consejera en su oficio en cuestión, realizó diversas actividades relaciones con la política de igualdad de género entre hombres y mujeres, a saber:*
 - *Implementación de un “micrositio” en la página de internet de este Instituto, mismo que es consultable en la liga*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

<http://ieqroo.org.mx/index.php/presentación>, y que se puede encontrar en nuestra página bajo la siguiente identidad gráfica

Dicho “micrositio” fue presentado el 15 de julio de este año en la Sesión Ampliada de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que precisamente preside la Consejera Claudia Carrillo Gasca, por lo que a partir de esa fecha se implementó en la página oficial de este Instituto.

Asimismo, desde su implementación, el referido micrositio se ha difundido en las redes sociales institucionales, consultables en las ligas

https://twitter.com/IEQROO_oficial;

[https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-](https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?pnref=story.unseen-section)

1004675162902227/?pnref=story.unseen-section

- Se otorgaron al personal del Instituto, camisetas con los colores distintivos de las acciones en pro de la igualdad de género.
- Las gestiones administrativas para esas actividades, así como para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es decir el 8 de marzo del actual, fueron realizadas a través de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, con los oficios CIE/016/16 y CIE/018/16, ambos de fecha 10 de febrero de 2016. Cabe señalar que dicha Unidad es la Secretaría Técnica de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres que preside la Consejera Claudia Carrillo Gasca.
- Se recalca que sin duda el tema de equidad de género es un rubro y compromiso de suma relevancia para todas las instituciones públicas, y del mismo modo para este organismo electoral local, empero y sin duda, las actividades de difusión durante los procesos electorales están principalmente encaminadas a la promoción del voto y la participación ciudadana, toda vez que son elementos primordiales del proceso electoral para la consolidación de la democracia como uno de los fines de este Instituto.
- Ahora bien, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, en correlación con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Propio Instituto que dispone que las Comisiones a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y propuestas, contribuyen a que el Consejo General de este Organismo Público Local Electoral dé cumplimiento a sus atribuciones normativas, siendo que las atribuciones de la Comisión que preside la Consejera en comento son las siguientes: (Se transcribe)
- Como se advierte, corresponde en primera instancia a dicha Comisión impulsar las acciones encaminadas al fomento de las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres, sin que ello sea óbice para que esas acciones puedan ser fomentadas por esta Presidencia, inclusive; por tal motivo, el 7 de septiembre de este año, mediante oficio PRE/767/2016 (Anexo 6), la suscrita invitó a los integrantes de la Comisión que dicha Consejera preside para que, de así considerarlo, se realizaran acciones que resaltaran la conmemoración de 63 aniversario del Voto Femenino en México, resultado que en respuesta a dicho memorial, la Consejera

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Claudia Carrillo Gasca remitió a esta Presidencia el oficio CE/CCG/059/16 (Anexo 7), en el que manifestó que: (Se transcribe)

- *Derivado de ello, a través de la Secretaría Técnica de dicha Comisión, el día 18 de octubre del presente año se llevó a cabo el evento conmemorativo en cita, sobre el cual informé en mi similar PRE/815/2016, y que en obvio de repeticiones pido se tenga por reproducido como si se insertase a la letra para todos los efectos legales conducentes. La información de este evento puede ser consultada en la liga <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines-2016/244-octubre-2016/838-celebra-iegroo-63-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-mexico>*
- *Por otro lado, en la sesión del Consejo General de este Instituto, celebrada el pasado 29 de septiembre del presente año, la suscrita propuso la implementación de la Declaración de la Política de No Discriminación, a favor de la equidad laboral y un cultura democrática en el Instituto, se adjunta copia certificada del Acta de dicha Sesión donde puede corroborarse esta afirmación visible en la foja 99 del Proyecto de Acta de dicha sesión, misma que ha quedado relacionada como anexo 1 en el presente oficio.*
- *Del mismo modo me permito informar que esta Presidencia se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante el Instituto Nacional de las Mujeres en México, para lo cual el próximo 6 de diciembre del presente año contaremos con la presencia del personal de dicho Instituto Nacional quien impartirá una plática sobre el tema, a la que con toda oportunidad se convocará; para acreditar este hecho adjunto copia certificada del correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2016.*
- *Como se advierte con lo hasta aquí reseñado, fundado y motivado, más allá de haberle contestado expresamente el oficio CCG/029/16 a la Consejera Claudia Carrillo Gasca –y no obstante que a través de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto se le mantuvo informada de las acciones de difusión durante el PEL 2016-, lo que resulta relevante es el hecho que este Instituto, dentro de su ámbito de competencia, ha realizado diversas acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, y para fomentar acciones a favor de la política de igualdad de género, con lo que se evidencia que de manera implícita se consideraron y tomaron en cuenta las sugerencias de la Consejera Electoral en alusión e inclusive se realizaron acciones en coordinación con la Comisión que ella preside, por lo que también ha conocido oportunamente de esas acciones y ha sido partícipe de las mismas.*
- *No obstante lo anterior, con fecha 8 de noviembre del presente año esta Presidencia con el oficio PRE/822/2016 (Anexo 9), ha dado contestación al pluricitado oficio CCG/029/16 de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, para todos los efectos correspondientes.*
- **Copia certificada** del programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y

fomento a la participación ciudadana, celebrado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).²¹⁷

- **Copia certificada** de diversos oficios por los cuales la Consejera Presidenta del IEQROO remitió a los Consejeros Electorales del mismo Instituto, un ejemplar del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.²¹⁸
- **Copia certificada** de diversos oficios por los cuales la Consejera Presidenta del IEQROO invita a los Consejeros Electorales del mismo Instituto para la realización de actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer.²¹⁹

14. Negativa de la Presidenta de dar espacio a la quejosa para exponer sus propuestas de género.

La quejosa refiere que desde su nombramiento como Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, se le ha negado el espacio por parte de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina para exponer sus propuestas ya que, según su dicho, la Presidenta manifestó que el tema de igualdad entre mujeres y hombres no cuadra con la organización previa de las elecciones.

En su concepto, dicha circunstancia ha sido aprovechada por el representante propietario del *PRI* ante el Instituto local, Juan Alberto Manzanilla Lagos, para agredirla en sesión del Consejo General del treinta de junio de dos mil dieciséis, tal y como se advierte de la versión estenográfica de la sesión de referencia, en donde manifestó lo siguiente: *“creo que no es válido, aunque es posición de cada quine (sic) participar o no en las reuniones de trabajo y no solamente venir a esta mesa a manifestar en contra de sus CONVENIENCIAS, no sabemos que se proponen; yo le solicitaría a todos los integrantes de este Consejo General y me refiero a los consejeros como unos dijeron que tienen mucha energía y muchas ganas de*

²¹⁷ Visible a fojas 701 a 712, del legajo 1 y fojas 942 a 953, del legajo 2, del expediente.

²¹⁸ Visible a fojas 713 a 719, del legajo 1, del expediente.

²¹⁹ Visible a fojas 723 a 726, del legajo 1, del expediente

aportar, que a lo menos se preocupen sesionar sus comisiones, creo que más de uno en esta mesa no a (sic) sesionado su comisión como debe ser y de ser así, solicitaría, v se siente aludido a que me demuestre con copia de las actas de sus comisiones si estoy en un error y ahí si se demostraría su capacidad y sus ganas de aportar y trabajar para lo que fueron designados”

En igual sentido, la quejosa refiere que el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis se realizó una actividad con el Partido Nueva Alianza; que en el boletín de prensa respectivo, titularon “Promueve IEQROO el liderazgo de la mujer a través de los partidos políticos”, al cual no fue invitada siendo que ella preside la Comisión Transitoria para la igualdad de mujeres y hombres, y que la Consejera Presidenta sólo invitó a la Consejera Thalía Hernández Robledo.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca fue nombrada por el Consejo General del *IEQROO* Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por acuerdo aprobado en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince.
- b) **Se tiene por acreditado** que durante la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis, en la discusión del PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO, el representante del *PR* ante el Consejo General del *IEQROO*, Juan Alberto Manzanilla Lagos, refirió en su intervención en la discusión del punto de acuerdo en cuestión, lo aludido por la quejosa, sin embargo, dichas manifestaciones en forma alguna pueden considerarse como violencia política por razón de género en su contra, toda vez que, por una parte, no se realizó alusión alguna hacia su persona y, por otra, se trata de una crítica generalizada a los consejeros por supuestamente, no *sesionar sus comisiones*, sin que se especifique a qué Consejera o Consejero se refiere o a qué comisiones.

- c) **Se tiene por acreditado** que la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres sesionó en cuatro ocasiones desde su creación el catorce de julio de dos mil quince hasta el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en tres ocasiones bajo la presidencia de la quejosa.
- d) **Se tiene por acreditado** que la Comisión de referencia sesionó el catorce de julio de dos mil quince, el quince de julio, el ocho de noviembre y el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.
- e) **Se tienen por acreditado** que la Consejera Presidenta remitió oficio a la quejosa en el que le refirió que el diecisiete de octubre se conmemora el aniversario del Voto de la Mujer en México, y que como se trataba de un tema relacionado con la Comisión que preside la quejosa, le realizó una invitación para que a través de dicha Comisión, se realizaran actividades para resaltar la referida conmemoración.
- f) **Se tiene por acreditado** que la quejosa informó a la Consejera Presidenta que dentro de los proyectos previstos en la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres se encontraba enaltecer el diecisiete de octubre, fecha en que se conmemora el Voto de la Mujer en México.
- g) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera solicitado formalmente el apoyo de la Presidencia del Instituto para la realización de una actividad o evento en concreto relacionado con la igualdad de género.
- h) **Se tiene por acreditado** que la quejosa solicitó a la Consejera Presidenta información de las personas de INMujeres y del *INE* a efecto de que ella coordinara la implementación de un observatorio de género.
- i) **Se tiene por acreditado** que la Consejera Presidente dio respuesta a la solicitud de la quejosa y le refirió que la iniciativa del Observatorio de Género habría surgido de autoridades Federales y Nacionales por lo que en atención a su cargo, sería ella quien coordinaría los esfuerzos para realizar dicha actividad.

- j) **Se tiene por acreditado** que los Presidentes de las Comisiones no requieren autorización de la Consejera Presidenta del Instituto para realizar actividades propias de cada Comisión, de conformidad con lo previsto en el reglamento Interior del *IEQROO*.
- k) **No se tiene por acreditado** que la Consejera Presidenta no haya invitado a la quejosa a la actividad con el *PNA* del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, intitulada “Promueve *IEQROO* el liderazgo de la mujer a través de los partidos políticos”, toda vez que por tratarse de un evento organizado por un partido político, no le es atribuible a la Presidenta la determinación sobre qué consejeros fueron invitados a dicho evento.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia Certificada** del acta de sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO* de treinta de junio de dos mil dieciséis,²²⁰ que en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

(...)

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el OPLE, Juan Alberto Manzanilla Lagos: Muchas gracias Consejera Presidenta, buenas noches a todos; he escuchado con atención la intervención de algunos consejeros, de los cuales me hubiera gustado escuchar en la reunión de trabajo, creo que no es válido, aunque es posición de cada quien participar o no en la reuniones de trabajo y no solamente venir a esta mesa a manifestar en contra de sus conveniencias, no sabemos que se proponen; yo le solicitaría a todos los integrantes de este Consejo General y me refiero a los consejeros como unos dijeron que tienen mucha energía y muchas ganas de aportar, que a lo menos se preocupen sesionar sus comisiones, creo que más de uno en esta mesa no ha sesionado su comisión como debe ser y de ser así, solicitaría, se siente aludido a que me demuestre con copia de las actas de sus comisiones si estoy en un error y ahí sí se demostraría su capacidad y sus ganas de aportar y trabajar para lo que fueron designados, primero; segundo, me parece que un oficio como ya se ha señalado, que sugiere unas recomendaciones, no vulneran el artículo cuarenta y nueve de la Constitución del estado, mucho menos vulnera la independencia de este Instituto y su autonomía, creo que aquí se señaló y se discutió arduamente en la reunión previa, son cuestiones evidentemente técnicas las que se quiere politizar y creo que no es por medio del camino por el que nos debe llegar para lograr el consenso a la mayoría, porque si bien es cierto,

²²⁰ Visible a fojas 218 a 257, del legajo 1 y fojas 1917 a 1954, del anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

que todas las comisiones que analizan trabajos y que llegan a acuerdos, aquí es el órgano de deliberación y discusión donde se somete a consideración los acuerdos que muchas veces vienen de comisiones, de trabajos de comisiones y que al final aquí se toman las últimas decisiones, hablar de que hay comités de varios tipos a nivel central, si ya se ha demostrado también que no hay porque tener miedo a ello, todos somos sujetos obligados ya, no solamente este Instituto, también nosotros los partidos políticos, en consecuencia y lo dije arriba y lo vuelvo a repetir, no le tengamos miedo a la transparencia y la apertura, obviamente es un trabajo técnico, reitero, y en consecuencia se requiere personas capacitadas con ese perfil que se ha propuesto y en el cual, el partido que represento coincide, para que formen parte de ese Comité y sea quien atiende las cuestiones de transparencia de este Instituto; un representante también señaló, se ha sugerido i le han sugerido alguna dirigencia que los comités de los OPLES sean integrado por Consejeros a sugerencia o ha decisión ni capricho, yo reitero lo que elegimos allá arriba, yo creo que hasta donde me quede o entendí era el sentido de la mayoría, que si hay disenso que si hay discusiones en esta mesa no siempre se va a llevar un conceso, hay propuestas que creo propuesto que creo que se deben de plantear y si al final predomina la mayoría, bueno ese es el elegir de lo que predomina en esta mesa, sería cuanto. (...)

- **Copia certificada** del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IEQROO, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES, ASÍ COMO LA COMISIÓN TRANSITORIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.²²¹
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Presidenta del IEQROO**, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en el que, respecto del hecho que se analiza, se le cuestionó respecto de las facultades de los Presidentes de Comisión y si éstos requieren de su autorización para realizar sus actividades, al respecto la referida funcionaria refirió lo siguiente²²²:
 - *Se niega tal afirmación, toda vez que conforme al Reglamento Interior del Instituto Electoral de Quintana Roo, las comisiones permanentes y temporales tienen establecidas sus obligaciones y atribuciones, siendo que el artículo 14 de dicho Reglamento establece que el Presidente de cada una de las comisiones permanentes, tiene como atribuciones las siguientes: (Se transcribe).*
 - *Asimismo, el artículo 17 fracción VIII del referido Reglamento establece que las comisiones permanentes tendrán como atribución la de "Rendir un informe anual al*

²²¹ Visible a fojas 1241 a 1249, del anexo tres del expediente.

²²² Visible en el Legajo 1, Foja 585 y siguientes del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Consejo General o en su caso, cuando así lo solicite el propio Consejo, de las actividades llevadas a cabo.”

- *Como se advierte de dichas disposiciones reglamentarias, en momento alguno se establece que los presidentes de las comisiones del Consejo General de este Instituto deban pedir autorización a la Presidencia del Consejo para la realización de sus actividades, siendo que únicamente en lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, el artículo 18 del Reglamento Interno en alusión, en su fracción VIII establece que dicha Comisión tiene la atribución de (Se transcribe).*
- *De lo anterior se colige que es obligación y atribución de las comisiones de mérito, rendir informes de sus labores y actividades pero ante el Consejo General, sin que se establezca de manera alguna esa autorización por parte de la Presidencia del Consejo General como se aduce en el inciso que se contesta.*
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora al **Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral** del IEQROO, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le cuestionó respecto de sus funciones como Secretaria Técnica de la Comisión Transitoria para la Igualdad de Hombres y Mujeres.²²³
- **Copia certificada** del oficio PRE/767/2016, de siete de septiembre, suscrito por la Consejera Presidenta Mayra San Román dirigido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, por medio del cual le realizó una invitación para que a través de la Comisión que preside se realizaran actividades para resaltar la conmemoración del voto de la mujer en México²²⁴.
- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/059/16, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por la quejosa, dirigido a la Consejera Presidenta del IEQROO, por medio del cual, entre otras cuestiones dio respuesta al oficio PRE/767/2016 de siete de septiembre de dos mil dieciséis, y le comunicó a la Consejera Presidenta que en coordinación con la Secretaria Técnica de la Comisión Transitoria de Igualdad entre hombres y Mujeres, se encontraban trabajando temas relativos a su encomienda con el fin de someterlos a consideración de la referida Comisión, así mismo le informó que dentro de

²²³ Visible en el Legajo 1, Foja 761 y siguientes del expediente.

²²⁴ Visible a foja 725, del legajo 1, del expediente.

los proyectos previstos se encontraba enaltecer el diecisiete de octubre, fecha en que se conmemora el voto de la mujer en México.²²⁵

- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/088/16 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por medio del cual la quejosa solicitó a la Presidenta la información de los contactos del INE y de INMujeres para ella llevar a cabo la coordinación del observatorio de género.²²⁶
- **Copia certificada** del oficio PRE/834/2016, firmado por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través le contesta oficio sobre la petición del observatorio de género.²²⁷
- **Copia certificada** del oficio PRE/037/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, dirigido al Contralor Interno, Secretario General, Directores y Jefes de Unidad, del IEQROO, a través del cual los invita a la “*Primera Reunión de Trabajo para la Conformación del Observatorio de Participación Política de la Mujeres en Quintana Roo*”, la cual tendría verificativo el seis de diciembre de dos mil dieciséis.²²⁸
- **Copia simple** de la impresión de pantalla en la que consta el boletín del IEQROO, denominado “*Primera Reunión de Trabajo para la Conformación del Observatorio de Participación Política de la Mujeres en Quintana Roo*”, del seis de diciembre de dos mil dieciséis.²²⁹
- **Copia certificada** de oficios firmados por Claudia Carrillo Gasca, Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales convoca a sesión de dicha Comisión.²³⁰

²²⁵ Visible a foja 727 del Legajo 1, del expediente.

²²⁶ Visible en el legajo 2, Foja 957, del expediente.

²²⁷ Visible en Legajo 2, Foja 957, del expediente.

²²⁸ Visible a foja 2971, del legajo 4, del expediente.

²²⁹ Visible a foja 4994, del legajo 7, del expediente.

²³⁰ Visible en Legajo 4, Fojas 2873-2895, del expediente.

- **Copia certificada** del acta de la sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de ocho de noviembre de dos mil dieciséis.²³¹
- **Copia Certificada** acta de la Sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.²³²
- **Copia certificada** del proyecto de acta de la sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de catorce de julio de dos mil dieciséis.²³³
- **Copia certificada** acta de la Sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de quince de julio de dos mil dieciséis.²³⁴
- **Copia certificada** del informe de los resultados de la participación de las mujeres y los hombres en el proceso electoral ordinario 2016 en Quintana Roo.²³⁵
- **Copia certificada** del informe de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral y Transparencia en relación al tema de igualdad entre hombres y mujeres del periodo de octubre de 2015 a octubre de 2016.²³⁶
- **Copia certificada** ²³⁷de diversos oficios suscritos por Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del *IEQROO*, dirigidos a diversos funcionarios del referido Instituto, por medio de los cuales les solicita su apoyo para la realización de actividades vinculadas con la Comisión Transitoria entre Mujeres y Hombres y del día Internacional de la Mujer.

²³¹ Visible en el legajo 2, foja 877 a 901, del expediente.

²³² Visible en Legajo 4, Foja 2896 del expediente.

²³³ Visible en el legajo 2, foja 766 a 772 del expediente.

²³⁴ Visible el legajo 2, foja 797 a 811 y legajo 4, foja 2930 del expediente.

²³⁵ Visible en el legajo 2, fojas 812 a 852, del expediente.

²³⁶ Visible en el legajo 2, fojas 853 a 876, del expediente.

²³⁷ Visible en el legajo 2, fojas 904 a 926, y 720 a 722, del legajo 1, del expediente.

- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/095/16, de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad de Mujeres y Hombres, dirigido a la Consejera Presidenta del *IEQROO*, Mayra San Román Carrillo Medina, por medio del cual solicita su apoyo para la realización de una actividad relacionada con la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.²³⁸
- **Copia certificada** del Boletín oficial de noviembre de dos mil dieciséis y diversas notas periodísticas en las cuales constan actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.²³⁹

15. Exclusión en la integración del Comité de Transparencia, Información y Estudios Electorales del *IEQROO*, así como de diversas actividades relacionadas con la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales

La quejosa señala que en la sesión del Consejo General de treinta de junio de dos mil dieciséis, solicitó ser incluida en el Comité de Transparencia de esa autoridad electoral local y que la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina y el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche trataron de disuadirla, negándose rotundamente a incluir Consejeros en dicho Comité, sin justificar dicha negativa.

Asimismo, en su escrito de diecinueve de enero,²⁴⁰ la quejosa refiere que a pesar de ser miembro de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, le ha sido ocultada información y excluida de actividades que se realizan en ella. Señala que durante la sesión de la referida comisión del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se presentó el informe de la Comisión en cuestión del cual al darle lectura comprobó la conducta reiterada de Juan Manuel Pérez Alpuche de no considerarla en actividades ni hacerle del conocimiento de las

²³⁸ Visible en el legajo 5, foja 3047, del expediente.

²³⁹ Visible a fojas 3049 a 3053, del legajo 5 del expediente.

²⁴⁰ Visible a fojas 1761 a 1764, del legajo 3, del expediente.

mismas como miembro de la Comisión que preside el citado funcionario. Al respecto, la quejosa refiere que fue excluida de los siguientes cursos:

Curso taller de capacitación para la carga de la información en el sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) llevada a cabo el primero de septiembre de dos mil dieciséis en las instalaciones de la facultad de medicina de la Universidad de Quintana Roo, dirigido específicamente a los Titulares de la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados, a fin de capacitarlos para la carga de información en la recién implementada Plataforma Nacional de Transparencia.

Curso taller “capacitación para la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia” impartido por la titular de la Unidad con la finalidad de capacitar a los enlaces de transparencia al interior del instituto llevado a cabo el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Estuvo dirigido a los enlaces de transparencia de las distintas áreas del IEQROO a fin de capacitarlos en la carga de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que durante la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis, se sometió a discusión y, en su caso, aprobación, el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO.
- b) **Se tiene por acreditado** que la discusión en torno a dicho punto de acuerdo se centró en la integración del referido Comité de Transparencia, esto es, si debía integrarse por los consejeros electorales y representantes de partidos integrantes de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, a saber: la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, así como los Consejeros Luis Carlos Santander Botello y Juan Manuel Pérez Alpuche, o bien, como se proponía en el proyecto de acuerdo, por los Directores del Instituto ahí precisados.

- c) **Se tiene por acreditado** que el referido punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de cuatro votos, con los votos en contra de la Consejera Claudia Carrillo y los Consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.
- d) **Se tiene por acreditado** que se sometió a votación la propuesta relativa a que el Comité de Transparencia fuera integrado por los Consejeros que integran la Comisión del mismo nombre, la cual fue rechazada por cuatro votos en contra de la Consejera Presidenta Mayra San Román, la Consejera Thalía Hernández Robledo y los Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech.
- e) **Se tiene por acreditado** que la Sala Superior del *TEPJF* confirmó la sentencia del *TEQROO* que a su vez confirmó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO.
- f) **Se tiene por acreditado** que en la sesión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, entre otros puntos, se discutió la lectura y aprobación del Informe de la propia Comisión.
- g) **Se tiene por acreditado** que la Consejera Carrillo Gasca en una de sus intervenciones cuestionó sobre quien había promovido los cursos-taller descritos en el informe.
- h) **Se tiene por acreditado** que la Secretaria Técnica, en respuesta al cuestionamiento realizado por la quejosa, le informó que el curso de la carga de información del sistema *SIPOT* fue realizado por el Instituto de Acceso del Estado (INAIP), que como órgano garante de transparencia tuvo a bien organizar el curso para todos los titulares de las Unidades Técnicas de Transparencia de los sujetos obligados del Estado, por lo que el oficio de invitación le fue dirigido a ella. Asimismo, refirió que por

cuanto hacía al taller para capacitación de carga de información en la Plataforma de Transparencia, había sido organizado por la Unidad de Transparencia con el fin de replicar la información obtenida en el curso organizado por el INAIP al interior del instituto.

- i) **Se tiene por acreditado** que el Consejero Presidente de la Comisión, Juan Manuel Pérez Alpuche, expresó que, como lo había referido la quejosa, se tenía que precisar que dichos cursos no habían sido promovidos por la Comisión de Transparencia.
- j) **Se tiene por acreditado** que, en la referida sesión, la Consejera Carrillo Gasca refirió que del primer curso si recordaba que fue por la Comisión (*ABC de la Transparencia*), el segundo que sólo participó en el SIPOT y respecto del tercero expresó que, si fue a través de la Comisión, se le había ocultado información porque no fue partícipe ni se le incluyó siendo parte del Consejo de la Comisión de Transparencia.
- k) **Se tiene por acreditado** que en la sesión en cuestión el Presidente expresó que los talleres cuestionados por la quejosa no fueron organizados por la Comisión, que no se habían organizado otros cursos y que para que no pareciera que se había excluido a algún consejero precisó que él tampoco acudió por tratarse de temas meramente técnicos que tenían que ver con información de transparencia.
- l) **Se tiene por acreditado** que, ante la inquietud expresada por la quejosa respecto de que es excluida y se le oculta información, el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaria Técnica que, con independencia de la naturaleza de los cursos y aun cuando estos no sean dirigidos a los miembros de la Comisión, ni a ningún otro de los Consejeros, para efecto de conocimiento, les haga llegar un oficio a todos los miembros de la Comisión y si alguno tuviera la intención de tomar el curso o estar presente, tendrían la información para realizarlo.
- m) **Se tiene por acreditado** que el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, convocó en diversas ocasiones a la quejosa a reuniones formales de

trabajo de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales.

- n) **Se tiene por acreditado** que la quejosa acudió a las sesiones de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, celebradas el ocho de noviembre y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia Certificada** del acta de sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO de treinta de junio de dos mil dieciséis,²⁴¹ que en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

(...)

Consejera Presidenta: Secretario General, sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Secretario General: Con mucho gusto Consejera Presidenta; le informo que el siguiente punto del orden del día, es la lectura, y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se integra el Comité de Transparencia del propio Instituto.

Consejera Presidenta: Consejeras y Consejeros Electorales, así como representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo antes mencionado; ¿alguien desea hacer uso de la voz?; tiene el uso de la voz el representante del Partido MORENA.

Representante propietario de MORENA, Marciano Nicolás Peñaloza Agama: Gracias Consejera Presidenta; primero para solicitarle que si puede dar lectura al oficio que le envió el Consejero, si no mal recuerdo se le llama Consejero Presidente del Instituto de Acceso, el de Información, al que le dio lectura ahorita, de datos personales del Estado de Quintana Roo, y creo que le dio lectura en la reunión previa y me gustaría que se leyera; en cuanto a la conformación del Comité, el Partido MORENA se manifiesta en contra, de que no sean los consejeros los que conformen este Comité de Transparencia, ya que se está delegando esta función en tres direcciones, mismas direcciones que están subordinadas obviamente a esta presidencia que usted encabeza...

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero Luis Carlos Santander.

²⁴¹ Visible a fojas 218 a 257, del legajo 1 y fojas 1917 a 1954, del anexo 4, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello: Muchas gracias, buenas noches; quiero empezar como a veces lo he hecho aquí, con una cita literaria, (...), mi propuesta es de que no sean los directores ejecutivos de esta institución quienes conformen este Comité ejecutivo, sino que fueran los Consejeros y creo que por afinidad, pues la que correspondería, puede ser es precisamente la Comisión que preside el Consejero Pérez Alpuche, es cuanto.

Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Secretario General.

Secretario General: Muchas gracias Consejera Presidenta; para darle lectura a lo solicitado por la representación de MORENA; (...)

(...)

Consejera Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Sergio Avilés

Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi: Buenas noches nuevamente; seguro en mi intervención hablaré poco ya que en la reunión previa, analizamos el presente asunto, ya dejé mi postura en la mesa, sin embargo es importante recordar que para mí en ningún momento se está dando una motivación o fundamento del porque deben ser integrados este Comité, por personal directivo, si bien es cierto, yo veo aquí, alguna de las propuestas de los consejeros usando la misma lógica que en el Acuerdo que se aprobó anteriormente en donde designan al Titular de la Unidad Técnica de Información, que funja las actividades con la Unidad de Transparencia, en la misma tesitura iría que la propia Comisión de Transparencia funja como Comité de Transparencia, conforme a lo estipulado en el artículo sesenta y uno y sesenta y dos de la ley de Transparencia, (...)

(...)

Representante Propietario del Partido Encuentro Social, Octavio Augusto González Ramos: La postura de Encuentro Social, estamos de acuerdo con la conformación que viene en el Acuerdo, de que sean personal administrativo y no los consejeros los que se hagan cargo de esta Unidad, simplemente por todas las cuestiones técnicas que el comité necesita, creo que está integrado por Jurídico, en este caso como le externé en la reunión previa, por la persona de Informática ya que el portal tiene que estar manejado por una persona experta que la esté alimentando, que le esté dando mantenimiento adecuado, y porque considero que los Consejeros tienen más trabajo que hacer que dedicarse a evaluar qué información es la que se va a dar y cuál es la que no se va a dar, la Ley ya señala cuál es cada una de ellas, y cargar trabajo simplemente por imponer o por regular una actividad simplemente porque no está de acuerdo con los intereses de muchos; ahora bien, hace ratos (sic) hizo un comentario sobre el oficio que llegó el día de hoy, incluso hasta mal intencionado, lo cual yo considero que no se debe considerar así, y darse cuenta que estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos hacen y nosotros estaos de acuerdo, es cuanto.

(...)

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca: Buenas noches estimados miembros del Consejo General, público presente; como bien refiere en el presente proyecto que se pone a consideración de este Consejo General, el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, es sujeto obligado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, siendo entonces obligación legal, el de transparentar y garantizar el acceso a la información pública que genere, recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en su posición, no obstante como miembro de la Comisión de Transparencia, estoy totalmente inconforme con la forma y el modo de la de la integración de dicho Comité, bajo los siguientes argumentos: no se justifica, en el presente proyecto, bajo qué argumentos legales, les otorga voz y voto a la titular de la Unidad del Centro de Información Electoral, al Titular de la Unidad de Informática o al Director que se haya puesto en la reunión previa, ni el motivo por el cual ellos deben de integrarla, no obstante en las dos reuniones previas, casualmente antes de la fecha de expedición de este documento expedido por el IDAIPQROO, se le solicitó reiteradamente al Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, nos motive y nos justifique la razón por las cuáles los miembros de la Comisión de Transparencia, es decir, el Doctor Luis Carlos Santander Botello y la suscrita no podemos ser parte de este Comité, y ante falta de motivos, coartan nuestras atribuciones referidas a nuestro cargo señaladas en la Ley, obstaculizando y desestimando mi participación en este Comité, de igual forma le recalco al representante de Encuentro Social que yo si quiero ser parte de este Comité y que soy capaz de hacerlo, cometiendo entonces, por parte del Consejero en mi persona, violencia política de género, en el cual realizaré el trámite correspondiente; asimismo, atendiendo lo referido en el artículo sesenta y sesenta y uno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propongo a estos miembros del Consejo General que los miembros de este Comité, esté conformado por los consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche, Luis Carlos Santander Botello y la suscrita con voz y voto; lo cual tenemos el mismo nivel, por tener el cargo de consejeros electorales, y como invitados sean la licenciada Claudia , Adrián Sauri, o la Directora Jurídica como se ha llegado a un acuerdo; también me llama mucho la atención la fecha del oficio de IDAIPQROO, casualmente se expidió posterior a dos reuniones previas, pero esto no es una instrucción ni es un requisito, lo podemos tomar o no lo podemos tomar, no comprendo la razón de hacer un Comité de la forma propuesta , por lo cual se solicita, que sean tomadas en cuenta, las propuesta señaladas por los partidos políticos que han propuesto que sean los miembros de este Comité, los mismos que están en la Comisión de Transparencia, incluyéndonos a nosotros los Consejeros; es cuanto.

(...)

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el OPLE, Juan Alberto Manzanilla Lagos: Muchas gracias Consejera Presidenta, buenas noches a todos; he escuchado con atención la intervención de algunos consejeros, de los cuales me hubiera gustado escuchar en la reunión de trabajo, creo que no es válido, aunque es posición de cada quien participar o no en la reuniones de trabajo y no solamente venir a esta mesa a manifestar en contra de sus conveniencias, no sabemos que se proponen; yo le solicitaría a todos los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

integrantes de este Consejo General y me refiero a los consejeros como unos
dijeron que tienen mucha energía y muchas ganas de aportar, que a lo menos
se preocupen sesionar sus comisiones, creo que más de uno en esta mesa no ha sesionado su comisión como debe ser y de ser así, solicitaría, se siente aludido a que me demuestre con copia de las actas de sus comisiones si estoy en un error y ahí sí se demostraría su capacidad y sus ganas de aportar y trabajar para lo que fueron designados, primero; segundo, me parece que un oficio como ya se ha señalado, que sugiere unas recomendaciones, no vulneran el artículo cuarenta y nueve de la Constitución del estado, mucho menos vulnera la independencia de este Instituto y su autonomía, creo que aquí se señaló y se discutió arduamente en la reunión previa, son cuestiones evidentemente técnicas las que se quiere politizar y creo que no es por medio del camino por el que nos debe llegar para lograr el consenso a la mayoría, porque si bien es cierto, que todas las comisiones que analizan trabajos y que llegan a acuerdos, aquí es el órgano de deliberación y discusión donde se somete a consideración los acuerdos que muchas veces vienen de comisiones, de trabajos de comisiones y que al final aquí se toman las últimas decisiones, hablar de que hay comités de varios tipos a nivel central, si ya se ha demostrado también que no hay porque tener miedo a ello, todos somos sujetos obligados ya, no solamente este Instituto, también nosotros los partidos políticos, en consecuencia y lo dije arriba y lo vuelvo a repetir, no le tengamos miedo a la transparencia y la apertura, obviamente es un trabajo técnico, reitero, y en consecuencia se requiere personas capacitadas con ese perfil que se ha propuesto y en el cual, el partido que represento coincide, para que formen parte de ese Comité y sea quien atiende las cuestiones de transparencia de este Instituto; un representante también señaló, se ha sugerido y le han sugerido alguna dirigencia que los comités de los OPLES sean integrado por Consejeros a sugerencia o ha decisión ni capricho, yo reitero lo que elegimos allá arriba, yo creo que hasta donde me quede o entendí era el sentido de la mayoría, que si hay disenso que si hay discusiones en esta mesa no siempre se va a llevar un conceso, hay propuestas que creo propuesto que creo que se deben de plantear y si al final predomina la mayoría, bueno ese es el elegir de lo que predomina en esta mesa, sería cuanto.

(...)

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor representante; con él agotamos todas las rondas de intervención; le solicitaría al Secretario General, someta a consideración la propuesta del Comité por los integrantes de la Comisión de Transparencia integrados por el Consejero Juan Manuel, la Consejera Claudia Carrillo y el Consejero Santander.

Secretario General: Con su autorización Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, la propuesta de integración del Comité de Transparencia que difiere de la propuesta que está incluida en el proyecto de Acuerdo por la integración por parte de quienes conforman la Comisión de Transparencia, Información y estudios electorales del Consejo General, propuesta que se propone por parte del Consejero Luis Carlos Santander Botello, el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, la Consejera Claudia Carrillo, el representante del Partido de MORENA, el representante del Partido de Revolución Democrática y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

entiendo que también la Representación del Partido de Acción Nacional; para lo cual le solicito atentamente a quienes estén a favor e sirvan a levantar la mano; si son tan amables; Consejera Presidenta, únicamente tiene tres votos la propuesta, la Consejera Claudia Carrillo, el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, y el Consejero Luis Carlos Santander Botello; por lo tanto no ha sido aprobada.

Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario General; le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto de Acuerdo antes referido, con las modificaciones que fueron planteadas.

Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi: Sí pero no es el proyecto original Consejera Presidenta, es una propuesta que realiza la Consejera Thalía, que es igual, sujeta a votación.

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo: Si efectivamente, no se circula de esa manera, pero en la reunión previa se hace una propuesta, no nada más mía, sino conjunta armada, que es la que leyó hace un momento el Secretario General, entonces, esa es la propuesta del proyecto de Acuerdo.

Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi: Si pero no se votó.

Representante propietario del Partido de la Revolución Democracia, Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo: Se sometió a votación la propuesta que hicieron los consejeros y los

partidos políticos, tuvo tres votos a favor, no sabemos si hay votos en contra o hay abstención, por lo menos está aprobado por tres votos, entonces tendría que completarse la votación con votos en contra o votos en abstención para saber si prevalece o no prevalece la propuesta.

Secretario General: Yo solicité, representante del Partido de la Revolución democrática, que las Consejeras y los Consejeros se manifestaran a favor de la propuesta, se entiende que quienes no levantaron la mano en votación económica están en contra de la propuesta.

Consejera Presidenta: En el caso del proyecto que se somete a aprobación ya viene conformadas como se planteó en la reunión de trabajo que es lo se votaría en este momento.

Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi: En la reunión de trabajo hubo dos propuestas.

Consejera Presidenta: Secretario General, someta a consideración la propuesta del Comité.

Secretario General: Con su autorización Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, la propuesta de integración del Comité de Transparencia en los términos presentados durante mi participación en este punto del orden del día, es decir que presida, este Comité la Directora Jurídica y está integrado por el Director de Administración, el Titular de la _unidad técnica de Informática y Estadística, y la Secretaría de Técnica del dicho Comité, recaiga en la Titular del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Centro de Información Electoral; para lo cual en votación económica le solicito atentamente a las Consejeras y a los Consejeros que estén a favor de esta propuesta, se sirvan a levantar la mano, si son tan amables; Consejera Presidenta, hago constar que hay cuatro votos a favor; la Consejera Thalía Hernández Robledo, el Consejero Jorge Armando Poot Pech, El Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche y Usted Consejera Presidenta.

Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario General; le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto de Acuerdo antes referido, con las propuestas que han sido señaladas.

Secretario General: Pos supuesto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, en votación nominal, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se designa a la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral como Unidad de Transparencia del propio organismo, conforme a la propuesta de integración aprobada mayoritariamente por este Consejo General y las diversas de modificación ya planteadas en esta sesión; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejera Electoral: Aprobado.

Secretario General: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electoral: Consejero Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electoral: a favor del proyecto.

Secretario General: Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca.

Consejera Electoral: En contra.

Secretario General: Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi.

Consejero Electoral: En contra en razón de que se vulnera el derecho del desempeño de las funciones de Consejeros Electorales, asimismo solicito que se ponga la razón de mi voto en el pie del Acuerdo.

Secretario General: Consejero Electoral, Luis Carlos Santander Botello.

Consejero Electoral: En contra.

Secretario General: Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidenta: Aprobado.

Secretario General: Consejera Presidenta le informo que el Acuerdo antes sometido a votación ha sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, el Consejero Sergio Avilés Demeneghi y el Consejero Luis Carlos Santander Botello.

(...)

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Sentencia emitida por la Sala Superior del *TEPJF* el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis en el expediente SUP-JDC-309/2016, por medio de la cual confirmó la sentencia emitida por el *TEQROO* que a su vez confirmó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO.²⁴²
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Presidenta del IEQROO**²⁴³, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, respecto del hecho que se analiza, se le cuestionó respecto de que supuestamente intentó convencer a la quejosa de desistir de ser miembro del Comité de Transparencia, al respecto la referida funcionaria refirió lo siguiente:
 - *Se niega tal aseveración, y para tal efecto me permito adjuntar al presente, copia debidamente certificada del Acta de la Sesión del Consejo General de este Instituto, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, en la que se puede corroborar que la suscrita en ningún momento emití manifestación alguna en el sentido que se refiere en el inciso que se contesta.*
 - *Asimismo y en relación con este punto, es importante referir que el Comité de Transparencia fue debidamente integrado con el personal técnico correspondiente, y conforme a la normatividad aplicable, por lo cual adjunto al presente remito el Acuerdo IEQROO/CG-A-231-16 por medio del cual se aprobó la integración del referido Comité, siendo que dicho acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo y posteriormente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resultado que esta última confirmó dicho Acuerdo mediante la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-309/2016, con lo que quedó acreditada la legalidad del mismo.*
- **Acta de la sesión** de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del *IEQROO* celebrada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis²⁴⁴, misma que, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

“(…)

Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca: Buenos días estimados compañeros y Presidente de esta Comisión, leyendo en la página once acerca de los cursos, principalmente de los dos últimos que es el curso de capacitación

²⁴² Dicha sentencia se puede consultar en la siguiente liga de internet:

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0309-2016.pdf, y se invoca como hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 461 de la LGIPE.

²⁴³ Visible en el anexo 4, foja 1777, del expediente.

²⁴⁴ Visible a foja 1765 a 1778, del legajo 3, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

para la carga de información en el sistema de portales y obligaciones de transparencia y el curso taller para la carga de información en la plataforma nacional de transparencia no me queda claro, quien fue quien lo promovió, si fue la Unidad Técnica o la Comisión de Transparencia, no me queda muy claro, entonces me gustaría me respondan con respeto a esto,

Secretaria Técnica: Muy buenos días, en relación al curso de la carga de información el sistema SIPOT fue un curso hecho por el instituto de Acceso del estado de Quintana Roo, el IDAIP, ellos como órgano garante de Transparencia en el estado tuvieron a bien, realizar este curso para todos los titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados en el estado, por lo cual el oficio de invitación fue dirigido a su servidora, y pues asistí así mismo en representación de este Instituto, por cuanto al taller para capacitación de carga de información en la plataforma de transparencia y derivado de este curso que organizó el IDAIP pero que fue impartido por el INAIP, la Unidad Transparencia, organizó este curso para replicar la información que nos dieron en el curso del IDAIP del sistema de portales de obligaciones de transparencia, para replicar la información al interior de este Instituto la Información que fue otorgada a su servidora, y a los integrantes de la junta el Instituto es cuánto.

Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca: Yo solo quiero hacerle una pregunta a la Secretaria Técnica respecto a este mismo tema, solamente recuerdo que la Comisión, promovió el primer curso de “ABC” de la Transparencia, podemos cambiar que esta unidad solo promovió este curso y los otros dos participo, porque entonces no lo promovió la Comisión, solo participó usted como representante de la Unidad Técnica de la Secretaria de esta Comisión

Consejero Presidente: Por lo que se refiere a lo mencionado por la Consejera Claudia Carrillo sería importante mencionar que efectivamente estos dos últimos cursos no fueron promovidos por esta Comisión de Transparencia, si no que el primero de ellos fue precisamente por el IDAIPQROO, y el segundo fue específicamente realizado por la Unidad a sus cargo y replicado a los integrantes de la junta general para efecto de que no se confunda un trabajo hecho a iniciativa por la Comisión como bien especifica la Consejera Claudia, solo sería puntualizar esta parte y yo quisiera saber si con ello estaría satisfecha la Consejera Claudia Carrillo Gasca?

Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca: Entonces la primera si recuerdo fue por la Comisión, el segundo solamente participó en el SIPOT y el tercero entendí que nada más participó, porque si fue a través de la Comisión, quiero dejar por aclarado que también se me ocultó esta información, que no fui participe de que se me haya incluido siendo yo parte del Consejo de la Comisión Transparencia.

Consejero Presidente: En este sentido respeto a lo comentado por la Consejera Claudia, es importante mencionar que esta Comisión, no ha organizado otros cursos salvo el primero que está relacionado en el documento, entonces para efecto de no causar una confusión y que pareciera que la Consejera Claudia o

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

incluso el propio Consejero Luis Carlos pudieran ser excluidos que se puntualizara y en ese sentido es importante mencionar a la Consejera Claudia acerca de una inquietud que ella tiene, que el suscrito tampoco acudió, ni siquiera en mi calidad de Presidente de esta Comisión a los dos últimos cursos, en realidad se trataron temas meramente técnicos que tenían que ver con información de transparencia yo no acudí tampoco pero para que quedara el documento debidamente elaborado, y sin que quede duda alguna, solamente que especifique lo que comenta la Consejera Claudia y con eso abonaría bastante a la certeza del informe, le pido a la Secretaria Técnica que antes que pase a aprobación del Consejo General, ya tenga estas modificaciones, tienen el uso de la voz el Consejero Luis Carlos Santander Botello.

Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca: Finalmente Consejero Presidente, le quiero hacer una solicitud, un exhorto, de que ya no puedo seguir siendo excluida, y que no se me siga ocultando información, en los últimos cursos yo estoy viendo que se llevaron a cabo dentro del Instituto, en la sala de sesiones y aun cuando solo haya participado la Unidad Técnica, no fui avisada del mismo y veo que tampoco está la imagen de mi compañero Luis Carlos Santander Botello ni yo, solo quiero hacer la solicitud de que se me sea tomando en consideración, no se me siga ocultando información ni se me siga haciendo excluida por favor porque soy parte de esta Comisión

Secretaria Técnica: Si me lo permite Consejera, nada más para precisar que la foto de la página trece, aparece una imagen del Consejero Presidente de esta Comisión y del Consejero Jorge Armando Poot Pech, corresponde al curso “ABC de la Transparencia”, mismo que como queda redactado en el documento, este si fue promovido por la Comisión y fue notificado en tiempo y forma a todos los integrantes, a los Consejeros de este Órgano.

Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca: Si fue error mío, ni en el segundo ni en el tercer curso fui considerada, ni tomada en cuenta

Consejero Presidente: En razón a lo manifestado por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, nada más le pediría por favor a la Secretaría Técnica, que independientemente de la naturaleza de los cursos, aun cuando no vaya a ser dirigido a los miembros de esta Comisión, ni a ningún otro de los Consejeros, únicamente para efecto de conocimiento de todos los que integramos esta Comisión se nos haga llegar un oficio únicamente para esos efectos y evidentemente si alguno de los Consejeros de esta Comisión o inclusive a los que forman el Consejo General tuvieran la intención de tomar algún curso o estar presentes, pues bueno ya tendrían la información respecto de que se tratara en esos cursos y ellos decidieran de acuerdo a su agenda y prioridades, si van a tomarlo, entonces le pediría a la Secretaria Técnica que tomara nota de estos detalles para los subsecuente cursos o eventos que vaya a realizar su Unidad Técnica y también cuando sea invitada por el IDAIPQROO o cualquiera que tenga que ver con la Unidad a su cargo, nada más remitir con copia para los que formamos esta Comisión a efecto de que si alguno tiene interés de participar pues acuda sin ningún problema. Secretaria Técnica sírvase someter aprobación

el informe con el que damos cuenta con las modificaciones y propuestas realizadas en esta sesión de Comisión de Transparencia. (...)"

- **Copia certificada** de diversos oficios suscritos por el Consejero Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del *IEQROO*, dirigidos a los integrantes de dicha Comisión, entre ellos la quejosa, mediante los cuales los convoca a reuniones formales de trabajo de la referida Comisión.²⁴⁵
- **Copia certificada** del acta de las sesiones de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del *IEQROO* celebradas el ocho de noviembre y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en las cuales consta que la quejosa estuvo presente y participó en dichas sesiones.²⁴⁶

16. Supuesto control del entonces Magistrado Presidente del *IEQROO* sobre los Consejeros del *IEQROO* mediante una vista ordenada a la *UTCE* para el inicio de un procedimiento de remoción.

El veintidós de julio de dos mil dieciséis, el *TEQROO*, en sentencia recaída dentro del expediente JDC/025/2016 y sus acumulados, determinó dar vista a la *UTCE*, en los siguientes términos:

SÉPTIMO. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.

*De lo antes expuesto, se advierte que los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, incurrieron en responsabilidad al tener una **notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones**, al inobservar las disposiciones constitucionales y legales en materia de asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional y violentar con ello los principios de legalidad, certeza y objetividad que por mandato en los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna; 49, fracción I, de la Constitución Local; y 6 de la Ley Orgánica del Instituto, están obligados a observar y cumplir en el desempeño de sus funciones.*

Lo anterior, toda vez que la citada autoridad administrativa electoral únicamente tiene dentro de sus atribuciones el efectuar el cómputo y la asignación de

²⁴⁵ Visible a fojas 2785 a 2837, del legajo 4, del expediente.

²⁴⁶ Visible a fojas 2838 a 2858, del legajo 4, del expediente

Diputados por el Principio de R.P., Declarar la validez de la elección de Diputados por el mismo principio, determinar la elegibilidad o ineligibilidad de la fórmula de candidatos electos y consecuentemente, la entrega de la constancia de asignación a los ciudadanos ganadores. Por lo que al haber realizado de manera arbitraria y en contravención a los ordenamientos constitucionales y legales la modificación de la segunda fórmula de la lista de candidatas a Diputadas por el Principio de R.P., postuladas por el PAN, incurrieron los Consejeros Electorales en responsabilidad.

En consecuencia, en términos de los artículos 102, numeral 2, inciso b); y 103, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral de la presente resolución para los efectos legales a que haya lugar.

Al respecto, la quejosa refiere que interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, mismo que fue radicado con el número de expediente SX-JDC-479/2016, rencauzado como juicio electoral, formándose el diverso SX-JE-28/2016, donde la Sala Regional Xalapa del *TEPJF* determinó que *fue indebido el actuar del Tribunal Local al afirmar que los Consejeros Electorales “incurrieron en responsabilidad al tener una notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones ...”*²⁴⁷, lo anterior, pues la autoridad jurisdiccional local, solo tiene facultades para confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, siendo que no le corresponde, para efectos de lo previsto en los artículos 102 y 103, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinar si ello se trata de una responsabilidad y mucho menos calificarla de notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones.

Cabe precisar que por acuerdo dictado dentro del expediente UT/SCG/CA/TEQR/79/2016, de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la *UTCE* determinó no iniciar procedimiento de remoción en contra de los Consejeros Electorales del *IEQROO*.

Derivado de lo anterior, la quejosa refiere que el actuar del Tribunal Electoral del Estado, presidido por el magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, tiene

como objetivo mantener el control interno de los Consejeros, a través de intimidaciones y con la finalidad de desacreditarla, tal como le advirtió desde el inicio de su encargo.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que en la sentencia emitida en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/025/2016, el Tribunal local, al abordar los agravios del juicio de nulidad JUN/004/2016 (acumulado al JDC/025/2016), determinó, por unanimidad de votos, que fue incorrecto que el *IEQROO*, al momento de otorgar la constancia de asignación, le haya cambiado el carácter a la candidata Eugenia Guadalupe Solís Salazar, pues no debió otorgar la constancia respectiva con el carácter de propietaria, sino de suplente; además, de que, en su concepto a dicho Instituto no le correspondía pronunciarse sobre la decisión de la candidata electa Mayuli Latifa Martínez Simón de desempeñar el cargo de diputada de mayoría relativa, al ser facultad de la Legislatura del Estado. Por ello el Tribunal local determinó dar vista a la *UTCE* en los términos precisados por la quejosa.
- b) **Se tiene por acreditado** que el Magistrado Ponente en la referida sentencia fue Vicente Aguilar Rojas.
- c) **Se tiene por acreditado** que el veintisiete de julio del dos mil dieciséis, Claudia Carrillo Gasca y Sergio Avilés Demenegui, ostentándose como Consejeros Electorales, presentaron sendas demandas de juicio para la protección de los derechos-político electorales del ciudadano, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal local.
- a) **Se tiene por acreditado** que la Sala Regional del *TEPJF* con sede en Xalapa, mediante sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave SX-JDC-461/2016 y acumulados, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, determinó que fue indebido el actuar del Tribunal local al afirmar que los Consejeros Electorales “incurrieron en responsabilidad al tener una notoria

negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones...”. al considerar que, si bien, de conformidad con sus facultades puede confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, no le corresponde, para efectos de lo previsto en los artículos 102 y 103 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinar si ello se trata de una responsabilidad y mucho menos el calificarla de notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, por lo que, en su concepto debieron limitarse a dar vista a la *UTCE* del *INE*.

- b) Se tiene por acreditado** que en dicha resolución la referida Sala Regional determinó modificar la resolución del tribunal local, para efecto de dejar insubsistentes las afirmaciones que califican la existencia de una responsabilidad por parte de los Consejeros Electorales, así como confirmar la orden de dar vista a la *UTCE* del *INE*.
- c) Se tiene por acreditado** que la *UTCE* determinó, en el cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/TEQROO/79/2016, el no inicio del procedimiento de remoción en contra de los Consejeros Electorales del *IEQROO*, al considerar que la pretensión del *TEQROO* era que se iniciara el procedimiento de remoción sobre la base de un ejercicio interpretativo por parte de los consejeros imputados para llegar a una decisión en el ejercicio de sus funciones.
- d) Se tiene por acreditado** que la vista que dio el *TEQROO* a la *UTCE* fue en contra de todos los consejeros electorales que integran el *IEQROO* y no en contra de alguno de ellos en particular.
- e) No se tiene por acreditado** que con motivo de la vista ordenada por el *TEQROO*, el entonces Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional, hubiera pretendido ejercer algún tipo de control sobre los Consejeros del *IEQROO*, al tratarse de una decisión colegiada aprobada por quienes integran dicho Tribunal electoral local y propuesta al pleno por un Magistrado diverso.

Lo anterior de conformidad con los siguientes medios de prueba:

- Sentencia emitida por el *TEQROO* el veintidós de julio de dos mil dieciséis, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/025/2016 y sus acumulados²⁴⁸.
- Sentencia emitida por la Sala Regional del *TEPJF*, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SX-JDC-461/2016 y acumulados.²⁴⁹
- Acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE* el veintidós de agosto de dos mil dieciséis en el cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/TEQR/CG/79/2016 en el que se determinó el no inicio del procedimiento de remoción en contra de los Consejeros Electorales del *IEQROO*.²⁵⁰

17. Supuesta violencia política por razón de género en su contra por la denuncia de la captura de información de las listas nominales de electores.

La quejosa refiere que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis se percató que personal del Instituto electoral local, así como personal externo se encontraban capturando la información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizados en la Jornada Electoral del cinco de junio anterior.

Sobre el particular, la quejosa dice haber solicitado a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización de Instituto local, le explicara bajo qué circunstancias se estaba realizando dicho trabajo, a lo que le contestó que *no tenía por qué darle ninguna explicación y que si la necesitaba se la pidiera a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina*.

²⁴⁸ Dicha resolución puede ser consultada en: <http://www.tegroo.com.mx/sitio2007/tegroo/principal.php?cid=110000110>, y se invoca como hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 461 de la *LGIPE*.

²⁴⁹ Dicha resolución puede ser consultada en: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0461-2016.pdf>, y se invoca como hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 461 de la *LGIPE*.

²⁵⁰ Dicho acuerdo consta en los archivos del *INE*.

Por lo anterior, la quejosa presentó escrito dirigido a la Consejera Presidenta, donde le informó de los hechos y le formuló diversos cuestionamientos respecto de la captura de dicha información. De igual suerte, la quejosa le informó de lo acontecido a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad federativa.

La quejosa dice haber recibido respuesta por parte de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina el veintidós de agosto de dos mil dieciséis.

La quejosa refiere que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, recibió la visita del Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco, quien la amenazó al decirle lo siguiente: *“que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el Gobernador Roberto Borge Ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia”*.

Posteriormente, afirma que recibió una llamada de dicho funcionario público a su celular para reiterarle que *“no denunciara los hechos ocurridos el día anterior, pues su vida no valía nada”*. Lo anterior fue hecho del conocimiento de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina vía mensaje de texto, sin que recibiera respuesta alguna.

La quejosa refiere que ese mismo día presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, con la que se abrió el expediente FED/QROO/CHET/0000/400/2016.

Con motivo de lo anterior, la quejosa señala que durante la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, fue objeto de violencia por diversos representantes de partidos políticos y los Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche. Lo anterior derivado de que, en su concepto, en el contexto de la discusión que se llevó a cabo durante un punto de Asuntos Generales de la citada sesión, respecto de la denuncia presentada por un posible uso indebido del listado nominal, así como la filtración de dicho asunto a medios de comunicación,

se podía establecer una coalición de representantes de partidos y consejeros a efecto de atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

De igual suerte, la quejosa refiere que ha recibido una serie de mensajes anónimos, que ella piensa provienen de servidores públicos del Instituto local, donde le informan que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de la autoridad electoral local, están trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

De las constancias del expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que en la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el punto de acuerdo relativo a asuntos generales se agendó, entre otros, el tema relativo a la captura de información de las listas nominales por personal del Instituto, hecho denunciado por la quejosa y cuestionado por otros consejeros y representantes de partidos políticos.
- b) **Se tiene por acreditado** que, en la referida sesión ordinaria, en el punto de acuerdo de asuntos generales, la Consejera Presidente detalló en qué consistieron los trabajos que se realizaron respecto de las listas nominales y las medidas que se tomaron para la protección de datos personales.
- c) **Se tiene por acreditado** que en la discusión del punto de acuerdo en cuestión el representante del PT ante el Consejo General hizo referencia a la denuncia interpuesta por la quejosa y le solicitó que expresara los cuatro señalamientos que se hacían en medios de comunicación. Asimismo, le solicitó que explicara *¿en qué se basaba para hacer la denuncia con respecto a la apertura ilegal de la paquetería electoral?, así como ¿Quién hace la sustracción de las listas nominales, el hostigamiento y las amenazas que ha recibido por parte de los directivos del Instituto Electoral de Quintana Roo?*
- d) **Se tiene por acreditado** que el Consejero Sergio Avilés Demeneghi manifestó su inconformidad por lo ocurrido y se quejó de que el Director de

Organización no había dado contestación a los oficios en los cuales le había cuestionado sobre lo ocurrido con las listas nominales.

- e) **Se tiene por acreditado** que la quejosa en el uso de la voz realizó diversas manifestaciones en torno a los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, refirió que cuestionó a Luis Alberto Alcocer Anguiano y a José Luis González Nolasco del porqué de dicha actividad y que de ello devino violencia, amenazas y ocultamiento de información. Hizo hincapié en la existencia del protocolo de violencia de género y que a pesar de formar parte del Consejo General había sido víctima, sin precisar en qué había consistido dicha violencia.

También refirió que ante el posible uso indebido de las listas nominales, así como de la vulneración de datos personales se dio a la tarea de dar aviso al Vocal Ejecutivo del *INE*, así como a la autoridad ministerial. En dicha intervención la quejosa reconoció que tomó diversas fotografías y recalcó que al momento en que pasó su escrito a la Secretaria de la Presidenta también ella tomó fotos de su escrito, y que el personal que estaba capturando la información igualmente tomó fotografías.

- f) **No se tiene por acreditado** que durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa haya sido objeto de violencia política por diversos representantes de partidos políticos, así como de los Consejeros Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, ni tampoco se acreditó que existiera una “*coalición*” en su contra para atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

Lo anterior, toda vez que las intervenciones realizadas durante la citada sesión ordinaria, por los sujetos referidos en el escrito de queja, no suponen violencia en contra de la quejosa, pues en ninguna de ellas se hace alusión directa hacia su persona, tampoco se le denosta, humilla o discrimina, sino que se trata de manifestaciones amparadas en el ejercicio de libertad de expresión, tomando en consideración que estas se presentaron dentro de un

debate al seno del Consejo General del Instituto electoral local, en el que se discutió respecto de la legalidad o ilegalidad en la captura de datos de las listas nominales utilizadas durante el último proceso electoral celebrado en la mencionada entidad federativa.

Asimismo, si se considera que la propia quejosa reconoce haber denunciado los hechos ante la autoridad administrativa electoral como de la autoridad ministerial, no resulta calumnioso el que se haya señalado dicha situación durante la sesión, pues ella misma lo refirió en una de sus intervenciones dentro del debate respectivo.

Por cuanto hace a las manifestaciones del representante del *PRI*, tampoco se considera que éstas constituyan violencia política por razón de género en contra de la quejosa, pues en ningún momento se hace alusión directa hacia su persona y, además, se trata de una crítica severa hacia los consejeros que integran el referido órgano colegiado, amparada en su ejercicio de libertad de expresión.

Por último, por cuanto hace a lo argumentado por la Consejera Thalía Hernández Robledo en torno a las fotografías difundidas en medios de comunicación, tampoco se puede interpretar como violencia política en su contra, pues si bien la referida consejera refirió que *“la propia Consejera fue a tomar fotografías, y luego sus fotografías yo las veo en los medios de comunicación”*, ello en forma alguna debe considerarse como un ataque en su contra, pues se trata del señalamiento de un hecho para ella evidente, que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión en los debates que se llevan a cabo al seno de cualquier órgano colegiado.

- g) No se tiene por acreditado** que la Consejera Presidenta del *IEQROO*, hubiera realizado llamadas telefónicas a la mayoría de los representantes de los partidos políticos y consejeros electorales con el objeto de atacar directamente a la quejosa y hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema relativo al manejo de las listas nominales.

- h) **Se tiene por acreditado** que por oficio CE/CCG/045/16, de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa hizo del conocimiento de la Consejera Presidenta que en esa misma fecha se había percatado que personal del Instituto y personas externas se encontraban capturando información de las listas nominales de electores que fueron utilizadas en la jornada electoral celebrada ese año, que al cuestionar al personal que se encontraba realizando dicha actividad le manifestaron desconocer la finalidad de ésta, por lo que al considerar que se podría estar haciendo un uso indebido o ilícito de las listas nominales de electores, así como vulneración a datos personales al estar capturando el OCR y la clave de elector, solicitó a la Presidenta que le informara a la brevedad, para lo cual le realizó una serie de cuestionamientos relacionados con dichos hechos.
- i) **Se tiene por acreditado** que por oficio PRE/736/2016 de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Consejera Presidenta dio respuesta al oficio CE/CCG/045/16, en el que dio contestación puntual a cada uno de los cuestionamientos formulados por la quejosa.
- j) **Se tiene por acreditado** que la quejosa cuestionó a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización de Instituto local, respecto de las circunstancias bajo las cuales se estaba realizando dicho trabajo, sin embargo, de las constancias de autos no consta que la respuesta de dicho funcionario haya sido en los términos precisados por la quejosa, ni que en forma alguna la conversación sostenida por tal motivo, hubiera dado lugar a algún tipo de violencia política por razón de género.
- k) **No se tiene por acreditado** que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, José Luis González Nolasco, entonces Director de Partidos Políticos del *IEQROO*, se hubiera presentado en la oficina de la quejosa y la hubiera amenazado en los términos precisados por ésta, ni tampoco que hubiera recibido una llamada telefónica del referido funcionario, en los términos referidos en su escrito de queja.

No obsta a lo anterior que tratándose de violencia por razón de género, conductas como la que refiere la quejosa sean de realización oculta y, que

por ello, sea difícil la aportación de las pruebas directas que, por sí mismas, tengan valor probatorio pleno; sin embargo, en la doctrina jurídica se ha reconocido que puede ser a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas, las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación de un hecho.

No obstante, en el caso no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera de carácter indiciario, para que esta autoridad pudiera realizar la adminiculación con otros elementos probatorios, además del dicho de la quejosa, y estar en posibilidad de acreditar el hecho denunciado.

- I) No se encuentra acreditado** que la quejosa hubiera recibido mensajes anónimos, supuestamente provenientes del Instituto local, en los cuales se le informara que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica se encontraban trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

Si bien en la diligencia practicada por la Oficialía Electoral el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, constan en el teléfono de la quejosa dos mensajes, en apariencia anónimos, en los cuales se hace referencia a la captura de los datos de las listas nominales, con estos no se acredita que en efecto algunos consejeros y la Dirección Jurídica se encontraran trabajando alguna denuncia en su contra, pues además de que no existen constancias por las cuales se acredite que se iniciara algún procedimiento en su contra por los hechos en cuestión, por tratarse de una prueba técnica, por sí misma no genera convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados al no poder ser concatenado con ningún otro elemento probatorio, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 462, párrafos 1 y 3 de la *LGIPE*, así como 22, fracción III y 27 párrafos 1, 3 y 5, del *Reglamento de Quejas*.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba.

- **Copia certificada** del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis²⁵¹, que en lo que interesa, es del tenor siguiente:

(...)

Consejera Presidenta: Muchas gracias; hemos enlistado todos los puntos del orden del día de asuntos generales; en relación al punto agendado por su servidora, quiero dar en primer término respuesta al escrito recibido el día diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, signado por la representación del Partido Acción Nacional con respecto al asunto relacionado en este sentido; como es de su conocimiento desde el día dieciocho de agosto del dos mil dieciséis en diversos medios de comunicación impresos de circulación estatal, se hizo de conocimiento público que en el interior del Instituto Electoral de Quintana Roo fueron abiertos paquetes electorales correspondientes a la jornada electoral celebrada el pasado cinco de junio de dos mil dieciséis, y que personal del propio Instituto extrajo información de los listados nominales a efecto de identificar a los ciudadanos que votaron tomando sus claves de credencial de elector y OCR; en el segundo párrafo es la petición para que se de tal información; también tengo un oficio signado por el Consejero Santander en donde también realiza esa petición; en tal sentido, dado los acontecimientos que han generado al interior de este Consejo General, respecto del trabajo que se está realizando, me permito informar respetuosamente a todos los integrantes de este Consejo General dicha situación...”

Página 8:

“...finalmente señalaría que se están analizando las acciones jurídicas que corresponden, contra quien o quienes resulten responsables, por el manejo de la información hacia el exterior que se ha hecho de esta información oficial...”

(...)

Página 9:

Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi: ... como comenta la Consejera Presidenta este hecho es un hecho notorio que se viene dando en los medios de comunicación, yo precisamente le solicité dos informes a la Consejera Presidenta y ya me respondió el día de ayer; no así, el Director de Organización, que igual dos veces le requerí información y hasta el momento no tengo ninguna respuesta, por eso a través de la Presidenta, por favor requiérale al Director de Organización, que me conteste el oficio que le remití en dos ocasiones; ahora bien, es lamentable los hechos ocurridos en el manejo de las listas nominales utilizados en el proceso electoral dos mil dieciséis, sin duda, hay indicios que se vulneró el resguardo y custodia de las mencionadas listas, independientemente

²⁵¹ Visible a fojas 258 a 300 del legajo 1; fojas 4817 a 4859; 4887 a 4928; 5042 a 5084 del legajo 7, y 229 a 271 del anexo 1, del expediente.

de que sean de los paquetes electorales, independientemente que sean las listas utilizadas por los partidos políticos al momento de la mesa directiva de casilla, ignoro qué tipo de casilla, ignoro qué protocolo este realizando, ignoro si este marco normativo, esto que nos acaba de presentar la generación, los apartados del procedimiento, ignoro quien lo aprobó, ya que únicamente en la Ley Orgánica establece que la Dirección de Organización tendrá las siguientes atribuciones; ... hemos de recordar que para el INE y para toda autoridad administrativa electoral el debido resguardo y custodia es de prioridad donde independientemente de estadística, hay una ponderación de principios en el cual en este momento para mí, es que los paquetes electorales o las listas nominales no hayan sido vulneradas; yo en este momento no tengo la certeza de que sucedió eso; ignoro cuál fue la manera sistemática de captura se lo solicité al Director de Organización, que hasta el momento no me ha contestado: ¿por instrucciones de quien se realizó?, para mí, esto yo no lo aprobé, este órgano superior de dirección, los datos capturados hasta este momento en el sistema informático que se viene realizando; solicito que en este momento mientras las autoridades administrativas y penales investiguen, que en su momento al igual interpondré la denuncia correspondiente, cesen de manera inmediata todo tipo de captura que este en contradicción del convenio y anexo técnico; asimismo, solicito y que se vote de manera nominal, si es posible, que se haga en este momento una inspección ocular a la bodega electoral donde se encuentran resguardados los paquetes electorales y listas nominales y que se nos pongan a la vista las listas nominales que están siendo manipuladas en este momento por servidores...

Página 12:

Representante propietario del Partido del Trabajo, Mauricio Morales Beiza:

Muchas gracias Consejera Presidenta; muy buenas tardes Consejeros, compañeros representantes de los partidos políticos, realmente me siento sorprendido, y quiero manifestarlo así, porque creo que la coyuntura político electoral que vivimos en Quintana Roo en este proceso electoral, ha avalentado de repente a varios actores políticos, a varios actores inclusive administrativos, yo recuerdo la historia del Instituto Electoral de Quintana Roo, desde el dos mil tres a la fecha y han sido usos y costumbres de este Instituto...

...están pasando situaciones inéditas, situaciones que nunca se habían vivido coincido con la representante del PAN en que no se está dejando mal a ningún consejero, no se está dejando mal a un representante de un partido político; que hoy recordemos que ante la opinión pública están muy desgastados, pero las autoridades electorales también entonces se está contribuyendo precisamente a ese desgaste y eso creo que como autoridad electoral de Quintana Roo, no debe pasar; hoy se ve a estas dependencias electorales como una carga económica para el pueblo quintanarroense y para el pueblo mexicano, entonces es importante que las autoridades electorales, que los organismos electorales, le den resultados al pueblo de México y al pueblo de Quintana Roo, y yo estoy convencido que este trabajo que se está haciendo va a ser en beneficio del pueblo de Quintana Roo; ¿y qué te está pidiendo el pueblo de Quintana Roo? que los organismos electorales dejen de ser organismos que trabajen cada tres

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

años, sino que estemos generando, fungimos para nuestro pueblo de Quintana Roo, entonces lamentamos que este trabajo en el caso del Partido del Trabajo, lamentar que se está dando y se está dando dentro de esta coyuntura que insisto esta coyuntura le está provocando el mismo Instituto; escuche con mucha atención que todos estaban agendando en torno al mismo tema, yo creo que en este mismo punto se puede desahogar todo lo que se agendó de entrada, y yo me atrevería a preguntarle si me lo permite la Consejera Claudia, quien fue, quien puso la denuncia y que yo en particular me enteré de este asunto por los medios de comunicación que nos pudiera expresar aquí en la mesa sobre los cuatro señalamientos que se hacen y después le pediría al Secretario General y a la misma Presidenta sin nos pudiese facilitar lo más pronto posible, una copia del acta de esta sesión, preguntarle a la Consejera Claudia, ¿en qué se basa para hacer la denuncia con respecto a la apertura ilegal de la paquetería electoral?, si lo pudiera expresar por favor, ¿Quién hace la sustracción de las listar nominales, el hostigamiento y las amenazas que ha recibido por parte de los directivos del Instituto Electoral de Quintana Roo?...entonces dejaría yo ahí estas cuatro preguntas para la Consejera Claudia y después también le pediría al Secretario una copia de la presente sesión; muchas gracias."

(...)

Página 16:

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos: Muchas gracias Consejera Presidenta; muy buenas tardes a todos; para mí creo que no vale la pena decir estimados porque no todos somos estimado en este Consejo; quiero iniciar mi intervención lamentando como otros compañeros representantes de partido del actuar de algunos consejeros, me parece que en un afán protagonista y excesivo, están dejando de un lado cumplir muchas de sus obligaciones, son consejeros electorales, no son dioses, no son personas que están arriba de cualquiera de nosotros, son simplemente ciudadanos que fueron designados para cumplir una encomienda, una encomienda que a todas luces, como señalé en varios momentos durante el proceso hacia algunos consejeros, que dejaron mucho que desear con su actitud y su actuar, llegando al grado, y lo que quiero dejar en claro en este mesa, para aquellos partidos que tal vez se van con el canto de la sirena; alguna Consejera de este Consejo General, ante mis señalamientos por su actuar, por su poco conocimiento de la materia electoral, el mismo requisito que establecía uno de los requisitos para ser designada Consejera Electoral, llegó a acercarse, cuando el entonces candidato de nuestra Coalición, para pedir mi sustitución a cambio de cambiar la actitud de no golpear durante el proceso electoral, eso me parece un hecho poco serio, irresponsable y poco profesional y que reitero, no se vayan con el canto de la sirena; en seguida y con todo respeto porque le tengo que hablar con todo respeto a los señores consejeros, quien ignora muchas cosas, al menos de su función electoral, se le dice ignorante; entonces yo no puedo entender que alguien que está designado para cumplir una obligación constitucional, ignore muchas tareas de las que tienen que realizar aquí, ante el instituto; me parece que si es lamentable que como consejeros no conozcan; le dejaría en la mesa algunas preguntas Consejera Presidenta, para aquellos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

consejeros que distorsionan la información, que den la información precisa y exacta ¿qué es un OCR?, si saben de ¿cuántos campos se integra un listado nominal?, ¿para qué sirven esos campos?, yo si lo sé, pero no tengo porque darles la respuesta, si se supone que los expertos en la materia, reitero, son los consejeros que fueron designados para cumplir ese fin; ya lo ha señalado algún representante que le han cedido la palabra, la forma es fondo sí, pero creo que estamos ante hechos netamente técnicos que se pretenden politizar y creo que ahí está el hecho de las cosas, yo no voy a contravenir si eso no, o un Consejo integrado al cien por ciento vuelve a decir no, ni porque compararlo con los anteriores que les aclaro, en todos estuve presente, porque afortunadamente por mi partido, estoy desde el dos mil tres como dijo el compañero Mauricio, desempeñando la función de representación hasta el sol de hoy, ni con acusaciones temerarias, ni con chantaje de querer cambiarme a costa de información o de cambio de posturas, lograron realizarlo; entonces si es cierto, no se vale con las comparaciones porque tal vez saldrían raspados muchos de aquí, pero muchos; si es un día o son dos o son tres, yo creo que el fondo de las cosas es cumplir con una encomienda constitucional y no como diría un consejero porque únicamente lo dice la Ley Orgánica, digo están para cumplir todas las leyes, por menor o mayor rango que tengan, es una ley que hay que cumplir, no únicamente, no únicamente porque sea Ley Orgánica no se debe de cumplir, hablar de que se capturen las boletas, en tono sarcástico o en son de broma, desconozco el tono del comentario, deja mucho que desear de la actuación de algunos consejeros no se puede jugar así, bueno esto es un tema que ha causado un tema que ha causado escozor, porque así lo han decidido, quienes detonaron toda esta información en la prensa, creo que no es la forma, reitero, es fondo, que decir que mejor se capturen las boletas, para hacer cosas turbias, digo, no soy quién para decirlo, pero creo que no es el momento, lo señalaron también algunos representantes, algunas elecciones ya son firmes, se puede hacer un trabajo de investigación estadístico que ya están firmes, no todas siguen siendo impugnadas, no todas están todavía en tribunales; quiero dejar por este lado, antes de concretar mi intervención, diciendo que también conozco los alcances de cuando no se manipula un listado nominal, tengo también la fortuna de ser representante del partido que me honra en designarme en su representación, aquí ante la Comisión Local de Vigilancia, en la cual tengo más de veinte años, desempeñando la función, y para quienes no lo sepan es el único órgano electoral especializado en depuración y actualización de lista nominal y padrón electoral, en donde los partidos políticos tenemos voz y también voto, entonces para querer llevar agua a su molino, y reitero, un excesivo protagonismo, creo que no es la manera de traer a los medios y querer ser protagonista reitero, de acciones que si bien es cierto, se están presentando en este momento, es muy loable la información que se está presentando, y si bien es cierto, como lo ha dicho Consejera Presidenta, como lo tratan algunas números y cifras más adelante, pero es loable, yo en lo particular y el partido que represento; avalamos los trabajos, esperamos resultados de la información estadística, Presidenta, como ya se ha dicho, es muy importante, sobre todo en esta elección *sui generis* del comportamiento electoral en todos los distritos, en todos los municipios, en todas las acciones; eso lo permitirá hacer, como creo de muchos de los actores políticos, es una herramienta para procesos

electorales, para campañas electorales yo dejaré hasta este momento mi intervención; dije unas preguntas en la mesa, esperando sean respondidas y esperar a que esto sigue su curso de que reitero, aquellos consejeros que intentan protagonizar, con este tipo de señalamientos sin dejar de cumplir con su obligación constitucional, yo sé cuál es, se la dejo de tarea; la medida en la que podrán pasar a la historia, no como otros consejeros, sino como unos consejeros propositivos, que se preocuparon por la democracia, por la participación ciudadana y no como paladines de la democracia; sería cuanto.

(...)

Página 20 y 21:

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo:

“...por ejemplo que si había teléfonos se podían haber tomado fotografías, yo pregunto, sí, porque bueno eso es lo que se comenta al interior de esta institución, que la propia Consejera fue a tomar fotografías, y luego sus fotografías yo las veo en los medios de comunicación, por favor, entonces yo creo que tenemos que actuar con ética si hay algo mal, acompaño a que se haga la denuncia correspondiente...”

Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejera; tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social.

Representante suplente del Partido Encuentro Social, Iván Geovanny López Díaz: Gracias, muy buenas tardes a todos; en el mismo sentido del compañero del Partido del Trabajo que antecedió; la posición de Encuentro Social es objetiva, para ello solicitamos se nos aclare, ¿Cuál es la presunción por la cual se aperturaron los paquetes electorales? ¿Cuál es el destino o dónde se encuentran esos paquetes? ¿Cuál es la base jurídica para señalar que se comete un delito con ello y cuáles son las pruebas? no argumentos para sostener la acusación de la Consejera Claudia Carrillo que ha realizado y lo cual tenemos conocimiento por los medios periodísticos, una vez aclarados estos puntos, Encuentro Social se pronunciará al respecto; con esta intervención quiero retirar la agenda en asuntos generales; gracias.

(...)

Página 25:

Representante propietario del Partido Nueva Alianza, Armando Miguel Palomo Gómez: Muy buenas tardes; primero quisiera iniciar con el tema señalado de falta de profesionalismo del personal del Instituto Electoral, porque es lo que deduje; lo que yo deduje es que a final de cuentas, el personal administrativo que son los que viven en el Instituto, hicieron mal su trabajo; yo hasta ahorita no he escuchado un reconocimiento hacia toda este gente que los que vivimos acá en el Instituto, dos, tres de la mañana, están trabajando, le estamos buscando los errores a ellos y no les agradecemos, realmente considero que allá deberíamos iniciar, reconocerles el trabajo a ellos de la labor que realizan en pro de la democracia de nuestro estado, he escuchado de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

muchas que hay lagunas de información, que no hay acuerdo entre los consejeros, que no se platican entre ellos, pero bueno, la ciudadanía a final de cuentas, no eso espera de ustedes, la ciudadanía espera de ustedes resultados, espera de ustedes productos, mucho de su impuesto de la ciudadanía se gastan en los salarios de los consejeros, en los salarios del Instituto Electora, y eso quieren ellos, la gente de fuera está esperando, no la nota de que algunos consejeros no llevan buenas relaciones y final de cuentas se reflejan acá dentro; hubo un tema que me llamó mucho la atención del Consejero Santander y le doy la razón, con el respeto de los presentes, se requiere nivel de ciertas personas, yo espero que la próxima elección, de los consejeros, pues cuando menos los estudios psicológicos los mejoren y ver de qué manera incrustan aquello llamado protagonismo...”

(...)

Página 27 y 28:

Representante suplente de MORENA, Saulo Aguilar Bernés: En realidad sería tres puntos que agendé; el de activación del protocolo contra la violencia política a favor de la Consejera Claudia Carrillo Gasca; pues quiero recordarle y dirigirme al Secretario General que es de su conocimiento que esta representación solicito desde el mes pasado se activara el protocolo contra la violencia política a favor de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ya que en sesión ella manifestó por su propio derecho que es víctima de violencia política y es el caso que solicitamos que en su momento se diera vista del caso a la FEPADE al dependiente de la Procuraduría General de la República y la solicitud se la hicimos ante este Pleno, en consecuencia, la pregunta es ¿Qué se está haciendo al respecto? máxime que es público y notorio que la ciudadanía Consejera Electoral ha sido amenazada por el Director de Partidos Políticos de este Instituto Electoral de Quintana Roo, como consta en los medios de comunicación de esta entidad, al respecto le recuerdo que no espere usted a que se materialice la violencia física, a que esto pueda llegar a más, es mejor prevenir que lamentar siempre, y se estaría incurriendo en una notoria negligencia por parte de este Instituto; es cuánto.

(...)

Página 32:

Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca: buenas tardes, también al representante del Partido del Trabajo le voy a dar contestación, si bien no escucho correctamente; le dije que le iba a contestar hasta mi intervención; por todos es bien sabido de los hechos que presencie en fechas diecisiete de agosto del año en curso, en donde observe que personal del Instituto Electoral de Quintana Roo entre ellos personal de la Dirección de Organización a cargo de Luis Alberto Alcocer Anguiano y de la dirección de Partidos Políticos a cargo de José Luis Nolasco Gonzales o Gonzales Nolasco, de Capacitación José Marrufo Esquivel, de Informática Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, de Comunicación Social Alfredo Figueroa y personal jurídico al mando de Maogany Crystel Acopa Contreras y personal de Contraloría bajo las ordenes de José Adrián Díaz

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Villanueva, así como las respectivas secretarías de algunos compañeros Consejeros Electorales y personal externo al Instituto, se encontraban capturando información de las listas nominales de electores, que fueron utilizadas en la jornada electoral pasada del cinco de junio, del cual no obtuve, aún y cuando pregunte a Luis Alberto Alcocer Anguiano y a José Luis Gonzales Nolasco del ¿por qué dicha actividad de captura de datos de lista nominales de los ciudadanos que votaron? Y sobre todo de la forma desordenada, sin control, sin metodología, sin formalidad; ante ello recordé un mensaje donde la Consejera Presidenta solicita apoyo a nosotros los demás seis consejeros para invitar a nuestra secretarías apoyen a la captura de información al área de la Dirección de Organización en el cual está al mando de Luis Alberto Alcocer Anguiano, sin embargo hasta ese entonces desconocía de los motivos de tal petición de la Consejera Presidenta, ante ello y derivado de muchas dudas devino la sospecha y de falta de argumentación devino la violencia, amenaza, ocultamiento de la información; tal pareciera que los directores de nuestro Instituto se les olvida que existe un protocolo de violencia de género y del cual, a pesar de ser parte del este Consejo he sido víctima, ante la posible y en el supuesto de que se podría estar haciendo un uso indebido o ilícito de las listas nominales de electores, así como la vulneración a datos personales al estar capturando datos de los ciudadanos que votaron me di a la tarea de avisar al Vocal Ejecutivo del INE, así es como a la autoridad indagadora federal de esta situación; estos fueron los hechos los cuales hice del conocimiento a la autoridad ministerial y a la Vocalía Ejecutiva del INE; aclarándoles a todos que en materia penal también existen los delitos por omisión, tampoco estoy prejuzgando, actué legalmente sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito y pedí aclaración sin tenerla; si, efectivamente tome algunas fotos, pero también quiero recalcar que al momento que pasé mi escrito a la secretaria de la Presidencia también tomé fotos de mi escrito, entonces sería por demás decir que solo yo obtuve la información y obtuve las fotos cuando también la gente que estaba capturando también estaba tomando fotos, el único que puede decir quién es el que cometió o no se cometió un delito no soy yo, es la autoridad indagadora o el Instituto Nacional Electoral, en su caso tomar las medidas pertinentes también hay que saber que yo no hice alguna imputación, solamente cumplí con un deber de hacerle del conocimiento de la autoridad ministerial sobre hechos de los cuales ni de la Consejera Presidenta no de los Directores tuve una respuesta así mismo, en cuanto al escrito de contestación que recibí el día de ayer de parte de Consejera Presidenta de diversos cuestionamientos que presenté el día diecisiete, quiero manifestar que me parecen evasivas y carentes de motivación y fundamentación, ya que no me contestan algunos cuestionamientos sobre, ¿cuál es el motivo por el cual se está haciendo durante el proceso electoral sin esperar hasta la conclusión del mismo y de las impugnaciones por resolver?: la Consejera Presidenta me dice que es una atribución prevista legalmente para las áreas técnicas de Organización y la Unidad de Informática y Estadística, por lo que se tomaron las acciones necesarias para dar cumplimiento de lo que se observa que no se da cabal respuesta a la pregunta, porque suponiendo sin conceder que es una atribución de las áreas técnicas de este Instituto tales como Organización y la Unidad Técnica de Informática y Estadística no responde el motivo por el cual se está haciendo durante el proceso electoral sin esperar hasta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

la conclusión del mismo, el cual el artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley Electoral señala "que el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados y Miembros del Ayuntamiento inicia el quince de febrero del año en curso y concluye con la toma de posición de los cargos", es decir, hasta fecha treinta de septiembre del año en curso además aun sin considerar que existen impugnaciones en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendientes por resolver, por lo que no se da respuesta legalmente fundada, por lo cual, se está haciendo tal captura de información de las listas nominales justificada por la titular del Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, ¿cuáles son las casillas que previo a la conclusión del proceso electoral se está tomando información?; me responde para la generación de las estadísticas y numeraría se toman en consideración únicamente la información relacionada con las casillas de los consejos distritales y municipales, cuyos resultados se encuentran firmes y definitivos al no haber sido impugnados; de lo que se observa; que dicha respuesta no da contestación a la pregunta, pues no refiere de ¿cuáles y cuantas casillas se está recepcionando la información?; ¿qué medidas se están adoptando para evitar la destrucción, sustitución, comercialización, alteración o uso indebido de dicha lista de electores?; me responde la Consejera Presidenta, mediante escrito que al respecto hago del conocimiento que la información utilizada para la generación de las estadísticas, se encuentra en resguardo de la Dirección de Organización, por lo que dicha área estableció las medidas necesarias y pertinentes a fin de evitar la destrucción, sustitución, comercialización, alteración o uso indebido de las listas nominales de electores; de lo que se observa; que dicha respuesta no da contestación a la pregunta, pues, suponiendo sin conceder que en todo caso se considere atribución legal, no existió un procedimiento científico ni existió una metodología, ni lineamientos ni tampoco existió las medidas necesarias para el resguardo y protección de las listas ya que como lo he referido de una captura de imagen, la propia Consejera Presidenta en un chat de consejeros solicita apoyo para que las respectivas secretarías auxilien a la Dirección de Organización en la captura de información y que no era necesario moverse de sus lugares; entonces, ¿Cuál es el resguardo si ella misma está autorizando que se haga desde sus lugares?; la Contrataría está del otro lado la Dirección de Partidos Políticos se encuentra muy distante al área donde estaba, el personal; entonces, ¿Qué garantía nos está otorgando la Consejera Presidenta al decir que desde sus lugares? cuando nos dice a los consejeros que no había ningún problema al respecto?, lo que denota la falta de medidas para evitar la destrucción, sustitución, comercialización o uso indebido de dichas listas de electores, ya que no existió además una correcta cadena de custodia de los documentos, a más que el Director de Organización Luis Alberto Alcocer Anguiano no se encontraba en el lugar, siendo el responsable y siendo el titular de la Dirección, aunado de la importancia de la documentación electoral de la que se estaba sustrayendo información; ¿el motivo por el cual no informó a los demás miembros del Consejo General y partidos políticos?; la Consejera Presidenta me contesta que es una facultad de la Dirección de Organización y la Unidad Técnica de Informática y Estadística; tampoco da contestación, ya que al tratarse de un órgano colegiado, e incluso considero se debió realizar un acuerdo sometido a consideración de este Consejo; lo que a falta de esto, no se garantiza

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

que no se le haya dado un uso distinto a las listas nominales de la que originalmente lo está justificando; en cuanto al motivo por el cual dichas listas de electores en todo caso no se enviaron con inmediatez al Instituto Nacional Electoral con la justificación de que son el único, con el que se cuenta para cumplir con la obligación legal impuesta a las áreas técnicas de este Instituto señaladas anteriormente, relativas a la generación de la pluricitada estadística; cabe mencionar que en su respuesta se observa la falta de cuidado, resguardo y custodia de las listas nominales a más que como refiere que a la presente fecha existen impugnaciones pendientes de resolver en las salas correspondientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inclusive quienes cabría la posibilidad podrían requerir, no obstante ni el Director de Organización ni el Jefe de la Unidad Técnica que refiere en su escrito de contestación, son responsables de generación de estadística, no adoptaron las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y no eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado o si fuera el caso desconozco de tal medida y es que el artículo quince, párrafo dos del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que como información confidencial se considera, de que contiene datos personales; actualmente desconozco donde se encuentran las listas nominales; me hubiera gustado que los miembros del Consejo General, hubieran votado a favor de la propuesta del Consejero Sergio Avilés Demeneghi; pues aprovechando también mi intervención a usted Consejera Presidenta, instruya al Director de Organización, a efecto de que informe a la suscrita, la metodología de control, de resguardo y custodia así como uso de las listas nominales y el lugar físico en donde actualmente se encuentran resguardadas dichas listas, así como justifica el motivo por el cual se encontraban capturando en diferentes áreas, como es el caso del área de secretarías, separado de donde estaba el personal del Instituto; asimismo, solicito por su conducta que instruya a dicho Director de Organización, conteste que medidas necesarias y pertinentes ha realizado a fin de evitar la destrucción, sustitución; comercialización alteración o Uso indebido de listas nominales; porque como está considerado, es el responsable entonces yo le pedí una respuesta y el señor me evadió; en cuanto al personal externo, representante del Partido del Trabajo, le comento que por secrecía, del trabajo del Ministerio Público, solamente a él corresponde en su momento si mandarnos a citar; es cuanto.

(...)

Página 35:

Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche: A lo manifestado por la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el uso de la voz, nada más invitar a quienes en un momento dado, yo evidentemente desconozco quien haya estado tomando fotografías o no, lo haya estado haciendo, al final, bueno, no es mi manera de conducirme, sin embargo aquellas personas que en un momento dado se hayan sentido agraviadas por el hecho de que su imagen haya sido utilizada sin su conocimiento en algunos medios de comunicación y que hayan

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

sido además proporcionadas muy probablemente por personal del propio Instituto Electoral de Quintana Roo..."

- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/045/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual realizó diversos cuestionamientos a Mayra San Román Carrillo sobre la captura de las listas nominales de electores.²⁵²
- **Copia certificada** del oficio PRE/736/2016, firmado por Mayra San Román Carrillo, a través del cual da contestación a diversos cuestionamientos sobre la lista nominal formuladas por Claudia Carrillo Gasca.²⁵³
- **Copia simple** de los oficios CE/CCG/046/16 y CE/CCG/048/16, firmados por Claudia Carrillo Gasca, dirigidos al Subdelegado de la PGR de Chetumal, Quintana Roo, a través de los cual amplía hechos relacionados con la captura de las listas nominales.²⁵⁴
- **Copia certificada** del oficio CE/SAD/044/2016, firmado por Sergio Avilés Demeneghi en el que le solicita a Mayra San Román Carrillo informar sobre la captura de las listas nominales.²⁵⁵
- **Copia simple** del oficio CE/LCSB/045/16, firmado por Luis Carlos Santander Botello, en el que le solicita a Mayra San Román Carrillo informar sobre la captura de las listas nominales.²⁵⁶
- **Copia simple** del oficio sin número, de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por Cinthya Yamile Millán Estrella, representante del *PAN* ante el Consejo General del *IEQROO*, mediante el cual le solicita al Consejo General que se le informen los motivos por los cuales se hizo uso de la documentación electoral.²⁵⁷

²⁵² Visible en el legajo 1, foja 314 y Legajo 5, Foja 3468 del expediente.

²⁵³ Visible en el legajo 1, foja 312 y Legajo 4, Foja 2973 del expediente.

²⁵⁴ Visible en el legajo 1, fojas 303 a 305 y 320 a 322 del expediente.

²⁵⁵ Visible en el legajo 1, foja 323 Legajo 5, Foja 3670 del expediente.

²⁵⁶ Visible en el legajo 1, foja 324 del expediente.

²⁵⁷ Visible en el legajo 1, foja 326, del expediente.

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a la **Consejera Claudia Carrillo Gasca**²⁵⁸ en el que, entre otras cuestiones, se le solicitó que precisara lo siguiente:
 - Informe si existen personas a quienes les consten los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, respecto de que Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del IEQROO, le dijo en su oficina “*que no tenía que darme ninguna explicación, que yo no soy nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local.*” Lo anterior en el contexto de que usted se percató de que tanto personal del Instituto, como personas externas se encontraba capturando información de las listas nominales de electores. A dicho cuestionamiento la quejosa refirió, en esencia, lo siguiente:

No existen personas que le consten los hechos, no obstante lo anterior, ese mismo diecisiete de agosto, cuando la suscrita se percató que tanto personal interno como gente externa al Instituto se encontraban capturando información de las LISTAS NOMINALES DE ELECTORES que fueron utilizados en la Jornada Electoral pasada del 05 de junio, solicité a LUIS ALBERTO ALCOCER ANGUIANO, Director de Organización del IEQROO, me explicara los motivos por los cuales se estaban realizando tales capturas sin un resguardo adecuado de las listas nominales y con el riesgo de ser SUSTRAÍDAS, ALTERADAS O QUE SE LE DIERA UN USO INADECUADO. Sin embargo, el citado ALCOCER ANGUIANO, me dijo en mi oficina Y EN AUSENCIA DE TESTIGOS que no tenía que darme ninguna explicación, puesto que yo “No soy nadie” para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local, consecuentemente y ante la falta de respuesta de dicho servidor electoral que mediante oficio No. CE/CCG/045/16, de fecha 17 de agosto de 2016, recibido en la propia fecha a las 16:25 horas, dirigido a la LIC. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, PRESIDENTA CONSEJERA DEL IEQROO, le informé sobre los hechos referentes a la captura de información de la lista nominal, así como le solicité me proporcionara respuesta a diversos cuestionamientos. Así mismo anexé al escrito material fotográfico relativo a los hechos.

²⁵⁸ Visible a fojas 3460 a 3465, del legajo 5, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Asimismo, hice del conocimiento de dicha sustitución con copia del citado oficio a la LIC. CLAUDIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional del Estado de Quintana Roo con residencia en la Ciudad de Chetumal, el 17 de agosto de 2016 misma quien me acusó de recibido a las 18:30 horas.

Circunstancia que exterioricé primeramente con la finalidad de obtener respuestas y saber de los motivos por los cuáles se estaba dando tal captura de datos de las listas nominales así como para deslinde de cualquier responsabilidad en virtud de la realización de dichos actos de captura de información.

- Informe si existen personas a quienes les consten los hechos ocurridos el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, donde recibió en su oficina la visita de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, quien le dijo *“que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el Gobernador Roberto Borge Angulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia”*. Respecto de dicho cuestionamiento, la quejosa refirió lo siguiente:

No existen personas que le consten los hechos ocurridos en el interior de mi oficina, por tratarse de una acción personal y directa entre el Lic. José Luis González Nolasco y la suscrita. Es importante establecer, que los hechos se suscitaron en el interior de mi oficina, que si bien es cierto, en la actualidad la comparto con el licenciado que funge como mi asesor; no obstante, en dicha fecha no tenía bajo mi cargo asesor alguno, ni contaba con el apoyo de persona alguna que me asesorara.

Asimismo, señalo que únicamente contaba con el apoyo de la auxiliar que funge como secretaria, la C. Soemí Yadira Chacón Hernández, a quien tampoco le constan los hechos, pues su área de trabajo se encuentra en el pasillo del Instituto, ubicado en la parte externa de la oficina de la suscrita.

Es importante hacer mención de que las agresiones sufridas por las víctimas de violencia por parte de sus agresores, incluyendo las de índole verbal por lo regular son de realización oculta, es decir con ausencia de testigos que puedan presenciar y por tanto testificar las conductas desplegadas, como en el caso precisado entre la suscrita y el Director de Partidos Políticos de este Instituto C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NOLASCO.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Señale si existen personas que pudieran dar constancia de que, previo a la sesión ordinaria del Consejo General del referido Instituto Electoral, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la mayoría de los representantes de los partidos políticos y consejeros recibieron una llamada telefónica por parte de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, por medio de la cual se planeó un ataque en su contra y la hicieron responsable ante los medios de comunicación sobre el manejo de las listas nominales de electores. A dicho cuestionamiento la quejosa indicó lo siguiente:

En dicha sesión fui víctima de ataques en mi persona por diversas representantes de partidos políticos y de la Consejera Presidenta MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera THALÍA HERNÁNDEZ ROBLEDO y del Consejero JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE, tal y como lo señalé en mi escrito de queja inicial presentada ante Usted, no obstante refiero que SI EXISTE UNA PERSONA que pudiera dar constancia de que lo previo a la sesión ordinaria del Consejo General del referido Instituto Electoral, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se suscitó tal situación, ya que en ese entonces era representante del Partido de la Revolución Democrática, me comentó que le había llamado la C. MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, para decirle que era un mal entendido lo que la suscrita estaba diciendo, que la captura de los datos de las listas nominales se había hecho en todos los procesos electorales por cuestión de numeraria y estadística y que le solicitaba le apoyara a la citada CARRILLO MEDINA en caso de que surgiera alguna controversia en dicha sesión, así mismo le señaló que sabe que habían sido llamados diversos representantes de partidos políticos así como consejeros para que la respalden por considerar que es legal tal captura, señalándome entonces que la suscrita había filtrado las fotografías de los hechos a los medios.

LIC. EDUARDO ARREGUÍN CHÁVEZ, representante del Partido de la Revolución Democrática, en ese entonces y quien actualmente desconozco su paradero ya que el mismo ya no es representante de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. No obstante por redes sociales me he enterado que trabaja en el Congreso del Estado de Quintana Roo en el área de Biblioteca de dicha Institución.

- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a **Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director**

de Organización del IEQROO²⁵⁹, para que proporcionara, entre otra, la siguiente información:

- Indique cuál es su relación con los Consejeros Electorales del IEQROO, es decir, si se reúne regularmente con alguno de ellos, o con todos, de igual suerte, indique qué tipo de relación tiene con la Consejera Claudia Carrillo Gasca. A dicho cuestionamiento, el funcionario respondió lo siguiente:

“quiero hacer mención que la relación que tengo con cada uno de los consejeros electorales es exclusivamente laboral, así como cada una de las reuniones que he llevado a cabo con los antes mencionados, en el mismo sentido con la Consejera Claudia Carrillo Gasca. No omito señalar que, toda vez que las actividades desarrolladas por la Dirección a mi cargo se encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Estadística e Informática del Consejo General del Instituto, en tal sentido, el suscrito lleva a cabo un mayor número de reuniones formales de trabajo con las Consejeras electorales y Consejeros electorales que integran dicha comisión.”

- Indique si Usted y la Dirección a su cargo participó en la captura de la información de la lista de electores de todo el Estado el pasado diecisiete de agosto del dos mil dieciséis. Y de ser el caso, informe el motivo o razón por la que se llevó a cabo dicha captura, y si fue realizada por instrucción expresa de alguien. A tal cuestionamiento el funcionario respondió lo siguiente:

“...informo que, en la fecha que se refiere, personal adscrito a la Dirección de Organización a mi cargo participó en la organización para la captura de la información de la lista de electores del Estado. En relación con lo anterior, señalo que la captura fue realizada en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en el Programa Operativo Anual (POA) 2016, del propio Instituto, en el que se estableció que en el mes de Diciembre de 2016 se debía presentar el compendio de resultados electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2016.”

En efecto, dicha normatividad establece que una de las atribuciones de la Dirección de Organización es la de rendir informes estadísticos y de participación ciudadana respecto a los resultados de los procesos

²⁵⁹ Visible a fojas 3510 a 3513, del legajo 5, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

electorales, para lo cual es necesaria la obtención de determinados datos contenidos en las referidas listas de electores. Siendo estos datos única y exclusivamente, la clave de elector sin los últimos tres dígitos de la misma de los ciudadanos que contenían el marcaje de que habían emitido su voto el pasado cinco de junio del año en curso.

No omito manifestar que dichas listas fueron utilizadas en virtud de que constituyen el único insumo para obtener los datos necesarios para integrar las estadísticas electorales de participación ciudadana, tales como la fecha de nacimiento, entidad de origen y sexo, datos que son capturados únicamente con fines estadísticos para la obtención de la participación ciudadana, por rango de edad, entidad de origen y sexo, agrupada a nivel estatal, municipal o distrital.

- Precise si en dicha fecha, la Consejera Claudia Carrillo Gasca le cuestionó sobre las circunstancias bajo las cuales se estaba realizando la captura de información de las listas nominales de electores que fueron utilizadas en la jornada electoral celebrada el cinco de junio de dos mil dieciséis, al respecto el funcionario en cuestión respondió lo siguiente:

“me permito manifestar que efectivamente la referida Consejera me realizó el citado cuestionamiento....en respuesta a la pregunta de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, le informé que dicha captura se estaba realizando debido a que la Dirección a mi cargo, en cumplimiento al multicitado artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto, debe rendir a la Junta General un informe estadístico sobre las elecciones y la participación ciudadana y que dicha actividad se encontraba prevista en el Programa Operativo Anual (POA) 2016 del Instituto.

- Informe si en la misma fecha o en cualquier otra, se ha referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente o similar sentido: *“que no tenía que darle ninguna explicación, que ella no era nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local.”* Sobre dicho cuestionamiento el funcionario referido refirió lo siguiente:

“manifiesto rotundamente que en ningún momento me he referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el sentido que se señala en el requerimiento de mérito, por lo que desconozco los motivos por los cuales se me pretende imputar tales manifestaciones.”

- Respuesta al requerimiento de información realizado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por la autoridad sustanciadora, a **José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión** del IEQROO²⁶⁰, a quien, entre otros, se le formularon los siguientes cuestionamientos:

- Indique si Usted y la Dirección a su cargo participó en la captura de la información de la lista de electores de todo el estado el pasado 17 de agosto del dos mil dieciséis. A dicho cuestionamiento el referido funcionario indicó lo siguiente:

“...el suscrito no participó en la captura de la información relativa a la lista de electores sin embargo personal adscrito a la Dirección a mi cargo brindó apoyo para el desarrollo de esta actividad institucional.”

- De ser el caso, informe el motivo o razón por la que se llevó a cabo dicha captura, y si fue realizada por instrucción expresa de alguien. A dicho cuestionamiento el referido funcionario indicó lo siguiente:

“...como parte del cúmulo de actividades institucionales la captura de diversa información de la Lista Nominal, se llevó a cabo con fines estadísticos, actividad que fue realizada por las áreas técnicas de este instituto, legalmente facultadas para ello, siendo estas la Dirección de Organización y la Unidad Técnica de Informática y Estadística, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, fracciones III y VI, así como 57 fracción XI; respectivamente, ambos de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

De los preceptos antes mencionados, se desprende la facultad de la Dirección de Organización para recabar de los órganos desconcentrados de este instituto, copias del acta de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral, así como rendir a la Junta General un informe estadístico sobre las elecciones; y a la Unidad Técnica de Informática en mención, recopilar datos de los órganos de este Instituto, para la elaboración de la numeralia y estadística correspondiente.

De ahí que como se ha señalado con anterioridad el personal adscrito a la Dirección de Partidos Políticos brindó apoyo para el desarrollo de la citada actividad institucional a la Dirección de Organización y a la Unidad Técnica de Informática, ambas de este Instituto.

²⁶⁰ Visible a fojas 1030-1033 del anexo 3, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Indique cuál es su relación con los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, es decir, si se reúne regularmente con alguno de ellos, o con todos, de igual suerte, indique qué tipo de relación tiene con la Consejera Claudia Carrillo Gasca. A dicho cuestionamiento el referido funcionario indicó lo siguiente:

“...debo puntualizar que siempre me he conducido con respeto y de manera cordial con cada uno de ellos, esto con independencia de que solo algunos de ellos integran las Comisiones de Partidos Políticos y Radiodifusión, así como la de Fiscalización, en las que conforme a la norma aplicable funjo como Secretario Técnico, por lo que el trato es más frecuente con los integrantes de las mismas, entre ellos la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, para efecto de atender temas inherentes de la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto.

- Indique si el pasado 18 de agosto del dos mil dieciséis, o en alguna otra fecha, se refirió a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente sentido: “que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el gobernador Roberto Borge ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia” y de ser el caso, indique el contexto en el que manifestó lo anterior. A lo anterior el director referido manifestó lo siguiente:

“...el suscrito siempre me he dirigido con respeto hacia los compañeros de trabajo, así como cualquier persona con la que tenga que conviva ya sea en el ámbito laboral o personal, sin importar la jerarquía del puesto que desempeñen, de ahí que resulten falsas las expresiones con las que supuestamente me dirigí a la Consejera Electoral. En este sentido solicito a esta autoridad electoral nacional aplique el principio de presunción de inocencia, en tanto no se presente prueba fehaciente que acredite los señalamientos realizados hacia mi persona.”

- Respuestas al requerimiento de información formulado, el tres de marzo de dos mil diecisiete, por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Thalía Hernández Robledo**, a los **Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Luis Carlos Santander Botello, Sergio Avilés Demeneghi**, así como a **Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional**, a **Armando Miguel**

Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza y a Mauricio Morales Beiza, Representante del Partido del Trabajo todos ante el Consejo General del *IEQROO*, a quienes se les requirió que indicaran si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO* del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibieron una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.

A dicho cuestionamiento, los sujetos indicados señalaron lo siguiente:

- **Consejera Thalía Hernández Robledo:**²⁶¹ *“Niego el haber recibido llamada o comunicación alguna por parte de la Consejera Presidenta de este Instituto Mayra San Román Carrillo Medina o de cualquier otra persona que actuara en su representación, con la finalidad alguna de atacar o responsabilizar a la Consejera Claudia Carrillo Gasca de los hechos que se mencionan o de cualquier otro”.*
- **Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche:**²⁶² *“No, no recibí llamada o comunicación diversa”.*
- **Consejero Jorge Armando Poot Pech:**²⁶³ *“Ni en la fecha referida ni en ninguna otra ocasión he recibido llamada o comunicado por parte de persona alguna para hacer responsable a la Consejera Carrillo Gasca de algún acto; como Consejera Electoral, las decisiones tomadas al interior del Instituto en relación a los Acuerdos o Resoluciones, son motivador por convicción propia y de carácter profesional; y no por instrucción de persona alguna”.*
- **Consejero Sergio Avilés Demeneghi:**²⁶⁴ *“En fecha 17 de agosto de 2016, recibí una llamada de la Consejera Presidenta, con la finalidad de enterarme que la Consejera Claudia Carrillo Gasea, se encontraba inconforme con una actividad que se estaba llevando a cabo por instrucciones de Presidencia, lo cual consistía en capturar información para realizar una numeralia del proceso electoral, a lo cual en ese momento*

²⁶¹ Visible a fojas 3506 a 3508, del legajo 5, del expediente.

²⁶² Visible a fojas 3707 a 3709, del legajo 5, del expediente

²⁶³ Visible a fojas 3619 a 31621, del legajo 5, del expediente

²⁶⁴ Visible a fojas 3661 a 3668 del legajo 5, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

le comente que estaba de acuerdo con el malestar de la Consejera Claudia, ya que si bien es cierto con anterioridad, (15 de agosto de 2016) vía mensajes de WhatsApp se pidió la colaboración del personal secretarial a cargo de los consejeros de actividades que consistían apoyo a la Dirección de Organización en la captura de información, esto fue sin informar expresamente cuales eran los datos a capturar. Por tanto, una vez enterado le expresé a la Consejera Presidenta que desde mi punto de vista eran dichas actividades contrarias a los lineamientos del propio instituto y no existía justificación alguna para realizar ese tipo de actividades inciertas.

Es así que el propio 17 de agosto de 2016 mediante oficios CE/SAD/043/2016 y CE/SAD/044/2016, dirigidos a la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina el suscrito informó que el 18 y 19 de agosto estaría fuera de la ciudad atendiendo asuntos ante la Unidad Técnica de lo contencioso Electoral del INE, así como se solicitó informe la finalidad de la captura de diversa información de las Listas Nominales, así como el sustento del mismo, respectivamente. (Documento que anexo a la presente como medio de convicción consistente en el ANEXO 1 y 2).

En razón de no haberse atendido el oficio referido, mediante oficio CE/SAD/048/2016 de fecha 22 de agosto de 2016, solicité nuevamente a la Presidenta me informare en relación al uso de las listas nominales. (Documento que anexo a la presente como medio de convicción consistente en el ANEXO 3).

Es así que el día 23 de agosto la Consejera Presidenta se apersonó a mi oficina para platicar sobre el tema de las listas nominales, solicitándome mi apoyo incondicional durante la Sesión Ordinaria de Consejo General próxima a celebrar ese día, al respecto el suscrito dejé en claro mi postura en el sentido de que tanto el Convenio de Colaboración como el anexo técnico era claro en señalar que no dejaban posibilidad en capturar o hacer libre uso y disposición de la información y documentación que el INE mediante la DERFE entregó al IEQROO.”

- **Consejero Luis Carlos Santander Botello:**²⁶⁵ *“En ninguna oportunidad he recibido llamada o comunicación informal de la Consejera Presidenta o de persona que la represente, en relación al manejo realizado en el IEQROO de las listas nominales de electores específicamente sobre la responsabilidad en la difusión que a ese manejo se dio en medios de comunicación. Sin embargo, no omito manifestar que en sesión del Consejo General del IEQROO de fecha 23 de agosto de 2016 la Consejera Presidente dio lectura en el punto de Asuntos Generales a un informe, motivado por solicitud escrita del suscrito del 19 de agosto de 2016 así como otras solicitudes de integrantes del Consejo General. Informe por medio del cual a su juicio daba respuesta sobre la legalidad y justificación en el manejo de los listados nominales para la generación de estadísticas de participación, ciudadana en el proceso electoral local 2016. Con fecha 31 de agosto de 2016 la Consejera Presidenta presentó por escrito a los integrantes del Consejo General una ampliación a su informe del 23 y 31 de agosto anterior. En los informes del 23 y 31 de agosto de 2016 la Presidenta Consejera no se refiere en específico a la difusión e indagatorias que los medios de comunicación hicieran sobre el*

²⁶⁵ Visible a fojas 3475 a 3478, del legajo 5, del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

uso de las listas nominales ni, menciona un ataque a la Consejera Claudia Carrillo Gasca haciéndola responsable”.

- **Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IEQROO:**²⁶⁶ *“en ningún momento, como lo fue, previo a la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo del 23 de agosto del año 2017, ni en alguna otra fecha, he recibido llamada alguna o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores. Máxime que en ninguna ocasión he recibido alusiones de parte de la Consejera Presidenta en contra de algún otro integrante del órgano de dirección del Instituto.*

A mayor abundamiento me permito aducirle que la comunicación que he entablado con la Consejera Presidenta del organismo comicial local, ha sido invariablemente respecto de asuntos de índole institucional.”

- **Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del IEQROO:**²⁶⁷ *“En respuesta al mismo, manifiesto que en ningún momento, ni previo, ni durante o después del día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, he recibido algún tipo de llamada o comunicación de parte de la Consejera Presidenta del Instituto electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina ni de ninguna otra persona que haya tenido como contenido y/o objeto la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, ni con el fin de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores no con ningún fin diverso.”*
- **Mauricio Morales Beiza, Representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IEQROO:**²⁶⁸ *“Al respecto, me permito informarle que en la fecha señalada por esta autoridad electoral, o en alguna otra, NO recibí llamada o comunicación diversa por parte de la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina o persona en su representación, en la cual se hiciera alusión a un ataque en contra de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ni mucho menos con el fin de hacerla responsable de presuntas actuaciones de los medios de comunicación a los que se hace referencia.*

Lo anterior se afirma ya que la comunicación entre el partido político el que represento y ese Instituto, siempre se ha realizado a través de los conductos formales que existen para ello, así como en estricto apego a las disposiciones legales de la materia, esto es,

²⁶⁶ Visible a fojas 3705 a 3706, del legajo 5, del expediente

²⁶⁷ Visible a fojas 3504 a 3505, del legajo 5, del expediente

²⁶⁸ Visible a fojas 3710 a 3711, del legajo 5, del expediente

a través de oficios, convocatorias, notificaciones oficiales, entre otros; por lo que puedo afirmar que dicha comunicación en todo momento ha sido para asuntos estrictamente institucionales y siempre al margen del respeto y la cordialidad.”

- **Acta de certificación de hechos** levantada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por la asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva del *INE* en Quintana Roo, por escrito delegatorio de funciones de Oficialía Electoral del Secretario Ejecutivo del *INE*, número INE/SE/0153/2015.²⁶⁹

18. Tardanza en la remisión del audio y la versión estenográfica de una entrevista de la quejosa solicitada al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO.

La quejosa refiere que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se publicó una nota en el *link* SCR noticias²⁷⁰ en la red social Facebook intitulada ***Se detracta consejera electoral en acusaciones por utilización de listas nominales***. La quejosa afirma que, al considerar que dicha nota era falsa, solicitó a Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto local, por escrito CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la versión estenográfica del audio de las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación al término de la sesión del Consejo General del pasado veintitrés de agosto, con la finalidad de solicitar su derecho de réplica.

De acuerdo a lo manifestado por la quejosa, fue hasta el treinta de agosto siguiente que el Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, le informó que dichos audios fueron enviados a su correo electrónico institucional, situación que, a dicho de la quejosa, no pasó.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) Se tiene por acreditado** que por oficio CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó al Titular de la Unidad Técnica

²⁶⁹ Visible en el Anexo 1, Foja 360 y siguientes del expediente.

²⁷⁰ Dicha nota es consultable en http://www.solqr.com.mx/periodico/index.php/deportes/deporte-local/index.php?option=com_content&view=article&id=36696:2016-08-24-15-03-42&catid=43:locales&Itemid=565

de Comunicación Social copia del audio de la entrevista que le fuera realizada al término de la sesión celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como la elaboración de una versión estenográfica de la misma.

- b) **Se tiene por acreditado** que el veintiséis de agosto siguiente, se envió al correo electrónico iegroo.claudia.carrillo@gmail.com audio de la entrevista con versión estenográfica, mismo que fue remitido de nueva cuenta el primero de septiembre del mismo año de forma completa, por la misma vía.
- c) **No se tiene por acreditado** que la quejosa haya solicitado de manera formal al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social su apoyo para ejercer su derecho de réplica.
- d) **No se tiene por acreditado** que la quejosa haya ejercido formalmente su derecho de réplica por la nota precisada en el presente hecho.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a *Alfredo Figueroa Ulloa*, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, por medio del cual le solicitó copia del audio de la entrevista posterior a la sesión de veintitrés de agosto anterior, así como que se realizara una versión estenográfica de la misma.²⁷¹
- **Copia simple** del oficio UTCS/306/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, con sello de recibido de treinta de agosto siguiente, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, dirigido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, mediante el cual remite el audio y versión estenográfica de la entrevista que le fue realizada el veintitrés de agosto anterior, la cual había sido enviada al correo institucional iegroo.claudia.carrillo@gmail.com.²⁷²

²⁷¹ Visible a foja 1889, del anexo 4 del expediente.

²⁷² Visible a fojas 308 y 391 del anexo 1 del expediente.

- **Copia certificada** del oficio UTCS/310/16, de dos de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, por medio del cual hace entrega de la versión estenográfica completa, de la entrevista que se le realizó el veintitrés de agosto del mismo año, y le informa que ésta fue enviada el primero de septiembre al correo institucional iegroo.claudia.carrillo@gmail.com.²⁷³
- **Copia certificada** de la versión estenográfica de una entrevista realizada a Claudia Carrillo Gasca por el reportero Samuel Caamal, relacionada con la denuncia interpuesta por la quejosa por el supuesto uso indebido de las listas nominales.²⁷⁴
- **Copia certificada** de la impresión de pantalla del correo electrónico enviado a la cuenta iegroo.claudia.carrillo@gmail.com, de la cuenta prensaiegroo@gmail.com, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, y en el que se advierte la frase “Envío Audio de entrevista con versión escenográfica solicitada”.
- **Copia certificada** de la impresión de pantalla del correo electrónico enviado a la cuenta iegroo.claudia.carrillo@gmail.com, de la cuenta prensaiegroo@gmail.com, el primero de septiembre de dos mil dieciséis, y en el que se advierte la frase “Envío versión estenográfica y audio de la entrevista completa realizada a la consejera Claudia Carrillo Gasca”.
- Respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Claudia Carrillo Gasca**, el seis de septiembre de dos mil dieciséis,²⁷⁵ en el que, entre otras cuestiones manifestó lo siguiente:

“ ...

Es importante precisar, que a la fecha los “links” derivados de tales notas que me afectan en mi prestigio y honor siguen publicadas en las redes sociales.

²⁷³ Visible en copia certificada en el anexo 4, foja 1890; legajo 7, foja 4675 y, en copia simple, en el anexo 1 foja 392 del expediente.

²⁷⁴ Visible a foja 1891, del anexo 4 del expediente.

²⁷⁵ Visible en el anexo 1, Foja 381 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

*Es a todas luces observable el constante hostigamiento realizado hacia mi persona por parte de diversos medios de comunicación, tal es así que el pasado veintitrés de agosto del año en curso, se publicó una nota en la red social denominada Facebook, del link generado de la publicación realizada por el medio de comunicación **SCR noticias** en fecha, donde señalan que me “detracte” quizá refiriéndose a que retracte, situación que es por demás falsa, lo anterior se observa en el link http://www.silgr.com.mx/periodico/index.php/deportes/deporte-local/index.php?option=com_content&view=article&id=36696:2016-08-24-15-03-42&catid=43:locales&Itemid=565*

(Se insertan imágenes)

En razón de que como he referido tal información es FALSA, solicite al C. JOSE ALFREDO FIGUEROA OREA, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, mediante escrito número CCG/062/16 de fecha veintiséis de agosto, la versión estenográfica del audio de entrevista que me hicieran los medios de comunicación al término de la Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintitrés de agosto del año en curso, (documento que exhibo en copia simple) con la finalidad de pedir de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de REPLICA, haciendo la aclaración que el citado FIGUEROA OREA, mediante oficio UTCS/305/16 de fecha veintiséis de agosto del presente año, (documento que exhibo en copia simple) el cual fue recibido hasta el 30 de agosto de 2016, en el cual únicamente manifiesta que se realizó el envío correspondiente a mi correo institucional iegroo.claudia.carrillo@gmail.com y revisé posteriormente en fecha treinta y uno de agosto por la noche, que tanto la versión estenográfica como el audio estaban incompletos aun y cuando el propio JOSE ALFREDO FIGUEROA OREA y personal a su cargo se encontraban grabando tal entrevista, ante lo cual y cuestionándolo al respecto me negó tener el audio completo. A lo que solicité de nueva cuenta y manera económica la información al C. JOSE ALFREDO FIGUEROA OREA, dando nuevamente contestación mediante oficio UTC5/310/16 de fecha 2 de septiembre de 2016, (documento que exhibo en copia simple) mediante la cual manifiesta que la versión estenográfica completa de la entrevista fue enviada desde el día primero del mismo mes y año, el cual me fue remitido al correo institucional iegroo referido, en esta ocasión de forma completa.

De lo anterior, el C. JOSE ALFREDO FIGUEROA OREA, sin que el mismo en razón del puesto que ostenta haya realizado alguna aclaración o derecho de réplica. Así la suscrita ha realizado tal aclaración solo mediante mensaje de Facebook personal, pues hasta el momento tengo conocimiento que SCR noticias es una fuente aparentemente manejada en redes sociales por SAMUEL CAAMAL RIVERA, lo cual me hizo de conocimiento el multicitado FIGUEROA OREA.

Es importante mencionar que a falta de apoyo de algún área técnica que me auxilie en mis diversas funciones, o de un asesor u asistente, para continuar

el trámite legal sobre el derecho de réplica, máxime que el día treinta y uno de agosto, primero y dos de septiembre me encontraba fuera del estado, en un evento de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, retomando mis labores en fecha cinco de septiembre, es que hasta a la fecha no he realizado un procedimiento ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

...

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a **Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO**²⁷⁶, en el que, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:

“ ...

Por cuanto a este inciso, me permito informarle que no obra en los archivos de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, solicitud formal por parte de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca respecto al derecho de réplica en comento.

Sin embargo me permito informar que el día 12 de septiembre del año en curso, la Consejera Electoral de manera económica solicitó realizar una carta de aclaración o replica respecto a una nota publicada en una página de la red social “Facebook” “SCR Noticias”, la cual me pidió se dirigiera al reportero conocido como Samuel Caamal Rivera, quien, a dicho de la Consejera, es el responsable de la publicación realizada. No obstante a lo anterior, una vez que me apersoné con el citado reportero para gestionar una aclaración por parte de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, éste se negó a recibir dicho escrito, argumentando que la única forma en que lo recibiría, sería de manos de la propia Consejera.

Al informar lo anterior la citada ciudadano, me manifestó vía mensajes de texto que desistiera respecto a la solicitud de réplica, puesto que iba a proceder legalmente.

...”

19. Negativa de asignar un asesor de forma permanente a la quejosa, así como el que su oficina es la única que se encuentra en la planta baja del edificio.

La quejosa refiere que se le ha negado en todo momento tener un asesor de forma permanente para auxiliarla en el desahogo de sus actividades, ya que únicamente,

²⁷⁶ Visible en el anexo 4, foja 1794 del expediente.

por un periodo de tres meses, le fue asignada una persona sin experiencia en materia electoral, recién egresado, sin que cuente por el momento con ningún tipo de apoyo directo ni de ninguna área técnica, ya que, según su dicho, así lo instruyó la Presidenta del Instituto.

Asimismo, la quejosa refirió en su escrito de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, que su oficina es la única que se encuentra ubicada en la planta baja.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que, al veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, todas las consejeras y consejeros, incluida la Presidenta, tenían asignada únicamente a una secretaria.
- b) **Se tiene por acreditado** que del dieciséis de febrero al quince de junio de dos mil dieciséis, la quejosa contó con un asesor adscrito a su oficina, sin que se pueda acreditar su experiencia o su forma de selección.
- c) **Se tiene por acreditado** que, al ocho de marzo de dos mil diecisiete, se encontraban adscritas a la oficina de la quejosa dos personas, una secretaria asignada desde el once de noviembre de dos mil quince y una persona de apoyo contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, asignado desde el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
- d) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera solicitado la contratación de un asistente o el apoyo de alguna área técnica del Instituto y que ello hubiera sido negado por instrucciones de la Consejera Presidenta, como lo afirma la quejosa.
- e) **Se tiene por acreditado** que la quejosa ha contado con personal en los mismos términos que el resto de sus compañeros, con excepción de la Consejera Presidenta, quien tiene asignada a una persona adicional, lo cual se encuentra justificado debido a la naturaleza del cargo que ostenta.

- f) **Se tiene por acreditado**, que la oficina de la Consejera Electoral se encuentra ubicada en la planta baja del edificio del *IEQROO*, que es la única oficina de consejeros que se encuentra ubicada en dicha planta, y que la distribución de las oficinas entre los consejeros se llevó a cabo por consenso entre ellos, sin que dicha afirmación se encuentre controvertida por la quejosa.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora **a la quejosa**, el tres de marzo de dos mil diecisiete²⁷⁷, en la que manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: *“La suscrita actualmente cuenta con dos personas a mi cargo. C. Soemí Yadira Chacón Hernández.- Auxiliar a partir de noviembre de 2015, con funciones secretariales. Lic. Alejandro Brito Soberanes, Asesor Jurídico a partir de noviembre de 2016, el cual está bajo el régimen de Servicio Profesional Electoral por concepto de honorarios.*
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Secretario General del IEQROO**²⁷⁸, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:
 - *Conforme a lo informado por la Dirección de Administración y Planeación de este Instituto, como órgano competente en términos de lo establecido en el artículo 52, fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, a la presente fecha las y los Consejeros Electorales que integran el Consejo General no cuentan con una plantilla de asesores y/o asistentes adscritos a los mismos; solamente cuentan con personal adscrito en lo particular con funciones de secretarías.*

Para los efectos que correspondan, de forma adjunta, se remite copia debidamente certificada de la plantilla de personal adscrito al área de Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General de este Instituto.
 - *En este aspecto, quien suscribe desconoce de la existencia de una metodología utilizada al efecto; por otra parte, a cuestionamiento expreso de la Dirección de Administración, con base a lo establecido en la fracción II del artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se informó a esta Secretaría que no existe metodología alguna al respecto, siendo la misma, en su caso, una decisión de carácter administrativa acorde a la disponibilidad presupuestal que define la*

²⁷⁷ Visible en el legajo cinco, fojas 3460 y siguientes.

²⁷⁸ Visible en el anexo 3, fojas 1043 y siguientes, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Presidencia de este Instituto de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, fracción XV de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Director de Administración y Planeación** del IEQROO, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:
 - Indique si la Dirección a su cargo contrata, regula las altas, bajas, readscripción del personal y nómina del Instituto: *“Esta Dirección únicamente realiza los trámites administrativos relacionados con las contrataciones, así como las altas y bajas del personal de este órgano electoral. De igual forma, es la encargada del manejo de las nóminas del Instituto. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la fracción X del artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.”*
 - Indique cuáles son los criterios de selección del personal adscrito a las Consejeras y Consejeros: *“Cada uno de las Consejeras y Consejeros determina al ciudadano que estará laborando a su cargo. El personal secretarial a cargo de las y los consejeros electorales ya se encontraba adscrito a esa área, previo a la designación de dichos consejeros, quienes en su momento manifestaron su consentimiento, para que dicho personal continuara laborando en su área.”*
 - Señale el número de personas adscritas a las oficinas de cada una de las Consejeras y los Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sus respectivos nombres, cargos y funciones, incluido el personal adscrito a la oficina de la Consejera Presidenta.

“El personal adscrito al área de Consejeros Electorales, es el que a continuación se enlista:

Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 2 servidoras electorales, siendo éstas las siguientes:

1. *Patricia del Rosario Cortés Pastrana, Secretaria Particular, quien desempeña diversas funciones entre las que se encuentran, llevar la agenda de la Consejera Presidenta; brindar apoyo en la logística de las actividades de la Consejera Presidenta y realizar las acciones necesarias para recabar información o documentación que requiera la Consejera Presidenta; y*
2. *Isabel Cristina Canul Cárdenas, Secretaria de Presidencia, quien desempeña funciones propias del Secretariado.*

Adicionalmente, cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, para lo cual se contrató al ciudadano Tomás Francisco Jiménez Mejía, quien desempeña los servicios requeridos por la Consejera Presidenta.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Maestra Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo esta la siguiente:

1. *Karla Patricia Olvera Gutiérrez, Asistente de Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias del Secretariado.*

Adicionalmente, cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, para lo cual se contrató al ciudadano Adolfo Gama Martínez, quien desempeña los servicios requeridos por la Consejera Electoral en referencia.

Maestro Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral, del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo esta la siguiente:

1. *María Esther Castillo Magil, Asistente de Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias del Secretariado.*

Adicionalmente, cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, para lo cual se contrató al ciudadano Edwin Fernando Aguilar Díaz, quien desempeña los servicios requeridos por el Consejero Electoral en referencia.

Licenciado Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo esta la siguiente:

1. *Guadalupe del Socorro Santín Villanueva, Asistente de Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias de Secretariado.*

Cabe señalar que a la presente fecha, el Consejero en referencia no cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes.

Licenciada Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo ésta la siguiente:

1. *Soemi Yadira Chacón Hernández, Asistente del Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias de Secretariado.*

Adicionalmente, cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, para lo cual se contrató al ciudadano Alejandro Brito Soberanis, quien desempeña los servicios requeridos por la Consejera Electoral en referencia.

Maestro Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo ésta la siguiente:

1. *Flor Angélica Alayón Santoyo, Asistente de Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias del Instituto.*

Adicionalmente, cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes, para lo cual se contrató a la ciudadana Nallely

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Anahí Aragón Serrano, quien desempeña los servicios requeridos por el Consejero Electoral en referencia.

Maestro Luis Carlos Santander Botello, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto, tiene adscrita a 1 servidora electoral, siendo ésta la siguiente:

1. *María Rosalina Pérez Salto, Asistente de Consejeros Electorales, quien desempeña actividades propias de Secretariado.*

Cabe señalar que, a la presente fecha, el Consejero en referencia no cuenta con personal contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes.

- Informe si las consejeras y consejeros cuentan con personal adicional durante el desarrollo de procesos electorales y, de ser el caso, con qué personal contó cada uno de los consejeros en el último proceso electoral desarrollado en el Estado de Quintana Roo. *“Durante el pasado proceso electoral local ordinario 2016, los Consejeros Electorales no contaron con personal adicional al señalado con antelación, esto es, contaron con una Secretaria y otro servidor electoral a su cargo.”*
- **Original**, del oficio DAP/083/2017, firmado por Víctor Manuel Interian López, Director de Administración del IEQROO, a través del cual da respuesta a la Consejera Claudia Carrillo, sobre el personal que tiene adscrito.²⁷⁹
- **Copia certificada** del documento que contiene *la plantilla de personal adscrito al área de Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del IEQROO*.²⁸⁰
- **Copia certificada** del contrato individual de trabajo por prestación de servicios profesionales asalariados, mediante el cual se contrató a Felipe de Jesús Sánchez Sansores, quien fue contratado como asesor del dieciséis de febrero al quince de junio de dos mil dieciséis, así como de oficios suscritos por la quejosa en donde consta que dicha persona estuvo adscrito a su oficina.²⁸¹

²⁷⁹ Visible a foja 3466, del legajo 5, del expediente.

²⁸⁰ Visible a foja 1256, del anexo 3, del expediente.

²⁸¹ Visible a fojas 3065 a 3074, del legajo 5, del expediente.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Secretario General** del *IEQROO*²⁸², mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en el que informó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

Dicho hecho no es del ámbito de las atribuciones de esta Secretaría General, no obstante, pro experiencia laboral en este Instituto, la oficina que actualmente ocupa la Consejera Claudia Carrillo Gasca, siempre ha sido oficina destinada para algún Consejero integrante del Consejo General, la cual se encuentra en la planta baja del edificio de este Instituto, por razones de espacio insuficiente en la planta alta; además, por otra parte, a cuestionamiento expreso a la Dirección de Administración, con base a lo establecido en la fracción IX del artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se informó a esta Secretaría que en el particular la distribución actual de las oficinas que albergan a las Consejeras y los Consejeros Electorales se decidió consensuadamente entre los mismos.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Presidenta** del *IEQROO*²⁸³, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en el que informó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“La determinación de qué consejera o consejero ocupaba qué oficina fue un acuerdo consensuado entre mis compañeras y compañeros consejero, siendo que de manera libre y personal cada uno decidió qué oficina ocuparía, lo mismo que con el vehículo oficial que utilizarían.

Respecto de la oficina que ocupa la Consejera Claudia Carrillo Gasca, es pertinente señalar que siempre ha sido utilizada por consejeros electorales, desde que este Instituto tiene como sede el edificio actual, habiendo estado en la misma los otrora consejeros electorales Mario Alberto Aguilar Laguardia y Vicente Aguilar Rojas, en sus respectivos periodos.”

- Plano de distribución de espacios de trabajo de cada una de las áreas, unidades técnicas, áreas de apoyo, y de oficinas de las Consejeras y Consejeros Electorales del *IEQROO*.²⁸⁴

20. Omisión de la Consejera Presidenta de instruir al Director de Organización para que diera respuesta a diversos cuestionamientos realizados por la quejosa en la sesión del Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

²⁸² Visible a fojas 373 a 378, del legajo 1, del expediente.

²⁸³ Visible a fojas 585 a 593, del legajo 1, del expediente.

²⁸⁴ Visible a foja 1257, del anexo 3, del expediente.

La quejosa refiere que el treinta de agosto de dos mil dieciséis presentó escrito dirigido a la Consejera Presidenta, por el que le solicitó instruyera al Director de Organización para que le diera respuesta a las preguntas que formuló durante la sesión del Consejo General del pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que en la sesión del Consejo General del *IEQROO* celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la discusión de asuntos generales, la quejosa y otros miembros del Consejo General cuestionaron la captura de información contenida en las listas nominales utilizadas en el proceso electoral celebrado en el mismo año.
- b) **Se tiene por acreditado** que en una de sus intervenciones la quejosa solicitó a la Consejera Presidenta que instruyera al Director de Organización a efecto de que le informara, entre otras cuestiones, respecto de la metodología, resguardo y custodia de las listas nominales.
- c) **Se tiene por acreditado** que por oficio de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario General, por indicaciones de la Consejera Presidenta, remitió a la quejosa, un informe rendido por la propia Presidenta relacionado con diversos cuestionamientos efectuados por integrantes del Consejo General en la sesión ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.
- d) **Se tiene por acreditado** que por oficio de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó a la Consejera Presidenta que instruyera al Director de Organización que atendiera a los cuestionamientos realizados por ésta en la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto del mismo año.
- e) **Se tiene por acreditado** que el trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Director de Organización, en atención a una instrucción de la Consejera

Presidenta dio respuesta a la quejosa y le hizo referencia al informe que previamente le había sido remitido por conducto del Secretario General del IEQROO.

- f) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera controvertido, bajo ningún medio, el informe de la presidenta que le fuera remitido por el Secretario General y referido como respuesta a su solicitud por parte del Secretario de Organización, ambos del IEQROO.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia certificada** del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis²⁸⁵, que en lo que interesa, es del tenor siguiente:

***Consejera Claudia Carrillo Gasca:** "...pues aprovechando también mi intervención a usted Consejera Presidenta, instruya al Director de Organización, a efecto de que informe a la suscrita, la metodología de control, de resguardo y custodia así como uso de las listas nominales y el lugar físico en donde actualmente se encuentran resguardadas dichas listas, así como justifica el motivo por el cual se encontraban capturando en diferentes áreas, como es el caso del área de secretarías, separado de donde estaba el personal del Instituto; asimismo, solicito por su conducta que instruya a dicho Director de Organización, conteste que medidas necesarias y pertinentes ha realizado a fin de evitar la destrucción, sustitución; comercialización alteración o Uso indebido de listas nominales..."*

- **Copia simple** del oficio CE/CCG/055/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo instruya a Luis Alberto Alcocer Anguiano para que conteste diversos cuestionamientos.²⁸⁶
- **Copia certificada** del oficio DO/258/2016, de trece de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Directo de Organización del IEQROO, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual dio respuesta al oficio CE/CCG/055/16, y le refirió que el treinta y uno de agosto del mismo año el Secretario General remitió a los integrantes del Consejo General el

²⁸⁵ Visible a fojas 258 a 300 del legajo 1 del expediente.

²⁸⁶ Visible en el anexo 1, foja 282, así como legajo 1, foja 311 del expediente.

documento denominado “*Informe relativo a la generación de estadísticas de participación ciudadana del proceso electoral local ordinario 2016 en el Estado de Quintana Roo.*”²⁸⁷

- Copia certificada del oficio SG/879/2016, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual el Secretario General del *IEQROO* remitió a la Consejera Claudia Carrillo Gasca un informe rendido por la Consejera Presidenta relacionado con diversos cuestionamientos efectuados por integrantes del Consejo General en la sesión del veintitrés de agosto del mismo año.²⁸⁸

21. Exclusión de diversas reuniones con autoridades nacionales del Servicio Profesional Electoral

A través del escrito de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la quejosa señala que fue excluida de diversas reuniones con las autoridades nacionales del Servicio Profesional Electoral, organizadas por el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*.

Señala que el *INE* ha mandado diversos documentos a la Consejera Presidenta, que por su importancia debiera hacer del conocimiento de los demás integrantes del Consejo General, sin embargo, en su concepto, privilegia la información para algunos y la oculta para otros. En concreto, la quejosa hace referencia a documentos relacionados con la implementación del Servicio Profesional Electoral.

Refiere que, en la Comisión del Servicio Profesional Electoral, se notan privilegios para unos cuantos consejeros, refiere que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis se efectuó una reunión nacional con organismos electorales para tratar el tema del Servicio Profesional, sin que en su momento se le informara, y que

²⁸⁷ Visible en el legajo 5, foja 3085 del expediente.

²⁸⁸ Visible en el legajo 5, foja 3086 del expediente.

se enteró en la sesión de la propia Comisión celebrada el veintiséis de octubre, cuando se rindió el informe de actividades respectivo.

Refiere que ha sido recurrente que se le oculte información, que en la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete, se enteró que se llevó a cabo otra reunión con el *INE* en la Ciudad de México, lo que señala le fue ocultado aun y cuando forma parte de la Comisión.

De las constancias del expediente en que se actúa se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene acreditado** que la Comisión del Servicio Profesional Electoral fue creada por acuerdo del Consejo General del *IEQROO*, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, y quedó conformada de la siguiente manera:
- **Presidente de la Comisión:** Consejero Jorge Armando Poot Pech
 - **Integrantes:**
 - Consejera Thalía Hernández Robledo
 - Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche
 - Consejero Sergio Avilés Demeneghi
 - Consejera Claudia Carrillo Gasca
 - Secretario o Secretaria Técnica: Titular de la Dirección de Administración y Planeación
- b) **Se tiene por acreditado** que en la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*, celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis se discutió, entre otras temáticas, el “*Informe de las actividades llevadas a cabo relativos al Servicio Profesional Electoral Nacional.*”
- c) **Se tienen por acreditado** que la quejosa estuvo presente en la sesión indicada en el inciso anterior.
- d) **Se tiene por acreditado** que, en una de sus intervenciones, el Consejero Sergio Avilés Demeneghi refirió lo siguiente: “...y otra cosa que me gustaría es ya que el consejero Juan Manuel acudió a la Ciudad de México el 18 de agosto, si te otorgaron el diagnóstico nacional de adecuación de estructura de

los OPLES, si realmente hubo material que te compartieran en su momento y si fuera de esa manera porque yo quería solicitarlo, pero no me sabía el nombre hasta ahorita lo sé, pues que mejor ¿no? Y está más en corto que me brinde esta información, yo para poder analizarla.”

- e) **Se tiene por acreditado** que en respuesta a lo manifestado por el consejero Avilés, el consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, refirió lo siguiente: *“Consejero, nos dieron un material y justamente en razón de lo comentado de lo comentado por el Lic. Geovany si también es importante mencionarle que cuando nos hablaron de los aproximadamente 20 lineamientos no hubo una descripción de cada uno de ellos, simplemente fue una mención de que fueron 20 y la denominación de ellos, sin embargo no hubo un estudio precisamente pormenorizado de los lineamientos. Efectivamente hubo un material y dentro del material entre otras cosas está algo que ya había tocado el Dr. Luis Carlos Santander, no recuerdo si fue reunión de trabajo o sesión, francamente, en los lugares que ocupaba cada uno de los estados de la república ...”*
- f) **Se tiene por acreditado** que el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche acudió a una reunión del Servicio Profesional Electoral, sin que sea posible precisar la fecha de dicha reunión, ni el lugar en que se llevó a cabo.
- g) **No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera sido excluida o que se le hubiera ocultado información en torno a la referida reunión, pues de lo expuesto por esta en su escrito de queja, así como del acta de la sesión de la Comisión referida, no se advierte que hubieran acudido a la reunión en cuestión otros consejeros integrantes de la Comisión además del Consejero Pérez Alpuche, además de que en dicha sesión se rindió el informe correspondiente y se habló de la reunión en cuestión.
- h) **Se tiene por acreditado** que en la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del IEQROO celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete, estuvieron presentes las Consejeras Claudia Carrillo Gasca y Thalía Hernández Robledo, así como los consejeros Jorge Armando Poot Pech, en su calidad de Presidente, Sergio Avilés Demeneghi, Juan Manuel

Pérez Alpuche y Víctor Manuel Iterián López, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión.

- i) **Se tiene por acreditado** que en la sesión de la Comisión precisada en el inciso anterior, el Consejero Jorge Armando Poot Pech, Presidente de la Comisión, expresó lo siguiente: *“...Bien como les comente hace un rato, este trabajo e presentado por el coordinador y justamente es uno de los temas que se han informado es la reunión de trabajo que se tuvo en la Ciudad de México el día 20 de enero, en efecto recibí un oficio directamente del director del Servicio Profesional Electoral donde se nos proponían unas fechas para reunirnos en la ciudad de México, en el mes de enero, este oficio fue de diciembre de 2016 y se sacó la cita conforme al calendario que propone la DESPEN en la ciudad de México y fue el 20 de enero, yo no di vista a los demás integrantes de esta comisión, no sé si es la primera o segunda vez pero será la última, no obstante quiero dejar en claro que todos los oficios que recibo por parte de la dirección del servicio profesional electoral vía correo electrónico son enviados a todos los integrantes de esta comisión, en especial lo digo porque hace el señalamiento la consejera Claudia Carrillo, le fue dirigido el mismo oficio el mismo correo electrónico con copia a su persona al correo ccarrillog12@gmail.com y evidentemente a todos los consejeros, independientemente de darles copia de este documento a todos los integrantes reenviaré también este correo a todos ustedes por si no les llega ese correo yo si les pediría atentamente me informen o informen directamente al INE porque este correo lo envía directamente el INE o cual es el correo por el cual se les debería de enviar, insiste no se trata de estar ocultando absolutamente nada, pues precisamente una de las actividades es esta yo les pedí al coordinador de esta actividad que nos informe periódicamente de todas las actividades que se están realizando para que nosotros tengamos todo el derecho de preguntar y que se nos aclaren absolutamente las dudas y podamos plantear, entonces este oficio, insisto me notificaron vía correo electrónico, también pusieron copia a los correos electrónicos de los consejeros integrantes de esta comisión. (...)*
- j) **Se tiene por acreditado** que por oficio de doce de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del *INE*, se convocó a la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Mediana, junto con el Presidente de la Comisión de Seguimiento Permanente al Servicio y el Titular del Órgano de Enlace en la materia, a una reunión de trabajo a celebrarse en las instalaciones del *INE*, la cual tuvo verificativo el veinte de enero de dos mil diecisiete.
- k) **Se tiene por acreditado** que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se envió por correo electrónico el oficio precisado en el inciso anterior el cual fue remitido a todos los consejeros integrantes de la Comisión, incluida la quejosa.

- l) Se tiene por acreditado** que acudieron a la reunión de trabajo precisada en el inciso anterior Mayra San Román Carrillo Media, en su carácter de Consejera Presidenta del *IEQROO*, el Titular del órgano de enlace en la materia, Licenciado Víctor Manuel Interián López, y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, en su carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento Permanente al Servicio, del propio Instituto.
- m) No se tiene por acreditado** que la quejosa hubiera sido excluida de la referida reunión de trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, toda vez que la convocatoria a dicha reunión por parte de personal del *INE*, era específica en cuanto a los funcionarios convocados, por lo que no era exigible al Presidente de la Comisión en cuestión someter a consideración de los integrantes de ésta, quienes debían asistir, como lo pretende la quejosa.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Copia certificada** del acta de la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*, celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.²⁸⁹
- **Copia certificada** del acta de la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*, celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete.²⁹⁰
- **Copia certificada** del acuerdo *IEQROO/CG/A-226/16*, del Consejo General del *IEQROO*, por medio del cual se determina la creación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del propio Instituto, de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.²⁹¹
- **Copia certificada** del oficio *INE/DESPEN/2777/2016*, firmado por Rafael Martínez Puon, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional

²⁸⁹ Visible a fojas 3326 a 3348, del legajo 5 del expediente.

²⁹⁰ Visible a fojas 3349 a 3367, del legajo 5 del expediente.

²⁹¹ Visible a fojas 1250 a 1255, del anexo 3 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

del Instituto Nacional Electoral, dirigido a Mayra San Román Carrillo, a través del cual convoca a reunión de trabajo.²⁹²

- **Copia simple y certificada** de la impresión del correo electrónico, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, remitido de la dirección electrónica joseergio.martinez@ine.mx, a las siguientes direcciones electrónicas: mayra061973@hotmail.com; iegroopresidencia@gmail.com; george2579@live.com.mx; thaihdz@hotmail.com; aviles_demeneghi@hotmail.com; dante670@msn.com; ccarrillog12@gmail.com; vicmil426@hotmail.com, con asunto “OFICIO INE/DESPEN/2777/2016”, suscrito por el Licenciado Sergio Martínez García, de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, dirigido a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO, mediante el cual remite el oficio INE/DESPEN/2777/2016, la convoca a una reunión de trabajo, junto con el Presidente de la Comisión respectiva y el titular del órgano de enlace en la materia, y solicita sea remitida diversa información relacionada con el Servicio Profesional Electoral.²⁹³
- **Copia simple** del oficio OE/SPEN/018/2017, de dos de febrero de dos mil diecisiete, con sello de recibido de diez de febrero siguiente, suscrito por Víctor Manuel Interián López, Secretario Técnico de la Comisión del Servicio profesional electoral del IEQROO, dirigido a la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, a través del cual le remite copia del oficio INE/DESPEN/2777/2016, así como copia de la documentación entregada en la reunión de trabajo del veinte enero anterior.²⁹⁴
- **Copia simple** del oficio CE/JAPP/014/2017, de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por el Consejero Jorge Armando Poot Pech, dirigido a la quejosa, mediante el cual le informa de la realización de un diagnóstico del personal del Instituto susceptible de ser propuesto para su ingreso al Servicio Profesional Electoral, el cual, una vez concluido, se

²⁹² Visible fojas 3630-3631, del legajo 5 del expediente.

²⁹³ Visible a foja 3509 y 3628 del legajo 5, del expediente.

²⁹⁴ Visible a fojas 3368 a 3383, del legajo 5, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

pondría a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del Instituto.²⁹⁵

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al **Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech**, el tres de marzo de dos mil diecisiete²⁹⁶, mediante el cual informó, en lo que interesa, lo siguiente:
 - **Señale si funge como Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, en su caso, desde cuándo ocupa tal cargo.** *En efecto, desde el pasado 24 de junio del 2016 por acuerdo IEQROO/CG/A-226-16 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, presido la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del propio Instituto.*
 - **Señale si el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis se llevó a cabo una reunión con diversos organismos electorales con el objeto de tratar algún asunto relativo al Servicio Profesional Electoral.** *Desconozco si en la referida fecha se haya celebrado reunión alguna relativo el Servicio Profesional Electoral, lo cierto es que, al menos, el suscrito como Presidente de dicha Comisión, no asistí ni participé en ninguna reunión con tal objetivo.*
 - **Informe si el veinte de enero del presente año asistió a algún evento o reunión en la Ciudad de México convocado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto Nacional Electoral** *En efecto, de conformidad con el calendario propuesto por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral referido en el oficio INE/DESPEN/2777/2016, el pasado 20 de enero, asistí en mi calidad de Presidente de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Quintana Roo a una reunión convocada por la citada Dirección Ejecutiva en las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral.*
 - **De ser afirmativo lo previo, señale qué Consejeras y/o Consejeros asistieron y bajo qué criterios se determinó dicha participación.** *De conformidad con el oficio INE/DESPEN/2777/2016 firmado por el Doctor Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, se nos convocó a una reunión de trabajo en las instalaciones del propio INE a la Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, al Titular del órgano de enlace en la material, Licenciado Víctor Manuel Interián López, y al Presidente de la Comisión de Seguimiento Permanente al Servicio, el suscrito; estas tres personas fuimos las que asistimos a la reunión de mérito, en virtud de ser las personas que fungimos en las*

²⁹⁵ Visible a foja 3384, del legajo 5, del expediente

²⁹⁶ Visible en el legajo 5, Foja 3619, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

cargas antes señaladas. Para acreditar lo anterior, anexo en copia certificada el oficio INE/DESPEN/2777/2016 del que se ha hecho alusión.

- **Señale si se notifica a las Consejeras y/o Consejeros integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sobre las reuniones o grupos de trabajo que se realizan relacionadas con dicha temática fuera de la propia Comisión, en su caso, de qué forma se les notifica.** *Es de señalarse que con excepción de la reunión del pasado 20 de enero aludida con anterioridad, no se ha tenido ninguna otra reunión de trabajo fuera de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.*

En relación a dicha reunión, la comunicación que se nos hiciera para asistir a la reunión por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional fue por correo electrónico; este aviso, no solamente se nos hizo a quienes deberíamos participar en la reunión, sino a todos los Consejeros Electorales que integramos la multicitada comisión.

En este sentido, como se demuestra con la copia certificada de la imagen de la cuenta de correo electrónico del suscrito, la convocatoria fue dirigida a los siguientes correos electrónicos que corresponden a las siguientes personas o institución:

-Mayra061973@hotmail.com de la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina.
-iegroopresidencia@gmail.com de la Presidencia de este Instituto Electoral.
- george2579@live.com.mx del Consejero Jorge Armando Poot Pech.
-thalihdz@hotmail.com de la Consejera Thalía Hernández Robledo.
-aviles_demeneghi@hotmail.com del Consejero Sergio Avilés Demeneghi.
-dante670@msn.com del Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche.
-ccarrillog12@gmail.com de la Consejera Claudia Carrillo Gasca.
-vicmil426@hotmail.com del Licenciado Víctor Manuel Interián López.

Es de señalar que dicho comunicado fue enviado por el Licenciado Sergio Martínez García desde su cuenta electrónica josesergio.martinezg@ine.mx adscrito a la citada Dirección Ejecutiva del propio INE.

No se omite señalar que los correos de los consejeros electorales de este Instituto a los cuales se nos dirigió la información, son precisamente aquello que por propia cuenta señalamos en nuestros documentos cuando nos inscribimos a participar en el proceso de selección de Consejero del OPLE en Quintana Roo, llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral; de ahí que las diversas áreas del INE cuando nos envían algún comunicado es precisamente a través de esas cuentas electrónicas, o al menos, que se haya notificado de algún cambio respecto a ellas.

- Respuesta a los requerimientos de información realizados por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Thalía Hernández Robledo**, así como a los consejeros **Sergio Avilés Demeneghi y Juan Manuel Pérez Alpuche**, el tres de marzo de dos mil diecisiete, en los que, entre otras cuestiones, se les

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

solicitó que informaran si como integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, les son notificadas las convocatorias a las reuniones y mesas de trabajo que se desarrollan fuera del Instituto relacionadas con dicha temática.

- o **Thalía Hernández Robledo:**²⁹⁷ *Sí he recibido vía correo electrónico, enviado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Sergio Martínez García, notificación a reunión de trabajo celebrada en las instalaciones de dicho instituto nacional, relacionada con dicha temática.*
Para efecto de acreditar la veracidad de mi dicho, adjunto al presente la impresión del correo electrónico recibido el 13 de diciembre de 2016, a través de la cuenta josesergio.martinez@ine.mx
- o **Juan Manuel Pérez Alpuche:**²⁹⁸ *Sí, me han sido notificadas las convocatorias a reuniones y mesas de trabajo, por medio de correo electrónico.*
- o **Sergio Avilés Demeneghi:**²⁹⁹ *En mi calidad de integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral si bien es cierto me han sido notificados e informados los asuntos ventilados en esta Comisión, no es de soslayarse que de igual forma se ha mantenido una especie de "secrecía" respecto a las reuniones realizadas por la Comisión hacia el exterior, ya que el suscrito votó en contra del acuerdo del Consejo General donde únicamente 5 servidores fueron designados para la instauración del Servicio Profesional Electoral a lo cual toda (sic) luces va en contra de la profesionalización de los servidores electorales.*
Por otra parte, e independientemente de lo señalado en el párrafo que antecede, la Consejera Presidenta generalmente es la que decide acerca de las personas que participaran en cada uno de los eventos y el grado de intervención que tendrán, esto lo realiza sin dar aviso previo, enterándonos en la mayoría de los casos de último momento o extraordinariamente, ya que en ocasiones no se ha extendido invitación ni mucho menos oficio alguno de conocimiento.
Lo anterior, así lo manifesté en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el 15 de septiembre de la presente anualidad, durante mi intervención en el punto de asuntos generales, (foja 8 y 24), así como de manera posterior lo hice notar durante la Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre (foja 94, 98), (Actas que se encuentran publicadas en el sitio de Internet del Instituto Electoral de Quintana Roo, consultable en los siguientes link de internet http://www.ieqroo.org.mxdescargas/estrados/2016/sept/15/SORDCG_15092016_1000HRS.pdf; y <http://www.ieqroo.org.mxdescargas/estrados/2016/sept/29/> (...)
De igual forma, manifiesto que el pasado 2 de febrero del presente año, se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la cual me enteré que el

²⁹⁷ Visible en el legajo 5, foja 3506, del expediente.

²⁹⁸ Visible en el legajo 5, foja 3707, del expediente.

²⁹⁹ Visible en el legajo 5, foja 3661, del expediente.

pasado 20 de enero, se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del INE en la ciudad de México. En ese sentido y con la finalidad de conocer cuáles fueron los acuerdos tomados en dicha reunión que mediante oficio CE/SAD/05/17 de fecha 8 de febrero de 2017 dirigido al Presidenta de la Comisión, solicité me proporcionara copia del oficio INE/DESPEN/2777/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, así como el objeto de dicha reunión.

Por último es importante mencionar que la exclusión de actividades por instrucción en el Instituto Electoral ha sido latente, así como el hostigamiento e intromisión por parte de los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el desempeño de algunos consejeros electorales, situación que hice del conocimiento de esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral mediante diversos oficios CE/SAD/034/16 de fecha 25 de julio del 2016; CE/SAD/045/16 de fecha 17 de agosto del 2016; y CE/SAD/050/16 del 24 de agosto del 2016, (Documento que anexo a la presente como medio de convicción consistente en el ANEXO 6, 7 y 8). Aunado a lo anterior, hice del conocimiento del Congreso del Estado, de esta situación al instaurar Juicio Político, así como la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con la finalidad de defender la autonomía del Organismo Público Local Electoral en el estado de Quintana Roo.

22. Exclusión en la entrega de una compensación económica por proceso electoral.

La quejosa se duele de haber sido excluida por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidente del IEQROO, en la entrega de una compensación por proceso electoral por la cantidad de diez mil pesos.

De las constancias de autos se observa lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se otorgó una compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina; a la Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo, así como a los Consejeros Electorales Sergio Avilés Demeneghi, Jorge Armando Poot Pech y Juan Manuel Pérez Alpuche.

- b) **Se tiene acreditado** que la compensación referida en el inciso anterior no fue entregada a la Consejera Claudia Carrillo Gasca ni al Consejero Luis Carlos Santander Botello.
- c) **Se tiene por acreditado** que el veinte de diciembre de dos mil dieciséis los siete consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO* recibieron una compensación económica por treinta y tres mil pesos, por concepto de estímulo anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
- d) **Se tiene por acreditado** que el once de abril de dos mil dieciocho, se depositó la compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a la quejosa y a al Consejero Luis Carlos Santander Botello.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a **Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del IEQROO³⁰⁰** quien, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:

“El 16 de marzo del 2016, se otorgó una compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario 2016, por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

Respecto al caso que nos ocupa, igualmente se informa a esa autoridad que, durante el mes de diciembre del mismo año del proceso electoral, se otorgó un Estímulo Anual correspondiente al Ejercicio 2016, por la cantidad de \$33, 000.00 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

Al efecto, me permito aducir que la entrega de los estímulos señalados en las líneas que anteceden fue determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en correlación con el artículo 52, fracción VI de la misma Ley.”

³⁰⁰ Visible en el legajo 5, foja 3458, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el tres de marzo de dos mil diecisiete, al **Director de Administración y Planeación del IEQROO**³⁰¹ a quien se le cuestionó si se otorgó a las Consejeras y Consejeros Electorales algún estímulo económico por concepto de compensación por proceso electoral, en su caso, si éste fue entregado a todos las Consejeras y Consejeros Electorales y bajo qué criterio se determinó quienes habrían de recibirlo. El funcionario referido informó lo siguiente:

“El 16 de marzo de 2016, se otorgó una compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario 2016, a los Consejeros Electorales que a continuación se señalan:

*-Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina;
-Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo;
-Consejero Electoral, Sergio Avilés Demeneghi;
-Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech; y
-Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.*

A los Consejeros Electorales a los cuales no se les otorgó el estímulo en referencia, fueron:

*Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca; y
-Consejero Electoral, Luis Carlos Santander Botello.*

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. Se adjuntan las documentales que acreditan lo señalado.”

- Respuesta al requerimiento de información formulado el tres de marzo de dos mil diecisiete por la autoridad sustanciadora a la **Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, así como a los Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi, Luis Carlos Santander Botello**, mediante el cual se les cuestionó si habían recibido por concepto de compensación por proceso electoral, algún estímulo económico.
- **Consejera Thalía Hernández Robledo:**³⁰² *“Sí recibí estímulo económico por concepto de compensación de proceso electoral, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), con fecha 16 de marzo de 2016.”*

³⁰¹ Visible en el legajo 5, foja 3632, del expediente.

³⁰² Visible en el legajo 5, foja 3506, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- **Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche:**³⁰³ *“Si recibí estímulo económico por concepto de compensación correspondiente al proceso electoral, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), aproximadamente en los meses de marzo o abril del año dos mil dieciséis”*
- **Consejero Jorge Armando Poot Pech:**³⁰⁴ *“En el mes de marzo del año pasado recibí por las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo del proceso electoral la cantidad de diez mil pesos.”*
- **Consejero Sergio Avilés Demeneghi:**³⁰⁵ *“Efectivamente me percaté que en la primer quincena del mes de marzo de 2016, específicamente el 16 de marzo de 2016, había una cantidad de DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. por concepto de compensación por proceso electoral, situación que de manera informal, hice de conocimiento a MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, ésta, me manifestó que era una especie de compensación electoral por las actividades extraordinarias a realizar en virtud del proceso electoral, la cual compruebo mediante estado de cuenta expedido por el banco denominado BBVA Bancomer en el cual consta el deposito realizado al suscrito por concepto de COMPENSACIÓN POR PROCESO ELECTORAL mediante SPEI recibido mediante transferencia electrónica con número de referencia 005161723072.
Posteriormente en la segunda quincena de marzo de 2016, el día 30, me fue entregado en efectivo la cantidad de QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. por el mismo concepto por parte de la Consejera Presidenta, comentándome que ahora esa sería la cantidad quincenal que recibiríamos los consejeros en esta ocasión al ser en efectivo posteriormente firme ante el Director de Administración y Planeación un recibo por la mencionada cantidad, del cual no me otorgaron copia, pero que debe obrar en los archivos de esa dirección.
En fecha 15 de abril de 2016, la Consejera Presidenta me llamó a su oficina a efecto de entregarme la compensación extraordinaria, comentándome que en esta ocasión sería mayor, sin embargo me pedía discreción porque en esta ocasión no le sería entregado a la totalidad de los consejeros, concretamente a la Consejera Claudia Carrillo Gasca ni al consejero Luis Carlos Santander Botello, en base a lo anterior le hice del conocimiento de la Consejera Presidenta que no estaba de acuerdo con el hecho de excluir a algunos consejeros del pago de esta prestación extraordinaria a lo que únicamente me refirió que este pago no alcanzaba para todos, a lo que refirió que en ese caso no estaba de acuerdo, ya que era incongruente que manifestara que era mayor el recurso y no alcanzaba para todos, por lo tanto rechacé en ese momento la compensación (del cual no pude constatar la cantidad final que se me otorgaría): y le precise que se dejara de otorgar a los consejeros la compensación extraordinaria, si no existía la suficiencia presupuestal para seguir siendo otorgada a la totalidad de los consejeros, por lo tanto ignoro en todo caso si se siguió o sigue realizando el pago del mismo, así como el monto depositado a algunos consejeros.*

³⁰³ Visible en el Legajo 5, Foja 3707, del expediente.

³⁰⁴ Visible en el Legajo 5, Foja 3619, del expediente.

³⁰⁵ Visible en el Legajo 5, Foja 3661, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Asimismo manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que en días previos a esta contestación, de manera circunstancial, en una plática sostenida con la Consejera Claudia Carrillo Gasca, me enteré que ninguna vez recibió compensación extraordinaria alguna, lo cual me sorprendió, ya que tenía entendido que presuntamente a partir de la quincena del 15 de abril de 2016; la totalidad de los consejeros dejamos de recibir algún tipo de compensación en atención a lo previamente referido, máxime que fue hasta ese momento que la Consejera Presidenta me pedía discreción sobre el tema.”

- **Consejero Luis Carlos Santander Botello:**³⁰⁶ *“En ningún momento, durante, antes o después del proceso electoral local 2016, recibí estímulo, pago adicional o en demasía, u otro concepto de “compensación por proceso electoral”.*
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el quince de marzo de dos mil diecisiete, a la **Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San Román,**³⁰⁷ en el que se le cuestionó respecto de la compensación otorgada en diciembre de dos mil dieciséis por treinta y tres mil pesos, se le solicitó que precisara a qué consejeros les había sido otorgado dicho estímulo económico, en su caso, bajo qué criterio se determinó quién habría de recibirlo, así como quién o quiénes definieron el criterio para su entrega. Asimismo, se le cuestionó respecto de la respuesta remitida por el Director de Administración y Planeación del IEQROO, que informara bajo qué criterio se determinó excluir a la Consejera Carillo Gasca y al Consejero Santander Botello de recibir la compensación de diez mil pesos otorgado en marzo del mismo año, así como quién definió dicho criterio.

Respecto de dichos cuestionamientos la Consejera Presidenta informó lo siguiente:

“El Estímulo Anual correspondiente al Ejercicio 2016, por la cantidad de \$33,000.00 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.) durante el mes de diciembre del mismo año del proceso electoral, se otorgó a todos y cada uno de las y los consejeros que conformamos el Consejo General de este Instituto. Adjunto copia certificada de los recibos correspondientes que sustentan este planteamiento.

Como indiqué en mi respuesta al primer requerimiento en el expediente que nos ocupa, la entrega de los estímulos así como cualquier otra erogación que se

³⁰⁶ Visible en el Legajo 5, Foja 3475, del expediente.

³⁰⁷ Visible en el Legajo 5, Foja 3730, del expediente.

deba realizar con cargo al Presupuesto de Egresos aprobado, se realizan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo que otorga la representación legal del mismo al Consejero Presidente, en correlación con el artículo 52, fracción VI de la misma Ley, relativa a que el Director de Administración de este Instituto tiene la atribución de “Elaborar y firmar la documentación para las erogaciones que con cargo al Presupuesto de Egresos aprobado, deba ejercer el Instituto, previa autorización del Consejero Presidente”.

Ahora bien, debe resaltarse que en el caso concreto no existió criterio de exclusión alguno respecto de los consejeros Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello, en razón de que la instrucción de esta Presidenta consistió en que se nos entregara a todos los consejeros electorales, siendo que precisamente derivado de los requerimientos efectuados por esa Unidad Técnica, y del informe presentado por el Director de Administración a solicitud de la suscrita, es que se detectó tal inconsistencia, es decir, que la instrucción referida con antelación no fue realizada en los términos señalados.

En razón de lo anterior, se ha instruido al citado Director para que se realice el análisis correspondiente del caso, a efecto de que, de así resultar, se tomen las medidas administrativas correspondientes que el particular conlleve; ya que como resulta evidente, esta situación devino de una inconsistencia de carácter eminentemente administrativo.”

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el quince de marzo de dos mil diecisiete, al **Director de Administración y Planeación del IEQROO³⁰⁸**, mediante el cual se le requirió que informara cuáles habían sido los criterios para determinar qué Consejeros habrían de recibir el estímulo económico de diez mil pesos otorgado en marzo de dos mil dieciséis, así como quiénes definieron dicho criterio. Asimismo, se le cuestionó a qué Consejeras y/o Consejeros se les había otorgado el estímulo de treinta y tres mil pesos en el mes de diciembre del mismo año y, en su caso, los criterios para otorgarlo.

A dichos cuestionamientos, el funcionario en cuestión informó lo siguiente:

“La instrucción otorgada por parte de la Consejera Presidenta a su servidor versó respecto de que el estímulo en mención fuera otorgado a todos los Consejeros Electorales, sin embargo, al momento de recabar la documentación que sustentara la respuesta correspondiente al requerimiento primigenio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, me

³⁰⁸ Visible en el Legajo 5, Foja 3741, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

percaté de que dicho estímulo no le fue depositado a los Consejeros Electorales Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello, siendo que al realizar las indagaciones correspondientes en la Coordinación de Recursos Financieros de esta Dirección, se pudo corroborar que fue derivado de una inconsistencia administrativa al momento de realizar las transferencias respectivas.

La situación de mérito aconteció en virtud de que en el mes de marzo de 2016 ya nos encontrábamos inmersos en la dinámica del proceso electoral local ordinario de ese año, por lo que las cargas de trabajo se intensificaron en razón de que como es un hecho público nuestro proceso electoral tiene plazos muy cortos pues inicia en febrero y concluye en septiembre del año correspondiente.

En lo atinente al planteamiento identificado con el numeral b), me permito señalarle que el Estímulo Anual correspondiente al Ejercicio 2016, fue entregado a todos los Consejeros Electorales del Consejo General, atendiendo a la instrucción señalada por la Consejera Presidenta de este órgano electoral.”

- **Copia certificada** del oficio PRE/070-1/2017 de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina, dirigido a Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del mismo Instituto, mediante el cual le solicita que le informe respecto de la atención brindada a la instrucción relativa a que durante el mes de marzo de dos mil dieciséis se otorgara un estímulo económico a todos los consejeros electorales relacionado con el proceso electoral de ese mismo año, toda vez que derivado del requerimiento efectuado por la UTCE, advirtió que en la respuesta dada por el referido Director señaló que el estímulo en mención no les fue entregado a los consejeros Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello³⁰⁹.
- **Copia certificada** del oficio DAP/099/2017, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del IEQROO, dirigido a la Consejera Presidenta del mismo Instituto, mediante el cual le informó que giró las instrucciones al personal a su cargo a efecto de que fuera realizado el pago del estímulo en mención en los términos que ella le instruyó, sin embargo al momento de recabar la documentación que sustentara la respuesta al requerimiento formulado por la UTCE, se percataron que dicho estímulo no fue entregado a los consejeros Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello, y

³⁰⁹ Visible en el Legajo 5, Foja 3732, del expediente.

que al realizar las indagaciones correspondientes en el área de recursos financieros, se pudo corroborar que fue derivado de una inconsistencia administrativa al momento de realizar las transferencias respectivas³¹⁰.

Asimismo, el funcionario refirió que dicha situación aconteció en virtud de que en el mes de marzo de dos mil dieciséis se encontraban inmersos en la dinámica del proceso electoral local ordinario de ese año.

- **Copia certificada** de siete recibos por treinta y tres mil pesos, por concepto de estímulo anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis firmados por los siete consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, por la Consejera Presidenta y por el Director de Administración y Planeación del mismo Instituto.³¹¹
- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, al **Director de Administración y Planeación del *IEQROO***³¹², mediante el cual se le requirió que informara si la compensación por servicios durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) ya había sido pagada tanto a Claudia Carrillo Gasca como a Luis Carlos Santander Botello, ambos consejeros del *IEQROO*. Al respecto, el referido funcionario informó que debido a diversas cuestiones presupuestales no había sido posible cubrir las compensaciones en comento, pero que se tomarían las medidas administrativas correspondientes para que las mismas sean cubiertas a más tardar el quince de abril de la presente anualidad.
- Alcance a la respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, al **Director de Administración y Planeación del *IEQROO***³¹³, mediante el cual se le requirió que informara si la compensación por servicios durante el

³¹⁰ Visible en el Legajo 5, Foja 3733, del expediente.

³¹¹ Visible en el Legajo 5, Foja 3734, del expediente.

³¹² Visible en el Legajo 9, Foja 6051, del expediente.

³¹³ Visible en el Legajo 9, Foja 6076, del expediente.

proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) ya había sido pagada tanto a Claudia Carrillo Gasca como a Luis Carlos Santander Botello, ambos consejeros del *IEQROO*. Mediante oficio DA/305/2018, el referido funcionario informó que dicha compensación había sido depositada a los consejeros señalados el once de abril del presente año.

23. Trato discriminatorio y diferenciado por parte del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*³¹⁴

La quejosa refiere que existe un trato diferenciado y discriminatorio de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, ya que no publicó la información que le había solicitado y sí la de otros Consejeros Electorales.

Al respecto, la quejosa refiere que el trece de febrero de dos mil diecisiete, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, le informó verbalmente al referido funcionario que la página del micro sitio denominado *Igualdad entre mujeres y hombres*, se había actualizado, a lo que Figueroa Orea se comprometió a hacer la difusión correspondiente mediante boletín oficial. Asimismo, refiere que el quince de febrero siguiente envió un mensaje a dicho funcionario a través de la aplicación *whatsapp* mediante el cual le preguntó si habían sacado un boletín oficial sobre tal actualización, a lo que el funcionario contestó que *sólo en redes*. Lo que, en su concepto, fue un trato diferenciado respecto de actividades realizadas por otros consejeros, como fue el caso del Consejero Pérez Alpuche a quien en esa misma fecha se le realizó un boletín oficial.

Por otro lado, la quejosa señala que el dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficios CE/CCG/037/17 y CE/CCG/038/17, solicitó a Jose Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y a Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, Titular de la Unidad Técnica e Informática y Estadística, ambos del *IEQROO*, la difusión de las diversas actividades que realizaría en marzo en la zona norte del Estado, a la cual asistiría en su calidad de Presidenta de la Comisión

³¹⁴ Escrito mediante el cual la quejosa refirió nuevos hechos que considera constituyen violencia política de género, visible en el legajo 5, foja 3764, del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del *IEQROO*, al que anexó copia simple de las invitaciones y calendario de sus actividades.

En respuesta a lo anterior el Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística le informó a la quejosa que no había subido la información solicitada a la página oficial del Instituto, toda vez que la información que se subía tenía que estar sustentada por el área de Comunicación Social. Mientras que el Titular de Comunicación Social le informó que no se había publicado la información en boletín oficial al no haber sido autorizado por la Consejera Presidenta. Por ello, la quejosa refiere que, mediante oficios CE/CCG/040/17 y CE/CCG/041/17, solicitó nuevamente la difusión de la información precisada a ambos funcionarios.

La quejosa refiere que el cuatro de marzo siguiente, en la oficina del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, le solicitó que hiciera un boletín respecto al calendario de actividades de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres con la finalidad de que instrumente los mecanismos necesarios de comunicación masiva para promover dichas actividades institucionales para generar participación ciudadana, sin embargo el referido funcionario le señaló que *NO, pues esperaba la instrucción de la Consejera Presidenta Lic. Mayra San Román Carrillo Medina, así como agregar actividades de otros consejeros en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.*

Posteriormente, la quejosa refiere que el referido funcionario se excusó de subir la información correspondiente aduciendo que había errores y que lo subiría el lunes siete de marzo.

La quejosa refiere que el seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio UTCS/015/17, suscrito por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, mediante el cual dio respuesta al oficio CE/CCG/037/17, le informó que la unidad a su cargo difundiría a través de las redes sociales “oficiales” *Twitter y Facebook* las actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer y le solicitó fotografías de los eventos en donde participaría. Asimismo, refiere que fue hasta esa fecha en que se subió a la página institucional el calendario de actividades.

Asimismo, la quejosa refiere que el seis, ocho, nueve, diez y once de marzo de dos mil diecisiete tuvo diversas actividades, mismas que oportunamente se hicieron del conocimiento del Titular de Comunicación Social con la finalidad de que se elaborara el boletín respectivo, lo que no ocurrió así, pues fue después de una llamada telefónica que se subió a la página institucional el boletín respectivo, el cual, en su concepto, cuenta con información incompleta y distorsionada, además de que no señala las actividades en las cuales participó institucionalmente aun cuando lo hizo de su conocimiento, lo que, a su juicio, denota un trato diferenciado respecto de otros consejeros y consejeras ya que en la página oficial se observa una imagen donde aparecen los consejeros Pérez Alpuche, Hernández Robledo, Poot Pech y la Presidenta, así como una frase que supuestamente manifesté, la cual no corresponde con la que previamente había remitido al Titular de Comunicación Social del Instituto.

Posteriormente, la quejosa refiere que solicitó, vía telefónica, al Lic. José Alfredo Figueroa Orea, que elaborara el “boletín” de sus actividades, que le indicó que la frase utilizada en el “boletín” de ocho de marzo era errónea y distorsionada, pues no correspondía con la que ella le había enviado por *whatsapp*, además de que en el referido “boletín” no se decía nada de sus actividades realizadas hasta esa fecha, a dichas peticiones, la quejosa afirma que el referido funcionario le indicó que *su horario de trabajo es de nueve a quince horas*, y que no debía molestarlo fuera de ese horario.

Asimismo, la quejosa refiere que, si bien se difundieron sus actividades en *twitter* y *Facebook* en apariencia del IEQROO, éstas no son la vía oficial como lo es la página www.ieqroo.org.mx, en donde se publican los boletines en donde, asegura, se le invisibiliza, menoscaba, discrimina y anula en el ejercicio de sus funciones como consejera electoral.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO es el área responsable de la generación y difusión del boletín oficial del referido Instituto, cuyo fin es publicitar en la página y en las redes sociales institucionales, así como en los diferentes medios de comunicación, todo lo

relativo a las acciones y eventos del Instituto, así como de las actividades efectuadas por los distintos órganos que lo integran, entre los cuales se encuentra el Consejo General, sin que exista una periodicidad determinada para su elaboración y difusión.

- b) Se tiene por acreditado** que la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* es el área responsable de revisar y definir el contenido que se publica en las redes sociales oficiales, en el boletín oficial de dicho Instituto, así como en cualquier otro medio de comunicación impreso o por internet del referido Instituto Electoral Local.
- c) Se tiene por acreditado** que no existe un procedimiento establecido para que los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO* soliciten a la Unidad Técnica de Comunicación Social la difusión de sus actividades, sino que éstos la realizan de manera informal por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, o bien, por oficio.
- d) Se tiene por acreditado** que, a solicitud de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información y Transparencia del *IEQROO*, se difundió en las redes sociales del Instituto la actualización del micrositio denominado *Igualdad entre mujeres y hombres*, el quince y veinte de febrero de dos mil diecisiete.
- e) Se tiene acreditado** que, por medio de oficios de dos y tres de marzo del dos mil diecisiete, la quejosa solicitó a los titulares de las Unidades Técnicas de Informática y Estadística, así como de Comunicación Social, ambas del *IEQROO*, que se difundieran las actividades que realizaría durante el mes de marzo de dos mil diecisiete al norte del Estado, en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en la página oficial del referido Instituto y redes sociales, sin que conste que en dicha solicitud se hubiera solicitado que la difusión se realizara mediante boletines oficiales.
- f) Se tiene por acreditado** que la quejosa remitió a los funcionarios antes referidos las invitaciones y agenda de las actividades correspondientes a

efecto de que se llevara a cabo la difusión correspondiente, en la página del Instituto y redes sociales.

- g) **Se tiene por acreditado** que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* le informó, mediante oficio de seis de marzo de dos mil diecisiete, que se difundiría a través de redes sociales oficiales *Twitter* y *Facebook* las actividades relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así mismo, le solicitó que le remitiera fotografías de los eventos en los que participaría para su difusión.
- h) **Se tiene por acreditado** que mediante el boletín oficial 11/17 se difundió una actividad del Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, en su calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales.
- i) **Se tiene por acreditado** que, entre el seis y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se difundieron en las redes sociales *Facebook* y *Twitter* diversas actividades de la quejosa con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer, la agenda respectiva con diversas actividades, en la que se precisan también actos de los otros consejeros, así como la actualización del micrositio de la comisión que encabeza.
- j) **Se tiene por acreditado** que se difundieron mediante diversos boletines oficiales, varias actividades en las cuales participó la quejosa en su calidad de consejera electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre enero y marzo de dos mil diecisiete.
- k) **No se tiene por acreditado** que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social le hubiera negado a la quejosa la difusión de sus actividades por no haber sido autorizado por la Consejera Presidenta.
- l) **Se tiene por acreditado** que la agenda que incluye las actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer de todos los consejeros electorales, se difundió el seis de marzo de dos mil diecisiete,

al existir errores en su configuración, sin que pueda precisarse qué tipo de errores.

- m) **Se tiene por acreditado** que se difundieron las actividades en las que participó la quejosa con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en distintos medios de comunicación digital.
- n) **No se tiene por acreditado** que hubiera existido un trato diferenciado o discriminatorio hacia la quejosa por parte del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, toda vez que de las constancias del expediente consta que, contrario a lo indicado por la quejosa en su escrito de denuncia, éste sí publicó en los medios oficiales las actividades realizadas por la quejosa como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- o) **Se tiene por acreditado** que de noviembre de dos mil quince a septiembre de dos mil dieciséis, la Consejera Claudia Carrillo Gasca tuvo un total de veintiocho impactos en medios de comunicación, mientras que la Consejera Presidenta tuvo doscientos veintinueve impactos, por su parte los consejeros Sergio Avilés Demeneghi, cuarenta y uno; Luis Carlos Santander Botello, treinta y seis; Thalía Hernández Robledo, treinta y tres; Jorge Armando Poot Pech, veintisiete y, Juan Manuel Pérez Alpuche, diecisiete.
- p) **Se tiene por acreditado** que mediante oficio UTCS/369/2016, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, dirigido a la quejosa, le informó de acciones tomadas para apoyarla en el ejercicio de su derecho de réplica, en atención a una solicitud realizada por ésta.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora a **José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad**

Técnica de Comunicación Social del IEQROO,³¹⁵ el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual manifestó, en lo que interesa lo siguiente.

- Señale qué es el boletín oficial del IEQROO:

(...) el boletín oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo es una publicación que es generada por la Unidad Técnica de Comunicación Social de dicho órgano administrativo y que tiene como fin, publicitar en la página y en las redes sociales institucionales, así como en los diferentes medios de comunicación, todo lo relativo a las acciones y eventos del Instituto en cita, así como de las actividades efectuadas por los distintos órganos que lo integran, entre los cuales se encuentra el Consejo General.

- Informe a través de qué medios y con qué periodicidad se difunde el boletín oficial del IEQROO:

...la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto cuenta con base de datos de trescientos treinta correos electrónicos de diversos representantes de los medios de comunicación, entre los que se encuentran reporteros, jefes de información, fotógrafos, directores editoriales, jefes de información presentadores de noticias y corresponsales de medios nacionales; a través de los cuales la citada Unidad Técnica realiza el envío del boletín oficial de este Instituto o cualquier otro documento o información que requiera ser difundida; cabe señalar, que con independencia de los anterior dicha Unidad Técnica difunde la información oficial por medio de redes sociales de este Instituto "Facebook" y "Twitter", para lo cual me permito transcribir los links de internet de las mismas https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?pnref=story.unseen-section https://twitter.com/IEQROO_oficial

La difusión del boletín oficial, se efectúa cada vez que hay una actividad o evento propio del Instituto, o en su caso al realizarse una entrevista por parte de algún medio de comunicación hacia algún Consejero o Consejera Electoral.

Para acreditar lo manifestado con relación al requerimiento planteado en el inciso b) adjunto la base de datos de los correos electrónicos de los diferentes representantes de medios impresos, páginas de internet, noticieros de radio y canales de televisión con cobertura estatal.

- Indique, además del boletín oficial del IEQROO, a través de qué medios de comunicación impresos o por internet se difunde información del referido Instituto Electoral local:

... toda la información relacionada con las actividades del Instituto Electoral de Quintana Roo es difundida a través de los medios establecidos en el apartado anterior.

³¹⁵ Visible a fojas 3946 a 3951, del legajo 6, de expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Refiera qué área y qué funcionario revisa o define el contenido que se publica en las redes sociales oficiales, en el boletín oficial del IEQROO, así como en cualquier otro medio de comunicación impreso o por internet del referido Instituto electoral local:

...de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social es el funcionario encargado de revisar y definir el contenido que se publica en las redes sociales oficiales, en el boletín oficial de dicho Instituto, así como en cualquier otro medio de comunicación impreso o por internet del referido Instituto Electoral Local.

- Informe a través de qué medios de comunicación se difunden las actividades de las Consejeras y Consejeros del IEQROO:

"...las actividades de las Consejeras y Consejeros de este Instituto, son difundidas mediante el boletín oficial, así como de las redes sociales oficiales de este Instituto; esto a través de los mismos canales de comunicación establecidos en los apartados en donde se da contestación a los incisos b) y c).

- Precise si el trece de febrero del presente año, Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Estado de Quintana Roo, le solicitó que se difundiera en la página oficial del IEQROO algún boletín oficial sobre la actualización del micrositio denominado "Igualdad entre Hombres y Mujeres", y en su caso, informe qué trámite se le dio a dicha solicitud:

... en fecha quince de febrero del presente año, la licenciada Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral y Transparencia, mediante oficio CIE/042/17 solicitó a un servidor, dar difusión en las redes sociales oficiales de este Instituto, sobre la actualización del apartado de igualdad entre mujeres y hombres, mismo que se encuentra en la página oficial del mismo. Por lo que en atención a dicho oficio se realizó la difusión solicitada en las redes sociales institucionales "Facebook" y "Twitter", para lo cual anexo en copia certificada el citado oficio, así como las capturas de pantalla de las redes sociales antes señaladas.

- Señale si se elaboró algún boletín oficial el trece, catorce o quince de febrero del presente año y cuál fue el contenido difundido y, en su caso, remita los boletines publicados:

...el día quince de febrero del presente año se publicó un boletín oficial en la página de este Instituto, mismo que se adjunta en copia certificada el presente documento.

- Informe si el dos de marzo del presente año, recibió el oficio CE/CCG/037/17 o al día siguiente el oficio CE/CCG/0040/17, mediante el cual, Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, le solicitó se difundieran las actividades que estaría realizando en el mes de marzo en la zona norte del Estado de Quintana Roo, en su

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

carácter de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres del IEQROO y, en su caso, indique qué trámite se le dio a dicha solicitud:

... el día dos de marzo del presente año a las 14:49 horas, se recibió el oficio CE/CCG/037/17, así como también en fecha tres de marzo del año en curso a las 14:25 horas, fue recibido el oficio CE/CCG/0040/17, por lo que, en atención a estos oficios de las diversas actividades en las que participarían las Consejeras Electorales de este Instituto en el citado mes, siendo que esa misma fecha (3 de marzo) se publicó tanto en la página oficial, como en las redes sociales oficiales del Instituto, y de manera simultánea se entregó copia de la referida agenda a la oficina de la Consejera Claudia Carrillo (se adjunta copia certificada del acuse de recibido por parte de personal adscrito a dicha oficina). También se hizo del conocimiento de las Consejeras que igualmente participarían en las actividades establecidas en la agenda. Derivado de ello, surgieron observaciones al documento generado por el suscrito, por lo que fue necesario bajarla de esos medios para realizar las adecuaciones respectivas.

Una vez corregida la pluricitada agenda, en fecha lunes seis de marzo del año que transcurre, se realizó la difusión de la misma en la página oficial y redes sociales institucionales; para lo cual se adjunta copia certificada de las capturas de pantalla respectivas.

No se soslaya que en fecha seis de marzo del presente año, esta Unidad Técnica de Comunicación Social remitió a la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca el oficio número UTCS/015/17, en el cual se le informó sobre la atención a su solicitud efectuada mediante oficios CE/CCG/037/17 CE/CCG/0400/17, por lo que, tal y como se ha realizado en reiteradas ocasiones, se le solicitó remitiera a su servidor las fotografías de su evento, para poder realizar una difusión completa de todas las actividades institucionales llevadas a cabo por ella.

- Indique cuál es el trámite que se da a las solicitudes de las Consejeras o Consejeros para que se difunda información de sus actividades en los medios de comunicación oficiales del IEQROO, es decir, especifique si la información que se envía para tales efectos se revisa, aprueba o modifica y, si esto es así, informe bajo qué criterios:

...con independencia de que exista solicitud o no por parte de las y los Consejeros Electorales, la Unidad Técnica a mi cargo, tiene como una de sus funciones la de instrumentar la difusión de las actividades institucionales a través de los medios alternativos y a partir de las nuevas herramientas tecnológicas; así como las señaladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de este Instituto, por lo que, adicionalmente a las actividades ordinarias de difusión que se realizan, se tiene la instrucción por parte de la Presidencia de dar atención y seguimiento a todas y cada una de las solicitudes que realicen los órganos del Instituto, incluidos las y los Consejeros Electorales, atendiendo al principio de máxima publicidad que nos rige, así como bajo los criterios de igualdad y certeza, siendo que en lo relativo al contenido de la información, este debe ir apegada a los principios que rigen este Instituto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Al respecto es de señalarse que en algunos casos la solicitud de dicha difusión viene acompañada de un oficio y en otras ocasiones al tratarse de un evento de conocimiento interno del Instituto, personal de la Unidad Técnica de Comunicación Social a mi cargo acude a dar cobertura informativa de dichas actividades, ya sea dentro de las instalaciones de este Instituto o fuera de las mismas, siendo importante destacar que para la generación de la información a difundir el Titular o en su caso el Coordinador de Información, ambos de la Unidad Técnica de Comunicación Social, durante la realización de dicha actividad realizan una entrevista, en la cual el Consejero o la Consejera Electoral realiza las manifestaciones que considere pertinentes.

Lo anterior toda vez que por instrucciones de la Presidencia de este Instituto, todas y cada una de las actividades en las que participe cualquier integrante del Consejo General deben ser difundidas de manera conjunta e igualitaria, ponderando en todo momento la igualdad entre los mismos.
(...)

- **Copia certificada** de la base de datos de reporteros, editores, columnistas, jefes de información, jefes de presa, fotógrafos y corresponsales, de los diferentes medios de comunicación local, regional y nacional.³¹⁶
- **Copia certificada** del oficio CIE/042/17, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información y Transparencia del *IEQROO*, dirigido a José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del mismo Instituto, mediante el cual le solicita al referido funcionario la difusión en redes sociales del Instituto de la actualización del apartado de Igualdad entre Mujeres y Hombres.³¹⁷
- **Copia simple** del oficio CE/CCG/038/17, de dos de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Adrián Almícar Sauri Manzanilla, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística del *IEQROO*, mediante el cual solicita la difusión de actividades que realizaría durante el mes de marzo, al norte del Estado en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en la página oficial del instituto.³¹⁸

³¹⁶ Visible a fojas 3952 a 3960 del legajo 6, del expediente.

³¹⁷ Visible a fojas 3961 a 3965 del legajo 6, del expediente.

³¹⁸ Visible a fojas 3893 del legajo 5 del expediente.

- **Copia simple** del oficio CE/CCG/040/17, de tres de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, mediante el cual solicita la difusión de actividades que realizaría durante el mes de marzo, al norte del Estado en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en medios de comunicación social y redes sociales del propio Instituto.³¹⁹
- **Copia simple** del oficio CE/CCG/041/17, de tres de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Adrián Almicar Sauri Manzanilla, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística del *IEQROO*, mediante el cual solicita la difusión de actividades que realizaría durante el mes de marzo, al norte del Estado en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en la página oficial del instituto.³²⁰
- **Copia certificada** del boletín oficial del *IEQROO* 11/17, de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se realizó la difusión de actividades del Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, Juan Manuel Pérez Alpuche.³²¹
- **Copia certificada** de la agenda de actividades relativa a la conmemoración del día internacional de la mujer.³²²
- **Copia certificada** de impresiones de pantalla de la red social *twitter* de enero a marzo de dos mil diecisiete, de las cuales se advierte la difusión de actividades de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en las cuales se advierte la difusión de la actualización del micro sitio de la

³¹⁹ Visible a fojas 3894 del legajo 5 del expediente.

³²⁰ Visible a fojas 3895 del legajo 5 del expediente.

³²¹ Visible a fojas 3966 a 1967 del legajo 6 del expediente.

³²² Visible a fojas 3968 a 3969 del legajo 6 del expediente.

referida Comisión, así como la agenda de actividades relativa a la conmemoración del día internacional de la mujer.³²³

- **Copia certificada** de impresiones de pantalla de la red social *Facebook* de enero a marzo de dos mil diecisiete, de las cuales se advierte la difusión de actividades de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en las cuales se advierte la difusión de la actualización del micro sitio de la referida Comisión, así como la agenda de actividades relativa a la conmemoración del día internacional de la mujer.³²⁴
- **Copia certificada** del oficio UTCS/015/17, de seis de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, dirigido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, mediante el cual le informa que las actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer se difundirán en redes sociales³²⁵.
- **Copia certificada** del oficio CE/CCG/037/17, de dos de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, mediante el cual le solicita la difusión de las actividades que realizaría el mes de marzo en la zona norte del Estado en su calidad de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, al cual anexó copia simple de las invitaciones y calendario de dichas actividades.³²⁶
- **Copia certificada** del boletín oficial 23/17 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió la conferencia que impartió la

³²³ Visible a fojas 3970 a 3976 del legajo 6 del expediente.

³²⁴ Visible a fojas 3977 a 3987 del legajo 6 del expediente.

³²⁵ Visible a foja 3988 del legajo 6 del expediente.

³²⁶ Visible a foja 3989 del legajo 6 del expediente.

Consejera Claudia Carrillo Gasca sobre “Violencia Política de Género” en el Municipio Benito Juárez, Quintana Roo.³²⁷

- **Copia certificada** del boletín oficial 19/17 de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundieron actividades relacionadas con la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, presidida por la quejosa.³²⁸
- **Copia certificada** del boletín oficial 16/17 de diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió información relacionada con las actividades de los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, incluida la quejosa, relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer.³²⁹
- **Copia certificada** del boletín oficial 15/17 de siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió información relacionada con las actividades de los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, incluida la quejosa, relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer.³³⁰
- **Copia certificada** del boletín oficial 5/17 de treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió que la Consejera Claudia Carrillo Gasca acudió en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como ponente al Foro de Expresión de Mujeres Quintanarroenses, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.³³¹
- **Copia certificada** del boletín oficial 17/17 de trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundieron las actividades realizadas por la Consejera Claudia Carrillo Gasca durante su participación en distintas sedes

³²⁷ Visible a foja 3996 del legajo 6 del expediente.

³²⁸ Visible a foja 3998 del legajo 6 del expediente.

³²⁹ Visible a fojas 3999 a 4000 del legajo 6 del expediente.

³³⁰ Visible a fojas 4001 a 4002 del legajo 6 del expediente

³³¹ Visible a foja 4003 del legajo 6 del expediente

al norte del Estado en su calidad Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.³³²

- **Copia certificada** de impresiones de pantalla de distintos medios de comunicación digital y de las redes sociales *twitter* y *Facebook*, mediante los cuales se hace referencia a distintas actividades en las que participó la quejosa en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.³³³
- Links de algunos de los boletines referidos por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social el escrito de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual da contestación a los hechos que se le imputan mediante el emplazamiento respectivo, los cuales se enlistan a continuación:
 - <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/266-marzo-2017/892-momento-de-hacer-remembranza-de-los-avances-que-han-obtenido-las-mujeres-consejera-electoral>
 - <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/266-marzo-2017/900-mujeres-panistas-del-municipio-de-benito-juarez-recipient-conferencia-sobre-violencia-politica-de-genero>
 - <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/266-marzo-2017/890-iegroo-reconoce-el-papel-que-juegan-las-mujeres-en-las-politicas-publicadas-y-en-la-toma-de-decisiones>
 - <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/266-marzo-2017/891-iegroo-principal-promotor-para-el-desarrollo-del-liderazgo-politico-de-las-mujeres>
- **Acta circunstanciada** que se instrumenta con objeto de dejar constancia de los enlaces electrónicos señalados en los escritos presentados por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, en cumplimiento a lo ordenado en el punto sexto del previsto de seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado.³³⁴

³³² Visible a fojas 4004 a 4005 del legajo 6 del expediente

³³³ Visible a fojas 4008 a 4017 del legajo 6, así como fojas 5014 a la 5025, del legajo 7, del expediente.

³³⁴ Visible a fojas 4276 a 4304 del legajo 6, del expediente.

- **Copia certificada** de la relación de las notas periodísticas, en las que aparecen las y los consejeros electorales del *IEQROO* publicadas de noviembre de dos mil quince a septiembre de dos mil dieciséis, remitido por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social.³³⁵
- **Copia certificada** del oficio UTCS/369/2016, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, dirigido a la quejosa, mediante el cual le informó de acciones tomadas para el ejercicio de su derecho de réplica, en atención a una solicitud formulada por ésta mediante diverso oficio CE/CCG/086/16, así como oficios dirigidos a distintos medios de comunicación.³³⁶
- Respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora a las consejeras, **Claudia Carrillo Gasca, Thalía Hernández Robledo, a la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina**, así como a los consejeros **Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello**, a quienes se les cuestionó sobre el procedimiento para la difusión de sus actividades como consejeros electorales.
- **Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina**³³⁷
Conforme al artículo 56 de la Ley Orgánica de este Instituto, la Unidad de Comunicación Social del mismo, tiene como atribuciones, entre otras, las siguientes: (...)
Dicha disposición legal igualmente establece que la Unidad en comento, durante los procesos electorales estará adscrita al Consejo General, y fuera de estos a la Junta General, bajo la coordinación de la Presidencia.
Del mismo modo se refiere que el Manual de Organización de este órgano comicial local, establece como funciones del Titular de la Unidad de Comunicación Social, entre otras, la de "Instrumentar la difusión de las actividades institucionales a través de los medios alternativos y a partir de las nuevas herramientas tecnológicas".
Como se advierte, las funciones relativas a las publicaciones y difusión de las actividades institucionales en los medios de comunicación y redes sociales, corresponde a la Unidad de Comunicación Social en referencia.

³³⁵ Visible a foja 554, del legajo 1, del expediente.

³³⁶ Visible a fojas 4656 a 4674, del legajo 7, del expediente.

³³⁷ Visible a fojas 3943 a 3945 del legajo 6 del expediente

Como en todas las actividades de este organismo público local electoral, estas se apegan en primer lugar a los principios rectores del Instituto, siendo que en el caso particular, se atiende a la máxima publicidad, relativo a que todos los actos e información del Instituto deban ser públicos, con las salvedades que al efecto disponga la normatividad correspondiente. De igual forma esta Presidencia en pleno uso de sus atribuciones legales, ha instruido al Titular de la Unidad de Comunicación Social que la difusión de las actividades institucionales se realice bajo los criterios de igualdad, certeza y equidad, atendiendo debida y oportunamente las peticiones que en su caso le realicen los órganos de este ente comicial.

... con independencia de que existan o no solicitudes por escrito o de manera verbal por parte de las y los consejeros electorales para que se difunda información de sus actividades, esta Presidencia en todo momento ha instruido a la Unidad de Comunicación Social que, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones, se dé cobertura a las actividades institucionales de mis compañeras y compañeros consejeros, bajo los criterios ya indicados de igualdad, certeza y equidad.
(...)

- **Consejera Thalía Hernández Robledo³³⁸**

Me permito referir que no se encuentra previsto un procedimiento o trámite mediante el cual las consejeras y los consejeros solicitemos la difusión de nuestras actividades en los medios de comunicación oficiales de este Instituto.

No obstante en mi carácter de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General de este Instituto, emito oficios de convocatoria a reuniones de trabajo o sesiones de dicha Comisión a las y los integrantes de la misma, de entre los cuales convoco al Director de Organización, en su carácter de Secretario Técnico, y en el oficio correspondiente a dicho servidor electoral, marco copia de conocimiento al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, ello a efecto de que dicha área técnica, en cumplimiento de su obligación legal de difundir oportunamente las actividades del Instituto, asista a las propias reuniones o sesiones que correspondan para realizar tomas fotográficas y enterarse de los asuntos a tratar para la debida difusión.

Por otro lado, cuando me corresponde participar en forma directa en alguna actividad, como por ejemplo, dar una conferencia, presentar algún libro o ser panelista en alguna mesa de trabajo, he optado por avisar de manera económica al titular de la referida Unidad Técnica de Comunicación Social.

Refiero que no tengo situación alguna que manifestar en relación a solicitud o información requerida por la suscrita al área técnica de Comunicación Social que no haya sido atendida en los términos solicitados.

Para efecto de acreditar la veracidad de mi dicho, adjunto al presente copia simple de los oficios de convocatoria a reuniones o sesiones de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, llevadas a cabo el presente año, dirigidos al Director de

³³⁸ Visible a fojas 4057 a 4058 del legajo 6 del expediente

Organización del Instituto, en su carácter de Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

- **Consejera Claudia Carrillo Gasca³³⁹**

De lo anterior quiero manifestar que no existe documento alguno específico que sustente el trámite o procedimiento que se le da a las solicitudes de difusión que como consejera electoral le solicité o solicitara al LIC. JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, pero cabe señalar que el último citado en los primeros días del inicio de nuestro encargo, nos manifestó a las y los consejeros que la información sobre nuestras actividades laborales se lo podíamos comunicar a él, sin referir la metodología.

Respecto a los plazos, cabe señalar que el Artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, señala que la Unidad Técnica de Comunicación Social, deberá difundir de manera oportuna las funciones, programas y actividades del Instituto, situación que respecto a las actividades de la suscrita no aplica el C. LIC. JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social, quien ha mostrado un trato diferenciado hacia la quejosa en diferentes situaciones mismas que de igual forma narro en mi escrito inicial de queja presentada a la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral.

Señalando que de manera anticipada a un evento o requerimiento, la suscrita realiza la solicitud mediante oficio dirigido al Titular de la Unidad de Comunicación Social referida o vía telefónica llamada o mensaje a su teléfono celular 983 106 80 70, a efecto de que se haga la difusión y por tanto boletín de las actividades que en mi calidad de consejera electoral y de manera institucional participa la suscrita, siendo que dicho boletín debería ser publicado en la Página Institucional del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, el cual está a cargo del mismo el LIC. ADRIÁN AMILCAR SAURI VILLANUEVA, Jefe de la Unidad Técnica de Informática.

Recalcando nuevamente que si bien es cierto existe twitter y página de Facebook en apariencia del IEQROO, esta no es la vía oficial como lo es la página oficial www.iegroo.org.mx en donde se publican los boletines oficiales, que son la fuente y referencia para los médicos de comunicación.

Respecto a si han existido razones fundadas para que la información de las actividades de la suscrita no se atendida, quiero manifestar que NO EXISTE razones fundadas para que el LIC. JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social, no de la atención adecuada a la difusión de eventos, como lo es el boletín oficial, máxime que la suscrita en eventos anteriores JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA, le ha negado el apoyo relativo a sus funciones como Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social, misma situación que no ha cesado y sigue siendo reiterativo.

³³⁹ Visible a fojas 4018 a 4020 del legajo 6 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Es importante manifestar que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, señala respecto a las funciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social los siguientes: (Se transcribe).

Sin embargo, en mi calidad de consejera y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el citado JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA ha tenido un trato diferencial a mi persona respecto a otras actividades por otras y otros consejeros.

- **Consejero Jorge Armando Poot Pech³⁴⁰**

Las actividades que el suscrito realiza como Consejero Electoral son relativas a Reuniones de Trabajo y Sesiones de las Comisiones, Comités y Consejo General en los cuales formo parte, así como los eventos de capacitación de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral organiza; en todas ellas, es el área técnica la que se encarga de informar a la Unidad de Comunicación Social de la fecha, hora y tema a tratar, para que en su oportunidad sea publicitada en los medios oficiales con los que cuenta este órgano electoral, a saber la página de internet del propio instituto, las redes sociales twitter y Facebook; y en los boletines informativos que se mandan a los medios de comunicación.

Lo anterior, dado que el Instituto Electoral de Quintana Roo no cuenta con un mecanismo legal donde se prevea el trámite o procedimiento que se deba realizar a fin de que las actividades de los Consejeros Electorales sean difundidas en los medios de comunicación.

No obstante ello, conforme al artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo se prevé las atribuciones conferidas a la Unidad de Comunicación Social, entre otras, la de difundir de manera oportuna las funciones, programas y actividades del Instituto.

A la fecha no tengo conocimiento o información por las áreas técnicas de que alguna de las actividades que se desarrollan y en donde el suscrito forme parte, no se haya difundido en tiempo y forma. Al contrario, me consta que en la página de internet y las redes sociales de la cuenta oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo son difundidas las actividades que se llevan a cabo, lo anterior puede corroborarse accediendo a dichas cuentas que son públicas.

Con tales consideraciones, doy puntual contestación al requerimiento solicitado, reiterando mi saludo y quedando a sus distinguidas órdenes.

- **Consejero Sergio Avilés Demeneghi³⁴¹**

Al respecto, es de informarle que con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se establecen las atribuciones de la Unidad de Comunicación Social, así como hace mención de que dicha Unidad se

³⁴⁰ Visible a fojas 4055 a 4056 del legajo 6 del expediente

³⁴¹ ³⁴¹ Visible a fojas 4021 a 4022 del legajo 6 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

encontrará adscrita al Consejero General durante los procesos electorales, y fuera de estos, a la Junta General bajo la coordinación del Consejero o Presidente.

Es así que el suscrito atendiendo lo dispuesto en las fracciones I, II y III del referido artículo, realicé de manera concreta un requerimiento de difusión de actividades propias que perpetré como Consejero Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, manifestando que dichas solicitudes de difusión de las actividades que hago referencia, fueron atendidas por la Unidad. (Oficios que anexo a la presente como medio de convicción consistente en el ANEXO 1 y 2).

Por lo que respecta al procedimiento o trámite que refiere en relación a la difusión de las actividades, manifiesto bajo formal protesta de decir verdad que no tengo conocimiento de que exista un manual, ley o acuerdo que regule el mismo.

- **Consejero Luis Carlos Santander Botello³⁴²**

No tengo conocimiento de que exista un documento oficial o manual que especifique a qué tiempos, formatos o procedimientos y tiempos deba ajustarse la solicitud de difusión sobre actividades de los medios oficiales de este instituto. Sin embargo, puedo comentar que en los primeros días de noviembre de 2015, después de la toma de protesta de ley y los actuales consejeras y consejeros del Consejo General de este Instituto, el área de comunicación social convocó a consejeras y consejeros a un llamado "Taller de Medios" donde el titular de dicha área manifestó, entre otros puntos, que por medio de la Presidencia tenía conocimiento de la agenda de actividades relevantes y que, en caso de ser necesario, lo único que necesitaba para difundir nuestras actividades era que se le comunicara sobre la realización de las mismas.

Es pertinente señalar que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo establece: (se transcribe).

En lo personal no tengo registro de haber solicitado a la Unidad de Comunicación Social la cobertura en medios de alguna actividad específica realizada en el ejercicio de mi cargo.

- **Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche³⁴³**

No existe un procedimiento estipulado para tal efecto, respecto de las actividades que realizo en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, las solicito de manera económica y personal al ciudadano José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social para que estas sean difundidas en los medios de comunicación oficiales, lo cual ha acontecido en tiempo y forma.

³⁴² ³⁴² Visible a fojas 4068 a 4069 del legajo 6 del expediente

³⁴³ ³⁴³ Visible a foja 4061 del legajo 6 del expediente

24. Auxilio de funcionarios del Instituto como abogados de un denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por la quejosa.

Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, la quejosa señaló que José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del *IEQROO*, compareció ante la Fiscalía General de la referida entidad federativa en carácter de presunto responsable en el procedimiento identificado como número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016 o carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, auxiliándose de Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, quienes actuaron como abogados en dicho procedimiento siendo funcionarios del *IEQROO*, lo cual le causa le causa extrañeza, temor y zozobra.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

- a) **Se tiene por acreditado** que José Luis González Nolasco, entonces Director de Partidos Políticos del *IEQROO* fue citado a comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en el número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en calidad de imputado por el delito de amenaza y que se le solicitó se presentara acompañado de un abogado.
- b) **Se tiene por acreditado** que la diligencia precisada en el numeral anterior no se llevó a cabo en la referida fecha.
- c) **Se tiene por acreditado** que José Luis González Nolasco, entonces Director de Partidos Políticos del *IEQROO* fue citado nuevamente a comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en el número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016, el quince de marzo de dos mil diecisiete, a las veinte horas.
- d) **Se tiene por acreditado** que José Luis González Nolasco compareció en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la fecha y hora precisada

en el inciso anterior, y que estuvo acompañado de Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, como abogados defensores.

- e) **Se tiene por acreditado** que, al momento de comparecer como abogado defensor de José Luis González Nolasco, ante la Fiscalía General de la referida entidad federativa, Julio Asrael González Carrillo, fungía como Coordinador de Acuerdos, Resoluciones y Normatividad, adscrito a la Dirección Jurídica del *IEQROO*.
- f) **Se tiene por acreditado** que, al momento de comparecer como abogado defensor de José Luis González Nolasco, ante la Fiscalía General de la referida entidad federativa, Julio Asrael González Carrillo, fungía como Coordinador de Acuerdos, Resoluciones y Normatividad, adscrito a la Dirección Jurídica del *IEQROO*.
- g) **Se tiene por acreditado** que, al momento de comparecer como abogado defensor de José Luis González Nolasco, ante la Fiscalía General de la referida entidad federativa, Armando Quintero Santos, ocupaba el cargo de Profesional de Servicios adscrito a la Dirección de Partidos Políticos del *IEQROO*.
- h) **Se tiene por acreditado** que por escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, José Luis González Nolasco solicitó se fijara fecha y hora para ampliar su declaración para revocar del cargo a los abogados Julios Asrael González Carrillo y Armando Quintero Santos y nombrar al Lic. Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido como su abogado defensor.
- i) **Se tiene por acreditado** que por acuerdo de cinco de abril, la Fiscalía referida determinó fijar las once horas del siete de abril de dos mil diecisiete para que se realizara la diligencia de revocación de los abogados Julio Asrael González Carrillo y Armando Quintero Sánchez y se nombrara a Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido como abogado defensor de José Luis González Nolasco, y se fijaron las diecisiete horas del once de abril del mismo año para

que el referido abogado aceptara y protestara el cargo como abogado defensor.

Lo anterior con sustento en los siguientes medios de prueba:

- **Acta circunstanciada** que se instrumenta con objeto de dejar constancia de los enlaces electrónicos señalados en los escritos presentados por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del *IEQROO*, en cumplimiento a lo ordenado en el punto sexto del previsto de seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado.³⁴⁴ En dicha acta, entre otras, se certificó el contenido de la nota periodística publicada en la página electrónica denominada “*El Cuarto Poder*”, intitulada: “*Inicia pasarela de denunciados por violencia política en la Fiscalía General*”, de la nota publicada en el medio denominado “*Por Esto*”, intitulada “*Al banquillo de los acusados*”.
- **Copia simple** de diversas constancias relacionadas con el número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016, sustanciada en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, relacionada con la denuncia por violencia política en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca.³⁴⁵

Entre dichas constancias, se encuentra copia simple del citatorio de siete de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. Antonio Francisco Saucedo Su, Fiscal del Ministerio Público, Adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, dirigido a José Luis González Nolasco, mediante el cual se le notifica que debería comparecer ante dicha autoridad a las doce horas del jueves nueve de marzo de dos mil diecisiete, ello con motivo de la práctica de una diligencia de carácter penal en calidad e imputado, para ello se le informa que deberá comparecer acompañado de un licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional que cuente con conocimientos suficientes del sistema acusatorio penal; y en caso de no

³⁴⁴ Visible a fojas 4270 a 4304 del legajo 6, del expediente.

³⁴⁵ Visible a fojas 4089 a 4268, del legajo 6, del expediente.

contar con uno, se le nombraría un defensor de oficio, a fin de que lo asista en la diligencia relacionada con los hechos denunciados en la carpeta de investigación referida, misma que se integró por el delito de amenazas.³⁴⁶

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora mediante proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, a **José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos del IEQROO**³⁴⁷, mediante el cual informó que recibió un citatorio emitido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en donde se le requirió que se presentara en calidad de imputado, a las doce horas del nueve de marzo de dos mil diecisiete, acompañado de un abogado, por lo que por desconocimiento del motivo por el cual era requerido y por el temor natural que existe dentro de la sociedad al saber que es un hecho notorio las malas prácticas por agentes del ministerio público, acudió en compañía del Lic. Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido, sin embargo la diligencia no pudo desahogarse toda vez que se le informó que el Fiscal a cargo de la carpeta de investigación, tuvo que atender otro asunto urgente, por lo que le comunicaron que le sería enviado un nuevo citatorio.

Asimismo, el referido funcionario señaló que la diligencia se practicó el quince de marzo siguiente, a las veinte horas, razón por la cual solicitó a sus amigos Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, quienes son licenciados en derecho, que lo acompañaran en la referida diligencia por tratarse de horarios que no interferían con su horario laboral como servidores del IEQROO, siendo que en dicha comparecencia designó a los referidos ciudadanos como sus defensores particulares para dar cumplimiento a lo exigido en la fracción IV del artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que su abogado de confianza se encontraba fuera de la ciudad, pero que en ningún momento tuvo la intención de que dichos profesionistas lo representaran en cualquier asunto penal, sólo acudieron en calidad de amigos y con motivo de orientación, en esa única ocasión.

³⁴⁶ Visible a foja 4098, del legajo 6, del expediente.

³⁴⁷ Visible a fojas 4337 a 4342 del legajo 6, del expediente.

En el mismo sentido, el funcionario referido informó que el Lic. Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido es quien lo representa en todos los actos procedimentales en el presente y futuro dentro del caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora mediante proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, a **Julio Asrael González Carrillo, Coordinador de Acuerdos, Resoluciones y Normatividad, adscrito a la Dirección Jurídica del IEQROO³⁴⁸**, mediante el cual informó que sí ha actuado como abogado de José Luis González Nolasco en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, relacionada con el caso número FG/QR/OPB/10/3927/2017, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Al respecto el referido funcionario precisó que ello obedeció a una solicitud del referido ciudadano, a título personal sin que guarde alguna relación con los cargos o funciones que desempeñan en el Instituto.

Refiere que la diligencia a la que acudió en compañía de José Luis González Nolasco tuvo verificativo el quince de marzo de dos mil diecisiete a las veinte horas, en las instalaciones que ocupa la Unidad de Investigación en Delitos Diversos de la citada Fiscalía, esto es, fuera de su horario laboral.

Asimismo, refirió que a la fecha de presentación el escrito ya no fungía como defensor de José Luis González Nolasco en el citado asunto, toda vez que el veintinueve de marzo fue revocado de dicho cargo.

- Respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora mediante proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, a **Armando Quintero Santos, Profesional de Servicios adscrito a la**

³⁴⁸ Visible a fojas 4326 a 4327, del legajo 6, del expediente.

Dirección de Partidos Políticos del IEQROO³⁴⁹, mediante el cual informó que sí ha actuado como abogado de José Luis González Nolasco en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, relacionada con el caso número FG/QR/OPB/10/3927/2017, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Refiere que la diligencia a la que acudió tuvo verificativo el quince de marzo de dos mil diecisiete a las veinte horas, en las instalaciones que ocupa la Unidad de Investigación en Delitos Diversos de la citada Fiscalía.

- **Copia simple** del citatorio dictado en la investigación con número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016, sustanciada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, suscrito por el Lic. Cecilio Sosa Briceño, Fiscal del Ministerio Público, Adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Diversos, dirigido a José Luis González Nolasco, mediante el cual se le notifica que debería comparecer ante dicha autoridad a las **veinte horas del miércoles quince de marzo de dos mil diecisiete**, ello con motivo de la práctica de una diligencia de carácter penal en calidad e imputado, para ello se le informa que deberá comparecer acompañado de un licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional que cuente con conocimientos suficientes del sistema acusatorio penal; y en caso de no contar con uno, se le nombraría un defensor de oficio.³⁵⁰
- **Copia simple** del escrito suscrito por José Luis González Nolasco, dirigido al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual, entre otras cuestiones, solicitó que se fijara fecha y hora para ampliar su declaración, toda vez que deseaba revocar del cargo a los abogados Julios Asrael González Carrillo y Armando Quintero Santos y nombrar al Lic. Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido como su abogado defensor.³⁵¹

³⁴⁹ Visible a fojas 4326 a 4327, del legajo 6, del expediente.

³⁵⁰ Visible a foja 4330, del legajo 6, del expediente.

³⁵¹ Visible a fojas 4345 a 4346, del legajo 6, del expediente.

- **Copia simple** de la notificación dirigida a José Luis González Nolasco, dentro de la investigación con número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/1069/2016, mediante la cual se le informó, entre otras cuestiones, que se fijaron las once horas del siete de abril de dos mil diecisiete para que se realizara la diligencia de revocación de los abogados Julio Asrael González Carrillo y Armando Quintero Sánchez y se nombrara a Wilberth Rutinoff Domínguez Garrido como su abogado defensor, asimismo se fijaron las diecisiete horas del once de abril del mismo año para que el referido abogado aceptara y protestara el cargo como abogado defensor.³⁵²
- **Copia simple** del oficio DAP/152/2017, de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del *IEQROO*, dirigido a la quejosa, por medio del cual se informa los puestos y áreas de adscripción de Julio Asrael González Carrillo y Armando Quintero Sánchez.³⁵³

4.2. Conclusiones generales

En el presente apartado se establecerán las conclusiones generales a las que arriba esta autoridad a partir del análisis realizado en el apartado anterior, con base en los hechos denunciados, las pruebas agregadas al sumario, así como atendiendo al dicho de la denunciante, toda vez que se trata de un asunto en el que se aduce violencia política en razón de género en su contra.

Lo anterior, en términos de lo establecido en el *Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género*, de los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como del marco normativo analizado y desarrollado en la presente resolución.

Para ello, se tomará en consideración que **tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados consistentes, por ejemplo en amenazas, suelen presentarse en espacios privados por lo que no**

³⁵² Visible a foja 4347, del legajo 6, del expediente.

³⁵³ Visible a foja 4087, del legajo 6, del expediente.

pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que para su comprobación se tendrá como base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto de los hechos denunciados en los distintos escritos de queja, analizados a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, lo cual se realizará en los apartados correspondientes de la presente resolución.

En tal sentido, del análisis de los hechos denunciados y del material probatorio que obra en el expediente se desprende lo siguiente:

- 1. Se acreditó** que el seis de noviembre de dos mil quince acudieron a las instalaciones del *TEQROO* las y los Consejeros Electorales del *IEQROO* Thalía Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca, Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche, Sergio Avilés Demeneghi y la Consejera Presidenta de dicho Instituto local, Mayra San Román Carrillo Medina, por invitación de ésta última. Que en el referido Tribunal los recibió el entonces Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, sin que se hubiera podido acreditar el motivo de la reunión al no existir coincidencia en las versiones de quienes asistieron.
- 2. No se acreditó plenamente** que en la reunión antes precisada el Magistrado Presidente del *TEQROO* Víctor Venamir Vivas Vivas, hubiera referido que la designación como consejeros electorales de los ahí presentes se la debieran al entonces gobernador, al Magistrado Carlos Lima Carvajal y a él, ni que dicho Magistrado hubiera solicitado su apoyo en beneficio del *PRI* y de la coalición, o que el Magistrado Presidente hubiera amenazado a la quejosa en dicha reunión.
- 3. No se acreditó** que a partir de la reunión de seis de septiembre de dos mil quince, en la oficina del Magistrado del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, la quejosa haya sufrido amenazas, acoso, ocultamiento de información, exclusión de actividades de trabajo por parte de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina y otros Consejeros Electorales, bajo las instrucciones del referido Magistrado, así como de Carlos Lima Carvajal.

- 4. Se acreditó** que al salir de la reunión de seis de septiembre del dos mil quince en el *TEQROO*, la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca recibió una llamada telefónica, estando en un vehículo en compañía de los consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, y que al concluir la llamada en cuestión la quejosa refirió a los consejeros presentes que ésta fue con una persona de nombre *Carlos Lima*. Sin que se haya acreditado plenamente que dicha llamada fue sostenida con el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal, o el contenido de la llamada telefónica al tratarse de una comunicación privada. Tampoco se acreditó que en dicha llamada telefónica la quejosa hubiera sido amenazada, se le hubieran inferido groserías o se le desvalorizara por el simple hecho de ser mujer.
- 5. No se acreditó** que en enero de dos mil dieciséis, la quejosa hubiera recibido mensajes de texto por parte del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal, mediante los cuales se le hubiera amenazado, denostado o humillado por el simple hecho de ser mujer.
- 6. Se acreditó** que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una averiguación previa en contra de la quejosa por el delito de abuso de autoridad desde el tres de septiembre de dos mil catorce, cuando esta se desempeñaba como Agente del Ministerio Público. Que en dicha averiguación previa se determinó el no ejercicio de la acción penal el cuatro de julio de dos mil dieciséis lo cual fue confirmado por el Fiscal General del Estado mediante resolución del nueve de enero de dos mil diecisiete.
- 7. No se acreditó** la existencia de otros procedimientos, investigaciones o averiguaciones previas iniciados en contra de la quejosa en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ni que existiera coacción en contra de funcionarios de la referida Procuraduría para declarar en contra de la quejosa.

- 8. Se acreditó** la difusión de diversas notas periodísticas publicadas en portales electrónicos de distintos medios de comunicación en las cuales se hace alusión a que la quejosa mintió para acceder al cargo que ocupa, que existen diversos expedientes y una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado en su contra, así como que los representantes del *PRD* y del *PRI* solicitaron que se investiguen los hechos, sin que se haya acreditado que la difusión de dichas notas hubiera sido instruida o iniciada por el Magistrado del *TEQROO* Víctor Venamir Vivas, por el Magistrado Carlos Lima Carvajal o por el representante del *PRI*, ante el Consejo General del *IEQROO*.
- 9. No se acreditó** que existiera petición formal o comunicación oficial por parte de la quejosa al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* para solicitar el apoyo para ejercer su derecho de réplica por la difusión de las notas periodísticas que refiere en su escrito de queja, ni que le fuera negado el apoyo por el funcionario en cuestión.
- 10. No se acreditó** que existiera una intervención del Magistrado electoral Víctor Venamir Vivas Vivas en las sesiones privadas del Consejo General del *IEQROO* o en la sustanciación de los procedimientos sancionadores.
- 11. No se acreditó** que en la sesión extraordinaria del Consejo General del *IEQROO* celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis, durante la discusión del PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, el representante del *PNA* ante el Consejo General del referido instituto se hubiera referido a la quejosa o realizado alguna alusión personal hacia ella, o que la hubiera menospreciado por el simple hecho de ser mujer, pues de la lectura integral de la versión estenográfica de la referida sesión se advierte que el representante mencionado se refirió a la intervención del representante de MORENA.

- 12. No se acreditó** que la quejosa hubiera sido excluida deliberadamente de las actividades del *IEQROO*, en tanto que quedó acreditado que no todos los consejeros acuden a todos los eventos a los que son invitados por cuestiones presupuestales y de agenda. Asimismo, **quedó acreditado** que la quejosa ha asistido a diversos eventos a los cuales ha sido invitada o ha solicitado viáticos para asistir.
- 13. Se acreditó** que durante la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, de veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en el punto de asuntos generales los representantes del *PRI* y del *PRD* ante el Consejo General del *IEQROO*, solicitaron que la Consejera Claudia Carrillo Gasca fundara y motivara el sentido de su voto en contra de un acuerdo que había sido sometido a su consideración durante dicha sesión, sin que se advierta alguna expresión por la cual se denosté, agreda o insulte a la quejosa por su calidad de mujer, o bien que pueda traducirse en violencia política por razón de género, o que hubiera exigido que la Consejera Presidenta hubiera tenido que realizar una moción de orden conforme al reglamento aplicable.
- 14. No se acreditó** que durante la sesión extraordinaria, con carácter urgente del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, el representante del *PRI* ante el referido Consejo General se hubiera referido a la quejosa de forma tal que suponga violencia política por razón de género, sino que su intervención se encuentra amparada en su derecho a la libertad de expresión en el marco del debate al seno de un órgano colegiado, como es el Consejo General de un Organismo Público Local Electoral.
- 15. No se acreditó** que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, se haya conducido de manera grosera, denostativa o agresiva hacia la quejosa, ya que no se encuentran acreditadas circunstancias de tiempo, modo ni lugar por las cuales pudiera inferirse, ni siquiera de forma indiciaria, que el referido representante se hubiera conducido de la forma como lo denuncia la

quejosa, ni mucho menos que le hubiera manifestado lo aducido por ésta *“previo a las sesiones” “en los pasillos”*.

- 16. No se acreditó que** la Consejera Presidenta del *IEQROO* hubiera sido omisa en atender las solicitudes de la quejosa relacionadas con la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, toda vez que la solicitud referida por la quejosa realizada en su calidad de Presidenta de la referida Comisión, fue mediante oficio de nueve de mayo de dos mil dieciséis, esto es, a días de la celebración del proceso electoral local, lo que imposibilitó su atención inmediata, además su oficio fue atendido por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, el dos de junio siguiente, y por la Consejera Presidenta el ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Esto es, la falta de atención inmediata por parte de la Consejera Presidenta a la solicitud de la quejosa, no se traduce en violencia política por razón de género en su contra, toda vez que debe atenderse a las circunstancias en que fue realizada la solicitud en cuestión y las posibilidades de que la Presidenta pudiera dar la atención pretendida por la quejosa.

Por ello, si la solicitud de incorporar el tema de género a la estrategia de comunicación social del Instituto se realizó días antes de que se celebrara la jornada electoral, cuando los funcionarios del Instituto y la Presidenta se encontraban inmersos en la organización del proceso electoral, resulta razonable que no se hubiera dado con prontitud la atención pretendida a la solicitud.

Tampoco existe violencia política por razón de género en contra de la quejosa, por el hecho de que hubiera sido el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* quien diera respuesta en un primer momento a su solicitud, pues se trata del titular del área responsable de la estrategia de comunicación social del Instituto y, por tanto, el funcionario indicado para dar puntual contestación a lo solicitado.

- 17. No se acreditó** que la Consejera Presidenta se hubiera negado a dar espacio a la quejosa para atender sus propuestas en materia de género, como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, al no existir una solicitud formal por parte de ésta para la realización de alguna actividad o evento en concreto en la materia, pues si bien la quejosa refirió a la Presidenta en un oficio sobre un proyecto relacionado con la conmemoración del Voto de la Mujer en México, no solicitó su apoyo o de algún área del Instituto para la realización del proyecto en cuestión.
- 18. No se acreditó** que existiera algún impedimento formal para que la quejosa convocara a sesiones de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual preside desde el diecinueve de noviembre de dos mil quince, toda vez que de las constancias de autos y de la normativa interna del Instituto, no se advierte la existencia de algún procedimiento específico para que la Presidenta apruebe las convocatorias respectivas, o que ésta hubiera impedido que la quejosa convocara a sesiones de la Comisión en cuestión o realizara algún evento relacionado con la materia.
- 19. No se acreditó** que la quejosa hubiera sido excluida en la integración del Comité de Transparencia del *IEQROO*, toda vez que ello fue discutido y aprobado por mayoría de votos en la sesión del Consejo General celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis. Tampoco se acreditó que la Consejera Presidenta y el Consejero Pérez Alpuche trataran de disuadirla de integrar el referido Comité.
- 20. No se acreditó** que le haya sido ocultada información a la quejosa ni que ésta haya sido excluida de actividades de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, toda vez que los cursos que la quejosa refiere en su escrito no estaban dirigidos a los consejeros, sino que se trataron de actividades dirigidas al personal del Instituto relacionadas con cuestiones técnicas sobre la carga de información en la Plataforma de Transparencia, los cuales no se hicieron del conocimiento de ninguno de los integrantes de la Comisión, ni se trató de actividades

organizadas o promovidas por la Comisión en cuestión o de su Presidente.

21. No se acreditó que el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, hubiera pretendido controlar a los Consejeros del *IEQROO*, particularmente a la quejosa, a través de una vista ordenada a la *UTCE* para el inicio de un procedimiento de remoción de consejeros, toda vez que si bien, la Sala Regional del *TEPJF*, con sede en Xalapa, determinó que la autoridad electoral había excedido sus funciones al determinar que los consejeros *“incurrieron en responsabilidad al tener una notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones ...”*, y que la *UTCE* determinó que no existían elementos para iniciar el procedimiento de remoción respectivo, dicha vista obedeció a que en concepto de los Magistrados que integran el Tribunal local consideraron que la interpretación de los consejeros había sido errónea y de la gravedad suficiente para iniciar un procedimiento de remoción, lo cual fue aprobado por el pleno de dicho Tribunal por unanimidad de votos, esto es, no se trató de una determinación unilateral por parte del Magistrado Presidente.

22. No se acreditó que en la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, en la cual se discutió la denuncia interpuesta por la quejosa por el posible uso indebido del listado nominal, ésta haya sido objeto de violencia política por razón de género por diversos representantes de partidos políticos y de los Consejeros Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, ni que existiera algún tipo de agresión conjunta en su contra para hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando sobre el tema.

Lo anterior, toda vez que de la lectura de la versión estenográfica de la referida sesión del Consejo General se advierte que las intervenciones de los sujetos denunciados no se encuentran dirigidas a denostarla, humillarla o discriminarla por el hecho de ser mujer, sino que se trata de manifestaciones amparadas en el ejercicio de libertad de expresión en una discusión al seno de un órgano colegiado.

- 23. No se acreditó** que la Consejera Presidenta hubiera realizado llamadas a los demás consejeros y representantes de partido con el objeto de atacar a la quejosa durante la sesión referida en el numeral anterior u orquestado un ataque en su contra, toda vez que no se advierte, de la versión estenográfica, que los consejeros y representantes de los partidos políticos señalados en el escrito de queja, estuvieran de acuerdo en atacarla por haber denunciado los hechos antes referidos por instrucciones de la Consejera Presidenta.
- 24. No se acreditó** que los Directores de Organización y de Partidos Políticos del *IEQROO* hubieran amenazado o ejercido violencia política por razón de género en contra de la quejosa cuando ésta los cuestionó sobre la captura de los listados nominales, toda vez que no existen elementos de prueba, siquiera indiciarios, para considerar que efectivamente dichos funcionarios actuaron de la forma en que refiere la quejosa en su denuncia.
- 25. No se acreditó** que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO* actuara de mala fe o con intención de menoscabar o discriminar a la quejosa al no entregar de forma completa el audio y versión estenográfica de una entrevista que le fuera formulada al término de la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que ésta fue enviada el mismo día en que fue solicitada, si bien en apariencia de forma incompleta, se envió de nueva cuenta el primero de septiembre siguiente, esto es, seis días posteriores a la solicitud.
- 26. No se acreditó** que la quejosa fuera discriminada por no contar con un asesor durante el proceso electoral, o porque su oficina es la única ubicada en la planta baja del edificio, toda vez que la quejosa ha contado con personal en los mismos términos que sus compañeros, con excepción de la Consejera Presidenta, quien tiene asignada una persona adicional. Por cuanto hace a la oficina, ello no representa un acto de discriminación toda vez que según consta en autos, la distribución de las oficinas se realizó de forma consensuada entre los consejeros, sin que ello hubiera sido controvertido en su momento por la quejosa, además de que dicha oficina ha sido ocupada por consejeros en integraciones previas del Instituto local.

- 27. No se acreditó** que la Consejera Presidenta hubiera sido omisa en instruir al Director de Organización para que diera respuesta a diversos cuestionamientos relacionados con el resguardo de las listas nominales solicitado en la sesión del Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que consta en autos que el Secretario General, por instrucciones de la Presidenta, remitió a la quejosa un informe rendido por la propia Presidenta relacionado con los cuestionamientos realizados en la sesión referida. Asimismo, consta que la Presidenta instruyó al Director de Organización para que atendiera los cuestionamientos realizados por los consejeros en la sesión citada, lo que fue atendido por el referido funcionario el trece de septiembre siguiente.
- 28. No se acreditó** que la quejosa hubiera sido excluida o que se le hubiera ocultado información relacionada con el Servicio Profesional Electoral Nacional por parte de la Consejera Presidenta, o de cualquier otro consejero electoral o funcionario del Instituto, pues de las pruebas aportadas por la quejosa así como de lo referido en su escrito de denuncia se advierte que la información se brindó en el mismo momento a todos los integrantes de la Comisión en las sesiones precisadas, sin que se advierta que ello se traduzca en violencia política en su contra.
- 29. Se acreditó** que la quejosa fue excluida en la entrega de una compensación económica por proceso electoral junto con el Consejero Luis Carlos Santander Botello.
- 30. No se acreditó** que la quejosa hubiera sido excluida o discriminada por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, toda vez que éste sí atendió a las solicitudes de la quejosa para la difusión de diversas actividades relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así como de otras actividades vinculadas con el tema de género, ello en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad de la Mujer y el Hombre.
- 31. Se acreditó** que dos funcionarios del *IEQROO* actuaron en una ocasión en calidad de abogados defensores de José Luis González Nolasco, en un procedimiento seguido ante la Fiscalía General del Estado de

Quintana Roo, relacionado con la denuncia por violencia política en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca.

5. Marco Normativo

Violencia política por razón de género

El párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Federal exige a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en este sentido, el propio artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Federal, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

Así, el párrafo primero del artículo 4 Constitucional prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres; reconocimiento que en materia política se armoniza con los artículos 34 y 35, de la Constitución Federal al disponer que todos y todas como ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley, así como formar parte en asuntos políticos del país.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone, en su artículo 1, que su objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Así, la Ley General en cita, establece en el precepto 5, conceptos relativos a igualdad sustantiva, igualdad de género, discriminación entre otros:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. *Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;*

IV. IGUALDAD DE GÉNERO. *Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;*

V. IGUALDAD SUSTANTIVA. *Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;* **VI. PERSPECTIVA DE GÉNERO.** *Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;*

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5, fracciones IV, VIII, IX y X especifica los conceptos legales de violencia contra las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres; conceptos que deben tenerse presentes al analizar posibles conductas violatorias de los derechos humanos de las mujeres:

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

...

IV. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: *Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;*

...

VIII. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: *Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;*

IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO: *Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;*

X. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: *Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, y ...*

Sobre el tema de violencia contra las mujeres, el artículo 6 de la Ley General de referencia dispone que puede ser cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado, como en el público.

En este ejercicio conceptual, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también nos proporciona dos conceptos adicionales:

Las categorías sospechosas o focos rojos y los estereotipos de género:

Las CATEGORÍAS SOSPECHOSAS –conocidas también como rubros prohibidos de discriminación- hacen las veces de focos rojos para las autoridades, específicamente para quienes juzgan. Entre ellas, se encuentran el sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, edad; por tanto, en estas categorías también puede aludirse a la política.

Al respecto, dicho Protocolo establece que los operadores jurídicos, como el Consejo General del *INE*, tienen el deber de aplicar, revisar y actualizar éstas categorías tomando en cuenta la sofisticación de los medios por los cuales se puede discriminar, y por tanto, negar derechos a las personas.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu, en su obra *Razones Prácticas. Sobre la teoría de la Acción*, señala: “Violencia Simbólica, es esa violencia que arranca sumisiones

que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas -expectativas colectivas-, en unas creencias socialmente inculcadas”.

Al respecto, Manuel Fernández³⁵⁴ al citar la obra *La noción de la violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica*, dijo: “violencia simbólica, es al contrario de la violencia física, una violencia que se ejerce sin coacción física a través de las diferentes formas simbólicas que configuran las mentes y dan sentido a la acción. La raíz de la violencia simbólica se halla en el hecho de que los dominados se piensen a sí mismos con las categorías de los dominantes: La forma por antonomasia de la violencia simbólica es el poder”.

Los ESTEREOTIPOS DE GÉNERO están relacionados con las características social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados, en cuanto a su relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los hombres.

Los conceptos en torno al tema de violencia contra las mujeres, en opinión de este Consejo General y de acuerdo con los lineamientos generales del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten exponer un panorama general sobre la violencia contra las mujeres, por lo que adquiere relevancia para la protección de estos derechos humanos, y combatir los factores estructurales que impiden su goce efectivo.

No explicitar estos conceptos, podría configurar UNA CONDUCTA DE TOLERANCIA³⁵⁵; incluso, esta omisión podría tener como consecuencia la continuidad de la discriminación de las mujeres, lo que se traduce en negar el acceso a sus derechos; por lo que se impone y requiere dotar de sustancia estos derechos.

³⁵⁴ La noción de la violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. Universidad Complutense de Madrid.

³⁵⁵ El Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima tercera edición define TOLERANCIA, como permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente

Cabe destacar que el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orienta el actuar de las y los juzgadores para juzgar con perspectiva de género; pero sobre todo, hace efectiva la protección sustancial de estos derechos de igualdad formal, expresada en normas generales y abstractas; es decir, los derechos de las mujeres reconocidos formalmente, deben dotarse de contenidos materiales, para lograr una democracia sustancial; por ello, en las decisiones jurisdiccionales se debe atender el principio de progresividad y tener en cuenta que los derechos de las mujeres están en constante evolución, como resultado de diversos movimientos sociales y culturales; y cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.

Bajo estas premisas legales y orientadoras, para analizar el asunto y resolver, debe invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 1ª./J 22/2016 (10ª.), cuyo rubro y texto informan:

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO³⁵⁶. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

³⁵⁶ Las tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son consultables en la página electrónica www.scjn.gob.mx

Importa poner en perspectiva, como un instrumento útil para orientar el estudio del asunto, en relación a esta necesidad de protección sustancial de los derechos de las mujeres a un goce efectivo de sus derechos y libertades, en materia de derechos políticos y electorales, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de común acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, el cual se enmarca dentro de las acciones derivadas de los instrumentos internacionales suscritos por México, que tienen por objeto eliminar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos³⁵⁷.

Al respecto, cabe precisar que este Protocolo es un documento que se emitió en el contexto de la falta de una ley específica en México; los resultados del proceso electoral 2015-2016 y sobre todo, por las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades mexicanas para materializar los derechos políticos de las mujeres.

Así, en dicho protocolo, se establecen las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

Los lineamientos del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, señalan que *la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.*

Como vemos, el documento retoma los conceptos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

³⁵⁷ Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/

La pretensión del Protocolo es orientar a las instituciones a implementar mecanismos de identificación y actuación ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la ejecución de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. Además, el propio protocolo, establece que responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.

Una de las virtudes de este Protocolo es generar una lógica ejemplificativa sobre lineamientos a seguir por las autoridades competentes; es decir, en opinión de este *Consejo General*, implica un deber ético de las y los operadores jurídicos en el ámbito de sus competencias, a fin de actuar con perspectiva de género, en específico, cuando se habla de violencia contra las mujeres, en el caso, en materia política o electoral.

En ese sentido, en dicho Protocolo se establecieron cinco elementos para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, a saber:

1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: **i.** se dirija a una mujer por ser mujer, **ii.** tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o **iii.** las afecte desproporcionadamente.
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas –hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores (as) públicos (as), autoridades gubernamentales, funcionarios (as) o autoridades de instituciones

electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

Esta obligación jurisdiccional se robustece por lo establecido en el plano universal de los derechos humanos, enfocado en el derecho de igualdad de las mujeres, la no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Cierto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 3, y 26 dispone que los Estados Parte, se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto. En materia política señala que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; así como a tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de cada país.

Dentro del sistema universal de derechos humanos, los artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, reconocen el derecho de la mujer para participar en las elecciones, así como, ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación.

Sobre esta misma lógica de protección del derecho de igualdad de las mujeres, enfocadas a la libre participación y la no discriminación, en el Sistema Interamericano de Protección de estos derechos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en su artículo 24, bajo este reconocimiento, su artículo 23, dispone los derechos que gozarán los ciudadanos:

- Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y

- Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Al respecto la Convención Americana contra la discriminación y tolerancia en su artículo 1, arábigo 2 dispone:

Artículo 1 Para los efectos de esta Convención:

...

2 Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

En concordancia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); en su preámbulo señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país.

En el artículo 1, precisa una concepción de discriminación contra la mujer así:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Bajo este llamado, el artículo 7, inciso a), de la CEDAW, dispone que los Estados Partes: tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones, referéndums (consultas) públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Así, en esta armonía normativa interamericana de protección de los derechos de la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém Do Pará); afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

En el artículo 1, de la Convención Belém Do Pará, nos indica qué debe entenderse como violencia contra las mujeres:

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por VIOLENCIA CONTRA LA MUJER cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Al respecto, el artículo 2 de la aludida Convención, señala que la violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica.

La propia Convención Belém Do Pará en su artículo 4, inciso j), dispone que los derechos protegidos en materia política son:

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; d. el derecho a

no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

En el mismo sentido, de conformidad con lo señalado en los párrafos 1 y 7 de la *Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer*, la discriminación es una forma de violencia, en tanto que repercute en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las mujeres, como lo es incurrir en el desempeño de cargos públicos.

La exigencia que plantea a las y los juzgadores el marco normativo descrito es la de ir más allá en la interpretación tradicional de las normas; es decir, romper con los esquemas adquiridos históricamente, para adoptar una posición en la que se garantice la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional una interpretación reforzada.

También resulta aplicable al caso, las jurisprudencia **48/2016³⁵⁸** y **21/2018³⁵⁹** emitidas por la *Sala Superior* de rubros: **VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES**, mediante la que se determina que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos, así como **VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO**, en la cual se establece que para acreditar la existencia de violencia política de género, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o

³⁵⁸ Localizable en: <http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA>

³⁵⁹ Localizable <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/2018>

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.

Por último, resulta orientador el criterio contenido en la tesis de rubro: **JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO**³⁶⁰, de la que se desprenden cuatro elementos que los jugadores deben tomar en cuenta para identificar la desventaja de una de las partes, consistentes en: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de estudios, edad, condición económica y demás características particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder.

Acoso laboral

En cuanto a la violencia o acoso laboral, se debe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe acoso laboral (*mobbing*) cuando se presentan conductas, en el entorno laboral, que tiene por objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o

³⁶⁰ Tesis aislada XXI.2o.P.A.1 CS (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir³⁶¹.

De la misma forma, la doctrina ha identificado al *mobbing* o acoso laboral, como la presión laboral tendenciosa o tendente a la autolimitación de un trabajador mediante su denigración³⁶².

El acoso laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que en muchos casos, inducen al trabajador a renunciar.

No obstante, a pesar de su frecuente ocurrencia y los devastadores efectos psicológicos y aún físicos que tales actuaciones generan en quien debe soportarlas, sólo hasta comienzos de este siglo empezaron a darse respuestas legislativas a dicho fenómeno en algunos países de Europa. En efecto, en varios Estados europeos han sido adoptadas normatividades tendentes a evitar y sancionar este tipo de conductas que constituyen el denominado acoso laboral.

Así, por ejemplo, Suecia promulgó la Disposición relativa a las medidas a adoptar contra toda forma de persecución psicológica en el trabajo y definió la persecución psicológica, como “recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles emprendidas contra trabajadores/as individuales, de tipo ofensivo, de tal modo que suponen el aislamiento de estos trabajadores/as del colectivo que opera en el lugar de trabajo”.

En igual sentido, la Ley Belga del 11 de junio de 2002 relativa a la protección contra la violencia y el acoso moral o sexual en el trabajo, define el acoso moral, como: “las conductas abusivas y reiteradas de todo género, externas o internas a la

³⁶¹ Cfr. ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. Tesis 1a.CCLII/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Primera Sala, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 138 Tesis Aislada (Laboral).

³⁶² GIMENO, Lahoz Ramón, *La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde la óptica de un juez)*, Valladolid, España, 2005, Editorial Lex Nova, p. 82

empresa o institución, que se manifiesten principalmente en comportamientos, palabras, intimidaciones, actos, gestos y escritos unilaterales, que tengan por objeto o por efecto atentar a la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un trabajador, o de otra persona a la que este capítulo le sea aplicable con ocasión de la ejecución de su trabajo, poner en peligro su empleo o crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

El Código de Trabajo francés también incluye una tipificación de la conducta de acoso moral, según la cual “Ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una degradación de las condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos y su dignidad, de alterar su salud física o mental o de comprometer su futuro profesional”.

El Código de Trabajo de Noruega, por su parte, estipula que “los trabajadores no serán sometidos al acoso ni a otra conducta impropia y el trabajo deberá ser organizado de tal forma que no ofenda la dignidad del trabajador”.

En la región de Lazio, Italia, existe, igualmente, una regulación del acoso moral adoptada en 2001, mediante la Disposición para prevenir y combatir el fenómeno del *mobbing* en el lugar de trabajo, según la cual el acoso moral se configura con “las acciones y comportamientos discriminatorios o vejatorios prolongados en el tiempo, en el lugar de trabajo y dirigidos hacia trabajadores por cuenta ajena, públicos o privados, y realizados por el empresario o por otros compañeros, caracterizándose esta práctica como una auténtica forma de persecución psicológica o violencia moral”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado otra definición del término, según la cual, el *mobbing* es “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta”.

Si bien en otros países como España, el acoso laboral no ha tenido reconocimiento legislativo, tal conducta ha sido sancionada, y defendidos los derechos de las víctimas, por vía judicial. Los jueces laborales, siguiendo la jurisprudencia sentada

por el Tribunal Constitucional en materia de respeto por la dignidad del trabajador, han examinado en sus sentencias las características y efectos que produce esta variedad de acoso en el trabajador. Así pues, partiendo de la jurisprudencia constitucional sobre integridad moral, entendida ésta como una manifestación directa de la dignidad humana, comprensiva tanto de las facetas de la personalidad como de aquellas “de la identidad individual, el equilibrio psicológico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano”, en múltiples ocasiones los jueces laborales se han pronunciado respecto de la ocurrencia de esta conducta, llegando incluso, en un fallo reciente, a reconocer la incapacidad laboral permanente y absoluta por dicha causa. En efecto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidió conceder tal incapacidad a una mujer de 29 años de edad que se desempeñaba como auxiliar de clínica en un centro veterinario y quien fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de su jefe. El Tribunal arribó a esa conclusión en consideración a las severas secuelas psicológicas producidas por la situación de acoso denunciada, pues la joven sufría trastorno depresivo, estrés postraumático y crisis de angustia, por lo cual, el Tribunal reconoció su derecho a una pensión habida consideración a la incapacidad producida por las lesiones sufridas.

En América los avances legislativos en la materia han sido mucho menos significativos que aquellos alcanzados en varios de los Estados europeos. En buena parte de los países latinoamericanos, a pesar de haberse presentado iniciativas parlamentarias en materia de prevención, control y sanción de las conductas relacionadas con el acoso en el lugar de trabajo, éstas, en su mayoría, no han logrado ser concretadas. La protección de las víctimas de conductas de hostigamiento laboral ha tenido lugar más bien por la vía judicial, como se verá a continuación.

En Argentina existen dos cuerpos normativos provinciales que constituyen importantes avances en la lucha contra la violencia laboral en los ámbitos públicos de las provincias. Se trata de la Ley 4.148 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia Laboral en el Sector Público, de la provincia de Misiones, y la Ley 12.434 de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en los Ámbitos del Estado provincial, de la provincia de Santa Fe. Con todo, en este país, al igual que en otros tantos del continente, a pesar de la carencia de legislaciones concretas en la

materia, los jueces, mediante la interpretación sistemática del ordenamiento, han protegido los derechos de quienes se han visto ofendidos con conductas de hostigamiento en los ámbitos laborales.

Así, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Colombia, emitió en abril de 2005, un fallo mediante el cual ordenó remitir al tribunal de origen un proceso en el cual el demandante invocaba como causal de despido indirecto la persecución laboral sufrida, después de haber declarado la nulidad del rechazo de la demanda interpuesta.

Para ello, el juez colegiado reconoció la ocurrencia de “*mobbing*” y precisó que éste “se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador que desarrolla como reacción graves problemas psicológicos duraderos, es decir que, se trata de un proceso destructivo sutil que puede llevar a la discapacidad permanente”, por lo cual consideró que, en virtud del principio in dubio pro operario, el tribunal que había rechazado la demanda debió ponderar los factores de persecución laboral alegados y valorarlos adecuadamente. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, determinó recientemente, que toda conducta “abusiva y persecutoria”, así como el acoso sexual en perjuicio de los trabajadores, desplegada por el empleador, constituye una justa causa de despido del agresor. Tal regla jurisprudencial fue pronunciada con ocasión de la demanda presentada por el subgerente de una empresa, al considerar que su despido había sido injustificado. No obstante, el cuerpo colegiado consideró que dicho despido estaba justificado, pues su conducta había configurado una injuria grave.

En Chile, asimismo, se ha dado protección a las víctimas de conductas de acoso en el lugar de trabajo por vía judicial, ya que no existe normatividad específica en dicha materia. Ejemplo de ello lo constituye el fallo dictado por el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano el 8 de junio de dos mil dieciséis, en el cual se pronunció a favor de una mujer que se desempeñaba como vendedora en un almacén de cadena, a quien le fue diagnosticado trastorno adaptativo agudo mixto, en situación de *mobbing* (enfermedad considerada de carácter laboral), por presentar depresión y percepciones negativas hacia el entorno laboral, problemas de sueño, angustia, pánico y ansiedad, ocasionados por el hostigamiento a que se vio sometida por

parte de su supervisora durante un período aproximado de dos años. Por dicha causa, la actora dio por terminado el contrato, de manera unilateral, con fundamento en el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, e interpuso una demanda solicitando el pago de una compensación por despido indirecto.

El juez accedió a su pretensión y ordenó al empleador pagar a la demandante una indemnización por los años de servicio, aumentada en un 50%, y otra suma por concepto de indemnización por daño moral derivado de la enfermedad profesional de la que la demandada fue encontrada culpable. Realizó para ello un ejercicio de hermenéutica jurídica, a partir de una comprensión sistemática de diversas disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico chileno que brindan protección a las víctimas de acoso moral en el ámbito laboral, al igual que de instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, y de aquellos que reconocen los derechos a la no discriminación en el trabajo, a la igualdad ante la ley y la igual protección de ésta a todas las personas.”

De lo señalado, se puede apreciar que el acoso o violencia, en el ámbito laboral, está constituido por una serie de acciones que tiene por objeto menoscabar la honra, la dignidad de las personas, su estabilidad emocional, e incluso su integridad física con el objeto de aislar a una persona en concreto, o bien, generar una actitud propicia o complaciente para los deseos o intereses del agente hostigador o agresor.

Al respecto, la tesis LXXXV/2016, de rubro *ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL*³⁶³, emitida por la *Sala Superior*, refiere que la violencia o acoso laboral se traducen en una forma de discriminación que está constituida por una serie de acciones que tienen por objeto menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional e incluso la integridad física de las personas a fin de aislarlas. Por tanto, las acciones que se presenten entre quienes integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, de manera

³⁶³ Localizable en:

<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXV/2016&tpoBusqueda=S&sWord=ACOSO,LABORAL,CONSTITUYE,UN,IMPEDIMENTO,PARA,EL,EJERCICIO,DEL,CARGO,.,CUANDO,SE,ACREDITA,EN,CONTRA,DE,ALG%C3%9AN,INTEGRANTE,DE,UN,%C3%93RGANO,ELECTORAL>

injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, constituyen una transgresión a los principios de profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo.

En efecto, el acoso laboral es una conducta que constituye una infracción en términos de lo previsto en los artículos 8, fracciones I, VI y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 61, fracciones I, VI, XVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, pues implica:

- a) Abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.
- b) Constituyen una falta de respeto y rectitud.
- c) Entrañan incumplimiento a disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, y, en todos los casos, se apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁶⁴, ha determinado que para llevar a cabo la investigación de hechos relacionados con acoso laboral se deberá considerar los siguientes aspectos:

- Analizar la conducta denunciada como acoso laboral para diferenciarla de una conducta inherente a las exigencias del empleo, cargo o comisión, así como de las funciones asignadas a quien se queja.
- Determinar el ámbito espacial en que ocurrió el acoso laboral para caracterizarlo como sucedido en el ámbito del trabajo.
- Aplicar el *estándar de la persona razonable* como mecanismo de interpretación del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. En consecuencia, determinar que una persona es víctima de acoso laboral cuando sostiene que ha padecido una conducta que una persona razonable

³⁶⁴ De conformidad con el Acuerdo Plenario 9/2005 y Acuerdo General de Administración número III/2012, localizables en: <https://www.scjn.gob.mx/Documents/AGA-III-2012.pdf>

consideraría suficientemente abusiva o dominante como para alterar las condiciones de su empleo y crear un ambiente laboral opresivo.

- Establecer qué elementos acreditan la intencionalidad de quien sea probable responsable; y
- Evaluar las relaciones de poder, formales o informales, entre las personas involucradas.

Libertad de expresión

Cabe destacar que la libre expresión, bajo cualquier medio, es uno de los pilares fundamentales para el Estado Constitucional Democrático de Derecho. En nuestro país, el artículo 6° de la *Constitución* reconoce la libertad fundamental de expresión, y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho con democracia representativa.

Lo anterior se advierte en el texto de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 24/2007, de rubro siguiente: ***LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO.***³⁶⁵

En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble dimensión: por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública.

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a las personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición para

³⁶⁵ [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1522

ejerger plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, votar y ser votado, entre otros.

Por su parte, en su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre, bien informada y, por tanto, para la toma de decisiones de interés público, más allá del interés individual, lo que es imprescindible en una democracia representativa.

Es por ello, que el espectro protector de la libertad de expresión es diverso, según la dimensión en la que se ejerce:

En la dimensión colectiva, existen expresiones que gozan de una protección más amplia, como ocurre con las que se presentan en el contexto de cuestiones o personas políticas, públicas o con proyección política, en cambio, en la dimensión individual, el margen de protección del discurso es moderado cuando se trate de un interés meramente individual.

Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea la concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera privada.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e información planteada o respecto a los partidos contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, como condiciones para ejercer el derecho de sufragio de manera informada.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión.

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la perspectiva interamericana, privilegian aquella información que resulte útil para forjar una

opinión pública e informada y únicamente aceptan las limitantes válidas en una sociedad democrática.

Por lo que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de ingresar al debate público; empero, su ámbito de apertura no corresponde necesariamente a la intensidad que deben soportar los servidores públicos, cuando el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a sus actividades públicas.

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de sus integrantes o de personas con trascendencia pública.

En este sentido, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, una democracia constitucional requiere de un debate *desinhibido, vigoroso y completamente abierto sobre los asuntos públicos, y que puede incluir expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces ataques severos hacia el gobierno y funcionarios públicos.*

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que las expresiones que se emiten en el contexto del proceso electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y de igual forma, ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas de interés general, público, o con proyección pública.

Lo anterior tiene su base en la Jurisprudencia 11/2008, emitida por la *Sala Superior*, de rubro **LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO**, en la que se señala lo siguiente:

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en

términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.³⁶⁶

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* y *Kimel vs. Argentina*, que ello obedece principalmente al carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones que realizan dichas personas, desde luego, sin que por ello se llegue al extremo de considerarlas privadas de derechos.

Por tanto, indicó que cuando el discurso se orienta a criticar a personas con proyección pública, debe garantizarse la posibilidad de que exista un discurso fuerte y amplio en su contra, y el nivel de intromisión admisible será mayor que cuando se dirige a personas con una proyección privada, desde luego, con la condición fundamental de que el discurso se relacione con asuntos vinculados con su actividad pública.

Restricciones a la libertad de expresión

En este apartado, se debe precisar que la libertad de expresión, al igual que opera con el resto de derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe

³⁶⁶ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.

ejercerse dentro de los límites expesos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

Así, el artículo 6° de la *Constitución* establece que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público.

Esto es, nuestra Constitución Política establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, y ello también se prevé en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1° y 133, de la Constitución), en los artículos 13, párrafos 1 y 2, y numeral 11, párrafos 1 y 2, luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad.

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.

Sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público, o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con algún otro derecho.

Bajo estas consideraciones, cuando se encuentre en debate la libertad de expresión frente al derecho al honor o vida privada de una persona cuya actividad tenga trascendencia para la comunidad general, tendrá que hacerse un ejercicio de ponderación que tome en consideración el tipo de actividades que desarrolla o realiza, el impacto o magnitud de esas actividades, la temporalidad, la vinculación con las circunstancias que le dan proyección pública, el contexto, así como la proporcionalidad de la medida.

Por otra parte, también se debe tener en consideración, en lo conducente, lo previsto en los artículos 4, 5, 7 y, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del *IEQROO*, lo anterior, dado que será materia de pronunciamiento en el estudio de fondo de esta resolución. La normativa reglamentaria es del tenor siguiente:

ARTÍCULO 4. El Consejero Presidente, además de presidir y participar en las sesiones del Consejo General, tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

III. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para la adecuada realización de las sesiones del Consejo General;

(..)

X. Mantener o llamar al orden en las sesiones del Consejo General, utilizando, en su caso, las medidas de apremio establecidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica;

(...)

XVI. Vigilar la aplicación del presente Reglamento; y

XVII. Las demás que conforme a su naturaleza le sean conferidas por la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Instituto, el presente Reglamento y demás ordenamientos legales en la materia vigentes en el Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO 5. Los Consejeros Electorales, en las sesiones del Consejo General, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Participar en las sesiones del Consejo General;

II. Emitir su voto respecto a los proyectos de acuerdos o resoluciones que se sometan a consideración del Consejo General;

III. Manifestar libremente sus opiniones, ideas o puntos de vista, sobre los temas que se traten en las sesiones del Consejo General, de manera pacífica y respetuosa;

(...)

ARTÍCULO 7. Los Representantes, en las sesiones del Consejo General, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Asistir a las sesiones que sean convocados;

II. Hacer uso de la voz en las deliberaciones sobre los asuntos que trate el Consejo General, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento;

III. Manifestar libremente sus opiniones, ideas o puntos de vista, sobre los temas que se traten en las sesiones del Consejo General, de manera pacífica y respetuosa;

(...)

ARTÍCULO 38. En el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo General se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo General, así como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos contemplados en el orden del día.

En dicho supuesto, el Consejero Presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas conductas, con el objeto de conminarlo a que se conduzca en los términos previstos en el presente Reglamento.

6. Análisis del caso concreto

El procedimiento ordinario sancionador es **INFUNDADO**, toda vez que los actos y omisiones que la quejosa atribuye a los sujetos denunciados, que se encuentran acreditados conforme a las constancias de autos, en forma alguna transgreden la normativa electoral, ni se encuentran dirigidos a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político electorales, así como las prerrogativas inherentes al cargo público que ostenta, tampoco constituyen acoso laboral, ni mucho menos se traducen en violencia política por razón de género o incumplimiento a los principios rectores de la función estatal electoral, de conformidad con las siguientes consideraciones:

La Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca sostiene que la discriminación, amenazas, acoso, ocultamiento de información, exclusión de actividades de trabajo del Instituto por parte de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, de otros Consejeros Electorales, de representantes de partidos políticos, así como de directores del *IEQROO*, obedece a supuestas instrucciones por parte del Magistrado del *TEQROO* Víctor Venamir Vivas Vivas y de Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que la quejosa haya sido víctima de lo aducido en su denuncia y escritos posteriores y, por tanto, que en efecto dichos funcionarios públicos hayan orquestado una estrategia en su contra para presionarla por no apoyar a un partido político o coalición en el último proceso electoral local.

En igual sentido, tampoco se advierte que los referidos funcionarios jurisdiccionales hayan usado instrumentos legales falsos, personal del *IEQROO* en su mayoría amenazados con perder su empleo, así como a la Fiscalía General de Justicia del

Estado, para afectar o intimidar a la quejosa, como lo pretende hacer valer en su denuncia y escritos subsecuentes.

Lo anterior, con sustento en los siguientes argumentos, mismos que, por cuestión de método, serán analizados a partir de los hechos relatados por la quejosa en sus escritos de denuncia, los cuales, de ser el caso, se estudiarán de manera conjunta cuando se advierta una estrecha relación entre ellos.

- **Reunión celebrada el seis de noviembre de dos mil quince en el *TEQROO***

La quejosa señala que a partir de la reunión que sostuvieron seis de los consejeros electorales del *IEQROO* con el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vivas, en su oficina, el seis de noviembre de dos mil quince, a la que asegura fue llevada con engaños por la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, y en la que según afirma, dicho Magistrado les refirió que *le debían el cargo a él, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y al Gobernador del Estado* y que por ello debían apoyar al *PRI* y a la coalición en la que participaría dicho partido político en el proceso electoral local que se iba a llevar a cabo, a lo que ella se negó y que por ello fue amenazada por el Magistrado, quien inició una orquestación en su contra para intimidarla, amenazarla y excluirla de diversas actividades del *IEQROO*, con lo que se generaron diversos actos que, en su concepto, constituyen violencia política por razón de género en su contra.

Cabe precisar que en quejas relacionadas con violencia política por razón de género, las amenazas u otro tipo de situaciones que se denuncian suelen ocurrir en ambientes privados, sin testigos, y que por ello, de conformidad con el *Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género*, debe privilegiarse el dicho de la víctima, pues los hechos denunciados no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o a la exigencia de la presentación de una prueba directa, sin embargo, el dicho de la víctima debe ser leído en el contexto del resto de las manifestaciones en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas que consten en el expediente, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.

En este caso, la quejosa señaló que los hechos ocurrieron en la oficina del entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, y que al negar su apoyo al partido referido y a lo que se le estaba pidiendo, el referido Magistrado le llamó la atención diciéndole *que no le quedaba de otra si quería tener futuro profesional en el Estado*, y que al salir de la oficina, siendo la última que salió, la tomó del brazo derecho y le dijo *que no dijera nada, que las cosas van a hacerse como deben hacerse, y que tenía que cooperar en beneficio de su partido y que si no aceptaba le iría mal así como le iría mal al Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello*.

Con el objeto de allegarse de los elementos suficientes para esclarecer los hechos denunciados, la autoridad sustanciadora llevó a cabo diversas diligencias de investigación, entre ellas, requirió a los consejeros que estuvieron presentes en la referida reunión, así como al Magistrado Electoral Vivas Vivas, a efecto de que precisaran lo que había acontecido en dicha reunión.

Como consecuencia de lo anterior, todos los consejeros requeridos y el Magistrado Vivas, sostuvieron que sí se llevó a cabo la reunión en cuestión, y con excepción del Consejero Sergio Avilés Demeneghi, los consejeros señalaron que acudieron por invitación de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, que en dicha reunión el Magistrado Vivas los felicitó por su nombramiento y que se habló de generar un acercamiento entre las dos autoridades electorales del Estado a efecto de trabajar de forma conjunta y coordinada. Sin que ninguno de ellos respaldara lo afirmado por la quejosa en su escrito de denuncia.

Como ya se mencionó únicamente el Consejero Avilés Demeneghi coincidió, en parte, lo aducido por la quejosa en su denuncia inicial, toda vez que no respaldó lo relativo a las supuestas amenazas que según la quejosa le profirió el entonces Magistrado Presidente, mientras que cuatro consejeros, incluida la Consejera Presidenta, refieren que, durante la reunión en cuestión, dicho Magistrado en forma alguna expresó lo afirmado por la quejosa en su denuncia.

En tal sentido, al no existir ningún otro medio de prueba, siquiera indiciario, por medio del cual pudiera precisarse lo acontecido en esa reunión, particularmente lo referido por la quejosa, no es posible afirmar que en efecto el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, hubiera amenazado a la quejosa y que por dicha razón hubiera sido víctima de amenazas, discriminación, exclusión o de violencia política

por razón de género por parte de los sujetos denunciados en el presente procedimiento sancionador ordinario.

Asimismo, ninguno de los consejeros requeridos sostuvo que el Magistrado Vivas hubiera amenazado a la quejosa o que ésta se hubiera quedado al final de la reunión, por el contrario, según refirió la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, al concluir la reunión se quedó en privado con el Magistrado con el objeto de comentar algunos puntos para el trabajo conjunto que se llevaría a cabo con posterioridad, sin referir que antes de ello el Magistrado hubiera increpado a la Consejera Carrillo, lo que fue respaldado por el Magistrado electoral en cuestión.

En tal sentido, del análisis del contexto narrado por los consejeros que acudieron a la reunión no existen elementos para afirmar que efectivamente el entonces Magistrado Presidente se haya conducido de la forma como lo refirió la quejosa en su denuncia, ni que éste la hubiera amenazado en los términos afirmados por ésta.

No obsta a lo anterior que en el expediente en que se actúa se encuentre agregado un audio aportado por el Consejero Sergio Avilés Demeneghi en donde consta una conversación de éste con el Magistrado Vivas, en la que se advierte cierta presión del referido Magistrado sobre el Consejero, pues de dicha conversación no se desprende que en efecto hubiera una orquestación por parte de dicho Magistrado y del Magistrado Lima para perjudicar, discriminar, excluir, afectar a la quejosa en el desempeño de su cargo o bien que, a partir de lo manifestado por el Magistrado Vivas, se configurara violencia política por razón de género en contra de la Consejera Carrillo perpetrada por sus homólogos, por representantes de partidos políticos o por funcionarios del propio instituto, esto es no hay elementos que permitan a esta autoridad llegar a la convicción de que por presión o intervención del referido Magistrado, los sujetos denunciados en el presente procedimiento hubieran actuado en contra de la quejosa, en los términos que ella plantea en sus diversos escritos de denuncia.

Si bien, en el audio en cuestión existen diversas manifestaciones en las que se sugiere *dejar sola* a la quejosa, de la adminiculación de dicha probanza con el resto de documentales y elementos probatorios que constan en el expediente, no se observa que en efecto se le dejara sola, se le excluyera de las actividades del Instituto, se le afectara en el ejercicio de su cargo, o se configurara violencia política por razón de género derivado de lo sostenido en dicha conversación.

En efecto, como ya se razonó, de dicha conversación no es posible desprender que los sujetos denunciados en el presente procedimiento hubieran ejercido violencia política por razón de género en contra de la quejosa, o bien que lo aducido por el Magistrado Vivas en dicha conversación se materializara en los hechos que la Consejera Carrillo denunció en su escrito de queja, esto es que se orquestara una estrategia en su contra para presionarla y afectarla por su calidad de mujer o en el ejercicio de su cargo dentro del *IEQROO*.

No obstante lo anterior, en atención a lo establecido en el *Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género* y del criterio sostenido por la Sala Superior del *TEPJF*,³⁶⁷ lo anterior será analizado tomando como base el dicho de la víctima, quien afirma que a partir de la reunión analizada en el presente apartado y de la llamada y mensajes de texto que se analizarán en el siguiente, el Magistrado Electoral Víctor Vivas y el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado Carlos Alejandro Lima Carvajal, orquestaron una estrategia en su contra para presionarla a que apoyara a una coalición durante el último proceso electoral y que al no hacer caso de lo que le fue solicitado, fue discriminada, acosada, menoscabada en el ejercicio de su cargo y violentada por ser mujer, por la Consejera Presidenta, algunos de los consejeros, directores y representantes de partidos políticos todos del *IEQROO* y que, además, fueron integradas averiguaciones previas en su contra.

Por tanto, a efecto de tener elementos suficientes para estar en posibilidad de tener por acreditado lo aducido por la quejosa en el presente apartado, este debe ser concatenado con el resto de los hechos aducidos por la víctima y con los elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron aportados por las partes y obtenidos por la autoridad sustanciadora en ejercicio de su función investigadora. No obstante lo anterior, toda vez que del audio aportado al procedimiento por el Consejero Sergio Avilés Demeneghi, mediante oficio CE/SAD/028/17, en el que consta una conversación entre éste y el Magistrado Vivas, la cual fue confirmada mediante dictamen pericial ordenado por la autoridad sustanciadora, pudiera desprenderse una posible conducta infractora por parte del Magistrado Electoral Víctor Venamir Vivas Vivas, consistente en una posible coacción o presión del

³⁶⁷ Criterio sostenido por la Sala Superior del *TEPJF* en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

referido Magistrado Electoral sobre algunos de los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, derivado de un supuesto compromiso entre ellos, con el propio Magistrado y con el entonces Gobernador del Estado, se considera pertinente **dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo**, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 226 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Lo anterior a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine si en efecto dicha presión o coacción que se advierte del audio en cuestión en efecto se materializó al seno del *IEQROO* en perjuicio de los principios rectores de la función electoral que deben seguir los organismos públicos locales electorales.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del *TEPJF* en la resolución correspondiente al SUP-JE-107/2016, esta autoridad carece de competencia para conocer de conductas presuntamente infractoras cometidas por Magistrados Electorales.

- **Llamada telefónica e intercambio de mensajes de texto con el Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal**

La quejosa sostiene que al salir de la reunión antes precisada recibió una llamada telefónica del Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal quien, según afirma, la amenazó y le exigió obediencia a él, al Magistrado Vivas y al entonces Gobernador del Estado; sin embargo, aun cuando ella refiere que dos testigos presenciaron la llamada telefónica en cuestión, a saber los consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés Demeneghi, ninguno de ellos respaldó lo alegado por la quejosa en los requerimientos de información formulados por la *UTCE*, pues ambos consejeros señalaron que la Consejera sí recibió una llamada, que ella refirió que fue de una persona llamada Carlos Lima, pero que no podían dar cuenta del contenido de la llamada al tratarse de una comunicación privada.

Asimismo, la quejosa afirma que recibió diversos mensajes de texto por parte del Magistrado Lima Carvajal en enero de dos mil dieciséis, quien la instó a que “*no se meta en temas de dinero*”, que luego no “*chille*” y que “*esperara las consecuencias*”, lo que aconteció después de un recorrido para verificar y elegir las sedes distritales

en el Estado, en donde propuso que se buscaran opciones más económicas, sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que esos mensajes se realizaron, pues según lo manifestó la propia consejera, extravió el teléfono en el cual se encontraban los mismos.

Como ya se ha razonado, por tratarse de amenazas denunciadas en una queja por violencia política de género, las cuales se presentaron en una llamada telefónica y a través de mensajes de texto, cuyos contenidos no fue posible tener por acreditados; de conformidad con lo establecido en el *Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género*, y del criterio sostenido por la Sala Superior del *TEPJF*, debe tenerse como base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto de los hechos referidos en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.

Conforme a lo anterior, debe precisarse que del análisis del contexto en el que la quejosa refiere que ello aconteció, así como de las constancias que obran en el expediente, no existen otros elementos de prueba, siquiera de forma indiciaria para afirmar que el Magistrado Lima Carvajal hubiera tenido comunicación con la Consejera Carrillo en los términos precisados en su denuncia.

Sin embargo, toda vez que según afirma la quejosa, la exclusión, discriminación, violencia política por razón de género al interior del *IEQROO* surgió a partir de instrucciones del referido funcionario, así como del Magistrado electoral Víctor Vivas, en atención a lo establecido en el *Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género*, ello será analizado de forma adminiculada con el resto de los hechos relacionados por la propia víctima, así como del material probatorio que obra en el expediente.

- **Integración de una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de la quejosa**

La quejosa manifestó en su escrito de queja que fue informada por ex compañeros de la Policía Judicial del Estado, que personal de la Dirección Jurídica de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, pretendían que firmaran declaraciones testimoniales en su contra por abuso de autoridad y que al revisar el

expediente, notó que los hechos denunciados pudieron haberse tratado como un acta administrativa y no como una averiguación previa después de dos años de sucedidos los hechos.

Sin embargo, no existen elementos que permitan a esta autoridad sostener que mediante dicha averiguación previa se hubiera pretendido presionar a la quejosa, ni que a través de dicha investigación se le hubiera causado alguna afectación a ella o a su familia, toda vez que ésta inició como averiguación previa el tres de septiembre de dos mil catorce, esto es, con más de un año de anticipación a su nombramiento como consejera electoral.

Además, en el expediente consta que en dicha investigación se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal desde el cuatro de julio de dos mil dieciséis, determinación que fue confirmada por el Fiscal General del Estado, el nueve de enero siguiente, sin que conste que con motivo de dicha investigación se hubiera amenazado, hostigado o presionado a la quejosa.

Asimismo, consta en el expediente que aparte de dicha investigación, misma que, como ya se indicó, se inició antes de que la quejosa fuera nombrada Consejera Electoral, no existieron otras investigaciones iniciadas en su contra a partir de que recibió su nombramiento y de que supuestamente se negó a apoyar al *PRI* y a la coalición que integró en el pasado proceso electoral, esto es, no existen elementos, siquiera indiciarios, para considerar que como medio de coacción, se hubieran iniciado procedimientos penales o investigaciones en su contra.

Tampoco consta que, como lo afirma en su denuncia, se hubiera coaccionado a funcionarios de la Policía Judicial del Estado para que declararan en su contra, pues de las constancias relacionadas con la averiguación previa en cuestión, no se advierte que existieran las declaraciones que señala la quejosa, sino que por el contrario, los agentes de la Policía Judicial del Estado que declararon en calidad de testigos, señalaron que cuando acontecieron los hechos denunciados acudieron a una llamada en la que Claudia Carrillo, en su carácter de agente del Ministerio Público, solicitó su apoyo pues se encontraba una persona de sexo masculino quien se estaba comportando de forma agresiva y violenta, gritándole y ofendiéndola, sin que ninguno de ellos declarara que la ahora Consejera se hubiera excedido en el ejercicio de sus funciones o cometido el delito de abuso de autoridad.

De ahí que, en concepto de esta autoridad no existan elementos que permitan considerar que por medio del inicio de averiguaciones previas en su contra se le hubiera coaccionado, amenazado, presionado y mucho menos que ello pudiera traducirse en violencia política por razón de género en su contra.

- **Publicación de notas periodísticas en las que supuestamente se calumnia a la quejosa**

La quejosa aduce que por medio de la difusión de diversas notas periodísticas en las que se hizo alusión a la averiguación previa precisada en el apartado anterior, se pretendió intimidarla por no votar a favor de los proyectos en beneficio del *PRI* y de la coalición que integraba.

En el apartado correspondiente a la acreditación de hechos se advierte que el ocho de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal electrónico del medio noticioso *“Novedades Quintana Roo”* una nota periodística intitulada *“Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo”* cuyo contenido alude a que la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca “falseó información” para obtener el cargo que ostenta, en la nota se señala que existen una investigación y una averiguación previa por abuso de autoridad en proceso de integración, los cuales, supuestamente, anteceden a su nombramiento como consejera, información que, según se afirma en la nota periodística, fue ocultada a los consejeros del *INE* que realizaron la entrevista a la quejosa para acceder al cargo.

Asimismo, se acreditó que el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal electrónico del medio noticioso *“Novedades Quintana Roo”* una nota periodística intitulada *“Quieren que se investigue a todos los consejeros del leqroo”*, en cuyo contenido se aduce que la quejosa mintió para ocupar su cargo. En la nota se hace referencia a que el representante del *PRD* propuso que se abriera una investigación en contra de todos los consejeros electorales, incluyendo al Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco. En la misma nota se hace alusión a que la Consejera Claudia Carrillo negó tener antecedentes penales y afirmó que su último día en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue el treinta y uno de octubre de dos mil quince, fecha en la que renunció.

De igual forma en la nota se menciona que Claudia Carrillo aclaró que para concursar como consejera presentó una carta de antecedentes no penales, la cual

fue expedida por la referida Procuraduría. Por otra parte, en la misma nota se hace alusión a que la redacción de *Novedades de Chetumal* posee una relación de expedientes abiertos en la Procuraduría del Estado en contra de la quejosa.

También se acreditó que en el portal “*Del Campo Noticias*”, sin que conste la fecha, se publicó una nota periodística intitulada “*Miente consejera electoral al INE para conseguir su cargo*”, en la cual también se hace alusión a una supuesta serie de quejas y denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las cuales, según la nota, revelan que la Consejera Claudia Carrillo falseó información para obtener el cargo que ostenta.

De igual forma se acreditó que en el portal de noticias “*Periodistas Quintana Roo*”, sin que conste fecha, se publicó una nota periodística intitulada “*Mentiras de una Consejera*” en la que se afirma que la imagen del IEQROO sufrió un severo daño por el escándalo que involucra a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, quien, se afirma, ocultó información de procesos legales en su contra arrastrados desde su etapa en la Procuraduría de Justicia del Estado.

Por último, se acreditó que el diez de marzo de dos mil dieciséis, se publicó en el portal de noticias “*Desde el Balcón*” una nota periodística intitulada “*Quieren que se investigue a todos los consejeros electorales de Q. Roo*”, en cuyo contenido se aduce que el representante del PRD propuso que se abriera una investigación en contra de todos los consejeros electorales, incluyendo al Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco. También se hace alusión a que la Consejera Claudia Carrillo negó tener antecedentes penales y afirmó que su último día en la Procuraduría General de Justicia del Estado fue el treinta y uno de octubre de dos mil quince, fecha en la que renunció.

De igual forma en la nota se menciona que Claudia Carrillo aclaró que para concursar como consejera presentó una carta de antecedentes no penales expedida por la referida Procuraduría. Por otra parte, en la misma nota se hace alusión a que la redacción de *Novedades de Chetumal* posee una relación de expedientes abiertos en la Procuraduría del Estado en contra de la quejosa.

Sobre el particular, cabe precisar que los funcionarios públicos, entre ellos, los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, por su específica calidad, están sujetos a una crítica mucho más severa y vehemente en comparación

con otros sujetos particulares, cuya actividad no se encuentra sujeta al escrutinio público.

Esto es, la función y el desempeño en el cargo de los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales, al igual que otros funcionarios públicos, se encuentra sujeta a una crítica informativa en el contexto del debate político sobre hechos relevantes y temas de interés público.

En tal sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referir que *en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.*³⁶⁸

Asimismo, la propia Corte Interamericana,³⁶⁹ respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, ha sostenido que *hay que distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública como, por ejemplo, un político. Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.*

Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

³⁶⁸ Corte IDH. Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, Párrafo 47.

³⁶⁹ Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 125.

En igual sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J.38/2013 y la Tesis Aislada CCXVII/2009, ambas emitidas por su Primera Sala, cuyo rubro son los siguientes: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Y “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.

En tal sentido, en concepto de este Consejo General, aun cuando de la lectura integral de las notas periodísticas se advierten señalamientos fuertes en contra de la quejosa relacionados con supuestas averiguaciones previas e integración de investigaciones por abuso de autoridad las cuales, se afirma, fueron ocultadas por la quejosa para acceder al cargo que ocupa, ello debe entenderse amparado en el derecho de libertad de expresión, de información y prensa, al constituir opiniones en torno a los antecedentes de una Consejera Electoral, previo a ocupar un cargo y la forma de obtenerlo.

Ahora bien, de las constancias de autos, así como de la lectura integral de las notas periodísticas antes precizadas, se advierte que no existen elementos de prueba por medio de los cuales se pueda arribar a la convicción de que el contenido de esas notas periodísticas se pueda atribuir al Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, a algún representante de partido político o a alguno de los consejeros electorales denunciados, razón por la cual, no pueden ser consideradas como violencia política por razón de género, acoso, discriminación o aislamiento en contra de la quejosa.

En este contexto, se concluye que las citadas notas periodísticas, cuya autoría, publicación o difusión no es posible atribuir a los sujetos antes referidos, en particular al representante del *PR*I ante el Consejo General y a los Magistrados, como lo pretende hacer valer la quejosa, no constituyen elementos idóneos para acreditar que las mismas han afectado el desarrollo de sus funciones como Consejera Electoral y trascienden a su ámbito personal, familiar o al ejercicio de su cargo, dado que se trata de un ejercicio periodístico, que se encuentra protegido por el derecho a la libertad de expresión e información.

Lo cual se robustece con el criterio establecido por la Sala Superior del *TEPJF*, en la jurisprudencia 15/2018, de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.

Por lo tanto, el que la quejosa tuviera o no integradas averiguaciones previas en su contra, que tuviera una carta de no antecedentes penales, o que hubiera mentido o no para acceder a su cargo, si ella consideraba que con ello se le estaba calumniando, dicha circunstancia era materia del ejercicio de su derecho de réplica en contra de los medios noticiosos que difundieron la notas periodísticas, sin embargo, como ya se razonó, la difusión de dichas notas por sí mismas, en forma alguna puede traducirse como violencia política en su contra.

- **Negativa del Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social de apoyar a la quejosa para ejercer su derecho de réplica, proporcionarle información, así como discriminación y trato diferenciado en la publicación y difusión de la información solicitada.**

La consejera Claudia Carrillo refiere que, con motivo de la publicación de las notas periodísticas precisadas en el apartado anterior, solicitó al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral local, Alfredo Figueroa Orea, que hiciera una aclaración y solicitara su derecho de réplica. De acuerdo con lo narrado por la quejosa, dicho funcionario le negó el apoyo solicitado, y le refirió que él sólo dependía de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.

De las constancias de autos no se acreditó que la quejosa efectivamente hubiera solicitado al referido funcionario de manera formal o económica, su apoyo para ejercer su derecho de réplica respecto de las notas periodísticas indicadas en el apartado anterior, relacionadas con supuestas averiguaciones previas iniciadas en su contra, o que éste se hubiera negado a apoyarla para ejercerlo.

Incluso, respecto de aquella difundida en la red social *Facebook* “*SCR Noticias*”, el propio funcionario refirió en su escrito de contestación al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, que el doce de septiembre de ese mismo año, la Consejera Carrillo le solicitó la realización de una carta de aclaración o réplica dirigida a un reportero conocido como Caamal Rivera. Sin embargo, según afirma el referido funcionario, el reportero en cuestión

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

se negó a recibir el escrito aclaratorio, argumentando que la única forma en que lo recibiría sería de manos de la propia Consejera; tal cuestión, según informó el funcionario, fue hecha del conocimiento de la Consejera, quien le manifestó por mensaje de texto que desistiera respecto de la solicitud de réplica, puesto que iba a proceder legalmente.

Es importante resaltar que consta en el expediente que en otras ocasiones en las cuales la quejosa solicitó al funcionario en cuestión su apoyo para realizar acciones relacionadas con el ejercicio de su derecho de réplica, fue atendida su solicitud y brindado el apoyo correspondiente.

Lo anterior se advierte de los oficios CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; UTCS/306/16, de la misma fecha y UTCS/310/16, de dos de septiembre del mismo año, en los cuales consta que la quejosa solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social copia del audio de una entrevista que le fue realizada posterior a la sesión del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como el oficio CE/CCG/086/16, mediante el cual solicitó al referido funcionario su apoyo para ejercer su derecho de réplica, el cual fue atendido mediante oficio UTCS/369/2016, los cuales tienen relación con notas periodísticas distintas a las señaladas por la quejosa en el presente apartado.

Esto es, el funcionario refiere que han existido otras ocasiones en las que la quejosa lo ha buscado para solicitar su apoyo a efecto de ejercer su derecho de réplica, ya sea de manera formal o económica, de lo que se desprende que éste no ha sido omiso en atender las solicitudes de apoyo de la consejera Claudia Carrillo o que, a través de una negativa de brindarle el apoyo institucional para esos fines, hubiera sido discriminada o violentada por su calidad de mujer.

De ahí que este Consejo General considere que no existen elementos suficientes para sostener que la quejosa fue discriminada por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, ni que éste hubiera actuado en los términos señalados en el escrito de queja.

Por otro lado, la quejosa refiere que el aludido funcionario electoral fue omiso en atender una solicitud de entregar la versión estenográfica del audio de las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación al término de la sesión del Consejo General del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, con la finalidad de

solicitar su derecho de réplica, al considerar que la nota publicada en el *link* SCR noticias en la red social Facebook, intitulada *Se detracta consejera electoral en acusaciones por utilización de listas nominales*, era falsa.

Sin embargo, en concepto de esta autoridad tal hecho en forma alguna puede interpretarse como violencia política por razón de género, acoso o discriminación en su contra, toda vez que la quejosa realizó la respectiva solicitud al funcionario el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, este dio contestación el mismo día, sin embargo, no se encontró adjunto el archivo con el audio y la versión estenográfica correspondiente, por lo que el primero de septiembre siguiente lo envió de nueva cuenta, con lo cual se desprende que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, sí dio contestación a la quejosa en un tiempo razonable, contrario a lo afirmado por la quejosa.

Además, no consta en el expediente que la Consejera Claudia Carrillo hubiera solicitado al referido funcionario su apoyo para ejercer su derecho de réplica o bien que ésta lo hubiera ejercido por su cuenta.

Por otra parte, la quejosa refiere que existe un trato diferenciado y discriminatorio por parte de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, ya que no publicó en los medios oficiales del instituto la información que le había solicitado y sí la de otros Consejeros Electorales.

En concepto de esta autoridad, lo aducido por la quejosa tampoco constituye violencia política por razón de género en su contra, discriminación o diferencia en el trato respecto de los otros consejeros, toda vez que no se acreditó hecho alguno que así lo constatará.

Ello es así, pues aun cuando no existe un procedimiento establecido para que los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO* soliciten a la Unidad Técnica de Comunicación Social la difusión de sus actividades, sino que éstos la solicitan de manera informal por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, o bien, por oficio; de las constancias de autos se desprende que las solicitudes realizadas por la quejosa fueron atendidas por el referido funcionario, con independencia del medio por el cual fueron solicitadas.

En efecto, contrario a lo afirmado por la quejosa, se acreditó que, a solicitud de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información y Transparencia del *IEQROO*, se difundió en las redes sociales del Instituto la actualización del micrositio denominado *Igualdad entre mujeres y hombres*, el quince y veinte de febrero de dos mil diecisiete.

Asimismo, se acreditó que el referido funcionario, en atención a los oficios de dos y tres de marzo del dos mil diecisiete, suscritos por la quejosa en los que solicitó que se difundieran las actividades que realizaría durante el mes de marzo de dos mil diecisiete, en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la página oficial del referido Instituto y redes sociales; le informó, mediante oficio de seis de marzo de dos mil diecisiete, que se difundiría a través de redes sociales oficiales *Twitter* y *Facebook* las actividades relacionadas con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, asimismo, le solicitó que le remitiera fotografías de los eventos en los que participaría para su difusión.

De igual forma, se acreditó que entre el seis y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se difundieron en las redes sociales *Facebook* y *Twitter* diversas actividades de la quejosa con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer, la agenda respectiva con diversas actividades, en la que se precisan también actos de los otros consejeros, así como la actualización del micrositio de la comisión que encabeza.

También se acreditó la difusión, en al menos diez boletines oficiales y en diversos medios de comunicación digital, de numerosas actividades en las cuales participó la quejosa en su calidad de consejera electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre enero y marzo de dos mil diecisiete.

Además, no se acreditó que el referido Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social le hubiera negado a la quejosa la difusión de sus actividades por no haber sido autorizado por la Consejera Presidenta, o que hubiera dado preferencia a la difusión de la información solicitada por otros consejeros, ya que en autos consta que el referido funcionario atendió debidamente las solicitudes realizadas por la quejosa, con independencia de lo solicitado por otros consejeros.

Por tanto, a juicio de este Consejo General no se considera que hubiera existido un trato diferenciado o discriminatorio hacia la quejosa por parte del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, toda vez que de las constancias del expediente consta que, contrario a lo indicado en el escrito de demanda, éste sí publicó en los medios oficiales las actividades realizadas por la quejosa como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

No es óbice a lo anterior, que la Consejera Claudia Carrillo refiera que las publicaciones no se hicieron en los términos solicitados por ésta, en boletín oficial y en la temporalidad exigida, pues es razonable que debido a que existían otras actividades del resto de los consejeros, debía haber cierta sistematicidad en la difusión de la información por parte de la referida Unidad Técnica, ya que todo lo señalado por la quejosa se encuentra relacionado con la conmemoración del día internacional de la mujer, lo que supone que existían otras actividades de sus pares, aun cuando era la Presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que en forma alguna significa que se le haya discriminado y anulado en el ejercicio de sus funciones como consejera electoral.

- **Intervención del Magistrado Vivas Vivas en las sesiones privadas del Consejo General y en la sustanciación de procedimientos especiales sancionadores.**

La quejosa refiere que existe una intervención directa por parte del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente del *TEQROO*, quien se ha autodenominado “El Octavo Consejero”, tanto en las sesiones previas del Consejo General, como en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores.

De igual suerte, la quejosa refiere que en diversas ocasiones asistió el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas a las instalaciones del *IEQROO*, que ha sido excluida de las reuniones que ha sostenido con algunos Consejeros Electorales del Instituto local al igual que al consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi, y que fue por el consejero Luis Carlos Santander Botello como se enteraron de una reunión para hacer reflexionar a los consejeros del lazo institucional que jurídicamente parecía estar bien pero, en su concepto, en la práctica denota subordinación e inseguridad al pretender compartir información a través de una cuenta de correo de *Gmail*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

La quejosa refiere que, en dicha reunión, se estableció que el enlace entre ambas instituciones sería el ex magistrado José Carlos Cortés Mugartegui, quien, según el dicho de la quejosa, tiene lazos consanguíneos con la Secretaria Particular de la Presidenta del Instituto, lo que, a su parecer, presume una total subordinación.

Asimismo, la quejosa manifiesta que le solicitó a la Consejera Presidenta del Instituto local la razón por la que el Tribunal Electoral del Estado intervenía en la integración de los expedientes, a lo que le contestó que existía un convenio de colaboración entre ambas instituciones para tal efecto, situación que, según el dicho de la quejosa, era falsa en ese momento, ya que dicho convenio fue aprobado posteriormente.

De lo anterior, se advierte que, en esencia, la Consejera Claudia Carrillo se queja de una supuesta intervención del Magistrado Vivas en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores, así como de reuniones de los otros consejeros con dicho Magistrado, sin que se le convoque o invite.

En el expediente consta que sí han existido, al menos, tres reuniones con el Magistrado Vivas, sin que se advierta que la quejosa o los consejeros Avilés Demeneghi o Santander Botello, hubieran sido deliberadamente excluidos como lo sostiene la quejosa en su escrito de denuncia.

En efecto, por cuanto hace a la intervención del Magistrado Vivas en la integración de los procedimientos especiales sancionadores, en el expediente consta que existió al menos una reunión en las instalaciones del *IEQROO* previo a la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el *IEQROO* y el *TEQROO* en materia de procedimiento especial sancionador, a la cual se tiene acreditado que asistieron todos los consejeros con excepción de ella y del consejero Avilés Demeneghi, quien entró unos momentos y se retiró.

Se acreditó que no existió una convocatoria formal a dicha reunión; sin embargo, ello no implica que se haya excluido a la quejosa o que no se le hubiera convocado por una vía informal, toda vez que se trató una reunión de trabajo con personal de las dos instituciones.

Esto es, se trató de una reunión de trabajo en la que se trataron temas relacionados con la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores, con el

propósito de suscribir un convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objeto de facilitar el trabajo que se lleva a cabo en la sustanciación y resolución de dicha clase de procedimientos.

Cabe precisar que el Convenio suscrito por ambas instituciones estatales, no es exclusivo de dicha entidad federativa, pues se trata de un instrumento jurídico que se ha implementado a nivel nacional y en diversas entidades federativas, con motivo del nuevo modelo de sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores aprobado en la reforma constitucional y legal de dos mil trece y dos mil catorce, en la cual se previó que las autoridades administrativas electorales sean quienes se pronuncien sobre las medidas cautelares e instruyan los procedimientos, mientras que los órganos jurisdiccionales sean quienes emitan la resolución correspondiente. Es decir, a partir de dicha reforma se implementó un sistema dual en el cual participan en un mismo asunto las autoridades administrativas y las jurisdiccionales, lo cual obliga a que exista una colaboración institucional.

Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 220 y 425 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, corresponde a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal, instruir los procedimientos especiales, mientras que el encargado de resolver dichos procedimientos es el *TEQROO*.

Esto es, en el Estado de Quintana Roo tienen un esquema similar al previsto en la *LGIPE* para la instrucción, sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores, en donde se prevé que la Secretaría Ejecutiva del *INE* por conducto de la *UTCE* es la responsable de instruir dichos procedimientos y corresponde su resolución a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. (artículos 470 y 475 de la *LGIPE*).

De lo anterior, se advierte que, como ya se precisó, corresponde a la autoridad administrativa la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores y su resolución a la autoridad jurisdiccional, por lo que la celebración de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, resulta oportuno y necesario para llevar a cabo acciones que faciliten el correcto desarrollo de dichos procedimientos dada la premura con la que éstos deben resolverse debido a su naturaleza jurídica.

Por ello, la celebración de un convenio de colaboración interinstitucional, en el que se busque un acompañamiento en tiempo real desde la sustanciación de las quejas antes de que estas sean enviadas al órgano jurisdiccional, resulta una acción idónea para la instrucción y pronta resolución de procedimientos especiales sancionadores, lo mismo la designación de un enlace entre ambas instituciones.

Incluso, el ocho de agosto de dos mil catorce se firmó un convenio de colaboración interinstitucional entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Instituto, con el objeto de establecer las bases generales de colaboración en materia del procedimiento especial sancionador.

En atención a lo antes señalado, en concepto de esta autoridad no existen elementos que permitan llegar a la conclusión de que exista algún tipo de intervención más allá de lo constitucional y legalmente previsto por parte del entonces Magistrado Presidente, pues es razonable que existieran reuniones previas a la firma del convenio a efecto de establecer canales de comunicación y colaboración institucional en la materia.

En igual sentido, resulta vaga, genérico y subjetiva la afirmación de la quejosa relativa a que existe subordinación e inseguridad al compartir información entre las instituciones referidas por cuentas de correo *gmail*. Lo anterior, en tanto que esta autoridad ha advertido que al momento en que ocurrieron los hechos no existe un correo electrónico institucional dentro del *IEQROO*, por lo que las cuentas de correo con las que trabajan están en dicha plataforma o similares, por lo que no existe algún elemento que permita suponer a esta autoridad que se autorizó la transferencia de información por dicha plataforma de correo electrónico con un fin distinto al establecido en el respectivo Convenio de Colaboración.

Además, cabe precisar que el convenio *IEQROO/CG/A-164/16*, fue revisado y confirmado por la Sala Superior, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en el expediente *SUP-JRC-198/2016*, por lo que no existen elementos para considerar una intervención indebida por parte del entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*.

Asimismo, por cuanto hace a que, según la quejosa, ya existía intervención del Tribunal Electoral en la integración de los expedientes de los procedimientos especiales sancionadores antes de la firma del convenio, ello resulta irrelevante,

pues como, ya se ha razonado, dada la naturaleza de dichos procedimientos, resulta necesaria una colaboración interinstitucional para su sustanciación y resolución, lo que en forma alguna implica una intervención indebida por parte del Magistrado Presidente o de algún otro funcionario en la integración de los expedientes.

Lo anterior, considerando que aun antes de que fuera suscrito el convenio de colaboración antes descrito, era necesario que existiera comunicación con el órgano jurisdiccional local en materia de procedimiento especial sancionador, pues la naturaleza de dichos procedimientos obligaba a ello.

Asimismo, cabe precisar que no existen circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a esta autoridad determinar el momento en que la comunicación entre la quejosa y la consejera presidenta tuvo lugar, para así determinar si esta se llevó a cabo antes o después de la firma del instrumento jurídico antes referido, incluso no existen elementos probatorios para acreditar que dicha conversación hubiera efectivamente acontecido.

Por tanto, no se advierte que con motivo de lo anterior, exista algún tipo de discriminación, ascoso, exclusión o violencia política por razón de género en contra de la quejosa, toda vez que, como ya se razonó, la participación del Magistrado Presidente y de personal del *TEQROO*, se encuentra justificada en términos del Convenio de Colaboración antes precisado, sin que existan elementos que permitan a esta autoridad considerar que pudiera existir algún tipo de abuso o mal manejo de la información que pudiera derivar en algún tipo de responsabilidad.

- **Violencia política por razón de género en contra de la quejosa durante la sesión del Consejo General del *IEQROO* celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis.**

La quejosa refiere que, durante la aludida sesión, en la cual se aprobó el convenio de colaboración entre el *IEQROO* y el *TEQROO* en materia de procedimiento especial sancionador, expuso que dicho instrumento carecía de análisis, por lo que sugirió mecanismos más seguros de información que, en su concepto, abonarían a la máxima publicidad, y que con el referido instrumento se justificaría la intervención de personal del *TEQROO* en las funciones del *IEQROO*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

La quejosa afirma que en la referida sesión el representante del PNA, Armando Miguel Palomo Gómez, realizó una serie de comentarios ofensivos en su contra por ser originaria de Cozumel, Quintana Roo, lo cual fue consentido por la Presidenta quien no llamó al orden ni aplicó las medidas de apremio establecidas en la normativa aplicable.

De los hechos acreditados en el apartado correspondiente se advierte que en la referida sesión en la que se aprobó el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, mismo que fue votado por mayoría de votos, con los votos en contra de la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, así como los consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello, el representante del PNA ante el Consejo General del IEQROO, Armando Miguel Palomo Gómez realizó aseveraciones relacionadas con gente de otras regiones del Estado.

En su intervención el referido representante partidista manifestó lo siguiente:

"Muy buenas tardes; primero que nada disfrutar el debate del día de hoy; un debate que a final de cuentas con mucho respeto para todos los Consejeros que han participado, muy amplio, muy leído y analizado por cada uno de ellos; lo que sí me da mucha pena y nuevamente va el comentario anterior; sencillo, cuando nos llega gente de otros lados que ni conocen la ciudad, pues el lógico, el respeto para los que le enseñaron que su origen o del estado de donde viene, al final de cuentas, es lógico que venga a tratar de empeñar o estar aporreando y moviendo la mano y todo acá, tenemos muchos años, yo tengo el gusto de convivir con varios representantes y a todos se les ha escuchado, todos se han comportado como nos enseñaron acá en el estado de Quintana Roo; un estado tranquilo donde no hay violencia como en otros lados, un estado en el cual nosotros, nuestra ciudad capital se llama Chetumal; el ocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro se creó el Estado; y la verdad yo no sé a raíz de qué algunas personas, no se les quede el nombre todavía el nombre de Chetumal; tan pequeña, una ciudad tranquila, bonita, acá no escuchamos atentados ni nada de eso que hay en otros estados; entonces sí le pediría de manera muy especial a las personas que intenten venir a que algunos representantes, algunos Consejeros caigamos en el juego de ellos de estar manoteando, de estar faltando al respeto, y que quiero esto y que quiero lo otro, no, honestamente yo si les invitaría a que se adapten a las buenas costumbres que hay acá; todos los representantes de partidos políticos, incluso algunas personas que han venido de otros estados han hecho excelente papel, ¿por qué?, porque hemos sido respetuosos, a final de cuentas, hoy como

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

representantes de partidos políticos, incluso nosotros estamos aprovechando el debate que tuvieron los consejeros el día de hoy, pero en ningún momento estamos exigiendo oiga que quiero esto, que quiero lo otro y contéstame, no; yo si invitaría ya a mis compañeros representantes de los partidos políticos, a que fuéramos respetuosos, a que acá en nuestro estado nosotros queremos lo mejor, se entiende que todo estamos representando un partido político y pues nuestros candidatos de acá y la verdad todos buenos; entonces no tiene caso, que una persona de fuera venga de a tratar de subir incluso la imagen de los candidatos a este tema de estar exigiendo y aporreando; sería cuanto y muchas gracias...”

Dicha manifestación la realizó con posterioridad a que el representante de *MORENA* ante el Consejo General del *IEQROO* se refiriera a la ciudad de Trujillo, confundiéndola con la ciudad de Chetumal.

De lo anterior, se advierte que el representante del *PNA*, en ningún momento hizo referencia a la quejosa, ni de forma directa o indirecta, mediante la cual le faltara al respeto, la increpara, la acosara, la discriminara o ejerciera violencia política por razón de género en su contra. Por el contrario, de la lectura de la parte relativa de la sesión en cuestión, se advierte que el comentario del representante partidista se encuentra referido al representante de *Morena*, quien, en su intervención, por equivocación, se refirió a la ciudad de Trujillo, confundiéndola con la ciudad de Chetumal.

Sin embargo, en ningún momento se refiere a la quejosa ni a lo que ella había previamente expuesto en su intervención, en donde había hecho referencia a las razones por las cuales no compartía el proyecto de convenio que se estaba analizando en dicha sesión, mientras que el representante del *PNA* se refirió claramente a la intervención del representante de *MORENA*, quien hizo referencia de forma equivocada a la capital del Estado.

Por tanto, si la quejosa no es originaria de la ciudad de Chetumal y se sintió aludida por lo expresado por el representante partidista, ello no debe ser interpretado como algún tipo de acoso, discriminación o violencia por razón de género en su contra, toda vez que tal manifestación se presentó dentro de un debate al seno de un órgano deliberativo, en el cual, atendiendo a que la naturaleza de un órgano colegiado estriba en la diversidad de opiniones e incluso, en el disenso respecto del sentido o consideraciones que sustentan una determinación del órgano de

autoridad, sin que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes expresan puedan ser objeto de censura o autorización, pues esto constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los integrantes de un órgano colegiado.

En efecto, esta autoridad administrativa como el *Tribunal Electoral*, han sustentado similar criterio relativo a que el debate, en una sociedad democrática, adquiere su manifestación más amplia y los límites de la libertad de expresión amparan temas de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e informada, siempre y cuando esa libertad no exceda los límites constitucionales como los derechos de terceros.

Asimismo, que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, razón por la cual, las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes en el contexto del debate político devienen válidas, de ahí que, sin las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura no existe una sociedad democrática.

En tal sentido, en forma alguna puede considerarse que lo expresado por el representante del *PNA*, constituya acoso laboral, discriminación o que tuviera como finalidad menospreciarla por el simple hecho de ser mujer, por lo que no puede entenderse como violencia política en su contra.

No es óbice a lo anterior, que el Secretario General haya invocado el artículo 38 del Reglamento de sesiones, con la finalidad de recordar a los integrantes de dicho Consejo General que durante las deliberaciones todos los integrantes deben abstenerse de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como de realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajenas a los asuntos en discusión, toda vez que aun cuando el referido funcionario electoral se hubiera referido a lo expuesto por el representante del *PNA*, como ya se argumentó, dentro de su intervención no se advierte que éste se refiera a la quejosa, pues de su lectura se desprende que se está refiriendo al representante de MORENA.

- **Supuesta exclusión de las actividades de *IEQROO***

La quejosa refiere que ella y los consejeros Luis Carlos Santander Botello y Sergio Avilés Demeneghi, han sido excluidos de las actividades propias del Instituto Electoral local, por lo que el seis de mayo de dos mil dieciséis, presentó un escrito dirigido a la Consejera Presidenta, solicitando ser incluida en las actividades del seis, siete y ocho de mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Asimismo, la quejosa refiere que la Consejera Presidenta fue omisa en autorizarle viáticos para asistir al Congreso Nacional de Estudios Electorales en Guanajuato.

De igual forma, la quejosa refiere que no fue informada ni invitada a una actividad llevada a cabo en las instalaciones del Instituto el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en donde se hizo entrega de material electoral, en Apoyo a la Dirección de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones del municipio Othón Pompeyo Blanco de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la cual, en su concepto, fue llevada a cabo de manera anticipada, sin que se hubiera materializado la firma del convenio de colaboración que se firmó el tres de noviembre siguiente, relativo al apoyo del *IEQROO* al referido municipio, en las elecciones para la renovación de Subdelegados, Delegado y Alcaldías del multicitado Municipio.

En igual sentido, la quejosa refiere que, el diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, ser tomada en cuenta para asistir a las actividades del vigésimo aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevarían a cabo el veintidós y veintitrés de agosto, sin que se le diera respuesta.

Del análisis de las constancias de autos realizado en el apartado correspondiente, no se advierte que exista algún tipo de exclusión deliberada hacia la quejosa en las actividades del Instituto, toda vez que, en cada uno de los casos que ella refiere, se desprende que existe algún tipo de justificación para que no hubiera acudido a esas actividades en específico. Además de que se acreditó que sí participó en diversas actividades del *IEQROO* relacionadas con diferentes temáticas relativas con atribuciones del Instituto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

De acuerdo a lo informado por las consejeras y consejeros electorales en los distintos requerimientos formulados por la autoridad sustanciadora, se desprende que no existe una metodología o sistema establecido mediante el cual se determine qué consejera o consejero acude a cada uno de los eventos a los que son invitados, sino que ello atiende a diversas circunstancias como son el tipo de actividad, las comisiones de las que forman parte, la disponibilidad presupuestal para viáticos u otras actividades a las que hayan asistido.

En tal sentido, en concepto de esta autoridad, resultan razonables los criterios señalados por las consejeras y consejeros requeridos, ello siempre y cuando exista proporcionalidad y razonabilidad en la distribución de los eventos a los que cada uno de ellos asiste.

En el caso, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa **acudió a dieciséis eventos** durante dos mil dieciséis y hasta marzo de dos mil diecisiete, con un monto en viáticos proporcional a lo asignado al resto de sus homólogos.

Como se demuestra a continuación:

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/091-89/2017 de fecha 24/02/17 ³⁷⁰	Evento de conmemoración del día internacional de la mujer	México D.F.	2 días	7 de marzo de 2017, al 8 de marzo de 2017	\$3,200.00
CCG/001/16 de fecha 05/01/16 ³⁷¹	Asistir a las Instalaciones del Consejo Municipal de Puerto Morelos	Puerto de Morelos	1 día	6 de enero de 2016 al 6 de enero de 2016	\$1,600.00
CCG/002/16 de fecha 29/01/16 ³⁷²	Recordatorio para determinar las sedes de los consejos distritales y municipales	Zona norte	3 días	1 de febrero de 2016 al 3 de febrero de 2016	\$4,800.00
CCG/11/16 de fecha 07/03/16 ³⁷³	Asistir a reuniones de trabajo con la Coparmex y los medios de comunicación	Cancún	2 días	8 de marzo de 2016 al 9 de marzo de 2016	\$3,200.00

³⁷⁰ Legajo 7, foja 5013, del expediente

³⁷¹ Legajo 4, foja 2462/2465, del expediente

³⁷² Legajo 4, foja 2466/2469 del expediente.

³⁷³ Legajo 4, Foja 2472/2475

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
CCG/13/16 de fecha 15/03/16 ³⁷⁴	Realización de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de consejeros y vocales de los consejeros distritales y municipales del IEQR., del proceso electoral local ordinario 2016	Bacalar	1 día	16 de marzo de 2016 al 16 de marzo de 2016	\$800.00
CCG/13/16 de fecha 15/03/16 ³⁷⁵	Asistir al recorrido por el Estado para realizar las entrevistas a los aspirantes a Presidentes, Consejeros y vocales de los Consejeros Distritales y Municipales del Instituto		6 días	16 de marzo de 2016 al 21 de marzo de 2016	
Sin numero de fecha 30/03/16 ³⁷⁶	Acudir a las instalaciones de los consejos distritales de Instituto	Bacalar, playa del Carmen, kantunilkin. Isla mujeres y Cancún	2 días	31 de marzo de 2016 al 1 de abril de 2016	\$3,200.00
CCG/30/16 de fecha 09/05/16 ³⁷⁷	Asistir a la entrega del papel tortilla para la promoción del voto, para las elecciones ordinarias 2016	Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos	1 día	10 de mayo al 10 de mayo	\$800.00
Sin numero de fecha 19/05/16 ³⁷⁸	Asistir a la unidad Intercultural maya, para entregar material de difusión de la promoción al voto	José María Morelos	0.5 día	20 de mayo de 2016 al 20 de mayo de 2016	\$400.00
Sin numero de fecha 20/05/16 ³⁷⁹	Asistir al Instituto Tecnológico, para entregar material de difusión de la promoción al voto	Felipe Carrillo Puerto	0.5 día	23 de mayo de 2016 al 23 de mayo de 2016	\$400.00
CCG/10/16 de fecha 23/02/16 ³⁸⁰	Asistencia a la primera reunión de Coordinación con los Organismo Públicos Locales de las 13 Entidades Federativas que celebran elecciones locales durante en 2016	CDMX	4 días	28 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2016	\$3,200

³⁷⁴ Legajo 4, Foja2476/2479

³⁷⁵ Anexo 4, foja 2296

³⁷⁶ Legajo 4, Foja 2480/2483

³⁷⁷ Legajo 4, Foja 2486/2489

³⁷⁸ Legajo 4, Foja 2490/2493

³⁷⁹ Legajo 4, Foja 2494/2497

³⁸⁰ Legajo 4, Foja 2470/2471

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Oficio	Comisión	Lugar de la comisión	duración	Fecha	Importe
CCG/22/16 de fecha 19/04/16 ³⁸¹	Visitas de verificación a las empresas encargadas de la impresión y producción de la documentación y material electoral para el proceso electoral local ordinario 2016	CDMX	4 días	20 de abril de 2016 al 23 de abril de 2016	\$4,800.00
SIN OFICIO ³⁸²	Realizar la verificación y visto nuevo de la documentación definitiva para gobernador y ayuntamientos en las empresas que ganaron la licitación	CDMX	3 días	20 de abril de 2016 al 22 de abril de 2016	\$4,800.00
CE/CCG/033/16 de fecha 28/05/16 ³⁸³	Recorrido de la entrega de paquetes electorales a los Consejos Distritales y Municipales del Estado de Quintana Roo. Y entrega de papel tortilla en pro de la promoción del voto para el proceso electoral ordinario 2016.	Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	3 días	29 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016	\$4,800.00
CE/CCG/054/16 de fecha 29/08/16 ³⁸⁴	Asistencia al evento que organiza la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación	Ciudad de Veracruz	3 días	31 de agosto de 2016 al 02 de septiembre de 2016	\$4,800.00
CE/CCG/033/17 de fecha 02/03/17 ³⁸⁵	Asistencia a evento organizado por el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de la Mujer, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer	Ciudad de México	2 días	7 y 8 de marzo de 2017	\$3,200.00

Con relación a los eventos que la quejosa manifiesta haber sido excluida, en el expediente consta que, por ejemplo, la actividad llevada a cabo los días seis, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis en Cancún, Quintana Roo, consistió en un recorrido por parte de los Consejeros que forman parte de la Comisión de

³⁸¹ Visible en el legajo 4, foja 2484/2485, del expediente.

³⁸² Visible en el anexo 4, foja 2306, del expediente.

³⁸³ Visible en el legajo 4, foja 2498/2499, del expediente.

³⁸⁴ Visible en el legajo 4, foja 2500 a 2501, del expediente.

³⁸⁵ Visible en el legajo 7, fojas 5011a 5013, del expediente

Administración, de los órganos desconcentrados del Instituto a efecto de establecer mecanismos de vigilancia y coordinación sobre el manejo y operación de los recursos materiales, financieros y humanos que les son otorgados. Esto es, se trató de una actividad a la que acudieron exclusivamente los miembros de la Comisión de Administración, sin que pueda advertirse que la falta de respuesta oportuna por parte de la Presidenta constituya algún tipo de violencia política por razón de género en su contra, o bien, discriminación o acoso laboral que la obstaculice en el ejercicio del cargo.

Ello, en atención a que se trató de una actividad a la que no fue convocado ningún consejero que no formara parte de la Comisión de Administración, además no consta que se tratara de un evento formal al que la quejosa fuera deliberadamente excluida, pues aun cuando ella solicitó asistir, al no formar parte de la aludida Comisión, de acuerdo con los criterios para la asignación de eventos entre los consejeros, no es posible concluir que existiera una exclusión deliberada.

Además, es razonable lo expuesto por la Presidenta cuando argumenta que la comisión implicaba un gasto considerable para ese instituto porque asistieron consejeros electorales y representantes de partidos políticos, por lo que se determinó que asistirían los consejeros electorales que integran la Comisión de Administración del propio instituto por ser esta la que cuenta con la atribución de supervisar lo relacionado con el manejo y operación de los recursos financieros y humanos otorgados a los órganos desconcentrados, lo cual no fue controvertido por la quejosa.

Asimismo, de lo informado por la consejera presidenta, Mayra San Román, así como del material probatorio aportado por ésta, se acreditó que la consejera Claudia Carrillo sí participó en diversas actividades relacionadas con la organización del proceso electoral que al momento de los hechos se encontraba en curso, como fue la localización de las sedes de los consejos distritales, lo cual consta en las actas circunstanciadas en las que se aprecia la firma de la quejosa, también participó en el procedimiento de designación de los consejeros distritales y municipales, acudió a la aplicación de los exámenes correspondientes y formó parte de los grupos de trabajo para llevar a cabo las entrevistas a los participantes, asimismo acudió a las sesiones de instalación de dichos órganos desconcentrados. También se encuentra

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

acreditado que la quejosa asistió en las actividades relacionadas con la entrega de material y documentación electoral 2016, como fueron las relativas a la recepción en del líquido indeleble, la recepción en planta de la documentación correspondiente a boletas, actas y formatos varios.

Por tanto, el hecho de que no fuera tomada en cuenta su solicitud para acudir, concretamente a las actividades llevadas a cabo los días los días seis, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis en Cancún, Quintana Roo, no constituye una vulneración a su esfera de derechos como consejera electoral que impidiera ejercer debidamente su encargo, ya que, como ya fue evidenciado, sí tuvo la oportunidad de participar en otras actividades llevadas a cabo por el instituto para la organización del proceso electoral que se encontraba en curso.

En igual sentido, la quejosa refiere que, el diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, ser tomada en cuenta para asistir a las actividades del vigésimo aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevarían a cabo el veintidós y veintitrés de agosto, sin que se le diera respuesta, lo que no necesariamente debe interpretarse como un acto deliberado de exclusión hacia su persona.

Asimismo, por cuanto hace a la omisión de la Consejera Presidenta de autorizarle viáticos para asistir al Congreso Nacional de Estudios Electorales en Guanajuato, así como a las actividades del vigésimo aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevarían a cabo el veintidós y veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, de las constancias de autos se encuentra acreditado que la quejosa solicitó al Lic. Víctor Manuel Interián López, Director de Administración del *IEQROO* le fueran asignados viáticos para asistir a los referidos eventos, sin que conste que se le hubieran asignado los viáticos solicitados o la razón por la cual no le fueron asignados. Sin embargo, en el expediente se advierten diversas constancias en las cuales se desprende que respecto de otros eventos en los que la quejosa ha solicitado la asignación de viáticos, estos le han sido proporcionados en un parámetro similar al del resto de las consejeras y los consejeros.

En efecto, la distribución de viáticos entre las consejeras y consejeros electorales del *IEQROO*, según lo informó el Director de Administración de dicho instituto, se

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

presentó de la siguiente forma, desde el tres de noviembre de dos mil quince, dos mil dieciséis y hasta el veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Consejera/ Consejero	Importe de Viáticos			
	2015	2016	2017	Total
Claudia Carrillo Gasca	4,800.00	41,600.00	28,800.00	75,200.00
Jorge Armando Poot Pech	0.00	50,400.00	7,200.00	57,600.00
Juan Manuel Pérez Alpuche	4,800.00	56,400.00	5,600.00	66,800.00
Luis Carlos Santander Botello	4,800.00	46,400.00	16,800.00	68,000.00
Mayra San Román Carrillo Medina	9,600.00	60,800.00	21,600.00	92,000.00
Sergio Avilés Demeneghi	0.00	43,000.00	8,800.00	51,800.00
Thalía Hernández Robledo	4,800.00	68,000.00	5,600.00	78,400.00
				489,800.00

De lo anterior, se advierte que la quejosa es una de las consejeras que más recursos ha recibido por concepto de viáticos durante la temporalidad referida, solamente la Consejera Presidenta y la Consejera Hernández Robledo, han recibido más recursos, la primera de ellas se justifica por ser la Presidenta, mientras que, en el caso de la segunda, la diferencia entre ambas consejeras es de tres mil doscientos pesos, lo que no representa un monto desproporcionado si se toma en cuenta que la media de gasto entre los siete consejeros asciende a \$69,971.42 (sesenta y nueve mil novecientos setenta y un pesos 42/100 m.n.), esto es un monto inferior al recibido por la quejosa.

Por lo que, en concepto de esta autoridad, no existen elementos para considerar que la quejosa sea deliberadamente excluida de las actividades del Instituto, o que no se le permita acudir a los distintos eventos a los que es invitada en su calidad de Consejera, o bien que exista un trato discriminatorio respecto de los viáticos que se autorizan al resto de las consejeras y consejeros.

Por cuanto hace a la actividad llevada a cabo en las instalaciones del Instituto el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en donde se hizo entrega de material electoral, en Apoyo a la Dirección de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones

del municipio Othón Pompeyo Blanco de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, no se advierte que en efecto hubieran existido una exclusión deliberada, pues no existe constancia alguna de que se tratara de un evento en el que existiera un protocolo para la entrega del material, ni invitaciones formales a los Consejeros para asistir a la entrega del material electoral.

En efecto, de acuerdo con lo que el Director de Organización del *IEQROO* informó a la quejosa, la entrega del material electoral descrito en la fecha referida se debió a dos circunstancias, la primera que el veintiocho de octubre de ese año las y los consejeros de ese Instituto, en sesión extraordinaria, aprobaron por unanimidad el convenio de colaboración con el referido municipio, y en segundo lugar que el personal del Municipio de Othon P. Blanco informó que la celebración de sus elecciones iniciaría el tres de noviembre de dos mil dieciséis, cuando el primero y dos de ese mes fueron inhábiles en el Instituto, por lo que se solicitó su apoyo con la finalidad de coadyuvar con la logística para que el referido ayuntamiento estuviera en condiciones de llevar a cabo su procesos electoral.

Asimismo, el referido Director le informó a la quejosa que previo a la celebración del acto de entrega del material electoral, no se tenía conocimiento respecto a si acudirían autoridades municipales, por lo que no se llevó a cabo ningún protocolo o solemnidad en la entrega respectiva y que se avisó a las consejeras de forma informal por conducto del Consejero Santander Botello y de la Consejera Hernández Robledo.

De igual forma, en la información compartida en la red social *Facebook* del instituto, misma que fue proporcionada por la quejosa, se advierte que solo estuvieron presentes los Consejeros Electorales Santander Botello, Poot Pech y Pérez Alpuche, así como Thalía Hernández Robledo en su calidad de Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, sin que conste que hayan sido convocados y no hubieran asistido el resto de las y los consejeros electorales, por lo que no existen elementos para considerar que la quejosa no hubiera sido convocada de una forma deliberada.

- **Omisión de la Consejera Presidenta de atender las propuestas de la quejosa relacionadas con violencia política por razón de género, así como la negativa de dar espacio para exponer sus propuestas de género.**

La quejosa sostiene que desde su nombramiento como Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Consejera Presidenta le ha negado el espacio para exponer sus propuestas sobre el tema de igualdad de género, aunado a que no se le dio respuesta a su petición de incluir, en el marco de la promoción del voto, promocionales relacionados con la capacitación y educación cívica en materia de violencia política en contra de las mujeres, ni tampoco respecto a la realización de foros con otras instituciones dedicadas a la protección de la mujeres en el Estado.

En su concepto, tales conductas no sólo se han traducido en una transgresión a su derecho de petición, sino que también han generado que el representante propietario del PRI, Juan Alberto Manzanilla Lagos, la agreda y cuestione respecto a su trabajo dentro de la Comisión que preside, lo cual, según su dicho, queda acreditado con la versión estenográfica de la sesión del Consejo General del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Asimismo, sostiene que no obstante de presidir la comisión en cita, la Consejera Presidenta la excluyó indebidamente de una actividad con el *PNA* relacionada con el liderazgo de las mujeres, puesto que sólo invitó a la Consejera Thalía Hernández Robledo, además de que no le ha proporcionado la información requerida a fin de poder impulsar esfuerzos de coordinación con otras instituciones, para la celebración de un observatorio de género.

En el caso, esta autoridad electoral no advierte elemento alguno, aún de carácter indiciario, por el que pueda afirmarse la existencia de alguna conducta irregular en los términos denunciados por la quejosa y que puedan constituir algún tipo de violencia política por razón de género en su contra, o bien, algún tipo de acoso laboral dirigido a obstaculizar su trabajo como Presidenta de la Comisión indicada y/o como Consejera Electoral, atento a lo siguiente:

Por cuanto hace a la supuesta violación a su derecho de petición, esta autoridad electoral no cuenta con los elementos suficientes para considerar que existe una conducta reiterada o intencional que tenga como finalidad generar una afectación directa a los derechos de la quejosa, ya sea en lo individual, como Presidenta de Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, o bien como consejera electoral del *IEQROO*.

Ello, pues si bien está acreditado que la quejosa, en el marco de promoción del voto, solicitó a la Consejera Presidenta del IEQROO que fuera incluidos en los promocionales, spots, en los itinerarios y como temática, la capacitación y educación cívica sobre prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, tal omisión atendió a las exigencias del desarrollo del proceso electoral que se estaba llevando a cabo en ese momento, tomando en consideración que la solicitud de la quejosa se efectuó a menos de un mes de la jornada electoral la cual se llevó a cabo el cinco de junio de dos mil dieciséis, mientras que su solicitud la presentó el nueve de mayo anterior. Razón por la que se estima que no existe algún tipo de violencia política por razón de género en su contra, o bien, discriminación o acoso laboral que la obstaculice en el ejercicio del cargo el hecho de que la Consejera Presidenta no haya dado contestación inmediata a la quejosa respecto a su solicitud.

Esto es, si bien es cierto que la Consejera Presidenta no dio respuesta inmediata a la quejosa, también lo es que su solicitud fue atendida mediante el oficio UTCS/284/16, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, por el que el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social le informó sobre las acciones y campañas de difusión relacionadas por el Instituto en el marco de la promoción del voto, prevención de los delitos electorales, entre otros aspectos.

En ese documento se hizo de su conocimiento que, como parte de las prerrogativas que otorga el *INE* al *IEQROO*, ya se habían pautado para ese periodo tres mil cuatrocientos setenta y ocho spots radiofónicos distribuidos en veintinueve estaciones de radio concesionarias y permisionarias que operan en el Estado. Asimismo, se le informó sobre el desarrollo de diversas actividades y campañas informativas como parte de la promoción del voto y el fomento a la cultura democrática que se estaban llevando a cabo por parte del instituto local, relacionadas con el inicio del proceso electoral y la fecha de las elecciones que tendrían verificativo el cinco de junio de ese año.

Ahora bien, el hecho de que la inclusión de los promocionales no se haya efectuado en los términos pretendidos por la quejosa, no significa que exista una afectación a su derecho de petición, dado que, atendiendo al marco contextual en el que se efectuó esa solicitud, resulta factible considerar la existencia de alguna

imposibilidad, tanto material como técnica, para modificar los spots que previamente habían sido ya pautados.

De igual forma, no se advierte que exista una omisión por parte de la Consejera Presidenta respecto a la supuesta solicitud de realizar foros con otras instituciones dedicadas a la protección de la mujeres en el Estado, ya que mediante el oficio CCG/029/16, suscrito por la quejosa, no se desprende una solicitud expresa en esos términos, sino exclusivamente una manifestación genérica respecto de la importancia de tener lazos con otras instituciones, en términos de lo previsto en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

Por otra parte, esta autoridad tampoco cuenta con elementos suficientes para acreditar el dicho de la quejosa, consistentes en la supuesta negativa por parte de la Consejera Presidenta del *IEEQROO* de darle espacio para exponer sus propuestas de género, con la finalidad de obstruir su labor como presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, o bien como Consejera Electoral del citado instituto.

Ello en virtud de que, por una parte, no hay elementos en el expediente de los que se desprenda alguna solicitud formal dirigida a la Presidencia del Instituto para la realización de una actividad o evento en concreto relacionado con la igualdad de género que le hubiera sido negada injustificadamente.

Lo anterior, sin que pase desapercibida la respuesta recaída a la solicitud de información de la quejosa, por la que le pide a la Presidenta del *IEQROO* proporcionar los contactos de INMujeres y del *INE* a efecto de poder coordinar con éstas la implementación de un observatorio de género; ello, pues resulta razonable para esta autoridad electoral que sea la Consejera Presidenta del *IEQROO*, como representante de ese organismo público local electoral, quien dirija los esfuerzos de coordinación entre las autoridades federales y nacionales para llevar a cabo el citado observatorio.

Por otra parte, tampoco se acredita la existencia de algún impedimento dirigido a obstaculizar las actividades que, en su calidad de Presidenta de la Comisión, le corresponden para promocionar o exponer sus propuestas en el tema de género, pues, tal y como lo afirmó la Consejera Presidenta del *IEQROO* *-al desahogar el requerimiento que se le formuló el tres de noviembre de dos mil dieciséis-*, no existe

ninguna disposición reglamentaria que obligue a los presidentes de las comisiones del Instituto de contar con una autorización previa por parte de la Presidencia del Consejo para la realización de sus actividades para el debido funcionamiento de las comisiones que presiden.

De igual forma, esta autoridad tampoco advierte la existencia de agresiones por parte del representante propietario del *PRI*, durante la sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, que pudieran constituir un acto de violencia política por razón de género o, en su caso, acoso laboral en su contra. Ello, pues de la revisión integral de la versión estenográfica de la sesión en cita, únicamente se desprende una crítica generalizada a los consejeros electorales, por parte del representante partidista en cuestión, derivado de la supuesta omisión por parte de los consejeros de no sesionar sus comisiones. Esto, sin que se advierta una mención específica en contra de la quejosa o de la comisión que preside, o incluso de alguna otra consejera o consejero electoral.

Asimismo, se debe considerar que tal manifestación se presentó dentro de un debate al seno de un órgano deliberativo, en el cual, atendiendo a que la naturaleza de un órgano colegiado estriba en la diversidad de opiniones e incluso, en el disenso respecto del sentido o consideraciones que sustentan una determinación del órgano de autoridad, sin que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes expresan puedan ser objeto de censura o autorización, pues esto constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los integrantes de un órgano colegiado.

En efecto, tanto esta autoridad administrativa como el *Tribunal Electoral*, han sustentado similar criterio relativo a que el debate, en una sociedad democrática, adquiere su manifestación más amplia y los límites de la libertad de expresión amparan temas de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e informada, siempre y cuando esa libertad no exceda los límites constitucionales como los derechos de terceros.

De ahí que sea válido que los representantes de los partidos políticos estén en aptitud de ejercer su derecho a la libertad de expresión y realizar críticas al trabajo que se realiza al seno de los organismos públicos locales, pues justamente su

función como representante de un partido político, es vigilar el debido funcionamiento del órgano.

Por último, tampoco puede considerarse que la Consejera Presidenta del *IEQROO* haya excluido indebidamente a la quejosa de la actividad llevada a cabo por el PNA, pues, tal y como se constata en el boletín de prensa titulado “*Promueve IEQROO el liderazgo de la mujer a través de los partidos políticos*”, ese evento fue organizado por el mencionado partido político, por lo que no le correspondía a la Presidenta del *IEQROO* determinar quiénes de las consejeras o consejeros del instituto debían ser los invitados.

Incluso, es de destacarse que, en el ámbito de sus atribuciones, la Consejera Presidenta del *IEEQROO* ha invitado a la quejosa, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para participar en actividades relacionadas con el tema de género; tal y como se constata en el oficio PRE/767/2016, suscrito por la Consejera Presidenta Mayra San Román, por medio del cual realizó una invitación a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, para que a través de la comisión que esta última preside, se realizaran actividades para resaltar la conmemoración del voto de la mujer en México.

- **Supuesta violencia política por razón de género en contra de la Consejera Carrillo Gasca durante las sesiones del Consejo General del *IEQROO* celebradas el veintisiete de febrero y el dos de junio de dos mil dieciséis.**

Al respecto la quejosa aduce en su escrito de queja lo siguiente:

- Que en la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, fue cuestionada por Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del *PRI*, por haber votado en contra del acuerdo por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, contraviniendo lo establecido en el artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Consejo General de dicho Instituto, poniendo en duda su designación como Consejera, así como sus conocimientos en la materia, y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

- Que en la sesión ordinaria del citado Consejo, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, donde se discutió el proyecto relativo al uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o cualquier otro medio de reproducción de imágenes, al interior de las casillas durante la jornada electoral, se realizaron por parte del mencionado representante, manifestaciones que no pueden ser consideradas como pacíficas y respetuosas, ya que éste señaló que: *“me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos,”*.

En concepto de esta autoridad electoral, no se acredita violencia política por razón de género, acoso, discriminación u obstrucción en el ejercicio del cargo en contra de Claudia Carrillo Gasca, derivado de las manifestaciones realizadas por el representante del *PRI*, durante el desarrollo de las sesiones del Consejo General del *IEQROO*, por las siguientes razones:

En principio debe señalarse que se trata de manifestaciones vertidas en el desarrollo de la discusión de temas de interés general, efectuados en el seno de un órgano colegiado como en el caso es el Consejo General del *IEQROO*, compuesto por una pluralidad de individuos (representantes de partidos políticos y Consejeros Electorales), los cuales en función del cargo que desempeñan y en ejercicio a su derecho a la libertad de expresión emiten una diversidad de opiniones respecto de los temas que son sometidos a consideración para su aprobación.

Por lo que se refiere a la primera de las manifestaciones señaladas por la quejosa, en el sentido de haber sido cuestionada por el representante del *PRI*, por votar en contra de un proyecto de acuerdo sometido a consideración del Consejo General, se tiene por acreditado que los representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, le solicitaron fundamentara y motivara el sentido de su voto, a fin de conocer las razones que llevaron a la Consejera Electoral a tomar dicha decisión.

Al respecto, en el apartado correspondiente se acreditó que la quejosa indicó que el sentido de su voto obedecía a que se allanaba a lo expresado por sus otros compañeros consejeros, exhortando al representante del *PRI*, a que leyera el reglamento de sesiones sin que especificara algún precepto en particular.

De igual forma, se acreditó que dicho representante, insistió en dos ocasiones para que la ahora quejosa indicara los motivos que le llevaron a votar en contra del proyecto de acuerdo, argumentando en su segunda intervención, que Claudia Carrillo Gasca, era una experta en el tema al haber concursado por un cargo en materia electoral y le exhortó a que le indicara cual era el precepto normativo del Reglamento de Sesiones al que había hecho alusión en su intervención.

Al respecto, esta autoridad considera que con los elementos acreditados no se desprende algún tipo de violencia por razón de género en contra de la quejosa, pues el hecho de que el representante referido, solicitara a la Consejera Carrillo Gasca, expusiera las razones que le llevaron a tomar la determinación de votar en contra del acuerdo por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, en modo alguno resulta contrario a la normatividad electoral o a las normas sobre violencia de género.

Ello es así, pues de las intervenciones realizadas por los representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, mismas que obran en la copia certificada de la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, no se advierte que se hubieren realizado expresiones que denigren a la quejosa, o de las cuales se desprenda algún tipo de agresión o insulto por su condición de mujer.

Además, debe precisarse que se trataba de una solicitud, es decir, una petición que realizó el representante del *PRI*, para que señalara los motivos que le llevaron a votar en contra del proyecto que en ese momento se sometía a su consideración, la cual, si bien contestó, lo cierto es que, también pudo no haberlo hecho.

Aunado a lo anterior, en el artículo 49, del Reglamento de Sesiones del *IEQROO*, se establece que todo voto en contra deberá estar respaldado por las argumentaciones correspondientes durante el desarrollo de la votación respectiva, por lo que el hecho de que el referido representante hubiera solicitado a la quejosa que justificara su voto, se encontraba amparado en lo dispuesto en dicho precepto reglamentario.

Lo que en forma alguna puede ser interpretado como algún tipo de violencia por razón de género en su contra, o de acoso laboral, sino que, por el contrario, tales manifestaciones deben entenderse amparadas en el derecho de libertad de expresión del que gozan todos los integrantes del Consejo General.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación realizada por el representante del *PRI*, en la sesión del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, en donde señaló que: *“me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos”*, en autos del expediente se encuentra acreditado que el dos de junio de dos mil dieciséis, se discutió la solicitud presentada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA, concerniente al uso de medios de reproducción de imágenes el día de la jornada electoral, en donde hizo uso de la voz en un primer momento el representante propietario del *PRD*, el representante suplente del *PAN* y el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello, y posteriormente participaron la Consejera Claudia Carrillo Gasca y el representante propietario del *PRI*.

En cuanto a la participación de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, esta manifestó que el proyecto de resolución sometido a su consideración no fue exhaustivo, para lo cual, realizó algunas sugerencias respecto a su contenido, mientras que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del *PRI*, señaló que le parecía escuchar a algunos integrantes del Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no de ciudadanos.

Al respecto, esta autoridad electoral, no advierte que dicha manifestación constituya una alusión personal respecto de alguno de los Consejeros Electorales que se encontraban al momento de la discusión del asunto, en específico, en contra de la quejosa, toda vez que se trata de una expresión genérica que no estaba encaminada hacia un sujeto particular, pues la frase *“me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General”*, no tiende a describir a una persona particular, sino a una cierta cantidad de individuos que integran el referido Consejo General; además, las palabras *“ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos”*, no constituyen algún descalificativo o violencia en contra de alguien, sino que evidencian la postura del emisor sobre el tema a discutir, en donde establece que ciertos comentarios de los integrantes del Consejo Local, representan a un tipo de sector y no a otro.

Por último, debe precisarse que del contenido del acta de la sesión extraordinaria con el carácter de urgente celebrada por el Consejo General del *IEQROO*, el dos de junio de dos mil dieciséis, y que obra en los autos del presente expediente, no se desprende que Juan Alberto Manzanilla Lagos, hubiere realizado señalamiento o alusión personal en particular en contra de algún integrante del Consejo General, en específico hacia la quejosa, sino que emitió diversas opiniones dentro del ámbito del ejercicio a su derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo 6, de la Constitución Política, así como dentro de los límites permitidos por el artículo 38, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del *IEQROO*, de ahí que las manifestaciones vertidas no puedan considerarse como irrespetuosas o constituyan violencia política por razón de género.

- **Manifestaciones agresivas, groseras y denostativas hacia la quejosa por parte del representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO***

La quejosa denuncia que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, se ha conducido hacia ella de manera grosera, denostativa y agresiva, y que, previo a las sesiones, le ha dicho en los pasillos que *“seguro le doy las nalgas al candidato del PRD-PAN”*. Dichas agresiones, considera, se realizan en su contra por no ser partícipe de las instrucciones partidistas de los magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y Carlos Alejandro Lima Carvajal.

En concepto de esta autoridad electoral, no existen elementos para considerar que en efecto el representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO* se haya referido a la quejosa de la forma en que ella refiere en su escrito de queja, pues de las constancias de autos no se advierten pruebas, siquiera indiciarias, que permitan concluir que el referido representante se hubiera conducido hacia la quejosa de forma irrespetuosa, grosera, denostativa o agresiva.

No obsta a lo anterior que los actos de violencia basados en el género, tales como la emisión verbal de agresiones o amenazas, tienen lugar en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos

manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.³⁸⁶

Es preciso señalar que la quejosa únicamente hace referencia en su escrito de denuncia que la manifestación realizada por el representante en cuestión ocurrió *“previo a las sesiones me ha dicho en los pasillos”* sin especificar circunstancias, de tiempo, modo y lugar, esto es, nunca precisó el número de ocasiones que supuestamente fue objeto de esas agresiones verbales, la forma en la cual se lo decía y el entorno en el que sucedía.

Sin embargo, considerando que en el caso se denuncia violencia política por razón de género y que en el procedimiento administrativo sancionatorio opera el principio de investigación integral, de conformidad con el cual corresponde a la autoridad plenas atribuciones para obtener los elementos de convicción que estime pertinentes y relevantes para llegar a la verdad de los hechos, sin más limitaciones que las previstas en la ley, pues justamente el procedimiento sancionador persigue la averiguación de la verdad sobre lo acontecido, o sea, conocer el hecho imputado en lo objetivo y subjetivo, con sus antecedentes y consecuencias, con la posibilidad a las partes, ciertamente, de suministrar los materiales de prueba, pero sin la obligación de que esta actividad supla el papel principal que en la recopilación asume la autoridad respectiva, quien debe desempeñar su función sin sujeción a más restricciones que las dispuestas en la ley. Esto, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos del derecho privado, en los que el papel del juzgador no alcanza facultades indagatorias, sino la mera verificación de las afirmaciones de las partes, a la luz de las pruebas aportadas por ellas.

En ese sentido, la autoridad sustanciadora se dio a la tarea de investigar el hecho denunciado y allegarse de los elementos necesarios para acreditar, aunque fuera de forma indiciaria, lo afirmado por la quejosa.

³⁸⁶ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

En tal sentido, la *UTCE* realizó las siguientes diligencias:

- Requirió al representante del *PRI* cuestionándolo sobre el incidente referido por la quejosa, con el objeto de otorgarle garantía de audiencia sobre el hecho que le era imputado y para que, en su caso, presentara los elementos probatorios que estimara necesarios. Al respecto el referido representante manifestó lo siguiente: *“En ningún momento realicé o insinué a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, el comentario descrito en el requerimiento, ni algún otro comentario respectivo, toda vez que no tuve ningún tipo de interlocución con la citada consejera.”*
- Requirió a la Consejera Carrillo con el objeto de constatar si existían otras personas a quienes les constara el hecho narrado en su queja, a lo que contestó lo siguiente: *“No existen personas que le consten los hechos por tratarse de una acción personal y directa entre el C. Juan Antonio Manzanilla Lagos y la suscrita. Máxime que en los casos de denostación y agresión verbal como éstas por lo regular son de realización oculta; es decir, en ausencia de testigos que puedan presenciar y por tanto testificar a cerca de la conducta del C. JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS, quien realizaba dichas aseveraciones como una forma de justificar los motivos por los cuales la suscrita ejercía y ejerce su derecho de uso de voz y voto como consejera electoral (aparentemente por creer que tengo inclinaciones por un partido diverso al que representa) y que en apariencia no beneficiaban a su partido político el cual representa.”*
- Requirió a la Consejera Presidenta, Mayra San Román y a la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, a efecto de que informaran si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del *PRI*, se había referido hacia ellas de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituyera un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género, así como si les constaba que el representante antes señalado se ha conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del Instituto de tal forma.

A tal cuestionamiento la Consejera Presidenta respondió lo siguiente: *“... en ningún momento se ha suscitado por parte de los representantes partidistas aludidos en dicho requerimiento, alguna referencia hacia mi persona en el sentido que se señala en el mismo. ... a la suscrita no le consta que los representantes partidistas aludidos se hayan conducido de esa manera hacia alguna persona de sexo femenino dentro de este instituto.”*

Por su parte la Consejera Hernández Robledo aludida respondió lo siguiente: *“En ningún caso los representantes partidistas se han referido a mi persona en los términos señalados o en cualquier otro con los que pudiera considerarme violentada por mi condición de mujer. ... No me consta en forma alguna que los representantes partidistas en alusión se conduzcan o hayan conducido en esos términos o en cualquier otro que pudiera constituir violencia de género hacia alguna persona del sexo femenino fuera o dentro del Instituto Electoral de Quintana Roo.”*

- Fueron analizadas las actas de las sesiones del Consejo General del IEQROO celebradas el veintisiete de febrero, catorce de mayo, dos y treinta de junio, treinta y uno de agosto, quince, veintidós y veintinueve de septiembre (sesión ordinaria y extraordinaria), así como veintiocho de octubre todas de dos mil dieciséis (sesión extraordinaria), a efecto de constatar si el referido representante se había conducido de forma denostativa, agresiva o violenta en contra de la quejosa.

De todos los elementos probatorios referidos no se advierte, ni siquiera de forma indiciaria, que Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO se hubiera conducido de la forma en que refiere la quejosa, en ningún momento o hacia ninguna otra persona.

Máxime que la propia quejosa no aporta mayores elementos para que esta autoridad se avoque a una investigación sobre circunstancias o hechos mucho más precisos, pues contrario a ello, tanto del escrito de denuncia así como del desahogo de los requerimientos solamente manifiesta que el representante del PRI *realizaba dichas aseveraciones como una forma de justificar los motivos por los cuales la quejosa ejercía y ejerce su derecho de uso de voz y voto como consejera electoral.*

Incluso, en los hechos referidos por la quejosa en los que afirma que durante las sesiones del Consejo General del IEQROO del veintisiete de febrero, así como en las celebradas el dos y treinta de junio, todas de dos mil dieciséis, el representante partidista se refirió hacia su persona de forma grosera e irrespetuosa con lo que, en

su concepto, se actualizó violencia política por razón de género. En concepto de esta autoridad no se desprendió que efectivamente dicho representante se hubiera expresado de esa forma hacia la quejosa.

Este Consejo General concluyó en el análisis de dichos hechos que el representante se encontraba ejerciendo su libertad de expresión al seno de un órgano deliberativo, en el cual, atendiendo a su naturaleza debe privilegiarse la diversidad de opiniones e incluso, el disenso respecto del sentido o consideraciones que sustentan una determinación del órgano de autoridad. Asimismo, se razonó en dos casos que no existía ningún tipo de alusión personal hacia su persona o bien que dichas manifestaciones pudieran ser interpretadas como groseras o irrespetuosas en contra de la quejosa.

En tal sentido, de la adminiculación de los elementos de prueba recabados por la autoridad, no se advierte que el referido funcionario se conduzca de la forma expresada por la quejosa y que con ello se genere en su contra violencia política por el simple hecho de ser mujer o algún tipo de acoso laboral que impida el correcto ejercicio de sus funciones como consejera electoral.

En adición a lo anterior, en concepto de esta autoridad en el caso debe ponderarse el dicho de la víctima de una supuesta violencia por razón de género con el principio de presunción de inocencia que, en términos generales, refiere que para la imposición de una sanción, debe acreditarse, en forma plena, la participación del acusado en los hechos denunciados, esto es, su responsabilidad frente a la falta que se le imputa, principio que no se ve disminuido en sus alcances tratándose de denuncias por violencia política por razón de género en un procedimiento administrativo sancionador, por el solo hecho de que los bienes a tutelar sean diversos a aquellos que se protegen en otro tipo de procedimientos o porque deba privilegiarse el dicho de la víctima.

Así, en principio, toda persona es inocente, lo cual constituye una presunción *iuris tantum*, pues mientras no se demuestre lo contrario, se presume que un sujeto carece de responsabilidad frente a hechos ilícitos denunciados, por lo que si alguien es acusado de haber cometido alguna conducta contraventora del orden jurídico, le

asiste el derecho de exigir la existencia de datos objetivos suficientes que destruyan dicha presunción.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis LIX/2001 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.³⁸⁷

Por esa razón, esta autoridad tiene la obligación de realizar las indagatorias correspondientes y de adminicular los elementos de prueba que permitan demostrar la existencia de la responsabilidad, es decir, no se puede relevar al juzgador de su deber de analizar todas las pruebas aportadas al proceso, tanto las que permitan acreditar la falta de la conducta, como las que desvirtúen ese extremo; de ahí que con las pruebas aportadas por las partes, así como de las investigaciones hechas por esta autoridad se tiene que adminicular y comprobar los elementos materia de la denuncia, al grado que la presunción de inocencia sólo se debilita en la medida en que existan pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad del inculpado.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la presunción de inocencia es un derecho que tiene varias vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba.³⁸⁸

³⁸⁷ Consultable en la página 639 del tomo respectivo de la compilación oficial 1997-2002 o en la página electrónica <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=LIX/2001>

³⁸⁸ **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.** Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 25/2014 (10a.) Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, abril de 2014, Tomo I. Décima Época Pag. 478

- **Exclusión en la integración del Comité de Transparencia, Información y Estudios Electorales del IEQROO, así como de diversas actividades relacionadas con la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales**

La quejosa señala que en la sesión del Consejo General del IEQROO de treinta de junio de dos mil dieciséis, solicitó ser incluida en el Comité de Transparencia de esa autoridad electoral local y que la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina y el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche trataron de disuadirla, negándose rotundamente a incluir Consejeros en dicho Comité, sin justificar dicha negativa.

Asimismo, la quejosa refiere que, a pesar de ser miembro de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, le ha sido ocultada información y ha sido excluida de actividades que se realizan en ella. Señala que durante la sesión de la referida comisión del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se presentó el informe de la Comisión en cuestión del cual al darle lectura comprobó la conducta reiterada de Juan Manuel Pérez Alpuche de no considerarla en actividades ni hacerlas de su conocimiento como miembro de la Comisión que preside el citado funcionario. Al respecto, la quejosa refiere que fue excluida de los siguientes cursos:

Curso taller de capacitación para la carga de la información en el sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) llevada a cabo el primero de septiembre de dos mil dieciséis en las instalaciones de la facultad de medicina de la Universidad de Quintana Roo, dirigido específicamente a los Titulares de la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados, a fin de capacitarlos para la carga de información en la recién implementada Plataforma Nacional de Transparencia.

Curso taller “capacitación para la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia” impartido por la titular de la Unidad con la finalidad de capacitar a los enlaces de transparencia al interior del instituto llevado a cabo el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Estuvo dirigido a los enlaces de transparencia de las distintas áreas del IEQROO a fin de capacitarlos en la carga de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De lo anterior, se advierte que la quejosa se duele de dos situaciones relacionadas con el Comité y la Comisión de Transparencia, por un lado de la negativa de la Consejera Presidenta y del Consejero Pérez Alpuche de incluirla en el Comité de Transparencia, y por otro de la exclusión por parte de este último de informarle y considerarla en actividades de la Comisión de Transparencia.

Al respecto, en concepto de este órgano colegiado, no se advierte que a través de lo narrado en su escrito de denuncia, se configurare ocultamiento de información acoso laboral o discriminación por el simple hecho de ser mujer, o violencia política por razón de género en contra de la quejosa, toda vez que del análisis de los hechos realizado en el apartado correspondiente, no se tuvo por acreditado lo denunciado por la quejosa.

Por cuanto hace a la supuesta exclusión y negativa para formar parte del Comité de Transparencia, se acreditó que en la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis se sometió a discusión y, en su caso, aprobación, el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO.

Asimismo, del análisis acta de la referida sesión se advirtió que la discusión en torno a dicho punto de acuerdo se centró en la integración del referido Comité de Transparencia, esto es, si debía integrarse por los consejeros electorales y representantes de partidos integrantes de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, a saber: la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, así como los Consejeros Luis Carlos Santander Botello y Juan Manuel Pérez Alpuche, o bien, como se proponía en el proyecto de acuerdo, por los Directores del Instituto ahí precisados.

El proyecto se aprobó en los términos propuestos en un inicio por mayoría de cuatro votos, con los votos en contra de la Consejera Claudia Carrillo y los Consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.

En la referida sesión también se sometió a votación la propuesta relativa a que el Comité de Transparencia fuera integrado por los Consejeros que integran la

Comisión del mismo nombre, la cual fue rechazada por cuatro votos en contra de la Consejera Presidenta Mayra San Román, la Consejera Thalía Hernández Robledo y los Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech.

Sin embargo, de las constancias de autos no se acreditó que la Consejera Presidenta y el Consejero Pérez Alpuche, trataran de disuadir a la quejosa de formar parte del Comité en cuestión, sino que el tema fue abierta y suficientemente discutido durante la sesión del Consejo General, por lo que no existen elementos para considerar que los referidos consejeros hubieran tratado de disuadir a la quejosa a efecto de causarle alguna afectación.

Si bien, ninguno de los consejeros apuntados manifestó durante la referida sesión las razones y motivos por los que consideraron que no era factible que consejeros integraran el referido Comité, ambos se inclinaron por que éste estuviera integrado por la Directora Jurídica, quien lo presidiría, el Director de Administración, el Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística y que la Secretaría de Técnica del dicho Comité, recayera en la Titular del Centro de Información Electoral, sin embargo, ello en forma alguna significa que su pretensión fuera excluir o discriminar a la quejosa, como lo pretende hacer valer.

Lo anterior, en tanto que la diversidad de opiniones y el disenso forma parte de la naturaleza de los órganos colegiados, sin que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes expresan puedan ser objeto de censura o autorización por sus pares, pues esto constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los integrantes de un órgano colegiado.

En igual sentido, tampoco existen elementos para considerar que existió un actuar indebido o ilegal por parte de dichos consejeros al votar en contra de que el Comité en cuestión se integrara por consejeros, pues de la normativa aplicable no se advierte alguna disposición en la cual se prevea la forma como deben estar integrados los Comités de Transparencia de los sujetos obligados previstos en la Ley de la materia, esto es, resulta razonable que por tratarse de un órgano técnico éste se encuentre integrado por personal ejecutivo del instituto y no por consejeros, como se votó de forma mayoritaria. Decisión que fue confirmada por el *TEQROO* y por la Sala Superior del *TEPJF*.

En consecuencia, se considera que no existe violencia política por razón de género en contra de la quejosa, toda vez que el acuerdo mayoritario fue que el Comité en cuestión estuviera integrado por personal directivo y no por consejeros, esto es, se acordó que no solo la Consejera Carrillo, sino que ningún consejero formara parte del referido Comité, por lo que no existen elementos para considerar que por ello se le excluya o discrimine por su calidad de mujer, o bien, que por no formar parte del Comité en cuestión se obstaculice u obstruya el debido ejercicio de su cargo.

Por otro lado, por cuanto hace al segundo tema planteado en el presente apartado, de las constancias de autos se acreditó que los cursos/talleres respecto de los cuales la quejosa aduce haber sido excluida y que le fueron ocultados, no fueron organizados por la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, por un lado el curso de la carga de información del sistema *SIPOT* fue realizado por el Instituto de Acceso del Estado (INAIP), dirigido a los titulares de las Unidades Técnicas de Transparencia de los sujetos obligados del Estado, mientras que el taller para capacitación de carga de información en la Plataforma de Transparencia, fue organizado por la Unidad de Transparencia con el fin de replicar la información obtenida en el curso organizado por el INAIP al interior del Instituto.

Asimismo, se acreditó que se trató de cursos/talleres de carácter técnico los cuales no estaban dirigidos a consejeros, y que no asistió ninguno de los consejeros a los referidos cursos, ello por estar enfocados al personal que por sus funciones se encuentra obligado a dar trámite a las solicitudes de información que recibe el Instituto.

De igual forma, en la sesión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, celebrada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se dio cuenta de los cursos/talleres referidos, se acordó que con independencia de la naturaleza de éstos y aun cuando éstos no sean dirigidos a los miembros de la Comisión, ni a ningún otro Consejero, para efecto de conocimiento, la Secretaría Técnica haría llegar un oficio a todos los miembros de la Comisión y si alguno tuviera la intención de tomar el curso o estar presente, tendrían la información para realizarlo.

De lo anterior, se desprende que no existió en forma algún ocultamiento de información a la quejosa, pues los cursos que ella alega le fueron ocultados y de los cuales fue excluida, no se encontraban dirigidos a consejeros, por lo que se encuentra justificado que no se hubieran hecho de su conocimiento al momento en que se llevaron a cabo.

Además, no es posible hablar de ocultamiento de información cuando se hizo del conocimiento de todos los miembros de la Comisión lo relativo a los cursos referidos por la quejosa en el mismo momento, esto es, cuando se rindió el informe de la propia Comisión, por lo que no hay elementos para considerar que existiera alguna intención del Presidente de la misma de ocultarle a la quejosa la información relacionada con los cursos antes descritos.

Tampoco, resulta posible hablar de exclusión cuando los cursos se encontraban dirigidos a la capacitación técnica del personal del instituto y no de los consejeros, por tratarse de temas técnicos sobre el acceso a la información, además de que no se acreditó que hubiera participado en éstos algún consejero.

Por último, en atención a la inconformidad manifestada por la quejosa en la sesión de trabajo de la Comisión en cuestión, el Presidente de la misma solicitó que se hiciera del conocimiento de los integrantes de ésta toda la información relacionada con los cursos y talleres que se llevaran a cabo en lo sucesivo.

En igual sentido, se acreditó que la quejosa fue convocada a diversas reuniones formales de trabajo de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, sin que ello hubiera sido controvertido, ni tampoco se señalaron otros hechos por los cuales la Consejera considerara que se le hubiera ocultado otra información relacionada con los trabajos de la referida Comisión.

Por lo anterior, este Consejo General considera que no se advierten elementos que permitan llegar a la convicción que hubiera existido ocultamiento de información o exclusión en las actividades de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, que derivara en acoso laboral, violencia política por razón de género o bien impedimento para el ejercicio de su función como consejera electoral.

- **Supuesto control del entonces Magistrado Presidente del *IEQROO* sobre los Consejeros del *IEQROO* mediante una vista ordenada a la *UTCE* para el inicio de un procedimiento de remoción.**

Por cuanto hace al hecho en el cual la quejosa establece que existía un supuesto control de Víctor Venamir Vivas Vivas, entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, sobre los Consejeros Electorales que integran el *IEQROO*, a través de intimidaciones, que tenían como finalidad su desacreditación, tal y como lo evidencia la sentencia emitida por dicho órgano jurisdiccional electoral en la que se ordenó dar vista a la *UTCE*, para que conociera de la presunta responsabilidad en que incurrieron los citados Consejeros del Organismo Público Local Electoral en comento, por la inobservancia de disposiciones constitucionales y legales en materia de asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, debe precisarse que dicha cuestión no puede considerarse como acoso laboral o violencia de género en contra de Claudia Carrillo Gasca, por lo siguiente.

Las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales en materia electoral constituyen determinaciones que tienen como finalidad resolver una controversia sometida a consideración de un órgano colegiado, el cual, tratándose de resoluciones aprobadas por una autoridad administrativa, solo puede confirmar, modificar o revocar, el sentido de lo resuelto por el ente administrativo, mediante el análisis del asunto en concreto.

En el caso del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cualquier controversia que se someta a consideración del órgano jurisdiccional, es turnada a un magistrado instructor, quien después de analizar si cumple con los requisitos legales para su admisión, se encarga de llevar a cabo la elaboración del proyecto de resolución, que será sometido a consideración del pleno (mismo que se integra por tres magistrados), para que éste en su conjunto sea el que determine si se aprueba en el sentido propuesto o se regresa para que se reformule o para que sean atendidas ciertas observaciones.

En el caso concreto, se encuentra acreditado en autos del expediente que el *TEQROO*, al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/025/2016, determinó por unanimidad de votos, que había sido incorrecto el actuar del *IEQROO*, al momento de otorgar la constancia de asignación

a Eugenia Guadalupe Solís Salazar, pues no debió de haberle cambiado el carácter de suplente por el de propietaria; además, estableció que tampoco le correspondía a dicho Instituto Local pronunciarse sobre la decisión de la candidata electa Mayuli Latifa Martínez Simón, de desempeñar el cargo de diputada de mayoría relativa, ya que dicha facultad le confería a la Legislatura del estado, motivos por los cuales, el citado órgano jurisdiccional acordó darle vista a la UTCE, para que conociera de una posible responsabilidad en la que hubieren incurrido los Consejeros Electorales del citado *OPLE*. Asimismo, se tiene acreditado que el Magistrado Ponente de la sentencia en comento fue Vicente Aguilar Rojas.

De igual forma, se tiene acreditado que la determinación emitida por el *TEQROO*, fue controvertida por la ahora quejosa, mediante juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, la cual, estableció que fue indebido el actuar del Tribunal local al afirmar que los Consejeros Electorales “incurrieron en responsabilidad al tener una notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones...”, al considerar que, si bien, de acuerdo con sus facultades puede confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, no le corresponde, de conformidad con la normativa electoral, determinar si ello se trata de una responsabilidad y mucho menos el calificarla de notoria negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, por lo que, en su concepto debieron limitarse a dar vista a la *UTCE* del *INE*.

En ese sentido, es claro que no le asiste razón a Claudia Carrillo Gasca, en cuanto a la aseveración que realiza respecto a que Víctor Venamir Vivas Vivas, entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, tenía un supuesto control sobre los Consejeros Electorales que integran el *IEQROO*, pues como se desprende de las constancias de autos, la resolución a la que hace referencia la inconforme para acreditar su dicho, fue aprobada por el Tribunal Local en pleno, es decir, no se trató de una decisión unilateral, sino colegiada, que fue objeto de discusión en una sesión pública, en la que se resolvió aprobar el proyecto presentado por el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, quien propuso que se diera la vista a la *UTCE*, para que investigara existencia de una responsabilidad por parte de los Consejeros Electorales, de ahí que no se pueda desprender que existiera un control hacía los integrantes del citado *OPLE*.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que se tiene acreditado que la vista que dio el *TEQROO* a la *UTCE*, fue en contra de todos los Consejeros Electorales del citado organismo electoral y no solo en contra de uno, por lo cual, queda descartado el hecho referido por la quejosa, tendente a precisar que con dicho actuar se pretendía desacreditarla, puesto que, en todo caso, la desacreditación hubiere sido para todos los consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*.

Por otra parte, se tiene acreditado que la *UTCE* determinó, en el cuaderno de antecedentes *UT/SCG/CA/TEQROO/79/2016*, el no inicio del procedimiento de remoción en contra de los Consejeros Electorales del *IEQROO*, al considerar que la pretensión del *TEQROO* era que se iniciara el procedimiento de remoción sobre la base de un ejercicio interpretativo por parte de los consejeros imputados para llegar a una decisión en el ejercicio de sus funciones.

Por todo lo expuesto, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que el hecho descrito por la quejosa en modo alguno puede considerarse como violencia de género en su contra.

- **Supuesta violencia política por razón de género en su contra por la denuncia de la captura de información de las listas nominales de electores.**

La quejosa refiere que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis se percató que personal del Instituto electoral local, así como personal externo se encontraban capturando la información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizados en la Jornada Electoral del cinco de junio anterior.

Sobre el particular, la quejosa dice haber solicitado a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización de Instituto local, le explicara bajo qué circunstancias se estaba realizando dicho trabajo, a lo que le contestó que *no tenía por qué darle ninguna explicación y que si la necesitaba se la pidiera a la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina*.

Por lo anterior, la quejosa presentó escrito dirigido a la Consejera Presidenta, donde le informó de los hechos y le formuló diversos cuestionamientos respecto de la captura de dicha información. De igual suerte, la quejosa le informó de lo acontecido

a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad federativa.

La quejosa refiere que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, recibió la visita del Director de Partidos Políticos, José Luis González Nolasco, quien la amenazó al decirle lo siguiente: *“que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el Gobernador Roberto Borge Ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia”*.

Posteriormente, afirma que recibió una llamada de dicho funcionario público a su celular para reiterarle que *“no denunciara los hechos ocurridos el día anterior, pues su vida no valía nada”*. Lo anterior fue hecho del conocimiento de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina vía mensaje de texto, sin que recibiera respuesta alguna.

La quejosa refiere que ese mismo día, que presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, con la que se abrió el expediente FED/QROO/CHET/0000/400/2016.

Con motivo de lo anterior, la quejosa señala que durante la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, fue objeto de violencia por diversos representantes de partidos políticos y los Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche. Lo anterior derivado de que, en su concepto, en el contexto de la discusión que se llevó a cabo durante un punto de Asuntos Generales de la citada sesión, respecto de la denuncia presentada por un posible uso indebido del listado nominal, así como la filtración de dicho asunto a medios de comunicación, se podía establecer una coalición de representantes de partidos y consejeros a efecto de atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

De igual suerte, la quejosa refiere que ha recibido una serie de mensajes anónimos, que ella piensa provienen de servidores públicos del Instituto local, donde le informan que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de la autoridad electoral local, están trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

Cabe precisar que en la presente resolución **no será motivo de análisis lo relativo a la legalidad o ilegalidad en la captura de información de las listas nominales por parte de personal del IEQROO, al no formar parte de la Litis**. Por tanto, el análisis del presente hecho se constriñe a determinar si de los hechos narrados por la quejosa en su escrito de denuncia se configura acoso laboral, ocultamiento de información, violencia política por razón de género o bien impedimento para el correcto ejercicio del cargo en contra de la Consejera Claudia Carrillo Gasca.

En tal sentido, en concepto de ésta autoridad electoral, de los hechos relatados por la quejosa, así como del análisis de los elementos probatorios que obran en el expediente no existen, siquiera indicios, que permitan llegar a la convicción de que las acciones llevadas a cabo por los funcionarios señalados puedan considerarse como acoso, discriminación, exclusión o violencia política por razón de género, como se demuestra a continuación.

Cabe precisar que los actos de violencia basados en el género, tales como la emisión verbal de agresiones o amenazas, tienen lugar en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.³⁸⁹

En tal sentido, considerando que en el caso se denuncia violencia política por razón de género y que en el procedimiento administrativo sancionatorio opera el principio de investigación integral, de conformidad con el cual corresponde a la autoridad plenas atribuciones para obtener los elementos de convicción que estime pertinentes y relevantes para llegar a la verdad de los hechos, sin más limitaciones

³⁸⁹ Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída en el SUP-JDC-1773-2016. Disponible en: <http://portales.te.gob.mx/sga/>

que las previstas en la ley, pues justamente el procedimiento sancionador persigue la averiguación de la verdad sobre lo acontecido, o sea, conocer el hecho imputado en lo objetivo y subjetivo, con sus antecedentes y consecuencias, con la posibilidad a las partes, ciertamente, de suministrar los materiales de prueba, pero sin la obligación de que esta actividad supla el papel principal que en la recopilación asume la autoridad respectiva, quien debe desempeñar su función sin sujeción a más restricciones que las dispuestas en la ley. Esto, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos del derecho privado, en los que el papel del juzgador no alcanza facultades indagatorias, sino la mera verificación de las afirmaciones de las partes, a la luz de las pruebas aportadas por ellas.

Por lo anterior, la autoridad sustanciadora se dio a la tarea de investigar los hechos denunciados y allegarse de los elementos necesarios para acreditar, aunque fuera de forma indiciaria, lo afirmado por la quejosa.

En tal sentido, la *UTCE* realizó las siguientes diligencias:

- Solicitó a la **Consejera Claudia Carrillo Gasca**³⁹⁰ que precisara si existían personas a quienes les hubieran constado los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, respecto de que Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO*, le dijo en su oficina “*que no tenía que darme ninguna explicación, que yo no soy nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local.*” Al respecto, la quejosa manifestó que no existieron testigos de dichos hechos.
- Requirió a la quejosa que informara si existían personas a quienes les constaran los hechos ocurridos el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, donde recibió en su oficina la visita de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del *IEQROO*, quien le dijo “*que le bajara de huevos, que esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi*

³⁹⁰ Visible a fojas 3460 a 3465, del legajo 5, del expediente

familia y que antes que se vaya el Gobernador Roberto Borge Angulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia". Respecto de dicho cuestionamiento, la quejosa refirió que no existían personas a quienes les constaran los hechos.

- Requirió a la quejosa a efecto de que señalara si existían personas que pudieran dar constancia de que, previo a la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la mayoría de los representantes de los partidos políticos y consejeros recibieron una llamada telefónica por parte de la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, por medio de la cual se planeó un ataque en su contra y la hicieron responsable ante los medios de comunicación sobre el manejo de las listas nominales de electores. A dicho cuestionamiento la quejosa indicó que el entonces representante del PRD le había comentado que la Presidenta lo llamó, sin embargo, dicha persona ya no fungía como representante de dicho partido político y que desconocía su paradero.
- Requirió a Luis **Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO***, para que indicara qué tipo de relación tiene con la Consejera Claudia Carrillo Gasca, si él y la Dirección a su cargo habían participado en la captura de la información de la lista de electores de todo el Estado el diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, y que informara el motivo o razón por la que se llevó a cabo dicha captura, y si fue realizada por instrucción expresa de alguien. Al respecto, el funcionario informó, en esencia, que personal adscrito a la dirección a su cargo participó en la organización para la captura de la información, en cumplimiento a lo establecido en el la Ley Orgánica del Instituto, así como a en el Programa Operativo Anual (POA) 2016.
- Requirió al referido Director para que precisara si la Consejera Claudia Carrillo Gasca lo había cuestionado sobre las circunstancias bajo las cuales se estaba realizando la captura de información de las listas nominales de electores que fueron utilizadas en la jornada electoral celebrada el cinco de

junio de dos mil dieciséis, al respecto el funcionario en cuestión respondió lo siguiente:

“me permito manifestar que efectivamente la referida Consejera me realizó el citado cuestionamiento....en respuesta a la pregunta de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, le informé que dicha captura se estaba realizando debido a que la Dirección a mi cargo, en cumplimiento al multicitado artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto, debe rendir a la Junta General un informe estadístico sobre las elecciones y la participación ciudadana y que dicha actividad se encontraba prevista en el Programa Operativo Anual (POA) 2016 del Instituto”.

- Requirió al mismo Director para que informara si en la misma fecha o en cualquier otra, se había referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente o similar sentido: *“que no tenía que darle ninguna explicación, que ella no era nadie para pedirle explicaciones y que si las necesitaba que le pidiera la explicación a la licenciada MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, consejera presidenta del Organismo Público Local.”* Sobre dicho cuestionamiento el funcionario referido refirió lo siguiente:

“manifiesto rotundamente que en ningún momento me he referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el sentido que se señala en el requerimiento de mérito, por lo que desconozco los motivos por los cuales se me pretende imputar tales manifestaciones.”

Lo anterior, con el objeto de garantizar al referido funcionario electoral su derecho de audiencia y defensa y para que, de estimarlo necesario aportara las pruebas que estimara convenientes.

- Requirió a **José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión** del IEQROO a efecto de que informara si él y la dirección a su cargo habían participado en la captura de la información de la lista de electores de todo el estado en la fecha precisada por la quejosa, a lo que informó que personal a su cargo brindó apoyo para el desarrollo de esa actividad.
- Requirió al mismo Director a efecto de que indicara si el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, o en alguna otra fecha, se había referido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca en el siguiente sentido: *“que le bajara de huevos, que*

esas listas debían capturarse a como diera lugar y si seguía con mis pendejadas Carlos Lima Carvajal me iba a joder, que pensara en mi familia y que antes que se vaya el gobernador Roberto Borge ángulo, me iba a ir mal y que pensara en mi familia” y de ser el caso, indique el contexto en el que manifestó lo anterior. A lo anterior el director referido manifestó lo siguiente:

“...el suscrito siempre me he dirigido con respeto hacia los compañeros de trabajo, así como cualquier persona con la que tenga que tenga que convivir ya sea en el ámbito laboral o personal, sin importar la jerarquía del puesto que desempeñen, de ahí que resulten falsas las expresiones con las que supuestamente me dirigí a la Consejera Electoral. En este sentido solicito a esta autoridad electoral nacional aplique el principio de presunción de inocencia, en tanto no se presente prueba fehaciente que acredite los señalamientos realizados hacia mi persona.”

Lo anterior, con el objeto de garantizar al referido funcionario electoral su derecho de audiencia y defensa y para que, de estimarlo necesario aportara las pruebas que estimara convenientes.

- Se requirió a la **Consejera Thalía Hernández Robledo, a los Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Luis Carlos Santander Botello, Sergio Avilés Demeneghi, así como a Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, a Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza y a Mauricio Morales Beiza, Representante del Partido del Trabajo** todos ante el Consejo General del **IEQROO**, a efecto de que indicaran si previo a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo General del **IEQROO** del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, recibieron una llamada telefónica o comunicación diversa por parte de la Consejera Presidenta del referido Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, o de alguna persona que actuara en su representación, en la cual se hiciera alusión a la realización de un ataque en contra de la Consejera Electoral Claudia Carillo Gasca, con el objeto de hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema referente al manejo de las listas nominales de electores.

Todos los sujetos antes precisados negaron el hecho afirmado por la quejosa.

- Análisis del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.
- Ordenó la elaboración de un acta de certificación de hechos para corroborar la existencia de los mensajes de texto referidos por la quejosa.

De todos los elementos probatorios referidos con antelación no se advirtió, ni siquiera de forma indiciaria, que los funcionarios señalados por la quejosa se hubieran conducido de la forma en que refiere en su escrito de denuncia.

En efecto, con relación a las manifestaciones que supuestamente realizaron los directores de Partidos Políticos y de Organización, en el expediente no constan otros elementos probatorios, ni siquiera indiciarios, que permitan a esta autoridad llegar a la convicción de que se hubieran conducido de una manera grosera, irrespetuosa o violenta hacia la Consejera Carrillo, en esa u otra ocasión, pues su dicho es el único medio de prueba en el expediente sin que exista otro u otros con los que pudiera administrarse o concatenarse, ni siquiera de forma indiciaria y llegar a una conclusión distinta.

En adición a lo anterior, en concepto de esta autoridad en el caso de los directores aludidos, debe igualmente ponderarse el dicho de la víctima de una supuesta violencia por razón de género con el principio de presunción de inocencia que, en términos generales, refiere que para la imposición de una sanción, debe acreditarse, en forma plena, la participación del acusado en los hechos denunciados, esto es, su responsabilidad frente a la falta que se le imputa, principio que no se ve disminuido en sus alcances tratándose de denuncias por violencia política por razón de género en un procedimiento administrativo sancionador, por el solo hecho de que los bienes a tutelar sean diversos a aquellos que se protegen en otro tipo de procedimientos o porque deba privilegiarse el dicho de la víctima.

Así, en principio, toda persona es inocente, lo cual constituye una presunción *iuris tantum*, pues mientras no se demuestre lo contrario, se presume que un sujeto carece de responsabilidad frente a hechos ilícitos denunciados, por lo que si alguien es acusado de haber cometido alguna conducta contraventora del orden jurídico, le

asiste el derecho de exigir la existencia de datos objetivos suficientes que destruyan dicha presunción.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis LIX/2001 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.³⁹¹

Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta orquestación organizada por la Consejera Presidenta en contra de la quejosa por la filtración de fotografías en las que consta la captura de las listas nominales por personal del Instituto en diversos medios de comunicación, durante la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en concepto de esta autoridad, de las constancias del expediente no constan medios de prueba por los cuales se pueda determinar que ello en efecto aconteció, o que efectivamente hubieran existido manifestaciones durante dicha sesión, por parte de los consejeros y representantes de partido señalados por la quejosa, mediante las cuales se le atacara o agrediera, o bien, fuera víctima de violencia.

Ello, en tanto que del análisis del acta de la referida sesión consta que, en el punto de asuntos generales, se solicitó, por diversos integrantes del Consejo, la discusión de lo acontecido por la captura las listas nominales de electores.

En la discusión de dicho punto, la Consejera Presidente detalló en qué consistieron los trabajos que se realizaron respecto de las listas nominales y las medidas que se tomaron para la protección de datos personales.

Asimismo, consta que el representante del *PT* ante el Consejo General hizo referencia a la denuncia interpuesta por la quejosa y le solicitó que expresara los señalamientos que se hacían en medios de comunicación, por su parte el Consejero Sergio Avilés Demeneghi manifestó su inconformidad por lo ocurrido y se quejó de

³⁹¹ Consultable en la página 639 del tomo respectivo de la compilación oficial 1997-2002 o en la página electrónica <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=LIX/2001>

que el Director de Organización no había dado contestación a los oficios en los cuales le había cuestionado sobre el tema.

Durante la discusión la quejosa en el uso de la voz realizó diversas manifestaciones en torno a los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, refirió que cuestionó a Luis Alberto Alcocer Anguiano y a José Luis González Nolasco del porqué de dicha actividad y que de ello devino en violencia, amenazas y ocultamiento de información.

Por su parte, el representante del *PRI*, realizó algunas manifestaciones en el tenor siguiente:

“...quiero iniciar mi intervención lamentando como otros compañeros representantes de partido del actuar de algunos consejeros, me parece que en un afán protagonista y excesivo, están dejando de un lado cumplir muchas de sus obligaciones, son consejeros electorales, no son dioses, no son personas que están arriba de cualquiera de nosotros, son simplemente ciudadanos que fueron designados para cumplir una encomienda, una encomienda que a todas luces, como señalé en varios momentos durante el proceso hacia algunos consejeros, que dejaron mucho que desear con su actitud y su actuar, llegando al grado, y lo que quiero dejar en claro en esta mesa, para aquellos partidos que tal vez se van con el canto de la sirena; alguna Consejera de este Consejo General, ante mis señalamientos por su actuar, por su poco conocimiento de la materia electoral, el mismo requisito que establecía uno de los requisitos para ser designada Consejera Electoral, llegó a acercarse, cuando el entonces candidato de nuestra Coalición, para pedir mi sustitución a cambio de cambiar la actitud de no golpear durante el proceso electoral, eso me parece un hecho poco serio, irresponsable y poco profesional y que reitero, no se vayan con el canto de la sirena...”

Las cuales, en concepto de esta autoridad no constituyen violencia política por razón de género en contra de la quejosa, pues en ningún momento se hace alusión directa hacia su persona y, además se trata de una crítica severa hacia los consejeros que integran el referido órgano colegiado, amparada en su ejercicio de libertad de expresión.

Asimismo, por cuanto hace a lo argumentado por la Consejera Thalía Hernández Robledo en torno a las fotografías difundidas en medios de comunicación, tampoco se puede interpretar como violencia política en su contra, pues si bien la referida consejera refirió que *“la propia Consejera fue a tomar fotografías, y luego sus fotografías yo las veo en los medios de comunicación”*, ello en forma alguna debe

considerarse como un ataque en su contra, pues se trata del señalamiento de un hecho para ella evidente, que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión en los debates que se llevan a cabo al seno de cualquier órgano colegiado.

En consecuencia, de la discusión desarrollada en la referida sesión no se advirtió que la quejosa haya sido objeto de violencia política por diversos representantes de partidos políticos, así como de los Consejeros Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, ni tampoco se acreditó que existiera una “*coalición*” en su contra para atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

Lo anterior, toda vez que las intervenciones realizadas durante la citada sesión ordinaria, por los sujetos referidos en el escrito de queja, no suponen violencia en contra de la quejosa, pues en ninguna de ellas se hace alusión directa hacia su persona, tampoco se le denosta, humilla o discrimina, sino que se trata de manifestaciones amparadas en el ejercicio de libertad de expresión, tomando en consideración que estas se presentaron dentro de un debate al seno del Consejo General del Instituto electoral local, en el que se discutió respecto de la legalidad o ilegalidad en la captura de datos de las listas nominales utilizadas durante el último proceso electoral celebrado en la mencionada entidad federativa.

Asimismo, si se considera que la propia quejosa reconoce haber denunciado los hechos ante la autoridad administrativa electoral como de la autoridad ministerial, no resulta calumnioso el que se haya señalado dicha situación durante la sesión, pues ella misma lo refirió en una de sus intervenciones dentro del debate respectivo.

Por último, por cuanto hace a los mensajes de texto aludidos por la quejosa en su escrito de denuncia, en el expediente consta la existencia de dos mensajes, en apariencia anónimos, en los cuales se hace referencia a la captura de los datos de las listas nominales, sin embargo con estos no se acredita que en efecto algunos consejeros y la Dirección Jurídica del instituto se encontraran trabajando alguna denuncia en su contra, pues no existen constancias por las cuales se acredite que, en efecto, se iniciara algún procedimiento por los hechos en cuestión, además al ser una prueba técnica, sólo genera una presunción de los hechos que se pretenden probar.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

De ahí, que al no existir elementos que permitan a esta autoridad concluir que por los hechos narrados por la quejosa se configuró amenazas y violencia política en su contra, se desestima lo aducido por esta.

- **Negativa de asignar un asesor de forma permanente a la quejosa, así como el que su oficina es la única que se encuentra en la planta baja del edificio.**

La quejosa afirma que por instrucciones de la Presidenta Consejera del IEQROO se le ha negado el apoyo de un asesor de forma permanente, así como el de las áreas técnicas del Instituto para auxiliarla en el desahogo de sus actividades, en tanto que sólo se le asignó una persona, sin experiencia, por el periodo de tres meses. Asimismo, alega que su oficina es la única que se encuentra ubicada en la planta baja de las oficinas del Instituto local.

De las constancias que obran en el expediente, específicamente del desahogo al requerimiento formulado al Director de Administración y Planeación del IEQROO, se concluye que la quejosa ha contado con personal en los mismos términos que los demás consejeros electorales, sin que exista algún elemento de prueba por el que se acredite que ha solicitado la contratación de un asistente o apoyo de alguna área técnica para el desahogo de sus actividades específicas, y que éste hubiera sido negado por instrucciones de la Consejera Presidenta, como se demuestra a continuación:

	FUNCIONES DEL SECRETARIADO	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Mayra San Román Carrillo Medina	2	1
Thalía Hernández Robledo	1	1
Juan Manuel Pérez Alpuche	1	1
Jorge Armando Poot Pech	1	0
Claudia Carrillo Gasca	1	1
Sergio Avilés Demeneghi	1	1
Luis Carlos Santander Botello	1	0

En efecto, de los elementos probatorios que obran en autos, mismos que han sido descritos en el apartado correspondiente, se tiene que, al veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, todas las consejeras y consejeros tenían asignada únicamente a una secretaria. Asimismo, se tiene por acreditado que, al ocho de marzo de dos mil diecisiete, la quejosa contaba con dos personas adscritas a su oficina *-al igual que los demás consejeros-*; a saber, una secretaria asignada desde el once de noviembre de dos mil quince y una persona de apoyo contratado bajo el régimen de Servicios Profesionales Independientes asignado desde el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Lo anterior sin que pase desapercibido que la Consejera Presidenta, a diferencia de las demás consejeras y consejeros electorales, cuenta con una plaza más de apoyo, pues ello resulta razonable dada la naturaleza del cargo que ostenta, sin que dicha circunstancia pueda considerarse como un trato diferenciado en perjuicio de la quejosa.

De igual forma, si bien se tiene por acreditado que, del dieciséis de febrero al quince de junio de ese mismo año, la quejosa contó con un asesor adscrito a su oficina, no existe elemento alguno por el que pueda corroborarse su afirmación respecto a la falta de experiencia de éste último en la materia electoral y, en todo caso, que tal circunstancia hubiera sido fomentada por la Consejera Presidenta con la intención de obstaculizar el desempeño de sus actividades como Consejera Electoral, o bien, por razón de su género.

Por último, respecto al lugar que ocupa la oficina de la quejosa, no es factible considerar que dicha situación tenga como finalidad menoscabarla o excluirla en su carácter de Consejera Electoral, ni mucho menos que ello tenga su razón de ser en el hecho de que sea mujer. Lo anterior, pues en autos existen elementos de los que se desprende que esa circunstancia fue consensuada por las consejeras y consejeros electorales al inicio de su gestión, sin que esa afirmación sea objetada o desvirtuada por la denunciante; aunado a que ese espacio físico, según se informó a esta autoridad, siempre ha sido destinado para alguna consejera o consejero electoral, sin que exista elemento de prueba en contra.

- **Omisión de la Consejera Presidenta de instruir al Director de Organización para que diera respuesta a diversos cuestionamientos**

realizados por la quejosa en la sesión del Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

Se considera que no existe acoso laboral, ocultamiento de información, exclusión o violencia política por razón de género, por la supuesta omisión de la Consejera Presidenta del *IEQROO*, de instruir al Director de Organización del citado Instituto, para que éste diera respuesta a diversos cuestionamientos formulados por la quejosa en la sesión del Consejo General celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que en la sesión ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Consejera Claudia Carrillo Gasca, solicitó a la Consejera Presidenta de dicho órgano, instruyera al Director de Organización, para que le proporcionara diversa información relacionada con la captura de información contenida en las listas nominales utilizadas en el proceso electoral celebrado en el mismo año, petición que posteriormente se formalizaría a través del oficio CE/CCG/055/16, firmado por la ahora quejosa.

Asimismo, se tiene acreditado que el trece de septiembre de dos mil dieciséis, por instrucciones de la Consejera Presidenta del *IEQROO*, Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO*, mediante oficio DO/258/2016, dio respuesta a la solicitud efectuada por Claudia Carrillo Gasca, haciéndole de su conocimiento que el treinta y uno de agosto de ese año, el Secretario General de dicho Instituto remitió a los integrantes del Consejo General, el documento denominado *“Informe relativo a la generación de estadísticas de participación ciudadana del proceso electoral local ordinario 2016 en el Estado de Quintana Roo”*. De lo anterior, se advierte que no le asiste razón a la quejosa cuando señala que existió omisión por parte de la Consejera Presidenta del *IEQROO*, de instruir al Director de Organización, puesto que dicha funcionaria acorde a la petición que le fue formulada, giró instrucciones al multireferido Director para que éste diera respuesta a los cuestionamientos que le fueron realizados en la sesión ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

Ahora bien, debe mencionarse que en autos del expediente no obra constancia referente a que Claudia Carrillo Gasca, hubiere controvertido por algún medio, la respuesta que le fue proporcionada por el Director de Organización, esto es,

consintió la información que le fue remitida, y en dado caso de que dicha circunstancia fuera errónea o insuficiente, tuvo a salvo su derecho para controvertir dicha circunstancia, lo cual, no sucedió, por tanto, no asiste razón a la quejosa al señalar la presunta omisión en que incurrió la Consejera Presidenta del *IEQROO*.

- **Exclusión de diversas reuniones con autoridades nacionales del Servicio Profesional Electoral**

La quejosa afirma haber sido excluida injustificadamente de diversas reuniones relacionadas con el Servicio Profesional Electoral, no obstante, de pertenecer a la Comisión encargada de esa materia dentro del *IEQROO*, lo cual, en su concepto, evidencia la exclusión de la que ha sido objeto dentro de los trabajos del instituto, así como de los privilegios con los que cuentan otras consejeras y consejeros electorales frente a ella.

Para sustentar su dicho refiere a la celebración de dos reuniones con autoridades nacionales los días dieciocho de agosto de dos mil dieciséis y veinte de enero de dos mil diecisiete, las cuales afirma no haber sido invitada, ni tampoco informada de los temas tratados en ellas, no obstante, de estar relacionadas con la implementación del Servicio Profesional Electoral y, consecuentemente, con el objeto de la comisión a la que pertenece.

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se concluye que, respecto a la reunión de dieciocho de agosto, no existe la exclusión, ocultamiento de información o el trato diferenciado al que refiere la quejosa, ya que a esa reunión sólo acudió un solo consejero electoral integrante de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del *IEQROO*, a saber, Juan Manuel Pérez Alpuche, quien, en su oportunidad, hizo del conocimiento de los demás integrantes de la Comisión los temas y la información que se trató en la citada reunión nacional, lo cual se constata en el acta de sesión de la mencionada Comisión, celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

Lo mismo acontece respecto a la reunión de veinte de enero de dos mil diecisiete, la cual fue organizada por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del *INE*, mediante oficio *INE/DESPEN/2777/2016*, quien sólo extendió la invitación a la Consejera Presidenta del *IEQROO*, al Presidente de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral de ese instituto, Jorge Armando Poot

Pech, y al Titular del órgano de enlace, sin que resulte factible considerar la existencia de un nexo causal entre esa situación y la supuesta exclusión indebida denunciada por la quejosa, relacionada con los trabajos de la Comisión que integra.

Ello, se insiste, en virtud de que la convocatoria a esa reunión se hizo por conducto del personal del *INE*, específicamente a la Consejera Presidenta del *IEQROO*, el Presidente de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral de ese Instituto y el Titular del órgano de enlace, sin que a éstos pueda imputárseles alguna responsabilidad, como lo pretende hacer valer la quejosa, por no someter a consideración de los demás integrantes de la Comisión quiénes eran los que debían asistir o no a la reunión mencionada.

Además, la reunión de veinte de enero de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de todos los integrantes de la Comisión desde el trece de diciembre del dos mil dieciséis, razón por la que tampoco es factible considerar que hubo un ocultamiento de información a la quejosa respecto de los trabajos que se estaban programando como parte de las actividades de la Comisión a la que pertenece, ni mucho menos que las conductas denunciadas en este aspecto se encuentren tengan como fuente un acto de discriminación de su persona por el hecho de ser mujer.

- **Exclusión en la entrega de una compensación económica por proceso electoral**

La quejosa afirma que por instrucciones de la Consejera Presidenta del *IEQROO*, se le excluyó de la entrega de una compensación económica por proceso electoral, correspondiente a la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), lo cual, desde su concepto, evidencia el trato inequitativo del que ha sido objeto; máxime de existir una fuerte presunción de que dicha práctica ha sido reiterada y sistemática a favor de otras consejeras y consejeros electorales, lo que podría suponer que se trata de una condicionante para influir en las decisiones de estos últimos, afectándose con ello la autonomía e imparcialidad de las funciones de quienes recibieron esos beneficios económicos.

De las constancias que obran en autos se tiene por acreditado que, efectivamente, a la quejosa no se le otorgó la compensación por proceso electoral a la que alude en la periodicidad que le fue otorgada al resto de los consejeros, esto es en marzo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

de dos mil dieciséis, con excepción del Consejero Luis Carlos Santander Botello, a quien tampoco le fue entregada dicha compensación.

Mediante oficio DA/305/2018, el Director de Administración del *IEQROO* remitió copia de los comprobantes de pago a favor de Claudia Carrillo Gasca y de Luis Carlos Santander Botello, en los que consta que el once de abril del año en curso, les fue depositado el monto de \$10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de compensación por servicios, ello en atención a diversos requerimientos de la autoridad sustanciadora en los que se le solicitó al referido Director que informara si se había depositado la compensación por proceso electoral a la quejosa y al Consejero Santander Botello.

Sin embargo, en concepto de este Consejo General, el que se hubiera depositado la compensación en cuestión más de dos años después que al resto de sus compañeros, si bien se trata de una situación irregular, no debe interpretarse que se trata de práctica reiterada o sistemática en contra de la quejosa, que tenga como finalidad influir en las decisiones de las demás consejeras y consejeros electorales del *IEQROO* como ella lo pretende hacer valer en sus escritos de queja, o bien, que ello hubiera sido ordenado por la Consejera Presidenta, pues de las constancias de autos, sólo se encuentra acreditado que tal circunstancia ocurrió en una sola ocasión, y la exclusión no fue exclusiva hacia su persona, toda vez que ésta tampoco fue depositada al Consejero Santander Botello, ni que dicha exclusión fuera deliberada con un propósito particular.

En efecto, de los elementos probatorios de los que se allegó la autoridad instructora en la sustanciación del procedimiento en que se actúa, se desprende que la Consejera Presidenta del *IEQROO* giró instrucciones al Director de Administración y Planeación de ese Instituto para que el estímulo, cuya omisión de entrega denuncia la quejosa, fuera otorgado a todas las consejeras y los consejeros electorales del *IEQROO*. Dicha circunstancia se corrobora mediante el desahogo al requerimiento formulado por esta autoridad al mencionado Director, el quince de marzo de dos mil diecisiete, en el que da cuenta de las instrucciones que fueron giradas por la Consejera Presidenta, pero que, derivado de alguna posible inconsistencia de carácter administrativo, no se realizó la transferencia correspondiente a la quejosa, en los términos ordenados por la última de las funcionarias electorales mencionadas.

De igual forma, también se informó que esa posible inconsistencia de carácter administrativo no afectó exclusivamente a la quejosa, sino que también se advirtió que, al Consejero Electoral, Luis Carlos Santander Botello, tampoco se le hizo el depósito correspondiente a la compensación por proceso electoral por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 0/100 M.N.), de ahí que esa afectación patrimonial no pueda considerarse constitutiva de violencia política por su calidad de mujer.

Incluso, de la propia respuesta realizada por la Consejera Presidenta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el quince de marzo de dos mil diecisiete, en la cual se le solicitó que informara bajo qué criterio se determinó excluir a la Consejera Carillo Gasca y al Consejero Santander Botello de recibir la compensación de diez mil pesos otorgado en marzo del mismo año, se advierte que dicha funcionaria instruyó al Director de Administración para que realizara el análisis correspondiente del caso, a efecto de que, de así resultar, se tomaran las medidas administrativas correspondientes que el particular conlleve; ya que como resulta evidente, esta situación devino de una inconsistencia de carácter administrativo.

Bajo tales circunstancias, no es factible afirmar, como lo sostiene la quejosa, que la Consejera Presidenta del *IEQROO* ordenó intencionalmente la exclusión de la entrega de esa compensación en su perjuicio, ni mucho menos que ese beneficio económico se haya condicionado a las demás consejeras y consejeros electorales para influir en la toma de decisiones dentro del instituto.

Tampoco se encuentra acreditado que se trate de una conducta sistemática y reiterada, puesto que sólo se encuentra acreditada la omisión del pago de esa compensación por proceso electoral, en tanto que aquella correspondiente al estímulo anual del ejercicio 2016, fue otorgado a todas las consejeras y consejeros electorales del *IEQROO*, sin que exista algún otro hecho denunciado en los términos que manifiesta la quejosa.

Por tanto, al no existir alguna otra prueba que pueda vincularse con la omisión del pago acreditado en los términos planteados por la quejosa, es que resulte imposible considerar que dicha omisión constituyó un trato inequitativo o condicionado por parte de la Consejera Presidenta del *IEQROO* en su perjuicio que pueda traducirse en un trato inequitativo, discriminatorio o que constituya violencia política por razón de género en su contra.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016

Esto es, al quedar demostrado que no se trató de una conducta omisiva sistemática o reiterada; exclusiva hacia su persona; con la intención de influir en las decisiones de los integrantes del Consejo General del Instituto local; orquestada por la Consejera Presidenta en su contra, y tendiente a afectar su patrimonio por el hecho de ser mujer, es que, en concepto de esta autoridad electoral, los hechos denunciados no constituyan acoso, discriminación o violencia política por razón de género, en los términos planteados por la quejosa.

No obstante lo anterior, toda vez que en el presente caso se acreditó que:

- El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se otorgó una compensación por servicios durante el proceso electoral dos mil dieciséis a cinco de los siete consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, por un monto de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), lo cual, según informó el Director de Administración y Planeación del *IEQROO* se debió a una inconsistencia administrativa al momento de realizar las transferencias respectivas, de lo cual, se percataron por el requerimiento formulado por el Titular de la *UTCE* en marzo de dos mil diecisiete;
- Que por diversos requerimientos formulados a dicho Director, se tuvo conocimiento que en julio de dos mil diecisiete y en marzo de dos mil dieciocho aún no se había pagado dicha compensación a los consejeros Santander Botello y Carrillo Gasca, toda vez que, de acuerdo a lo informado por el Director referido, no había sido posible cubrir dichas compensaciones por cuestiones presupuestales;
- Que la compensación en cuestión fue cubierta hasta el once de abril del presente año en beneficio de los referidos consejeros.

En concepto de este Consejo General, esto se traduce en una posible irregularidad en perjuicio de dos consejeros electorales, sin que ello encuadre en una exclusión deliberada, acoso laboral o violencia política por razón de género en contra de la quejosa, se considera pertinente **dar vista al Órgano Interno de Control del *IEQROO*** para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

- **Auxilio de funcionarios del Instituto como abogados de un denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por la quejosa.**

La quejosa manifiesta que le causa extrañeza, temor y zozobra, el hecho de que Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, quienes son funcionarios del IEQROO, hayan actuado como abogados de José Luis González Nolasco, Ex Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del citado instituto, dentro de la carpeta de investigación iniciada en contra de este último ante la Fiscalía General del Estado, por la supuesta realización de conductas constitutivas de violencia política por razón de género en su contra.

Al respecto, afirma que con ello se evidencia el apoyo institucional dirigido a favorecer al imputado, así como el estado de desventaja e indefensión en la que se encuentra frente a tal circunstancia, considerando que los funcionarios que actuaron como sus abogados actuaron dentro del horario laboral del Instituto.

Ahora bien, en el caso que se analiza, esta autoridad concluye que no se cuentan con los elementos probatorios suficientes, aun de carácter indiciario, para acreditar los hechos denunciados por la quejosa, toda vez que, de las constancias que obran en el expediente, mismas que fueron allegadas por la autoridad sustanciadora del procedimiento en que se actúa, no se desprende la existencia de alguna conducta que implique un apoyo institucional indebido a favor de José Luis González Nolasco, en su calidad de imputado en la carpeta de investigación iniciada en su contra, por la supuesta realización de actos constitutivos de violencia política por razón de género en contra de la quejosa.

En efecto, como quedó expuesto en el apartado correspondiente a los hechos acreditados en el tema que se analiza, así como de los elementos de prueba relacionados con el mismo, esta autoridad no encuentra algún vínculo por el que pueda afirmarse que la comparecencia de Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo *-quienes fungían como Profesional de Servicios adscrito a la Dirección de Partidos Políticos del IEQROO y Coordinador de Acuerdos, Resoluciones y Normatividad, adscrito a la Dirección Jurídica del citado instituto, respectivamente-*, como abogados defensores de José Luis González Nolasco ante la Fiscalía General de la entidad, evidencie un apoyo institucional indebido a favor del imputado en los términos denunciados, o bien, que se traduzca en alguna conducta dirigida a perjudicar a la quejosa, a fin de dejarla en estado de indefensión o desventaja.

Esto se razona así, toda vez que en autos quedó acreditado que, si bien los citados funcionarios comparecieron como abogados defensores del entonces Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del *IEQROO*, tal circunstancia fue temporal y para una sola actuación, en tanto que su nombramiento se hizo exclusivamente para el desahogo de la primera diligencia de presentación formulada al imputado, esto es, el quince de marzo de dos mil diecisiete, a las veinte horas. Lo anterior, sin que exista algún otro elemento por el que pueda demostrarse una participación activa por parte de los funcionarios a los que alude la quejosa dentro de la carpeta de investigación iniciada en contra de José Luis González Nolasco que pudieran constituir un apoyo indebido por parte del *IEQROO* o de las consejeras o consejeros electorales que lo integran, con la finalidad de dejar a la quejosa en estado de indefensión dentro de ese procedimiento de carácter penal.

Lo expuesto con antelación, es acorde con lo informado por José Luis González Nolasco, y corroborado por Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, al desahogar los requerimientos formulados por la autoridad sustanciadora del procedimiento en el que se actúa, en los que se manifestó que, con fecha veintinueve de marzo de ese año, el primero de los mencionados solicitó a la Fiscalía General del Estado la revocación del nombramiento de los segundos, a fin de que fuera el Lic. Wilberth Rutinoff Dominguez Garrido quien actuara como su abogado defensor dentro de la carpeta de investigación mencionada.

Por último, tampoco se acredita lo manifestado por la quejosa, en el sentido de que los funcionarios Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo actuaron dentro de la carpeta de investigación referida en horario laboral y, consecuentemente, se demuestra el apoyo institucional denunciado. Ello pues como ya quedó expuesto en párrafos precedentes, la única actuación que quedó demostrada fue la relativa al desahogo de la primera diligencia de presentación del imputado, la cual se llevó a cabo el quince de marzo de dos mil diecisiete, a las veinte horas; esto es, fuera del horario laboral del *IEQROO*. Por lo razonado, es que **no pueda concluirse la existencia de un apoyo institucional indebido, en los términos denunciados por la quejosa, esto es, con la finalidad de dejarla quejosa en estado de indefensión dentro del procedimiento de carácter penal antes aludido.**

7. CONCLUSIONES

Como ya se precisó, en concepto de este Consejo General el presente procedimiento sancionador ordinario deviene **INFUNDADO**.

Para arribar a dicha conclusión, esta autoridad realizó un análisis exhaustivo e integral desde una perspectiva de género, esto es, se consideró que, en términos de lo establecido en el *Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género*, las situaciones en las que se denuncian actos de violencia basados en el género, como se denunció en el presente caso, tales como la emisión verbal de agresiones o amenazas, las cuales suelen tener lugar en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, y que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa; por lo que se tomó como base principal para el estudio correspondiente el dicho de la víctima frente al contexto de cada uno de los hechos manifestados en sus escritos de denuncia, adminiculados con las más de trescientas ochenta pruebas que fueron presentadas por las partes, y obtenidas por la autoridad sustanciadora.

No obstante lo anterior, en el caso, no se contó con los elementos suficientes a partir de los cuales pueda corroborarse lo manifestado por la quejosa, en el sentido de que, al no haber accedido a lo solicitado por el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, Víctor Venamir Vivas Vives, en la reunión llevada a cabo el seis de noviembre de dos mil quince, se orquestó en su contra una campaña de desprestigio, exclusión, acoso, discriminación, intimidación y violencia política por razón de género, por parte de éste, así como del Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, y que éstos, a su vez, hubieran presionado o condicionado a las y los consejeros denunciados, representantes de partidos políticos y funcionarios directivos del *IEQROO* para esos efectos. Ello se concluye así por lo siguiente:

De la adminiculación de las pruebas no se desprendió que el Magistrado Lima Carvajal hubiera tenido comunicación con la Consejera Carrillo en los términos precisados en su denuncia, esto es, no fue posible para esta autoridad llegar a la conclusión que el citado Magistrado hubiera amenazado a la quejosa, con la

intención de que ésta actuara, durante el desempeño de su encargo, a favor o en contra de alguna fuerza política y que, ante su negativa hubieran llevado a cabo una serie de conductas que afectaran su esfera jurídica, ya sea en lo personal o como Consejera Electoral.

Tampoco existieron elementos por los cuales se pudiera considerar que por medio del inicio de averiguaciones previas en su contra se le hubiera coaccionado, amenazado, presionado y mucho menos que ello pudiera traducirse en violencia política por razón de género en su contra.

En igual sentido, tampoco quedó acreditado que la publicación de las notas periodísticas, en las que supuestamente se le calumniaba, hayan sido atribuido al Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, a algún representante de partido político o a alguno de los consejeros electorales denunciados.

Tampoco se acreditó que los directores del *IEQROO* denunciados, negaran su apoyo para realizar acciones relacionadas con el ejercicio de su encargo, que hayan ejercido algún tipo de acoso laboral en su contra, o bien, alguna conducta constitutiva de violencia política por razón de género.

De igual forma, no quedó acreditado que el entonces Magistrado Presidente del *TEQROO*, tuviera algún tipo de injerencia o intervención en las labores propias del Instituto, en específico en la instrucción de los Procedimiento Especial Sancionador a fin de favorecer o perjudicar a alguna fuerza política.

Asimismo, no existieron elementos que demostraran que los representantes de los partidos políticos denunciados hayan ofendido, acosado, increpado, discriminado, agredido, menoscabado, de forma directa o indirecta, por el hecho de ser mujer durante las sesiones del Consejo General, ni fuera de éstas. Incluso se destaca que las manifestaciones a las que hace referencia la quejosa y que atribuye a distintos representantes se desarrollaron dentro de un debate al seno de un órgano deliberativo, en donde se debe privilegiar el derecho a la libertad de expresión.

Tampoco se demostró que la Consejera Presidenta del *IEQROO* ordenara intencionalmente la exclusión de la quejosa en la entrega de una compensación económica por diez mil pesos por proceso electoral; que dicha omisión fuera sistemática y reiterada con el objeto de presionarla para apoyar a una determinada fuerza política; que esta se tradujera en un trato inequitativo, discriminatorio, o que ello constituyera violencia política por razón de género en su contra, pues de las constancias de autos no se advirtió elemento alguno que desvirtuara que dicha omisión se trató de una inconsistencia administrativa en perjuicio de dos consejeros electorales.

No se advirtieron elementos de los cuales pueda considerarse que se le haya excluido de manera indebida, deliberada o sistemática de las actividades de las comisiones que integra, ni las del propio instituto, pues se acreditó que sus participaciones fueron proporcionales a la de sus homólogos. De igual forma, no se acreditó que se le hubiera ocultado información, con el objeto de menoscabarla en el ejercicio de su cargo, o bien, que haya existido intencionalmente algún tipo de afectación económica por razón de sus posturas en el desempeño de su encargo.

Por último, no se acreditó que existiera violencia política por razón de género en perjuicio de la quejosa por el hecho de que dos funcionarios del *IEQROO* actuaran como abogados de uno de los denunciados en una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General del Estado, por la supuesta realización de conductas constitutivas de violencia política por razón de género en su contra, toda vez que únicamente quedó demostrada una actuación, la cual se llevó a cabo en horario inhábil.

Lo anterior, tal y como se evidencia a continuación:

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016**



NA: No se acreditó
A: Acreditado
CG: Consejo General
DO: Director de Organización
FGE: Fiscalía General del Estado
PES: Procedimiento Especial Sancionador
IEQROO: Instituto Electoral de Quintana Roo
UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social
CTIEE: Comité de Transparencia, Información y Estudios Electorales.

De la gráfica anterior se advierte que únicamente dos de los hechos denunciados por la quejosa quedaron acreditados, por un lado el relativo al auxilio de dos funcionarios del *IEQROO* como abogados del entonces Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del citado instituto, dentro de la carpeta de investigación iniciada en contra de este último ante la Fiscalía General del Estado, por la supuesta realización de conductas constitutivas de violencia política por razón de género en su contra, respecto del cual se concluyó que tal situación no se tradujo en violencia política por razón de género, acoso, exclusión o discriminación, toda vez que únicamente se acreditó la asistencia a una actuación y en horario inhábil lo que en forma alguna puede interpretarse como lo pretende la denunciante.

Respecto del otro hecho denunciado por la quejosa que fue acreditado, es el relativo a la omisión del pago de una compensación económica por proceso electoral. Sobre el particular se concluyó que ello no puede considerarse como violencia política por razón de género, acoso, discriminación o menoscabo en el ejercicio de sus funciones, al no tratarse de una conducta reiterada, sistemática, exclusiva hacia su persona, orquestada por la Consejera Presidenta, o con la intención de influir en las decisiones de los demás consejeros electorales.

En consecuencia, llevado a cabo el procedimiento de identificación de violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme al Protocolo mencionado y a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, esta autoridad concluye que, en el caso, no se actualizaron los cinco elementos establecidos para determinar que se trata de un caso de violencia política en contra de la quejosa por el hecho de ser mujer, como se demuestra a continuación:

- 1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer, ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o iii. las afecte desproporcionadamente.**

En el caso, en ninguno de los hechos referidos por la quejosa se demostró que éstos tuvieran como finalidad tener un impacto diferenciado en su persona y desventajoso frente al resto de los integrantes del Consejo General del Instituto por el hecho de ser mujer, o bien, que respecto de aquellos hechos que quedaron acreditados se le

hubieran afectado de forma desproporcionada, se hubieran perpetrado en su contra por su condición de mujer o tuvieran como consecuencia un impacto diferenciado o desventajoso por su género.

Esto es, el que no le fuera entregada la compensación económica por proceso electoral 2016 en la misma periodicidad que al resto de sus compañeros, como ya fue analizado, no implica que tal acto tenga algún impacto diferenciado o desventajoso por el hecho de ser mujer, toda vez que, como se razonó en el apartado correspondiente, la omisión en la entrega de dicha compensación no fue exclusiva hacia su persona, pues tampoco le fue entregada a otro de los consejeros, no se trata de una conducta sistemática o reiterada, ni tampoco quedó acreditado que se tratara de una acción deliberada u orquestada por parte de la Consejera Presidenta o del Director Administrativo del Instituto local, sino que, en apariencia, se trató de una posible inconsistencia de carácter administrativo

De igual forma, la participación de dos abogados del Instituto en el proceso penal seguido en contra de uno de los Directores denunciados, tampoco puede considerarse que tenga un impacto diferenciado y desventajoso en su contra por ser mujer o que la hubiera afectado desproporcionadamente, pues del análisis de la conducta denunciada no se acreditó que tal circunstancia evidenciara un apoyo institucional indebido en favor de José Luis González Nolasco ante la Fiscalía General de la entidad, o bien, que se traduzca en alguna conducta dirigida a perjudicar a la quejosa, a fin de dejarla en estado de indefensión o desventaja.

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Asimismo, de las constancias que obran en el expediente, tampoco se demostró que las conductas denunciadas tuvieran por objeto obstaculizar sus funciones como consejera electoral o como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre mujeres y hombres, o poner en entredicho su labor como funcionaria electoral por el hecho de ser mujer.

En ese mismo sentido, ni la omisión en la entrega de la compensación económica o la participación de dos abogados en un proceso penal iniciado por violencia política en su contra, pueden considerarse que tuvieron por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos político electorales por su condición de mujer, toda vez que se trata de conductas aisladas que en forma alguna pudieran constituir violencia política por razón de género en su contra dadas las circunstancias que rodearon dichos hechos y que han sido ampliamente analizados en la presente resolución. **Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).**

Si bien los hechos denunciados se encuentran inmersos en el marco de sus derechos político electorales, en la vertiente del ejercicio y desempeño de un cargo público, en concepto de esta autoridad no se acreditó un menoscabo de éstos por su condición de mujer, toda vez que de la pluralidad de hechos señalados en sus diversos escritos de queja, solamente se acreditó la actualización de la omisión en la entrega de la compensación económica por proceso electoral y la participación de dos abogados en una causa penal en la que se denunció violencia política en su contra, sin que ello supusiera algún impacto negativo en el ejercicio de su cargo como Consejera electoral.

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

Aun cuando uno de los hechos acreditados en la presente resolución consistió en la omisión de entregarle una compensación económica por proceso electoral, dentro de la periodicidad en la que ésta fue entregada a cinco de los siete consejeros que integran el Consejo General del *IEQROO*, lo que podría considerarse como una afectación patrimonial indebida, ello no se tradujo en violencia política por razón de género en los términos planteados por la quejosa, al quedar demostrado que no se trató de una conducta sistemática o reiterada, exclusiva hacia su persona, orquestada por la Consejera Presidenta, o con la intención de influir en las decisiones de los demás consejeros electorales.

De igual forma, al no haberse acreditado el resto de los hechos denunciados por la quejosa, no es dable considerar que se esté frente a un caso de violencia simbólica, verbal, patrimonial, física, sexual y/o psicológica, por su condición de mujer, pues en ninguno de los hechos denunciados se comprobó que, como la denunciante lo señaló en sus escritos de queja, los sujetos denunciados actuaran en su contra y le causaran algún tipo de violencia por razón de su género, ni de ningún otro tipo o características.

- 4. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas –hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores (as) públicos (as), autoridades gubernamentales, funcionarios (as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.**

En el caso, los hechos denunciados fueron atribuidos a distintos consejeros, funcionarios y representantes de partidos, sin embargo, en ninguno de los casos se acreditó responsabilidad alguna por la supuesta realización de conductas constitutivas de violencia política por razón de género en contra de la Consejera Claudia Carrillo Gasca.

En consecuencia, lo procedente es declarar **infundado** el presente procedimiento.

TERCERO. VISTAS

A) Vista al Órgano Interno de Control del IEQROO

Toda vez que en el procedimiento sancionador ordinario en que se actúa quedó acreditado que no fue pagada a la quejosa y al Consejero Santander Botello una compensación económica de \$10,000.00 (diez mil pesos) por concepto de proceso electoral 2016, en la misma periodicidad que al resto de los consejeros electorales que integran el Consejo General del IEQROO, se ordena dar vista al Órgano Interno de control del referido Instituto Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, conforme a lo razonado en el considerando SEGUNDO, punto 6. de la presente resolución.

B) Vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Toda vez que en el procedimiento sancionador ordinario en que se actúa quedó acreditada la existencia de una conversación sostenida entre el Consejero Electoral del *IEQROO* y el Magistrado del *TEQROO*, en la que pudieran desprenderse conductas infractoras de la normativa electoral por parte de éste último, se ordena dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, en términos de los establecido en el artículo 226 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, conforme a lo razonado en el considerando SEGUNDO, punto 6. de la presente resolución.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal,³⁹² se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del **juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **INFUNDADO** el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de la Consejera Presidenta, **Mayra San Román Carrillo Medina**, del Consejero Electoral, **Juan Manuel Pérez Alpuche**, de la Consejera Electoral **Thalía Hernández Robledo**; así como de **Alfredo Figueroa Orea**, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social; **José Luis González Nolasco**, Director

³⁹² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

de Partidos Políticos y Radiodifusión; **Luis Alberto Alcocer Anguiano**, Director de Organización y **Víctor Manuel Interián López**, Director de Administración, todos del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como de **Armando Miguel Palomo Gómez**, representante del Partido Nueva Alianza; **Juan Alberto Manzanilla Lagos**, representante del Partido Revolucionario Institucional y **Mauricio Morales Beiza**, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral local, en términos del Considerando **SEGUNDO**, apartados 4, 6 y 7 de la presente resolución.

SEGUNDO. Se ordena dar **vista al Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo**, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda respecto de la omisión de pagar una compensación económica por servicios durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a los consejeros Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello.

TERCERO. Se ordena dar **vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo**, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto de la presunta conducta infractora por parte del Magistrado del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, lo anterior en términos de lo establecido en el art 226 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, conforme a lo razonado en el Considerando SEGUNDO punto 6, de la presente resolución.

CUARTO. La presente resolución es impugnabile a través del **juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese. La presente resolución a las partes; y, por **estrados**, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

ANEXO 1

EXCEPCIONES Y DEFENSAS

1. José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Es falso lo concerniente a la realización de supuestos comentarios ofensivos y amenazas efectuadas a Claudia Carrillo Gasca, con motivo de los sucesos relacionados con la captura de la información de las Listas Nominales de Electores, que fueron utilizadas el día de la jornada electoral, el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, pues señala que existen inconsistencias en la narrativa de los hechos que se le atribuyen, pues en un primer dicho, señala que: *“además de que posteriormente llamó a dicha consejera a su celular para reiterarle que no denunciara los hechos ocurridos el día anterior, pues su vida no valía nada”*, y en un segundo dicho, correspondiente a la propia quejosa, se refiere: *“...que más vale no denunciar porque mi vida no vale nada”*... *“fue ese mismo día mediante oficio numero CE/CCG/046/16, me apersoné en las instalaciones de la Procuraduría General de la República...”*; lo cual resulta incongruente, pues sin que sea aceptado como cierto, solicita se le aclare si la supuesta llamada que le realizó a la quejosa fue el dieciocho o diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.
- Respecto al hecho, en el cual se hace referencia a la diligencia de comparecencia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, llevada a cabo dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la cual a decir de la quejosa le resultó indignante, le causó extrañeza temor y zozobra al percatarse que se habían designado como abogados particulares a Armando Quintero Santos y Julio Asrael González Carrillo, servidores públicos del IEQROO. Manifiesta que es falso y aclara que solicitó a dichos servidores, quienes son sus amigos y compañeros de trabajo, lo asistieran a declarar ante la Fiscalía, sin que hasta ese momento tuviera conocimiento que se trataba de una imputación de amenazas a una Consejera Electoral. Al enterarse de los hechos que se le imputaban, nombró nuevo defensor, revocando a los ciudadanos referidos.

- Refiere que ya fue citado en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, como inculpado, generándole un acto de molestia hacia su persona, sin que exista una querrela en su contra por parte de la actora hasta el día cinco de junio del año que se actúa, fecha en la cual, tuvo su audiencia ante el juez de control contra actos del Fiscal de Investigación, situación que incluso llamó la atención del juez, al extrañarle que la fiscalía tiene una indagatoria en curso sin mediar querrela.
- Manifiesta que la *UTCE* viola en su perjuicio el derecho fundamental a la legalidad, al seguirle una investigación y derivado de ella, darle vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en donde se inicia la carpeta de investigación por amenazas, juzgándole así por los mismos hechos y misma parte acusadora en dos instancias diferentes, que si bien es cierto ambas instancias tienen naturaleza distinta, ello lo deja en estado de indefensión.
- Refiere que la quejosa ha llevado el contexto de tema a nivel nacional, incluso al Senado de la República, razón por la cual no ha tenido afectación el desempeño de su puesto como Consejera Electoral, tan es así, que derivado del periodo para construir nuevos políticos locales, ella ha asistido a las Asambleas que se realizan con tal propósito, donde también ha estado el denunciado; sin que ello evidencie las afectaciones propias de la violencia política contra la mujer, primero, porque realiza con naturalidad sus funciones como Consejera Electoral, segundo, porque de sentirse temerosa por las supuestas amenazas vertidas por el denunciado hacia su persona, procuraría no concurrir a los mismos espacios que el propio denunciado.
- En el escrito de catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se le dio vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las últimas diligencias llevadas a cabo por la autoridad sustanciadora, refirió que en la carpeta de investigación identificada como FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016 consta dictamen psicológico practicado a la quejosa, del que anexó copia simple del mismo, con el objeto de acreditar, en su caso, si la quejosa presenta una afectación

psicoemocional. No obstante dicha probanza no será materia de análisis en el presente procedimiento debido al sentido de la presente resolución.

2. José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- En relación al hecho referente a que negó el apoyo a la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, respecto a las publicaciones insertas en el periódico *Novedades de Quintana Roo* en sus ediciones impresas de ocho y nueve de marzo de dos mil dieciséis, denominadas “Miente Consejera Electoral del INE”, “Carga con una decena de expedientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado” y “Quieren que se investigue a todos los consejeros del *IEQROO*”; el once de noviembre de dicha anualidad, en atención a su oficio CE/CCG/086/16 de siete del mismo mes y año, la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, le informó acerca de la remisión de diversos documentos a los medios de comunicación: Grupo Sipse (Novedades), Periodistas Quintana Roo, Sol Quintana Roo, Impulso Quintana Roo, Del Campo Noticias y Desde el Balcón, en los cuales se solicitaba el otorgamiento de facilidades para que la referida funcionaria realizara las aclaraciones pertinentes respecto de las notas periodísticas en cita, en ejercicio de su derecho de réplica; sin embargo, no se recibió por parte de dicha Consejera, la información correspondiente en tiempo y forma, a efecto de entregarla a los medios de comunicación para que fuera publicada, por lo cual, dichos medios no publicaron la aclaración solicitada.
- Respecto al hecho en el cual se refiere que la quejosa, menciona haber solicitado por oficio CCG/052/16, la versión estenográfica del audio de las entrevistas que realizaron los representantes de los medios de comunicación, al finalizar la sesión del Consejo General, de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, con la finalidad de solicitar su derecho a réplica, refiere que la Unidad Técnica de Comunicación Social, sí atendió ese requerimiento, enviando lo solicitado al correo institucional iegroo.claudia.carrillo@gmail.com, el veintitrés de agosto y uno de septiembre de dos mil dieciséis, corroborando lo anterior con lo manifestado por la misma en su escrito CE/CCG/060/16, en el que

refirió, en esencia lo siguiente: "...el cual me fue remitido al correo institucional *IEQROO* referido, en esta ocasión de forma completa..."

- Respecto al hecho en el cual se le acusa de no atender la solicitud de actividades y campañas para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, se refiere que la *UTCS* no recibió información específica de lo ya citado, por parte de la Consejera Electoral, quien también es la Presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, la Unidad Técnica no organiza dichas actividades y sólo se limita a su difusión.
- Respecto al hecho en el que se refiere un trato diferencial y discriminatorio hacia la quejosa, por cuanto hace a la omisión de publicación de la agenda de actividades en la cual participaría en diversos eventos de la zona norte del estado, con motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer", señala que sí fue publicada a través de la página oficial del Instituto, así como a las cuentas oficiales de la redes sociales Facebook y Twitter, en las que se puede verificar la información. Además, los días siete, diez, trece y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se publicó en la página oficial del *IEQROO* diversos boletines en relación con el Día Internacional de la Mujer, donde se puede destacar la participación de Claudia Carrillo Gasca, en específico en el boletín de trece de marzo, por su participación en diversos eventos incluidos en la agenda de actividades remitida mediante oficio CE/CCG/037/17, de dos de marzo de ese año.
- Las actividades llevadas a cabo como titular de la *UTCS*, siempre han sido realizadas con profesionalismo y cuidando la imagen institucional ante medios de comunicación y sobre la información publicada como oficial, asimismo siempre ha mantenido una relación laboral en la que impera el respeto hacia cada una de las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto, así como la disposición del área a mi cargo para efecto de cubrir y publicar los eventos en los que todas y todos los miembros del Consejo General participan.

3. Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante del *PRI* ante el Consejo General del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto al hecho, en el cual se refiere que el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Ordinaria del Consejo General del *IEQROO*, se votó el acuerdo, por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, en donde la quejosa voto en contra y por tal motivo fue sometida a diversos cuestionamientos, poniendo en duda su designación como consejera, resulta parcialmente cierto en cuanto a que el Consejo General del *IEQROO*, celebró sesión ordinaria el veintisiete de febrero del dos mil dieciséis; mediante el cual se sometieron a aprobación, entre otros documentos, el acuerdo del Consejo General del *IEQROO*, asimismo que le pidió a la Consejera Presidenta hacer uso de la voz a fin de solicitarle a Claudia Carrillo Gasca, expusiera su razonamiento que motivó emitir su voto en contra respecto al citado Acuerdo, toda vez que los consejeros electorales, anteriormente mencionados, dieron a conocer los motivos y las razones por las cuales su votación fue en sentido negativo, sin embargo, en ningún momento se puso en duda la designación de la quejosa como Consejera Electoral, así como sus conocimientos; siendo que las solicitudes realizadas a dicha consejera electoral fue a razón de conocer los motivos de su disenso al citado Acuerdo, sin que ello sea una cuestión personal.
- En razón al hecho en el cual la quejosa señala, que es responsable de la publicación de supuestas calumnias hacia su persona en los medios de comunicación "*Impulso Quintana Roo, Del Campo Noticias y Periodistas Quintana Roo*"; refiere que dicha aseveración es falsa, y no es responsable de las publicaciones que los medios de comunicación difunden a la ciudadanía en general, ya que esta actividad únicamente corresponde a la labor periodística que realizan bajo el amparo del ejercicio de los derechos de libertad de expresión, pensamiento, información y prensa. Refiere que si bien es cierto que fue entrevistado por medios de comunicación en razón al tema de los supuestos expedientes que la actora tiene integrados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en ningún momento

afirmó que existían las pruebas o evidencias que demostraban que la quejosa era responsable, puesto que en dicha entrevista manifestó desconocer la información sobre dicho tema, dejando en claro que en todo caso, en el supuesto de que las autoridades contaran con los elementos de prueba o evidencia, tendrían que realizar las investigaciones a fin de poder resolver dicho asunto.

- En relación al hecho relacionado con las manifestaciones realizadas al aprobarse el Acuerdo del Consejo General del *IEQROO*, relativo al uso en el interior de las casillas electorales de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio de reproducción de imágenes, con la finalidad de grabar o tomar fotografías dentro de dichas casillas electorales, y que a juicio de la quejosa no pueden ser consideradas pacíficas o respetuosas; refiere que es falso, ya que no realizó comentarios ofensivos hacia alguna persona en particular, pues las manifestaciones fueron de manera libre y respetuosa.
- Por cuanto hace al hecho, en el cual señala que supuestamente se dirigió de manera grosera, denostativa y agresiva a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, manifiesta que es totalmente falso, puesto que siempre se ha conducido con respeto hacia las personas, sin importar el cargo que desempeñen.
- El hecho, en el cual la actora señala que la agredió en la sesión de Consejo General de treinta de junio de dos mil dieciséis, refiere que es a falso, puesto que solo ejerció su derecho de libertad de expresión en atención al tema que originó el debate entre los integrantes de dicho Consejo Electoral, manifestando, que le hubiera gustado que las posturas que formaron parte del debate sobre el acuerdo que se sesionaba, se hubieran planteado en la reunión de trabajo que sostuvieron previo a la sesión, de igual forma solicitó a las y los Consejeros Electorales el llevar en tiempo y forma las sesiones de sus Comisiones respectivas, puesto que tenía conocimiento que algunas comisiones no habían sesionado, además refiere que los comentarios que realizó nunca fueron dirigidos a alguna persona en particular, sino

más bien fueron comentarios generales relacionados y expresados durante el debate sostenido.

- Señala que es cierto por cuanto a que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General del *IEQROO*, llevó a cabo sesión ordinaria, así como, que dentro de los temas agendados para ser discutidos en el tercer punto del orden del día denominado “Asuntos Generales”, se incluyó el presunto uso indebido de las listas nominales, en el cual manifestó su opinión de manera general respecto a dicho tema, pero en ningún momento señaló a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, como responsable de que los medios de comunicación publicaran o en su caso, estuvieran haciendo especulaciones respecto al tema del presunto uso indebido de las listas nominales.
- Asimismo, refiere que las manifestaciones realizadas por la Consejera Electoral, constituyen acusaciones vagas, imprecisas y carentes de sustento, basadas en juicios de su propia valoración, resultando ser meras aseveraciones sin fundamento, que carecen de objetividad, puesto que como obra en el expediente de mérito, en ningún momento puso en duda la designación de la Consejera Electoral, ni mucho menos se condujo de manera irrespetuosa hacia su persona.
- También refiere que las participaciones ante la mesa del Consejo General del *IEQROO*, siempre se manifestó de manera respetuosa, en aras de expresar sus propias ideas, ya sea para dar un punto de vista diferente o coincidir con el tema que se comentaba, por lo que en todo caso únicamente ejerció su derecho de manifestar de manera libre y respetuosa sus opiniones.
- Por último, refiere que la Consejera Electoral no aportó algún medio probatorio para acreditar los actos en contra de él.

4. Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto al hecho, en el cual presuntamente le contestó que no tenía por qué darle ninguna explicación a la actora y que si la necesitaba se la pidiera a la Consejera Presidenta, lo anterior, relativo a la pregunta de la actora en el sentido de que le explicaran porque estaban capturando información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizadas en la Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, manifiesta que es falso, ya que nunca se ha referido a la quejosa en dichos términos y que en respuesta le informó que la captura de datos se realizaba con fines estadísticos, sobre las elecciones y participación ciudadana, y que dicha actividad se encontraba prevista en el “Programa Operativo Anual 2016”, siendo la afirmación de la quejosa vaga y sin sustento alguno.
- Respecto al hecho, en el cual se refiere la omisión de dar respuesta a un escrito, signado por la quejosa, por el que solicitó instruir al denunciado en comento, para dar respuesta a la preguntas formuladas durante la sesión de Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, manifiesta que es falso, en razón de que por instrucciones de la Consejera Presidenta del Consejo General del IEQR, la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, le instruyó que atendiera y diera respuesta dicho oficio, dando cumplimiento mediante oficio DO/258/2016 y haciendo del conocimiento a la consejera electoral, que el Secretario General del Consejo General del Instituto, el Maestro Juan Enrique Serrano Peraza, suscribió y remitió a cada uno de los integrantes que conforman el Consejo General, mediante oficio SG/879/2016, el *“Informe relativo a la generación de las estadísticas de participación ciudadana del proceso electoral local ordinario 2016 en el Estado de Quintana Roo”*, en el cual se incluyó la información de las observaciones y peticiones que la actora formuló en dicha sesión.
- Respecto al hecho, en el cual se refiere la omisión de dar respuesta al escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, signado por la actora, relativo a la actividad de entrega de material electoral en Othón Pompeyo Blanco, Chetumal, Quintana Roo, manifiesta que es falso, puntualizando, que el oficio señalado, no fue enviado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, como se establece en

el acuerdo que se le notifico por parte del Titular de la *UTCE* de la Secretaría Ejecutiva del *INE*, sino que fue hasta el siete de noviembre de la misma anualidad y que mediante oficio DO/289/2016, de diez de noviembre de la misma anualidad se dio contestación.

- Refiere que la quejosa ha omitido presentar los medios de prueba, donde acredite fehacientemente su dicho, ya que contrario a ello, sus manifestaciones únicamente constituyen percepciones meramente subjetivas, acusaciones vagas, imprecisas y sin sustento; asimismo, refiere que no se evidencia un actuar ilegal en el desempeño de las funciones que le han sido designadas o violencia y discriminación con motivo del género y la calidad de mujer de Claudia Carrillo Gasca.

5. Mauricio Morales Beiza, Representante del *PT* ante el Consejo General del IEQROO, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto a los hechos que se le imputan en relación a:
 1. La falta de profesionalismo al conducirse con la Consejera Electoral, derivado de supuestas agresiones verbales durante la sesión del Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.
 2. La violencia de la que fue objeto la Consejera Electoral, derivado de una discusión que se llevó a cabo durante la sesión de mismas fecha, respecto de la denuncia presentada por un posible uso indebido del listado nominal y filtración de dicho asunto a medios de comunicación, haciéndola responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema.

Refiere que los hechos antes expuestos tienen relación con una de las intervenciones que realizó en dicha sesión, al solicitar hacer un uso de la voz para expresar su postura, pues señaló que “lamentaba el hecho de que la actividad relacionada con la generación de estadísticas del proceso electoral 2016, se diera en un contexto en donde se estuviera cuestionando las formas de elaboración”, pues al término de un proceso electoral, se elabora este tipo de información,

al estar prevista en la ley de la materia, siendo de gran importancia e interés para ciudadanía quintanarroense; seguidamente formuló diversos cuestionamientos respecto al tema que abordaron los otros integrantes del Consejo General, sin que en ningún momento se condujera de manera ofensiva hacia la actora, puesto que siempre ha demostrado un trato basado en la cordialidad y el respeto, sin importar la naturaleza del cargo que desempeñen, siendo que su actuar como representante de partido siempre ha sido apegado al respeto, cordialidad y profesionalismo, por tanto, es falso que señalara a la actora como responsable de que los medios de comunicación publicaran o en su caso hicieran especulaciones respecto al tema del presunto de uso indebido de las listas nominales.

6. Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto al hecho, en el que la quejosa afirma haber asistido bajo engaños y excusas al *TEQROO*, reunión en la cual según la quejosa, el entonces Magistrado Presidente de dicho tribunal, solicitó su apoyo para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional y a la Coalición Integrada por el Verde Ecologista y Nueva Alianza, a lo que Sergio Avilés Demeneghi y la quejosa se negaron y que posteriormente al dirigirse a comer junto con el referido y Sergio Avilés Demeneghi, recibió una llamada del Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, quien le infirió diversas groserías y la desvalorizó por el hecho de ser mujer, amenazándola a ella y a su familia, manifiesta que, por invitación de la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, el referido asistió a dicha reunión y en relación a los temas tratados recuerda que el entonces Magistrado Presidente les transmitió sus felicitaciones por su designación como Consejeras y Consejeros Electorales del *IEQROO*, y les comentó sobre trabajar en actividades conjuntas, principalmente en actividades académicas para la difusión y promoción de temas de carácter electoral, asimismo, que en compañía de la quejosa y de Sergio Avilés Demeneghi, después de la plática sostenida con el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Víctor Venamir Vivas Vivas, se dirigieron a almorzar a un restaurante y durante el trayecto, la actora recibió una llamada a su

teléfono móvil, manifestando que se trataba de Carlos Lima, sin embargo, por ser una llamada personal, no escuchó en qué sentido o ánimo versó tal llamada.

- En relación, al hecho en el que la quejosa refiere que a las reuniones de trabajo previas a las sesiones del Consejo, acudía el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, y a que a una de ellas, no fueron convocados el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi y ella, en la cual estuvieron presentes los tres Magistrados Electorales, y que fue por conducto del Consejero Luis Carlos Santander Botello, que se enteró que dicha visita, y que el entonces Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, daba instrucciones al área jurídica como si dependieran de él y hacía uso del material y equipo tecnológico del *IEQROO*, al amparo del denunciado y otros de sus compañeros, manifiesta, que niega el hecho, en razón de que él como sus compañeras y compañeros consejeros electorales recibieron una visita de cortesía de los tres Magistrados que conforman el Pleno del órgano jurisdiccional, en las oficinas que ocupa el *IEQROO*, a efecto de conversar respecto a un convenio de colaboración interinstitucional entre el *IEQROO*, y el *TEQROO*, en materia del procedimiento especial sancionador, haciendo un señalamiento que pretende se traduzca en una afirmación vaga y sin sustento alguno, toda vez que no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar de la participación del suscrito en los hechos mencionados, así como tampoco acredita con elemento probatorio su dicho y solo se limita a realizar señalamientos genéricos.
- Respecto al hecho, en el cual la actora refiere, que tanto el denunciado como la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina, trataron de persuadirla de integrar el Comité de Transparencia de esa autoridad electoral, aún y cuando es miembro de la Comisión de Transparencia, negándose a incluirla; manifiesta que, niega el hecho, toda vez que no existió intervención con la intención de, disuadirla o negación rotunda para que la quejosa, integrara o formara parte del Comité de Transparencia del *IEQROO*, asimismo que la justificación respecto a la postura del suscrito en relación a la integración de dicho Comité, refiere fueron manifestadas de manera clara, puntual y respetuosa en

una reunión de trabajo de la Comisión de Transparencia que presidió, y que posteriormente, en otra reunión de trabajo del Consejo General, se discutió y debatió el tema respecto de la integración del Comité de Transparencia, en la cual al igual que sus compañeros manifestaron y justificaron su postura respecto al tema.

- Respecto al hecho, en el cual la quejosa refiere que la secretaria al mando del denunciado, se encontraban capturando la información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizados en la Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, manifiesta que no le consta de forma personal, en qué versaban los datos, elementos e información de la supuesta captura, sin embargo, recuerda que le solicitó a su secretaria Esther Castillo, a efecto de que apoyara a la Dirección de Organización y de la Unidad Técnica de Informática y Estadística en las tareas encaminadas a la integración de la estadística de los procesos electorales.
- Por cuanto hace al hecho, en el cual la quejosa refiere haber sido violentada por el denunciado y otros Consejeros Electorales, en la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, y que ha recibido una serie de mensajes donde le informan que están trabajando diversas denuncias en su contra, por parte de los Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de dicho instituto, y que tiene relación con lo expresado por el denunciado en dicha sesión, niega el hecho, manifestando, que considera que sus participaciones se encuentran al amparo de su libertad para tomar determinaciones y de plantear los argumentos y manifestaciones que como Consejero Electoral se le permite, siendo que es una atribución conferida de manera constitucional y legal a cada uno de las y los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del IEQROO, asimismo, refiere que han transcurrido aproximadamente doce meses, en que a juicio, manifestación y denuncia de la quejosa, presuntamente se elaborarán denuncias a modo al interior del IEQROO, específicamente por parte de “diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica”, los cuales fueron iniciados, respecto de a la participación del denunciado en dicha sesión, sin que hasta la presente fecha se haya instaurado denuncia, queja o juicio alguno en

su contra, sin presentar medio alguno de prueba mediante el cual acredite fehacientemente su dicho, ya que sus manifestaciones únicamente constituyen percepciones meramente subjetivas, acusaciones vagas, imprecisas y sin sustento.

- Refiere también, que al no acreditarse todos y cada uno de los actos imputados y mucho menos poder estimarlos como graves, debe entonces considerarse con el carácter de frívola su queja con relación al denunciado vulnerando con ello el principio de legalidad y acceso efectivo a la justicia, pues pretende obtener un resultado basándose únicamente en su dicho y sin aportar pruebas idóneas, que no acreditan sus acusaciones.

7. Armando Miguel Palomo Gómez, Representante del *PNA* ante el Consejo General del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- En relación al hecho, en el que la quejosa señala que el denunciado realizó una serie de comentarios ofensivos en su contra, por ser originaria de Cozumel, manifiesta, que no existió ningún “comentario ofensivo” en contra de la quejosa “por ser originaria de Cozumel, Quintana Roo”, como lo pretende hacer valer la actora. Lo cual aun en el supuesto no concedido no actualizaría los hechos materia de la presente investigación; sino que según se advierte de la transcripción de la sesión de mérito, los comentarios formulados tienen como finalidad hacer un llamado a que durante el desarrollo de las sesiones se adopten “buenas costumbres” por parte de los integrantes de dicho órgano, y evitar con ello manoteos y faltas de respeto durante las intervenciones; así como el solicitar la impartición de un curso del Reglamento de Sesiones, respecto del tema particular de las mociones.
- Respecto al hecho en el cual la quejosa refiere que fue objeto de violencia, en la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, manifiesta que niega las imputaciones formuladas en su contra, toda vez que de las manifestaciones que realizó no se puede advertir que tengan como objeto señalar a la quejosa como responsable de la

filtración a los medios de comunicación, sino que dichas manifestaciones, fueron con base a una reflexión general respecto al tema del listado nominal y la difusión de dicho hecho por parte de los medios de comunicación, mismo que era discutido en el pleno del Consejo General, en uso de sus derechos como miembro del mismo, considerando pertinente comentar, que las y los Consejeros tenían la capacidad de llegar a consensos, recalcando que por algo fueron considerados para ser designados en dichos cargos, pudiendo observarse que en ningún momento agredió a la actora.

- Respecto al hecho en el cual la quejosa refiere que se realizó una actividad con el PNA, al cual no fue invitada, siendo quien preside la Comisión Transitoria para la igualdad de mujeres y hombres, manifiesta que no se trata de un hecho propio, ya que los eventos organizados por el citado partido se le invita a la consejera presidenta en virtud de que ella es la que preside el Consejo General.
- Finalmente, reitera que siempre se ha dirigido al personal que labora en dicho instituto con respeto, sin importar la jerarquía del puesto que desempeñen, de ahí que resultan falsas las expresiones con las que supuestamente se dirigió a la promovente, aunado a que no presentó medio de prueba alguno que acredite los hechos que me imputa, basando sus acusaciones en meros juicios de valoración.

8. Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del IEQROO, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto al hecho en el cual la quejosa señala haber sido excluida de la entrega de una compensación económica por el proceso electoral, por la cantidad de diez mil pesos, manifiesta que se realizó la instrucción de la Consejera Presidenta, respecto a que se giraron las instrucciones correspondientes para realizar el pago de los estímulos por Proceso Electoral del ejercicio 2016 a todos los Consejeros Electorales, sin embargo, se percató que el estímulo en comento no le fue depositado a los Consejeros Electorales Lic. Claudia Carrillo Gasca y Dr. Luis Carlos Santander Botello, derivado de un “*lapsus*

calami” que devino en esa inconsistencia administrativa, por lo que una vez examinados los mecanismos presupuestales para resarcir la inconsistencia de mérito, ha de tenerse en cuenta en primer lugar que esta situación correspondió a recursos del ejercicio 2016, el cual ya se encuentra cerrado e incluso en auditoría por parte de la autoridad competente; y por otro lado que, los recursos autorizados para ejercer en el año 2017, se encuentran debidamente etiquetados para rubros específico, y que desde ese momento se está haciendo la valoración respectiva a efecto de que, en su caso de las economías que eventualmente se obtengan del presente ejercicio, exista disposición presupuestal para realizar el pago correspondiente, situación que inmediatamente se estará informando.

- Por cuanto al *lapsus calami* del que devino la inconsistencia administrativa no fue de manera exclusiva respecto de la quejosa, sino también respecto del Consejero Luis Carlos Santader Botello; por lo que es inexistente la supuesta existencia de violencia política o exclusión por razones de género como lo aduce la actora.

9. Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del IEQROO, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Respecto al hecho en el que la quejosa afirma, haber asistido bajo engaños y excusas al TEQROO, reunión en la cual, a dicho de la quejosa, el entonces Magistrado Presidente de dicho tribunal, solicitó su apoyo para beneficiar al PRI y a la Coalición Integrada por el Verde Ecologista y Nueva Alianza, a lo que Sergio Avilés Demeneghi y la quejosa se negaron, manifiesta que es cierto en cuanto a su asistencia, así como la de otros Consejeros al Tribunal Electoral del Estado, sin embargo, es falso que ésta haya ocurrido en el contexto señalado por la quejosa, pues la razón de su asistencia, a dicha reunión es porque la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, le comento que el Magistrado Presidente del TEQROO, les extendió una invitación para acudir a dicho órgano jurisdiccional a efecto de sostener una plática con él, sin embargo, dicha reunión tuvo como objetivo felicitarlos personalmente por su designación como Consejeros Electorales, hablaron de los nuevos retos que tenían por

delante como instituciones electorales, en el caso de algunos Consejeros fue en esencia el presentarse, con otros funcionarios no aconteció ello porque previo a la designación como Consejeros y Consejeras, habían tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito electoral. Asimismo recuerda que les comentó sobre trabajar en diversas actividades conjuntas, refiriéndose a actividades de carácter académico de difusión del derecho electoral, negando el dicho de la quejosa, por cuanto hace a *“que el puesto se lo debíamos a él, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y al Gobernador del Estado”*.

- Del hecho en el que la quejosa refiere que a las reuniones de trabajo previas a las sesiones del Consejo, acudía el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, y a que a una de ellas, no fueron convocados el Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi y ella, en la cual estuvieron presentes los tres Magistrados Electorales, y que fue por conducto del Consejero Luis Carlos Santander Botello, que se enteró que dicha visita, y que el entonces Magistrado Víctor Venavir Vivas Vivas, daba instrucciones al área jurídica como si dependieran de él y hacía uso del material y equipo tecnológico del IEQROO, al amparo de la denunciada y otros de sus compañeros, manifiesta, que es falso.
- Respecto al hecho en el cual la actora refiere, que tanto el denunciado como la Consejera Mayra San Román Carrillo Medina, trataron de persuadirla de integrar el Comité de Transparencia de esa autoridad electoral, aún y cuando es miembro de la Comisión de Transparencia, negándose a incluirla; manifiesta que no lo afirma ni lo niega por no ser actos propios, no obstante, las manifestaciones realizadas por la quejosa, en específico el supuesto intento de “disuadirla” que en términos de la Real Academia de la Lengua Española significa: “inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito”, situación que no acontece en el caso concreto, siendo que en las actas respectivas, no se advierten participaciones por parte de la suscrita que pretenda inducir a la quejosa para que cambie su postura, lo cual deviene en una simple afirmación vaga sin sustento, ya que no aporta elemento alguno para acreditar su dicho.

- Asimismo, las participaciones de todas las Consejeras y Consejeros electorales se encuentran reguladas por la reglamentación respectiva, a efecto de garantizar la participación libre y en igualdad de condiciones, por lo que las y los integrantes del Consejo General tienen el derecho unipersonal de decidir respecto a sus posturas o intervenciones y así emitir su voto en el sentido que éstos consideren, por lo que su participación fue respecto al punto referido de la sesión, constante en el acta correspondiente, en el cual compartía el sentido del Acuerdo, siendo que a su juicio éste se encontraba fundado y motivado, coincidiendo que dicho Comité debía estar conformado por titulares de unidades administrativas de nivel directivo, ello atendiendo a la naturaleza de las responsabilidades a cargo del citado Comité, toda vez que las facultades y operatividad de dichos funcionarios les involucra constantemente en el manejo de información sustantiva y además que, en términos de la Ley de la materia, no podían depender jerárquicamente entre sí.
- Asimismo, que las determinaciones de dicho órgano resultan ser de carácter colegiado, el sentido de su voto, no fue en exclusión de alguno de los integrantes del Consejo General para integrar al citado Comité, por lo cual la aprobación del aludido Acuerdo se realizó por mayoría de votos, y en tal sentido dicha decisión no fue realizada de manera unilateral por la denunciada, a su vez, dicha aprobación posteriormente fue impugnada ante el Tribunal Electoral local, y después ante el *TEPJF*, siendo que ambos órganos jurisdiccionales confirmaron el citado Acuerdo mediante las sentencias con número de expediente JIN-035-2016 Y SUP-JRC-309-2016, respectivamente. Entendiéndose que la integración del Comité de Transparencia se encuentra apegada a derecho, y consecuentemente el hecho de que las y los Consejeros Electorales no forman parte del mismo no vulnera derecho o disposiciones legales de la materia.
- Respecto al hecho, en el cual la quejosa refiere que la secretaria al mando del denunciado, se encontraban capturando la información de las Listas Nominales de Electores que fueron utilizados en la Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, no lo afirma ni lo niega por no ser actos propios, no obstante, no se advierten, con precisión,

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni medios de prueba para acreditar la participación de la denunciada, por lo que, la quejosa no es clara al pretender imputar una falta o vulneración a la normatividad electoral.

- Por cuanto hace al hecho, en el cual la quejosa refiere haber sido violentada por el denunciado y otros Consejeros Electorales, en la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, y que ha recibido una serie de mensajes donde le informan que están trabajando diversas denuncias en su contra, por parte de los Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de dicho instituto, y que tiene relación con lo expresado por el denunciado en dicha sesión, manifiesta que es falso, toda vez que, sus participaciones, están al amparo de su libertad para tomar determinaciones y de plantear los argumentos y manifestaciones que como Consejera Electoral se le permite, por lo cual, la discusión que se genera durante el desarrollo de las sesiones pueden existir disensos en las posturas, esto sin entenderse como una agresión o una conducta encaminada a menoscabar la participación de alguno de los integrantes de dicho órgano de dirección, ni como una coalición con otros de sus integrantes por resultar coincidentes, pues contrario a ello, dichos encuentros abonan al debate de los temas, y que es una característica que forma parte inherente a la naturaleza de los órganos colegiados, como en este caso acontece.
- Asimismo, refiere que, sus comentarios en la sesión los realizó con el objeto de relatar los diversos hechos que habían acontecido de manera pública y notoria previo a la referida sesión, y que guardaban una estrecha relación con el tema que se discutía, en específico la publicación de diversas notas en medios de comunicación electrónicos relativas a que la quejosa hacía pública una denuncia respecto a supuestos hechos ocurridos al interior del Instituto, y que además en dichas notas aparecía una imagen en donde se observa su persona sosteniendo un documento dirigido a las Subdelegación de la PGR, así como otras con las mismas características de los hechos denunciados con el fin de plantear las circunstancias que acontecían

en torno al tema que se estaba discutiendo y expresar su punto de vista, en ejercicio de sus facultades legales y libertad de expresión.

- Aunado lo anterior, los comentarios realizados por la denunciada no expusieron hechos que no hayan sucedido, toda vez que su participación fue el objeto de contextualizar los hechos tal y como habían acontecido, ya que como se desprende de la participación de la quejosa, ella sugiere que el personal que realizaba los trabajos con las listas nominales había tomado fotografías, omitiendo en un primer momento, que ella misma había efectuado dicha acción.
- Por ende la participación de la suscrita fue en total apego a los principios constitucionales y de transparencia que exige su función como Consejeras y Consejeros Electorales, y siempre realizados en los tiempos permitidos y en igualdad de condiciones de todos los integrantes del Consejo General; guardando el respeto hacia las participaciones de los demás.
- Refiere que la quejosa en sus escritos manifiesta que existe violencia política de género por la denunciada, durante el desarrollo de la sesión del Consejo General del Instituto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo, la acusación se basa en una apreciación personal de los comentarios vertidos por la denunciada en la referida sesión, siendo que la participación de la suscrita fue en torno a plantear las circunstancias que acontecían al tema que se estaba discutiendo y expresar su punto de vista, en ejercicio de sus facultades legales y libertad de expresión, lo anterior, sin constituir una agresión o una conducta encaminada a menoscabar la participación de alguno de los integrantes de dicho órgano de dirección, máxime que su participación en dicha sesión, como en todas las demás ocasiones, se encuentran al amparo de su libertad para tomar determinaciones y de plantear los argumentos y manifestaciones que como Consejera Electoral se le permite; por tanto, las acusaciones realizadas en su contra resultan infundadas, ya que carecen de elementos probatorios con los que se acredite la comisión de agresiones en contra de la quejosa, o que por su condición de ser mujer se haya hecho alguna distinción en cualquier momento o circunstancia institucional.

10. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del *IEQROO*, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- Laboró en el *TEQROO*, siendo su superior jerárquico el Magistrado Francisco Javier García Rosado, y posteriormente el entonces Magistrado José Carlos Cortés Mugartegui, siendo que el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, fungía como Presidente de dicho tribunal.
- El contexto que se le da al hecho marcado como número tres, es totalmente falso, toda vez que las supuestas afirmaciones que se hicieron en la reunión de trabajo que refiere la quejosa, son apreciaciones subjetivas que no tienen sustento jurídico o documental, reiterando que desde que fue nombrada como Consejera Presidenta del *IEQROO*, consideró oportuno reunirse con el Presidente del *TEQROO*, atendiendo a que las autoridades que ambos representaban debían trabajar de manera coordinada por mandato legal, a la vez que creyó oportuno presentar a todos los integrantes del citado organismo público electoral local ante la autoridad jurisdiccional electoral de Quintana Roo.

Aduce que en dicha reunión fueron felicitados a excepción de Luis Carlos Santander Botello, todos los demás Consejeros Electorales por el Magistrado Presidente del *TEQROO*, con motivo de su designación como integrantes del Consejo General del *IEQROO*, y que durante el desarrollo de la reunión se trataron temas relacionados con el trabajo conjunto entre ambas autoridades, para llevar a cabo la realización de la elección del cinco de junio de dos mil dieciséis, resultando falso que se hubieren realizado las manifestaciones efectuadas por el Magistrado Presidente en contra del Consejo Santander Botello.

Establece que al final de la reunión, ella y Víctor Venamir Vivas Vivas, platicaron algunos puntos del trabajo conjunto que se llevaría a cabo con posterioridad, siendo una de las primeras acciones la conmemoración de los trece años del surgimiento de ambas instituciones, por lo que reitera que la única relación que tenía con el citado funcionario, fue de coordinación institucional.

Niega que en esa reunión Víctor Venamir Vivas Vivas, hubiere realizado las manifestaciones referentes a que su puesto de Consejeros Electorales se lo debían a él, a Carlos Alejandro Lima Carvajal y a Roberto Borge Angulo, por lo cual, menciona que desconoce de donde surgieron dichas afirmaciones por parte de la quejosa.

En ese sentido, señala que es falso que el mencionado Magistrado Presidente, sugiriera la realización de Lineamientos contrarios al *INE*, aclarando que su actuación como Consejeros Electorales, en todo momento se ha apegado a los principios rectores de la materia electoral, lo cual quedo de manifiesto con la confirmación de la elección del cinco de junio de dos mil dieciséis, por parte del órgano jurisdiccional.

Indica que las aseveraciones que realiza la quejosa, respecto de que al término de la reunión a la que asistieron fue *“detenida del brazo derecho por parte del Magistrado Presidente Víctor Vivas...”* y que según su dicho, éste le hizo una serie de señalamientos, los mismos no le constan por no haberlos presenciado, así como tampoco tiene conocimiento de que Claudia Carrillo Gasca, hubiere recibido una llamada de Carlos Alejandro Lima Carvajal, infiriéndole amenazas.

- Precisa que el hecho identificado como número cinco, es falso, ya que en ningún momento ha recibido instrucciones de los servidores públicos Carlos Alejandro Lima Carvajal y Víctor Venamir Vivas Vivas, para realizar sus funciones, lo cual, según su dicho, al ser manifestaciones falsas y descalificativas, generan violencia política de género en su contra por parte de Claudia Carrillo Gasca.
- Arguye que el hecho número seis, es falso, en los términos que lo pretende hacer valer la quejosa, pues si bien Claudia Carrillo Gasca, voto en contra del acuerdo que se sometió a consideración del Consejo General, sin señalar argumento alguno que lo motivara, lo cierto es que, no es verdad el contexto que le quiere dar a la participación de un representante partidista, y por tanto, quererla responsabilizar por la intervención de un tercero que también forma parte del citado Consejo, y que realizó una expresión en ejercicio de su libertad de expresión.

- Precisa que los hechos siete, ocho, nueve y diez, ni se afirman ni se niegan por no ser hechos propios, pues se trata de la publicación de diversas notas periodísticas, así como una solicitud relacionada con el derecho de réplica hizo el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del *IEQROO*, refiere que, ni se afirma ni se niega por no ser hechos propios.
- Por lo que respecta al hecho en el cual la quejosa aduce que se ha opuesto a diversos proyectos que han surgido de las presuntas reuniones previas a las sesiones del Consejo General, llevadas a cabo con Víctor Venamir Vivas Vivas, haciendo caso omiso a los demás puntos de vista realizados por los integrantes del citado Consejo, señala que el mismo es falso y se basa en simples manifestaciones subjetivas carentes de sustento legal. Afirma que Claudia Carrillo Gasca, tiene el derecho de estar de acuerdo o no con los proyectos que son sometidos a la consideración del órgano colegiado; sin embargo, es grave que por ese hecho, realice imputaciones falsas que atentan en su contra.

Aunado a lo anterior, indica que las únicas reuniones de trabajo previas a las sesiones del Consejo General, son aquellas sostenidas con los integrantes del citado órgano electoral, así como con los representantes de los partidos políticos, a las cuales se convoca de manera formal, esto es, por escrito dirigido a cada uno de los integrantes del mismo, lo cual se acredita con la copia certificada de dichas convocatorias.

- Por lo que respecta al hecho en el que la quejosa señala que ha detectado la intervención del personal del *TEQROO*, en los procedimientos especiales sancionadores, señala que el mismo es falso, puesto que conforme al artículo 322, de la Ley Electoral de Quintana Roo, corresponde a la Dirección Jurídica del *IEQROO*, la instrucción de este tipo de procedimientos, mientras que compete al tribunal electoral su resolución, de ahí que resulte que debe existir una coordinación entre ambas instituciones, sin que ello signifique algún tipo de intervención. Indica que existe un convenio de colaboración entre el *IEQROO* y el *TEQROO*, mismo que fue impugnado y confirmado por la Sala Superior del *TEPJF*.

De igual forma, señala que en la sesión de treinta de abril de dos mil dieciséis, las participaciones de los representantes partidistas se realizaron en franco ejercicio a su derecho de libertad de expresión.

- Aduce que el hecho trece es falso, ya que se trata de apreciaciones subjetivas y personales efectuadas por la quejosa, toda vez que no es cierto que el representante del *PRI* ante el Consejo General, hubiere realizado agresiones verbales en su contra, durante la sesión extraordinaria de dos de junio de dos mil dieciséis, lo que demuestra con el acta de sesión respectiva.
- Manifiesta que el hecho en el cual la denunciante señala supuestos actos relacionados con presuntos ex compañeros de la policía judicial, y en el que refiere igualmente supuestas amenazas del ciudadano Carlos Lima Carvajal, ni lo afirma ni lo niega por no ser hechos propios.
- Asimismo, refiere que el hecho concerniente a supuestas acciones relacionadas con una presunta averiguación previa iniciada en contra de la ahora quejosa y una supuesta violación a sus derechos, ni lo niega ni lo afirma por no ser hechos propios.
- En otro orden de ideas, precisa que el hecho en el que se menciona a los ciudadanos Calos Alejandro Lima Carvajal y al otrora Gobernador del estado Roberto Borge Angulo, así como a diversos links de internet con supuestas notas periodísticas, ni lo afirma ni lo niega por no ser hecho propio.
- Por otra parte, indica que el hecho diecisiete es falso, al tratarse de señalamientos subjetivos y apreciaciones personales de la realidad encaminadas a desprestigiar su desempeño como Consejera Presidenta del *IEQROO*, al establecer que se le han negado espacios para presentar sus propuestas, sin que aporte algún elemento de prueba para acreditar su dicho, pues la frases utilizadas en el contexto referido por ella, nunca fueron utilizadas en el sentido que lo propone, máxime tratándose de cuestiones de género.

Destaca que todas las acciones que se han llevado a cabo en el Instituto en materia de igualdad de género se han informado y acreditado mediante oficio PRE/825/2016, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en donde se hace

referencia a la creación del *Micrositio* en materia de igualdad; conmemoración del voto femenino en México; gestiones para el Observatorio de Participación Política de la Mujer en Quintana Roo, entre otras.

Señala que es obligación y atribución de las Comisiones que integran el Consejo General, rendir informes de sus labores y actividades ante el Consejo General, pero no es necesaria la autorización o permiso por parte de la Presidencia de dicho Consejo, por lo cual, si la quejosa contaba con propuestas, sin probarlo fehacientemente, estaba en su derecho de realizar las actividades y acciones institucionales que considere pertinentes.

- Ahora bien, por lo que hace al señalamiento relativo a que no fue incluida en el Comité de Transparencia, y que tanto ella como el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, trataron de convencerla de desistir de ser miembro de dicho Comité, señala que el es falso, y que desconoce a qué atribuye la citada conducta, aclarando que la determinación de la integración del Comité de Transparencia fue una decisión colegiada, que si bien, fue aprobada por mayoría, también es cierto que fue impugnada ante el *TEPJF*, quien confirmó el acuerdo *IEQROO/CG/A/231/16*, a través del cual, se aprobó la conformación de dicho órgano, de ahí que la integración del mismo se encuentra apegada a derecho.
- Respecto al hecho dieciocho, refiere que es falso en el contexto e interpretación que la quejosa pretende darle, ya que en ningún momento se ha excluido a la quejosa de la actividad que ella refiere y de ninguna otra relacionada con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones como consejera electoral.

En ese sentido, manifiesta que Claudia Carrillo Gasca, tuvo oportunidad, al igual que sus compañeros consejeros electorales, de participar en distintas actividades relacionadas con la integración de los órganos desconcentrados del Instituto para el proceso electoral local dos mil dieciséis, que inició con el procedimiento de localización de las sedes de los consejos distritales y municipales, lo cual se corrobora con la copia certificada del Informe rendido por la Dirección de Organización del *IEQROO*, así como con las actas circunstanciadas de las visitas realizadas a las sedes de dichos consejos distritales y municipales, y en las que obra la firma de la actora.

Asimismo, la quejosa participó de forma igualitaria en el procedimiento para la designación de los consejeros distritales y municipales, acudiendo a la aplicación de los exámenes correspondientes, y formando parte de los grupos de trabajo para llevar a cabo las entrevistas de los participantes, asimismo acudió a las sesiones de instalación de dichos órganos desconcentrados.

Aunado lo anterior, precisa que ni la quejosa, ni ningún Consejero Electoral han sido excluidos de las actividades institucionales, pues durante el desarrollo del proceso electoral local dos mil dieciséis, tanto Claudia Carrillo Gasca, como los demás Consejeros, asistieron a varios eventos y actividades relacionadas con la promoción del voto, impartió conferencias en instituciones educativas, entre otros, acreditado con los boletines emitidos por la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, en los que consta la inclusión de dicha consejera, como de sus compañeros, en todas las actividades institucionales, atendiendo en su caso, a las cargas de trabajo así como a las comisiones a las que pertenecían o presidían, tal y como consta en los boletines que se encuentran alojados en los links de internet: <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines2016/210-febrero-2016/600-tercera-reunion-de-vinculacion-y-coordinacion-entre-el-iegroo-y-el-ine>, <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2016/205-enero-2016>, <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2016/205-enero-2016>, <http://www.contrapuntonoticias.com/2016/01/25/personal-del-iegroo-y-tegroo-en-actualizacion-permanente/>, <http://iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2016>, https://twitter.com/IEQROO_oficial, https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?pnref=story.unseen-section,

Por tal razón, señala que no existen elementos objetivos que permitan afirmar que la quejosa, haya sido excluida de las actividades relacionadas con el proceso electoral local dos mil dieciséis, ni de ninguna otra relacionada con el desempeño de sus funciones y obligaciones legales que tiene como consejera electoral de un *OPLE*.

- En cuanto al hecho en el que la quejosa alude al oficio CCG/029/16, con el que presuntamente solicitó que se incluyera en los promocionales y como temática, la capacitación y educación cívica sobre prevención y erradicación de la violencia política en contra de la mujer, en relación con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujeres, se le dio respuesta mediante oficio PRE/822/2016 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, aclarando que Claudia Carrillo Gasca, solo realizó sugerencias genéricas en su oficio, sin señalar una pretensión o propuesta de programa de acción; además, precisa que el Protocolo en comento fue circulado por entre las y los consejeros que integran el Consejo General del Instituto, corroborado con los acuses de veintidós de agosto de dos mil dieciséis.

Asimismo, establece que el *IEQROO*, en cumplimiento de sus atribuciones, así como tomando en consideración lo sugerido por la denunciante en su oficio, realizó diversas actividades relacionadas con la política de igualdad de género entre hombres y mujeres, las cuales son consultables en los links de internet <http://www.iegroo.org.mx/index.php/presentacion> y http://twitter.com/IEQROO_oficial-1004675162902227?pnref=story.unseen-section.

Además, señala que entre los eventos realizados por el *OPLE* con motivo de dicho tema, se encuentra la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, cuyo evento fue efectuado por la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del *IEQROO*, aclarando que dicha Unidad es la Secretaría Técnica de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Hombres y Mujeres que preside Claudia Carrillo Gasca.

En atención a lo anterior, precisa que se invitó a los integrantes de la citada Comisión para que, de así considerarlo, se realizaran acciones que resaltaran la conmemoración del sesenta y tres aniversario del Voto Femenino en México, lo cual se puede corroborar con la información contenida en la liga <http://www.iegroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2016/244-octubre-2016/838-celebra-iegroo-63-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-mexico>.

- En lo tocante al hecho veinte, refiere que es cierto en cuanto a la aprobación del acuerdo IEQROO/CG/A22/16, del Consejo General del IEQROO y del que derivó la determinación del TEQROO de dar vista al INE para iniciar un procedimiento de remoción de los Consejeros Electorales que integran el citado Consejo.
- Por cuanto hace al hecho veintiuno, en el que se establece que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento de diversos hechos relacionados con las listas nominales de electores, así como supuestas interacciones de ella con los directores de Partidos Políticos y de Organización del IEQROO, aduce que no los afirma ni los niega, por no ser hechos propios.
- Por lo que se refiere el hecho veintidós, aduce que es cierto en lo que corresponde a la presentación del oficio por el que Claudia Carrillo Gasca, realizó diversos cuestionamientos relacionados con el tema de las listas nominales de electores.
- Por lo que hace al hecho veintitrés, refiere que ni lo afirma ni lo niega por no ser hechos propios, toda vez que alude a una supuesta interacción de la quejosa y José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos del Instituto.
- En lo que corresponde al hecho referente a una captura de pantalla concerniente a un chat llevado a cabo entre ella y diversos Consejeros Electorales, indica que dicha prueba es insuficiente para acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene, precisando, además, que el texto del supuesto mensaje, se relaciona con una solicitud de apoyo para auxiliar en la captura de información, sin que se pueda desprender a qué información se podría estar mencionando, de ahí que no se acredite fehaciente, objetiva e indubitadamente ningún hecho.
- Señala que el hecho veinticinco, es cierto por lo que hace a la contestación que emitió a la quejosa mediante oficio PRE/736/2016.
- En lo que respecta al hecho en el cual la quejosa afirma que en la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, fue objeto de violencia en su contra

por parte de la Presidenta del Consejo, así como de diversos representantes de partidos políticos y los Consejeros Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, lo que pretende acreditar con el acta de sesión en comento, refiere que es falso, toda vez que se trata de una apreciación subjetiva y unipersonal de la realidad por parte de Claudia Carrillo Gasca, ello en razón de que, las participaciones de todos y cada uno de los integrantes del Consejo General se encuentran al amparo legal de emitir sus opiniones, puntos de vista o disensos respecto a los temas que se ponen a consideración, de manera pacífica y respetuosa; ello sin entenderse como una agresión o una conducta encaminada a menoscabar la participación de alguno de los integrantes de dicho órgano de dirección, ya que dichos encuentros abonan al debate de los temas.

Acorde a lo anterior, precisa que si bien es la encargada de conducir de manera conjunta con el Secretario General, las sesiones del Consejo General, ello no implica que sea su responsabilidad lo expresado por cada uno de los integrantes de dicho órgano.

- En cuanto a los hechos veintisiete, veintiocho y veintinueve, ni los afirma ni los niega por no ser hechos propios.
- Por lo que corresponde al hecho treinta, aduce que es falso el contexto doloso que le pretende dar la quejosa, pues indica que nunca ha excluido a ninguno de los Consejeros Electorales en las actividades institucionales, aclarando que en el mes de agosto de dos mil dieciséis, en una de las reuniones celebradas con sus homólogos, acordaron que se considerarían los elementos necesarios para que, en los meses que restaban de ese año, cada uno de los consejeros tuvieran oportunidad de acudir al menos a un curso, taller, y/o evento a los que fuesen convocados o invitados, entendidos estos como los que tienen implicaciones presupuestales (eventos fuera de la ciudad sede de este Instituto Electoral), sin limitación a la asistencia de los demás que estuvieran en aptitud de acudir, inclusive mediante sus propios medios.

En ese sentido, aduce que en lo que respecta a la solicitud de la quejosa, en la cual pide apoyo administrativo para acudir al evento relacionado con el Vigésimo Aniversario del *TEPJF*, se acordó en reunión de trabajo con los

Consejeros Electorales, que derivado de la situación presupuestal del Instituto, no se encontraban en condiciones de autorizar apoyos económico administrativos, haciéndole del conocimiento que en caso de desear asistir, estaba en libertad de hacerlo por sus propios medios.

Conforme a lo anterior, indica que es falso que la quejosa sea excluida de actividades relacionadas con el instituto, ya que no existe distinción o exclusión en el desarrollo de las funciones y atribuciones, siendo que todos los Consejeros Electorales en igualdad de circunstancias acudieron durante dos mil dieciséis, a un solo evento con excepción de ella y el Consejero Luis Carlos Santander Botello, debido a razones inherentes al cargo que desempeñan.

- El hecho número 31 refiere que es falso, siendo que, durante el proceso electoral, y en el caso concreto del dieciséis de febrero al quince de junio de dos mil dieciséis, los consejeros electorales (hombres y mujeres) contaron con un asesor cada uno, siendo el ciudadano Felipe de Jesús Sánchez Sansores quien fungió con tal carácter respecto de la quejosa, quien fue seleccionado por ella, siendo que de manera permanente, todos los consejeros cuentan con apoyo secretarial, en este sentido existiendo el dolo y la mala fe de la actora al afirmar que no cuenta con “ningún tipo de apoyo directo de la suscrita y por área técnica...”. En este sentido, adjunta copia certificada de los contratos de prestación de servicios del ciudadano Alejandro Brito Soberanis quien de igual forma, fungió como asesor de la quejosa, desde noviembre de dos mil dieciséis a marzo de dos mil diecisiete, lo cual afirma la falsedad de sus declaraciones. Por cuanto a que el primero de mayo y hasta la presente fecha, la ciudadana Martha Patricia Villar Peguero se encuentra adscrita a la oficina de la actora, acreditado con copia certificada del contrato de prestación de servicios correspondientes. Asimismo, manifiesta que las y los consejeros electorales de manera indistinta, han elegido a su asesor derivado de la suficiencia presupuestal del Instituto, destacando que en todo caso, que la denunciante desde el mes de noviembre del dos mil dieciséis contó con el apoyo del asesor Alejandro Brito; siendo que los consejeros Thalía Hernández Robledo y Luis Carlos Santander Botello hicieron uso de ese derecho hasta el mes de enero del dos mil diecisiete.

- El hecho número 32, en el cual la quejosa aduce su oficio CE/CCG/55/16, relativo a una solicitud para que por medio de la suscrita se instruyera al Director de Organización para que le proporcionara información por ella solicitada en la Sesión del Consejo General de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, manifiesta que es falso, toda vez que la petición de información a que refiérela quejosa, fue atendida por el Secretario General del Instituto, mediante oficio SG/879/16, del ocho de agosto de dos mil dieciséis, por lo cual el Director de Organización del Instituto, el trece de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio DO/258/2016, le refiere a la denunciante la atención dado por parte del Secretario General.

Por cuanto a los “nuevos hechos” que refiere la quejosa, la suscrita refiere que:

A. Hechos señalados en el oficio CE/CCG/096/16

- En lo relativo a su dicho en el inciso a) la denunciante, refiere que ya ha acreditado que su oficio ha sido respondido el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio PRE/822/2016, por lo que escapa de lógica y razón que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis haya continuado afirmando que no se le dio contestación, y al mismo tiempo haga referencia al oficio de respuesta, lo cual evidencia frivolidad y dolo de sus señalamientos.
- En razón al inciso b) del oficio CE/CCG/096/16, manifiesta que es falsa y dolosa la connotación que pretende darle la quejosa, respecto a que el tema en comento haya sido propuesto previamente por la quejosa a la denunciada en su oficina y que fue idea de la actora la implementación del Observatorio, pues el mismo, es una iniciativa que surgió a nivel nacional a través del INMUJERES, del *INE* y el *TEPJF*, habiéndose signado el convenio que le dio origen el quince de octubre de dos mil catorce, por lo que es falso el señalamiento de que fue idea de la denunciante, que la implementación de dicho Observatorio en la entidad, en la inteligencia de que es un tema de relevancia nacional y de interés general, asimismo manifiesta que es falso, que le haya negado la información solicitada en el oficio CE/CCG/088/16 signada por la actora, pues le compartió, entre otros temas, gestiones que se estaban realizando con personal del InMujeres para la implementación del Observatorio de Participación Política de la Mujer en Quintana Roo, inclusive

en dicho oficio se observa que la quejosa es quien obstaculiza el desempeño de las funciones de la denunciada a su decir, al exigir que se le otorguen los datos de las personas InMujeres y del *INE* con quien la denunciada estableció contacto para la implementación del observatorio, señalando que si ella realiza las gestiones, el tema podría ser abordado *“con mayor amplitud el tema que la exponente podría explicar podría explicar o proponer”* denostando con ello las gestiones realizadas por la denunciada.

- Por cuanto al inciso c), es falso y doloso, en razón de que, la determinación de qué consejero acude a qué evento se dio de manera consensuada en reunión privada entre todos, siendo que para el caso particular del evento en la Ciudad de Guanajuato que la quejosa refiere, no fue para excluir, sino que por lo ya consensuado, y atendiendo a que la denunciante ya había acudido solo ella, a un evento los días treinta y uno de agosto al dos de septiembre de dos mil dieciséis, denominado “2006-2016 Balance y Perspectivas de la Justicia Electoral en México”, llevado a cabo en Veracruz, Veracruz, por tanto, se destaca la frivolidad de los señalamientos de la quejosa.
- Por cuanto hace, a lo que la quejosa refiere de ser “excluida” de una reunión con relación al tema del Servicio Profesional Electoral Nacional, ello sin precisar circunstancia de tiempo, modo y lugar, y a la que, según su dicho, la suscrita privilegió al consejero Juan Manuel Pérez Alpuche para asistir y no se le tomó en cuenta a ella como integrante de la Comisión del Servicio; manifiesta, que es falso, en el sentido de suponer sin conceder que se refiera a una reunión llevada a cabo el dos de septiembre de dos mil dieciséis, convocada por el *INE*, se remite a lo señalado por Jorge Armando Poot Pech quien, en la sesión del Consejo General de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, explicó las circunstancias que suscitaron para que acudiera el Consejero Pérez Alpuche, visible en la página 95 del Acta de Sesión en comento, ubicado en foja 1054.
- En cuanto al inciso d), relativo a que, según la quejosa, es la consejera que “menos ha viaticado” lo que desde su percepción es una exclusión y desventaja hacia ella, manifiesta que es falso y frívolo su señalamiento, en razón de que, conforme al cuadro de viáticos y pasajes en lo que va de su encargo le han sido proporcionados por esos conceptos la cantidad de \$116,805.42, por tanto se observa inexistente la desproporción o

“desventaja” que la quejosa pretende hacer valer entre el porcentaje de recursos por viáticos y pasajes que le han sido proporcionados, en relación con la denunciada y los demás consejeros electorales.

- Respecto al inciso e), relativo a que supuestamente no fue informada la quejosa respecto de un evento de entrega de material de apoyo al H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco, Quintana Roo, manifiesta que mediante oficio DO/289/2016 signado por el Director de Administración del Instituto, dirigido a la denunciante, se explica a la actora las circunstancias particulares de la entrega del material aludido, señalando que fue la Consejera Thalía Hernández Robledo en su calidad de Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística de este Instituto, quien se apersonó a los cubículos de cada consejera y consejero para comunicarles e invitarles a participar de la actividad en comento.

B. Hechos señalados en el oficio 027/2017

- En razón a los señalamientos de la quejosa en dicho oficio, la suscrita refiere que son dolosos, falsos o frívolos por cuanto al contexto que pretende dar, siendo que parte de interpretaciones subjetivas y a modo de hacer valer una supuesta violencia de género en su contra, al afirmar que la suscrita en su carácter de Presidenta privilegio la participación de consejeros electorales hombre en “diversas” reuniones nacionales, sin precisar qué reuniones se refiere, confirmando la falsedad de sus acusaciones al no existir la reunión del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis que aduce, ya que suponiendo sin conceder, es contradictorio y miente deliberadamente al decir que se enteró de dicha reunión el veintiséis de octubre del mismo año en la Sesión de la Comisión del Servicio Profesional de la que la quejosa forma parte, ya que la reunión, sobre el tema del SPEN con personal del *INE* a la que acudió Juan Manuel Pérez Alpuche fue el dos de septiembre de esa anualidad, y sobre ésta el Consejero Jorge Armando Poor Pech informó en la Sesión del Consejo General de veintinueve de septiembre siguiente, en el cual la quejosa estuvo presente, reiterando que en todo caso, fue una reunión convocada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del *INE*, y a la que expresamente convocaban al Presidente de la Comisión del Servicio del *OPLE* y al órgano de enlace.

- Siendo que no existió ocultamiento de información respecto del oficio INE/DESPEN/2777/2016, con que la autoridad comicial nacional convocó a reunión específicamente a la suscrita “...*junto con el Presidente de la Comisión de Seguimiento Permanente al Servicio y el Titular del Órgano de Enlace en la materia...*” por lo que se descarta su pretensión, por acatar una instrucción recibida de la *DESPEN*, se haya actuado en perjuicio de su persona, y más irracional e ilógica resulta su apreciación de que, tenga que ver por su condición de mujer.

C. Hechos señalados en el oficio CE/CCG/32/2017

- Por cuanto a que supuestamente fue excluida de una compensación de diez mil pesos otorgada por trabajos extraordinarios, manifiesta que, se informó que la entrega de los estímulos al personal que labora en el Instituto se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 y 29, fracción XIII de la Ley Orgánica del *IEQROO*, no existiendo un criterio de exclusión hacia la quejosa y menos por su condición de ser mujer, ya que mediante oficio PRE/074/2017, en uso de sus atribuciones instruyó al área técnica correspondiente para que les fuera otorgado dicho estímulo a todos las y los consejeros electorales, resultando que el requerimiento efectuado por esta autoridad sancionadora, al Director de Administración de este Instituto, se advirtió que el referido estímulo no le fue entregado a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ni al Consejero Luis Carlos Santander Botello, desprendiéndose del informe rendido al efecto por dicho Director que ese hecho devino de un inconsistencia de carácter eminentemente administrativo; asimismo, refiere que no existe tal exclusión, pues en el mes de diciembre de dieciséis, fue entregado por igual a todos los consejeros un Estímulo Anual por la cantidad de \$33,000.00

ANEXO 2

RELACIÓN DE PRUEBAS

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
1.	Original y Copa simple , de la queja presentada por Claudia Carrillo Gasca, de cinco de septiembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 30-81 Anexo 1, Foja 1-52	Claudia Carrillo Gasca
2.	Copia simple , del nombramiento como Consejera Electoral de Quintana Roo de Claudia Carrillo Gasca, de tres de noviembre de dos mil quince.	Legajo 1, Foja 82 Anexo 1, Foja 54	Claudia Carrillo Gasca. Claudia Carrillo Gasca
3.	Copia simple y certificada , de la aceptación y protesta del cargo como Consejera Electoral de tres de noviembre de dos mil quince.	Legajo 1, Foja 83-118 Legajo 7, Foja 4709-4743 Anexo 1, foja 55-91	Claudia Carrillo Gasca Juan Alberto Manzanilla Lagos Claudia Carrillo Gasca
4.	Copia simple , de la carta de renuncia de Claudia Carrillo Gasca, dirigida al Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, Procurador General de Justicia del Estado.	Legajo 1, Foja 119 Anexo 1, foja 90	Claudia Carrillo Gasca
5.	Copia certificada y simple , de las cartas de recomendación suscritas por Luis Montufar Bailón y Julio Cesar Duarte Herrera a favor de Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 1, Foja 120-121 Anexo 1, Foja 92 Anexo 1, Foja 91	Claudia Carrillo Gasca.

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
6.	Copia certificada y simple , de la carta de no antecedentes penales de Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 1, Foja 122 Anexo 1, Fojas 93	Claudia Carrillo Gasca
7.	Copia certificada y simple , del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> de treinta de abril de dos mil dieciséis, celebrada a las 11:00 horas.	Legajo 1, Foja 123-160 Anexo 1, Foja 94 Legajo 7, Foja 5085-5122 Anexo 4, Foja 1523-1560	Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca Armando Miguel Palomo Gómez Armando Miguel Palomo Gómez
8.	Copia certificada y simple , del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> de dos de junio de dos mil dieciséis, celebrada a las 19:00 horas.	Legajo 1, Foja 161-193 Anexo 1, Foja 132 Legajo 7, Foja 4744-4776	Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca Juan Alberto Manzanilla Lagos
9.	Copia certificada y simple , del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> . de catorce de mayo de dos mil dieciséis, celebrada a las 19:00 horas.	Legajo 1, Foja 194-217 Anexo 1, Foja 165-188	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
10.	Copia certificada y simple , del acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de treinta de junio de dos mil dieciséis, celebrada a las 19:00 horas.	Legajo 1, Foja 218-257 Legajo 7, Foja 4777-4816 Anexo 1, Foja 189-228 Anexo 4, Foja 1917-1954	Claudia Carrillo Gasca Juan Alberto Manzanilla Lagos Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina
11.	Copia certificada y simple , del acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, celebrada a las 13:00 horas.	Legajo 1, Foja 258-300 Anexo 1, 229-271 Legajo 7, Foja 4817-4859 Legajo 7, Foja 4887-4928 Legajo 7, Foja 5042-5084	Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca Juan Alberto Manzanilla Lagos Mauricio Morales Beiza Armando Miguel Palomo Gómez

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
12.	Copia simple y certificada , del oficio CCG/029/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo diversas acciones para erradicar la violencia política de género.	Legajo 1, Foja 301-302 Anexo 1, Foja 272 Legajo 4, Foja 2946-2947	Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina
13.	Copia simple , del oficio CE/CCG/046/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual solicita se investiguen diversos hechos al Subdelegado de la Procuraduría General de la República en Chetumal, Quintana Roo.	Legajo 1, Foja 303-305 Anexo 1, Foja 274-275	Claudia Carrillo Gasca.
14.	Copia simple , del oficio CCG/028/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo sea tomada en consideración en diversas actividades en Cancún, Quintana Roo.	Legajo 1, Foja 306 Anexo 1, Foja 277	Claudia Carrillo Gasca
15.	Copia simple , del oficio PRE/511/2016, de once de mayo de dos dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, a través del cual da contestación a Claudia Carrillo Gasca de las diversas actividades en Cancún, Quintana Roo.	Legajo 1, Foja 307 Anexo 1, Foja 278	Claudia Carrillo Gasca
16.	Copia simple , del oficio UTCS/306/16, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, a través del cual envía el audio de la entrevista de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 1, Foja 308 Anexo 1, Foja 279	Claudia Carrillo Gasca
17.	Copia simple , del oficio CE/CCG/052/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Alfredo Figueroa Orea el audio de la entrevista de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 309 Anexo 4, Foja 1889	Claudia Carrillo Gasca José Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
18.	Copia simple , del oficio CE/CCG/043/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo le sea tomada en consideración al aniversario del <i>TEPJF</i> en la Ciudad de México.	Legajo 1, Foja 310	Claudia Carrillo Gasca
19.	Copia simple y certificada , del oficio CE/CCG/043/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo le sea tomada en consideración al aniversario del <i>TEPJF</i> en la Ciudad de México.	Anexo 1, Foja 281 Legajo 4, Foja 2976	Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina
20.	Copia simple , del oficio CE/CCG/055/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual solicita a Mayra San Román Carrillo instruya a Luis Alberto Alcocer Anguiano para que conteste diversos cuestionamientos.	Legajo 1, Foja 311 Anexo 1, Foja 282	Claudia Carrillo Gasca
21.	Copia simple y certificada , del oficio PRE/736/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, a través del cual da contestación al oficio CE/CCG/045/2016, en relación a diversas preguntas realizadas por Claudia Carrillo Gasca, respecto a la lista nominal.	Legajo 1, Foja 312-313 Anexo 1, Foja 283-284 Legajo 4, Foja 2973-2974	Claudia Carrillo Gasca. Claudia Carrillo Gasca. Mayra San Román Carrillo Medina
22.	Copia simple , del oficio CE/CCG/045/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual realiza diversas preguntas a Mayra San Román Carrillo sobre la captura de las listas nominales de electores.	Legajo 1, Foja 314-319 Legajo 5, Foja 3468-3474 Anexo 1, Foja 285-290	Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
23.	Copia simple , del oficio CE/CCG/048/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido al Subdelegado de la PGR de Chetumal, Quintana Roo, a través del cual amplía hechos de las listas nominales.	Legajo 1, Foja 320-322 Anexo 1, Foja 291-293	Claudia Carrillo Gasca.
24.	Copia simple , del oficio CE/SAD/044/2016, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, a través del cual informa sobre la captura de diversa información de la lista nominal.	Legajo 1, Foja 323 Legajo 5, Foja 3670 Anexo 1, Foja 294	Claudia Carrillo Gasca. Sergio Avilés Demeneghi Claudia Carrillo Gasca
25.	Copia simple , del oficio CE/LCSB/045/16, suscrito por Luis Carlos Santander Botello, por el cual le solicita a Mayra San Román Carrillo, rinda informe sobre la captura de las listas nominales.	Legajo 1, Foja 324-330 Anexo 1, Foja 295-296	Claudia Carrillo Gasca.
26.	Original y copia simple , del escrito de Cinthya Yamile Millan Estrella, representante del PAN, dirigido al Consejo General del IEQROO, de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el cual solicita se le informe sobre la captura de las listas nominales.	Legajo 1, Foja 326 Anexo 1, Foja 297	Claudia Carrillo Gasca. Claudia Carrillo Gasca
27.	Original , del escrito de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General del IEQROO, en razón al requerimiento de información, formulado mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el oficio SG/964/2016.	Legajo 1, Foja 373-379	Juan Enrique Serrano Peraza
28.	Copia certificada , del orden del día, de la única sesión extraordinaria del Consejo General del IEQROO de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, celebrada a las 11:00 horas.	Legajo 1, Foja 380 Legajo 1, Foja 402-427	Juan Enrique Serrano Peraza Juan Enrique Serrano Peraza

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
29.	Disco compacto , del audio de la acta de sesión extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, foja 395-396	Juan Enrique Serrano Peraza
30.	Disco compacto , del video de la acta de sesión extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, foja 397-398	Juan Enrique Serrano Peraza
31.	Copia certificada , del acuerdo <i>IEQROO/CG/A-027-14</i> , a través del cual se crea la Comisión Transitoria de Igualdad entre mujeres y hombres del Instituto.	Legajo 1, Foja 381-394 Legajo 2, Foja 773-786 Legajo 2, Foja 787-796	Juan Enrique Serrano Peraza Claudia Ávila Graham Claudia Ávila Graham
32.	Original , del escrito de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General del <i>IEQROO</i> , a través del oficio <i>SG/969/2016</i> , en relación al acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, foja 400	Juan Enrique Serrano Peraza
33.	Disco compacto , el cual contiene notas periodísticas de noviembre de 2015 a septiembre de 2016.	Legajo 1, Foja 431	Alfredo Figueroa Orea
34.	Original , del escrito de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral de QROO, mediante el oficio <i>UTCS/357/2016</i> , en relación al acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 432-435	Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
35.	Copia certificada , del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 436-543 Legajo 1, Foja 595-697 Legajo 2, Foja 960-1061 Legajo 1, Foja 735-745	Alfredo Figueroa Orea Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina
36.	Copia certificada , del acta de sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1118-1220 Anexo 4, Foja 1643-1745 Anexo 5, Foja 3032-3134 Legajo 7, Foja 4983-4993	Juan Enrique Serrano Peraza Sergio Avilés Demeneghi Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
37.	Copia certificada , de las imágenes de capturas de pantalla de correo electrónico.	Legajo 1, Fojas 544-553	Alfredo Figueroa Orea
38.	Copia certificada , de la relación de notas periodísticas de los y las consejeras electorales, de noviembre de dos mil quince a septiembre de dos mil dieciséis, por la Unidad Técnica de Comunicación Social.	Legajo 1, Foja 554	Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
39.	Copia certificada , del contrato de prestaciones de servicios con <i>publicidad impresa del sureste</i> , de comunicación, celebrado por el IEQROO, representado por Mayra San Román Carrillo Medina.	Legajo 1, Foja 555-560	Alfredo Figueroa Orea
40.	Copia certificada , del contrato de prestaciones de servicios con <i>organización editorial del Caribe</i> , de comunicación, celebrado por el IEQROO, representado por Mayra San Román Carrillo Medina.	Legajo 1, 561-565	Alfredo Figueroa Orea
41.	Copia certificada , del contrato de prestaciones de servicios con <i>operadora people</i> , de comunicación, celebrado por el IEQROO, representado por Mayra San Román Carrillo Medina.	Legajo 1, Foja 566-570	Alfredo Figueroa Orea
42.	Copia certificada , del contrato de prestaciones de servicios con <i>organización editorial millastro</i> , de comunicación, celebrado por el IEQROO, representado por Mayra San Román Carrillo Medina.	Legajo 1, Foja 571-576	Alfredo Figueroa Orea
43.	Copia certificada , del contrato de prestaciones de servicios con <i>compañía editorial del sureste</i> , de comunicación, celebrado por el IEQROO, representado por Mayra San Román Carrillo Medina.	Legajo 1, Foja 577-581	Alfredo Figueroa Orea
44.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO, a través del oficio PRE/825/2016, en relación al acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 585-594	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
45.	Copia certificada y simple , del oficio UTCS/284/16, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa sobre las actividades de promoción de las campañas y prevención de delitos electorales.	Legajo 1, Foja 698-699 Legajo 2, Foja 954 Legajo 4, Foja 2952-2953 Anexo 4, Foja 1805-1806	Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina José Alfredo Figueroa Orea
46.	Copia certificada y simple , del programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomento a la participación ciudadana. Celebrado por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.	Legajo 1, Foja 701-712 Legajo 2, Foja 942-953	Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Carrillo Gasca
47.	Copias Certificadas , de los oficios suscritos por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales les envía un ejemplar del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, entre ellos, está dirigido a Claudia Carrillo Gasca, mediante oficio PRE/737/2016, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 713-719 Anexo 5, Fojas 3014-3019 Legajo 4, Fojas 2955-2960	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
48.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Claudia Ávila Graham, Jefa de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, dirigido a diversos funcionarios del referido Instituto, a través de los cuales solicita apoyo, para la realización de actividades vinculadas con la comisión transitoria de igualdad entre mujeres y hombres y el día internacional de la mujer.	Legajo 1, Foja 720-722 Legajo 4, Fojas 2962-2963 Legajo 2, Foja 904-926	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Ávila Graham
49.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigidos a los Consejeros Electorales, para la realización de actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la Mujer.	Legajo 1, Foja 723-726	Mayra San Román Carrillo Medina
50.	Copia certificada y simple , del oficio CE/CCG/059/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, a través del cual le recuerda la falta de contestación.	Legajo 1, Foja 727-730 Legajo 2, Foja 937-938 Legajo 4, Foja 2969	Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina
51.	Copia certificada , del correo electrónico de confirmación de asistencia de Paula Adriana Soto Maldonado.	Legajo 1, Foja 729	Mayra San Román Carrillo Medina
52.	Copia certificada y simple , del oficio PRE/822/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual le contesta diversos requerimientos de información.	Legajo 1, Foja 731-733 Legajo 2, Foja 939-941 Legajo 4, Foja 2948-2950	Mayra San Román Carrillo Medina Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
53.	Copia simple , del oficio PRE/821/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo, dirigido a Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a través del cual solicita la información relativa a los sistemas que se utilizaron durante las elecciones.	Legajo 1, Foja 746-748	Mayra San Román Carrillo Medina
54.	Original , del escrito de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del Organismo Público Local Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CIE/189/16, en relación al acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 1, Foja 761-765	Claudia Ávila Graham
55.	Copia certificada , del proyecto de acta de la sesión del Consejo General, de catorce de julio de dos mil quince, aprobando el Programa de Actividades de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 2, Foja 766-772	Claudia Ávila Graham
56.	Copia certificada , del proyecto de acta de la sesión ampliada de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de quince de julio de dos mil dieciséis.	Legajo 2, Foja 797-811 Legajo 4, Foja 2930-2944	Claudia Ávila Graham Mayra San Román Carrillo Medina
57.	Copia certificada , del informe de los resultados de participación de las mujeres y hombres en el proceso electoral ordinario 2016 en Quintana Roo.	Legajo 2, Foja 812-852	Claudia Ávila Graham
58.	Copia certificada , del informe de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral y Transparencia, en relación al tema de Igualdad entre Hombres y Mujeres, del periodo de Octubre de 2015 a Octubre de 2016.	Legajo 2, Foja 853-876	Claudia Ávila Graham

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
59.	Copia certificada , del acta de sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 2, Foja 877-901 Legajo 4, Foja 2905-2929	Claudia Ávila Graham Mayra San Román Carrillo Medina
60.	Copia certificada , del acta de sesión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 4, Foja 2838-2852	Mayra San Román Carrillo Medina
61.	Copia certificada , del oficio PRE/750/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, dirigido a Adín Antonio de León Gálvez, Magistrado de la Sala Regional Xalapa, a través del cual se le invita a evento.	Legajo 2, Foja 902-903	Claudia Ávila Graham
62.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, a través del oficio CE/CCG/096/16, mediante el cual hace del conocimiento a esta autoridad de nuevos hechos y pruebas.	Legajo 2, Foja 927-934	Claudia Carrillo Gasca
63.	Copia simple , del oficio PRE/767/2016 suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, respecto a la invitación del aniversario al Voto de la Mujer en México.	Legajo 2, Foja 938	Claudia Carrillo Gasca
64.	Copia simple , del oficio PRE/027/2016, de siete de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigido a los Consejeros Electorales, a través del cual se les convoca a reunión de trabajo.	Legajo 2, Foja 956	Claudia Carrillo Gasca
65.	Copia simple , del oficio CE/CCG/088/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, a través del cual le solicita realizar un observatorio de género.	Legajo 2, Foja 957	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
66.	Copia simple , del oficio PRE/834/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través le contesta oficio sobre la petición del observatorio de género.	Legajo 2, Foja 958	Claudia Carrillo Gasca
67.	Copia simple , del oficio CE/CCG/090/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían López, a través del cual le informa que asistirá a Congreso Nacional de Estudios Electorales.	Legajo 2, Foja 959	Claudia Carrillo Gasca
68.	Copia simple y certificada , del oficio CE/CCG/085/16, de siete de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización, a través del cual se le informe sobre diversos boletines electorales.	Legajo 2, Foja 1062-1063 Legajo 7, Foja 4868-4869	Claudia Carrillo Gasca Luis Alberto Alcocer Anguiano
69.	Copia Certificada y simple , del oficio DO/289/2016, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en contestación al oficio CE/CCG/085/16 de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Consejo General de IEQROO, a través del cual se le informa sobre diversos boletines electorales, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización, dirigido a Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 2, Foja 1064-1066 Legajo 7, Foja 4864-4865 Legajo 7, Fojas 5027-5028	Claudia Carrillo Gasca Luis Alberto Alcocer Anguiano San Román Carrillo Medina
70.	Copia simple , del oficio CE/CCG/094/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían, Director de Administración, a través del cual solicita información sobre viáticos.	Legajo 2, Foja 1067	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
71.	Copia simple , del oficio DAP/519/2016, de veinte dos de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual se le informa sobre viáticos.	Legajo 2, Foja 1068	Claudia Carrillo Gasca
72.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> , en atención al emplazamiento de diez de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 3, Foja 1685-1694	Thalía Hernández Robledo
73.	Copia certificada , de las pruebas de las notas periodísticas, ofrecidas por Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> .	Legajo 3, Foja 1695-1705	Thalía Hernández Robledo
74.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , en atención al emplazamiento de diez de enero de dos mil diecisiete, a través de oficio PRE/016/2016.	Legajo 3, Foja 1706-1748	Mayra San Román Carrillo Medina
75.	Original , del escrito del Maestro Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , mediante el oficio PRE/016/2016, en atención al emplazamiento de diez de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 3, Foja 1755-1760	Juan Manuel Pérez Alpuche
76.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Consejo General del <i>IEQROO</i> , en el cual ofrece nuevas pruebas, mediante oficio CE/CCG/002/17, presentado el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 3, Foja 1761-1764	Claudia Carrillo Gasca
77.	Copia certificada , del proyecto de acta de sesión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, de nueve de diciembre del dos mil dieciséis.	Legajo 3, Foja 1765-1778 Legajo 4, Foja 2859-2872	Claudia Carrillo Gasca Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
78.	Copia certificada , del informe de actividades de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del periodo de noviembre de 2015- octubre de 2016.	Legajo 3, Foja 1779-1804	Claudia Carrillo Gasca
79.	Copia certificada , del boletín personal del <i>IEQROO</i> y del <i>TEQROO</i> , en razón a que reciben curso de Procedimientos Especiales Sancionadores, con sus respectivas notas periodísticas de dicho evento.	Legajo 3, Foja 1828-1831	Mayra San Román Carrillo Medina
80.	Copia certificada , del boletín del <i>IEQROO</i> inauguró la primera semana de derecho electoral, con sus respectivas notas periodísticas de dicho evento.	Legajo 3, Foja 1832-1836	Mayra San Román Carrillo Medina
81.	Original y copia certificada , de la contestación, de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, a través del oficio PRE/815/2016, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictado en autos del expediente UT/SCG/CA/CCG/CG/84/2016.	Legajo 3, Foja 1837-1853 Anexo 4, foja 1777-1792	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
82.	Copia certificada , de los escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a las reuniones formales de trabajo de 30 de noviembre; 07, 14, 21 y 28 de diciembre de dos mil quince; 18 y 28 de enero; 05, 23 y 26 de febrero; 02, 06, 09, 11, 14, 21 y 28 de marzo; 06 y 29 de abril; 09, 18, 24 y 25 de mayo; 29 de junio; 13 de julio de dos mil dieciséis.	Legajo 3, Fojas 1855-2236 Anexo 5, Fojas 2785-2928	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
83.	Copia certificada , del convenio de colaboración que celebran el <i>IEQROO</i> y el <i>TEQROO</i> , respecto el Procedimiento Especial Sancionador.	Legajo 3, Foja 2238-2245 Anexo 3, Foja 1052-1059 Anexo 3, Foja 1352-1359	Mayra San Román Carrillo Medina Juan Enrique Serrano Peraza Víctor Venamir Vivas Vivas
84.	Copia certificada , del acuerdo IEQROO/CG-A-231-16, del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se integra el Comité de Transparencia.	Legajo 3, Foja 2247-2261	Mayra San Román Carrillo Medina
85.	Copia certificada , de las actas Circunstanciadas sobre la instalación de los Consejos Distritales.	Legajo 3, Fojas 2263-2356	Mayra San Román Carrillo Medina
86.	Copia certificada , del informe de la Dirección de Organización sobre el Procedimiento de Localización de las sedes de los Consejos Distritales y Municipales del <i>IEQROO</i> , para el proceso electoral local 2016.	Legajo 3, Foja 2357-2359 Anexo 4, Foja 1972-1974	Mayra San Román Carrillo Medina
87.	Copia certificada , de inmuebles seleccionados y aprobados por la Comisión de Organización y los demás integrantes del Consejo General, que funcionarán como sedes de los consejos distritales y municipales y Actas Circunstanciadas.	Legajo 3, Foja 2361-2414 Anexo 4, Foja 1976-2029	Mayra San Román Carrillo Medina
88.	Disco compacto , que contiene imágenes donde se aprecia la participación de la Consejera en alusión de dichas actividades y otras propias del proceso electoral local 2016.	Legajo 4, Foja 2416	Mayra San Román Carrillo Medina
89.	Discos compactos , que contienen videos de las entrevistas que dicha Consejera realizó, de acuerdo al cronograma que al efecto se determinó.	Legajo 4, Foja 2418	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
90.	Copia certificada , de la lista de entrega de diversas Actas Circunstanciadas	Anexo 4, Foja 2154	Mayra San Román Carrillo Medina
91.	Copia certificada , del acta circunstanciada de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, de verificación de las boletas electorales y las actas correspondientes a las elecciones a Gobernador y Ayuntamientos.	Legajo 4, Foja 2420-2423	Mayra San Román Carrillo Medina
92.	Copia certificada , del acta circunstanciada de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en la Bodega Central de la documentación electoral correspondiente a boletas, actas y formatos varios.	Legajo 4, Foja 2425-2428	Mayra San Román Carrillo Medina
93.	Copia certificada , de diversos boletines oficiales.	Anexo 4, Fojas 2158-2238	Mayra San Román Carrillo Medina
94.	Copia certificada , de diversa evidencia fotográfica difundida en redes sociales institucionales, donde consta la participación de la consejera, en la cuenta oficial de Twitter del <i>IEQROO</i> .	Legajo 4, Fojas 2430-2460 Anexo 4, Fojas 2241-2283	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
95.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/001/16, de cinco de enero de dos mil dieciséis, a razón de Asistir a las Instalaciones del Consejo Municipal de Puerto Morelos.	Legajo 4, Fojas 2462-2465 Anexo 4, Foja 2285	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
96.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/002/16, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a razón de Recordatorio para determinar las sedes de los consejos distritales y municipales.	Legajo 4, Fojas 2466-2469	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
97.	Copia certificada , del oficio CCG/22/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían López, a través del cual solicita viáticos para la visita a las empresas encargadas de la impresión y producción de la documentación y material electoral y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2304-2306 Mayra	Mayra San Román Carrillo Medina
98.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/11/16, de siete de marzo de dos mil dieciséis, a razón de asistir a reuniones de trabajo con la Coparmex y los medios de comunicación	Legajo 4, Fojas 2472-2475 Anexo 4, Fojas 2294-2295	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
99.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/13/16, de quince de marzo de dos mil dieciséis, a razón de la Realización de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de consejeros y vocales de los consejeros distritales y municipales del IEQROO, del proceso electoral local ordinario 2016	Legajo 4, Fojas 2476-2479 Anexo 4, Foja 2300 Legajo 4, Fojas 2296 Anexo 4, Fojas 2296-2300	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
100.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio sin número, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, a razón de acudir a las instalaciones de los consejos distritales de Instituto	Legajo 4, Fojas 2480-2483	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
101.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/30/16, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, a razón de asistir a la entrega del papel tortilla para la promoción del voto, para las elecciones ordinarias 2016	Legajo 4, Fojas 2486-2489	Mayra San Román Carrillo Medina
102.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio sin número, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a razón de asistir a la unidad Intercultural maya, para entregar material de difusión de la promoción al voto	Legajo 4, fojas 2490-2493	Mayra San Román Carrillo Medina
103.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio sin número, de veinte de mayo de dos mil dieciséis, a razón de asistir al Instituto Tecnológico, para entregar material de difusión de la promoción al voto.	Legajo 4, 2494-2497	Mayra San Román Carrillo Medina
104.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/10/16, de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, a razón de asistencia a la primera reunión de Coordinación con los Organismo Públicos Locales de las trece Entidades Federativas que celebran elecciones locales durante el 2016.	Legajo 4, Foja 2470-2471 Anexo 4, Fojas 2291-2292	Mayra San Román Carrillo Medina
105.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/22/16, de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, a razón de visitas de verificación a las empresas encargadas de la impresión y producción de la documentación y material electoral para el proceso electoral local ordinario 2016.	Legajo 4, foja 2484-2485	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
106.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio sin número, sin fecha, a razón de Realizar la verificación y visto nuevo de la documentación definitiva para gobernador y ayuntamientos en las empresas que ganaron la licitación.	anexo 4, foja 2306	Claudia Carrillo Gasca
107.	Copia certificada , del oficio CE/CCG/033/16, de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían López, a través del cual solicita viáticos para viajar a la zona Norte del Estado de Quintana Roo y transferencia bancaria, a razón de Recorrido de la entrega de paquetes electorales a los Consejos Distritales y Municipales del Estado de Quintana Roo, y entrega de papel tortilla en pro de la promoción del voto para el proceso electoral ordinario 2016.	Anexo 4, Foja 2307-2309	Mayra San Román Carrillo Medina
108.	Copia certificada , de la transferencia bancaria a la cuenta de Claudia Carrillo Gasca, a efecto de viáticos, mediante oficio CCG/054/16, de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, a razón de asistencia al evento que organiza la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación.	Legajo 4, foja 2500-2501 Anexo 4, Foja 2310	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
109.	Copia certificada , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían López, a través del cual solicita viáticos para asistir a la instalación de los Consejos en los Municipios de Bacalar y otros y transferencia bancaria.	Anexo 4, Fojas 2301-2303	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
110.	Copia certificada , de diversos correos electrónicos enviados por Patricia Cortés, Secretaria Particular de la Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales, entre ellos la Consejera Electoral, Claudia Carrillo, a través de los cuales les informan o invitan a actividades de dicho Instituto.	Legajo 4, Fojas 2503-2558 Anexo 4, Fojas 2311-2344	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
111.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Jorge Armando Poot Pech, Presidente de la Comisión de Administración y Planeación del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los funcionarios, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Legajo 4, Fojas 2560-2644 Anexo 5, Fojas 2988-2994	Mayra San Román Carrillo Medina Mayra San Román Carrillo Medina
112.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Thalía Hernández Robledo, Presidente de la comisión de Organización del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les invita a reunión de trabajo.	Legajo 4, Fojas 2645-2674	Mayra San Román Carrillo Medina
113.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Sergio Avilés Demeneghi, Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Consejo General del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales a reuniones de trabajo y a sesiones de dicha Comisión.	Legajo 4, Fojas 2675-2778	Mayra San Román Carrillo Medina
114.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Luis Carlos Santander Botello, Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a las sesiones de dicha Comisión.	Legajo 4, Fojas 2779-2784	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
115.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les invita a reunión formal.	Legajo 4, Fojas 2785-2837	Mayra San Román Carrillo Medina
116.	Copia certificada , del acta de sesión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.	Legajo 4, Foja 2853-2858	Mayra San Román Carrillo Medina
117.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Claudia Carrillo Gasca, Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales convoca a sesión de dicha Comisión.	Legajo 4, Fojas 2873-2895	Mayra San Román Carrillo Medina
118.	Copia certificada , del acta de sesión de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 4, Foja 2896-2904	Mayra San Román Carrillo Medina
119.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les invita a la conmemoración del Voto de la Mujer.	Legajo 4, Fojas 2965-2967 Anexo 5, Fojas 3021-3030	Mayra San Román Carrillo Medina
120.	Copia certificada , del circular PRE/037/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo, dirigido al Contralor Interno, Secretario General, Directores y Jefes de Unidad, del <i>IEQROO</i> , a través del cual hace invitación a la Primera Reunión de Trabajo para la Conformación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo.	Legajo 4, Foja 2971	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
121.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , dirigidos a los Consejeros Electorales, Secretario General, Directores y Contralor Interno, a través de los cuales se les convoca a reunión y cursos.	Legajo 4, Fojas 2987-3008 Legajo 5, Fojas 3009-3045	Mayra San Román Carrillo Medina
122.	Copia certificada , del oficio CE/CCG/095/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> , dirigido a Mayra San Román Carrillo, a través del cual le invita a curso por el día internacional de la violencia contra la mujer.	Legajo 5, Foja 3047	Mayra San Román Carrillo Medina
123.	Copia certificada , del boletín oficial de noviembre de dos mil dieciséis y diversas notas periodísticas en las cuales constan actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.	legajo 5, fojas 3049-3053	Mayra San Román Carrillo Medina
124.	Copia certificada , del acuerdo IEQROO/CG/A-032-15, del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se modifica la integración de las comisiones permanentes, así como la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Consejo General.	Legajo 5, Foja 3055-3063 Anexo 3, Foja 1241-1249 Anexo 3, Foja 1509	Mayra San Román Carrillo Medina Juan Enrique Serrano Peraza Jorge Armando Poot Pech
125.	Copia certificada , del contrato individual de trabajo por prestación de servicios profesionales asalariados, por tiempo determinado, que celebran el <i>IEQROO</i> y el C. Felipe de Jesús Sánchez Sansores.	Legajo 5, Foja 3065-3070	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
126.	Copia certificada , del oficio CCG/012/16, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, en el que solicita asistencia a curso.	Legajo 5, Foja 3071	Mayra San Román Carrillo Medina
127.	Copia certificada , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, dirigido a Víctor Manuel Interían López, Director de Administración, a través del cual le solicita viáticos.	Legajo 5, Foja 3072-3074	Mayra San Román Carrillo Medina
128.	Copia certificada , del contrato por servicios profesionales por honorarios, por tiempo determinado, que celebran el IEQROO y el C. Alejandro Brito Soberanis.	Legajo 5, Foja 3075-3078 Legajo 7, Foja 4995-4999	Mayra San Román Carrillo Medina
129.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interían López, Director de Administración del IEQROO, mediante Oficio DAP/012/2017, a través del cual manifiesta la asignación de secretarías a los Consejeros Electorales.	Legajo 5, Foja 3080-3083	Mayra San Román Carrillo Medina
130.	Copia certificada , del oficio DO/258/2016 de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, en contestación al oficio CE/CCG/055/16 de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Consejo General de IEQROO, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización.	Legajo 5, Foja 3085 Legajo 7, Foja 4867	Mayra San Román Carrillo Medina Luis Alberto Alcocer Anguiano

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
131.	Copia certificada , del oficio CG/879/2016, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual el Secretario General del <i>IEQROO</i> , remitió a la consejera Claudia Carrillo Gasca un informe rendido por la Consejera Presidenta relacionado con diversos cuestionamientos efectuados por integrantes del Consejo General en la sesión de veintitrés de agosto del mismo año.	Legajo 5, foja 3086	Mayra San Román Carrillo Medina
132.	Copia simple , de la respuesta de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General, con oficio SG/905/2016, en atención al acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, del expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/30/2016.	Legajo 5, Foja 3093-3101	Juan Enrique Serrano Peraza
133.	Copia certificada , de la generación de estadísticas del proceso electoral local ordinario 2016.	Legajo 5, Foja 3102-3105	Juan Enrique Serrano Peraza
134.	Copia simple , del informe relativo a la generación de las estadísticas de participación ciudadana del proceso local ordinario 2016 en el Estado de Quintan Roo.	Legajo 5, Foja 3106-3112	Juan Enrique Serrano Peraza
135.	Copia simple , de la respuesta de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General, con oficio SG/907/2016, en atención al acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, del expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/30/2016.	Legajo 5, foja 3113-3116	Juan Enrique Serrano Peraza
136.	Copia simple , de la contestación a requerimiento de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, mediante oficio CE/CCG/063/16, en atención al acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, del expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/30/2016.	Legajo 5, foja 3117-3122	Claudia Carrillo Gasca
137.	Original , del escrito de Armando Miguel Palomo Gómez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PNA en Quintana Roo, en atención al acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3209	Armando Miguel Palomo Gómez

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
138.	Original , del escrito de Raymundo King de la Rosa, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, dirigido a Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo, en atención al acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3228	Raymundo King de la Rosa
139.	Copia certificada , del acuerdo de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido de la Revolucionario Institucional, de quince de noviembre de dos mil dieciséis.	Legajo 5, Foja 3231-3232	Raymundo King de la Rosa
140.	Copia certificada , de la acta de sesión extraordinaria de la Comisión Estatal de Justicia de la partida del Comité Directivo Estatal del <i>PRI</i> en Chetumal, Quintana Roo, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relacionada con el expediente UT/SCG/CA/CCG/CG/84/2016.	Legajo 5, Foja 3234-3236	Raymundo King de la Rosa
141.	Copia certificada , del escrito de Raymundo King de la Rosa, Presidente del Comité Directivo Estatal del <i>PRI</i> en Quintana Roo, dirigido a María Hadad Castillo, Presidenta de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria en el Estado de Quintana Roo, así como su contestación a esté.	Legajo 5, Foja 3238-3240	Raymundo King de la Rosa
142.	Original , del escrito de Yanely Vianey Cima Ku, Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado De Quintana Roo, Mediante oficio 14/2017, en atención al acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3241-3234	Yanely Vianey Cima Ku
143.	Original , del escrito de Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General del Estado en su carácter de Presidente del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, en relación a la averiguación previa 209/2014, en atención al acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3246-3272	Miguel Ángel Pech Cen

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
144.	Original , del escrito de Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado, en atención al acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3276	Carlos Alejandro Lima Carvajal
145.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, sobre nuevos hechos y pruebas, mediante oficio 027/2017.	Legajo 5, Foja 3293-3308	Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral
146.	Copia certificada , de la sesión de Comisión del Servicio Profesional Electoral del <i>IEQROO</i> , de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.	Legajo 5, Foja 3326-3348	Claudia Carrillo Gasca
147.	Copia certificada , de la sesión de Comisión del Servicio Profesional Electoral del <i>IEQROO</i> , de dos de febrero de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3349-3367	Claudia Carrillo Gasca
148.	Copia simple , del oficio OE/SPEN/018/2017, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del <i>IEQROO</i> , dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual envía copia de documento de trabajo.	Legajo 5, Foja 3368-3383	Claudia Carrillo Gasca
149.	Copia simple , del oficio CE/JAPP/014/2017, de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> .	Legajo 5, Foja 3384	Claudia Carrillo Gasca
150.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, de primero de marzo de dos mil diecisiete, sobre nuevos hechos y pruebas, mediante oficio CE/CCG/32/2017.	Legajo 5, Foja 3385-3387	Claudia Carrillo Gasca
151.	Copia simple , del estado de cuenta expedido por Bancomer, del periodo del primero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, a nombre del titular Sergio Avilés Demeneghi.	Legajo 5, Foja 3388-3392	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
152.	Copia simple , del estado de cuenta expedido de HSBC, del periodo del primero al veintinueve de febrero y del primero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.	Legajo 5, Foja 3393-3394	Claudia Carrillo Gasca
153.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Electoral del IEQROO, mediante oficio PRE/0063/2017, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3458-3459	Mayra San Román Carrillo Medina
154.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, mediante oficio CE/CCG/040/17, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3460-3465	Claudia Carrillo Gasca
155.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interían López, Director de Administración del IEQROO, mediante oficio DAP/083/2017, a través del cual da respuesta a la Consejera Claudia Carrillo, sobre el personal que tiene adscrito.	Legajo 5, Foja 3466-3467	Claudia Carrillo Gasca
156.	Original , del escrito de Luis Carlos Santander Botello, Consejera Electoral del IEQROO, mediante oficio CE/LCSB/006/17, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3475-3478	Luis Carlos Santander Botello
157.	Original , del escrito de José Antonio Nieto Bastida, Vice-Fiscal de la Zona Sur de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, mediante oficio FGE/DFG/1364/2017, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3479-3480	José Antonio Nieto Bastida
158.	Copia certificada , del acuerdo de averiguación previa PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014, de tres de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual se determinó dar inicio a la averiguación previa PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014	Legajo 5, Foja 3481-3482	José Antonio Nieto Bastida

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
159.	Copia certificada , del acuerdo de averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/AP/209/2014, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el ejercicio de la acción no penal a favor de la ciudadana Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 5, Foja 3488-3503	José Antonio Nieto Bastida
160.	Copia certificada , de la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/AP/209/2014, en el cual se confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal.	Legajo 5, Foja 3500-3503	José Antonio Nieto Bastida
161.	Copia certificada , de la averiguación previa PGJE/SPZN/DAJ/AP/209/2014.	Anexo 2, Fojas 417-545	José Antonio Nieto Bastida
162.	Original , del escrito de Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del PNA, ante el Consejo General del IEQROO, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3504-3505	Armando Miguel Palomo Gómez
163.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del IEQROO, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3506-3508	Thalía Hernández Robledo
164.	Copia simple , de la impresión de correo electrónico recibido el trece de diciembre de dos mil dieciséis.	Legajo 5, Foja 3509	Thalía Hernández Robledo
165.	Original , del escrito de Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del IEQROO, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3510-3513	Luis Alberto Alcocer Anguiano
166.	Copia certificada , del programa de actividades del Programa Anual Operativo 2016 de la Dirección de Organización IEQROO.	Legajo 5, Foja 3514-3517	Luis Alberto Alcocer Anguiano

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
167.	Copia certificada , del acuerdo del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se designa al ciudadano Luis Alberto Alcocer Anguiano, como Titular de la Dirección de Organización.	Legajo 5, Foja 3518-3528	Luis Alberto Alcocer Anguiano
168.	Copia certificada , de la minuta de trabajo de la Comisión Temporal para realización de la valoración curricular y entrevista o ratificación del secretario y titular de las direcciones y unidades técnicas del <i>IEQROO</i> .	Legajo 5, Foja 3529-3556	Luis Alberto Alcocer Anguiano
169.	Copia certificada , del acuerdo <i>IEQROO/CGA/A-030-15</i> del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se aprueba el programa operativo anual de actividades, correspondiente al ejercicio del año 2016, suscrito por el Jorge Manríquez Centeno, Consejero Presidente, y Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General.	Legajo 5, Foja 3557-3618	Luis Alberto Alcocer Anguiano
170.	Original , del escrito de Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , mediante Oficio CE/JAPP/015/2017, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3619-3621	Jorge Armando Poot Pech
171.	Copia certificada , del acuerdo <i>IEQROO/CG/A-226/16</i> , del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se determina la creación de la Comisión de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General, de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.	Legajo 5, Foja 3622-3627 Anexo 3, Foja 1250-1255	Jorge Armando Poot Pech Juan Enrique Serrano Peraza
172.	Copia certificada , del correo electrónico de Sergio Martínez García de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, con copia a los Consejeros Electorales para reunión de trabajo.	Legajo 5, Foja 3628	Jorge Armando Poot Pech

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
173.	Copia certificada , del oficio INE/DESPEN/2777/2016, suscrito por Rafael Martínez Puon, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, dirigido a Mayra San Román Carrillo, a través del cual convoca a reunión de trabajo.	Legajo 5, Foja 3630-3631	Jorge Armando Poot Pech
174.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación del IEQROO, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3632-3638	Víctor Manuel Interían López
175.	Copia simple , del acuerdo del Consejo General del IEQROO, por medio del cual se ratifica al ciudadano Víctor Manuel Interían López como Titular de la Dirección de Administración del propio Instituto.	Legajo 5, Foja 3639-3649	Víctor Manuel Interían López
176.	Copia certificada , del recibo por la cantidad de diez mil pesos de Mayra San Román Carrillo, Sergio Avilés Demeneghi, Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche y Thalía Hernández Robledo.	Legajo 5, Fojas 3650-3654	Víctor Manuel Interían López
177.	Copia simple , de los oficios suscritos por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración del IEQROO, a través del cual se asigna apoyo secretarial a los Consejeros Electorales.	Legajo 5, Fojas 3655-3660	Víctor Manuel Interían López
178.	Original , del escrito de Sergio Avilés Demeneghi, Consejera Electoral del IEQROO, mediante oficio CE/SAD/014/17, en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3661-3668	Sergio Avilés Demeneghi
179.	Copia simple , del oficio CE/SAD/043/2016, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, a través del cual informa que estará fuera del Estado.	Legajo 5, Foja 3669	Sergio Avilés Demeneghi

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
180.	Copia simple , del oficio CE/SAD/048/2016, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, dirigido a Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, en relación al uso de las listas nominales.	Legajo 5, Foja 3671	Sergio Avilés Demeneghi
181.	Copia simple , del estado de cuenta expedido por Bancomer, por concepto de compensación por Proceso Electoral, mediante SPEI.	Legajo 5, Foja 3672-3678	Sergio Avilés Demeneghi
182.	Copia simple , del oficio CE/SAD/05/17, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, dirigido a Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral y Presidente, a través del cual informa sobre los escenarios y propuesta de estructura organizacional.	Legajo 5, Foja 3679	Sergio Avilés Demeneghi
183.	Copia simple , del oficio CE/SAD/045/16, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, a través del cual informa sobre los escenarios y propuesta de estructura organizacional.	Legajo 5, Foja 3680-3681	Sergio Avilés Demeneghi
184.	Copia simple , de la nota periodística, donde califican de ilegal reasignación de Diputados plurinominales.	Legajo 5, Foja 3682-3683	Sergio Avilés Demeneghi
185.	Copia simple , del oficio CE/SAD/034/16, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, a través del cual da contestación al informe de requerimiento del acuerdo UT/SCG/CA/VVVVV/CG/71/2016, relativo al oficio TEQROO/MP/135/2016.	Legajo 5, Foja 3684-3699	Sergio Avilés Demeneghi
186.	Copia simple , del oficio CE/SAD/050/16, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, a través del cual da contestación al informe de requerimiento del acuerdo UT/SCG/CA/VVVVV/CG/71/2016, relativo al oficio TEQROO/MP/135/2016, solicitando se asiente un precedente para evitar actos de intimidación basados en la investidura de ciertos servidores públicos.	Legajo 5, Foja 3700-3704	Sergio Avilés Demeneghi

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
187.	Original , del escrito de Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del <i>IEQROO</i> , en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3705-3706	Juan Alberto Manzanilla Lagos
188.	Original , del escrito de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3707-3709	Juan Alberto Manzanilla Lagos
189.	Original , del escrito de Mauricio Morales Beiza, Representante del <i>PT</i> ante el Consejo General del <i>IEQROO</i> , en atención al acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3710-3711	Mauricio Morales Beiza
190.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , mediante oficio PRE/074/2017, en atención al acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3730-3731	Mayra San Román Carrillo Medina
191.	Copia certificada , del oficio PRE/070-1/2017, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta, dirigido a Víctor Manuel Interían López, Director de Administración del <i>IEQROO</i> , a través del cual solicita informe sobre el estímulo económico durante el mes de marzo de dos mil dieciséis a todos los consejeros.	Legajo 5, Foja 3732	Mayra San Román Carrillo Medina
192.	Copia certificada , del oficio DAP/099/2017, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación, dirigido a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, a efecto que sea realizado el pago del estímulo.	Legajo 5, Foja 3733	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
193.	Copia certificada , del recibo por la cantidad de treinta y tres mil pesos de Mayra San Román Carrillo, Sergio Avilés Demeneghi, Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche y Thalía Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca y Luis Carlos Santander Botello.	Legajo 5, Foja 3734-3740	Mayra San Román Carrillo Medina
194.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación del IEQROO, en atención al acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3741-3742	Víctor Manuel Interían López
195.	Original , del escrito de Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral, mediante oficio CE/SAD/028/17, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 5, Foja 3743-3745	Sergio Avilés Demeneghi
196.	Copia simple , de la denuncia NA/CDMX/FEPADE/0000258/2017, presentada por Sergio Avilés Demeneghi ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.	Legajo 5, Foja 3746-3762	Sergio Avilés Demeneghi
197.	Disco compacto , contiene audio de la conversación sostenida con el Magistrado Presidente del TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas.	Legajo 5, Foja 3763	Sergio Avilés Demeneghi
198.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral IEQROO, mediante Oficio CE/CCG/045/17, de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete sobre nuevos hechos y pruebas.	Legajo 5, Foja 3764-3777	Claudia Carrillo Gasca
199.	Copia certificada , del acuerdo IEQROO/CG/A-007/16, del Consejo General del IEQROO, por medio del cual se ratifica al ciudadano José Alfredo Figueroa Orea como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del propio Instituto.	Legajo 5, Foja 3778-3788 Legajo 6, Foja 4128-4141	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
200.	Copia certificada , del acuerdo IEQROO/MIN/001/14-01-2016, de la minuta de trabajo de la Comisión temporal creada para la realización de la valoración curricular y entrevista para la designación o ratificación del secretario general o titulares de las direcciones y unidades técnicas del <i>IEQROO</i> .	Legajo 5, Foja 3789-3813 Legajo 6, Foja 4142	Claudia Carrillo Gasca
201.	Copia certificada , de la propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social, José Alfredo Figueroa Orea, de documentación personal.	Legajo 5, Foja 3814-3864	Claudia Carrillo Gasca
202.	Copia certificada , de la propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social, José Alfredo Figueroa Orea, de IEQROO/MIN/002/15-01/2016L, de la minuta de trabajo de la comisión temporal creada para la realización de la valoración curricular y entrevista para la designación del Secretario General y Titulares de las Direcciones y UTEQROO.	Legajo 5, Foja 3865-3867	Claudia Carrillo Gasca
203.	Copia certificada , de la propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social, José Alfredo Figueroa Orea, de diversos oficios, suscritos por Mayra San Román Medina, Consejera Presidenta, dirigida a diversos Consejeros Electorales, a efecto de realizar la entrevista de para la designación del Secretario General y Titulares de las Direcciones y UTEQROO.	Legajo 5, Foja 3868-3876	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
204.	Copia simple , del oficio CE/CCG/038/17 y CE/CCG/041/17, de fecha dos y tres de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Adriana Almicar Sauri Manzanilla, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística del IEQROO, solicitando la difusión de las actividades que realizaría la quejosa en el mes de marzo en la zona norte del Estado, en su calidad de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 6, Foja 4065-4067 Legajo 5, Foja 3893 Legajo 5, Foja 3895	Claudia Carrillo Gasca
205.	Copia simple , del oficio CE/CCG/040/17, de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, dirigidos a José Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, respecto de recordatorio solicitando la difusión de comunicación social y redes sociales en razón a las actividades que realizaría la quejosa en el mes de marzo en la zona norte del Estado, en su calidad de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 5, Foja 3894	Claudia Carrillo Gasca
206.	Copia simple , de la nota periodística, donde continúa acoso a consejera del IEQROO.	Legajo 5, Foja 3898-3899	Claudia Carrillo Gasca
207.	Original , del escrito de Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del TEQROO, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 3923-3924	Víctor Venamir Vivas Vivas
208.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del IEQROO, mediante Oficio PRE/084/2017, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 3943-3945	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
209.	Original , del escrito de José Alfredo Figueroa Orea, Titular De La Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante Oficio UTCS/035/17, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 3946-3951	José Alfredo Figueroa Orea
210.	Copia certificada , de la base de datos de reporteros, editores, columnistas, jefes de información, jefes de presa, fotógrafos y corresponsales, de los diferentes medios de comunicación local, regional y nacional.	Legajo 6, Foja 3952-3960	José Alfredo Figueroa Orea
211.	Copia certificada , del oficio CIE/042/17, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información y Transparencia del IEQROO, dirigido a José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del mismo Instituto, mediante el cual le solicita al referido funcionario la difusión en redes sociales del Instituto de la actualización del apartado de Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 6, Fojas 3961-3965	José Alfredo Figueroa Orea
212.	Copia certificada , del boletín oficial del IEQROO 11/17, de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se realizó la difusión de actividades del Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, Juan Manuel Pérez Alpuche.	Legajo 6, Fojas 3966-3967	José Alfredo Figueroa Orea
213.	Copia certificada , de la agenda relativa a la conmemoración del día internacional de la mujer.	Legajo 6, Fojas 3968-3969	José Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
214.	Copia certificada , de impresiones de pantalla de la red social twitter de enero a marzo de dos mil diecisiete, de las cuales se advierte la difusión de actividades de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En las cuales se advierte la difusión de la actualización del micro sitio de la referida comisión así como la agenda de actividades relativa a la conmemoración del “día internacional de la mujer”.	Legajo 6, Fojas 3970-3976	José Alfredo Figueroa Orea
215.	Copia certificada , de impresiones de pantalla de la red social Facebook de enero a marzo de dos mil diecisiete, de las cuales se advierte la difusión de actividades de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En las cuales se advierte la difusión de la actualización del micro sitio de la referida comisión así como la agenda de actividades relativa a la conmemoración del “día internacional de la mujer”.	Legajo 6, Fojas 3977-3987	José Alfredo Figueroa Orea
216.	Copia simple , del oficio UTCS/015/17, de seis de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, dirigido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, mediante el cual le informa que las actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer se difundirán en redes sociales.	Legajo 5, Foja 3896 Legajo 6, Foja 3988	Claudia Carrillo Gasca José Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
217.	Copia simple , del oficio CE/CCG/037/17, de dos de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del <i>IEQROO</i> , mediante el cual le solicita la difusión de las actividades que realizaría el mes de marzo en la zona norte del Estado en su calidad de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, al cual anexó copia simple de las invitaciones y calendario de dichas actividades.	Legajo 5, Fojas 3892 Legajo 6, Fojas 3989-3995	Claudia Carrillo Gasca José Alfredo Figueroa Orea
218.	Copia certificada , del boletín oficial 23/17 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió la conferencia que impartió la Consejera Claudia Carrillo Gasca, sobre “Violencia Política de Género” en el Municipio Benito Juárez, Quintana Roo.	Legajo 6, Fojas 3996-3997	José Alfredo Figueroa Orea
219.	Copia certificada , del boletín oficial 19/17 de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundieron actividades relacionadas con la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, presidida por la quejosa.	Legajo 6, Foja 3998	José Alfredo Figueroa Orea
220.	Copia certificada , del boletín oficial 16/17 de diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió información relacionada con las actividades de los consejeros que integran el Consejo General del <i>IEQROO</i> , incluida la quejosa, relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer.	Legajo 6, Fojas 3999-4000	José Alfredo Figueroa Orea

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
221.	Copia certificada , del boletín oficial 15/17 de siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió información relacionada con las actividades de los consejeros que integran el Consejo General del <i>IEQROO</i> , incluida la quejosa, relacionadas con la conmemoración del día internacional de la mujer.	Legajo 6, Fojas 4001-4002	José Alfredo Figueroa Orea
222.	Copia certificada , del boletín oficial 5/17 de treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundió que la Consejera Claudia Carrillo Gasca acudió en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como ponente al Foro de Expresión de Mujeres Quintanarroenses, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.	Legajo 6, Foja 4003	José Alfredo Figueroa Orea
223.	Copia certificada , del boletín oficial 17/17 de trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se difundieron las actividades realizadas por la Consejera Claudia Carrillo Gasca durante su participación en distintas sedes al norte del Estado en su calidad Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 6, Fojas 4004-4005	José Alfredo Figueroa Orea
224.	Copia certificada , de impresiones de pantalla de distintos medios de comunicación digital y de la red social twitter, mediante los cuales se hace referencia a distintas actividades en las que participó la quejosa en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Legajo 6, Fojas 4008-4017	José Alfredo Figueroa Orea
225.	Copia simple , del oficio CIE/070/17, suscrito por Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad del Centro de Información y Transparencia, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a efecto de invitación a una plática.	Legajo 5, Foja 3897 Legajo 6, Fojas 4249	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
226.	Copia certificada , de diversas notas periodísticas sobre Claudia Carrillo Gasca.	Legajo 7, Fojas 5014-5025	San Román Carrillo Medina
227.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante Oficio CE/CCG/045/17, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4018-4020	Claudia Carrillo Gasca
228.	Original , del escrito de Sergio Avilés Demeneghi, Consejero del IEQROO, mediante oficio CE/SAD/034/17, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4021-4022	Sergio Avilés Demeneghi
229.	Copia simple , del oficio CE/SAD 017/17, suscrito por Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral, de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en razón a qué informe como se difundió el tema de Partidos Políticos Locales.	Legajo 6, Foja 4023-4024	Sergio Avilés Demeneghi
230.	Copia simple , del oficio UTCS/021/17, contiene notas periodísticas de difusión de actividades, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación, dirigido a Sergio Avilés Demeneghi Consejero del IEQROO.	Legajo 6, Foja 4025-4039	Sergio Avilés Demeneghi
231.	Original , del escrito de Jorge Armando Poot Pech, Consejero del IEQROO, mediante oficio CE/JAPP/018/2017, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4055-4056	Jorge Armando Poot Pech
232.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera del IEQROO, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4057-4058	Thalía Hernández Robledo

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
233.	Copia simple , del oficio COIE/002/2017, en razón a la Convocatoria de la reunión formal de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General, de treinta de enero de dos mil diecisiete, suscrito por Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Organización de, Informática y Estadística del CGIEQR.	Legajo 6, Foja 4059-4060	Thalía Hernández Robledo
234.	Original , del escrito de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejera del IEQROO, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4061	Juan Manuel Pérez Alpuche
235.	Original , del escrito de Claudia Ávila Graham, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del IEQROO, mediante oficio CIE/109/17, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4062-4064	Claudia Ávila Graham
236.	Original , del escrito de Luis Carlos Santander Botello, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, mediante oficio CE/LCSB/012/17, en atención al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4068-4069	Luis Carlos Santander Botello
237.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera del IEQROO, mediante oficio CE/CCG/058/2017, de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, a efecto de presentar nuevos hechos y pruebas.	Legajo 6, Foja 4071-4079	Claudia Carrillo Gasca
238.	Copia simple y certificada , del oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/091-89/2017, suscrito por Lorena Cruz Sánchez, Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca Consejera del IEQROO, a efecto de Invitarla al evento de la conmemoración al día Internacional de la mujer.	Legajo 6, Foja 4080 Legajo 7, Foja 5012	Claudia Carrillo Gasca San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
239.	Copia simple , del oficio MPM/ICCAL/0034/II/2017, suscrito por Omar Alpuche Leal, Director General del Instituto capacitación en Calidad del H. Ayuntamiento del Puerto de Morelos, dirigido a Claudia Carrillo Gasca Consejera del <i>IEQROO</i> , a efecto de Invitarla al evento de la conmemoración al día Internacional de la mujer.	Legajo 6, Foja 4081	Claudia Carrillo Gasca
240.	Copia simple , del oficio sin número, suscrito por Luz Fabiola V. Ballesteros Xicoténcatl, Secretaria de Promoción Política de la Mujer, dirigido a Claudia Carrillo Gasca Consejera del <i>IEQROO</i> , a efecto de Invitarla al evento de la conmemoración al día Internacional de la mujer.	Legajo 6, Foja 4082	Claudia Carrillo Gasca
241.	Copia simple , de las notas en contra de Claudia Carrillo Gasca, Consejera del <i>IEQROO</i> , por medio de internet “el cuarto poder”, con el encabezado “Inicia pasarela de denunciados por violencia política en la fiscalía”, así como en el periódico “Por esto de QROO.” con los encabezados; “Al banquillo de acusados” y, “El Director de Partidos Políticos y Radio fusión del <i>IEQROO</i> , José González Nolasco, deberá comparecer ante la FGE. Al banquillo de acusados”.	Legajo 6, Foja 4083-4086	Claudia Carrillo Gasca
242.	Copia simple , del oficio DAP/152/2017, de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual da respuesta al oficio CE/CCG/048/17.	Legajo 6, Foja 4087	Claudia Carrillo Gasca
243.	Copia simple , del oficio DAP/157/2017, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual da respuesta al oficio CE/CCG/053/17.	Legajo 6, Foja 4088	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
244.	Copia simple , de diversas constancias relacionadas con el número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69/2016, sustanciado en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.	Legajo 6, fojas 4089-4268	Claudia Carrillo Gasca
245.	Copia simple , del citatorio de siete de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. Antonio Francisco Saucedo Su, Fiscal del Ministerio Público, Adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, dirigido a José Luis González Nolasco, mediante el cual se le notifica que debería comparecer ante dicha autoridad a las doce horas del jueves nueve de marzo de dos mil diecisiete, ello con motivo de la práctica de una diligencia de carácter penal en calidad e imputado.	Legajo 6, foja 4098	Claudia Carrillo Gasca
246.	Acta Circunstanciada , que se instrumenta con el objeto de dejar constancia del cometido de enlaces electrónicos señalados en los escritos presentados por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del INE, del acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4276-4304	Autoridad Sustanciadora
247.	Original , del escrito de Julio Asrael González Carrillo, en atención al acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4326-4327	Julio Asrael González Carrillo
248.	Original , de la constancia laboral de Julio Asrael González Carrillo, expedida por el Departamento de Derechos Humanos del INE, firmada por la Mtra. Rosario de Jesús Castillo Villanueva, coordinadora de R.H.	Legajo 6, Foja 4329	Julio Asrael González Carrillo

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
249.	Copia simple , del citatorio de notificación a José Luis González Nolasco, del número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, y la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69//2016, suscrito por Cecilio Sosa Briceño, Fiscal del Ministerio Público de fuero común adscrito a la unidad de Delitos Diversos.	Legajo 6, Foja 4330 Legajo 6, Foja 4344	Julio Asrael González Carrillo José Luis González Nolasco
250.	Copia simple , del escrito presentado por José Luis González Nolasco, de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a efecto de revocar a Julio Asrael González Carrillo y Armando Quintero Santos, que actuaban como abogados del C. José Luis González Nolasco.	Legajo 6, Foja 4331- 4332 Legajo 6, Foja 4345- 4346	Julio Asrael González Carrillo José Luis González Nolasco
251.	Original , del escrito de Armando Quintero Santos, en relación al acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4333- 4336	Armando Quintero Santos
252.	Original , del escrito de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión del IEQROO, en relación al acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete.	Legajo 6, Foja 4337- 4342	José Luis González Nolasco
253.	Copia simple , de la notificación suscrita por Antonio Francisco Saucedo SU., Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía, de siete de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de citar a José Luis González Nolasco, a la fiscalía en comento, dentro del número de caso FGE/QR/OPB/10/3927/2016, y la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/FEDCLS/10/69//2016.	Legajo 6, Foja 4343	José Luis González Nolasco
254.	Copia simple , del acuerdo de notificación para José Luis González Nolasco, a efecto de notificar que se amplió su declaración para revocar a Julio Asrael González Carrillo, y Armando Quintero Santos.	Legajo 6, Foja 4347	José Luis González Nolasco

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
255.	Copia simple , del escrito de Cecilio Sosa Briceño, Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la unidad de Delitos Diversos, por el cual comparece al citatorio José Luis González Nolasco, asistido por sus Abogados Julio Asrael González Carrillo, y Armando Quintero Santos, suscrito por	Legajo 6, Foja 4348	José Luis González Nolasco
256.	Original , del escrito de José Luis González Nolasco, Titular de Partidos Políticos y Radio Fusión del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 4639-4646	José Luis González Nolasco
257.	Disco compacto , el cual contiene la audiencia de control judicial, celebrado el cinco de junio de dos mil diecisiete, dos fotografías y, prueba psicológica-psiquiátrica.	Legajo 7, Foja 4647	José Luis González Nolasco
258.	Original , del escrito de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del <i>IEQROO</i> , en atención al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 4648-4654	José Alfredo Figueroa Orea
259.	Copia certificada , de los oficios suscritos por José Alfredo Figueroa Orea, como respuesta a Claudia Carrillo Gasca, sobre su derecho de réplica de diversas notas periodísticas.	Legajo 7, Fojas 4656-4674	José Alfredo Figueroa Orea
260.	Copia certificada y simple , del oficio UTCS/310/16, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, como respuesta a Claudia Carrillo Gasca, respecto a la entrega de la versión estenográfica completa de la entrevista que se realizó el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, durante la sesión del Consejo General, el cual contempla las diversas entrevistas y correos enviados respecto a la entrevista a la quejosa.	Legajo 7, Fojas 4675-4686 Anexo 1, foja 392	José Alfredo Figueroa Orea Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
261.	Copia certificada , de las notas de Twitter, correspondientes al mes de marzo.	Legajo 7, Fojas 4637-4693	José Alfredo Figueroa Orea
262.	Copia certificada , de las notas de Facebook, correspondientes al mes de marzo.	Legajo 7, Fojas 4694-4700	José Alfredo Figueroa Orea
263.	Original , del escrito de Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante del <i>PR</i> ante el Consejo General del <i>IEQROO</i> , en atención al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Fojas 4701-4707	Juan Alberto Manzanilla Lagos
264.	Original , del escrito de Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización Electoral del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 4860-4863	Luis Alberto Alcocer Anguiano
265.	Copia certificada , del recibo de entrega de recepción a Luis Alberto Alcocer Anguiano, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.	Legajo 7, Foja 4866	Luis Alberto Alcocer Anguiano
266.	Copia Certificada , del acuerdo del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual se designa al ciudadano Alberto Alcocer Anguiano, como Titular de la Dirección de Organización.	Legajo 7, Foja 4870-4880	Luis Alberto Alcocer Anguiano
267.	Copia simple , del oficio CE/CCG/055/2016, suscrita por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, dirigido a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , a efecto de solicitar se instruya a Luis Alberto Alcocer Anguiano, conteste algunos cuestionamientos.	Legajo 7, Foja 4881	Luis Alberto Alcocer Anguiano
268.	Original , del escrito de Mauricio Morales Beiza, representante propietario del <i>PT</i> , ante el Consejo General del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 4882-4885	Mauricio Morales Beiza

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
269.	Original , del escrito de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 4929-4935	Juan Manuel Pérez Alpuche
270.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio PRE/159/2017.	Legajo 7, Foja 4936-4982	Mayra San Román Carrillo Medina
271.	Copia simple , de la impresión de pantalla de la que consta el boletín del seis de diciembre de dos mil dieciséis, del <i>IEQROO</i> , denominado “la Primera Reunión de Trabajo para la conformación del observatorio de participación política de las mujeres en Quintana Roo”.	Legajo 7, Foja 4994	Mayra San Román Carrillo Medina
272.	Copia certificada , del contrato por servicios profesionales por honorarios, por tiempo determinado, que celebran el <i>IEQROO</i> y la C. Martha Patricia Villar Peguero.	Legajo 7, Foja 5000-5004	Mayra San Román Carrillo Medina
273.	Copia certificada , del oficio DAP/270/2017, dirigido a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, a efecto de concepto de viáticos, suscrito por Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación, en el cual le da respuesta al oficio PRE/149/2017, a efecto de los viáticos.	Legajo 7, Foja 5005	Mayra San Román Carrillo Medina
274.	Copia certificada , de los viáticos de los Consejeros Electorales, correspondientes a noviembre dos mil quince a dos de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 5006	Mayra San Román Carrillo Medina
275.	Copia certificada , del oficio UTIE/041/17, Verificación de servicio a internet de Consejeros Electorales, dirigido a Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta, suscrito por Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística.	Legajo 7, Foja 5008	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
276.	Copia certificada , del oficio CE/CCG/033/17, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Víctor Manuel Interían López, a efecto de hacer de conocimiento que asiste al evento del día internacional de la mujer.	Legajo 7, Foja 5011-5013	Mayra San Román Carrillo Medina
277.	Copia certificada , del escrito de Lorena Cruz Sánchez, Presidenta, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a efecto de invitarla al evento del día internacional de la mujer.	Legajo 7, Foja 5012	Mayra San Román Carrillo Medina
278.	Copia certificada , del oficio CE/CCG/034/17, dirigido a Víctor Manuel Interían López, director Administrativo del <i>IEQROO</i> , suscrito por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a efecto de solicitar viáticos.	Legajo 7, Fojas 5026	Mayra San Román Carrillo Medina
279.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Fojas 5029-5037	Thalía Hernández Robledo
280.	Original , del escrito de Armando Miguel Palomo Gómez, en relación al acuerdo de emplazamiento de doce de junio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Fojas 5038-5040	Armando Miguel Palomo Gómez
281.	Acta Circunstanciada , que se instrumenta con el objeto de dejar constancia del contenido de los enlaces electrónicos y notas periodísticas relativos a la renuncia y diversos hechos relacionados con Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado del <i>TEQROO</i> , en cumplimiento al cuatro de julio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 5131-5158	Autoridad Sustanciadora
282.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interían López, Director de Administración y Planeación del <i>IEQROO</i> , en relación al acuerdo de emplazamiento de cuatro de julio de dos mil diecisiete.	Legajo 7, Foja 5176-5177	Víctor Manuel Interían López

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
283.	Original , del escrito de Cuitláhuac Villegas Solís, Director Jurídico del <i>INE</i> , en relación al acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de no encontrar registro de José Luis González Nolasco.	Legajo 8, Foja 5200-5210	Cuitláhuac Villegas Solís
284.	Copia certificada , del oficio UTCS/310/16, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, como respuesta a Claudia Carrillo Gasca, respecto a la entrega de la versión estenográfica completa de la entrevista que se realizó el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, durante la sesión del Consejo General, el cual contempla las diversas entrevistas y correos enviados respecto a la entrevista a la quejosa.	Anexo 4, Foja 1890-1893	José Alfredo Figueroa Orea
285.	Original , del escrito de Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado Integrante del <i>TEQROO</i> , de doce de julio de dos mil diecisiete, en relación al acuerdo de emplazamiento de cuatro de julio de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5320-5325	Víctor V. Vivas Vivas
286.	Original , del escrito de Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> , mediante oficio PRE/232/2017, a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5326-5329	Mayra San Román Carrillo Medina
287.	Original , del escrito de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5330-5340	Juan Manuel Pérez Alpuche
288.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5341-5343	Thalía Hernández Robledo

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
289.	Original , del escrito de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5344-5340	José Alfredo Figueroa Orea
290.	Copia certificada , del acuerdo del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual designa a José Alfredo Figueroa Orea, como Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del <i>IEQROO</i> .	Legajo 8, Foja 5347-5357	José Alfredo Figueroa Orea
291.	Original , del escrito de Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5358-5360	Luis Alberto Alcocer Anguiano
292.	Copia certificada , del acuerdo del Consejo General del <i>IEQROO</i> , por medio del cual designa a Luis Alberto Alcocer Anguiano, como Titular de la Dirección de Organización del <i>IEQROO</i> .	Legajo 8, Foja 5361-5371	Luis Alberto Alcocer Anguiano
293.	Original , del escrito de Mauricio Morales Beiza, Representante propietario del <i>PT</i> ante el Consejo General del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5372-5374	Mauricio Morales Beiza
294.	Original , del escrito de Juan Alberto Manzanilla Lagos, a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5375-5378	Juan Alberto Manzanilla Lagos
295.	Original , del escrito de Armando Miguel Palomo Gómez, a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5379-5332	Armando Miguel Palomo Gómez

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
296.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Conseja Electoral del <i>IEQROO</i> , a efecto de presentación de alegatos, en relación al acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5383-5407	Claudia Carrillo Gasca
297.	Original , del escrito de Dnahe Paola Castañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la FEPADE, mediante oficio FEPADE-C-089/2017, por el cual da contestación al acuerdo de primero de noviembre de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5510-551	Autoridad sustanciadora
298.	Acta Circunstanciada , en cumplimiento al acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, del disco compacto remitido por el Consejo Electoral del <i>IEQROO</i> , Sergio Avilés Demenehi mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete.	Legajo 8, Foja 5521-5531	Autoridad sustanciadora
299.	Original , del escrito de Sergio Avilés Demenehi, Consejero Electoral, en respuesta al acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio CE/SAD/117/17.	Legajo 8, Foja 5538-5540	Sergio Avilés Demenehi
300.	Copia simple , de escrito de Sergio Avilés Demenehi, Consejero Electoral, dirigido a la FEPADE, mediante oficio CE/SAD/116/17, a efecto de solicitar la expedición de copias certificadas de las periciales practicadas dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/QR/0001395/2016.	Legajo 8, Foja 5541-5542	Sergio Avilés Demenehi
301.	Copia autorizada del acta de certificación de hechos correspondientes a mensajes de textos, realizado por Oficialía Electoral de la Junta Local Ejecutiva del <i>IEQROO</i> , de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, con número de petición 0001/2016, suscrito por Claudia Rosas Sosa, mediante oficio INE/OE/DS/OC/0/082/2016, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 1, fojas 360-377	Autoridad sustanciadora

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
302.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral de Quintana Roo, mediante el oficio CE/CCG/060/16, en relación al acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 1, fojas 381-389	Claudia Carrillo Gasca
303.	Original , del escrito del Vice Fiscal de la zona Sur de la Fiscalía General del Estado, José Antonio Nieto Bastida, a través del oficio FGE/DFG/01004/2016, de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en relación al acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 1, fojas 414	José Antonio Nieto Bastida
304.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, sobre nuevos hechos y solicitud de copias certificadas, mediante oficio CE/CCG/080/16.	Anexo 3, Foja 1021-1023	Claudia Carrillo Gasca
305.	Disco compacto , el cual contiene audio de la reunión de trabajo de la comisión de administración del <i>IEQROO</i> , de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1027	Claudia Carrillo Gasca
306.	Original , del escrito de José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos, mediante oficio DPP/741/16, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1030-1033	José Luis González Nolasco
307.	Original , del escrito de Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del <i>PRI</i> , a través del oficio sin número, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, foja 1042	Juan Alberto Manzanilla Lagos
308.	Original , del escrito de Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General, mediante oficio SG/949/2016, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1043-1051	Juan Enrique Serrano Peraza

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
309.	Copia Certificada , del acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1060-1077	Juan Enrique Serrano Peraza
310.	Copia Certificada , del acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> de quince de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1078-1104 Anexo 4, Foja 1615	Juan Enrique Serrano Peraza Sergio Avilés Demeneghi
311.	Copia certificada , del acta de sesión ordinaria del Consejo General del <i>IEQROO</i> , de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1105-1117	Juan Enrique Serrano Peraza
312.	Copia certificada , del documento que contiene la plantilla de personal adscrito al área de Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del <i>IEQROO</i> .	Anexo 3, Foja 1256	Juan Enrique Serrano Peraza
313.	Copia simple , del mapa de ubicación de oficina de los consejeros electorales.	Anexo 3, Foja 1257	Juan Enrique Serrano Peraza
314.	Original , del escrito de Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente el <i>TEQROO</i> , a través del oficio <i>TEQROO/MP/215/2016</i> , respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, foja 1259-1273	Víctor Venamir Vivas Vivas
315.	Copia simple , de diversas notas periodísticas, e imágenes relacionadas con el trabajo conjunto del <i>TEQROO</i> y el <i>IEQROO</i> .	Anexo 3, Foja 1274-1281	Víctor Venamir Vivas Vivas
316.	Copia certificada , de la convocatoria de Sesión del Pleno del <i>TEQROO</i> , de seis de abril de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1282	Víctor Venamir Vivas Vivas
317.	Copia certificada , del acta de Sesión del Pleno del <i>TEQROO</i> , de siete de abril de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1283-1285	Víctor Venamir Vivas Vivas
318.	Copia certificada , de la solicitud de derecho de réplica, suscrito por Víctor Venamir Vivas Vivas de diversas notas periodísticas.	Anexo 3, Foja 1289-1294	Víctor Venamir Vivas Vivas

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
319.	Copia certificada , de la resolución SUP-JRC-198/2016.	Anexo 3, Foja 1295-1351	Víctor Venamir Vivas Vivas
320.	Copia certificada , de la convocatoria de Sesión del Pleno del <i>TEQROO</i> , de doce de enero de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1360	Víctor Venamir Vivas Vivas
321.	Copia certificada , del acta de Sesión del Pleno del <i>TEQROO</i> , de trece de enero de dos mil dieciséis.	Anexo 3, Foja 1361-1364	Víctor Venamir Vivas Vivas
322.	Copia certificada , de la convocatoria de Sesión Privada del Pleno del <i>TEQROO</i> , de once de noviembre de dos mil quince.	Anexo 3, Foja 1365	Víctor Venamir Vivas Vivas
323.	Copia certificada , del acta de Sesión del Pleno del <i>TEQROO</i> , de doce de noviembre mil quince	Anexo 3, Foja 1366-1370	Víctor Venamir Vivas Vivas
324.	Original , del escrito de Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , a través del oficio CE/JAPP/036/2016, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 3, foja 1371-1378	Jorge Armando Poot Pech
325.	Copia simple , del oficio CE/JAPP/021/16, suscrito por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interían López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1381	Jorge Armando Poot Pech
326.	Copia simple , del oficio CE/JAPP/028/16, suscrito por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interían López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1382	Jorge Armando Poot Pech
327.	Copia simple , del oficio CE/JAPP/009/16, suscrito por Jorge Armando Poot Pech, dirigido a Víctor Manuel Interían López, mediante el cual solicita viáticos.	Anexo 3, Foja 1384	Jorge Armando Poot Pech
328.	Copia certificada , del acuerdo IEQROO/CG/A-087-16, del Consejo General del <i>IEQROO</i> , sobre la designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales de las juntas ejecutivas distritales y municipales.	Anexo 3, Foja 1386-1412	Jorge Armando Poot Pech

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
329.	Copia certificada , del dictamen de la Junta General de <i>IEQROO</i> , que propone al Consejo General los cargos de los consejeros presidentes y consejeros electorales de las juntas ejecutivas distritales y municipales.	Anexo 3, Foja 1413-1508	Jorge Armando Poot Pech
330.	Original , del escrito de Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del <i>PNA</i> , a través del oficio sin número, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 4, foja 1520-1522	Armando Miguel Palomo Gómez
331.	Original , del escrito de Sergio Avilés Demeneghi Consejero Electoral del <i>IEQROO</i> , a través del oficio CE/SAD/081/16, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 4, foja 1561-1573	Sergio Avilés Demeneghi
332.	Original , del escrito de José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral de Quintana Roo.	Anexo 4, Foja 1794-1893	José Alfredo Figueroa Orea
333.	Original , del escrito de Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral, a través del oficio sin número, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 4, foja 1894-1896	Thalía Hernández Robledo
334.	Original , del escrito de Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral de <i>IEQROO</i> , a través del oficio CE/JMPA/029/2016, respecto al acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.	Anexo 4, foja 1898-1899	Juan Manuel Pérez Alpuche
335.	Original , del escrito del Vice Fiscal de la zona Sur de la Fiscalía General del Estado, José Antonio Nieto Bastida, a través del oficio FGE/DFG/1795/2016.	Anexo 4, Foja 1902	José Antonio Nieto Bastida
336.	Copia simple , del dictamen que contiene las ternas de los candidatos a ocupar los cargos de dos magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.	Anexo 4, Foja 1575-1607	Sergio Áviles Demenehi

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
337.	Copia simple , de la iniciativa de decreto por el que se designa a dos Magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.	Anexo 4, Foja 1609-1613	Sergio Áviles Demenehi
338.	Copia simple , del oficio UTCS/290/16, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual remite contestación al oficio CE/CCG/035/16, respecto diversas publicaciones en medios impresos y redes sociales.	Anexo 4, Foja 1799	José Alfredo Figueroa Orea
339.	Copia simple , del oficio CE/CCG/035/2016, suscrito por Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Alfredo Figueroa Orea, en el que solicita las medidas de difusión y redes sociales que la Unidad Técnica de Comunicación Social está realizando.	Anexo 4, Foja 1807	José Alfredo Figueroa Orea
340.	Copia certificada , de diversas copias certificadas de notas periodísticas	Anexo 4, Fojas 1808-1888	José Alfredo Figueroa Orea
341.	Copia certificada , del oficio CE/THR/039/2016, suscrito por Thalía Hernández Robledo, dirigido a Víctor Manuel Interián López, a través del cual solicita viáticos y combustible.	Anexo 4, Foja 1897	Thalía Hernández Robledo
342.	Copia certificada , de diversas copias simples de notas periodísticas	Anexo 4, Fojas 1912-1916	Mayra San Román Carrillo Medina
343.	Copia certificada , del acuerdo del Consejo General del IEQROO, por medio del cual se integra el Comité de Transparencia del propio Instituto.	Anexo 4, Foja 1956	Mayra San Román Carrillo Medina
344.	Copia certificada , de las fechas y sedes de las entrevistas a aspirantes a consejeros y vocales de los Consejos Distritales y Municipales.	Anexo 4, Foja 2121	Mayra San Román Carrillo Medina
345.	Copia certificada , de las diversas transferencias bancarias hechas a Claudia Carrillo Gasca, por concepto de viáticos.	Anexo 4, Fojas 2286-2290	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
346.	Copia certificada , de los escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a las sesiones de 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 29 de abril; 5, 9 y 13, 18, 23, 25, 26, 27, 30 de mayo; 01, 03, 10, 13, 23, 29 de junio; 13, 23, 27; 09, 22, 29 de agosto; 13, 20, 28 de septiembre de dos mil dieciséis y 30 de octubre; 18, 19 de noviembre; 01, 07, 14, 21 de diciembre de dos mil quince; 18, 28 de enero; 05, 11, 12, 11, 15, 16, 23, 26 de febrero de dos mil dieciséis.	Anexo 4, Fojas 2346-2434 Anexo 5, Fojas 2435-2680	Mayra San Román Carrillo Medina
347.	Copia certificada , de los oficios SG/097/2016, enviados por Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario General del <i>IEQROO</i> , a los Consejeros Electorales, a través de los cuales informa la inclusión en el orden del día la inclusión del proyecto de acuerdo sobre la determinaciones del procedimiento de designación de los consejeros y vocales de los consejos distritales y municipales del <i>IEQROO</i> .	Anexo 5, Fojas 2681-2686	Mayra San Román Carrillo Medina
348.	Copia certificada , de los escritos enviados por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a las sesiones de carácter urgente de 02, 06, 09, 11, 14, 16, 21, 24, 29, 31 de marzo; 06, 08, 12 de abril de dos mil dieciséis.	Anexo 5, Fojas 2687-2783	Mayra San Román Carrillo Medina
349.	Copia certificada , de los oficios PRE/674/2016, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a la reunión de trabajo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis.	Anexo 5, Fojas 2930-2937	Mayra San Román Carrillo Medina
350.	Copia certificada , del oficio PRE/018/2016 de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2938	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
351.	Copia certificada , del oficio PRE/019/2016 de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se convoca a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2939	Mayra San Román Carrillo Medina
352.	Copia certificada , del oficio PRE/008/2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión para presentar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva.	Anexo 5, Foja 2940	Mayra San Román Carrillo Medina
353.	Copia certificada , del oficio PRE/009/2016 de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2941	Mayra San Román Carrillo Medina
354.	Copia certificada , del oficio PRE/010/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2942	Mayra San Román Carrillo Medina
355.	Copia certificada , del oficio PRE/015/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2943	Mayra San Román Carrillo Medina
356.	Copia certificada , del oficio PRE/017/2016 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2944	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
357.	Copia certificada , del oficio PRE/021/2016 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2947	Mayra San Román Carrillo Medina
358.	Copia certificada , del oficio PRE/023/2016 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2948	Mayra San Román Carrillo Medina
359.	Copia certificada , del oficio PRE/024/2016 de veinte de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2949	Mayra San Román Carrillo Medina
360.	Copia certificada , del oficio PRE/026/2016 de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del <i>IEQROO</i> , donde se invita a los Consejeros Electorales a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2950	Mayra San Román Carrillo Medina
361.	Copia certificada , del oficio DO/183/2016, de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del <i>IEQROO</i> , dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa la entrega de paquetes electorales y cajas contenedoras de material electoral.	Anexo 5, Foja 2952	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
362.	Copia certificada , del oficio DO/130/2016, de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del <i>IEQROO</i> , dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa sobre la verificación de materiales electorales y verificación de la documentación sin emblemas y visto bueno de la documentación definitiva de Gobernador y Ayuntamiento.	Anexo 5, Foja 2953	Mayra San Román Carrillo Medina
363.	Copia certificada , del oficio DO/072/2016, de once de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del <i>IEQROO</i> , dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual informa sobre la aplicación de los exámenes escritos a los candidatos a Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.	Anexo 5, Foja 2954	Mayra San Román Carrillo Medina
364.	Copia certificada , del oficio DO/071/2016, de once de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización del <i>IEQROO</i> , dirigido a Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral, a través del cual se le invita al desarrollo de la cuarta etapa del procedimiento de designación de los Consejeros y Vocales.	Anexo 5, Foja 2955	Mayra San Román Carrillo Medina
365.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General del <i>IEQROO</i> , dirigido a los Consejeros Electorales, a través del cual les convoca a reunión formal de trabajo de la Comisión de Organización, Informática y Estadística.	Anexo 5, Fojas 2956-2982	Mayra San Román Carrillo Medina

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
366.	Copia certificada , del oficio UT/E/01/16, suscrito por Adrián Almicar Sauri Manzanilla, Jefe de la Unidad Técnica de Información y Estadística, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual se le informa se asistencia la reunión para dar fe pública de la base de datos del sistema PREP.	Anexo 5, Foja 2983	Mayra San Román Carrillo Medina
367.	Copia certificada , del oficio COTAPREP/004/2015, suscrito por Adrián Almicar Sauri Manzanilla, Jefe de la Unidad Técnica de Información y Estadística, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a través del cual se le convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Foja 2986	Mayra San Román Carrillo Medina
368.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Sergio Avilés Demeneghi, Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 2995-3003	Mayra San Román Carrillo Medina
369.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Juan Manuel Pérez Alpuche, Presidente de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 3004-3007	Mayra San Román Carrillo Medina
370.	Copia certificada , de los oficios suscritos por Luis Carlos Santander Botello, Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, dirigidos a los Consejeros Electorales, a través de los cuales se les convoca a reunión de trabajo.	Anexo 5, Fojas 3008-3012	Mayra San Román Carrillo Medina
371.	Original , del oficio SE/071/18, suscrito por Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecutivo del IEQROO, mediante el cual da contestación al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora por acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Foja 5559	Juan Enrique Serrano Peraza

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
372.	Copia certificada , del oficio DA/036/2018, de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, suscrito por Víctor Manuel Interián López, Director de Administración, dirigido a Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecutivo, por el cual hace del conocimiento que no se encontró evidencia alguna de la reunión de trabajo de la Comisión de Administración de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.	Legajo 9, Foja 5560	Juan Enrique Serrano Peraza
373.	Disco compacto , presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, por José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, el cual contiene el audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de enero del presente año en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE//FEDCLS/10/69/2016, en la cual se dictó el auto de no vinculación a proceso por el delito de discriminación.	Legajo 9 Fojas 5573	José Alfredo Figueroa Ore
374.	Acta Circunstanciada , del disco compacto remitido por el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, José Alfredo Figueroa Orea, en el que consta la audiencia celebrada el veintidós de enero del presente año en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE//FEDCLS/10/69/2016, en cumplimiento al acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Fojas 5585-5618	Autoridad Sustanciadora
375.	Disco compacto , presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, por José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión, del IEQROO, en relación a la carpeta de investigación FGE/QR/CHE//FEDCLS/10/69/2016.	Legajo 9, Foja 5942	José Luis González Nolasco

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
376.	Copia simple , del oficio SPP/736/07-2017, de cinco de julio de dos mil diecisiete, signado por el Perito en psicología adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, Olinka Sánchez Nava, dirigido a Cecilio Sosa Briceño, Fiscal de Ministerio Público adscrito a la unidad de delitos diversos. A efecto de saber si la quejosa presta una afectación psicoemocional.	Legajo 9, Fojas 5943-5954	José Luis González Nolasco
377.	Copia simple , del oficio FEPADE-C-049/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, signado por Danahe Paola Castañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la FEPADE, dirigido a Sergio Avilés Demeneghi, Consejero Electoral del IEQROO, mediante el cual le informa que no le pueden dar la información que solicita respecto del peritaje oficial del audio ofrecido por el referido Consejero, toda vez que no tiene la calidad de víctima en dicho proceso.	Legajo 9, Fojas 5968-5973	Sergio Avilés Demeneghi
378.	Copia simple , del oficio sin número, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, en el cual se le cita para el día diecinueve de marzo del presente año, para llevar a cabo una diligencia dentro de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/10/3927/2016.	Legajo 9, Foja 5962	Claudia Carrillo Gasca
379.	Copia simple , del oficio FEPADE-C-058/2018, de catorce de marzo del presente año, signado por Danahe Paola Castañeda Flores, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la FEPADE, dirigido a Claudia Carrillo Gasca, a efecto de dar contestación respecto de su solicitud relativa al dictamen pericial del dispositivo presentado por el Consejero Avilés Demeneghi en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/QR/0001395/2016	Legajo 9, Fojas 5963-5964	Claudia Carrillo Gasca

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
380.	Original , del escrito de Hugo Corro Guzmán, apoderado legal de PEGASO PCS, S.A. DE C.V. (Movistar), de cinco de abril de dos mil dieciocho, por el cual da contestación al requerimiento formulado por esta autoridad sancionadora, mediante proveído de dos de abril de dos mil dieciocho	Legajo 9, Foja 6006	PEGASO PCS, S.A. DE C.V. (Movistar)
381.	Original , del escrito del Apoderado Legal de Radiomóvil Dipsa, S.A de C.V. (Telcel), de cinco de marzo de dos mil dieciocho, por el cual da contestación al requerimiento formulado por esta autoridad sancionadora, mediante proveído de dos de abril de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Fojas 6008-6010	Radiomóvil Dipsa, S.A de C.V. (Telcel),
382.	Original , del escrito de Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del IEQROO, de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por el cual da contestación al requerimiento formulado por esta autoridad sancionadora, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Fojas 6039-6049	Claudia Carrillo Gasca
383.	Copia simple , de la solicitud de servicios a la compañía telefónica Telcel, de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se constatan los cambios de números telefónicos realizados por la quejosa.	Legajo 9, Fojas 6050	Claudia Carrillo Gasca
384.	Original , del escrito de Víctor Manuel Interián López, Director de Administración y Planeación del IEQROO, de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por el cual da contestación al requerimiento formulado por esta autoridad sancionadora, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Fojas 6051	Víctor Manuel Interián López

NO. DE PRUEBA	PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE APORTADAS POR LAS PARTES	UBICACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE	APORTADAS POR:
385.	Original , del escrito de Yesica Gallego Knapp, AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., de seis de abril de dos mil dieciocho, por el cual da contestación al requerimiento formulado por esta autoridad sancionadora, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.	Legajo 9, Fojas 6052	Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
386.	Original dictamen pericial en la especialidad de análisis de voz, de treinta de julio de dos mil dieciocho, con número de folio 54664, emitido por la perito oficial en materia de análisis de voz, adscrita y propuesta por la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	Legajo 9, Fojas 6139-6156	Agencia de Investigación Criminal Coordinación General de Servicios Periciales.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 3.2. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

He reservado este Proyecto de Resolución y me permitiré explicar un poco el contexto del mismo. Se inicia con motivo de la difusión del Informe de Labores del entonces Diputado Local, Juan Manuel Zepeda Hernández. _____

La denuncia es por 2 vías: por un lado, se denuncia la difusión extraterritorial del Informe de Labores y por una segunda parte se denuncia la promoción personalizada del servidor público. Me parece que aquí es importante señalar que se acredita que efectivamente una difusión extraterritorial de la propaganda, alusiva al Informe de Labores, puesto que estuvo colocada en distintas estaciones del Metro en la Ciudad de México , cuando él era Diputado Local del Estado de México y por esto se está declarando fundado el Proyecto de Resolución, por lo que hace a las personas físicas con actividad empresarial y moral que están involucradas en estos hechos, sobre el punto de declarar fundado contra estos sujetos, comparto el sentido del Proyecto de Resolución está plenamente acreditado que hay una difusión extraterritorial. _____

Pero, ¿por qué he reservado el apartado? Porque hay una parte que me preocupa y me preocupa mucho y tiene que ver con el análisis que está incluyendo para declarar infundado el caso, contra el propio servidor público que es el sujeto al que va dirigida la norma, la norma que establece una prohibición de difundir propaganda gubernamental, que implique promoción personalizada y la norma legal que establece las reglas incluida la de territorialidad de la difusión del Informe. _____

Por lo que hace a la territorialidad el Proyecto de Resolución señala que no se le imputa responsabilidad al entonces Diputado Local, porque no le resultaría exigible a él, el verificar todas las distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México, para verificar

que no hubiese propaganda alusiva a su Informe de Labores, puesto que él celebró un Contrato en el que estipuló que únicamente se difundiera en las estaciones que se encuentran en el Estado de México. Dice, bueno, no le es exigible el haber verificado el cumplimiento de esas instrucciones. _____

Por otra parte, se alega en el Proyecto de Resolución que hubo una actuación positiva por parte del entonces Diputado Local, puesto que envió una solicitud para que se retirara la propaganda que se encontraba específicamente en la estación del Metro Pantitlán. No comparto esos argumentos del Proyecto de Resolución, ¿por qué? Porque no se trata de hacer exigible que un servidor público recorra todas y cada una de las estaciones del Metro de la Ciudad de México, no se trata de que tenga que parar en cada una de ellas y recorrer los distintos andenes para ver si de casualidad ahí se encuentre esa propaganda o no. _____

¿Cómo nos enteramos nosotros, de esas 4 estaciones en las que estaba? Simplemente porque le preguntamos a la empresa, ¿dónde la colocaste?, y la empresa expresamente nos dijo: “en tal estación del Estado de México, en tal estación del Estado de México y en tales estaciones de la Ciudad de México”, bueno no creo que sea mucho pedirle a un servidor público que tiene una prohibición Constitucional expresa, que tenga mínimas medidas de diligencia que en este caso se reducían a preguntar a la empresa, ¿cómo cumpliste el acuerdo de voluntades al que llegamos? ¿dónde se colocó esa propaganda, en las distintas estaciones que se encontraban en el Estado de México? _____

Me parece que eso es algo que no es un exceso exigirle a un servidor público máxime cuando hay una prohibición constitucional absoluta. Esto es un contexto de exigencia que se debe de aplicar a los distintos servidores públicos y si bien es cierto que él solicitó que se retirara la que se había identificado en el Metro Pantitlán. Claro, el problema es que lo hizo 4 días antes de que terminara el periodo de difusión y entonces, se le está dando un tratamiento distinto al que, en su momento, dimos en el caso, me parece que de Rocío Nahle, a quien determinó este Consejo General que sí le era

exigible vigilar el cumplimiento de los términos en los que había convenido la difusión de cierta propaganda._____

Esto es por una parte y por otra, me preocupa que en este Proyecto de Resolución lo que se está siguiendo es el último criterio, que reconozco que es el último criterio de la Sala Superior, en torno a cómo se debe analizar la propaganda gubernamental alusiva al Informe de Labores, había habido un criterio constante que se había repetido en distintas ocasiones por parte de la Sala Superior, donde a partir de los Informes legislativos del Partido Verde Ecologista de México del 2014, ha dicho el Tribunal Electoral: a ver, espéreme, si hay una excepción al artículo 134 Constitucional que permite la difusión de propaganda gubernamental en la que aparezca el nombre y la imagen de un servidor público, es porque está asociada a un Informe de Labores y esto conlleva que la propaganda debe de evidenciar que lo que está haciendo es informando y no promoviendo al servidor público._____

¿Qué tenemos en la propaganda materia de este Proyecto de Resolución? Un conjunto de imágenes donde aparece el servidor público Juan Zepeda con una frase que dice: “Legislando bien para el Estado de México”._____

Bueno, que bien, me da mucho gusto que legislen bien, pero eso no es un Informe de Labores, eso no está informando la actividad Legislativa que llevó a cabo y esa razón fue por la que la Comisión de Quejas y Denuncias decretó medidas cautelares en este caso._____

Por eso, se ordenó la suspensión de la difusión de esa propaganda, precisamente, porque no atendía el contenido de lo que había establecido la Sala Superior y no solamente la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares, la Sala Superior confirmó esas medidas cautelares atento al contenido de la propaganda y, sin embargo, en este Proyecto no se está analizando el contenido basado en un criterio posterior._____

Insisto, entiendo que sí existe un criterio posterior que pareciera que ya no le importa el contenido a la Sala Superior, cuando fue la propia Sala Superior la que estableció la necesidad de verificar el contenido, sin embargo, me parece que no estamos ante una

jurisprudencia y sí estamos ante una prohibición Constitucional que nos debemos de tomar con mucha seriedad y en este mismo sentido tenemos lo relativo a esta publicación de la realidad mexiquense, que es una gacetilla de una apología absoluta al servidor público, que si bien no se tiene claridad respecto de quien ordenó la difusión de la misma, sí es muy claro de un análisis, de una lectura de la misma a quién beneficia y en qué contexto se difunde, en un contexto temporal que es el de la rendición del Informe de Labores y cuando están colocados en distintos espacios esta propaganda en la que lo único que se promociona es la imagen de este servidor público. _____

Por lo que, si bien acompaño lo relativo a las sanciones a la persona física y a la persona moral, no acompaño el declararlo infundado contra Juan Zepeda, y que no se investigue ni el contenido ni tengamos un pronunciamiento en ese sentido sobre la propaganda de realidad mexiquense. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

De forma breve, porque me parece que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín ha formulado los puntos que hacen disentir, coincidiría con lo que manifestó porque, la realidad es que es cierto que hay un precedente relativamente reciente de la Sala Superior, pero no constituye jurisprudencia. _____

Creo que, esta autoridad administrativa debiera tener cuidado de no en lo inmediato, en el siguiente asunto que se nos presenta, ya aplicar esos precedentes, sobre todo porque se viene de una temporada o época, digámoslo así, en el que era consistente la autoridad jurisdiccional, de exigir, nos estaba confirmando prácticamente todo lo relativo a Informes de labores, y esos criterios rigurosos se derivaban del famoso expediente SUP-REP-3-2015, donde sí, en pocas palabras, llegó a sostener que los

Informes de labores deben de ser genuinas rendiciones de cuentas, y a partir de ahí empezamos a sancionar a muchos servidores. _____

Sí extrañó, desconcertó este precedente relativamente reciente de un ex Senador de Yucatán, por el Partido Acción Nacional, donde bajó el estándar de exigencia. _____

El punto que sostengo es que, esta autoridad administrativa haría bien en todavía mantener un poco más aquel estándar rigurosos del SUP-REP-3-2015, esperar a ver si la Sala Superior asienta o reitera ya mucho más tiempo este nuevo precedente no riguroso, reciente, porque sí nos consta que hay un problema, creo, en nuestro país, de abuso en el tema de los Informes de Labores, se han convertido en promociones personalizadas, en muchos casos; no se está informando lo que hicieron en el año de gestión o de labores, y no le sirve a la sociedad mexicana que con motivo de este derecho de informar, se esté abusando en la promoción. _____

En suma, persistiría en el anterior criterio más riguroso, no en lo inmediato, adoptaría este criterio menos riguroso que ofreció la Sala Superior. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

En este asunto, quiero señalar por qué coincido con la propuesta. _____

Me parece que a diferencia de otros asuntos donde, efectivamente, servidores públicos han estado involucrados en casos similares, aquí hay una gran diferencia y es: primero, lo ordinario no es que estemos preguntando cómo va el cumplimiento del Contrato, lo ordinario es que confiamos en que se cumplan las cláusulas del Contrato. _____

Pero, para mí lo relevante en este asunto es que en el momento que se presenta la denuncia y se hace del conocimiento al candidato, en ese momento, antes de que se emitiera la medida cautelar ya estaba activando el cumplimiento del Contrato el propio candidato, le pidió con quien contrató que bajara esos elementos que estaban fuera del

territorio contratado y después emitieron las medidas cautelares y después se bajó la propaganda. _____

¿Qué es lo que me llama la atención? Que oportunamente y una vez que se hace sabedor de la presunta conducta ilícita, sin necesidad de la orden de esta autoridad, acude a pedir el retiro de esa publicidad que se había contratado en el espacio territorial permitido. _____

Creo que, estos asuntos son temas que debemos ir reflexionando en cómo y la mirada que debemos que tener, si bien es cierto habíamos tenido una consistencia a partir del SUP-REP-3-2015 y sus acumulados en la forma como íbamos a tratar estos temas, justamente fue a partir de una definición que dio esta autoridad, que nos revocó la autoridad donde se empieza a advertir una nueva forma de ver estos asuntos. _____

Creo que no es un asunto cerrado en este caso, por las particularidades concretas que tenemos acompañó que no podemos atribuir esa responsabilidad porque se activó antes, como lo dije. _____

Sin embargo, hay muchos temas que debemos ir reflexionando de cómo vamos a ver el tema de los Informes a la luz de los criterios y la Sistematización. _____

Pero, a mí lo que me llama la atención también es aquí la pronta respuesta antes del ejercicio y las atribuciones de esta autoridad. Por ello acompañó el Proyecto de Resolución. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Entiendo por la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que propondría una votación particular por lo que hace al caso de Juan Zepeda, pero

podría ir junto en una sola votación en lo particular, porque usted acompañaría el resto del Proyecto en sus términos, ¿cierto? _____

Siendo así, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 3.2. _____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace al caso del ciudadano Juan Manuel Zepeda Hernández, primero en el sentido del Proyecto de Resolución con la consecuencia correspondiente. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en el sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo. _____

9 votos _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobado en lo particular por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1351/2018) Pto. 3.2 _____

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

INE/CG1351/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016 Y
SU ACUMULADO
UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

QUEJOSOS: MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ,
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO
DEL TRABAJO.

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ; ELVERT PINEDA BUCIO; ISA
CORPORATIVO, S.A. DE C.V.; EL UNIVERSAL,
COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE
C.V. Y ADRIÁN GUTIÉRREZ PÉREZ.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ Y LOS PARTIDOS, ACCIÓN NACIONAL Y DEL TRABAJO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ; ELVERT PINEDA BUCIO; ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.; EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Y ADRIÁN GUTIÉRREZ PÉREZ, CON MOTIVO DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES GENERADAS POR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVA DEL PRIMERO DE LOS DENUNCIADOS, EN SU CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016 Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INE	Instituto Nacional Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

IEEM	Instituto Electoral del Estado de México
Comisión	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
Sala Especializada	Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE.
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
PAN	Partido Acción Nacional
PT	Partido del Trabajo.
PRD	Partido de la Revolución Democrática
El Universal	El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

I. DENUNCIA.¹ El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la *UTCE*, escrito de queja signado por Maribel Hernández Cruz, por propio derecho, en contra del entonces Diputado Local en el Estado de México, Juan Manuel Zepeda Hernández, por la presunta violación a las reglas para la rendición de informes de labores por parte de los servidores públicos por cuanto hace a extraterritorialidad y contenido de la publicidad difundida; promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

Lo anterior, derivado de la difusión del primer informe de labores legislativas del mencionado diputado, a través de:

- a) Un anuncio espectacular colocado en Avenida Pantitlán, esquina con Avenida Vicente Villada, colonia Vicente Villada, en Netzahualcóyotl, Estado de México;
- b) Un anuncio publicitario colocado en el transborde de la estación Pantitlán hacia la Línea A, ambas, correspondientes al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México, y
- c) Propaganda visible en el portal de Internet correspondiente al diario *El Universal* (www.eluniversal.com.mx)

Por este motivo, solicitó que el dictado de medidas cautelares.

II. REGISTRO DE QUEJA, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN.² Mediante proveído de la misma fecha, se registró el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave **UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016**, y se ordenó el inicio de las diligencias de investigación preliminares necesarias.

¹ Visible a hojas 1 a 7 del primer tomo del expediente.

² Visible a hojas 8 a 23 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Verificación del contenido del portal de internet del periódico <i>El Universal</i> .	No es necesario, por ser implementada por el personal de la <i>UTCE</i> .	El 25/10/2016 se elaboró acta circunstanciada. ³
Solicitud de ejercicio de la función de Oficialía Electoral a efecto de realizar la inspección ocular de la propaganda denunciada.	El desahogo se llevó a cabo por el personal de las Juntas Distritales 30 en Nezahualcótl, Estado de México, notificado mediante oficio INE-UT/11351/2016, ⁴ y 11 en la Ciudad de México, notificado a través del oficio UT/11344/2016, ⁵ ambos casos el 26/10/2016.	El personal de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del <i>INE</i> en la Ciudad de México remitió el acta INE/JD11/CM/0002/2016. ⁶ El personal de la 30 Junta Distrital Ejecutiva del <i>INE</i> , en el Estado de México, remitió el acta CIRC11/JDE30/MÉX/24-10-16. ⁷
Requerimiento de información a Juan Manuel Zepeda Hernández, relacionado con su Primer Informe de Actividades Legislativas y la propaganda utilizada para su difusión.	Oficio INE-UT/11346/2016, notificado el 26/10/2016. ⁸	Escrito de 27/10/2016, ⁹ señalando que el informe se realizó el 25/10/2016, con reuniones en Nezahualcóyotl, Almoloya del Río y Malinalco. Indicó que las personas con las que contrató la difusión de propaganda alusiva referido informe fueron: -Elvert Pineda Bucio -Victor Hugo Chaires Arcos - Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V. ¹⁰
Requerimiento de información al Presidente de la LIX Legislatura del Estado de México, relacionado con el informe de labores legislativas de Juan Manuel Zepeda y la propaganda utilizada para su difusión.	Oficio INE-UT/11347/2016, notificado el 26/10/2016. ¹¹	Oficio MABR/032/2016 ¹²

³ Visible en las páginas 27 a 37 del primer tomo del expediente.

⁴ Visible en la página 52 del primer tomo del expediente.

⁵ Visible en la página 53 del primer tomo del expediente.

⁶ Visible en las páginas 43 a 51 y 144 a 151 del primer tomo del expediente.

⁷ Visible en las páginas 73 a 79 y 315 a 320 del primer tomo del expediente.

⁸ Visible en la página 41 del primer tomo del expediente.

⁹ Visible en las páginas 105 a 129 y 193 a 240, del primer tomo del expediente.

¹⁰ Visible en las páginas 105 a 129 del primer tomo del expediente.

¹¹ Visible en la página 42 del primer tomo del expediente.

¹² Visible en las páginas 157 a 192 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Requerimiento de información al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro de la Ciudad de México), relacionado con la colocación de publicidad alusiva al primer informe de labores legislativas de Juan Manuel Zepeda, en las instalaciones de dicho servicio público.	Oficio INE-UT/11342/2016, notificado el 26/10/2016. ¹³	Oficio GJ/005822/2016, a través del cual el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo informó que la empresa responsable de la publicidad en las instalaciones donde se brinda ese servicio es Isa Corporativo, S.A. de C.V. ¹⁴
Requerimiento de información al representante legal de <i>El Universal</i> , relacionado con la inserción de un banner alusivo al informe de labores legislativa de Juan Manuel Zepeda Hernández, en la publicación digital de dicho medio de comunicación.	Oficio INE-UT/11341/2016, notificado el 27/10/2016. ¹⁵	Escrito de 27/10/2016, señalando que la inserción la solicitó Adrián Gutiérrez Pérez, por parte del Grupo Parlamentario del <i>PRD</i> de la LIX Legislatura del Estado de México. La difusión inició el 19 y terminaría el 30 de octubre de dos mil dieciséis. ¹⁶

Asimismo, se determinó escindir la queja por cuanto hace a la presunta infracción relacionada con actos anticipados de precampaña y/o campaña y remitirla al *IEEM* para que, en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en Derecho corresponda, toda vez que es esa autoridad quien se encuentra encargada de la organización de los comicios en aquella entidad federativa.

Dicho proveído fue confirmado por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-178/2016.¹⁷

III. ADMISIÓN DE LA DENUNCIA, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE PROPUESTA SOBRE LAS SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.¹⁸ Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la denuncia y se reservó el emplazamiento a las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

¹³ Visible en la página 54 del primer tomo del expediente.

¹⁴ Visible en las páginas 80 a 89 del primer tomo del expediente.

¹⁵ Visible en la página 55 del primer tomo del expediente.

¹⁶ Visible en las páginas 91 y 91, y 130 a 143 del primer tomo del expediente.

¹⁷ Visible en las páginas 368 a 390 del primer tomo del expediente.

¹⁸ Visible en las páginas 152 a 155 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Por último, se acordó remitir la propuesta sobre la solicitud de medidas cautelares a la *Comisión*, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo conducente.

IV. SESIÓN DE LA COMISIÓN. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la *Comisión* celebró su Septuagésima Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, donde aprobó el acuerdo **ACQyD-INE-128/2016**,¹⁹ relativo a la solicitud de medidas cautelares realizada por Maribel Hernández Cruz, en los siguientes términos:

A C U E R D O

PRIMERO. Se declara **procedente** la adopción de medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la difusión de propaganda **fija** y de **internet** denunciada, relativa al primer informe de labores legislativas del Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, en términos de lo razonado en el considerando **CUARTO**.

...

El primero de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió escrito de quien se ostentó como apoderado legal de Isa Corporativo S.A. de C.V.,²⁰ por medio del cual informó que se había retirado la publicidad denunciada de los ubicado en el Sistema de Transporte Colectivo, en específico de la estación Pantitlán.

El tres de noviembre de dos mil dieciséis, Elvert Pineda Bucio, informó el cumplimiento dado al acuerdo de medidas cautelares.²¹

En esa misma fecha, la *Sala Superior*, mediante sentencia dictada en el expediente **SUP-REP- 179/2016**,²² confirmó el acuerdo **ACQyD-INE-128/2016**.

El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el representante legal de *El Universal*, comunicó el cumplimiento dado al acuerdo de medidas cautelares.²³

V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveídos dictados el quince²⁴ de noviembre y uno²⁵ de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó realizar las siguientes diligencias:

¹⁹ Visible en las páginas 245 a 295 del primer tomo del expediente.

²⁰ Visible en las páginas 361 a 364 del primer tomo del expediente.

²¹ Visible en las páginas 392 a 394 del primer tomo del expediente.

²² Visible en las páginas 396 a 412 del primer tomo del expediente.

²³ Visible en las páginas 414 y 415 del primer tomo del expediente.

²⁴ Visible en las páginas 418 a 423 del primer tomo del expediente.

²⁵ Visible en las páginas 482 a 487 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo 15/11/2016 Requerimiento a <i>El Universal</i> , solicitando la factura generada con motivo del pago del servicio de <i>banner</i> alusivo al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.	Oficio INE-UT/11840/2016 ²⁶ Notificado el 17/11/2016	Escrito de 23/11/2016 ²⁷ Señala que el cliente pagó por anticipado y no mandó datos de facturación por lo que se procedió a factura a nombre de <i>Público en general</i> .
Acuerdo 15/11/2016 Requerimiento a Isa Corporativo, solicitando se aclarara el nombre de su representante legal; de la persona que contrató la publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.	Oficio INE-UT/11841/2016 ²⁸ Notificado el 17/11/2016	Escrito de 22/11/2016 ²⁹ Señala que: <ul style="list-style-type: none"> • Jaime Rivas Cruz, sí es apoderado legal de la compañía y adjunta copia simple de la escritura pública 22,579, expedida por el Notario Público 222 en el Distrito Federal. • La publicidad fue contratada por Elvert Pineda Bucio. Adjuntó copia simple del contrato y factura que amparan su dicho e impresiones fotográficas de la campaña de publicidad.
Acuerdo 15/11/2016 Requerimiento a Juan Manuel Zepeda Hernández, a efecto de que precisara el tipo de publicidad que contrató con Víctor Hugo Chaires Arcos y Anunciante del Oriente, S.A. de C.V., así como el domicilio de este último.	Oficio INE-UT/11839/2016 ³⁰ Notificado el 17/11/2016	No contestó

²⁶ Visible en las páginas 433 a 436 del primer tomo del expediente.

²⁷ Visible en las páginas 471 a 481 del primer tomo del expediente.

²⁸ Visible en las páginas 425 a 432 del primer tomo del expediente.

²⁹ Visible en las páginas 441 a 470 del primer tomo del expediente.

³⁰ Visible en las páginas 438 y 439 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo de 1/12/2016 Requerimiento al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a efecto de que precise la delegación o municipio en donde se encuentran las estaciones: Pantitlán, Cuatro Caminos, Zaragoza, Guelatao, La Paz, Ecatepec y Ciudad Azteca.	Oficio INE/12240/2016 ³¹	Oficio GJ/006508/2016 ³² El Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) proporcionó el domicilio y mapa de localización de las estaciones Pantitlán, Cuatro Caminos, Zaragoza, Guelatao, La Paz, Ecatepec y Ciudad Azteca.
Acuerdo de 1/12/2016 Se requirió nuevamente a Juan Manuel Zepeda Hernández, a efecto de que precisara el tipo de publicidad que contrataron Víctor Hugo Chaires Arcos y Anunciante del Oriente, S.A. de C.V., así como el domicilio de este último.	Oficio INE-UT/12239/2016 ³³	Escrito de 07/12/2016 ³⁴ Proporcionó copia simple de los contratos celebrados con Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V. ³⁵ y Víctor Hugo Chaires ³⁶ Arcos, en relación a la publicidad alusiva al informe de labores del denunciado. Proporcionó el domicilio solicitado.

VI. NUEVAS QUEJAS.³⁷ El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió en la *UTCE* el oficio TEEM/SGA/1711/2016, a través del cual, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia y el original de todas las constancias del expediente PES/10/2016, al considerar que este Instituto es la autoridad competente para la sustanciación y resolución de las quejas ahí planteadas.

Del estudio de las constancias que integran el expediente PES/10/2016, se desprende que los representantes propietarios de los **partidos del Trabajo y Acción Nacional** ante el Consejo General del *IEEM*, denunciaron a Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces Diputado Local de la LIX Legislatura del Estado de México, por la probable violación a lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la *Constitución Federal* y 242, párrafo quinto, de la *LGPE*, por la presunta violación a las reglas para la rendición de informes de labores, promoción personalizada y uso de recursos públicos.

³¹ Visible en la página 483 del primer tomo del expediente.

³² Visible en las páginas 850 a 857 del segundo tomo del expediente.

³³ Visible en las páginas 876 a 884 del segundo tomo del expediente.

³⁴ Visible en las páginas 858 y 860 del segundo tomo del expediente.

³⁵ Visible en las páginas 861 a 864 del segundo tomo del expediente.

³⁶ Visible en las páginas 865 a 868 del segundo tomo del expediente.

³⁷ Visible en hojas 323 a 327 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Asimismo, la probable violación se realizó a través de colocación de propaganda relacionada con la difusión del informe de labores del entonces Diputado Local, en diversos distritos del Estado de México y presumiblemente en la Ciudad de México.

VII. REGISTRO DE QUEJAS, ADMISIÓN, ACUMULACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.³⁸ En el acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se registró el expediente **UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016**, formado con motivo de las denuncias a que se refiere el antecedente IV, y se ordenó su acumulación al diverso **UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016**.

Finalmente, se declararon improcedentes las solicitudes de adopción de medidas cautelares, toda vez que ya existía un pronunciamiento de la *Comisión* al aprobar el acuerdo ACQyD-INE-128/2016, respecto de los mismos hechos.

VIII. DESISTIMIENTO DE MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, Maribel Hernández Cruz, presentó escrito de desistimiento de la queja que dio origen al procedimiento ordinario sancionador **UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016**, al considerar que había quedado satisfecha su pretensión con el dictado de las medidas cautelares.

En relación al escrito de referencia, mediante acuerdo de diecinueve del mismo mes y año, se reservó el pronunciamiento tocante a la citada solicitud hasta el momento procesal oportuno; es decir, hasta que se emita la resolución de fondo.

IX. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveídos de trece de enero;³⁹ nueve de febrero;⁴⁰ seis⁴¹ y veinticuatro⁴² de abril; treinta y uno de mayo;⁴³ veintiocho de junio;⁴⁴ trece de julio;⁴⁵ treinta y uno de agosto;⁴⁶ veintiséis de octubre;⁴⁷ tres,⁴⁸ siete⁴⁹ y veintinueve⁵⁰ de noviembre; veintiséis⁵¹ de diciembre de

³⁸ Visible en las páginas 842 a 848 del segundo tomo del expediente.

³⁹ Visible en las páginas 898 a 901 del segundo tomo del expediente.

⁴⁰ Visible en las páginas 922 a 926 del segundo tomo del expediente.

⁴¹ Visible en las páginas 396 a 939 del segundo tomo del expediente.

⁴² Visible en las páginas 949 a 951 del segundo tomo del expediente.

⁴³ Visible en las páginas 964 a 968 del segundo tomo del expediente.

⁴⁴ Visible en las páginas 991 a 999 del segundo tomo del expediente.

⁴⁵ Visible en las páginas 1018 a 1021 del segundo tomo del expediente.

⁴⁶ Visible en las páginas 1052 a 1054 del segundo tomo del expediente.

⁴⁷ Visible en las páginas 1081 a 1084 del segundo tomo del expediente.

⁴⁸ Visible en las páginas 1091 a 1094 del segundo tomo del expediente.

⁴⁹ Visible en las páginas 1096 a 1099 del segundo tomo del expediente.

⁵⁰ Visible en las páginas 1166 a 1170 del segundo tomo del expediente.

⁵¹ Visible en las páginas 1208 a 1213 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

dos mil diecisiete y dieciséis de enero⁵² de dos mil dieciocho, se ordenó realizar las siguientes diligencias:

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
<p>Acuerdo de 13/01/2017</p> <p>Requerimiento de información a Adrián Gutiérrez Pérez, a efecto de que señale:</p> <p>El motivo por el que contrató la publicación de un <i>banner</i> con publicidad alusiva al primer informe de actividades legislativas del denunciado en el periódico <i>El Universal</i>; el origen de los recursos con los que se pagó y la persona que lo instruyó para realizarla.</p>	<p>No se localizó y por lo tanto no se notificó.</p> <p>Lo anterior se hizo constar en el acta CIRC 003/JD20/MEX/20-01-2017</p>	<p>No aplica</p>
<p>Acuerdo de 13/01/2017</p> <p>Requerimiento al Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de México, para que informara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si Adrián Gutiérrez Pérez labora o laboró en el Grupo Parlamentario del <i>PRD</i>. - Si existe algún acuerdo entre dicho órgano legislativo y <i>El Universal</i> para difusión de publicidad alusiva a informes de labores de sus legisladores. - Si el Grupo Parlamentario del <i>PRD</i>, solicitó recursos para publicación de un <i>banner</i> alusivo al informe de labores del denunciado en el periódico <i>El Universal</i>. 	<p>En el órgano legislativo no quisieron recibir el oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, argumentando que no existe tal figura.</p> <p>En razón de lo anterior, se emitió oficio INE-JLE-MEX/VE/0082/2017,⁵³ dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado de México.</p>	<p>Oficio SAP/CJ/039/2017⁵⁴</p> <p>La presidenta de la diputación permanente de la LIX Legislatura informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adrián Gutiérrez Pérez, no labora, ni laboró para dicho poder legislativo. - Que no celebró convenio con <i>El Universal</i>. - No existe factura por concepto de la publicación un <i>banner</i> alusivo al informe de labores del denunciado en el periódico <i>El Universal</i>.

⁵² Visible en las páginas 1244 a 1248 del segundo tomo del expediente.

⁵³ Visible en la página 917 del segundo tomo del expediente.

⁵⁴ Visible en la página 904 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo de 09/02/2017 Requerimiento de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del <i>PRD</i> en LIX Legislatura del Estado de México, para que informara: - El vínculo que existe con Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/1097/2017 ⁵⁵	No se recibió respuesta
Acuerdo de 09/02/2017 Requerimiento de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, a efecto de que proporcionara datos de localización de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE/1096/2017 ⁵⁶	Oficio INE/DSL/SC/3240/2017 ⁵⁷ Proporcionó datos de localización de Adrián Gutiérrez Pérez.
Acuerdo de 06/04/2017 Segundo requerimiento de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del <i>PRD</i> en LIX Legislatura del Estado de México, para que informara: - El vínculo que existe con Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/3168/2017 ⁵⁸	Escrito de Juan Manuel Zepeda Hernández en su carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del <i>PRD</i> . ⁵⁹ Proporciona el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez, señalando que no existe relación con el Grupo Parlamentario.
Acuerdo de 24/04/2017 Requerimiento de información a Adrián Gutiérrez Pérez, en relación al <i>banner</i> publicado en la página de internet de <i>El Universal</i> .	INE-UT/3599/2017 ⁶⁰	No respondió.
Acuerdo de 31/05/2017 Requerimiento de información a Adrián Gutiérrez Pérez en relación a la publicación de un <i>banner</i> en el periódico <i>El Universal</i> .	INE-UT/4961/2017 ⁶¹ Esta diligencia se repondría mediante acuerdo de 28/06/2017 INE-UT/5542/2017 ⁶²	No dio respuesta.

⁵⁵ Visible en la página 934 del segundo tomo del expediente.

⁵⁶ Visible en la página 928 del segundo tomo del expediente.

⁵⁷ Visible en las páginas 929 a 931 del segundo tomo del expediente.

⁵⁸ Visible en la página 943 del segundo tomo del expediente.

⁵⁹ Visible en las páginas 945 a 948 del segundo tomo del expediente.

⁶⁰ Visible en las páginas 953 a 960 del segundo tomo del expediente.

⁶¹ Visible en las páginas 986 a 990 del segundo tomo del expediente.

⁶² Visible en las páginas 1001 a 1016 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo de 31/05/2017 Requerimiento de información a <i>El Universal</i> en relación a la factura generada con motivo de la publicación de un <i>banner</i> en su página de internet.	INE-UT/4962/2017 ⁶³	Escrito de 07/06/2017, ⁶⁴ señala que no ha recibido datos de facturación.
Acuerdo de 13/07/2017 Requerimiento de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relacionado con el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/5795/2017 ⁶⁵	Oficio SG/SAVD/JSCOSNAV/13581/2017 ⁶⁶
Acuerdo de 13/07/2017 Requerimiento de información al Instituto Mexicano del Seguro Social, relacionado con el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/5796/2017 ⁶⁷	Oficio 0955034AC2/1425 ⁶⁸
Acuerdo de 13/07/2017 Requerimiento de información a la Secretaría de Desarrollo Social, relacionado con el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/5797/2017 ⁶⁹	Oficio 510.5C.-6125 ⁷⁰
Acuerdo de 13/07/2017 Requerimiento de información al Secretaría de Relaciones Exteriores, relacionado con el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/5798/2017 ⁷¹	Oficio ASJ-28722 ⁷²
Acuerdo de 13/07/2017 Requerimiento de información a <i>UTF</i> , relacionado con el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez.	INE-UT/5799/2017 ⁷³	Oficio INE-UTF/DG/12281/17 ⁷⁴

⁶³ Visible en las páginas 970 a 981 del segundo tomo del expediente.

⁶⁴ Visible en la página 983 del segundo tomo del expediente.

⁶⁵ Visible en la página 1034 del segundo tomo del expediente.

⁶⁶ Visible en la página 1039 del segundo tomo del expediente.

⁶⁷ Visible en la página 1030 del segundo tomo del expediente.

⁶⁸ Visible en la página 1040 del segundo tomo del expediente.

⁶⁹ Visible en la página 1024 del segundo tomo del expediente.

⁷⁰ Visible en la página 1042 del segundo tomo del expediente.

⁷¹ Visible en la página 1027 del segundo tomo del expediente.

⁷² Visible en la página 1045 del segundo tomo del expediente.

⁷³ Visible en la página 1033 del segundo tomo del expediente.

⁷⁴ Visible en la página 1049 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo de 31/08/2017 Requerimiento de información al Secretario de Relaciones Exteriores.	INE-UT/7069/2017 ⁷⁵	Oficio ASJ-26096 ⁷⁶
Acuerdo de 31/08/2017 Requerimiento de información al Titular de la UTF.	INE-UT/7070/2017 ⁷⁷	Oficio INE/UTF/DG/DMT/13799/2017 ⁷⁸
Acuerdo de 31/08/2017 Requerimiento de información al Secretario de Desarrollo Social.	INE-UT/7068/2017 ⁷⁹	Oficio 510.5C-7952 ⁸⁰
Acuerdo de 31/08/2017 Requerimiento de información al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.	INE-UT/7067/2017 ⁸¹	Oficio 0955034AC2/1942. ⁸²
Acuerdo de 26/10/2017 Requerimiento de información a Juan Manuel Zepeda Hernández, en relación al procedimiento para colocar y retirar el <i>banner</i> denunciado en el portal de internet de <i>El Universal</i> .	INE-UT/8083/2017 ⁸³	No dio respuesta.
Acuerdo de 03/11/2017 Requerimiento de información a Víctor Hugo Chaires Arcos.	Notificado el 14/11/2017, mediante estrados ⁸⁴	Escrito de 14/11/2017 No ha recibido pago por los servicios realizados.
Acuerdo de 03/11/2017 Requerimiento de información a Elvert Pineda Bucio.	INE-UT/8312/2017 ⁸⁵	Escrito de 14/11/2018 Señalando que no ha recibido pago por lo servicios realizados.
Acuerdo de 03/11/2017 Requerimiento de información a Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V.	No se pudo notificar	No aplica.

⁷⁵ Visible en la página 1055 del segundo tomo del expediente.

⁷⁶ Visible en la página 1044 del segundo tomo del expediente.

⁷⁷ Visible en la página 1059 del segundo tomo del expediente.

⁷⁸ Visible en la página 1073 del segundo tomo del expediente.

⁷⁹ Visible en la página 1062 del segundo tomo del expediente.

⁸⁰ Visible en la página 1076 del segundo tomo del expediente.

⁸¹ Visible en la página 1066 del segundo tomo del expediente.

⁸² Visible en la página 1078 del segundo tomo del expediente.

⁸³ Visible en la página 1088 del segundo tomo del expediente.

⁸⁴ Visible en las páginas 1112 a 1125 del segundo tomo del expediente.

⁸⁵ Visible en las páginas 1154 a 1166 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Diligencia	Notificación	Respuesta/resultado
Acuerdo de 07/11/2017 Requerimiento de información a Juan Manuel Zepeda Hernández. Se reiteró la solicitud realizada mediante proveído de 26/10/2017.	INE-UT/8394/2017 ⁸⁶	Escrito de 13/11/2017 ⁸⁷ La solicitud de contratación y retiro del banner en El Universal, se realizaron vía correo electrónico.
Acuerdo de 29/11/2017 Se repusieron las constancias de notificación correspondientes a Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V.	INE-UT/8941/2017 ⁸⁸	Escrito de 13/12/2017 ⁸⁹ No ha recibido pago por los servicios realizados.
Acuerdo de 26/12/2017 Requerimiento de información a Víctor Hugo Chaires Arcos.	INE-UT/9700/2017 ⁹⁰	Escrito de 04/01/2017 ⁹¹
Acuerdo de 26/12/2017 Requerimiento de información a Elvert Pineda Bucio.	INE-UT/9701/2017 ⁹²	Escrito de 05/01/2018. ⁹³
Acuerdo de 26/12/2017 Requerimiento de información a Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V.	INE-UT/9699/2017 ⁹⁴	Escrito de 05/12/2017. ⁹⁵
Acuerdo de 16/01/2018 Requerimiento de información a Juan Manuel Zepeda Hernández.	INE-UT/0579/2018 ⁹⁶	Escrito de 25/01/2018 Señalando que Adrián Gutiérrez Pérez, es un colaborador externo de su equipo político. Los pagos por concepto de publicidad al periódico <i>El Universal</i> se hicieron a través de depósitos bancarios.

X. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO.⁹⁷ Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a los denunciados, para que, en un plazo de cinco días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que estimaran pertinentes, al tiempo que se requirió

⁸⁶ Visible en la página 1131 del segundo tomo del expediente.
⁸⁷ Visible en las páginas 1127 a 1129 del segundo tomo del expediente.
⁸⁸ Visible en las páginas 1176 a 1183 del segundo tomo del expediente.
⁸⁹ Visible en las páginas 1193 a 1206 del segundo tomo del expediente.
⁹⁰ Visible en las páginas 1234 a 1241 del segundo tomo del expediente.
⁹¹ Visible en la página 1216 del segundo tomo del expediente.
⁹² Visible en las páginas 1225 a 1232 del segundo tomo del expediente.
⁹³ Visible en las páginas 1214 a 1215 del segundo tomo del expediente.
⁹⁴ Visible en las páginas 1219 a 1222 del segundo tomo del expediente.
⁹⁵ Visible en la página 1243 del segundo tomo del expediente.
⁹⁶ Visible en las páginas 1250 a 1254 del segundo tomo del expediente.
⁹⁷ Visible en las páginas 1257 a 1263 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

información relacionada con la capacidad económica de Elvert, Pineda Bucio, Adrián Gutiérrez Pérez, Isa, Corporativo, S.A. de C.V. y *El Universal*.

Sujeto	Oficio	Citatorio – Cédula Plazo	Contestación al emplazamiento
Juan Manuel Zepeda Hernández	INE-UT/2116/2018 ⁹⁸	Citatorio: 05/03/2018 Cédula de notificación: 06/03/2018	Escrito de 13/03/2018 ⁹⁹
Elvert Pineda Bucio	INE-UT/2121/2018 ¹⁰⁰	Citatorio: 07/03/2018 Cédula de notificación: 08/03/2018	Escrito de 15/03/2018 ¹⁰¹
Isa Corporativo, S.A. de C.V.	INE-UT/2117/2018 ¹⁰²	Citatorio: 05/03/2018 Cédula de notificación: 06/03/2018	Escrito de 13/03/2018 ¹⁰³
<i>El Universal</i>	INE-UT/2118/2018 ¹⁰⁴	Cédula de notificación: 05/03/2018 Se entendió con persona autorizada.	Escrito de 09/03/2018 ¹⁰⁵
Adrián Gutiérrez Pérez	INE-UT/2120/2018 ¹⁰⁶	Citatorio: 08/03/2018 Cédula 09/03/2018	Escrito de 24/03/2018 ¹⁰⁷ EXTEMPORANEO
<i>UTF</i>	INE-UT/2151/2018 ¹⁰⁸	Notificado el 05/03/2018	Oficio ¹⁰⁹ INE/UTF/DG/DMR/164/2018, por medio del cual adjunto el similar 103-05-04-2018-0115

XI. ALEGATOS.¹¹⁰ Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

⁹⁸ Visible en las páginas 1282 a 1288 del segundo tomo del expediente.

⁹⁹ Visible en las páginas 1325 a 1337 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁰ Visible en las páginas 1373 a 1382 del segundo tomo del expediente.

¹⁰¹ Visible en las páginas 1383 a 1392 del segundo tomo del expediente.

¹⁰² Visible en las páginas 1272 a 1281 del segundo tomo del expediente.

¹⁰³ Visible en las páginas 1338 a 1340, anexos de 1341 a 1362 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁴ Visible en las páginas 1266 a 1270 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁵ Visible en las páginas 1294 y 1295, sus anexos en 1296 a 1307 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁶ Visible en las páginas 1365 a 1372 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁷ Visible en las páginas 1428 a 1437 del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁸ Visible en la página 1271, del segundo tomo del expediente.

¹⁰⁹ Visible en las páginas 1308 a 1324 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁰ Visible en las páginas 1393 a 1397 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Sujeto	Oficio	Citatorio – Cédula	Contestación de alegatos
<i>El Universal</i>	INE-UT/4739/2018 ¹¹¹	Cédula de notificación: 23/04/2018 Se entendió con persona autorizada.	Escrito de 25/04/2018 ¹¹²
Juan Manuel Zepeda Hernández	INE-UT/4740/2018 ¹¹³	Cédula de notificación: 20/04/2018 Se entendió con persona autorizada.	Escrito de 27/04/2018 ¹¹⁴
Elvert Pineda Bucio	INE-UT/4741/2018 ¹¹⁵	Cédula de notificación: 25/04/2018 Se entendió con persona autorizada.	No dio respuesta
Isa Corporativo, S.A. de C.V.	INE-UT/4748/2018 ¹¹⁶	Citatorio: 23/04/2018 Cédula de notificación: 24/04/2018	Escrito de 02/05/2018 ¹¹⁷
Adrián Gutiérrez Pérez	INE-UT/4745/2018 ¹¹⁸	Citatorio: 23/04/2018 Cédula de notificación: 24/04/2018	No dio respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/4743/2018 ¹¹⁹	Citatorio: 23/04/2018 Cédula de notificación: 24/04/2018	No dio respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/4744/2018 ¹²⁰	Citatorio: 23/04/2018 Cédula de notificación: 24/04/2018	No dio respuesta
Maribel Hernández Cruz	Fijación en estrados del <i>INE</i> el 17/04/2018 ¹²¹		No dio respuesta

XII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

¹¹¹ Visible en las páginas 1405 a 1409 del segundo tomo del expediente.

¹¹² Visible en las páginas 1438 y 1439 del segundo tomo del expediente.

¹¹³ Visible en las páginas 1399 a 1403 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁴ Visible en las páginas 1444 a 1451 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁵ Visible en las páginas 1455 a 1457 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁶ Visible en las páginas 1419 a 1427 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁷ Visible en las páginas 1478 a 1498 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁸ Visible en las páginas 1410 a 1418 del segundo tomo del expediente.

¹¹⁹ Visible en las páginas 1468 a 1477 del segundo tomo del expediente.

¹²⁰ Visible en las páginas 1458 a 1467 del segundo tomo del expediente.

¹²¹ Visible en la página 1398 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

XIII. COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión*, aprobó el proyecto de resolución, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos les sean turnados por la *Comisión*, conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En la especie, se actualiza la competencia de este *Consejo General* para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se denuncia el probable incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, párrafo octavo de la *Constitución Federal* y 242, párrafo 5 de la *LGIPE*, por la supuesta promoción personalizada de Juan Manuel Zepeda Hernández, en ese entonces Diputado Local, a través de la supuesta difusión de propaganda y publicidad en una revista, bardas, estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro de la Ciudad de México) y anuncios espectaculares, distribuidos en el territorio del Estado de México y la Ciudad de México, así como en la versión electrónica del periódico *El Universal*, alusivos a su Primer Informe de Actividades Legislativas.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro *COMPETENCIA. CORRESPONDE LA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CONOCER DE LAS DENUNCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RINDE*.

Además, la *Sala Superior*, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave *SUP-REP-178/2016*, conformó la competencia de este Instituto para conocer del presente asunto, en los siguientes términos:

Ahora bien, cuando se presenta una queja o denuncia, por la presunta difusión de propaganda alusiva al informe de gobierno de un servidor público, fuera del ámbito de responsabilidad del propio servidor público, la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Mexicanos y 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales se establece la prohibición de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, difundan propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que implique la promoción personalizada de quien desempeñe un cargo público, y se precisen las reglas a que debe sujetarse la difusión de sus informes anuales de labores o gestión para que no sea considerada como propaganda electoral, lleva a concluir que el Instituto Nacional Electoral, es competente para conocer y resolver las denuncias sobre hechos que involucren simultáneamente la probable violación a la referida prohibición constitucional y la indebida difusión de informes sobre el desempeño de cargos públicos fuera del territorio estatal que corresponde al ámbito geográfico de su responsabilidad, en un medio de comunicación nacional o con impacto nacional, con independencia de que su difusión incida o no en un proceso electoral federal. Lo anterior, dado que la infracción a las reglas sobre límites temporales o territoriales de la difusión de informes de gobierno constituye una falta a la normativa electoral en sí misma, ya sea en materia de actos anticipados de precampaña y/o campaña, o respecto de los recursos empelados para la difusión correspondiente.
[Énfasis añadido]

SEGUNDO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ. El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIFE*, en relación con el diverso 46, párrafo 2 del *Reglamento de Quejas*, establecen que las causales de improcedencia que produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público.

En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la *LGIFE* se actualiza cuando *habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia.*

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia.

Por lo tanto, en el presente apartado se estudiará la procedencia o no de la solicitud de desistimiento presentada por Maribel Hernández Cruz, puesto que, de actualizarse, conllevaría consigo una causal de improcedencia y por ende de sobreseimiento en el presente asunto.

En efecto, el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió en el *UTCE*, escrito por medio del cual Maribel Hernández Cruz,¹²² se desistió de la queja interpuesta en contra de Juan Manuel Zepeda Hernández.

¹²² Visible en la página 886 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En atención a dicha petición, mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se acordó reservar el pronunciamiento tocante a la citada solicitud hasta el momento procesal oportuno; es decir, hasta que se emitiera la resolución de fondo ; ya que, de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), 51, párrafos 1, inciso I) y 2, 459 y 469, de la *LGIFE*, la facultad para emitir todas las resoluciones, está conferida al *Consejo General*, como máximo órgano de dirección del Instituto.

En ese sentido, en relación a dicha petición este *Consejo General*, estima que con independencia de que exista una solicitud de desistimiento de la queja por parte de Maribel Hernández Cruz, **se debe entrar al estudio del fondo del asunto**, puesto que la denuncia de referencia, no fue el único medio de alerta hacia esta autoridad electoral sobre la posible comisión de infracciones a la normativa electoral derivadas de la difusión de publicidad alusiva al primer informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández como Diputado Local en el Estado de México, siendo que los partidos **Acción Nacional y del Trabajo**, también denunciaron al referido servidor público, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, Maribel Hernández Cruz, denunció Juan Manuel Zepeda Hernández, en su carácter de Diputado Local de la LIX Legislatura en el Estado de México, pues señaló que al publicitar su informe de labores incurrió, según su dicho, en violaciones a las reglas para la rendición de informes de labores, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y *actos anticipados de precampaña y/o campaña*,¹²³ documento con el cual se registró el expediente **UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016**.

Señaló que el denunciado difundió publicidad en una estación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro de la Ciudad de México) ubicada en la Ciudad de México, a saber, en el transbordo de la estación Pantitlán hacia la Línea A, un anuncio espectacular ubicado en el Estado de México y en la página de internet del periódico *El Universal*.

Durante la investigación desplegada por la *UTCE*, se tuvo conocimiento que dicha publicidad también se difundió en más ubicaciones de la estación Pantitlán, así como Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, todas ubicadas en la Ciudad de México.

¹²³ Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó escindir la investigación de los presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, al *IEEM*, al estar relacionados con el proceso electoral que en ese momento se llevaba a cabo en dicha entidad federativa.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Ahora bien, mediante oficio TEEM/SGA/1711/2016, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, remitió los autos originales del expediente PES/10/2016, iniciado con motivo de los hechos denunciados por los partidos del Trabajo y Acción Nacional, consistentes en la probable violación a lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la *Constitución Federal* y 242, párrafo 5 de la *LGIPE*, por la presunta violación a reglas para la rendición de informes de labores, promoción personalizada y uso de recursos públicos, actuaciones con las que se integró el diverso **UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016**, mismo que a su vez se acumularía al similar **UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016**.

En el caso concreto también se denunció que con motivo de la difusión del informe de labores se colocaron anuncios espectaculares en el Estado de México, pinta de bardas, exhibición de mamparas dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en la Ciudad de México y se distribuyó la revista Realidad Mexiquense.

Por lo tanto, en el presente procedimiento existe una pluralidad de denunciantes legitimados para ello, en términos del artículo 465, párrafo 1, de la *LGIPE*, para acusar las presuntas violaciones a reglas para la rendición de informes de labores, promoción personalizada y uso de recursos públicos, atribuidas a **Juan Manuel Zepeda Hernández**.

En virtud de lo cual, **no ha lugar a decretar el sobreseimiento** del procedimiento incoado, en términos de lo establecido en el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la *LGIPE*, y por ende, este **Consejo General**, se va a pronunciar respecto del fondo del asunto.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Planteamiento del caso

Del contenido de los escritos de queja, así como las investigaciones realizadas por la *UTCE*, se advierten los siguientes hechos:

- La presunta indebida promoción personalizada por parte del hoy denunciado, derivada de la difusión de propaganda y publicidad en una revista, bardas, anuncios colocados en espectaculares en la vía pública y en las estaciones

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) en la Ciudad de México, así como en la página de internet de *El Universal* alusivos a su primer informe de labores legislativas; además, del supuesto uso de recursos públicos.

2. Excepciones y defensas

Juan Manuel Zepeda Hernández, al dar contestación al emplazamiento,¹²⁴ y en vía de alegatos¹²⁵ hizo valer lo siguiente:

- En atención al escrito de desistimiento presentado por Maribel Hernández Cruz, la queja debe quedar sin materia.
- Con relación a la propaganda colocada en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), fuera del ámbito territorial, manifiesta el desconocimiento de la misma, ya que únicamente contrató la difusión alusiva a su Informe de Labores, en estaciones ubicadas dentro del territorio del Estado de México.
- La colocación de publicidad en bardas y espectaculares se realizó únicamente en el Estado de México, utilizando recursos privados.
- Respecto a la difusión de propaganda en la página de internet del periódico *El Universal*, señaló que, *debido a la característica de este medio de comunicación, resulta en una imposibilidad el hecho de poder restringir de manera territorial la difusión de información, esto obedece a que este medio de comunicación es un espacio virtual que difícilmente es posible de precisar las fronteras territoriales en sus contenidos.*

El representante legal de ***El Universal***, al dar contestación al emplazamiento,¹²⁶ y en vía de alegatos,¹²⁷ manifestó lo siguiente:

- La publicación del *banner* de 300x250 px con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, fue solicitada a través de una carta de catorce de octubre de dos mil dieciséis, enviada por Adrián Gutiérrez Pérez.

¹²⁴Visible de la página 1325 a 1337 del segundo tomo del expediente.

¹²⁵ Visible las páginas 1444 a 1451 del segundo tomo del expediente.

¹²⁶Visible de la página 1294 a 1295 del segundo tomo del expediente.

¹²⁷ Visible de la página 1438 a 1440 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Elvert Pineda Bucio, al dar contestación al emplazamiento manifestó lo siguiente:

- Mediante contrato de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, acordó con Isa Corporativo, S.A. de C.V. la colocación de publicidad fija y móvil del Primer Informe de Actividades Legislativas del Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que se encuentran en el territorio que ocupa el Estado de México.
- No se debió continuar con el procedimiento sancionador toda vez que existe un escrito de desistimiento presentado por Maribel Hernández Cruz.

Finalmente el representante legal de **ISA Corporativo, S.A. de C.V.**, en sus respectivos escritos de contestación al emplazamiento¹²⁸ y en vía de alegatos,¹²⁹ argumentó lo siguiente:

- La colocación de publicidad alusiva al primer informe de actividades legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en el transborde de la estación Pantitlán hacia la línea A del Sistema de Transporte Colectivo fue realizada con motivo del contrato celebrado con Elvert Pineda Bucio, el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis.
- Que Elvert Pineda Bucio es responsable de las instrucciones que le proporcionó en relación a la imagen, lugar de exhibición y temporalidad de la publicidad alusiva al informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández.

Adrián Gutiérrez Pérez, al dar contestación al emplazamiento manifestó lo siguiente:

- En atención al escrito de desistimiento presentado por Maribel Hernández Cruz la queja debe quedar sin materia.
- Respecto a la difusión de propaganda en la página de internet del periódico *El Universal*, señaló que, *debido a la característica de este medio de comunicación, resulta en una imposibilidad el hecho de poder restringir de manera territorial la difusión de información, esto obedece a que este medio de comunicación es un espacio virtual que difícilmente es posible de precisar las fronteras territoriales en sus contenidos.*

¹²⁸Visible de la página 1338 a 1340 del segundo tomo del expediente.

¹²⁹Visible de la página 1478 a 1481 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

- La contratación de la publicidad en el periódico *El Universal*, se realizó con recursos privados.

En relación a las **excepciones y defensas** previamente enunciadas, cabe señalar que estas cuestiones al estar directamente vinculadas con la acreditación de la posible infracción, serán atendidas al resolver el fondo del asunto, con excepción de aquella relativa al desistimiento de Maribel Hernández Cruz, toda vez que la misma ya ha sido abordada en términos de los argumentos expuestos en el Considerando SEGUNDO que antecede.

3. Controversia a dilucidar

Precisado lo anterior, en el presente procedimiento administrativo sancionador deberá esclarecerse si los sujetos denunciados transgredieron o no las disposiciones que se señalan a continuación:

- **Juan Manuel Zepeda Hernández**, por la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la *Constitución Federal*; 242, párrafo 5; 449, párrafo 1, incisos c), d) y f), de la *LGIPE*; por la probable violación a las reglas para la rendición de informes de labores en cuanto a contenido y territorialidad, promoción personalizada y uso de recursos públicos
- **A Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V.**, por la presunta violación a lo previsto en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la *Constitución Federal*; en relación con los artículos 242, párrafo 5 y 447, párrafo 1, inciso e), de la *LGIPE*, por la difusión de propaganda fuera del territorio permitido, alusiva al Primer Informe de Labores del Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, en diversas estaciones del metro en la Ciudad de México, al ser difundido fuera del Estado de México.
- **A El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. y Adrián Gutiérrez Pérez**, por la presunta violación a lo previsto en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la *Constitución Federal*; en relación con los artículos 242, párrafo 5 y 447, párrafo 1, inciso e), de la *LGIPE*; con motivo de la contratación y difusión de un *banner* de 300x250 px en la página de *internet* del periódico *El Universal*, con publicidad alusiva al Primer Informe de Labores del Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, en el Estado de México, en atención al contenido y extraterritorialidad, toda vez que dicha

página es visible fuera del ámbito de responsabilidad del referido servidor público.

4. Pruebas.

A sus escritos iniciales, los denunciantes acompañaron los siguientes medios de prueba:

Maribel Hernández Cruz aportó:

A. Documentales Privadas

- En la estructura de la queja insertó una impresión de pantalla de la página de internet del periódico *El Universal*, en donde se aprecia un *banner* con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.¹³⁰
- Una impresión fotográfica de publicidad alusiva al informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, ubicada en la estación Pantitlán hacia la Línea A, del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).¹³¹

Dichas pruebas constituyen **documentales privadas**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Por su parte, el **PT** aportó:

A. Documentales Privadas

- En la estructura del escrito de denuncia insertó una impresión fotográfica de un anuncio espectacular alusivo al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.¹³²
- Asimismo, adjuntó veintidós impresiones fotográficas de anuncios espectaculares alusivos al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, presuntamente ubicados en las siguientes direcciones:

¹³⁰ Visible en la página 3 del primer tomo del expediente.

¹³¹ Visible en las páginas 2 y 6 del primer tomo del expediente.

¹³² Visible en la página 512 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

No.	Dirección
1	Cruce Carmelo Pérez y Av. Pantitlán, Col. Vicente Villada, Nezahualcóyotl, Estado de México
2	Cruce Av. Vicente Villada y Pantitlán Col. Evolución Nezahualcóyotl, Estado de México
3	Cruce Sor Juana Inés de la Cruz y Av. Pantitlán, Col. Metropolitana, Nezahualcóyotl, Estado de México
4	Av. Tepozanes # 359, Col. La Perla Nezahualcóyotl, Estado de México
5	Av. Pantitlán y Riva Palacio, Juárez Pantitlán Nezahualcóyotl , Estado de México
6	Av. Pantitlán y Calle 7, Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México
7	Av. Nezahualcóyotl y Av. Pantitlán, Col. Agua Azul Nezahualcóyotl, Estado de México
8	Bordo de Xochiaca y Av. Las Flores Nezahualcóyotl, Estado de México
9	Bordo de Xochiaca frente a Cd. Jardín, Col. Las Flores Nezahualcóyotl, Estado de México
10	Plaza Cd. Jardín Nezahualcóyotl, Estado de México
11	Cuarta Avenida y López Mateos, Col. Benito Juárez Nezahualcóyotl, Estado de México
12	Chimalhuacán esq. Águila Negra, Col. Benito Juárez frente a Palacio Municipal Nezahualcóyotl, Estado de México
13	CRISA a la altura de Av. Tecnológico en Toluca, Estado de México
14	Paseo Toluca pasando Pilares a la altura del Tianguis El Piojo en Toluca, Estado de México
15	Paseo Toluca casi esq. Pilares Edificio color rojo es un espectacular y una Loca que cubre la pared del Edificio Rojo en Toluca, Estado de México
16	Paseo Toluca a la altura de la Lerma antes de llegar a una gasolinera.
17	Sobre Av. Las Torres antes de la desviación a San Pedro Tultepec
18	Paseo Toluca esquina Av. Tecnológico en Toluca, Estado de México
19	Vialidad Adolfo López Mateos junto a la Nissan sentido hacia Toluca, taquería Rancheros del Sur.
20	Paseo Toluca a la altura de la ex zona militar en Toluca, Estado de México
21	Paseo Toluca a la altura de Heriberto Henríquez en Toluca, Estado de México
22	Paseo Toluca a pasando el Sanatorio Venecia casi Llegando a Benito Juárez en Toluca, Estado de México

- Finalmente, dentro del referido escrito de queja se insertan un par de ligas de internet en las que presuntamente se puede apreciar información relativa a la exhibición de publicidad del Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en estaciones de Metro de la Ciudad de México.

No.	Página de internet
1	https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2016/10/26/opinion-los-excesos-de-los-aspirantes-al-gobierno-de-edomex/

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

No.	Página de internet
2	https://www.teotihuacan-en-linea.com/2016/10/no-son.claros-los-recursos-de-promocion.html

Dichas pruebas constituyen **documentales privadas**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la *LG/PE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

El **PAN** aportó:

- En la estructura del escrito de denuncia insertaron treinta impresiones fotográficas de anuncios espectaculares y bardas con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.

No.	Dirección	Tipo de estructura
1	Paseo Tollócan, baja velocidad, entre Manuel Ma. Contreras y Manuel Sandoval Vallarta, colonia Vértice, Toluca de Lerdo, Estado de México.	Espectacular
2	Calle Manuel J. Clouthier, casi esquina con andador 18, colonia Las Marinas, Metepec, Estado de México.	Espectacular
3	Avenida Adolfo López Mateos, casi esquina Guillermo Prieto, colonia Miguel Hidalgo, Toluca de Lerdo, Estado de México.	Espectacular
4	Avenida Morelos, casi esquina con calle Villada, colonia Centro, Toluca, Estado de México.	Espectacular
5	Avenida Pino Suárez, casi esquina con avenida Las Torres, Toluca, Estado de México.	Espectacular
6	Avenida Cuauhtémoc y calle Las Flores, colonia Ayotla, Estado de México.	Espectacular
7	Carretera Federal México – Cuautla, a la altura de la calle Vicente Guerrero, para entrar a Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México.	Espectacular
8	Carretera Federal México – Cuautla, (camino Ixtapaluca – Amecameca), poco antes de llegar a la avenida Covarrubias, Chalco, Estado de México.	Espectacular
9	Carretera México – Puebla Km 25, avenida Bellavista, Ixtapaluca, Estado de México.	Espectacular
10	Diversos espectaculares ubicados en la carretera México – Puebla, Ixtapaluca, Estado de México.	Espectacular
11		Espectacular
12		Espectacular

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

No.	Dirección	Tipo de estructura
13	Carretera Libre México - Toluca, dirección Toluca – México, coordenadas 19° 17' 22" N y 99° 22' 02" O.	Barda
14	Carretera Libre México - Toluca, dirección México – Toluca, coordenadas 19° 17' 22" N y 99° 22' 02" O.	Barda
15	Avenida Central "Mexibus" y calle Quinto Sol, Ecatepec, Estado de México.	Espectacular
16	Carretera Amecameca – Ixtapaluca, Ixtapaluca, Estado de México.	Espectacular
17	Carretera Zumpango – Los Reyes Acozac, colonia Buenavista, Zumpango de Ocampo, Estado de México.	Espectacular
18	Avenida Central poniente, frente a "Multiplaza", Nezahualcóyotl, Estado de México.	Barda
19	Boulevard Manuel Ávila Camacho, colonia San Lucas Tepetlalcayo, Tlanepantla, Estado de México.	Espectacular
20	Espectaculares ubicados en la autopista México - Toluca, dirección Toluca, en las desviaciones hacia el municipio de Huixquilucan y Malinalco, así como en las bajo puentes del mismo trébol y a lo largo del corredor comercial.	Espectacular
21		Espectacular
22		Espectacular
23		Espectacular
24		Espectacular
25		Espectacular
26	Carretera México - Toluca, dirección Toluca, en la incorporación de retorno del Monumento al Caminero, Ocoyoacac, Estado de México.	Espectacular
27	Carretera México - Toluca, dirección Toluca, San Miguel Ameyalco, Lerma, Estado de México.	Espectacular
28	Calle la Merced esquina carretera México – Toluca, San Pedro Tultepec, Lerma, Estado de México.	Espectacular
29	Miguel Alemán Aeropuerto y vialidad Las Torres, colonia Álvaro Obregón, San Mateo Atenco, Estado de México	Espectacular
30	Avenida Comonfort, entre calle Independencia y Manzanares, colonia Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado de México	Espectacular

- Un ejemplar de la publicación *Realidad Mexiquense* de octubre de dos mil dieciséis.

Dichas pruebas constituyen **documentales privadas**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Pruebas recabadas por el *IEEM*

A) Documentales públicas

- 1) Acta circunstanciada,¹³³ elaborada el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar la diligencia de inspección de diversos anuncios espectaculares ubicados en el Estado de México, en los que presuntamente había publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, de conformidad con el escrito de queja presentado por el *PT*.
- 2) Acta circunstanciada,¹³⁴ elaborada el uno de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar la diligencia de inspección de diversos anuncios espectaculares ubicados en el Estado de México, en los que presuntamente había publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, de conformidad con el escrito de queja presentado por el *PT*.

En ninguna de las dos inspecciones se encontró publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.

- 3) Oficio IEEM/UCS/1085/2016,¹³⁵ por medio del cual la Titular de la Unidad de Comunicación Social del *IEEM*, recopiló el contenido de veinte notas periodísticas relacionadas con Juan Manuel Zepeda Hernández.
- 4) Acta circunstanciada,¹³⁶ elaborada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar la diligencia de inspección de la página de internet <https://www.teotihuacan-en-linea.com/2016/10/no-son.claros-los-recursos-de-promocion.html>, de conformidad con el escrito de queja presentado por el *PT*.
- 5) Acta circunstanciada,¹³⁷ elaborada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar la diligencia de inspección de la página de internet

¹³³ Visible en las páginas 551 a 560 del primer tomo del expediente.

¹³⁴ Visible en las páginas 556 a 560 el primer tomo del expediente.

¹³⁵ Visible en las páginas 577 y 578, y sus anexos 579 a 604 del expediente.

¹³⁶ Visible en las páginas 605 a 607 del primer tomo del expediente.

¹³⁷ Visible en las páginas 608 y 609 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

<https://hoyestado.com/2016/10/juan-zepeda-hace-promocion-en-espectaculares-del-edomex/>, de conformidad con el escrito de queja presentado por el *PT*.

- 6) Acta circunstanciada,¹³⁸ elaborada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar la diligencia de inspección de la página de internet <https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2016/10/26/opinion-los-excesos-de-los-aspirantes-al-gobierno-de-edomex/>, de conformidad con el escrito de queja presentado por el *PT*.
- 7) Acta circunstanciada,¹³⁹ elaborada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar el desahogo de entrevistas, en relación con la revista *Realidad Mexiquense*, asentándose los siguientes resultados:

Nombre	¿Se percató de la distribución de la revista?	¿Sabe la fecha de distribución?	¿Se percató de la persona que la distribuyó?	Razón de su dicho
Alberto R.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes.		
Eduardo L.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes.		
Beatriz G.	Sí	Menos de un mes	Personas no identificadas	Obtuvo una
Graciela L.	Sí	El mes pasado	No	La dejaron en su negocio
Eduardo R.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes.		
Mercedes S.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Ester M.	Sí	Aproximadamente medio mes	No	La obtuvo por medio de un familiar
Nayhelli M.	Sí	Aproximadamente medio mes	No	La obtuvo por medio de un familiar
Rosa S.	Sí	No recuerda, pero fue reciente	No	Se la proporcionaron

¹³⁸ Visible en las páginas 610 a 613 del primer tomo del expediente.

¹³⁹ Visible en las páginas 718 a 720 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nombre	¿Se percató de la distribución de la revista?	¿Sabe la fecha de distribución?	¿Se percató de la persona que la distribuyó?	Razón de su dicho
Hugo.	Sí	No recuerda	No	La obtuvo por medio de un familiar

En sentido, se encuestó a **diez personas**, de las cuales seis señalaron haberse percatado de la distribución de la citada revista.

De las entrevistadas que refieren haberse enterado de la distribución de la revista **ninguna** se percató de la persona(s) que la distribuyó.

- 8) Acta circunstanciada **273**,¹⁴⁰ de tres de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el personal de la Oficialía Electoral del *IEEM*, en la que se hizo constar la inspección realizada en los domicilios proporcionados por el *PAN*.

En la inspección de referencia **no** se encontró publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.

- 9) Acta circunstanciada,¹⁴¹ elaborada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, en la cual se hizo constar el desahogo de entrevistas, en relación con la colocación de anuncios espectaculares y bardas con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, asentándose los siguientes resultados:

Nombre	¿Se percató, observaron o tuvieron conocimiento de la propaganda?	¿Sabe cuándo estuvo la propaganda?	¿Sabe quién colocó o retiró la propaganda?	Razón de su dicho
Avenida Comonfort, entre Independencia y Manzanares, colonia Santa Ana Tlaltitlan, Toluca, Estado de México.				
Elizabeth L.	Sí	Aproximadamente 2 semanas	No	Recuerda haberlo visto

¹⁴⁰ Visible en las páginas 734 a 744 del primer tomo del expediente.

¹⁴¹ Visible en las páginas 759 a 770 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nombre	¿Se percató, observaron o tuvieron conocimiento de la propaganda?	¿Sabe cuándo estuvo la propaganda?	¿Sabe quién colocó o retiró la propaganda?	Razón de su dicho
Daniela J.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Ana Patricia	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Paseo Tollocan, baja velocidad, colonia Vértice, casi esquina con Pilares, Toluca, Estado de México.				
Darío M.	Sí	Un mes, más o menos	No	Trabaja en Pilares
Dante P.	Sí	28 días	No	Da clases en la zona
Ramiro M.	Sí	Un mes, más o menos	No	Trabaja por la zona
Paseo Tollocan a la altura del tianguis conocido como Piojo, Toluca, Estado de México.				
María del Carmen	No	No aplica		Pasa a diario
Blanca B.	Sí	Hace un mes	No	Trabaja en la esquina
Brenda G.	No	No aplica		Estudia por ahí y pasa diario.
Avenida Tecnológico llegando a Tollocan (CRISA), Toluca, Estado de México				
Ángeles G.	Sí	No	No	Vio la propaganda
Rosa A.	Sí	Unas 3 o 4 semanas aproximadamente	No	Sí vio la propaganda
Marco A.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Avenida Tecnológico, casi equina Tollocan, Toluca, Estado de México.				
Francisco Á.	Sí	Hace un mes	No	Pasa a diario por ahí
Marisol S.	No	No aplica		Pasa a diario
Blanca M.	No	No aplica		Pasa a diario
Paseo Tollocan a la altura de la ex zona militar, Toluca, Estado de México				
Raúl O.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Verónica I.	Sí	No	No	Vio el espectacular un par de veces.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nombre	¿Se percató, observaron o tuvieron conocimiento de la propaganda?	¿Sabe cuándo estuvo la propaganda?	¿Sabe quién colocó o retiró la propaganda?	Razón de su dicho
Mónica Arellano	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Paseo Tollocan a la altura de Heriberto Henríquez en Toluca, Estado de México				
Roció R.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Angélica L.	Sí	Más o menos 20 días	No	Se percató de la propaganda
Perla G.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Paseo Tollocan, pasando el sanatorio Venecia, cas llegando a la avenida Benito Juárez				
Ubaldo G.	Sí	No recuerda	No	Vio la propaganda
Manuel G.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Nancy F.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Avenida Pino Suárez, casi esquina con Las Torres, Toluca, Estado de México				
Victoria H.	Sí	Un mes	No	Trabaja por la zona
María de la Luz	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Luis Enrique D.	Sí	Un mes	No	Pasa a diario
Avenida Morelos, casi esquina con Vicente Villada, colonia Centro, Toluca, Estado de México				
Carlos O.	Sí	15 días	No	Vive por la zona
Flor R.	Sí	20 días	No	Vive por la zona
Andrés V.	Sí	20 días	No	Estudia por ahí.
Avenida Adolfo López Mateos, casi esquina con Guillermo Prieto, colonia Miguel Hidalgo, Toluca, Estado de México				
Juan G.	Sí	Un mes	No	Trabaja cerca
Margarita Q.	No	Al responder de forma negativa la anterior pregunta, no se realizaron las subsecuentes		
Alejandro C.	Sí	20 días	No	Trabaja cerca
Avenida Manuel J. Clouthier, casi esquina con andador 18, colonia Las Marinas, Metepec, Estado de México				
Leonarda V.	Sí	Hace un mes	No	Vive por ahí

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nombre	¿Se percató, observaron o tuvieron conocimiento de la propaganda?	¿Sabe cuándo estuvo la propaganda?	¿Sabe quién colocó o retiró la propaganda?	Razón de su dicho
Víctor M.	No	No aplica		Estudia y pasa diario por ahí.
Jesus	Sí	Hace 30 días	No	Vive en Las Marinas
Las Torres y calle Miguel Alemán, colonia Álvaro Obregón, San Mateo Atenco, Estado de México				
Andrés J.	Sí	Hace un mes	No	Vive por ahí
Virginia S.	Sí	Hace 25 días	No	Vive por ese rumbo
Gloria A.	Sí	Hace 25 días	No	Vive por ahí
Carretera México – Toluca, dirección Toluca, San Miguel Ameyalco, Lerma, Estado de México				
Oswaldo O.	Sí	Hace un mes	No	Vive y pasa diario por ahí.
Kissel R.	No	No aplica		Vive y pasa diario por ahí.
Patricia Z.	Sí	Hace 20 días	No	Vive por el rumbo
Carretera México – Toluca, San Pedro Tultepec, Lerma, Estado de México.				
Horacio P.	No	No aplica		Vive y pasa diario por ahí
Hugo R.	Sí	Hace 20 días	No	Vio la propaganda
Fabían V.	No	No aplica		Vive y pasa diario por ahí
Paseo Tollocan, antes de llegar a una gasolinera en Lerma, Estado de México				
Leopoldo B.	Sí	Hace un mes	No	Trabaja en las Báscula Zapata que está debajo del espectacular.
Armando S.	Sí	Hace 20 días	No	Trabaja en las Báscula Zapata que está debajo del espectacular.
Arnulfo S.	Sí	Hace 30 días	No	Trabaja en una gasolinera
Avenida Las Torres antes de la desviación a San Pedro Tultepec				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nombre	¿Se percató, observaron o tuvieron conocimiento de la propaganda?	¿Sabe cuándo estuvo la propaganda?	¿Sabe quién colocó o retiró la propaganda?	Razón de su dicho
No hay algún anuncio espectacular.				
Carretera federal México –Toluca, en el paraje denominado La Marquesa, en sentido México - Toluca				
Antonieta P.	Sí	Hace un mes	No	Pasa diario por ahí
Mónica T.	No	No aplica		No vio nada
Alejandro R.	No	No aplica		No es de ahí
Carretera libre México –Toluca, avenida La Marquesa, sentido México – Toluca, Estado de México				
Mónica M.	Sí	Hace un mes	No	Vive por ahí
María C.	Sí	Hace 25 días	No	Vive por ahí
Autopista México – Toluca, desviación al municipio de Huixquilucan y Malinalco, dirección a Toluca.				
Josefina P.	Sí	Hace 20 días	No	Trabaja en las cabaña Las Peñitas
Margarita	Sí	Hace 20 días	No	Trabaja en las cabaña Las Peñitas
Juana C.	Sí	Hace 25 días	No	Trabaja en el restaurante La Tequilera
Carretera México – Toluca en dirección a Toluca, hacia el retorno del monumento conocido como El Caminero.				
El lugar es poco transitado por lo que existe imposibilidad material para desarrollar la consulta.				

Dicha información, tiene la calidad de documentales públicas y, por tanto, generan pleno valor probatorio acerca de su contenido acorde a lo previsto en el artículo 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIFE*, en relación con los artículos 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), del *Reglamento de Quejas*, toda vez que fueron expedidas por funcionarios electorales en ejercicio de las atribuciones que les corresponden en el ámbito de su competencia

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

B) Documentales privadas

- 1) Oficio PRESIDENCIA/EM/751/2016,¹⁴² mediante el cual el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del *PRD* en el Estado de México, señaló:
 - a) La publicación *REALIDAD MEXIQUENSE* no es editada, ni publicada por dicho instituto político.
 - b) Desconoce quién es el responsable de la edición de dicha publicación.
- 2) Escrito de diez de noviembre de dos mil dieciséis,¹⁴³ por medio del cual Juan Manuel Zepeda Hernández, señaló:

Pregunta <i>IEEM</i>	Respuesta Juan Manuel Zepeda Hernández
¿Quién es el responsable de la publicación o edición de la revista <i>Realidad Mexiquense</i> de fecha “octubre 2016”, en la cual se publicita información relacionada con sus actividades legislativas?	Hasta el momento mismo de la notificación desconocía la existencia o contenido de la revista “ <i>Realidad Mexiquense</i> ”, por tanto carezco de información de quién sea la persona responsable de dicha publicación; y por tanto desde este momento me deslindo de la producción, distribución o contenido relacionado con esa publicación...
Señale fecha de edición y número de ejemplares editados	Como arriba se precisa, es hasta el momento mismo de la notificación que desconocía la existencia o contenido de la revista “ <i>Realidad Mexiquense</i> ”, por tanto, al no ser hechos propios, carezco de información respecto a su edición y número de ejemplares elaborados.
¿Cuál fue el medio de distribución de dicha publicación, así como las fechas y lugares en que se distribuyeron?	... al no ser hechos propios, carezco de información respecto al medio, fechas y lugares en que se distribuyeron.
Señale la cantidad de ejemplares distribuidos	... al no ser hechos propios, carezco de información respecto a la cantidad de ejemplares distribuidos.

¹⁴² Visible en la página 721 del primer tomo del expediente.

¹⁴³ Visible en las páginas 754 a 748 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

3) Escrito de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis,¹⁴⁴ por medio del cual Juan Manuel Zepeda Hernández, remitió:

- Original del contrato de prestación de servicios, de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Víctor Hugo Chaires Arcos, con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de doscientos noventa anuncios espectaculares.¹⁴⁵
- Original del contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Elvert Pineda Bucio, con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de pinta de bardas.¹⁴⁶
- Original del contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V., con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de diez anuncios espectaculares.¹⁴⁷

Dichas pruebas constituyen **documentales privadas**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Pruebas recabadas por la UTCE

A) Documentales públicas

- 1) Acta circunstanciada,¹⁴⁸ de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, elaborada con el propósito de constatar la existencia y contenido de la publicidad en el portal electrónico de internet del periódico *El Universal*,

¹⁴⁴ Visible en las páginas 774 a 776, y sus anexos 777 a 794 del primer tomo del expediente.

¹⁴⁵ Visible en las páginas 784 a 786 del primer tomo del expediente.

¹⁴⁶ Visible en las páginas 787 a 790 del primer tomo del expediente.

¹⁴⁷ Visible en las páginas 791 a 794 del primer tomo del expediente.

¹⁴⁸ Visible en las páginas 27 a 37 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

alusivo al informe de labores del entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández.

- 2) Acta circunstanciada INE/JD11/CM/0002/2016,¹⁴⁹ de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, elaborada por el Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en esta ciudad, en ejercicio de las funciones de Oficialía Electoral, en la que hace constar la inspección realizada en la estación del metro Pantitlán, Línea A, ubicada sobre la Avenida Río Churubusco, esquina Avenida Guadalupe, colonia Pantitlán, c.p. 08100, delegación Iztacalco, Ciudad de México.

En la cual se dio cuenta que durante el desarrollo de la inspección se encontró publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en dicha ubicación.

- 3) Acta circunstanciada CIRC11/JDE30/MEX/27-10-16,¹⁵⁰ de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, elaborada por la Vocal Secretario de la 30 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, en ejercicio de las funciones de Oficialía Electoral, en la que hace constar la inspección realizada en la intersección de las avenidas Pantitlán y Vicente Villada, circulando de poniente a oriente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En la cual se da cuenta de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en dichas ubicaciones.

- 4) Oficio GJ/005822/2016,¹⁵¹ suscrito por el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a través del cual desahogó el requerimiento formulado mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

En el cual se informa que la empresa **ISA CORPORATIVO, S.A. de C.V.**, cuenta con un *Permiso Administrativo Temporal Revocable para el giro de publicidad en la red del servicio del Organismo*.

[Énfasis añadido]

¹⁴⁹ Visible en las páginas 44 a 51 del primer tomo del expediente

¹⁵⁰ Visible en las páginas 74 a 76 y 318 a 320 del primer tomo del expediente

¹⁵¹ Visible en las páginas 80 a 89 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

- 5) Oficio MABR/032/2016,¹⁵² mediante el cual la Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de México, dio cumplimiento al requerimiento de información formulado en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

En dicho documento se señala que Juan Manuel Zepeda Hernández le informó que rendiría su informe de labores el **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis**, en diferentes municipios del Estado de México, a través de recorridos.

También señaló que dicho órgano legislativo no ordenó, solicitó o contrató la difusión de propaganda alusiva al referido informe de labores.

- 6) Oficio GJ/006508/2016,¹⁵³ a través del cual el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo, proporcionó el domicilio exacto de las estaciones Pantitlán, Cuatro Caminos, Zaragoza, Guelatao, La Paz, Ecatepec y Ciudad Azteca.

De lo anterior se advierte que las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, se encuentran en la Ciudad de México.

Dicha información, tiene la calidad de documentales públicas y, por tanto, generan pleno valor probatorio acerca de su contenido acorde a lo previsto en el artículo 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIFE*, en relación con los artículos 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), del *Reglamento de Quejas*, toda vez que fueron expedidas por funcionarios electorales en ejercicio de las atribuciones que les corresponden en el ámbito de su competencia.

B) Documentales privadas

1. Escrito de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis,¹⁵⁴ por medio del cual, el apoderado legal de *El Universal*, dio respuesta al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

En el mismo informó que la publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández fue contratada a través de una carta de catorce de octubre de dos mil dieciséis, por **Adrián**

¹⁵² Visible en las páginas 157 a 192 del primer tomo del expediente.

¹⁵³ Visible en las páginas 850 a 857 del segundo tomo del expediente.

¹⁵⁴ Visible en las páginas 91 a 103 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Gutiérrez Pérez, quien presuntamente pertenece al Grupo Parlamentario del PRD de la LIX Legislatura del Estado de México.

2. Escrito de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis,¹⁵⁵ suscrito por el entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, por medio del cual dio respuesta al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veinticinco de octubre del mismo año. En este adjuntó veintidós impresiones fotográficas; copia simple del acuse del oficio GPPR/JMZH/217/16, de dieciocho de octubre de la presente anualidad, dirigido a la Presidenta de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México y una copia simple de su Primer Informe de Labores.

De la lectura del mismo se advierte lo siguiente:

Pregunta UTCE	Respuesta Juan Manuel Zepeda Hernández
<i>Indique fecha y lugar en el cual rindió o rendirá su primer informe de labores legislativas</i>	<i>El informe fue realizado el día 26 de octubre del año en curso, en un formato que consistió en reuniones con los electores en la vía pública, para lo cual, se anexan impresiones fotográficas, no fue un evento masivo. Los lugares en que se llevó a cabo tales actos fueron Nezahualcóyotl, Almoloya del Río y Malinalco..</i>
<i>Especifiqué las personas físicas con las que contrató, convino o pactó la difusión de toda la propaganda alusiva a su primer informe de labores legislativas...</i>	<i>- Elvert Pineda Bucio - Víctor Hugo Chaires Arcos - Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V.</i>
<i>Indique si reconoce como parte de la propaganda distribuida en relación con su primer informe de labores legislativas, la colocada en el transbordo de la estación Pantitlán hacia la Línea A del metro de la Ciudad de México.</i>	<i>No reconozco esta propaganda, ya que la contratación se realizó para ser exhibida únicamente en las estaciones del metro que se encuentran en el Estado de México.</i>
<i>Señale la ubicación física de toda la propaganda relacionada con su primer informe de labores legislativas y as características de la misma.</i>	<i>La ubicación física de la propaganda, me encuentro en imposibilidad por el momento de rendirla, debido a que la forma de contratación de los espacios publicitarios, fueron contratados sin referir lugares específicos...</i>

3. Escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieseis,¹⁵⁶ a través del cual Juan Manuel Zepeda Hernández, adjuntó:

¹⁵⁵ Visible en las páginas 105 a 129 y 139 a 240 del primer tomo del expediente.

¹⁵⁶ Visible en la página 302 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

- Original del contrato de prestación de servicios,¹⁵⁷ de catorce de octubre de dos mil dieciséis, que suscribió con Elvert Pineda Bucio, con el objeto de rentar un paquete de mamparas en diversas estaciones del Sistema Colectivo, Metro que se encuentren dentro del Estado de México.
 - Escrito de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis,¹⁵⁸ por medio del cual el representante legal de Juan Manuel Zepeda Hernández, solicitó a Elvert Pineda Bucio el retiro de la publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades de Juan Manuel Zepeda Hernández ubicada dentro del transbordo de la estación Pantitlán.
4. Escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis,¹⁵⁹ a través del cual Juan Manuel Zepeda Hernández, adjuntó los escritos por medio de los que su representante legal, solicitó a las empresas responsables de la difusión de su primer informe de labores, la suspensión de la misma, con la intención de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar dictado en el presente asunto.
 5. Escrito de uno de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual el representante legal de Isa Corporativo, S.A. de C.V., informó el cumplimiento dado al acuerdo de medida cautelar, en relación a la publicidad colocada en la estación de metro Pantitlán.
 6. Escrito de uno de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual el representante legal de Elvert Pineda Bucio,¹⁶⁰ informó el cumplimiento dado al acuerdo de medida cautelar, en relación a la publicidad colocada en la estación de metro Pantitlán.
 7. Escrito de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual el representante legal de *El Universal*,¹⁶¹ informó el cumplimiento dado al acuerdo de medida cautelar, en relación a la publicidad colocada en el portal de internet de dicho medio de comunicación.
 8. Escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis,¹⁶² a través del cual el representante legal de Isa Corporativo S.A. de C.V., señaló que la persona

¹⁵⁷ Visible en las páginas 303 a 306 del primer tomo del expediente.

¹⁵⁸ Visible en la página 307 del primer tomo del expediente.

¹⁵⁹ Visible en las páginas 308 a 311 del primer tomo del expediente.

¹⁶⁰ Visible en las páginas 392 a 394 del primer tomo del expediente.

¹⁶¹ Visible en las páginas 414 y 415 del primer tomo del expediente.

¹⁶² Visible en las páginas 441 y 442 el primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

física con la que contrató la colocación de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, fue **Elvert Pineda Bucio**, adjuntando la siguiente documentación:

- Factura expedida por Isa Corporativo, S.A. de C.V.,¹⁶³ en favor de Elvert Pineda Bucio, amparando la renta de espacios para la difusión de información de Juan Zepeda en el Sistema de Transporte Colectivo Metro dentro de las estaciones del Estado de México, por un periodo de trece días.
- Impresión del contrato de prestación de servicios,¹⁶⁴ suscrito entre Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, con el objeto de difundir publicidad fija y móvil del Primer Informe de Actividades Legislativas del entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, dentro de las estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México.
- Documento intitulado *Testimonial de la campaña exhibida para Juan Manuel Zepeda - Informe*,¹⁶⁵ mismo que consta de treinta y un fotografías a color de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo que se enuncian a continuación:
 - Pantitlán
 - Cuatro Caminos
 - Zaragoza
 - Guelatao
 - La Paz
 - Ecatepec
 - Ciudad Azteca

9. Escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis,¹⁶⁶ a través del cual el representante legal de *El Universal*, informó que la persona que contrató el *banner* con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas

¹⁶³ Visible en la página 443 del primer tomo de expediente.

¹⁶⁴ Visible en las páginas 444 a 450 del primer tomo del expediente.

¹⁶⁵ Visible en las páginas 441 a 459 del primer tomo del expediente.

¹⁶⁶ Visible en las páginas 471 a 481 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

de Juan Manuel Zepeda Hernández, difundida en su portal de internet, pagó por anticipado y no mandó datos de facturación, por lo que procedió a facturar dicha publicidad a nombre de *público en general*.

10. Escrito de siete de diciembre de dos mil dieciséis,¹⁶⁷ a través del cual Juan Manuel Zepeda Hernández informó el domicilio de Anúnciate del Oriente, S.A. de C.V. y adjuntó copias simples de los contratos de prestación de servicios celebrados con dicha persona moral y Víctor Hugo Chaires Arcos.
11. Escrito de doce de abril de dos mil diecisiete,¹⁶⁸ mediante el cual Juan Manuel Zepeda Hernández, proporcionó el domicilio de Adrián Gutiérrez Pérez, señalando que éste **no tiene alguna relación con el Grupo Parlamentario del PRD** dentro de la LIX Legislatura.
12. Escrito de siete de junio de dos mil diecisiete,¹⁶⁹ con el cual, el representante legal de *El Universal*, reiteró no haber recibido datos de facturación en relación al *banner* con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, publicado su portal de internet.
13. Escrito de trece de noviembre de dos mil diecisiete,¹⁷⁰ suscrito por el entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, por medio del cual dio respuesta al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de siete de noviembre del mismo año.

De la lectura del mismo se advierte lo siguiente:

Pregunta UTCE	Respuesta Juan Manuel Zepeda Hernández
¿Cuál fue el procedimiento que se siguió para la contratación de dicha publicidad? Banner en <i>El Universal</i> .	Se solicitó vía correo electrónico rebecajimenez@gmail.com a través de un escrito digitalizado la inserción del banner con las características de 300 por 250 pixeles, y se remitió vía correo electrónico el archivo electrónico para tal efecto.

¹⁶⁷ Visible en las páginas 858 a 868 del segundo tomo del expediente.

¹⁶⁸ Visible en las páginas 945 a 948 del segundo tomo del expediente.

¹⁶⁹ Visible en la página 983 del segundo tomo de expediente.

¹⁷⁰ Visible en las páginas 1127 a 1129 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Pregunta UTCE	Respuesta Juan Manuel Zepeda Hernández
<i>¿Cuál fue el procedimiento que se siguió para solicitar el retiro de publicidad de mérito en el portal del periódico El Universal?</i>	<i>Al haber un acuerdo de retiro de propaganda, dictada por ese Instituto Nacional Electoral, el día 28 de octubre, se hizo la solicitud, vía correo electrónico del retiro de propaganda, documento que de forme digitalizada se hizo llegar al medio de comunicación El Universal.</i>

- 14.** Escrito de catorce de noviembre de dos mil diecisiete,¹⁷¹ a través del cual Elvert Pineda Bucio, dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil diecisiete, donde señaló que no ha emitido factura en relación de los servicios prestados a Juan Manuel Zepeda Hernández, en virtud de que no se le ha cubierto el pago por los mismos.
- 15.** Escrito de catorce de noviembre de dos mil diecisiete,¹⁷² a través del cual Víctor Hugo Chaires Arcos, dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete, donde señaló que no ha emitido factura en relación de los servicios prestados a Juan Manuel Zepeda Hernández, en virtud de que no se le ha cubierto el pago por los mismos.
- 16.** Escrito de trece de diciembre de dos mil diecisiete,¹⁷³ a través del cual el representante legal de Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, donde señaló que no ha emitido factura en relación de los servicios prestados a Juan Manuel Zepeda Hernández, en virtud de que no se le ha cubierto el pago por los mismos.
- 17.** Escrito de cinco de enero de dos mil dieciocho,¹⁷⁴ a través del cual Elvert Pineda Bucio, dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, donde señaló que no ha recibido algún pago en relación de los servicios prestados a Juan Manuel Zepeda Hernández, en virtud de que no se le ha cubierto el pago por los mismos.

¹⁷¹ Visible en las páginas 1133 a 1146 del segundo tomo del expediente.

¹⁷² Visible en las páginas 1147 a 1152 del segundo tomo del expediente.

¹⁷³ Visible en las páginas 1193 a 1203 del segundo tomo del expediente.

¹⁷⁴ Visible en las páginas 1214 a 1215 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

18. Escrito de cuatro de enero de dos mil dieciocho,¹⁷⁵ mediante el cual Víctor Hugo Chaires Arcos, dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, donde señala que recibió un pago parcial en efectivo por parte del representante legal de Juan Manuel Zepeda Hernández, en relación de los servicios prestados a éste último.
19. Escrito, a través del cual el representante legal de Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V.,¹⁷⁶ dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, donde señala que recibió un pago parcial en efectivo por parte del representante legal de Juan Manuel Zepeda Hernández, en relación de los servicios prestados al éste último.
20. Escrito de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho,¹⁷⁷ mediante el cual Juan Manuel Zepeda Hernández, precisó la forma en que se llevó a cabo la contratación de la publicidad alusiva a su primer informe de labores en el portal de internet del periódico *El Universal*.

Dichas pruebas constituyen **documentales privadas**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

5. Hechos acreditados.

De lo aducido por las partes y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

- Que **Juan Manuel Zepeda Hernández**, en su calidad de otrora Diputado Local, rindió su primer informe de actividades legislativas el **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis**. Lo anterior, de conformidad con el propio dicho del denunciado,¹⁷⁸ así como por el oficio MABR/032/2016,¹⁷⁹ suscrito

¹⁷⁵ Visible en la página 1216 del segundo tomo del expediente.

¹⁷⁶ Visible en la página 1242 del segundo tomo del expediente.

¹⁷⁷ Visible en las páginas 1255 y 1256 del segundo tomo del expediente.

¹⁷⁸ Visible en las páginas 91 a 103 del primer tomo del expediente.

¹⁷⁹ Visible en las páginas 157 a 192 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

por la Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de México.

- Los medios publicitarios a través del los cual se difundió información relacionada con **Juan Manuel Zepeda Hernández** fueron los siguientes:

Medio	Acreditación
Portal de internet del periódico <i>El Universal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Manifestaciones de las partes. - Acta elaborada por el personal de la <i>UTCE</i>.¹⁸⁰ - No es un hecho controvertido la existencia de este tipo de publicidad.
Propaganda en vía pública	<p>Anuncios espectaculares</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de prestación de servicios, de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Víctor Hugo Chaires Arcos, con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de doscientos noventa anuncios espectaculares.¹⁸¹ - Contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Elvert Pineda Bucio, con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de pinta de bardas.¹⁸² - Contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V., con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de diez anuncios espectaculares.¹⁸³ - Acta circunstanciada CIRC11/JDE30/MEX/27-10-16,¹⁸⁴ de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, elaborada por la Vocal Secretaria de la 30 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, en ejercicio de las funciones de Oficialía Electoral, en la que hace constar la inspección realizada en la intersección de las avenidas Pantitlán y Vicente Villada, circulando de poniente a oriente sobre la

¹⁸⁰ Visible en las páginas 27 a 37 del primer tomo del expediente.

¹⁸¹ Visible en las páginas 784 a 786 del primer tomo del expediente.

¹⁸² Visible en las páginas 787 a 790 del primer tomo del expediente.

¹⁸³ Visible en las páginas 791 a 794 del primer tomo del expediente.

¹⁸⁴ Visible en las páginas 74 a 76 y 318 a 320 del primer tomo del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Medio	Acreditación
	<p>Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresiones fotográficas aportadas por los denunciantes. - No es un hecho controvertido la existencia de este tipo de publicidad. <p><u>Anuncios en bardas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Elvert Pineda Bucio, con el objeto de difundir el Primer Informe de Actividades Legislativas del contratante, a través de pinta de bardas.¹⁸⁵ - Manifestaciones de Juan Manuel Zepeda, Elvert Pineda Bucio y el PAN.
<p style="text-align: center;">Sistema de Transporte Colectivo Metro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impresión fotográfica¹⁸⁶ aportada por Maribel Hernández Cruz. - Acta circunstanciada,¹⁸⁷ de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, elaborada con el propósito de constatar la existencia y contenido de la publicidad en el portal electrónico de internet del periódico <i>El Universal</i>, alusivo al informe de labores del entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández. - Contrato de prestación de servicios,¹⁸⁸ de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V. con el objeto de difundir publicidad fija y móvil del Primer Informe de Actividades Legislativas del Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, dentro de las estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México. - <i>Testimonial de la campaña exhibida para Juan Manuel Zepeda - Informe</i>,¹⁸⁹ mismo que consta de treinta y un fotografías a color de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

¹⁸⁵ Visible en las páginas 787 a 790 del primer tomo del expediente.

¹⁸⁶ Visible en las páginas 2 y 6 del primer tomo del expediente.

¹⁸⁷ Visible en las páginas 27 a 37 del primer tomo del expediente.

¹⁸⁸ Visible en las páginas 444 a 450 del primer tomo del expediente.

¹⁸⁹ Visible en las páginas 441 a 459 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Medio	Acreditación
	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato de prestación de servicios,¹⁹⁰ de catorce de octubre de dos mil dieciséis, que suscribió Juan Manuel Zepeda Hernández con Elvert Pineda Bucio, con el objeto de rentar un paquete de mamparas en diversas estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México. - Manifestaciones de Maribel Hernández Cruz, Elvert Pineda Bucio, Juan Manuel Zepeda Hernández e ISA Corporativo, S.A. de C.V. - No es un hecho controvertido la existencia de este tipo de publicidad.
Publicación denominada <i>Realidad Mexiquense</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Manifestaciones del <i>PAN</i> y seis ciudadanos.¹⁹¹ - En autos obra un ejemplar de la publicación <i>Realidad Mexiquense</i> de octubre de dos mil dieciséis.¹⁹²

- La Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de México informó que no se asignaron recursos públicos a la difusión del informe de referencia.

PRECISIÓN: En autos obra un contrato de prestación de servicios, por medio del cual Juan Manuel Zepeda Hernández contrató la difusión de diversos anuncios espectaculares con **Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V.**, sin embargo, de conformidad con las constancias que obran en autos, en específico, el oficio INE-JDE29-MEX/VS/392/2017,¹⁹³ así como de un escrito de trece de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el representante legal de dicha empresa,¹⁹⁴ se advierte que el nombre correcto de dicha persona moral es **Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V.**

6. Marco normativo

En el presente apartado, se enunciarán las disposiciones constitucionales, legales y criterios jurisdiccionales que tutelan y definen el principio de imparcialidad en el

¹⁹⁰Visible en las páginas 303 a 306 del primer tomo del expediente.

¹⁹¹ Se hizo constar en el acta circunstanciada implementada por el personal del *IEEM*, visible en las páginas 610 a 613 del primer tomo del expediente.

¹⁹² Visible en la página 704 del primer tomo del expediente.

¹⁹³ Visible en las páginas 1109 y 1110 del segundo tomo del expediente.

¹⁹⁴ Visible en las páginas 1193 y 1194 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

uso y manejo de recursos públicos, la promoción personalizada de servidores públicos, así como las reglas sobre la difusión de propaganda alusiva a informes de labores de los servidores públicos, en los términos siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134.

[...]

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público

[...]

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 242.

[...]

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

De las anteriores disposiciones, se advierte que el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la *Constitución Federal*, prevé los principios fundamentales de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda electoral, así

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

como los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que los servidores públicos tienen en todo tiempo el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Estos principios se fundamentan principalmente en la finalidad de evitar que entes públicos, *so pretexto* de difundir propaganda gubernamental, puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.

La *Sala Superior*, al resolver, entre otros, los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, determinó que el citado artículo 134 regula y tiene como finalidad, lo siguiente:

- La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional.
- La propaganda gubernamental debe tener fines informativos, educativos o de orientación social.
- La propaganda difundida por los servidores públicos **no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.**
- **Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.**
- Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, **sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

- Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa mediante todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda proveniente de funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, cine, prensa, **anuncios espectaculares**, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros.

Asimismo, ha sido criterio del citado Tribunal Electoral que, para determinar si la infracción que se aduzca corresponde a la materia electoral, es importante considerar los elementos siguientes:

Elemento subjetivo o personal. Se colma cuando en el contexto del mensaje se adviertan nombre, voces, imágenes o cualquier otro medio en que se identifique plenamente al servidor público de que se trate.

Elemento temporal. Este elemento puede ser útil para definir, primero, si se está en presencia de una eventual infracción a lo dispuesto por el artículo 134 de la *Constitución Federal*, pero a su vez, también puede decidir el órgano que sea competente para el estudio de la infracción atinente.

En este aspecto debe resaltarse que cuando la propaganda gubernamental se difunde una vez iniciado el proceso electoral, existe una presunción de que incide indebidamente en la contienda, cuando contiene el nombre, imagen, voz o símbolos.

Asimismo, el inicio del procedimiento electoral puede ser un aspecto relevante para su definición, pero no debe ser el único criterio, porque puede haber supuestos en los que aun sin haber iniciado el proceso electoral formalmente, la proximidad al debate propio de los comicios evidencie la promoción personalizada de servidores públicos.

Elemento objetivo o material. Impone el análisis del contenido del mensaje y del medio de comunicación social de que se trate.

En tal contexto, es necesario puntualizar que cuando la propaganda objeto de la denuncia carezca de referencia alguna de la elección, o bien, no sea posible deducirla a partir de los elementos contextuales descritos por el denunciante o del contenido de la promoción que se considere contraria a la ley, y tampoco existan

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

bases para identificar el cargo de elección popular para el cual se promueve, será necesario realizar un análisis *prima facie*, a efecto de verificar los hechos planteados en la demanda y las pruebas que se ofrezcan y aporten, para estar en posibilidad de determinar si la materia de la queja trasgrede o influye en la materia electoral.

Ahora bien, según lo señalado por la *Sala Superior* en la citada sentencia SUP-REP-5/2015 “*resulta indispensable realizar una clara distinción entre la aparición de imágenes, nombre, cargo, voz o cualquier otro símbolo que identifique claramente a un servidor público, en función del acto que motivó su difusión, a fin de concluir que en el caso de promoción personalizada que se realiza mediante propaganda gubernamental, el parámetro de prohibición es todavía más estricto, ya que los sujetos normativos de la mencionada regla prohibitiva son los órganos del estado especificados en el propio párrafo octavo del artículo 134 constitucional*”.

En ese mismo tenor, la *Sala Superior* también ha sostenido que **la característica de propaganda gubernamental se adquiere cuando más allá de una simple rendición de cuentas, se ponen de manifiesto todos los beneficios, logros o mejoras que el tema en cuestión provoca en la ciudadanía y los proyectos o promesas de campaña que se consolidan** (SUP-RAP-119/2010).

Sobre el tema, es aplicable la tesis de jurisprudencia 12/2015 de rubro y texto siguiente:

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- *En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

En esta lógica, cuando la información generada o emitida por los servidores públicos concierne a **sus informes de labores**, el deber de cuidado cobra especial relevancia, a fin de que no se transgredan las restricciones y parámetros previstos para difundir ese tipo de actos, particularmente por cuanto hace a su contenido (genuino y auténtico) y a los **límites temporal** y territorial previstos legalmente.

Resulta pertinente citar el criterio sostenido por la *Sala Superior*, en la sentencia del expediente SUP-REP-3/2015, en la que determinó, en relación con la difusión de informes de labores, en lo que interesa, lo siguiente:

A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior, la difusión de los informes de servidores públicos con el propósito de propalar la rendición de informes a la sociedad, de conformidad con el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está acotada a lo siguiente:

1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica, que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las atribuciones conferidas normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y abiertos a la ciudadanía.

2. Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de concluido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe de labores.

Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los servidores públicos eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la circunstancia de que sean diversos los servidores públicos que integran un órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos tendrán que informar de las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del órgano o grupo.

Esto, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula la forma y temporalidad en la rendición de informes, además de ser una ley marco es

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

una ley especial, que tiende hacer efectiva la protección de las normas constitucionales de la materia.

3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa, por lo que de ningún modo, su rendición puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa.

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en que irradia su función y actividades desplegadas con base en las atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas.

5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad y contenido previsto en la ley.

Al partirse de la premisa atinente a que la esencia del informe de gestión es un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los mensajes que se difundan deben tener el propósito de comunicar a la sociedad la auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública de la que se rinde cuentas, esto es, las acciones, actividades realmente desplegadas en el propio año y con los datos o elementos vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, como consecuencia de las atribuciones conferidas en los ordenamientos aplicables.

Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en el pretexto para enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado que lo relevante en el ámbito de este acto gubernamental es informar de aquellos aspectos y actividades que guarden vinculación directa e inmediata con la gestión pública del periodo correspondiente.

De modo, que en la propaganda en comento, la figura y la voz del funcionario público deben ocupar un plano secundario, de frente a la relevancia que corresponde a la información propia de la rendición de cuentas que debe comunicarse en forma genuina, auténtica y veraz a la sociedad.

En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar, se insiste, un recuento del ejercicio genuino, auténtico y veraz de las actividades que se comunicaron a la ciudadanía, esto es, constituirse en corolario del acto gubernamental informativo y no un foro renovado para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas y actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos comiciales.

En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar el plazo legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo contrario se incurriría en transgresión a la ley por parte del servidor público y de todo aquél que participe en su difusión extemporánea.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

El contenido de la información que se rinde debe ser cuidadoso, por ser fundamental que se acote a los propios elementos relacionados con el informe de la gestión anual; por lo cual, no tiene cabida la alusión de actividades o prácticas ajenas a la materia informada y menos aún, la promoción personalizada.

En suma, la información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público, esto es, una verdadera rendición de cuentas, porque aun cuando puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos atinentes al quehacer del servidor público conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.

Bajo esa arista, la promoción del informe adquiere un contexto que parte del reconocimiento como acto de información de la gestión pública y rendición de cuentas para transmitir a la sociedad el balance y resultados de las actuaciones de los servidores públicos, sin que implique un espacio, se reitera, para la promoción de ideologías o convicciones ajenas a la labor pública anual por quien lo despliega.

Así, se colige que el ámbito temporal que rige la rendición de informes de los servidores públicos encuentra un mandato visiblemente definido en la ley.

6. Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que de ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público; ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral, toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima protección a efecto de blindar los procesos electorales, en la lógica de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio para todas las fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia.

Cabe resaltar que los elementos que deben satisfacer los informes de gestión de los servidores públicos, que se han reseñado en los párrafos precedentes, ya habían sido analizados y definidos por la Sala Superior desde el año dos mil nueve, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-75/2009, en el que se estableció, en esencia, que los informes en comento, no constituían propaganda política electoral prohibida, siempre y cuando cumplieran con lo siguiente:

1. SUJETOS. La contratación de los promocionales se debe hacer exclusivamente por conducto de los legisladores, su grupo parlamentario o la Cámara de Diputados.

2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa del o los legisladores o el grupo parlamentario al que pertenecen.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro del periodo de precampaña o campaña electoral.

4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con contenido electoral.

Como se advierte, el máximo órgano jurisdiccional de la materia estableció los lineamientos que se citan a continuación, para la difusión de informes de labores:

1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden cuentas, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.
2. Se debe efectuar una sola vez en el año y después de concluido el periodo referente a aquel en que se ha de rendir el informe de labores.
3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa.
4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.
5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad y contenido previstos en la ley.
6. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público; ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, la disposición legal contenida en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIFE*, no debe ser entendida como una excluyente de la obligación contenida en la precitada norma constitucional –artículo 134–, que se refiere a la prohibición para que los órganos públicos, dependencias, entidades e instituciones de la administración pública, difundan determinada propaganda en medios de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

comunicación social, que pudiera ser entendida como mensajes ajenos a la propaganda institucional a que tienen derecho.

En esta tesitura, el informe de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes a través de los cuales se den a conocer en los medios de comunicación masiva no serán considerados propaganda, cuando cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ **Sujetos.** La difusión del informe se realiza por servidores públicos que tengan la obligación de rendir informes de labores.
- ✓ **Temporalidad.** No se deben difundir durante el periodo de campaña electoral y hasta el día de la jornada electoral, aunado a que la divulgación del informe y de los mensajes que lo den a conocer, se realicen una vez al año, y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el respectivo informe.
- ✓ **Territorialidad.** La difusión se limite al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.
- ✓ **Contenido.** Se debe encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de su actividad como servidor público.
- ✓ **Finalidad.** En ningún caso la difusión tendrá fines electorales.

No obstante, en fechas recientes la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recursos SUP-REP-138/2017 y SUP-RAP-643/2017, estableció nuevas directrices que acotan los alcances respecto de los criterios jurisdiccionales en tratándose de propaganda relacionada con informes de actividades de servidores públicos, estableciendo al respecto lo siguiente:

SUP-REP-138/2017

...

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que la norma electoral no impone la obligación de que los promocionales alusivos a los informes de gobierno deban mencionar expresamente el nombre y características de cada programa social a que se refiere, sino que basta con que de las expresiones contenidas en estos y de su análisis contextual, se aprecie que se trata del resumen anual de los datos relacionados con el cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno.

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Ni la norma legal [art. 242, párrafo 5 de la LGIPE], ni su interpretación por parte del Máximo Tribunal Constitucional [Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas] establecen un formato o parámetro uniforme conforme al cual se deban desarrollar los informes de labores, esto implica que los funcionarios públicos están en libertad de utilizar la narrativa que consideren más adecuada para transmitir a la ciudadanía las acciones de gobierno realizadas en el periodo correspondiente, con la condición de que estos se refieran efectivamente a programas o acciones de gobierno, lo cual, como se ha visto, acontece en el caso.

g) Utilización de imágenes y voz del funcionario

En ese orden de ideas, en relación con el uso de la imagen del servidor público en los promocionales denunciados, debe tenerse en cuenta que el citado artículo 242, en su párrafo 5, autoriza que, tratándose de informes de gobierno, la voz e imagen de los funcionarios pueda ser utilizada en la difusión de los mismos, pues ello atiende a la necesidad propia de la rendición de cuentas, y la lógica de que el ciudadano identifique al funcionario que rinde el informe.

SUP-RAP-643/2017

...

Sobre los anteriores criterios, es necesario aclarar algunos aspectos, a fin de precisar cómo se deben valorar los elementos citados, para determinar si la propaganda relativa a un informe de labores, se ajusta a lo previsto en la ley.

Además, es necesario considerar la ausencia normativa sobre cómo debe ser la difusión de propaganda relacionada con los informes de labores. Por ello, los criterios impuestos vía jurisdiccional deben ser razonables, de acuerdo a la finalidad misma de la rendición de cuentas como de la propaganda respectiva.

a) Valoración conjunta. *En primer lugar, los elementos personal, objetivo y temporal deben ser analizados de manera conjunta. Así, al momento de valorar la propaganda, es indispensable hacerlo en todo el contexto de la misma. Sólo de esa manera será posible decidir si la rendición del informe es auténtica, si cumple los aspectos geográficos como temporales, y si en modo alguno influye en la contienda electoral.*

Por tanto, cuando la autoridad administrativa o jurisdiccional examine la propaganda relacionada con informes de labores, por ningún motivo puede analizar de forma aislada o individual el contenido visual o auditivo. Proceder de esa forma, puede generar una distorsión del auténtico mensaje que el servidor público pretende difundir.

b) Contenido del informe *Este aspecto permite determinar si los mensajes de informes de labores son auténticos comunicados de lo hecho por los servidores públicos y, con ello, si se cumplen las finalidades de los mismos.*

Al respecto, una propaganda de informe de labores será auténtica cuando comunique, de manera genérica o específica, la actividad realizada por el servidor público. Ello, porque la finalidad de la misma es transmitir de manera general cuáles han sido las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

tareas desempeñadas por el funcionario, no así un desglose pormenorizado de todas sus labores.

Así, la autenticidad significa que el contenido de los mensajes informa las labores del funcionario, lo cual se cumple cuando se dé a conocer o se transmita a la ciudadanía cualquier actividad del servidor público.

Por ello, si el contenido contextual de los mensajes de informes de labores alude a las tareas realizadas por el mismo, entonces se cumple la finalidad de comunicar qué fue lo realizado por el mismo.

Ahora bien, para verificar si los mensajes cumplen la finalidad de comunicar lo hecho por el funcionario, es indispensable analizar el contenido de la propaganda en todo su contexto.

Lo anterior, porque la inclusión de la imagen y voz del funcionario en los mensajes, en modo alguno actualiza en automático la promoción personalizada del servidor público. En este sentido, la imagen y voz del funcionario se deben relacionar con posibles actividades realizadas por el servidor público, sin necesidad de especificar de forma detallada y pormenorizada en qué consistieron o cómo se hicieron.

Así, el contenido de los mensajes pueden ser imágenes, palabras o voces, mediante las cuales, a partir de su valoración contextual, se advierta que tienen como propósito informar cuál fue la actividad realizada por el legislador.

Esto es así, porque ninguna norma impone un formato específico de cómo deben ser los mensajes alusivos a los informes de labores, motivo por el cual los servidores públicos están en la aptitud de comunicar sus actividades en la forma que consideren pertinente, siempre que se contenga, aunque sea de manera genérica, lo realizado en determinado periodo.

Por tanto, basta que el elemento personal y el contenido del mensaje, analizados en su contexto, transmitan –ya sea de manera gráfica, auditiva o textual-, cuál fue la tarea realizada por el funcionario.

Es decir, si la imagen y voz del funcionario se incluyen en un contexto, aunque sea genérico, de alguna actividad realizada por el mismo, entonces la propaganda respectiva constituye un auténtico comunicado de las tareas realizadas por el servidor público.

En efecto, de manera ordinaria, los mensajes relacionados con la rendición de informes tienen como propósito tematizar las actividades realizadas por el servidor público.

Así, la imagen y voz de éste, están enmarcadas en un contexto en el cual se incluyen otras imágenes y frases, que pretenden esquematizar, visual y auditivamente, las tareas hechas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En este sentido, si en la propaganda respectiva confluyen la imagen y voz del servidor público y un contenido sobre la actividad realizada, aunque sea de tipo genérico, entonces esos mensajes se ajustarán a lo dispuesto para la difusión de informes de labores.

Al respecto, se debe precisar que el carácter preponderante o secundario del funcionario en la propaganda, en modo alguno está determinada por una mayor o menor presencia del mismo en el contenido del mensaje, sino por la falta de relación con la tarea o actividad realizada por el servidor público.

Así, cuando exista la transmisión de un mensaje respecto a esa tarea o actividad, en el cual se precisó lo realizado por el funcionario, entonces se debe entender que, en su conjunto, la propaganda se centra, precisamente, en la actividad del servidor y en modo alguno en su persona.

Además, la normativa en forma alguna impone que los promocionales alusivos a informes de labores, deban mencionar qué número de informe es, así como tampoco obliga a precisar la denominación y características del programa social.

Esto, porque basta que las expresiones contenidas en los mensajes, así como de su análisis contextual, se aprecie que se trata del resumen anual de lo hecho por el funcionario.

Lo anterior, porque las exigencias establecidas para los mensajes relacionados con informes de labores, están centrados en que se comunique alguna actividad realizada por el funcionario, lo cual se cumple si el servidor público informa, inclusive de manera amplia y genérica, alguna tarea realizada en su gestión.

En conclusión, una propaganda de informe de labores será auténtica cuando su contenido comunique, ya sea de manera genérica o específica, alguna actividad hecha por el funcionario

Esto en forma alguna significa un margen ilimitado para los funcionarios públicos, a partir de lo cual puedan incluir en los mensajes de informes de labores, cualquier comunicado ajeno a los mismos.

Antes bien, los servidores públicos deben respetar la finalidad de los mensajes de informes de labores, consistente en dar a conocer las tareas realizadas en determinado periodo, motivo por el cual su contenido debe aludir necesariamente a su actividad como funcionario.

c) Temporalidad del informe. Esta Sala Superior ha sostenido que el informe de labores, así como la propaganda relacionada con el mismo, i) debe ocurrir una sola vez en el año calendario; ii) inmediatamente después, en un plazo razonable, de concluido el periodo del cual se informa, y iii) nunca durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Sin embargo, ni la ley ni esta Sala Superior -vía jurisprudencia- han impuesto que, los mensajes relacionados con el informe de labores señalen día, hora y lugar del acto de rendición de cuentas.

En efecto, ninguna norma prevé que, en los mensajes alusivos al informe de actividades, se contenga la fecha y lugar en los cuales se realizará ese acto. A su vez, este Tribunal Electoral tampoco ha impuesto jurisprudencialmente ese deber, precisamente por la falta de norma en ese sentido.

Así, carecería de sustento constitucional y legal imponer que, en los mensajes relacionados con los informes de labores, se señale la fecha y lugar en el cual se realizará ese acto. En todo caso, está en la decisión del funcionario incluir en el mensaje, la fecha y lugar en los cuales se realizará el informe de labores. Sin embargo, la ausencia de los mismos, en modo alguno determina la existencia de propaganda personalizada.

...

Ahora bien, por cuanto hace al estudio concreto de la responsabilidad en que puedan incurrir los sujetos involucrados en la difusión de informes de labores de los servidores públicos, en términos de las directrices establecidas en el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, y atendiendo al ámbito de control que éstos tienen sobre la propaganda o publicidad que despliegan para difundir sus logros de gobierno, este *Consejo General*, la *Sala Especializada* y la *Sala Superior*, han emitido diversos criterios atendiendo a las particularidades propias de cada uno de ellos, mismas que a continuación se resumen, a fin de que sirvan de contexto para la resolución del presente asunto.

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
1	SCG/PE/PAN/CG/110/2010	Informe de labores de Enrique Peña Nieto, entonces, gobernador del Estado de México, en diversos canales de televisión a nivel nacional.	Se declara fundada la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Gobernador Constitucional del Estado de México y el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, por la presunta conculcación al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando OCTAVO de la presente resolución.
	Resolución: CG11/2011 ¹⁹⁵		
	Fecha: 18/01/2011		

¹⁹⁵ Visible en la página de internet:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81572/CG1120201120IFE_fo0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
	Revocada mediante resolución dictada en el recurso de apelación: SUP-RAP-24/2011, SUP-RAP-26/2011, SUP-RAP-27/2011 y SUP-RAP-32/2011. ¹⁹⁶	... 5. Que el Coordinador de Comunicación Social y el Gobernador del Estado de México, no son responsables de la transgresión a lo dispuesto por el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por no acreditarse la contratación en medio alguno distinto a los que cubren el Estado de México. 6. Que es imputable a las personas morales Televisión Azteca, S.A. de C.V.; Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V.; Televimex, S.A. de C.V.; Televisora de Occidente, S.A. de C.V.; Cadena Televisora del Norte, S.A. de C.V.; T.V. de Los Mochis, S.A. de C.V.; T.V. del Humaya, S.A. de C.V.; Telehermosillo, S.A. de C.V.; Televisora del Golfo, S.A. de C.V.; Televisión del Golfo, S.A. de C.V., y Televisora Peninsular, S.A. de C.V. la transgresión a lo dispuesto por el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por la difusión extra territorial de los promocionales denunciados, por lo que resulta procedente imponerles una sanción. ¹⁹⁷	
2	UT/SCG/PE/LHH/CG/5/PE F/49/2015, UT/SCG/PE/SJFR/CG/6/PE F/50/2015, UT/SCG/PE/RSG/CG/8/PE F/52/2015, UT/SCG/PE/MORENA/CG/15/PEF/59/2015, UT/SCG/PE/PRI/CG/9/PEF/53/2015, UT/SCG/PE/SSS/CG/12/PE F/56/2015 UT/SCG/PE/PRI/CG/13/PE F/57/2015	Difusión extraterritorial del spot relativo al cuarto informe de labores del Gobernador de Puebla. (Metrobus en Ciudad de México y radio en Tlaxcala).	En este asunto la Sala Regional Especializada determino que el Gobernador de Puebla y los servidores públicos adscritos al organismo público denominado Puebla Comunicaciones, no eran responsables de la infracción denunciada, consistente en difundir de manera extraterritorial, propaganda alusiva a su informe de labores, en pantallas del Metrobus de la Ciudad de México, habida cuenta que a decir del órgano jurisdiccional, se demostró que la contratación fue para efectos de ser difundido únicamente en aquella entidad federativa, además de que los involucrados no estuvieron en aptitud real de conocer acerca de la difusión de la publicidad desplegada en la capital; lo anterior, si se toma en cuenta el hecho que la propaganda se difundió en las pantallas colocadas al interior del Metrobus que circula en la ruta detectada en el Distrito Federal, en tanto que el servidor público despacha en el estado de Puebla.
	Resolución: SRE-PSC-35/2015 ¹⁹⁸		
	Fecha: 13/03/2015		
	Resolución confirmada al resolver el SUP-REP-123/2015 ¹⁹⁹		
	UT/SCG/PE/MC/CG/68/PE F/112/2015	Difusión extemporánea en radio y televisión de	El Gobernador de Jalisco y Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco, al momento de

¹⁹⁶ Visible en la página de internet: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00024-2011.htm>

¹⁹⁷ Visible en el CONSIDERANDO OCTAVO de la resolución dictada en el expediente SUP-RAP-24/2011, SUP-RAP-26/2011, SUP-RAP-27/2011 y SUP-RAP-32/2011

¹⁹⁸ Visible en la página de internet <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0035-2015.pdf>

¹⁹⁹ Visible en la página de internet http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0123-2015.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
3	Resolución: SRE-PSC-37/2015 ²⁰⁰	promocionales alusivos al informe de labores de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco.	comparecer al procedimiento, coincidieron en <i>manifestar que la contratación de tiempo para la difusión en radio y/o televisión de los promocionales, se acotó al periodo del veinticinco de enero al seis de febrero del año en curso por lo que, aducen, no les resulta atribuible la transmisión de los promocionales con posterioridad a esa fecha.</i>
	Fecha: 20/03/2015		<i>Tal situación como se vio, se corroboró con los elementos de prueba que obran en autos, así como con el reconocimiento que llevaron a cabo las personas morales que difundieron los promocionales, quienes manifestaron, expresamente que la contratación fue del veinticinco de enero al seis de febrero y que las detecciones posteriores se debieron a un error de programación o falla técnica</i>
	SUP-REP-132/2015 ²⁰¹		INFUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.
4	SCG/Q/FDC/CG/43/INE/90/2014	El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, colocó anuncios espectaculares y vallas fuera del ámbito geográfico de responsabilidad, en los que difundió mensajes con motivo de su tercer informe de labores, en violación a lo establecido en el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	El Consejo General determinó que No existían elementos en autos que acrediten que Eruviel Ávila Villegas , Gobernador Constitucional del Estado de México, así como Raúl Vargas Herrera , Coordinador General de Comunicación Social y Miriam Vidal Sánchez , otrora Directora General de Publicidad de la Coordinación General de Comunicación Social, ambos del Gobierno del Estado de México, hubiesen ordenado, solicitado o contratado la colocación de propaganda alusiva al Tercer Informe de Labores del Gobernador fuera del territorio del Estado de México.
	Resolución: INE/CG352/2015 ²⁰²		La empresa Covisa Comercializadora, S.A. de C.V., reconoce que colocó la propaganda denunciada (fuera del Estado de México), derivado de un error logístico.
	Fecha: 17/06/2015		Se declaró infundado por lo que hace al Gobernador y funcionarios del Estado de México, porque no contrataron la difusión fuera del Estado de México.
			INFUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.

²⁰⁰ Visible en la página de internet: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0037-2015.pdf>

²⁰¹ Visible en la página de internet: <https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-04-16/sup-rep-0132-2015.pdf>

²⁰² Visible en la página de internet: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/84271/CGex201506-17_rp_1_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
	La resolución no fue impugnada		
5	SCG/Q/PVL/CG/112/2013	Informe de labores de Cristina Ruíz Sandoval, por exhibir publicidad en un periodo distinto al permitido por la Ley.	<i>El Consejo General sostuvo que se tuvo por demostrado que Cristina Ruíz Sandoval, difundió su informe de labores del veinte de noviembre, hasta el tres de diciembre de dos mil trece, por así advertirse de las manifestaciones vertidas por la ahora denunciada en uno de sus escritos, así como de la copia simple del contrato exhibido por ella misma, situación que actualiza la extemporaneidad respecto de la difusión de sus publicitarios, y por ende, <u>opera en su contra</u>, al determinarse que excedió el plazo previsto en la disposición legal aludida en el párrafo que antecede y, en consecuencia, asiste la razón a la parte denunciante respecto de dicha infracción</i> FUNDADO respecto de la servidora pública que rinde el informe.
	Resolución: INE/CG978/2015 ²⁰³		
	Fecha: 26/11/2015		
	Revocada por <i>Sala Superior</i> al resolver el SUP-RAP-814/2015 ²⁰⁴ 12/01/2016	La decisión se sustentó en que, a decir del órgano jurisdiccional, el Consejo General no interpretó de forma debida y adecuada, al tenor de la voluntad de las partes el contrato de prestación de servicios publicitarios, suscrito por la recurrente y la empresa "Circuitos Publicitarios S. A. de C. V." de ahí que lo relevante de este criterio es que la propia jurisdicción refiere que debe estarse a lo pactado en los contratos que se celebren para la difusión de informes de labores.	
6	UT/SCG/Q/TEDF/CG/157/P EF/172/2015	Informe de labores de Margarita Saldaña Hernández, por exhibir publicidad en un periodo distinto al permitido por la Ley.	<i>Sobre este particular, el Consejo General determinó que no obstante que la denunciada manifestó desconocer la procedencia y colocación de las lonas objeto de denuncia en las ubicaciones señaladas, aduciendo que fueron instaladas con el propósito de sembrar en su contra elementos de ilegalidad para su campaña; se considera que tal deslinde resulta ineficaz al no haberse realizado con oportunidad, ya que el mismo fue presentado hasta el momento en que el Instituto Electoral del Distrito Federal le requirió su retiro, en cumplimiento al acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil quince.</i> ... <i>Al respecto, se adujo que el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral, dispone la obligación de retirar la propaganda en un término que no exceda de los cinco días posteriores a la fecha en que se rinda el informe, lo que lleva implícito la obligación del servidor público de verificar y cerciorarse del total retiro de la citada propaganda y de que, en su caso, la misma no se</i>
	Resolución: INE/CG1060/2015 ²⁰⁵		
	Fecha: 16/12/2015		

²⁰³ Visible en la página de internet:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/84830/CGor201511-26_rp_6_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

²⁰⁴ Visible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00814-2015.htm>

²⁰⁵ Visible en la página de internet: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/12_Diciembre/CGex201512-16_1a/CGex201512-16_rp_12_9.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
			<p><i>utilice con posterioridad para ser nuevamente difundida. Lo anterior, hace evidente que, en todo caso, el titular de la propaganda debe hacerse cargo de su total resguardo o destrucción.</i></p> <p><i>Asimismo, se debe asentar que no obra en el expediente de mérito, elemento probatorio que compruebe el dicho de Margarita Saldaña Hernández, otrora Diputada Federal, consistente en que la propaganda fue sembrada, ni tampoco aportó prueba alguna tendente a ello.</i></p> <p>FUNDADO respecto de la servidora pública que rinde el informe.</p>
La resolución no fue impugnada			
7	UT/SCG/Q/CG/59/INE/106/PEF/14/2014	Difusión extemporánea de un espectacular con información alusiva al informe de labores de José Martín López Cisneros	<p>FUNDADO. Por haber acordado la difusión por un periodo de catorce días.</p> <p>INFUNDADO. En relación a la exhibición del espectacular por 77 días adicionales a los contratados, al no ser imputables al servidor público denunciado.</p>
	Resolución: INE/CG671/2016 ²⁰⁶		
	Fecha: 28/09/2016		
La resolución no fue impugnada			
8	UT/SCG/PE/PRI/JL/GTO/160/2016	Difusión extemporánea de spots alusivo al informe de labores del senador Fernando Torres Graciano	<p><i>En este asunto la jurisdicción consideró que el Senador de la República Fernando Torres Graciano, es responsable indirecto de la difusión extemporánea de los spots denunciados, con base en las siguientes consideraciones.</i></p> <p><i>Los spots materia de la Litis, tienen como finalidad comunicar a la ciudadanía supuestas acciones concretas que el Senador llevó a cabo durante el periodo de labores que se informa. En este sentido, y a pesar de no haber prueba que acredite que los spots fueron ordenados o pagados por el referido servidor público, sí implicaron un beneficio objetivo para su persona, dado que constituyen propaganda alusiva a su cuarto informe de labores, respecto de la cual no negó su contenido o difusión.</i></p> <p><i>Ahora bien, al haberse difundido por un periodo de 31 días, los spots referidos superaron (en 18 días) el tiempo permitido</i></p>
	Resolución: SRE-PSC-33/2017 ²⁰⁷		
	Fecha: 29/03/2017		

²⁰⁶ Visible en la página de internet:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81557/CGex201609-28-rp-1-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁰⁷ Visible en la página de internet: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0033-2017.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
			<p>por el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General (13 días), conducta que es atribuible indirectamente a dicho servidor público, al haber acontecido en el Estado de Guanajuato, a través de promocionales de radio durante un periodo ininterrumpido de un mes, y sin que obre constancia alguna de haberse deslindado de dicha conducta ilegal que al final le benefició.</p> <p>Así, en razón de que si bien no obra prueba de la contratación de los spots denunciados, y en este sentido no tiene una responsabilidad directa, lo cierto es que al haberle beneficiado ilegalmente la conducta, le era exigible un deber de cuidado respecto a tal difusión extemporánea.</p> <p>FUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.</p>
	Confirmada por Sala Superior al resolver el SUP-REP-54/2017 Y SUP-REP-55/2017, ACUMULADOS ²⁰⁸	<p>Sobre este mismo tema, la Sala Superior adujo que derivado de la adminiculación de las constancias anteriores, mismas que se encuentran a la vez en los márgenes de los días en que se demostró la difusión de los mensajes denunciados en la radio, se puede desprender que, el senador Fernando Torres Graciano sí tuvo conocimiento de los spots transmitidos vía radiofónica entre el veintiuno de junio y el veintiuno de julio de dos mil dieciséis. De ahí que, es correcto atribuirle una responsabilidad indirecta toda vez que existe un deber de cuidado no atendido por el senador denunciado, sin que presentara tampoco un deslinde oportuno al respecto. Por tanto, al actualizarse una transgresión a la normativa electoral, esa conducta debe ser sancionada.</p> <p>Es por ello, que la Sala Especializada de manera correcta consideró que le es aplicable lo previsto por el artículo 457 de la LEGIPE, el cual señala que cuando las autoridades o los servidores públicos cometan alguna infracción a la legislación electoral se dará vista al superior jerárquico, y en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieren constituir responsabilidades administrativas a fin de que se proceda conforme a las leyes aplicables. Así, en el caso particular, derivado del incumplimiento del deber de cuidado del actor, éste es sujeto de responsabilidad indirecta en los términos precisados en la sentencia recurrida.</p>	
	UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016 Resolución: INE/CG316/2017 ²⁰⁹ Fecha: 14/07/2017		<p>Sobre este asunto, el Consejo General sostuvo que de la revisión de las constancias de autos, no se advierten elementos de prueba con los cuales se acredite que la denunciada haya llevado a cabo actos tendentes para que la propaganda motivo de denuncia fuera retirada por Proyección de Imagen, razón por la cual, se considera que si bien, existe un contrato celebrado entre la denunciada y esa persona moral para exhibir la propaganda de su primer informe de</p>

²⁰⁸ Visible en la página de internet: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/54/SUP_2017_REP_54-645622.pdf

²⁰⁹ Visible en la página de internet:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93227/CGex201707-14-rp_10-4.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
		Difusión extemporánea del primer informe de labores de Norma Rocío Nahle García, diputada federal.	<p>labores legislativas por el plazo de trece días, lo cierto es que, Norma Rocío Nahle García faltó a su deber de cuidado de que esa publicidad no excediera del límite permitido por la norma electoral.</p> <p>En efecto, en el particular se trata de un solo espectacular contratado, motivo por el cual se considera razonable que la denunciada estaba en posibilidad de verificar que la propaganda motivo de denuncia fuera retirada en tiempo y forma, dado que ella es la responsable de que esa publicidad cumpliera los parámetros establecidos en la ley.</p> <p>FUNDADO respecto de la servidora pública que rinde el informe.</p>
	Al momento de resolver el recurso de apelación SUP-RAP-244/2017, ²¹⁰ se determinó que MORENA no tenía interés jurídico para impugnarla y por ende, se desechó el recurso.		
10	UT/SCG/Q/JOGP/CG/68/2016 Y ACUMULADOS Resolución: INE/CG349/2017 ²¹¹ Fecha: 28/08/2017	Se denunció a Héctor Barrera Marmolejo, Diputado Federal por el 24 Distrito Electoral Federal de la Ciudad de México, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión en razón de la supuesta difusión de su primer informe de actividades como legislador, mediante un anuncio espectacular que contenía propaganda personalizada, contraria al artículo 134 constitucional, y que permaneció expuesto por un periodo superior al permitido por el artículo 242, párrafo 5, de la LGIPE, esto es, de siete días anteriores y cinco posteriores a la	<p>El consejo General determinó que existió aceptación por parte del Diputado Federal Héctor Barrera Marmolejo, así como de la persona moral Strada Publicidad S.A. de C.V. —al admitir el retiro de la propaganda en fecha posterior a la convenida— respecto a la contratación del anuncio espectacular materia del presente procedimiento, por un periodo de trece días, esto es, durante el periodo permitido por la legislación electoral, para no considerar como proselitista la publicidad otorgada a un informe de labores</p> <p>En efecto, en el caso particular, se trata de un solo anuncio espectacular contratado, motivo por el cual, se considera razonable que el denunciado estaba en posibilidad de verificar que la propaganda motivo de queja fuera retirada en tiempo y forma, dado que el legislador señalado era el principal responsable que esa publicidad cumpliera los parámetros temporales establecidos en la ley.</p> <p>FUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.</p>

²¹⁰ Visible en la página de internet: <https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-08-30/sup-rap-0244-2017.pdf>

²¹¹ Visible en la página de internet:

http://transparencia.ine.mx/obligaciones/rsc/documentos/Articulo70/Formato36/UTCE/2017/tml3/08_pos_3er_tri_2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
		<p>fecha en que se rindió el informe.</p> <p>Un anuncio espectacular exhibido 13 días adicionales a los establecidos en la Ley.</p>	
	Al momento de resolver el recurso de apelación SUP-RAP-599/2017, ²¹² se determinó que el PAN no tenía interés jurídico para impugnarla y por ende, se desecha.		
11	UT/SCG/PE/JLPD/CG/15/PEF/72/2018	La difusión del informe de labores de José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado de Puebla, en un periódico impreso de circulación nacional.	<p>La Jurisdicción dispuso que ... <i>en lo tocante a la extraterritorialidad en la difusión del informe de gobierno del Gobernador del Estado de Puebla, se acredita dicha infracción, por parte del Director General de Puebla Comunicaciones, ya que, de conformidad con las atribuciones legalmente conferidas, es el responsable de coordinar la política de comunicación social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, además de que fue dicha dependencia la que contrató con la persona jurídica Ediciones del Norte, la publicación de la nota denunciada en el periódico REFORMA de circulación nacional, sin que dicha responsabilidad pueda ser atribuida a dicho medio impreso, en razón de su libertad de expresión, comercio e imprenta, garantías que salvaguardan la labor periodística.</i></p> <p><i>A partir de lo resuelto, esta Sala Especializada determina que no es atribuible responsabilidad alguna a José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado de Puebla, sino en todo caso al Director General de Puebla Comunicaciones, en virtud de haber sido la dependencia que ordenó y contrató la inserción denunciada, en virtud de las siguientes consideraciones.</i></p> <p><i>Director General de Puebla Comunicaciones. Fue quien realizó la contratación para la publicación de la inserción denunciada, relativa al primer informe de gobierno del Titular del Ejecutivo Estatal de Puebla, fuera de su ámbito de responsabilidad, en el caso concreto, en el periódico REFORMA, el cual de acuerdo a lo razonado anteriormente es un medio impreso de circulación nacional.</i></p>
	Resolución: SRE-PSC-27/2018 ²¹³		
	Fecha: 14/02/2018		

²¹² Visible en la página de internet: <https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-10-05/sup-rap-0599-2017.pdf>

²¹³ Visible en la página de internet: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0027-2018.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
			FUNDADO respecto del servidor público encargado de la publicidad en el Estado. INFUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.
12	JL/PE/MORENA/JL/CHIS/PEF/2/2018	Difusión de publicidad alusiva al informe de labores del gobernador del Estado de Chiapas en una temporalidad que no está permitida.	Del contenido del oficio ICJyAL/0063/2018, signado por el Consejero Jurídico del referido mandatario estatal, se desprende que se instruyó al Director General del Instituto de Comunicación de ese estado, a efecto de que “... <i>toda la propaganda gubernamental, incluyendo los logros de gobierno, deberán ser retirados antes del inicio del periodo de campañas federales, es decir, antes del 30 de marzo del presente año; lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 41, fracción III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 183, párrafo 7 y 209, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales...</i> ”; lo que se traduce en que el titular del ejecutivo estatal, cumplió con su deber de cuidado, por lo que se reitera, la conducta denunciada no le puede ser atribuible. El Director General del Instituto de Comunicación Social del estado de Chiapas, <i>tiene el deber de cuidado en el ámbito de su competencia, ya que en la publicidad que es materia de denuncia, se promueve la imagen del titular del ejecutivo estatal y se ponen en riesgo principios constitucionales, siendo responsable de la imagen de éste el referido instituto.</i> FUNDADO respecto del servidor público encargado de la publicidad en el Estado. INFUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.
	Resolución: SRE-PSL-25/2018 ²¹⁴		
	Fecha: 25/05/2018		
	La resolución no fue impugnada		
	UT/SCG/PE/PAN/CG/389/PEF/446/2018	Distribución de un díptico alusivo al informe de labores del diputado federal César Alejandro Domínguez Domínguez, por un periodo adicional al permitido por la Ley.	En este caso se considera que es atribuible la responsabilidad directa ^[17] al Grupo Parlamentario del PRI, tanto de la difusión extemporánea del informe de labores como la promoción personalizada con uso de recursos públicos del Diputado Federal César Alejandro Domínguez Domínguez. César Alejandro Domínguez Domínguez, en su calidad Diputado
	Expediente SRE: SRE-PSC-253/2018 ²¹⁵		
	Fecha: 03/08/2018		

²¹⁴ Visible en la página de internet: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSL-0025-2018.pdf>

²¹⁵ Visible en la página de internet: <http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0253-2018.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Procedimientos sancionadores relacionados con informes de labores de servidores públicos			
No.	Expediente	Asunto	Resolución
13			<p><i>Federal, es responsable indirectamente^[19] de la difusión extemporánea de su informe de labores legislativas y de la promoción personalizada que se realizó a su favor.</i></p> <p><i>Ello se considera así, toda vez que tal y como ha sido acreditado, dicho legislador no participó ni ordenó la contratación de la elaboración y difusión de la propaganda denunciada, sino que ello fue realizado, motu proprio, por el Grupo Parlamentario al que pertenece; sin embargo, como se ha evidenciado, la distribución de la propaganda implicó un beneficio objetivo para su persona, a través de la difusión de su nombre, imagen y actividades legislativas, en contravención de lo previsto en las normas constitucionales y legales que regulan la difusión de propaganda gubernamental, incluida la relativa a los informes de labores.</i></p> <p><i>En ese sentido, debe decirse que el denunciado no refirió ni demostró que se hubiera deslindado de la distribución de la propaganda denunciada ni que la desconociera; por el contrario, se limitó a señalar que dicha propaganda había sido elaborada y difundida por el Grupo Parlamentario al que pertenece, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas.</i></p> <p><i>De ahí que el denunciado, en su calidad de servidor público tenía un especial deber de cuidado respecto de la difusión de propaganda en la que se incluyera su nombre, imagen y logros legislativos; más aún, dentro del contexto del desarrollo del proceso electoral en el que competía, ya que, de forma particular, los servidores públicos han de basar sus actuaciones en el principio de respeto absoluto de la norma legal, pues son los destinatarios directos de las limitaciones previstas tanto en el artículo 134 de la Constitución Federal, como en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral.</i></p> <p>FUNDADO respecto del servidor público que rinde el informe.</p>
La resolución no fue impugnada			

Como se puede observar de los anteriores resúmenes, tanto los órganos jurisdiccionales como esta autoridad electoral nacional, han resuelto los asuntos puestos en su conocimiento y, en su caso, han sancionado las conductas que se estimaron contraventoras a la norma, destacándose en todos los asuntos, que el tamiz de valoración que se ponderó, tuvo un íntima relación en el nivel de conocimiento objetivo que tuvieron o pudieron tener los implicados en la difusión de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

propaganda, así como en su capacidad de respuesta oportuna para evitar que se continuara infringiendo la norma; es decir, en todos los casos se ponderó si la propaganda denunciada se encontraba en un nivel de dominio absoluto de los denunciados, así como las acciones que llevaron a cabo para frenar o detener cualquier acción que tuviese como fin transgredir las disposiciones que regulan la rendición de informes de labores.

7. Análisis del caso concreto. De conformidad con el marco normativo expuesto, así como los criterios jurisdiccionales a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, especialmente el establecido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-643/2017, cuando la autoridad administrativa examine la propaganda relacionada con informes de labores, deberá valorar conjuntamente los elementos personal, objetivo y temporal de la misma, con el propósito de conocer el contexto de ésta y determinar si su difusión es auténtica; además, deberá analizar si su propalación cumple los aspectos geográficos como temporales, y si influye o no en la contienda electoral.

Con base en ello, a continuación, se examinarán los elementos geográficos y temporales de la publicidad denunciada, para posteriormente valorarlos de forma conjunta con su contenido y estar en condiciones para determinar si existe o no infracción a la normativa electoral.

7.1. Temporalidad

En relación a la temporalidad en que deben difundirse los informes de labores de los servidores públicos, la *Sala Superior*, en la resolución recaída al multicitado recurso de apelación SUP-RAP-643/2017, refirió las siguientes reglas:

*c) **Temporalidad del informe.** Esta Sala Superior ha sostenido que el informe de labores, así como la propaganda relacionada con el mismo, i) debe ocurrir una sola vez en el año calendario; ii) inmediatamente después, en un plazo razonable, de concluido el periodo del cual se informa, y iii) nunca durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.*

En ese sentido, Juan Manuel Zepeda Hernández, rindió su informe de labores legislativas el **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis**.

Con base en ello, y tomando en cuenta las previsiones que al respecto establece el artículo 242, párrafo 5 de la *LGPE*, el periodo de difusión de siete días antes y cinco después a que tiene derecho el funcionario señalado como denunciado

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

transcurrieron del diecinueve al treinta y uno de octubre del año en curso, inclusive, tal y como se ejemplifica en la tabla siguiente:

O C T U B R E												
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7 Días anteriores							Rendición del informe de labores	5 Días posteriores				

Ahora bien, de conformidad con la información que obra en autos, la publicidad denunciada dejó de difundirse en virtud de lo mandado en el **ACQyD-INE-128/2016**, de veintiocho de octubre del mismo año, donde se declaró procedente la adopción de medidas cautelares en cuanto a la propaganda fija y de internet denunciada relativa al Primer Informe de Actividades Legislativas Juan Manuel Zepeda Hernández.

Por lo cual de conformidad con la información que obra en autos puede presumirse que la publicidad materia del presente asunto comenzó a difundirse el **diecinueve de octubre de dos mil dieciséis**, y en su mayoría comenzó a retirarse el veintiocho de octubre del mismo año, atendiendo al momento en que se fue notificando el acuerdo de medida cautelar a los involucrados.

En primer término, el *banner* difundido a través de la página de internet del periódico **El Universal**, comenzó a difundirse el diecinueve,²¹⁶ se constató su existencia el veinticinco²¹⁷ y **cesó el veintiocho de octubre** del mismo año.²¹⁸

Por lo que hace a la publicidad difundida en **anuncios espectaculares**, en atención a los contratos celebrados entre Juan Manuel Zepeda Hernández con Anúnciate en el Oriente, S.A. de C.V.²¹⁹ y Víctor Hugo Chaires Arcos,²²⁰ su difusión se contrató por trece días, contados a partir del **diecinueve de octubre de dos mil dieciséis**.

Además, de la lectura de las actas circunstanciadas de **veintinueve de octubre**,²²¹ y **tres de noviembre**, ambas de dos mil dieciséis,²²² realizadas por el personal del **IEEM**, se advierte que en esas fechas ya **no** se difundía publicidad alusiva al referido informe de labores, en los domicilios denunciados por los partidos **PT** y **PAN**.

²¹⁶ Visible en la página 91 a 103 del primer tomo del expediente.

²¹⁷ Visible en las páginas 245 a 295 del primer tomo del expediente.

²¹⁸ Visible en la página 414 del primer tomo del expediente.

²¹⁹ Visible en las páginas 791 a 794 del primer tomo del expediente.

²²⁰ Visible en las páginas 784 a 786 del primer tomo del expediente.

²²¹ Visible en las páginas 551 a 560 del primer tomo del expediente.

²²² Visible en las páginas 734 a 744 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En relación a la propaganda difundida en **bardas**, ésta fue contratada con Elvert Pineda Bucio,²²³ para ser difundida durante trece días, contados a partir del **diecinueve de octubre de dos mil dieciséis**.

Así, de la lectura del acta circunstanciada de **tres de noviembre** de dos mil dieciséis,²²⁴ realizada por el personal de Oficialía Electoral del *IEEM*, se advierte que en esas fechas ya **no** se difundía publicidad alusiva al referido informe de labores, en los domicilios denunciados por el *PAN*.

Por lo que hace a la difusión del multicitado informe de labores a través de anuncios colocados en el **Sistema de Transporte Colectivo, Metro**, su exhibición fue contratada para el periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.²²⁵

Siendo que, al menos la publicidad que se encontraba en el transbordo de la estación Pantitlán hacia la Línea A, del Sistema de Transporte Colectivo, ya no estuvo disponible el primero de noviembre de dos mil dieciséis, de conformidad con la evidencia de retiro proporcionada por el representante legal de ISA Corporativo, S.A. de C.V.²²⁶

Es necesario aclarar que dicha situación no implica un incumplimiento al acuerdo **ACQyD-INE-128/2016**, toda vez que el contenido del mismo se notificó de forma personal al representante legal de Isa Corporativo, S, A. de C.V. el primero de noviembre de dos mil dieciséis, y por ende su obligación de retirar la publicidad enunciada comenzaba en ese momento.

Finalmente, por cuanto hace a la distribución de la publicación ***Realidad Mexiquense***, correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciséis, de conformidad con la información que obra en autos, no se cuenta con algún elemento objetivo que permita identificar que la misma se hubiese distribuido, pues ni siquiera el *PAN*, denunciante de dicha conducta, señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrió.

No pasa inadvertido para el arribo de la anterior conclusión, que el *IEEM*, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, instrumentó un acta circunstanciada²²⁷ para dar cuenta de una serie de entrevistas a diez ciudadanos vecinos de Ciudad

²²³ Visible en las páginas 787 a 790 del primer tomo del expediente.

²²⁴ Visible en las páginas 734 a 744 del primer tomo del expediente.

²²⁵ Visible en las páginas 444 a 449 del primer tomo del expediente.

²²⁶ Visible en las páginas 361 y 362 del primer tomo del expediente.

²²⁷ Visible en las páginas 610 a 613 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Nezahualcóyotl, de los cuales, seis, señalaron haber tenido conocimiento de la distribución de la referida publicación, sin embargo, tampoco proporcionaron datos de circunstancias de modo, tiempo y lugar en que esto aconteció.

Además, con independencia de que se trata de una documental pública al haber sido recabada por el personal del *IEEM*, lo cierto es que en su contenido se hace constar el testimonio de diversos ciudadanos ante un cuestionamiento realizado por la autoridad electoral local en el Estado de México, y por ende dichas respuestas tienen sólo el carácter indiciario, en razón de que en la diligencia, por ejemplo, no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba.

En ese sentido, tal falta de intermediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza; además, para incrementar el valor probatorio de los referidos cuestionarios, esta autoridad considera necesaria la existencia de algún otro elemento de convicción que ayude a tener certeza de las afirmaciones expuestas por los deponentes, lo anterior de conformidad con las razones esenciales de la jurisprudencia 11/2002 y tesis XII/2088 de rubros **PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIO y PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.**

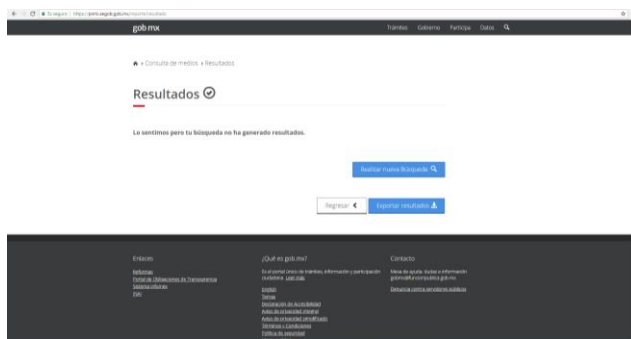
Asimismo, de la información obtenida por el *IEEM*, se advierte que tanto Juan Manuel Zepeda Hernández, como el *PRD*, niegan toda relación con la edición y distribución de la revista *Realidad Mexiquense*.

Siendo que, del contenido de la publicidad que obra en el expediente, no es posible determinar algún responsable de su edición y difusión, aunado a que, de una revisión al portal público del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, no se advierte el registro de tal publicación.²²⁸



²²⁸ Visible en el sitio de internet <https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/resultado>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



Es decir, una vez revisada exhaustivamente el ejemplar ofrecido como prueba, no es posible identificar a alguna persona, sea física o moral, encargada o responsable de su elaboración y distribución.

Al respecto, la *Sala Superior*, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-526/2016, SUP-RAP-530/2016, SUP-RAP-534/2016, SUP-RAP-539/2016 ACUMULADOS y SUP-RAP-243/2017, ha establecido la exigencia de acreditar la existencia de una conducta que pudiere infringir la normativa electoral, ello a través de elementos probatorios suficientes, posteriormente, que la misma sea imputable a un sujeto de derecho.

Por lo tanto, esta autoridad concluye que, con los elementos que obran en el expediente, no es posible arribar objetivamente a una conclusión en sentido afirmativo sobre el reparto de la revista materia de denuncia, ni tampoco las fechas en que esto haya ocurrido; de ahí que al no ser un hecho demostrado, no puede depararle perjuicio a los denunciados con el dictado del presente fallo.

Ahora bien, de conformidad con la información que obra en autos, no existe indicio que Juan Manuel Zepeda Hernández, haya realizado su primer informe de actividades legislativas en más de una ocasión en el año calendario en que ocurrieron los hechos originalmente denunciados.

Por lo que hace al momento en que ocurrieron los hechos denunciados, no pasa desapercibido que al veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que ocurrió el informe materia del presente asunto, ya había iniciado el proceso electoral 2016-2017, para la renovación del titular del Poder Ejecutivo en el Estado de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En efecto, de conformidad con el *Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017*, aprobado mediante acuerdo IEEM/CG/77/2016,²²⁹ por el *IEEM*, dicho proceso electoral inició en la primera semana de septiembre de dos mil dieciséis.

Sin embargo, en ese momento aún no habían iniciado las precampañas electorales, toda vez que, de conformidad con el referido calendario, las mismas ocurrieron del veintitrés de enero al tres de marzo de dos mil diecisiete.

Luego entonces, la publicidad denunciada se exhibió previo al inicio precampañas, campañas electorales, veda electoral y día de la jornada electoral.

Además que, tal y como se analizará más adelante, en la publicidad denunciada no se hace alusión a algún proceso electoral, local o federal.

Precisado lo anterior, se advierte que la difusión de la publicidad relativa al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, aconteció dentro de los parámetros **temporales** establecidos en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIPE* y, por tanto, debe declararse infundado el procedimiento, respecto de la presunta vulneración a lo establecido en los artículos 134, párrafos 7 y 8 de la *Constitución Federal*, en relación con el diverso 242, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Ahora bien, acorde al criterio establecido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-643/2017**, al cual se hizo referencia en el apartado de Marco Normativo de la presente resolución, se continuará con el estudio de los demás elementos que se deben tomar en cuenta para el análisis y estudio correspondiente a la difusión de los informes de labores de servidores públicos, a efecto de que, previo análisis individual, sean valorados en su conjunto para determinar si se trata de un auténtico ejercicio de rendición de cuentas.

7.2. Territorialidad.

La denunciante señaló que la difusión del Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en su calidad de Diputado Local en el Estado de México, se llevó a cabo, entre otros sitios, a través de un anuncio publicitario colocado en una estación del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), ubicada en la Ciudad de México, así como en la página de internet del periódico *El Universal*.

²²⁹ Visible en la página de internet del *IEEM*: http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2016/a077_16.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Con base en ello, existen indicios para suponer que esa propaganda no se ajustó a las previsiones establecidas en el artículo 242, párrafo 5, de la *LG/PE*, en el sentido de que el informe de labores debe ser un veraz y genuino ejercicio de información a la ciudadanía respecto de las acciones realizadas en el ejercicio de su encargo y **circunscribirse al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.**

A este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su tesis **XXII/2015²³⁰**, de rubro **INFORME DE LABORES DE DIPUTADOS LOCALES. ES VÁLIDA SU DIFUSIÓN EN TODA LA ENTIDAD FEDERATIVA**, determinó que el desempeño de las funciones de los diputados de las legislaturas locales, no sólo se circunscribe al ámbito geográfico del distrito en el cual fueron electos, porque al ser representantes populares, ejercen su función para todo el territorio de la entidad.

Por tanto, debe considerarse válida la difusión de sus informes de labores en el mismo, ya que con esto se garantiza el adecuado cumplimiento a la obligación de informar a la ciudadanía que se encuentra vinculada con su labor y se privilegia el derecho de ésta a recibir la información correspondiente.

En el caso, es un hecho notorio y, por tanto, no sujeto de prueba, en términos del artículo 461, de la *LG/PE*, que el denunciado actualmente desempeña el cargo de Diputado Local en la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México, por tanto, el ámbito geográfico de responsabilidad de este servidor público está circunscrito al territorio que ocupa esa entidad federativa.

En virtud de lo anterior, al tratarse de diversos medios comisivos, por cuestión de orden, primero se desarrollará el supuesto relativo a la publicidad colocada en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, toda vez que es en la única en donde se denuncia que fue colocada en contravención a las reglas de territorialidad que deben imperar en esta clase de informes; y, posteriormente, aquella difundida en Internet.

a) Publicidad colocada en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Como ya ha quedado precisado, Maribel Hernández Cruz, denunció que el informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en su calidad de Diputado Local en

²³⁰. Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=%20%C3%A1mbito%20geogr%C3%A1fico%20de%20responsabilidad>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

el Estado de México, se estaba difundiendo a través de un anuncio publicitario colocado en el transbordo de la estación Pantitlán hacia la Línea A, correspondiente al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en la Ciudad de México.

Similares hechos fueron denunciados por el *PT*, al referir que en las principales estaciones del Metro de la Ciudad de México, se estaba difundiendo dicho informe.

Dicha conducta se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo siguiente:

En el acta circunstanciada INE/JD11/CM/0002/2016,²³¹ realizada por el Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en esta Ciudad de México, en funciones de Oficialía Electoral, se hizo constar que en el trasbordo de la estación **Pantitlán** hacia la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se encontró la publicidad denunciada, misma que se inserta a continuación:



En ese sentido, mediante oficio GJ/005822/2016,²³² el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, señaló que **Isa Corporativo, S.A. de C.V.**, cuenta con un *Permiso Administrativo Temporal Revocable* para el giro de publicidad en la red del servicio del organismo y, por ende, dicha empresa es la responsable de administrar los servicios de publicidad en los espacios colocados para tal fin en ese medio de transporte

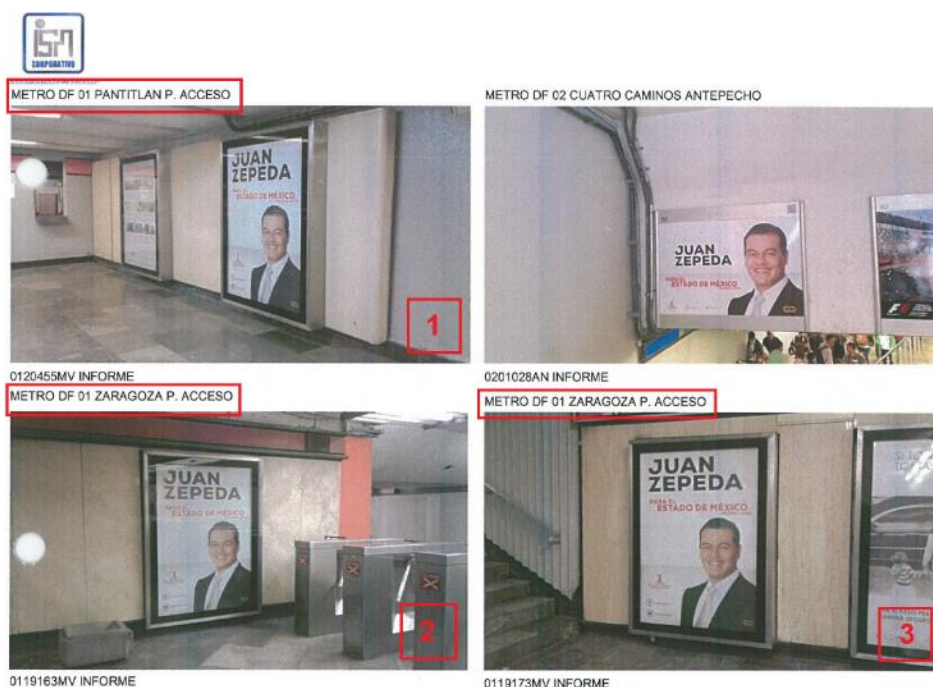
²³¹ Visible en las páginas 44 a 51 del primer tomo del expediente.

²³² Visible en las páginas 80 a 89 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Asimismo, el representante legal de ISA Corporativo, S.A. de C.V., responsable de explotar la comercialización de la publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo, a requerimiento expreso de la *UTCE*, mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis,²³³ adjuntó el documento intitulado *Testimonial de la campaña para: JUAN ZEPEDA – INFORME*, en donde se aprecia publicidad alusiva al Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández en estaciones **Pantitlán**, Cuatro Caminos, **Zaragoza**, **Guelatao**, La Paz, Ecatepec y Ciudad Azteca del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De conformidad con el referido testigo, la publicidad encontrada dentro de las estaciones ubicadas en la Ciudad de México, fueron los siguientes:



²³³ Visible en las páginas 441 y 442 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



METRO DF 08 ECATEPEC P. ANDEN



0818026MC INFORME

METRO DF 01 PANTITLÁN P. ANDEN VIA



0120211LMU INFORME

METRO DF 08 ECATEPEC P. ANDEN



0818032MC INFORME

METRO DF 08 CIUDAD AZTECA P. ANDEN VIA



0821022LMU INFORME



METRO DF 05 PANTITLÁN P. ESTACION



0513005MC INFORME

METRO DF 05 PANTITLÁN P. ESTACION



0513267MC INFORME

METRO DF 05 PANTITLÁN P. ESTACION



0513221MC INFORME

METRO DF 08 CIUDAD AZTECA P. ESTACION



0821023MC INFORME

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



METRO DF 0A PANTITLAN P. ESTACION



0A01010M INFORME

METRO DF 0B CIUDAD AZTECA P. ESTACION



0B21002MC INFORME

METRO DF 0A PANTITLAN P. ESTACION



0A01033M INFORME

METRO DF 0B CIUDAD AZTECA P. ESTACION



0B21010MC INFORME



METRO DF 01 ZARAGOZA P. ESTACION



0119151MC INFORME

METRO DF 01 PANTITLAN P. ESTACION



0120096MC INFORME

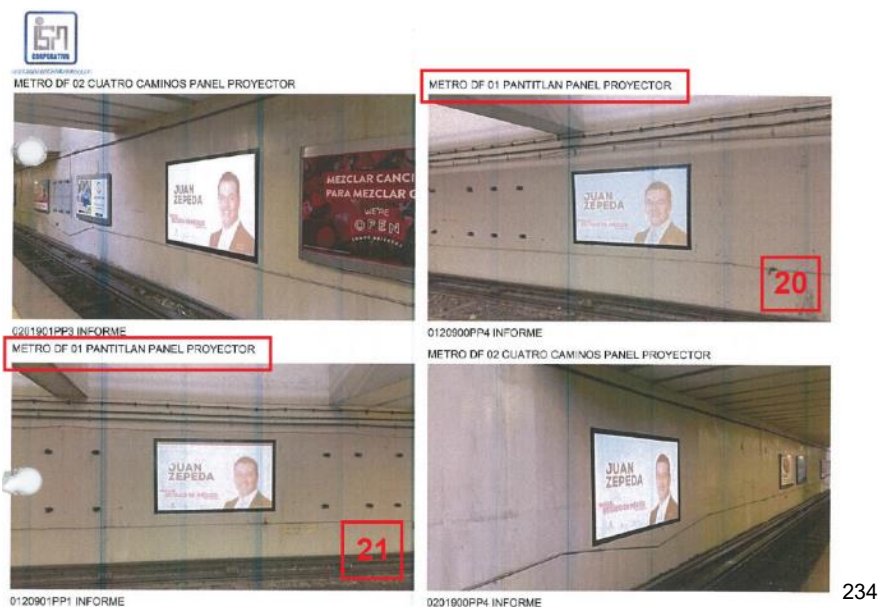
METRO DF 01 PANTITLAN P. ESTACION



0120034MC INFORME

METRO DF 04 MARTIN CARRERA P. ESTACION

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



234

Dicho medio de prueba, adquiere valor probatorio pleno para esta autoridad, toda vez que fue exhibido por el autor del documento, es decir, la persona moral titular de la comercialización de toda la publicidad que se ubica en el Sistema de Transporte Colectivo, sin que exista otra prueba que desvirtúe lo que en ellas se demuestra.

Lo anterior, es acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia 86/2001. de rubro *DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)*.²³⁵

En concatenación con lo anterior, destaca el contenido del oficio /006508/2016,²³⁶ mediante el cual, el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo, precisó el domicilio de dichas estaciones, destacando que **Pantitlán, Zaragoza y Guelatao**, están ubicadas en el territorio que ocupa la Ciudad de México, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:

²³⁴ Para efectos del presente proyecto se insertaron marcas para destacar la ubicación de las mamparas e ir enumerando aquellas ubicadas en el territorio de la Ciudad de México.

²³⁵ Consultable en <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/188/188411.pdf>

²³⁶ Visible en las páginas 850 a 857 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Estación	Domicilios
Pantitlán	<p>Línea 1: Av. Adolfo López Mateos s/n, colonia Aviación Civil, delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.</p> <p>Línea 5: Calle Talleres Gráficos, colonia Adolfo López Mateos, delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.</p> <p>Línea 9 y A: Talleres Gráficos sin número, colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco, Ciudad de México.</p>
Zaragoza	Calzada I. Zaragoza s/n antes Km 6 carretera México Puebla, colonia Cuatro árboles, delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Guelatao	Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia Unidad Habitacional Ejercicio de Oriente y Voceadores, delegación Iztapalapa, Ciudad de México.

Así pues, al hacer un análisis respecto de la ubicación de cada una de las publicidades exhibidas por la empresa contratada para su exposición, se advierte que fueron **veintiún** los anuncios con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, los que se exhibieron en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en el territorio que ocupa la Ciudad de México.

Además, en autos obra el oficio IEEM/UCS/1085/2016,²³⁷ por medio del cual, la Titular de la Unidad de Comunicación Social del *IEEM*, dio cuenta con varias notas periodísticas, destacando aquella intitulada *Los Excesos de los Aspirantes al Gobierno de EDOMEX*, firmada por Juan Lázaro Santiago, publicada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la página 5, del periódico *La Calle*, en donde, en lo que interesa al presente asunto, señaló:

²³⁷ Visible en la página 577 del primer tomo del expediente.



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Los perredistas no se quedaron atrás en el juego perverso electoral y su aspirante más fuerte, Juan Zepeda Hernández, también hizo “giras artísticas”, por sus bases amarillas en el Estado de México, donde no se le conocía.

*Aunque lo más escandaloso fue el despliegue publicitario que hizo en diferentes puntos del Estado de México, incluyendo los costosos espectaculares y hasta su imagen fue metida a las **estaciones del Metro de la Ciudad de México**, por donde se desplazan diariamente miles de mexiquenses...*
[Énfasis añadido]

Esa nota, se reprodujo en la página de internet <https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2016/10/26/opinion-los-excesos-de-los-aspirantes-al-gobierno-de-edomex/>, contenido que se hizo constar en el acta circunstanciada,²³⁸ elaborada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por personal de la Secretaría Ejecutiva del IEEM.

De la revisión a la referida nota, se advierte que la imagen con la que ésta se ilustra, es similar a aquella proporcionada por ISA Corporativo, S.A. de C.V., en relación a un anuncio colocado en la estación de metro Zaragoza, tal y como se muestra a continuación:

Información aportada por ISA Corporativo, S.A. de C.V. ²³⁹	Imagen tomada de la nota <i>Los Excesos de los Aspirantes al Gobierno de Edomex</i> ²⁴⁰
	

Por lo tanto, la existencia de la publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao del Sistema de Transporte Colectivo, quedó acreditada con el

²³⁸ Visible en las páginas 718 a 720 del primer tomo del expediente.

²³⁹ Visible en la página 454 del primer tomo del expediente.

²⁴⁰ Visible en la página 612 posterior tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

análisis en su conjunto de las manifestaciones de Maribel Hernández Cruz, el *PT*, el acta INE/JD11/CM/0002/2016, realizada por el Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en esta Ciudad de México, la *Testimonial de la campaña para: JUAN ZEPEDA – INFORME* aportado por ISA Corporativo, S.A. de C.V., así como la referida nota periodística.

Además, se encuentra acreditado que las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao del Sistema de Transporte Colectivo, se encuentran en la Ciudad de México, en atención al oficio GJ/006508/2016,²⁴¹ signado por el Gerente Jurídico de dicho medio de transporte.

En este sentido, los mencionados elementos de prueba, valoradas en su conjunto, merecen valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, incisos a) y b), 462, párrafos 1, 2 y 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracciones I y II, y 27, párrafos 1, 2 y 3 del *Reglamento de Quejas*, dado que su veracidad y contenido no están controvertidos y menos aún desvirtuados en autos, con los cuales se arriba a la convicción que la propaganda motivo de queja se encontraba exhibiéndose en **veintiún** ubicaciones, distribuidas entre las estaciones **Pantitlán, Zaragoza y Guelatao**, del Sistema de Transporte Colectivo **Metro de la Ciudad de México**.

De lo anterior, a consideración de este *Consejo General*, se advierte una vulneración a lo previsto en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIPE*, en relación a la **territorialidad** en que debe difundirse la publicidad denunciada, por lo que más adelante y una vez que se concluya con el análisis en su conjunto de todos los elementos que se deben tomar en cuenta para la difusión de los informes de labores de los servidores, se procederá a determinar el grado de responsabilidad de los sujetos de Derecho implicados en la realización de esta conducta.

b) Publicidad colocada en un banner difundido en el portal de *El Universal*.

Maribel Hernández Cruz, denunció que el Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en su calidad de Diputado Local en el Estado de México, se difundió en un *banner* publicado en el portal de internet del periódico *El Universal*.

Dicha conducta se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo siguiente:

²⁴¹ Visible en las páginas 850 a 857 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En la estructura del escrito de queja²⁴² se insertó una impresión de pantalla realizada al portal de internet del periódico *El Universal*, en la cual se aprecia la publicidad denunciada, tal y como se aprecia a continuación:



Mediante acta circunstanciada de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis,²⁴³ personal de la *UTCE*, hizo constar el contenido y existencia de la publicidad denunciada en el portal electrónico de *El Universal*.

Por su parte, el representante legal de *El Universal*,²⁴⁴ a requerimiento expreso de del titular de la *UTCE*, manifestó que la publicidad relacionada con el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, fue contratada por Ardían Gutiérrez Pérez, para ser difundida en el periodo del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de trece de noviembre de dos mil diecisiete,²⁴⁵ Juan Manuel Zepeda Hernández precisó la forma en la que se llevó a cabo la contratación y retiro de dicha publicidad.

Por lo tanto, la existencia de la publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en la página de internet del

²⁴² Visible en la página 3 del tomo 1 del expediente.

²⁴³ Visible en las páginas 27 a 37 del primer tomo del expediente.

²⁴⁴ Visible en las páginas 91 a 103 del primer tomo del expediente.

²⁴⁵ Visible en las páginas 1127 a 1129 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

periódico *El Universal*, quedó acreditada con las manifestaciones y material probatorio aportado por Maribel Hernández Cruz, el representante legal de *El Universal*, Juan Manuel Zepeda Hernández y el acta circunstanciada de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, elaborada por personal de la *UTCE*.

En este sentido, los mencionados elementos de prueba, valoradas en su conjunto, merecen valor probatorio pleno; lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, incisos a) y b), 462, párrafos 1, 2 y 3, de la *LGIPE*, 22, párrafo 1, fracciones I y II, y 27, párrafos 1, 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*, dado que su veracidad y contenido no están controvertidos y menos aún desvirtuados en autos, con los cuales se arriba a la convicción que la propaganda motivo de queja se encontraba exhibiéndose en el portal de internet del periódico *El Universal*.

En tiempos recientes, ha cobrado relevancia la libertad de expresión a través de internet, aspecto que también ha sido abordado por los órganos jurisdiccionales de nuestro país.

Sobre este tópico, la *Sala Superior*, ha destacado que el internet constituye, **en el ámbito electoral, un instrumento para potenciar la libertad de expresión**, que se distingue de otros medios de comunicación, en razón de la manera en que se genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios.²⁴⁶

También, la máxima autoridad jurisdiccional ha sostenido que tal maximización de la libertad de expresión en internet tampoco es ilimitada, pues los sujetos obligados en materia electoral no deben quedar exentos de las prohibiciones y obligaciones a su cargo cuando hagan uso de tales herramientas electrónicas, por lo que las denuncias por conductas en tal medio de comunicación deben ser analizadas en cada caso por las autoridades competentes.²⁴⁷

Sobre el uso de internet, la *Sala Especializada*, al resolver los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves de expediente SRE-PSC-26/2016, SRE-PSC-116/2016 y SRE-PSC-66/2017; y *Sala Superior* al confirmar el primero de los procedimientos, dictando sentencia en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-50/2016, determinaron en esencia, que este es un medio de comunicación global que permite mantener contacto con

²⁴⁶ Jurisprudencia 17/2016, de rubro INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.

²⁴⁷ Criterio sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia electoral en la sentencia al medio de impugnación de clave SUP-JRC-273/2016.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

personas, instituciones, corporaciones, gobiernos, etcétera, alrededor del mundo. No es una entidad física o tangible, sino una red vasta que interconecta innumerables grupos de redes más pequeñas, erigiéndose como una especie de red de redes.

En concreto, se trata de un instrumento de telecomunicación que tiene por objeto la transmisión electrónica de información a través de un espacio virtual denominado "cibespacio", que constituye una vía para enviar elementos informativos a la sociedad, sin que atienda a fronteras físicas dada su confección tecnológica que la convierte en una red global.

Esto es, internet es una enorme red de comunicaciones de ámbito mundial que permite la interconexión de sistemas informáticos, independientemente de su tipo y situación. Está compuesta por ordenadores de diversos tipos, marca y sistemas operativos y ruteadores que están distribuidos por todo el mundo y unidos a través de enlaces de comunicación muy diversos que permiten realizar intercambios muy sofisticados de información.

Se trata pues, de un medio comunicativo de interacción y de organización social. Es una forma de comunicación interactiva caracterizada por la capacidad para difundir información, de forma masiva, en tiempo real o en un momento concreto.

Se ha definido también como una forma de auto comunicación porque el mismo usuario genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar. Asimismo, se le ha conceptualizado como "el gran instrumento contemporáneo del que se sirve la sociedad para engrandecer sus capacidades de información y conocimiento.

En este sentido, puede decirse que se trata de una interacción entre el ordenador y usuario de una red, en la que hay una intención manifiesta en la búsqueda de información por parte de este último, bien sea, por intereses recreativos, publicitarios, comerciales, intelectuales, didácticos o institucionales.

En tal virtud, el internet dista del resto de los medios de comunicación en sus condiciones y posibilidades comunicativas, atendiendo a que se realiza a través de un lenguaje multimedia que abarca expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

De esta manera, internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una 'red global'. Esta red global "tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. Así pues, Internet es la 'red de redes' que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación.

Es tal la importancia actual del internet, que la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define como política de inclusión digital universal "el conjunto de programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas .

En cuanto a la difusión de publicidad en dicho medio de comunicación, es preciso recordar que el artículo 6° de la *Constitución Federal* regula la libertad de expresión en su doble dimensión y el derecho a la información; además, prevé en su texto normativo, que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, sino, en el caso, de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En esa sintonía, el Poder Revisor de la Constitución mediante reforma al mencionado artículo 6°, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, estableció como mandato para el Estado mexicano, garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Resulta relevante que en el dictamen, por medio del cual, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la mencionada reforma en materia de telecomunicaciones, se incluyen como razones relevantes para incluir en el catálogo de derechos fundamentales el acceso a internet, las siguientes:

- El internet se ha consolidado como la herramienta de comunicación e interconexión del siglo XXI y ha expandido el terreno para la diversidad, la tolerancia

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

y el ejercicio pleno de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

- La reforma tiene como objeto garantizar la libertad de expresión y de difusión, y el derecho a la información.
- El Internet constituye una herramienta básica para el desarrollo personal y profesional de estudiantes y de la sociedad de cualquier país.
- El acceso a internet es un derecho fundamental por su importancia en cuanto a la libertad de prensa, de pensamiento, de expresión, desarrollo de la personalidad y libre conciencia se refiere.

Así, el Poder Revisor de la Constitución reconoció en el texto Constitucional el acceso a internet como derecho humano, el cual contribuye a una educación de mejor calidad, mayor acceso a la información y a la cultura, un posible crecimiento económico y un potencial incremento en la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Del citado precepto normativo se advierte un sistema de regla-excepción, esto es, la regla es la libertad (todo se puede decir, por cualquier medio) y la excepción son las restricciones o límites a esa libertad, al señalar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución de veintinueve de junio de dos mil doce, determinó que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija.

De manera conclusiva, debe decirse que el internet no se acota a espacios físicos, territoriales o fronteras estatales, por lo que las normas jurídicas y los operadores de éstas, deben atender la realidad fáctica y tecnológica que impera en la realidad social, preservándose los principios y valores constitucionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En virtud de lo anterior, se concluye que la exhibición del *banner* alusivo al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en la página de internet del periódico *El Universal*, en atención al medio en que se difunde, no contraviene lo establecido en el artículo 242, párrafo 5, de la *LG/PE*, de ahí que se considere **INFUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado, en contra de todos los involucrados en su contratación y difusión, esto es, Juan Manuel Zepeda Hernández, Adrián Gutiérrez Pérez y *El Universal*.

Lo anterior, es así ya que, como se ha explicado, dada su naturaleza y el reforzamiento legal sobre su libertad que le han concedido las instancias jurisdiccionales, no es posible determinar la existencia de algún tipo de reproche por su difusión en ese medio, habida cuenta que fácticamente resulta complicado limitar el impacto de una difusión, a una demarcación territorial específica.

Sin embargo, acorde al criterio establecido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-643/2017**, se continuará con el estudio de los demás elementos que se deben tomar en cuenta para la difusión de los informes de labores de los servidores, a efecto de que previo análisis individual, sean valorados en su conjunto para determinar si se trata de un auténtico ejercicio de rendición de cuentas.

7.3. Contenido

Una vez precisado lo anterior, se procede a la valoración conjunta de los elementos personal, objetivo y temporal en el contexto del contenido de la publicidad alusiva al primer informe de labores legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández difundida en anuncios espectaculares, mamparas ubicadas en el Sistema de Transporte Colectivo y un *banner* colocado en la página de internet del periódico *El Universal*, para saber si reúnen las características de un veraz y genuino ejercicio de información a la ciudadanía respecto de las acciones realizadas en el ejercicio de su encargo+.

Sobre el particular, en autos quedó acreditado que el denunciado divulgó su informe de labores en diversos medios, mismos que serán estudiados a continuación, a efecto de dar claridad al sentido del presente fallo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

a) Anuncios espectaculares y mamparas ubicadas en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Dada la similitud respecto del contenido de los anuncios exhibidos en espectaculares y en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, se procederá a su valoración conjunta.

- Anuncios espectaculares

Está acreditado que Juan Manuel Zepeda Hernández, contrató anuncios espectaculares con publicidad alusiva a su Primer Informe de Actividades Legislativas, puesto que en autos obran sendos contratos celebrados con Anúnciate en el Oriente S.A. de C.V. y Víctor Hugo Chaires Arcos, suscritos con tal fin; y las manifestaciones de las partes.

Sin embargo, únicamente se tiene certeza del contenido de aquellos cuya existencia fue certificada por el personal de Oficialía Electoral de este Instituto, en el acta CIRC11/JDE30/MÉX/27-10-16,²⁴⁸ por lo cual, el análisis de la publicidad de mérito se realizará tomando como base la información obtenida en dicha diligencia.



Descripción: Como se advierte, la propaganda denunciada contiene la imagen de Juan Manuel Zepeda Hernández del lado izquierdo ocupando aproximadamente la

²⁴⁸ Visible en las páginas 318 a 320 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

mitad del espacio total del anuncio espectacular y, en el mismo lado, en el ángulo inferior, se puede apreciar un ovalo colocado de forma horizontal, que en su interior contiene las siglas *PRD* y el logotipo de dicho instituto político.

Del lado derecho del espectacular, en la parte superior con letras en un tamaño mayor que aquellas empleadas en el resto de los mensajes, se puede leer **JUAN ZEPEDA**, inmediatamente abajo, y con una tipografía en menor tamaño, es visible la frase ***PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES.***

Finalmente, en ese mismo lado derecho, se advierten, en la parte inferior, tres logotipos, el primero correspondiente a un número *UNO*, acompañado de la leyenda *1er informe de actividades legislativas*; y los otros dos corresponden a los símbolos que utiliza en sus redes sociales de *Facebook* (*Juan Zepeda*) y *Twitter* (*@JuanZepeda*).

- Publicidad colocada en el Sistema de Transporte Colectivo

Está acreditado que Juan Manuel Zepeda Hernández, contrató anuncios espectaculares con publicidad alusiva a su Primer Informe de Actividades Legislativas, puesto que en autos obran sendos contratos celebrados con Elvert Pineda Bucio y éste a su vez con Isa Corporativo, S.A. de C.V., suscritos con tal fin; y las manifestaciones de las partes, sin embargo, únicamente se tiene certeza del contenido de aquel cuya existencia fue certificada por el personal de Oficialía Electoral de este Instituto, en el acta INE/JD11/CM/002/2016,²⁴⁹ por lo cual, el análisis de la publicidad de mérito se realizará tomando como base la información obtenida en dicha diligencia.

²⁴⁹ Visible en las páginas 44 a 51 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



Descripción:

En el centro del anuncio en la parte superior ocupando aproximadamente la mitad del espacio total del anuncio se lee JUAN ZEPEDA, inmediatamente abajo, y con una tipografía en menor tamaño, es visible la frase **PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES**.

Debajo de dichas leyendas, en el lado derecho, visto de frente, se aprecia la imagen de Juan Manuel Zepeda Hernández, haciéndose notar que, en el ángulo inferior, se puede apreciar un ovalo colocado de forma horizontal, que en su interior contiene las siglas PRD y el logotipo de dicho instituto político.

En el lado derecho, se aprecian tres logotipos, el primero correspondiente a un número *UNO*, acompañado de la leyenda *1er informe de actividades legislativas, LIX Legislatura*; y los otros dos corresponden a los símbolos que utiliza en sus redes sociales de *Facebook* (*Juan Zepeda*) y *Twitter* (*@JuanZepeda*).

Valoración conjunta

Los elementos recurrentes en ambos formatos son:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

- Nombre e imagen de Juan Manuel Zepeda Hernández.
- La identificación del *PRD*.
- La frase ***PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES***.
- La referencia al primer informe de actividades legislativas.
- Los símbolos que utiliza en sus redes sociales de *Facebook* (*Juan Zepeda*) y *Twitter* (*@JuanZepeda*).

Precisado lo anterior, y por cuanto hace a la propaganda que se analiza, es un hecho notorio que existe la imagen y el nombre del servidor público que lo hacen plenamente identificable, por tanto, se concluye que se colma el **elemento personal**.

En lo concerniente al **elemento temporal**, del análisis practicado por esta autoridad al citado material, se advierte que el informe de labores se realizó el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dentro del Proceso Electoral Local 2016-2016 en el Estado de México, pero fuera de las etapas de precampaña, campaña, veda o jornada electoral; sin hacer referencia a algún proceso electoral y se contrató su difusión para el periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, esto es siete días anteriores y cinco posteriores a la rendición de cuentas.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la rendición de cuentas es un presupuesto básico e indispensable del Estado democrático, con independencia de que exista o no una regulación expresa sobre la forma o manera en la que tal rendición deba desarrollarse. Sin embargo, en los congresos mexicanos (federal y locales) es necesario regular instrumentos que permitan una mayor y mejor rendición de cuentas.

Por lo que hace al **elemento objetivo**, en el contexto de la publicidad se hace alusión al **primer informe de labores** del referido diputado, así como a la frase ***PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES***, esto es, se advierte que el contenido de la propaganda analizada se encuentra encaminado a dar a conocer a la ciudadanía el presunto desempeño de las actividades legislativas del servidor público en cuestión, toda vez que como legislador local, su trabajo es participar en la creación de normas locales en el Estado de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Por ello, la propaganda denunciada no puede considerarse como una promoción personalizada del servidor público, en virtud de que, tal como lo ha considerado la *Sala Superior*, el mero hecho de que la propaganda institucional tenga el nombre e imagen del servidor público no es suficiente para que se presente la figura de la promoción personalizada (SUP-RAP-49/2009).

Por otra parte, del análisis conjunto que realiza esta autoridad a los elementos personal, objetivo y temporal de la publicidad analizada, se puede concluir que la misma no es contraventora de las disposiciones que regulan el principio de imparcialidad, así como las reglas para la rendición de informes de labores; habida cuenta que:

1. La publicidad presenta al legislador ante la ciudadanía.
2. Se hizo referencia de actividades legislativas por él desempeñadas.
3. Se realizó durante un periodo de tiempo determinado, del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, y únicamente durante una ocasión en el año calendario.
4. Si bien se difundió una vez que inició el Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, de su contenido se advierte que se trata de un mensaje respecto a la tarea o actividad realizada por el servidor público en su calidad de legislador, por lo que es dable concluir que la propaganda se centra, precisamente, en la actividad del servidor y no en su persona.

De todo lo anterior, podemos concluir que el contenido de dicha propaganda se dio en el marco de la regulación que establece el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIE*, empero existen anuncios que fueron difundidos fuera del ámbito de responsabilidad del referido servidor público, por lo cual más adelante se determinará el grado de responsabilidad de los involucrados.

b) Publicidad colocada en la página de internet del periódico *El Universal*

Como ha quedado plenamente acreditado, Juan Manuel Zepeda Hernández a través de Adrián Gutiérrez Pérez, contrató la publicación de un *banner* de 300x250

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

px en la sección Metrópoli, del periódico *El Universal*, a través del cual se difundió el Primer Informe de Actividades Legislativas del citado servidor público, mismo que se describe a continuación:



Descripción:

Es importante señalar que se trata de un anuncio que va rotando su contenido, en la primer toma, cuya duración es de aproximadamente diez segundos, se observa, de arriba hacia abajo, la leyenda **1^{ER} INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS LIX LEGISLATURA**, ubicado en la parte superior izquierda; enseguida, se advierte el nombre **JUAN ZEPEDA** el cual se presenta en una tipografía distinta y mayor tamaño respecto de la totalidad de la información que ahí se advierte.

Abajo del nombre se observa la frase **PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES** en letras color rojo, destacándose que la frase

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

MEJORES LEYES se exhibe en un tamaño por demás inferior al resto de ese mensaje.

Asimismo, en la parte derecha de la imagen se aprecia la fotografía del servidor público denunciado en una proporción cercana al cincuenta por ciento de la totalidad del material bajo análisis.

En posteriores tomas, cuya duración es de aproximadamente dos segundos, se aprecian, únicamente, y de manera individual las frases **ECONOMÍA FAMILIAR**, **SEGURIDAD PÚBLICA**, **EQUIDAD DE GÉNERO** y **EDUCACIÓN**.

En síntesis, de la publicidad denunciada se advierte lo siguiente:

- a) La **imagen** del entonces Diputado local Juan Manuel Zepeda Hernández, en proporciones predominantes, de manera destacada, en relación con el resto del contenido de la publicidad;
- b) El **nombre** del servidor público denunciado es de un tamaño, tipo de letra y color que lo hacen aparecer de forma notoria y manifiesta al resto del promocional;
- c) La frase **PARA EL ESTADO DE MÉXICO** aparece en un formato de tipografía y color rojo que no puede desligarse del nombre que aparece en la publicidad, a saber, **JUAN ZEPEDA**, lo cual logra el efecto siguiente en el lector: **JUAN ZEPEDA PARA EL ESTADO DE MÉXICO**.
- d) No se hace alusión a la fecha de presentación formal del informe de actividades legislativas, y;
- e) Se alude a hechos relacionados con la materia propia del informe que supuestamente se pretende comunicar entre la ciudadanía, al aparecer las frases **ECONOMÍA FAMILIAR**, **SEGURIDAD PÚBLICA**, **EQUIDAD DE GÉNERO** y **EDUCACIÓN**.

Precisado lo anterior, y por cuanto hace a la propaganda que se analiza, es un hecho notorio que existe la imagen y el nombre del servidor público que lo hacen plenamente identificable, por tanto, se concluye que se colma el **elemento personal**.

En lo concerniente al **elemento temporal**, del análisis practicado por esta autoridad al citado material, se advierte que el informe de labores se realizó el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dentro del Proceso Electoral Local 2016-2016 en el Estado de México, pero fuera de las etapas de precampaña, campaña, veda o jornada electoral; sin hacer referencia a algún proceso electoral y se contrató su

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

difusión para el periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, esto es siete días anteriores y cinco posteriores a la rendición de cuentas.

Sin embargo, mediante acuerdo **ACQyD-INE-128/2016**, la *Comisión de Quejas* ordenó el retiro de dicha publicidad, por lo cual a través del escrito de uno de noviembre de dos mil dieciséis, el representante legal de *El Universal*, informó que la publicidad de referencia se dejó de difundir desde el veintiocho de octubre del mismo año.

Por lo que hace al **elemento objetivo**, en el contexto de la publicidad se hace alusión al primer informe de labores del referido diputado, así como temas relacionados con proyectos legislativos que fueron aprobados durante su gestión en el periodo que se informa, como son **ECONOMÍA FAMILIAR, SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIDAD DE GÉNERO y EDUCACIÓN**.

La propaganda denunciada no puede considerarse como una promoción personalizada del servidor público en cuestión, en virtud de que, tal como lo ha considerado la *Sala Superior*, el mero hecho de que la propaganda institucional tenga el nombre e imagen del servidor público no es suficiente para que se presente la figura de la promoción personalizada (SUP-RAP-49/2009).

Por otra parte, del análisis integral que realiza esta autoridad a los elementos personal, objetivo y temporal de la publicidad analizada, se considera que ésta se enmarca en un auténtico ejercicio de rendición de cuentas, ya que:

1. Se presentó al legislador ante la ciudadanía.
2. Se hizo referencia de actividades legislativas por él desempeñadas.

Si bien es cierto únicamente se hace alusión a las frases **ECONOMÍA FAMILIAR, SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIDAD DE GÉNERO y EDUCACIÓN**, la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-643/2017, señaló que una propaganda podría ser considerada un auténtico informe de labores, cuando comunique de manera **genérica** o específica la actividad realizada por el servidor público, lo cual ocurre en el caso concreto.

3. Se difundió por internet, medio que no se acota a espacios físicos, territoriales o fronteras estatales, por lo que las normas jurídicas y los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

operadores de éstas, deben atender la realidad fáctica y tecnológica que impera en la realidad social, preservándose los principios y valores constitucionales.

4. Se contrató para realizarse durante un periodo de tiempo determinado, del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, y únicamente durante una ocasión en el año calendario.
5. Se realizó fuera de las etapas de precampaña, campaña, veda y jornada electoral del proceso electoral local 2016-2017, en el Estado de México.
6. No se hace alusión a algún proceso electoral.

De todo lo anterior, podemos concluir que la propaganda contratada se dio en el marco de la regulación que establece el artículo 242, párrafo 5, de la *LGPE*, que permite a los servidores públicos contratar la colocación y difusión de propaganda cuando se trate de la rendición de cuentas a través de informes de labores, en el caso, el correspondiente al entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández.

c) Publicidad en bardas

Tal y como quedo precisado en el apartado de ***Hechos acreditados***, existe certeza de que Juan Manuel Zepeda Hernández, contrató con Elvert Pineda Bucio, el servicio de anuncios en bardas, a efecto de difundir su Primer Informe de Actividades Legislativas, sin embargo, no se tienen elementos objetivos para emitir un pronunciamiento en relación a su contenido, toda vez que no existe alguna certificación emitida por un servidor público embestido de fe pública donde se haga constatar el contenido de la misma.

En efecto, en autos obra el acta **273**,²⁵⁰ emitida por el personal de Oficialía Electoral del *IEEM*, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se hizo constar que a esa fecha, ya no se difundía dicha publicidad y, por ende, no se pudo dar cuenta de su contenido.

No pasa inadvertido a esta autoridad, que mediante acta de once de noviembre de dos mil dieciséis,²⁵¹ el personal de la Secretaría Ejecutiva del *IEEM*, hizo constar el desahogo de una serie entrevistas, con diversas ciudadanas y ciudadanos que

²⁵⁰ Visible en las páginas 734 a 744 del primer tomo del expediente.

²⁵¹ Visible en las páginas 759 a 770 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

pudieron haber visto las bardas denunciadas, sin embargo, en dicha diligencia no se hizo alguna pregunta relacionada con el contenido de las mismas.

Luego entonces, los únicos elementos de prueba que se tienen en relación con el contenido de las bardas denunciadas son las fotografías aportadas por el *PAN*, mismos que constituyen documentales privadas, por lo cual, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, las cuales para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, sin que ello ocurra en el caso concreto.

En virtud de lo anterior, no hay elementos suficientes para determinar si el contenido de la publicidad colocada en diversas bardas por el servidor público denunciado, se ajustó a las reglas establecidas en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIPE*.

d) Publicidad en la revista Realidad Mexiquense

Finalmente, por cuanto hace a la publicación ***Realidad Mexiquense***, correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciséis, de conformidad con la información que obra en autos, no se cuenta con algún elemento que permita identificar que la misma se hubiere distribuido, pues ni siquiera el *PAN*, denunciante de dicha conducta, señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrió.

No pasa inadvertido que el *IEEM*, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, instrumentó un acta circunstanciada²⁵² para dar cuenta de una serie de entrevistas a diez ciudadanos vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl, de los cuales seis, señalaron haber tenido conocimiento de la distribución de la referida publicación, sin embargo, tampoco se proporcionaron datos de modo, tiempo y lugar en que presuntamente aconteció.

Además de la información obtenida por el *IEEM*, se advierte que tanto Juan Manuel Zepeda Hernández, como el Partido de la Revolución Democrática, niegan toda relación con la edición y distribución de la revista *Realidad Mexiquense*.

²⁵² Visible en las páginas 610 a 613 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Por lo tanto, no se tienen elementos objetivos que permitan a este Instituto, tener certeza del momento en que presuntamente ocurrió la entrega de la referida publicación.

7.4. Conclusiones

Del análisis conjunto que realiza esta autoridad a los elementos personal, objetivo y temporal de la publicidad analizada, se puede concluir que:

1. En toda la publicidad denunciada, de la que se acreditó su existencia y difusión, es un hecho notorio que existe la imagen y el nombre del servidor público que lo hacen plenamente identificable, por tanto, se concluye que se colma el **elemento personal**.

Sin embargo, el mero hecho de que la propaganda institucional tenga el nombre e imagen del servidor público no es suficiente para que se presente la figura de la promoción personalizada (SUP-RAP-49/2009).

2. La totalidad de la publicidad denunciada, de la que se acreditó su existencia y difusión, fue contratada para ser exhibida en el periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, atendiendo a que el informe de labores ocurrió el veintiséis del mismo mes y año, se considera que ésta se exhibió siete días antes y cinco posteriores al mismo.

Únicamente existe constancia de su difusión en una ocasión en el año calendario que se informa.

No se hace alusión a algún proceso electoral federal o local.

Su exhibición aconteció previo al inicio de las etapas de precampaña, campaña, veda y jornada electoral, del Proceso Electoral Local 2016-2017, en el Estado de México.

Lo anterior, es acorde a las reglas establecidas en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIFE*, cumpliendo con el elemento **temporal**.

3. En relación al elemento **objetivo**, es de señalarse que en la publicidad difundida en anuncios espectaculares y mamparas ubicadas en el Sistema de Transporte Colectivo, se señala la frase **PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES**, lo cual hace alusión a la tarea del referido legislador;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

mientras que en la publicidad difundida a través de la página de internet del periódico *El Universal*, se hace referencia temas legislativos desarrollados durante su gestión, a saber **ECONOMÍA FAMILIAR, SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIDAD DE GÉNERO y EDUCACIÓN.**

4. No obstante, al haberse acreditado la difusión de **veintiún** mamparas con publicidad alusiva al multicitado informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en la Ciudad de México, se actualiza la infracción al artículo **242, párrafo 5, de la LGIPE**, puesto que, al ser un Diputado Local por el Estado de México, toda la publicidad se debió haberse constreñido exclusivamente en dicho ámbito territorial.

En virtud de lo anterior, a continuación, se procede a analizar la responsabilidad de los sujetos involucrados en la difusión de publicidad alusiva al Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en el territorio de la Ciudad de México.

7.5. Responsabilidad

Tal y como ha quedado acreditado, publicidad con información alusiva al Primer Informe de Actividades de Juan Manuel Zepeda Hernández se difundió en **veintiún mamparas**, distribuidas en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao del Sistema de Transporte Colectivo, todas ubicadas en la Ciudad de México, en contravención a lo dispuesto por el artículo **242, párrafo 5, de la LGIPE.**

Del análisis a las constancias de autos se desprende que la difusión de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se realizó a través de dos contratos, mismos que se enuncian a continuación:

No	Partes	Objeto	Duración
1	Juan Manuel Zepeda Hernández y Elvert Pineda Bucio	Publicidad en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Estado de México	19 al 31 de octubre de 2016
2	Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V.		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En virtud de lo anterior se desprende que las personas físicas y morales directamente involucradas en la difusión del multicitado informe de labores fueron Juan Manuel Zepeda Hernández, Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V.

a) Juan Manuel Zepeda Hernández

Con el propósito de promocionar su Primer Informe de Actividades Legislativas, en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, Juan Manuel Zepeda Hernández celebró un contrato de prestación de servicios,²⁵³ con Elvert Pineda Bucio, en el cual se acotó su difusión a aquellas estaciones ubicadas dentro del territorio que ocupa el Estado de México, tal y como se transcribe a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. *“EL PRESTADOR” se obliga a prestar el servicio de la difusión y publicidad fija y móvil por distintos medios del PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO LOCAL JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ, dentro del Estado de México, requerido por “EL CONTRATANTE”, conforme a lo siguiente:*

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PAQUETE	RENTA DE MAMPARAS EN DIVERSAS ESTACIONES DEL SISTEMA COLECTIVO METRO, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.	360, 000	360, 000
			SUBTOTAL	360, 000
			IVA 16 %	57,600
			TOTAL	417,600.00

²⁵³ Visible en las páginas 303 a 306 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

...

QUINTA.- LUGAR Y FECHA DE PRESTACIÓN (ENTREGA) DEL SERVICIO. *“EL PRESTADOR” se obliga a proporcionar (entregar) el servicio objeto del presente contrato, el día 19 de octubre del año en curso, dentro de las instalaciones del Sistema colectivo metro de las estaciones que se encuentran ubicadas en el Estado de México.*

Al respecto, es ineludible recoger el criterio establecido por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-814/2015, donde señaló que de conformidad con lo establecido por los artículos 1851, 1852, 1853, 1854 y 1855, del Código Civil Federal, para lograr una adecuada interpretación del contenido de los contratos, se debe atender a las siguientes consideraciones:

- Cuando los términos de los contratos sean claros, se estará al sentido literal de las cláusulas, que convengan los contratantes.
- Cuando las palabras expresadas parezcan ser contrarias a la intención de los contratantes, prevalecerá la intención sobre las palabras.
- Cuando un contrato contenga términos generales, no deberá de entenderse por comprendidas cosas y casos diferentes, de aquellos sobre los cuales los interesados se propusieron contratar.
- Cuando alguna de las cláusulas de los contratos tenga diversos sentidos, se entenderá el sentido más adecuado para que produzca efecto.
- Cuando las cláusulas de los contratos se deben interpretar una con la otra, y a las dudosas se les atribuirá el sentido que resulte de la interpretación de todas.
- Cuando en un contrato existan palabras con distintas acepciones, se deberá de entender aquella que sea conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

De conformidad con lo anterior, en el caso, es claro que la intención de Juan Manuel Zepeda Hernández, fue contratar publicidad alusiva a su Primer Informe de Actividades Legislativas como Diputado Local, en los espacios destinados para ello dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en el **Estado de México**.

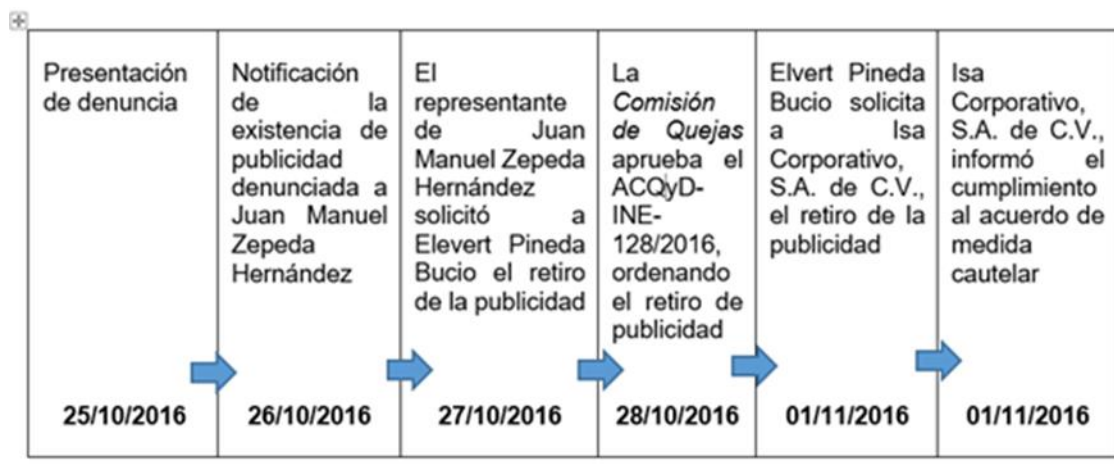
Hasta aquí, no se advierte que exista constancia alguna a través de la cual se pueda inferir, ni de forma indiciaria, que la exhibición de los anuncios denunciados en las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, sea atribuible a Juan Manuel Zepeda Hernández, por las razones anteriormente apuntadas.

En efecto, en el sumario en que se actúa, no obra elemento probatorio o constancia alguna que sirva para acreditar que el citado servidor público hubiera intervenido de manera directa o indirecta en la contratación, orden o solicitud para la difusión de la propaganda denunciada, en dichas estaciones.

Además, en autos obra constancia del documento de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, a través del cual, el representante legal de Juan Manuel Zepeda Hernández, solicitó a Elvert Pineda Bucio el retiro de la propaganda denunciada ubicada en el transbordo de la estación Pantitlán, así como de toda propaganda que se encuentre fuera de la demarcación contratada, ello, con antelación a que la *Comisión de Quejas* emitirá resolución en relación a la medida cautelar solicitada en el presente asunto, con lo cual, existe evidencia que dicho servidor público, realizó acciones tendentes a su retiro y cumplimiento de la ley; esto, al enterarse de la existencia de publicidad en lugares



En síntesis, Juan Manuel Zepeda Hernández:

1. En el momento en que ocurrieron los hechos denunciados era Diputado Local en el **Estado de México** y, por ende, sólo en dicha entidad debía colocar publicidad alusiva a su informe de labores legislativas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

2. Celebró contrato de prestación de servicios con Elvert Pineda Bucio, a efecto de difundir publicidad alusiva a su informe de labores, en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, **ubicadas en el Estado de México.**
3. La forma de ejercer control sobre toda la publicidad colocada en el Sistema de Transporte Colectivo, era a través de Elvert Pineda Bucio, al no haber suscrito un contrato directamente con Isa Corporativo, S.A. de C.V. (empresa titular de la concesión para la explotación de estos espacios) o el propio Sistema de Transporte Colectivo.
4. Al enterarse de su difusión en un espacio ubicado en la estación Pantitlán de dicho medio de transporte, ordenó a Elvert Pineda Bucio, su retiro, así como el de toda aquella publicidad situada fuera del Estado de México.

De todo lo anterior, podemos colegir que para determinar si hay o no responsabilidad del servidor público en relación con la colocación y difusión de la propaganda relativa a sus informes de labores, debe efectuarse un estudio detenido y cuidadoso de **sus alcances, de la calidad con la que se haya ostentado el contratante, así como del nexo entre los hechos denunciados y el ámbito de control y dominio del servidor público**, puesto que el criterio precisado únicamente cobra vigencia respecto de aquellos actos que de manera incuestionable, encuadren dentro de algún tipo administrativo-electoral, así como de la posibilidad razonable de cuidado y control por parte de estos.

De esta manera, resultaría desproporcional e irracional imponer como carga para los servidores públicos la vigilancia, atención, inspección o el cuidado de verificar la ubicación física de toda la propaganda contratada por sí mismos o a través de terceros, dado que afirmarlo así, podría dar como resultado establecer una responsabilidad desbordada e incommensurable, en la que, en forma incorrecta, derive una heteroresponsabilidad o responsabilidad procedente de un derecho administrativo sancionador de actos a partir de una lectura equivocada de lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo, en relación con el artículo 225, párrafo 5, de la *LGIE*.

En tal contexto, es posible establecer que los servidores públicos son responsables de su propia conducta o de la de terceros, cuando actúen con ese carácter y se verifique, fehacientemente, que ejercen un control o dominio respecto de las empresas o personas responsables de la exhibición o difusión de la propaganda que permita determinar un beneficio directo, o simplemente provoquen una desmejora en perjuicio de terceros (partidos políticos, precandidatos o candidatos),

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

es decir, para influir en la equidad en la contienda en el proceso electoral de que se trate.

Sin embargo, resultaría desproporcional exigir que los servidores públicos supervisen todos los espacios públicos en los que se pueda difundir publicidad, siendo que, en el caso concreto, el Sistema de Transporte Colectivo, está compuesto por doce líneas, compuestas por **ciento noventa y cinco estaciones**²⁵⁴ prohibidos, de conformidad con las reglas de territorialidad que le aplican.

Lo anterior, es acorde con el principio de **presunción de inocencia** que debe observarse en todos los procedimientos sancionadores, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I de la *Constitución Federal*; 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Tesis de Jurisprudencia del Tribunal Electoral 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**²⁵⁵, al no estar acreditado en autos que Juan Manuel Zepeda Hernández ejerciera un control o dominio sobre la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., o respecto de alguna de las personas físicas que la conforman, o que razonablemente estuvo en condiciones de vigilar, cuidar o conocer que la publicidad por él contratada no se fuese a exponer en otra entidad federativa diversa a la que él contrató y, en consecuencia, debe declararse infundado el presente procedimiento.

Similares consideraciones han sido esgrimidas por este órgano colegiado en las resoluciones INE/CG671/2016, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis; INE/CG352/2015, el diecisiete de junio del año dos mil quince; así como en las resoluciones SRE-PSC-35/2015, SRE-PSC-37/2015, SUP-RAP-24/2011 y acumulados, y en el SUP-RAP-814/2015, emitidas, las dos primeras, por la *Sala Especializada* y las restantes, por la *Sala Superior*.

No pasa desapercibido, que este *Consejo General* al resolver el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016, mediante resolución INE/CG316/2017, señaló que en términos del artículo 242, párrafo 5, de la *LGIFE*, todos los servidores públicos que rindan informes anuales de labores, tienen el deber jurídico de cuidar que la propaganda utilizada con tal fin, sea exhibida respetando los límites legales, determinando la responsabilidad de la servidora

²⁵⁴ Visible en la página de internet <http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifrasoperacion.html>

²⁵⁵ Consultable en

<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=PREUNCION%93N,DE,INOCENCIA>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

pública denunciada, pues se consideró que ésta, no realizó acciones tendentes a efecto de retirarla en tiempo y forma, además de que de que dicha tarea debía hacerse sobre una única ubicación física, por lo cual resultaba proporcional dicha restricción.

Sin embargo, en el presente caso, está acreditado que Juan Manuel Zepeda Hernández, a través de su representante legal, realizó acciones tendentes al retiro de la publicidad ubicada en la estación Pantitlán, originalmente denunciada y, adicionalmente giró instrucciones de retirar toda la publicidad que se hubiere colocado fuera del territorio del Estado de México; previo al dictado del acuerdo de medida cautelar, además de que en el presente procedimiento no resulta proporcional exigirle que tuviera medidas de cuidado sobre estaciones ubicadas en puntos geográficos que no fueron originalmente contratados, pues no se parte de una base objetiva para su supervisión.

A efecto de evitar confusiones a continuación se inserta un cuadro con las diferencias encontradas en ambos procedimientos:

UT/SCG/Q/PAN/JD15/VER/43/2016	UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016
Un anuncio espectacular, del cual se conocía el domicilio y existencia.	Veintiún anuncios, ubicados en tres estaciones, de los cuales no se sabía su existencia.
Existe un contrato que amparaba la difusión por un tiempo determinado y se exhibió por un periodo adicional.	No existe contrato que ampare la difusión de algún anuncio colocado en la Ciudad de México.
No se realizaron acciones tendentes al retiro una vez culminado el periodo por el cual fue contratado.	Se realizaron acciones tendentes al retiro de la publicidad de aquella que se conoció su existencia.

En virtud de lo anterior, **Juan Manuel Zepeda Hernández, no es responsable** por la extraterritorialidad en la difusión de su Primer Informe de Labores Legislativas, con lo cual vulneró lo previsto en el artículo 242, párrafo 5, de la *LG/PE*, ocasionada con motivo de la exposición de veintiún anuncios en el interior del Sistema de Transporte Colectivo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

b) Responsabilidad atribuida a Elvert Pineda Bucio

Con la intención de difundir propaganda alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, **Elvert Pineda Bucio**, el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, suscribió contrato de prestación de servicios con ISA Corporativo, S.A. de C.V.,²⁵⁶ empresa responsable de la comercialización de la publicidad en ese medio de transporte, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

***PRIMERA.** Objeto. Mediante el presente Contrato, las partes acuerdan el marco regulatorio que regirá todas las relaciones jurídicas que existan entre ellas relacionadas con la prestación de servicios (en lo sucesivo los “Servicios”) por parte de “EL PROVEEDOR” a favor de “EL CLIENTE”. Este Contrato sólo dejará de regir aquellas operaciones en que las partes expresamente y por escrito así lo acuerden.*

Las partes acuerdan que por Servicios se deben entender aquellos servicios, de difusión y publicidad fija y móvil, del PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO LOCAL JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ, dentro de las estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México.

...

De lo anterior, retomando los criterios establecidos por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-814/2015, resulta evidente que la intención de Elvert Pineda Bucio, fue contratar publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas del entonces Diputado local Juan Manuel Zepeda Hernández, en los espacios destinados para ello dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en el **Estado de México**.

Al igual que sucede con Juan Manuel Zepeda Hernández, en el expediente en que se actúa, no obra elemento probatorio o constancia alguna que sirva para acreditar que Elvert Pineda Bucio hubiera intervenido de manera directa o indirecta en la contratación, orden o solicitud para la difusión de la propaganda denunciada, en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en la Ciudad de México.

Sin embargo, de conformidad con la información que obra en autos, se desprende que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el representante legal de Juan

²⁵⁶ Visible en las páginas 444 a 450 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Manuel Zepeda Hernández, solicitó a Elvert Pineda Bucio, el retiro de la publicidad originalmente denunciada ubicada en la estación Pantitlán, del Sistema de Transporte Colectivo, así como de toda propaganda que se encuentre fuera de la demarcación contratada, sin que se advierta que este último haya emprendido alguna acción encaminada a dar cumplimiento a tal solicitud.

En efecto, si bien como se dijo anteriormente, Elvert Pineda Bucio contrató la difusión de publicidad alusiva al Informe de Labores Legislativas únicamente para ser difundida en el estado de México, lo cierto es que, derivado de ese acuerdo de voluntades, intencional o accidentalmente, se difundió propaganda en sitios fuera de la demarcación territorial contratada.

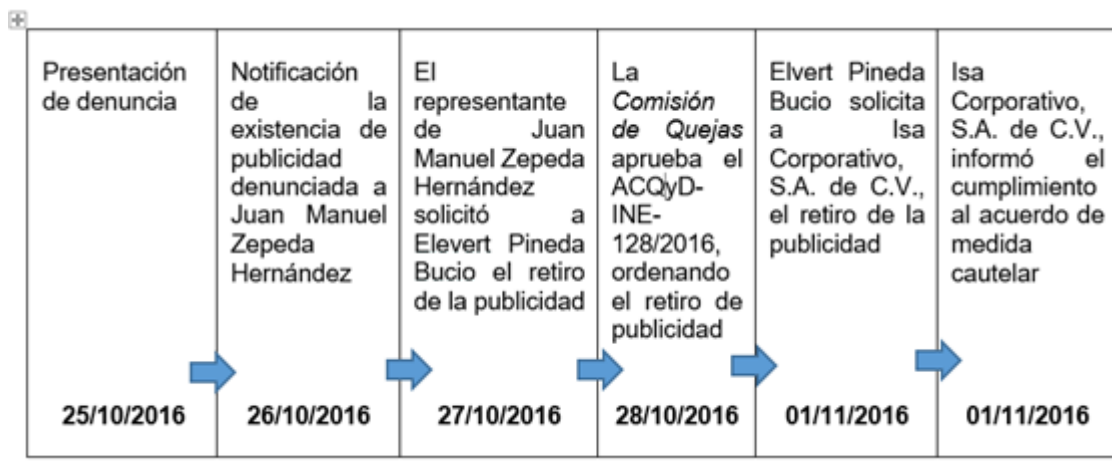
Así las cosas, a partir del momento en que tuvo conocimiento de la instrucción para que retirara inmediatamente la publicidad expuesta en la Ciudad de México, en cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas con Juan Manuel Zepeda Hernández, estaba obligado a realizar todas las acciones tendentes a evitar que se continuara la difusión de la misma, sin que exista pruebas en el expediente de que esto hubiese ocurrido, lo que trajo como consecuencia que la publicidad denunciada se hubiere seguido exhibiendo, aún en contra de la voluntad del entonces diputado local denunciado.

Siguiendo la relación de acontecimientos, el veintiocho de octubre de ese mismo año, la *Comisión de Quejas* aprobó el acuerdo **ACQyD-INE-128/2016**, en el cual se declaró procedente la adopción de medida cautelar solicitada por cuanto hace a la difusión de propaganda fija y de internet denunciada relativa al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández.

Siendo que hasta el primero de noviembre de dos mil dieciséis, Elvert Pineda Bucio, solicitó a Isa Corporativo, S.A. de C.V., el retiro de toda la propaganda contratada, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la *Comisión de Quejas* en el acuerdo de medidas cautelares dictado en el presente asunto.

En esa misma fecha el representante legal de Isa Corporativo, S.A. de C.V., informó que, en acatamiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar, se había retirado la publicidad de la mampara ubicada en la estación Pantitlán.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016



De lo anterior, queda en evidencia que si bien Elvert Pineda Bucio, contrató la difusión de la publicidad denunciada únicamente en el territorio que ocupa el Estado de México, lo cierto es que, una vez que tuvo conocimiento de la existencia de la misma en al menos una estación del Sistema de Transporte Colectivo, ubicada en la Ciudad de México, no actuó para evitar su difusión, a pesar de existir una solicitud expresa por parte de Juan Manuel Zepeda Hernández, de retirarla inmediatamente incluyendo todos aquellos que estuvieron fuera del Estado de México.

Por lo tanto, se considera que **Elvert Pineda Bucio**, es responsable por la difusión indebida de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, en **veintiún** mamparas distribuidas en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, por estar ubicadas dentro de la Ciudad de México, fuera del ámbito de responsabilidad del referido servidor público, durante el periodo comprendido del **veintisiete de octubre de dos mil dieciséis**, momento en el cual se solicitó el retiro de la misma, **al treinta y uno de octubre de del mismo mes y año**, plazo hasta el cual fue contratada la publicidad de referencia.

En consecuencia, se considera **FUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado en contra de **Elvert Pineda Bucio** por la difusión indebida de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, en el territorio de la Ciudad de México, vulnerando con ello, lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con lo establecido en el precepto 242, párrafo 5, de la **LGIPE**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

c) Responsabilidad atribuida a Isa Corporativo, S.A. de C.V.

Como ya ha quedado precisado en las líneas que anteceden, Elvert Pineda Bucio suscribió contrato de prestación de servicios con ISA Corporativo, S.A. de C.V.,²⁵⁷ el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, con el propósito de *difusión y publicidad fija y móvil, del PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO LOCAL JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ, dentro de las estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México.*

De lo anterior, retomando los criterios establecidos por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-814/2015, resulta evidente que la intención de Elvert Pineda Bucio, fue contratar publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas del entonces Juan Manuel Zepeda Hernández, en los espacios destinados para ello dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en el **Estado de México**.

Al momento de dar respuesta al requerimiento de información formulado mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el representante legal de Isa Corporativo, S.A. de C.V., adjunto:

- Factura de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis,²⁵⁸ expedida por Isa Corporativo, S.A. de C.V., en favor de Elvert Pineda Bucio, amparando el servicio de *RENTA DE ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE JUAN MANUEL ZEPEDA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DENTRO DE LAS ESTACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO POR UN PERIODO DE TRECE DÍAS.*

[Énfasis añadido]

- Impresión del contrato de prestación de servicios de dieciséis de octubre de dos mil dieciséis,²⁵⁹ celebrado entre Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., con el objeto de difundir el *PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO LOCAL JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ, dentro de las estaciones del Sistema Colectivo que se encuentran dentro del Estado de México.*

²⁵⁷ Visible en las páginas 444 a 450 del primer tomo del expediente.

²⁵⁸ Visible en la página 443 del primer tomo del expediente.

²⁵⁹ Visible en las páginas 444 a 450 del primer tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

[Énfasis añadido]

- *Testimonial de la campaña exhibida para Juan Manuel Zepeda - Informe,*²⁶⁰ mismo que consta de treinta y un fotografías a color de publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Además, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos el representante legal de ISA Corporativo, S.A. de C.V., señaló que la exhibición de la publicidad denunciada obedeció al contrato de prestación de servicios celebrado con Elvert Pineda Bucio, sin embargo, de la lectura del mismo se advierte que en dicho instrumento se limitó la difusión de dicha publicidad a las estaciones ubicadas en el **Estado de México**.

En virtud de lo anterior, se advierte que las veintiún mamparas con publicidad alusiva al multicitado informe labores que fueron colocadas en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao del Sistema del Transporte Colectivo dentro de la Ciudad de México, contravinieron la voluntad del contratante, ya que este expresamente solicitó su difusión dentro del territorio del Estado de México.

Se tiene certeza que dichas estaciones se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, de conformidad con el oficio GJ/006508/2016,²⁶¹ suscrito por el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo, en donde precisó el domicilio de dichas estaciones.

No pasa desapercibido que el representante legal de Isa Corporativo, S.A. de C.V., al momento de defenderse en el presente asunto, invocó la cláusula DÉCIMA del contrato de prestación de servicios celebrado con Elvert Pineda Bucio, señalando que éste es responsable de la exhibición de la publicidad denunciada.

El contenido de la referida cláusula es el siguiente:

DÉCIMA.- Responsabilidad. "EL CLIENTE" se compromete y asume su responsabilidad con "EL PROVEEDOR" a garantizar que tanto el texto como la imagen gráfica publicitaria correspondiente a la publicidad a instalar o instalada, no sea contrario a las buenas costumbres y valores, así como que no atente contra las instituciones de la sociedad, es decir, efectuar actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o de suponer infundadamente, la de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

²⁶⁰ Visible en las páginas 441 a 459 del primer tomo del expediente.

²⁶¹ Visible en las páginas 850 a 857 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

“EL CLIENTE” asume toda la responsabilidad que se llegara a generar por las violaciones que se causen en materia de derechos de autor, propiedad industrial, marcas y/o patentes, así como en materia electoral, con respecto al arte publicitario, por lo tanto se obliga a sacar a salvo y a liberar de toda responsabilidad a “EL PROVEEDOR” originada por la invasión de algún derecho de autor y/o registro de propiedad industrial, marca y/o patente, o por infracciones a la legislación electoral, respecto a los bienes en los que se encuentra instalada la publicidad, o de la propia publicidad instalada de “EL CLIENTE”.

De la lectura de la referida clausula DÉCIMA, se advierte que no le asiste la razón a dicha persona moral, toda vez que, en el caso concreto, la infracción a la materia electoral, ocurrió como consecuencia de un acto unilateral desarrollado por Isa Corporativo, S.A. de C.V., en desacato a lo acordado en el contrato de prestación de servicios.

En efecto, la falta en materia electoral se actualizó al momento de difundir publicidad en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, mismas que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México; siendo que, desde el objeto del contrato, se delimitó su exhibición a aquellas situadas en el territorio del Estado de México.

En este sentido, el hecho de que **ISA Corporativo, S.A. de C.V.**, haya colocado **veintiún** anuncios con publicidad al referido informe de actividades en el territorio que ocupa la Ciudad de México, vulneró con ello, lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con lo establecido en el precepto 242, párrafo 5, de la *LGIFE*, de ahí que se considere **FUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado, en contra de esa persona moral.

8. Uso indebido de recursos públicos

a) Marco normativo

El artículo 134, párrafo 7, de la *Constitución Federal*, establece en su párrafo séptimo lo siguiente:

Artículo 134.

(...)

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Por otra parte, el artículo 449, párrafo 1, incisos c) y e), de *LGIPE*, establece:

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

(...)

- a) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;*
- e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y*

Como se observa, en el artículo constitucional mencionado, en su párrafo séptimo, dispone que los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Lo anterior, porque el Poder Constituyente advirtió la problemática que presentaba la intervención en los procesos electorales de los poderes públicos, los órganos de gobierno y de los servidores públicos, en virtud de la forma en que éstos pueden influir en la ciudadanía y en el sentido de su voto en las urnas, a partir de que se encuentran en una posición de primacía en relación con quienes carecen de esa calidad y, en función de tal posición, disponer de recursos públicos o programas sociales para beneficiar a alguno de los contendientes en una elección, afectando así las condiciones de equidad electoral.

De ahí que el Constituyente buscó desterrar prácticas que estimó lesivas de la democracia, como son: a) Usar el ejercicio del poder para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos, y b) Que los servidores públicos aprovechen su cargo para lograr ambiciones personales de índole electoral o en beneficio de un tercero; toda vez que, conductas de la naturaleza apuntada, son capaces de colocar en abierta desventaja a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, dada la influencia sobre las preferencias de los ciudadanos, que puede producirse cuando se emplea el aparato burocrático, o los recursos públicos para beneficiar o perjudicar a los distintos actores políticos, que participan en una

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

contienda electoral, condicionando la aplicación de dichos recursos a la manifestación ciudadana de apoyo hacia cierto partido político o a la emisión del voto a favor de cierto candidato.

Del análisis del marco jurídico en torno al principio de imparcialidad que contempla el artículo 134 de nuestra Ley Fundamental, se obtiene que la norma constitucional se refiere expresamente al uso de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; es decir, contiene una prohibición hacia los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, de aplicar parcialmente los recursos públicos que dependen de su ámbito de actuación, respetando así la equidad en la contienda de los partidos políticos y, por ende, la libertad del sufragio; de esta forma, sobre el mencionado precepto constitucional obtenemos lo siguiente:

- Los sujetos destinatarios de la obligación son principalmente los **servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos**.
- Se busca preservar tanto el **principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos**, como el de **equidad en la contienda electoral**.

Debe destacarse que los principios mencionados no se contemplan de forma aislada, sino que están íntimamente ligados, es decir, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos del Estado, va encaminada a salvaguardar la equidad en la contienda entre los partidos políticos; de esta forma, el artículo 134, constitucional, establece límites a la actuación de los servidores públicos, respecto a la disposición de recursos que tienen a su cargo y que no deberán ser utilizados de modo alguno para favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, pues de lo contrario, traería la responsabilidad del servidor público por apartarse de los fines propios del Estado.

Por su parte, el artículo 449, párrafo 1, incisos c) y e), de la *LGIPE*, señala las infracciones en las que puede incurrir un servidor público en uso de sus funciones, y con ello estar ante un incumplimiento al principio de imparcialidad durante un proceso electoral.

El inciso c), del párrafo 1, del referido precepto legal, establece como infracción de las autoridades o servidores públicos, el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando dicha conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Mientras que en el inciso e), del párrafo 1, del artículo que se estudia, establece la prohibición expresa de utilizar programas sociales para coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de algún partido político o candidato.

La finalidad de ambos incisos, al establecer infracciones por parte de los servidores públicos, radica en evitar la vulneración al principio de imparcialidad en época comicial, con el objetivo de que la actividad de dichos servidores permanezca neutral, absteniéndose de disponer de los recursos públicos cuya administración está a su cargo, para incidir en la población con fines o propósitos proselitistas; por tanto, las infracciones en examen, deben necesariamente encontrarse vinculadas a una afectación al proceso electoral, esto es, a una repercusión en el mismo, aun en grado de tentativa, así como a una intención de influir en el ánimo ciudadano para que emita su voto en cierto sentido.

b) Caso concreto

Tal y como fue analizado en el apartado **Hechos acreditados**, en los autos del expediente en que se actúa, no obra algún documento que permita acreditar que se utilizaron recursos públicos para la difusión del informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, con independencia de que la normatividad lo permita.

Por lo cual, resulta **infundada** la infracción consistente en el presunto uso indebido de recursos públicos que se pretendía atribuir al referido servidor público.

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado acreditada plenamente la comisión de la infracción y la responsabilidad de Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., se procede a determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual se atenderá a lo dispuesto en los artículos 447, párrafo 1, inciso e), 456, párrafo 1, inciso e), y 458, párrafo 5, todos de la **LGIE**.

Al respecto, el primero de los numerales invocados establece las infracciones en que puede incurrir cualquier persona física o moral; el segundo, los correctivos que pueden imponerse por tales irregularidades y, el tercero, que para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma electoral.

Cabe señalar que la *Sala Superior* al emitir la tesis de rubro **SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES²⁶² ha sostenido que para la individualización de las sanciones por la infracción a disposiciones electorales, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad.

Con base en ello, a continuación se realizará el análisis pormenorizado de tales elementos, en relación con la existencia de la falta que ha quedado plenamente acreditada en los apartados precedentes de esta resolución.

I. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:

1. Tipo de infracción
2. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)
3. Singularidad o pluralidad de la falta
4. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción
5. Comisión dolosa o culposa de la falta
6. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas
7. Condiciones externas y medios de ejecución

Al respecto, en el particular se presentan las siguientes circunstancias:

1. Tipo de infracción

Denunciado	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
Elvert Pineda Bucio	Legal La infracción que nos ocupa, consistente en la difusión del Primer Informe de Labores del entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, fuera del	Consistió en la difusión de publicidad alusiva Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en el territorio de la Ciudad de México, a pesar de existir una solicitud expresa por parte de	Artículos 447, párrafo 1 inciso e), relacionado con lo previsto en el numeral 242, párrafo 5, de la <i>LGIE</i> .

²⁶² Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Denunciado	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
	territorio previsto para ello.	dicho servidor público a efecto de su retiro.	
Isa Corporativo, S.A. de C.V.		Exhibición de publicidad alusiva Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, en territorio de la Ciudad de México.	Artículos 447, párrafo 1 inciso e), relacionado con lo previsto en el numeral 242, párrafo 5, de la <i>LGIFE</i> .

2. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida)

Las disposiciones legales citadas en el apartado que antecede, tienden a establecer, desde un orden normativo que un servidor público puede rendir un informe anual de labores o de gestión, así como la difusión de mensajes para darlos a conocer en los medios de comunicación social, sin que pueda ser considerado como propaganda prohibida, siempre y cuando se cumpla el requisito de **exhibirse en ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público**.

En el caso, con el actuar de las mencionadas personas, al difundir y permitir la difusión de propaganda alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora Diputado Local del Estado de México, en el territorio de la Ciudad de México, vulneró el bien jurídico tutelado relativo a las reglas que se deben observar en la rendición de informes de labores.

3. Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

La infracción acreditada, atribuible a Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., se tradujo en una vulneración a los requisitos que exige la legislación electoral para la propaganda difundida con motivo de los informes de gobierno o labores legislativas de los servidores públicos, misma que señala que: **la difusión deberá realizarse en ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público**, por lo que se estima que ello no implicó una pluralidad de faltas, toda vez que, al final de cuentas, la conducta cometida configura solamente una infracción, consistente en la difusión del Primer Informe de Actividades del entonces Diputado Local Juan Manuel Zepeda Hernández, fuera del territorio previsto para ello, es decir, colma un supuesto jurídico.

4. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, las conductas deben valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Elvert Pineda Bucio

Modo. La irregularidad consistió en que Elvert Pineda Bucio, no realizó alguna acción tendente a evitar la difusión de veintiún mamparas con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, de la Ciudad de México, no obstante de existir una solicitud de dicho servidor público con las solicitud expresa de retiro, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con lo previsto en el numeral 242, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Tiempo. En el caso, la inobservancia a la normativa electoral ocurrió del veintisiete de octubre, fecha en que se le pido retirara la publicidad denunciada, al treinta y uno del mismo mes y año, momento en que estaba pactado el retiro de toda la publicidad alusiva al referido informe.

Lugar. La irregularidad bajo estudio se cometió en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, en la Ciudad de México.

b) Isa Corporativo, S.A. de C.V.

Modo. La irregularidad consistió en que Isa Corporativo, S.A. de C.V., difundió veintiún mamparas publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, de la Ciudad de México, no obstante de existir un contrato que limitaba su exhibición al Estado de México, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con lo previsto en el numeral 242, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Tiempo. En el caso, la inobservancia a la normativa electoral ocurrió del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en razón del contrato de prestación de servicios aportado por la propia denunciada.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Lugar. La irregularidad bajo estudio se cometió en las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, en la Ciudad de México.

5. Comisión dolosa o culposa de la falta

En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello, una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo los elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.

a) Elvert Pineda Bucio

Se considera que en el caso existió **culpa** por parte de Elvert Pineda Bucio, en razón que no existen elementos objetivos para determinar que tuvo la intención de infringir lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con en el numeral 242, párrafo 5, de la *LGIFE*.

En efecto, tal y como quedó acreditado en la presente resolución, el denunciado no tenía la intención de contratar la difusión de la publicidad en el territorio que ocupa la Ciudad de México, sin embargo, una vez que tuvo conocimiento de la exhibición en dicha entidad federativa, no realizó alguna acción tendente a evitarlo, no obstante que se le solicitó expresamente.

En efecto, esta autoridad considera que Elvert Pineda Bucio mostró una actitud despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el deber de cuidado que se encontraba obligado a observar para el oportuno y correcto retiro de la publicidad del territorio que ocupa la Ciudad de México.

Asimismo, en concordancia con lo establecido por la *Sala Superior* en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo tiene que acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se determina que estamos ante una **omisión culposa** de la normativa electoral.

b) Isa Corporativo, S.A. de C.V.

Se considera que en el caso existió **dolo** por parte de Isa Corporativo, S.A. de C.V., en razón que tuvo la intención de infringir lo previsto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), relacionado con lo previsto en el numeral 242, párrafo 5, de la *LGIFE*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN, identificado con la clave 1a. CVI/2005, de rubro *DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS* conforme al cual, únicamente es necesario que el sujeto presuntamente responsable tenga conocimiento de que determinada situación es irregular (elemento intelectual de dolo) y que lleve a cabo tal conducta (elemento volitivo del dolo), es decir, que el dolo se acredita con *el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla*.

En efecto, del análisis de los elementos que obran en autos, se considera que se satisfacen los elementos del dolo, dado que:

- Está acreditado que la persona moral difundió veintiún anuncios con publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, ubicadas en la Ciudad de México.
- En el contrato de prestación de servicios celebrado entre Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., en la cláusula PRIMERA, expresamente se estableció que la propaganda motivo de denuncia debía estar expuesta exclusivamente en estaciones del Sistema Colectivo Metro que se encuentren dentro del Estado de México, sin que hubiera lugar a interpretación alguna, por lo tanto, se acredita el elemento **intelectual del dolo**, debido a que la persona moral tenía pleno conocimiento de que la instalación de la propaganda en un lugar diverso al pactado implicaría una situación irregular, por lo menos, el incumplimiento del contrato.
- Respecto del elemento **volitivo del dolo**, también se tiene por satisfecho, ya que tal como se razona en el proyecto, de los elementos de pruebas que obran en el expediente del procedimiento sancionador se tiene por acreditado que, efectivamente, la precitada persona moral colocó la propaganda fuera del territorio del Estado de México.
- Es oportuno precisar que, en términos contractuales el error en el objeto o fin del contrato, situación por la que se puede alegar culpa o negligencia (dependiendo que sea error invencible o vencible) debe ser cabalmente probada, incluyendo los elementos que hicieron a la parte contratante hacer una interpretación distinta a la de la literalidad del contrato. Situación que en todo caso es ajena a la materia electoral, al ser competencia de una autoridad en materia civil y que una interpretación diferente puede ocasionar una lesión

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

a la parte contratante la cual tendría la acción para demandar el incumplimiento del contrato.

En ese sentido, desde el momento en que se pactó la relación comercial se estipuló que las estaciones en que se habría de difundir el referido informe de labores serían aquellas ubicadas en el Estado de México y, sin embargo, arbitrariamente se instalaron anuncios en estaciones ubicadas en la Ciudad de México, incurriendo en la infracción a lo previsto en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Similares consideraciones han sido esgrimidas por este *Consejo General* en las resoluciones **INE/CG29/2017**, **INE/CG165/2017** e **INE/CG342/2017**, las cuales fueron confirmadas por la Sala Superior, al resolver los recursos de apelación **SUP-RAP-108/2017**, **SUP-RAP-117/2017** y **SUP-RAP-709/2017**.

6. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

La infracción acreditada no se considera sistemática ni reiterada, puesto que su comisión se consumó en un sólo instante, y ello no puede llevar a concluir que se trata de diversas infracciones concatenadas en un plazo determinado o una misma infracción cometida repetidamente, sino en una sola conducta consistente en la difusión del Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández, fuera del territorio previsto para ello.

7. Condiciones externas (contexto fáctico), y medios de ejecución

a) Elvert Pineda Bucio

El comportamiento de Elvert Pineda Bucio, se cometió por omisión, toda vez que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, una vez que tuvo conocimiento de que había publicidad alusiva al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, difundiéndose en la Ciudad de México, no realizó acción alguna tendente a evitar tal situación.

b) Isa Corporativo, S.A. de C.V.

La conducta desplegada por Isa Corporativo, S.A. de C.V., ocurrió del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, mediante la difusión de la propaganda relativa al Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, la cual estuvo expuesta en veintiún mamparas distribuidas en las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, del Sistema de Transporte Colectivo, de la Ciudad de México, ignorando lo pactado en el contrato de prestación de servicios publicitarios suscrito con Elvert Pineda Bucio.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

1. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra
2. Reincidencia
3. Sanción a imponer
4. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción
5. Condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades habituales.

1. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo las circunstancias particulares de cada caso, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que, el criterio que esta autoridad ha considerado para la calificación de la infracción, es tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

Por tanto, atendiendo a los elementos objetivos y considerando que la conducta desplegada consistente en la exhibición de promocionales del primer informe de labores legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández en **veintiún** anuncios ubicados en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro de la Ciudad de México, con lo cual se incumplió con el principio de territorialidad a que está sujeto la difusión de un informe de labores, por lo que a juicio de esta autoridad, la conducta desplegada

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

por Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., se debe calificar como **grave ordinaria**.

En efecto, derivado de las consideraciones expuestas por esta autoridad, se puede concluir lo siguiente:

- Se determinó que Juan Manuel Zepeda Hernández, no es responsable por la difusión de la propaganda correspondiente a su Primer Informe de Labores y Gestión Legislativa, fuera del territorio del Estado de México, dado que él contrató con Elvert Pineda Bucio su difusión exclusivamente en el Estado de México.
- A su vez, Elvert Pineda Bucio contrató con ISA Corporativo, S.A. de C.V., la colocación de publicidad alusiva al Primer Informe de Labores de Juan Manuel Zepeda Hernández en diversas estaciones del Metro ubicadas en el Estado de México.
- ISA Corporativo, S.A. de C.V., es responsables por la difusión de la propaganda relativa del mencionado informe de labores fuera del Estado de México, específicamente en las estaciones del Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, ubicadas en la Ciudad de México, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 242, párrafo 5, de la *LGIFE*.
- Elvert Pineda Bucio es responsable derivado de su actuar omiso respecto del escrito de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis de Juan Manuel Zepeda Hernández, por el cual le solicitó expresamente realizar las acciones necesarias para que inmediatamente se retiraran toda la publicidad colocada relativa a su informe de labores fuera del territorio del Estado de México.
- No existe vulneración sistemática a la normativa electoral.
- La conducta desplegada no implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola vez, lo que representa una infracción.

Asimismo, a consideración de esta autoridad, el retiro de la propaganda de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicadas en la Ciudad de México no puede ser motivo para atenuar la falta; lo anterior es así, dado que ésta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

circunstancia fue consecuencia de la queja presentada, así como de la culminación del contrato celebrado entre Elvert Pineda Bucio con ISA Corporativo, S.A. de C.V.

2. Reincidencia

Se considera reincidente al sujeto de Derecho que, habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas la Ley Electoral, incurra nuevamente en la misma conducta infractora; lo anterior, conforme al criterio reiteradamente sustentado por la *Sala Superior*, el cual está contenido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 41/2010, con el rubro: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**²⁶³

En este sentido, en el presente asunto no puede considerarse actualizada la reincidencia respecto de la conducta que se les atribuye a Elvert Pineda Bucio y a ISA Corporativo, S.A. de C.V., en razón de que en los archivos de este Instituto no obra algún expediente en el cual se les haya sancionado por una conducta de la misma naturaleza y características.

3. Las condiciones socioeconómicas de los infractores e impacto en sus actividades

Al respecto, es menester precisar que en concordancia con la Jurisprudencia **29/2009**, emitida por el *Tribunal Electoral* de rubro **PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO**,²⁶⁴ así como en las consideraciones sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los recursos de apelación identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP-279/2009, SUP-RAP-285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información correspondiente a la capacidad económica de los sujetos denunciados, pues dicho elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones correspondientes.

Para tal efecto, se solicitó al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, para que por su conducto se requiriera a la Secretaría de Hacienda y

²⁶³ Consultable en la dirección electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación <http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO 41/2010>

²⁶⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 41 y 42.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Crédito Público, diversa información que sirviera de base para determinar la capacidad económica de Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., entre otros sujetos.

De igual forma, se requirió en lo personal a Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., para que proporcionaran información y documentación para los efectos precisados en el párrafo anterior.

De las constancias allegadas al expediente se advierte que mediante oficio INE/UTF/DG/DMR/164/2018²⁶⁵, de nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto proporcionó diversa información sobre la situación fiscal de Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., la cual fue remitida por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las citadas documentales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIFE*, y 45, párrafos 1 y 2, del *Reglamento*, porque se trata de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus atribuciones, cuya autenticidad y contenido no está controvertido y menos aún desvirtuado en autos.

De igual forma, mediante escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho,²⁶⁶ ISA Corporativo, S.A. de C.V., proporcionó diversa documentación de naturaleza fiscal, con la finalidad de acreditar su capacidad económica. Cabe mencionar que el denunciado Elvert Pineda Bucio fue omiso en cuanto a desahogar dicho requerimiento, por lo que se determinará su capacidad económica con las constancias que obran en autos.

En este sentido, se encuentra debidamente acreditada la capacidad económica de los sujetos infractores, de conformidad con el anexo que forma parte de la presente resolución:

4. Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer se debe tener en consideración que la *LGIFE* confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto

²⁶⁵ Visible a página 1308 y anexos a páginas 1309 a 1324 del tomo 2 del expediente.

²⁶⁶ Visible a página 1338-1340 y anexos a páginas 1340 a 1362 del tomo 2 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

infractor, y que a su vez sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta similar.

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, a efecto que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o, por el contrario, insignificantes o simples.

El artículo 456, párrafo 1, inciso e), de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer, entre otros, cuando se trate de personas físicas o morales, como acontece en el particular.

Así, del referido precepto legal se tiene que la multa que se puede imponer a una persona física asciende a un máximo de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; mientras que el monto correspondiente a una persona moral, ésta puede ser de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En consecuencia, esta autoridad resolutora únicamente se encuentra obligada a respetar el límite máximo permitido por la norma.

Tomando en consideración que la conducta en que incurrieron Elvert Pined Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., se calificó de grave ordinaria, los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, el bien jurídico protegido y los efectos de la falta acreditada, se considera que la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, inciso e), fracciones II y III, de la *LGIPE*, consistente en **una multa, resulta la idónea**, pues tal medida permitiría cumplir la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que la prevista en la fracción I, consistente en una amonestación pública, sería insuficiente para lograr ese cometido, en atención a que la conducta implicó una violación directa e intencional a la legislación nacional en la materia; asimismo, en concepto de esta autoridad, la sanción establecida en la fracción IV, del mismo precepto legal, no resulta aplicable al caso, en tanto que se relaciona con un supuesto distinto al que nos ocupa.

Cabe destacar que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable atendiendo a las circunstancias específicas del caso, siendo que la única limitante para la imposición de la sanción es no sobrepasar el máximo legal, esto es, el aplicador puede graduar la multa atendiendo a la gravedad de la infracción, la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

capacidad económica del infractor, la reincidencia, la intencionalidad, el tipo de infracción, el sujeto responsable o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor.

Sirve de apoyo como criterio orientador la Tesis **VI.3o.A. J/20**, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO**, que establece que basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros la autoridad la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos.

Por otra parte, es importante precisar que, mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del mencionado decreto, establecen que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —la *LGIPE* en el presente caso— se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor inicial diario será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la publicación del decreto en cita, y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.

En el caso, también se debe tener en consideración el criterio sustentado por la *Sala Superior*, en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, con el rubro: **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.²⁶⁷ El mencionado órgano jurisdiccional especializado consideró que, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral

²⁶⁷ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 1, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización.

En ese sentido, con la reforma antes citada, se creó en el año de dos mil dieciséis la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Por su parte, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medica y Actualización, en cuyo artículo 4, se establece que el valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo valor a partir de su creación es el siguiente:

Año	Valor diario
2016	\$73.04
2017	\$75.49
2018	\$80.60

Ahora bien, está acreditado en autos que los costos de contratación entre Juan Manuel Zepeda Hernández y Elvert Pineda Bucio, difieren respecto de los pactados entre el último de los nombrados con ISA Corporativo, S.A. de C.V., pues devienen de actos jurídicos diferentes, por lo que el cálculo de la sanción correspondiente a cada uno de ellos se realizará de forma independiente.

- **Elvert Pineda Bucio**

Mediante contrato de catorce de octubre de dos mil dieciséis, Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces legislador del Congreso Local del Estado de México, contrató con Elver Pineda Bucio, en su calidad de persona física con actividades empresariales, la difusión y publicidad fija y móvil de su Primer Informe de Actividades Legislativas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

El monto pactado por la contratación de *Renta de mamparas en diversas estaciones del Sistema Colectivo Metro, que se encuentren dentro del territorio del Estado de México*, por el periodo del diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, ascendió a la cantidad de \$417,600.00 (Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M. N.).

Ahora bien, si se toma en consideración que el total de mamparas y espacios publicitarios donde se realizó la difusión del Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández fue de **treinta y uno**, de conformidad con la información proporcionada por ISA Corporativo, S.A. de C.V., se puede inferir que el costo unitario de cada uno de ellos es de \$13,470.96 (Trece mil cuatrocientos setenta pesos 96/100 M.N.), calculado al segundo decimal.

En ese orden de ideas, si dicha publicidad fue contratada por un periodo de trece días (diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis), el costo unitario de cada uno de los treinta y un espacios publicitarios por día, asciende a la cantidad de \$1,036.22 (Un mil treinta y seis pesos 22/100 M.N.)

Por lo que hace a la sanción a imponer a Elvert Pineda Bucio, ésta debe guardar proporción con la gravedad de la infracción y con las características propias del infractor, atendiendo desde luego, a las peculiaridades del caso.

Así, de constancias de autos se advierte que el referido denunciado efectivamente contrató con ISA Corporativo, S.A. de C.V., la colocación de mamparas publicitarias del Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, única y exclusivamente dentro del territorio del Estado de México, sin embargo, la referida persona moral, incumpliendo a lo pactado, colocó publicidad en veintiún mamparas ubicadas en las estaciones de Pantitlán, Zaragoza y Guelatao, en territorio de la Ciudad de México.

No obstante la culpa acreditada a cargo de la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., se advierte que Elvert Pineda Bucio incurrió en responsabilidad ante ello, dado que el ahora infractor tuvo conocimiento de dichos hechos sin tomar acción o medida alguna para remediarlo, tal como se expone a continuación.

Mediante escrito de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis,²⁶⁸ Jorge Jiménez Martínez, en representación de Juan Manuel Zepeda Hernández, informó al hoy denunciado Elvert Pineda Bucio, lo siguiente:

²⁶⁸ Visible a página 307 del tomo 1 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

...de acuerdo a la queja número UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016, radicada en la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral, se nos informa que existe propaganda del Primer Informe de Actividades Legislativas del Dip. Juan Manuel Zepeda Hernández, fuera del ámbito territorial del Estado de México, específicamente en el trasbordo de la estación del Metro Pantitlán, haciendo énfasis que lo convenido con usted, fue que la propaganda únicamente sería difundida dentro del territorio mexiquense.

*Le solicito de la manera más atenta y urgente que de ser así, **tenga a bien retirar dicha propaganda a la brevedad posible, a efecto de evitar cualquier tipo de responsabilidad.***

*Agradezco de antemano la atención prestada, por lo cual **le solicito haga el retiro inmediato de cualquier propaganda que se encuentre fuera de la demarcación contratada.** [Énfasis añadido]*

De lo anterior, se advierte que desde el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, Elvert Pineda Bucio tuvo conocimiento de la posible vulneración de la normativa electoral, la cual todo ciudadano está obligado a cumplir, aunado a que su contratante –Juan Manuel Zepeda Hernández, a través de su representante- le solicitó e instruyó realizar las acciones necesarias para retirar la publicidad contratada que se encontrara fuera del territorio del Estado de México, lo cual no realizó.

Por lo que, a consideración de este órgano resolutor, si Elvert Pineda Bucio hubiera atendido la solicitud de Juan Manuel Zepeda Hernández, consistente en retirar toda la propaganda que se encontrara fuera de la demarcación territorial del Estado de México, se pudo haber evitado la difusión ilegal del citado informe de labores en veintiún espacios durante cinco días (del veintisiete al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis).

Sin embargo, por el dicho de ISA Corporativo, S.A. de C.V., fue hasta el día primero de noviembre de dos mil dieciséis, en que Elvert Pineda Bucio le solicitó el retiro de la propaganda, en el transbordo de la estación Pantitlán, para dar cumplimiento a la ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, sin perder de vista que, en términos del contrato celebrado entre ellos, dicha publicidad debía retirarse inclusive el día treinta y uno de octubre.

Con lo anterior, se advierte una actitud pasiva por parte del denunciado Elvert Pineda Bucio, pues no obstante le fue informado e instruido por Juan Manuel Zepeda Hernández el retiro de la referida publicidad, no actuó al respecto, lo cual

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

pudo evitar que se continuara infringiendo la normativa electoral, lo cual se ha considerado como una conducta por **omisión culposa**.

En consecuencia, a consideración de este órgano resolutor la sanción a imponer a Elvert Pineda Bucio por su actuar, de principio se plantea como el equivalente a cada uno de los espacios publicitarios (veintiuno) y por el tiempo en que indebidamente estuvo expuesto el informe de labores aludido, a partir de que tuvo conocimiento de ello y, que además, recibió la instrucción de que se retirara sin que hubiera hecho algo al respecto.

En ese sentido, si el costo unitario por día de cada espacio publicitario es de \$1,036.00 (Un mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.), y fueron veintiún, durante cinco días, se tiene que la cantidad de \$108,780.00 (Ciento ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), a fin de lograr un efecto inhibitorio para ulteriores ocasiones.

Ahora bien, de la revisión a la Declaración de Impuestos Federales, del ejercicio fiscal dos mil dieciséis del denunciado,²⁶⁹ se advierte que dicha multa implicaría el 28.68% de su ingreso anual, en el año dos mil dieciséis, lo cual podría ser gravoso y desproporcional para el mismo, en atención a las condiciones en que se cometió la falta.

Por lo tanto, a efecto seguir inhibiendo las conductas que transgredan la normativa electoral y al mismo tiempo no causar algún perjuicio trascendental en la actividad económica del denunciado, se estima que el monto de la multa originalmente propuesta sea reducido a la mitad, esto es \$54,390.00 (Cincuenta y cuatro mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Multa	50%	Cantidad final
\$108,780.00	- 54,390.00	\$54,390.00

En conclusión, este *Consejo General* determina que la sanción a imponer a Elvert Pineda Bucio por su actuar pasivo y negligente es por la cantidad de **\$54,390.00** 00 (Cincuenta y tres mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Es importante mencionar que la *Sala Superior*, ha emitido un criterio Jurisprudencial en el cual ha determinado que, para efectos de la imposición de una sanción a una persona física con actividad empresarial, como lo es el caso que nos ocupa, es

²⁶⁹Visible en las páginas 1311 a 1314 del segundo tomo del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

procedente adoptar los parámetros previstos en la ley para las personas morales, para mayor referencia se cita a continuación:

Jurisprudencia 29/2016

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER SANCIONADAS CONFORME A LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA LAS PERSONAS MORALES.- De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 16, in fine, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 3, fracciones I y II y 75, fracciones IX y XXV, del Código de Comercio; artículo 2, párrafos tercero y quinto, 51 y 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las personas físicas con actividad empresarial que incurran en alguna infracción en la materia, pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las personas morales, pues realizan como actividad sustancial actos con fines lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales

- **ISA Corporativo, S.A. de C.V.**

Por lo que hace a la sanción a imponer a **ISA Corporativo, S.A. de C.V.**, ésta debe guardar proporción con la gravedad de la infracción y con las características propias del infractor, atendiendo desde luego, a las peculiaridades del caso.

A efecto de tener un parámetro objetivo para poder determinar la sanción a imponer a ISA Corporativo, S.A. de C.V., lo procedente es tomar en consideración los montos establecidos en el contrato y anexos²⁷⁰ que celebró la referida persona moral con Elvert Pineda Bucio, el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis.

Así, del anexo al citado contrato se advierte que Elvert Pineda Bucio se obligó a pagar a ISA Corporativo, S.A. de C.V., la cantidad de \$406,000.00 (Cuatrocientos seis mil pesos 00/100 M.N.), por la renta de mamparas en diversas estaciones del Sistema Colectivo, Metro, sin especificar el número de ellas. No obstante ello, del documento denominado *Testimonial de la campaña exhibida para: Medio: Metro CDMX, JUAN ZEPEDA-INFORME, Periodo de exhibición: Octubre 2016*, mismo que fue exhibido por la propia sociedad denunciada, se advierte que la publicidad

²⁷⁰ Contrato visible a páginas 444 a 448 del legajo 1 del expediente.
Anexos visibles a páginas 449 y 50 del legajo 1 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

alusiva al referido informe de labores, fue difundida en treinta y un mamparas y/o espacios publicitarios.

De lo anterior, se puede concluir que el costo unitario de cada uno de los espacios donde se difundió la referida publicidad tuvo un costo de \$13,096.77 (Trece mil noventa y seis pesos 77/100 M.N.), redondeado al segundo decimal.

En el caso concreto, el propio denunciado señaló las ubicaciones en las cuales difundió el Primer Informe de Actividades Legislativas de Juan Manuel Zepeda Hernández, a saber, las estaciones Pantitlán, Cuatro Caminos, Zaragoza, Guelatao, La Paz, Ecatepec y Ciudad Azteca, todas del Sistema de Transporte Colectivo.

Durante el transcurso de la investigación se tuvo conocimiento de que las estaciones Pantitlán, Zaragoza y Guelatao están ubicadas dentro del territorio que ocupa la Ciudad de México, y por ende la publicidad de referencia no debía ser difundida en éstas, puesto que sale de lo estipulado en el contrato que dio origen a tal operación comercial y actualiza una infracción en materia electoral.

Por lo tanto, se advierte una actitud activa por parte de Isa Corporativo, S.A. de C.V., pues no obstante le fue contratado por Elvert Pineda Bucio la colocación de la referida publicidad en estaciones ubicadas en el territorio que ocupa el Estado de México, éste, a través de su personal, colocó publicidad en ámbito geográfico de la Ciudad de México, infringiendo la normativa electoral, lo cual se ha considerado como una conducta por **acción dolosa**.

En ese sentido, se considera que la sanción que se debe imponer a la sociedad denunciada por haber difundido el informe de labores de Juan Manuel Zepeda Hernández en espacios del Sistema de Transporte Colectivo, Metro en la Ciudad de México, debe ser por el importe igual a cada uno de ellos, durante todo el tiempo que estuvieron expuestos, más el cincuenta por ciento de dicha cantidad, con la finalidad de lograr un efecto inhibitorio y evitar que en posteriores ocasiones vuelva a incurrir en dichos actos contraventores de la normativa electoral.

Ahora bien, de la información proporcionada por la sociedad denunciada, se advierte que la información relativa al multicitado informe de labores, fue difundido en veintiún espacios en la Ciudad de México, por lo que, si se multiplica el costo unitario consistente de \$13,096.77 (Trece mil noventa y seis pesos 77/100 M.N.) por cada uno de ellos, se obtiene la cantidad de \$275,032.17 (Doscientos setenta y cinco mil treinta y dos pesos 17/100 M.N.), a la cual se le deberá aumentar un cincuenta por ciento como ha quedado motivado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

En consecuencia, la cantidad que por concepto de multa debe imponerse a Isa Corporativo, S.A. de C.V., asciende a la cantidad de **\$412,548.25 (Cuatrocientos doce mil quinientos cuarenta y ocho pesos 25/100 M.N.)**.

Es de mencionar que las sanciones que se imponen en esta resolución a Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., se encuentran dentro de los parámetros máximos establecidos por la ley, los cuales para el caso de las personas físicas con actividad empresarial y para personas morales, no podrá exceder de los cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, atento a lo dispuesto por el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III, de la *LGPE*, y en la Jurisprudencia 29/2016 de la *Sala Superior*.

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cálculo de sanciones se hará tomando como base de partida la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de Días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal.

En ese sentido, a efecto de ejemplificar que las sanciones que en esta resolución se imponen a Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., se encuentran ajustadas a derecho, lo procedente es calcular los montos máximos establecidos en la ley, tomando como referencia el valor de la UMA en el momento en que fue cometida la infracción (dos mil dieciséis).

Denunciado	Tipo de persona	Rango de la multa en UMAS	Valor de la UMA en 2016	Rango de la multa en pesos	Sanción impuesta	Equivalente en UMA
Elvert Pineda Bucio	Física con actividad empresarial	1 a 100,000	\$73.04	\$73.04 a \$7'304,000	\$54,390.00	744.66
ISA Corporativo, S.A. de C.V.	Moral	1 a 100,000	\$73.04	\$73.04 a \$7'304,000	\$412,548.25	5,648.25

De lo anterior, se advierte que la multa que se impone a los denunciados Elvert Pineda Bucio e ISA Corporativo, S.A. de C.V., se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la ley, las cuales, como ha quedado expuesto se cuantificaron de conformidad con los contratos que cada uno de ellos celebró.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Tal cuantía constituye una base idónea, razonable y proporcional a dicha conducta, si se toma en cuenta las condiciones en que se cometió la infracción, que se vulneraron disposiciones legales de suma trascendencia para el sostenimiento del sistema democrático nacional, y que lógicamente deben reprenderse de manera proporcional a los valores jurídicos que fueron trastocados.

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a los sujetos infractores, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia, tomando en cuenta además las particularidades que concurrieron en el presente asunto.

5. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta, en modo alguno se puede considerar como gravosa para Isa Corporativo, S.A. de C.V., y por tanto, resulta evidente que no se afecta el desarrollo de sus actividades, al representar solamente el 0.044% con relación a sus ingresos percibidos en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

Por lo que hace a Elvert Pineda Bucio, se tiene que la sanción que se impone representa el 14.34% de los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. En ese sentido, a efecto de no provocar mayor perjuicio a dicha persona, se considera oportuno que la sanción que se le impone sea cubierta en seis exhibiciones mensuales de \$9, 065.00 (Nueve mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), lo cual desde la perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.

QUINTO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del *INE* mediante el esquema electrónico *e5cinco* en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga <http://portalanterior.ine.mx/documentos/DEA/e5cinco/tramites.htm>.

La persona moral **Isa Corporativo, S.A. de C.V.** debe realizar el pago en una sola exhibición dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que la presente determinación quede firme.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

Por lo que hace a **Elvert Pineda Bucio**, puede realizar el pago en una sola exhibición dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que la presente determinación quede firme, o bien, diferirlo en doce pagos mensuales de \$9, 065.00 (Nueve mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

Asimismo, en caso que los sujetos sancionados no cumplan, en tiempo y forma, su deber de pagar la multa impuesta, el Secretario Ejecutivo de este Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, conforme a lo previsto en el citado precepto legal.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la *Constitución Federal*,²⁷¹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de Juan Manuel Zepeda Hernández, *El Universal* y Adrián Gutiérrez Pérez, de conformidad con las razones esgrimidas en el Considerando **QUINTO**.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de Elvert Pineda Bucio e Isa Corporativo, S.A. de C.V., de conformidad con las razones esgrimidas en el Considerando **QUINTO**.

²⁷¹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: **TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016
Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016

TERCERO. Se impone a la persona física con actividad empresarial, Elvert Pineda Bucio, una sanción consistente en una **multa de 744.66** (Setecientas cuarenta y cuatro punto sesenta y seis) Unidades de Medida y Actualización, lo cual equivale a \$54,390.00 (Cincuenta y cuatro mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

La cual podrá pagarse en una sola exhibición dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que la presente determinación quede firme, o bien diferirlo en seis pagos mensuales de \$9, 065.00 (Nueve mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

CUARTO. Se impone a la persona moral, Isa Corporativo, S.A. de C.V., una sanción consistente en una **multa de 5,648.25** (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho punto veinticinco) Unidades de Medida y Actualización, lo cual equivale a \$412,548.25 (Cuatrocientos doce mil quinientos cuarenta y ocho pesos 25/100 M.N.), en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

La cual debe pagarse en una sola exhibición dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que la presente determinación quede firme.

QUINTO. En términos del artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del *INE* mediante el esquema electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga <http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/index-e5cinco.htm>.

SEXTO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Notifíquese. La presente resolución a las partes; y, por **estrados**, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la Ley Electoral; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

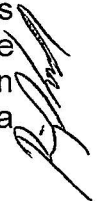
En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ Y LOS PARTIDOS, ACCIÓN NACIONAL Y DEL TRABAJO, EN CONTRA DE JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ; ELVERT PINEDA BUCIO; ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.; EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Y ADRIÁN GUTIÉRREZ PÉREZ, CON MOTIVO DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES GENERADAS POR LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVA DEL PRIMERO DE LOS DENUNCIADOS, EN SU CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MHC/CG/53/2016 Y SU ACUMULADO UT/SCG/Q/TEEM/CG/66/2016.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones por las que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría del Consejo General. Considero que la misma violenta en forma importante los principios de certeza, congruencia y legalidad que deben ser observados por este Instituto al emitir todas sus resoluciones.

Lo anterior es así, en virtud que considero que este Consejo General debe mantener el criterio en materia de violaciones a las reglas para la rendición de Informe de Labores de los servidores públicos, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 11 de marzo de 2015, al resolver el recurso de revisión SUP-REP-03/2015 y Acumulados, criterio que fue ratificado, confirmado y era consistente en múltiples resoluciones, incluso por la actual integración de magistradas y magistrados, como la dictada el pasado 16 de agosto de 2017 en el recurso SUP-REP-82/2017.

En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó infundado el procedimiento respecto de Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora Diputado Local en el Estado de México, por considerar que la contratación de propaganda y publicidad en una revista, bardas, anuncios colocados en espectaculares en la vía pública y en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, así como en la página de internet de El Universal, con motivo de su primer informe de labores legislativas, se encontraba encaminada a dar a conocer a la ciudadanía un presunto desempeño de actividades legislativas.



Para tales efectos, la Resolución se basó en precedentes más recientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han reflexionado las reglas sobre Informes de Labores que a juicios del suscrito no debieran ser adoptadas por esta Autoridad Administrativa.

En este sentido, estimo que es necesario que el Instituto dicte determinaciones que sustenten criterios que permitan inhibir y prevenir conductas bajo el estándar de la resolución SUP-REP-03-2015. Considero que es necesario esperar que el máximo órgano jurisdiccional, si es el caso, reitere sistemáticamente el nuevo precedente que flexibiliza las exigencias para la propaganda relacionada con los informes de actividades.

En este orden de ideas, considero que los mensajes alusivos a la gestión de un servidor público, debe necesariamente llevarse a cabo bajo los criterios de la resolución SUP-REP-03-2015 y Acumulados¹, en la que se establecieron las condiciones siguientes:

1. Deben ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica, que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las atribuciones conferidas normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y abiertos a la ciudadanía.
2. Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de concluido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe de labores.
3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa, por lo que, su rendición puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa.
4. Tener una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en que irradia su función y

¹ Se destaca que la resolución encontró el fundamento de sus conclusiones a partir de la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las prohibiciones contempladas en los párrafos Séptimo y Octavo, del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre informes anuales de labores o de gestión gubernamental en la **Acción de Inconstitucionalidad 22/2004 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014**, fojas 45 y 46, en cuyo texto se cita las diversa Acción de Inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas 77/2008 y 78/2008.



actividades desplegadas con base en las atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas.

5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad y contenido previsto en la ley.

Respecto al contenido, es importante destacar que debe atender a un acto de comunicación con la sociedad auténtico, genuino y veraz de la función pública con datos o elementos vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno; que en la propaganda, la figura y la voz del funcionario público ocupen un plano secundario, de frente a la relevancia que corresponde a la información propia de la rendición de cuentas y, no un foro renovado para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista que influyan en alguna competencia electoral.

6. Bajo ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales y tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público, ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.

En este contexto, la publicidad de los Informes de Labores deberán difundir las acciones, actividades, datos y cumplimiento de las metas u objetivos de las funciones desplegadas por los servidores públicos, a partir de imágenes o promocionales relacionados de manera preponderante con la materia que se informa, de manera que los mensajes difundidos no se traduzcan en instrumentos tendentes a exaltar la figura, imagen o personalidad del obligado.

Asimismo, las imágenes del servidor público, su voz o símbolos que lo identifiquen, así como al partido político de cuyas filas emana, deben ocupar un lugar no esencial o, en todo caso, encontrarse en un plano secundario dentro de la propaganda, toda vez que lo relevante y papel preponderante será la rendición de cuentas de las actividades y las imágenes relacionadas con el cumplimiento de las atribuciones y funciones.



Finalmente, respecto de la difusión de los promocionales, podrán difundirse en todo el territorio nacional, en tanto, sus funciones impactan a la totalidad de los habitantes del país, de no ser el caso, su cobertura debe ser regional limitada al ámbito geográfico de responsabilidad.

Es por lo anterior, que estimó que el Consejo General debió reiterar el criterio antes citado, sobre las reglas para la rendición de los Informe de Labores de los servidores públicos y, en consecuencia determinar **fundado** el procedimiento, toda vez que es claro de un análisis de publicidad ubicada en el Metro, los anuncios espectaculares, el banner en El Universal y la publicidad en bardas que fueron denunciadas, no se comunicó la actividad que en sustancia realizó Juan Manuel Zepeda Hernández, toda vez que, en ninguno de los mensajes expuesto se transmite cuál fue la tarea desempeñada por el funcionario durante su gestión.

Es más, en los anuncios señalados se advierte como común denominador en todas ellas, lo siguiente:

- a) La imagen del otrora Diputado Local, es preponderante en relación con el resto del contenido de cada espectacular.
- b) El nombre del servidor público denunciado se destacada tanto en tamaño como en tipografía y en color negro.
- c) Debajo del nombre en dos tamaños de letra proporcionalmente diferentes entre ellos y en color rojo, el mensaje que se presentar.
- d) Las frases utilizadas son las siguientes:

Respecto de publicidad en el Metro, los anuncios espectaculares y la publicidad en bardas se mostró: "PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES" en letras color rojo, destacándose que la frase "MEJORES LEYES" se exhibe en un tamaño por demás inferior al resto de ese mensaje.

En relación al banner en El Universal: De forma diferenciada por 10 segundos la leyenda "1ER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS LIX LEGISLATURA", seguido de "JUAN ZEPEDA", de forma posterior "PARA EL ESTADO DE MÉXICO MEJORES LEYES" y tomas individuales de las frases "ECONOMÍA FAMILIAR, SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIDAD DE GÉNERO y EDUCACIÓN"

No debe perderse de vista además que, respecto de la contratación y difusión del banner en la página de internet del periódico El Universal y, contrario a lo aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo General, estimo que el procedimiento debió determinarse **fundado** al haberse acreditado una difusión indebida y ser expuesta la imagen del servidor público denunciado fuera de su ámbito geográfico de responsabilidad (extraterritorialidad), toda vez que el contenido de dicha publicidad fue visible a nivel nacional.

Como ya se ha señalado es indispensable que los Informes de Labores de los servidores públicos tengan una cobertura regional, limitada al ámbito geográfico de su responsabilidad; esto es, delimitado al lugar en que lleva a cabo su función y actividades de acuerdo a sus atribuciones constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas.

Al respecto, estimo que la difusión de la publicidad en comento vulneró la regulación normativa, toda vez que contrario a lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, que establece que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda prohibida, siempre que cumpla entre otros requisitos, con que la difusión se realice **en medios con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público**.

Sobre el particular, sostengo que el servidor público denunciado quien se ubicó en un supuesto de irregularidad, toda vez que contrató la inserción de dicha publicidad en un medio que tiene difusión nacional, lo cual como se señaló se encuentra dentro de las restricciones que prevé el precepto citado en el párrafo anterior, considerando que la norma de forma explícita considera que la difusión de los informes de labores o de gobierno, debe efectuarse en **medios con cobertura regional**, es decir, el denunciado debió prever y tener el cuidado de realizar la contratación en un medio de la publicidad que estuviera su difusión únicamente en el territorio del Estado de México.

En razón de lo anterior, estimo que la contratación y difusión del banner en la página de internet del periódico El Universal (difusión nacional), que en el proyecto se consideró que no contraviene lo establecido en el artículo 242, párrafo 5, de la LGIPE y, por tanto infundado el procedimiento, implica dejar sin efectos la restricción legal, que tiene como objetivo evitar que un servidor público local,

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

cualquiera que sea el medio de comunicación en que difunde un informe de labores o gobierno, obtenga publicidad indebida más allá de su ámbito geográfico de responsabilidad.

Máxime cuando el objetivo del derecho sancionador electoral es inhibir y prevenir las conductas para evitar acciones u omisiones sobre hechos que han sido tipificados como infracciones lo que puede vulnerar los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad; pues una vez producida la vulneración de derechos surge la necesidad de una sanción, que tiene como premisa el que sean respetadas las normas electorales para que dichas conductas no sean repetidas.

En suma, se considera que es obligación de esta autoridad ceñir sus determinaciones a los términos claros y precisos que prevé la ley, así como en congruencia con las determinaciones que sobre los casos particulares ya han sido tomados, porque en caso contrario esas determinaciones apartadas de la Ley o de precedentes, conculcarían la garantía de seguridad jurídica que supone la certeza, estabilidad y razonabilidad de los actos de autoridad.

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales.



JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del apartado 3.4, que entiendo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Es reiteración.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Este no ha sido votado, entiendo que, en consecuencia, reservado o incluido en aquellos que implican una diferencia de criterio ya sea por reiteración, ya sea por la sanción distinta a los criterios previos. _____

Entonces, la pregunta es muy sencilla, tenemos 2 alternativas, entrar a la discusión en específico a cada uno, no sé si haya alguna discusión a propósito. _____

Si no es el caso, entonces consulto a la mesa si tiene objeción de que hagamos una votación de este apartado y de los subsecuentes que tienen que ver con reiteración para que, y/o sanción disminuida para que se pueda hacer la votación diferenciada en los términos que han planteado, tanto la Consejera Electoral Dania Ravel como la Consejera Electoral Pamela San Martín y entiendo el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña acompaña, sin necesidad de entrar a discusión. _____

Si no hay objeciones en ese sentido para poder darle una celeridad al punto, y dado que estamos en el primero de estos casos en el orden del día que han sido mencionados. _____

Le pediría en consecuencia, insisto, si no hay objeción por parte de los miembros de la mesa que se tome la votación con la diferenciación respectiva, respecto de estos 2 apartados del Proyecto de Resolución identificado con el apartado 3.4 en el que estan, los apartados 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.13 que es sanción disminuida solamente, no hay reiteración y el apartado 3.14 que es solo reiteración. _____

La Consejera Electoral Beatriz Zavala tiene una moción. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Sugeriría que primero votáramos los apartados 3.4, 3.6, 3.10 y 3.14 que solo trae reiteración... _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: También el apartado 3.14. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Los otros, dividido reiteración y sanción. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Entonces votaríamos si no tienen, inconveniente una primera votación del apartado 3.4 en el que nos encontramos, de los apartados 3.6, 3.10 y 3.14; que son los que tienen que ver con reiteración. _____

En un segundo momento, votaríamos los apartados 3.7 y 3.8 que tienen las 2; y en una tercera votación, votaríamos el apartado 3.13 que tiene sanción disminuida, entiendo que no hay ninguna pretensión de entrar al análisis de parte de los miembros de la mesa, entrar al análisis, y a la discusión de algunos de estos apartados. _____

Consecuentemente si no hay inconveniente pasaríamos a la votación. _____

En los términos que mencioné Secretario del Consejo, tome las 3 votaciones consecutivas. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general, los Proyectos de Resolución identificados en el orden del día como los apartados 3.4, 3.6, 3.10 y 3.14, excluyendo de estas votaciones en lo general, por lo que hace al criterio de reiteración. _____

Quienes estén a favor de aprobar los 4 apartados en lo general, sírvanse manifestarlo.

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora, someto a su consideración en lo particular para estos 4 Proyectos, por lo que hace al criterio de reiteración como vienen en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo, por favor. _____

Consejero Electoral Benito Nacif, como vienen en el Proyecto de Resolución. _____

7 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Aprobados en lo particular estos 4 Proyectos por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1352/2018, INE/CG1353/2018, INE/CG1354/2018 e INE/CG1355/2018) Ptos. 3.4, 3.6, 3.10 y 3.14 _____

INE/CG1352/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018
DENUNCIANTE: JASSIEL ESPARZA TAPIA Y
OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR JASSIEL ESPARZA TAPIA, ROGELIO QUIROZ BARRIOS, JULIO CÉSAR ESPARZA HERNÁNDEZ, ANDRÉS EDUARDO VALDEZ MELÉNDEZ, VICTORIA CHÁVEZ VÁZQUEZ Y SHULAMIS GONZÁLEZ MALDONADO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA DE LOS MENCIONADOS CIUDADANOS AL PARTIDO POLÍTICO EN CITA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GLOSARIO	
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PRI</i>	Partido Revolucionario Institucional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS. El veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero y dos de febrero, todos de dos mil dieciocho, Jassiel Esparza Tapia, Rogelio Quiroz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdez Meléndez, Victoria Chávez Vázquez y Shulamis González Maldonado, presentaron escritos a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, consistentes en su presunta afiliación indebida al partido político en cita, sin mediar consentimiento alguno para ello.

II. REGISTRO, ADMISIÓN DE LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.¹ Mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

¹ Visible a páginas 36 a 44 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

el titular de la *UTCE*, tuvo por recibidos los escritos de queja referidos en el punto de antecedentes que precede, ordenando el registro de los mismos como procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave de expediente **UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018**.

En dicho proveído se admitió a trámite el presente asunto y se ordenó requerir la siguiente información:

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
PRI	<p>Se le requirió informará lo siguiente:</p> <p>a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registrados los ciudadanos antes mencionados; para tal efecto se ordena anexar al presente requerimiento, en sobre cerrado, copia simple y legible de la credencial para votar de los ciudadanos en cuestión.</p> <p>b) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original de los expedientes en que obren las constancias de afiliación.</p> <p>c) En caso que a la fecha del desahogo del presente requerimiento no se encuentren registrados dentro de su padrón de afiliados los ciudadanos enlistados, indique si anteriormente éstos fueron afiliados y la fecha de su baja en el referido padrón, y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de los procedimientos de desafiliación correspondientes.</p>	<p>INE- UT/1726/2018²</p> <p>19/febrero/2018</p>	Sin respuesta
DEPPP	Informará si los ciudadanos denunciantes se encuentran		

² Visible a página 48 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
	<p>registrados en el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional.</p> <p>En su caso, indicando la fecha a partir de la cual se les dio de alta en dicho padrón y remitiera los originales o copia certificada de los expedientes donde obraran las constancias de afiliación respectivas.</p>	<p>INE- UT/1725/2018³ 20/febrero/2018</p>	<p>Respuesta⁴ 21/febrero/2018</p>

III. PRORROGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.⁵ En atención a que el *PR* solicitó prórroga para dar atención al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de uno de marzo del año en curso, se le otorgó una prórroga de tres días hábiles, sin que se hubiera atendido dicho requerimiento.

IV. EMPLAZAMIENTO.⁶ El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PR*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputó y aportara los medios de prueba que consideraran pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/11157/2018 ⁷ 04/julio/2018	<p>Citatorio:⁸ 05 de julio de 2018.</p> <p>Cédula:⁹ 06 de julio de 2018.</p> <p>Plazo: 09 al 13 de julio de 2018.</p>	Oficio PRI/REP- INE/0530/2018 signado por el representante suplente del <i>PR</i>

³ Visible a página 50 del expediente

⁴ Visible a páginas 59 a 60 del expediente.

⁵Visible a páginas 97 a 99 del expediente

⁶ Visible a páginas 113 a 120 del expediente.

⁷ Visible a página 123 del expediente.

⁸ Visible a páginas 128 a 133 expediente.

⁹ Visible a páginas 124 a 125 expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
		ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 13 de julio de 2018 ¹⁰

V. ALEGATOS.¹¹ Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRI</i> INE-UT/12522/2018 ¹² 10/agosto/2018	Cédula: 14/agosto/2018 Citatorio: 13/agosto/2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018.	Oficio PRI/REP-INE/0602/2018 signado por el representante suplente del <i>PRI</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 21 de agosto de 2018 ¹³

Denunciantes

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jassiel Esparza Tapia	Cédula: 14/agosto/2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018	No dio respuesta
2	Rogelio Quiroz Barrios	Cédula: 13/agosto/2018 Plazo: 14 al 20 de agosto de 2018.	No dio respuesta
3	Julio César Esparza Hernández	Cédula: 13/agosto/2018 Plazo: 14 al 20 de agosto de 2018.	No dio respuesta
4	Andrés Eduardo Valdez Meléndez	Cédula: 13/agosto/2018 Plazo: 14 al 20 de agosto de 2018.	No dio respuesta

¹⁰ Visible a páginas 134 a 137 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 138 a 141 del expediente.

¹² Visible a página 156 del expediente.

¹³ Visible a páginas 182 a 184 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
5	Victoria Chávez Vázquez	Cédula: 14/agosto/2018 Citatorio: 13/agosto/2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018.	No dio respuesta
6	Shulamis González Maldonado	Cédula: 15/agosto/2018 Plazo: 16 al 22 de agosto de 2018.	No dio respuesta

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera Electoral y Presidenta de esa Comisión, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, y del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, presentes en dicha Sesión, y

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRI* derivado, esencialmente, de las indebidas afiliaciones al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios

¹⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el procedimiento en que se actúa, las presuntas faltas (indebida afiliación), se cometieron durante la vigencia del *COFIPE*, la normativa electoral que se encontraba vigente al momento en que sucedieron los hechos denunciados.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de *los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de*

Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el *PRI*.

Ello es así, toda vez que si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,¹⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas que así resulten, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante ciertas quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Asimismo, para los ciudadanos de los que no se tiene la fecha de afiliación, se tomará en cuenta lo informado por la DEPPP,¹⁶ en el sentido a la fecha de corte de la información que le proporcionó el propio Instituto político, así como a que el dato relativo a la fecha de afiliación en ese entonces no era requerido en aquellos registros que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados “*Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*”, es decir antes del 13 de septiembre de 2012.

Por tanto, esa fecha se tomará como la de registro de afiliación, ello en el entendido de que en esos casos se tiene certeza de que fueron registrados antes de la entrada en vigor de la nueva legislación comicial, por tanto, sólo en dichos casos se tomará como fecha de afiliación el 13 de septiembre de 2012.

Lo anterior es así puesto que esta autoridad solo tiene esa fecha -13 de septiembre de 2012- como único dato cierto que puede ser tomado en consideración para estimar la fecha de afiliación, al existir omisión del partido político incoado de informar una fecha precisa, el cual era el único que estaba en aptitud de precisar lo conducente, resultando aplicable, *mutatis mutandi* lo resuelto por la Sala Superior

¹⁵ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

¹⁶ Visible a foja 60 del expediente

al resolver el SUP-RAP-18/2018, a través del cual se determinó confirmar el acuerdo INE/CG30/2018, en específico, en lo relativo a la consideración que adujo este Instituto de tomar como fecha de afiliación indebida, en ese caso, la de la presentación de la denuncia, el cual, era el único dato certero con que contaba esta autoridad en ese asunto y con lo cual, de acuerdo con lo resuelto por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, se dotó de certeza y objetividad a la resolución de este Consejo General.

Hipótesis que, en algunos casos del presente asunto se actualiza, en razón de que de lo manifestado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto en desahogo del requerimiento que le fue formulado y ante la omisión del *PRI*, no es posible advertir la fecha de la supuesta afiliación de los denunciantes.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PRI* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33, de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

¹⁷ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la

¹⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PRI

Estatutos del PRI

De la Integración del Partido

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán*

incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:

a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y suplentes, a cargos de elección popular.

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, de la entidad federativa, distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las candidatas y los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o

h) Las y los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo 66;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo 66;

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X del artículo 66; y

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 66 y el párrafo segundo del artículo 55. El Partido registrará ante las autoridades competentes a las y los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos y el Código de Ética Partidaria. Las relaciones de las personas afiliadas entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, así como por los principios de la ética partidaria.

Artículo 24. *Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades. Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido;

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren;

y IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano.

[...]

Capítulo V De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 54. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 55. *La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité municipal o delegacional, estatal*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.

Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro. En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PRI

De la Declaratoria de Renuncia

Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.

Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.

Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado artículo 63; y*
- II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia. Todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de militancia, se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de este ordenamiento.*

Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, los partidos políticos (en el caso el *PRI*) tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²¹ y como estándar probatorio.²²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

²³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Jassiel Esparza Tapia	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano estuvo afiliado al Partido Revolucionario Institucional con fecha de alta 3 de septiembre de 2013 y que la cancelación de dicho registro fue el 13 de febrero de 2018	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, ello, independientemente de que se haya cancelado dicha afiliación.</p>			

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Rogelio Quiroz Barrios	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>			

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Julio César Esparza Hernández	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Victoria Chávez Vázquez	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al Partido	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		Revolucionario Institucional desde el 5 de marzo de 2014.	ciudadana en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Shulamis González Maldonado	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Por oficios PRI/REP-INE/171/2018 y PRI/REP-INE/530/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, remite la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la que refiere que derivado de las cargas excesivas de trabajo por el Proceso Electoral, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cuestión, sin poder dar razón de su estatus ante ese instituto político.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun y cuando el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a si el ciudadano está afiliado o no, la DEPPP proporcionó información que el propio partido capturó, y en la cual se refleja como afiliado, por lo que el Instituto Político al no haber aportado elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a

ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes.

Como vimos, en el apartado anterior, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados, se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PRI*.

Por otra parte, en los casos que comprenden el presente procedimiento, el *PRI* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de la voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en

afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto apartados arriba, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio IFE ahora INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento – para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados– siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales**

correspondientes, o –para el caso de la omisión de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el *PRI*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

En este sentido, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* quedó demostrado que los quejosos se encuentran o encontraron, en algún momento, como afiliados del *PRI*.

Es importante recalcar que el *PRI*, no admitió ni negó la militancia de Jassiel Esparza Tapia, Rogelio Quiróz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdéz Meléndez, Victoria Chávez Vázquez y Shulamis González Maldonado, únicamente se limitó a señalar que continuaba en la búsqueda de la información relacionada con los mismos, sin embargo, la información que la *DEPPP* proporcionó es basada en lo que el propio partido político comunica a este Instituto, y en ésta se confirma la afiliación de los quejosos.

En ese sentido, el *PRI*, no demuestra con medios de prueba mínimos e idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la prueba en torno al acreditamiento de la voluntad de los quejosos referente a su incorporación a las filas del partido corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en sostener que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo tanto, los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los casos en concreto de Jassiel Esparza Tapia, Rogelio Quiróz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdéz Meléndez, Victoria Chávez Vázquez y Shulamis González Maldonado, sobre los cuales el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a su afiliación, argumentando que derivado de los tiempos electorales en que se encontraban y las cargas de trabajo, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con los ciudadanos en cita, sin admitir o

negar que los mismos fueran sus militantes, sin embargo, tenía y tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que estos otorgaron, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que se constara y probara ese hecho.

En ese sentido, debe precisarse que el partido político en comento tiene el deber de **conservar y resguardar** con el debido cuidado y, para el caso, **exhibir**, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por lo que, es válido concluir que el *PRJ* no demostró que la afiliación de los seis ciudadanos, cuyo caso se analiza en este apartado, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciados hayan dado su consentimiento libre para ser afiliados.

Ello, en virtud de que su normativa interna, específicamente el *Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario*, establece lo siguiente:

- El artículo 14, refiere que los documentos que deberá presentar el ciudadano para poder afiliarse al *PRJ* son, credencial para votar, comprobante de domicilio y el formato de afiliación al partido, mismo que deberá ser proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.
- Por su parte el numeral 15, establece que las Secretarías de Organización de los Comités Directivos Estatales y Nacional a través de sus instancias correspondientes de Afiliación y Registro Partidario **llevarán el control del registro** de todos y cada uno de los solicitantes de afiliación al partido; asimismo, llevará un folio consecutivo para las solicitudes de afiliación.

- Finalmente, el precepto 16 de dicho ordenamiento partidista prevé que la afiliación al partido se solicitará mediante el **formato Único de Afiliación al Registro Partidario** que autorice la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, o mediante escrito, en español, en el que deberán señalarse elementos como domicilio, la manifestación bajo protesta de decir verdad su voluntad de pertenecer al partido, de suscribirse, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo y sus Estatutos, así como anexar escrito de no pertenencia a diverso ente político, debiendo llevar, además, **el nombre completo y firma autógrafa o huella dactilar** en original del ciudadano solicitante.

Con base en lo anterior, es claro que el *PRI* establece ciertos requisitos específicos de afiliación para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, el folio que deberían llevar las respectivas instancias partidistas, así como la suscripción de diversos formatos, incluyendo el formato único de afiliación al registro partidario correspondiente; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en el caso que se analiza no fueron cumplidos por el denunciado, tal y como lo establece su propia legislación interna.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **Jassiel Esparza Tapia, Rogelio Quiróz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdéz Meléndez, Victoria Chávez Vázquez y Shulamis González Maldonado**, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de los mismos para ser agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los seis denunciados que aparecieron afiliados al *PRI*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político en ningún caso demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior, en tanto que el *PRI* no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los quejosos de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a ese ente.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PRI* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PRI* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018²⁴ y SUP-RAP-137/2018²⁵, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad del partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los **seis denunciantes**, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En ese sentido, resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es **no** pertenecer más como afiliados al *PRI*.

Con base en ello, lo procedente ordenar a dicho denunciado, para que **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, con efectos a partir de la fecha en que presentaron su denuncia; por lo que, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

²⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político denunciado, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PRI</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 6 ciudadanos por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PRI* incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados, a seis ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5,

párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, en los seis casos no se demostró la voluntad de pertenecer como afiliados al *PRI*, por lo que se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada uno de los ciudadanos para ser afiliados, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **seis** ciudadanos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a los quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a) y n), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **seis ciudadanos**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer y mantener a **una ciudadana** contra su voluntad dentro de las filas del referido instituto político, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

No.	Nombre	Información partido político	Información DEPPP
1	Jassiel Esparza Tapia	No proporcionó información	Se encontraba afiliado al <i>PRI</i> , desde el 3 de septiembre de 2013 y fue cancelado el 13 de febrero de 2018.
2	Rogelio Quiróz Barrios	No proporcionó información	Se encuentra afiliado al <i>PRI</i> , sin precisar fecha de afiliación.
3	Julio César Esparza Hernández	No proporcionó información	Se encuentra afiliado al <i>PRI</i> , sin precisar fecha de afiliación.
4	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez	No proporcionó información	Se encuentra afiliado al <i>PRI</i> , sin precisar fecha de afiliación.
5	Victoria Chávez Vázquez	No proporcionó información	Se encuentra afiliada al <i>PRI</i> , desde el 5 de marzo de 2014
6	Shulamis González Maldonado	No proporcionó información	Se encuentra afiliado al <i>PRI</i> , sin precisar fecha de afiliación.

Cabe precisar, que la temporalidad que se tomará en cuenta para la imposición de la sanción, será aquella informada por la *DEPPP*, respecto a la fecha en que fue capturada la información por el partido político, toda vez que en ese entonces, no era requerida la data de inscripción en aquellos registros que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados “*Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*”, es decir, antes del 13 de septiembre de 2012.

Por tanto, se tomará esa fecha para establecer el registro de afiliación, al no contar con otro que permita establecerla; lo anterior, tal y como se precisó en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución intitulado *NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO*.

Además, debe considerarse, *mutatis mutandis*, aplicable lo resuelto por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-18/2018, en donde la Sala Superior

consideró que la autoridad electoral implementó un criterio más benéfico para el partido y redujo a la mínima expresión posible el carácter represor al considerar el salario mínimo vigente al momento de que se realizó la afiliación.

- c) **Lugar.** Con base a la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que las faltas atribuidas al partido político se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre	Entidad federativa
1	Jassiel Esparza Tapia	Hidalgo
2	Rogelio Quiróz Barrios	Aguascalientes
3	Julio César Esparza Hernández	Aguascalientes
4	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez	Chihuahua
5	Victoria Chávez Vázquez	Estado de México
6	Shulamis González Maldonado	Tamaulipas

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRI* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.

- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRJ* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto

en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PRI*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos se encuentran en el padrón de militantes del *PRI*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien precisó que, derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar que

contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.

- 3) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI*, se cometió al afiliar indebidamente a seis ciudadanos, sin demostrar el acto volitivo de éstos para ingresar en sus padrones de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**²⁶

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

²⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PRI*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a este instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PRI* los afilió sin demostrar, contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstos de pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a

través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRI*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PRI*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PRI* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.²⁷

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PR* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no

²⁷ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE*, ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PRI*, es decir, los **seis ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PRI*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018²⁸ y SUP-RAP-137/2018²⁹, respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento,

²⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,³⁰ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el*

³⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) al *PRI*, **por cada uno de los ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Cabe precisar que iguales sanciones, han sido impuestas por este Consejo General, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente **al momento de realizar la afiliación** o en su caso del trece de septiembre de dos mil doce, lo anterior, toda vez que la DEPPP no cuenta con la fecha de afiliación de **Rogelio Quiróz Barrios, Julio César Esparza Hernández, Andrés Eduardo Valdéz Meléndez, Shulamis González Maldonado**, derivado de que ese dato no era requerido en aquellos registros que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados "*Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*", por lo que al no tener registro de la fecha de afiliación debieron haberse capturado antes del trece de septiembre de dos mil doce, tal como lo refiere mediante correo electrónico

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho³¹; y obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.³²

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PRI		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 2012		
4	62.33	\$160,063.44
Afiliación en 2013		
1	64.76	\$41,575.92
Afiliación en 2014		
1	67.29	\$43,200.18
TOTAL		\$244,839.54 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines

³¹ Visible a fojas 59 a 60 del expediente

³² Consultable en la liga electrónica
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2012, 2013 y 2014, según corresponda), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso a \$88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ³³	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ³⁴
			A	B	C	D	
1	Rogelio Quiróz Barrios	13/09/2012	642	62.33	\$80.60	496.47	\$40,015.48
2	Julio César Esparza Hernández	13/09/2012	642	62.33	\$80.60	496.47	\$40,015.48
3	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez	13/09/2012	642	62.33	\$80.60	496.47	\$40,015.48
4	Shulamis González Maldonado	13/09/2012	642	62.33	\$80.60	496.47	\$40,015.48
5	Jassiel Esparza Tapia	03/09/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.89
6	Victoria Chávez Vázquez	05/03/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
TOTAL						\$ 244,837.79	

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

³³ Cifra al segundo decimal

³⁴ *Idem*

Se estima que la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PRI* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00	\$28,902,363.20	\$62,339,025.80

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PRI*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano³⁵
2012	\$40,015.48	4	0.06%
2013	\$41,575.89	1	0.06%
2014	\$43,199.98	1	0.06%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,³⁶ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

³⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

³⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017³⁷, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, al infringir las disposiciones electorales del derecho de libre afiliación —en su modalidad positiva (afiliación indebida) — de **seis ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **Partido Revolucionario Institucional, una multa por la indebida afiliación de cada uno** de los **ciudadanos** aludidos, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
1	Jassiel Esparza Tapia	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
2	Rogelio Quiróz Barrios	496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$40,015.48 (Cuarenta mil quince pesos 48/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]
3	Julio César Esparza Hernández	496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$40,015.86 (Cuarenta mil quince pesos 48/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]
4	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez	496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$40,015.86 (Cuarenta mil quince pesos 48/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]
5	Victoria Chávez Vázquez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
6	Shulamis González Maldonado	496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$40,015.86 (Cuarenta mil quince pesos 86/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JET/JD06/HGO/33/2018

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LG/PE*, el monto de las multas impuestas **al PRI**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al *PRI* para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia** y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:

NO.	CIUDADANO
1	Jassiel Esparza Tapia
2	Rogelio Quiróz Barrios
3	Julio César Esparza Hernández
4	Andrés Eduardo Valdéz Meléndez
5	Victoria Chávez Vázquez
6	Shulamis González Maldonado

Así como al partido *PRI* por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

INE/CG1353/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018
DENUNCIANTES: MARTÍN PAUL
CÁRDENAS AGUIRRE Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

GLOSARIO	
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
COFIPE o Código	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE*, trece escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

No.	Quejoso	Fecha de presentación
1	Martín Paul Cárdenas Aguirre	13/02/2018 ¹
2	Linda Guadalupe Navarrete López	13/02/2018 ²
3	Mónica Ramírez Fortis	14/02/2018 ³

¹ Visible a foja 05 del expediente.

² Visible a foja 09 del expediente

³ Visible a foja 19 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No.	Quejoso	Fecha de presentación
4	José Adolfo San Román Santiago	19/02/2018 ⁴
5	Francisco Javier Ruiz Cruz	20/02/2018 ⁵
6	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	20/02/2018 ⁶
7	Andrés López Lujan	20/02/2018 ⁷
8	Alfredo Andrés Meza Luna	21/02/2018 ⁸
9	Carlos Ocaña Corte	22/02/2018 ⁹
10	Tomasa Alarcón Elox	22/02/2018 ¹⁰
11	Luis Fernando Nava Águila	22/02/2018 ¹¹
12	Emmanuel Alonso López Bernal	26/02/2018 ¹²
13	Sinaí Navarro Aguilar	16/02/2018 ¹³

II. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹⁴ Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador, respecto de Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis, José Adolfo San Román Santiago, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal.

De igual forma, se recibieron dos escritos de Martín Paul Cárdenas Aguirre, no obstante, el mismo remitió copia ilegible de la credencial para votar, razón por la cual, en el citado proveído, se le formuló prevención a efecto de que remitiera copia

⁴ Visible a foja 33 del expediente

⁵ Visible a foja 41 del expediente.

⁶ Visible a foja 46 del expediente.

⁷ Visible a foja 55 del expediente.

⁸ Visible a fojas 62 a la 63 del expediente.

⁹ Visible a foja 68 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 76 a 77 del expediente.

¹¹ Visible a foja 84 del expediente.

¹² Visible a foja 92 a 93 del expediente.

¹³ Visible a foja 115 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 96 a 105 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

legible de la misma, apercibido que, de no subsanarla se le tendría por no presentada la denuncia. En este tenor, al no atender la prevención, se tuvo por no presentada la queja de referencia, mediante proveído de dos de abril de dos mil dieciocho. Con independencia de lo anterior, el señalado ciudadano presentó nuevamente queja ante la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa de este Instituto, en la cual denunció la misma conducta en contra del *PAN*, admitiéndose a trámite, mediante Acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el expediente **UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/109/2018**.

Posteriormente, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho¹⁵, se tuvo por recibido y se admitió a trámite el escrito de queja de Sinaí Navarro Aguilar.

En todos los casos, se reservó el respectivo emplazamiento hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

III. Diligencias de investigación preliminar. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó los requerimientos que se describen a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de respuesta
07/03/2018 ¹⁶	<i>PAN</i>	INE-UT/2232/2018 ¹⁷	14/03/2018 Oficio ¹⁸ RPAN2-0102/2018
	<i>DEPPP</i>	INE-UT/2231/2018 ¹⁹	09/03/2018 Correo electrónico ²⁰

¹⁵ Visible a fojas 144 a 152 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 96 a 105 del expediente.

¹⁷ Visible a foja 122 del expediente

¹⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 127 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 138 a 139 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de respuesta
20/03/2018 ²¹	PAN	INE-UT/3540/2018 ²²	23/03/2018 Oficio ²³ RPAN2-0127/2018
	DEPPP	INE-UT/3541/2018 ²⁴	22/03/2018 Correo electrónico ²⁵
02/04/2018 ²⁶	PAN	INE-UT/3980/2018 ²⁷	Sin respuesta
24/04/2018 ²⁸	PAN	INE-UT/4886/2018 ²⁹	26/04/2018 Oficio ³⁰ RPAN2-0209/2018
16/05/2018 ³¹	PAN	INE-UT/7333/2018 ³²	22/05/2018 Oficio ³³ RPAN2-0281/2018

IV. Emplazamiento.³⁴ El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo de emplazamiento al PAN, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

²¹ Visible a fojas 144 a 152 del expediente.

²² Visible a foja 159 del expediente.

²³ Visible a foja 268 a 297 del expediente.

²⁴ Visible a foja 163 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 252 a 253 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 308 a 314 del expediente.

²⁷ Visible a foja 317 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 334 a 338 del expediente.

²⁹ Visible a foja 342 del expediente.

³⁰ Visible a fojas 345 a 354 del expediente.

³¹ Visible a fojas 357 a 361 del expediente.

³² Visible a foja 362 del expediente.

³³ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

³⁴ Visible a fojas 425 a 432 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/9807/2018 ³⁵	Citatorio: ³⁶ 19 de junio de 2018. Cédula: ³⁷ 20 de junio de 2018. Plazo: 21 de junio al 27 de junio de 2018.	26/junio/2018 ³⁸

V. Alegatos.³⁹ Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente asunto, a fin de que formularan los alegatos que a su derecho conviniera, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/10973/2018 ⁴⁰	Citatorio: ⁴¹ 03 de julio de 2018 Cédula: ⁴² 04 de julio de 2018. Plazo: 05 al 11 de julio de 2018.	10/julio/2018 ⁴³

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Linda Guadalupe Navarrete López INE/SIN/JDE01/VS/0687/2018 ⁴⁴	Citatorio: 28 de junio de 2018 Cédula: 29 de junio de 2018. Plazo: 02 al 06 de julio de 2018.	Sin respuesta
2	Mónica Ramírez Fortis INE-UT/10974/2018 ⁴⁵	Cédula: 04 de julio de 2018. Plazo: 05 al 11 de julio de 2018.	Sin respuesta
3	José Adolfo San Román Santiago INE/HGO/06JDE/VS/0469/2018 ⁴⁶	Citatorio: 16 de julio de 2018 Cédula: 17 de julio de 2018 Plazo: 18 al 24 de julio de 2018	Sin respuesta
4	Francisco Javier Ruiz Cruz INE-UT/10975/2018 ⁴⁷	Cédula: 16 de julio de 2018. Plazo: 17 al 23 de julio de 2018	Sin respuesta

³⁵ Visible a foja 436 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 437 a 441 del expediente.

³⁷ Visible a foja 442 a 443 del expediente.

³⁸ Visible a fojas 448 a 452 del expediente.

³⁹ Visible a fojas 453 a 458 del expediente.

⁴⁰ Visible a foja 463 del expediente.

⁴¹ Visible a fojas 464 a 468 del expediente.

⁴² Visible de fojas 469 a 470 del expediente.

⁴³ Visible a fojas 482 a 486 del expediente.

⁴⁴ Visible a foja 538 del expediente.

⁴⁵ Visible a foja 475 del expediente.

⁴⁶ Visible a foja 550 del expediente.

⁴⁷ Visible a foja 511 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete INE/JD10-VER/2407/2018 ⁴⁸	Cédula: 05 de julio de 2018. Plazo: 06 al 12 de julio de 2018.	Sin respuesta
6	Andrés López Lujan INE-CD03-ZAC/1316/2018 ⁴⁹	Cédula: 02 de agosto de 2018 Plazo: 03 al 09 de agosto de 2018.	Sin respuesta
7	Alfredo Andrés Meza Luna INE/JD16-VER/1983/2018 ⁵⁰	Cédula: 05 de julio de 2018. Plazo: 06 al 12 de julio de 2018.	Sin respuesta
8	Carlos Ocaña Corte INE/JD-02/TX/0576/2018 ⁵¹	Citatorio: 13 de agosto de 2018 Cédula: 14 de agosto de 2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018.	Sin respuesta
9	Tomasa Alarcón Elox INE/JD08-VER/1692/2018 ⁵²	Cédula: 06 de julio de 2018 Plazo: 09 al 13 de julio de 2018	Sin respuesta
10	Luis Fernando Nava Águila INE-JAL-JDE09-VE-0208-2018 ⁵³	Cédula: 17 de julio de 2018 Plazo: 18 al 24 de julio de 2018	Sin respuesta
11	Emmanuel Alonso López Bernal INE-35JDE-MEX/VS/210/2018 ⁵⁴	Cédula: 11 de julio de 2018 Plazo: 12 al 18 de julio de 2018	Sin respuesta
12	Sinaí Navarro Aguilar INE/JD10-VER/2407/2018 Por estrados ⁵⁵	Cédula: 06 de julio de 2018 Plazo: 09 al 13 de julio de 2018	Sin respuesta

VI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

VII. Sesión de la *Comisión de Quejas*. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, presentes en la sesión.

⁴⁸ Visible a foja 503 del expediente.

⁴⁹ Visible a foja 547 del expediente.

⁵⁰ Visible a foja 492 del expediente.

⁵¹ Visible a foja 564 del expediente.

⁵² Visible a foja 520 del expediente.

⁵³ Visible a foja 527 del expediente.

⁵⁴ Visible a foja 509 del expediente.

⁵⁵ Visible a foja 573 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, de los ciudadanos que han sido señalados en la presente determinación.-

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *PAN*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁵⁶ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas violaciones al derecho de libertad de afiliación se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que la afiliación y/o renuncia de los quejosos Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortís, Francisco Javier Ruíz Cruz, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal y Sinaí Navarro Aguilar al *PAN* se realizó antes del veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,⁵⁷ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha

⁵⁷ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Ahora bien, por lo que respecta a los ciudadanos José Adolfo San Román Santiago, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Alfredo Andrés Meza Luna y Tomasa Alarcón Elox, se tiene que la fecha de afiliación al partido político denunciado —ya sea reconocida por el propio partido político o proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos— es posterior al veintitrés de mayo de dos mil catorce, de ahí que en esos casos, se aplicará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el análisis y sustanciación de esos supuestos que se denuncian en el presente expediente.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de afiliar indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, así como de no permitir o dar trámite a la solicitud de desafiliación presentada por un ciudadano, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁵⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre

⁵⁸ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en

cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las ciudadanas y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PAN*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PAN* consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.⁵⁹

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

Estatuto del PAN

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;**
- b) Tener un modo honesto de vivir;**
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;**
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.

En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido;

- e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.**

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

Artículo 11

1. Son derechos de los militantes:

- a) Que los órganos del Partido establezcan y promuevan actividades que les deberán ser informadas de manera oportuna;*
- b) Votar y elegir de forma directa a los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, Comités Directivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional y sus comités;*
- c) Votar y participar en las elecciones y decisiones del Partido, por sí o por delegados;*
- d) Participar en el gobierno del Partido desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no podrán ser más de tres por elección en un mismo momento;*
- e) Ser aspirantes, precandidatos y, en su caso, candidatos de Acción Nacional a cargos de elección popular;*
- f) Acceder a la formación y capacitación necesaria y continua, para el cumplimiento de sus deberes como militante del Partido;*
- g) Acceder a mecanismos internos de solución de controversias, cuando sean privados de sus derechos al interior del partido, en términos estatutarios y legales;*
- h) Acceder a la información generada por sus órganos de manera permanente en los términos que señale el reglamento aplicable;*
- i) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad, se encuentren obligados a presentar durante su gestión, en términos de lo precisado por los Reglamentos;*
- j) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido, mediante los mecanismos establecidos en los Reglamentos;*
- k) Interponer ante el Tribunal Federal o los tribunales electorales locales los medios de defensa previstos por la ley, en contra de las resoluciones y decisiones de los órganos internos del Partido que afecten sus derechos político-electorales, siempre y cuando se haya agotado la instancia intrapartidista;*
- l) Refrendar o renunciar a su condición de militante, en los términos establecidos en estos Estatutos y Reglamentos correspondientes; y*
- m) Los demás que establezcan el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos legales y del Partido.*

2. Para el ejercicio de sus derechos, los militantes deberán cumplir con sus obligaciones y los requisitos establecidos en los presentes Estatutos, así como en los Reglamentos y en su caso con la normatividad electoral, según corresponda.

3. Para el ejercicio de los incisos b, c y d del presente artículo, deberán transcurrir 12 meses después de ser aceptados como militantes, con las excepciones establecidas en el reglamento.

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PAN*, los ciudadanos mexicanos deben realizar una manifestación directa, personal, **presencial**, individual, libre, pacífica y voluntaria.
- Uno de los requisitos formales para acceder a la militancia del partido político ahora denunciado, consiste en *Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional*, el cual deberá ser *acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral*.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁶⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁶¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

⁶⁰ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁶¹. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁶² y como estándar probatorio⁶³.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

⁶² Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁶³ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

⁶⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los hoy quejosos, versan, en algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de afiliación política, al haber sido incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento y, como conducta infractora inherente a ella, la utilización de sus datos personales para sustentar tal afiliación.

En otro caso, uno de los quejosos denuncia que el partido lo mantiene o mantuvo registrado como su militante en contra de su voluntad, no obstante que, previamente, le había manifestado por escrito, su intención de no pertenecer más en sus filas de agremiados.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los ciudadanos denunciante, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/febrero/2018 ⁶⁵	Informó que la quejosa se encontraba afiliada al PAN desde el 13 de enero de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁶⁶ el ente político reconoció que la quejosa se encontraba registrada como militante del partido desde el 13 de enero de 2014, <u>causando baja del padrón</u> el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Sinaloa, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante es militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁶⁵ Visible a foja 09 del expediente.

⁶⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Mónica Ramírez Fortis	14/febrero/2018 ⁶⁷	Informó que la quejosa se encuentra afiliada al PAN desde el 28 de enero de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁶⁸, el ente político reconoció que la quejosa se encuentra registrada como militante del partido desde el 28 de enero de 2014, con trámite de actualización de datos el 20 de febrero de 2017.</p> <p>Asimismo, en el oficio RPAN2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁶⁹ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicha ciudadana, consistentes en un documento que contiene la leyenda “Actualización de militantes 2017”, donde se aprecia el nombre de la quejosa y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre de la denunciante.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la <i>DEPPP</i> y el <i>PAN</i> coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el veintiocho de enero de dos mil catorce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el <i>PAN</i> pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Mónica Ramírez Fortis de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veinte de febrero de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia de la quejosa se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Mónica Ramírez Fortis- supuestamente otorgada el veinte de febrero de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce- que fue desconocida por la quejosa en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p> <p>Adicionalmente, el <i>PAN</i> manifestó que carecía del formato de afiliación de dicha ciudadana, ya que llevó a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN.</p> <p>Por tanto, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁶⁷ Visible a página 19 del expediente.

⁶⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁶⁹ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	José Adolfo San Román Santiago	19/febrero/2018 ⁷⁰	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 24 de febrero de 2016.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁷¹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 24 de febrero de 2016, <u>causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017</u>, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Hidalgo, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que **se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Francisco Javier Ruiz Cruz	04/febrero/2018 ⁷²	Informó que el quejoso se encuentra	Afiliado

⁷⁰ Visible a página 33 del expediente.

⁷¹ Visible a páginas 164 a 230 del expediente.

⁷² Visible a página 41 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			afiliado al PAN desde el 04 de febrero de 2014.	Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018 ⁷³ , el ente político reconoció que el quejoso se encuentra registrado como militante del partido desde el 04 de febrero de 2014, con trámite de actualización de datos el 26 de enero de 2017. Asimismo, en el oficio RPA2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁷⁴ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicho ciudadano, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre del quejoso y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre del denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el cuatro de febrero de dos mil catorce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Francisco Javier Ruíz Cruz de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Francisco Javier Ruíz Cruz supuestamente otorgada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por el quejoso en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p> <p>Adicionalmente el PAN manifestó que carecía del formato de afiliación de dicho ciudadano, ya que llevó a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN,</p> <p>Por tanto, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁷³ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁷⁴ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	20febrero/2018 ⁷⁵	Informó que la quejosa se encuentra afiliada al PAN desde el 03 de abril de 2014.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁷⁶, el ente político reconoció que la quejosa se encuentra registrada como militante del partido desde el 03 de abril de 2014, con trámite de actualización de datos el 13 de julio de 2017.</p> <p>Asimismo, en el oficio RPAN2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁷⁷ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicha ciudadana, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre de la quejosa y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre de la denunciante.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la <i>DEPPP</i> y el <i>PAN</i> coinciden en que la fecha de afiliación de la denunciante al partido político denunciado fue el tres de abril de dos mil catorce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el <i>PAN</i> pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Ingrid Yamilet Santos Navarrete de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el trece de julio de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia de la quejosa se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Ingrid Yamilet Santos Navarrete supuestamente otorgada el trece de julio de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por la quejosa en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p>				

⁷⁵ Visible a página 46 del expediente.

⁷⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁷⁷ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Adicionalmente el <i>PAN</i> manifestó que carecía del formato de afiliación de dicha ciudadana, ya que llevó a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el <i>PAN</i> ,				
Por tanto, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Andrés López Lujan	20/febrero/2018 ⁷⁸	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al <i>PAN</i> desde el 03 de abril de 2017.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁷⁹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 03 de abril de 2017, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Zacatecas, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del <i>PAN</i>. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PAN</i>, que el citado ciudadano</p>				

⁷⁸ Visible a página 55 del expediente

⁷⁹ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el <i>PAN</i> , la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Alfredo Andrés Meza Luna	21/febrero/2018 ⁸⁰	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al <i>PAN</i> desde el 09 de marzo de 1998.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸¹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 09 de marzo de 1998, <u>causando baja del padrón</u> el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Veracruz, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del <i>PAN</i>. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PAN</i>, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la</p>				

⁸⁰ Visible a páginas 62 a la 63 del expediente.

⁸¹ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Carlos Ocaña Corte	22/febrero/2018 ⁸²	Informó que el quejoso se encuentra afiliado al PAN desde el 30 de octubre de 2006.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁸³, el ente político reconoció que el quejoso se encuentra registrado como militante del partido desde el 30 de octubre de 2006, con trámite de actualización de datos el 28 de junio de 2017.</p> <p>Asimismo, en escrito de 26 de abril de 2018, ⁸⁴ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicho ciudadano, consistentes en un documento que contiene la leyenda “Actualización de militantes 2017”, donde se aprecia el nombre del quejoso y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre del denunciante.</p>

Conclusiones

Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el treinta de octubre de dos mil seis.

Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Carlos Ocaña Corte de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veintiocho de junio dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.

Es decir, la manifestación de Carlos Ocaña Corte supuestamente otorgada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por el quejoso en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.

⁸² Visible a página 68 del expediente.

⁸³ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁸⁴ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Adicionalmente el <i>PAN</i> manifestó que carecía del formato de afiliación de dicho ciudadano, ya que llevó a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el <i>PAN</i> ,				
Por tanto, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Tomasa Alarcón Elox	22/febrero/2018 ⁸⁵	Informó que la quejosa se encontraba afiliada al <i>PAN</i> desde el 02 de agosto de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸⁶ el ente político reconoció que la quejosa se encontraba registrada como militante del partido desde el 02 de agosto de 2014, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Veracruz, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del <i>PAN</i>. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del <i>PAN</i>, que la citada ciudadana</p>				

⁸⁵ Visible a páginas 76 a 77 del expediente.

⁸⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el <i>PAN</i> , la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Luis Fernando Nava Águila	22/febrero/2018 ⁸⁷	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al <i>PAN</i> desde el 23 de diciembre de 2013.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸⁸ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 23 de diciembre de 2013, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Jalisco, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del <i>PAN</i>. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PAN</i>, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la</p>				

⁸⁷ Visible a página 84 del expediente

⁸⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Emmanuel Alonso López Bernal	26/febrero/2018 ⁸⁹	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 24 de febrero de 2014.	Afiliado Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018, ⁹⁰ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 24 de febrero de 2014, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, por la causal de depuración al no acudir a actualizar sus datos, pero no aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto” en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que **Sí se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Sinaí Navarro Aguilar	16/febrero/2018 ⁹¹	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al	Afiliado Mediante oficio RPAN2-0127/2018 de 23 de marzo de 2018, ⁹² el ente

⁸⁹ Visible a páginas 92 a 93 del expediente.

⁹⁰ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁹¹ Visible a página 115 del expediente.

⁹² Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			PAN desde el 09 de noviembre de 2005.	<p>político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 09 de noviembre de 2005, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Coahuila, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó “<i>en el año 2013 solicité mi baja y mi renuncia ha dicho Partido Político, realizando los trámites oportunos que señalan sus Estatutos, por lo que derivado de lo anterior solicité me fuera aclarada dicha situación de afiliación, contestando el partido mediante oficio de fecha 18 de enero del presente año que no me encontraba dentro del Padrón de registro nacional como militante</i>”, sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (16 de febrero de 2018), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>No obstante lo anterior, Sinaí Navarro Aguilar, no aportó documento que probara haber presentado su renuncia en 2013, es de concluirse que no se trató de una falta a la normativa electoral, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que no se aportaron elementos de prueba para demostrarlo.</p>				

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22,

párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar, que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento del quejoso para afiliarlo a su partido político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, conforme lo establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los

denunciantes se encontraron, al momento en que se realizó la investigación, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo reiterarse que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo solicitaron, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

En tanto que, el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Sin embargo, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifestaron no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido

político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

El estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace al ciudadano, que solicitó, de forma voluntaria su desafiliación al partido denunciado y, por otra parte, aquellos que acusan haber sido afiliados indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello.

Apartado A. Ciudadano sobre el que no se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado.

Respecto del ciudadano **Sinai Navarro Aguilar**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

- El ciudadano reconoce su afiliación al *PAN*.
- El ciudadano manifiesta que en el año dos mil trece presentó escrito de renuncia a la militancia al *PAN*; sin embargo, no presentó medio de prueba para acreditar su dicho.

Al respecto, en el caso en concreto, si bien el quejoso se inconforma por la omisión del *PAN* de cancelar su registro como militante en su padrón de afiliados, lo que se traduce en una violación a su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado, lo cierto es que tal supuesto de infracción no se actualiza en el particular.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Lo anterior, porque de constancias de autos se advierte, por una parte, que el ciudadano **reconoció haberse afiliado voluntariamente** a dicho instituto político, aportando documental en la que hace del conocimiento del Vocal Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Coahuila, que él *“no niega haber ejercido sus derechos fundamentales de participación ciudadana al ser militante de dicha entidad política en años anteriores al 2013”*; asimismo, que su supuesta renuncia al *PAN* la presentó en el año dos mil trece; sin embargo, no presentó ningún elemento de prueba para acreditar su dicho, tal y como pudiera ser el acuse de recepción del mismo, con lo cual evidenciaría, siquiera de manera indiciaría, la comisión de la conducta omisiva del partido político denunciado.

Al respecto, es importante precisar que, en el procedimiento administrativo sancionador electoral, entre otros principios, corresponde al quejoso aportar un mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral determinar si existen indicios sobre la comisión de los hechos denunciados.

En el particular, el quejoso manifestó que en el año dos mil trece presentó una supuesta renuncia a su militancia al *PAN*, sin que ofreciera y/o aportara algún medio de prueba a fin de corroborar su dicho, esto es, a fin de proporcionar a esta autoridad electoral indicios mínimos sobre la comisión de la conducta denunciada, consistente en la omisión del *PAN* de darlo de baja de su registro de militantes.

Lo anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**, de rubro ***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***

Es por ello que, en el particular, se considera que no se actualiza una violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad de desafiliación y, en consecuencia, tampoco se advierte. un uso indebido de datos personales del quejoso.

De ahí que el procedimiento, por cuanto hace a este ciudadano, deba declararse **INFUNDADO.**

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al PAN.

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **los ciudadanos que a continuación se citan**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PAN* y las documentales que éste aportó, no fueron apegadas a derecho.

No.	Quejoso
1	Linda Guadalupe Navarrete López
2	Mónica Ramírez Fortis
3	José Adolfo San Román Santiago
4	Francisco Javier Ruiz Cruz
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete
6	Andrés López Lujan
7	Alfredo Andrés Meza Luna
8	Carlos Ocaña Corte
9	Tomasa Alarcón Elox
10	Luis Fernando Nava Águila
11	Emmanuel Alonso López Bernal

Como se evidenció en el apartado anterior, el *PAN* aceptó que los *quejosos* militaron en esa fuerza política.

El partido político denunciado manifestó en sus escritos de catorce y veintiséis de marzo, veintisiete de junio y diez de julio del año en curso, que se encuentra imposibilitado para aportar las constancias de afiliación de los denunciantes, en razón de que las Comisiones de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y de Afiliación del Consejo Nacional, en sesiones ordinarias del nueve de agosto de dos mil trece y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, autorizaron al Director del Registro Nacional del Militantes para que realizara la destrucción del archivo muerto del área a su cargo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Para sustentar su dicho el partido político aporta copia simple del oficio CVRNM/2013/033,⁹³ suscrito por Emma Larios Gaxiola, coordinadora de la

⁹³ Visible en la página 271 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros a través del cual autoriza al mencionado Director la destrucción del archivo muerto; asimismo, anexa imágenes que documentan la citada destrucción; no obstante, con esos documentos no se acredita que se hayan destruido constancias de afiliación de los quejosos, de ahí que, no sean suficientes para acreditar el dicho del partido político denunciado.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

Por otra parte, el partido político denunciado señaló que los ciudadanos Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal causaron baja del padrón de militantes del *PAN*, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de la aplicación de los Acuerdos por los que se Autoriza el Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas Digitales implementado por el Registro Nacional de Militantes, en diversas entidades federativas, entre ellas Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas, Veracruz, Veracruz, Jalisco, Estado de México y, a las cuales corresponden, respectivamente, los citados ciudadanos, no obstante, el *PAN* se limitó a aportar copia simple de los citados acuerdos de los cuales se advierte el procedimiento para realizar la revisión, verificación, actualización, depuración y registro de datos y huellas digitales, sin embargo, de los mismos no se desprende ningún elemento que los vincule directamente con los quejosos a partir del cual se haga evidente que en acatamiento a esos acuerdos se dio de baja a los siete ciudadanos citados, de ahí que el partido político denunciado carece de elementos para acreditar su dicho en el presente procedimiento. Asimismo, aun cuando en los acuerdos referidos se hubiese precisado el nombre de dichos ciudadanos, el contenido de esos documentos, por sí mismos, únicamente acreditarían –de ser el caso- la baja de los ciudadanos en cuestión como militantes del partido y no que los mismos hayan sido afiliados con su consentimiento, de allí que las documentales exhibidas por el

partido incoado no resulten suficientes para acreditar que en estos casos se trató de afiliaciones indebidas.

Por otra parte, debe sostenerse que, en los casos de los ciudadanos Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte, si bien dicho partido aportó un documento en el que supuestamente aparece la manifestación de dichos ciudadanos de mantenerse afiliados a ese instituto político, lo cierto es que, por la fecha de elaboración de esas constancias –**veinte de febrero de dos mil diecisiete, veintiséis de enero de dos mil diecisiete, trece de julio de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecisiete, respectivamente**– resultan insuficientes por sí mismas, para acreditar militancias que, según constancias del expediente, datan desde el **veintiocho de enero de catorce, cuatro de febrero de catorce, tres de abril de dos mil catorce y treinta de octubre de dos mil seis**, respectivamente, y que fueron controvertidas por los denunciantes en sus escritos iniciales de queja.

En otras palabras, las afiliaciones indebidas que, respecto de Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte se atribuyen a *PAN*, corresponden al año dos mil catorce y dos mil seis, por lo que los documentos en los que se asienta que los quejosos actualizaron sus datos como militantes de ese partido político, y que corresponden al año dos mil diecisiete, en modo alguno desvirtúan la imputación.

Atento a lo anterior, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIFE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

En este sentido, toda vez que los **once** denunciantes niegan haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Ahora bien, por lo que respecta a Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal, cabe hacer mención que el *PAN* señaló que los citados ciudadanos causaron baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete, pero al respecto debe decirse que tal mención no se vincula con la *Litis*, ni resulta idónea para desvirtuar la conducta imputada, puesto que los quejosos se duelen de que fueron afiliados al partido político denunciado sin su consentimiento, sin que el partido denunciado haya aportado las constancias de afiliación de las que se desprenda que los quejosos manifestaron su conformidad para pertenecer a esa fuerza política, de ahí que resulta incontrovertible que las afiliaciones denunciadas incumplen con los requisitos legales.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **once ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PAN*, en los once casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, pues como en cada caso se detalló, las documentales aportadas resultan insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los siete quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe vincular al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de baja inmediatamente e informe lo anterior mediante oficio a la *DEPPP*, para que a su vez, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme a Derecho.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando

indebidamente datos personales—, respecto de los ciudadanos Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal, Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del *PAN*, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
político denunciado, que transgredió disposiciones de la Constitución, del COFIPE, la LGIPE y la LGPP.	los datos personales de once ciudadanos.	párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el PAN incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **once** ciudadanos quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin

que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PAN* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a) y n), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **once**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de dicho instituto político.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/01/2014
2	Mónica Ramírez Fortis	28/01/2014
3	José Adolfo San Román Santiago	24/02/2016
4	Francisco Javier Ruíz Cruz	04/02/2014
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	03/04/2014
6	Andrés López Lujan	03/04/2017
7	Alfredo Andrés Meza Luna	09/03/1998
8	Carlos Ocaña Corte	30/10/2006
9	Tomasa Alarcón Elox	02/08/2014
10	Luis Fernando Nava Aguilar	23/12/2013
11	Emmanuel Alonso López Bernal	24/02/2014

- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Ciudadano	Entidad
1	Linda Guadalupe Navarrete López	Sinaloa
2	Mónica Ramírez Fortis	Ciudad de México
3	José Adolfo San Román Santiago	Hidalgo
4	Francisco Javier Ruíz Cruz	Ciudad de México
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	Veracruz
6	Andrés López Lujan	Zacatecas
7	Alfredo Andrés Meza Luna	Veracruz
8	Carlos Ocaña Corte	Tlaxcala
9	Tomasa Alarcón Elox	Veracruz
10	Luis Fernando Nava Aguilar	Jalisco
11	Emmanuel Alonso López Bernal	México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN*, como cualquier otro partido político, está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 de la *LGPP*.
- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia político-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*; 2, párrafo 1, incisos a y b, y 25, incisos a y e, de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su**

configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos adujeron, en los casos a que se refiere el Apartado B, del Considerando TERCERO de esta Resolución, que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PAN*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **once ciudadanos**, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los

ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁹⁴

De lo expuesto se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que

⁹⁴ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PAN* afilió diversos ciudadanos sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió su voluntad de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.

- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PAN*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía⁹⁵.

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción

⁹⁵ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción consistente en la afiliación sin consentimiento de once ciudadanos atribuida al *PAN*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los once ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, o bien, su no desafiliación, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,⁹⁶ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

***SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS***

⁹⁶ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 456 de la *LGIFE*, lo procedente es imponer **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal, para los casos de Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal, de quienes se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen en el padrón de afiliados del denunciado.

No obstante, a fin de adoptar la postura, más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionados, es que para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE**

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.⁹⁷

En este mismo sentido, con base en el dispositivo antes precisado, se imponen sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, al partido político denunciado, **para el caso de José Adolfo San Román Santiago y Andrés López Lujan, respectivamente**, quienes también fueron afiliadas indebidamente.

Cabe precisar que igual sanción, ha sido impuesta por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación y de presentación de las renunciaciones, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 1998		
1	\$30.20	\$19,388.40
Afiliación en 2006		
1	\$48.67	\$31,246.14
Afiliación en 2013		

⁹⁷ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
1	\$64.76	\$41,575.92
Afiliación en 2014		
6	\$67.29	\$259,201.08
Afiliación en 2016		
1	\$73.04	\$46,891.68
Afiliación en 2017		
1	\$75.49	\$48,464.58
TOTAL		\$446,767.80 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización (con excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Sanción por ciudadano:

Ciudadano de quien se realiza la conversión a Unidades de Medida y Actualización, toda vez que su indebida afiliación fue anterior al año dos mil dieciséis:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMVG	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁹⁸	SANCIÓN A IMPONER
			A	B	C	D	(C*D)
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/01/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
2	Mónica Ramírez Fortis	28/01/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
3	Francisco Javier Ruiz Cruz	04/02/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
4	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	03/04/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
5	Alfredo Andrés Meza Luna	09/03/1998	642	\$30.20	\$80.60	240.55	\$19,388.33
6	Carlos Ocaña Corte	30/10/2006	642	\$48.67	\$80.60	387.66	\$31,245.39
7	Tomasa Alarcón Elox	02/08/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
8	Luis Fernando Nava Águila	23/12/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.89
9	Emmanuel Alonso López Bernal	24/02/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
TOTAL						\$351,409.49	

Ahora bien, para los dos ciudadanos quienes fueron afiliados indebidamente posterior a dos mil dieciséis, de quienes se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en ese año, corresponden las siguientes cantidades:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	José Adolfo San Román Santiago	24/02/2016	642	\$73.04	\$46,891.68
2	Andrés López Lujan	03/04/2017	642	\$75.49	\$48,464.58

⁹⁸ Cifra al segundo decimal

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que, respecto de la infracción cometida por el *PAN*, aun cuando causó un perjuicio al bien jurídico que el legislador buscó proteger, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de octubre de 2018
<i>PAN</i>	\$68, 993, 261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE OCTUBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68, 993, 261.00	\$916,721.00	\$68,076,540

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano⁹⁹
1998	\$19,388.33	1	0.02%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano¹⁰⁰
2006	\$31,245.39	1	0.04%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano¹⁰¹
2013	\$41,575.89	1	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano¹⁰²
2014	\$259,199.88	6	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano¹⁰³
2016	\$46,891.68	1	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano¹⁰⁴
2017	\$48,464.58	1	0.07%

⁹⁹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰⁰ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰¹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰² Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰³ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰⁴ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta a *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de agosto de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de agosto de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009¹⁰⁵, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. Conforme con lo razonado en la presente determinación, los doce denunciantes en el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer al *PAN*; en tal sentido, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, cancele el registro de los quejosos como sus militantes, en el supuesto que continúen en su padrón de afiliados, con independencia de que se haya determinado la acreditación o no de la infracción denunciada, y hecho lo anterior,

¹⁰⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

de inmediato lo informe a la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,¹⁰⁶ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso del denunciante.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de **Sinaí Navarro Aguilar**, en términos de lo establecido en el **Apartado A** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **once (11) ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado B** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa por la indebida afiliación de cada uno de los once (11) ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

¹⁰⁶ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Sanción a imponer
1	Linda Guadalupe Navarrete López	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve punto noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
2	Mónica Ramírez Fortis	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve punto noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
3	José Adolfo San Román Santiago	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$46,891.68 (Cuarenta y seis mil ochocientos noventa y uno pesos 68/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2016]
4	Francisco Javier Ruiz Cruz	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
6	Andrés López Lujan	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2017]
7	Alfredo Andrés Meza Luna	240.55 (doscientas cuarenta punto cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$19,388.33 (Diecinueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 33/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 1998]
8	Carlos Ocaña Corte	387.66 (trescientas ochenta y siete punto sesenta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$31,245.39 (Treinta y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 39/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2006]
9	Tomasa Alarcón Elox	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Sanción a imponer
10	Luis Fernando Nava Águila	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
11	Emmanuel Alonso López Bernal	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta al **Partido Acción Nacional**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Con independencia de lo fundado o infundado del asunto, se vincula al **Partido Acción Nacional**, que, de ser el caso que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, y para lo cual se solicita la colaboración de la *DEPPP* a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del partido político denunciado, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Notifíquese personalmente a Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis; José Adolfo San Román Santiago, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal y Sinaí Navarro Aguilar, así como al *PAN*, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1354/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
DENUNCIANTES: LAURA VILLASEÑOR
ZARAGOZA, MARCO ANTONIO CASTAÑEDA
AMEZCUA, JOSÉ DAVID NUÑEZ GODINEZ Y,
FANY WENDY TOLEDO BIELMA
DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DE MORENA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. Denuncias. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho,¹ se recibieron escritos de queja, a través de los que, Laura Villaseñor Zaragoza, Marco Antonio Castañeda Amezcua, José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida a MORENA y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin.

2. Registro, prevención, admisión y determinación del emplazamiento.² Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las denuncias planteadas, admitiéndose a trámite únicamente por lo que respecta a José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma, quedando registradas como un solo **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018**.

Lo anterior, en razón de que en dicho acuerdo se previno a los quejosos Laura Villaseñor Zaragoza y Marco Antonio Castañeda Amezcua, a fin de que presentaran escritos de queja de manera individual debidamente firmados por cada

¹ Visibles a páginas 1-5, 8-11 y 14-18, respectivamente del expediente

² Visibles a páginas 19-27 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

uno de ellos, en términos del artículo 10, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, en virtud de que su escrito primigenio de queja fue presentado de manera conjunta, calzando una firma, que a simple vista, se advertía que no pertenecía a ninguno de los citados ciudadanos, al compararse con los escritos anexos, consistentes en solicitudes de baja presentadas de manera individual al instituto político denunciado; apercibiéndoles que en caso de no atender dicha prevención, su escrito de queja se tendría por no presentado.

Acuerdo de prevención que fue notificado a los citados ciudadanos en los términos que se muestra a continuación:

Acuerdo de 17 de octubre de 2017			
No.	Denunciante	Oficio Fecha de notificación	Respuesta SI/NO
1	Laura Villaseñor Zaragoza	INE-UT/4686/2018 ³ 19/04/2018	NO
2	Marco Antonio Castañeda Amezcua	INE-UT/4687/2018 ⁴ 19/04/2018	NO

Asimismo, se reservó lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en tanto se culminará la etapa de investigación.

3. Acuerdo que hizo efectiva la prevención en contra de dos de los quejosos. Visto que los ciudadanos Laura Villaseñor Zaragoza y Marco Antonio Castañeda Amezcua, fueron omisos en desahogar la prevención ordenada por esta autoridad en acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, no obstante de haber sido notificados del mismo -como se muestra en el cuadro esquemático inmediato anterior- mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,⁵ se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que se les tuvo por no presentado su escrito de queja, **dejando en consecuencia de ser parte del presente procedimiento.**

³ Visible a páginas 40-52 del expediente

⁴ Visible a páginas 53-65 del expediente

⁵ Visible a páginas 109-113 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

4. Diligencias de investigación.⁶ Con el propósito de allegarse de los elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, en fecha diecisiete y treinta de abril, de dos mil dieciocho, se emitieron acuerdos en los que se requirió a la *DEPPP* y a MORENA, proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de los denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
17/04/2018	MORENA	INE-UT/4685/2018 ⁷	Solicitó prórroga Oficio REPMORENAINE-189/2018 ⁸
	<i>DEPPP</i>	INE-UT/4684/2018 ⁹	23/04/2018 ¹⁰ Correo institucional
30/04/2018	MORENA	INE-UT/5230/2017 ¹¹	07/05/2018 Oficio REPMORENAINE-231/2018 ¹²

5. Emplazamiento.¹³ El seis de junio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a MORENA, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
MORENA	INE-UT/8802/2018 ¹⁴	Citatorio: 7/junio/2018 Cédula: 8/junio/2018 Plazo: 11 al 15 de junio de 2018	Escrito 13/junio/2018 ¹⁵

⁶ Visibles a páginas 19-27 y 88-90, respectivamente, del expediente

⁷ Visible a páginas 36-38 del expediente

⁸ Visible a página 79 del expediente

⁹ Visible a página 39 del expediente

¹⁰ Visible a páginas 118-119

¹¹ Visible a páginas 93-101 del expediente

¹² Visible a páginas 103-107 del expediente

¹³ Visible a páginas 142-148, legajo 1 del expediente

¹⁴ Visible a páginas 154-166 del expediente

¹⁵ Visible a páginas 168-173 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

6. Alegatos.¹⁶ El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, inclusive se les corrió traslado a los denunciantes José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma, con los anexos exhibidos por el instituto político denunciado en su escrito presentado el siete de mayo del año en curso, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos Síntesis
Denunciantes			Escrito ¹⁸ 03/julio/2018
Fany Wendy Toledo Bielma	INE- UT/10363/2018 ¹⁷	Citatorio: n/a Cédula: 27/junio/2018 Plazo: 28 de junio al 4 de julio de 2018	Manifestó su inconformidad a la respuesta formulada por MORENA, en donde informa que estoy suscrita a dicho partido político, sin embargo, no demuestra mi voluntad de pertenecer al mismo, ya que no hay ninguna credencial de elector ni firma de la suscrita, con lo que se demuestra que se me afilio sin mi consentimiento y que hay mal uso de mis datos personales, solicitando su baja del citado instituto político.
José David Núñez Godínez	INE/GTO/JDE01 -VS/1542/2018 ¹⁹	Cédula: 27/junio/2018 Plazo: 28 de junio al 4 de julio de 2018	Sin respuesta
Denunciado			Oficio s/n ²¹ 30/junio/2018
MORENA	INE- UT/10362/2018 ²⁰	Citatorio: n/a Cédula: 26/junio/2018 Plazo: 27 de junio al 3 de julio de 2018	Negó las imputaciones hechas en su contra, en virtud de que los quejosos se abstienen de aportar pruebas suficientes que acrediten su dicho, ya que al ser una entidad de interés público, su actuar es de buena fe, máxime si se toma en cuenta que el registro de afiliación llevado a cabo por dicho instituto político puede realizarse vía electrónica, el cual es de

¹⁶ Visible a páginas 174-177 del expediente

¹⁷ Visible a páginas 189-193 del expediente

¹⁸ Visible a página 208 del expediente

¹⁹ Visible a páginas 202-206 del expediente

²⁰ Visible a páginas 184-188 del expediente

²¹ Visible a páginas 195-200 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos Síntesis
			libre acceso a la ciudadanía, por lo que todo ciudadano que se registra por dicha vía, como en el caso acontece, lo hace en ejercicio de su derecho y libertad de elegir, por lo que se deduce que la afiliación de los hoy quejosos debió ser voluntaria.

7. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución.

8. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos

personales, por parte de MORENA, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a MORENA, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²² en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que el registro o afiliación de los quejosos a MORENA se realizó antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el año de **dos mil trece**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,²³ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si MORENA afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

²³ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35,

fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil

²⁴ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

²⁵ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. *Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

1. *Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

a. *En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*

b. *El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y

- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LG/PE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.

- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MORENA

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna de MORENA, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos y Reglamento de Afiliación, en los términos siguientes:²⁶

Estatutos de MORENA

Artículo 3°. *Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos:*

...

²⁶ Consultable en la página de internet de MORENA, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/morena>

g. La afiliación será **individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole**; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general;

...

Artículo 4º. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. **La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud.** No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 4º Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; **cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.**

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero **se constituye con las afiliaciones** de los Protagonistas del Cambio Verdadero **y su organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización** del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

...

Artículo 13º Bis. MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley.

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos casos.

Artículo 15º. La afiliación de protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren ante cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro nacional de comités de Protagonistas.

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel municipal, estatal o nacional.

Reglamento de Afiliación de MORENA

...

Artículo 4. *La afiliación a MORENA será individual, libre, pacífica y voluntaria; quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.*

ARTÍCULO 5. *La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo:*

- a) El nombre y apellidos de la persona que se afilia;*
- b) Fecha de afiliación;*
- c) Domicilio completo;*
- d) Clave de elector;*
- e) Correo electrónico;*
- f) Sección electoral;*
- g) Código postal;*
- h) Teléfono;*
- i) Firma del solicitante.**
- j) CURP en el caso de los menores de 18 años*

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- A MORENA podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de MORENA, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el MORENA), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar

la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017,²⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁹ y como estándar probatorio.³⁰

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²⁹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁰ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho

contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**³² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE

³² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**³³

³³ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**³⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**³⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**³⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**³⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**³⁸

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,³⁹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que*

³⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

³⁵ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

³⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

³⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

³⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

³⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

*se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁴⁰ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.***

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para

⁴⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón de MORENA, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁴¹	Manifestaciones del Partido Político ⁴²
1	José David Núñez Godínez	26/Marzo/2018 ⁴³	Afiliado 30/01/2013	Afiliado 30/01/2013

⁴¹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 118-119 del expediente

⁴² Oficio REPMORENAINE-231/2018 de MORENA, visible a páginas 103-107 del expediente

⁴³ Visible a páginas 8-11 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁴¹	Manifestaciones del Partido Político ⁴²
				Informó que el ciudadano sí es su afiliado, ya que el mismo se encuentra dado de alta en el padrón de militantes. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i> .
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁴	Manifestaciones del Partido Político ⁴⁵
2	Fany Wendy Toledo Bielma	26/Marzo/2018 ⁴⁶	Afiliado 13/04/2013	Afiliado 13/04/2013 Informó que la ciudadana sí es su afiliada, ya que la misma se encuentra dada de alta en el padrón de militantes. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i> .
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas

⁴⁴ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a páginas 118-119 del expediente

⁴⁵ Oficio REPMORENAINE-231/2018 de MORENA, visible a páginas 103-107 del expediente

⁴⁶ Visible a páginas 14-18 del expediente

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está

reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de MORENA.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciantes, se encontraron, como afiliados de MORENA, **con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.**

Por otra parte, MORENA no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación clara e inequívoca de voluntad libre e individual de los ciudadanos.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde a MORENA, en tanto que el dicho de los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento

para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar mediante los medios idóneos esa situación.

Por el contrario, su defensa consistió en afirmar que el partido actúa de buena fe, y que sus registros pueden realizarse por vía electrónica por lo que la afiliación de los quejosos **debió ser voluntaria**, sin aportar elemento alguno por el cual se pueda determinar que en efecto existió consentimiento de los ciudadanos en cuestión.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como

garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación

de todos, y que MORENA, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto consistirá en determinar si en el caso en concreto, se violentó el derecho de libre afiliación de los quejosos.

Ahora bien, como ha quedado precisado MORENA reconoció la afiliación de los quejosos José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma, de quienes la *DEPPP* los encontró registrados en el padrón del denunciado, con estatus afiliación válida, con fecha de afiliación treinta de enero y trece de abril, ambos de dos mil trece, respectivamente.

En razón de lo anterior, no pasa inadvertido para esta autoridad, que la afiliación de los referidos ciudadanos, hoy quejosos, aconteció en una temporalidad en la cual MORENA aún no obtenía su registro como Partido Político Nacional.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para eximirla de la responsabilidad que se le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, los datos de afiliación de esos ciudadanos se obtuvieron del padrón de afiliados que la entonces asociación civil Movimiento Regeneración Nacional presentó a esta autoridad electoral nacional con el propósito de obtener su registro como Partido Político Nacional, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de los denunciantes en comento fue anterior a la obtención de registro como partido político de MORENA, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a partir del uno de agosto siguiente,⁴⁷ lo cierto es que estos registros de agremiados fueron los que en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento

⁴⁷ Resolución del Consejo General INE/CG94/2014

Regeneración Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los supuestos simpatizantes de MORENA, como Partido Político Nacional.

En efecto, tomando en consideración que en el momento en que ocurrieron las afiliaciones denunciadas, MORENA se encontraba en proceso de constitución y registro como partido político,⁴⁸ resulta aplicable lo previsto en los artículos 27 párrafo 1, inciso b) y 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del COFIPE, relativos al libro Segundo, denominado *DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS en los que a la letra se establece lo siguiente:*

Artículo 27 1. Los Estatutos establecerán:

...
*b) Los procedimientos para la **afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros**, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;*

Artículo 28 1.- Para constituir un Partido Político Nacional, la Agrupación Política Nacional interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 Distritos Electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral, quien certificará:

*I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos; **y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;** y*

De lo anterior se obtiene que, en efecto, el legislador previó que los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica, debían establecerse en los Estatutos de los partidos políticos, asimismo, atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos invocados, se advierte la obligación de la presentación de una manifestación formal de afiliación suscrita por los entonces afiliados a los partidos políticos en constitución.

⁴⁸ El 09 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG94/2014, el Consejo General de este Instituto, resolvió sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional A.C., otorgándole el registro como partido político denominado MORENA.

En ese sentido, el *Consejo General*, aprobó el Acuerdo CG776/012,⁴⁹ por el cual expidió el Instructivo que deberían observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, y al cual se sujetó MORENA, mismo que en su numeral 44 refiere:

44. Las manifestaciones de solicitud de registro, deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en formación;*
- b) En tamaño media carta;*
- c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;*
- d) Ordenadas alfabéticamente y por estado;*
- e) Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad federativa, clave de elector, **firma autógrafa o huella digital del ciudadano**;*
- f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político; y*
- g) Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda:*
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como Partido Político Nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2013-2014. Reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.”
- h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.*

En conclusión, si bien dichos ciudadanos aparecen como afiliados con fecha anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como Partido Político Nacional, circunstancia por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.

⁴⁹ Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil trece

Bajo ese contexto, el partido político denunciado, debe contar con la documentación soporte que justifique la debida afiliación de los quejosos, en la que conste la manifestación de su voluntad, en tanto que se encuentra obligado conservarla y resguardarla, puesto que se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y por tanto el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios exigidos.

Lo anterior en razón de que, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que, MORENA argumentó que los hoy quejosos se encontraban registrados en su padrón de afiliados denominado *Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero*; situación que fue corroborada por la DEPPP.

Ahora bien, con la finalidad de sustentar su dicho, el partido político denunciado adjuntó copias certificadas de comprobantes electrónicos signados por el Secretario de Organización Nacional de dicho partido político, de los cuales se desprende el nombre de cada uno de los quejosos, su clave de elector, la fecha de expedición de dicho comprobante, un número de identificación *ID*, así como una firma electrónica, consistente en una clave alfanumérica; lo anterior, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna, sin embargo, dichos comprobantes carecen de la firma autógrafa de los referidos ciudadanos.

En concepto de esta autoridad electoral, tales pruebas son insuficientes para sustentar la debida afiliación de los ciudadanos denunciados, toda vez que los comprobantes electrónicos presentados por el denunciado, carecen de la firma respectiva, u otro elemento del que se desprenda de forma inequívoca la manifestación de la voluntad de los quejosos, pues el hecho de que carezcan de ese requisito, impide demostrar la libre afiliación de los ciudadanos referidos.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra

documentación establecida en la normatividad de MORENA en materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

No obstante, esta autoridad considera que tales pruebas son insuficientes para sustentar la debida afiliación, puesto que, se reitera, los *comprobantes electrónicos de afiliación* carecen de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a las mismas, pues el hecho de que se carezca de ese requisito, impide demostrar la libre afiliación de los ciudadanos, porque la rúbrica o firma autógrafa del solicitante, es el elemento que, por antonomasia, respalda la presencia manifiesta de la voluntad del afiliado y, por ello, ese dato constituye un elemento esencial.

A mayor abundamiento, el partido político denunciado, no acreditó que la afiliación de los ciudadanos se haya llevado conforme a lo prevé su normativa interna, por lo siguiente:

- El artículo 15 de los Estatutos de MORENA establece que, para afiliarse a dicho instituto político, *podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA*
- Asimismo, el dispositivo 4 prevé que **quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.**
- Por su parte, el artículo 4 Bis señala que, para poder afiliarse a dicho partido político, las personas que así lo deseen hacer, al momento de solicitar su registro, ***deberán presentar su credencial para votar con fotografía.***
- Finalmente, el precepto 5, del Reglamento de Afiliación de MORENA dispone que *la afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, el cual contendrá como mínimo, entre otros datos, la **firma del solicitante.***

Con base en lo anterior, es claro que MORENA establece ciertos requisitos específicos de afiliación, para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, tanto la exhibición de la credencial para votar con fotografía del ciudadano interesado en su inscripción como militante, así como la firma autógrafa de éste en el formato respectivo; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en los casos que se analizan no fueron cumplidos por MORENA, tal y como lo establece su propia legislación interna.

No pasa inadvertido para esta autoridad, que si bien, como lo señala el denunciado, la afiliación de estos ciudadanos se realizó a través de internet, lo cual efectivamente está permitido en su normativa, lo cierto es que no acreditó que ninguno de los denunciados haya acudido ante la instancia correspondiente dentro de la circunscripción de su lugar de residencia para ratificar dicha voluntad de afiliación, a través del llenado y firma correspondiente de la cédula de afiliación respectiva, ni mucho menos, que hayan presentado su credencial para votar al momento de registrarse; lo cual también es obligación, en términos de las disposiciones internas del partido a que se ha hecho referencia en el apartado correspondiente.

No obsta a lo anterior que el partido político denunciado argumentara que *“debido a que el registro de afiliación al instituto político que represento es vía electrónica, carecemos de documentación y/o expediente respecto de la solicitud de afiliación”*, sin embargo, ello no es razón suficiente para relevarlo de la carga probatoria de exhibir la documentación necesaria e idónea para acreditar que los ciudadanos denunciados otorgaron su consentimiento, pues a través de las constancias electrónicas que ofreció no se advierte en forma alguna que los ciudadanos hubieran dado su consentimiento para aparecer en el padrón de militantes de dicho partido político.

Ahora bien, como se ha mencionado en el presente asunto, la carga de la prueba para acreditar la debida afiliación de los quejosos, recae directamente en los partidos políticos, en este caso, en MORENA, quien durante la secuela del presente procedimiento se concretó a afirmar que en virtud de que el registro de afiliación a ese instituto político puede llevarse a cabo por vía electrónica, el cual es de libre

acceso a la ciudadanía, **deducía**, que la afiliación de los hoy quejosos debió ser voluntaria y, a pesar de que tuvo las oportunidades procesales suficientes para demostrar su dicho, faltó a la carga procesal que el impone el artículo 15 párrafo segundo de la *LGSMI*, de aplicación supletoria en el presente caso.

En efecto, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que durante la sustanciación del procedimiento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en estricta observancia del derecho de audiencia y defensa que le asiste a las partes en un procedimiento sancionador, en términos del artículo 14 constitucional, emplazó en un primer momento a MORENA, a fin de que se opusiera al procedimiento manifestando lo que a su interés conviniera **y otorgándosele el derecho a ofrecer las pruebas de su dicho**; sin embargo, de la contestación rendida por éste, se advierte que no exhibió constancias donde se plasmara la manifestación de voluntad de los quejosos, es decir, que estuvieran firmadas o tuvieran la huella digital de los mismos, limitándose a expresar que el registro se puede realizar por vía electrónica, situación, que a consideración de esta autoridad, por sí misma, no puede tener como consecuencia que se le exima de la responsabilidad que en este procedimiento se le atribuye.

Similar situación, aconteció con la vista de alegatos, que le fue concedida; por tanto, se concluye como ya se ha citado, que MORENA tuvo todas las garantías procesales para demostrar con documentación idónea, la libre y voluntaria afiliación de los quejosos que controvierten su inscripción a ese partido, sin que acreditara su legal proceder.

Bajo esta lógica, carecen de valor, para efectos de acreditar la voluntad de los hoy quejosos, la exhibición de formatos electrónicos presuntamente provenientes de afiliaciones realizadas por los denunciantes por Internet, habida cuenta que, como se ha advertido, para que la afiliación se considere válida, se necesita, entre otras cuestiones, el documento en donde conste la voluntad libre del ciudadano de querer incorporarse a un partido, a través de la signature de la cédula de afiliación correspondiente, lo cual no se demostró en la presente causa

En otro orden de ideas, los ciudadanos en su escrito inicial de queja, refirieron desconocer su afiliación a MORENA en todo momento, es decir, que nunca

manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho partido político; asimismo, en la vista que se les concedió para formular alegatos, Fany Wendy Toledo Bielma, reitero su desconocimiento de haberse afiliado a ese instituto político.

Sin embargo, en momento alguno proporcionó el material soporte de sus expedientes en donde acreditara que la afiliación que se llevó a cabo, fue de manera libre y voluntaria por parte de los denunciantes; lo anterior, en términos del artículo 4 Bis, de los Estatutos del partido denunciado, que establece que el resguardo y autenticación del padrón de afiliados, estará a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

Es decir, dicho instituto político incumplió con la carga de probar con algún elemento de convicción el acto volitivo por el cual, esos ciudadanos decidieron libremente pertenecer a dicho instituto político, pues se limita a adjuntar comprobantes electrónicos de afiliación, los cuales por sí mismos, no son idóneos para acreditar que se haya llevado a cabo una debida afiliación.

Con lo anterior, es claro que el denunciado tenía la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que constara y se pruebe ese hecho.

En consecuencia, también tenía el deber de conservar y resguardar, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios, lo que en el caso no ocurrió.

Más aún, conforme al procedimiento de afiliación previamente establecido, es claro que MORENA no acreditó con los documentos idóneos que la afiliación de los denunciantes, se haya realizado conforme a su normativa, es decir, no exhibió ni la credencial para votar de estos, ni mucho menos, el comprobante donde constara la

firma autógrafa de cada uno de ellos, para constatar que, efectivamente, medió su voluntad para ser agremiados de ese ente, tal y como en vía de alegatos lo argumento la quejosa Fany Wendy Toledo Bielma.

Por tanto, la conducta del partido no se justifica con la sola aseveración de que los ciudadanos quejosos se incorporaron de *forma libre y sin presión alguna*; lo anterior, porque el partido denunciado no demostró con algún elemento de prueba idónea que los ciudadanos hubiesen realizado actos tendientes a una afiliación voluntaria. Máxime, que los quejosos manifestaron que en ningún momento otorgaron su consentimiento para estar afiliados.

Por lo que se considera que dicho actuar vulneró el derecho de libre afiliación de los quejosos, toda vez que era responsabilidad de ese partido político el demostrar que esas inscripciones a su padrón electoral, fueron consecuencia de la voluntad propia de cada uno de los denunciantes.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que MORENA infringió las disposiciones electorales tendientes a demostrar la libre afiliación, de los hoy quejosos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de éstos para ser agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados a MORENA, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, MORENA, en los **dos casos** analizados, no aportó medios idóneos para demostrar que para llevar a cabo las afiliaciones medió el consentimiento libre y voluntario de los ciudadanos o, en su caso, en los que se hiciera constar que estos dieron su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos

obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado a MORENA, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados a MORENA en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MORENA implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los hoy quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de los ciudadanos inconformes para solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstos al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara **fundado** el presente procedimiento en contra de MORENA, por la indebida afiliación de los hoy quejosos José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma.

Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,⁵⁰ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente.

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad o no al partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar

⁵⁰ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los hoy quejosos es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar a MORENA para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que lo anterior, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad de MORENA, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
MORENA	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión, disposiciones que se encuentran replicadas en diversos dispositivos de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 2 ciudadanos por parte de MORENA.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que MORENA incluyó en su padrón de afiliados, a **dos** ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos

de inscribirse, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto.

Por otra parte, como se analizó, y dado que en el caso concreto que nos ocupa, no se demostró la voluntad de los hoy quejosos de pertenecer como afiliados a MORENA, se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que para tal supuesto, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada ciudadano para ser afiliado, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente a MORENA.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MORENA transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, en concreto de dos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación instituto político denunciado, quien

incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MORENA, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **dos** ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer o seguir perteneciendo a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los hoy quejosos, la misma aconteció en dos mil trece, como se muestra en la tabla siguiente:

No.	Quejoso o Quejosa	Fecha de afiliación proporcionada por la <i>DEPPP</i>
1	José David Núñez Godínez	30/01/2013
2	Fany Wendy Toledo Bielma	13/04/2013

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas a MORENA se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadanos	Entidad
1	José David Núñez Godínez	Guanajuato
2	Fany Wendy Toledo Bielma	Ciudad de México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte de MORENA, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- MORENA es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- MORENA está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, replicado en el diverso 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos adujeron, que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes a MORENA; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes de MORENA con estatus válido, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien precisó que, derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar que contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciados.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun

indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MORENA, se cometió al afiliar indebidamente a **dos** ciudadanos y, sin demostrar el acto volitivo de éstos, de ingresar en sus padrones de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁵¹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MORENA, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

⁵¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que MORENA afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados de MORENA.

- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte de MORENA.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió MORENA como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁵²

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo

⁵² Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por MORENA se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente a MORENA fue únicamente de dos.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MORENA, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los dos ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y

dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁵³ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

⁵³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno precisar que en el caso concreto, hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a MORENA, **por cada uno de los dos ciudadanos, que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el Estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.⁵⁴

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde, por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

CIUDADANOS QUE FUERON AFILIADOS INDEBIDAMENTE		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2013		
2	\$64.76	\$83,151.84
TOTAL		\$83,151.84
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$ 80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).⁵⁵

⁵⁴ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

⁵⁵ Consultable en la liga electrónica <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

En consecuencia, a MORENA se habrá de aplicar una sanción por cada uno de los ciudadanos, como se precisa enseguida:

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁵⁶	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁵⁷
			A	B	C	D	
1	José David Núñez Godínez	30/01/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.92
2	Fany Wendy Toledo Bielma	13/04/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.92
TOTAL				\$83,151.84			

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MORENA constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte de MORENA, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

⁵⁶ Cifra al segundo decimal

⁵⁷ *Idem*

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, MORENA recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
MORENA	\$34'576,203

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE MULTAS Y SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
MORENA	\$34'576,203.00	\$1,995'762.54	\$32'580,440.46

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MORENA, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, son los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano⁵⁸
2013	\$41,575.92	2	0.12%

⁵⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta a MORENA no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por MORENA (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁵⁹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a MORENA, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia,

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁶⁰ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁶¹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de **MORENA**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **dos ciudadanos**, en términos de lo establecido en el numeral 5, del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone a **MORENA**, **una multa por la indebida afiliación de cada uno de los dos ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

⁶¹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LVZ/CG/88/2018

No.	Quejoso	Sanción a imponer
1	José David Núñez Godínez	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
2	Fany Wendy Toledo Bielma	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a **MORENA**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula a **MORENA** para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEXTO. **Notifíquese personalmente**, a José David Núñez Godínez y Fany Wendy Toledo Bielma, por **oficio**, a **MORENA**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1355/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTES: JUDITH GARCÍA DÍAZ Y
OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR DIVERSAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
<i>IFE</i>	Instituto Federal Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron seis escritos de queja signados por igual número de ciudadanas y ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin:

No	Quejoso	Fecha de presentación
1	Judith García Díaz	02/05/2018 ¹

¹ Visible a páginas 1-9 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

No	Quejoso	Fecha de presentación
2	Irvin Iram Báez Pérez	03/05/2018 ²
3	Francisco Javier Muñoz Franco	07/05/2018 ³
4	Salvador Muñoz Méndez	10/05/2018 ⁴
5	Álvaro Nicolás Serrano	11/05/2018 ⁵
6	Graciela Peña Sahagún	15/05/2018 ⁶

2. Registro, admisión, determinación del emplazamiento y diligencias de investigación.⁷ Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las denuncias planteadas, quedando radicadas en el **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018**, de las cuales cuatro fueron admitidas a trámite.

Asimismo, se reservó lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en tanto se culminara la etapa de investigación.

Cabe señalar, que en dicho acuerdo se realizó requerimiento de información a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Local Ejecutiva en la Ciudad de México y 01 Distrital Ejecutiva en el Estado de México, así como a los ciudadanos Francisco Javier Muñoz Franco y Álvaro Nicolás Serrano, a efecto de que adjuntaran el original del escrito de queja, toda vez que de la revisión a las constancias que obraban en el expediente se advirtió que únicamente se contaba con copias simples de los escritos de queja.

El referido proveído fue notificado de la siguiente manera:

Sujeto requerido	Oficio/correo	Fecha de Respuesta
Junta Local Ejecutiva Ciudad de México	24/05/2018 Correo Institucional ⁸	06/06/2018 Oficio INE/JLE-CM/05368/2018 ⁹

² Visible a páginas 10-16 del expediente.

³ Visible a páginas 17-23 del expediente.

⁴ Visible a páginas 24-30 del expediente.

⁵ Visible a páginas 31-37 del expediente.

⁶ Visible a página 38-43 del expediente.

⁷ Visibles a páginas 44-53 del expediente.

⁸ Visible a páginas 55-56 del expediente.

⁹ Visible a páginas 141-158 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Sujeto requerido	Oficio/correo	Fecha de Respuesta
Francisco Javier Muñoz Franco	INE/02JDE CM/01488/2018 ¹⁰	No desahogó el requerimiento
01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México	24/05/2018 Correo Institucional ¹¹	07/06/2018 Oficio INE-JDE01-MEX/VS/1944/2018 ¹²
Álvaro Nicolás Serrano	Se notificó por comparecencia el 05/06/2018 ¹³	05/06/2018 Escrito original de queja ¹⁴

Finalmente, y con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la *DEPPP* y al *PAN*, para que proporcionaran información relacionada con la presunta indebida afiliación de Judith García Díaz, Irvin Iram Báez Pérez, Salvador Muñiz Méndez y Graciela Peña Sahagún, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/7806/2018 ¹⁵	29/05/2018 Oficio RPAN-0321/2018 ¹⁶
<i>DEPPP</i>	INE-UT/7807/2018 ¹⁷	25/05/2018 Correo institucional ¹⁸

3. Desahogo de requerimiento, omisión de dar respuesta y requerimientos de información.¹⁹ Por acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, la *UTCE* tuvo por desahogado el requerimiento de información formulado a Álvaro Nicolás Serrano, por omiso a Francisco Javier Muñoz Franco, respecto de la prevención formulada y por lo tanto se tuvo por no presentada su queja.

¹⁰ Visible a página 143 del expediente.

¹¹ Visible a página 55-56 del expediente.

¹² Visible a páginas 165-169 del expediente.

¹³ Visible a página 166 del expediente.

¹⁴ Visible a página 168 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 60-63 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 66-68 del expediente.

¹⁷ Visible a página 59 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 64-65 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 185-195 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

En el mismo proveído se ordenó requerir al *PAN* y a la *DEPPP*, a efecto de proporcionaran información relacionada con la presunta indebida afiliación de Álvaro Nicolás Serrano, requerimiento que fue desahogado conforme a lo siguiente:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/10006/2018 ²⁰	25/06/2018 Oficios RPAN-0450/2018 ²¹ RPAN-0461/2018 ²²
<i>DEPPP</i>	INE-UT/10007/2018 ²³	22/06/2018 Correo institucional ²⁴

4. Emplazamiento.²⁵ El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar al *PAN*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PAN</i>	INE-UT/11993/2018 ²⁶	Citatorio: 27/07/2018 Cédula: 30/07/2018 Plazo: 31 de julio al 06 de agosto de 2018	Oficio RPAN-0776/2018 ²⁷ 07/08/2018

²⁰ Visible a páginas 200-203 del expediente.

²¹ Visible a páginas 207- 209 del expediente.

²² Visible a páginas 210-211 del expediente.

²³ Visible a página 204 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 205-206 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 229-236 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 257-260 del expediente.

²⁷ Visible a páginas 249-256 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

5. Alegatos.²⁸ El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
Judith García Díaz	INE- UT/12818/2018 ²⁹	Notificación: Cédula 04/09/2018 Plazo: 05/09/2018 al 11/09/2018	Sin respuesta
Irvin Iram Báez Pérez	INE- PUE/JD07/VSD/ 2507/2018 ³⁰	Notificación: Cédula 29/08/2018 Plazo: 30/08/2018 al 05/09/2018	Sin respuesta
Salvador Muñiz Méndez	INE-JDE07- MEX/VS/0592/2 018 ³¹	Notificación: Cédula 30/08/2018 Plazo: 31/08/2018 al 06/09/2018	Sin respuesta
Álvaro Nicolás Serrano	INE/JDE01/VE/2 866/2018 ³²	Notificación: Cédula 29/08/2018 Plazo: 30/08/2018 al 05/09/2018	Sin respuesta
Graciela Peña Sahagún	INE-JAL-JD08- VS-923-2018	Notificación: Cédula 30/08/2018 Plazo: 31/08/2018 al 06/09/2018	Sin respuesta
Denunciado	INE- UT/12817/2018 ³³	Notificación: Cédula 29/08/2018 Plazo: 30/08/2018 al 05/09/2018	Oficio RPAN-0844/2018 ³⁴ 05/09/2018
PAN			

6. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución.

²⁸ Visible a páginas 50-52 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 285-289 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 294-303 del expediente.

³¹ Visible a páginas 313 a 322 del expediente.

³² Visible a páginas 272-284 del expediente.

³³ Visible a páginas 262-269 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 290-293 del expediente.

7. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, fracción 1, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de las y los denunciados.

Ahora bien, conforme al artículo 23, del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al *IFE* —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

obligaciones señaladas en el artículo 38, del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libre afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,³⁵ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de la ciudadanía a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de la ciudadanía.

³⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas, en los casos de Judith García Díaz, Irvin Iram Báez Pérez, Álvaro Nicolás Serrano y Graciela Peña Sahagún, se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que su registro o afiliación al *PAN* se realizó antes del veinticuatro de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los *Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,³⁶ respecto de las y los ciudadanos referidos anteriormente, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por las y los quejosos, y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

³⁶ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

Bajo ese orden de ideas, si tomamos en consideración que la afiliación del ciudadano Salvador Muñiz Méndez, se realizó con posterioridad al día veinticuatro de mayo de dos mil catorce, fecha en que inició la vigencia de la *LGIFE*, lo jurídicamente conducente es que se aplique dicha normatividad.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a las y los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para que esto ocurriera, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, toda y todo ciudadano mexicano tienen derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de la ciudadanía para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.³⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente la ciudadanía puede afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

³⁷ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de las y los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada uno de ellos, complementando el artículo 35, fracción III de la *Constitución*, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de la ciudadanía, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la

³⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de la ciudadanía para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las y los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

***b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renunciar a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano o ciudadana en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de la ciudadanía, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de la ciudadanía, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano o ciudadana estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los soportes necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que la ciudadanía goce de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que las y los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PAN, para lo cual, enseguida se

transcribe la parte conducente de sus Estatutos y Reglamento de Afiliación, en los términos siguientes:³⁹

Estatutos del Partido Acción Nacional

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;**
- b) Tener un modo honesto de vivir;**
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;**
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.**

...

Artículo 12

1. Son obligaciones de los militantes del Partido:

...

- g) Mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Militantes, informando su cambio de domicilio, conforme a los datos registrados en el Instituto Nacional Electoral**

³⁹ Consultable en la página de internet del Partido del Trabajo, o bien en la dirección electrónica: <http://partidodeltrabajo.org.mx/estatutos.php#iv>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional⁴⁰

Artículo 1. *El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.*

Artículo 2. *El presente Reglamento norma lo siguiente:*

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja
...

Artículo 4. *Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:*

...
XXI. REFRENDO. *Manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicables*
...

Artículo 8. *Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.*

Artículo 9. *La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación.*
...

Artículo 12. *Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:*

⁴⁰ Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales.

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción.

En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.

...

Artículo 37. *Es obligación de los militantes del Partido comunicar al Comité Directivo Municipal o Delegacional, Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que les corresponda, o en forma directa al Registro Nacional de Militantes, mediante los formatos autorizados, el trámite de cambio de domicilio o actualización de datos de la Credencial para Votar con Fotografía expedida por el Registro Nacional de Electores, presentando copia de la nueva credencial.*

...

Artículo 72. *Los militantes causarán baja del Padrón por los siguientes motivos:*

...

VIII. *Falta de refrendo.*

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al PAN podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.

- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados por falta de refrendo, entendiendo esto como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señale el Estatuto, Reglamentos y Acuerdos aplicables.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que las y los ciudadanos en cuestión acudieron a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁴¹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁴² el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁴³ y como estándar probatorio.⁴⁴

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴⁵ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

⁴¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁴² Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁴³ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁴⁴ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁴⁵ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441, de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en alguna queja que de lugar al procedimiento ordinario sancionador la persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por las y los quejosos, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada una de los denunciados, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como de las conclusiones que en cada caso, fueron advertidas:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Judith García Díaz		
Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP⁴⁶	Manifestaciones del Partido Político⁴⁷
02/05/2018 ⁴⁸	Informó que la denunciante apareció como afiliada del PAN desde el 09/01/2014	Fue afiliada Informó que la ciudadana causó baja del padrón de militantes el 15/11/2017
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que la denunciante fue militante del PAN , y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político y esté no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida .		

Álvaro Nicolás Serrano		
Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP⁴⁹	Manifestaciones del Partido Político⁵⁰
11/05/2018 ⁵¹	Informó que el denunciante apareció como afiliado del PAN desde el 17/11/2011	Fue afiliado Informó que el ciudadano causó baja del padrón de militantes el 15/11/2017
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que el denunciante fue militante del PAN , y que el citado ciudadano negó haberse afiliado al referido instituto político y esté no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida .		

⁴⁶ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 64-65 del expediente.

⁴⁷ Oficio RPA2-0321/2018 del PAN, visible a páginas 66-68 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 1-9 del expediente.

⁴⁹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 205-206 del expediente.

⁵⁰ Oficio RPA2-0450/2018 del PAN, visible a páginas 207-209 del expediente.

⁵¹ Visible a páginas 31-37 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Salvador Muñiz Méndez		
Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP⁵²	Manifestaciones del Partido Político⁵³
10/05/2018 ⁵⁴	Informó que el denunciante apareció como afiliado del PAN desde el 30/07/2014	Fue afiliado Informó que el ciudadano causó baja del padrón de militantes el 15/11/2017
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que el denunciante fue militante del PAN , y que el citado ciudadano negó haberse afiliado al referido instituto político y esté no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida .		

Graciela Peña Sahagún		
Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP⁵⁵	Manifestaciones del Partido Político⁵⁶
15/05/2018 ⁵⁷	Informó que la denunciante apareció como afiliada del PAN desde el 12/06/2005	Fue afiliada Informó que la ciudadana causó baja del padrón de militantes el 15/11/2017
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que la denunciante fue militante del PAN , y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político y esté no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida .		

⁵² Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 19-21 del expediente

⁵³ Oficio RPAN2-0321/2018 del PAN, visible a páginas 66-68 del expediente.

⁵⁴ Visible a páginas 24-30 del expediente.

⁵⁵ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 64-65 del expediente.

⁵⁶ Oficio RPAN2-0321/2018 del PAN, visible a páginas 66-68 del expediente.

⁵⁷ Visible a páginas 38-43 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Irvin Iram Báez Pérez		
Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP⁵⁸	Manifestaciones del Partido Político⁵⁹
03/05/2018 ⁶⁰	Informó que el denunciante apareció como afiliado del <i>PAN</i> desde el 07/01/2014	Esta actualmente afiliado Informó que el ciudadano realizó el trámite de actualización de datos el 12/07/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante está registrado en el <i>PAN</i>.</p> <p>Es importante destacar, que el <i>PAN</i> no aportó la cédula de afiliación respectiva, ya que, según su dicho, el archivo muerto de dicho instituto político existente hasta el 31 de diciembre de 2016, fue destruido, sin embargo, en el caso particular el partido político denunciado presentó copia certificada del formato de actualización de datos a nombre del ciudadano de doce de julio de dos mil diecisiete.</p> <p>Esto es, el instituto político denunciado exhibió en el presente procedimiento, un documento que acredita que, con fecha posterior a la presentación del escrito de queja, el ciudadano hizo patente su voluntad de ser afiliado al <i>PAN</i>.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el <i>PAN</i> pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que, si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Irvin Iram Báez Pérez de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el doce de julio de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Irvin Iram Báez Pérez –supuestamente otorgada el doce de julio de dos mil diecisiete - en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por el denunciante en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p>		

⁵⁸ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a páginas 64-65 del expediente.

⁵⁹ Oficio RPA2-0321/2018 del *PAN*, visible a páginas 66-68 del expediente.

⁶⁰ Visible a páginas 10-16 del expediente.

Irvin Iram Báez Pérez		
Escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ⁵⁸	Manifestaciones del Partido Político ⁵⁹
En consecuencia, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.		

Así las cosas, se afirma que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE* y 27, párrafo 2, del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento de Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las y los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las y los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a las y los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que las y los ciudadanos denunciantes, se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demuestra con medios de prueba, que las afiliaciones respectivas sean el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las y los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de las y los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para toda ciudadana y ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal,

el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar y, en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano o ciudadana para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

En consecuencia, esta autoridad electoral considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, **dado que existe una vulneración al derecho de afiliación de las y los ciudadanos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales,** lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Es importante señalar que el *PAN* **reconoció la afiliación y vigencia actual de registro** de militancia de un (1) ciudadano **Irvin Iram Báez Pérez**, así mismo indicó que los cuatro restantes fueron dados de baja de su padrón de afiliados, por no haber mediado escrito de ratificación de militancia.

No obstante, lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de las y los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PAN* en materia de afiliación, en la que constará el deseo de las y los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

En el caso del ciudadano Irvin Iram Báez Pérez, si bien el partido político denunciado presentó copia simple del formato de actualización de datos de militante del año dos mil diecisiete, lo cierto es que tal documentación es insuficiente para desvirtuar la infracción que se le atribuye.

En efecto, el partido político aportó un documento en el que supuestamente aparece la manifestación de Irvin Iram Báez Pérez, de mantenerse afiliado a ese instituto, sin embargo, por la fecha de elaboración de esa constancia —**doce de julio de dos mil diecisiete**, — resulta insuficiente por sí misma, para acreditar una militancia que, según las constancias del expediente, datan desde el **siete de enero de dos mil catorce**.

En otras palabras, la afiliación indebida que, respecto de Irvin Iram Báez Pérez se atribuye al *PAN*, corresponde al año dos mil catorce, por lo que, el documento en el que se asienta que el quejoso actualiza sus datos como militante de ese partido, y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

que corresponden al año dos mil diecisiete, en modo alguno desvirtúan la imputación.

Criterio similar sostuvo este *Consejo General* en la resolución INE/CG1198/2018,⁶¹ de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/109/2018.

Por otra parte, esta autoridad no desconoce que el partido político denunciado manifestó que realizó una destrucción de “archivo muerto” en el año dos mil dieciséis, pero ello tampoco puede constituir una excluyente de responsabilidad para el *PAN*.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

En el caso, el partido político denunciado no exhibe constancia alguna de la que se pueda corroborar, de manera fehaciente, que dentro del “archivo muerto”, cuya destrucción se ordenó por ese instituto político en dos mil dieciséis, se hayan incluido, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa.

En síntesis, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto del ciudadano Irvin Iram Báez Pérez, afiliando de manera indebida el siete de enero de dos mil catorce.

⁶¹ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98225/CGor20180823-rp-16-22.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Criterio similar sostuvo este *Consejo General* en las resolución INE/CG119/2018,⁶² e INE/CG1249/2018,⁶³ de veintiocho de febrero y doce de septiembre de dos mil dieciocho, al resolver los procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las claves UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017 y UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018.

Respecto a los cuatro (4) ciudadanos que se citan a continuación, el **PAN argumentó que dichos ciudadanos han sido dados de baja del registro de militantes**, es decir, el partido político denunciado reconoce la afiliación de las y los ciudadanos, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que los quejosos fueron registrados en su padrón de militantes.

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
1	Judith García Díaz
2	Muñiz Mendez Salvador
3	Graciela Peña Sahagún
4	Álvaro Nicolás Serrano

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que en ningún caso el *PAN* aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tales sujetos, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de esos cuatro (4) ciudadanos por parte del *PAN* en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, sigan manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

⁶² Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95142/CGor201802-28-rp-11-3.pdf>

⁶³ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98410/CGex201809-12-rp-1-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue acreditado por el *PAN*.

Finalmente, es de referir que, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esos cuatro ciudadanos, registrados como militantes del *PAN*.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PAN*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **cuatro (4) ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁶⁴

...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una

⁶⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

*documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.*⁶⁵

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁶⁶ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PAN*, en los **cuatro (4)** casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos y ciudadanas hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las y los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

⁶⁵ De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

⁶⁶ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PAN* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de las y los **cuatro (4)** quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este *Consejo General* en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁶⁷ y SUP-RAP-137/2018,⁶⁸ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

⁶⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁶⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del **PAN**, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PAN</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , mismas que se replican en la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las y los ciudadanos denunciantes por parte del <i>PAN</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del <i>COFIPE</i> ; misma que se replica en los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de la ciudadanía de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el presente asunto, se acreditó que el *PAN* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a las **cinco (5) ciudadanas y ciudadanos quejosos**, respecto de quienes se determinó previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político no demostró que para incorporarlos medió la voluntad de éstas de inscribirse como sus militantes, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de las y los promoventes sin que estos hubieran otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien, su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del *PAN*.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁶⁹ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PAN*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, y aún las de la normativa interna del referido partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de los quejosos, esta situación conlleva a estar en presencia de una singularidad de la infracción o falta administrativa, consistente en la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado,

⁶⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy denunciantes, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PAN*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; misma que se replica en los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a), k) y n); de la *LGIFE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*, por lo siguiente:

Al incluir en su padrón de afiliados a los **cinco** ciudadanas y ciudadanos siguientes:

No.	Personas afiliadas indebidamente
1	Judith García Díaz
2	Irvin Iram Báez Pérez
3	Salvador Muñiz Méndez
4	Álvaro Nicolás Serrano
5	Graciela Peña Sahagún

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las infracciones cometidas por el *PAN*, se realizaron conforme a lo siguiente:

No.	Nombre del quejoso(a)	Fecha de afiliación proporcionada por la <i>DEPPP</i>
1	Judith García Díaz	09/01/2014
2	Irvin Iram Báez Pérez	07/01/2014

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

No.	Nombre del quejoso(a)	Fecha de afiliación proporcionada por la <i>DEPPP</i>
3	Salvador Muñiz Méndez	30/07/2014
4	Álvaro Nicolás Serrano	17/11/2011
5	Graciela Peña Sahagún	12/06/2005

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre del quejoso	Entidad
1	Judith García Díaz	Ciudad de México
2	Irvin Iram Báez Pérez	Puebla
3	Salvador Muñiz Méndez	Estado de México
4	Álvaro Nicolás Serrano	Estado de México
5	Graciela Peña Sahagún	Jalisco

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; misma que se replica en los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, replicado en el precepto 25, párrafo 1, incisos a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana o ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no sólo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los dispositivos 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

1. Las y los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PAN*.
2. Quedó acreditado que las y los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
3. El partido denunciado no demostró que la afiliación de las y los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.

5. El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de las y los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **cinco (5)** personas, sin demostrar al acto volitivo de ellas para formar parte del padrón de militantes, así como de haber utilizado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de las y los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los quejosos de militar en el partido denunciado y, en consecuencia, el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido denunciado, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

De conformidad con el artículo 355, párrafo 6, del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6, de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior, se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁷⁰

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

⁷⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto no puede considerarse actualizado dicho supuesto, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se haya dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación a cinco (5) ciudadanas y ciudadanos.
- Se comprobó que el *PAN* **afilió a cinco (5)** ciudadanas y ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de la ciudadanía mexicana, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las y los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PAN*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los quejosos, lo que constituye una violación a un derecho fundamental reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁷¹

El artículo 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquella que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y

⁷¹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIFE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PAN**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA, unitaria por cuanto hace a cada uno de las y los cinco ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁷² y SUP-RAP-137/2018,⁷³ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, y que, en la especie, el *PAN* **afilió indebidamente a cinco ciudadanas y ciudadanos, utilizando para ello sus datos personales**, por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad

⁷² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁷³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁷⁴ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

⁷⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas conforme a lo siguiente:**

Como ya ha quedado precisad, lo conducente es imponer una multa de 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, por cada uno de las y los denunciantes que fueron indebidamente afiliados al *PAN*.

Ahora bien, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461, de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada una de las y los ciudadanos, arrojan los siguiente:

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo vigente	Monto en pesos
Afiliación en 2005		
1	\$46.80 ⁷⁵	\$30,045.60
Afiliación en 2011		
1	\$59.82 ⁷⁶	\$38,404.44
Afiliación en 2014		

⁷⁵ Visible en la página de internet de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104983/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2005.pdf

⁷⁶ Visible en la página de internet de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104989/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2011.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo vigente	Monto en pesos
3	\$67.29 ⁷⁷	\$129,600.54
Total		\$198,050.58 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

PAN					
No.	Nombre del Quejoso	Monto de la sanción en DSMGV	Año de afiliación	Salario mínimo	Importe en pesos
1	Judith García Díaz	642	2014	\$67.29	\$43,200.18
2	Irvin Iram Báez Pérez	642	2014	\$67.29	\$43,200.18
3	Salvador Muñiz Méndez	642	2014	\$67.29	\$43,200.18
4	Álvaro Nicolás Serrano	642	2011	\$59.82	\$38,404.44
5	Graciela Peña Sahagún	642	2005	\$46.80	\$30,045.60

Dichas sanciones se consideran adecuadas para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

⁷⁷ Visible en la página de internet de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104991/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2014.pdf

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal del año en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Sirve de apoyo lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**⁷⁸

I. Graciela Peña Sahagún, afiliada en el año 2005.

El monto en pesos \$30,045.60 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$46.80 —cuarenta y seis pesos 80/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 372.77 **(trescientos setenta y dos punto setenta y siete)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto de la ciudadana en cita, y su valor neto en pesos es de **\$30,045.26 (treinta mil cuarenta y cinco pesos 26/100 M.N., redondeado al segundo decimal).**

II. Álvaro Nicolás Serrano, afiliado en el año 2011.

El monto en pesos \$38,404.44 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente,

⁷⁸ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$59.82 —cincuenta y nueve pesos 82/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 476.48 **(cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N., redondeado al segundo decimal).**

III. Judith García Díaz, Irvin Iram Báez Pérez y Salvador Muñoz Méndez, afiliados en el año 2014.

El monto en pesos \$43,200.18 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$67.29 —sesenta y siete pesos 29/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 535.98 **(quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$43,199.99 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N., redondeado al segundo decimal), por cada uno de los ciudadanos aquí citados.**

No	Ciudadano	Año de afiliación	Salario Mínimo	Multa en UMAS	Multa en pesos
1	Graciela Peña Sahagún	2005	46.8	372.77	\$30,045.26
2	Álvaro Nicolás Serrano	2011	59.82	476.48	\$38,404.28
3	Judith García Díaz	2014	67.29	535.98	\$43,199.99
4	Irvin Iram Báez Pérez	2014	67.29	535.98	\$43,199.99
5	Salvador Muñoz Méndez	2014	67.29	535.98	\$43,199.99

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PAN** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PAN*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
<i>PAN</i>	\$68.993.261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE OCTUBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PAN</i>	\$68,993,261.00	\$916,721.00	\$68,076,540.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que las multas impuestas al **PAN**, no son de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano.⁷⁹	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PAN	2005	\$30,045.26	1	0.04%
	2011	\$38,404.28	1	0.05%
	2014	\$43,199.99	3	0.06%

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PAN** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PAN** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar

⁷⁹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁸⁰ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LAS Y LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite, cancele su registro, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la *Sala Superior* en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁸¹ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁸² se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

⁸⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁸¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

⁸² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: II5I. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMAN60 LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PAN** al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación en perjuicio de cinco (5) ciudadanas y ciudadanos, en términos de lo establecido en el numeral 5 del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **PAN**, **una multa por la indebida afiliación, de cada uno** de las y los **cinco ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

No	Ciudadano	Importe de la multa
1	Judith García Díaz	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2014]
2	Irvin Iram Báez Pérez	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
3	Salvador Muñiz Méndez	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
4	Álvaro Nicolás Serrano	476.48 (Cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2011]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JGD/JD22/CDMX/138/2018

No	Ciudadano	Importe de la multa
5	Graciela Peña Sahagún	372.77 (Trescientos setenta y dos punto setenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$30,045.26 (Treinta mil cuarenta y cinco pesos 26/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2005].

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **PAN**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, en el supuesto que las y los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que cada uno presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos Judith García Díaz, Irvin Iram Báez Pérez, Salvador Muñoz Méndez, Álvaro Nicolás Serrano y Graciela Peña Sahagún, por **oficio**, al **Partido Acción Nacional**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, someto a su consideración en lo particular, si les parece primero el apartado 3.13 que es la sanción disminuida, y luego procederíamos a los apartados 3.7 y al 3.8._____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 3.3, excluyendo de esta votación en lo general, por lo que hace al criterio de sanción disminuida._____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez). Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al Proyecto 3.13, por lo que se refiere al criterio de sanción que está como viene el Proyecto de Resolución quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables, como viene el Proyecto de Resolución._____

7 votos._____

¿En contra? 3 votos._____

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1356/2018) Pto. 3.13_____

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

INE/CG1356/2018

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018
DENUNCIANTES: JESÚS ALBERTO
ROBLEDO VALERO
DENUNCIADO: MOVIMIENTO
CIUDADANO**

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDA DENUNCIA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTE EN LIBRE AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DEL CIUDADANO JESÚS ALBERTO ROBLEDO VALERO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

GLOSARIO	
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>MC</i>	Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. Denuncia¹. El dos de abril de dos mil dieciocho, se recibió escrito de queja signado por Jesús Alberto Robledo Valero, en contra del *MC*, por la no atención de su solicitud de desafiliación a dicho partido político, haciendo uso indebido de sus datos personales para tal fin.

2. Registro, admisión, determinación del emplazamiento y diligencias de investigación.² Mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida y admitida la denuncia planteada, quedando registrada como **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018**.

Asimismo, se reservó lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en tanto se culminara la etapa de investigación.

¹Visible a páginas 1-7 del expediente

² Visible a páginas 8-14 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Además, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la *DEPPP* y a *MC*, proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación del denunciante, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>MC</i>	INE-UT/4923/2018 ³	27/04/2018 Oficio MC-INE-229/2018 ⁴
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4924/2018 ⁵	26/04/2018 Correo institucional ⁶

3. Emplazamiento.⁷ El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a *MC*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>MC</i>	INE-UT/12003/2018 ⁸	Citatorio: 30/julio/2018 Cédula: 31/julio/2018 Plazo: 01 al 3 de agosto de 2018	03/agosto/2018 Oficio MC-INE-743/2018 ⁹

4. Alegatos.¹⁰ El diez de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

³ Visible a página 18 del expediente.

⁴ Visible a páginas 24-26 y anexo a 27 del expediente

⁵ Visible a página 17 del expediente.

⁶ Visible a páginas 21-23 del expediente

⁷ Visible a páginas 33-39 del expediente

⁸ Visible a página 43 del expediente

⁹ Visible a páginas 89-103 del expediente

¹⁰ Visible a páginas 104-107 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Denunciante	INE/JD-01/VE/849/2018 ¹¹	Cédula: 13 de agosto de 2018 Plazo: 14 al 20 de agosto de 2018	Sin respuesta
Jesús Alberto Robledo Valero			
Denunciado	INE-UT/12528/2018 ¹²	Citatorio: 13 de agosto de 2018 Cédula: 14 de agosto de 2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018	15/agosto/2018 Oficio MC-INE-768/2018 ¹³
MC			

5. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución.

6. Sesión de la *Comisión de Quejas*. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de mérito, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes presentes; y en lo particular respecto a la individualización de la sanción voto a favor del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández y voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la *Comisión de Quejas*, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, por lo que se determinó que el asunto se turnara al Pleno del Consejo General para su resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

¹¹ Visible a página 80 del expediente

¹² Visible a página 84 del expediente

¹³ Visible a páginas 95-97 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *MC*, en perjuicio de Jesús Alberto Robledo Valero.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *MC*, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libre afiliación (en su vertiente negativa) se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que, en el caso planteado, el registro o afiliación del quejoso a *MC* se realizó

¹⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre marzo de dos mil trece y enero de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,¹⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en los casos que así corresponda, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por el quejoso y cuestionada mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si *MC* conculcó o no el derecho de libre afiliación —en su vertiente negativa— al no permitir o dar curso a la solicitud de desafiliación presentada por el quejoso, quien alegó que el partido fue omiso en dar trámite a su escrito de renuncia, haciendo uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443,

¹⁵ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁶

¹⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

¹⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. *Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

1. *Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

a. *En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*

b. *El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de

afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MC

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna de MC, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹⁸

...
ARTÍCULO 3

De la Afiliación y la Adhesión.

1. Toda ciudadana o ciudadano puede solicitar su afiliación como militante de Movimiento Ciudadano o su adhesión como simpatizante, la cual deberá inscribirse en el Registro Nacional.

2. La afiliación y la adhesión son individuales, personales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia de Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del interesado.

4. Para afiliarse a Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes compromisos:

a) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de Movimiento Ciudadano.

b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte Movimiento Ciudadano.

c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos de Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le asignen.

d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores y estar inscrito en el Padrón del Instituto Nacional Electoral.

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.

¹⁸ Consultable en la página de internet <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/movimiento-ciudadano>

f) En los casos de las y los jóvenes menores de 18 años, éstos deberán presentar su Cédula Única de Registro de Población.

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- A MC podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de *MC*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *MC*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del

derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²¹ y como estándar probatorio.²²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con

²³ Véanse las tesis *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA*, *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*, así como *DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO*.

fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

*3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**²⁴ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la***

²⁴ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**²⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**²⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**²⁷

²⁵ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

²⁶ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

²⁷ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**²⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**²⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**³⁰

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,³¹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

²⁸ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

²⁹ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

³⁰ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

³¹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,³² sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Ello en virtud de que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan

³² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por el quejoso, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al no haber sido desincorporado del padrón de MC, por haber renunciado a éste, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³³	Manifestaciones del Partido Político ³⁴
1	Jesús Alberto Robledo Valero	26/marzo/2018 ³⁵ Recibido el 02/abril/2018	Afiliado 18/11/2006 Cancelación ³⁶ 11/04/2018	Informó que el ciudadano fue militante y representante de Movimiento Ciudadano remitiendo copia certificada de la solicitud de baja signada por el actor con fecha veintitrés de mayo de dos mil siete. Asimismo, señaló que en consecuencia al día de hoy no es militante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>La afiliación del ciudadano se realizó de manera consentida al partido político Convergencia que a la postre se convirtió en MC, sin embargo, éste presentó su escrito de renuncia el veintitrés de mayo de dos mil siete, misma que fue atendida después de diez años y diez meses, por lo que el partido denunciado mantuvo afiliado al quejoso en contra de su voluntad durante dicho tiempo. Al respecto, MC aportó en el procedimiento el escrito de renuncia referido por el quejoso. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su vertiente negativa, al no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, éste la mantuvo dentro de sus registros de agremiados, tal y como lo informó la DEPPP.</p>				

³³ Visible a páginas 21-22 del expediente

³⁴ Visible a páginas 24-26 y anexo a página 27, así como las páginas 56-70 y anexo a página 71 del expediente

³⁵ Visible a página 1 del expediente

³⁶ El ciudadano no fue localizado en los registros validos del padrón de afiliados de Movimiento Ciudadano; no obstante, se localizó en los registros cancelados del padrón de afiliados del denunciado.

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su

protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento del quejoso para afiliarse a su partido político, y que dio de baja razonablemente al mismo tras su renuncia.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que el ciudadano denunciante, estuvo afiliado a en un primer momento al partido político Convergencia, que a la postre se transformó en *MC*, desde el año dos mil seis y causó baja en dos mil dieciocho.

Por otra parte, *MC* no demuestra que haya atendido diligentemente y sin dilación alguna, la solicitud de baja o renuncia presentada por el ciudadano quejoso, sobre lo cual, se tiene por consecuencia, que permaneciera durante más de diez años en las filas del padrón de afiliados de *MC* en contra de su voluntad.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde a *MC*, en tanto que el dicho del actor consiste en demostrar que no dio su consentimiento para estar afiliado, ello derivado a que no se le separó de la militancia cuando así lo solicitó, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la

obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el consentimiento —para el caso de la omisión o negativa de atender solicitud de desafiliación— demostrar que dio cauce legal a la solicitud de desafiliación de manera pronta y oportuna.

En suma, toda vez que el denunciado no cumplió su carga para demostrar que dio curso legal de manera pronta y oportuna a la solicitud de desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizó sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en su caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en el supuesto de que se violentó el derecho de libre afiliación —en su modalidad negativa— del quejoso.

MC TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, EN SU MODALIDAD NEGATIVA – ANTE LA OMISIÓN O NEGATIVA DE ATENDER LA SOLICITUD DE DESAFILIACIÓN.

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y/o el propio instituto político denunciado, el quejoso, se encontró afiliado a MC.

No obstante, el quejoso presentó su escrito de renuncia al partido denunciado en el año dos mil siete, sin que se hubiera atendido dicha petición, sino hasta el año dos mil dieciocho que fue cancelada la afiliación, es decir, pasaron más de diez años para que el partido actuara en consecuencia a la renuncia que el quejoso interpuso, por tanto se entiende que el ciudadano estuvo afiliado sin su consentimiento durante ese tiempo y que además existió la negativa del partido de desincorporarlo de su padrón de militantes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

A manera de ilustración, a continuación, se precisan las manifestaciones que el quejoso refirió a esta autoridad electoral en su escrito de queja:

No.	Quejoso	Síntesis de la queja
1	Jesús Alberto Robledo Valero	<p>(Queja) ...Vengo a interponer denuncia en contra del Partido Movimiento Ciudadano, por aparecer inscrito indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados.</p> <p>Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en el año de 2006... di mi consentimiento para ser afiliado al entonces Partido Político Nacional denominado "Convergencia"; con posterioridad a ello, por así convenir a mis intereses, el día 23 de mayo de 2007, mediante escrito dirigido a.... Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto político, renuncié a la militancia del partido, a ostentar cualquier representación o a permanecer con algún vínculo con el mismo.</p> <p>Renuncia presentada ante el partido el 23 de mayo de 2007</p>

De la información antes precisada, se obtienen las siguientes conclusiones preliminares:

- No está a debate, que en algún momento **el ciudadano aludido se afilió libre y voluntariamente a Convergencia**, con base en las propias manifestaciones que él realiza.
- El ciudadano presentó su renuncia el **veintitrés de mayo de dos mil siete**.
- Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que el quejoso fue afiliado el dieciocho de noviembre de dos mil seis y cancelado dicho registro el once de abril de dos mil dieciocho**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio denunciado, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.
- Si bien MC capturó la cancelación de afiliación de dicho ciudadano del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, lo cierto es que

tal cancelación se realizó hasta el **once de abril de dos mil dieciocho**, es decir, después de **diez años y diez meses** de la solicitud de baja del referido denunciante.

- Por tanto Jesús Alberto Robledo Valero continuó durante casi once años en el padrón de afiliados del partido *MC* en contra de su voluntad.

En este sentido, es evidente que en el caso que se analiza en este apartado, se está ante una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad **negativa**, es decir, de desafiliación libre, **al impedir** la desincorporación del ciudadano quejoso, puesto que, *MC* omitió dar atención a la solicitud de renuncia que el quejoso presentó en el año dos mil siete y de la que el propio partido reconoció tener conocimiento.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución Federal*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, es innegable que el derecho de libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esas libertades, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de los partidos políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, y, con base en ello, gozar de la potestad de afiliarse al instituto político de su preferencia, lo que implica indefectiblemente, la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en lo anterior, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación por parte de un partido político, cuando éste mantiene en contra de su voluntad a

un ciudadano dentro de su padrón de militantes, habida cuenta que dichos institutos, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución*, tienen el deber preponderante de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, el de libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, **evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con ese partido se vio afectado.**

En efecto, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, se advierte que el ciudadano exhibió ante esta autoridad copia del escrito de renuncia en el que se observa el sello de la fecha de recepción, así como nombre y firma de quien recibió en la instancia partidista ante quien fue presentado.

Sin embargo, el partido político denunciado, sin justificación alguna demostrada, omitió darlo de baja del padrón de militantes, aún y cuando, en el caso que nos ocupa se haya cancelado en el año que transcurre, pues, lo cierto es que dicha solicitud se presentó en el dos mil siete y **diez años y diez meses después fue atendida la solicitud de baja** del referido denunciante, según la propia información que capturó el partido con el propósito de demostrar ante esta autoridad electoral, que contaba con el número mínimo de afiliados para conservar su registro como Partido Político Nacional.

En efecto, MC mantuvo al ciudadano que hoy se inconforma, como parte de sus miembros activos, sin que mediara su consentimiento ni justificación alguna para ello, lo que, de suyo, representa una violación al derecho de libre afiliación que les asiste y derivado de ello, un uso indebido de sus datos personales.

Sobre este particular, conviene puntualizar que no obstante que el denunciado alegó en su defensa que sí realizó la supuesta baja del quejoso de su lista de militantes, lo cierto es que, contrario a ello, el denunciado atendió de forma diligente, oportuna y eficaz el escrito de renuncia del quejoso.

Por otro lado, no existe constancia alguna en autos que demuestre el procedimiento efectuado para llevar a cabo la cancelación de afiliación, ni mucho menos que la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

resolución o acuerdo que haya recaído a esa solicitud de desafiliación, fuese notificado de manera directa al quejoso, de manera que pueda generar convencimiento en esta autoridad que se trató de un error insuperable que, a la postre, pueda atenuar o eximir de responsabilidad al partido.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido, *MC*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluido por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual, en el caso de que las renunciaciones no se hayan presentado ante la instancia correspondiente, ello no puede constituir una justificación válida, ya que, para estos efectos, el partido político debe entenderse como un todo, en el cual, si bien es cierto que existen diversas áreas o instancias para el debido control de su vida interna, también lo es que para garantizar los derechos de sus militantes, debió realizar las acciones al interior de su organización política, a fin de atender de manera pronta, oportuna y eficaz, la solicitud de su miembros de ser desafiliado, habida cuenta que en ella se entraña el ejercicio de un derecho fundamental, en los términos que ya han quedado apuntados.

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que el hoy denunciante presentó ante el partido su escrito de desafiliación y la fecha en que el partido dio atención a dicho escrito, su permanencia en el padrón de agremiados del partido al cual ya no deseaban pertenecer.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

No.	Persona denunciante	Fecha de renuncia	Fecha en que MC canceló su afiliación	Tiempo que estuvo afiliado después de presentar renuncia a la presentación de la queja
1	Jesús Alberto Robledo Valero	23/mayo/2007	11/abril/2018	10 años con 10 meses

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que *MC* infringió las disposiciones electorales tendentes a no desafiliar al **ciudadano quejoso**, no obstante, la renuncia que éste presentó ante dicho instituto político, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a saber:

- Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello.

Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.

- Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención.
- El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y,

consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el peticionario en un plazo razonable.

- Cuando sea necesario que el interesado tengan conocimiento de un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá notificarlo personalmente al interesado en un tiempo breve y razonable (por ejemplo, cuando el escrito se remitió a algún otro órgano partidario, cuando el escrito no contenga firma o se presente en copia, etc.). Ello conforme a las tesis de jurisprudencia identificadas, respectivamente, con las claves **32/2010** y **31/2013**, de rubros ***DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN 'BREVE TÉRMINO' ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO*** y ***DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES.***

No pasa inadvertido para este órgano resolutor, que en el caso que se analiza en este apartado, que el quejoso presentó copia simple del escrito mediante el cual demostró su gestión ante el propio partido para ser desafiliado, lo cual, constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

Sin embargo, dicha documental fue reconocida por el partido denunciado, incluso éste presentó como prueba una copia certificada de dicho escrito de desafiliación, por lo que se estima suficiente para tener por demostrada la solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión del partido de atender esa petición.

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena a las citadas documentales, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas como la que nos ocupa.

Por estas razones, se considera que debe declararse **fundado** el procedimiento del ciudadano bajo análisis, en virtud de que, los derechos fundamentales de carácter político-electoral, como lo son, entre otros los de asociación y de afiliación, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la *Constitución Federal* y, por tanto, su interpretación en favor de quien resiente su vulneración, debe hacerse de forma extensiva de manera que se maximice su goce y potencie su ejercicio, sin que pueda permitirse, bajo ningún concepto, que derivado a malas prácticas por quienes se encuentran obligados a dar trámite a las solicitudes de desafiliación al interior de los partidos políticos, opongan justificaciones o trabas que limiten u obstaculicen el ejercicio de estos derechos.

La anterior conclusión tiene sustento en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 29/2002, cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

Como se ha explicado, el derecho fundamental de desafiliación del denunciante debió ser garantizado por MC, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos, lo cierto es que, la omisión o ignorancia del denunciado de no darle trámite a la renuncia, generó una afectación a los derechos del quejoso, aún y cuando se realizó la baja respectiva, ya que éste siguió apareciendo en el padrón de militantes de MC por casi once años, por lo que el partido político incurrió en responsabilidad.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la jurisprudencia **24/2002**, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- *El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de*

afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad de MC, en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
MC	La infracción se cometió por una omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida (negativa) y el uso no autorizado de los datos personales de Jesús Alberto Robledo Valero por parte de MORENA.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulneradas con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que MC mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados al hoy quejoso, sin demostrar que dio el trámite correspondiente para realizar las desafiliaciones solicitadas, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto.

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad de pertenecer como afiliado a MC, así como en aquellos en los que no se dio el correspondiente trámite para atender las renunciaciones solicitadas, se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

En el presente caso debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento el denunciante consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado, lo cierto es que al momento que éste le manifestó su intención de ser dado de baja de los registros de afiliados de MC, implicó que no se atendiera su oposición manifiesta

del tratamiento que debía dársele a sus datos; es decir, de no aparecer en un padrón al cual no deseaban seguir incorporado, lo que constituye un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral un número mínimo de militantes para la conservación de su registro.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente a MC.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que MC transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación y/o desafiliación al instituto político denunciado, quien mantuvo en su padrón de militantes al hoy quejoso, en contra de su voluntad.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MC, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, tanto en su aspecto negativo, al mantener incluido en su padrón de afiliados al ciudadano denunciante durante diez años y diez meses, y en contra de su voluntad, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, el ciudadano presentó su escrito de renuncia a la militancia **de MC** y dicho partido lo mantuvo en su padrón de militantes, por lo que se tendrá como temporalidad de la realización de la conducta, el día de la presentación de la referida solicitud de baja, ya que se considera que fue en ese momento en que el denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad del ciudadano de ya no pertenecer a las filas del mismo, no realizó los trámites correspondientes a efecto de darlo de baja de su padrón de militantes:

No.	Persona denunciante	Fecha de renuncia
1	Jesús Alberto Robledo Valero	23/05/2007

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida a MC se cometió de la siguiente manera:

No	Persona denunciante	Entidad
1	Jesús Alberto Robledo Valero	Coahuila

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte de MC, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- MC es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- MC está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, replicado en el diverso 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplan los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto

en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) El quejoso alude que, no obstante que presentó su renuncia a la militancia de ese partido político el veintitrés de mayo de dos mil siete, MC lo mantuvo afiliado.

- 2) MC no eliminó de su padrón de militantes a Jesús Alberto Robledo Valero, quien previamente, presentó escrito de renuncia a la militancia de ese instituto político.
- 3) Quedó acreditado conforme a lo informado por la *DEPPP*, que el quejoso fue desafiliado el once de abril de dos mil dieciocho, y por dicho del propio partido, el ciudadano fue desafiliado en atención a su solicitud de renuncia que fue presentada en dos mil siete, por lo que se concluye que dicha renuncia fue atendida diez años y diez meses después de presentada.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la desafiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación del quejoso fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MC, se cometió al no desafiliar al ciudadano quejoso, y mantenerlo inscrito en su padrón de militantes, en contra de su voluntad y, por tanto, utilizar sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar que dio atención oportuna y diligente a la renuncia del hoy actor y por ende realizar la baja de su padrón.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.³⁷

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MC, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que MC afilió a diversos ciudadanos o, en su

caso no desafiló a otros, y sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o seguir inscritos a dicho instituto político.

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados de MC.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte de MC.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió MC como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación del hoy quejoso, lo

que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.³⁸

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por MC se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

³⁸ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante señalar que el presente caso es derivado de la falta de atención al derecho de desafiliación, violando el derecho de libre afiliación (en su vertiente negativa).

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MC, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en

reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,³⁹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado y aquella que se denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta **grave ordinaria**, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **trescientos veintiún** días de salario mínimo general para el Distrito Federal a MC.

³⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Cabe precisar que iguales sanciones, han sido impuestas por este Consejo General, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

En virtud de que la falta fue cometida en el dos mil siete, con la finalidad de adoptar la postura más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimiento de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de la omisión de atender la petición del ciudadano de desafiliación, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.⁴⁰

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con el momento de presentación de la renuncia, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto hace al ciudadano indebidamente afiliado, arroja lo siguiente:

CIUDADANO QUE NO FUE DESAFILIADO		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Renuncia en 2007		
1	\$50.57	\$16,232.97

⁴⁰ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización para lo cual es necesario dividir el monto inicial (trescientos veintiún días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Sanción con conversión a Unidades de Medida y Actualización, toda vez que, su renuncia y/o su indebida afiliación fue anterior al año dos mil dieciséis:

No	Persona denunciante	Fecha de renuncia	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁴¹	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁴²
			A	B	C	D	
1	Jesús Alberto Robledo Valero	23/05/2007	321	\$50.57	\$80.60	201.40	\$16,232.97

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MC, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

⁴¹ Cifra al segundo decimal

⁴² *Idem*

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a MC constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte de MC, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, MC recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
MC	\$28'465,342

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
MC	\$28'465,342	\$23,048,432	\$0.00	\$14,437,055.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a MC, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de agosto del año en curso, es el siguiente porcentaje:

Año de renuncia	Monto de la sanción	% de la ministración mensual⁴³
2007	\$16,232.97	0.07%

Por consiguiente, la sanción impuesta a MC no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por MC (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno

⁴³ Cantidad expresada hasta el segundo decimal.

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁴⁴ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE. En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a MC, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁴⁵ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

⁴⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos a MC, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar al quejoso.

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de **Movimiento Ciudadano**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación —en su modalidad de desafiliación— de Jesús Alberto Robledo Valero, en términos de lo establecido en el numeral 5, del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone a **Movimiento Ciudadano**, una multa por la indebida afiliación en su vertiente negativa, conforme a los montos que se indican a continuación:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JARV/CG/106/2018

Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
Jesús Alberto Robledo Valero	201.40 (doscientos uno punto cuarenta) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$16,232.97 (Dieciséis mil doscientos treinta y dos pesos 97/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2007]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a **Movimiento Ciudadano**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula a MC para que, de ser el caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. Se da vista a MC a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar al quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a Jesús Alberto Robledo Valero

Así como a **Movimiento Ciudadano**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora someto a su consideración los proyectos 3.7 y 3.8, primero en lo general y luego diferenciando la votación por lo que hace a los criterios de reiteración y a los criterios de sanción disminuida._____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 3.7 y 3.8, quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo._____

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez)._____

Ahora someto a su consideración tanto en el caso del Proyecto 3.7 como el Proyecto 3.8 someto a consideración en lo particular, por lo que hace a la reiteración como viene en el Proyecto de Resolución._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, reiteración como viene en el Proyecto._____

7 votos._____

¿En contra? 3 votos._____

Aprobado en lo particular en estos 2 casos, por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora, someto a su consideración también para los proyectos identificados en el orden del día como los apartados 3.7 y 3.8 someto a consideración en lo particular, por lo que hace a la sanción como viene en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Como viene en el Proyecto de Resolución la sanción. _____

7 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Aprobado en lo particular por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1357/2018 e INE/CG1358/2018)

Ptos. 3.7 y 3.8 _____

INE/CG1357/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018
DENUNCIANTES: SERGIO FLORES
ESLAVA Y OTRO
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
INE	Instituto Nacional Electoral

<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
COFIPE o Código	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE*, tres escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

No.	Quejoso	Fecha de presentación
1	Sergio Flores Eslava	26/02/2018 ¹
2	Sergio Pacheco Navarro	14/02/2018 ²
3	Josafat Abdón Lestrade Castillo	26/02/2018 ³

II. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.⁴ Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

¹ Visible a fojas 01 y 02 del expediente

² Visible a foja 37 del expediente

³ Visible a foja 42 del expediente

⁴ Visible a fojas 04 a 11 del expediente

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador, respecto de Sergio Flores Eslava.

Posteriormente, mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho,⁵ se tuvo por recibido y se admitió a trámite el escrito de queja de Sergio Pacheco Navarro.

Por otra parte, del escrito signado por Josafat Abdón Lestrade Castillo, al no advertirse la intención de éste de presentar una queja o denuncia por actos o hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa electoral, como lo es la indebida afiliación y, considerando que sus argumentos se limitaron a solicitar su desafiliación como militante y baja en el registro interno del *PAN*, se ordenó, mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, remitir dicho escrito con sus respectivos anexos, al instituto político denunciado, para que fuera éste quien determinara lo que en derecho correspondiera.

En todos los casos, se reservó el respectivo emplazamiento a las partes, hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

III. Diligencias de investigación preliminar. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó los requerimientos que se describen a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de respuesta
07/03/2018 ⁶	<i>PAN</i>	INE-UT/2211/2018 ⁷	14/03/2018 Oficio ⁸ RPAN2-0104/2018

⁵ Visible a fojas 149 a 157 del expediente

⁶ Visible a fojas 04 a 11 del expediente

⁷ Visible a foja 17 del expediente

⁸ Visible a fojas 48 a 49 del expediente y sus anexos de 50 a 148 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de respuesta
	DEPPP	INE-UT/2210/2018 ⁹	09/03/2018 Correo electrónico ¹⁰
27/04/2018 ¹¹	PAN	INE-UT/6033/2018 ¹²	07/05/2018 Oficio ¹³ RPAN2-0229/2018
	DEPPP	INE-UT/6034/2018 ¹⁴	04/05/2018 Correo electrónico ¹⁵
16/05/2018 ¹⁶	PAN	INE-UT/7372/2018 ¹⁷	22/05/2018 Oficio ¹⁸ RPAN-0282/2018

IV. Emplazamiento.¹⁹ El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo de emplazamiento al *PAN*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN	Citatorio: ²¹ 27 de julio de 2018. Cédula: ²² 30 de julio de 2018.	06/08/2018 ²³ Oficio RPAN-0764/2018

⁹ Visible a foja 20 del expediente

¹⁰ Visible a fojas 33 a 34 del expediente

¹¹ Visible a fojas 149 a 157 del expediente

¹² Visible a foja 166 del expediente

¹³ Visible a foja 174 a 175 del expediente

¹⁴ Visible a foja 165 del expediente

¹⁵ Visible a fojas 171 a 172 del expediente

¹⁶ Visible a fojas 181 a 184 del expediente

¹⁷ Visible a foja 189 del expediente

¹⁸ Visible a fojas 193 a 194 del expediente y sus anexos de 195 a 199 del expediente

¹⁹ Visible a fojas 229 a 235 del expediente

²¹ Visible a fojas 243 a 249 del expediente

²² Visible a fojas 250 a 251 del expediente

²³ Visible a fojas 255 a 257 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/11989/2018 ²⁰	Plazo: 31 de julio al 06 de agosto de 2018.	

V. Alegatos.²⁴ Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente asunto, a fin de que formularan los alegatos que a su derecho conviniera, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/12557/2018 ²⁵	Citatorio: ²⁶ 13 de agosto de 2018 Cédula: ²⁷ 14 de agosto de 2018. Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018.	Oficio RPAN-0822/2018 20/agosto/2018 ²⁸

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Sergio Flores Eslava INE-UT/12558/2018 ²⁹	Cédula: ³⁰ 17 de agosto de 2018. Plazo: 20 al 24 de agosto de 2018.	Sin respuesta
2	Sergio Pacheco Navarro INE-JAL-JDE10-VS-0284-2018 ³¹	Cédula: ³² 16 de agosto de 2018. Plazo: 17 al 23 de agosto de 2018.	Sin respuesta

VI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

²⁰ Visible a foja 242 del expediente

²⁴ Visible a fojas 258 a 262 del expediente

²⁵ Visible a foja 269 del expediente

²⁶ Visible a fojas 270 a 275 del expediente

²⁷ Visible de fojas 276 a 277 del expediente

²⁸ Visible a fojas 287 a 290 del expediente

²⁹ Visible a foja 282 del expediente

³⁰ Visible a fojas 283 y 284 del expediente

³¹ Visible a foja 292 del expediente.

³² Visible a fojas 293 y 294 del expediente

VII. Sesión de la *Comisión de Quejas*. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, en lo general, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y en lo particular, respecto de la individualización de la sanción, con el voto a favor del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, y con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Beatriz Claudia Zavala Pérez, por lo que se determinó que el asunto se turnara al pleno del Consejo General para su resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *PAN*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,³³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

³³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libertad de afiliación se cometió **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que el registro o afiliación del quejoso Sergio Flores Eslava al *PAN* se realizó antes del veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*,³⁴ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Finamente, para el caso de **Sergio Pacheco Navarro**, la normatividad aplicable será la *LGIPE*, en razón de que, dicho ciudadano presentó escrito de renuncia durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* violó el derecho de libertad de afiliación en sus vertientes positiva y negativa- de los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar o permanecer en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al

³⁴ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre

³⁵ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en

cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las ciudadanas y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PAN*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PAN* consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.³⁶

³⁶ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

Estatuto del PAN

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;**
- b) Tener un modo honesto de vivir;**
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;**
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.

En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido;

- e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.**

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

Artículo 11

1. Son derechos de los militantes:

- a) Que los órganos del Partido establezcan y promuevan actividades que les deberán ser informadas de manera oportuna;*
- b) Votar y elegir de forma directa a los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, Comités Directivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional y sus comités;*
- c) Votar y participar en las elecciones y decisiones del Partido, por sí o por delegados;*
- d) Participar en el gobierno del Partido desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no podrán ser más de tres por elección en un mismo momento;*
- e) Ser aspirantes, precandidatos y, en su caso, candidatos de Acción Nacional a cargos de elección popular;*
- f) Acceder a la formación y capacitación necesaria y continua, para el cumplimiento de sus deberes como militante del Partido;*
- g) Acceder a mecanismos internos de solución de controversias, cuando sean privados de sus derechos al interior del partido, en términos estatutarios y legales;*
- h) Acceder a la información generada por sus órganos de manera permanente en los términos que señale el reglamento aplicable;*
- i) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad, se encuentren obligados a presentar durante su gestión, en términos de lo precisado por los Reglamentos;*
- j) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido, mediante los mecanismos establecidos en los Reglamentos;*
- k) Interponer ante el Tribunal Federal o los tribunales electorales locales los medios de defensa previstos por la ley, en contra de las resoluciones y decisiones de los órganos internos del Partido que afecten sus derechos político-electorales, siempre y cuando se haya agotado la instancia intrapartidista;*
- l) Refrendar o **renunciar a su condición de militante**, en los términos establecidos en estos Estatutos y Reglamentos correspondientes; y*
- m) Los demás que establezcan el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos legales y del Partido.*

2. Para el ejercicio de sus derechos, los militantes deberán cumplir con sus obligaciones y los requisitos establecidos en los presentes Estatutos, así como en los Reglamentos y en su caso con la normatividad electoral, según corresponda.

3. Para el ejercicio de los incisos b, c y d del presente artículo, deberán transcurrir 12 meses después de ser aceptados como militantes, con las excepciones establecidas en el reglamento.

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional³⁷

“Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

Artículo 2. El presente Reglamento norma lo siguiente:

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja
...

Artículo 72. Los militantes causarán baja del Padrón por los siguientes motivos:

...

IV. Renuncia;

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PAN*, los ciudadanos mexicanos deben realizar una manifestación directa, personal, **presencial**, individual, libre, pacífica y voluntaria.
- Uno de los requisitos formales para acceder a la militancia del partido político ahora denunciado, consiste en *Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional*, el cual deberá ser *acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral*.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados por renuncia.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda

³⁷ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁸ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁴⁰ y como estándar probatorio.⁴¹

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

³⁸ http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

⁴⁰ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁴¹ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con

⁴² Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el

sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**⁴³ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

⁴³ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.***⁴⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***⁴⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***⁴⁶
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***⁴⁷
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS***⁴⁸
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)***⁴⁹

⁴⁴ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

⁴⁵ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

⁴⁶ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

⁴⁷ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

⁴⁸ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

⁴⁹ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁵⁰ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁵¹ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un***

⁵⁰ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

⁵¹ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, una de las denuncias presentadas por los hoy quejosos, versa, en un caso específico, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de afiliación política, al haber sido incorporado al padrón del *PAN*, sin su consentimiento y, como conducta infractora inherente a ella, la utilización de sus datos personales para sustentar tal afiliación.

En otro caso, uno de los quejosos denuncia que el partido lo mantiene o mantuvo registrado como su militante en contra de su voluntad, no obstante que, previamente, le había manifestado por escrito, su intención de no pertenecer más en sus filas de agremiados.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los ciudadanos denunciados, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵²	Manifestaciones del Partido Político
1	Sergio Flores Eslava	26/02/2018	Informó que el quejoso se encuentra afiliado al PAN desde el 17 de febrero de 2014	<p>Afiliación 17/02/2014 Baja 15/11/2017</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0104/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho,⁵³ el ente político reconoció que el quejoso estuvo afiliado a ese instituto político <u>causando baja del padrón de militante</u> el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y la Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional.</p> <p>No aportó documento alguno que acreditará la afiliación del citado quejoso, argumentando que, en términos del Acuerdo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se autorizó al Director del citado Registro Nacional, la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>El denunciante manifiesta que desconoce la afiliación al PAN, y por tanto solicita ser retirado de dicho padrón al que fue ingresado sin su consentimiento y de manera indebida.</p>				

⁵² Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a fojas 33 y 34 del expediente

⁵³ Visible a fojas 48 a 148 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵²	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la <i>DEPPP</i> y el <i>PAN</i> coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el diecisiete de febrero de dos mil catorce.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante del <i>PAN</i>, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de “archivo muerto”, no constituye una excluyente de responsabilidad para el <i>PAN</i>, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p> <p>No obstante que el partido político indicó que causó baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete, el denunciante manifestó que a la fecha de la presentación de la queja (26 de febrero de 2018), seguía apareciendo en el padrón de militantes del <i>PAN</i>, tal y como fue confirmado por la <i>DEPPP</i>, mediante informe rendido el nueve de marzo de dos mil dieciocho.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Sergio Pacheco Navarro.	14/febrero/2018 ⁵⁴	Informó que el quejoso se encuentra afiliado al <i>PAN</i> desde el 17 de febrero de 1995.	<p>Afiliado 17/02/1995 Baja 19/10/2017</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0229/2018 de siete de mayo de dos mil dieciocho,⁵⁵ el instituto político manifestó que Sergio Pacheco Navarro estuvo afiliado anteriormente a este instituto político, causando baja del padrón de militantes el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en virtud de la renuncia presentada por el mismo.</p> <p>Mediante oficio RPAN-0282/2018, el instituto político, anexó copia certificada de la renuncia de Sergio Pacheco Navarro.</p> <p>No aportó documento alguno que acreditará la afiliación del citado quejoso, argumentando que, en</p>

⁵⁴ Visible a página 36 del expediente

⁵⁵ Visible a fojas 174 a 175 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				términos del Acuerdo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se autorizó al Director del citado Registro Nacional, la destrucción del “archivo muerto”, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.
Observaciones				
<p>El quejoso en su escrito manifiesta que se afilió al partido denunciado el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, presentó carta de renuncia a la militancia, la cual fue recibida por la presidencia del Comité Directivo Estatal Jalisco y consultando afiliados por Partidos Políticos Nacionales en la página www.ine.mx con actualización al cinco de diciembre de dos mil diecisiete, le indicó que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional, situación a la que ya renunció y no desea seguir perteneciendo en ninguna de sus variantes.</p>				
Conclusiones				
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado carga y estándar probatorio sobre violación al derecho de libre afiliación a un partido político, no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del <i>PAN</i>.</p> <p>No obstante, manifestó que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, presentó su escrito de desafiliación al partido denunciado, sin embargo, al consultar el sistema de Afiliados por Partidos Políticos Nacionales, observó que continuaba en el padrón de afiliados del partido denunciado, por lo que tramitó la queja correspondiente ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.</p> <p>Así las cosas, el cuatro de mayo de dos mil dieciocho,⁵⁶ de conformidad con la información proporcionada por la DEPPP, éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del partido en cita. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no permanecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados, aun cuando, en su respuesta el partido denunciado, haya afirmado que el ciudadano ya está dado de baja, sin aportar documentación fehaciente, con la que pudiera acreditar su dicho.</p>				

⁵⁶ Visible a páginas 171 a 172 del expediente

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1 del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar, que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que

éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento del quejoso para afiliarlo a su partido político, y no al

ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, conforme lo establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los denunciados se encontraron, al momento en que se realizó la investigación, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo reiterarse que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo solicitaron, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

En tanto que, el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Sin embargo, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información

relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que uno de los denunciantes manifestó no haber otorgado su consentimiento, y en el caso del otro denunciante, por la omisión a darlo de baja de su padrón de afiliados, que la afiliación de ambos se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido

político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

El estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, aquel que acusa haber sido afiliado indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello, y otro, que solicitó de forma voluntaria su desafiliación al partido denunciado y éste no lo dio de baja del padrón.

Apartado A. Ciudadano que fue afiliado indebidamente al PAN.

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **Sergio Flores Eslava**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PAN* y las documentales que éste aportó, no fueron apegadas a derecho.

Como se evidenció en el apartado anterior, el *PAN* aceptó que el *quejoso* militó en ese instituto político.

El partido político denunciado manifestó en sus escritos de veintitrés de mayo, seis y veintiuno de agosto del año en curso, que se encuentra imposibilitado para aportar las constancias de afiliación del *quejoso*, en razón de que la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitió un acuerdo por el que se autoriza al Director del Registro Nacional de Militantes para que realizara la destrucción del papel que constituye el archivo muerto del área a su cargo existente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que el ciudadano que ha sido afiliado a ese instituto político lo ha realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

Atento a lo anterior, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

En este sentido, toda vez que Sergio Flores Eslava niega haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió

las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Sergio Flores Eslava, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éste para pertenecer afiliado a ese partido político.

En efecto, como se demostró anteriormente, Sergio Flores Eslava apareció afiliado al *PAN*, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Así, el *PAN*, en el caso señalado anteriormente, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicho ciudadano haya dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa del quejoso de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad del hoy promovente, lo que no hizo, ya que las documentales aportadas resultan insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos del quejoso en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar al ahora quejoso.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de Sergio Flores Eslava sobre el que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe vincular al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de militantes, sea dado de baja inmediatamente e informe lo anterior mediante oficio a la *DEPPP*, para que a su vez, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme a Derecho.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Sergio Flores Eslava.

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

Apartado B. Ciudadano sobre el que Sí se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado

Respecto al ciudadano **Sergio Pacheco Navarro**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

En principio debe señalarse que, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

En el caso, de conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que el hoy quejoso se encuentra afiliado al *PAN*.

No obstante, Sergio Pacheco Navarro, se inconformó por la negativa del *PAN* de desincorporarlo de su padrón de militantes.

En efecto, del escrito de queja, así como del oficio de desconocimiento de desafiliación que el denunciante presentó ante el propio partido político denunciado, se advierte que Sergio Pacheco Navarro presentó escrito por el cual solicitó al *PAN* que lo desafiliara de su padrón de militantes, lo cual no ocurrió.

Asimismo, de los documentos aportados por Sergio Pacheco Navarro se desprende que, el escrito de renuncia fue presentado ante el órgano competente del *PAN* el **diecinueve de octubre de dos mil diecisiete**.

De igual modo, debe hacerse notar que, el escrito de renuncia es del tenor siguiente:

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018**

19 de octubre de 2017

Partido Acción Nacional – PAN.
Lic. Jesús Eduardo Urbina Lucero
Director del Registro Nacional de Militantes
Y/O a quien corresponda del CEN, CDE Jalisco y CDE Zapopan
Presente:

Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente es para presentarles mi renuncia como militante del PARTIDO ACCION NACIONAL – PAN, de la manera más atenta solicito que se notifique al Instituto Nacional Electoral INE, esto con el fin de que no se me considere más como militante del Partido Acción Nacional – PAN, de la misma manera atenta solicito no ser contemplado en sus padrones de militantes, ni en sus listas de simpatizantes.

Para dicho propósito proporciono mis datos:

Sergio Pacheco Navarro

Municipio: Zapopan

Estado: Jalisco

Fecha de Afiliación: 17 de febrero de 1995

A continuación presento imágenes de mi situación en sus padrones y en el padrón obtenido del portal v Instituto Nacional Electoral – INE

1.- Padrón Nacional del Registro Nacional de Militantes.
datos obtenidos el 19 de octubre de 2017 del portal de www.rnm.mx



Registro Nacional de Militantes

Estado: Jalisco Municipio: Zapopan

Padrón: Pacheco Nombre(s): Sergio

Nuestros Afiliados

Fecha Alta	Padrón	Motivo	Nombre	Municipio
17/02/1995	PACHECO	NAVARRO	SERGIO	ZAPOCAN

1 de 2

2.- Actualización de Datos 2016 – 2017 Registro Nacional de Militantes (No actualice mis datos)
datos obtenidos el 19 de octubre de 2017 del portal de www.rnm.mx



Registro Nacional de Militantes

Estado: Jalisco Municipio: Zapopan

Clave de Elección: PCLV57151114-000

Militantes Actualizados

Padrón	Motivo	Nombre	Municipio	Actualización de datos
PACHECO	NAVARRO	SERGIO	ZAPOCAN	

3.- Datos obtenidos del Portal Web del Instituto Nacional Electoral 19 de octubre 2017.

ENTRADA	FECHA	ENTRADA	FECHA
22154 JALISCO	17/02/1995	22154 JALISCO	30/12/2015
22155 JALISCO	30/12/2015	22155 JALISCO	30/12/2015
22156 JALISCO	30/12/2015	22156 JALISCO	30/12/2015
22157 JALISCO	30/12/2015	22157 JALISCO	30/12/2015
22158 JALISCO	30/12/2015	22158 JALISCO	30/12/2015
22159 JALISCO	30/12/2015	22159 JALISCO	30/12/2015
22160 JALISCO	30/12/2015	22160 JALISCO	30/12/2015
22161 JALISCO	30/12/2015	22161 JALISCO	30/12/2015
22162 JALISCO	30/12/2015	22162 JALISCO	30/12/2015
22163 JALISCO	30/12/2015	22163 JALISCO	30/12/2015
22164 JALISCO	30/12/2015	22164 JALISCO	30/12/2015
22165 JALISCO	30/12/2015	22165 JALISCO	30/12/2015
22166 JALISCO	30/12/2015	22166 JALISCO	30/12/2015
22167 JALISCO	30/12/2015	22167 JALISCO	30/12/2015
22168 JALISCO	30/12/2015	22168 JALISCO	30/12/2015
22169 JALISCO	30/12/2015	22169 JALISCO	30/12/2015
22170 JALISCO	30/12/2015	22170 JALISCO	30/12/2015
22171 JALISCO	30/12/2015	22171 JALISCO	30/12/2015
22172 JALISCO	30/12/2015	22172 JALISCO	30/12/2015
22173 JALISCO	30/12/2015	22173 JALISCO	30/12/2015
22174 JALISCO	30/12/2015	22174 JALISCO	30/12/2015
22175 JALISCO	30/12/2015	22175 JALISCO	30/12/2015
22176 JALISCO	30/12/2015	22176 JALISCO	30/12/2015
22177 JALISCO	30/12/2015	22177 JALISCO	30/12/2015
22178 JALISCO	30/12/2015	22178 JALISCO	30/12/2015
22179 JALISCO	30/12/2015	22179 JALISCO	30/12/2015
22180 JALISCO	30/12/2015	22180 JALISCO	30/12/2015
22181 JALISCO	30/12/2015	22181 JALISCO	30/12/2015
22182 JALISCO	30/12/2015	22182 JALISCO	30/12/2015
22183 JALISCO	30/12/2015	22183 JALISCO	30/12/2015
22184 JALISCO	30/12/2015	22184 JALISCO	30/12/2015
22185 JALISCO	30/12/2015	22185 JALISCO	30/12/2015
22186 JALISCO	30/12/2015	22186 JALISCO	30/12/2015
22187 JALISCO	30/12/2015	22187 JALISCO	30/12/2015
22188 JALISCO	30/12/2015	22188 JALISCO	30/12/2015
22189 JALISCO	30/12/2015	22189 JALISCO	30/12/2015
22190 JALISCO	30/12/2015	22190 JALISCO	30/12/2015
22191 JALISCO	30/12/2015	22191 JALISCO	30/12/2015
22192 JALISCO	30/12/2015	22192 JALISCO	30/12/2015
22193 JALISCO	30/12/2015	22193 JALISCO	30/12/2015
22194 JALISCO	30/12/2015	22194 JALISCO	30/12/2015
22195 JALISCO	30/12/2015	22195 JALISCO	30/12/2015
22196 JALISCO	30/12/2015	22196 JALISCO	30/12/2015
22197 JALISCO	30/12/2015	22197 JALISCO	30/12/2015
22198 JALISCO	30/12/2015	22198 JALISCO	30/12/2015
22199 JALISCO	30/12/2015	22199 JALISCO	30/12/2015
22200 JALISCO	30/12/2015	22200 JALISCO	30/12/2015

PARTIDO POLÍTICO



PARTIDO ACCION NACIONAL

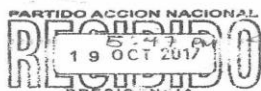
FECHA DE AFILIACIÓN

17/02/1995

Agradeciendo su atención, dejo mi correo electrónico serpacheco33@yahoo.com como vía de comunicación para cualquier asunto con la presente.

Atentamente.

Sergio Pacheco Navarro



Recibi copia de ING
Maura Rendon

2 de 2

De lo inserto, debe precisarse que:

- ❖ El documento se dirige al Director del Registro Nacional de Militantes y/o a quien corresponda del CEN, CDE Zapopan y CDE Zapopan, todos ellos pertenecientes al instituto político denunciado.
- ❖ En el documento aparecen datos personales del quejoso, tales como nombre completo, municipio, entidad federativa, fecha de afiliación; así como capturas de pantalla del Padrón Nacional del Registro Nacional de Militantes y Actualización de Datos 2016-2017; además, correo electrónico del quejoso, dicho documento en la parte inferior estampa lo que al parecer es su firma autógrafa.
- ❖ El ciudadano refiere que no actualizó sus datos durante el periodo de 2016 y 2017.
- ❖ En el documento aparece lo que parece ser la impresión de un sello en el que se lee: “Partido Acción Nacional, recibido con fecha de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete y en la parte de abajo Presidencia, Comité Directivo Estatal Jalisco” y abajo una firma, de Mayra Rendón, escribiendo recibí copia de INE.

En relación con este último punto, debe señalarse que, existe anotación respecto de la fecha en que la manifestación del ciudadano fue recibida por el Comité Directivo Estatal del partido político denunciado en Jalisco, lo cierto es que, al tratarse de un documento que se adjuntó al escrito de queja —del que sí se tiene evidencia que fue recibido el **diecinueve de octubre de dos mil diecisiete**—debe arribarse a la conclusión de que, el señalado oficio de desconocimiento no pudo ser presentado ante el órgano partidista en fecha posterior a la ya señalada.

Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, se advirtió que al cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso apareció en el padrón de militantes del *PAN* con afiliación válida, de conformidad con la información extraída del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, capturados por el propio partido político.

Enseguida, debe precisarse que, tanto en su escrito de respuesta al requerimiento de información de veintisiete de abril de dos mil dieciocho; así como, el del dieciséis de mayo ambos del presente año; además, en las documentales con las que desahogó el emplazamiento y la vista para alegatos —recibidas por esta autoridad electoral en fechas siete y veintitrés de mayo, seis y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho—, el *PAN* manifestó que Sergio Pacheco Navarro, estuvo afiliado anteriormente a ese instituto político, y afirmó haberlo dado de baja del padrón de afiliados el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en razón de que dicho ciudadano presentó su renuncia ante el referido instituto político.

Es decir, el *PAN* reconoce que se actualizó una causal de baja de militancia del ciudadano, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que el registro del quejoso debió ser dado de baja como afiliado del partido político denunciado.

Así, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantiene a **Sergio Pacheco Navarro** dentro de un padrón de afiliados, que, como se refirió, en términos de su normativa interna la renuncia es causa de baja de dicho padrón de militantes.

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que el hoy denunciante presentó la renuncia correspondiente, y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejoso	Presentación de la queja	Fecha en que presentó la renuncia al <i>PAN</i>	Tiempo transcurrido entre la presentación de la renuncia al <i>PAN</i> y la queja
Sergio Pacheco Navarro	12 de febrero de 2018 ⁵⁷	19 de octubre de 2017	3 meses aproximadamente

⁵⁷ Visible a página 37 del expediente.

Con base en lo expuesto, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de éste ciudadano como su militante**, en perjuicio del hoy quejoso, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darlo de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito se le formuló con ese propósito.

Por tanto, de conformidad con las constancias que fueron acompañadas por las partes en el procedimiento, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**; lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantuvo en contra de su voluntad a Sergio Pacheco Navarro dentro de un padrón de afiliados al cual no desea pertenecer, pese a que tuvo acceso completo a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,⁵⁸ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como

⁵⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación del denunciante debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,⁵⁹ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a Sergio Pacheco Navarro, así como por el uso indebido de sus datos personales.

Ahora, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

Con base en ello, lo procedente respecto al *PAN*, se le ordena que:

- 1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que el denunciante continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, se cancele su registro, con efectos a partir de que presentó su escrito de queja, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe

en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

2. En el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a Sergio Pacheco Navarro.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PAN*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido Político	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por acción y omisión del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución, del COFIPE, la LGIPE y la LGPP.</i>	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de Sergio Flores Eslava por parte del PAN , así como la omisión de cancelar el registro de Sergio Pacheco Navarro.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PAN* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **Sergio Flores Eslava**, sin demostrar que para incorporarlo medió la voluntad de éste de inscribirse como militante de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

Además, se acreditó que el *PAN* mantuvo indebidamente inscrito en su padrón de afiliados a **Sergio Pacheco Navarro**, no obstante que tal ciudadano presentó escrito de desafiliación manifestando su voluntad de no permanecer como militante de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de estas premisas, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Por otro lado, para el caso de **Sergio Pacheco Navarro**, quien presentó su renuncia al partido político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado lo cierto es que al momento que éste le manifestó su intención de ser dado de baja del registro de afiliados del *PAN* lo cual no fue atendido, implicó que no se atendiera la oposición manifiesta de éste sobre el tratamiento que debía dársele a esos datos, es decir, para aparecer en un padrón al cual no deseaba pertenecer, lo que de suyo constituye también un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral un número mínimo de militantes para la conservación de su registro.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito

diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁶⁰ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tales infracciones se cometieron en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, se acreditaron las infracciones siguientes:

- Al derecho político electoral de libertad de afiliación al partido político denunciado, sin demostrar el consentimiento previo para ello, y

⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

- Al derecho político electoral de libertad de desafiliación al *PAN*, el cual incluyó en su padrón de militantes al quejoso respecto del que se acreditó la conducta analizada y que mantuvo en ese padrón a Sergio Pacheco Navarro, quien previamente presentó su escrito de desafiliación.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** Respecto a la inclusión de **Sergio Flores Eslava** en el padrón de afiliados del *PAN*, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éste de pertenecer a las filas de dicho instituto político, las irregularidades en que incurrió el partido denunciado consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

Asimismo, el citado partido político dejó de observar los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al mantener contra su voluntad en su padrón de afiliados a Sergio Pacheco Navarro, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a la afiliación sin el consentimiento previo del ciudadano, mismo que se resume en la tabla siguiente:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Sergio Flores Eslava	17/02/2014

Por lo que respecta a Sergio Pacheco Navarro, ciudadano que presentó su escrito de renuncia a la militancia del *PAN*, y de la cual dicho partido no procedió a darle de baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la realización de la conducta, conforme se argumentó previamente, la fecha en que presentó la queja, esto es, el catorce de febrero del año en curso, sin que el denunciado realizara los trámites correspondientes a efecto de eliminarlo de su padrón de militantes.

Esta conclusión, encuentra sustento, *mutatis mutandis* en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-18/2018**,⁶¹ en lo que en lo conducente, se señala lo siguiente:

“(…)

Ante esta situación, la autoridad electoral razonó que la única certeza que tenía respecto a esta cuestión es que en la fecha en que se presentó la denuncia los ciudadanos se encontraban afiliados a Movimiento Ciudadano. Por ese motivo, tomó en consideración esa fecha (veintitrés de enero de dos mil quince) para efectos de resolver el procedimiento sancionador. Esta decisión tuvo como fin último dotar de objetividad y certeza a la resolución adoptada.

…

En ese sentido, la autoridad electoral tomó en cuenta la falta de elementos que le permitieran tener certeza respecto a un dato de importancia y, a partir de ello, se basó en un parámetro objetivo para establecer una fecha hipotética respecto a la afiliación de los ciudadanos,

⁶¹ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-18-2018.pdf

con la finalidad de brindar una solución adecuada al procedimiento sancionador (...)”

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Ciudadano	Entidad
1	Sergio Flores Eslava	Ciudad de México
2	Sergio Pacheco Navarro	Jalisco

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN*, como cualquier otro partido político, está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 de la *LGPP*.
- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.

- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia político-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*; 2, párrafo 1, incisos a y b, y 25, incisos a y e, de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una

controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento o que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) El quejoso adujo, en el caso a que se refiere el Apartado A, numeral 5, del Considerando TERCERO de esta Resolución, que no solicitó voluntariamente, en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PAN*.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.

- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

Por lo que respecta a la omisión de desafiliar al ciudadano que realizó la solicitud respectiva, también se considera dolosa la conducta, porque:

- 1) Sergio Pacheco Navarro alude que, no obstante que presentó su renuncia a la militancia de ese partido político, lo cierto es que el *PAN* no lo desafilió.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes de *PAN*.
- 3) El partido denunciado no demostró ni probó que la omisión en la desafiliación solicitada por el quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que el hecho de mantener el registro de afiliación de Sergio Pacheco Navarro fue debido y apegado a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que las conductas desplegadas por el *PAN*, se cometieron al afiliar indebidamente a **Sergio Flores Eslava**, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin; así como al mantener afiliado indebidamente a **Sergio Pacheco Navarro**, sin demostrar la voluntad de éste de permanecer inscrito en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los

ciudadanos mexicanos mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad del ciudadano quejoso de militar en ese partido político, y de demostrar que sí realizó la baja de su padrón de la que, en el caso, presentó su respectiva renuncia, en el supuesto, de demostrar la voluntad de éste de querer seguir perteneciendo a dicho instituto político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***⁶²

De lo expuesto se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

⁶² De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Sergio Flores Eslava al partido político, pues se comprobó que el PAN afilió a éste ciudadano, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad del mismo de pertenecer o estar inscrito a dicho instituto político.
- También se acreditó la infracción al derecho de libre afiliación y/o desafiliación de Sergio Pacheco Navarro al *PAN*, pues se comprobó que el denunciado no desafilió al ahora quejoso, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su agremiado de pertenecer nuevamente o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.

- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PAN*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación del hoy quejoso, así como el derecho de desafiliación de un ciudadano lo que constituye una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de las sanciones a imponer se debe diferenciar si se está ante una **indebida afiliación** o, ante una **violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado**.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos

personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tengan por acreditadas las faltas y la imputabilidad correspondiente, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía.⁶³

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de

⁶³ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron las infracciones consistentes en la afiliación sin consentimiento de Sergio Flores Eslava, así como la omisión de desafiliación de Sergio Pacheco Navarro atribuidas al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a, fracción II, de la **LGIPE**, consistente en una **MULTA, de manera individual, al partido político infractor y unitaria por cuanto hace a cada uno de los**

ciudadanos sobre quienes se cometieron las faltas acreditadas, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de manera individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,⁶⁴ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe*

⁶⁴ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

En ese sentido, como ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió en la afiliación sin el consentimiento de Sergio Flores Eslava, así como en la omisión de dar de baja a Sergio Pacheco Navarro, no obstante que éste manifestó su voluntad de no querer permanecer en el padrón de afiliados del PAN, por lo que estamos ante una falta cometida por omisión.

Con base en lo anterior, lo procedente es realizar un análisis por cada una de las conductas infractoras cometidas por el partido político denunciado, en dos apartados:

- **1) Conducta infractora consistente en la afiliación indebida de Sergio Flores Eslava y la utilización de sus datos personales por parte del PAN.**

A juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer senda **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al PAN, **por UN ciudadano que se acreditó fue afiliado indebidamente.**

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismo que al ser relacionado con la fecha de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por el ciudadano indebidamente afiliado, arrojan lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2014		
1	\$67.29	\$43,200.18
TOTAL		\$43,200.18
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización (con excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de cada uno de los ciudadanos que fueron afiliados indebidamente por el *PAN*, se obtiene lo siguiente:

El monto en pesos \$43,200.18 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$67.29 —sesenta y siete pesos 29/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 535.98 **(quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N., redondeado al segundo decimal)**

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

- **2) Conducta infractora consistente en omitir desafiliar a Sergio Pacheco Navarro, del *PAN*.**

Como se ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió en la omisión de dar de baja a Sergio Pacheco Navarro, no obstante que éste manifestó no querer permanecer en el padrón de afiliados del *PAN*, por lo que estamos en una falta cometida por omisión.

Por lo tanto, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto artículo 456, párrafo 1, inciso a, fracción II, de la **LGIFE**, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **trescientos veintiún días de Unidades de Medida y Actualización al *PAN*, por UN ciudadano que no fue desafiliado del instituto político de referencia.**

Lo anterior, pues conforme con lo previsto por el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la **LGIFE**, el parámetro de sanciones monetarias que se pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero de la *Constitución* –efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 10/2018, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, *al imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción*, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, la fecha que se tiene como referencia para la conducta en análisis, corresponde al año dos mil diecisiete y, que el valor de la Unidad de Medida y Actualización en esta anualidad es de \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).⁶⁵

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que corresponde al *PAN*, con base en lo expuesto a continuación:

No	Ciudadano	Año en que se realizó la conducta acreditada	Multa en UMAS	Valor de la UMA	Multa en pesos
1	Sergio Pacheco Navarro	2017	321	\$75.49	\$23,552.88

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

⁶⁵ <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/>

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que, respecto de la infracción cometida por el *PAN*, aun cuando causó un perjuicio al bien jurídico que el legislador buscó proteger, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información proporcionada por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho para el *PAN* —una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de \$68,076,540 (sesenta y ocho millones setenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano⁶⁶
2014	\$43,199.88	1	0.06%
2017	\$23,552.88	1	0.03%

Por consiguiente, la sanción impuesta a *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

⁶⁶ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁶⁷ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. Conforme con lo razonado en la presente determinación, los dos denunciantes en el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer al *PAN*; en tal sentido, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, cancele el registro de los quejosos como sus militantes, en el supuesto que continúen en su padrón de afiliados, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia.

⁶⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁶⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de **Sergio Flores Eslava**, en términos de lo establecido en el **numeral 5, Apartado A** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **PAN**, **una multa por la indebida afiliación de Sergio Flores Eslava**, conforme al monto que se indica a continuación:

No	Ciudadano	Sanción a imponer
1	Sergio Flores Eslava	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de **Sergio Pacheco Navarro**, en términos de lo establecido en el **numeral 5, apartado B** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

⁶⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SFE/CG/51/2018

CUARTO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa respecto de Sergio Pacheco Navarro, por haberse acreditado la falta ya señalada:**

No	Ciudadano	Sanción a imponer
1	Sergio Pacheco Navarro	321 (Trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$23,552.88 (Veintitrés mil quinientos cincuenta y dos pesos 88/100 M.N.) [ciudadano que presentó su renuncia en 2017]

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la *LGIPE*, el monto de la multa impuesta al **Partido Acción Nacional**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

SEXTO. Se vincula al **Partido Acción Nacional**, que, de ser el caso que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, y para lo cual se solicita la colaboración de la *DEPPP* a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del partido político denunciado, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SÉPTIMO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a un ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando TERCERO.

OCTAVO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal.

Notifíquese personalmente a Sergio Flores Eslava y a Sergio Pacheco Navarro, así como al **Partido Acción Nacional**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1358/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018
DENUNCIANTES: NORA HILDA PÉREZ CRUZ Y
OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018 INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE CUATRO CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

I. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron cuatro escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la presunta indebida afiliación de estos, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin:

No.	Nombre	Escrito de Queja
1	Nora Hilda Pérez Cruz	06 de marzo de 2018 ¹
2	Juan Manuel Daniel Lozano	06 de marzo de 2018 ²
3	Javier Mario Morales Ornelas	28 de febrero de 2018 ³
4	Joel Romero Juárez	09 de marzo de 2018 ⁴

II. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.⁵ El tres de abril de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018**, por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales por parte del *PAN*.

¹ Visible a página 002 del expediente.

² Visible a página 005 del expediente.

³ Visible a páginas 010-011 del expediente.

⁴ Visible a página 021 del expediente.

⁵ Visible a páginas 027-034 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PAN*, así como a los cuatro ciudadanos denunciantes.

III. Diligencias de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 03 de abril de 2018 ⁶		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/4044/2018 ⁷ 04 de abril de 2018	RPAN-0155/2018 ⁸ 09 de abril de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4045/2018 ⁹ 04 de abril de 2018	Correo electrónico de 09 de abril de 2018 ¹⁰

IV. Emplazamiento.¹¹ El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputan y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PAN</i> INE-UT/7378/2018 ¹²	Citatorio: 18 de mayo de 2018. ¹³ Cédula: 21 de mayo de 2018. ¹⁴ Plazo: 22 al 28 de mayo de 2018	RPAN-0326/2018 ¹⁵ 31 de mayo de 2018 Extemporánea

⁶ Visible a páginas 027-034 del expediente.

⁷ Visible a página 047 del expediente.

⁸ Visible a página 051-053 y anexo 054 (ambos lados) del expediente.

⁹ Visible a página 046 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 056-057 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 083-091 del expediente.

¹² Visible a página 106 del expediente.

¹³ Visible a páginas 098-105 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 107-108 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 113-115 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

V. Alegatos.¹⁶ El uno de junio de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
PAN INE-UT/8529/2018 ¹⁷	Citatorio: 04 de junio de 2018. ¹⁸ Cédula: 05 de junio de 2018. ¹⁹ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	RPAN-0379/2018 ²⁰ 12 de junio de 2018 Extemporánea

Denunciantes

Nº	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Nora Hilda Pérez Cruz INE/GTO/JDE08-VS/201/2018 ²¹	Cédula: 07 de junio de 2018. ²² Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	No formuló alegatos
2	Juan Manuel Daniel Lozano INE/GTO/JDE08-VS/202/2018 ²³	Cédula: 07 de junio de 2018. ²⁴ Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	No formuló alegatos
3	Javier Mario Morales Ornelas INE/VS/JD12/NL/0881/2018 ²⁵	Cédula: 07 de junio de 2018. ²⁶ Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	No formuló alegatos
4	Joel Romero Juárez INE-16JDE/VE/VS/722/2018 ²⁷	Cédula: 05 de junio de 2018. ²⁸ Plazo: 06 al 12 de junio de 2018.	No formuló alegatos

VI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

¹⁶ Visible a páginas 116-119 del expediente.

¹⁷ Visible a página 134 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 129-133 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 135-136 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 148-150 del expediente.

²¹ Visible a página 159 del expediente.

²² Visible a página 160 del expediente.

²³ Visible a página 162 del expediente.

²⁴ Visible a página 163 del expediente.

²⁵ Visible a página 153 del expediente.

²⁶ Visible a página 154 del expediente.

²⁷ Visible a página 141 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 142-143 del expediente.

VII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Quinta sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta,

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político y, en su caso, cancelación de su registro de militante.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta falta (afiliación indebida) de **Joel Romero Juárez** se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación del quejoso al **PAN** se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el **PAN**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,³⁰ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

³⁰ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

No obstante, para los casos correspondientes a Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas, la normatividad aplicable será la *LGIFE*, toda vez que la omisión del *PAN* de llevar a cabo la cancelación del registro de militantes de los quejosos, se realizó durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a **Joel Romero Juárez**, quien alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, y si violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de omisión de desafiliar a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa."

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35,

fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES***.³¹

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³² tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano,

³¹ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³² Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación — para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —

asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir

para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y

- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.

- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la

normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PAN, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de su Estatuto, en los términos siguientes:³³

Estatuto del PAN

“Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que, de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

³³ Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud **se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes **requisitos**:

- a) Ser ciudadano mexicano;
- b) Tener un modo honesto de vivir;
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
- d) **Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.

...

Artículo 12

1. Son obligaciones de los militantes del Partido:

...

- g) Mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Militantes, informando su cambio de domicilio, conforme a los datos registrados en el Instituto Nacional Electoral"

...

Artículo 59

1. El Registro Nacional de Militantes, es el órgano del Comité Ejecutivo Nacional encargado de administrar, revisar y certificar el padrón de todos los militantes del Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto por el Reglamento correspondiente.

2. Para su funcionamiento serán principios rectores la objetividad, certeza y transparencia. Tendrá la obligación de proteger los datos personales en términos de las leyes que sean aplicables.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

3. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

- a)** Recibir y, en su caso, aceptar las solicitudes de afiliación de los militantes del Partido;
- b)** Mantener actualizado el padrón de militantes y llevar el registro del cumplimiento de las obligaciones, deberes, sanciones y actividades de los militantes del Partido;
- c)** Informar trimestralmente a los comités del Partido, acerca de los ciudadanos que se hayan incorporado al padrón, de los movimientos, y de los que hayan sido dados de baja;
- d)** Expedir los listados nominales de electores para los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos, acuerdos y/o convocatorias correspondientes;
- e)** Expedir los listados nominales necesarios para la realización de las asambleas y elección de dirigentes partidistas;
- f)** Llevar el registro de integración de los órganos municipales, estatales y nacionales del Partido;
- g)** Llevar y mantener actualizada la base de datos de los simpatizantes del Partido;
- h)** Declarar la baja, a la que se refiere el artículo 13, párrafo 5, de estos Estatutos, previa audiencia, de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento correspondiente, la cual deberá ser notificada al Comité Ejecutivo Nacional;
- i)** Participar de la estrategia de afiliación en el Partido; y
- j)** Las demás que señalen los Reglamentos y acuerdos de la Comisión Permanente.

4. La Comisión Permanente designará, a propuesta de su Presidente Nacional, al Director del Registro Nacional de Militantes.

5. Los órganos estatales y municipales actuarán en auxilio del Registro Nacional de Militantes, y están obligados a proporcionar y atender sus requerimientos oportunamente, en los términos señalados por los Reglamentos, y proporcionar la información necesaria para su debida y eficiente administración y actualización.

6. El Registro Nacional de Militantes ceñirá su actuación al Reglamento que en materia de afiliación emita la Comisión Permanente.

7. Los funcionarios y órganos sustantivos y auxiliares que no registren o proporcionen la información de manera oportuna sobre el registro y actividades de los militantes, serán sancionados con base en lo establecido por el reglamento respectivo.

...”

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional³⁴

“Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

Artículo 2. El presente Reglamento norma lo siguiente:

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja
...

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

...
XXI. REFRENDO. Manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicables
...

Artículo 8. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.

Artículo 9. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación.
...

³⁴ Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

Artículo 12. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales.

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción.

En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación

en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.

...

Artículo 37. Es obligación de los militantes del Partido comunicar al Comité Directivo Municipal o Delegacional, Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que les corresponda, o en forma directa al Registro Nacional de Militantes, mediante los formatos autorizados, el trámite de cambio de domicilio o actualización de datos de la Credencial para Votar con Fotografía expedida por el Registro Nacional de Electores, presentando copia de la nueva credencial.

...

Artículo 58. El Registro Nacional de Militantes, conforme a las facultades establecidas en los Estatutos y en otros Reglamentos, tendrá las siguientes funciones:

- I.** Recibir, y en su caso aceptar, las solicitudes de afiliación de los militantes del Partido;
- II.** Incorporar al Padrón los registros de alta de militantes del Partido;
- III.** Mantener actualizado el Padrón de Militantes y llevar el registro del cumplimiento de las obligaciones, deberes, sanciones y actividades de los mismos;
- IV.** Supervisar que todas las instancias de afiliación del Registro Nacional de Militantes y sus auxiliares en los Comités Directivos Estatales y Comités Directivos Municipales, ajusten su actuación a las normas y procedimientos vigentes en la materia, realizando las investigaciones y auditorías de proceso, cuando sean necesarias, a fin de

determinar la existencia de conductas contrarias a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos;

V. Cuidar que la actividad de afiliación se desarrolle en un contexto de eficacia administrativa, instruyendo a las áreas de afiliación en la resolución de asuntos problemáticos relacionados, y emitiendo disposiciones pertinentes a efecto de conseguirla;

VI. Conocer de conflictos y controversias derivados de la afiliación, excepto las inconformidades sobre listados nominales, y elaborar los dictámenes y acuerdos correspondientes, así como conocer de los reclamos de solicitantes que se vean afectados en la atención de sus trámites;

VII. Tomar las medidas que garanticen la disponibilidad del trámite de afiliación, cuando éste no se esté prestando en las instancias facultadas para ello o se haga de manera irregular;

...

XIII. Informar trimestralmente a los Comités del Partido, acerca de los ciudadanos que se hayan incorporado al padrón, de los movimientos y de los que hayan sido dados de baja;

...

XVI. Emitir la declaratoria de baja cuando el militante no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos;

XVII. Participar de la estrategia de afiliación en el Partido;

...

XX. Instrumentar y desahogar los procedimientos a que hace referencia el presente Reglamento;

...

XXVIII. Las demás que señalen los Estatutos, el presente Reglamento y las que acuerde la Comisión Permanente Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional;

...

Artículo 72. Los militantes causarán baja del Padrón por los siguientes motivos:

...

I. Expulsión;

II. Declaratoria de expulsión;

...

IV. Renuncia;

...

El Registro Nacional de Militantes es la única instancia facultada para ejecutar las bajas que resulten de las fracciones anteriores, para lo cual requerirá los documentos necesarios para garantizar su debido procesamiento."

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados por falta de refrendo, entendiendo esto como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señale el Estatuto, Reglamentos y Acuerdos aplicables.
- El Registro Nacional de Militantes del *PAN* tendrá como facultad, entre otras, mantener actualizado el Padrón de Militantes y llevar el registro del cumplimiento de las obligaciones, deberes, sanciones y actividades de los mismos, así como emitir la declaratoria de baja cuando el militante no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados, por expulsión, declaratoria de expulsión y renuncia, entre otros motivos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *del PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada

en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁵ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS**

³⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SANCIONADORES ELECTORALES,³⁶ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁷ y como estándar probatorio.³⁸

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

³⁶. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁷ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁸ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³⁹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento o, en su caso, la omisión de su desafiliación, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP⁴⁰	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018⁴¹
1	Nora Hilda Pérez Cruz	06 de marzo de 2018 ⁴²	24/10/2000	Causó baja del padrón de militantes en virtud de procedimiento de expulsión

⁴⁰ Correo electrónico de 09 de abril de 2018. Visible a páginas 056-057 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 113-115 del expediente.

⁴² Visible a página 002 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁰	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018 ⁴¹
				04/05/2016
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que la afectada fue militante del <i>PAN</i>.</p> <p>En el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no desafiliarla.</p> <p>En el caso, la quejosa aduce que en el año 2015 el <i>PAN</i> elaboró un expediente bajo firmas falsas sobre su expulsión del partido, por lo que desde esa fecha se le han restringido sus derechos como militante.</p> <p>Además, manifiesta que, si el <i>PAN</i> no la considera su militante, <i>no le asiste ningún derecho a seguir usando su nombre y datos personales para su beneficio</i>, siendo que, de la revisión al portal electrónico del <i>INE</i>, advirtió que sigue registrada a dicho instituto político.</p> <p>El <i>PAN</i> manifestó que la ciudadana causó baja de su padrón de militantes en virtud del procedimiento de expulsión aplicado el 04 de mayo de 2016.</p> <p>En el caso, la ciudadana no aduce haber presentado una renuncia a su militancia, sino que el <i>PAN</i> con motivo de un procedimiento le ha restringido sus derechos de militante, razón por la cual considera no debe seguir apareciendo en los registros de ese instituto político.</p> <p>En principio, se podría considerar que no se actualiza una violación en materia de afiliación o desafiliación de la ciudadana al no existir controversia sobre su afiliación al partido político denunciado, ni existir una renuncia por parte de la quejosa a su militancia, respectivamente.</p> <p>Sin embargo, cobra relevancia lo manifestado por el partido político denunciado, en el sentido de que la ciudadana causó baja por procedimiento de expulsión el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo que, de la información proporcionada por la <i>DEPPP</i>, se desprende que la quejosa aún continúa registrada como afiliada al <i>PAN</i>.</p> <p>Esto es, no obstante que el propio partido político manifiesta que la ciudadana ha causado baja de su padrón de militantes con motivo de un procedimiento de expulsión, lo cierto es que el <i>PAN</i>, ha sido omiso en llevar a cabo la cancelación del registro de afiliada de la quejosa.</p> <p>Es por ello que, se considera que el <i>PAN</i> incumplió con su obligación de desafiliar a la ciudadana de mérito, en términos de su propia normativa.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁴³	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018 ⁴⁴
2	Juan Manuel Daniel Lozano	06 de marzo de 2018 ⁴⁵	24/10/2000	Causó baja del padrón de militantes en virtud de procedimiento de expulsión 04/05/2016
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PAN.</p> <p>En el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no desafiliarlo.</p> <p>En el caso, el quejoso aduce que en el año 2015 el PAN elaboró un expediente bajo firmas falsas sobre su expulsión del partido, por lo que desde esa fecha se le han restringido sus derechos como militante.</p> <p>Además, manifiesta que, si el PAN no lo considera su militante, <i>no le asiste ningún derecho a seguir usando su nombre y datos personales para su beneficio</i>, siendo que, de la revisión al portal electrónico del INE, advirtió que sigue registrado a dicho instituto político.</p> <p>El PAN manifestó que el ciudadano causó baja de su padrón de militantes en virtud del procedimiento de expulsión aplicado el 04 de mayo de 2016.</p> <p>En el caso, el ciudadano no aduce haber presentado una renuncia a su militancia, sino que el PAN con motivo de un procedimiento le ha restringido sus derechos de militante, razón por la cual considera no debe seguir apareciendo en los registros de ese instituto político.</p> <p>En principio, se podría considerar que no se actualiza una violación en materia de afiliación o desafiliación del ciudadano al no existir controversia sobre su afiliación al partido político denunciado, ni existir una renuncia por parte de la quejosa a su militancia, respectivamente.</p> <p>Sin embargo, cobra relevancia lo manifestado por el partido político denunciado, en el sentido de que el ciudadano causó baja por procedimiento de expulsión el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo que, de la información proporcionada por la DEPPP, se desprende que el quejoso aún continúa registrado como afiliado al PAN.</p> <p>Esto es, no obstante que el propio partido político manifiesta que el ciudadano ha causado baja de su padrón de militantes con motivo de un procedimiento de expulsión, lo cierto es que el PAN, ha sido omiso en llevar a cabo la cancelación del registro de afiliado del quejoso.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación.</p>				

⁴³ Correo electrónico de 09 de abril de 2018. Visible a páginas 056-057 del expediente.

⁴⁴ Visible a páginas 113-115 del expediente.

⁴⁵ Visible a página 005 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁶	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018 ⁴⁷
3	Javier Mario Morales Ornelas	28 de febrero de 2018 ⁴⁸ El ciudadano aportó copia simple de solicitud de afiliación Web de 10 de febrero de 2014, ⁴⁹ acuse original de escrito recibido el 28 de febrero de 2018, ⁵⁰ así como copia simple de escrito de renuncia recibida el 05 de diciembre de 2016. ⁵¹	19/12/2013	Causó baja por renuncia el 28/08/2016
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del <i>PAN</i>.</p> <p>En el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación.</p> <p>En el caso, el quejoso en su escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho ante la 12 Junta Distrital Ejecutiva del <i>INE</i> en Nuevo León, aduce que: <i>El diez de febrero de dos mil catorce, cause alta como militante del Partido Acción Nacional, luego presente renuncia el cinco de diciembre de dos mil quince</i>.</p> <p>Para comprobar lo anterior, el quejoso aportó copia simple del acuse de su escrito de renuncia a militancia al <i>PAN</i>, presentado ante el Comité Directivo Estatal en Nuevo León, en el que se advierte el sello de recibido del órgano partidario de referencia en la fecha señalada.</p> <p>El <i>PAN</i> afirmó que el ciudadano causó baja de su padrón de militantes por renuncia el 28 de agosto de 2016.</p> <p>No obstante, de la información proporcionada por la <i>DEPPP</i>, se desprende que el quejoso aún continúa como afiliado al partido denunciado.</p> <p>Esto es, no obstante que el propio partido político manifiesta que el ciudadano ha causado baja de su padrón de militantes con motivo de la renuncia presentada este, lo cierto es que el <i>PAN</i>, ha sido omiso en llevar a cabo la cancelación del registro de afiliado del quejoso.</p>				

⁴⁶ Correo electrónico de 09 de abril de 2018. Visible a páginas 056-057 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 113-115 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 010-011 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 014-016 del expediente.

⁵⁰ Visible a página 012 del expediente.

⁵¹ Visible a página 017 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁶	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018 ⁴⁷
En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁵²	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0326/2018 ⁵³
4	Joel Romero Juárez	09 de marzo de 2018 ⁵⁴ El quejoso aportó acta circunstanciada original de 09 de marzo de 2018, ⁵⁵ así como copia simple de oficio RNM-OF-010/2018. ⁵⁶	29/10/1999	Causó baja por renuncia el 17/11/2016
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante está registrado en el <i>PAN</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es importante destacar que si bien el <i>PAN</i> afirmó que el ciudadano causó baja de su padrón de militantes por renuncia el 17 de noviembre de 2016, lo cierto es que, en el caso, debió aportar la cédula de afiliación que diera sustento al registro de afiliación del quejoso, lo cual no aconteció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

Por lo que hace a las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

⁵² Correo electrónico de 09 de abril de 2018. Visible a páginas 056-057 del expediente.

⁵³ Visible a páginas 113-115 del expediente.

⁵⁴ Visible a página 021 del expediente.

⁵⁵ Visible a página 024 del expediente.

⁵⁶ Visible a página 025 del expediente.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en

todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan, en el caso de **Joel Romero Juárez**, una afiliación indebida atribuible al *PAN* y, en el caso de **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, por la omisión a darlos de baja de su padrón de afiliados, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en distintos apartados:

Apartado A. Ciudadanos sobre el que Sí se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados

Respecto a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, que los hoy quejosos se encuentran afiliados al *PAN*.

No obstante, Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas, se inconformaron por la omisión del *PAN* de desincorporarlos de su padrón de militantes.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate que, en algún momento, **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas se afiliaron libre y voluntariamente al *PAN***, con base en sus propias manifestaciones.

2. **Nora Hilda Pérez Cruz y Juan Manuel Daniel Lozano** manifestaron que desde el año dos mil quince el *PAN* les han restringido sus derechos como militantes, siendo que, de la revisión al portal electrónico del *INE*, advirtieron que siguen registrados a dicho instituto político.
3. El *PAN* manifestó que los ciudadanos **Nora Hilda Pérez Cruz y Juan Manuel Daniel Lozano** causaron baja de su padrón de militantes en virtud del procedimiento de expulsión aplicado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, sin embargo, de la información proporcionada por la *DEPPP*, se desprende que, por lo menos al nueve de abril de dos mil dieciocho, los quejosos aún continúan registrados como afiliados al *PAN*.
4. **Javier Mario Morales Ornelas** manifestó que el diez de febrero de dos mil catorce, causó alta como militante del *PAN*. Asimismo, adujo que el cinco de diciembre de dos mil dieciséis presentó escrito de renuncia a su militancia al *PAN*, para lo cual aportó copia simple del acuse de recepción del documento en mención, mismo que da sustento a su afirmación.
5. El *PAN* afirmó que el ciudadano **Javier Mario Morales Ornelas** causó baja de su padrón de militantes por renuncia el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo, de la información proporcionada por la *DEPPP*, se desprende que, por lo menos al nueve de abril de dos mil dieciocho, el quejoso aún continúa como afiliado al partido denunciado.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas como sus militantes**, en perjuicio de los hoy quejosos, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darlo de baja de su padrón de afiliados.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafilarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

Como se mencionó, en el caso de **Nora Hilda Pérez Cruz y Juan Manuel Daniel Lozano**, en principio, se podría considerar que no se actualiza una violación en materia de desafiliación de los ciudadanos ya que estos no presentaron un escrito de renuncia a su militancia.

Sin embargo, cobra relevancia lo manifestado por el partido político denunciado, en el sentido de que tales ciudadanos causaron baja de su padrón de afiliados por procedimiento de expulsión el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo que, de la información proporcionada por la *DEPPP*, se desprende que los quejosos, por lo

menos al nueve de abril de dos mil dieciocho, aún continúan registrados como afiliados al *PAN*.

Esto es, no obstante que el propio *PAN* llevó a cabo un procedimiento de expulsión de los ciudadanos **Nora Hilda Pérez Cruz y Juan Manuel Daniel Lozano**, dicho instituto político incumplió con su obligación de desafiliarlos, en términos de su propia normativa.

En efecto, dicho partido político reconoce que instauró procedimiento de expulsión de los ciudadanos de mérito y, con motivo de ello, se ordenó la baja de su registro de militantes en el año dos mil dieciséis, sin embargo, el *PAN* no realizó la cancelación correspondiente.

Por su parte, respecto a **Javier Mario Morales Ornelas**, el *PAN* afirmó que el ciudadano causó baja de su padrón de militantes por renuncia el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo, de la información proporcionada por la *DEPPP*, se desprende que el quejoso, por lo menos al nueve de abril de dos mil dieciocho, aún continúa como afiliado al partido denunciado.

Es decir, el *PAN* reconoce que en el dos mil dieciséis con motivo de un procedimiento de expulsión y, en su caso, por renuncia, procedió a dar de baja como sus militantes a los ciudadanos **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que, desde esa temporalidad debió llevar a cabo la cancelación del registro de los quejosos.

Así, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantiene a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas como sus militantes** dentro de su padrón de afiliados.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, el *PAN*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto político, siendo que ni siquiera, acreditó que el ciudadano de referencia estuvo en condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,⁵⁷ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

aquella esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación, ya sea pro procedimiento de expulsión o renuncia, según sea el caso, debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,⁵⁸ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo

⁵⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que los hoy denunciantes fueron dados de baja por el *PAN*, y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejoso	Queja	Fecha en que el <i>PAN</i> ordenó su baja por expulsión o renuncia	Tiempo transcurrido entre la fecha de baja y la presentación de la queja
Nora Hilda Pérez Cruz	06 de marzo de 2018 ⁵⁹	Baja por expulsión 04/05/2016	1 año 09 meses aproximadamente
Juan Manuel Daniel Lozano	06 de marzo de 2018 ⁶⁰	Baja por expulsión 04/05/2016	1 año 09 meses aproximadamente
Javier Mario Morales Ornelas	28 de febrero de 2018 ⁶¹	Baja por renuncia 28/08/2016	1 año 6 meses aproximadamente

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales al no desafiliar a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, violentando así su derecho de afiliación política, aunado a que, para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

Con base en lo expuesto, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de desafiliación en favor del denunciante que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

⁵⁹ Visible a página 002 del expediente.

⁶⁰ Visible a página 005 del expediente.

⁶¹ Visible a páginas 010-011 del expediente.

Apartado B. Ciudadano que fue afiliado indebidamente al PAN

Respecto a **Joel Romero Juárez**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

El *PAN* argumentó que dicho ciudadano ha sido dado de baja del registro de **militantes**, es decir, el partido político denunciado reconoce la afiliación del quejoso, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que el denunciante fue registrado en su padrón de militantes.

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que en ningún caso el *PAN* aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tal sujeto, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de Joel Romero Juárez por parte del *PAN* en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, siga manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue acreditado por el *PAN*.

Finalmente, es de referir que, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a ese ciudadano, registrado como militante del *PAN*.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PAN*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Joel Romero Juárez, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éste para permanecer agremiado a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, el denunciante que apareció afiliado al *PAN*, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁶²

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁶³

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en*

⁶² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁶³ De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

*actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁶⁴ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PAN*, en el caso analizado, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicho ciudadano haya dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa del denunciante de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad del hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que el quejoso aparezca como afiliado al *PAN* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos del quejoso en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar al ahora quejoso.

⁶⁴ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de Joel Romero Juárez, quejoso sobre el que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este *Consejo General* en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁶⁵ y SUP-RAP-137/2018,⁶⁶ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Finalmente, esta autoridad no desconoce que el partido político denunciado manifestó en sus diversos escritos por los cuales compareció al presente procedimiento, que realizó una destrucción de “archivo muerto” existente” hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, pero ello tampoco puede constituir una excluyente de responsabilidad para el *PAN*.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

⁶⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁶⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

En el caso, el partido político denunciado no exhibe constancia alguna de la que se pueda corroborar, de manera fehaciente, que dentro del “archivo muerto”, se hayan incluido, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa.

En síntesis, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Joel Romero Juárez.

Criterio similar sostuvo este *Consejo General* en la resolución INE/CG119/2018,⁶⁷ de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PAN*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

⁶⁷ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95142/CGor201802-28-rp-11-3.pdf>

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por acción y omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del COFIPE, en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de Joel Romero Juárez por parte del PAN , así como la omisión de cancelar el registro de Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el particular, se acreditó que el **PAN** incluyó o mantuvo indebidamente a Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano, Javier Mario Morales Ornelas y Joel Romero Juárez, en su padrón de afiliados, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse o mantenerse registrados como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la violación al derecho de libre afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida u omisión de desafiliación.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁶⁸ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes

⁶⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PAN**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PAN** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación a los institutos políticos, quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar que, en apartados subsecuentes, se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción en atención al número de personas sobre las que se violó su derecho de libre afiliación.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PAN**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE* disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, por lo siguiente:

- **Al incluir en su padrón de afiliados a Joel Romero Juárez.**
- En el caso de **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, al mantener su registro de militante, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las infracciones cometidas por el *PAN*, se realizaron conforme a lo siguiente:

- **Afiliación indebida**

Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación proporcionada por la DEPPP	Afiliado
Joel Romero Juárez	29/10/1999	Sí

- **Omisión de cancelar registro de afiliación**

Respecto a los ciudadanos siguientes, el partido político debió realizar los trámites correspondientes a efecto de eliminarlos de su padrón de militantes, conforme a lo siguiente:

Quejoso	Fecha en que el <i>PAN</i> ordenó su baja
Nora Hilda Pérez Cruz	Baja por expulsión 04/05/2016
Juan Manuel Daniel Lozano	Baja por expulsión 04/05/2016
Javier Mario Morales Ornelas	Baja por renuncia 28/08/2016

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadano	Entidad
1	Nora Hilda Pérez Cruz	Guanajuato
2	Juan Manuel Daniel Lozano	

No	Ciudadano	Entidad
3	Javier Mario Morales Ornelas	Nuevo León

No	Ciudadano	Entidad
4	Joel Romero Juárez	Estado de México

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con los artículos 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE* y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.

- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político o, en su caso, la omisión de desafiliación, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) **Joel Romero Juárez** aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PAN*.
- 2) El *PAN* manifestó que en el dos mil dieciséis dio de baja por procedimiento de expulsión a **Nora Hilda Pérez Cruz** y **Juan Manuel Daniel Lozano** y, en el caso de **Javier Mario Morales Ornelas**, por renuncia.
- 3) El *PAN* omitió cancelar el registro de afiliación de **Nora Hilda Pérez Cruz**, **Juan Manuel Daniel Lozano** y **Javier Mario Morales Ornelas**.
- 4) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
- 5) El partido político denunciado no demostró que la afiliación y, en su caso, el incluir o mantener en su padrón de afiliados a los ahora quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 6) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y, en su caso, la omisión de desafiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba

que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PAN**, se cometió al afiliar indebidamente a **Joel Romero Juárez**, sin demostrar al acto volitivo tanto de ingresar y, en el caso de **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, de permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudiera haber incurrido el **PAN**, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del **COFIPE**, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la **LGIPE**, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁶⁹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PAN**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

⁶⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de cuatro ciudadanos por parte del *PAN*.
- Se comprobó que el *PAN* **afilió a Joel Romero Juárez**, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente.
- Se comprobó que el *PAN* **no desafilió**, en dos mil dieciséis a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, sin demostrar que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer nuevamente o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante

de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la afiliación indebida de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PAN*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no desafiliarlos.**

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁷⁰

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la

⁷⁰ Véase la Tesis **XXVIII/2003**, del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el **PAN** se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que se actualizó la violación al derecho a la libre afiliación tanto en su vertiente de

afiliación indebida de **Joel Romero Juárez** como en su vertiente de no desafiliar a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**, al ser omiso el partido político denunciando en darlos de baja.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PAN**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la **LGPE**, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los cuatro ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

▪ **Afiliación indebida**

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con

clave SUP-RAP-047/2018⁷¹ y SUP-RAP-137/2018,⁷² respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

- **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado**

Cabe referir que ha sido criterio de este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018,⁷³ de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, esto es por violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados, sancionar con una multa equivalente a **321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al PAN, por UN ciudadano que no fue desafiliado o, en su caso, Unidad de Medida y Actualización**, conforme al año en que aconteció la infracción.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, y que, en la especie, el **PAN afilió indebidamente a Joel Romero Juárez**, y respecto a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas violó su derecho a la libre afiliación al mantenerlos en su padrón de militantes utilizando para ello sus datos personales**, por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de manera individualizada la multa que corresponda.

⁷¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁷² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

⁷³ Consultable en la página de internet del *INE* o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96450/CGor201806-20-rp-16-10.pdf>

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁷⁴ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas**, conforme a lo siguiente:

- **Afiliación indebida**

642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta.

⁷⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

- **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión de la conducta.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación u omisión de desafiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos, arrojan lo siguiente:

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo/UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 1999		
1	\$34.45	\$22,116.90
Omisión de desafiliación en 2016		
3	\$73.04 UMA	\$70,337.52
TOTAL		\$92,454.42 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

No.	Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación u omisión de desafiliación	Salario Mínimo/UMA	Monto por Ciudadano
1	Nora Hilda Pérez Cruz	04/05/2016	\$73.04 UMA	\$23,445.84
2	Juan Manuel Daniel Lozano	04/05/2016	\$73.04 UMA	\$23,445.84
3	Javier Mario Morales Ornelas	28/08/2016	\$73.04 UMA	\$23,445.84
4	Joel Romero Juárez	29/10/1999	\$34.45	\$22,116.64
TOTAL				\$92,454.16 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al **PAN**, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁷⁵ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 1999	642	274.40	1	274.40
\$34.45				

⁷⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

El monto antes referido, corresponde a 274.40 (doscientos setenta y cuatro punto cuarenta) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a **\$22,116.64 (veintidós mil ciento dieciséis pesos 64/100 M.N.)** [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

A la cifra anterior, debemos sumar el monto correspondiente a **tres** ciudadanos que no fueron desafiliados en 2016, sobre el cual se debe imponer la multa al **PAN**, de manera directa con la Unidad de Medida y Actualización vigente en ese año, siendo esta de \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.), lo que equivale a **\$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.)** [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Así, de la suma de las cantidades de **\$22,116.64** (veintidós mil ciento dieciséis pesos 64/100 M.N.) y **\$70,337.52** (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.), se obtiene la cifra final siguiente:

- **\$92,454.16** (noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.).

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PAN** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PAN**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PAN** recibiría mensualmente en el presente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de octubre 2018
PAN	\$68,993.261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE OCTUBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68,993,261.00	\$916,721.00	\$0.00	\$68,076,540.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PAN**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano.⁷⁶	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PAN	1999	\$22,116.64	1	%0.03
	2016 (Desafiliación)	\$23,445.84	3	%0.03

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PAN** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

⁷⁶ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PAN** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁷⁷, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite, cancele su registro, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

⁷⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁷⁸ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PAN*, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a **Nora Hilda Pérez Cruz, Juan Manuel Daniel Lozano y Javier Mario Morales Ornelas**.

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁷⁹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

⁷⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

⁷⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PAN**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **cuatro ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **PAN**, una multa por la afiliación indebida u omisión de desafiliación de cada uno de los **cuatro ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

No	Ciudadano	Importe de la multa
1	Nora Hilda Pérez Cruz	321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$23,445.84 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) [Ciudadana no desafiada en 2016]
2	Juan Manuel Daniel Lozano	321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$23,445.84 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) [Ciudadano no desafiado en 2016]
3	Javier Mario Morales Ornelas	321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$23,445.84 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.) [Ciudadano no desafiado en 2016]
4	Joel Romero Juárez	274.40 (doscientos setenta y cuatro punto cuarenta) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$22,116.64 (veintidós mil ciento dieciséis pesos 64/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético] [Ciudadano afiliado indebidamente en 1999]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JMDL/JL/GTO/78/2018

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LG/PE*, el monto de la multa impuesta al **PAN**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a tres ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando CUARTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos que se indican a continuación:

No.	Nombre
1	Nora Hilda Pérez Cruz
2	Juan Manuel Daniel Lozano
3	Javier Mario Morales Ornelas
4	Joel Romero Juárez

Así como al **PAN**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Corresponde el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 3.5._____

La Consejera Electoral Pamela San Martín lo reservó y le cedo el uso de la palabra.____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente._____

En primer lugar, sólo señalar que le pediré al Secretario Ejecutivo 2 votaciones en lo particular, que tiene que ver con la reiteración también en este caso y con el tema del desistimiento que no he compartido y que hemos discutido en distintos casos. Esas 2 votaciones tendrían que ser separadas por los criterios que hemos sostenido, pero, en lo particular._____

La razón por la que reservé este apartado para discusión, la comenté con la Consejera Electoral Claudia Zavala, con el Consejero Electoral Benito Nacif y con la Consejera Electoral Adriana Favela, que son integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, porque no pude estar presente el día que sesionó la Comisión de Quejas y Denuncias y hay un caso que me parece que se tendría que escindir de este punto, porque tiene implicaciones distintas de las que se estarían considerando._____

Es el caso de un ciudadano que nos dicen en el Proyecto de Resolución que no presentó formalmente denuncia, sino que, lo que presentó fue un escrito de desconocimiento de afiliación._____

Estamos ante el caso de un aspirante a Capacitador Asistente Electoral que con motivo de su participación en el procedimiento de contratación como Capacitadores Asistentes Electorales, presentó él la solicitud de la constancia de desconocimiento de afiliación y ésta se remitió._____

¿Por qué no se envió la queja cuando en esa estrategia era, digamos, una parte del requisito? No lo sé, pero cuál es el problema y por qué me preocupa que el tratamiento que le demos a un escrito de desconocimiento de afiliación no implique llevar a cabo una investigación, precisamente por los términos que tenemos la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral de este año. _____

En la Estrategia de Capacitación de este año, ya no estamos incluyendo la obligación de establecer el escrito de denuncia, sin embargo, el escrito de desconocimiento de afiliación nos lleva a un doble procedimiento: _____

Por un lado, sí contratamos al aspirante si cumple con los demás requisitos, etcétera; y por otro lado, le damos vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso, porque si resulta que sí estaba afiliado, es una causal de rescisión del Contrato para el Capacitador Asistente Electoral. _____

Si resulta que no estaba afiliado, se sanciona al partido político por una afiliación indebida, etcétera. _____

Pero, si no lleváramos a cabo la investigación, no le podríamos dar cauce a esta vista que nos van a estar dando nuestras Juntas, por lo que propondría es escindir esto para que en casos de esta naturaleza, el escrito de desconocimiento de afiliación sea la base para llevar a cabo la investigación, en los mismos términos. _____

Si resulta que el partido político envía la Constancia de Afiliación, se le dará vista al ciudadano para que manifieste lo que a su derecho convenga y en principio se tomará como una afiliación válida. _____

Si el partido político correspondiente no puede generar la Constancia de Afiliación, es decir, la Constancia que acredite la afiliación debida, entonces se seguirá el procedimiento para emitir la sanción correspondiente. _____

Esto, insisto, no lo pude señalar en la Comisión de Quejas y Denuncias, pero lo comenté con los propios integrantes de la misma, para que en este caso pudiésemos escindir este caso específico, o sea, en este Proyecto de Resolución, y llevar a cabo la

investigación correspondiente y esto, nos llevaría a que en futuros casos ése sea el criterio que adopte la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, el tema de las afiliaciones indebidas es un tema en el cual hemos tomado una política de sancionarlo con mayor contundencia, de investigarlo porque se trata de la limitación de derechos que acarrea el hecho de que los partidos políticos puedan, sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley, afiliar a un ciudadano. _____

Entonces, me parece que lo que pide la Consejera Electoral Pamela San Martín es que el escrito de desconocimiento de la afiliación sea tomado por la Unidad Técnica de lo Contencioso como razón suficiente para iniciar un procedimiento, hacer la investigación, y en caso de que se confirme, se sancione. _____

En este caso, no se le dio ese tratamiento al desconocimiento de la afiliación, esencialmente si el ciudadano está diciendo: “a mí no me afiliaron”, “nunca me afilié a ese partido político”. _____

La Unidad Técnica de Fiscalización, y la Comisión también es bueno, dado que estrictamente no es una queja no hago la investigación. _____

Lo que la Consejera Electoral Pamela San Martín propone es inicia el procedimiento, tómallo como un hecho que amerita una investigación y conviértelo en una queja. Me parece que esto es consistente con una serie de medidas que hemos ido adoptando en este Consejo General para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar las afiliaciones indebidas. _____

Por esa razón, a mí me parece pertinente lo que propone la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

No escuché ninguna objeción a la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín en términos de su propuesta de escindir. _____

Por lo que si estoy bien la sometería a la consideración en lo general dentro del Proyecto y 2 votaciones en lo particular, no sé si en este caso podría ir en una sola por el criterio de reiteración y sanción, es decir, voy a someter a la consideración 2 votaciones en lo particular por cada uno de los criterios. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 3.5, tomando en consideración en esta votación en lo general la escisión del caso que planteó la Consejera Electoral Pamela San Martín en su intervención y separando de esta votación en lo general por lo que hace a los criterios de reiteración y sanción. _____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, primero como viene en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, en el sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora en lo particular por lo que hace al desistimiento. _____

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución por lo que hace al desistimiento, como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto de Resolución. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1359/2018) Pto. 3.5 _____

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

INE/CG1359/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018
DENUNCIANTES: AGUSTÍN PEÑA
CASTELLANOS Y OTROS
DENUNCIADO: MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DE MORENA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

GLOSARIO	
<i>IFE</i>	Instituto Federal Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGSMI</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>MORENA</i>	Partido político MORENA
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

R E S U L T A N D O

I. Denuncias. En fechas diversas, se recibieron en la *UTCE* sendos escritos de queja signados por los ciudadanos que a continuación se enlistan, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la utilización de sus datos personales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No.	Nombre del quejoso	Fecha
1	Agustín Castellanos Peña ¹	01/02/2018
2	José Rafael Avalos Pérez ²	02/02/2018
3	Fernando García Gallardo ³	02/02/2018
4	Alma Lucia Almanza Antonio ⁴	06/02/2018
5	Ana Dennis Rex Javier ⁵	06/02/2018
6	Jesús Manuel Aguilar Loya ⁶	07/02/2018
7	Susana García Soto ⁷	08/03/2018
8	Francisco Javier Frías Soveranez ⁸	07/02/2018
9	Alejandro de Dios Peralta ⁹	07/02/2018
10	Franco Álvarez Rodríguez ¹⁰	07/02/2018
11	Pedro Rocha Morales ¹¹	07/02/2018
12	Adriana del Carmen Salvador Hernández ¹²	08/02/2018
13	Kenia Samantha Uc Chi ¹³	08/02/2018
14	Luis Miguel López Pérez ¹⁴	09/02/2018
15	Oliva Santos Rojas ¹⁵	10/02/2018
16	Isaías Mis Ay ¹⁶	12/02/2018
17	Eduardo Osornio Serrano ¹⁷	12/02/2018

II. Radicación, admisión y reserva de emplazamiento.¹⁸ El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

¹ Visible a foja 4 del expediente

² Visible a foja 11 del expediente

³ Visible a foja 18 del expediente

⁴ Visible a foja 32 del expediente

⁵ Visible a foja 37 del expediente

⁶ Visible a foja 49 del expediente

⁷ Visible a fojas 58, 59, 210 y 211 del expediente

⁸ Visible a foja 68 del expediente

⁹ Visible a foja 72 del expediente

¹⁰ Visible a foja 76 del expediente

¹¹ Visible a foja 80 del expediente

¹² Visible a foja 90 del expediente

¹³ Visible a foja 98 del expediente

¹⁴ Visible a foja 110 del expediente

¹⁵ Visible a foja 119 del expediente

¹⁶ Visible a foja 122 del expediente

¹⁷ Visible a foja 129 del expediente

¹⁸ Visible a fojas 132 a 143 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador, respecto de Agustín Castellanos Peña, José Rafael Avalos Pérez, Alma Lucía Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Franco Álvarez Rodríguez, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano.

De igual forma, se recibió escrito de Susana García Soto, no obstante, el mismo carecía de firma, razón por la cual, en el citado proveído, se le formuló prevención a efecto de que subsanará dicha omisión, apercibida que, de no subsanarla se le tendría por no presentada la denuncia.

Posteriormente, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho¹⁹, se admitió a trámite el escrito de queja de Susana García Soto, toda vez que desahogó en tiempo y forma la prevención que se le formuló a través del acuerdo de veintitrés de febrero del mismo año.

Por otra parte, se recibió el escrito signado por Fernando García Gallardo; sin embargo, al no advertirse, en principio, la intención de éste de presentar una queja o denuncia por actos o hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa electoral, como lo es la indebida afiliación, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se formuló requerimiento a la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México de este Instituto, a efecto de que remitiera el escrito de queja del ciudadano en mención.

En ese sentido, la Vocal Ejecutiva de dicho órgano desconcentrado informó que el ciudadano en comento, formalmente, no presentó queja, sino únicamente el descrito mediante el cual desconocía la afiliación al partido político hoy denunciado; razón por la cual, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho, la *UTCE*, ordenó remitir dicho escrito con sus respectivos anexos, al instituto político denunciado, para que fuera éste quien determinara lo que en derecho correspondiera.

¹⁹ Visible a fojas a 311 a 322 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

En todos los casos, se reservó el respectivo emplazamiento a las partes, hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

III. Diligencias de investigación preliminar. Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del procedimiento indicado, en las fechas que se indican en el cuadro siguiente se acordaron las diligencias que se señalan.

Fecha del acuerdo	Sujeto requerido	No. de oficio y notificación	Fecha de respuesta
23/02/2018 ²⁰	DEPPP	INE-UT/1911/2018 ²¹ 26 de febrero de 2018	27/02/2018 Correo electrónico ²²
	MORENA	INE-UT/1912/2018 ²³ 26 de febrero de 2018	01/03/2018 Oficio REPMORENAINE-079/18 ²⁴
20/03/2018 ²⁵	DEPPP	INE-UT/3568/2018 ²⁶ 21 de marzo de 2018	26/03/2018 Correo electrónico ²⁷
	MORENA	INE-UT/3569/2018 ²⁸ 21 de marzo de 2018	25/03/2018 Oficio REPMORENAINE-115/18 Solicitud de prórroga ²⁹
02/04/2018 ³⁰	MORENA	INE-UT/3989/2018 ³¹ 02 de abril de 2018	05/04/2018 Oficio REPMORENAINE-138/18 ³²
30/04/2018 ³³	MORENA	INE-UT/5922/2018 ³⁴ 02 de mayo de 2018	07/05/2018 Oficio REPMORENAINE-230/18 ³⁵

²⁰ Visible a fojas a 132 a 143 del expediente

²¹ Visible a foja 158 del expediente

²² Visible a fojas 173 a 175 del expediente

²³ Visible a foja 155 del expediente

²⁴ Visible a fojas 179 a 192 del expediente

²⁵ Visible a fojas 311 a 322 del expediente

²⁶ Visible a foja 336 del expediente

²⁷ Visible a fojas 343 a 344 del expediente

²⁸ Visible a foja 331 del expediente

²⁹ Visible a foja 342 del expediente

³⁰ Visible a fojas 347 a 352 del expediente

³¹ Visible a 356 del expediente

³² Visible a fojas 360 a 362 del expediente

³³ Visible a fojas 368 a 375 del expediente.

³⁴ Visible a foja 382 del expediente

³⁵ Visible a fojas 387 a 389 del expediente

IV. Desistimiento de la queja de José Rafael Avalos Pérez. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el notificador adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se presentó en el domicilio de José Rafael Avalos Pérez, para efecto de notificarle el auto de veintitrés de febrero del presente año, al momento de efectuar dicha diligencia, el ciudadano manifestó “Ya no es de mi interés seguir con el procedimiento”.

Atento a lo anterior, el siete de junio del presente año se dictó acuerdo³⁶ en el que se ordenó al referido ciudadano ratificará su desistimiento de la queja, apercibido que, de no hacerlo, se le tendría por ratificado. En este tenor, al no atender el requerimiento, mediante proveído de cinco de julio de la presente anualidad, se tuvo por ratificado su desistimiento.

V. Emplazamiento al Partido Político MORENA.³⁷ El cinco de julio de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar al partido político MORENA, a través de su representante propietario ante el *Consejo General* de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
MORENA INE-UT/11392/2018 ³⁸	Cédula: 10 de julio de 2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018	Escrito 17/07/2018. ³⁹

VI. Alegatos.⁴⁰ Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente

³⁶ Visible a fojas 390 a 393 del expediente

³⁷ Visible a fojas 405 a 411 del expediente.

³⁸ Visible a foja 418 del expediente.

³⁹ Visible a fojas 425 a 431 del expediente.

⁴⁰ Visible a fojas 432 a 438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
MORENA INE-UT/11886/2018 ⁴¹	Cédula: 25 de julio de 2018 Plazo: 26 de julio al 01 de agosto de 2018	01/08/2018 Escrito ⁴²

Denunciantes

Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Agustín Castellanos Peña INE-UT/11887/2018 ⁴³	Citatorio: 25 de julio de 2018 Cédula: 26 de julio de 2018 Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	Sin respuesta
Eduardo Osornio Serrano INE/VED/0704/2018 ⁴⁴	Cédula: 26 de julio de 2018 Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	Sin respuesta
Oliva Santos Rojas INE/-JDE39-MEX/VS/1937/2018	Citatorio: 25 de julio de 2018 Cédula: 26 de julio de 2018 Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	Sin respuesta
Francisco Javier Frías Soveranez INE/JDE05TAB/2400/2018	Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Sin respuesta
Alejandro De Dios Peralta INE/JDE05TAB/2401/2018 ⁴⁵	Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Sin respuesta
Franco Álvarez Rodríguez INE/JDE05TAB/2402/2018 ⁴⁶	Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Escrito ⁴⁷
Isaías Mis Ay	Cédula: 30 de julio de 2018	Sin respuesta

⁴¹ Visible a foja 445 del expediente

⁴² Visible a fojas 480 a 485 del expediente

⁴³ Visible a fojas 452 a 464 del expediente

⁴⁴ Visible a fojas 468 a 471 del expediente

⁴⁵ Visible a fojas 495 a 501 del expediente

⁴⁶ Visible a fojas 502 a 508 del expediente

⁴⁷ Visible a foja 527 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE/JDE/01/VE/718/2018 ⁴⁸	Plazo: 31 de julio al 06 de agosto de 2018	
Jesús Manuel Aguilar Loya INE/JD02/VE/301/2018 ⁴⁹	Cédula: 01 de agosto de 2018 Plazo: 02 al 06 de agosto de 2018	Sin respuesta
Pedro Rocha Morales INE/JD02/VE/300/2018 ⁵⁰	Cédula: 31 de julio de 2018 Plazo: 03 al 07 de agosto de 2018	Sin respuesta
Luis Miguel López Pérez INE-UT-NOT/JD08/VS/0722/2018 ⁵¹	Citatorio: 26 de julio de 2018 Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Sin respuesta
Susana García Soto INE/DGO/JD04/VS/0509/2018 ⁵²	Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Sin respuesta
Ana Dennis Rex Javier INE-QROO/JDE/03/VE/0458/2018 ⁵³	Cédula: 26 de julio de 2018 Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	Sin respuesta
Adriana Del Carmen Salvador Hernández INE-QROO/JDE/03/VE/0459/2018 ⁵⁴	Citatorio: 26 de julio de 2018 Cédula: 27 de julio de 2018 Plazo: 28 de julio al 03 de agosto de 2018	Sin respuesta
Kenia Samantha Uc Chi INE-QROO/JDE/03/VE/0460/2018 ⁵⁵	Cédula: 26 de julio de 2018 Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	Sin respuesta
Alma Lucia Almanza Antonio INE/JDE09/879/2018 ⁵⁶	Cédula: 17 de agosto de 2018 Plazo: 20 al 24 de agosto de 2018	Sin respuesta

VII. Desistimiento de la queja de Franco Álvarez Rodríguez. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, Franco Álvarez Rodríguez presentó escrito de desistimiento de la queja, ante la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Tabasco.

⁴⁸ Visible a fojas 509 a 525 del expediente

⁴⁹ Visible a foja 529 a 532 del expediente

⁵⁰ Visible a foja 533 a 538 del expediente

⁵¹ Visible a foja 541 a 564 del expediente

⁵² Visible a foja 565 a 567 del expediente

⁵³ Visible a foja 570 a 572 del expediente

⁵⁴ Visible a foja 573 a 583 del expediente

⁵⁵ Visible a foja 584 a 586 del expediente

⁵⁶ Visible a foja 601 a 606 del expediente

Atento a lo anterior, el dieciséis de agosto del presente año se dictó acuerdo en el que se ordenó dar vista al referido ciudadano a fin de que ratificará su desistimiento de la queja, apercibido que, de no hacerlo, se le tendría por ratificado.

Dicho acuerdo le fue notificado al citado quejoso el día veinte siguiente, a través del oficio INE/JDE05TAB/2623/2018⁵⁷, sin que el mismo haya dado respuesta a lo anterior.

VIII. Elaboración del Proyecto de Resolución. En su oportunidad, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto.

IX. Sesión de la *Comisión de Quejas y Denuncias*. En la Octogésima Quinta sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, respecto de las conductas que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos obligados a la misma.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2 y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en los diversos 2, párrafo 1, inciso a) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGIPE*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de

⁵⁷ Visible a foja 609 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

datos personales, por parte de MORENA, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, incisos a) y e) de la LGPP, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida a *MORENA*, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017⁵⁸ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.

⁵⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

- Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469 de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que en todos los casos el registro o afiliación de los quejosos al partido político *MORENA*, se realizó antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los *Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente en el registro realizado en ese periodo se advierte la aparición de los quejosos en el partido político *MORENA*.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas procesales contenidas en la *LGIPE*,⁵⁹ y en el *reglamento*.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro ***RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES***.⁶⁰

TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, en relación con el artículo 46, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*, debe verificarse si se actualiza alguna causal de sobreseimiento de las previstas en dicha normatividad, pues de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Por lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 465, párrafo 8, inciso c), de la *LGIPE*, en relación con lo dispuesto en el artículo 46, párrafo 3, fracción III del *Reglamento de Quejas*, esta autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento contempladas en la normatividad electoral.

En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la *LGIPE* se actualiza cuando *habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia*.

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia.

En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento por desistimiento, prevista en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE* y 46, párrafo 3, fracción III del *Reglamento de Quejas*, que, en lo que interesa, a la letra establecen:

⁵⁹ Al respecto, resultan aplicables las **jurisprudencias** del Poder Judicial de la Federación de rubros: ***RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL.***, Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 30; ***RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES***, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, tesis I.8° C. J/1, Página 178 y ***DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY***, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172.

⁶⁰ Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 466.

...

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Artículo 46.

...

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Lo anterior, tomando en consideración que obra en autos manifestación hecha por **José Rafael Avalos Pérez,⁶¹ y escrito de Franco Álvarez Rodríguez⁶², por medio de los cuales se desisten de la queja y/o denuncia que dio pauta para la instauración del presente procedimiento administrativo sancionador** y que, además, se estima que los hechos denunciados no revisten gravedad, ni tampoco con su comisión pueden verse afectados los principios rectores de la función comicial.

En efecto, en la constancia de notificación del auto de veintitrés de febrero del presente año, realizada por el notificador adscripto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se advierte que José Rafael Avalos Pérez manifestó su intención desistirse de la queja presentada el dos de febrero del año en curso, en que refiere textualmente lo siguiente:

“Ya no es de mi interés seguir con el procedimiento”

Conforme a lo anterior, el siete de junio de dos mil dieciocho, se acordó requerir al referido ciudadano, con el propósito de que ratificara su intención de desistirse de

⁶¹ Visible a foja 164 a 165 del expediente

⁶² Visible a foja 527 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

la queja, a fin de tener certeza sobre la autenticidad de su manifestación y cerciorarse de la identidad de quien se desiste, saber si preservaba su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició o, en su caso, realizara las manifestaciones que a sus intereses conviniera.

Dicho proveído le fue notificado al denunciante el ocho de junio del presente año, por lo que su plazo corrió del once al trece de ese mes y año, sin que se haya recibido respuesta por parte del ciudadano denunciante. Sin embargo, al momento de que le fue notificado el acuerdo de mérito, expresó lo siguiente:

“como lo manifesté anteriormente ya no tengo ningún interés en continuar con el presente asunto”⁶³

Respecto al ciudadano **Franco Álvarez Rodríguez**, el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, presentó ante la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Tabasco, escrito por el que hizo del conocimiento de esta autoridad electoral nacional, su intención de desistirse de la queja que dio origen al procedimiento sancionador ordinario al rubro citado.

El contenido de dicho escrito, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

Deseo manifestar que desisto de esta demanda y quiero que quede sin efecto, porque no quiero causar de ninguna manera más molestias de mi parte a nadie, ya que lo que buscaba humanamente, si pudieran emplearme como supervisor... y deseo desistir de todo acto y este expediente...

Con base a lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se acordó requerir al referido ciudadano, con el objeto de que ratificara el contenido de su escrito de referencia, a fin de tener certeza sobre la autenticidad de su escrito y cerciorarse de la identidad de quien se desiste, saber si preservaba su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició o, en su caso, realizara las manifestaciones que a sus intereses conviniera.

El anterior proveído le fue notificado al denunciante el veinte de agosto del presente año, por lo que su plazo corrió del veintiuno al veintitrés de ese mes y año, sin que se haya recibido respuesta por parte del ciudadano.

Sirvió de apoyo como criterio orientador, la Tesis **I.5o.A.22 A**, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:

⁶³ Visible a foja 398 a 399 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

“DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE ORDENAR SU RATIFICACIÓN.⁶⁴ El artículo 230, párrafo final, del Código Fiscal de la Federación establece que el Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier diligencia, lo que revela la facultad a aquél conferida para ordenar, sin limitación alguna, la práctica de cualquier diligencia con relación a los hechos controvertidos; luego, **en aras de la observancia a las formalidades esenciales del procedimiento debe ordenar la ratificación del escrito de desistimiento del juicio, aun cuando en las leyes aplicables al caso no se prevea disposición alguna en ese sentido.** Lo anterior porque ese vacío de la ley no debe llevar a la autoridad a tener al actor por desistido del juicio, dado que tratándose de la renuncia de un derecho es necesario requerir al autor el escrito en donde se manifiesta esa voluntad, para que ante la presencia del Magistrado instructor reconozca su contenido y firma, y así tener la certeza de que emanó de la persona a quien asiste el derecho.”

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Por tanto, al existir inactividad, inercia o pasividad por parte de José Rafael Avalos Pérez y Franco Álvarez Rodríguez, se admiten sus desistimientos respecto a los hechos denunciados en su queja inicial, de conformidad con las prevenciones decretadas en los acuerdos del siete de junio y dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, emitidos por la autoridad instructora.

En consecuencia, toda vez que el derecho a la libertad de afiliación, es un derecho personalísimo, al ser decisión de las y los ciudadanos el afiliarse o no a determinada fuerza política, conforme lo prevé tanto la *Constitución* como la normatividad de la materia, que los hechos denunciados no revisten gravedad ni tampoco con su realización pueden verse afectados los principios rectores de la función comicial, y que el propio denunciante, manifiesta su deseo de desistirse de la acción instaurada en contra de *MORENA*, lo procedente es sobreseer el presente asunto, no obstante que ya han sido admitidas a trámite las denuncias presentadas por los ciudadanos antes citados.

⁶⁴ Época: Novena Época, Registro: 179051, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.5o.A.22 A, Página: 1110.

Por tanto, atendiendo a que el desistimiento constituye un acto procesal, mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no continuar con la secuela del procedimiento administrativo con motivo del ejercicio de una acción, con la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite, esta autoridad nacional estima procedente **sobreseer** el presente asunto, por lo que se refiere a **José Rafael Avalos Pérez y Franco Álvarez Rodríguez**, con fundamento en lo establecido en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGPE*, y 46, párrafo 3, fracción III, del *Reglamento de Quejas*.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. Planteamiento del caso

De la lectura integral de las constancias que integran el presente expediente, se desprende que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, consisten, esencialmente, en la presunta indebida afiliación de Agustín Castellanos Peña, Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano a *MORENA*, al no mediar su consentimiento y, en su caso, la utilización de sus datos personales para tal fin.

Según los denunciantes, dicha situación vulnera sus derechos político-electorales, pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho partido político lo cual en su concepto evidencia, además, un supuesto uso indebido de sus datos y documentos personales.

Los hechos fueron denunciados a través de sendos escritos de queja signados por las y los ciudadanos ya enunciados, derivado de la compulsas realizadas por este Instituto a través de sus Juntas Distritales, en el proceso de selección para ocupar cargos como Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018.

En ese sentido, conforme a lo manifestado por los quejosos, se podría actualizar una supuesta infracción a las disposiciones constitucionales, convencionales legales y reglamentarias en materia de libertad de afiliación política del ciudadano.

2. Excepciones y defensas

En respuesta a la imputación de la que es objeto, *MORENA*, a través de su Representante ante el *Consejo General* de este Instituto, en síntesis, hizo valer en su defensa lo siguiente:⁶⁵

- *Niega todos y cada uno de los hechos de la queja instaurada en contra de Morena, de igual manera, se objetan las pruebas aportadas por los quejosos para acreditar sus afirmaciones, en razón de que los hechos que los quejosos señalan en contra de MORENA son falsos, puesto que no se ha vulnerado la normativa legal.*
- *La queja de los ciudadanos ya mencionados, en contra de MORENA, resulta genérica, vaga e imprecisa, por lo que resulta improcedente el PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO iniciado por la autoridad administrativa electoral, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que enseguida se exponen.*
- *Niega categóricamente, la imputación que hacen los denunciantes, toda vez que los ciudadanos en mención, no aportan prueba suficiente ni fehaciente que sustenten y acrediten su dicho, consistente en una indebida afiliación a este partido político.*
- *Si bien es cierto es importante señalar que el partido MORENA como entidad de interés público, en el registro de afiliación de los ciudadanos que así lo solicitan, ACTÚA DE BUENA FE; toda vez que el registro de afiliación llevado a cabo por este instituto político, puede realizarse por vía electrónica, el cual es de libre acceso a la ciudadanía, quien en todo momento tiene el derecho y libertad de elegir ser o no afiliado al Partido, por lo que se deduce que la afiliación de los ciudadanos en mención debió ser voluntaria, razón por la cual, entre otras cosas, no existe una utilización indebida de datos personales.*
- *El Estatuto de MORENA establece: Capítulo Segundo: Garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero: Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria (...)*
- *Dado que el registro de afiliados el Partido MORENA actúa de buena fe, máxime que dicho procedimiento se hace de manera electrónica, no se cuenta con la documentación soporte de su afiliación voluntaria, debido a que*

⁶⁵ Visible a fojas 425 a 431 del expediente

sólo se obtiene un registro electrónico ID, el cual se traduce en comprobante electrónico de afiliación debidamente certificado, mismo que en su momento ya fue requerido y presentado ante esta autoridad.

- *En el caso que nos ocupa debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, toda vez que no es dable determinar la afiliación indebida y mal uso de datos personales de la denunciante.*

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por el partido, por cuestión de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto.

3. Fijación de la controversia

Expuestas las imputaciones realizadas por los ciudadanos con antelación citados y con las afirmaciones alegadas en su descargo por *MORENA* se procederá a fijar la controversia en este asunto, que consiste en determinar si dicho instituto político afilió o no, sin su consentimiento, a los ciudadanos referidos, transgrediendo con ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 párrafo segundo, 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a), e) y u), del *COFIPE*.

4. Marco Normativo

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo

segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁶⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁶⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

⁶⁶ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁶⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes— asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él,

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MORENA

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente cometida por MORENA consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las condiciones en que se debe dar la incorporación de los ciudadanos al respectivo padrón de militantes.

Estatutos del partido político MORENA⁶⁸

Artículo 2°. MORENA se organizará como Partido Político Nacional a partir de los siguientes objetivos:

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general;

CAPÍTULO SEGUNDO: Garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero

Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. **La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud.** No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con **fotografía emitida por la autoridad electoral federal**; en el caso de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; **cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.**

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y

⁶⁸ Visible en la siguiente página: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5371559&fecha=25/11/2014

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

...

Artículo 15°. *La afiliación de Protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo, casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los Protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.*

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren ante cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro nacional de comités de Protagonistas.

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel municipal, estatal o nacional.

Artículo 16°. *Los comités de Protagonistas de MORENA se integrarán con un mínimo de cinco y un máximo de sesenta miembros; realizarán sus actividades en un municipio o en la ciudad, departamento o provincia del país extranjero en que radiquen; y se reunirán cuando menos cada treinta días. Las y los Protagonistas del cambio verdadero que procedan de diversos barrios, comunidades o pueblos del mismo municipio o Distrito, o de diversas ciudades o provincias de un país del exterior, podrán ser registrados como comité en alguno/a de ellos; deberán comprometerse a afiliar Protagonistas y constituir nuevos comités.*

Todos los comités de Protagonistas que se constituyan - territoriales, por afinidad o actividad sectorial - deberán ser registrados obligatoriamente por el Comité Municipal o del ámbito territorial que les corresponda. Así mismo, los trabajos de información, concientización y organización serán la tarea fundamental de todos los comités de Protagonistas, sin excepción.

Con relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente:

- Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales **se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.**
- Podrán afiliarse a *MORENA* las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que *MORENA* determine. Las y los afiliados a *MORENA* se denominarán *protagonistas del cambio verdadero*.

- Podrán afiliarse a *MORENA*, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.
- La afiliación a *MORENA* será personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud.
- Para obtener la afiliación al partido político en cita, se requiere, además, contar con credencial de elector expedida por el Registro Federal de Electores del *INE* y llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste el propósito de afiliarse y conste la firma o huella digital del interesado.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución* se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

5. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de *MORENA*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *MORENA*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁶⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁷⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁷¹ y como estándar probatorio.⁷²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

⁶⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁷⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁷¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁷² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁷³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantees sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben

observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**⁷⁴ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

⁷⁴ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁷⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁷⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁷⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**⁷⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**⁷⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**⁸⁰

⁷⁵ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

⁷⁶ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

⁷⁷ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

⁷⁸ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

⁷⁹ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

⁸⁰ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁸¹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁸² sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado***

⁸¹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

⁸² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

6. Acreditación de los hechos

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón de MORENA, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁸³	Manifestaciones del Partido Político
1	Agustín Castellanos Peña	01/02/2018 ⁸⁴	Afiliado 13/04/2013	<p>Afiliado 13/04/2013 Baja de afiliación 07/02/2018</p> <p>Informó que el ciudadano sí fue su afiliado, pero el mismo causó baja el 07 de febrero de 2018, exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de baja afiliación</i></p> <p>No proporcionó documentación que acredite la debida afiliación.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>De acuerdo a la información proporcionada por la DEPPP y MORENA, no existe controversia en el sentido de que el denunciante es militante del referido instituto político.</p> <p>De conformidad con las propias manifestaciones de dicho ciudadano en su escrito de queja, en el sentido “<i>Que, en fecha, la cual no recuerdo estaban unas personas fuera de un mercado público y me abordaron únicamente para pedirme una firma de apoyo para que el partido Morena obtuviera su registro, sin embargo, nunca me dijeron que me iban a afiliarse al partido, tomaron datos de mi credencial de elector</i>”.</p> <p>Con base en lo anterior, aun cuando el ciudadano se opone a la debida afiliación, refiriendo la justificación antes señalada, lo cierto es que NO se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político, toda vez que el ofendido reconoce que firmó en apoyo para que MORENA obtuviera su registro como partido político.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁸⁵	Manifestaciones del Partido Político
2	Alma Lucia Almanza Antonio	06/02/2018 ⁸⁶	Afiliada 01/12/2013	<p>No es afiliada</p> <p>Informó que no encontró registro de afiliación como militante de la ciudadana.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que la denunciante es militante de MORENA, y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro de la quejosa, siendo que el archivo que obra en la Dirección Ejecutiva aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios partidos políticos, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁸³ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁸⁴ Visible a foja 4 del expediente

⁸⁵ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁸⁶ Visible a foja 32 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁸⁷	Manifestaciones del Partido Político
3	Ana Dennis Rex Javier	06/02/2018 ⁸⁸	Afiliada 10/11/2013 Registro cancelado 08/02/2018	No es afiliada Informó que no encontró registro de afiliación como militante de la ciudadana.
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la <i>DEPPP</i> informó que la denunciante es militante de MORENA, y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro de la quejosa, siendo que el archivo que obra en la Dirección Ejecutiva aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios partidos políticos, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁸⁹	Manifestaciones del Partido Político
4	Jesús Manuel Aguilar Loya	07/02/2018 ⁹⁰	Afiliado 08/12/2013 Registro cancelado 18/01/2018	No es afiliado Informó que no encontró registro de afiliación como militante del ciudadano.
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la <i>DEPPP</i> informó que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado ciudadano negó haberse afiliado al referido instituto político, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro del quejoso, siendo que el archivo que obra en la Dirección Ejecutiva aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios partidos políticos, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁹¹	Manifestaciones del Partido Político
5	Susana García Soto	28/02/2018 ⁹²	Afiliada 15/12/2013	No es afiliada Informó que no encontró registro de afiliación como militante de la ciudadana
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la <i>DEPPP</i> informó que la denunciante es militante de MORENA, y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro de la quejosa, siendo que el archivo que obra en la Dirección Ejecutiva aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios partidos políticos, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁸⁷ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁸⁸ Visible a foja 37 del expediente

⁸⁹ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁹⁰ Visible a foja 49 del expediente

⁹¹ Visible a fojas 343 a 344 del expediente

⁹² Visible a fojas 58, 59, 210 y 211 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁹³	Manifestaciones del Partido Político
6	Francisco Javier Frías Soveranez	07/02/2018 ⁹⁴	Afiliado 27/01/2013	<p>Afiliado 27/01/2013 Baja de afiliación 08/01/2018</p> <p>Informó que el ciudadano sí fue su afiliado, pero el mismo causó baja el 08 de enero de 2018, exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de baja afiliación</i>.</p> <p>No proporcionó documentación que acredite la debida afiliación.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante de MORENA, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida, con independencia del presunto procedimiento de renuncia que el partido haya realizado.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁹⁵	Manifestaciones del Partido Político
7	Alejandro de Dios Peralta	07/02/2018 ⁹⁶	Afiliado 07/02/2018	<p>Afiliado 07/02/2018</p> <p>Informó que el ciudadano sí es su afiliado. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁹⁷	Manifestaciones del Partido Político
8	Pedro Rocha Morales	07/02/2018 ⁹⁸	Afiliado 19/01/2014	<p>Afiliado 19/01/2014</p> <p>Informó que el ciudadano sí es su afiliado. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

⁹³ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁹⁴ Visible a foja 68 del expediente

⁹⁵ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁹⁶ Visible a foja 72 del expediente

⁹⁷ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

⁹⁸ Visible a foja 80 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁹⁹	Manifestaciones del Partido Político
9	Adriana del Carmen Salvador Hernández	08/02/2018 ¹⁰⁰	Afiliada 10/11/2013	Afiliada 10/11/2013 Informó que la ciudadana sí es su afiliada. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i> .
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰¹	Manifestaciones del Partido Político
10	Kenia Samantha Uc Chi	08/02/2018 ¹⁰²	Afiliada 09/11/2013	No es afiliada Informó que no encontró registro de afiliación como militante de la ciudadana
<p style="text-align: center;">Conclusión</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, toda vez que la DEPPP informó que la denunciante es militante de MORENA, y que la citada ciudadana negó haberse afiliado al referido instituto político, no obstante que el denunciado indicó que no encontró registro de la quejosa, siendo que el archivo que obra en la Dirección Ejecutiva aludida se abastece conforme al padrón capturado por los propios partidos políticos, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰³	Manifestaciones del Partido Político
11	Luis Miguel López Pérez	09/02/2018 ¹⁰⁴	Afiliado 21/12/2013	Afiliado 21/12/2013 Informó que el ciudadano sí es su afiliado. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i> .
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

⁹⁹ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹⁰⁰ Visible a foja 90 del expediente

¹⁰¹ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹⁰² Visible a foja 98 del expediente

¹⁰³ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹⁰⁴ Visible a foja 119 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁵	Manifestaciones del Partido Político
12	Oliva Santos Rojas	12/02/2018 ¹⁰⁶	Afiliada 05/01/2014	<p>Afiliada 05/01/2014 Baja de afiliación 28/11/2016</p> <p>Informó que la ciudadana sí fue su afiliada, pero la misma causó baja el 28 de noviembre de 2016, exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de baja afiliación</i>.</p> <p>No proporcionó documentación que acredite la debida afiliación.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante de MORENA, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida, con independencia del presunto procedimiento de renuncia que el partido haya realizado.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁷	Manifestaciones del Partido Político
13	Isaías Mis Ay	12/02/2018 ¹⁰⁸	Afiliado 15/09/2013	<p>Afiliado 15/09/2013</p> <p>Informó que el ciudadano sí es su afiliado. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁹	Manifestaciones del Partido Político
14	Eduardo Osornio Serrano	12/02/2018 ¹¹⁰	Afiliado 19/04/2013	<p>Afiliado 19/04/2013</p> <p>Informó que el ciudadano sí es su afiliado. Para acreditar la debida afiliación exhibió copia certificada del <i>comprobante electrónico de afiliación</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante de MORENA, y que el citado instituto político no aportó elementos de prueba idóneos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, puesto que el comprobante electrónico de afiliación que exhibió carece de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a la misma, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida</p>				

¹⁰⁵ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹⁰⁶ Visible a foja 114 a 119 del expediente

¹⁰⁷ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹⁰⁸ Visible a foja 122 del expediente

¹⁰⁹ Visible a fojas 173 a 175 del expediente

¹¹⁰ Visible a foja 129 del expediente

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

7. Caso concreto

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribución de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el

que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del *COFIPE*, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de MORENA.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciantes, se encontraron, como afiliados de MORENA, **con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.**

Por otra parte, *MORENA* no demostró con medios de prueba idóneos que la afiliación respectiva fuera el resultado de la manifestación clara e inequívoca de la voluntad libre e individual de los ciudadanos, quienes, *motu proprio*, expresaran su consentimiento y por ende, proporcionaran sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación respectiva. Por el contrario, su defensa consistió en afirmar que el partido actúa de buena fe, y que sus registros pueden realizarse por vía electrónica por lo que la afiliación de los quejosos debió ser voluntaria, sin aportar elemento alguno por el cual se pueda determinar que en efecto existió consentimiento de los ciudadanos en cuestión.

Al respecto, cabe precisar que la carga de la prueba corresponde a MORENA, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar mediante los medios idóneos esa situación.

Por el contrario, la defensa de *MORENA* consistió en afirmar que el partido actúa de buena fe, y que sus registros pueden realizarse por vía electrónica por lo que la afiliación de los quejosos debió ser voluntaria, sin aportar elemento alguno por el cual se pueda determinar que en efecto existió consentimiento de los ciudadanos en cuestión.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos**

desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera

insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido, que está comprobada la afiliación de todos, y que MORENA, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente o, en el caso, que sí dio curso legal a las solicitudes de desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace a los ciudadanos de quienes se considera que no fueron afiliados indebidamente a MORENA y, por otra parte, aquellos que acusan haber sido afiliados indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello.

Apartado A. Ciudadano que no fue afiliado indebidamente a MORENA

Respecto del ciudadano **Agustín Castellanos Peña**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra de MORENA, por las razones y consideraciones siguientes:

Al respecto, en el caso en concreto, si bien el quejoso se inconforma por la afiliación a MORENA, lo que se traduce en una violación a su derecho a la libre afiliación, lo cierto es que tal supuesto de infracción no se actualiza en el particular.

Lo anterior, porque de las constancias de autos se advierte, por una parte, que el ciudadano reconoció haber firmado para que MORENA obtuviera su registro como partido político, conforme lo manifestó en su escrito inicial de queja *“Que, en fecha, la cual no recuerdo estaban unas personas fuera de un mercado público y me abordaron únicamente para pedirme una firma de apoyo para que el partido Morena*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

obtuviera su registro, sin embargo, nunca me dijeron que me iban a afiliar al partido, tomaron datos de mi credencial de elector...”

En este sentido, a partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **Agustín Castellanos Peña** a MORENA fue apegada a derecho, ya que, como se estableció previamente, se cuenta con un reconocimiento expreso de la voluntad por parte del denunciante de haber firmado para que MORENA se constituyera como partido político.

Si bien dicho ciudadano aparece como afiliado con fecha anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como Partido Político Nacional, circunstancia por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.

Así las cosas, la conclusión a la que se llega es que, no se acredita una indebida afiliación de esta persona, sino por el contrario, el denunciante admitió que firmó el documento para que obtuviera su registro MORENA como partido político.

Ahora bien, de la manifestación del quejoso, en el sentido de que *nunca le dijeron que lo iban a afiliar al partido político*, resulta insuficiente para acreditar una probable violación por parte de MORENA al derecho de libre de afiliación del denunciante, toda vez que el referido ente político lo incorporó a su lista de agremiados al existir el consentimiento expreso de éste de pertenecer al mismo, a través de la firma del documento para que se constituyera como partido político.

En tal sentido, conforme a lo ya precisado, debe aplicarse en favor del denunciado el principio de presunción de inocencia, toda vez que se ha generado duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora, ya que, conforme a los medios probatorios que obran en autos, existen indicios suficientes para determinar que sí existió el deseo del quejoso de afiliarse libre y voluntariamente a las filas de militantes de MORENA.

En efecto, si bien, existe la acusación del quejoso versa sobre una supuesta afiliación indebida a MORENA, por no haber mediado su consentimiento para tal efecto, lo cierto es que uno de los elementos de esta acusación no está acreditado, a saber, el relativo a que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación; toda vez que, como ha quedado precisado, existe una manifestación expresa del quejoso de haber otorgado su apoyo para la constitución del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro ***PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.***¹¹¹

Por lo anterior, respecto de **Agustín Castellanos Peña**, el presente procedimiento debe determinarse **infundado**.

Apartado B. Ciudadanos que sí fueron afiliados indebidamente a MORENA

Ahora bien, como ha quedado precisado MORENA reconoció la afiliación de ocho de los trece ciudadanos que se citan a continuación, con excepción de Alma Lucía Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto y Kenia Samantha Uc Chi, por lo que este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el partido denunciado violentó su derecho de libre afiliación.

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación proporcionada por la DEPPP
1	Alma Lucía Almanza Antonio	01/12/2013
2	Ana Dennis Rex Javier	10/11/2013
3	Jesús Manuel Aguilar Loya	08/12/2013
4	Susana García Soto	15/12/2013
5	Francisco Javier Frías Soveranez	27/01/2013
6	Alejandro de Dios Peralta	07/02/2013
7	Pedro Rocha Morales	19/01/2014
8	Adriana del Carmen Salvador Hernández	10/11/2013

¹¹¹. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación proporcionada por la <i>DEPPP</i>
9	Kenia Samantha Uc Chi	09/11/2013
10	Luis Miguel López Pérez	21/12/2013
11	Oliva Santos Rojas	05/01/2014
12	Isaías Mis Ay	15/09/2013
13	Eduardo Osornio Serrano	19/04/2013

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la propia *DEPPP*, refirió que la afiliación de todos estos ciudadanos, aconteció en una temporalidad en la cual MORENA aún no obtenía su registro como Partido Político Nacional.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para eximirla de la responsabilidad que se le atribuye en este procedimiento, habida cuenta que, los datos de afiliación de esos ciudadanos se obtuvieron del padrón de afiliados de la entonces asociación civil Movimiento Regeneración Nacional presentó a esta autoridad electoral nacional con el propósito de obtener su registro como Partido Político Nacional, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

En este sentido, se puede colegir que, no obstante que la afiliación de los denunciantes en comento fue anterior a la obtención de registro como partido político de MORENA, es decir, el nueve de julio de dos mil catorce, con efectos a partir del uno de agosto siguiente,¹¹² lo cierto es que estos registros de agremiados fueron los que en su momento, formaron parte del padrón de “Movimiento Regeneración Nacional, A.C.”, quienes, a la postre, formaron parte de los supuestos simpatizantes de MORENA, como Partido Político Nacional.

En efecto, tomando en consideración que en el momento en que ocurrieron las afiliaciones denunciadas, MORENA se encontraba en proceso de constitución y registro como partido político,¹¹³ resulta aplicable lo previsto en los artículos 27 párrafo 1, inciso b) y 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del *COFIPE*, relativos al libro Segundo, denominado *DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS en los que a la letra se establece lo siguiente:*

¹¹² Resolución del Consejo General **INE/CG94/2014**

¹¹³ El 09 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG94/2014, el Consejo General de este Instituto, resolvió sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional A.C., otorgándole el registro como partido político denominado *MORENA*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Artículo 27 1. Los Estatutos establecerán:

...
*b) Los procedimientos para la **afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros**, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;*

Artículo 28 1.- Para constituir un Partido Político Nacional, la Agrupación Política Nacional interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio de año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en 200 Distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral, quien certificará:

*I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos; y que **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación**; y*

De lo anterior se obtiene que, en efecto, el legislador previó que los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica, debían establecerse en los Estatutos de los partidos políticos, asimismo, atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos invocados, se advierte la obligación de la presentación de una manifestación formal de afiliación suscrita por los entonces afiliados a los partidos políticos en constitución.

En ese sentido, el *Consejo General*, aprobó el Acuerdo CG776/2012,¹¹⁴ por el cual expidió el Instructivo que deberían observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, y al cual se sujetó MORENA, mismo que en su numeral 44 refiere:

44. Las manifestaciones de solicitud de registro, deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:

¹¹⁴ Aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de cinco de diciembre de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil trece

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en formación;*
- b) En tamaño media carta;*
- c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;*
- d) Ordenadas alfabéticamente y por estado;*
- e) Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad federativa, clave de elector, **firma autógrafa o huella digital del ciudadano**;*
- f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político; y*
- g) Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda:*
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como Partido Político Nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2013-2014. Reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.”
- h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.*

En conclusión, si bien dichos ciudadanos aparecen como afiliados con fecha anterior a la conformación del partido político denunciado, lo cierto es que para que éste pudiera constituirse legalmente, requirió contar con un número mínimo de apoyos ciudadanos para obtener su registro como Partido Político Nacional, circunstancia por la cual, se consideran como afiliaciones, no obstante que hayan sido realizadas antes de que fuera aprobado el registro del citado instituto político.

Bajo ese contexto, el partido político denunciado, debe contar con la documentación soporte que justifique la debida afiliación de los quejosos, en la que conste la manifestación de su voluntad, en tanto que se encuentra obligado conservarla y resguardarla, puesto que se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y por tanto el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios exigidos.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los casos particulares:

- **Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Luis Miguel López Pérez, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano.**

De las constancias que obran en el expediente, se advierte que, por cuanto hace a estos **seis ciudadanos**, *MORENA* argumentó que dichos ciudadanos se encontraban registrados en su padrón de afiliados denominado *Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero*; situación que fue corroborada por la *DEPPP*.

Ahora bien, con la finalidad de sustentar su dicho, el partido político denunciado adjuntó copias certificadas de comprobantes electrónicos signados por el Secretario de Organización Nacional de dicho partido político, de los cuales se desprende el nombre de cada uno de los quejosos, su clave de elector, la fecha de expedición de dicho comprobante, un número de identificación *ID*, así como una firma electrónica, consistente en una clave alfanumérica. Lo anterior, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna, sin embargo, dichos comprobantes carecen de la firma autógrafa de los referidos ciudadanos.

En concepto de esta autoridad electoral, tales pruebas son insuficientes para sustentar la debida afiliación de los ciudadanos denunciantes, toda vez que los comprobantes electrónicos presentados por el denunciado, carecen de la firma respectiva, u otro elemento del que se desprenda de forma inequívoca la manifestación de la voluntad de los quejosos, pues el hecho de que carezcan de ese requisito, impide demostrar la libre afiliación de las y los ciudadanos referidos.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad de *MORENA* en materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al

estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

No obstante, esta autoridad considera que tales pruebas son insuficientes para sustentar la debida afiliación, puesto que, se reitera, los *comprobantes electrónicos de afiliación* carecen de la firma respectiva, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia a las mismas, pues el hecho de que se carezca de ese requisito, impide demostrar la libre afiliación de los ciudadanos, porque la rúbrica o firma autógrafa del solicitante, es el elemento que, por antonomasia, respalda la presencia manifiesta de la voluntad del afiliado y, por ello, ese dato constituye un elemento esencial.

A mayor abundamiento, el partido político denunciado, no acreditó que la afiliación de los ciudadanos se haya llevado conforme a lo prevé su normativa interna, por lo siguiente:

- El artículo 15 de los Estatutos de MORENA establece que, para afiliarse a dicho instituto político, *podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA*
- Asimismo, el dispositivo 4 prevé que **quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.**
- Por su parte, el artículo 4 Bis señala que, para poder afiliarse a dicho partido político, las personas que así lo deseen hacer, al momento de solicitar su registro, ***deberán presentar su credencial para votar con fotografía.***
- Finalmente, el precepto 5, del Reglamento de Afiliación de MORENA dispone que *la afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, el cual contendrá como mínimo, entre otros datos, la **firma del solicitante.***

Con base en lo anterior, es claro que MORENA establece ciertos requisitos específicos de afiliación, para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, tanto la exhibición de la credencial para votar

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

con fotografía del ciudadano interesado en su inscripción como militante, así como la firma autógrafa de éste en el formato respectivo; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en los casos que se analizan no fueron cumplidos por MORENA, tal y como lo establece su propia legislación interna.

No pasa inadvertido para esta autoridad, que si bien, como lo señala el denunciado, la afiliación de estos ciudadanos se realizó a través de internet, lo cual efectivamente está permitido en su normativa, lo cierto es que no acreditó que ninguno de los denunciados haya acudido ante la instancia correspondiente dentro de la circunscripción de su lugar de residencia para ratificar dicha voluntad de afiliación, a través del llenado y firma correspondiente de la cédula de afiliación respectiva, ni mucho menos, que hayan presentado su credencial para votar al momento de registrarse; lo cual también es obligación, en términos de las disposiciones internas del partido a que se ha hecho referencia en el apartado correspondiente.

No obsta a lo anterior que el partido político denunciado argumentara que *“el procedimiento de registro de afiliados al Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se realiza de manera electrónica, por lo que no se cuenta con la documentación soporte de dicha afiliación”*, sin embargo, ello no es razón suficiente para relevarlo de la carga probatoria de exhibir la documentación necesaria e idónea para acreditar que los ciudadanos denunciados otorgaron su consentimiento, pues a través de las constancias electrónicas que ofreció no se advierte en forma alguna que los ciudadanos hubieran dado su consentimiento para aparecer en el padrón de militantes de dicho partido político.

Ahora bien, como se ha mencionado en el presente asunto, la carga de la prueba para acreditar la debida afiliación de los quejosos, recae directamente en los partidos políticos, en este caso en MORENA, quien durante la secuela del presente procedimiento afirmó categóricamente que los quejosos se integraron voluntariamente al *Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero* y, a pesar de que tuvo las oportunidades procesales suficientes para demostrar su dicho, faltó a la carga procesal que el impone el artículo 15 párrafo segundo de la *LGSMI*, de aplicación supletoria en el presente caso.

En efecto, de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditado que durante la sustanciación del procedimiento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en estricta observancia del derecho de audiencia y defensa que le asiste a las partes en un procedimiento sancionador, en términos del artículo 14 constitucional, emplazó en un primer momento a MORENA, a fin de que se opusiera al procedimiento manifestando lo que a su interés conviniera **y otorgándosele el derecho a ofrecer las pruebas de su dicho**; sin embargo, de la contestación rendida por éste, se advierte que no exhibió constancias donde se plasmara la manifestación de voluntad de los quejosos, es decir, que estuvieran firmadas o tuvieran la huella digital de los mismos, limitándose a expresar que el registro se puede realizar por vía electrónica, situación, que a consideración de esta autoridad, por sí misma, no puede tener como consecuencia que se le exima de la responsabilidad que en este procedimiento se le atribuye.

Similar situación, aconteció con la vista de alegatos, que le fue concedida; por tanto, se concluye como ya se ha citado, que *MORENA* tuvo todas las garantías procesales para demostrar con documentación idónea, la libre y voluntaria afiliación de los quejosos que controvierten su inscripción a ese partido, sin que acreditara su legal proceder.

Bajo esta lógica, carecen de valor, para efectos de acreditar la voluntad de los ciudadanos que se analizan en este apartado, la exhibición de formatos electrónicos presuntamente provenientes de afiliaciones realizadas por los denunciantes por Internet, habida cuenta que, como se ha advertido, para que la afiliación se considere válida, se necesita, entre otras cuestiones, el documento en donde conste la voluntad libre del ciudadano de querer incorporarse a un partido, a través de la signatura de la cédula de afiliación correspondiente, lo cual no se demostró en la presente causa

Consecuentemente, el procedimiento sancionador es fundado respecto de Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Luis Miguel López Pérez, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano, pues como se analizó, las constancias que exhibió para intentar demostrar la debida afiliación, no resultaron eficaces ni idóneas.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad de *MORENA* y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los quejosos es no pertenecer a *MORENA*, por lo que se vincula a dicho partido político, para que sean dados de baja inmediatamente de su padrón de militantes, para lo cual se solicita la colaboración de la *DEPPP* de este Instituto a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del partido político.

- **Francisco Javier Frías Soveranez y Oliva Santos Rojas**

En relación a estos ciudadanos, el instituto político denunciado aportó un *comprobante electrónico de Baja de Afiliación* firmado por el Secretario de Organización Nacional de *MORENA*, por el que informó que los referidos ciudadanos dejaron de estar suscritos en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y proporcionó las fechas en que aconteció el referido hecho.

De lo anterior, se desprende que, *MORENA* reconoce que los quejosos sí se encontraron afiliados a dicho partido político y que fueron dados de baja con posterioridad, lo cual no se encuentra controvertido.

Sin embargo, en momento alguno proporcionó el material soporte de sus expedientes en donde acreditara que la afiliación que, en un principio se llevó a cabo, fue de manera libre y voluntaria por parte de los denunciantes; lo anterior, en términos del artículo 4 Bis, de los Estatutos del partido denunciado, que establece que el resguardo y autenticación del padrón de afiliados, estará a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Es decir, dicho instituto político incumplió con la carga de probar con algún elemento de convicción el acto volitivo por el cual, esos ciudadanos decidieron libremente pertenecer a dicho instituto político, pues se limita a adjuntar comprobantes electrónicos de baja de afiliación, los cuales por sí mismos, no son idóneos para acreditar que se haya llevado a cabo una debida afiliación.

Con lo anterior, es claro que el denunciado tenía la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que constara y se pruebe ese hecho.

En consecuencia, también tenía el deber de conservar y resguardar, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios, lo que en el caso no ocurrió.

Más aún, conforme al procedimiento de afiliación previamente establecido, es claro que MORENA no acreditó con los documentos idóneos que la afiliación de los denunciantes, se haya realizado conforme a su normativa, es decir, no exhibió ni la credencial para votar de estos, ni mucho menos, el comprobante donde constara la firma autógrafa de cada uno de ellos, para constatar que, efectivamente, medió su voluntad para ser agremiados de ese ente.

En ese sentido, en concepto de esta autoridad, existe una conducta irregular por parte del partido político denunciado, puesto que si bien refiere que dio de baja de su padrón a los ciudadanos en cuestión, ello no es suficiente para eximirlo de responsabilidad, como ya se razonó, en la especie, si se actualizó una indebida afiliación.

Por tanto, la baja del padrón de militantes de los quejosos o si estos continúan o no inscritos en mismo, no constituye la materia del presente estudio, por el contrario,

la *Litis* radica en determinar si al momento de la afiliación al partido político denunciado medió el consentimiento de los quejosos

Lo expuesto, tomando en cuenta que la causa de pedir de los ciudadanos radica, *per se*, en la presunta indebida afiliación al partido político *MORENA*, de ahí la necesidad de que el partido político demuestre fehacientemente que los quejosos consintieron adquirir la calidad de afiliados, proporcionando sus datos personales, lo que en la especie no aconteció.

Por tanto, la conducta del partido no se justifica con la sola aseveración de que los ciudadanos quejosos se incorporaron de *forma libre y sin presión alguna*; lo anterior, porque el partido denunciado no demostró con algún elemento de prueba idónea que los ciudadanos hubiesen realizado actos tendientes a una afiliación voluntaria. Máxime, que los quejosos manifestaron que en ningún momento otorgaron su consentimiento para estar afiliados.

Por lo que se considera que dicho actuar vulneró el derecho de libre afiliación de los quejosos, toda vez que era responsabilidad de ese partido político el demostrar que esas inscripciones a su padrón electoral, fueron consecuencia de la voluntad propia de cada uno de los denunciantes.

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara **fundado** el presente procedimiento en contra de *MORENA*, por la indebida afiliación de Francisco Javier Frías Soveranez y Olivia Santos Rojas.

De los anteriores ciudadanos, aun cuando el partido exhibió las constancias donde presuntamente ya fueron dados de baja del padrón de afiliados, la *DEPPP*, mediante correo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, informó que los mismos se encontraban en los registros validos del padrón de afiliados de *MORENA*.

- **Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto y Kenia Samantha Uc Chi,**

De las constancias que obran en el expediente, se advierte que, cuanto hace a Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto y Kenia Samantha Uc Chi, el partido político denunciado informó que no se localizaron registros de afiliación dentro del sistema de padrón de afiliación, lo anterior, quedo de manifiesto mediante escritos de fecha primero de marzo y cinco de abril del presente año, por lo tanto, de dichos ciudadanos, el partido político denunciado no remitió ningún tipo de constancia de afiliación.

Lo cierto es que, respecto a Alma Lucia Almanza Antonio, Susana García Soto y Kenia Samantha Uc Chi, la *DEPPP* informó que dichos ciudadanas sí se encuentran en los registros válidos del padrón de afiliados de MORENA.

Por otra parte, en cuanto a Ana Dennis Rex Javier y Jesús Manuel Aguilar Loya, dicha Dirección Ejecutiva, informó la fecha de afiliación, así como la fecha de cancelación del padrón de afiliados de MORENA.

La anterior información, corresponde al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, es decir, la fecha de corte del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de dicha Dirección Ejecutiva, capturado por el propio partido, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.

Por lo que, el hecho de que el denunciado refiera que los quejosos no fueron encontrados en su padrón de militantes, no le exime de responsabilidad, ya que los mismos sí fueron localizados en el padrón que el propio denunciado proporcionó a la *DEPPP*.

Esto es, por una parte, obra en el expediente una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre el registro de afiliación de dichos ciudadanos, y por otra, la manifestación del instituto político denunciado, en el sentido de que no son o fueron sus afiliados, siendo que la primera al tener valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, párrafo 2, del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Reglamento de Quejas, al no ser objetada por alguna de las partes, genera la certeza de la afiliación de éste al instituto político denunciado, la cual, se considera fue de manera indebida.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que MORENA infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, de los **trece ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de éstos para ser o permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados a MORENA, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, MORENA, en los **trece casos** analizados, no aportó medios idóneos para demostrar que para llevar a cabo las afiliaciones medió el consentimiento libre y voluntario de los ciudadanos o, en su caso, en los que se hiciera constar que estos dieron su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado a MORENA, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados a MORENA en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MORENA implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los trece quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de los ciudadanos inconformes para mantener, solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstos al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara **fundado** el presente procedimiento en contra de MORENA, por la indebida afiliación de los ciudadanos analizados en este apartado.

Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,¹¹⁵ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente.

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad o no al partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

¹¹⁵ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los **catorce denunciantes** es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar a MORENA para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que lo anterior, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017¹¹⁶, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad de MORENA, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

Sobre el particular, el *Tribunal Electoral*, ha sostenido que, para individualizar una sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, se deben considerar los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión de dicha falta a la ley.

¹¹⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones Jurídicas infringidas
MORENA	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 13 ciudadanos por parte de MORENA.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, 171, párrafo 3, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que *MORENA* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a trece ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente a *MORENA*.

C) Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que *MORENA* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación a los institutos políticos, quienes incluyeron en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a *MORENA*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de afiliados a Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Alma Lucia Almanza Antonio	01/12/2013
2	Ana Dennis Rex Javier	10/11/2013
3	Jesús Manuel Aguilar Loya	08/12/2013
4	Susana García Soto	15/12/2013
5	Francisco Javier Frías Soveranez	27/01/2013

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
6	Alejandro de Dios Peralta	07/02/2013
7	Pedro Rocha Morales	19/01/2014
8	Adriana del Carmen Salvador Hernández	10/11/2013
9	Kenia Samantha Uc Chi	09/11/2013
10	Luis Miguel López Pérez	21/12/2013
11	Oliva Santos Rojas	05/01/2014
12	Isaías Mis Ay	15/09/2013
13	Eduardo Osornio Serrano	19/04/2013

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas a *MORENA* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Ciudadano	Entidad
1	Alma Lucia Almanza Antonio	Chihuahua
2	Ana Dennis Rex Javier	Quintana Roo
3	Jesús Manuel Aguilar Loya	Coahuila
4	Susana García Soto	Durango
5	Francisco Javier Frías Soveranez	Tabasco
6	Alejandro de Dios Peralta	Tabasco
7	Pedro Rocha Morales	Coahuila
8	Adriana del Carmen Salvador Hernández	Quintana Roo
9	Kenia Samantha Uc Chi	Yucatán
10	Luis Miguel López Pérez	México
11	Oliva Santos Rojas	México
12	Isaías Mis Ay	Yucatán
13	Eduardo Osornio Serrano	Michoacán

E) Intencionalidad de la falta (Comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del denunciado, al vulnerar lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, en relación con los diversos 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*.

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente:

- *MORENA* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución.
- Los partidos políticos como *MORENA*, son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- *MORENA* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del COFIPE, replicado en el diverso 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP.
- El derecho de asociación, en su vertiente de afiliación política-electoral a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo libre ejercicio requiere e implica la manifestación libre, personal y directa de cada ciudadano, en términos de la fracción III del artículo 35 de la *Constitución*.
- *MORENA*, como todo partido político, es un espacio y conducto para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, como es el de libre afiliación. En este sentido, el ejercicio de este derecho no solo no se limita, sino que **se expande y amplía** al interior del partido político.
- *MORENA*, como todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, como lo es *MORENA*, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos** consistente no solo en verificar que los ciudadanos cumplan los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, en relación con los diversos 5, párrafo 1, y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el genuino y auténtico ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde al partido político involucrado demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, como *MORENA*, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado en contra de su voluntad.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera **dolosa**, porque:

- 1) Los quejosos adujeron, en los casos a que se refiere el apartado B, numeral 7, del Considerando TERCERO de la presente Resolución, que en ningún momento solicitaron su registro como militantes de *MORENA*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecían en el padrón de militantes de *MORENA*.
- 3) *MORENA* no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado de manera libre y voluntaria.
- 4) *MORENA* no demostró que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever.
- 5) *MORENA* no ofreció argumento razonable, ni elemento de prueba que sirviera de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por *MORENA*, se cometió al afiliar indebidamente a trece de los ciudadanos citados, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido *MORENA*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.¹¹⁷

¹¹⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a *MORENA*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que *MORENA* afilió a los ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados de *MORENA*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte de *MORENA*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió *MORENA* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.¹¹⁸

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por *MORENA* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus

¹¹⁸ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente a *MORENA*, es decir, los **trece ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a *MORENA*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los trece ciudadanos sobre quienes se cometió la falta**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

acreditada, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia

de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,¹¹⁹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS

¹¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONCURRENTES. *- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”*

Ahora, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 456 de la *LGIFE*, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a MORENA, **por cada uno de los trece ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

No obstante, a fin de adoptar la postura, más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**¹²⁰

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la

¹²⁰ Consultable en la [liga electrónica](http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N)
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

MORENA		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2013		
11	\$64.76	\$457,335.12
Afiliación en 2014		
2	\$67.29	\$86,400.36
TOTAL		\$543,735.48 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

Ciudadano	Fecha de afiliación	Salario mínimo vigente	MULTA
Alma Lucia Almanza Antonio	01/12/2013	\$64.76	\$41,575.92
Ana Dennis Rex Javier	10/11/2013	\$64.76	\$41,575.92
Jesús Manuel Aguilar Loya	08/12/2013	\$64.76	\$41,575.92
Susana García Soto	15/12/2013	\$64.76	\$41,575.92
Francisco Javier Frías Soveranez	27/01/2013	\$64.76	\$41,575.92
Alejandro de Dios Peralta	07/02/2013	\$64.76	\$41,575.92
Pedro Rocha Morales	19/01/2014	\$67.29	\$43,200.18
Adriana del Carmen Salvador Hernández	10/11/2013	\$64.76	\$41,575.92
Kenia Samantha Uc Chi	09/11/2013	\$64.76	\$41,575.92
Luis Miguel López Pérez	21/12/2013	\$64.76	\$41,575.92
Oliva Santos Rojas	05/01/2014	\$67.29	\$43,200.18
Isaías Mis Ay	15/09/2013	\$64.76	\$41,575.92
Eduardo Osornio Serrano	19/04/2013	\$64.76	\$41,575.92
Total		\$543,735.48 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].	

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a *MORENA*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

Ahora, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la Jurisprudencia 10/2018, que establece:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2013				
\$64.76	642	515.83	11	5,674.13
Afiliación en 2014				
\$67.29	642	535.98	2	1,071.96

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 6,746.09 (seis mil setecientos cuarenta y seis punto cero nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal equivalente a \$543,734.85 (quinientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 85/100 M.N.), [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a MORENA, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a *MORENA* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte de *MORENA*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, “Por el que se establecen las cifras del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2018”, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *MORENA* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

Sujeto	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias del mes de octubre de 2018
MORENA	\$34,576,203

Ahora, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

Sujeto	Importe de la ministración de octubre de 2018	Importe total de las sanciones de octubre de 2018	Importe neto de la ministración
MORENA	\$34,576,203	\$1,995,762.54	\$32,580,440.46

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a *MORENA*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano.¹²¹	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
2013	\$41,575.89	11	0.12%
2014	\$43,199.98	2	0.13%

Por consiguiente, la sanción impuesta a *MORENA* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *MORENA* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de octubre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

¹²¹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,¹²² es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

SEXTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *MORENA*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,¹²³ de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del **recurso de apelación**

¹²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

¹²³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del presente procedimiento por lo que hace a la supuesta afiliación indebida y uso indebido de los datos personales de José Rafael Avalos Pérez y Franco Álvarez Rodríguez, conforme a lo razonado en el Considerando TERCERO, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de **MORENA**, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **Agustín Castellanos Peña**, en términos de lo establecido en el numeral 7, Apartado A, del Considerando **CUARTO** de esta Resolución.

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del partido político **MORENA**, por la afiliación indebida de Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano, de conformidad con lo asentado en el numeral 7, Apartado B, del Considerando **CUARTO** de esta Resolución.

CUARTO. En términos del Considerando **QUINTO** de la presente Resolución, se impone a **MORENA**, **una multa por la indebida afiliación de cada uno** de los **trece ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
1	Alma Lucia Almanza Antonio	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
2	Ana Dennis Rex Javier	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
3	Jesús Manuel Aguilar Loya	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
4	Susana García Soto	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
5	Francisco Javier Frías Soveranez	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
6	Alejandro de Dios Peralta	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
7	Pedro Rocha Morales	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 98/100 M. N.) [Ciudadano afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
8	Adriana del Carmen Salvador Hernández	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
9	Kenia Samantha Uc Chi	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
10	Luis Miguel López Pérez	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
11	Oliva Santos Rojas	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
12	Isaías Mis Ay	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
13	Eduardo Osornio Serrano	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]

QUINTO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al partido político **MORENA** será deducida de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, en términos de lo argumentado en el Considerando QUINTO.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/APC/JL/CDMX/39/2018

SEXTO. Se vincula a **MORENA** para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos Agustín Castellanos Peña, Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay y Eduardo Osornio Serrano, así como de Fernando García Gallardo continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando SEXTO.

SÉPTIMO. Iníciase el procedimiento administrativo sancionador atinente por cuanto hace al ciudadano Fernando García Gallardo, al advertirse que éste desconoció las razones por las cuales apareció afiliado, sin su consentimiento al Partido político MORENA y, en su oportunidad, propóngase al Consejo General de este Instituto el Proyecto de Resolución que en Derecho proceda.

OCTAVO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

NOTIFÍQUESE personalmente a Agustín Castellanos Peña, José Rafael Avalos Pérez, Alma Lucia Almanza Antonio, Ana Dennis Rex Javier, Jesús Manuel Aguilar Loya, Susana García Soto, Francisco Javier Frías Soveranez, Alejandro de Dios Peralta, Franco Álvarez **Rodríguez**, Pedro Rocha Morales, Adriana del Carmen Salvador Hernández, Kenia Samantha Uc Chi, Luis Miguel López Pérez, Oliva Santos Rojas, Isaías Mis Ay, Eduardo Osornio Serrano y Fernando García Gallardo, así como al partido político MORENA, por conducto de su representante ante este Consejo General y **por estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Finalmente corresponde analizar, discutir y votar el Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 3.15. _____

¿No hay intervención alguna? _____

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponda. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Trinidad García Rivera, en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales, identificado en el orden del día como el apartado 3.15. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1360/2018) Pto. 3.15 _____

INE/CG1360/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: TRINIDAD GARCÍA
RIVERA
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO TRINIDAD GARCÍA RIVERA, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PT:</i>	Partido del Trabajo
<i>Quejoso o denunciante:</i>	Trinidad García Rivera
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la *UTCE* del *INE*, el oficio *INE/12JDE/VS/243/2018*, signado por el Vocal Ejecutivo y Secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chiapas, mediante el cual remiten el escrito¹ de queja firmado por Trinidad García Rivera, a través del cual denunció que supuestamente fue afiliado de manera indebida al padrón de militantes del *PT*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron sus datos personales sin su autorización.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El once de junio del año en curso,² el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento sancionador ordinario señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas.

Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la *DEPPP* informara si el *quejoso* se encontraba registrado dentro del padrón de afiliados del *PT* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si el referido ciudadano aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento del *denunciante*, respecto de la afiliación materia de controversia.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales requerimientos.

¹ Visible a fojas 2 a 5.

² Visible a fojas 6 a 13.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Respuesta de la DEPPP:³

Fecha de acuerdo	Oficio UTCE	Respuesta
11/06/2018	INE-UT/9039/2018	Afiliado al PT desde el 20/02/2008

Respuesta del PT:⁴

Fecha de acuerdo	Oficio UTCE	Respuesta
11/06/2018	INE-UT/9038/2018	Afiliado al PT desde el 1900 Toda vez que los requisitos de afiliación anterior a la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de 2015, no hacía obligatorio el requisito de la fecha de afiliación por lo que el Sistema de Afiliación de Militantes del PT de esa época colocaba en automático el año de 1900. Anexó copia certificada de la solicitud de afiliación

III. EMPLAZAMIENTO. El cinco de julio del año en curso,⁵ se ordenó el emplazamiento al PT, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/11515/2018 ⁶	PT	13/julio/18	No da respuesta	No proporcionó

IV. ALEGATOS. El seis de agosto de dos mil dieciocho,⁷ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera, asimismo, se ordenó dar vista al quejoso con el formato de afiliación,

³ Visible a fojas 23 y 24.

⁴ Visible a fojas 29 a 32.

⁵ Visible a fojas 39 a 44.

⁶ Visible a foja 50

⁷ Visible a fojas 62 a 65.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

aportado por el partido político, mediante el cual intentó acreditar que la afiliación controvertida se realizó de conformidad con las disposiciones legales.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-UT/12240/2018 ⁸	<i>PT</i>	08 de agosto de 2018	15 de agosto de 2018 Por medio del oficio REP-PT-INE-PVG-404/2018, el representante propietario de dicho partido dio respuesta a la vista de alegatos.
INE/12JDE/VE/618/2018 ⁹	Trinidad García Rivera	07 de agosto de 2018	14 de agosto de 2018 Mediante escrito, el ciudadano quejoso dio respuesta a la vista de alegatos, a través del cual manifestó que: <i>no es auténtico, y no coincide ni con mi firma (...) que no se aprecia la fotografía, los rasgo característicos de mi persona, lo que me deja en total estado de indefensión, así como ni con el domicilio del suscrito, en el rubro de teléfono de casa, teléfono celular, y teléfono del trabajo, no aparece número alguno, en el rubro de grados de estudio, aparezco únicamente en primaria, siendo que al fecha en que indebidamente me dieron de alta, ya contaba con instrucción universitaria, sin aportar elementos probatorios que sustentaran su dicho.</i>

V. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL. Derivado de los argumentos realizados por el ciudadano Trinidad García Rivera, parte quejosa en el presente asunto, en torno a la vista de la constancia de afiliación proporcionada por el *PT* y atento a lo establecido en el artículo 17 del *Reglamento de Quejas*, que señala los principios que se deben seguir en la tramitación de los procedimientos sancionadores, entre los que se encuentra el principio de exhaustividad, se requirió al partido político denunciado el original del formato de afiliación correspondiente al ciudadano Trinidad García Rivera.

Al respecto el representante propietario del *PT*, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-426/2018, remitió el original del formato de afiliación correspondiente al ciudadano antes señalado.

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

⁸ Visible a foja 72.

⁹ Visible a foja 85.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;¹⁰ 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la Ley de Partidos, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de Trinidad García Rivera.

Ahora bien, conforme al artículo 44 párrafo 1, inciso j) de la *LGIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la normatividad electoral, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la Ley.

¹⁰ De la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: **"RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**, lo procedente es que, al haber sido cometidos los hechos antes del **veintitrés de mayo de dos mil catorce**, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, **la legislación comicial aplicable para el trámite del presente asunto será el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales**. Ahora bien, respecto a las reglas procedimentales que regirán para la sustanciación del presente procedimiento, serán aplicables las contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25, párrafo 1, incisos a), e), y u), y 29 de la Ley de Partidos, así como la infracción a los derechos contenidos en los numerales 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, del mismo ordenamiento jurídico, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PT*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹¹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los

¹¹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir, con base en el derecho humano a la libre asociación en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libertad de afiliación se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación del ciudadano Trinidad García Rivera al *PT*, de conformidad con las documentales que obran en el expediente vitado al rubro, se realizó el veinte de febrero de dos mil ocho, fecha en la cual se encontraba vigente dicho Código.¹²

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por el quejoso y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de la queja presentada por un ciudadano en contra del *PT*, debido, a que dicho partido político afilió al quejoso sin que éste prestara su consentimiento para ello, haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales.

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

En defensa de sus intereses, el *PT* manifestó, en esencia, que no se actualiza vulneración alguna a la normatividad aplicable toda vez que quedan a salvo los derechos político electorales del ciudadano Trinidad García Rivera, al ejercer libremente su derecho a afiliarse y desafiliarse a este partido político.

Asimismo, el **ciudadano quejoso Trinidad García Rivera**, señaló, en síntesis, que el formato de afiliación proporcionado por el *PT*, carece de valor, que el mismo, no es auténtico y no coincide con su firma, asimismo, se advierte que los datos

¹² El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

correspondientes al domicilio, teléfonos de casa, celular y trabajo, aparecen vacíos y el apartado de escolaridad indica primaria, siendo el correcto el de licenciatura.

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto.

2. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PT* afilió indebidamente o no al ciudadano que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, Tratados Internacionales y Ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹³

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos

¹³ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PT

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PT¹⁵

...

CAPÍTULO IV.

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES.

Artículo 14. *Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes **participan en forma personal y voluntaria**, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.*

¹⁵ http://partidodeltrabajo.org.mx/2011/portal_transparencia/art76/XIV/10.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Artículo 15. *Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:*

- a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.*
- b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.*
- c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en las instancias respectivas.*
- d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para realizar su trabajo entre las masas y su trabajo partidario.*
- e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas que, por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y discreción.*
- f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del Partido y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas.*
- g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del Trabajo.*
- h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros nacionales e internacionales.*
- i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo realizado.*
- j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo.*
- k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del Partido del Trabajo.*

Artículo 16. *Son obligaciones de los militantes:*

- a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones correspondientes.*
- b) Participar activa y permanentemente en una organización social.*
- c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales.*
- d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias.*
- e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su disciplina y acatar sus Órganos de Dirección.*
- f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo.*
- g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento.*
- h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos por las instancias partidarias. En*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

caso de incumplimiento o negativa se procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo.

i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda.

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.

k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación popular, deberán entregar su declaración patrimonial ante la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses después de su elección o nombramiento.

l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios:

I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos.

II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador:

PERCEPCIÓN CUOTA Hasta 5 salarios mínimos mensuales: 2% De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales: 5% De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10% De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales: 15% De 43 salarios mínimos mensuales en adelante: 20% Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que establecen el artículo 115 de los presentes Estatutos, de conformidad con las resoluciones que emitan las instancias internas encargados de dirimir conflictos.

m) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.

n) Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo.

o) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.

Artículo 17. *Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus derechos son:*

a) Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.

b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.

c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas.

d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros.

e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo.

f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se excluyen un reducido

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

número de problemas que por su naturaleza delicada no pueden informarse abiertamente.

g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas.

h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del Partido del Trabajo.

i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del Trabajo en su conjunto.

Artículo 18. *Son obligaciones de los afiliados:*

a) Aceptar los Documentos Básicos.

b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del Trabajo.

c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, nacional e internacional.

d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.

e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las organizaciones sociales o en algunas franjas de la sociedad.

f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde se participe.

g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente.

h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las organizaciones sociales.

i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción partidaria.

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.

k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.

l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de los presentes Estatutos.

Artículo 19. *Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria.*

Artículo 20. *Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán en aspectos financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo en general. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro Partido.

b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo.

c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal, o ante la Comisión Ejecutiva Nacional.

Artículo 21. *Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea política y Documentos Básicos.*

- b) Promover el voto a favor de nuestro Partido.*
c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo. *d) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación.*

CAPÍTULO V.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.

Artículo 22. *Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son:*

- a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano.*
b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus Documentos Básicos.
c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del Trabajo.
d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.
e) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.
f) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PT*, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
- Para estar afiliado al *PT*, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al *PT*, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, **suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación**, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso particular el *PT*), **tienen la carga de conservar y resguardar**, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliados al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁶ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁷ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

¹⁶ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁸ y como estándar probatorio¹⁹.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁰ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

¹⁸ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁹ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

²⁰ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera **idónea** demuestra que una persona está afiliado voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que **si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante**, será ineficaz

cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales **que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo**; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que **de manera insuperable** el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas y Denuncias*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se**

apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005²¹ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden,

²¹ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.***²²
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***²³
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***²⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***²⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS***²⁶
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)***²⁷

²² Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

²³ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

²⁴ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

²⁵ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

²⁶ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

²⁷ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11²⁸, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29²⁹, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es***

²⁸ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

²⁹ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

Énfasis añadido

Lo anterior, en suma, significa que para desvirtuar la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

5. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico de trece de junio de dos mil dieciocho, recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de la *DEPPP*, mediante el cual se informó a la *UTCE* que el hoy quejoso se encuentra afiliado al *PT*, así como la fecha en que ello aconteció.
- b) **Documental privada** consistente en original del formato de la solicitud de afiliación del ciudadano Trinidad García Rivera al *PT*, de la cual se advierte la afiliación cuestionada, así como la fecha en que esta se realizó, misma que fue aclarada por parte del partido político denunciado, precisando que el Sistema de Afiliación de Militantes del *PT* colocaba en automático el año de 1900.

Cabe señalar, que si bien el formato de la solicitud de afiliación del ciudadano Trinidad García Rivera, contiene como año de afiliación 1900, lo cierto es dicha documental privada cuenta con la manifestación de la voluntad del quejoso (firma autógrafa), por lo que esta autoridad electoral concluir la litud de la afiliación discutida fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria del hoy quejoso, realizándose conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE*; y 27, párrafo 2, del *Reglamento de Quejas*, mientras que la documental privada referida en el inciso b) sólo hará prueba plena cuando, al ser valorada por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la *LGIPE*; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ³⁰	Manifestaciones del Partido Político ³¹
El denunciante afirma que: nunca ha solicitado la afiliación a ningún Partido Político Nacional o local, y que la afiliación indebida la PT, le causa agravios.	Informó, que el denunciante está afiliado al <i>PT</i> con fecha de alta el <u>veinte de febrero de dos mil ocho.</u>	Indicó que el quejoso está afiliado con <u>fecha de alta de mil novecientos</u> , toda vez que los requisitos de afiliación anterior a la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de 2015, no hacía obligatorio el requisito de la fecha de afiliación por lo que el Sistema de Afiliación de Militantes del PT de esa época colocaba en automático el año de 1900.
Observaciones		
El partido político denunciado aportó original del formato de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar del quejoso, correspondientes al nombre, municipio y clave de elector, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.		
En uno de los apartados de la solicitud de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del quejoso (miembro desde 1900).		
Conclusiones		
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trinidad García Rivera fue registrado como militante del <i>PT</i>; 2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 20 de febrero de 2008, de conformidad con la información proporcionada por la <i>DEPPP</i>; 3. El <i>PT</i> aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables. 		
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PT</i> y que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, original del formato de afiliación, asimismo, cabe referir que el ciudadano quejoso objetó dicho documento de forma lisa y llana.		

³⁰ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

³¹ Visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP³⁰	Manifestaciones del Partido Político³¹
Lo anterior, toda vez que el quejoso en respuesta a la vista (con el formato de afiliación), refirió que <i>no es auténtico, y no coincide ni con mi firma (...) que no se aprecia la fotografía, los rasgo característicos de mi persona, lo que me deja en total estado de indefensión, así como ni con el domicilio del suscrito, en el rubro de teléfono de casa, teléfono celular, y teléfono del trabajo, no aparece número alguno, en el rubro de grados de estudio, aparezco únicamente en primaria, siendo que al fecha en que indebidamente me dieron de alta, ya contaba con instrucción universitaria</i> , sin aportar elementos probatorios que sustentaran su dicho, por lo que se debe concluir que, la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP* y lo reconocido por el *PT*, el hoy quejoso, Trinidad García Rivera, fue afiliado al citado partido político el veinte de febrero de dos mil ocho.
- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados del hoy quejoso es un hecho reconocido por las partes, y constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dicha afiliación, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de su titular o de la ausencia de este.

6. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Así, en consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de dichas constancias corresponde al quejoso, pues de otra forma, deberá prevalecer la presunción de inocencia que asiste al partido político.

Así, en un primer momento, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo reconocido por el *PT* y de la constancia de afiliación aportada por el denunciado, que el quejoso fue afiliado al partido político en el veinte de febrero de dos mil ocho, por lo que a continuación se debe dilucidar si dicha afiliación fue o no voluntaria, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, será procedente imponer una sanción entre las que establece el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIE*.

En este sentido, la carga de la prueba para demostrar que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del hoy quejoso, corresponde al *PT*, y no al quejoso acreditar que no dio su consentimiento para ser afiliado a dicho partido, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

Lo anterior, visto que la defensa establecida por el partido político estriba en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación.

Así, al haberse demostrado la existencia de la afiliación del quejoso al partido denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dicha afiliación fue consentida por el denunciante y por ende resulta legalmente válida, o si, por el contrario, tal afiliación adolece de manifestación de la voluntad libre, individual, pacífica y personal de Trinidad García Rivera, y en consecuencia debe reputarse ilícita.

Así las cosas, para sostener la legalidad de la afiliación cuestionada el *PT* ofreció como medio de prueba original del formato de la solicitud de afiliación del hoy quejoso, medio de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de la afiliación controvertida.

No es obstáculo a lo anterior el hecho que se trata de una documental privada que *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciada en su contexto y concatenada con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de la afiliación discutida, ya que fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria del hoy quejoso, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que plasmo en dicho formato.

De este modo, esta autoridad resolutora integró una cadena de indicios a partir de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de la afiliación; ii) la documental privada de la solicitud de afiliación de Trinidad García Rivera, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad del quejoso (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción eficaz de ese formato.

En efecto, por cuanto hace a Trinidad García Rivera, es posible advertir de las constancias de autos que, mediante Acuerdo de seis de agosto del año en curso, se le dio vista con la finalidad que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el medio de prueba presentado por el *PT*.

Tal requerimiento fue conforme a lo siguiente:

TERCERO. VISTA DE ALEGATOS.

...

*Asimismo, con el fin de respetar la garantía de audiencia y defensa, así como el derecho humano al debido proceso previsto en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se considera apegado a derecho, **dar vista** con las constancias atinentes (copia simple de la documentación aportada por el Partido del Trabajo –cédula de afiliación-) al ciudadano **Trinidad García Rivera** para que, al momento de presentar su escrito de alegatos, efectúe las manifestaciones que considere oportunas, las cuales deberán relacionarse con la materia del asunto que nos ocupa, a fin de contar con elementos suficientes sobre la presunta afiliación indebida que se aduce.*

Al respecto, es importante hacer notar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se le corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24

De la objeción

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Queda a disposición de las partes el expediente citado al rubro para consulta, en el 12 Consejo Distrital de este Instituto en el estado de Chiapas, así como en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sita en Viaducto Tlalpan No. 100, edificio “C”, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, C.P. 14610, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

Al efecto, el denunciante en cita manifestó lo siguiente:

Además solicito se tenga por objetado el contenido y firma así como la objeto en cuanto al alcance y valor probatorio, del documento de filiación del partido del trabajo que exhibe adjunto a su escrito el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva de Chiapas, Maestro Heberto Ochoa Méndez, de fecha 07 de agosto del 2018, misma que anexa en copia carente de valor alguno, no es auténtico, y no coincide ni con mi firma misma que en su cotejo con mi credencial de elector que ofrecí en copia al presentar la denuncia así como en lo que no se aprecia la fotografía, los rasgo característicos de mi persona, lo que me deja en total estado de indefensión, así como ni con el domicilio del suscrito, en el rubro de teléfono de casa, teléfono celular, y teléfono del trabajo, no aparece número alguno, en el rubro de grados de estudio, aparezco únicamente en primaria, siendo que al fecha en que indebidamente me dieron de alta, ya contaba con instrucción universitaria, por lo que impugno dicha afiliación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Ahora bien, de las manifestaciones antes relatadas, se advierte la oposición por parte del quejoso al formato de afiliación, al referir que, *no es auténtico, y no coincide ni con mi firma misma que en su cotejo con mi credencial de elector que ofrecí en copia al presentar la denuncia así como en lo que no se aprecia la fotografía, los rasgo característicos de mi persona, lo que me deja en total estado de indefensión, así como ni con el domicilio del suscrito, en el rubro de teléfono de casa, teléfono celular, y teléfono del trabajo, no aparece número alguno, en el rubro de grados de*

estudio, aparezco únicamente en primaria, siendo que al fecha en que indebidamente me dieron de alta, ya contaba con instrucción universitaria.

Sin embargo, debe precisarse que tales argumentos se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establece razones concretas en que, su caso, apoyen su oposición, ni tampoco aportó elementos de prueba para acreditar sus manifestaciones a efecto de restar fuerza probatoria de esa prueba, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas. En ese sentido, si una de las partes se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la contraparte, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni aporta elementos para acreditar su dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento.

Por tanto, si el quejoso se limita en referir que, *no es auténtico, y no coincide ni con mi firma (...) que no se aprecia la fotografía, los rasgo característicos de mi persona, lo que me deja en total estado de indefensión, así como ni con el domicilio del suscrito, en el rubro de teléfono de casa, teléfono celular, y teléfono del trabajo, no aparece número alguno, en el rubro de grados de estudio, aparezco únicamente en primaria, siendo que al fecha en que indebidamente me dieron de alta, ya contaba con instrucción universitaria*, debió especificar las razones concretas en que apoyaba su argumento, así como aportar los elementos probatorios idóneos para tratar de acreditar su dicho; además debió especificar los motivos precisos que consideraba al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor del documento aportado, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

Consecuentemente, si el denunciante se circunscribió a oponerse de manera genérica al medio de convicción ofrecido por el *PT*, al referir que podría tratarse de una manipulación de sus datos y firma, lo cierto es que no especificó las razones concretas para llegar a tal conclusión, ni mucho menos aportó elementos para acreditar su dicho, por lo que su objeción no es apta de restar valor a la prueba objeto del cuestionamiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (10a.) de rubro y contenido siguientes:³²

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). *Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.*

En tal virtud, si bien es cierto Trinidad García Rivera, objetó el documento base aportado por el denunciado, lo cierto es que no ofreció y mucho menos aportó a la controversia elemento de convicción alguno que soportara su dicho, de manera que debe concluirse que faltó a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que podría tratarse de una manipulación

³² Consultable en la liga electrónica
<http://200.38.163.178/sjsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000608&Clase=DetalleTesisBL&Semana=0>

de sus datos y firma, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

7. CONCLUSIÓN

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera no resultó fragmentada por las manifestaciones del referido quejoso, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Bajo esta óptica, resulta claro que si el quejoso sostuvo que podría tratarse de una manipulación de sus datos y firma, y que el formato de afiliación presentado por el *PT* carece de valor alguno, toda vez que no es auténtico y no coinciden sus datos personales, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la manipulación y/o falsificación de un hecho jurídico, lato sensu, (en el caso de los datos y la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En consecuencia, si el quejoso no satisface esa carga al no ofrecer medio de prueba alguno, entonces, resulta dable tener por cierta la firma cuestionada y consecuentemente como lícita la afiliación del que el quejoso se duele. En conclusión, a partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de Trinidad García Rivera, al *PT* fue apegada a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, esta autoridad estima que con base en el marco normativo señalado, las firmas en las cédulas de afiliación que proporcionen los partidos políticos, son un elemento indispensable para acreditar la voluntad de los ciudadanos para expresar su consentimiento para ser afiliados, más allá si los recuadros de las cédulas de afiliación no son llenados o son mal llenados, pues con la firma se ve reflejada la conformidad con el documento en el que se estampa, salvo que exista alguna prueba en contrario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/TGR/JD12/CHIS/162/2018

De tal manera, debe concluirse que dicho denunciante faltó a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que podría tratarse de una manipulación de sus datos personales y de su firma, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la Ley de Partidos en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación del quejoso al *PT*, sino también la ausencia de voluntad del mismo para ser afiliado, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que, si en la especie solamente se justificó la afiliación del quejoso sin evidenciar la ausencia de voluntad del mismo en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *Ley de Partidos*, ya que al concluirse que el hoy quejoso se afilió libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PT* no utilizó indebidamente la información y datos personales del impetrante, porque este, en su oportunidad, consintió afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente Resolución, era menester proporcionar al *PT* esa información y documentos.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PT* sanción alguna.

En suma, ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad

del ciudadano para afiliarse voluntariamente a un partido político, no fue transgredido por el *PT* y, consecuentemente, el presente procedimiento sancionador debe considerarse **INFUNDADO**.

Similar consideración estableció el *Consejo General* del *INE*, en la determinación INE/CG1252/2018, dictada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018.

CUARTO. DESAFILIACIÓN DEL QUEJOSO

En ese sentido, con independencia de que, en el fondo se ha declarado **infundado** el procedimiento, lo cierto es que resulta indudable que la intención de dicho denunciante es **no** continuar como afiliado al partido político denunciado, por lo que se debe ordenar a *PT* para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro del mismo como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es

[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA**”

impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido del Trabajo** al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto del ciudadano Trinidad García Rivera, en términos del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. Con independencia que en el fondo se ha declarado **infundado** el presente procedimiento, se ordena al **Partido del Trabajo** para que, de ser el caso que el quejoso -Trinidad García Rivera- continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha de presentación de su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP* del *INE*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE* las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese al ciudadano **Trinidad García Rivera** y al **Partido del Trabajo**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución aprobada en el apartado 3.3 en el Diario Oficial de la Federación cuando ésta haya causado estado. Continúe también con el siguiente punto, Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios, derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 en los Municipios de Solosuchiapa, el Porvenir, Santiago el Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero en el estado de Chiapas, y en los Municipios de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. ____ Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Quiero simplemente hacer una reflexión sobre estos Calendarios y Programas que se están presentando, que fueron conocidos en su momento por la Comisión de Vinculación, pero también por la Comisión Temporal que para efectos prácticos son 2 Comisiones que actúan en estrecha coordinación para poder atender la responsabilidad institucional respecto de estas elecciones extraordinarias. _____

Como todos sabemos, en estos Municipios que ha enlistado el Secretario del Consejo, hay causas diversas de anulación de las elecciones respectivas y creo que algunas de estas sentencias emitidas por las instancias jurisdiccionales son sentencias que fijan criterios interesantes que deben ser tomados en cuenta no sólo por las autoridades electorales sino también por los propios actores políticos. _____

Uno de los Municipios de Chiapas Solosuchiapa se anuló por la no instalación del 20 por ciento que es una causal ya establecida con antelación, por ejemplo, el Porvenir, Bejucal de Ocampo, Tapilula y Catazajá, también de Chiapas, aquí lo que se aprobó y probó como causal de anulación, tuvo que ver con la vulneración a la secrecía del voto. Porque al registrarse, se aprobó y obligó a algunas personas, en su mayoría, mujeres para que mostraran el sentido de su voto. _____

Este criterio me parece interesante por parte de la Sala que tomó la decisión de anular. Chicoasén, por ejemplo, aquí fue la quema de los paquetes electorales que hizo imposible la realización del cómputo de la Elección. _____

Entonces, como podemos ir observando, hay criterios distintos en San Andrés Duraznal y Montecristo de Guerrero, hay dudas expresadas por la Sala respecto a la autenticidad de las Actas de Escrutinio y Cómputo de casillas. _____

Por eso, es importante que tengamos en consideración esto, sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito de las actividades de los órganos electorales de las Entidades Federativas, San Dionisio del Mar, vamos al tercero o cuarto intento de hacer la Elección Municipal. _____

Tengo la convicción de que ahora sí la tendremos en este Municipio, del estado de Oaxaca, pero aquí hubo expresamente un Acuerdo Emitido por el Órgano Electoral del estado de Oaxaca que determinó que no habría Elección Ordinaria, se declaró desierta y, por consecuencia, estamos yendo ahora a la Elección Extraordinaria. _____

Así que, como podemos observar, cada una de estas elecciones significa una elección en materia de criterios y también de las causas específicas de anulación. _____

Los planes y calendarios del Proceso Electoral Extraordinario, insisto, han sido revisados con cuidado por parte de las Comisiones involucradas aquí. De manera particular, por la Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Electorales de los estados que coordina el Maestro Miguel Ángel Patiño, es un Plan y Calendarios que establecen las actividades que el Instituto va a realizar. _____

Por ejemplo, la instalación de sus Consejos Locales y Distritales, la forma de emisión de las Listas Nominales que se van a utilizar, la ubicación y la integración de las correspondientes Mesas Directivas de Casilla, la emisión y revisión de los documentos

y los materiales electorales, atenderemos algunas cuestiones operativas como los Mecanismos de Recolección de los Paquetes Electorales y, por supuesto, veremos si hay necesidad de hacer algunos ajustes al Programa de Resultados Electorales Preliminares en estas instancias donde ahora se ha determinado por razones específicas del tipo de elecciones que se van a realizar, que no habrá los Comités correspondientes._____

También, obviamente, el Instituto va a emitir los acuerdos y Lineamientos de las determinaciones que le correspondan a esta institución para ser operativa la Elección. Se trata, básicamente, de un conjunto de Planes y Calendarios que retoman la experiencia que se ha tenido ya en elecciones extraordinarias y que se está sometiendo a consideración de este Consejo General para quedar firmes y ser, en su momento, implementados para las elecciones correspondientes._____

Es todo Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 4._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1361/2018) Pto. 4_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y CALENDARIOS DE COORDINACIÓN PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN LOS MUNICIPIOS DE SOLOSUCHIAPA, EL PORVENIR, SANTIAGO EL PINAR, TAPILULA, BEJUCAL DE OCAMPO, CATAZAJÁ, CHICOASÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Y MONTECRISTO DE GUERRERO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, Y EN LOS MUNICIPIOS DE SAN DIONISIO DEL MAR, SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN FRANCISCO IXHUATÁN Y SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA

G L O S A R I O

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CPEUM:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral
IEPC:	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Chiapas
IEEPCO:	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
Instituto:	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
MC:	Movimiento Ciudadano
Morena:	Movimiento de Regeneración Nacional
NA:	Partido Nueva Alianza
OPL:	Organismos Públicos Locales
PAN:	Partido Acción Nacional
PES:	Partido Encuentro Social

PRD:	Partido de la Revolución Democrática
PRI:	Partido Revolucionario Institucional
PVEM:	Partido Verde Ecologista de México
RE	Reglamento de Elecciones
Unidad Técnica:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

A N T E C E D E N T E S

- I. El 1º de julio de 2018 se desarrolló la Jornada Electoral concurrente en los estados de Chiapas y Oaxaca; se renovó a las autoridades de sus respectivos Congresos Locales, sus Ayuntamientos y la titularidad del ejecutivo en el caso de Chiapas.
- II. En los Consejos Municipales del estado de Chiapas, el día 4 de julio de 2018, se desarrollaron los Cómputos correspondientes, con los siguientes resultados e impugnaciones subsecuentes:

A. Municipio de Solosuchiapa, Chiapas

Derivado del cómputo que se realizó para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

Coalición Chiapas al Frente	PRI	PT	PVEM	NA	MORENA	Chiapas Unido	Podemos Mover a Chiapas	PES	Cand. No Reg.	Votos Nulos
28	2	4	757	354	10	50	198	4	0	65

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al PVEM.

Los partidos NA, Podemos Mover a Chiapas, PAN y Morena, quienes quedaron en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar en los resultados, de forma respectiva interpusieron recurso de inconformidad ante el Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas radicados y acumulados en el TEECH/JNE-M/011/2018. El 24 de agosto de 2018, la autoridad jurisdiccional local determinó anular la elección y revocar la constancia de mayoría y validez, por la acreditación de la no instalación de casillas en más del 20% (veinte por ciento) de las secciones electorales.

Por lo anterior, el C. Fernando Aparicio Trejo, candidato del PVEM (actor) interpuso un Juicio para la Protección de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. En la Resolución de fecha 12 de septiembre de 2018, de la Sala Regional se confirmó la sentencia del TEECH/JNE-M/011/2018, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el recurso de inconformidad SX-JDC-819/2018.

En consecuencia, el actor presentó un Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-REC-1254/2018, el cual fue resuelto el 25 de septiembre de 2018, al desechar de plano la demanda.

B. Municipio El Porvenir, Chiapas

Derivado del cómputo que se realizó para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

Coalición Chiapas al Frente	PRI	Coalición Juntos Haremos Historia	PVEM	NA	Chiapas Unido	Mover a Chiapas	Cand. No Reg.	Votos Nulos	Total
18	114	1360	682	306	1082	258	0	230	4050

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a la Coalición Juntos Haremos Historia.

El Partido Chiapas Unido, el cual obtuvo el segundo lugar en los resultados, interpuso un recurso de inconformidad el 8 de julio del mismo año, radicado con la clave TEECH/JNE-M/091/2018, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El 31 de agosto de 2018, la autoridad jurisdiccional determinó anular la elección y revocar la constancia de mayoría y validez por acreditarse actos

que derivaron en un clima de tensión, violencia e intimidación el día de la Jornada Electoral.

Por lo anterior, el partido Morena y Chiapas Unido interpusieron un Juicio de Revisión Constitucional. En la resolución del 14 de septiembre de 2018, la Sala Regional se confirmó la sentencia del TEECH/JNE-M/091/2018, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el recurso de inconformidad SX-JRC-308/2018 y SX-JRC-311/2018.

En consecuencia, el Partido Político Chiapas Unido presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso de Reconsideración recaído en el expediente SUP-REC-1290/2018, el cual fue resuelto el 25 de septiembre de 2018, al desechar de plano la demanda.

C. Municipio Santiago el Pinar, Chiapas

Derivado del Cómputo que se realizó para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

Coalición Chiapas al Frente	PRI-PVEM-NA- Chiapas Unido	Coalición Juntos Haremos Historia	Podemos Mover a Chiapas	Cand. No Reg.	Votos Nulos	Total
3	31	2	1617	0	2	1655

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al partido Podemos Mover a Chiapas.

La candidata de los partidos PVEM-PRI-Chiapas Unido, la candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia, el representante suplente de Morena, el representante de la Coalición Chiapas al Frente, el representante del PES, el representante de MC, el representante del PVEM, el representante del PRD, y la candidata de la coalición Chiapas al Frente, interpusieron demanda de nulidad, todos se radicaron con la clave TEECH/JNE-M/001/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-M/039/2018 y TEECH/JNE-M/040/2018, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El 24 de agosto de 2018, la

autoridad jurisdiccional determinó anular la elección y revocar la constancia de mayoría y validez, por haberse acreditado actos que derivaron en un clima de violencia e intimidación el día de la Jornada Electoral.

Por lo anterior, el partido Podemos Mover a Chiapas y su candidato Sebastián Gómez Gómez interpusieron recursos de impugnación, radicados en los expedientes SX-JRC-266/2018 y SX-JDC-820/2018. En la resolución de la Sala Regional Xalapa se revocó la sentencia del TEECH/JNE-M/001/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas debido a que a juicio de esta autoridad no se acreditó la coacción de la libertad de la ciudadanía de emitir su voto, ni que fueran determinantes para el resultado de la votación.

En virtud de ello, se presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso de Reconsideración recaído en el expediente SUP-REC-1271/2018, el cual fue resuelto el 30 de septiembre de 2018, al revocar la sentencia SX-JRC-266/2018. Esto debido a que la Sala Xalapa solo analizó los actos de violencia y presión de los funcionarios de casilla y electores durante una hora en una plaza pública, pero no estudió la afectación al principio de secrecía y libertad del voto, ya que quienes ejercieron la violencia forzaron a algunas personas, principalmente mujeres, a votar en forma abierta frente a los demás ciudadanos el día de la Jornada Electoral. Esta situación se dio en 3 de las 4 casillas que se instalaron para dicha elección, de esta manera se dejó subsistente la anulación de la elección de Santiago el Pinar que decretó el Tribunal Local.

D. Municipio Tapilula, Chiapas

El 4 de julio de 2018, el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, se instaló con la finalidad de celebrar la sesión de cómputo en las instalaciones del IEPC, pero determinó de manera unánime, no tener elementos suficientes para realizar este acto y, por tanto, no estar en condiciones de expedir constancia de mayoría y validez de esa elección municipal.

En contra de la determinación del Consejo Municipal, el PRI y el PAN, por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas presentaron, el primero de ellos Juicio de

Inconformidad y los restantes Juicios de Nulidad Electoral, todos se radicaron con la clave TEECH/JI/135/2018, TEECH/JNE-M/043/2018, TEECH/JNE-M/044/2018 y TEECH/JNE-M/124/2018 y acumulados, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El 31 de agosto de 2018, la autoridad jurisdiccional determinó la nulidad de la elección y confirmó la determinación de no expedición de la Constancia de Mayoría y Validez, efectuada por el Consejo Municipal Electoral, debido a que se cometieron violaciones generalizadas a la ley electoral local.

Por lo anterior, el Partido Chiapas Unido y su candidato, así como el PAN, interpusieron Juicios de Revisión Constitucional radicados como SX-JRC-302/2018 y acumulados. En la resolución del 14 de septiembre de 2018, la Sala Regional Xalapa, se revocó la sentencia del TEECH/JI/135/2018 al resolver que debió concluir el mecanismo inicialmente implementado por el Consejo Municipal para reconstruir el cómputo municipal de la elección controvertida y declarar un ganador.

Ante dicha resolución el PAN, así como su candidato promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Recurso de Reconsideración recaído en el expediente SUP-REC-1282/2018 y sus acumulados, SUP-REC-1288/2018, SUP-REC 1291/2018 Y SUP-REC-1292/2018, el cual fue resuelto el 30 de septiembre de 2018, con la revocación de la resolución de la Sala Regional Xalapa y la ratificación de la nulidad de la elección del municipio de Tapilula, al establecer que se omitió el análisis de irregularidades graves y sustanciales que vulneran principios constitucionales.

E. Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas

Derivado del Cómputo que se realizó para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

Coalición Chiapas al Frente	PRI	Coalición Juntos Haremos Historia	PVEM	NA	Chiapas Unido	Podemos Mover a Chiapas	Cand. No Reg.	Votos Nulos	Total
462	347	47	13	0	608	95	0	69	1641

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al Partido Chiapas Unido.

En contra de la determinación del Consejo Municipal, la C. Primitiva Roblero Ramírez, en su calidad de candidata de la Coalición “Por Chiapas al Frente” promovió el Juicio de Nulidad Electoral, mismo que se radicó con la clave TEECH/JNE-M/092/2018 ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. El 31 de agosto de 2018, la autoridad jurisdiccional determinó modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas y revocó la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el partido político “Chiapas Unido”.

Por lo anterior, el 3 de septiembre las C. Cruz Lorena Pérez Santizo, María Floriberta Velázquez Rivera y Edvino Pérez Ramírez, presentaron demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Local. En la resolución del 19 de septiembre de 2018, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del TEECH/JNE-M/092/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los recursos de inconformidad SX-JDC-837/2018, SX-JDC-838/2018, SX-JDC839/2018 y SX-JDC-849/2018 acumulados, con lo que se declaró la invalidez de la elección de integrantes del ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, debido a la multitud de irregularidades originadas a partir de la violencia en que se vio inmersa la elección municipal, lo cual vulneró el principio de certeza.

El 21 y 22 de septiembre Primitiva Roblero Ramírez, Cruz Lorena Pérez Santizo y el PRD interpusieron Recursos de Reconsideración contra la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, mismos que recayeron en el expediente SUP-REC-1321/2018, SUP-REC-1356/2018, SUP-REC-1357/2018 y SUP-REC-1357/2018, el cual fue resuelto el 30 de septiembre de 2018, con la confirmación de la sentencia de la Sala Regional Xalapa.

F. Municipio de Catazajá, Chiapas

El 5 de Julio de 2018, el Consejo Municipal otorgó una constancia de mayoría al PVEM. Sin embargo, el 6 de Julio de 2018, el Consejo Municipal declaró la invalidez de la elección y, en consecuencia, la cancelación de la constancia de mayoría previamente emitida, debido a las circunstancias en que fue entregada la misma, presión sobre el Consejero Presidente y Secretario Técnico, quienes fueron sustraídos de sus domicilios y obligados a firmar la referida constancia, así como diversas irregularidades acontecidas el día de la Jornada Electoral y en la referida sesión de Cómputo, tales como hechos de violencia, entrega de paquetes electorales por parte de representantes de partidos políticos, entre otras.

El 9 de julio de 2018, Marcela Avendaño Gallegos, Luis Alfonso Vázquez Lastra y Lázaro Jesús Latoutnerie, en su calidad de candidatos a la presidencia municipal de Catazajá, postulados PRI y NA, respectivamente, y de manera conjunta, el PT, MORENA y PES, respectivamente promovieron impugnaciones a fin de controvertir la omisión del Consejo General y del Consejo Municipal de corregir los resultados, hacer público que se invalidó la elección y tener en el sistema como planilla ganadora a la fórmula de candidatos postulada por el PVEM; asimismo, solicitaron la urgente cancelación de la constancia de mayoría expedida en la referida planilla. El Tribunal local emitió sentencia en los expedientes TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018 y TEECH/JDC/252/2018 acumulados, con la declaración de la nulidad de la elección.

Ante dicha resolución, el 2 de septiembre de 2018, María Fernanda Dorantes Núñez, en su carácter de candidata postulada por el PVEM y Olga Mabel López Pérez representante propietaria ante el Consejo General del referido partido, presentaron escritos de demanda para controvertir la sentencia del Tribunal Local. La Sala Regional Xalapa resolvió el 20 de septiembre de 2018, en los expedientes SX-JDC-840/2018 y SX-JRC-305/2018 acumulados, al confirmar la sentencia del tribunal local.

El 20 y 22 de septiembre de 2018, María Fernanda Dorantes Núñez, el PVEM y Morena, promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral el Recurso

de Reconsideración SUP-REC-1310/2018 y acumulado, al resolver ésta, el 30 de septiembre, desechar de plano los recursos, y quedar en firme la sentencia impugnada.

G. Municipio de Chicoasén, Chiapas

Derivado de la sesión de cómputo del 4 de julio, el Consejo Municipal determinó que no era posible entregar una constancia de mayoría a alguno de los contendientes debido a que la paquetería electoral fue quemada.

Los días 7 y 8 de julio de 2018, se presentaron escritos de demanda de Juicios de Nulidad Electoral e Inconformidad para controvertir la determinación del Consejo Municipal Electoral de Chicoasén, consistente en no contabilizar las casillas 436 Básica, 436 Contigua 2, 437 Contigua 2 y 438 Básica, así como la omisión de declaración de la nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento de referencia, por las irregularidades desarrolladas. Por lo que el 31 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral de Chiapas, emitió sentencia a los expedientes TEECH/JNE-M/064/2018, TEECH/JI/138/2018 y TEECH/JNE-M/065/2018, al confirmar la determinación de la invalidez de la elección.

Por lo anterior, el 4 de septiembre de 2018, el PRD, por conducto de su representante ante el Consejo Municipal de Chicoasén, y Bersaín Gutiérrez González, en su calidad de candidato a Presidente Municipal postulado por el referido instituto político, presentaron demanda de juicio de revisión constitucional electoral para controvertir la sentencia anterior. Por lo que el 19 de septiembre de 2018, la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-304/2018, determinó confirmar la sentencia del Tribunal local.

H. Municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas

Derivado de la sesión de Cómputo que se celebró el 4 de julio de 2018, el Consejo Municipal, determinó que toda vez que no se tenían los paquetes electorales, se encontraba imposibilitado para llevar a cabo el escrutinio y cómputo, por lo que declaró la invalidez de la elección municipal.

El 6 y 8 de julio de 2018, Josué Hernández Hernández y José Arturo Sánchez Hernández, candidato a presidente municipal y representante propietario, ambos del partido Podemos Mover a Chiapas presentaron escritos de demanda a fin de controvertir la invalidez de la elección. El Tribunal del estado resolvió en los expedientes acumulados TEECH/JNE-M/121/2018 y TEECH/JNE-M/122/2018, la declaración válida la elección, pues consideró que el Consejo Municipal debió tomar en cuenta las actas de escrutinio y cómputo de las casillas correspondientes a la sección 1213 Básica, Contigua 1, Contigua 2, Contigua 3 y Contigua 4, en poder de los partidos políticos, para llevar a cabo el cómputo municipal de la elección.

El 14 y 15 de agosto, los partidos Chiapas Unido y PVEM, así como Juana Ruth Gómez Hernández, ostentándose como candidata a Presidenta Municipal de San Andrés Duraznal, postulada por el PVEM, promovieron respectivamente juicios de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Así, el 6 de septiembre de 2018, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, en los expedientes acumulados SX-JRC-229/2018, SX-JRC-230/2018 y SX-JDC-689/2018, revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, las constancias de mayoría y validez, por lo que declaró la invalidez de la elección.

El 9 de septiembre de 2018, MC y su candidato promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral el Recurso de Reconsideración SUP-REC-1195/2018, al determinar ésta el 30 de septiembre de 2018, que se desechaba de plano la demanda, y quedó firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa.

I. Municipio de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas

Derivado del Cómputo que se realizó el 04 de julio para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

PRI	PT-MORENA-ES	PVEM	NA	Chiapas Unido	Podemos Mover a Chiapas	Cand. No Reg.	Votos Nulos
3	11	1,882	1,001	2	2	0	113

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez al PVEM.

El 8 de julio de 2018, Reynaldo Girón Bautista, candidato postulado por NA, y dicho partido político, por conducto de Luis Girón Gómez propietario ante el Consejo Municipal promovieron Juicios de Nulidad Electoral. Por lo que el Tribunal Local de Chiapas, en los expedientes acumulados TEECH/JNE-M/041/2018 y TEECH/JNE-M/042/2018, resolvió modificar los resultados de los cómputos:

PRI	PT-MORENA-ES	PVEM	NA	Chiapas Unido	Podemos Mover a Chiapas	Cand. No Reg.	Votos Nulos
3	11	1,679	876	2	2	0	113

El 7 y 8 de agosto de 2018, Reynaldo Girón Bautista y NA, presentaron demandas para controvertir la sentencia previamente mencionada. La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral en los expedientes SX-JDC-648/2018 y SX-JRC-210/2018, revocó la sentencia del tribunal local y le ordenó, realizar un análisis exhaustivo de todos los elementos del caso.

El 1º de septiembre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emitió nueva resolución en los expedientes acumulados TEECH/JNE-M/041/2018 y TEECH/JNE-M/042/2018, al confirmar la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez.

El 10 de septiembre de 2018, Reynaldo Girón Bautista y NA, presentaron demandas para controvertir nuevamente la sentencia previamente mencionada. Entonces, el 14 de septiembre de 2018, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral emitió sentencia en los expedientes SX-JDC-848/2018 y SX-JRC-322/2018, y resolvió revocar la sentencia del tribunal local, y declarar la nulidad de la elección, así como de las constancias de mayoría y validez por diversas irregularidades en el desarrollo de la jornada y de las sesiones de cómputo.

El 18 de septiembre, el PVEM y su candidata Ángela Hernández Pérez, interpusieron recurso de reconsideración ante la Sala Superior, radicado en el

expediente SUP-REC-1306/2018, mismo que el 30 de septiembre de 2018 fue desechado de plano, manteniéndose los efectos de la sentencia de la Sala Regional Xalapa.

J. Municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas

Derivado del Cómputo que se realizó para la elección municipal se obtuvieron los resultados siguientes:

Coalición Chiapas al Frente	Juntos Haremos Historia	PRI-PVEM-NA- Chiapas Unido	Podemos Mover a Chiapas	PES	Cand. No Reg.	Votos Nulos	Total
336	479	171	534	149	2	48	1719

Por lo que el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al Partido Podemos Mover a Chiapas.

La C. Edelmira Nolasco Martínez, candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia interpuso Juicio de Nulidad Electoral ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas radicados en el TEECH/JNE-M/056/2018 y TEECH/JNE-M/057/2018. El 31 de agosto de 2018, el tribunal local determinó modificar el cómputo municipal, con la declaración de la validez de la elección.

Por lo anterior, el Partido Morena interpuso un Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Regional Xalapa. En la resolución de dicha autoridad del 21 de diciembre de 2018, se revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el recurso de inconformidad SX-JRC-320/2018, y se anuló la elección. Esto, entre otras causas, por no existe certeza en la autenticidad de las actas de escrutinio y cómputo de más del 20% de la totalidad de casillas.

Ante dicha resolución, el Partido Mover a Chiapas presentó ante la Sala Superior, el recurso de Reconsideración recaído en el expediente SUP-REC-1395/2018, el cual fue resuelto el 30 de septiembre de 2018, al desear de plano la demanda.

- III. En el caso del estado de Oaxaca, en dos municipios no se llevaron a cabo elecciones municipales el día de la Jornada Electoral concurrente, de acuerdo a lo siguiente:

a) Municipio de San Juan Ihualtepec, Oaxaca

En el Municipio de San Juan Ihualtepec, correspondiente al Distrito Electoral Federal 06, un Capacitador-Asistente Electoral (CAE) informó el 23 de junio, que no le fue posible llevar a cabo simulacros con las y los ciudadanos designados, que por determinación de los habitantes de la Cabecera Municipal, no se permitiría la realización de ningún tipo de elección (federal o local). El 28 de junio, el CAE informó que intentó llevar a cabo las actividades preparatorias a la Jornada Electoral y entrega del paquete electoral; sin embargo, no se le permitió el ingreso a la comunidad.

En este sentido, el Consejo Distrital 06 del INE, con sede en la Ciudad de Tlaxiaco, mediante Acuerdo A35/INE/OAX/CD06/01-07-18, de fecha 1º de julio, aprobó el ajuste a la baja del número de casillas, por causas supervenientes, en específico de la casilla 1162 Básica; instruyó a la Presidenta del Consejo Distrital que ordenara una tercera publicación de la lista con los ajustes correspondientes al número y la ubicación de las casillas que se instalarían durante la Jornada Electoral; se instruyó a la Secretaría del Consejo Distrital para que remita al Consejero Presidente del Consejo Local en el estado de Oaxaca del Instituto, copia de la relación de los ajustes aprobados en este acuerdo, para que a través de su conducto hiciera entrega formal al IEEPCO. Cabe mencionar que no se presentaron impugnaciones, respecto de la situación jurídica de la elección de este municipio.

b) Municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca

En el caso del Municipio de San Dionisio del Mar, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, emitió el Acuerdo IEEPCO-CG-65/2018, por el que se determinaron procedentes las renunciaciones presentadas por las Ciudadanas y Ciudadanos de las seis planillas participantes en la elección ordinaria, por lo que, en consecuencia, se declaró desierta la elección local ordinaria.

- IV. Respecto a otros dos municipios en Oaxaca, el día 4 de julio de 2018 se desarrollaron los Cómputos correspondientes, con los siguientes resultados e impugnaciones subsecuentes:

c) Municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca

En el Consejo Municipal se desarrollaron los Cómputos correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados:

Coalición "Por Oaxaca al Frente"	Coalición "Todos por Oaxaca"	Coalición "Juntos Haremos Historia"	Partido Unidad Popular	Cand. No Reg.	Votos Nulos	Total
1863	1913	926	623	0	134	5459

Derivado de lo anterior, se entregó la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por la coalición "Todos por Oaxaca", conformada por el PRI, PVEM y NA.

Los partidos MC, PRD, Morena y PAN interpusieron recursos de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que se radicarón en el expediente con las claves RIN/EA/23/2018, RIN/EA/24/2018, RIN/EA/69/2018, RIN/EA/70/2018 Y JDC/247/2018. El 27 de septiembre de 2018, la autoridad jurisdiccional determinó, que dado lo cerrado de los resultados de la elección, la omisión de contabilizar los resultados de la casilla 883 Extraordinaria, genera una falta de certeza, por lo decretó la invalidez de la elección.

A lo anterior, en Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, se radicarón los expedientes, SX-JRC-365/2018 y sus acumulados SX-JRC-366/2018, SX-JRC-367/2018 y SX-JRC-368/2018, mismos que se encuentran en proceso, por lo que no ha recaído sentencia definitiva.

a) San Bartolomé Ayautla, Oaxaca

En el Consejo Municipal se desarrollaron los Cómputos correspondientes, por lo que se entregó la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el Partido Social Demócrata.

En relación a lo anterior, en sentencia del 23 de agosto del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente RIN/EA/17/2018 y sus acumulados RIN/EA/64/2018 y RIN/EA/65/2018, confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de concejales del ayuntamiento de San Bartolomé Ayautla y el otorgamiento de la constancia de mayoría.

La Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-282/2018, revocó la sentencia controvertida y en consecuencia declaró la nulidad de la elección de Concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé Ayautla, Oaxaca, ya que como se explicaba en la sentencia, en la elección controvertida existió una vulneración al principio de certeza, pues dos paquetes electorales objeto de recuento no fueron recontados por el Consejo Municipal sin que mediara justificación alguna, aunado a que existieron hechos de violencia durante la sesión de cómputo municipal que fueron ocasionados por el partido ganador.

Al respecto se encuentra abierto el plazo para la impugnación de la resolución citada en el párrafo anterior ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

- V. El 28 de agosto de 2018, el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca emitió el Decreto 1569, que faculta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que realice todos los actos inherentes a la celebración de las elecciones extraordinarias para los municipios en los que no se pudieron celebrar elecciones ordinarias o éstas se hubiesen declarado nulas.
- VI. El 30 de septiembre de 2018, el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas emitió el Decreto No. 310, a través del cual se convoca a elección extraordinaria para elegir a integrantes de los Ayuntamientos Municipales de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago el Pinar,

Tapilula y Bejucal de Ocampo, a celebrarse el 25 de noviembre del presente año.

- VII.** El 1º de octubre de 2018, el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas emitió el Decreto No. 003, a través del que convoca a elección extraordinaria para elegir a integrantes de los Ayuntamientos Municipales de Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero, a celebrarse también el 25 de noviembre del presente año.
- VIII.** El 4 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dio inicio al Proceso Electoral Extraordinario y mediante Acuerdo IEEPCO-CG-76/2018 aprobó el calendario para las elecciones extraordinarias de concejales a los Ayuntamientos referidos y con el acuerdo IEEPCO-CG-73/2018, aprobó la convocatoria a los partidos políticos y Candidatos Independientes para las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. Asimismo, se determinó el día 9 de diciembre de 2018, para la celebración de la Jornada Electoral.
- IX.** El 5 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, así como la convocatoria para la elección extraordinaria mediante acuerdos IEPC/CG-A/195/2018 y IEPC/CG-A/194/2018 respectivamente, para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario el 8 de octubre de 2018. Cabe mencionar que se señaló el día 25 de noviembre para la celebración de la jornada electoral.
- X.** Adicionalmente, el 9 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprueba el acuerdo IEEPCO-CG-84/2018, por el que se determina ejercer la facultad de atracción, respecto de la elección de Concejales al Ayuntamiento de San Bartolomé Ayautla. Asimismo, mediante Acuerdos IEEPCO-CG-85/2018, se aprueba el Dictamen para la designación de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral facultados para el desarrollo de

la elección extraordinaria y por el IEEPCO-CG-86/2018, se emite y ordena la publicación de la convocatoria a los partidos políticos y candidatos independientes para la misma.

CONSIDERANDOS

1. El inciso a) del Apartado B, Base V, párrafo segundo del referido artículo 41 de la CPEUM, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a) de la LGIPE disponen las atribuciones que corresponden al Instituto durante los Procesos Electorales Federales y Locales, mismas que son las relativas a: la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos Electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y las demás que determine la ley.
2. El artículo 119, numerales 1 y 2 de la LGIPE en mención, dispone que la coordinación de actividades entre el Instituto y los OPL estará a cargo de la Comisión y de la o el Consejero Presidente de cada OPL.

Asimismo, dispone que para la realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto en los Procesos Electorales Locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la CPEUM y en la LGIPE, en concordancia con los criterios, Lineamientos, acuerdos y normas que emita el Consejo General, la Comisión presentará el proyecto de Plan Integral que contenga los mecanismos de coordinación para cada Proceso Electoral Local.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LGIPE, se estima que el Consejo General debe emitir este Acuerdo a fin de estar en posibilidad de ejecutar las atribuciones que le corresponden a este Instituto en el ámbito local. En este sentido, en el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario se ajustan los plazos establecidos en la LGIPE y RE, para poder llevar a cabo los actos preparatorios de la elección, y cumplir con las formalidades de cada etapa, con el objeto de tutelar de forma efectiva las prerrogativas y derechos de los actores políticos que en éste intervienen, así como los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que en caso de haber ajustes a dicho calendario para la organización de las elecciones extraordinarias deberán ser informadas a la Comisión.
4. Para la adecuada ejecución de la Estrategia referida en el Acuerdo del Consejo General INE/CG500/2017, por el que se aprueba la “**Estrategia de capacitación y asistencia electoral** para las elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017- 2018”, la Junta Local y Distritales Ejecutivas del INE en los estados de Oaxaca y Chiapas, deberán atender todas las actividades conforme a las indicaciones establecidas en la misma, así como lo relativo a las funciones de los supervisores y capacitadores asistentes electorales seleccionados y contratados por el INE.
5. De conformidad con el artículo 7, numeral 2 del Reglamento de Elecciones en caso de elecciones extraordinarias federales o locales, los **Consejos Locales y distritales** de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y funcionarán conforme al Plan Integral y Calendario aprobado por el Consejo General.
6. Aunado a lo anterior, respecto a las y los ciudadanos que tendrán derecho a votar en la elección extraordinaria, se debe considerar que la forma y contenido de **la Lista Nominal de Electores** Definitiva con Fotografía, será aquélla utilizada para la elección ordinaria del 1º de julio de 2018. Asimismo el procedimiento para acceso, control y utilización del Listado Nominal que será utilizado para el Proceso Extraordinario 2018 para los ayuntamientos de mérito, será el determinado por el Consejo General del Instituto en el Acuerdo INE/CG193/2017 por el que *aprueban los Lineamientos que establecen los*

plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, con el propósito de permitir a las y los ciudadanos votar en la misma casilla donde lo hicieron en la Jornada Electoral del 1º de julio pasado, mantener sin cambios el número de casillas a instalar y asegurar la posibilidad de habilitar a los mismos funcionarios y funcionarias de casilla que participaron en la pasada Jornada Electoral, y con ello favorecer que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho al voto en las mismas condiciones que lo hicieron en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario.

7. De acuerdo con el artículo 187 párrafo 3, del RE para las y los **Observadores Electorales** en elecciones extraordinarias, el plazo para presentar la solicitud de acreditación o ratificación de la expedida, será a partir del inicio del Proceso Electoral extraordinario correspondiente y hasta quince días previos a aquel en que se celebre la Jornada Electoral. Asimismo, al artículo 188, párrafo 1 del RE, para la ratificación en su caso, se deberá presentar la solicitud respectiva conforme al formato correspondiente al Anexo 6.2 del propio RE; escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, párrafo 1, inciso d), de la LGIPE; dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante; y copia de la credencial para votar vigente. En el mismo sentido, acorde al artículo 197, inciso 2, del RE los cursos de capacitación deberán concluir a más tardar diez días previos al de la Jornada Electoral. El artículo 201, numerales 1 y 7 del RE señalan que la autoridad competente para expedir la acreditación de los observadores electorales para los Procesos Electorales Locales, sean éstos ordinarios o extraordinarios, serán los Consejos Locales y distritales del Instituto; mismos que podrán aprobar acreditaciones como observadores u observadoras electorales hasta en la última sesión previa a que se celebre la Jornada Electoral respectiva.
8. De conformidad con los artículos 237, numeral 2, y 238, numeral 1 del RE, para la ubicación de casillas, los recorridos, la fecha en que la Junta Distrital Ejecutiva aprobará la lista de ubicación de **casillas electorales**, la

presentación de la propuesta definitiva ante el Consejo Distrital respectivo, y las visitas de examinación que realicen los Consejos Distritales, se determinarán en el Plan y Calendario Integral aprobado por el Consejo General para los procesos extraordinarios.

9. De igual modo en el numeral 149, inciso 1 del multicitado RE, las directrices generales para el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los **documentos y materiales electorales** a utilizar en el Proceso Local Extraordinario, deberá apegarse a lo establecido en el Capítulo VIII del mismo reglamento, junto con los anexos respectivos. Asimismo, de conformidad con el artículo 160, inciso q) del RE, los OPL deberán entregar a la DEOE para su validación, a través de la Unidad Técnica, los diseños de sus documentos y materiales electorales, previo a la aprobación por su Órgano Superior de Dirección, para después proceder con su impresión y producción.
10. Para el caso de **solicitudes de préstamo de materiales electorales** (Marcadora de credenciales, Mampara especial, Líquido indeleble y Marcadora de boletas), los OPL deberán realizar su solicitud, con base en lo establecido en la Sección Decimosexta denominada Del Comodato de Bienes Instrumentales y de Consumo duradero, del “Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales”, a efecto de que una vez autorizado el comodato de los bienes, se realice el contrato correspondiente, mismo que deberá ser suscrito por el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, y en el caso de las Juntas Locales por el Vocal Ejecutivo.
11. Que de acuerdo a los artículos 182, numeral 1, y 183 numeral 2 del RE, refieren que sin afectación al debido desarrollo de las actividades inherentes a la **integración de las mesas directivas de casilla**, las y los supervisores electorales y las y los CAE apoyarán en las actividades de preparación e integración de la documentación y materiales electorales de las elecciones locales; y que la presidencia de los consejos competentes de los OPL, según corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, por conducto del CAE y dentro de los cinco días previos al anterior en que deba

llevarse a cabo la Jornada Electoral, la documentación y materiales electorales.

12. De acuerdo con el artículo 332, numeral 2 del RE, los **mecanismos de recolección** para la presente elección extraordinaria podrán ser modificados o, en su caso, ratificados conforme a los empleados en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
13. En ese mismo sentido, para las elecciones locales 2017-2018 y las extraordinarias que deriven de las mismas, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG66/2018, por el que se aprueba **el lugar de la credencial** para votar **que deberá marcar** el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, con base en lo establecido en el Acuerdo Primero, fracción II, dentro del recuadro o rectángulo respectivo a elecciones “Locales y Extraordinarias”, según corresponda al modelo de credencial, ello con el objeto de dotar de certeza a uno de los mecanismos que instrumenta esta autoridad electoral para que las y los ciudadanos y todos los actores políticos tengan la seguridad de que al ejercer su derecho al voto, lo harán solo una vez.
14. De acuerdo con el artículo 336 numeral 2 y 3 del RE, tratándose de elecciones extraordinarias, el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del OPL que corresponda, podrán realizar ajustes en procedimientos y plazos para llevar a cabo el PREP, garantizando conforme al principio de máxima publicidad un mecanismo de difusión de resultados preliminares. Asimismo, el Consejo General del OPL, determinará la creación o no del COTAPREP y, la realización o no de auditorías, para lo cual deberán tomar en consideración el número de actas a procesar, la complejidad de las condiciones en las que se desarrollará la elección, la suficiencia presupuestaria, entre otras. Cualquier determinación al respecto, deberá estar debidamente justificada y deberá someterse a consideración de la Comisión para que determine la procedencia de la decisión.
15. Los artículos 228 y 229 numeral 1 del RE señalan que, en los Procesos Electorales Locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo

dispuesto por la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 8.1; y que los lugares donde se instalen las casillas deberán reunir todos los requisitos establecidos en el artículo 255, numeral 1 de la LGIPE.

16. El artículo 231 numeral 1 del RE establece que las y los consejeros presidentes de los Consejos Distritales deberán garantizar el adecuado acondicionamiento y equipamiento de las casillas durante la celebración de la Jornada Electoral, el cual se realizará a partir de la identificación que realicen los CAE de las necesidades de equipamiento, con la finalidad de que se cuente con todo lo necesario para su instalación y para garantizar la secrecía del voto; y colaborarán en la recuperación de los insumos inherentes al equipamiento de las casillas, después de la Jornada Electoral, de acuerdo a lo referido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del acuerdo INE/CG500/2017.
17. El artículo 264 numeral 1 del RE señala que, en el caso de elecciones extraordinarias locales, los partidos políticos locales y, en su caso, los candidatos independientes locales, podrán registrar a sus representantes generales y ante mesa directiva de casilla, sujetándose a las reglas establecidas en la LGIPE y en el RE, además de aquellas que les correspondan relativas al procedimiento de registro.
18. Aunado a lo anterior, acorde con el artículo 74, numeral 2 del Reglamento en comento se determina que corresponde a la Unidad Técnica presentar el Proyecto de Acuerdo del Plan Integral de Coordinación y Calendario respectivo, a la Comisión, quien lo someterá a la consideración del Consejo General para su aprobación en la siguiente sesión que éste celebre.
19. En ese sentido, el artículo 75, numeral 2 del citado ordenamiento, establece que, en caso de cualquier elección local extraordinaria, el Plan Integral de Coordinación y Calendario, deberá ser aprobado, preferentemente, una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente.
20. En el Acuerdo INE/CCOE001/2017 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en su sesión del 5 de octubre de 2017, se aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, los

modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los OPL en el Proceso Electoral Local 2017-2018.

21. El Plan Integral y Calendario de Coordinación es una herramienta de planeación, colaboración, seguimiento y control, que apoyará las actividades entre el Instituto y los OPL de los estados de Oaxaca y Chiapas para las elecciones extraordinarias.
22. Con base en lo anteriormente señalado, en el presente Acuerdo se establece el Plan Integral y Calendario de Coordinación para la atención y seguimiento de los Procesos Electorales Extraordinarios, en el que se describen las actividades aplicables a ejecutar por parte del Instituto y las correspondientes a los OPL de Oaxaca y Chiapas, en el marco del proceso a celebrar.
23. Que durante el desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario, en caso de que este Consejo General, en ejercicio de su facultad de atracción, emita diversos acuerdos y Lineamientos, así como aquellas determinaciones que en el ámbito de su competencia aprueben los OPL de los estados de Oaxaca y Chiapas y que eventualmente impacten en el contenido del Plan Integral y Calendario de Coordinación, será la Comisión la instancia responsable de realizar los ajustes o actualizaciones pertinentes, haciéndolo del conocimiento de este Órgano Superior de Dirección.
24. De igual modo, para el caso del estado de Oaxaca, al aún existir impugnaciones pendientes de desahogarse, será la Comisión la instancia responsable de realizar los ajustes, actualizaciones o adiciones pertinentes, también haciéndolo del conocimiento de este Órgano Superior de Dirección.

En virtud de lo señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafo primero, B párrafo segundo, inciso a) y C, numeral 8, de la CPEUM; 5, numeral 1; 7, numeral 1; 24; 25; 26, numeral 1; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31, numeral 1; 32, numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 42, numeral 1; 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj); 60, numeral 1, inciso f) y 119, numeral 1 y 2 de la LGIPE; 7, numeral 2; 74, numeral 2; y 75, numeral 2; del RE, el Consejo General ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueban el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios, derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 para los ayuntamientos de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero en el estado de Chiapas, así como para los ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca, de conformidad con los 3 anexos que forman parte integral del presente Acuerdo.

Segundo.- Se ratifica el uso de los mismos colores de la boleta y demás documentación y materiales electorales aprobados en el Acuerdo INE/CCOE001/2017 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Tercero.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que realice las acciones necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales del Instituto en los estados de Chiapas y Oaxaca, con la finalidad de que posteriormente lo informen a sus respectivos Consejos tanto Local como Distritales que correspondan.

Cuarto.- Se instruye a la Comisión para que, en términos de los considerandos 23 y 24 del presente Acuerdo, realice los ajustes o actualizaciones pertinentes al Plan Integral y Calendario de Coordinación que deriven de los Acuerdos o determinaciones que emita este Consejo General, las resoluciones de las instancias jurisdiccionales, así como de la disposición que en el ámbito de su competencia apruebe el respectivo Consejo General de los OPL de Chiapas y Oaxaca.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, a través de la Unidad Técnica, haga del conocimiento a los OPL de Chiapas y Oaxaca el presente Acuerdo.

Sexto.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

Séptimo.- Publíquese en la Gaceta del Instituto, así como en el portal de Internet del Instituto.

Octavo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que, a través de la Unidad Técnica, solicite a los OPL de Chiapas y Oaxaca que sea publicado el presente Acuerdo en sus respectivos portales de internet.

Plan Integral

Procesos Electorales Locales Extraordinarios

Chiapas y Oaxaca, 2018



UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

Índice

I. Glosario	03
II. Introducción	04
III. Fundamento Legal	05
IV. Motivación de la Celebración de la Elección Extraordinaria	07
V. Estructura del Plan Integral y Calendarios de Coordinación	08
VI. Metodología de operación del seguimiento a los Calendarios	10
VII. Calendarios de Coordinación	11

I. Glosario

CD	Consejos Distritales del INE
CDE	Consejo Distrital Electoral del OPL
CG	Consejo General
CL	Consejo Local Electoral del INE
CME	Consejo Municipal Electoral del OPL
Comisión	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
INE	Instituto Nacional Electoral
JDE	Junta Distrital Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
OPL	Organismos Públicos Locales
RE	Reglamento de Elecciones
RI	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
SIJE	Sistema de Información de la Jornada Electoral
UNICOM	Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE
UR	Unidad Responsable
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización del INE
UTVOPL	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

II. Introducción

Con fecha 1° de julio de 2018, se celebró la Jornada Electoral correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, de ahí derivaron diversas elecciones extraordinarias que dan origen a este documento. El Plan Integral y los Calendarios de Coordinación son las herramientas con las que contará el INE para dar seguimiento a la organización de comicios extraordinarios 2018 en 10 municipios de Chiapas y 4 de Oaxaca; lo que permitirá al INE y a los OPL tener una mejor planeación y encontrar mecanismos de colaboración ante posibles dificultades operativas. El objetivo es que esto se refleje en una organización electoral con procesos más claros, elevando la profesionalización y los estándares de calidad de cada una de las etapas de la elección.

Municipios con elección extraordinaria	
Chiapas	Oaxaca
Solosuchiapa	San Dionisio del Mar
El Porvenir	San Juan Ihualtepec
Santiago el Pinar	San Francisco Ixhuatán
Tapilula	San Bartolomé Ayautla
Bejuca de Ocampo	
Catazajá	
Chicoasén	
San Andrés Duraznal	
Rincón Chamula San Pedro	
Montecristo de Guerrero	

Los Calendarios de Coordinación son el documento en el que se establecen de manera puntual y precisa actividades esenciales y estratégicas a desarrollarse durante el proceso electoral local extraordinario. En este documento de programación se incluyen 65 actividades para Chiapas y 61 para Oaxaca; todas identificadas y ordenadas

cronológicamente por fechas de ejecución y órgano responsable de efectuar la actividad.

El artículo 75, párrafo 2 del RE señala que es atribución del CG del INE, aprobar un Plan Integral y Calendario de coordinación, de preferencia una vez que dé inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario que corresponda. Adicionalmente, el artículo 74 del mismo ordenamiento señala que, en el caso de elecciones locales, dichos calendarios deberán contener lo siguiente:

- a) Detalle de las actividades a desarrollar por el INE;
- b) Los elementos de coordinación entre el INE y el OPL que resulten indispensables para determinar los procedimientos que les corresponderán en el ámbito de sus competencias, en términos de lo previsto en el RE y los lineamientos que emita el CG, y
- c) Las demás precisiones que resulten necesarias para determinar oportunamente las acciones que deban desarrollar ambas autoridades en el ámbito de sus competencias.

En este sentido, es necesario delimitar las competencias de cada institución. En el artículo 41, fracción IV, apartado B, inciso A) de la CPEUM se indica que corresponde al INE, tanto en elecciones federales como locales:

- 1. La capacitación electoral;
- 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
- 3. El padrón y la lista de electores;
- 4. La ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de las mesas directivas;
- 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.
- 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas,
y
- 7. Las demás que determine la Ley.

En el apartado C del mismo artículo de la CPEUM indica que los OPL ejercerán funciones en las siguientes materias:



1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local.

III. Fundamento Legal

- De la LGIPE, los artículos 24, inciso 2; 25, inciso 3; 51, párrafo 1, inciso t); el 60 párrafo 1, inciso f) y el 119, párrafo 2,
- Del RI, los artículos 41, párrafo 2, inciso q) y 73, párrafo 1, inciso j).
- Del RE, el artículo 69, 73, 74 y 75.



IV. Motivación de la Celebración de Elección Extraordinaria

Chiapas

La elección en el municipio de Solosuchiapa fue anulada debido a que se acreditó la no instalación del 20% de las casillas en la demarcación. En los casos de El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Tapilula y Catazajá, la autoridad jurisdiccional determinó anular la elección por haberse acreditado actos que derivaron en un clima de tensión, violencia e intimidación el día de la jornada electoral. En Santiago del Pinar, se aprobó que hubo vulneración a la secrecía y libertad del voto, al registrarse que se obligó a algunas personas, en su mayoría mujeres, a mostrar el sentido de su voto.

En Chicoasén, debido a la quema de paquetes electorales, el Consejo Municipal determinó que no era posible realizar el cómputo de la elección. En San Andrés Duraznal y Montecristo de Guerrero la autoridad jurisdiccional determinó anular debido a que no existía certeza respecto a la autenticidad de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. En Rincón Chamula San Pedro se acreditaron diversas irregularidades como la quema o cierre anticipado de casillas y falta de certeza en las actas.

Por lo anterior, el 1 de octubre del 2018, como marca la normatividad local, el Congreso Local sesionó nombrando consejos municipales para estos diez municipios y emitió la convocatoria de la elección extraordinaria. Misma en la que marcó como fecha de la elección el 25 de noviembre de 2018.

Oaxaca

En el Municipio de San Juan Ihualtepec no fue posible llevar a cabo la totalidad de las actividades de preparación de la elección, en virtud de que los pobladores de la cabecera municipal no permitieron la realización de ningún tipo de actividad electoral a partir del mes previo a la elección; por lo tanto el 1º de julio, el Consejo Distrital 06 del INE, con sede en la Ciudad de Tlaxiaco, mediante acuerdo A35/INE/OAX/CD06/01-07-18, determinó la eliminación de la casilla 1162 Básica y por ende, la no celebración de

elecciones para la renovación del Ayuntamiento. Cabe mencionar que no se presentaron impugnaciones, respecto de la situación jurídica de la elección de este municipio. En el caso del Municipio de San Dionisio del Mar, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, emitió el Acuerdo IEEPCO-CG-65/2018, por el que se determinan procedentes las renunciaciones presentadas por las Ciudadanas y Ciudadanos de las seis planillas participantes en la elección ordinaria; en consecuencia, se declaró desierta la elección local ordinaria. En San Francisco Ixhuatán, el Tribunal Local razonó que, ante lo cerrado de los resultados de la elección, el hecho de que no se pudieran computar los resultados de una casilla, 883 Extraordinaria, era determinante para anular la elección. Finalmente, en el caso del Municipio de San Bartolomé Ayautla el Consejo Municipal entregó la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el Partido Social Demócrata, sin embargo la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-282/2018, declaró la nulidad de la elección, ya que existió una vulneración al principio de certeza, pues dos paquetes electorales no fueron recontados por el Consejo Municipal sin que mediara justificación alguna, aunado a que existieron hechos de violencia durante la sesión de cómputo municipal que fueron ocasionados por el partido ganador.

En consecuencia, el 28 de agosto del presente año, el Congreso del Estado de Oaxaca emitió la convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias para todos los municipios en los que no se pudieron celebrar elecciones ordinarias o éstas se hubiesen declarado nulas, facultando al OPL para que realice los actos inherentes a su función constitucional.

V. Estructura del Plan Integral y Calendarios de Coordinación

El Plan Integral y Calendarios de Coordinación con los OPL de Oaxaca y Chiapas, se han estructurado y ordenado para el logro de los objetivos planteados. En la determinación de qué actividades serán incluidas dentro del seguimiento a los mismos, se definieron 13 temas esenciales para la organización del proceso electoral local a los que se les dará seguimiento puntual.

1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados;
2. Lista Nominal de Electores;
3. Observación electoral;
4. Ubicación de casillas;
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla;
6. Fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas independientes;
7. Candidaturas;
8. Documentación y material electoral;
9. Bodegas electorales;
10. PREP;
11. Jornada Electoral;
12. Mecanismos de recolección;
13. Cómputos.

En el caso de las elecciones extraordinarias de Chiapas se añade el subproceso Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).

Dentro de cada uno de estos temas se incluyeron las actividades esenciales para su adecuado desarrollo. Hay un total de 126 actividades en las que se definió:

- Fecha de inicio,
- Fecha de término,
- Adscripción (INE o OPL)
- Área responsable,
- Estatus actual y
- Nota cualitativa, en la que se dan detalles sobre cómo se realizó o realiza la actividad.

Una vez determinadas las actividades a las que se dará seguimiento, se utilizará la siguiente ruta crítica. Definición de la instancia responsable de la actividad (INE u OPL), periodo de ejecución y el soporte con el que se dará como concluida la actividad, haciendo homogéneos los documentos disponibles para consulta y clarificando desde

un principio la información que debe de ser remitida con notas cualitativas con un nivel de detalle semejante.

Como principales insumos para la determinación de fechas y actividades se utilizó, por una parte, la legislación local en materia electoral, compuesta por la respectiva Constitución Estatal y las leyes secundarias en la materia, y por otra parte la legislación general, integrada por la CPEUM, las leyes generales en la materia, el RE y sus anexos.

Con base en los periodos de ejecución se definen los siguientes estatus en los que pueden estar las actividades:

- 1.- Actividad en ejecución
- 2.- Actividad concluida
- 3.- Actividad en ejecución con retraso
- 4.- Actividad concluida con retraso

VI. Metodología de operación del seguimiento a los Calendarios

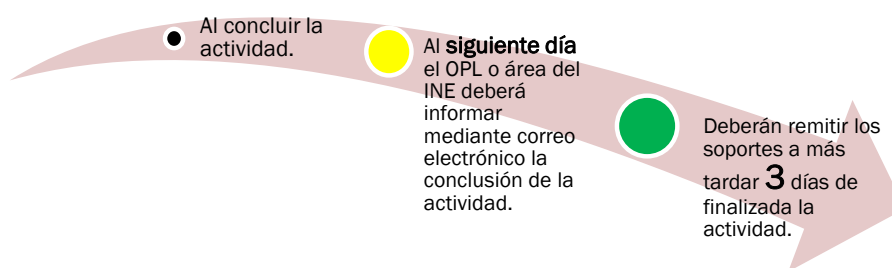
Como se indica en el artículo 26, numeral 2 del RE, la coordinación entre el INE y los OPL tiene como propósito esencial concertar la actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable. Como se mandata en el numeral 6 del mismo artículo, las comunicaciones entre las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto con los OPL, se realizarán preferentemente por conducto de la UTVOP, mediante el mecanismo implementado para ello.

En tanto, el artículo 80 del RE indica que los informes deberán ser presentados en cada sesión ordinaria que celebre el CG, a través de los cuales se hará del conocimiento de sus integrantes, el seguimiento dado a las actividades contenidas en los planes integrales y calendarios respectivos; éstos deberán incluir el reporte del periodo comprendido en cada sesión ordinaria del CG, respecto de las actividades que hayan concluido, las que estén en ejecución y aquellas que se encuentren desfasadas

conforme a lo planeado, exponiendo las razones del desfase y las acciones que se estuvieren llevando a cabo para concluir las.

La UTVOPL será la responsable de reflejar en los Calendarios de Coordinación la información que le remitan tanto las áreas del INE, como las instituciones administrativas electorales del nivel local. Para este seguimiento, las áreas del INE y los OPL deberán informar mediante correo electrónico a más tardar al día siguiente en que haya concluido una actividad y remitir las constancias respectivas a más tardar 3 días posteriores a la fecha de conclusión. Para aquellas actividades que son atribución de las áreas ejecutivas del INE, y que se ejecutan en coordinación o a través de los órganos desconcentrados, la comunicación que se realice con dichos órganos podrá ser a través de correo electrónico con el objetivo de hacer más eficiente y expedita la comunicación institucional. De igual forma, las áreas del Instituto y los OPL deberán brindar acceso de consulta a los sistemas relacionados con las actividades del Plan y Calendarios respectivos para la ejecución de las actividades de seguimiento. De esta manera, se garantiza que los informes que se presentan mensualmente en la Comisión, y posteriormente en el CG, se realicen con información oportuna y contextualizada sobre el estatus de cada actividad que se indica en el calendario.

Imagen 1. Mecanismo para informar a la UTVOPL



VII. Calendarios de Coordinación

Conforme a lo que mandata el RE, existe la posibilidad de que los mismos puedan ser modificados en sus actividades, plazos o área responsable de ejecutar la actividad, en consideración a las determinaciones que tomen tanto el INE como el OPL.

La conformación de las actividades, agrupadas en subprocesos, permite que todas las entidades involucradas en los procesos electorales, las determinaciones que hicieran falta sobre la modificación, ampliación de plazos, eliminación de actividades, cambio de responsables de ejecutar las mismas; así como las solicitudes de asunción, atracción o delegación, puedan ser atendidas para redimensionar las fases del proceso electoral.

Para ello, en el caso de que no sean determinaciones del CG del INE, sino de los propios OPL, se deberán comunicar a la UTVOPL, mediante oficio, debidamente justificado, a efecto de que proceda a elaborar los impactos en el o los calendarios correspondientes, para que en la sesión inmediata que se celebre de la Comisión, se presente el informe con las adecuaciones y a su vez, lo haga del conocimiento del CG. En el caso de que las modificaciones deriven de un acuerdo del CG o de alguna comisión del INE, la UTVOPL rendirá el informe señalado con las adecuaciones correspondientes.



Proceso Electoral Local Extraordinario 2018
Chiapas

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados					
1.1	Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria	OPL	CG	05/10/2018	05/10/2018
1.2	Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria	OPL	CG	05/10/2018	05/10/2018
1.3	Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario	OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018
1.4	Instalación del Consejo Local del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.5	Ratificación de las y los Consejos Electorales del Consejo Distrital del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.6	Instalación de los Consejos Distritales del INE	INE	CD	16/10/2018	16/10/2018
1.7	Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra el Consejo Municipal	OPL	CG	16/10/2018	16/10/2018
1.8	Instalación del Consejo Municipal del OPL	OPL	CM	16/10/2018	17/10/2018
2. Lista nominal de electores					
2.1	Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva	INE	DERFE	05/11/2018	09/11/2018
2.2	Entrega de las Listas Nominales de Electores con fotografía definitiva al OPL	INE	DERFE	12/11/2018	13/11/2018
3. Observadores electorales					
3.1	Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018
3.2	Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CM	08/10/2018	10/11/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018

Chiapas

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
3.3	Impartir los cursos para observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CM	08/10/2018	15/11/2018
3.4	Acreditación o ratificación de observadores electorales	INE	CL/CD	08/10/2018	24/11/2018
4. Ubicación de casillas					
4.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas	INE	JDE	11/10/2018	13/10/2018
4.2	Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de ubicación de casillas	INE	JDE/CD	16/10/2018	16/10/2018
4.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas	INE/OPL	CD/CM	17/10/2018	19/10/2018
4.4	Aprobación del número y ubicación de casillas básica, contiguas y extraordinarias.	INE	CD	22/10/2018	22/10/2018
4.5	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	INE	CD	23/10/2018	23/10/2018
4.6	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	CL	24/10/2018	24/10/2018
4.7	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	12/11/2018
4.8	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	15/11/2018
4.9	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio	INE	CD	12/11/2018	16/11/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018
Chiapas

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla					
5.1	Designación de SE y CAE	INE	CD	16/10/2018	16/10/2018
5.2	Taller de Capacitación a SE y CAE	INE	CD	22/10/2018	23/10/2018
5.3	Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla	INE	CD-JDE	22/10/2018	22/10/2018
5.4	Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	24/10/2018	24/11/2018
5.5	Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla	INE	JDE	24/10/2018	24/11/2018
5.6	Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	JDE	24/10/2018	24/11/2018
5.7	Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	29/11/2018	30/11/2018
6. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos					
6.1	Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.2	Aprobación de los topes máximos de gastos de los aspirantes a candidatos independientes en la etapa de apoyo ciudadano	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.3	Aprobación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos y candidatos independientes	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.4	Periodo de precampaña	OPL	CG	22/10/2018	26/10/2018
6.5	Periodo de intercampaña	OPL	CG	27/10/2018	06/11/2018
6.6	Periodo de campaña	OPL	CG	07/11/2018	21/11/2018
7. Candidaturas					
7.1	Emisión de convocatoria para candidaturas independientes	OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018

Chiapas

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
7.2	Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes	OPL	CG	08/10/2018	15/10/2018
7.3	Resolución sobre convenio de coalición	OPL	CG	20/10/2018	20/10/2018
7.4	Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de Candidatos Independientes	OPL	CM	22/10/2018	26/10/2018
7.5	Solicitud para el registro de Candidatos	OPL	CM	31/10/2018	01/11/2018
7.6	Resolución para aprobación de candidaturas	OPL	CM	05/11/2018	06/11/2018
8. Documentación y material electoral					
8.1	Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	08/10/2018	09/10/2018
8.2	Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	08/10/2018	23/10/2018
8.3	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	24/10/2018	26/10/2018
8.4	Producción de la documentación y materiales electorales	OPL	CG	07/11/2018	15/11/2018
9. Bodegas electorales					
9.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas en los consejos municipales	OPL	CM	18/10/2018	28/10/2018
9.2	Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales	OPL	CM	31/10/2018	31/10/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018

Chiapas

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
9.3	Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales	OPL	CM	18/10/2018	17/11/2018
9.4	Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas	OPL	CM	31/10/2018	31/10/2018
9.5	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local	OPL	CM	17/11/2018	18/11/2018
9.6	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPL	CM	17/11/2018	18/11/2018
9.7	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla	OPL	CM	19/11/2018	23/11/2018
10. PREP					
10.1	Informar al INE sobre las actividades que llevará a cabo, en su caso, para la implementación del PREP.	OPL	CG	15/10/2018	15/10/2018
11 Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)					
11.1	Ejecución de pruebas de captura del sistema informático del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	05/11/2018	07/11/2018
11.2	Ejecución del primer simulacro del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	13/11/2018	13/11/2018
11.3	Ejecución del segundo simulacro del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	20/11/2018	20/11/2018
12. Jornada Electoral					
12.1	Publicación de los encartes	OPL	CG	25/11/2018	25/11/2018
12.2	Jornada Electoral	OPL	CG/CM	25/11/2018	25/11/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 Chiapas					
No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
13. Mecanismos de recolección					
13.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	CL	19/10/2018	19/10/2018
13.2	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	22/10/2018	26/10/2018
13.3	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	CD	01/11/2018	05/11/2018
13.4	Recolección y traslado de los paquetes electorales	INE	CD	25/11/2018	26/11/2018
14. Cómputos					
14.1	Determinar el número de casillas que serán objeto de recuento	OPL	CG/CM	26/11/2018	26/11/2018
14.2	Cómputos Municipales	OPL	CG/CM	26/11/2018	27/11/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 Oaxaca					
No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados					
1.1	Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario	OPL	CG	01/10/2018	05/10/2018
1.2	Instalación del Consejo Local del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.3	Ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.4	Instalación de los Consejos Distritales del INE	INE	CG	16/10/2018	16/10/2018
1.5	Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra el Consejo Distrital	OPL	CG	01/10/2018	08/10/2018
1.6	Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria	OPL	CG	01/10/2018	05/10/2018
1.7	Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria	OPL	CG	01/10/2018	05/10/2018
1.8	Instalación del Consejo Distrital del OPL	OPL	CD	09/10/2018	11/10/2018
2. Lista nominal de electores					
2.1	Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva	INE	DERFE	19/11/2018	21/11/2018
2.2	Entrega de las Listas Nominales de Electores con fotografía definitiva al OPL	INE	DERFE	22/11/2018	22/11/2018
3. Observadores electorales					
3.1	Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	01/10/2018	05/10/2018
3.2	Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CD	01/10/2018	24/11/2018
3.3	Impartir los cursos para observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CD	01/10/2018	29/11/2018
3.4	Acreditación o ratificación de observadores electorales	INE	CL/CD	08/10/2018	06/12/2018
4. Ubicación de casillas					
4.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas	INE/OPL	JDE/CD	11/10/2018	13/10/2018
4.2	Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de lista de ubicación de casillas.	INE	JDE/CD	16/10/2018	16/10/2018
4.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas	INE/OPL	CD/CD	17/10/2018	19/10/2018
4.4	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas	INE	CD	22/10/2018	22/10/2018
4.5	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	INE	CD	23/10/2018	23/10/2018
4.6	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	CL	24/10/2018	24/10/2018
4.7	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	26/11/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 Oaxaca					
No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
4.8	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	29/11/2018
4.9	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio	INE	CD	26/11/2018	30/11/2018
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla					
5.1	Designación de SE y CAE	INE	CD	01/11/2018	01/11/2018
5.2	Taller de Capacitación a SE y CAE	INE	CD	05/11/2018	06/11/2018
5.3	Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla	INE	CD-JDE	07/11/2018	07/11/2018
5.4	Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	08/11/2018	08/12/2018
5.5	Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla	INE	JDE	08/11/2018	08/12/2018
5.6	Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	JDE	08/11/2018	08/12/2018
5.7	Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	10/12/2018	12/12/2018
6. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos					
6.1	Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes	OPL	CG	01/10/2018	11/10/2018
6.2	Aprobación de los topes máximos de gastos de los aspirantes a candidatos independientes en la etapa de apoyo ciudadano	OPL	CG	01/10/2018	11/10/2018
6.3	Aprobación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos y candidatos independientes	OPL	CG	01/10/2018	11/10/2018
6.4	Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y personas con un precandidatura o candidatura; así como el límite individual de aportaciones de los simpatizantes.	OPL	CG	01/10/2018	11/10/2018
6.5	Periodo de precampaña	OPL	CG	22/10/2018	31/10/2018
6.6	Periodo de intercampaña	OPL	CG	01/11/2018	17/11/2018
6.7	Periodo de campaña	OPL	CG	18/11/2018	05/12/2018
7. Candidaturas					
7.1	Solicitud de registro de convenio de coalición	OPL	CG	01/10/2018	22/10/2018
7.2	Resolución sobre convenio de coalición	OPL	CG	23/10/2018	02/11/2018
7.3	Solicitud para el registro de Candidatos	OPL	CG	05/11/2018	08/11/2018
7.4	Resolución para aprobación de candidaturas	OPL	CG	12/11/2018	17/11/2018
7.5	Emisión de convocatoria para candidaturas independientes	OPL	CG	01/10/2018	05/10/2018
7.6	Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de Candidatos Independientes	OPL	CD	22/10/2018	31/10/2018

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 Oaxaca					
No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
8. Documentación y material electoral					
8.1	Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	08/10/2018	09/10/2018
8.2	Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	08/10/2018	19/10/2018
8.3	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	20/10/2018	26/10/2018
8.4	Producción de la documentación y materiales electorales	OPL	CG	12/11/2018	23/11/2018
9. Bodegas electorales					
9.1	Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales	OPL	CG	14/11/2018	14/11/2018
9.2	Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas	OPL	CG	14/11/2018	14/11/2018
9.3	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local	OPL	CG	29/11/2018	29/11/2018
9.4	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPL	CG	29/11/2018	30/11/2018
9.5	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	03/12/2018	07/12/2018
10. PREP					
10.1	Informar al INE sobre las actividades que llevará a cabo para la implementación del PREP.	OPL	CG	22/10/2018	22/10/2018
11. Jornada Electoral					
11.1	Publicación de los encartes	OPL	CG	09/12/2018	09/12/2018
11.2	Jornada Electoral	OPL	CG/CD	09/12/2018	09/12/2018
12. Mecanismos de recolección					
12.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	CL	25/10/2018	25/10/2018
12.2	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	26/10/2018	04/11/2018
12.3	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	CD	09/11/2018	19/11/2018
12.4	Recolección y traslado de los paquetes electorales	INE	CD	09/12/2018	10/12/2018
13. Cómputos					
13.1	Determinar el número de casillas que serán objeto de recuento	OPL	CG/CD	11/12/2018	11/12/2018
13.2	Cómputos Municipales	OPL	CG/CD	13/12/2018	14/12/2018

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Señoras y señores integrantes del Consejo General están a consideración estos Programas de Trabajo._____

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, le pido tomar la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General._____

Los que están por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor._____

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

INE/CG1362/2018_____

Aprobación de los Programas de Trabajo de las Comisiones del Consejo General.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Continúe con el siguiente asunto._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del

Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al Recurso de Apelación identificado con el número SCM-RAP-118/2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Colegas, está a consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero Presidente._____

Me parece que iba a circular una fe de erratas, no estoy segura si la circulé._____

Si está, gracias Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Si no hay más intervenciones._____

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 6 tomando en consideración las fe de erratas que fueron circuladas previamente._____

Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano, si son tan amables._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1363/2018) Pto. 6_____

INE/CG1363/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-118/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1156/2018** e **INE/CG1157/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos independientes a los cargos de diputados locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Tlaxcala.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la Resolución referida, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, el C. Addiel Lubin Mejía, interpuso el recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen **INE/CG1156/2018** y la Resolución **INE/CG1157/2018**, dicho recurso fue radicado en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente identificado con la clave **SCM-RAP-118/2018**, para posteriormente ser turnado a la ponencia de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, para los efectos legales correspondientes.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en el resolutivo único, lo que a continuación se transcribe:

“ÚNICO. – Revocar parcialmente la Resolución Impugnada, en lo que fue materia de controversia.”

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM-RAP-118/2018, tuvo por efecto revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG1156/2018**, respecto de las conclusiones 11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C6_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1; y, en vía de consecuencia, revocar la Resolución **INE/CG1157/2018** por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Ciudad de México, por lo que con fundamento en los artículos 425; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de las candidaturas a Diputaciones Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tlaxcala.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente **II** del presente Acuerdo.

3.-Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen Consolidado INE/CG1156/2018, respecto de las conclusiones 11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C6_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1; y, en vía de consecuencia, revocar la Resolución INE/CG1157/2018, ambos emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del candidato independiente a Diputado Local en Tlaxcala, el C. Addiel Lubin Mejía Hernández, en tal sentido se procedió a realizar

nuevamente el análisis y estudio de la documentación e información aportada por el recurrente, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen y Resolución referidos, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando SEXTO de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-118/2018, relativo al **Sentido y efectos**, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“Atento a las calificativas de cada una de las porciones del agravio, lo procedente es:

a. Dejar *intocadas* las cuestiones no controvertidas de la Resolución Impugnada (Conclusiones 11.1_C9_P1¹ y 11.1_C16_P1², así como la determinación de la capacidad económica³).

b. Confirmar la Resolución Impugnada respecto de las Conclusiones 11.1_C1_P1, 11.1_C2_P1, 11.1_C3_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C11_P1, 11.1_C12_P1, 11.1_C13_P1, y 11.1_C14_P1.

c. Revocar el Dictamen Consolidado respecto de las Conclusiones 11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C6_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1; y, en vía de consecuencia, revocar la Resolución 1157 por lo que respecta a las sanciones correspondientes.”

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG1156/2018** y la Resolución identificada como **INE/CG1157/2018**, este Consejo General únicamente se abocará

¹ La Autoridad Responsable al listar las faltas formales respecto del Sujeto Obligado hace referencia a la “11.1_C9_P1”, sin embargo en la Resolución 1157 no está referido expresamente de qué trata esa Conclusión y en el porcentaje de la sanción no es claro si fue considerada para tal efecto; no obstante, toda vez que el Recurrente no expresó algún agravio al respecto, esta Sala Regional no pudo analizar alguna cuestión relacionada con esta Conclusión.

² Si bien existen razonamientos respecto de la Conclusión 11.1_C16_P1 en la Resolución 1157, dicha Conclusión no existe con relación al Recurrente en el Dictamen Consolidado; no obstante, toda vez que el Recurrente no expresó algún agravio al respecto, esta Sala Regional no pudo analizar alguna cuestión relacionada con esta Conclusión.

³ Aunque el Recurrente manifiesta que “las sanciones que imponen resultan desproporcionadas las cuales afectan sustancialmente la economía y patrimonio del suscrito candidato independiente...”(sic), esta Sala Regional considera que su intención no es cuestionar la cantidad que la Autoridad Responsable consideró (con base en el informe correspondiente presentado por el propio Recurrente) para determinar su capacidad económica.

al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Dictamen Consolidado del candidato independiente a Diputado Local en Tlaxcala, el C. Addiel Lubin Mejía Hernández y el considerando **33.1.3**, respecto de las conclusiones **11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C6_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, materia del presente Acuerdo, a efecto de proceder a realizar nuevamente la valoración de los elementos probatorios ofrecidos y la individualización de la sanción correspondiente a las conclusiones mencionadas.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Conclusiones: 11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C7_P1, 11.1_C8_P1

- **Efectos de la sentencia:** Que la autoridad electoral modifica el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada en la parte conducente, para el efecto que se proceda a realizar la individualización de la sanción correspondiente, de conformidad con lo expresado en el Considerando Tercero de esta sentencia.
- **Acatamiento:** Las conclusiones **11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C7_P1 , 11.1_C8_P1, 11.1_C9_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C12_P1 y 11.1_C13_P1** de carácter formal, fueron materia de impugnación; sin embargo, en atención al mandato realizado por el órgano jurisdiccional solo fueron revocadas las conclusiones **11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C7_P1 , 11.1_C8_P1**, respecto de las cuales se realizó un nuevo análisis a la documentación e información con que cuenta esta autoridad, asimismo, nuevamente se llevó a cabo la verificación a la documentación presentada en el SIF, por lo cual, se constató que el sujeto obligado. efectivamente presentó la documentación que había sido observada en el Dictamen Consolidado; por tal razón, las observaciones **quedaron atendidas**.

Conclusión: 11.1_C6_P1

- **Efectos de la sentencia:** Que la autoridad electoral modifica el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada en la parte conducente, para el efecto que se proceda a realizar la individualización de la sanción correspondiente, de conformidad con lo expresado en el Considerando Tercero de esta sentencia.

- En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se individualiza la sanción que había sido impuesta por el conjunto de faltas sustanciales contenidas en el inciso **d)**, siendo estas, las conclusiones **11.1_C6_P1 y 11.1_C11_P1**, respecto de las cuales únicamente fue revocada la primera, derivados de lo cual, considerando que desarrollada la conclusión **11.1_C11_P1** queda firme por no haber sido revocada y, respecto de la conclusión **11.1_C6_P1**, se determinó que la conducta sancionada en esta conclusión consistente en la omisión de presentar el soporte documental en las pólizas 3, 4, 9 y 11, se analiza en la conclusión **11.1_C5_P1**, razón por la cual, esta observación **quedó sin efectos**.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las conclusiones **11.1_C4_P1, 11.1_C5_P1, 11.1_C6_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1**, del Dictamen Consolidado correspondiente al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación, a efecto de valorar nuevamente toda la información y documentación presentada por el candidato independiente.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia, quedando de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1157/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
C. Addiel Lubin Mejía Hernández					
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
11.1_C4_P1, "El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de junio"	N/A	70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.).	Atendida	N/A	Sin efectos
11.1_C5_P1, El sujeto obligado omitió presentar fichas de depósito o comprobantes de transferencia bancaria, los recibos de la aportación en efectivo del candidato, credencial de elector del aportante, ni el estado de cuenta bancario para su cotejo"	N/A	Cabe señalar la sanción de 70 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso a) que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). "Cabe señalar la sanción de 40 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones, que se sancionan en el inciso a), siendo estas:

Resolución INE/CG1157/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
C. Addiel Lubin Mejía Hernández					
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
					11.1_C9_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C12_P1 y 11.1_C13_P1, que fue materia de impugnación."
11.1_C6_P1, El sujeto obligado omitió presentar 4 cheques o comprobantes de transferencias bancarias.	\$48,600.00	\$70,041.40 Cabe señalar la sanción de \$70,041.40 (setenta mil cuarenta y un pesos 40/000 M.N) corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso d) que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	Sin efectos (La sanción de la conclusión 11.1_C6_P1, queda sin efectos por lo tanto la única que subsiste es la sanción correspondiente a la conclusión 11.1_C11_P1)
11.1_C7_P1 "El sujeto obligado omitió presentar tres contratos de prestación de servicios"	N/A	70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.).	Atendida	N/A	Sin efectos
11.1_C8_P1 "El sujeto obligado omitió presentar 2 archivo XML"	N/A	Cabe señalar la sanción de 70 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso a) que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	Sin efectos

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el **Dictamen Consolidado** número INE/CG/1156/2018, así como la Resolución identificada con el número INE/CG1157/2018, relativa a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos independientes a los cargos de Diputados Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Tlaxcala, en la parte conducente al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, en los términos siguientes:

7.-Modificación al Dictamen Consolidado.

Que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al haber dejado intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG1156/2018** y la Resolución **INE/CG1157/2018**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente de las conclusiones **11.1_C4_P1**, **11.1_C5_P1**, **11.1_C6_P1**, **11.1_C7_P1** y **11.1_C8_P1**, en los términos siguientes:

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Tlaxcala
Primer periodo
Diputado Local MR
Addiel Lubin Mejía Hernández

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
5	<p>Bancos</p> <p>PRELO.CAM.17/18.CI.CI.TLAX.D LMR.P1.RDO.C.1.5</p> <p><i>El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña. Lo anterior se detalla en el Anexo 5.</i></p> <p><i>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <p><i>-El o los estados de cuenta bancarios correspondientes.</i></p> <p><i>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</i></p> <p><i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, numeral 2 y 54, numeral 4, 6 y 8, 246 numeral 1, inciso j) del RF.</i></p>	<p><i>En atención al oficio Núm. INE/UTF/DA/38309/18 y número de observación PRELO.CAM..17/18. CI.CI.TLAX.DLMR.P1.R DO.C.1.5, expongo lo siguiente: Los estados de cuenta se han presentado en el sistema SIF.</i></p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la información presentada, se constató que adjunta un listado de movimientos del 23 de mayo al 14 de junio, sin embargo, este no refleja la totalidad del periodo de campaña, ni el saldo final de la cuenta bancaria, por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 4_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C4_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de junio</p> <p>Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos vertidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SCM-RAP-118/2018, se procede a señalar lo siguiente:</p> <p>Se realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en la cual respecto a la conclusión 11.1_C4_P1, el otrora candidato independiente Addiel Lubin Mejía Hernández, aduce que no omitió presentar el estado de cuenta de junio y que todo fue registrado en el SIF, por lo que se realizó nuevamente la verificación a la documentación presentada en el SIF, por lo cual, se constató que el sujeto obligado presentó los estados de cuenta de los meses de mayo y junio de 2018; por tal razón, la observación quedó atendida.</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
9	<p>Revisión Contable</p> <p>Ingresos</p> <p>PRELO.CAM.17/18.CI.CI.TLAX.D LMR.P1.RCO.A.8.9</p> <p>Aportaciones del candidato independiente en efectivo</p> <p>De la revisión a la documentación presentada en el SIF, se detectó el registro contable de pólizas por concepto de aportaciones en efectivo; sin embargo, carecen de toda la documentación soporte que establece la normativa. Lo anterior se detalla en el Anexo 9.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</p> <p>-La ficha de depósito o el comprobante de la transferencia bancaria.</p> <p>-Los recibos de aportación con la totalidad de los requisitos que establece la normativa.</p> <p>-Copia de la credencial de elector del aportante.</p> <p>-Estado de cuenta bancario para su cotejo.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, numeral 1, inciso b), 54, numeral 2, incisos e), 103, numeral 1, y 104 numeral 3 y 4 del RF.</p>	<p>En atención al oficio Núm. INE/UTF/DA/38309/18 y número de observación PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.9, PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.10 PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.11, PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.12 expongo lo siguiente: En las pólizas por concepto de aportaciones en efectivo, se ha corregido la documentación a cada una de las pólizas, correspondientes en el sistema SIF, ya que fueron aportaciones en especie por parte del candidato: Póliza Número: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tipo de póliza: Normal. Subtipo de póliza: Ingresos.</p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a la información presentada y a lo manifestado por el sujeto obligado, se constató que aun cuando manifiesta que fue una aportación en especie, no presenta la documentación que compruebe el dicho, por lo que, al no adjuntar la ficha de depósito o comprobante de transferencia bancaria, recibo de la aportación en efectivo del candidato, credencial de elector del aportante, ni el estado de cuenta bancario para su cotejo, la observación no quedó atendida.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 5_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C5_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió presentar fichas de depósito o comprobantes de transferencia bancaria, los recibos de la aportación en efectivo del candidato, credencial de elector del aportante, ni el estado de cuenta bancario para su cotejo.</p> <p>Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos vertidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SCM-RAP-118/2018, se procede a señalar lo siguiente:</p> <p>Se realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en la cual respecto a la conclusión 11.1_C5_P1, señala que no se estableció por qué las pólizas correspondientes no se referían a aportaciones en especie; en acatamiento a lo señalado por la Sala y del análisis a la información presentada en el SIF, se desprende que de las aportaciones realizadas por el otrora candidato Addiel Lubín Mejía Hernández presentó recibos de aportación en especie, aunado a que precisó que dichas aportaciones en realidad fueron en especie y en el periodo para subsanar los errores y omisiones, indicó que: "... se ha corregido la documentación a cada una de las pólizas correspondientes en el sistema SIF...", por tal razón, la observación quedó atendida.</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
10	<p>PRELO.CAM.17/18.CI.CI.TLAX.D LMR.P1.RCO.A.8.10</p> <p>Se observaron aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 90 UMA, en los cuales no se identifica el origen del recurso por ser efectivo. Lo anterior se detalla en el Anexo 10.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF:</p> <p>-Copia del cheque o de la transferencia realizada proveniente de la cuenta del aportante.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso a), fracción VIII y 104, numeral 2 y 3 del RF.</p>	<p>En atención al oficio Núm. INE/UTF/DA/38309/18 y número de observación PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.9, PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.10 PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.11, PRELO.CAM..17/18.CI.CI.TLAX.DLMR.P1.RCO .A.8.12 expongo lo siguiente: En las pólizas por concepto de aportaciones en efectivo, se ha corregido la documentación a cada una de las pólizas, correspondientes en el sistema SIF, ya que fueron aportaciones en especie por parte del candidato: Póliza Número: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tipo de póliza: Normal. Subtipo de póliza: Ingresos.</p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a la información presentada y a lo manifestado por el sujeto obligado, se constató que aun cuando manifiesta que fue una aportación en especie, no presenta la documentación que compruebe el dicho, por tal motivo al no adjuntar el cheque o comprobante de transferencia bancaria, por la aportación registrada en efectivo que superó las 90 UMA, la observación no quedó atendida.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 6_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C6_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió presentar 4 cheques o comprobantes de transferencias bancarias.</p> <p>Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos vertidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SCM-RAP-118/2018, se procede a señalar lo siguiente:</p> <p>Se realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en la cual respecto a la conclusión 11.1_C6_P1, la autoridad jurisdiccional señala que no está justificada la comisión de la infracción porque la autoridad responsable no estableció por qué las pólizas correspondientes no se referían a aportaciones en especie como lo había señalado el recurrente, siendo que la documentación comprobatoria depende del tipo de aportación ya sean en efectivo o en especie y no señalar por qué dos de las pólizas cuyo concepto es "gasto" son consideradas como aportaciones en efectivo.</p> <p>En acatamiento a lo señalado por la Sala se realizó nuevamente el análisis y verificación de la documentación presentada en el SIF, determinando lo siguiente:</p> <p>en un primer momento, se debe establecer la razón por la cual las aportaciones objeto de estudio, fueron</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
				<p>consideradas en efectivo y no en especie, en ese sentido, derivado del análisis al reporte contable mayor del sujeto obligado se desprende que las pólizas de ingreso 3, 4, 9 y 11 fueron registradas contablemente a la cuenta 4-2-05-00-0000 APORTACIONES DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE (ASPIRANTE) subcuenta 4-2-05-01-0000 APORTACIONES DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE (ASPIRANTE) EN EFECTIVO, aunado a lo anterior, aun cuando presenta recibos de aportación en especie, lo cierto es que en las pólizas de referencia, adjunta un formato de aportación que contiene el nombre y firma del sujeto obligado señalando que la fuente de la aportación es en efectivo, y que el concepto es el de aportación en efectivo.</p> <p>Cabe señalar que después de la notificación del oficio de errores y omisiones, los sujetos obligados pueden realizar correcciones a su contabilidad, a través de las pólizas de corrección, para que de esa manera los datos ingresados al SIF se reflejen en el informe de corrección, para posteriormente manifestar las aclaraciones que a su derecho convengan, sin embargo, en el presente caso, en el supuesto de que las aportaciones se hubieran realizado en especie, el otrora candidato independiente, en un principio debió realizar las adecuaciones a su contabilidad, registrando dichas pólizas en las cuentas correctas, y en un segundo</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
				<p>momento, debió adjuntar la documentación que soportará dichas operaciones, lo cual no aconteció a pesar de que el sujeto obligado mencionó en su escrito de respuesta que: <i>"... se ha corregido la documentación a cada una de las pólizas correspondientes en el sistema SIF..."</i>, por lo cual al no haber modificado sus registros contables, ni presentar la documentación que soportara que se trataba de una aportación en especie, <i>está</i> fue considerada como aportación en efectivo que carece de las copias de los cheques o comprobantes de transferencia provenientes del aportante.</p> <p>Ahora bien, respecto a las pólizas cuyo concepto es "gasto", no debe pasar desapercibido que las mismas están registradas contablemente en un principio como ingreso en efectivo, como se menciona en el párrafo que antecede, ya que a pesar de que el sujeto obligado señala que son aportaciones en especie, no anexó la documentación respectiva que comprobará su dicho, y la observación subsiste ya que tampoco anexó las copias de los cheques o transferencias de la cuenta del aportante.</p> <p>Sin embargo, la omisión de soporte documental en las pólizas 3, 4, 9 y 11 que son objeto de la presente observación, se analiza en la conclusión 11.1_C5_P1, razón por la cual, esta observación quedó sin efectos.</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
13	<p>Egresos</p> <p>Gastos de Propaganda</p> <p>PRELO.CAM.17/18.CI.CI.TLAX.D LMR.P1.RCO.B.1.13</p> <p><i>Se observaron pólizas por diversos conceptos que no presentan el contrato de prestación de servicios. Lo anterior se detalla en el Anexo 13.</i></p> <p><i>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <p><i>-Los contratos de prestación de servicios con todos los requisitos que establece la normativa.</i></p> <p><i>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</i></p> <p><i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, del RF.</i></p>	Véase Anexo R1_P1	<p>No atendida</p> <p>Aun cuando el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, no hizo mención a la presente observación; sin embargo, de la verificación a la información presentada en el SIF, se constató que en las pólizas PN-1/EG-1/09-06-2018, PN-1/EG-3/14-06-2018 y PN-1/IG-11/27-06-2018 no se adjuntó el contrato de prestación de servicios que establece la normativa. Por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 7_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C7_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió presentar tres contratos de prestación de servicios por un monto de \$56,299.36.</p> <p>Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos vertidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SCM-RAP-118/2018, se procede a señalar lo siguiente:</p> <p>Se realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en la cual respecto a la conclusión 11.1_C7_P1, la autoridad jurisdiccional señala que fue acreditado que el sujeto obligado presentó un contrato de los tres solicitados por lo que la infracción no tiene justificación total en los términos señalados por la autoridad responsable; por lo que en acatamiento a lo señalado por la Sala y del análisis a la documentación presentada en el SIF, se constató que en la documentación adjunta de la póliza PN-1/EG-1/09-06-2018 el sujeto obligado presentó un contrato de prestación de servicios el cual ampara los conceptos de: 100 PINTA DE BARDAS EN EL DISTRITO LOCAL ELECTORAL NO.III DE TLAXCALA, 2 MILLARES DE VOLANTES, 200 LONAS DE 80 x 1.20 CM, 50 LONAS de 1.8 x 3 M y 150 GORRAS ESTAMPADAS, que son los conceptos contemplados en las pólizas PN-1/EG-1/09-06-2018, PN-1/EG-3/14-06-2018, no así respecto a la</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
				<p>póliza PN-1/IG-11/27-06-2018 en la cual no adjuntó el contrato correspondiente por un monto de \$18,000.00.</p> <p>Sin embargo la omisión de soporte documental en la póliza 11 objeto de la presente observación, se analiza en la conclusión 11.1_C5_P1, razón por la cual, esta observación quedó sin efectos.</p>		
16	<p>PRELO.CAM.17/18.CI.CI.TLAX.D LMR.P1.RCO.B.1.16</p> <p><i>Omitió presentar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital XML. Lo anterior se detalla en el Anexo 16.</i></p> <p><i>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <p><i>-El comprobante fiscal en formato XML</i></p> <p><i>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</i></p> <p><i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numeral 6, 46, numeral 1, y 127 del RF.</i></p>	Véase Anexo R1_P1	<p>No Atendida</p> <p>Aun cuando el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, no hizo mención a la presente observación; sin embargo, de la verificación a la información presentada en el SIF, se constató que en las pólizas PN1/EG-3/14-06-2018 y PN1/IG-11/27-06-2018 no se adjuntaron los archivos XML de los comprobantes fiscales correspondientes al gasto de propaganda. Por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 8_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>11.1_C8_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió presentar 2 archivo XML por un monto total de \$41,299.36</p> <p>Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos vertidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SCM-RAP-118/2018, se procede a señalar lo siguiente:</p> <p>Se realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, en la cual respecto a la conclusión 11.1_C8_P1, la autoridad jurisdiccional señala que fue acreditado que el sujeto obligado presentó un archivo XML de dos que tenía que presentar por lo que la infracción no tiene justificación total en los términos señalados por la autoridad responsable; por tal motivo en acatamiento a lo señalado por la Sala y del análisis a la documentación presentada en el SIF, se constató que en la póliza PN1/EG-3/14-06-2018, se encuentra un archivo XML, el cual ampara la cantidad de \$23,299.99; sin embargo, no presenta el XML que</p>		

No	Observación Oficio: INE/UTF/DA/38309/18	Respuesta Oficio de fecha 15 de Julio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
				<p>corresponde a la póliza PN1/IG-11/27-06-2018, por un monto total de \$18.000.00.</p> <p>Sin embargo, la omisión de soporte documental en la póliza 11 objeto de la presente observación, se analiza en la conclusión 11.1_C5_P1, razón por la cual, esta observación quedó sin efectos.</p>		

8.-Modificación a la Resolución

Que la Sala Regional, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SCM-RAP-118/2018** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1157/2018** relativas al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **33.1.3**, relativo a las conclusiones **11.1_C4_P1**, **11.1_C5_P1**, **11.1_C6_P1**, **11.1_C7_P1** y **11.1_C8_P1**, en los términos siguientes:

“(…)

33.1.3 C. Addiel Lubin Mejía Hernández

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 11.1_C9_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C12_P1 y 11.1_C13_P1.

(…)

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 11.1_C11_P1**

(...)

g) Imposición de la sanción

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: **Conclusiones 9, 10, 12 y 13.** ⁴

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
11.1_C9_P1	<i>El sujeto obligado presentó 2 facturas que carecen del complemento INE por un importe de \$38,299.95</i>	46, numeral 2 del RF
11.1_C10_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar 2 archivo XML”</i>	39, numeral 6, 46, numeral 1, y 127 del RF.
11.1_C12_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el archivos XML”</i>	39, numeral 6, 46, numeral 1, y 127 del RF.
11.1_C13_P1	<i>“El sujeto obligado no presentó los contratos de prestación de servicios solicitados”</i>	261, numeral 3, del RF

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.⁵

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II

⁴ Conclusiones 11.1_C4_P1, 11.1_C7_P1 y 11.1_C8_P1, quedaron sin efectos

⁵ Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada caso se presenten. En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.⁶

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
11.1_C9_P1	<i>El sujeto obligado presentó 2 facturas que carecen del complemento INE por un importe de \$38,299.95</i>	46, numeral 2 del RF
11.1_C10_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar 2 archivo XML”</i>	39, numeral 6, 46, numeral 1, y 127 del RF.
11.1_C12_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el archivos XML”</i>	39, numeral 6, 46, numeral 1, y 127 del RF.
11.1_C13_P1	<i>“El sujeto obligado no presentó los contratos de prestación de servicios solicitados”</i>	261, numeral 3, del RF

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede, identificadas con el número **(1)**, contraviniendo, en cada caso, la normatividad señalada en la columna **(3)**.

⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tlaxcala, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.⁷

En las Conclusiones **9,10,12 y 13** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 46 numeral 1, 47 numeral 1 inciso b), 103 numeral 1 incisos a) y b), 127, 246 numeral 1 inciso j) y 261 numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.⁸

⁷ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: "En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación."

⁸ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las

disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado,

no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **g)** del presente considerando.

(...)
(...)

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente

conclusión sancionatoria, infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización. Conclusión **1.1_C11_P1**.

N°	Conclusión	Monto involucrado
1.1_C11_P1	<i>El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA.</i>	\$21,600.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos y 291, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del candidato a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera lo establecido en el artículo 104, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tlaxcala, vulnerando lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Tlaxcala 2017-2018.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.⁹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El sujeto obligado omitió cumplir la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a las 90 UMA por un monto de **\$21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),**

⁹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Tlaxcala 2017-2018.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado Tlaxcala.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado candidato independiente para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el candidato independiente violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2, del Reglamento para la Fiscalización¹⁰.

¹⁰ "Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El monto se determinará

Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través de cheque o transferencia bancaria.

En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados.

En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de los candidatos independientes se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano.

considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano."

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo siguiente:

- La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
- El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y nombre completo del beneficiario.
- El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.

Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al equivalente de noventa Unidades de Medida y Actualización, brindado certeza a la licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

En ese sentido, al registrar una aportación en efectivo superior al equivalente de noventa Unidades de Medida y Actualización, y no a través de transferencia electrónica o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye una falta sustancial.

Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y, c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una única irregularidad y por tanto, en una falta de carácter **SUSTANTIVO o**

de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en el origen de los recursos del sujeto infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **g)** del presente considerando.

(...)

(...)

g) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusiones 9, 10, 12 y 13.

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

(...)
(...)

Conclusión 11

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica una aportación en efectivo superior a 90 UMA incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tlaxcala
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

(...)

...

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes.

Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	9, 10, 12 y 13	Forma	10 UMA's por conclusión	40 UMA's	\$3,224.00

¹¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
b)	1	Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración	1 UMA por evento	1 UMA's	\$80.60
c)	2 y 3	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	1 UMA por evento	8 UMA's	\$644.80
d)	11	Pagos mayores a 90 UMA realizados en efectivo	\$21,600.00	100% del monto involucrado	\$21,600.00
e	14	Egreso no comprobado (omisión de presentar documentación soporte)	\$6,000.00	50%	\$3,000.00
f	16	Tiempo real (1er Periodo)	\$143,600.63	3%	\$4,271.80
Total					\$32,821.20

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el candidato independiente, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Capacidad Económica (10% de A)
\$360,000.00	\$36,000.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del 10 por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato independiente y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **407 (cuatrocientas siete)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$32,804.20** (treinta y dos mil ochocientos cuatro pesos 20/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“R E S U E L V E

(...)

TERCERO Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.1.3 de la presente Resolución, se impone al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, en su carácter de candidato independiente, la sanción siguiente:

- a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 11.1_C9_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C12_P1 y 11.1_C13_P1.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C1_P1.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C2_P1 y 11.1_C3_P1.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C11_P1**
- e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C13_P1.**
- f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.1_C14_P1**

Una **multa** equivalente a **407 (cuatrocientas siete)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$32,804.20** (treinta y dos mil ochocientos cuatro pesos 20/100 M.N.).

(...)

9. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato independiente el **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, en la resolución **INE/CG1157/2018**, consistió en:

Resolución INE/CG1157/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
C. Addiel Lubin Mejía Hernández					
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
11.1_C4_P1, "El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de junio"	N/A		Atendida	N/A	Sin efectos
11.1_C5_P1, El sujeto obligado omitió presentar fichas de depósito o comprobantes de transferencia bancaria, los recibos de la aportación en efectivo del candidato, credencial de elector del aportante, ni el estado de cuenta bancario para su cotejo"	N/A	70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.). Cabe señalar la sanción de 70 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). "Cabe señalar la sanción de 40 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones, que se sancionan en el inciso a), siendo estas; 11.1_C9_P1, 11.1_C10_P1, 11.1_C12_P1 y 11.1_C13_P1, que fue materia de impugnación.
11.1_C6_P1, El sujeto obligado omitió presentar 4 cheques o comprobantes de transferencias bancarias.	\$48,600.00	\$70,041.40 Cabe señalar la sanción de \$70,041.40 (setenta mil cuarenta y un pesos 40/000 M.N) corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso d) que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	Sin efectos (La sanción de la conclusión 11.1_C6_P1, queda sin efectos por lo tanto la única que subsiste es la sanción correspondiente a la conclusión 11.1_C11_P1)
11.1_C7_P1 "El sujeto obligado omitió presentar tres contratos de prestación de servicios"	N/A	70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.).	Atendida	N/A	Sin efectos
11.1_C8_P1 "El sujeto obligado omitió presentar 2 archivo XML"	N/A	Cabe señalar la sanción de 70 Unidades de Medida y Actualización corresponde a la totalidad de las conclusiones que forman parte del inciso a) que fue materia de impugnación.	Atendida	N/A	Sin efectos

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, la siguiente sanción:

(...)

TERCERO Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.1.3 de la presente Resolución, se impone al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, en su carácter de candidato independiente, la sanción siguiente:

a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones **11.1_C9_P1**, **11.1_C10_P1**, **11.1_C12_P1** y **11.1_C13_P1**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **11.1_C1_P1**.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **11.1_C2_P1** y **11.1_C3_P1**.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **11.1_C11_P1**

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **11.1_C13_P1**.

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **11.1_C14_P1**

Una **multa** equivalente a **407 (cuatrocientas siete)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$32,804.20** (treinta y dos mil ochocientos cuatro pesos 20/100 M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

(...)”

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica** la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG1156/2018** y de la Resolución **INE/CG1157/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto del dos mil dieciocho, en los términos precisados, en los términos precisados en los Considerandos **7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-118/2018**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que dicho organismo, esté en posibilidad de notificar al **C. Addiel Lubin Mejía Hernández**, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Ciudad de México y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Tlaxcala, a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Tlaxcala, que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que Informe el contenido del Acuerdo aprobado a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes. _____

Del mismo modo, le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en los estados de Oaxaca y Tabasco, por hechos que pudieran constituir su remoción en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se compone de 2 apartados.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si desean reservar para su discusión, alguno de estos apartados, o bien, plantear la realización de una ronda en lo general en los términos del Reglamento. _____

De no ser el caso, Secretario del Consejo, tome la votación respecto de los 2 apartados.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 7.1 y 7.2. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

**(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1364/2018 e INE/CG1365/2018)
Ptos. 7.1 y 7.2** _____

INE/CG1364/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018 Y UT/SCG/PRCE/PAN/JL/OAX/29/2018 ACUMULADOS, INTEGRADOS CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS DEL TRABAJO Y ACCIÓN NACIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE OAXACA, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Abreviatura	Significado
Consejeros denunciados	Las Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPPyCI	Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, y Prerrogativas y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca
IEEPCO	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGS MIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

GLOSARIO	
Abreviatura	Significado
Lineamientos de paridad de género	Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
OPLE	Organismos Públicos Locales Electorales
PT	Partido del Trabajo
PAN	Partido Acción Nacional
Quejosos	Partidos del Trabajo y Acción Nacional
Reglamento de quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de remoción	Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales ¹
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
SRX	Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

RESULTANDO

I. DENUNCIA DEL PT.² El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibieron en la UTCE los cuadernos de antecedentes SX-106/2016 y SX-108/2018, registrados por la SRX, en los que se remiten dos escritos de queja del PT, en

¹ Aprobado en el Acuerdo INE/CG25/2017 y modificado a través del diverso INE/CG217/2017 en acatamiento a lo resuelto en las sentencias SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 acumulados, emitidas por la Sala Superior.

² Visible a fojas de la 11 a la 25 y anexos de la 26 a la 33, legajo 1 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

idénticos términos, por los que señala que los Consejeros denunciados durante el registro de las candidaturas transgénero dentro del proceso electoral local 2017-2018:

- Omitieron dar respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de información realizadas por el PT (el dieciocho y veinticinco de abril, así como cuatro de mayo pasados), relacionadas con la expedición de copias certificadas de los escritos presentados por los partidos políticos y coaliciones para cumplir con el principio de paridad de género.

Señalando que, derivado de dicha omisión, el PT estuvo impedido para poder hacer el análisis e impugnar dichos registros.

- Se negaron a incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria del cuatro de mayo del año en curso, un punto relacionado con la presunta omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por el PT, relacionada con la expedición de copias certificadas de los escritos presentados por los partidos políticos y coaliciones para cumplir con el principio de paridad de género.

II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DILIGENCIAS PRELIMINARES.³ El treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE acordó el registro del expediente, al cual le correspondió la clave UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018, reservó la admisión y emplazamiento, y requirió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO:

REQUERIMIENTO	RESPUESTA
Oficio INE/UT/8364/2018 ⁴ 01-06-18 Remitiera copia certificada de: A) Los “<i>Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas</i>”	Oficio EEPKO/SE/630/2018 ⁵ 13-06-18 Remitió copias certificadas de la documentación solicitada.

³ Visible a fojas de la 66 a la 68, legajo 1 del expediente.

⁴ Visible a foja 78, legajo 1 del expediente.

⁵ Visible a fojas 82 y 83, legajo 1 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

REQUERIMIENTO	RESPUESTA
<p><i>independientes en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca”</i></p> <p>B) Los acuerdos IEEPCO-CG-76/2017 y IEEPCO-CG-28-2018, así como de todos aquellos que se encuentren relacionados con la aprobación, modificación y/o cancelación de las candidaturas previstas en el artículo 16 de los Lineamientos;</p> <p>C) Precise si existió algún procedimiento específico para el registro de las candidaturas previstas en el artículo 16 de los Lineamientos;</p> <p>D) De resultar afirmativa su respuesta, indique cuales fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por acreditada la identidad y expresión de género de los postulantes que solicitaron su registro en términos del artículo 16 de los Lineamientos;</p> <p>E) Una relación de las personas que solicitaron ser registradas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Lineamientos, precisando, en cada caso, los cargos para los que se postularon y en su caso, los partidos políticos con los que se registraron, precisando la situación actual que guarda cada una de las personas incluidas en la relación mencionada en el inciso anterior, con las candidaturas para las que se postularon, y</p> <p>F) Los expedientes que para tal efecto fueron integrados, esto es, los escritos de solicitud de registro y la totalidad de las constancias que obran en estos.</p>	<p>El oficio IEEPCO/DEPPPyCI/714/2018,⁶ a través del cual, la titular de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del IEEPCO</p> <p>Remitió copia certificada del acuerdo IEEPCO-CG-39-2018, por el que se aprobaron las sustituciones de las candidaturas a diputaciones del Congreso del Estado y concejalías a los ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario 2017-2018.</p> <p>Copia certificada del expediente CQDPCE/POS/005/2018, en el cual se ordenó cancelar de forma definitiva diecisiete candidaturas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes.</p> <p>Copia certificada del acuerdo IEEPCO-CG-45-2018, por el que se efectuaron las modificaciones de género a las planillas de concejalías a los ayuntamientos postulados por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.</p>

⁶ Visible a foja 2725 del expediente.

III. DENUNCIA DEL PAN.⁷ El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el PAN presentó denuncia en contra de los Consejeros denunciados, porque:

- Omitieron verificar que las listas de candidatos a concejales integrantes de Ayuntamientos para el proceso electoral local 2017-2018, cumplieran con los lineamientos de paridad de género;
- Indebidamente iniciaron un procedimiento sancionador en contra de candidatos y partidos políticos, derivados de la denuncia relacionada con la “*usurpación de identidad trans*”;
- Revocaron indebidamente sus propias determinaciones, contraviniendo los principios de seguridad jurídica, certeza y definitividad. Lo anterior, mediante el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018 que revocó al diverso IEEPCO-RCG-04/2018, y
- El Consejero Gerardo García Marroquín transgredió los principios de legalidad e imparcialidad, al sugerir una multa mayor en la emisión de un voto particular en la aprobación del Acuerdo IEEPCO-RCG-04/2018, porque, según el quejoso, el acto reprochable fue la aprobación de los registros, lo que es imputable a la autoridad, no a los partidos que no postularon candidaturas “*trans*”.

IV. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y ACUMULACIÓN. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE acordó el registro del expediente, al cual le correspondió la clave **UT/SCG/PRCE/PAN/JL/OAX/29/2018**, se reservó la admisión y emplazamiento, ordenando la acumulación al diverso **UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018**, al advertirse conexidad entre las pretensiones y con la finalidad de emitir solo una resolución respecto de los hechos denunciados.

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar el proyecto de resolución con los elementos que obran en el expediente citado al rubro.

⁷ Visible a foja 3115 a 3140 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 34, segundo párrafo, del Reglamento de remoción.

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA

Este Consejo General del INE considera que el procedimiento de remoción al rubro identificado, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, **DEBE DESECHARSE DE PLANO**, en virtud que las conductas denunciadas **no constituyen alguna de las faltas** previstas por la LGIPE y el Reglamento de remoción, así como el hecho consistente en que **derivan de criterios de interpretación jurídica de preceptos legales** que, de conformidad con lo establecido en el diverso 40, párrafo 1, fracciones IV, y VI del mismo ordenamiento.

Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 102 de la LGIPE, como el numeral 34 del Reglamento de remoción, establecen el régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los OPLE, así como el catálogo de conductas que podrían considerarse graves en caso de su comisión.

Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracciones IV, y VI, del Reglamento de remoción establece que, cuando las conductas denunciadas no constituyan alguna de las faltas previstas por la LGIPE, o la conducta denunciada emane de criterios de interpretación jurídica de preceptos legales, respectivamente, la queja será improcedente y se desechará de plano.

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones legales y reglamentarias citadas, se puede inferir que la finalidad de los procedimientos de remoción es tutelar aquellas conductas que pudieran materializar los Consejeros Electorales de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, entendiendo a éstos como los sujetos pasivos regulados por la norma.

En esta línea argumentativa, es razonable sostener que, cuando del resultado de una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas **configuren alguna de las citadas causales**, se actualiza la improcedencia de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo a la tutela de los principios rectores en materia electoral que pudieran ser dañados o violentados con la actuación de los consejeros electorales.

Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica **no analizar cuestiones de fondo para determinar su procedencia**; sin embargo, se debe efectuar un análisis preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen indicios que revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, se justifique el inicio del procedimiento de remoción.

Sirve de apoyo argumentativo, la *ratio essendi* del criterio contenido en la jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro “QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”.⁸

En ese sentido, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-107/2016 determinó, entre otras cuestiones, que el objeto de una investigación preliminar es evitar un procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar los recursos administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento sancionador innecesario.

En el caso, se denuncia a los Consejeros Electorales del IEEPCO por la presunta comisión de conductas indebidas derivadas del registro de las candidaturas transgénero dentro del proceso electoral local 2017-2018, al señalar que:

⁸ Consultable en <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

RUBRO	HECHOS DENUNCIADOS
Omisión de remitir información al PT	<p>1. Omitieron dar respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de información realizadas por el PT (el dieciocho y veinticinco de abril, así como cuatro de mayo pasados), relacionadas con la expedición de copias certificadas de los escritos presentados por los partidos políticos y coaliciones para cumplir con el principio de paridad de género. Señalando que, derivado de dicha omisión, el PT estuvo impedido para poder hacer el análisis e impugnar dichos registros, y</p> <p>2. La negativa del IEEPCO de incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria del cuatro de mayo del año en curso, un punto en relación con la presunta omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por el PT, relacionadas con la citada expedición de copias certificadas.</p>
Omisión de verificar que las listas cumplieran con los lineamientos de paridad de género	Omitieron verificar que las listas de candidatos a concejales integrantes de Ayuntamientos para el proceso electoral local 2017-2018, cumplieran con los lineamientos de paridad de género.
Indebido inicio de un procedimiento, y revocación de sus propias determinaciones	<p>1. Indebidamente iniciaron un procedimiento sancionador en contra de candidatos y partidos políticos, derivados de la denuncia relacionada con la <i>"usurpación de identidad trans"</i>, y</p> <p>2. Revocaron indebidamente sus propias determinaciones, contraviniendo los principios de seguridad jurídica, certeza y definitividad. Lo anterior mediante el acuerdo IEEPCO-CG-32/2018 que revocó al diverso IEEPCO-RCG-04/2018.</p>
Voto particular del Consejero Gerardo García Marroquín	Denuncia que el Consejero Gerardo García Marroquín transgredió los principios de legalidad e imparcialidad, al sugerir una multa mayor a través de la emisión de un voto particular correspondiente al Acuerdo IEEPCO-RCG-04/2018, porque, según el quejoso, el acto reprochable fue la aprobación de los registros, y ello es imputable a la autoridad, no a los partidos que no postularon candidaturas <i>"trans"</i> .

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

Al respecto, el Titular de la UTCE del INE requirió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, a efecto de que proporcionara información relacionada con los criterios de paridad de género aplicados, destacando que:

- Remitió copia certificada de los Acuerdos:
 - IEEPCO-CG-76/2017. Relativo a la aprobación de los Lineamientos;
 - IEEPCO-CG-28/2018. Relativo al requerimiento efectuado a las coaliciones y partidos políticos, en materia de paridad de género en la elección de concejalías a los Ayuntamientos;
 - IEEPCO-CG-39/2018. Relativo a la aprobación de las sustituciones de las candidaturas a diputaciones del Congreso del Estado y Concejalías a los Ayuntamientos, y
 - IEEPCO-CG-45/2018. Relativo a las modificaciones de género a las planillas de Concejalías a los Ayuntamientos postuladas por los Partidos Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, en cumplimiento a la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador CQDPCE/POS/005/2018.
- Remitió copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador CQDPCE/POS/005/2018;
- Remitió el oficio IEEPCO/DEPPPyCI/714/2018, por el que la Titular de la DEPPPyCI rindió un informe respecto del análisis y verificación de las solicitudes de registro de las candidaturas;
- Remitió copia certificada de los expedientes de las personas que solicitaron su registro, en términos del artículo 16 de los Lineamientos.
- Preciso que correspondía a la DEPPPyCI el análisis y verificación de las solicitudes de registro de candidaturas presentadas.

Precisado lo anterior, y derivado del análisis de los escritos de denuncia presentados por los quejosos, esta autoridad administrativa nacional advierte que

las conductas denunciadas, por una parte, **no constituyen conductas que en modo alguno evidencien un actuar ilegal** y, por otra, **emanan de criterios de interpretación jurídica**, como se evidenciará en los párrafos siguientes.

A. Conductas que no constituyen alguna de las faltas graves previstas en el artículo 102, párrafo 2 de la LGIPE

En relación con la presunta **omisión de remitir información** al PT, vinculada con los escritos que hayan presentado los actores políticos para cumplir con el principio de paridad de género, se advierte que, contrariamente a lo alegado, sus escritos fueron respondidos por el IEEPCO, a través de los oficios IEEPCO/DEPPPyCI/527/2018⁹ e IEEPCO/SE/443/2018¹⁰ de cuatro y ocho de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente.

Es decir, es notorio y evidente que recayeron sendas respuestas a sus solicitudes de información, de lo que se sigue la improcedencia del presente procedimiento.

No es óbice, el argumento en el que el PT aduce que, derivado de la supuesta extemporaneidad con que la que el IEEPCO le entregó la información solicitada, ello se tradujo en un impedimento “*material*” para promover los respectivos medios de impugnación; contrariamente a lo aducido por el PT, se advierte que, conforme a lo razonado por la Sala Superior al dictar la sentencia SUP-JDC-304/2018 y acumulados, el PT sí estuvo en aptitud jurídica de promover juicio de revisión constitucional electoral de manera oportuna y controvertir el registro de las candidaturas que así consideró pertinente.

Asimismo, se destaca que ese órgano jurisdiccional se pronunció respecto de la manifestación del PT en relación con el hecho de que, fue hasta el 8 de mayo –*tal como lo argumenta nuevamente en la queja que se analiza*– cuando tuvo la documentación completa para poder impugnar; sin embargo, la máxima autoridad en la materia desestimó el planteamiento, al concluir que esos elementos de convicción: “*pudieron ofrecerse con posterioridad a la presentación de la demanda e incluso ser acompañadas de una ampliación de esta. Sin embargo, el partido*

⁹ Visible a foja 31 a 32 del expediente.

¹⁰ Visible a foja 33 del expediente.

estuvo en posibilidad de impugnar el acuerdo porque dichas documentales no constituían la base de su acción”.

Por lo anterior, con independencia de la presunta omisión de incluir una petición en el orden del día de la sesión del Consejo General del IEEPCO, relacionada con la omisión de atender la solicitud de información del PT, lo cierto es que, como se ha evidenciado, el citado partido contó con los elementos necesarios para promover los medios impugnativos que estimó pertinentes, de ahí que no se advierta que se acredite alguna de las causas graves previstas en el Reglamento de Remoción.

Respecto al planteamiento relacionado con la presunta omisión de verificar que las listas cumplieran con los Lineamientos de paridad de género, se advierte que la Titular de la DEPPPyCI¹¹ informó que, en las veinticinco solicitudes presentadas bajo el amparo del artículo 16 los Lineamientos, se verificó el requisito formal consistente en la auto adscripción por parte de la persona a registrar, ello, mediante una carta; sin que los quejosos señalen algún elemento, de forma específica, que no se haya valorado.

Incluso, se destaca que la Sala Superior al resolver el diverso SUP-JDC-304/2018 Y ACUMULADOS *-sentencia que se invoca como un hecho notorio-*¹², determinó:

*“...Así, partiendo de que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, la tesis de la que parte esta Sala Superior es que **la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto...**” [énfasis de la sentencia]*

De ahí que esta autoridad no advierta elemento mínimo alguno que dé cuenta de un actuar deficiente, pues en todo caso, se trató de un acto en estricto cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de paridad de género.

¹¹ Visible a foja 2725 del expediente.

¹² En términos de lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de Remoción, en relación con los diversos 461, párrafo 1, de la LGIPE, así como 15 de la LGSMIME.

Por último, en relación con la emisión de un voto particular por parte del Consejero Gerardo García Marroquín, se advierte que los Consejeros **deben votar** los proyectos de Acuerdo que se sometan a su consideración, entendiendo ésta como una **obligación**, en términos del artículo 22 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEPCO.¹³

Asimismo, el artículo 24, párrafo 5, del aludido Reglamento de Sesiones prevé que, en caso que un Consejero disienta con la decisión tomada por la mayoría podrá formular un voto particular a fin de dejar constancia de esto.

En ese sentido, con independencia de lo razonado en la emisión del voto particular, lo cierto es que dicha facultad es inherente al cargo de Consejero, sin que en modo alguno vincule sus efectos con los resolutivos de una sentencia, por lo que no se trata de un elemento coercible que integre la resolución, y que los sujetos involucrados deban de acatar en sus términos, de lo que se sigue la improcedencia del presente procedimiento.

B. Conductas que emanan de criterios de interpretación jurídica.

En relación con los planteamientos por los que se alega el presunto indebido inicio de un procedimiento, así como la revocación de sus propias determinaciones, esta autoridad advierte que los actos denunciados por los quejosos **emanan de criterios de interpretaciones jurídica de preceptos legales**, esto es, el IEEPCO determinó integrar el expediente CQDPCE/POS/005/2018, derivado de la queja presentada por diversas ciudadanas que se identificaron como representantes de colectivos transgénero, al señalar una “*supuesta usurpación de identidad trans*”, esto es, se inició un procedimiento a instancia de parte.

En ese sentido, el IEEPCO estableció, como fundamento de su actuación al emitir la resolución IEEPCO-RCG-04/2018, que tenía el ejercicio de la función electoral del Estado, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafos 1 y 2, 99 y 104, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 114 TER, párrafos primero y segundo, de la

¹³ Consultado en el sitio web <http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/Reglamento%20de%20Sesiones%20del%20Consejo%20General.pdf>, el tres de septiembre de dos mil dieciocho, a las 15:00 hrs.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PRCE/PT/CG/12/2018
Y ACUMULADO

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;30, numeral 2; y 32, 38, fracciones I y XLVIII, de la Ley electoral local.

De igual forma, el IEEPCO determinó que era competente para conocer y resolver sobre el procedimiento ordinario sancionador, al citar los artículos 323, numeral 1, fracción I, y 333, numeral 2 de la Ley electoral local, en relación con los artículos 16, numerales 1, inciso a) y 3, fracción I; 50; 51 y 52 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEEPCO; lo anterior, en virtud de ser el Órgano Superior de Dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, y quién resuelve las denuncias presentadas por infracciones a la ley, diversas de las establecidas para el procedimiento sancionador especial.

No obstante, la Sala Superior revocó las actuaciones realizadas por el Consejo General del IEEPCO, al resolver el diverso SUP-JDC-304/2018 y acumulados, en síntesis, al señalar que el acuerdo de registro de candidaturas a concejales en determinados ayuntamientos no se ubicaba entre los supuestos de procedencia del procedimiento ordinario, destacando que tal atribución se encuentra dentro del ámbito de la actuación de un órgano jurisdiccional, inclusive, evidenció que:

*“...Una **interpretación opuesta**, en el sentido de que la autoridad electoral puede conocer de todas las infracciones irregularidades que afecten al proceso, haría disfuncional el ordenamiento, puesto que se dejarían de atender a que la vía para controlar la constitucionalidad y legalidad; entre otros, de los actos de las autoridades administrativas electorales, es a través de la existencia de un sistema de medios de impugnación en materia electoral...” [énfasis propio]*

Evidenciado lo anterior, en concepto de esta autoridad administrativa electoral, al tratarse de un aspecto de legalidad propio de interpretaciones jurídicas, en el que ambas autoridades fundaron y motivaron sus determinaciones, sin que la divergencia de criterios entre la autoridad emisora de los hechos controvertidos y la Sala Superior, como instancia de revisión, es que en modo alguno pueda implicar una responsabilidad administrativa en perjuicio de los consejeros integrantes del IEEPCO.

Destacando que, aún y cuando la Sala Superior analizó y revocó la resolución IEEPCO-RCG-04/2018, la autoridad jurisdiccional no advirtió conducta alguna que motivara una vista a este Consejo General derivado de la actuación del IEEPCO.

Sirve de apoyo argumentativo a lo anterior la Tesis XI.1º.A.T.30K (10a) “DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS” Y “ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE”. SU DISTINCIÓN”¹⁴.

Por lo expuesto, es claro que se actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 40, párrafo 1, fracciones IV, y VI, del Reglamento de Remoción, relativa a que los hechos denunciados **no actualizan alguna de las faltas graves** previstas por el artículo 102 de la LGIPE, así como el hecho consistente en que **derivan de criterios de interpretación jurídica de preceptos legales** por ello, lo procedente es **desechar de plano** las quejas.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM,¹⁵ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la LGSMIME.

Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **DESECHAN DE PLANO** las denuncias presentadas por los partidos del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, en los términos expresados en el Considerando “SEGUNDO” de la presente Resolución, y

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la LGSMIME.

Notifíquese. La presente resolución **personalmente** a las partes y por **estrados**, a los demás interesados.

¹⁴ Décima Época, Registro 2011907, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Libro 31, junio de 2016.

¹⁵ Son orientadoras las tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

INE/CG1365/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADOS CON LOS EXPEDIENTES UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018, UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018, UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018 y UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018 ACUMULADOS, INTEGRADOS CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DE ROSSELVY DEL CARMEN DOMÍNGUEZ ARÉVALO, JUAN CORREA LÓPEZ Y VÍCTOR HUMBERTO MEJÍA NARANJO, CONSEJERA Y CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Abreviatura	Significado
Consejeros denunciados	Rossely del Carmen Domínguez Arévalo, Juan Correa López y Víctor Humberto Mejía Naranjo, Consejera y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
IEPCT	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
MC	Movimiento Ciudadano
OPLE	Organismos Públicos Locales Electorales

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

GLOSARIO	
Abreviatura	Significado
Contraloría General	Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PREP	Programa de Resultados Electorales Preliminares
PREPET	Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
Quejosos	Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México
Reglamento de elecciones	Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de remociones	Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y la Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales ¹
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
UTIC	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

¹ Aprobado en el Acuerdo INE/CG25/2017 y modificado a través del diverso INE/CG217/2017, en acatamiento a lo resuelto en las sentencias SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 acumulados, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

R E S U L T A N D O

I. DENUNCIAS. El veintiséis de junio (UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018), tres (UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018) y cuatro (UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018 y UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018) de julio, todos del año en curso, se recibieron sendos escritos de queja presentados por los partidos PVEM, PRI, MC y PRD, respectivamente, por los que señalan que los Consejeros denunciados presuntamente transgredieron el principio de imparcialidad y actuaron negligentemente, al publicar, en el portal de internet del IEPCT, el resultado preliminar del simulacro realizado por la Comisión Temporal del PREPET, en el que el candidato a la gubernatura del Estado de Tabasco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”² figuraba en primer lugar.

Según los quejosos, dicha situación evidenció la preferencia partidista de los integrantes de la citada Comisión; influyó en el sentido de la votación de los ciudadanos; provocó condiciones de desigualdad en la contienda electoral, y constituyó una publicación indebida en los medios de comunicación de esa información.

Con motivo de lo anterior, también se dirigieron alegaciones en contra del Titular de la UTIC, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión temporal del PREPET.

II. REGISTROS, RESERVA DE ADMISIÓN Y ACUMULACIÓN. El diez de julio de dos mil dieciocho, se registraron los expedientes UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/TAB/18/2018³, UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018,⁴ UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018⁵ y UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018⁶, integrados con motivo de las quejas interpuestas por el PVEM, PRI, MC y PRD, respectivamente, ordenando la acumulación al primero de éstos, al advertirse conexidad entre las pretensiones y con la finalidad de emitir solo una resolución respecto de los hechos denunciados.

III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En su oportunidad, el titular de la UTCE ordenó requerir al Secretario Ejecutivo del IEPCT, a efecto de que proporcionara diversa

² Coalición integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social.

³ Visible a foja 21 del expediente.

⁴ Visible a foja 129 del expediente.

⁵ Visible a foja 164 del expediente.

⁶ Visible a foja 190 del expediente.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

información respecto del marco jurídico aplicable al PREPET, las fases que lo componen, la realización de otros simulacros, la publicación de resultados y las áreas que participaban en cada etapa.

REQUERIMIENTO	DESAHOGO
Oficio INE-UT/11479/2018 ⁷ :	Oficio S.E./6704/2018 ⁸ :
<p>A) Precisara el marco jurídico del PREPET;</p> <p>B) Detallara las etapas que conforman el PREPET, así como las áreas que intervienen en cada una;</p> <p>C) Informara el número de simulacros realizados con base en el PREPET;</p> <p>D) Remitiera copia certificada de los informes relacionados con los simulacros;</p> <p>E) Indicara si los simulacros realizados o los resultados preliminares de los mismos fueron publicados por el IEPC, y</p> <p>F) De ser afirmativa la respuesta anterior, señalará los medios físicos o digitales utilizados, o de ser el caso, si se realizó algún llamado a los medios de comunicación.</p>	<p>Precisó que el PREPET se integra de seis etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acopio (recepción de las actas PREP en los CATD). • Digitalización (captura digital de imágenes del PREP). • Captura de datos (Registro de datos). • Verificación de datos. • Publicación de resultados. • Empaquetado de actas (archivo de actas del PREP). <p>Detalló que las áreas de la UTIC que intervienen son; Área de desarrollo, Área de sistemas, Área de infraestructura, Áreas de capacitación y Personal Operativo del PREPET.</p> <p>Informó la realización de tres simulacros; dos de ellos publicados en la página <i>preptabasco.mx</i> (<u>no ligada a la página oficial</u>) y uno publicado en la página electrónica <i>iepct.mx</i>. Remitiendo copia certificada de los informes atinentes.</p>

IV. VISTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL IEPCT. Respecto de las conductas atribuidas al Titular de la UTIC, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión temporal del PREPET en los expedientes UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018 y UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018, se dio vista a la Contraloría General, por tratarse de conductas imputadas a un servidor público que no ostenta la calidad de Consejero Electoral.

VISTA	OFICIO DE REMISIÓN DE ESCRITO DE DENUNCIA
Contraloría General del IEPC	UT-INE/11481/2018 ⁹
	11-06-2018
	UT-INE/11482/2018 ¹⁰ 11-06-2018

⁷ Visible a foja 260 del expediente.

⁸ Visible a foja 195 del expediente.

⁹ Visible a foja 261 del expediente.

¹⁰ Visible a foja 262 del expediente.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

V. ESCRITO DE DESISTIMIENTO. El Secretario Ejecutivo del IEPC remitió el escrito de desistimiento presentado por el PVEM al diverso **UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/TAB/18/2018**, así como el escrito de ratificación respectivo.

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al rubro.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 35, primer párrafo, del Reglamento de remociones.

SEGUNDO. SE TIENE POR NO PRESENTADA LA QUEJA DEL PVEM

La queja formulada por el PVEM debe tenerse por **NO PRESENTADA**, toda vez que éste se desistió expresamente de la acción, situación que impide la continuación del procedimiento.

Lo anterior es así, ya que, en lo ordinario, en términos del artículo 40, párrafo 2, inciso c), del Reglamento de remociones, procede el sobreseimiento de la queja cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto por parte del Consejo General del INE.

No obstante, tanto el escrito de desistimiento, como la ratificación correspondiente, fueron presentados ante el Secretario Ejecutivo del IEPC durante la instrucción del procedimiento, por lo que, lo conducente, es tener por no presentada la queja, ante la voluntad expresa de desistimiento previo a la admisión del mismo, como se evidenciará a continuación:

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

- Escrito de **desistimiento**¹¹:

“LIC. JESUS MANUEL SANCHEZ RICARDEZ, Consejero Representante del Partido Verde Ecologista de México... Que por medio de presente escrito vengo a DESISTIRME LISA Y LLANAMENTE del PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES CONTRA LOS CIUDADANOS ROSSELVY DEL CARMEN DOMÍNGUEZ AREVALO, JUAN CORREA LOPEZ Y VICTOR HUMBERTO MEJIA NARANJO, CONSEJERA Y CONSEJEROS DEL IEPCT...”

- Escrito de **ratificación** ante el Secretario Ejecutivo del IEPCT¹²:

“Que por convenir a mis intereses y los del partido que represento, he presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, escrito de desistimiento a la denuncia presentada en contra de los Consejeros Electorales que conformaron la comisión del PREPET, ciudadanos Rosselvy Del Carmen Domínguez Arévalo, Juan Correa López Y Víctor Humberto Mejía Naranjo... la cual ha originado el expediente número UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/TAB/18/2018”

Precisado lo anterior, y toda vez que, es clara y suficiente la manifestación de desistimiento de la acción del PVEM en el expediente UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/TAB/18/2018, y tomando en consideración la etapa procesal de la sustanciación del expediente, lo conducente es **TENER POR NO PRESENTADA** la queja, en la inteligencia que esta autoridad no advierte de forma oficiosa que se trate de hechos graves, o de conductas que pudieran constituir una afectación a los principios rectores de la función electoral.

Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los diversos SUP-JDC-365/2018, SUP-JDC-348/2018 y SUP-JDC-317/2018, respectivamente.

TERCERO. IMPROCEDENCIA

Este Consejo General del INE considera que los procedimientos de remoción UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018, UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018 y

¹¹ Visible a foja 199 del expediente.

¹² Visible a foja 200 del expediente.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, **DEBEN DESECHARSE DE PLANO**, en virtud que las conductas que se imputan a los consejeros electorales **no actualizan alguna de las faltas graves** establecidas en los artículos 102, párrafo 2, de la LGIPE; así como 34, párrafo 2, del Reglamento de remociones, de conformidad con lo establecido en el diverso 40, párrafo 1, fracción IV, del mismo ordenamiento, al advertirse que las mismas fueron ejecutadas por sujetos que **no ostentan la calidad de Consejeros Electorales**.

Del análisis de las disposiciones citadas, se advierte que, tanto el artículo 102 de la LGIPE, como el numeral 34 del Reglamento de remociones, establecen el régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los OPLE, así como el catálogo de conductas que podrían considerarse graves.

Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de remociones establece que, cuando las conductas denunciadas no actualicen alguno de los supuestos graves, la queja será improcedente y se desechará de plano.

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones legales y reglamentarias citadas, se puede inferir que la finalidad de los procedimientos de remoción, es tutelar aquellas conductas que pudieran materializar los Consejeros Electorales de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, entendiendo a éstos como los sujetos pasivos regulados por la norma.

Así, es razonable sostener que, cuando del resultado de una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas no son imputables a Consejeros Electorales de los OPLE, se actualiza la improcedencia de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo del sujeto pasivo tutelado por la norma.

Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica no analizar cuestiones de fondo para determinar su procedencia; sin embargo, se debe efectuar un análisis preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen indicios que revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, se justifique el inicio del procedimiento de remoción.

Sirve de apoyo argumentativo, la *ratio essendi* del criterio contenido en la jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de rubro “QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”.¹³

En este sentido, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-107/2016 determinó, entre otras cuestiones, que el objeto de una investigación preliminar es evitar un procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar los recursos administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento sancionador innecesario.

En el caso, se denuncia la publicación indebida de los resultados del simulacro realizado el diez de junio de dos mil dieciocho, en el que, de acuerdo con los datos del sistema PREPET, el candidato a la gubernatura del Estado de Tabasco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” figuraba en primer lugar.

Al respecto, se denuncia a los integrantes de la Comisión Temporal del PREPET, por considerar que;

- I) Actuaron con notoria negligencia **al publicar los resultados del simulacro** del PREPET en la página oficial del instituto, mismo que se reprodujo en distintos medios de comunicación y redes sociales;
- II) Se evidenció un actuar parcial de los Consejeros en beneficio de un determinado actor político;
- III) Se influyó indebidamente en el sentido de la votación, generando confusión en el electorado y,
- VI) Se provocaron condiciones de desigualdad en la contienda electoral.

De las anteriores afirmaciones, se advierte que los quejosos se inconforman de actos propios de la **operación y ejecución del primer simulacro del PREPET – diez de junio de dos mil dieciocho-**, realizado previo a la Jornada Electoral, por lo

¹³ Consultable en <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016>

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

que resulta indispensable, en un primer momento, analizar las áreas que participan en la operación y ejecución de los simulacros.

Tomando en consideración lo anterior, esta autoridad administrativa electoral nacional, en uso de la facultad indagatoria prevista en el artículo 44 del Reglamento de remoción, y en estricto apego a los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad, realizó las diligencias pertinentes con la finalidad de allegarse de los elementos de convicción necesarios a fin de conocer el marco jurídico aplicable al PREPET, las fases que lo componen, la realización de otros simulacros, la publicación de resultados y las áreas responsables en cada etapa.

Sirve de sustento argumentativo, el criterio contenido en la jurisprudencia¹⁴ 10/97 intitulada DILIGENCIAS PARA MEJOR PREVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.

Al respecto, el Secretario Ejecutivo del IEPCT informó:

- El marco jurídico que da sustento al PREPET es: la LGIPE, el Reglamento de elecciones y el Anexo 13, emitido por el INE, la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, así como los Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal del IEPCT, a saber:
 - CE/2017/041, por el que se ratifica la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREPET;
 - CE/2017/042, por el que se aprueba la ruta crítica 2017-2018 para la supervisión del desarrollo e implementación del PREPET;
 - CE/2017/056, por el que se designa a los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREPET;
 - CE/2017/065, por el que se determina la instancia que implementará y operará el PREPET;
 - CE/2018/002, por el que se aprueba el calendario de actividades a realizar para la supervisión, desarrollo e implementación del PREPET;
 - CE/2018/006, por el que se aprueba el proceso técnico operativo del PREPET;
 - CE/2018/007, mediante el cual se propone la modificación del acuerdo CE/2017/056, a efecto de designar a un integrante del COTAPREP;

¹⁴ Consultada en el sitio web <http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx>, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a las 17:00 hrs.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

- CE/2018/015, mediante el cual se aprueba la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos (CATD), los centros de captura y verificación (CCV) y se instruye su instalación y habilitación;
 - CE/2018/016, mediante el cual se instruye a los Consejos Distritales y municipales, supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREPET en los centros de acopio y transmisión de datos (CATD);
 - CE/2018/017, mediante el cual se propone la modificación del acuerdo CE/2018/007, a efecto de designar a un integrante del COTAPREP, y
 - CE/2018/018, mediante el cual se designa al ente auditor que tendrá a su cargo la verificación y análisis del sistema informático que será utilizado en la implementación y operación del PREPET.
- Señaló que las seis etapas que conforman el PREPET son:
 - Acopio (recepción de las actas PREP en los CATD).
 - Digitalización (captura digital de imágenes del PREP).
 - Captura de datos (Registro de datos).
 - Verificación de datos.
 - **Publicación de resultados, y**
 - Empaquetado de actas (archivo de actas del PREP).
 - Señaló que las áreas que participan son de la Unidad de Tecnologías de la Informática y Comunicación:
 - Área de Desarrollo
 - Área de Sistemas
 - Área de Infraestructura
 - Áreas de capacitación y personal operativo del PREPET
 - Preciso que, en términos del artículo 349 del Reglamento de elecciones del INE, se realizaron tres simulacros: **diez**, diecisiete y veinticuatro de junio del año en curso.
 - Destacó que, los resultados del simulacro de diez de junio, fueron publicados en la página preptabasco.mx durante el simulacro y hasta las 12:00 horas del día

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

siguiente, de conformidad con el Proceso Técnico Operativo establecido en el Anexo 13, Capítulo V, numeral 15, del Reglamento de elecciones del INE.¹⁵

- Indicó que las pruebas fueron publicadas en la página *preptabasco.mx*, destacando que dicha página no fue dada a conocer ni estuvo ligada a la página oficial del IEPCT (*iepct.mx*)

Precisado lo anterior, en relación con la **operación y ejecución** del primer simulacro del PREPET, llevado a cabo el diez de junio de dos mil dieciocho, y **publicado en la página *preptabasco.mx***, se advierte que correspondía al Titular de la UTIC, como **instancia encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREPET**, en términos de las facultades que le fueron conferidas en el Acuerdo CE/2017/041¹⁶, entendiendo a éstas actividades como la **ejecución de los ejercicios y simulacros** previstos el Anexo 13, numeral 16, del Reglamento de elecciones.

En la inteligencia que, a los Consejeros integrantes de la Comisión Temporal del PREPET les correspondía coordinar los trabajos, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las actividades y formalidades establecidas en el Reglamento de Elecciones, en términos de las facultades que les fueron conferidas en el Acuerdo CE/2017/033¹⁷.

Por lo que, la **operación y ejecución del primer simulacro del PREPET**, fue realizada por la UTIC, mediante el personal que estimó pertinente para tal efecto.

Lo anterior, se evidencia con el informe rendido por el Secretario Ejecutivo del IEPCT en el que, entre otros aspectos, precisó que las etapas del simulacro del PREPET fueron realizadas por áreas que pertenecen a la UTIC, a saber, Área de Desarrollo, Área de Sistemas, Área de Infraestructura, así como Áreas de capacitación y personal operativo del PREPET.

Por ello, se destaca que aún y cuando los quejosos señalan a los Consejeros integrantes de la Comisión Temporal del PREPET como responsables de los

¹⁵ Consultado en el sitio web <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94128/CGor201711-22-ap-17-a13.pdf>, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a las 21:30 hrs.

¹⁶ Consultado en el sitio web [http://iepct.org.mx/docs/sesiones/20171030_0OR0300_000041_\(000179_1\).pdf](http://iepct.org.mx/docs/sesiones/20171030_0OR0300_000041_(000179_1).pdf), el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a las 17:00 hrs.

¹⁷ Consultado en el sitio web [http://iepct.org.mx/docs/sesiones/20171009_0EX0300_000033_\(000169_1\).pdf](http://iepct.org.mx/docs/sesiones/20171009_0EX0300_000033_(000169_1).pdf), el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a las 17:15 hrs.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

hechos que denuncian, lo cierto es que, como se evidenció, al tratarse de supuestas irregularidades cometidas durante la **operación y ejecución** del primer simulacro del PREPET, es claro que las mismas, en todo caso, son imputables a sujetos que **no ostentan la calidad de Consejeros Electorales** y, por ende, no se configura alguna de las causas graves previstas por el marco jurídico aplicable.

En la inteligencia que, para tener por acreditada alguna de las causales graves previstas por la norma, es requisito indispensable la actuación del sujeto pasivo regulado, situación que, en el caso, no se acredita.

A fin de evidenciar lo anterior, se advierte que el Anexo 13, Capítulo VI, numeral 16, del Reglamento de elecciones **prevé la realización de simulacros**, entendiendo a éstos, como el evento previo a la Jornada Electoral, en el que **se reproduce el proceso técnico operativo de manera integral**, a efecto de evaluar el óptimo funcionamiento del sistema informático y los procedimientos¹⁸, dicha reproducción integral comprende la **ejecución de todos los procesos y procedimientos** relativos con la digitalización, captura, verificación y **publicación** de las actas.

En ese sentido, el Reglamento de elecciones establece las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del simulacro:

- 1. Acopio. Consiste en la recepción de las Actas PREP en los CATD. En el sistema informático se registra la fecha y hora en que **el personal del CATD** recibe el acta; en caso que la imagen del Acta PREP capturada tenga origen desde la casilla, la fecha y hora de acopio será la que registre el sistema informático al momento de digitalizar el Acta PREP;
- 2. Digitalización. En esta fase se lleva a cabo la captura digital de imágenes de las Actas PREP;
- 3. Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas PREP, a través del sistema informático desarrollado para tal fin;
- 4. Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos capturados en la fase anterior coincidan con los datos asentados en cada una de las Actas PREP, y

¹⁸ Consultado en el sitio web http://iepct.mx/prepet/pdf/lineamientos_prep_v2.pdf, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a las 17:30 hrs.

- 5. Publicación de resultados. Se refiere a la divulgación de los **datos, imágenes y bases de datos del PREP** y se encuentra a cargo del Instituto y los OPL en sus respectivos ámbitos de competencia (en el caso, designaron en el ámbito de competencia al titular de la UTIC como instancia encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREPET).

De lo anterior, se desprende que las etapas 1, 2, 3, y 4 que se desarrollan durante los simulacros **son ejecutadas por personal de los CATD**, al advertirse que dichas etapas se llevan a cabo en los aludidos centros de acopio, por lo que en modo alguno puede inferirse la participación de los Consejeros denunciados.

Respecto a la etapa 5, se advierte que requiere la ejecución de un conjunto de programas e infraestructura tecnológica denominado sistema informático, a efecto de culminar el proceso técnico, entendiendo a éste último como el conjunto de actividades y procedimientos secuenciados desde el acopio y hasta la **publicación** de los datos, imágenes y bases de datos, cuya responsabilidad correspondía al Titular de la UTIC del IEPCT, como **instancia encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREPET**, de ahí que no se advierta la participación de los Consejeros denunciados.

Ahora bien, con independencia del resultado del simulacro del PREP, esta autoridad no advierte que, el hecho de haber publicado los datos en la página *preptabasco.mx* (no ligada a la página oficial), durante la duración del simulacro, evidencie una conducta que se encuentre fuera del marco legal aplicable, al constituir una obligación establecida en Anexo 13, del Reglamento de elecciones¹⁹ que, la realización de los simulacros debía consistir en:

“ ...

*I. Ejecución de todos los procesos y procedimientos operativos relacionados con la digitalización, captura, verificación y **publicación** de las Actas PREP;*

II. Aplicación total o parcial del plan de continuidad, y

*III. Procesamiento de, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP que se prevén acopiar, el día de la Jornada Electoral, empleando los formatos de AEC aprobados por el Instituto. En caso de que durante los simulacros no pueda procesarse el cien por ciento de las Actas PREP, se deberá dejar constancia de tal circunstancia en el **informe***

¹⁹ Artículo 16

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

correspondiente y la instancia interna responsable de coordinar el PREP determinará la necesidad de ejecutar un simulacro adicional.

...

Así, se advierte la justificación e importancia de ejecutar en los simulacros todas y cada una de las etapas previstas en el PREP, a efecto de realizar la evaluación correspondiente y tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, en lo que interesa, a fin de verificar que, entre otros factores, la publicación de resultados, consistente en la divulgación de los **datos, imágenes y bases de datos que integran el PREP**, se ejecuten de forma correcta en el sistema informático implementado para tal efecto.

No es óbice, que los quejosos retomen diversas notas de opinión, señalando que, presuntamente, se influyó indebidamente en el sentido de la votación, generando confusión, y provocando condiciones de desigualdad en la contienda electoral, al tratarse de una cobertura informativa en la que se hace **referencia expresa** a la realización de un “**SIMULACRO**” por parte del IEPCT, sin que, en modo alguno se pueda inferir una afectación a los principios que rigen la función electoral, al ser claro que en todo momento la información presentada fue bajo la representación de un “SIMULACRO”, sin que los quejosos señalen situación en contrario, como se evidenciará en las siguientes notas periodísticas²⁰ –*hechos notorios*–²¹:

Dirección electrónica	Nota periodística
https://www.proceso.com.mx/538294/simulacro-de-conteo-rapido-que-favorece-a-morena-genera-protestas-y-demandas-en-tabasco	<div><div><div>Simulacro de conteo rápido que favorece a Morena genera protestas y demandas en Tabasco</div><div><small>POR ARMANDO GUZMÁN · 13 JUNIO, 2018</small>GOBERNADORES 2018</div><div></div><div>VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- A menos de tres semanas para la jornada del 1 de julio, la elección local se judicializa y se pone en duda la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET).</div><div><small>El domingo pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) realizó el primer simulacro sobre la operatividad del PREPET, sin embargo, se filtró que se dio como “ganador” a Adán Augusto López Hernández, candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia que conforman Morena-PT-PES.</small></div></div></div>

²⁰ Consultadas en los sitios web de referencia, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a las 23:00 hrs.

²¹ Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 461, párrafo 1, de la LGIPE, y 15, párrafo 1, de la LGSMIME

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

Dirección electrónica	Nota periodística
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/iniciara-hoy-primer-simulacro-del-prepet	<p>Iniciará hoy primer simulacro del Prepet</p> <p>El Heraldillo de Tabasco Sábado 9 de junio de 2018 en Local 51</p> <p>   </p> <p>Fernando Hernández</p> <p>Villahermosa, Tabasco.- Hoy domingo a las 8 de la noche la Comisión temporal del programa de resultados preliminares realizará el primer simulacro para conocer como operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares el día de la jornada electoral.</p> <p>Según el presidente de esta instancia electoral, Juan Correa López, en total se harán tres simulacros y que se estarían computando el 100 por ciento de las actas de escrutinio y cómputo.</p> <p>"Este ejercicio se realizará en las 38 juntas industriales y municipales y el centro estatal de cómputo ubicado en la calle Rosales", dijo.</p> <p>Comentó que el costo del PREP subió debido a ciertos imprevistos que se tuvieron y será de 11 millones de pesos.</p>
http://ahoratabasco.com/politica/31792/	<p>POLÍTICA</p> <p>Resultados preliminares del PREPET no tienen ningún valor, aclara IEPCT</p> <p>El Consejero Electoral y presidente de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET), Juan Correa López, calificó de indignación que resultados del simulacro con valores aleatorio se haya tergiversado en las redes sociales como si fueran ciertas o anunciaran lo que ocurrirá el 1 de julio. Tras la filtración [...]</p> <p> Facebook  Twitter</p> <p>12 junio 2018 317</p>
http://www.tabascohoj.com/nota/442804/prueban-prepet-iexcl-y-gana-adan	<p>12/06/2018 10:47 / Centro, Tabasco</p> <p>A 20 días de la jornada electoral, y con una diferencia de apenas medio punto porcentual, el IEPCT en su simulacro del PREPET dio como ganador al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Adán Augusto López Hernández, con 227 mil 786 votos.</p> <p>Cuestionado por Tabasco HOY, el secretario ejecutivo del IEPCT, Roberto Félix López, aclaró que los resultados publicados en el simulacro no tienen validez alguna, pues se trata de actas ficticias, no obstante minutos después de haber hablado con él, la página del PREPET alojada en el sitio 'http://preptabasco.mx/#/gubernatura-porentidad', que estuvo 24 horas en la red, fue desactivada para consulta.</p>

Por lo expuesto, se actualiza causal de improcedencia establecida en el artículo 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de Remoción, relativa a que los hechos imputados a los Consejeros Electorales no actualizan alguna de las faltas graves previstas por el artículo 102 de la LGIPE, toda vez que las mismas fueron ejecutadas por funcionarios del OPLE que no ostentan la calidad de Consejeros y, por ello, lo procedente es **desechar de plano** las quejas.

CONSEJO GENERAL
Exp. UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018
y ACUMULADOS

Similar criterio sostuvo este Consejo General al resolver los diversos INE/CG601/2017²², así como INE/CG1185/2018²³, respectivamente.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la LGSMIME.²⁴

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se tiene por **NO PRESENTADA** la queja del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales **UT/SCG/PRCE/PVEM/JL/18/2018**, en los términos expresados en el Considerando “SEGUNDO” de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se **DESECHAN DE PLANO** las quejas que motivaron los procedimientos de remoción **UT/SCG/PRCE/PRI/CG/21/2018**, **UT/SCG/PRCE/PRI/JL/TAB/23/2018** y **UT/SCG/PRCE/PRD/CG/24/2018**, en los términos expresados en el Considerando “TERCERO” de la presente Resolución.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Notifíquese. La presente Resolución **personalmente** a las partes, **por oficio** a la Contraloría General del IEPCT, y por **estrados**, a los demás interesados.

²² Consultable en el sitio web <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94304/CGor201712-18-rp-9-1.pdf>, el quince de octubre de dos mil dieciocho.

²³ Consultable en el sitio web <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98210/CGor201808-23-rp-15-3.pdf>, el quince de octubre de dos mil dieciocho.

²⁴ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Continúe con el siguiente punto, por favor. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 2 apartados. _____

Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

De forma breve, para reservar el apartado 8.1. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respecto del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como apartado 8.2.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 8.2. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1366/2018) Pto. 8.2 _____

INE/CG1366/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL Y SU ENTONCES CANDIDATO A LA ALCALDÍA EN XOCHIMILCO EL C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio IECM-SE/QJ/3695/2018, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante el cual remite el escrito presentado por el C. Hugo Sandoval Martínez, promoviendo por su propio derecho, en contra de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia” y su entonces candidato a la Alcaldía en Xochimilco el C. José Carlos Acosta Ruíz, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad por un presunto rebase de tope de gastos derivado de la celebración de diversos eventos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México. (Fojas 1-6 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los

hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

***ÚNICO.** El candidato a la Alcaldía en Xochimilco José Carlos Acosta Ruiz, realiza eventos los días miércoles y domingos en el SALON MARIA BONITA ubicado en calle mercado s/n esq. Camino a Nativitas Col. Xaltocan Delegación Xochimilco C.P. 16090 los cuales son actos para su fiscalización y revisión.*

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- Toda vez que el quejoso no aportó pruebas que acrediten la veracidad de las conductas denunciadas, ni manifestó circunstancias de modo, tiempo y lugar que contravengan a la normatividad en materia de fiscalización, se tuvo a bien prevenirlo para que subsanara la omisión antes descrita.

III. Acuerdo de recepción del escrito de queja.

- a) El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y prevenir al quejoso.
- b) Por otra parte, se ordenó prevenir al C. Hugo Sandoval Martínez, a efecto que subsanara la omisión a los requisitos de procedencia del artículo 30, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Foja 9 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41889/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 10 del expediente).

VI. Notificación de la prevención al quejoso.

- a) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41964/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, previno al C. Hugo Sandoval Martínez, a efecto de que proporcionara circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos denunciados. (Fojas 11 a 16 del expediente)
- b) En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que el ciudadano en comento no presentó escrito de respuesta a la prevención realizada en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente la Unidad Técnica de Fiscalización no recibió escrito alguno suscrito por éste, en relación a los hechos materia del procedimiento.

VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima tercera sesión extraordinaria de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif Hernández.

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Causal de Improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Cuando se analice una queja por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

Visto lo anterior, los artículos 30 numeral 1, fracción III, 31 numeral 1, fracción II y 33 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que en caso que se actualice la prevención, la Unidad Técnica de Fiscalización emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles para subsanar las omisiones advertidas, apercibiendo al denunciante que, en caso de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente:

i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, así como en caso de que no aporte los elementos de prueba que fueren ofrecidos en el escrito de queja y que soporten su aseveración concediéndole un plazo perentorio para que subsane dichos requisitos esenciales; y

ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la autoridad, la autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de queja respectivo.

Se dice lo anterior, ya que la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como de pruebas que respalden los hechos denunciados se traducen en un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.

Lo anterior es así, ya que la falta de pruebas que acrediten la veracidad de las conductas denunciadas, así como de una narración clara y expresa de los hechos denunciados, circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituyen un obstáculo para que esta autoridad pudiese trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias, toda vez que dicha omisión no le permite saber cuáles son los hechos denunciados y, consecuentemente, acreditar o desmentir los mismos; es decir, las circunstancias del caso concreto, determinan el contexto en que se llevó a cabo la conducta denunciada -situación que en el caso concreto tampoco aconteció- y adquieren relevancia para que en cada caso, se dilucide si existió o no infracción a la normativa electoral, pues la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.

Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan:

“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar

*y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpadados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el **procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.** Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.*

Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constanancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

[Énfasis añadido]

“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la

admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.2¹ del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; **2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suele dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,** y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se advierte que no son sancionables. Con el segundo, **se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad.** El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a

¹ **Nota:** El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los artículos 30 numeral 1, fracción III, 31 numeral 1, fracción II y 33, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente.

la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República.

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”

[Énfasis añadido]

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con carácter de indicio que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

En la especie, de conformidad con los artículos 30 numeral 1, fracción III, 31 numeral 1, fracción II y 33 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad mediante Acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, ordenó prevenir al C. Hugo Sandoval Martínez, a efecto que en el término de tres días hábiles, una vez realizada la notificación correspondiente, **presentara los medios de prueba idóneos, que sostuvieran sus aseveraciones, proporcionara una narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja así como manifestara las circunstancias de modo, tiempo y lugar.** A continuación, se transcribe la parte conducente:

“(…)

Cabe señalar que, del análisis al escrito presentado, se advierte que este no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV, V y VII; 30, numeral 1, fracción I; en relación con el 33, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace a los hechos denunciados, toda vez que estos, no contienen la narración expresa y clara de los hechos en los que se

basa la queja, ni proporciona la descripción sucinta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos que presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales y que constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento, ni acompaña las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.

(...)"

Así las cosas, de los hechos denunciados no puede colegirse la existencia de un acto u omisión que se encuentre contemplado como infracción a la norma electoral, por lo que esta autoridad determinó procedente prevenir al quejoso, con la finalidad de desahogar el requerimiento de la autoridad en los términos del acuerdo referido.

Consecuentemente, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se practicó la diligencia de notificación, constituyéndose en el domicilio señalado por la C. Héctor Juan Manuel Barrios Alvarado en el escrito de queja, cerciorándose que efectivamente se encontraba en el domicilio correcto, por estar así indicado en el exterior del inmueble, se procedió a realizar la notificación.

Cabe señalar que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, feneció el término para el desahogo de la prevención en comento, por lo que una vez concluido lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros se advertía la presentación de algún escrito o documentación alguna por parte del C. Hugo Sandoval Martínez, sin embargo, no se localizó escrito o documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de mérito.

Derivado de lo anterior, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito señalada en el oficio INE/UTF/DRN/41964/2018, en relación al acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar la queja de mérito, lo anterior de conformidad con el artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 33 numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, en virtud de que procede desechar el escrito de queja cuando el quejoso no desahogue la prevención realizada en el término de ley, para el efecto de subsanar las omisiones de los requisitos establecidos en el artículo 29, de dicho Reglamento, situación que se actualiza en el presente asunto.

Ahora bien, dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el término establecido en el acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar la queja, lo anterior de conformidad con artículos 30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX

numeral 1, fracción III, 31 numeral 1, fracción II y 33 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y consideraciones de derecho antes vertidas, que la queja que originó el expediente en que se actúa, debe ser **desechada**.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha** la queja interpuesta por el C. Hugo Sandoval Martínez, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 8.1. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. ____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Este asunto viene en el Proyecto de Resolución como desechamiento. Me aparto de lo que se propone. _____

Considero que sí debería de estudiarse el fondo, toda vez que sí aportó el quejoso una prueba y, por tal razón, no habría elementos para sostener que no se aportaron pruebas, en todo caso, que no fueron suficientes conforme al requerimiento. ____

Creo que, sí esta autoridad, aunque sean mínimas las pruebas, debe entrar a la investigación correspondiente. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Brevemente Consejero Presidente, para explicar la racionalidad del Proyecto y por qué la Comisión de Quejas y Denuncias propone, junto con la Unidad Técnica desechar esta queja. _____

Es porque esencialmente el quejoso, lo que denuncia es el reparto de sillas de rueda en eventos, y lo que se presenta es un Acta del propio personal del Instituto

Nacional Electoral, donde dice que, efectivamente, había sillas de rueda, pero no se acredita que se estaba repartiendo en el evento, cuando se le hace una prevención al quejoso, el quejoso no aporta pruebas adicionales, no las responde, y por esa razón, la Comisión de Quejas lo que propone es desechar el Proyecto de Resolución. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Al no haber más intervenciones. _____

Secretario del Consejo, tome la votación. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 8.1. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1367/2018) Pto. 8.1 _____

INE/CG1367/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y A SU ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XI EL C. ISMAEL FIGUEROA FLORES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/702/2018/CDMX

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/702/2018/CDMX**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por el C. Arturo Rosique Castillo, en su carácter de representante propietario del partido Morena. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio IECM-SE/QJ/3799/2018, signado por el Lic. Rubén Geraldo Venegas, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante el cual remitió escrito de queja presentada por el C. Arturo Rosique Castillo, en su calidad de representante propietario del partido político Morena ante el Consejo Distrital XI del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra de la otrora coalición “Por la CDMX al Frente” y su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XI el C. Ismael Figueroa Flores denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. (Fojas 1-22 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial.

“(…)

HECHOS

1. Con fecha doce de junio de 2018, fue anunciado que el candidato de la Coalición por la Ciudad de México al frente al Distrito once local ISMAEL FIGUEROA HERNÁNDEZ (sic), realizaría un evento en el cual regalaría diversos artículos utilitarios entre ellos, sillas de ruedas.

2.- En virtud de lo anterior, solicité al secretario del Consejo Distrital número 11 de la Ciudad de México, licenciado Fidel Vargas Ayala que en su carácter de Oficial Electoral asistiera a dicho evento a dar fe de una presunta violación a la normatividad electoral.

3.- En consecuencia, el suscrito y el mencionado funcionario electoral, nos constituimos en el citado lugar, mediante el cual se pudo constatar la organización del evento político electoral, en el cual se apreciaron sillas plegables y la instalación de una carpa, situación que se describe por sí misma en el Acta de Oficialía Electoral número IECM/SEOE/OD-11/S-322/2018, que adjunto para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

4.- Por lo anterior, tanto el Partido de la Revolución Democrática y su candidato a la diputación local de este Distrito, previsiblemente se encuentra realizando actividades que pueden superar los topes de gastos de campaña oficialmente autorizados, así como transgredir la normatividad electoral en materia de campañas políticas; lo que se acredita con la copia certificada del Acta de Oficialía Electoral que se acompaña.

“(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- Copia certificada del Acta de Oficialía Electoral de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, número IECM/SEOE/OD-11/S-322/2018.

III. Acuerdo de recepción y prevención.

- a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente Resolución. El catorce de agosto se acordó integrar el expediente respectivo, se le asignará el número de expediente, se registrara en el libro de gobierno y se notificará al Secretario del Consejo General del Instituto.
- b) Por otra parte, se ordenó prevenir al C. Arturo Rosique Castillo, a efecto que subsanara la omisión a los requisitos de procedencia del artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Foja 23 del expediente).

IV. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42018/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General, la recepción y prevención del procedimiento de mérito. (Foja 24 del expediente).

V. Notificación de la prevención al quejoso.

a) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42019/2018 se notificó la prevención al quejoso a través de la representación del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral¹, por medio del cual se le hizo del conocimiento, que del análisis a su escrito presentado, se advierte que la queja en cuestión no cumplió con los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV, V y VII; 30, numeral 1, fracción I; 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia Fiscalización; es decir, no contiene la narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja, ni proporciona la descripción sucinta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas

¹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, el cual señala que: (...)“conforme al cual cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral [...] y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”

entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos que presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales y que constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento, ni acompaña las pruebas que aun con carácter indiciario soporten sus afirmaciones. (Foja 25-26 del expediente).

b) Con relación al inciso anterior, es de precisarse que, a la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se recibió respuesta alguna por parte del quejoso.

VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la vigésima tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el quince de octubre de dos mil dieciocho por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif Hernández.

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Causal de Improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

Visto lo anterior, el artículo 41, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que en caso que se actualice la prevención, la Unidad Técnica de Fiscalización emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de setenta y dos horas para subsanar las omisiones advertidas, apercibiendo al denunciante que, en caso de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente:

i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que no describa claramente los hechos denunciados, no aporte ni ofrezca circunstancias de tiempo, modo o lugar ni elemento probatorio o indiciario que sustente los hechos denunciados, concediéndole un plazo perentorio para que subsane dichos requisitos esenciales; y

ii) Que en caso que no se subsanen las omisiones hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de queja respectivo.

Lo anterior es así, ya que al colocarnos en este supuesto, nos encontramos ante un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación eficaz, toda vez que se advierte la omisión de un análisis lógico jurídico que de manera precisa, señale las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los supuestos hechos controvertidos, a fin de acreditar la existencia de los hechos denunciados y en consecuencia poder emitir la determinación que conforme a derecho y competencia en materia de fiscalización, corresponda.

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden hechos o elementos suficientes aún con carácter de indicio que presupongan la veracidad de la realización de actos ilícitos presentes sancionables por la legislación aplicable, los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos.

En la especie el denunciante argumenta que el entonces candidato y la coalición que lo postuló, realizaron actividades que pudieran derivar en un posible rebase de los topes de gastos de campaña, transgrediendo la normatividad electoral. Para sostener su dicho, el promovente presenta como prueba una copia certificada del Acta de Oficialía Electoral de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, en la que contiene seis imágenes de las cuales, no se desprenden los elementos mínimos para presumir la comisión de una falta por parte del denunciado.

Por consiguiente, del análisis del escrito de queja presentado por el denunciante, la autoridad fiscalizadora advirtió que no se cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV, V y VII; 30, numeral 1, fracción I; 41, numeral 1, inciso e) Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que procedió a dictar un acuerdo mediante el cual otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja, previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 41 numeral 1 inciso h), así como 33, numerales 1 y 2 del Reglamento antes referido.

En este contexto, la autoridad sustanciadora mediante Acuerdo de prevención del catorce de agosto de dos mil dieciocho y notificado el día dieciséis del mismo mes y año, requirió al denunciante para que aclarara su escrito de queja, toda vez que para esta autoridad resulta necesario el conocimiento de elementos mínimos indiciarios en virtud del señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar que entrelazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos que presuntamente vulneran la normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales y que constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento, así como acompañar los medios de prueba aún con carácter indiciario con los que se soporten sus afirmaciones, pues es a través de dichos elementos, que será posible la realización de diligencias de investigación que lleven a acreditar o no la existencia de éstos y en consecuencia, poder determinar si los mismos constituirían una infracción respecto del origen, destino y aplicación de los recursos.

Al respecto, tal y como se advierte en el presente proyecto, el denunciante no otorgó a esta autoridad mayores elementos para que ésta pudiera trazar una línea de investigación, por lo que omitió aportar alguna prueba que aun con carácter de indiciario, hiciera verosímiles las supuestas violaciones a la normatividad.

Bajo la misma tónica, sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan:

“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en ***el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan***

a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

[Énfasis añadido]

“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.2² del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; **2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de**

² **Nota:** El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los artículos 30, y 41, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente.

factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, **se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad.** El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República.

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”

[Énfasis añadido]

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con carácter de indicio que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/702/2018/CDMX

ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

Así las cosas, de los hechos denunciados no puede colegirse la existencia de un acto u omisión que se encuentre contemplado como infracción a la norma electoral, por lo que esta autoridad determinó procedente prevenir al quejoso, con la finalidad de desahogar el requerimiento de la autoridad en los términos del acuerdo referido.

Ahora bien, dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el término establecido en el acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar la queja, lo anterior de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso h) en relación con el 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en que se actúa, debe ser **desechada**.

En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha** la queja interpuesta contra de la otrora coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y a su entonces candidato a diputado por el Distrito Local XI el C. Ismael Figueroa Flores, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza al Secretario Ejecutivo otorgar poder notarial en nombre del Instituto Nacional Electoral, para ser representado, en actos de dominio por el C. Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, proceda con la votación. __

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 9. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1368/2018) Pto. 9 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE AUTORIZA AL SECRETARIO EJECUTIVO OTORGAR PODER NOTARIAL EN NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA SER REPRESENTADO, EN ACTOS DE DOMINIO POR EL C. LIC. PABLO SERGIO AISPURO CÁRDENAS, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS

ANTECEDENTES

- I. La Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos ha ocupado el inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos (Inmueble) durante 13 años en arrendamiento y recientemente se ofreció en venta al Instituto Nacional Electoral (INE).
- II. Dicho inmueble cuenta con una superficie de terreno de 535 m2 y de construcción de 2,165.72 m2, consistente en edificación de 5 niveles y dos sótanos para estacionamiento con 24 cajones, con uso de suelo H2 Habitacional, con clasificación de la zona; mixta, habitacional, comercial, oficinas y de servicios; destacando con respecto de su estado de conservación actual que el inmueble se encuentra en perfectas condiciones de acuerdo a la edad de la edificación y conforme a los trabajos realizados por los copropietarios, acorde con las recomendaciones expresada en el Dictamen estructural posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017, emitido por el corresponsable en estructuras Ing. Fernando Rodríguez Ortega, con cédula profesional 4926857, acreditado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos A.C.
- III. En ese orden de ideas, el 11 de enero de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/CA/010/2017, el C.P. Ricardo I. Hernández Mata, Coordinador

Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Morelos, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración, diversa documentación legal del inmueble de referencia, con la finalidad de obtener un Dictamen valuatorio a efecto de que el Instituto Nacional Electoral, pudiera considerar la posibilidad de adquirir el inmueble que ocupan las oficinas de esa Junta Local Ejecutiva.

- IV.** El 28 de abril de 2017, en sesión extraordinaria de Junta, se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE72/2017 la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del INE, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del INE, en cuyo anexo se consideró la adquisición del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos.
- V.** Conforme al Dictamen valuatorio número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el valor máximo de adquisición, con base al valor comercial del Inmueble asciende a la cantidad de \$28'131,861.00. En virtud del vencimiento de la vigencia del avalúo citado, se solicitó al INDAABIN la actualización del Dictamen valuatorio, obteniéndose éste con el número genérico G-15617-A-ZNC y número secuencial 03-18-513, con fecha de emisión 3 de septiembre de 2018, donde el valor máximo de adquisición con base al valor comercial del Inmueble, asciende a la cantidad de \$29'852,000.00.
- VI.** Asimismo, en copia certificada del plano catastral y de la notificación del valor catastral de la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de fechas 21 y 27 de marzo de 2018 respectivamente, establecen el valor total del inmueble en \$4'762,275.00.
- VII.** En ese orden de ideas, por lo ofertado por los copropietarios y la oportunidad que se presenta para su adquisición, toda vez que el valor de compraventa del inmueble establecido por los promitentes vendedores, es menor a la actualización del Dictamen valuatorio, donde se señaló que el valor comercial

del inmueble asciende a la cantidad de \$29'852,000.00; en consecuencia la operación de compraventa, se efectuará conforme al valor del Dictamen valuatorio efectuado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00, existiendo una economía favorable al INE por la cantidad de \$1'720,139.00.

Al respecto es de destacar que al efectuar la transacción directamente con los copropietarios sin la participación de intermediarios, ni el pago de comisiones o sobre costos para el INE, se procura un ahorro significativo.

VIII. El 4 de septiembre de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1094/2017, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de referencia, propuso a la DEA la adquisición del inmueble, exhibiendo ante la DEA copia del Dictamen valuatorio con número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del INDAABIN relativo al inmueble del cual se solicita la adquisición, por lo que acorde con las políticas del INE en materia de adquisición inmobiliaria, para que se sustituya paulatinamente el gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles y, conforme al artículo 23 del Manual, se aceptó la solicitud para analizar la posible adquisición del inmueble.

IX. El 20 de febrero de 2018, mediante oficio INE/DEA/DRF/0415/2018, la Dirección de Recursos Financieros comunicó que se cuenta con recursos suficientes para cubrir el monto para la adquisición del Inmueble conforme al avalúo realizado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00, que se cubrirían con recursos de la subcuenta correspondiente al Comité Técnico Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Lo anterior no incluye los pagos o erogaciones que se generen producto de la compraventa, cuyo monto en su momento deberá calcularse y someterse a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso antes referido.

Asimismo, la Dirección de Recursos Financieros informó que resultado de la revisión de la normatividad, Lineamientos y Estatutos del INE, se determinó

que no tiene facultades para contratar deuda, por lo que su adquisición no puede realizarse mediante el financiamiento con garantía hipotecaria, arrendamiento financiero o proyecto de asociación público privada, por lo que se determina que la figura para adquirir el Inmueble referido sea a través de una compraventa.

- X.** El 15 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración emitió el “Dictamen preliminar de procedencia para la adquisición de inmueble en el Estado de Morelos por el Instituto Nacional Electoral”, en el que se determinó viable la conveniencia financiera, operativa y legal de la posible adquisición en compraventa del Inmueble, requiriéndole a la Junta Local Ejecutiva en Morelos la propuesta de distribución de superficies del Inmueble, al igual que copias de toda la documentación legal, autentica y actualizada emitida por la autoridad administrativa competente, con la correspondiente legitimación de los copropietarios.
- XI.** Mediante los oficios número INE/JLE/MOR/VE/1236/2018, INE/JLE/MOR/CA/552/2018 e INE/JLE/MOR/VE/1824/2018 de 8 de mayo, 15 de junio y 4 de julio de 2018 respectivamente, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, remitió a la DEA, diversa información y documentos del inmueble, misma que fue enviada a la Dirección Jurídica para su validación, conforme a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Capítulo Tercero de la Adquisición de Bienes Inmuebles, artículo 26, primer párrafo del Manual.
- XII.** La Dirección Jurídica, a través de los oficios números INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018 e INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018 de 23 de mayo y 25 de junio de 2018 respectivamente, signados por Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Contratos y Convenios, al igual que con oficio número INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 de 9 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, emitió opiniones con respecto a los diversos documentos turnados por la Junta Local Ejecutiva en Morelos, emitiendo mediante este último opinión favorable respecto a la situación jurídica del inmueble.

- XIII.** El 3 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración emitió el Dictamen Final de Procedencia en sentido positivo para la adquisición del bien inmueble en el Estado de Morelos por el INE.
- XIV.** El 4 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración mediante el oficio INE/DEA/5998/2018 envió al Secretario Ejecutivo el Dictamen Final de Procedencia en sentido positivo relativo a la adquisición del bien inmueble con la finalidad de solicitar su autorización para presentar para aprobación de la Junta la solicitud de adquisición del inmueble de referencia.
- XV.** Con esa misma fecha, el Secretario Ejecutivo sobre el oficio INE/DEA/5998/2018 antes aludido, autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración, presentar para aprobación de la Junta General Ejecutiva la propuesta de adquisición de dicho inmueble.
- XVI.** El 10 de octubre de 2018, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo INE/JGE173/2018, autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración para que llevara a cabo las gestiones necesarias para la adquisición del bien inmueble en el Estado de Morelos, ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, colonia La Pradera, Código Postal 62170, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

CONSIDERANDOS

- 1.** De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos en términos de ley. El INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2. Que el artículo 134, párrafo primero de la CPEUM señala que la administración de los recursos económicos federales deberá realizarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
3. El artículo 31, párrafos 2 y 4 de la LGIPE señalan que el patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la propia Ley. Asimismo, que, el INE se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.
4. El artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE refiere que el INE tiene su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 32 delegaciones, una en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.
5. Que el artículo 34, numeral 1, incisos a) al d) de la LGIPE, señala que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva (Junta) y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.
6. Los artículos 35, numeral 1 de la LGIPE, y 5 numeral 1, inciso c) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) establecen, que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas

las actividades del Instituto, así como dictar las modalidades pertinentes para el óptimo aprovechamiento de los recursos del INE.

7. El artículo 44, primer párrafo, inciso jj), de la LGIPE, establece como atribución del Consejo General dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones de la ley o en otra legislación aplicable.
8. Los artículos 51, párrafo 1, incisos a), c), l), s) y w) de la LGIPE, y 41, párrafo 2, inciso b), h) y dd) del RIINE, señalan como atribuciones del Secretario Ejecutivo, entre otras, representar legalmente al INE; cumplir los acuerdos del Consejo General; proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; otorgar poderes a nombre del INE para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al INE o para otorgar poderes para dichos efectos, el Secretario Ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General; ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta; así como establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva, la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.
9. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, incisos b), e), f) y x) del RIINE, otorgan entre otras, a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) las atribuciones de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el INE; atender las necesidades administrativas de los órganos del INE; así como establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de administración de personal, recursos materiales y servicios generales, recursos financieros y de organización del INE; proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del INE; organizar y dirigir la administración de los recursos materiales, financieros,

así como la administración del personal del INE y las demás que le confiera la Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables.

10. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la LGIPE, corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas áreas administrativas del INE que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y revisar las operaciones presupuestales que realice el INE se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias así como verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados.
11. Mediante Acuerdo INE/JGE72/2017 la Junta, aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del INE, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del INE, en el cual se consideró la adquisición del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos.
12. De conformidad con las atribuciones del Secretario Ejecutivo para llevar a cabo el procedimiento de compra-venta establecido en el Capítulo Tercero, de la “Adquisición de Bienes Inmuebles”, Sección 16, Firma de Contrato, artículo 32 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, el documento contractual será suscrito de conformidad con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso s) de la LGIPE. De todas estas operaciones la DEA presentará un informe a la Junta General.
13. El Punto de Acuerdo Primero del Acuerdo INE/JGE173/2018 de la Junta, aprobó la solicitud de adquisición del bien inmueble, ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, código postal 62170 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos por un monto de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos

00/100 M.N.), destacando que lo anterior no incluye los pagos o erogaciones que se generen producto de la compraventa, cuyo monto en su momento deberá calcularse y someterse ante el Comité Técnico del Fideicomiso.

14. En ese orden de ideas es de señalar que, de las consultas realizadas en septiembre de 2017 y agosto de 2018, al sistema denominado “inmuebles de propiedad federal con superficies disponibles” e “inmuebles federales compartidos con superficies disponibles”, constatando la no existencia de inmuebles disponibles parcial o totalmente que fueran adecuados o convenientes a las necesidades de la Junta Local de Morelos.
15. Después de una búsqueda de inmuebles para arrendamiento en el municipio de Cuernavaca con las características espaciales para albergar la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, no se cuenta con inmuebles que cumplan con dichos requerimientos.
16. Construir unas oficinas que pudieran albergar a la Junta Local de Morelos, con la mismas características y requisitos que la misma demanda, el INE tendría que adquirir un terrero y construir un inmueble que, de acuerdo a los costos actuales de construcción, con esas características tendría un costo aproximado de \$80,00,000.00 de pesos.
17. En ese sentido los propietarios ofertaron el inmueble antes mencionado, por la cantidad ya referida de \$28,131,861.00 de pesos que con el pago de rentas durante once años cuatro meses, el importe por la adquisición del inmueble quedaría amortizado.
18. Con fundamento en el artículo 4º, cuarto párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dice: “Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones establecerán, de conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes mencionados. En todo caso, dichas instituciones deberán tramitar la inscripción de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta Ley, en el Registro Público de la Propiedad Federal.”

19. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad Federal: Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes a la Federación, a las entidades y a las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, incluyendo los contratos de arrendamiento financiero, así como los actos por los que se autoricen dichas operaciones.
20. En ese orden de ideas el procedimiento de compra-venta establecido en el Capítulo Tercero, de la “Adquisición de Bienes Inmuebles”, Sección 17, Registro Contable, artículo 33 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, la Dirección de Recursos Financieros llevará a cabo el registro contable de la adquisición de un inmueble, de conformidad a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
21. Para efectos de lo referido en el considerando 12 del presente Acuerdo, el Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/JGE173/2018 de la Junta, instruyó a la DEA para que por conducto de la Dirección de Obras y Conservación y en coordinación con el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, se lleven a cabo las gestiones necesarias para que el Secretario Ejecutivo formalice la adquisición del bien inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.
22. En ese sentido, toda vez que el artículo 51, párrafo 1, inciso s), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que este Consejo General debe autorizar al Secretario Ejecutivo para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al INE o para otorgar poderes para dichos efectos, y considerando que la compraventa del inmueble referido implica la sustitución del gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles por inversión para dotar al INE de infraestructura propia para llevar a cabo sus actividades, aunado a que esta medida es acorde a lo establecido en las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que establece

el Decreto de Presupuesto de Egresos y el acuerdo emitido por este órgano para el ejercicio fiscal 2018, se estima procedente otorgar la autorización señalada.

En razón de los antecedentes y consideraciones antes expuestas, el Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se autoriza al Secretario Ejecutivo otorgar poder notarial en nombre del Instituto Nacional Electoral, para ser representado, en actos de dominio por el C. Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos.

SEGUNDO.- El poder especial para actos de dominio que se autoriza a través del presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de su expedición por el Notario Público correspondiente y se agotará con la formalización del acto jurídico en la escritura pública a favor del Instituto Nacional Electoral.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que presente un informe a la Junta General Ejecutiva de todas las operaciones que se realicen del acto de compra-venta referido de conformidad con lo que para tal efecto le remita la Dirección Ejecutiva de Administración.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, de la “Adquisición de Bienes Inmuebles”, Sección 17. Registro Contable, artículo 33 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, una vez que se le notifique al Instituto Nacional Electoral sobre la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, la Dirección Ejecutiva de Administración por conducto de la Dirección de Recursos Financieros deberá realizar el registro contable respectivo de conformidad a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE LLEVE A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN INMUEBLE EN EL ESTADO DE MORELOS, UBICADO EN AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO 507, COLONIA LA PRADERA, CÓDIGO POSTAL 62170, DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS

A N T E C E D E N T E S

- I. El 26 de abril de 2011, en sesión ordinaria de Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), mediante el Acuerdo JGE43/2011, se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del IFE, instruyendo a la Dirección Ejecutiva de Administración, contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará dicho programa.
- II. El 20 de junio de 2011, se formalizó con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, el Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del IFE” a través del cual se administrarían los recursos que se destinasen al Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 y cuyo patrimonio inicial se integró con los recursos establecidos en las partidas específicas del presupuesto del entonces IFE para el ejercicio fiscal 2011.
- III. El 10 de abril de 2013, en sesión extraordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces IFE, aprobó el Acuerdo JGE52/2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo y Noveno; asimismo se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011, por el que se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del IFE; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos, y agregar la subcuenta denominada: “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos” dentro del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión

del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del IFE", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma y el cambio de denominación del fideicomiso a "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral.

- IV.** El 20 de marzo de 2015, en sesión ordinaria de Junta General Ejecutiva (Junta), se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE44/2015 la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral (INE).
- V.** El 28 de abril de 2017, en sesión extraordinaria de Junta, se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE72/2017 la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 INE.
- VI.** El 13 de junio de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE109/2017 y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, la Junta aprobó el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2017.
- VII.** El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que se establecieron diversas obligaciones para los órganos autónomos como el INE.
- VIII.** El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG595/2017, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, que refleja la reducción de 800 millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados al presupuesto originalmente solicitado por el INE.
- IX.** El 31 de enero de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG76/2018, mediante el cual se presentaron las obligaciones que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

- X. El 7 de mayo de 2018, se formalizó el Convenio Modificadorio del Contrato del Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE” (Fideicomiso).
- XI. El 15 de junio de 2018, en su Segunda Sesión Extraordinaria, el Comité Técnico Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral del Fideicomiso, autorizó modificar sus Reglas de Operación en los términos de su Anexo.

CONSIDERANDOS

- 1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos en términos de ley. El INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.
- 2. El artículo 31, párrafos 2 y 4 de la LGIPE señalan que el patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la propia Ley. Asimismo, que, el INE se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

3. El artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE refiere que el INE tiene su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 32 delegaciones, una en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, uno de los órganos centrales del INE es la Junta.
5. De conformidad con el artículo 47, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, la Junta será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del Órgano Interno de Control, podrá participar, con derecho a voz, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta.
6. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 1, incisos b), d) y o) del Reglamento Interior del INE (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; así como coordinar y supervisar la ejecución de los mismos; coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomienden la Legislación Electoral, el Consejo General, su Presidente y otras disposiciones aplicables.
7. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos f), l), r), s) y w) de la LGIPE y 41, párrafos 1 y 2, incisos b) y h) del RIINE, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del INE; y tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE, informando permanentemente al Presidente del Consejo General; proveer a los órganos del INE de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas presupuestales aprobadas; otorgar poderes a nombre del INE para actos de

dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al INE o para otorgar poderes para dichos efectos, el Secretario Ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General; asimismo, ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la Junta, así como establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta, la Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables.

8. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, incisos b), c), e), f) y x) del RIINE, otorgan entre otras, a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) las atribuciones de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el INE; atender las necesidades administrativas de los órganos del INE; así como establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de administración de personal, recursos materiales y servicios generales, recursos financieros y de organización del INE; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del INE, sometiéndolos a la aprobación de la Junta; proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del INE, organizar y dirigir la administración de los recursos materiales, financieros, así como la administración del personal del INE y las demás que le confiera la Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables.
9. De conformidad con el artículo 61, párrafos 1, incisos a) y b) y 2 de la LGIPE, en cada una de las Entidades Federativas, el INE contará con una delegación integrada, entre otras, por una junta local ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, así como por los Vocales Ejecutivos; y tendrán su sede en la Ciudad de México y en cada una de las capitales de los Estados.
10. Conforme al artículo 62, párrafo 1 de la LGIPE, las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los Vocales, de Organización Electoral, de Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario.

11. El artículo 63, párrafo 1, incisos b) y f) de la LGIPE establecen que las juntas locales ejecutivas tienen, dentro del ámbito de su competencia, las atribuciones de supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral; entre otros; así como llevar a cabo las funciones electorales que directamente le corresponden al INE en los Procesos Electorales Locales de acuerdo a la CPEUM y supervisar el ejercicio por parte de los OPL, de las facultades delegadas por parte del INE, en términos de la CPEUM y la LGIPE.
12. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e) y f) de la LGIPE, corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas áreas administrativas del INE que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y revisar las operaciones presupuestales que realice el INE se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias.
13. Con fundamento en el artículo 4º, cuarto párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dice: “Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones establecerán, de conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes mencionados. En todo caso, dichas instituciones deberán tramitar la inscripción de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta Ley, en el Registro Público de la Propiedad Federal.”
14. De conformidad con el artículo 14 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (Manual), en el supuesto de que el INE no cuente con los inmuebles necesarios para realizar las funciones que le fueron encomendadas o los esté arrendando, podrá adquirir en propiedad aquellos que le sean necesarios, siempre que existan razones suficientes que justifiquen plenamente la conveniencia financiera, operativa y legal de adquirirlos.

15. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 del Manual, se promoverá, en la medida que el presupuesto otorgado al INE lo permita, la sustitución paulatina del gasto por concepto de arrendamiento por el de inversión, con la finalidad de dotar al INE de una infraestructura inmobiliaria propia, acorde a las labores que por mandato constitucional le corresponden.
16. Es de señalar al respecto que el INE administra a través del Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria.
17. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados, debiendo cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos de sus programas, conforme a lo previsto en dicha Ley y las demás disposiciones generales aplicables.
18. En ese tenor, en observancia al Punto de Acuerdo Tercero del Acuerdo INE/JGE72/2017, es responsabilidad de la DEA conforme a la normatividad aplicable vigente, supervisar que las acciones se desarrollen de acuerdo con lo señalado en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del INE.
19. Al respecto, en el anexo del acuerdo referido en el numeral anterior se consideró la adquisición del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos con un costo programado de \$32'000,000.00.
20. La Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos ha ocupado el inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos (Inmueble) durante 13 años, en los cuales ha realizado mantenimiento menor por \$327,773.46, IVA incluido y por el que se paga un importe mensual de renta de \$161,192.38, IVA incluido.
21. Dicho inmueble cuenta con una superficie de terreno de 535 m² y de construcción de 2,165.72 m², consistente en edificación de 5 niveles y dos sótanos para estacionamiento con 24 cajones, con uso de suelo H2

Habitacional, con clasificación de la zona; mixta, habitacional, comercial, oficinas y de servicios; destacando con respecto de su estado de conservación actual que el inmueble se encuentra en perfectas condiciones de acuerdo a la edad de la edificación y conforme a los trabajos realizados por los copropietarios, acorde con las recomendaciones expresada en el Dictamen estructural posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017, emitido por el corresponsable en estructuras Ing. Fernando Rodríguez Ortega. En cuanto a las instalaciones eléctricas, el INE tiene planteado, una vez adquirido el inmueble, desarrollar un proyecto de modificación integral de la instalación eléctrica, a efecto de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas, Utilización”, resultado del Dictamen de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) denominada “C.I.E.N. CONSULTORES, S.C.”

- 22.** En ese orden de ideas como justificación para la posible adquisición de dicho inmueble se atiende a lo señalado en el artículo 25 del Manual, toda vez que:
- i)** Su ubicación corresponde al ámbito de la jurisdicción de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos;
 - ii)** Las vialidades cercanas al Inmueble cuentan con transporte público que facilita la llegada del personal del INE y de los usuarios de los servicios que proporciona, toda vez que se ubica en una región con vías de comunicación principales;
 - iii)** Cuenta con la dotación de los servicios públicos de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua potable y electrificación;
 - iv)** Entre otros usos de suelo, la zona donde se ubica considera usos comerciales y de servicios, con construcciones dominantes de edificios modernos para oficinas y habitacionales de hasta 5 niveles, con comercios y servicios en planta baja sobre las calles principales y en el entorno, casas habitación de buena calidad;
 - v)** Las dimensiones y distribución del Inmueble son adecuadas para desarrollar las actividades con seguridad, higiene y funcionalidad, toda vez que está construido para oficinas, ofrece los espacios necesarios para satisfacer las necesidades de la Junta Local Ejecutiva en Morelos;
 - vi)** Cumple con los criterios de superficies de ocupación, conforme al artículo 21 de Manual;

- vii)** La oportunidad para su adquisición, características y condiciones físicas, permite facilidades inmejorables para el INE, pues cuenta con espacio suficiente para satisfacer las necesidades de operatividad, imagen institucional, ubicación, iluminación y ventilación natural, áreas de estacionamiento, salones de usos múltiples, superficie que permite el buen desempeño de las actividades sustanciales de la Junta Local Ejecutiva, y
 - viii)** Se pretende lograr la sustitución paulatina del gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles, lo cual permitirá ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como contar con instalaciones propias accesibles, incluyentes, seguras y adecuadas para las labores de la Junta Local Ejecutiva.
- 23.** Asimismo, de conformidad con el artículo 28 del Manual, el Dictamen final de procedencia se someterá a la consideración del Secretario Ejecutivo, quien, de considerarlo procedente, autorizará presentar a la DEA las solicitudes de adquisición ante la Junta General, la cual aprobará o desechará dichas propuestas.
- 24.** En ese orden de ideas, el 11 de enero de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/CA/010/2017, el C.P. Ricardo I. Hernández Mata, Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Morelos, presentó ante la DEA, diversa documentación legal del inmueble de referencia, con la finalidad de obtener un Dictamen valuatorio a efecto de que el INE pudiera considerar la posibilidad de adquirir el inmueble que ocupan las oficinas de esa Junta Local Ejecutiva.
- 25.** El 4 de septiembre de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1094/2017, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de referencia, propuso a la DEA la adquisición del inmueble.

Mediante el cual exhibió ante la DEA copia del Dictamen valuatorio con número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (el "INDAABIN") relativo al inmueble del cual se solicita la adquisición.

- 26.** Con base en los considerandos previos y acorde con las políticas del INE en materia de adquisición inmobiliaria, para que se sustituya paulatinamente el gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles y, conforme al artículo 23 del Manual, se aceptó la solicitud para analizar la posible adquisición del inmueble.
- 27.** Mediante oficio INE/DEA/DRF/0415/2018 del 20 de febrero de 2018, la Dirección de Recursos Financieros comunicó que se cuenta con recursos suficientes para cubrir el monto para la adquisición del Inmueble conforme al avalúo realizado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00, que se cubrirían con recursos de la subcuenta correspondiente al Comité Técnico Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Lo anterior no incluye los pagos o erogaciones que se generen conforme a derecho, cuyo monto en su momento deberá calcularse y someterse ante el Comité Técnico del Fideicomiso antes referido.

Asimismo, la Dirección de Recursos Financieros informó que resultado de la revisión de la normatividad, Lineamientos y Estatutos del INE, se determinó que no tiene facultades para contratar deuda, por lo que su adquisición no puede realizarse mediante el financiamiento con garantía hipotecaria, arrendamiento financiero o proyecto de asociación público privada, por lo que se determina que la figura para adquirir el Inmueble referido sea a través de una compraventa.

- 28.** El 15 de marzo de 2018 la DEA emitió el "Dictamen preliminar de procedencia para la adquisición de inmueble en el Estado de Morelos por el Instituto Nacional Electoral", en el que se determinó viable la conveniencia financiera, operativa y legal de la posible adquisición en compraventa del Inmueble, requiriéndole a la Junta Local Ejecutiva en Morelos la propuesta de distribución de superficies del Inmueble, al igual que copias de toda la documentación legal, auténtica y actualizada emitida por la autoridad administrativa competente, con la correspondiente legitimación de los copropietarios.

29. Mediante los oficios número INE/JLE/MOR/VE/1236/2018, INE/JLE/MOR/CA/552/2018 e INE/JLE/MOR/VE/1824/2018 de 8 de mayo, 15 de junio y 4 de julio de 2018 respectivamente, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, remitió a la DEA, diversa información y documentos del inmueble, misma que fue enviada a la Dirección Jurídica para su validación, conforme a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Capítulo Tercero de la Adquisición de Bienes Inmuebles, artículo 26, primer párrafo del Manual.
30. La Dirección Jurídica, a través de los oficios números INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018 e INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018 de 23 de mayo y 25 de junio de 2018 respectivamente, signados por Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Contratos y Convenios, al igual que con oficio número INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 de 9 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, emitió opiniones con respecto a los diversos documentos turnados por la Junta Local Ejecutiva en Morelos, emitiendo mediante este último opinión favorable respecto a la situación jurídica del inmueble.
31. Conforme al Dictamen valuatorio número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del INDAABIN, el valor máximo de adquisición, con base al valor comercial del Inmueble asciende a la cantidad de \$28'131,861.00. En virtud del vencimiento de la vigencia del avalúo citado, se solicitó al INDAABIN la actualización del Dictamen valuatorio, obteniéndose éste con el número genérico G-15617-A-ZNC y número secuencial 03-18-513, con fecha de emisión 3 de septiembre de 2018, donde el valor máximo de adquisición con base al valor comercial del Inmueble, asciende a la cantidad de \$29'852,000.00.
32. Asimismo, en copia certificada del plano catastral y de la notificación del valor catastral de la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de fechas 21 y 27 de marzo de 2018 respectivamente, establecen el valor total del inmueble en \$4'762,275.00.

- 33.** En ese orden de ideas, por lo ofertado por los copropietarios y la oportunidad que se presenta para su adquisición, toda vez que el valor de compraventa del inmueble establecido por la promovente vendedor, es menor a la actualización del Dictamen valuatorio, donde se señaló que el valor comercial del inmueble asciende a la cantidad de \$29'852,000.00; en consecuencia la operación de compraventa, se efectuará conforme al valor del Dictamen valuatorio efectuado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00, existiendo una economía favorable al INE por la cantidad de \$1'720,139.00.
- 34.** Al respecto es de destacar que al efectuar la transacción directamente con los copropietarios sin la participación de intermediarios, ni el pago de comisiones o sobre costos para el INE, se procura un ahorro significativo.
- 35.** El 3 de octubre de 2018, la DEA emitió el Dictamen Final de Procedencia positivo para la adquisición del bien inmueble en el Estado de Morelos por el INE.
- 36.** El 4 de octubre de 2018, la DEA mediante el oficio INE/DEA/5998/2018 envió al Secretario Ejecutivo el Dictamen Final de Procedencia positivo relativo a la adquisición del bien inmueble con la finalidad de solicitar su autorización para presentar para aprobación de la Junta la solicitud de adquisición del inmueble de referencia.
- 37.** En esa misma fecha, el Secretario Ejecutivo en el mismo oficio INE/DEA/5998/2018 autorizó a la DEA, presentar para aprobación de la Junta la propuesta de adquisición de dicho inmueble.
- 38.** Ahora, una vez concluidas las gestiones y previo a la formalización del contrato de compra venta del inmueble referido, es necesario que el Consejo General otorgue la autorización correspondiente al Secretario Ejecutivo, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafo 1, inciso s), de la LGIPE.
- 39.** Por último, es de señalar que, el documento contractual se formalizará de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Manual. Asimismo, de todas estas operaciones la DEA presentará un informe a la Junta.

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta, emita el presente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de adquisición del bien inmueble, ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, código postal 62170 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos por un monto de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). Lo anterior no incluye los pagos o erogaciones que se generen conforme a derecho, cuyo monto en su momento deberá calcularse y someterse ante el Comité Técnico del Fideicomiso.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que por conducto de Dirección de Obras y Conservación y en coordinación con el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, lleven a cabo las gestiones necesarias para que el Secretario Ejecutivo formalice la adquisición del bien inmueble señalado en el Punto de Acuerdo anterior.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que prepare la documentación necesaria sobre la adquisición del inmueble antes mencionado y se presente, a consideración del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral en su próxima sesión, a efecto de contar con la autorización de los pagos correspondientes.

CUARTO.- La formalización del contrato de compraventa se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, de la “Adquisición de Bienes Inmuebles”, artículo 32 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral.

La incorporación al patrimonio del Instituto Nacional Electoral del inmueble cuya compraventa se autoriza, deberá realizarse conforme a la normatividad vigente.

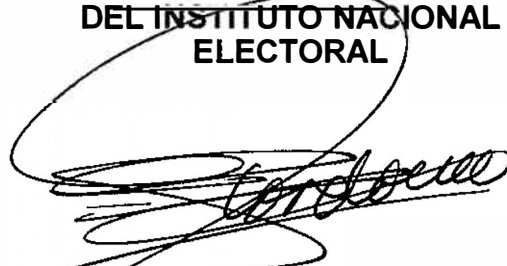
QUINTO.- El Director Ejecutivo de Administración informará oportunamente de todas las operaciones realizadas para el cumplimiento del presente Acuerdo, a la Junta General Ejecutiva.

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva.

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral.

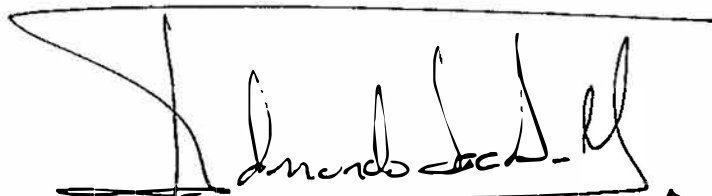
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 10 de octubre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**

DICTAMEN FINAL DE PROCEDENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE EN EL ESTADO DE MORELOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (el "Instituto"), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo primero y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (la "LGIPE"); 42, 43 y 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 14, 15, 16 y 27 del Capítulo Tercero del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo el "Manual de Administración"), está facultada para analizar las solicitudes de adquisición de inmuebles efectuadas por los Órganos Centrales y Delegacionales, al igual que emitir los dictámenes finales de procedencia de adquisición de inmuebles por parte del Instituto, a efecto de someterlos a consideración del Secretario Ejecutivo conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 11 de enero de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/CA/010/2017, el C.P. Ricardo I. Hernández Mata, Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Morelos, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración (la "DEA"), diversa documentación legal del inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, colonia La Pradera, código postal 62170 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de terreno de 535 metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción (en lo sucesivo el "Inmueble"), con la finalidad de obtener un dictamen valuatorio a efecto de que el Instituto pudiera considerar la posibilidad de adquirir el inmueble que ocupan las oficinas de esa Junta Local Ejecutiva.

2.- El 4 de septiembre de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1094/2017, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva arriba señalada, propuso a la DEA la adquisición del Inmueble, con una superficie de terreno de 535 metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción.

3.- Asimismo, mediante el oficio INE/JLE/MOR/VE/1094/2017 del 4 de septiembre de 2017, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas exhibió ante esta Dirección, copia del dictamen valuatorio con número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (el "INDAABIN") relativo al inmueble del cual se solicita la adquisición.

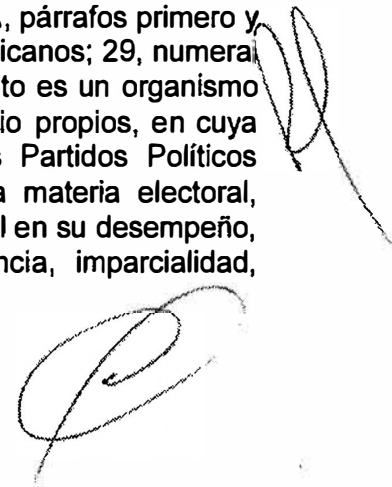
4.- El 15 de marzo de 2018 la DEA emitió el "Dictamen preliminar de procedencia para la adquisición de inmueble en el Estado de Morelos por el Instituto Nacional Electoral", en el que se determinó viable la conveniencia financiera, operativa y legal de la posible adquisición en compraventa del Inmueble, requiriéndole a la Junta Local Ejecutiva en Morelos la propuesta de distribución de superficies del Inmueble, al igual que copias de toda la documentación legal, autentica y actualizada emitida por la autoridad administrativa competente, con la correspondiente legitimación de los copropietarios.

5.- Mediante los oficios número INE/JLE/MOR/VE/1236/2018, INE/JLE/MOR/CA/552/2018 e INE/JLE/MOR/VE/1824/2018 de 8 de mayo, 15 de junio y 4 de julio de 2018 respectivamente, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, remitió a la DEA, diversa información y documentos del Inmueble, misma que fue enviada a la Dirección Jurídica para su validación, conforme a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Capítulo Tercero de la Adquisición de Bienes Inmuebles, artículo 26, primer párrafo del Manual de Administración.

6.- La Dirección Jurídica del Instituto, a través de los oficios números INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018 e INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018 de fechas 23 de mayo y 25 de junio de 2018 respectivamente, signados por Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Contratos y Convenios, al igual que con oficio número INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 de fecha 9 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, emitió opiniones con respecto a los diversos documentos turnados por la Junta Local Ejecutiva en Morelos.

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con los artículos 41, base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1, 30, numeral 2 y 31, numerales 1 y 2, de la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los Ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.



II.- Que el artículo 31, numeral 2 de la LGIPE, determina que su patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la citada ley.

III.- Que de conformidad con el artículo 59, numeral 1, incisos a), b), d) y h) de la LGIPE, son atribuciones de la DEA, aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales del Instituto; establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales y atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto.

IV.- Que en el artículo 4, párrafo cuarto de la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones establecerán de conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes mencionados.

V.- Que mediante acuerdo INE/JGE109/2017 del 13 de junio de 2017 y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, la Junta General Ejecutiva del Instituto, aprobó el Manual de Administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2017.

VI.- Que en el Manual de Administración, en su Capítulo Tercero, de la "Adquisición de Bienes Inmuebles", artículos 14 y 15, se establece que el Instituto podrá adquirir en propiedad los inmuebles necesarios para realizar las funciones encomendadas al mismo y que promoverá, en la medida que su presupuesto lo permita, la sustitución paulatina del gasto de arrendamiento por el de inversión, con la finalidad de dotar al Instituto de una infraestructura inmobiliaria propia.

VII.- Que el 26 de abril de 2011, se aprobó en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, el acuerdo JGE 43/2011, por el que se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, instruyendo a la DEA contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un fideicomiso mediante el cual se administrará dicho programa.

VIII.- Que el 20 de junio de 2011, se suscribió el contrato de fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, como institución fiduciaria.

IX.- Que el pasado 10 de abril de 2013, en sesión extraordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobó el acuerdo JGE52/2013, con el que se modificó el acuerdo JGE43/2011 por el que se decretó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, para integrar un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos de atención ciudadana y, agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración del mismo.

X.- Que el 20 de marzo de 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto, se aprobó el acuerdo INE/JGE44/2015 mediante el cual se modificó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, para quedar como el "Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral".

XI.- Que mediante el acuerdo INE/CG76/2018, aprobado en sesión ordinaria del 31 de enero de 2018 del Consejo General del Instituto, se establecieron las obligaciones y medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, instaurando entre otras medidas, en su Segundo Acuerdo, que procederá la adquisición de inmuebles en los casos establecidos en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto.

XII.- Que en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 28 de abril de 2017, mediante acuerdo INE/JGE72/2017, se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el "Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral", en el que se incorporó y se autorizó la adquisición del Inmueble.

XIII.- Que el fideicomiso referido en el Considerandos VII y VIII de los presentes considerandos, es uno de los medios a través del cual el Instituto administra el programa de infraestructura inmobiliaria y cuyo patrimonio se integró inicialmente con los recursos presupuestarios del ejercicio 2011.

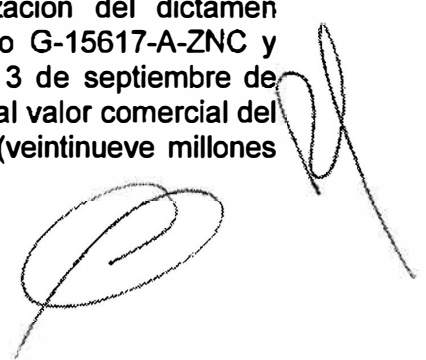
XIV.- Que con el propósito de contar con un bien propio en el Estado de Morelos, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, realizó la propuesta para la adquisición del Inmueble que ocupan sus oficinas.

XV.- Que para efecto de realizar el análisis final de procedencia para adquirir el Inmueble, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos proporcionó a la DEA, la información y documentos siguientes:

1. **Domicilio:** Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.
2. **Superficie de terreno:** 535 m2 (quinientos treinta y cinco metros cuadrados) en un polígono regular, con las siguientes medidas y colindancias:

ORIENTACIÓN	DISTANCIA	COLINDANCIAS
AL NORTE	18.52 m	Con Avenida Manuel Ávila Camacho
AL SUR	18.52 m	Con propiedad particular
AL ORIENTE	30.00 m	Con propiedad particular
AL PONIENTE	28.72 m	Con propiedad particular

3. **Superficie de construcción:** 2,165.72 m2 (dos mil ciento sesenta y cinco punto setenta y dos metros cuadrados), consistente en edificación de 5 niveles y dos sótanos para estacionamiento.
4. **Número de cajones de estacionamiento:** 24 (veinticuatro) cajones de estacionamiento en 2 (dos) niveles, con rampas de acceso y circulación.
5. **Valor de avalúo del Inmueble:** Conforme al dictamen valuatorio número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del INDAABIN, el valor máximo de adquisición, con base al valor comercial del Inmueble asciende a la cantidad de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) En virtud del vencimiento de la vigencia del avalúo citado, se solicitó al INDAABIN la actualización del dictamen valuatorio, obteniéndose éste con el número genérico G-15617-A-ZNC y número secuencial 03-18-513, con fecha de emisión 3 de septiembre de 2018, donde el valor máximo de adquisición con base al valor comercial del Inmueble, asciende a la cantidad de \$29'852,000.00 (veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).



6. **Valor catastral del Inmueble:** En copia certificada del plano catastral y de la notificación del valor catastral de la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de fechas 21 y 27 de marzo de 2018 respectivamente, establecen el valor total del Inmueble en \$4'762,275.00 (cuatro millones setecientos sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
7. **Uso de suelo:** H2 Habitacional, con clasificación de la zona; mixta, habitacional, comercial, oficinas y de servicios.
8. **Antigüedad del Inmueble:** Más de 13 años, según consta en la solicitud de ampliación de la licencia de construcción número 5711, recibo número 1398865 de fecha 4 de abril de 2005 del Municipio de Cuernavaca, Morelos. El Inmueble lo viene ocupando la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos desde su construcción.
9. **Estudio de superficies:** En términos de lo previsto en el artículo 21 del Manual de Administración, la Junta Local necesita 2,215 metros cuadrados:

RESUMEN 2017			JLE - MORELOS	
PERSONAL				
JUNTA LOCAL EJECUTIVA	TOTAL	SINOPE	SUPERFICIE MÍNIMA	ÁREA MÍNIMA
DIRECTOR EJECUTIVO			60	0
DIRECTOR DE ÁREA	1		40	40
SECRETARIO PARTICULAR			25	0
SUBDIRECTORES	4		25	100
HOMÓLOGOS	1		25	25
JEFES DE DEPARTAMENTO	4		12	48
HOMÓLOGOS	3		12	36
PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	47	34	5	405
HONORARIOS SUBDIRECTOR			25	0
HOMÓLOGOS			25	0
HONORARIOS JEFE DE DEPTO			12	0
HOMÓLOGOS	1		12	12
HONORARIOS TÉCNICO OPERATIVO			5	0
TOTAL	61	34		
ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA RECURSOS HUMANOS:			666	m2
Superficies de uso común (+44%); Vestibulos, corredores, baños comunes, cuartos de máquina y aseo, etc. *			959	m2

ÁREAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL	SUPERFICIE	EXISTENTE
Vestibulo acceso	1		5
Oficialia de partes	1		29
Bodega de materiales de oficina	1		20
Archivo de trámite	1		33
Lactario	1		12
Sala de Sesiones	1		90
Sala de usos múltiples	1		55
Área de fotocopiado	1		12
Comedor	1		35
Estacionamiento, lugares	24		775
Vigilancia	1		3
Cisterna			5
Aseo	1		19
PREP	1		9
Fiscalización	1		51
CEVEEM y sistemas	1		65
Sala de prensa	1		12
Sala de Consejeros	1		26
SUPERFICIE COMPLEMENTARIA EXISTENTE			1,256 m2
TOTAL SUPERFICIE REQUERIDA			2,215 m2

* FUENTE: Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral,

10. Estado de conservación actual: El Inmueble se encuentra en perfectas condiciones de acuerdo a la edad de la edificación y conforme a los trabajos realizados por los copropietarios, acorde con las recomendaciones expresada en el dictamen estructural posterior al sismo del día 19 de septiembre de 2017, emitido por el corresponsable en estructuras Ing. Fernando Rodríguez Ortega. En cuanto a las instalaciones eléctricas, el Instituto tiene planteado, una vez adquirido el Inmueble, desarrollar un proyecto de modificación integral de la instalación eléctrica, a efecto de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones Eléctricas, Utilización", resultado del dictamen de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) denominada "C.I.E.N. CONSULTORES, S.C."

11. Nombre de los copropietarios: Rosa María Poblador Pérez, Rafael Partida Poblador, Juan Carlos Partida Poblador y Edgar Jorge Alberto Partida Poblador.

Toda vez que el Inmueble objeto del presente dictamen lo viene ocupando actualmente la mencionada Junta Local Ejecutiva, se incluyen los siguientes datos:

12. Importe mensual de renta: \$161,192.38 (ciento sesenta y un mil ciento noventa y dos pesos 38/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

13. Adecuaciones, mejoras y equipos instalados por el Instituto: En trece años de ocupación del Inmueble, el Instituto ha efectuado mantenimiento menor por \$327,773.46 (trescientos veintisiete mil setecientos setenta y tres pesos 46/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

14. Años de ocupación: El Instituto ha ocupado el Inmueble durante 13 años.

15. Justificación para la posible adquisición: A efecto de atender lo señalado en el artículo 25 del Manual de Administración, se advierte que el Instituto ha ocupado durante más de trece años el Inmueble objeto del presente, toda vez que:

- i. Su ubicación corresponde al ámbito de la jurisdicción de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos;
- ii. Las vialidades cercanas al Inmueble cuentan con transporte público que facilita la llegada del personal del Instituto y de los usuarios de los servicios que proporciona, toda vez que se ubica en una región con vías de comunicación principales;
- iii. Cuenta con la dotación de los servicios públicos de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua potable y electrificación;
- iv. Entre otros usos de suelo, la zona donde se ubica considera usos comerciales y de servicios, con construcciones dominantes de edificios modernos para oficinas y habitacionales de hasta 5 niveles, con comercios y servicios en planta baja sobre las calles principales y en el entorno, casas habitación de buena calidad;
- v. Las dimensiones y distribución del Inmueble son adecuadas para desarrollar las actividades con seguridad, higiene y funcionalidad, toda vez que está construido para oficinas, ofrece los espacios necesarios para satisfacer las necesidades de la Junta Local Ejecutiva en Morelos;
- vi. Cumple con los criterios de superficies de ocupación, conforme al artículo 21 de Manual de Administración;
- vii. La oportunidad para su adquisición, características y condiciones físicas, permite facilidades inmejorables para el Instituto, pues cuenta con espacio suficiente para satisfacer las necesidades de operatividad, imagen institucional, ubicación, iluminación y ventilación natural, áreas de estacionamiento, salones de usos múltiples, superficie que permite el buen desempeño de las actividades sustanciales de la Junta Local Ejecutiva; y
- viii. Por último, se pretende lograr la sustitución paulatina del gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles, lo cual permitirá ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como contar con instalaciones

propias accesibles, incluyentes, seguras y adecuadas para las labores de la Junta Local Ejecutiva.

16. Servicios Municipales: Servicios públicos de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua potable y electrificación.

17. Densidad de Construcciones: Construido al cien por ciento en su acera.

18. Población: 320 Hab/ha

19. Situación legal del Inmueble: Conforme al artículo 24 del Manual de Administración a continuación, se describe el listado de documentos que la Junta Local Ejecutiva en Morelos requirió a los copropietarios o a su representante legal, relativos al Inmueble:

- i. Copia certificada de la escritura pública número 29,583 de fecha 25 de enero de 2018 ante la fe del Lic. José Eduardo Menéndez Serrano, Notario Público titular de la Notaría Número Siete de la primera demarcación notarial del Estado de Morelos, con la cual se acredita la protocolización parcial de inventarios y avalúos y la adjudicación parcial hereditaria de la sucesión testamentaria a bienes del señor Rafael Partida Rivera, a favor de la señora Rosa María Poblador Pérez;
- ii. Copia certificada de la escritura pública número 29,934 de fecha 17 de abril de 2018 ante la fe del Lic. José Eduardo Menéndez Serrano, Notario Público titular de la Notaría Número Siete de la primera demarcación notarial del Estado de Morelos, con la cual se acredita la protocolización del oficio número F-06-016-2018, expediente 14294-002, a fin de formalizar la fusión de los inmuebles con claves catastrales número 1100-06-001-003 y 1100-06-001-071 inscritas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos bajo los folios 81634-1 y 81640-1, quedando constituidos en una sola unidad topográfica identificada catastralmente con la cuenta número 1100-06-001-003 y nuevo folio electrónico inmobiliario 691151-1;
- iii. Copia certificada del Certificado de Libertad de Gravámenes con folio real 81634-1, expedida el 27 de abril de 2018 por el Lic. Carlos Andrés Montes Tello, Director General de la Dirección de Certificaciones del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos;

- iv. Copia certificada del Certificado de Libertad de Gravámenes con folio real 81640-1, expedida el 27 de abril de 2018 por el Lic. Carlos Andrés Montes Tello, Director General de la Dirección de Certificaciones del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos;
- v. Copia certificada del Certificado de no adeudo del impuesto predial con folio 154206, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;
- vi. Copia certificada del Certificado de no adeudo del impuesto predial con folio 154204, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;
- vii. Copia certificada del Certificado de no adeudo de servicios municipales con folio 154207, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;
- viii. Copia certificada del Certificado de no adeudo de servicios municipales con folio 154205, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;
- ix. Copia certificada de Constancia de no adeudo por el suministro de agua con folio 1582, expedida el 13 de marzo de 2018 por el Lic. David Alejandro Torres Salgado, Encargado de Despacho de la Dirección Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos;
- x. Copia certificada del oficio número SSB/ASC/ZC/0089-2018 del 8 de mayo de 2018 de la Lic. Grethel P. Nájera Flores, Jefa de Oficina de Atención y Servicio a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Cuernavaca, Morelos, en el

que se advierte que el Inmueble no presenta adeudos por suministro de energía eléctrica;

- xi. Copia certificada del oficio número SDS/DGPL/DMFCyCU/2165/01/18 de fecha 30 de enero de 2018, signado por los C. Cinthia Evangelista Santiago, Directora General de Permisos y Licencias y Javier Ríos Enríquez, Director Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Delegación Benito Juárez, Morelos, concerniente a la Licencia de Uso de Suelo del Inmueble, con el que se notificó la resolución procedente de fusión de los dos predios que constituyen el Inmueble con un total de 535 metros cuadrados de terreno y, se señala que la clasificación de la zona donde se localiza es en un Corredor Urbano de Uso Mixto CUA, con entorno Habitacional H2 y densidad neta de 320 Hab/Ha, donde el uso para servicios de administración pública y privada es permitido;
- xii. Copia simple de la identificación oficial vigente de los copropietarios del Inmueble;
- xiii. En su caso, poder notarial e identificación oficial vigente del representante o apoderado legal de los propietarios; y
- xiv. Copia de plano del predio con las medidas y colindancias. Planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, dictamen estructural, dictamen de instalaciones eléctricas realizada por una UVIE, licencia de construcción regularizada, al igual que un reporte fotográfico en el que se observe la situación actual del "Inmueble".

20. Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal: Respecto al artículo 18 del Manual de Administración, esta Dirección consultó la información actualizada de los meses de septiembre de 2017 y agosto de 2018 del Sistema de "Inmuebles de Propiedad Federal con Superficies Disponibles" e "Inmuebles Federales Compartidos con Superficies Disponibles", constatando la no existencia de inmuebles disponibles parcial o totalmente, que fueran adecuados o convenientes a las necesidades de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos.

21. "Dictamen preliminar de procedencia para la adquisición del Inmueble en el Estado de Morelos", mismo que se basó en la siguiente documentación:

- i. **Aceptación de la solicitud para análisis:** Con base en los considerandos previos y acorde con las políticas del Instituto en materia de adquisición inmobiliaria, para que se sustituya paulatinamente el gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles y, conforme al artículo 23 del Manual de Administración, **se aceptó la solicitud** para analizar la posible adquisición del Inmueble;
- ii. **Procedencia financiera:** En oficio INE/DEA/DRF/0415/2018 del 20 de febrero de 2018, la Dirección de Recursos Financieros comunicó que se cuenta con recursos suficientes para cubrir el monto para la adquisición del Inmueble conforme al avalúo realizado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) que se cubrirían con recursos del fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Lo anterior no incluye el pago de impuestos, derechos y honorarios que se generen para la transmisión de la propiedad y el dominio, cuyo monto en su momento deberá calcularse y someterse ante el Comité Técnico del Fideicomiso; y
- iii. **Procedimiento de adquisición propuesto:** Asimismo, la Dirección de Recursos Financieros en oficio INE/DEA/DRF/0415/2018 del 20 de febrero de 2018, informó que resultado de la revisión de la normatividad, lineamientos y estatutos del Instituto, se determinó que no tiene facultades para contratar deuda, por lo que su adquisición no puede realizarse mediante el financiamiento con garantía hipotecaria, arrendamiento financiero o proyecto de asociación público privada, por lo que se determina que la figura para adquirir el Inmueble referido sea a través de una **compraventa**.

22. Opinión Jurídica: La Dirección Jurídica del Instituto, en oficio INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 del 9 de agosto de 2018, emitió opinión favorable respecto a la situación jurídica del Inmueble.

XVI. Con sustento en la información y documentación descrita y por la necesidad de sustituir paulatinamente el gasto de arrendamiento por inversiones para dotar al Instituto de Infraestructura propia que sea acorde a sus actividades, al igual que con la política de adquisición inmobiliaria establecida por el Instituto en su Programa de Infraestructura Inmobiliaria y demás justificantes expuestas en el Dictamen

Preliminar y en el cuerpo del presente, se procede a analizar la posible compraventa del Inmueble propuesto, como a continuación se expone:

1. El Inmueble lo viene ocupando desde hace trece años las oficinas sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos y hasta la fecha, sus dimensiones y distribución han satisfecho las necesidades de espacio para su estructura ocupacional;
2. El Inmueble cumple con la normatividad vigente en materia de construcción, medio ambiente, uso de suelo y protección civil;
3. Por lo ofertado por los copropietarios y la oportunidad que se presenta para su adquisición, toda vez que el valor de compraventa del Inmueble establecido por los promitentes vendedores, es menor a la actualización del dictamen valuatorio, donde se señaló que el valor comercial del Inmueble asciende a la cantidad de \$29'852,000.00 (veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.); en consecuencia la operación de compraventa, se efectuará conforme al valor del dictamen valuatorio efectuado por el INDAABIN, por la cantidad de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) por lo que existe una economía favorable al Instituto por la cantidad de \$1'720,139.00 (un millón setecientos veinte mil ciento treinta nueve pesos 00/100 M.N.);
4. Al efectuar la transacción directamente con los copropietarios sin la participación de intermediarios, ni el pago de comisiones o sobre costos para el Instituto, procura cierto ahorro;
5. Se cuenta con los recursos suficientes para la adquisición del Inmueble, mediante el pago del valor de la compraventa, de los impuestos, derechos y honorarios que se generen por la transmisión de la propiedad del Inmueble referido.
6. Tomando en consideración los elementos económicos para la compraventa y transacción directa con los copropietarios, se observan las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que establece el Decreto de Presupuestos de Egresos y el Acuerdo del Consejo General que aprueba el presupuesto.

7. Conforme las disposiciones aplicables y por las razones que demuestran la conveniencia financiera, operativa y legal, se justifica la procedencia para adquirir en propiedad por parte del Instituto al Inmueble.

Asimismo, es pertinente señalar que corre a cargo del titular del órgano delegacional en el Estado, el cotejar todas y cada una de las copias que fueron presentadas contra los documentos originales o copias certificadas expedidas por las autoridades competentes y la actualización de las mismas en su caso, así como resguardar la mencionada documentación y cerciorarse del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de construcción, medio ambiente, uso de suelo, protección civil y demás aplicables en el ámbito local, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 y 26, último párrafo del Manual.

En este tenor, para procurar certeza al Instituto para efectos legales, fiscales y administrativos, se agrega al presente dictamen la constancia de número oficial del predio con clave catastral 1100-06-001-003, al cual le corresponde actualmente el número 507 de la Avenida Manuel Ávila Camacho (antes s/n, 506, 507-A y 509) Colonia Carolina (antes La Pradera) Delegación Benito Juárez García del día 28 de abril de 2018 resultante de la fusión de los inmuebles.

En caso de incumplimiento en la presentación de lo anterior u omisión de cualquier otro requisito, la DEA, en el ámbito de sus atribuciones y previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, adoptarán las medidas que estimen conveniente para salvaguardar el interés patrimonial del Instituto.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

DETERMINA

Primero.- De conformidad con los Antecedentes y Consideraciones señalados, se considera procedente la adquisición en compraventa directa del inmueble ubicado en avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de terreno de 535 metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción.

Segundo.- En términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Manual de Administración, sométase a la consideración del Secretario Ejecutivo del Instituto, para que en su caso, autorice la presentación ante la Junta General Ejecutiva, a efecto de que apruebe o deseche la propuesta de adquisición del Inmueble referido en la Determinación Primera del presente Dictamen Final.

Tercero.- Infórmese de este dictamen al Consejero Presidente, al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, al Presidente del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" del fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y al "Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral", para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

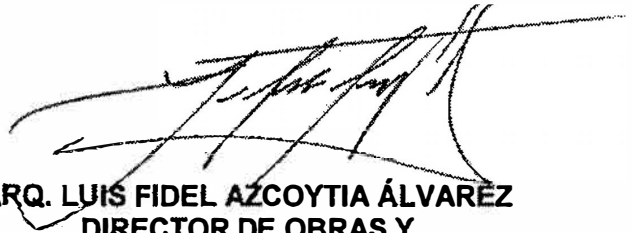
Así lo dictaminó la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, el tres de octubre de 2018, en la Ciudad de México. - Conste. -

ELABORÓ



**ARQ. JORGE RAFAEL GARZÓN
CORONA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
INMOBILIARIA**

REVISÓ



**ARQ. LUIS FIDEL AZCOYTIA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN**

EMITE



**LIC. BOGART C. MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN**

La presente foja forma parte del dictamen final de procedencia para la adquisición del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos.



"Porque mi país me importa"

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN**

OFICIO N° INE/DEA/ 5 9 9 8 /2018

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2018

**LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

Con fundamento en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE109/2017, por el que se aprueba el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, Capítulo Tercero, "De la Adquisición de Bienes Inmuebles", Sección 14, Autorización Presentación, Artículo 28, me permito someter a su consideración el dictamen final de procedencia positivo, suscrito por esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, relativo a la adquisición del bien inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 62170, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, con la finalidad de que nos sea autorizado presentar a aprobación de la Junta General Ejecutiva la solicitud de adquisición de dicho inmueble.

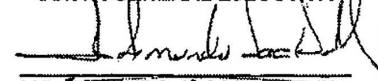
Asimismo, de conformidad con el Capítulo Tercero, De la Adquisición de Bienes inmuebles, Sección 12, Justificación Unidad Responsable, artículos 26 y 27, del Manual antes mencionado, adjunto al dictamen final la propuesta de adquisición del inmueble y validación de la documentación realizada por la Dirección Jurídica, a través de los oficios número y el INE/JLE/MOR/VE/1094/2017 del 4 de septiembre del 2017, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas; INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018 e INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018 de fechas 23 de mayo y 25 de junio de 2018 respectivamente, signados por Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Contratos y Convenios, así como el oficio número INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 de fecha 9 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

SOMETE A CONSIDERACIÓN


**LIC. BOGART MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO**

**AUTORIZA PRESENTAR ANTE LA
JUNTA GENERAL EJECUTIVA**


**LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

C.E.P. - Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. - Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Morelos. - Presente
Arg. Luis Fidel Azcoytle Álvarez. - Director de Obras y Conservación del Instituto Nacional Electoral - Presente
Mtro. Marco Vinicio Gailardo Enriquez. - Coordinador de Enlace Institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración. - Presente
Arg. Jorge Rafael Garzón Corona. - Subdirector de Administración Inmobiliaria. - Presente

LFAAURGC/DEA/CAMP



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



20001

**MORELOS
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
VOCAL EJECUTIVO**

Oficio Número INE/JLE/MOR/VE/1094/2017
Cuernavaca, Morelos, 4 de septiembre de 2017
Asunto: Formalización de solicitud para la adquisición de inmueble



**LIC. BOGART C. MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 22 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (Manual), relativo a las solicitudes para adquisición de Inmuebles por parte del Instituto, con el objetivo de promover la sustitución paulatina del gasto por concepto de arrendamiento por el de inversión en el estado de Morelos, y a fin de contribuir con acciones que tengan como meta el dotar al Instituto de una infraestructura inmobiliaria propia, me permito informarle que esta Junta Local Ejecutiva (JLE) ha llevado a cabo los trámites y gestiones administrativas, encaminadas a concretar la adquisición por parte del Instituto del inmueble que ocupan las oficinas de la Junta Local, las cuales informo a continuación.

Mediante Oficio número INE/JLE/MOR/CA/10/2017 de fecha 11 de enero de 2017, ésta JLE solicitó a la otrora Subdirección de Administración Inmobiliaria de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, apoyo a fin de obtener un avalúo previo del inmueble que se pretende adquirir y, que lo efectúe el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Con escrito de fecha 15 de mayo de 2017, la representante de los copropietarios del inmueble formalizaron su oferta de venta en \$29'500,000.00 (veintinueve millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Derivado de lo anterior, en fecha 7 de agosto de 2017 el INDAABIN emitió el Dictamen Valuatorio de números; Secuencial 03-17-2033 y Genérico G-15617-ZNC del inmueble ubicado en Av. Manuel Ávila Camacho # 507, Col. La Pradera, C.P. 62170, Cuernavaca, Morelos.

Una vez que se contó con dicho documento, la JLE mediante Oficio número INE/JLE/MOR/VE/0955/2017 del 10 de agosto de 2017, remitió al Arquitecto Rafael Partida Poblador y copropietarios del citado inmueble, copia simple del documento referido en el párrafo que antecede, en el cual se estableció un monto de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), a efecto de avanzar en las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el precio de operación de lo que sería un contrato de compraventa del inmueble, respetando la cifra determinada en el avalúo. En este sentido, se solicitó que, en caso de que fuese su voluntad, se confirmara la aceptación de la propuesta, para avanzar con los trámites correspondientes.

Finalmente, mediante escrito de fecha de fecha 16 de agosto de 2017, la C. Rosa María Poblador Pérez y copropietarios, aceptaron formalizar la venta del inmueble en cita, por la cantidad de \$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). Aunado a ello manifestaron que "Para concluir dicho movimiento, los copropietarios requerimos de un tiempo de 3 meses a partir de esta fecha para realizar el trámite de adjudicación testamentaria que tenemos pendiente de uno de los copropietarios del inmueble, sin embargo aceptamos que el contrato de 'Promesa de compra-venta' se realice lo más pronto posible para permitirles realizar cualquier modificación que ustedes dispongan en el inmueble".



MORELOS
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
VOCAL EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En este sentido, y a fin de continuar con el trámite respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, enlisto los siguientes datos:

I.-	Domicilio:	Av. Manuel Ávila Camacho # 507, Col. La Pradera, C.P. 62170 Cuernavaca, Morelos.
II.-	Terreno:	535 m2
III.-	Construcción:	2,165.72 m2
IV.-	Valor comercial:	\$28'131,861.00 (Avalúo del INDAABIN)
V.-	Antigüedad del Inmueble:	12 años
VI.-	Estacionamiento:	24 cajones
VII.-	Estudio superficies:	2,215 m2 (Ver Anexo 1)

Toda vez que estamos en el supuesto de un inmueble ocupado por el Instituto, se incluyen los siguientes datos:

VIII.-	Importe mensual de renta:	\$161,192.38 con I.V.A.
IX.-	Mejoras efectuadas y equipos instalados por el INE: \$327,773.46 con I.V.A. en 12 años de arrendamiento (mantenimiento menor).	
X.-	Ocupado por el INE:	12 años

Finalmente, la justificación para que se lleve a cabo la compra del inmueble que ocupan las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, se vincula con la política de adquisición y construcción de inmuebles, lo cual permitirá ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como contar con instalaciones propias accesibles, incluyentes, seguras y adecuadas para las labores de la Junta Local Ejecutiva, así como confortables para el personal y sus usuarios, lo que representa una conveniencia financiera y operativa para el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior también permitirá que en las instalaciones de la JLE, se maneje un concepto de imagen Institucional. Se cuenta con una plantilla de personal permanente de 61 personas, además de 34 personas con el carácter de Personal Técnico Operativo, pero pertenecen al Sistema de Nómina de Proceso Electoral, Servicio Social y Prácticas Profesionales. De este universo de 34 personas, se estima un aproximado de personal eventual que llega en Proceso Electoral, y 6 personas que se contemplan en las áreas donde llegan prestadores de servicio social o prácticas profesionales. Si bien es cierto no se trata de personal permanente, se requiere el espacio necesario para que pueda desarrollar sus actividades cuando si se encuentre operando. El inmueble ofrece los espacios necesarios para satisfacer la totalidad de las necesidades de la JLE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL VOCAL EJECUTIVO

LIC. PABLO SERGIO AISPURO CÁRDENAS



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA

C.C.P. Arq. Luis Fidel Azcoyita Álvarez.- Director de Obras y Conservación.- Para su conocimiento en copia electrónica.
C.C.P. Arq. Rubén Camacho Flores.- Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación.- Para su conocimiento en copia electrónica.

**INFORMACIÓN DEL INMUEBLE PROPUESTO PARA SU ADQUISICIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)**

(Manual de Administración Inmobiliaria del INE, Artículo 22)

PROMOVENTE: **JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS**
(Agosto 2017)

I.-	Domicilio:	Av. Manuel Ávila Camacho # 507, Col. La Pradera, C.P. 62170 Cuernavaca, Morelos.			
II.-	Terreno:	535 m2			
III.-	Construcción:	2,165.72 m2			
IV.-	Valor comercial:	\$28'131,861.00	(Avalúo del Indaabin)		
V.-	Antigüedad del Inmueble:	12 años			
VI.-	Estacionamiento:	24 cajones			
VII.-	Estudio superficies:	2,215 m2	(Ver Anexo 1)		
VIII.-	Importe mensual de renta:	\$161,192.38 con I.V.A.			
IX.-	Mejoras efectuadas y equipos instalados por el INE:				
	FECHA	CONCEPTO	ROVEDC	FACTURA	IMPORTE
	GRAN TOTAL \$327,773.46				
X.-	Ocupado por el INE:	12 años			
<p>JUSTIFICACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN:</p> <p>La justificación para que se lleve a cabo la compra del inmueble que ocupan las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, se vincula con la política de adquisición y construcción de inmuebles, lo cual permitirá ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como contar con instalaciones propias accesibles, incluyentes, seguras y adecuadas para las labores de la Junta Local Ejecutiva, así como confortables para el personal y sus usuarios, lo que representa una conveniencia financiera y operativa para el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior también permitirá que en las instalaciones de la JLE, se maneje un concepto de imagen institucional. Se cuenta con una plantilla de personal permanente de 61 personas, además de 34 personas con el carácter de Personal Técnico Operativo, pero pertenecen al Sistema de Nómina de Proceso Electoral, Servicio Social y Prácticas Profesionales. De este universo de 34 personas, se estima un aproximado de personal eventual que llega en Proceso Electoral, y 6 personas que se montemplan en las áreas donde llegan prestadores de servicio social o prácticas profesionales. Si bien es cierto no se trata de personal permanente, se requiere el espacio necesario para que puedan desarrollar sus actividades cuando sí se encuentre operando. El inmueble ofrece los espacios necesarios para satisfacer la totalidad de las necesidades de la JLE.</p>					



RESUMEN 2017

JLE - MORELOS

PERSONAL				
JUNTA LOCAL EJECUTIVA	TOTAL	SINOPLE/S.S./P.P.	SUPERFICIE MÍNIMA	ÁREA MÍNIMA
DIRECTOR EJECUTIVO			60	0
DIRECTOR DE ÁREA	1		40	40
SECRETARIO PARTICULAR			25	0
SUBDIRECTORES	4		25	100
HOMÓLOGOS	1		28	25
JEFES DE DEPARTAMENTO	4		12	48
HOMÓLOGOS	3		12	36
PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	47	34	5	405
HONORARIOS SUBDIRECTOR			25	0
HOMÓLOGOS			25	0
HONORARIOS JEFE DE DEPTO			12	0
HOMÓLOGOS	1		12	12
HONORARIOS TÉCNICO OPERATIVO			5	0
TOTAL	61	34		666

ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA RECURSOS HUMANOS:

666 m2

Con superficies de uso común (44%): Vestibulos, corredores, baños comunes, cuartos de máquina y aseo, etc.*

959 m2

ÁREAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL	EXISTENTE
Vestibulo acceso	1	5
Oficina de partes	1	29
Bodega de materiales de oficina	1	20
Archivo de trámite	1	33
Lectorio	1	12
Sala de Sesiones	1	90
Sala de usos múltiples	1	55
Área de fotocopiado	1	12
Comedor	1	35
Estacionamiento	2	776
Vigilancia	1	3
Cuarto de máquinas	0	
Subestación	0	
Tableros eléctricos	0	
Planta de emergencia	0	
Cisterna		5
Archivo de aseo	1	16
PREP	1	9
Fiscalización	1	51
CEVEEM y sistemas	1	65
Sala de prensa	1	12
Sala de Consejeros	1	26

SUPERFICIE COMPLEMENTARIA EXISTENTE 1.256 m2

SUPERFICIE REQUERIDA 2.215 m2

* FUENTE: Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, artículo 21.

ÁREA	OCUPADA	NO OCUPADA
------	---------	------------

Nº	NOMBRE	PLAZA	DIV	EQUIVALENTE
1	AGUIRRE ROSA VENTURA	SECRETARÍA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
2	ALPICHIO CARRILLO PABLO ELISIO	VOCAL EJECUTIVO DE JUNTA LOCAL		C.R.A.P.
3	ARREOLA HERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER	SUPERVISOR DE MONITOREO		OPERATIVO P.P.
4	ARCE JACQUELINE MARÍA MARGARITA	SECRETARÍA DE VOCALÍA EJECUTIVA LOCAL		OPERATIVO P.P.
5	BARON RAMÍREZ JOSE DE JESÚS	JEFE DE MONITOREO A MÓDULOS		JEFE P.P.
6	CARDENAS HERNÁNDEZ BENIGNO	VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECCIONES DE JUNTA LOCAL		JEFE P.P.
7	CELOS CROCEVA OSCAR	EXPERTO ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN		OPERATIVO P.P.
8	DAMALÁ PRASSIOS RIVERA CARLOS	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN		OPERATIVO P.P.
9	DÍAZ RAMÍREZ LIDIA	SECRETARÍA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
10	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	VOCAL SECRETARÍA DE JUNTA LOCAL		JEFE P.P.
11	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		OPERATIVO P.P.
12	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN		OPERATIVO P.P.
13	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN MÓDULOS EXTERIORES		OPERATIVO P.P.
14	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE SISTEMAS		JEFE P.P.
15	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE SISTEMAS		JEFE P.P.
16	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		JEFE P.P.
17	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	SECRETARÍA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
18	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE DE REPARACIÓN AL PADRÓN		OPERATIVO P.P.
19	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE JUNTA LOCAL		JEFE P.P.
20	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE LOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		OPERATIVO P.P.
21	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE OFICINA DE CARTOGRAFÍA ESTATAL		JEFE P.P.
22	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA TÉCNICO		OPERATIVO P.P.
23	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ENCARGADO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN		OPERATIVO P.P.
24	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO EN OPERACIÓN DE SISTEMAS CARTOGRAFÍAS		JEFE P.P.
25	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		JEFE P.P.
26	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		JEFE P.P.
27	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA DE CARTOGRAFÍA		OPERATIVO P.P.
28	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		JEFE P.P.
29	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA TÉCNICO		OPERATIVO P.P.
30	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES		OPERATIVO P.P.
31	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN		OPERATIVO P.P.
32	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	SECRETARÍA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
33	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE OFICINA DE TITULAR		OPERATIVO P.P.
34	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE LOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		OPERATIVO P.P.
35	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS		OPERATIVO P.P.
36	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA TÉCNICO		OPERATIVO P.P.
37	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA DE DATOS		OPERATIVO P.P.
38	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE SISTEMAS		OPERATIVO P.P.
39	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN		OPERATIVO P.P.
40	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA TÉCNICO		OPERATIVO P.P.
41	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		JEFE P.P.
42	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	SECRETARÍA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
43	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	JEFE DE OFICINA DE TITULAR		OPERATIVO P.P.
44	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN		OPERATIVO P.P.
45	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE LOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		OPERATIVO P.P.
46	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS		OPERATIVO P.P.
47	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA TÉCNICO		OPERATIVO P.P.
48	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	ANALISTA DE DATOS		OPERATIVO P.P.
49	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE SISTEMAS		OPERATIVO P.P.
50	DE LA CRUZ JAVIERA JULIANA	TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN		OPERATIVO P.P.

NOTAS:

Fuente



ESTADO DE PERSONAL EDUCATIVO			
ALUMNOS	PLAZA	Ocupada	EQUIVALENTE
		2	DIRECTOR EJECUTIVO
		1	DIRECTOR DE AREA
		1	SUBDIRECTOR
		1	SUBDIRECTOR
		4	JEFE DE CENPO
		2	JEFE DE CENPO
		2	ENFASIS
		2	ENFASIS P.P.
	MURIELA	81	

Yugoslavia
Cuerto de maquinas
Subestacion
Tableros electricos
Feria de emergencia
Cinema

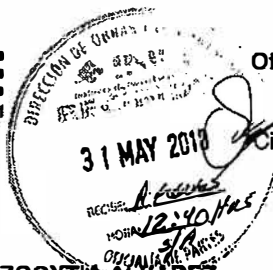
Orden	NOMBRE	PLAZA	CV	EQUIVALENTE
31	LAROMBA ZAVALA MARTIN	SECRETARIA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
32	ISOLAND ARRIAGA ARTURO	TECNICO SUPLENTE EN PRODUCCION CANTONARIAS		OPERATIVO P.P.
33	ROZELU MARTINEZ JANET	SECRETARIA DE VOCALIA EJECUTIVA LOCAL		OPERATIVO P.P.
34	TOPPER ESPINOZA EUSEBIO	JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y ANALISIS DE JUNTA LOCAL		JEFE P.P.
35	TOLEDO ESPINOSA ELEANORITA OTILIA	ANALISTA DE REGISTROS DE CIUDADANOS PARA BENEFICIO		OPERATIVO P.P.
36	TORRES CONTRERAS BENIGNA LUGARICA	ANALISTA DE REGISTROS DE CIUDADANOS PARA BENEFICIO		OPERATIVO P.P.
37	TORRES ESPINOZA ELIAN	ENCARGO DE FISCALIZACION		ENCARGO P.P.
38	TOLOA RODRIGUEZ FRANCISCO	JEFE DE CANTONARIAS		OPERATIVO P.P.
39	MEZA NARITONJES RICARDO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MÓDULOS DE ATENCIÓN		OPERATIVO P.P.
40	VERGARA VAQUERO BEBECA	ASISTENTE LOCAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA		OPERATIVO P.P.
41	VALANDESA SANDOVAL ANGELA	SECRETARIA EN JUNTA LOCAL		OPERATIVO P.P.
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

NOTES:

En la columna relativa a SII/OPS/SL/P., se está considerando a 34 personas con el carácter de Personal Técnico Operativo, para prestar en el Sistema de Justicia de Paz Social, Servicio Social y Profesionales. De este número de 34 personas, se están un aproximado de personal eventual que llega en Periodo Especial y a personas que se contemplan en las áreas donde se han prestado los servicios sociales y profesionales. Y como se indicó en la parte de personal eventual, se requiere al respecto necesario para que se pueda desarrollar sus actividades en todas las unidades de trabajo.

PROPORCIONO DE OPERACIONES
LIC. BRENDA HERNANDEZ PACHECO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
M: 275003

SECRET
MEXICAN DEPARTMENT OF LANDS
FEDERAL SECRETARIAT
IN 370002



Ciudad de México, a 23 de mayo de 2018.

Asunto: Revisión documentación legal.

ARQ. LUIS FIDEL AZCOYTIA-ALVAREZ,
Director de Obras y Conservación,
P r e s e n t e.

Referencia

Oficio INE/DEA/DOC/0554/2018, mediante el cual remite diversa documentación correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho N° 507, Colonia La Pradera, C.P. 62170, en Cuernavaca, Morelos, que se pretende adquirir para las oficinas del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por lo que solicita la opinión de esta Unidad Técnica.

Fundamento

Artículos 26 de Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y 67, párrafo 1, incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Opinión

De la revisión a la documentación remitida, se realizan los siguientes comentarios:

1. El Capítulo Tercero del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral denominado "De la adquisición de bienes inmuebles", señala las previsiones que se deben considerar para la compra de inmuebles, y concretamente el artículo 24 menciona la documentación que la Dirección Ejecutiva de Administración a través de la Dirección de Obras y Conservación, debe solicitar para verificar la situación legal del inmueble a adquirir, siendo los siguientes:

"Artículo 24. Junto con el dictamen previo de procedencia, la DEA, a través de la DOC, y con el propósito de verificar la situación legal del inmueble que se pretende adquirir, deberá solicitar los siguientes documentos:

I. Copia de la escritura pública con la que se acredita la propiedad del inmueble, la cual deberá incluir el sello de inscripción del Registro Público de la Propiedad correspondiente;

II. Certificado de libertad de gravámenes o copia del folio real del inmueble, otorgado por el Registro Público de la Propiedad con fecha de expedición no mayor a 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud;

*Recibido 31/05/18
17:17 hrs*

Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018

III. Avalúo. Para el caso de Oficinas Centrales, será la DOC la que lo solicite y por lo que hace a los Órganos Delegacionales serán los Vocales Ejecutivos;

IV. Constancia de no adeudo de impuesto predial, expedido por la tesorería local;

V. Constancia de no adeudo por el suministro de agua, expedido por el Sistema de Aguas de la localidad, la autoridad competente o por el organismo que administre dicho recurso;

VI. Constancia de no adeudo por el suministro de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad;

VII. Constancia de uso suelo, actualizada y expedida por la delegación política, el municipio o por la autoridad competente;

VIII. Copia de la identificación oficial vigente del propietario;

IX. En su caso, poder notarial e identificación oficial vigente del representante o apoderado legal, y

X. Copia de plano del predio con las medidas y colindancias. Para el caso de que sea con edificación, se adjuntará planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, dictamen estructural, dictamen de instalaciones eléctricas realizada por una UVIE, licencia de construcción, al igual que un reporte fotográfico en el que se observe la situación actual del inmueble."

(el resaltado es nuestro).

De la documentación referida, se advierte que no se adjuntan los previstos en las fracciones VI y X relativos a la constancia de no adeudo por el suministro de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad; así como planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, dictamen estructural, dictamen de instalaciones eléctricas, licencia de construcción y reporte fotográfico, éstos últimos en razón de tratarse de una edificación.

2. La escritura pública 29,583 de fecha 25 de enero de 2018, refiere en los antecedentes de propiedad, que los inmuebles identificados registralmente tienen las siguientes superficies:

- Fracción número uno, 291 m2 (doscientos noventa y un metros cuadrados).
- Fracción número dos, 260 m2 (doscientos sesenta metros cuadrados).

No obstante, las notificaciones de valor catastral emitidas por la Dirección General de Catastro, y el dictamen valuatorio practicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, señalan las siguientes superficies:

Dirección General de Castro:

- Fracción número uno, 535 m2 (quinientos treinta y cinco metros cuadrados).
- Fracción número dos, 268 m2 (doscientos sesenta y ocho metros cuadrados).

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Superficie total, 535 m2 (quinientos treinta y cinco metros cuadrados) ¹.

En consideración de lo antes expuesto, esta Dirección recomienda se realice la debida integración de la documentación prevista en el Manual de Administración Inmobiliaria, atendiendo todas y cada una de las previsiones para la adquisición de inmuebles, así como verificar las superficies antes citadas, con el propósito de que el Instituto tenga certeza plena sobre la documentación legal que se acompañe, en caso de que se formalice la adquisición del inmueble de mérito.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del Manual de Administración Inmobiliaria, que prevé que el titular de la Dirección de Obras y Conservación, será el responsable inmobiliario en el Instituto y tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y evaluación de las acciones en materia Inmobiliaria.


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


LIC. LEOPOLDO ALBERTO SALES RIVERO.
DIRECTOR DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo.- Para su conocimiento. Presente.
Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración.- Mismos efectos. Presente.
Lic. Gabriel Mendoza Elvira.- Director Jurídico.- Mismos efectos. Presente.
Arq. Rubén Camacho Flores.- Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación.- Mismos efectos. Presente.

Folio: 14170

Revisó:	Lic. Emannuel Giovanni Mureddu Andrade	
Elaboró:	Lic. Amílcar Rosado Luque	

¹ Considera las dos fracciones, con una diferencia de 16 m2 respecto de las superficies señaladas en la escritura 29,583.



Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018

Ciudad de México, a 25 de junio de 2018.
Asunto: Opinión inmueble.

ARQ. LUIS FIDEL AZCOYTIA ALVAREZ
Director de Obras y Conservación,
Presente.

TURNO:
DEA - 2018 - 16775

Referencia

Oficio INE/DEA/DOC/0718/2018, mediante el cual remite documentación complementaria correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho N° 507, Colonia La Pradera, C.P. 62170, en Cuernavaca, Morelos, que se pretende adquirir para las oficinas del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de que se examine y se emita opinión por parte de esta Unidad Técnica.

Antecedente

Oficio INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018, mediante el cual se recomendó realizar la debida integración de la documentación prevista en el Manual de Administración Inmobiliaria, atendiendo todas y cada una de las previsiones para la adquisición de inmuebles, así como verificar las superficies del inmueble dado que se identificaron variaciones con lo descrito en la escritura pública 29,583, respecto a las notificaciones de valor catastral emitidas por la Dirección General de Catastro y el dictamen valuatorio practicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Fundamento

Artículos 26 de Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y 67, párrafo 1, Incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Opinión

De la revisión a la documentación remitida, se realizan los siguientes comentarios:

1. Se advierte que la documentación remitida en el oficio que se atiende, complementa las previsiones señaladas en el Capítulo Tercero del Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral denominado "De la adquisición de bienes inmuebles", concretamente lo dispuesto en el artículo 24 que menciona la documentación que la Dirección Ejecutiva de Administración a través de la Dirección de Obras y Conservación, debe solicitar para verificar la situación legal del inmueble que se pretende adquirir, quedando bajo su estricta responsabilidad su debida integración.

No obstante, se observa que el resumen ejecutivo elaborado por CIEN CONSULTORES, S.C., señala en el apartado de resultados, que de la revisión física a las instalaciones eléctricas del inmueble, existen varios puntos en donde

Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018

los conductores no se encuentran protegidos como lo establece la Sección 240-3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones Eléctricas (utilización)", así como instalaciones no realizadas como se establecen en diversos artículos de la norma, señalando la importancia de llevar a cabo un proyecto de modificación integral de toda la instalación eléctrica en apego a la multicitada norma oficial mexicana.

2. La escritura pública 29,934 de fecha 17 de abril de 2018, pasada ante la fe del Licenciado José Eduardo Menéndez Serrano, Notario Público 7, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, la cual acompaña en el diverso **INE/DEA/DOC/0718/2018**, hace constar la protocolización del oficio F-06-016-2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, que formaliza la fusión de los predios con clave catastral 1100-06-001-003 y 1100-06-001-071, para quedar en una sola unidad con superficie de **535.00 m2**.

En consideración de lo expuesto, esta Dirección recomienda tomar las medidas necesarias, a fin de que observen y atiendan los resultados de la verificación de las instalaciones eléctricas del inmueble, con el propósito de que el Instituto tenga plena certeza sobre su operación y funcionamiento, en caso de que se formalice la adquisición del inmueble de mérito.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del Manual de Administración Inmobiliaria, que prevé que el titular de la Dirección de Obras y Conservación, será el responsable inmobiliario en el Instituto y tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y evaluación de las acciones en materia Inmobiliaria.

Finalmente, se solicita sea remitida a esta Dirección, copia de toda la documentación proporcionada, así como copia certificada de la misma para cotejo, que será devuelta a la dirección a su cargo para integrarla en el expediente correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. LEOPOLDO ALBERTO SALES RIVERO.
DIRECTOR DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo.- Para su conocimiento, Presente.
Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración.- Mismos efectos. Presente.
Lic. Gabriel Mendoza Elvira.- Director Jurídico.- Mismos efectos. Presente.
Arq. Jorge Rafael Garzón Corona.- Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación.- Presente.

Folio: 17453

Revisó:	Lic. Emmanuel Giovanni Mureddu Andrade
Elaboró:	Lic. Amílcar Rosado Luque



20581
Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018

Ciudad de México, a 9 de agosto de 2018.
Asunto: Opinión inmueble.

LIC. BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA,
Director Ejecutivo de Administración,
Presente.



Referencia

1. Oficio **INE/DEA/DOC/0554/2018**, mediante el cual se remite CD y copia simple de diversa documentación legal del inmueble, para que se examine y emita opinión jurídica sobre la situación legal del inmueble que se pretende adquirir.
2. Oficio **INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018**, a través del cual se recomendó a la Dirección de Obras y Conservación realizar la debida integración de la documentación prevista en el artículo 24 del Manual de Administración Inmobiliaria, así como verificar las superficies del inmueble señaladas por la Dirección General de Catastro y las referidas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
3. Oficio **INE/DEA/DOC/0718/2018**, mediante el cual se adjunta CD y copia simple de la documentación legal que complementa el expediente del inmueble, para que se examine y emita opinión jurídica.
4. Oficio **INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018**, mediante el cual se recomendó tomar las medidas necesarias, a fin de que observaran y atendieran los resultados de la verificación de las instalaciones eléctricas del inmueble y se remitiera copia certificada de la documentación, que será devuelta para integrarla en el expediente correspondiente.
5. Oficio **INE/DEA/DOC/0795/2018**, mediante el cual remite copia certificada por la Vocal Secretaría de la Junta Local de la documentación correspondiente al inmueble.

Fundamento

- Artículos 2, 11, 14, 15, 16 y 26 de Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (el "Manual") y 67, párrafo 1, incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (el "Reglamento")

13/AGO/2018
Karl G. Campuzano
14.05.18

Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018

- Punto Segundo, numeral 2 del Acuerdo INE/CG76/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se presentan las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, respecto a las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
- Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto (Acuerdo INE/JGE72/2017) y dictamen preliminar sobre la procedencia de la posible adquisición del inmueble de fecha 15 de marzo de 2018, emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración.

Opinión

Una vez que se reunió y remitió a esta dirección la documentación prevista en el artículo 24 del "Manual" y efectuada su revisión legal, esta Unidad emite opinión favorable respecto a la situación jurídica del inmueble.

No obstante lo anterior, se recomienda integrar al expediente respectivo, en su momento:

1. Las identificaciones oficiales de los copropietarios del inmueble, es decir, de los señores Rafael Partida Poblador; Juan Carlos Partida Poblador y Edgar Jorge Partida Poblador, a quienes corresponde a cada uno el 18 % de los derechos de copropiedad, quienes deberán considerarse en el contrato de compraventa correspondiente.
2. Si bien es cierto que el alineamiento y número oficial no es un documento que prevea el Manual de Administración Inmobiliaria, se sugiere contar con el mismo, a fin de que se determine el número del inmueble que se aprobó fusionar por la autoridad competente, en razón de dotar de certeza al Instituto sobre el número oficial para efectos legales, fiscales y administrativos.
3. Se recomienda, que todas y cada una de las constancias de no adeudo así como el certificado de libertad de gravamen previstas por el artículo 24 del Manual, se encuentren vigentes a la fecha de celebración de la compraventa.

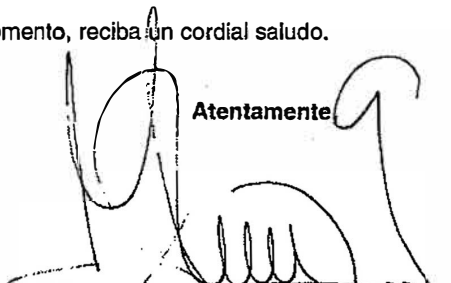
Es pertinente mencionar que corre a cargo del titular del órgano delegacional en el Estado cotejar todas y cada una de las copias que fueron presentadas contra los documentos originales o copias certificadas expedidas por las autoridades competentes y la actualización de las mismas, en su caso; así como resguardar la mencionada documentación y cerciorarse del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de construcción, medio ambiente, uso de suelo, protección civil y demás aplicables en el ámbito local, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 y 26, último párrafo, del "Manual" y de acuerdo con el referido dictamen preliminar de procedencia.



Dirección Jurídica
Oficio No.- INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018

Por último, adjunto al presente la carpeta que contiene copia certificada de la documentación respectiva para los efectos correspondientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. GABRIEL MENDOZA ELVIRA.
DIRECTOR JURÍDICO.

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo.- Para su conocimiento. Presente.
Lic. Leopoldo Alberto Sales Rivero.- Director de Contratos y Convenios.- Mismos efectos. Presente.
Lic. Cuitlahuac Villagas Soils.- Director de Servicios Legales.- Presente.
Arq. Luis Fidel Azcoytila Álvarez.- Director de Obras y Conservación.- Presente.
Arq. Jorge Rafael Garzón Corona.- Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación.- Presente.

Folio: 18162

Revisó:	Lic. Emmanuel Giovanni Muraddu Andrade	
Elaboró:	Lic. Amílcar Rosado Luque	

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. _____

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 15:47 horas. _____

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de noviembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. _____

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**